

UNIVERSITAT JAUME I

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE



LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

TESIS DOCTORAL

Presentada por

FERNANDO PEÑA RAMBLA

Dirigida por

DR. D. MANUEL CHUST CALERO (Universitat Jaume I)

DR. D. MARC BALDÓ LACOMBA (Universitat de València)

AÑO 2008

UNIVERSITAT JAUME I
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE



LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

TESIS DOCTORAL

Presentada por

FERNANDO PEÑA RAMBLA

Dirigida por

DR. D. MANUEL CHUST CALERO (Universitat Jaume I)

DR. D. MARC BALDÓ LACOMBA (Universitat de València)

AÑO 2008

Índice

1. <u>Introducción</u>	5.
2. <u>La represión franquista</u>	13.
<i>Las formas de la represión</i>	17.
3. <u>La justicia de los vencedores</u>	25.
4. <u>La Ley de Responsabilidades Políticas</u>	51.
<i>Los antecedentes</i>	51.
<i>La elaboración de la Ley de Responsabilidades Políticas</i>	55.
<i>La Ley de Responsabilidades Políticas, herramienta para el castigo</i>	60.
<i>Estructura orgánica de la Ley</i>	74.
<i>Dinámica procesal</i>	81.
<i>Desarrollo posterior de la Ley</i>	94.
<i>La reforma de febrero de 1942</i>	106.
<i>Evolución posterior y fin de la Ley de Responsabilidades Políticas</i>	110.
<i>Algunas consideraciones finales</i>	114.
5. <u>La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón</u>	121.
<i>La represión en la Comunidad Valenciana: aportaciones historiográficas...</i>	121.
<i>La Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón: estudio introductorio</i>	126.
<i>La Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón: aspectos económicos</i>	140.
<i>La liquidación de la Ley</i>	143.
<i>La exigencia de responsabilidades políticas en la provincia de Castellón: estudio estadístico por localidades</i>	145.
6. <u>La Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón: dinámica y casos</u>	423.
7. <u>El procesamiento de las mujeres de Serratella</u>	527.
8. <u>Los afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas</u>	557.
9. <u>Bernat Artola Tomás: proceso a la libertad</u>	623.
10. <u>Fernando Gasset Lacasaña, republicano de buena fe o el nacional imperfecto</u>	653.

11. <u>La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la Vall d'Uixó</u>	705.
<i>La Vall d'Uixó, historia de un núcleo agrícola e industrial</i>	705.
<i>La Ley de Responsabilidades Políticas en la Vall d'Uixó: estudio estadístico</i>	721.
<i>Los procesados: estudio de casos</i>	725.
<i>Las condiciones de vida de los inculcados y sus familias</i>	756.
<i>Los colaboradores del régimen</i>	764.
<i>Perdonar y no olvidar: la complicada reinserción laboral de los procesados</i>	789.
12. <u>Conclusión</u>	801.
13. <u>Apéndice documental</u>	811.
14. <u>Fuentes</u>	893.
15. <u>Bibliografía</u>	895.

1. Introducción

El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en el ámbito de la provincia de Castellón. Esta Ley, promulgada en febrero de 1939 por el gobierno franquista, tuvo una gran trascendencia a la hora de establecer las bases de la construcción de una nueva realidad social en la que se hacía una clara distinción entre vencedores de la guerra y vencidos, una realidad que iba a durar cuatro décadas y que se fundamentaba en el rencor, el castigo y la injusticia. El objetivo que persigo con esta investigación es determinar el alcance de dicha Ley en la provincia de Castellón, esclarecer sus mecanismos de funcionamiento, analizar el papel de los que participaron en su ejecución y lograr un acercamiento a lo que significó moral y materialmente para los afectados. De esta forma, analizo un aspecto decisivo a la hora de entender el proceso de articulación y formación de la nueva sociedad franquista surgida tras la guerra civil, en un ámbito como el de la provincia de Castellón, poco tratado por la historiografía hasta este momento.

Para ello he elegido un planteamiento que parte del marco general de la cuestión, continúa con un análisis estadístico de los procesados, se centra posteriormente en el análisis concreto de casos afectados y acaba con aquellos aspectos que merecen ser rescatados a la hora de comprender el nuevo régimen franquista. De esta forma, tras un repaso historiográfico sobre la cuestión relativa a la represión franquista tanto en España como en la Comunidad Valenciana, aspecto esencial del nuevo régimen, procedo al análisis de la Ley de Responsabilidades Políticas, recogiendo tanto su proceso de gestación y evolución como sus aspectos más importantes, las novedades historiográficas sobre la misma y su situación en la tradición represiva de la historia contemporánea española. Para ello he recurrido tanto al mismo texto de la Ley y sus reformas como a los análisis que sobre la misma se realizaron desde el mismo año de su creación.

Aclarado el marco general, analizo la aplicación de la Ley en el ámbito concreto de la provincia de Castellón. Para este objetivo, he optado por un enfoque plural que permita entender de una forma lo más completa posible la realidad histórica creada por dicha Ley. Así, combino diferentes perspectivas de análisis desde las cuales poder llegar a comprender históricamente dicha realidad, perspectivas que son diferentes y

complementarias, y que pueden y deben interrelacionarse. Se trata de una opción metodológica, pensada para una comprensión lo más completa posible de una situación histórica compleja y llena de matices.

De esta forma, ofrezco en primer lugar un análisis cuantitativo sobre los afectados en todos los municipios de la provincia de Castellón, con la intención que los datos ofrecidos sirvan como necesario marco de referencia general al resto de las citadas perspectivas. Estos datos proceden de la consulta y comparación de las listas de personas procesadas que se registraban tanto en el Boletín Oficial de la Provincia como en el Boletín Oficial del Estado y el listado de personas procesadas e implicadas que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Castellón. En este análisis se incluye el estudio de otras variables relacionadas con los afectados de gran interés, como son su identificación nominal, su sexo, la estructura profesional, el porcentaje de población afectada y el ritmo cronológico de incoación de expedientes, además de remarcar la actitud de las autoridades de cada municipio. Se incluye también una valoración económica respecto a las sanciones impuestas por la citada Ley.

Una vez conocido el marco general, continúo con la descripción de la dinámica procesal marcada por la Ley de Responsabilidades Políticas. Realizo un repaso de la múltiple variedad de situaciones procesales que derivaban de la Ley y que afectaban directamente a los ciudadanos. En este sentido, no analizo las distintas posibilidades teóricas que ofrecía la Ley, aspecto tratado en la primera parte de la investigación, sino los ejemplos concretos de los que hay constancia, es decir, la aplicación directa en los ciudadanos y sus familias de estas posibilidades, así como su valoración histórica. Así, pretendo un primer acercamiento a los ciudadanos de la provincia de Castellón afectados y una primera visión de las consecuencias que para ellos tuvo la aplicación de la Ley. Este análisis se basa en la gran variedad de documentación que aportan los expedientes de responsabilidades políticas, que van desde documentación del juez instructor de responsabilidades políticas a informes de las autoridades locales, declaraciones de los imputados y de sus familiares, declaración de testigos, escritos de familiares, sentencias, documentación administrativa variada, denuncias, etc.

A continuación, con la base documental anterior, propongo una serie de capítulos que tienen como objetivo el acercamiento a la a la experiencia histórica vivida

por los afectados por la Ley tanto directa como indirectamente. De esta forma, analizo el procesamiento por responsabilidades políticas de las mujeres de la población de Sarratella, localidad que tuvo el porcentaje de población femenina (también masculina) más alto afectado por la Ley. Este análisis permite comprobar el tratamiento que el nuevo régimen franquista ofreció a las mujeres tras la experiencia de la guerra civil como sujeto específico de castigo y represión, a la vez que permite reflexionar sobre el alcance que tuvo la represión franquista en un sector de la sociedad que la historiografía tiende a olvidar o a mantener en un segundo plano.

En cuarto lugar, realizo el análisis de 15 casos particulares, representativos del colectivo de afectados, mediante un enfoque histórico que prima la narración o el relato, y que pretende llegar a detalles y niveles explicativos a los que sería difícil acceder mediante otras orientaciones. En este apartado se tratan todas las posibles víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, tanto las directas como aquéllas que sufrieron su rigor injusta e indirectamente.

Estas perspectivas son complementadas por el análisis de dos casos de personas públicamente relevantes, el poeta castellonense Bernat Artola Tomás y el político Fernando Gasset Lacasaña. Se trata de dos casos muy distintos pero de los que se pueden extraer valiosas conclusiones sobre la intención del régimen franquista de castigar a personas que habían tenido cierta trascendencia pública, para lo que una herramienta ideal fue la Ley de Responsabilidades Políticas. Esta perspectiva es la que mayoritariamente ha seguido, por el momento y salvo excepciones, la historiografía actual sobre la citada Ley, más centrada en casos singulares de relevancia pública que en las consecuencias que la misma tuvo en los ciudadanos anónimos. Para ello he utilizado tanto la información procedente de sus amplios expedientes de responsabilidades políticas, ricos en declaraciones personales y de testigos, así como de la bibliografía que previamente se ha ocupado de ellos.

Para obtener otra perspectiva que completara las anteriores he procedido al análisis de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en una localidad determinada, concretamente la Vall d'Uixó, donde destacaba la empresa Segarra, una de las mayores empresas de calzado de España, que experimentó durante el franquismo una expansión muy importante al amparo de la protección del nuevo régimen y la

amistad de sus gerentes con Francisco Franco, desarrollando un peculiar modelo paternalista, y que ya me había ocupado en investigaciones anteriores, utilizando para ello tanto las fuentes del Archivo Segarra como las del Archivo Municipal de la Vall d'Uixó, de la Cámara de Comercio de Castellón y distintas entrevistas a trabajadores. De especial interés ha sido el seguimiento de la vida laboral de los trabajadores afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas que posteriormente fueron aceptados en la empresa Segarra. He elegido, pues, la Vall d'Uixó como un ámbito adecuado para la valoración histórica de lo que representaba para una comunidad concreta la represión, el procesamiento de parte de sus ciudadanos por responsabilidades políticas y sus repercusiones posteriores.

Finalmente, realizo un estudio sobre la actitud y la actuación de las personas que colaboraron con el régimen franquista en el proceso de represión y procesamiento por responsabilidades políticas de los ciudadanos de la provincia de Castellón. Este análisis se realiza de forma transversal a lo largo de algunos de los apartados anteriormente citados. Así, analizo la actitud de las “autoridades locales” (alcaldes, jefes locales de FET y de las JONS, Guardia Civil y sacerdotes fundamentalmente) a través de los informes sobre los inculcados que imponía la Ley de Responsabilidades Políticas. También realizo un seguimiento de la actuación y el perfil histórico de los integrantes de los distintos órganos que a nivel nacional, regional y provincial creó la Ley, así como de las personas que formaron parte de los consejos de guerra previos al procesamiento por responsabilidades políticas, en este caso relativos a ciudadanos de la localidad de la Vall d'Uixó. Para ello, las fuentes utilizadas han sido tanto las copias de sentencias emitidas por los consejos de guerra que se incorporaban en los expedientes de responsabilidades políticas, como fuentes bibliográficas y datos procedentes del Boletín Oficial del Estado. De esta forma, pretendo completar el análisis de lo que significó la Ley para los vencidos con, en cierta forma, la actuación de los vencedores.

El origen de esta tesis y mi interés por los orígenes del régimen franquista se remontan al curso 1993-1994, cuando, a partir de un trabajo durante mi último curso de carrera, me interesé por la empresa Segarra de la Vall d'Uixó y su característico modelo paternalista. Todo ello me llevó a la realización de una tesis de licenciatura que, bajo la dirección de Marc Baldó Lacomba, y con el título de “Història de l'empresa Segarra.

Paternalisme industrial i franquisme a la Vall d'Uixó" fue presentada en 1996 ante el tribunal formado por los profesores José Antonio Piqueras, Ismael Saz y el mismo Marc Baldó, mereciendo la calificación de "Sobresaliente por unanimidad". Este trabajo fue publicado en 1998 por la Diputación Provincial de Castellón en su Colección Universitaria.

En ese trabajo de investigación traté de realizar una historia social de las personas que trabajaron en dicha empresa durante los primeros años del franquismo. Sin embargo, como el tema todavía no estaba investigado tuve que orientar parte de mis esfuerzos a reconstruir la historia de la empresa, desde sus orígenes hasta principios de los años 1950. La amplitud del tema y la complejidad de los problemas derivados del paternalismo puesto en práctica en la citada empresa hicieron que algunos aspectos quedaran por desarrollar en futuras investigaciones. En este sentido, en este trabajo de investigación se encuentra el origen de esta tesis.

Este planteamiento me llevó posteriormente a la realización del trabajo de investigación que, bajo la dirección de los profesores Manuel Chust y Marc Baldó y con el título "Cautivos y desarmados. Consecuencias sociales de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la Vall d'Uixó (1939-1945)", culminó mi programa de doctorado, siendo presentado en 2007 ante un Tribunal formado por los profesores Rosa Monlleó, Juan Marchena e Ivana Frasset, mereciendo la calificación de "Sobresaliente, 10". Este trabajo de investigación forma parte esencial de la presente tesis doctoral.

Mi apuesta por la historia social me ha llevado a tratar de averiguar qué pasó con aquellas personas que tras la guerra civil fueron castigadas por su pasado por el régimen franquista. Para ello he consultado, entre otras fuentes, los expedientes de Responsabilidades Políticas del Archivo Histórico Provincial de Castellón. Esta fuente está disponible en dicho archivo desde 1996, cuando los Juzgados de Primera Instancia de Instrucción de Castellón, cumpliendo las normativas legales y recogiendo parte de la documentación sobre el tema que iba llegando desde los Juzgados Municipales de distintas poblaciones de la provincia de Castellón, enviaron el material al citado Archivo Histórico Provincial.

Este fondo documental se compone de un conjunto de cerca de 3.000 expedientes de responsabilidades políticas abiertos a ciudadanos vecinos de las distintas localidades de la provincia de Castellón, a los que se unen cientos de testimonios de condena de ciudadanos por parte de consejos de guerra, y que no eran más que expedientes de responsabilidades políticas en espera de ser incoados, que se encontraban en las oficinas del Juzgado Instructor de Responsabilidades Políticas de Castellón, que a partir de 1942 pasaron a formar parte de los fondos de la Audiencia Provincial de Castellón y que, como se ha comentado, recientemente fueron depositados en el citado Archivo Histórico Provincial.

Estos expedientes, de carácter personal, se componen de los distintos documentos que se iban generando a lo largo de las distintas etapas del procesamiento por responsabilidades políticas: desde la orden de incoación del expediente y su motivación a la sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el archivo del caso o su sobreseimiento, pasando por los informes de las llamadas autoridades locales, el resumen metódico del juez instructor y los posibles escritos de defensa del inculcado o de sus familiares. Sin embargo, algunos de los expedientes fueron abandonados antes de su finalización por la escasa perspectiva de recaudación que ofrecían, por lo que no presentan sentencia alguna, aunque sí fecha de sobreseimiento. En cualquier caso, suponen una excelente puerta desde la cual acceder a la situación social y económica de los inculcados, así como una excelente muestra de la dinámica represora del régimen y de la actuación de sus colaboradores.

También se encuentra en el citado Archivo distinta documentación relativa al funcionamiento interno de la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas y su balance económico y general desde 1942. Esta documentación tiene su origen en los materiales que iba acumulando el Juzgado Instructor de Responsabilidades Políticas de la provincia de Castellón, entre los que destacan las instrucciones que el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas enviaba a los distintos Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas para solventar los problemas y las dudas que la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas iba suscitando con su puesta en práctica. Por otra parte, una parte de este fondo documental proviene de las memorias, balances y resúmenes que el Juzgado Instructor Provincial de Castellón realizó a finales de 1942, cuando se aplicó la reforma de la Ley de febrero de 1942 que disolvía dichos

Juzgados y traspasaban todas las competencias a la jurisdicción ordinaria, es decir, a las Audiencias Provinciales. Estos documentos hacen referencia especialmente a las personas que han sido procesadas y entre ellos se encuentra un balance de las cantidades ingresadas en concepto de sanción económica. Finalmente, existe también una variada documentación generada a partir de la orden de disolución final de la jurisdicción en 1945, el desarrollo posterior de algunos expedientes y la liquidación final de la misma.

A pesar de la contundencia y riqueza del fondo documental citado, hay que tener en cuenta que el material disponible no está completo, ya que parte de la documentación ha desaparecido, tanto por deterioro como por sustracción, fruto de su acumulación casi incontrolada durante años en los archivos judiciales, y parte de ella permanece separada por su mal estado general. Además, algunos de los expedientes empiezan a tener serios problemas de deterioro.

Para completar y complementar la información generada por los expedientes de responsabilidades políticas disponibles he recurrido a los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia de Castellón en el periodo 1938-1947, consultados en el Archivo de la Diputación Provincial de Castellón, así como a la consulta del único diario oficial, *Mediterráneo*, del mismo periodo, en el Archivo Histórico Municipal de Castellón. Para aspectos relacionados con el perfil biográfico de algunos de los protagonistas he recurrido a fuentes oficiales como la Gaceta de Madrid (1924-1936) y la Gaceta de la República (1937-1938).

Al mismo tiempo, y aprovechando mis anteriores trabajos, he podido cruzar esta información con la ofrecida por el Archivo Segarra de la Vall d'Uixó, especialmente en su Sección Fichas de Personal, en las que se guarda un completo expediente con el historial laboral, familiar y médico de cada trabajador. Con ello he tratado de reconstruir las condiciones de vida de los procesados por responsabilidades políticas de esta localidad que fueron aceptados en dicha empresa, en una época difícil y de grandes penurias, a la vez que trato de avanzar en algunas cuestiones planteadas en mi anterior estudio, relativas a las políticas empresariales de gestión de la mano de obra en la posguerra, como en el caso de la aceptación por parte de la familia Segarra de antiguos republicanos como trabajadores, tratando de averiguar a qué precio.

Intencionadamente he intentado aproximarse a una historia social que ofrezca el mayor protagonismo a las personas corrientes o comunes, a la manera de E.J. Hobsbawm, a las que los libros de historia dedican poco protagonismo. Así, encontraremos en las siguientes páginas poetas, políticos, maestros, trabajadores poco cualificados, pobres de solemnidad y gente humilde, mujeres desesperadas, niños, huérfanos, casi todos hambrientos y condenados a la pobreza y el desprecio, que fueron los verdaderos protagonistas de la posguerra y las víctimas de la represión franquista. Sirvan estas páginas, pues, para rendirles un modesto homenaje.

Es evidente que con este trabajo de investigación no se agotan todas las perspectivas de análisis relativo a la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón, ni siquiera todas las fuentes de investigación relacionadas. Sin embargo, se ofrece un análisis que pretende ser un digno primer acercamiento a la aplicación de la Ley en la provincia de Castellón y a las consecuencias que tuvo para la población castellonense. Con esta base, sin duda, futuras investigaciones ampliarán y perfeccionarán el análisis de un tema que es fundamental a la hora de entender la articulación del franquismo en la provincia de Castellón.

Antes de acabar esta introducción quería agradecer su colaboración a todas aquellas personas que han contribuido a la realización de este trabajo de investigación. Las citadas M^a Luisa Gomar y Conxa Soriano me volvieron a abrir de par en par las puertas del Archivo Segarra, Rosario Hidalgo Solera, junto con Rosa Caballer y Pilar Ramos, atendieron todas mis demandas en el Archivo Histórico Provincial de Castellón de forma completamente satisfactoria. Para todas ellas mi más profunda gratitud. Mi agradecimiento también para el personal del Archivo de la Diputación de Castellón y el Archivo Histórico Municipal de Castellón. Igualmente es justo destacar la contribución de la profesora Encarna Nicolás, por atender mis dudas, del profesor Juan Marchena, por su entusiasmo y sus sugerencias, a las observaciones del profesor Lluís Meseguer y al constante e impagable apoyo de la profesora Yolanda Gil. Por último, mi agradecimiento más sincero hacia los profesores Marc Baldó y Manuel Chust, por su paciencia, sus orientaciones y su confianza, sin los que este trabajo no hubiera sido posible.

2. La represión franquista.

Fruto de una guerra desatada contra la legalidad republicana, nacido en un contexto de violencia extrema, el régimen franquista recurrió constantemente, y en un grado extremo, a la violencia política para su construcción y consolidación. De hecho, fue el pilar básico sobre el que se construyó el nuevo Estado. Desde la prolongación consciente del conflicto bélico que le dio su origen a la calculada negativa a toda negociación que limitase una victoria implacable, y al amplio abanico de medidas represivas desplegadas desde julio de 1936, el Estado franquista persiguió la creación de un estado de terror que, a la vez que permitiese eliminar física y psicológicamente al no afecto, llevara a la cohesión de la población ante un proyecto sumamente reaccionario impuesto por la fuerza.¹

La represión ejercida por el nuevo régimen franquista estuvo presente en prácticamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Este carácter universal y su omnipresencia se manifestó en todo tipo de hechos y actitudes que convierten su estudio por parte de los historiadores en una cuestión necesariamente compleja y multiforme, abarcando desde las cuestiones político-jurídicas, más alejadas de los ciudadanos, a las laborales, las económicas y culturales, y a aspectos concretos de la vida cotidiana.

Como eje central del nuevo orden impuesto, el análisis de la represión franquista ha ocupado buena parte de los esfuerzos de los historiadores dedicados al estudio del franquismo. Sobrepasaría los límites de este trabajo destacar la gran variedad de estudios que últimamente proliferan sobre esta importante cuestión, aunque es conveniente señalar los aspectos básicos en los que la historiografía se debate². Así, el

¹ A. REIG TAPIA, *Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil*. Madrid, 1984; J. FONTANA, "Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo", en J. FONTANA (ed.), *España bajo el franquismo*. Barcelona, 1986; M.ORTIZ, *Violencia política en la II República y el primer franquismo*. Madrid, 1996.

² Diversos estados de la cuestión los podemos encontrar en J. BARRULL y C. MIR (coord.), *Violència política i ruptura social a Espanta, 1936-1945*. Lleida, 1994; C. MIR, "El estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar", en *Ayer* nº 43. Madrid, 2001, pp. 11-35; J. RODRIGO, "La bibliografía sobre la represión franquista: hacia el salto cualitativo", en *Spagna Contemporanea*, nº19. Turín, pp. 151-169; A. CENARRO, "Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del *Nuevo Estado*", en *Historia Social*, nº 30. Valencia, 1988, pp. 5-22; C. MOLINERO y P. YSÀS, "La historia social de la época franquista. Una aproximación", en *Historia*

principal problema con el que los historiadores se encuentran es el de las fuentes de análisis. Pese a la apertura de nuevas de ellas, como algunas militares o judiciales, todavía es difícil el acceso a fuentes clave para el estudio de la represión, como los archivos militares de Auditorias de Guerra o los archivos de cárceles, o también se constata la ocultación o destrucción de las más comprometedoras. Frecuentemente, pues, el investigador ha de trabajar con fuentes indirectas, oficiales u orales, que limitan claramente su estudio. Se trata en este caso de la prensa, los Registros Civiles, los Registros de Cementerios, los Boletines Oficiales, las entrevistas a los ya escasos supervivientes, etc.

Los estudios de ámbito general sobre la represión franquista han permitido la necesaria proliferación de todo tipo de investigaciones centradas en el ámbito local y la microhistoria, un tipo de estudios fundamentales para acceder a una correcta comprensión del fenómeno de la represión³, siendo éste el camino que permite el acceso a una cuestión básica en el hecho histórico de la represión: las relaciones interpersonales en el proceso de colaboración social, sin el que la represión no es posible⁴. Así, no sólo se analiza la acción represiva del Estado, sino también las diversas actitudes de la población frente a ella, tanto en su periodo inicial como durante todo el franquismo.⁵

Con todo, una de las cuestiones principales que ha tratado la historiografía sobre la represión franquista es la de su diferenciación respecto a la represión ejercida en el ámbito republicano. La violencia y la represión, en un grado más o menos intenso, están presentes en todas las sociedades humanas, pero existen grandes diferencias en su naturaleza y en su magnitud. En general, se señala que la represión republicana se basó en una violencia defensora de un poder legítimo, que fue denunciada por las

Social, nº 30. Valencia, 1988, pp. 133-154; y E. GONZÁLEZ, “Violencia política y represión en la España franquista”, en R. MORENO y F. SEVILLANO (eds.), *El franquismo. Visiones y balances*. Alicante, 1999. Pp. 119-151.

³ Sobre la necesidad de unos estudios de ámbito local en conexión con los estudios generales de la represión ver C. MIR, F. CORRETGE y J. SAGUÉS, *Repressió econòmica i franquisme: l'actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida*. Barcelona, 1997, pág. 45.

⁴ J. FONTANA, op. cit., pp. 17-24.

⁵ C. MOLINERO y P. YSÀS, *El règim franquista. Feixisme, modernització i consens*. Girona, 1992, pp.68-77; *La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977*. Barcelona, 2008. I. SAZ y A. GÓMEZ (eds.), *El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra*. Valencia, 1999.

autoridades, utilizando cauces legales, cuando se convirtió en incontrolada (hasta que materialmente pudo), siendo protagonizada en su mayoría por delincuentes. Frente a ella, la represión franquista fue indiscriminada, fomentada desde el Estado y con el objetivo de eliminar un orden legítimo⁶. La diferencia en su naturaleza es, pues, evidente.

De esta forma, la historiografía sobre la represión franquista se podría dividir en cuatro grandes tendencias⁷. Una primera tendencia sería aquella que trata la represión atendiendo especialmente a la cuantificación de todo tipo de represaliados, obviando aspectos fundamentales de relación social y, por tanto, ofreciendo una visión aséptica y objetiva de un fenómeno mucho más complejo. Destacaría en este tipo de estudios los trabajos de Ramón Salas Larrazábal⁸. En segundo lugar, se situarían los estudios de S.G. Payne o J. Tusell, que otorgan un papel marginal a la represión en la construcción y consolidación del régimen franquista, con lo que se suaviza y relativiza la repercusión de la represión⁹. Una tercera visión sería la de autores como Hartmut Heine, que analizan la represión no para comprender el funcionamiento interno del franquismo, sino como medio secundario y tangencial para el análisis de la oposición franquista¹⁰. En cuarto lugar, se encontrarían los historiadores, encabezados por F. Moreno, A. Reig Tapia o J. Casanova, que otorgan a la represión un carácter estructural e inherente al franquismo, destacando su carácter clasista, su universalidad y complejidad.¹¹

⁶ A. REIG, “Metodología de la represión”, en J. ARÓSTEGUI (coord.), *Historia y memoria de la guerra civil*. Salamanca, 1988. Vol I, pp. 295-302.

⁷ J. SAGUÉS, “La justícia i la repressió en els estudis sobre la guerra civil espanyola (1936-1939) i la posguerra. Una aproximació historiogràfica”, en J. BARRULL y C. MIR (coord.), op. cit., pp 7-28; y C. MIR et al. (1997), op.cit., pp. 29-35.

⁸ R. SALAS LARRAZÁBAL, *Los datos exactos de la guerra civil*. Madrid, 1980.

⁹ S.G. PAYNE, *El régimen de Franco*. Madrid, 1987. Para S.G. Payne, “Aunque la represión siguió siendo firme y rigurosa, había dejado de ser asesina. Incluso el elevado número de ejecuciones de la posguerra no tomó el carácter caprichoso y a veces genocida de las peores dictaduras [...]. Además, en general, los presos políticos fueron mantenidos adecuadamente, no se les dejaba morir de hambre sistemáticamente y se les separaba de los presos comunes, evitando en gran medida los malos tratos por parte de éstos, una situación tan común en muchos otros países. Aunque se cobró decenas de miles de vidas, la represión nacionalista reconocía límites y normalmente respetaba sus propias normas. También se hizo progresivamente más blanda con el paso de los años.”, pág. 241; también J. TUSELL, *La dictadura de Franco*. Madrid, 1988.

¹⁰ H. HEINE, *La oposición política al franquismo. De 1939 a 1951*. Barcelona, 1983.

¹¹ J. CASANOVA (coord.), *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*. Barcelona, 2002.

Por otra parte, también es conveniente resaltar las investigaciones que cambian de escala y comparan la represión franquista con la efectuada en los principales regímenes fascistas y dictatoriales a partir de los años 1930, destacando sus similitudes y, especialmente, sus singularidades¹². O también aquellos que tratan de recuperar la memoria histórica registrando testimonios de personas protagonistas de los hechos analizados pero de ya de una avanzada edad.¹³

Finalmente, cabría destacar el esfuerzo divulgador de muchos profesionales que, acercándose al ámbito literario o periodístico, han realizado obras tendentes a la divulgación, con la intención de satisfacer la creciente demanda de un público lector interesado en el régimen franquista y en el fenómeno represivo¹⁴. En este sentido, han proliferado obras de carácter histórico con voluntad de ofrecer una visión global que sintetice las novedades historiográficas¹⁵, sin olvidar las obras de ficción¹⁶ o las memorias.¹⁷

¹² C. MIR et al. (1997), op. cit., pp. 36-44; I. SAZ, *Fascismo y franquismo*. Valencia, 2004; M. LANERO, *Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945)*. Madrid, 1996, pp. 331-332; S. G. PAYNE, *Historia del fascismo*. Barcelona, 1995, pp. 323-335.

¹³ En este sentido el referente clásico son las obras de R. Fraser especialmente R. FRASER, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*. Barcelona, 1979. Recientemente ha aparecido el excelente S. MORO, *Ellos y nosotros*. Barcelona, 2006.

¹⁴ Estos análisis se han acercado al fenómeno de la represión desde múltiples puntos de vista. Podríamos destacar I. LAFUENTE, *Tiempos de hambre. Viaje a la España de posguerra*. Madrid, 1999; R. TORRES, *Los esclavos de Franco*. Madrid, 2001; L.F. RODRÍGUEZ, *Recetas para después de una guerra*. Madrid, 2001; A. SOPENA, *El florido pensil. Memoria de la escuela nacional-católica*. Barcelona, 1994; etc.

¹⁵ E. GONZÁLEZ, *El miedo en la posguerra*. Madrid, 2003; S. JULIÁ (coord.), *Víctimas de la guerra civil*. Madrid, 1999; M. RICHARDS, *Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco*. Madrid, 2001; J. CASANOVA, *La Iglesia de Franco*. Madrid, 2001; M. NÚÑEZ, *Los años del terror. La estrategia de dominio y represión del general Franco*. Madrid, 2004; etc.

¹⁶ Por ejemplo A. TRAPIELLO, *La noche de los cuatro caminos. Una historia del maquis, 1945*. Madrid, 2001; R. CHIRBES, *La buena letra*. Madrid, 1991; F. CABANA, *Els anys de l'estraperlo. Cròniques d'un possible empresari Barcelona*. Barcelona, 2005; I. ROSA, *El vano ayer*. Barcelona, 2004 u *¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!* Barcelona, 2007; A. MÉNDEZ, *Los girasoles ciegos*. Barcelona, 2004; así como los grandes éxitos de ventas J. CERCAS, *Soldados de Salamina*. Barcelona, 2001, y C. RUIZ, *La sombra del viento*. Barcelona, 2001. En este sentido, son interesantes las reflexiones que, a través de la literatura, encontramos en la obra de A. MUÑOZ MOLINA, para este caso especialmente *El jinete polaco*. Barcelona, 1991 o *Sefarad*. Madrid, 2001. Para un contexto social muy cercano al que se va a analizar en el presente estudio se puede acudir a la obra de M. VICENT, *Contra paraíso*. Madrid, 1996. También resulta interesante la reflexión que sobre el periodo de la posguerra se realiza a través del

Por otra parte, esta evolución historiográfica marca una tendencia que podemos considerar como necesaria en el proceso de análisis de cualquier periodo histórico, ya que se ha pasado de unos estudios iniciales centrados en los valores numéricos de la represión, lo que ha permitido fijarla cuantitativamente y, por tanto, situarla en su dimensión real, a otros estudios que, con aquella base más o menos resuelta, se han podido orientar a una perspectiva más social e, incluso, antropológica. En este sentido, la historiografía primero ha cuantificado la represión y después ha podido profundizar históricamente en su análisis, permitiendo esta profundización una visión mucho más completa de un fenómeno histórico necesariamente complejo y multidimensional. De esta forma, no sólo se cuentan los ejecutados sino sus condiciones de vida en sus últimos días o su situación familiar, no sólo se enumeran exiliados sino su dura pervivencia en el extranjero, no sólo se cuentan presos sino su situación familiar y personal en las cárceles, y, como se explica en el presente trabajo, no sólo se cuentan afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas sino todas las consecuencias económicas, políticas y sociales que afectaban a los encausados y sus familiares, quién colaboraba con el régimen, etc.

Las formas de la represión.

Como hemos visto, la represión fue la columna vertebral en la que se consolidó y construyó el régimen franquista, creando un estado generalizado de terror que permitió anular toda su posible oposición, incluso físicamente, y estructurar la nueva sociedad en una clara y meridiana división entre vencedores y vencidos, que recibían un trato y consideración diferentes, ya que tuvieron reservados distintos lugares en la nueva sociedad. El peso del pasado se convirtió en una losa imposible de levantar que marcó el destino de cada persona. Así, los vencedores fueron los grandes beneficiados¹⁸ y los

mundo del cómic, destacando especialmente la obra testimonial y de recuperación de la memoria histórica en C. GIMÉNEZ, *Todo Paracuellos*. Barcelona, 2007.

¹⁷ Sería interminable citar las memorias publicadas sobre este periodo. Para su estudio es fundamental J. FONTANA, “Franco y el franquismo a través de los libros de memorias”, en *Actas de las IV Jornadas “Historia y fuentes orales”*. Historia y memoria del franquismo, 1936-1978. Ávila, 1997, pp. 19-38.

¹⁸ A través de las memorias de Esther Tusquets se puede comprobar cómo los vencedores de la guerra, en este caso parte de la burguesía catalana, sentían algo cercano a *alegría de vivir* en los primeros años de posguerra. Se trataba de una euforia fruto de la sensación de dominio total de la situación. En palabras de la citada escritora *En los años cuarenta, mi tío, y la gente como mi tío, como nosotros, la gente que había*

vencidos se vieron resignados a la constante humillación, al abuso, al miedo, al hambre y a la miseria.¹⁹

Ante la extrema complejidad y el alcance inmenso de la represión franquista, podemos establecer un marco general de análisis siguiendo a F. Moreno²⁰, dividiéndola en represión física, económica y otras formas de represión, a las cuales añadiremos más adelante la procedente del mundo judicial. Como premisa básica tendremos en cuenta que el régimen franquista utilizó la violencia política tanto física como psicológicamente con el objetivo consciente de anular e incluso eliminar a toda persona contraria a sus valores y, al mismo tiempo, conseguir una mayor cohesión social en torno a ellos.

La represión física buscaba eliminar materialmente a los desafectos²¹ o castigarlos físicamente en distintas modalidades o variantes. Al acabar la guerra civil, en abril de 1939, una gran cantidad de españoles, republicanos o sospechosos de serlo, fueron trasladados forzosamente a improvisados campos de concentración, que fueron utilizados para controlarlos, clasificarlos y depurar sus responsabilidades. En situación de constante humillación, malos tratos, frío, suciedad enfermedades, hambre y abusos como fusilamientos arbitrarios y trabajos forzados, cerca de 507.000 españoles sufrieron las consecuencias de perder la guerra en los entre 104 y 188 campos de concentración que se establecieron (provisionales y estables, cerrados y al aire libre). Sólo pudieron salvarse aquellos que consiguieron avales de sacerdotes o personas “de orden”.

*ganado la guerra, se podía permitir esto[despertar a todo el mundo gritando por las calles y de noche Heil Hitler] y más. La calle era nuestra, la ciudad era nuestra, el país era nuestro. En definitiva, tal y como indica Esther Tusquets, se trataba de personas que, a diferencia de los vencidos, volvían a conquistar la realidad. E. TUSQUETS, *Habíamos ganado la guerra*. Barcelona, 2007.*

¹⁹ J. FONTANA (1986), op. cit.; E. GONZÁLEZ, op. cit.; I. DOMÈNECH y F. VÁZQUEZ, *La repressió franquista a l'àmbit local*. Valencia. Afers, 2003; C. MOLINERO y P. YSÀS, op. cit.; P. PAGÈS (dir.), *Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans (1939-1975)*. Valencia, 2004. P. PRESTON, *Botxins i repressors. Els crims de Franco i dels franquistas*. Barcelona, 2006; M. EIROA, “Represión, restricción, manipulación: estrategias para la ordenación de la sociedad y del Estado”, en *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, n° 6. 2006.

²⁰ F. MORENO, “La represión en la posguerra”, en S. JULIÁ (coord.), op. cit., pp. 275-406.

²¹ M. RICHARDS, op. cit., pp. 49-50.

Los campos de concentración franquistas no compartieron con los alemanes su carácter de campos de exterminio. Su función principal, como hemos dicho, era controlar, clasificar y “depurar” a los desafectos. Sin embargo, sí compartieron con los alemanes estrategias totalitarias que incluían el trato subhumano a los prisioneros, la humillación constante y la muerte aleatoria y selectiva. Los vencidos de la guerra civil fueron tratados en estos campos como delincuentes, abandonando su destino a fórmulas indirectas que llevaban a la muerte como el hambre, la suciedad, el frío, las palizas y el agotamiento físico y psíquico. Se trataba de un infierno organizado, un purgatorio generalizado que tenía como objetivo la degradación como paso previo a la desaparición, el doblegamiento y la sumisión.²²

Aquellos que pudieron escaparon del miedo a las anunciadas represalias del vencedor recurriendo al exilio, especialmente a Francia, México y la URSS. Sin embargo, la mayoría no encontraron sino penalidades en forma de desprecio, campos de concentración e, incluso, campos de exterminio nazis. Tratados como indeseables, muchos no tuvieron más remedio que regresar, sufriendo la represión franquista de la que habían huido.

Los que no encontraron el camino del exilio acabaron en su mayoría en la cárcel, institución que se convirtió en el eje central de la represión franquista. Según las cifras oficiales en 1940 existían más de 240.000 presos en las cárceles españolas, que pronto se vieron colapsadas por la avalancha de internos. En las cárceles se buscó expresamente la humillación de los vencidos como paso previo a su repolitización. En un contexto de hambre y alta mortalidad, se improvisaron hasta 500 cárceles por toda España, en las que imperaba la suciedad y el miedo. Era tal el colapso de internos que el gobierno franquista no tuvo más remedio que echar a la calle, en libertad condicional, en 1940 a los que tuvieran penas menos elevadas e informes de las autoridades locales correspondientes favorables. En libertad provisional, estos presos debían presentarse

²² M. NÚÑEZ, op. cit.; y “Dolor como terapia. La médula común de los campos de concentración nazis y franquistas”, en *Ayer*, nº 57. Madrid, 2005; J. RODRIGO, *Los campos de concentración franquistas, entre la historia y la memoria*. Madrid, 2003; del mismo autor, *Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947*. Barcelona, 2005; A. REIG, *Franco “caudillo”: mito y realidad*. Madrid, 1995, pp.249-252.

diariamente al cuartel de la Guardia Civil de su localidad. Hay que tener en cuenta que la pena de prisión afectaba gravemente la vida de la mujer y los hijos del interno.²³

Las cárceles fueron el lugar preferido para las frecuentes palizas indiscriminadas y torturas que se llevaron a cabo con el amparo de la “Ley de fugas”, violencia que también se producía en los interrogatorios previos a los juicios sumarísimos, tras los cuales el acusado firmaba cualquier documento que se le pusiera por delante. A partir de 1942 se hizo frecuente la tortura policial e incluso la “inducción al suicidio” a los presos.

La sed de venganza en un contexto comunicativo y estatal de fomento de la acusación entre personas acabó generalizando las denuncias en las que se basaba la justicia franquista, dando vía libre a todo tipo de odios personales y egoísmos que acababan creando un clima asfixiante de inseguridad e incertidumbre que perfectamente podía acabar con cualquier persona en la cárcel, la tortura, la ruina o, incluso, la muerte.²⁴ Como veremos, la Ley de Responsabilidades Políticas incitaba directamente a la población a la denuncia del sospechoso. En última instancia, se perseguía la depuración política, aunque con continuas arbitrariedades e injusticias.

En este contexto, y como comprobaremos más adelante, se impuso la justicia militar como principal instrumento represivo. Basada en una serie de aberraciones legales, se persiguió a todo sospechoso de haber colaborado con la República, viéndose colapsados pronto los juzgados. La magnitud del proceso se evidencia, por ejemplo, con datos como la existencia de 35 juzgados militares en Córdoba (sin contar los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los de persecución de heridos) o que casi el 10% de la población de la provincia de Albacete pasó por un Consejo de Guerra²⁵. Éstos se generalizaron por toda España a partir de mayo de 1939. Casi siempre colectivos, no

²³ F. ROMEU, *El silencio roto. Mujeres contra el franquismo*. Oviedo, 1994; A. REIG, op. cit., pág. 268-270 R. ABELLA, *La vida cotidiana bajo el régimen de Franco*. Madrid, 1996; C. MIR, *Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra*. Lleida, 2000. C. MOLINERO, M. SALA y J. SOBREQUÉS, *Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo*. Barcelona, 2003. G. GÓMEZ, “El desarrollo penitenciario en el primer franquismo (1939-1945), en *Hispania Nova*, nº 6, 2006.

²⁴ E. GONZÁLEZ, op. cit., pág. 23.

²⁵ M. ORTIZ, op. cit., pág. 369.

ofrecían ninguna garantía procesal e incluían la tortura, castigando hechos retroactivamente que en su tiempo no constituían delito, como la simple pertenencia a un sindicato o a un partido político. Se trataba, pues, de juicios convertidos en meros pretextos para la eliminación física, presididos por una gran rapidez.

La eliminación física del vencido se conseguía también a través de las ejecuciones, tanto las “legales” como las arbitrarias. Las primeras eran las que se producían como consecuencia de un Consejo de Guerra. Sin apenas garantías de revisión o perdón, una imposición de pena de muerte se cumplía en algunos casos en 3-4 días y solían desatar una campaña de gestiones de los familiares ante las autoridades que era frecuente que acabaran en abusos y desesperación. Franco personalmente concedía el “enterado”, último trámite para la ejecución de la pena²⁶. Peor situación era la de las muertes arbitrarias. Como consecuencia de “paseos” y de la “Ley de fugas”, los tribunales militares crearon un auténtico clima de “terror extrajudicial” que respondía a crímenes vengativos al calor de la victoria.

Otra modalidad de represión física eran los trabajos forzados. Bajo el pretexto de reeducación y regeneración moral, en el sentido nacional-católico, y bajo la forma de reducción de penas, el franquismo explotó masivamente el trabajo de los vencidos, en un proceso en el que la Iglesia jugó un papel protagonista. Con una compensación económica irrisoria, en los Batallones Disciplinarios, en las Colonias Penitenciarias o en trabajos realizados para Regiones Devastadas, miles de personas (excombatientes, prisioneros de campos de concentración sin acusación concreta y mozos de reemplazo de las quintas 1936-1941, todos considerados “desafectos”), fueron obligados a trabajar en condiciones muy duras y penosas.²⁷ Se trataba de un auténtico “purgatorio terreno”. En 1939 el 12,74% de los presos estaban acogidos al sistema de redención de penas por el trabajo, cifra que se elevó al 35,80% en 1944 y al 34,37% en 1947.²⁸

²⁶ Se ha escrito mucho sobre la frialdad con la que Franco daba el visto bueno a las sentencias de muerte. Esta frialdad incluso podía incluir altos niveles de sadismo, como en los momentos en los que el capellán de Franco añadía al “enterado” de Franco una “r” para que dijera “enterrado”, haciendo referencia al futuro inmediato del sentenciado. Esta frialdad tiene su base en la concepción de Franco de ser protagonista de una operación de limpieza de España de elementos indeseables. Para profundizar en esta cuestión proponemos P. PRESTON (2006), op. cit., pp.157-172.

²⁷ F. MORENO, op. cit., pp. 333-342.

²⁸ G. REDONDO, *Política, cultura y sociedad en la España de Franco, 1939-1975*. Tomo I. “La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947)”. Pamplona, 1999, pág. 89 y 113.

El franquismo no se limitó a reprimir físicamente a los que consideraba sus enemigos, sino que utilizó la represión económica para anularlos socialmente. Al expolio y mutilación material que supuso la Ley de Responsabilidades Políticas, que comentaremos más adelante, había que añadir el miedo a la sanción económica, a la privación de bienes o a la inhabilitación por comportamiento inadecuado o sospechoso, generando una situación de represión económica arbitraria y extrajudicial que abusó de los derrotados, con situaciones de rapiña y pillaje en ocasiones incontroladas, protagonizadas normalmente por militares y falangistas. Los vencidos habían perdido también la paz y fueron condenados al silencio.²⁹

El franquismo también intentó la represión ideológica a través de un proceso de “limpieza” y reeducación en el que se concedió un papel protagonista a la Iglesia. Prueba de ello son los necesarios informes de buena conducta que los párrocos expedían, tanto en los procesos de Responsabilidades Políticas como para cualquier gestión de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, si un preso deseaba reducir pena de cárcel o lograr la libertad condicional, debía aprobar previamente un examen de catecismo. El Estado franquista, además, otorgó a la Iglesia un papel preponderante en el mundo educativo, asegurándose así la formación falangista y nacional-católica de los futuros ciudadanos.³⁰

La represión también afectó al ámbito laboral. El 80% de las plazas de trabajo público se reservaron a los vencedores. Los “caballeros mutilados” obtuvieron todo tipo de privilegios y los empresarios tuvieron vía libre para depurar a sus trabajadores. Todos los sectores, funcionarios, periodistas, médicos, profesores, etc. fueron depurados³¹. La marginación laboral de los vencidos solía llevar a la degradación y la miseria, fomentándose los suicidios, los robos o la prostitución. La reinserción era

²⁹ E. GONZÁLEZ, op. cit., pág. 19 y 94.

³⁰ G. CÁMARA, *Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951)*. Madrid, 1984; J. SÁEZ, *El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de posguerra (1937-1960)*. Madrid, 1988.

³¹ M. EIROA, op. cit. El 10 de febrero de 1939, un día después de la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas, se promulgó la Ley de Depuración de Funcionarios públicos, cuyo objetivo era limpiar de funcionarios contrarios al nuevo régimen para conseguir un personal totalmente adicto.

difícil por el imperio de avales, salvoconductos, historiales, etc. Víctimas especiales fueron las mujeres, que sufrieron todo tipo de humillaciones (corte de pelo, ingesta de aceite de ricino, sobornos, etc.), encarcelamientos, violaciones, etc., además de perder los espacios de libertad conquistados durante el periodo republicano. También hay que añadir los niños. A la pérdida generalizada de una infancia feliz por la guerra y la miseria que comportaba hay que añadir los niños que fueron enviados al exilio para salvarlos de la guerra y de las garras del franquismo³² o a los niños que permanecieron junto a sus madres en las cárceles. Estos últimos eran enviados a los cuatro años a centros de asistencia y escuelas religiosas gobernadas por el Patronato “Nuestra Señora de la Merced”, dependiente del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, donde en un ambiente rígido y austero se les educaba en los ideales del franquismo.³³

A todas estas formas de represión habría que añadir la persecución de los huidos y sus familias, así como la acción militar y policial contra la guerrilla y contra la actividad política clandestina, además del vasto campo de represión en el ámbito cultural y de la vida cotidiana, aspectos importantes pero que exceden el ámbito de análisis del presente trabajo.

En definitiva, la represión franquista creó un panorama desolador para los vencidos que buscaba conscientemente su humillación y escarnio público. El franquismo, nacido de una trabajada victoria militar incondicional, en ningún momento buscó el perdón y la reconciliación, sino la eliminación de aquellos españoles considerados como fracasados, “imbéciles sociales” o incluso psicópatas que contaminaban, sólo con su presencia, el proyecto fascista de una España pura y nueva

³² F. MORENO, op. cit., pp. 286-287. En total fueron evacuados 37.487 niños y niñas, de los cuales posteriormente fueron repatriados 20.266. 17.221 se quedaron para siempre en sus destinos: Francia, la URSS, Bélgica, Inglaterra, México, Suiza, Dinamarca y diversas zonas del norte de África. Algunos de ellos acabaron sus días en el campo de concentración de Mauthausen.

³³ J. CASANOVA, “Una dictadura de cuarenta años”, en J. CASANOVA (coord.), op. cit., pp. 26-27. En 1942 este Patronato tutelaba a 9.050 niños y niñas y al año siguiente a 10.675. Esta labor fue desarrollada posteriormente por la Obra Sindical “Educación y Descanso” y por Auxilio Social. En este sentido, ver C. MOLINERO, *La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista*. Madrid, 2005.

que entroncaba directamente con los gloriosos tiempos anteriores al siglo XIX³⁴. El resultado fue uno de los períodos más negros de nuestra historia.

³⁴ E. GONZÁLEZ, op. cit., pp. 9-12.

3. La justicia de los vencedores.

Como hemos visto, el régimen franquista recurrió a la represión desde sus orígenes como un elemento fundamental para imponer el orden social que pretendía a una sociedad que se había resistido durante una larga guerra de casi tres años. Esta represión, complicada de analizar por su omnipresencia y sus distintos niveles y facetas, fue evolucionando junto con el régimen, al que nunca abandonó³⁵. En este sentido, la nueva justicia y la política judicial del franquismo se convierten en un elemento decisivo para entender el contexto represivo en el que se articuló el nuevo régimen.

Desde el mismo bando de declaración del estado de guerra el 28 de julio de 1936, los conspiradores contra la República desarrollaron una legislación penal y una nueva organización judicial que tenían como objetivo defender la política del nuevo Estado. Rompiendo con algunos de los aspectos básicos de los principios jurídicos elementales, la nueva justicia se concibió como un medio más para que el Estado materializara su poder. Aspectos como la recuperación de la pena de muerte, la ampliación y desnaturalización del concepto de delito, la alteración del delito de rebelión militar, la sobredimensión de la jurisdicción militar, aplicada sin tapujos sobre la sociedad civil, o la despreocupación por la rehabilitación de los presos, entre otros, demuestran la imposición de una justicia concebida como arma contra los vencidos que desembocará, como veremos, en un procedimiento sumarísimo que afectará a gran parte de la sociedad civil. La consecución del objetivo propuesto de depuración de la sociedad se realizó mediante el desprecio a las disposiciones legales que amparaban al individuo, en lo que suponía el final del principio liberal de la seguridad jurídica.³⁶

Las rupturas con el orden jurídico liberal fueron numerosas y no poco importantes, llevando incluso a la duda a algunos historiadores sobre si existía o no un

³⁵ J. CASANOVA (2002), op. cit., pág. 5.

³⁶ C. MIR, F. CORRETGÈ, J. FARRÉ, J. SAGUÉS, op. cit., pp. 23-28; I. DOMÈNECH, F. VÁZQUEZ, op. cit., pág. 98. N. IBÁÑEZ, “Prácticas de depuración y expolio en la jurisdicción especial durante la guerra y la posguerra en Álava”, estudio preliminar a I. GIL BASTERRA, *Jurisdicción especial y represión franquista en Álava (1936-1942). Documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas para Álava*. Vitoria-Gasteiz, 2006, pp. XVI-XVII. R.C. CANCIO, *Guerra Civil y Tribunales: de los jurados populares a la Justicia franquista (1936-1939)*. Cáceres, 2007, pp. 127-128. C. JIMÉNEZ VILLAREJO, “La destrucción del orden republicano (Apuntes jurídicos), en *Hispania Nova*, nº7, 2007.

verdadero Estado de Derecho durante el franquismo³⁷. Así, la nueva justicia franquista permitía el castigo por hechos que cuando fueron cometidos no eran delitos, violando de esta forma el principio legal *nullum crimen sine lege*; la extensión de normas jurídicas a ámbitos no comprendidos en ellas; la retribución de penas diversas en diversos Tribunales por un solo hecho delictivo; el enjuiciamiento a fallecidos; la equiparación de la delincuencia política a la común; la manifestación de continuas medidas de excepción; también dotaba de capacidad jurisdiccional a órganos administrativos, como alcaldes o gobernadores; y, en definitiva, no respetaba el principio de legalidad ni el de respeto a la dignidad de la persona humana.

Todo quedaba justificado en la intención de reforzar el poder del Estado, con el objetivo último de sobrevivir a costa del control y la represión de sus enemigos. La justicia se convirtió en un arma política caracterizada por su parcialidad, su falta de garantías y por la subordinación de la jurisdicción ordinaria a la militar, que respondía a una situación de intensa concentración de poderes, una situación tal de degradación que incluso puede llevar a cuestionar si realmente se trataba de un verdadero poder judicial.³⁸

Sin embargo, la nueva justicia franquista respondía en parte a otros modelos jurídicos que se habían puesto en práctica anteriormente o que estaban siendo utilizados en aquel momento, configurando una doble inspiración que marca un debate que puede extenderse incluso a la misma naturaleza del franquismo³⁹. Estamos hablando de la herencia de la política liberal conservadora de la Restauración y de la influencia de los regímenes fascistas.

Para M. Lanero la política judicial del franquismo está en conexión especialmente con el contexto jurisdiccional de la Restauración (veremos que también con el de la Segunda República), en el que ya se daban elementos que el franquismo normalizó y generalizó como el intervencionismo del poder político, la limitación de la

³⁷ J. CANO, *La política judicial del régimen de Franco*. Madrid, 1985, pág. 86.

³⁸ C. MIR et al. (1997), pág. 25.

³⁹ C. MOLINERO y P. YSÀS (1992), op. cit.; I. SAZ (2004), op. cit.; J. PÉREZ LEDESMA, “Una dictadura <<por la gracia de Dios>>”, en *Historia Social*, nº 4. Valencia, 1994.

jurisdicción contencioso-administrativa, la limitación del Estado de Derecho o la multiplicación de jurisdicciones especiales, que suponían una especialización jurisdiccional, base de multitud de irregularidades, así como la no dependencia del Ministerio de Justicia sino directamente del poder en algunos asuntos, la invasión de la competencia militar y, finalmente, el fin de la unidad jurisdiccional.⁴⁰

Por otra parte, también es constatable la influencia de los regímenes fascistas. Tanto el régimen fascista italiano como el nacional-socialista alemán utilizaron la justicia como pieza fundamental de sus aparatos represivos. Sin embargo, parece que el modelo franquista se acerca más al precedente fascista que al nacional-socialista. Este último fue más lejos en la vinculación de la justicia con el poder, en la estricta utilización de personal adicto para su administración y en la extrema indefensión de sus víctimas. El régimen fascista italiano construyó un modelo jurídico más asumible por el franquismo, con un mayor respeto procedimental, la conservación de la distinción entre jurisdicciones especiales y ordinaria, así como la inclusión de los delitos políticos. Con todo, parece que el régimen dictatorial que más se acercó al modelo franquista, sobre todo por su profusa utilización de jurisdicciones especiales, el dominio de la jurisdicción militar y el control no del partido de masas sino del gobierno, fue el de la Francia de Vichy.⁴¹

En cuanto a la misma Ley de Responsabilidades Políticas, la composición mixta de sus tribunales, compuestos por miembros del ejército, de FET y de las JONS y de la magistratura, imprimían un carácter claramente político, que se podría asemejar al “Tribunal del Pueblo” nazi y al “Tribunal para la Defensa del Estado” fascista (en el que también aparecía el ejército), aunque se diferenciaban en que en estos casos era el Partido Único el que ejercía el control total, mientras que en los tribunales españoles el control real lo ejercía el ejército. Así, mientras en los regímenes nazi y fascista el enjuiciamiento de los delitos políticos fue asumido preferentemente por el Partido

⁴⁰ M. LANERO, op. cit., pp. 315-318. R.C. CANCIO, op. cit., pp. 45-92.

⁴¹ J. CANO, op. cit., pp. 82-84; C. MIR et al. (1997), op. cit., pp. 36-44.

Único, en el régimen franquista, al menos en sus primeros años, lo fue fundamentalmente por el ejército.⁴²

En definitiva, la justicia fue uno más, desde luego no el de menor importancia, de los instrumentos a los que los vencedores de la guerra civil recurrieron para conseguir sus objetivos de control de la población, depuración de los disidentes y cohesión social en torno a un contexto de miedo, inseguridad y constante amenaza. Para la consecución de este objetivo, el franquismo recurrió tanto a la recuperación de viejas estrategias conservadoras como a los más modernos medios de represión practicados por los fascismos. Todas estas medidas convergían en un punto: la degradación interesada del Estado de Derecho y la subordinación del poder judicial a los intereses del poder de dominio de la sociedad.

Siguiendo a I. Berdugo, podemos establecer un primer periodo jurídico en el franquismo que comenzaría el 28 de julio de 1936, con el bando de declaración del estado de guerra y finalizaría en 1945, cuando una serie de medidas jurídicas señalan el paso a un periodo diferente⁴³. En este periodo la legislación represiva siguió dos caminos: el de la represión de los exrepublicanos y el de la adecuación de la legislación republicana al nuevo régimen.

El camino de la represión de los exrepublicanos se apoyó en la creación de jurisdicciones especiales nuevas y en el permanente recurso a la jurisdicción militar, que acabó imponiéndose a la jurisdicción ordinaria. En realidad estos dos elementos ya habían sido utilizados con anterioridad, aunque en circunstancias y a una escala diferentes. Así, durante el periodo republicano los gobiernos progresistas trataron de limitar el uso de las dos jurisdicciones especiales que existían, la militar y la eclesiástica, en aras de un reforzamiento de la jurisdicción ordinaria común y de las garantías que conlleva. Por su parte, la tradición de invasión del ejército y su

⁴² N. IBÁÑEZ, “Prácticas de depuración y expolio en la jurisdicción especial durante la guerra y la posguerra en Álava”, en I. GIL BASTERRA, op. cit., pág. XIX.

⁴³ I. BERDUGO, “Derecho represivo en España durante los periodos de guerra y posguerra (1936-1945)”. Madrid. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, nº 3, 1981, pp. 98-99. Estas medidas son la entrada en vigor de los dos nuevos Códigos, el Penal y el de Justicia Militar, la reforma de las leyes de Responsabilidades Políticas o la concesión del primer indulto, al que se podrían añadir otras medidas tendentes a lavar la imagen del régimen como la derogación del saludo en alto.

jurisdicción de la vida política y jurídica ordinaria arranca de las Cortes de Cádiz de 1812, otorgando al ejército el papel de garante de la integridad nacional y de defensora del país antes sus enemigos tanto externos como internos⁴⁴. Ejemplos en este sentido no escasean en la historia contemporánea de España, comenzando por el mismo régimen franquista, que otorgó al ejército las más altas cotas de poder y control social.

Convendría en este punto detenernos en las características de las llamadas jurisdicciones especiales. Éstas se caracterizan principalmente por llevar a cabo su actividad fuera de la jurisdicción ordinaria. Sin estar sometidas exclusivamente a la ley, ya que están sujetas también a directrices políticas, y sin necesidad de una estricta competencia técnica, su otra característica fundamental es la falta de independencia. A todo ello se une la falta de garantías para el procesado derivadas de la inexistencia del derecho a un juez predeterminado por la ley y el hecho de basarse en un procedimiento específico, normalmente trufado de inconveniencias y especificidades que refuerzan su carácter imparcial. En definitiva, pues, las jurisdicciones especiales suponen la ruptura del principio de unidad y exclusividad de la jurisdicción y, como creadoras de contextos jurídicos extra-ordinarios, una fuente de indefensión para el ciudadano y un marco favorable al poder para la imposición de sus intereses.⁴⁵

Aparte de las jurisdicciones especiales militar, que desarrollaremos más adelante, y eclesiástica, el régimen franquista creó otras que le permitieron llevar a cabo la represión de la población⁴⁶. Con un carácter eminentemente político la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas fue creada por la Ley de 9 de febrero de 1939 con la intención de completar la acción depuradora de responsabilidades que habían

⁴⁴ M. ÁLVARO, “Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas hasta la reforma de 1942”, en *Revista de Estudios Políticos*, nº 69, 1990, pp. 141-145. De hecho, en zonas latifundistas del Sur de España el proletariado era tratado con anterioridad a la guerra como un enemigo interior, semejante incluso al enemigo africano del Norte de Marruecos, por parte de muchos terratenientes. Durante la guerra el trato que le dispensó el Ejército franquista fue brutal, en muchos casos igual que el que se dispensó a los indígenas marroquíes. No es de extrañar, pues, que los republicanos en general sufrieran de variadas formas el desprecio de los franquistas ganadores. Se pueden consultar varios ejemplos en P. PRESTON, op. cit., pp. 15-100.

⁴⁵ M. LANERO, op. cit., pp. 315-317. G. SÁNCHEZ, “Justicia ordinaria y Justicia popular durante la guerra civil”, en AA.VV., *Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la guerra civil española*. Madrid, 1990, pp. 87-108.

⁴⁶ Para una explicación detallada de estas jurisdicciones especiales ver M. LANERO, op. cit., pp. 328-348; I. BERDUGO, op. cit., pág. 100.

iniciado los Consejos de Guerra desde 1939, especialmente en el territorio que se había mantenido hasta el final fiel a la República. Como desarrollaremos más adelante, la Ley de Responsabilidades Políticas se caracterizaba por su carácter retroactivo, establecía sanciones sociales y económicas complementarias a las generadas por la jurisdicción militar y fomentaba la denuncia entre los ciudadanos. Reformada en 1942, se mantuvo hasta junio de 1945 y fue definitivamente liquidada en 1966.

Con el objetivo de castigar directamente a los enemigos del régimen se creó en marzo de 1940 la jurisdicción especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Suponía una tercera penalización por el mismo hecho, ya que era complementaria a las jurisdicciones militar y de Responsabilidades Políticas⁴⁷. Con idea de permanencia, no estaba pensada únicamente para “liquidar penas pasadas”, sino para castigar también en el futuro a los disidentes políticos. Controlada por el Ejército y FET de las JONS, sin participación de la Magistratura como en la Ley de Responsabilidades Políticas, se integró en el Tribunal de Orden Público en 1963 y no se separó de la jurisdicción militar hasta 1964. Con carácter retroactivo, podía establecer penas de privación de libertad, inhabilitación y sanciones económicas.

La tendencia del Estado franquista fue la de crear jurisdicciones especiales en todos aquellos ámbitos que revestían interés político, resultando un número elevado de nuevas jurisdicciones especiales, que se pueden agrupar en las de carácter penal y las de carácter civil. Aparte de la citada jurisdicción especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, en las nuevas jurisdicciones especiales de carácter penal podríamos citar los Juzgados de Delitos Monetarios, encargado desde noviembre de 1938 de los delitos de contrabando y atesoramiento de monedas, y desde noviembre de 1940 del de evasión de capitales; para los delitos de acaparamiento y abastecimiento se creó en septiembre de 1940, dependiendo de la Comisaría General de Abastecimientos, las Fiscalías de Tasas, jurisdicción complementaria de la militar, con capacidad para imponer sanciones económicas, inhabilitar comercialmente, incautar existencias e incluso enviar al

⁴⁷ A partir de 1940 las sentencias impuestas por la jurisdicción especial de masonería y comunismo también se remitían al Tribunal de Responsabilidades Políticas. También podía hacerse la comunicación de forma recíproca, con lo que se notificaba el testimonio de condena y todos los documentos que podían referirse a la presunta militancia del procesado en la masonería, aunque esto no se realizó hasta 1941, con la constitución de los tribunales especiales encargados de masonería y comunismo. R.C. CANCIO, op. cit., pág. 150.

inculcado a un batallón de trabajadores; para los asuntos referentes a la delincuencia protagonizada por menores de 16 años, los cometidos por mayores de edad contra menores (abandono de familia, explotación, etc.) y la salvaguarda del derecho al cuidado y la educación se crearon en diciembre de 1940 los Tribunales Tutelares de Menores; finalmente, y recogiendo una Ley de agosto de 1933 y el Reglamento de mayo de 1935, se creó el Registro Central de Vagos y Maleantes, que establecía tipos de estados de peligrosidad de gran imprecisión que, junto con la admisión del estado de peligrosidad incluso a la comisión de algún delito, supuso una falta total de garantías para el ciudadano y un marco legal idóneo para llevar la represión. En este sentido, no podemos olvidar que al principio del franquismo los alcaldes y los gobernadores tenían la potestad de imponer sanciones penales.

Otro tipo de jurisdicciones especiales eran las de carácter civil. Destacó en este grupo la jurisdicción especial laboral, creada en mayo de 1938 y regulada por la Ley Orgánica de la Magistratura de Trabajo de octubre de 1940. Dependiente del Ministerio de Trabajo, suponía una herramienta perfecta para el control de los trabajadores. En este sentido FET de las JONS tenía su propia jurisdicción en materia laboral, aunque con funciones de conciliación con los llamados Tribunales Sindicales de Amparo.

Tras la finalización de la guerra civil el régimen franquista tendió a crear un gran número de Tribunales especiales para dar solución a situaciones anómalas o para satisfacer su necesidad de restauración social y económica, todos ellos sin apenas garantías y en completa desvinculación de la estructura de los Tribunales ordinarios. Se trataba de los Juzgados Gubernativos para la Recuperación de Bienes y Títulos sustraídos por los marxistas (agosto de 1939); el Tribunal Arbitral de Seguros (septiembre de 1939), que decidía sobre el cobro de seguros de vida de fallecidos por la guerra civil; el Tribunal Especial de Divorcios (octubre de 1939), que solucionaba las situaciones derivadas de la derogación de la Ley de Divorcio; los Juzgados de Desbloqueo (diciembre de 1939) para entender sobre los pagos pendientes por bienes y servicios realizados en zona republicana; el Tribunal de Contratación en Zona Roja (noviembre de 1940), que revisaba los contratos realizados durante la guerra en la zona republicana; y el Juzgado Especial para la Restitución de Bienes Eclesiásticos (julio de 1941), para a devolución de bienes de la Iglesia.

En definitiva, el franquismo creó un contexto jurídico que rompía la unidad jurídica ordinaria y, a la vez, limitaba a ésta en casi todos los ámbitos del Derecho, respondiendo a la voluntad política, que fue más allá del periodo que denominamos posguerra, de control social, económico y político de la población, un control garantizado por la actuación de un personal subordinado y adicto al poder, y por la creación de un grado extremo de excepcionalidad que ofrecía garantías mínimas para unos procesados que se vieron totalmente indefensos ante todo tipo de sanciones económicas y políticas. En este proceso, no debemos olvidar que la marginada y maltratada justicia ordinaria también colaboró activamente en la represión, a través de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los Consejos de Guerra y la tramitación de expedientes personales.⁴⁸

No hay que olvidar que la creación de estas jurisdicciones especiales fue precedida por un conjunto de medidas legales y administrativas que tenían como finalidad la depuración directa de todas las personas opuestas al nuevo régimen o sospechosos de serlo. A nivel individual, la Orden de 11 de agosto de 1936 obligaba a los funcionarios a prestar juramento de adhesión al nuevo régimen⁴⁹ y la Ley de 5 de diciembre de 1936 de Separación de Empleados Públicos, basada en la más absoluta arbitrariedad y sin posibilidad alguna de recurso, creó las Comisiones de Depuración, que investigaban el pasado ideológico de los funcionarios, y que fue completada con la Ley de 10 de noviembre de 1939 que posibilitaba una depuración total que incluía inhabilitación e, incluso, trabajos forzados. Para determinados Cuerpos y grupos profesionales se recuperaron los Tribunales de Honor⁵⁰. A nivel colectivo, el 13 de septiembre de 1936 se decretó la ilegalidad de todos los partidos políticos y sociedades integrantes del Frente Popular y las opuestas al Movimiento, acompañada de la

⁴⁸ M. LANERO, op. cit., pág. 335; J. CANO, op. cit., pág. 85.

⁴⁹ F. SANLLORENTE, *La persecución económica de los derrotados. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Baleares (1939-1942)*. Mallorca, 2005, pág. 15.

⁵⁰ I. BERDUGO, op. cit., pp. 101-104. Los llamados Tribunales de Honor juzgaban conductas que empañasen el honor de un Cuerpo determinado o afectasen a la caballeridad de sus miembros. Prohibidos en la República por la extralegalidad que implicaban, fueron reintroducidos por el régimen franquista como una forma específica más de represión, afectando en este caso al Ejército, al Cuerpo de Notarios, a la Marina Mercante, a los agentes de Cambio y Bolsa, a los Fiscales, a los Cuerpos de Hacienda, a los Corredores de Comercio y, finalmente, a los funcionarios del Estado.

incautación de sus bienes, que se materializó con el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937, que creaba la Comisión Central de Incautaciones.

La segunda de las orientaciones que tomó la legislación franquista en sus inicios fue, como hemos dicho, la de la adecuación de la legislación republicana al nuevo orden. En general, se tendió a una mayor severidad en las penas, tanto en el sentido de su mayor gravedad, como en el del castigo de delitos hasta entonces irrelevantes para la justicia. Así, se adoptó el Código Penal de 1932, diseñado en un contexto democrático y de libertades, añadiéndole nuevos aspectos como la introducción de la pena de muerte⁵¹, agravando las penas cometidas contra la seguridad del Estado a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado de febrero de 1942 y protegiendo los postulados de la moralidad católica y su modelo familiar⁵², en lo que era una imposición oficial de un orden ético.

La Ley de 4 de abril de 1933 de Vagos y Maleantes incluía la admisión del Estado de peligrosidad predelitual y una definición vaga y confusa de los estados considerados peligrosos. Por ello, esta Ley, que rayaba los límites del Estado de Derecho, fue utilizada ampliamente por el régimen franquista como elemento represivo según su conveniencia, siendo incluso “perfeccionada” en marzo de 1937 con la creación del ya comentado Registro Central de Vagos y Maleantes.

No ocurrió lo mismo con el Código de Justicia Militar. Como comprobaremos más adelante, las reformas republicanas en este campo fueron anuladas y se retornó al Código Penal Militar de 1890, convirtiéndose con su actuación en las jurisdicciones especiales y su invasión de la justicia ordinaria, en una pieza clave de la represión franquista.

Hasta la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 estuvo vigente la Ley de 11 de octubre de 1934 sobre delitos cometidos por medio de

⁵¹ Ibidem, pág. 105. La pena de muerte se introdujo por la Ley de 5 de agosto de 1938 para los casos de parricidio, asesinato y robo con homicidio.

⁵² Ibidem. Se trata de las leyes de protección de la natalidad (enero de 1941), la creación del delito de abandono de familia (marzo de 1942), la modificación de los delitos de estupro y raptó y el restablecimiento del delito de adulterio, modificándose los delitos de infanticidio y abandono de niños.

explosivos y robos con violencia, creada expresamente para sofocar la revolución de Asturias del mismo año, permitiendo penas de muerte y reclusión mayor por perturbación grave del orden público. Junto a otras⁵³ éstas fueron las leyes de carácter represivo que el régimen franquista recuperó, mantuvo o reformó.

Por otra parte, el nuevo régimen también desarrolló una amplia obra legislativa que diera respuesta al nuevo orden surgido de la guerra civil y que también tenía un marcado carácter represivo. Siguiendo a I. Berdugo⁵⁴ se pueden establecer dos grandes apartados en esta nueva obra legislativa.

En primer lugar, el nuevo gobierno necesitaba desarrollar una nueva legislación penal que abarcara los aspectos económicos y de seguridad del nuevo Estado. En la legislación de tipo económico, aparte de las infracciones económicas que se equiparan al delito de rebelión, se tendió a intensificar el control estatal de la economía. En este sentido, las Leyes de 24 de noviembre de 1938 penal y procesal de Delitos Monetarios, la Ley de 26 de octubre de 1939 sobre el delito de acaparamiento⁵⁵ y la Ley de 13 de noviembre de 1940 sobre la Fiscalía de Tasas, son ejemplos determinantes. En general, se fomentaba el uso de la retroactividad, se infringía el principio *non bis in idem*, se fomentaba la denuncia y se castigaba la no colaboración. Por otro lado, la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 equiparaba la seguridad del Estado a la del gobierno y endurecía considerablemente todas sus formas de crítica y oposición⁵⁶. Otras medidas fueron la Ley sobre protección de la natalidad de 24 de enero de 1941, que penalizaba duramente el aborto, la Ley de 10 de marzo de 1941 de defraudación de

⁵³ Ibidem. Pág. 107. Permanecieron vigentes la Ley penal y procesal de Contrabando y Defraudación de enero de 1929, el Código Penal de la Marina de Guerra de agosto de 1888 (restablecido en marzo de 1941) y la Ley penal de la Marina Mercante de junio de 1923.

⁵⁴ Ibidem., pp. 107-113.

⁵⁵ M. LANERO, op. cit., pp. 323-325. El delito de acaparamiento es un ejemplo más de la tendencia a atribuir a la justicia militar el conocimiento de ciertos delitos de carácter común o político. Este delito abarcaba el acaparamiento de género, la elevación abusiva de precios, el fraude en la calidad de los productos y la extensión de rumores para elevar precios entre otros casos.

⁵⁶ Ibidem, pág. 324. Esta Ley atribuía a la jurisdicción militar los delitos de carácter político y los comunes con móviles políticos como, por ejemplo, los delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado y el gobierno, delitos contra el Jefe del Estado, la revelación de secretos políticos y militares, la circulación de noticias y rumores perjudiciales a la seguridad del Estado, ultrajes a la nación (a su unidad, sus símbolos, etc.), a la asociación y propaganda ilegal, huelgas y suspensión de servicios públicos, atentados y amenazas contra autoridades y funcionarios, así como robos a mano armada y secuestros.

fluido eléctrico, la Ley de 18 de marzo de 1941 sobre accidentes ferroviarios y la Ley de 10 de octubre de 1942, que modificaba del Código Penal los delitos contra la propiedad.

En segundo lugar, el régimen franquista trató de regular a su conveniencia las libertades fundamentales. Así, el derecho de asociación quedó restringido por el Decreto de 13 de septiembre de 1936, que prohibía los partidos políticos y asociaciones del Frente Popular, completada con el Decreto de 25 de septiembre de 1936 por el que se prohibieron en general todas las actuaciones políticas y sindicales, la creación el 19 de abril de 1937 del Partido Único, FET de las JONS y el establecimiento del sindicato vertical con el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938.

En este sentido, por el bando de 28 de julio de 1936 que declaraba el estado de guerra, se declaraban rebeldes a los reunidos sin permiso de la autoridad, siendo imprescindible tras la Orden de 20 de julio de 1939 el permiso de las autoridades para la celebración de reuniones y manifestaciones (excepto las de organismos oficiales y procesiones religiosas). En cuanto a la libertad de expresión, se establecía el control directo de la prensa por parte del Estado (Ley de Prensa de 22 de abril de 1938), consagrando la censura previa, las consignas oficiales y todo tipo de sanciones.

Ofrecemos a continuación un cuadro resumen ordenado cronológicamente de las referencias legales citadas hasta el momento:

Tabla 3.1

1936	
Bando de 28 de julio	Declaración del estado de guerra
Decreto de 25 de septiembre	Prohibición en general de todas las actuaciones políticas y sindicales
Orden de 11 de agosto	Obligatoriedad para los funcionarios de jurar adhesión al régimen
Decreto de 13 de septiembre	Ilegalización de las organizaciones afines al Frente Popular
Ley de 5 de diciembre	Permite la depuración de los empleados públicos

1937	
Decreto-Ley de 10 de enero	Incautación de bienes a las organizaciones ilegalizadas
Ley de marzo	Creación del Registro Central de Vagos y Maleantes
19 de abril	Creación del Partido Único, FET de las JONS

1938	
9 de marzo	Publicación del Fuero del Trabajo
Ley de 22 de abril	Establecimiento del control directo de la prensa
Decreto de 13 de mayo	Creación de la jurisdicción especial laboral
Ley de 24 de noviembre	Creación del Juzgado de Delitos Monetarios

1939	
Ley de 9 de febrero	Ley de Responsabilidades Políticas
Orden de 20 de julio	Obligatoriedad de permiso para celebrar reuniones y manifestaciones
Decreto de 7 de agosto	Creación de los Juzgados Gubernativos para la Recuperación de Bienes y Títulos sustraídos por los marxistas
Ley de 23 de septiembre	Creación del Tribunal Arbitral de Seguros
Ley de 23 de octubre	Creación del Tribunal Especial de Divorcios
Ley de 26 de octubre	Regulación del delito de acaparamiento
Ley de 10 de noviembre	Depuración total de los empleados públicos
Ley de 7 de diciembre	Creación de los Juzgados de Desbloqueo

1940	
Ley de 1 de marzo	Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo
Ley de 5 de noviembre	Creación del Tribunal de Contratación en Zona Roja
Ley de 13 de noviembre	Creación de la Fiscalía de Tasas
Ley de 13 de diciembre	Creación de los Tribunales Tutelares de Menores

1941	
Ley de 24 de enero	Medidas de protección de la natalidad
Ley de 10 de marzo	Regulación del delito de defraudación de fluido eléctrico
Ley de 18 de marzo	Regulación del delito de accidentes ferroviarios
Ley de 29 de marzo	Ley de Seguridad del Estado
Ley de 11 de julio	Creación del Juzgado Especial para la Restitución de Bienes Eclesiásticos

1942	
Ley de 10 de octubre	Modificación del Código Penal en delitos contra la propiedad

Fuente: bibliografía. Elaboración propia.

Como podemos comprobar, el régimen franquista utilizó la justicia como elemento fundamental para la represión y la construcción de un nuevo orden. Sin embargo, de entre todos sus aspectos merece destacar, por su alcance y repercusión, el desarrollo de la justicia militar.

La tradicional participación de las fuerzas militares en el desarrollo político en España tuvo como consecuencia la tendencia de la jurisdicción militar a invadir el ámbito propio legítimo de la jurisdicción ordinaria. La guerra civil supuso el marco idóneo para consagrar esta tendencia, ya que al derivar el conflicto de político a militar permitió al Ejército imponer su autoridad sobre las administrativas y judiciales, y al consagrarse un régimen con un marcado carácter militar esta tendencia se convirtió en definitiva.⁵⁷

La declaración del estado de guerra, a partir del mencionado Bando de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio de 1936, dio una primacía total a la jurisdicción militar en detrimento de la ordinaria. Esta primacía provocó una serie de alteraciones jurídicas que convirtió a la España rebelde en un auténtico Estado de excepción e irregularidades. Así, la justicia castrense pasó a entender de delitos tipificados en el Código Penal ordinario, transformando su naturaleza e, incluso, persiguió actividades que en el momento de su comisión no constituían delito alguno o que eran derechos

⁵⁷ Para la evolución de la jurisdicción militar y su papel en el franquismo ver M. LANERO, op. cit., pp. 318-328.

reconocidos constitucionalmente⁵⁸. Estas actividades, pues, pasaron a ser juzgadas según el Código de Justicia Militar y según también el estado de guerra del país.

El estado de guerra impulsó, además, a la jurisdicción castrense a un proceso de simplificación de los requisitos necesarios y de los trámites procesales en su funcionamiento con el objetivo de impartir una justicia inmediata y ejemplar. En este sentido, se comenzó a aplicar a la población juicios sumarísimos⁵⁹. El procedimiento sumarísimo estaba contemplado en la Ley de Jurisdicciones de 1906 para delitos flagrantes contra el Ejército, estableciendo penas que no llegaban a la pena de muerte o la cadena perpetua. Sin embargo, este procedimiento fue alterado por el ejército franquista para ejercer una justicia rápida y sin formalismos contra todos sus enemigos.⁶⁰

Se trata de un procedimiento abreviado en el que todas las garantías se subordinan a los principios de rapidez y de ejecución de la pena. La situación del procesado se convertía en lamentable. Con la obligación de permanecer preso durante todo el procedimiento, no disfrutaba del derecho de la defensa hasta llegar a su trámite escrito y proposición de pruebas, dándose únicamente cuatro horas a la defensa (muchas veces parcial y contraria al procesado) para instruirse y formular un escrito de defensa y proposición de prueba. Además, la circular de la presidencia del Alto Tribunal de Justicia Militar de 21 de noviembre de 1936 estableció la imposibilidad de entablar recurso contra las sentencias dictadas en procedimiento sumarísimo. La inseguridad se acentuaba con la aplicación del procedimiento sumarísimo de urgencia, que posibilitaba que todo el que intervenía en el procedimiento judicial fuera militar.⁶¹

⁵⁸ Se trataba de actividades como militancia en partidos políticos o sindicatos, participación en manifestaciones o huelgas, realización de propaganda política, participación en reuniones políticas, etc. Todas ellas se declaran contrarias al Movimiento y, por tanto, se las considera constitutivas de un delito de rebelión militar (en grado de auxilio, adhesión o excitación), juzgable, como tal, por la jurisdicción militar. De esta forma, se alteraba el concepto de delito de rebelión, que en el Código Penal Común se identificaba meramente como un delito contra el Orden Público, para facilitar al Ejército el trabajo de depuración y represión.

⁵⁹ Ibidem, pág.320; I. DOMÈNECH y F. VÁZQUEZ, op. cit., pp. 98-100.

⁶⁰ Por Decreto de 31 de agosto de 1936 este procedimiento se extendió a todos los delitos a los que la jurisdicción militar extendía su actuación.

⁶¹ La extensión de la jurisdicción militar y su imposición sobre la ordinaria, se demuestran con el Decreto nº 70 de 8 de noviembre de 1936, por los que se militarizaba a jueces, magistrados y aspirantes a las carreras judicial y fiscal, a los que se les nombró Capitanes Honoríficos de Complemento y Alféreces

Los procesados vieron agravado su estado con la introducción de una serie de prácticas que limitaban enormemente sus garantías procesales. De esta forma, se hicieron frecuentes los expedientes colectivos, que estudiaban causas seguidas contra diversas personas, a veces varias decenas, sin que hubiese relación entre ellas; se redactaban actas en las que no se consignaban detalles sobre las penas; se incumplía el derecho de la comparecencia del inculcado a la vista (muchas veces incluso ya había sido ejecutado); no solía producirse entrevista entre procesado y defensor; se ejecutaban penas de muerte antes de la prescriptiva confirmación del gobierno; se sentenciaba sobre personas no procesadas o sobre hechos no investigados; se atribuían delitos no cometidos; se daba credibilidad a denuncias sin pruebas; etc.⁶²

El procedimiento sumarísimo constaba de dos partes. La primera era la fase procesal. Ante un juez militar instructor, el proceso comenzaba con una denuncia, realizada tanto por las autoridades militares como las civiles o incluso por cualquier vecino, seguía con la incoación de la causa por el juez, que pedía a las autoridades locales (Alcalde, Guardia Civil, párroco y jefe local de FET de las JONS correspondientes) informes sobre el procesado, y pasaba a tomar declaración a los testigos. Acto seguido se dictaba la interlocutoria de procesamiento y se remitía la causa a la Auditoría de Guerra que, si consideraba que estaba instruida correctamente, convocaba el Consejo de Guerra⁶³, con el que comenzaba la segunda fase, plenaria, en la que todas las pruebas escritas debían acreditarse verbalmente como paso previo para dictar una sentencia, como hemos dicho, sin probabilidad de recurso y de ejecución inmediata.

provisionales del Cuerpo Jurídico Militar, con el objetivo de desempeñar funciones jurisdiccionales en los Consejos de Guerra Permanentes creados por el Decreto nº 55 de ese mismo año. Todo ello fue fruto de la escasez de personal existente como consecuencia de la represión y del estado de guerra R.C. CANCIO, op. cit., pág. 136.

⁶² Algunos ejemplos en J. CASANOVA (Coord.), op. cit., pp. 123-196; y E. GONZÁLEZ, op. cit., pp. 87-138.

⁶³ En estado de guerra, los Consejos de Guerra se constituyeron por toda España para juzgar a la población, en un ambiente presidido por la improvisación, la ausencia de lógica, el odio y una pasión política desatada. Como su objetivo era perseguir a la población republicana, reprimirla y depurarla, siguieron funcionando después de la guerra civil.

Una de las claves, pues, de la justicia militar fue el aumento de su competencia y en este proceso fue fundamental el llamado delito de rebelión militar. El artículo sexto del Bando de declaración del estado de guerra de 28 de julio de 1936 sancionaba a todos los ciudadanos *que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de quebrantar el prestigio de las fuerzas militares y de los elementos que prestan servicios de cooperación al ejército*, consolidando la tendencia de equiparar delitos de diversa naturaleza, sobre todo políticos, con el de rebelión militar. El citado Bando, que no hay que olvidar que estuvo vigente hasta el 7 de abril de 1948, identificaba como rebelde a todos los ciudadanos que no colaboraran en la destrucción de la legalidad republicana y en la implantación del Estado franquista.

En este sentido, el delito de rebelión militar empezó a aplicarse a los defensores de la República por haber protagonizado la ruptura del orden moral tradicional español, una ruptura que había que arreglar por cualquier medio como medida para la salvación de España. Este objetivo debía anteponerse si era necesario a la conservación de los principios jurídicos y humanitarios más elementales, con lo que se abría la puerta a todo tipo de abusos y aberraciones jurídicas. Se trataba de una limpieza de la patria de sus elementos más indeseables que debía realizarse sin contemplaciones, juzgando incluso las intenciones o la simple “disposición espiritual”. En consecuencia, a todo aquel que era acusado de delito de rebelión militar se le debía aplicar el artículo 237 del Código de Justicia Militar y, por tanto, era necesario que el ejército asumiera un papel protagonista en la nueva justicia franquista.⁶⁴

Otras disposiciones posteriores añadieron nuevos delitos a la esfera de la jurisdicción militar, como el contrabando de billetes de banco, la exportación de reservas de oro y de plata, el comercio con la zona republicana, la infracción de las tasas

⁶⁴ F. ESPINOSA, “Fundamentos ideológicos de la represión”, en J. CASANOVA (coord.), op. cit., pp. 95-102. El inspirador de esta concepción del delito de rebelión parece ser el jurista y militar Felipe Acedo Colunga, presidente de la Fiscalía del Ejército de Ocupación desde noviembre de 1936. Para Acedo la guerra no fue civil sino entre el bien y el mal, por lo que no tiene sentido tratar como iguales a los enemigos republicanos. Para Acedo la comisión del delito de rebelión militar no requería la voluntariedad del agente, no existían en él grados ni atenuantes (sólo autores y delitos consumados) y sí distintos grados en su comisión (ejecución, adhesión, auxilio, inducción, excitación, conspiración y proposición de la rebelión). Como comprobaremos en el análisis de la Ley de Responsabilidades Políticas, su pensamiento fue recogido fielmente por el cuerpo jurídico franquista, siendo el origen de numerosas aberraciones legales. Una de sus mayores lamentaciones fue la inconveniencia y la imposibilidad material de juzgar a todos los que potencialmente habían protagonizado el citado delito de rebelión militar.

del trigo, la tenencia de bienes agrícolas ajenos o los actos que turbaran la normalidad de la producción. Por otra parte, el Decreto número 108 de la Junta de Defensa Nacional de 13 de septiembre de 1936 declaraba ilegales los partidos y asociaciones del Frente Popular y el embargo de bienes de todos sus colaboradores. Además, la jurisdicción militar estuvo presente en la mayoría de las jurisdicciones especiales del régimen y los militares tuvieron el poder de destituir a funcionarios y empleados públicos de forma previa a la depuración administrativa oficial.

Como hemos indicado, el estado de guerra estuvo legalmente vigente hasta abril de 1948 y el Ejército pasó a ser, después de la guerra, el garante de la depuración y la estabilidad política del nuevo régimen. Así, en noviembre de 1939 se decreta la multiplicación de los Consejos de Guerra permanentes y se crean varias Auditorías provisionales en cada Región Militar. La actividad de estos Consejos de Guerra comienza a decaer en 1941, hasta que son disueltos como consecuencia de la aprobación de la Ley de 9 de octubre de 1945 que declara la prescripción de los delitos cometidos durante la guerra civil.

Una vez normalizada la situación excepcional fruto de la guerra, la jurisdicción militar continuó acumulando la capacidad de conocimiento de delitos comunes o políticos, como el delito de acaparamiento, el de elevación abusiva de precios, el de fraude en la calidad de los productos, el de provocación de accidentes ferroviarios o el de esparcimiento de rumores para elevar los precios. Esta tendencia se consagra con la Ley de Seguridad del Estado de marzo de 1941, que atribuye a la jurisdicción militar todos los delitos de carácter político⁶⁵, aumentando considerablemente sus penas.

En 1942 la justicia ordinaria recuperó alguna de sus atribuciones como símbolo de recuperación de la normalidad, como los delitos de asociación y propaganda ilegal, huelgas y suspensión de servicios públicos y atentados o amenazas a autoridades y funcionarios en tanto que no tengan carácter de rebelión, así como los abastecimientos a menos que se orienten a la perturbación de la economía nacional.

⁶⁵ Se trata de delitos citados en la nota 51.

La Ley de 2 de marzo de 1943 satisfizo la necesidad de redefinir el concepto de delito de rebelión militar que había demostrado ser excesivamente laxo y ambiguo. Esta redefinición sigue en la línea de calificar como delito de rebelión militar hechos y actuaciones políticas y, en general, *todas las transgresiones del orden jurídico que tengan una manifiesta repercusión en la vida pública*⁶⁶. Esta Ley continuaba atribuyendo plenas competencias a la jurisdicción militar, mediante el proceso sumarísimo, pero introdujo la posibilidad que ésta derivara a la justicia ordinaria⁶⁷. Aún así, la jurisdicción militar se mantuvo por muchos años por encima de la ordinaria.

Un nuevo paso se dio con el nuevo Código de Justicia Militar, promulgado el 17 de julio de 1945, que continúa atribuyendo a la jurisdicción militar los asuntos de carácter político y algunos más de carácter civil como fruto de la recuperación de la formulación de competencia en razón de materia, el lugar y la persona, recuperado del Código de Justicia Militar de 1890, anulado en la República. La jurisdicción militar pasaba a entender, pues, de los delitos cometidos en las dependencias militares, los cometidos por militares y personas asimiladas (excepto aborto, abandono de familia, atentados, injurias a militares, propaganda ilegal y fabricación de documentación o moneda, que tenían jurisdicciones especiales) y delitos de carácter político.

Así, el uso de la jurisdicción militar como instrumento de represión política fue constante durante el franquismo. Hasta el 2 de diciembre de 1963 no se creará una jurisdicción distinta para los delitos políticos no violentos, no especial sino ordinaria, el Tribunal de Orden Público, aunque siempre en condiciones de subordinación respecto a ella.

⁶⁶ Según el artículo primero de esta Ley “Serán considerados reos de delito de rebelión militar y penados con arreglo al Código de Justicia Militar o del Penal de la Marina de Guerra [...]”

1º Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, Ejércitos o Autoridades.

2º Los que conspiran por cualquier medio o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones con los mismos fines expresados en el apartado anterior.

3º Los que sin licencia o justificación posean armas o sustancias inflamables o explosivas.

4º Los que realicen actos con propósito de interrumpir o perturbar los servicios de carácter público o las vías o medios de comunicación o transporte. Podrán tener también este carácter los plante, huelgas, sabotajes, uniones de productores y demás actos análogos, cuando persigan un fin político y causen graves trastornos del Orden Público.

5º Los que atenten contra las personas o causen daños a la propiedad por móviles políticos, sociales o terroristas, cualquiera que sea el resultado y consecuencia de estos hechos.

⁶⁷ M. CARRILLO, “La legislación represiva de la dictadura franquista en el período 1939-1959”, en P. PAGÈS (dir.), op. cit., pp. 92-93.

Como podemos comprobar, el régimen franquista se construyó sobre una base represiva intensa y completa⁶⁸, que afectó directamente o indirectamente a la inmensa mayoría de los españoles. El debate sobre las cifras que pueden considerarse víctimas de la guerra civil y la posguerra sigue abierto por ser un cálculo con multitud de complicaciones y matizaciones. Actualmente se considera que, tras el asesinato de alrededor de 100.000 republicanos durante la guerra, a lo largo de la posguerra, y hasta 1949, fueron ejecutados como mínimo 50.000 personas. A estas víctimas habría que añadir a los más de 500.000 presos en las cárceles y en los campos de concentración que se amontonaban en 1939⁶⁹, por no olvidar a los que optaron o pudieron optar por el exilio, unas 450.000 personas como mínimo sólo en Francia al finalizar la guerra, de los que unos 200.000 volvieron poco después y acabaron en las prisiones o de todos los que sufrieron en silencio las continuas humillaciones y explotaciones que los vencidos experimentaban en lo que llamamos la vida cotidiana, convertida ahora para ellos en un infierno.⁷⁰

La represión alcanzó tal volumen e intensidad que pronto se evidenció como un problema grave para el nuevo régimen. Tanto desde el punto de vista económico como del político la situación se convirtió en insostenible. Económicamente, y a pesar de sus pésimas condiciones de vida y trabajo, el número de reclusos suponía un gasto

⁶⁸ Durante los días 20-23 de octubre de 1940 el jefe de las SS, Henrich Himmler, visitó España para, entre otros asuntos, tratar de la cooperación a largo plazo entre la policía española y la Gestapo, así como de la seguridad del inminente encuentro entre Hitler y Franco en Hendaya. Ante el espectáculo de continuas ejecuciones arbitrarias y la situación rebosante de las cárceles españolas quedó desconcertado. Para él era más conveniente incorporar a los trabajadores al nuevo orden que eliminarlos físicamente. P. PRESTON, *Franco "Caudillo de España"*. Barcelona, 1993, pág. 489.

⁶⁹ J. GRACIA, M. A. RUIZ, *La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana*. Madrid, 2004, pág. 45-46. El hacinamiento era tal que para estos campos de concentración improvisados se utilizaron todo tipo de espacios, como Ayuntamientos, campos de fútbol, fábricas o plazas de toros. Las cifras oficiales son elocuentes: si en 1934 había una población reclusa de 12.574 personas, en 1940 era de 270.710 personas, rebajándose a 159.392 en 1942, a 54.072 en 1945 y a 36.127 en 1950, siendo aproximadamente un 10% mujeres.

De las 270.710 personas presas en 1940, unos 125.000 estaban en situación de procesados, 84.000 en situación de penados (tenían sentencia firme) y más de 60.000 estaban detenidos. Según A. CAZORLA, *Las políticas de la victoria. La consolidación del nuevo Estado franquista*. Madrid, 2000, pp. 100-103, de entre estos presos más de 7.600 estaban condenados a muerte. A todas estas víctimas habría que añadir los miles de niños que, privados de sus padres presos, fueron ingresados en centros benéficos. En 1945 se calcula que existían unas 29.000 presos políticos, lo que suponía aproximadamente el 81,9% de los penados.

⁷⁰ J. CASANOVA (2002), op. cit., pág. 8; S. JULIÁ (coord.), op. cit., pp. 411-412. Para los aspectos menos cuantificables de la posguerra E. GONZÁLEZ, op. cit.

inasumible, a la vez que una importante mengua de mano de obra. Políticamente la evolución de la Segunda Guerra Mundial aconsejaba abrir la mano y aparentar una vuelta a la normalidad. De esta forma, el régimen franquista comenzó una serie de medidas de gracia, jamás amnistías para los vencidos, que le permitió lavar su cara en el exterior y aliviar su carga en el interior. Estas medidas instituyeron el indulto de carácter general y se acabaron convirtiendo en un instrumento represivo más en manos del Estado.⁷¹

La primera medida en este sentido fue la amnistía que, con carácter solidario, se concedió a los militares castigados por la República por actos subversivos como el intento del golpe de Estado de 1932. La segunda, concedida por Ley de 27 de septiembre de 1938, amnistiaba algunas infracciones de tipo económico.

Una vez concluida la guerra, por Ley de 23 de septiembre de 1939 se decretó la amnistía de los delitos cometidos durante el periodo republicano para únicamente aquellas personas adictas al Movimiento, con lo que se establecía un concepto de delito político claramente subjetivo y se atendía descaradamente su motivación⁷². En este sentido de protección de los adictos al régimen la Ley de 9 de septiembre de 1939 obligaba a preguntar a los inculcados de cualquier delito si pertenecían a FET de las JONS, para proceder a su expulsión en caso de ser culpable grave, o para tomar nota de dicha persona como persona de *buena conducta* a la hora de la sentencia.⁷³

Por otra parte, la Orden de 26 de abril de 1939 y la de 8 de mayo de 1939, establecen la nulidad y revisión de todos los procedimientos y actuaciones de los

⁷¹ I. BERDUGO, op. cit., pp. 127-128; S.G. PAYNE (1987), op. cit., pág. 239. A estos factores se añadieron otros como el colapso de la administración judicial y la creciente conflictividad en los centros penitenciarios, R. VINYES, “El universo penitenciario durante el franquismo”, en C.MOLINERO, M. SALA y J. SOBREQUÉS (eds.), op. cit., pp. 155-175.

⁷² I. BERDUGO, op. cit., pág. 128; J. CANO, op. cit., pág. 90. En su primer artículo esta Ley decía: *Se entenderán no delictivos los hechos que hubieren sido objeto de procedimiento criminal por haberse calificado de constitutivos de cualquiera de los delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de las leyes, tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, ejecutados desde el 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936, por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional y siempre que aquellos hechos que por su motivación político-social pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y Gobierno que con su conducta justificaron el Alzamiento Nacional.*

⁷³ J. CANO, op. cit., pág. 91.

Tribunales de la zona republicana, subrayando su carácter ilegítimo. Entre ellos se incluían numerosos pleitos de separación y divorcio que posteriormente causaron muchos problemas. Castigando la legalidad republicana se conseguía una mayor represión de los vencidos, ya que esto suponía la negación de su mundo y de su proyecto de vida.⁷⁴

El primer indulto que Franco concedió fue el del 1 de octubre de 1939, perdonando a los antiguos miembros de las fuerzas armadas republicanas que hubieran sido sentenciados a penas de menos de seis años. El volumen de causas fue tal que el 24 de enero de 1940 se crearon unas comisiones jurídicas militares especiales para revisar todas las sentencias pronunciadas hasta esa fecha, con la imposibilidad de ampliarlas.⁷⁵

A partir de principios de 1940 comenzaron a combinarse los indultos con las concesiones de libertad provisional⁷⁶. El 4 de junio de 1940 se concedió la libertad condicional a todos los presos políticos de buena conducta que cumplieran penas de menos de seis años y un día. Esta medida parece que fue insuficiente porque el 1 de octubre de 1940 se extendió la gracia a los condenados a 12 años y un día, liberando a unos 40.000 presos. Sin embargo, un Decreto de 23 de noviembre de 1940 atenuó estas concesiones de libertad condicional ante las protestas de las autoridades locales de poblaciones pequeñas, que se quejaban de los problemas sociales y de convivencia que iba a provocar la vuelta de numerosos de estos presos a sus poblaciones de origen. Hay que recordar que a finales de 1940 algunos presos comenzaron a conseguir la libertad condicional por, tal y como establecían los artículos 101 y 102 del Código Penal ordinario, haber cumplido las tres cuartas partes de su condena. La solución fue salomónica: mantener la libertad condicional a los sancionados como máximo a 12 años, pero desterrándoles por el tiempo que les reste de la mitad de la condena a 250 kilómetros de distancia de la población donde hubieran cometido el delito.⁷⁷

⁷⁴ Ibidem.

⁷⁵ G. REDONDO, op. cit., pág. 113. Parece que no afectó a un número importante de militares. Ver también S.G. PAYNE (1987), op. cit., pág. 239.

⁷⁶ Frecuentemente estos indultos significaban la libertad, pero eran seguidos por las denuncias de la población cuando los presos volvían a sus pueblos u hogares. Ver R. FRASER, *Escondido. El calvario de Manuel Cortés*. Valencia, 1986, pp. 212-214.

⁷⁷ J. CANO, op. cit., pág. 102; G. REDONDO, op. cit., pág. 114. En casos muy especiales se permitió el destierro a menos de 250 kilómetros por un Decreto de 2 de septiembre de 1941.

Finalmente, el 16 de octubre de 1942 la medida de gracia se extendió a los que cumplían condena de hasta 14 años y 8 meses⁷⁸, y con el mismo ánimo, la Ley de 30 de enero de 1943 extendió los beneficios a los condenados a penas no superiores a 20 años. También el Decreto de 29 de septiembre de 1943 lo hacía a los presos mayores de setenta años⁷⁹. El 17 de diciembre de 1943 se amplió la gracia a los condenados a 20 años y un día.⁸⁰

Para solucionar el problema que representaba la vuelta a la localidad de origen o a la vida normalizada de estos presos, y para garantizar el orden y la estabilidad del Estado, se creó por Decreto de 22 de marzo de 1943 el Servicio de Libertad Vigilada, organismo encargado de examinar su conducta político-social e, incluso, su conducta privada. No hay que olvidar que la libertad condicional suponía límites importantes al transcurso normal de la vida cotidiana y que por Decreto de 26 de abril de 1940 se había abierto la “Causa General”, que investigaba sobre los hechos delictivos cometidos durante la etapa calificada ahora como “dominación roja” y que consiguió que los hechos conocidos como el “terror rojo” perduraran en la memoria de los ciudadanos, compensó a las familias de las víctimas de esa violencia y se convirtió en el instrumento de denuncia entre los ciudadanos.⁸¹

La nueva situación generada por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el relativo fracaso de la Ley de Responsabilidades Políticas en relación a su capacidad de recaudación de dinero hizo que el siguiente paso dado por el régimen franquista fuera la Ley de 13 de abril de 1945, por la que se declaraba caduca la vigencia de la Ley de Responsabilidades Políticas en cuanto a la tramitación de nuevos expedientes, traspasando las competencias de responsabilidades civiles a la justicia ordinaria,

⁷⁸ J. CANO, op. cit., pág. 103.

⁷⁹ Ibidem.

⁸⁰ G. REDONDO, op. cit., pág. 113.

⁸¹ J. CANO, op. cit., pp. 103-104; J. CASANOVA, “Una dictadura de cuarenta años”, en J. CASANOVA (coord.), op. cit., pp. 30-31. Su denominación completa es *Causa General informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación*. Un notable estudio sobre la Causa General en I. SÁNCHEZ, M. ORTIZ y D. RUIZ, (coord.), *España franquista. Causa general y actitudes sociales ante la dictadura*. Albacete, 1993.

culminada con la Orden de 27 de junio de 1945, que eliminaba el Tribunal de Responsabilidades Políticas y declaraba archivados todos los expedientes incoados a partir de ese momento.

Por otra parte, el 17 de julio de 1945 se aprobó el Fuero de los Españoles, que en su artículo 17 define a España como un Estado de Derecho, declarando paradójicamente, como estamos comprobando, que *todos los españoles tienen derecho a la igualdad jurídica* y que *todos los órganos del Estado actuarán conforme a un orden jurídico de normas preestablecidas, que no podrán arbitrariamente ser interpretadas ni alteradas*, sin especificar el orden jerárquico de las normas jurídicas.⁸²

En un contexto de fuerte presión internacional, el gobierno franquista aprobó el Decreto de 9 de octubre de 1945, por el que se concedió el indulto total a los responsables de delito de rebelión militar, contra la seguridad interior del Estado o el orden público, cometidos hasta el 1 de abril de 1939, aunque se exceptuaba a *los que hubieran tomado parte en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios u otros hechos que, por su índole, repugne a todo hombre honrado, cualquiera que fuera su ideología*, un concepto muy impreciso que limitaba mucho en la práctica el indulto (se calcula que este decreto puso en libertad al 25% de la población reclusa⁸³).

Otras medidas en este sentido fueron el indulto general de 17 de julio de 1947, con motivo de la ratificación de la Ley de Sucesión, por la que se perdonaban los delitos cometidos hasta el 18 de julio de 1947, que supuso el indulto total para penas de hasta 30 días y de una cuarta parte de la pena para los de hasta 12 años. Por razón del Año Santo el 9 de diciembre de 1949 hubo un indulto general total para los penados de hasta dos años y de una cuarta parte de la pena para los de hasta 20 años, por delitos cometidos hasta esa fecha.

Un nuevo indulto general se produjo el 1 de mayo de 1952, en conmemoración del Congreso Eucarístico que se celebró en Barcelona, reduciendo a la mitad las penas

⁸² J. CANO, op. cit., pp. 105-106.

⁸³ I. BERDUGO, op. cit., pág. 128.

de hasta dos años, a la cuarta parte las de entre dos y seis años y una quinta parte las que llegaban hasta 25 años. El 25 de julio de 1954 hubo un indulto total para las penas de hasta 6 meses, una cuarta parte para las penas de entre 6 y 12 años, una quinta parte para las penas de entre 12 y 20 años, y una sexta parte para las penas de entre 20 y 30 años, todo con motivo del Año Compostelano Mariano⁸⁴. A todo este paquete de medidas de gracia habría que añadir la Redención de Penas por Trabajo, sistema que, bajo inspiración cristiana y patronazgo empresarial, llegó a afectar como máximo al 35,8% de la población reclusa en el año 1944.⁸⁵

Con todo, las medidas de gracia que afectan al periodo de la posguerra nos llevan al 1 de abril de 1964, cuando un Decreto de esa misma fecha ordenó borrar de los registros los antecedentes correspondientes a los delitos indultados. El 10 de noviembre de 1966 se aplicó el indulto a las responsabilidades políticas de cualquier clase, disolviéndose el Tribunal y la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas. Finalmente, el 31 de marzo de 1969, treinta años después del final de la guerra civil, se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al término de la guerra⁸⁶. En realidad, este Decreto puso verdaderamente el fin al conflicto civil.⁸⁷

Con estas medidas de gracia se obtenían reducciones de penas o incluso la libertad condicional, pero no la vuelta a una vida normalizada. A los acusados o presos se les abría a partir de ese momento otro tormento, la vida cotidiana, llena de vigilancia bajo sospecha, denuncias, explotación, abusos, miseria y falta de libertad. En palabras de E. González:⁸⁸

Para los vencidos, la posguerra fue una constante sucesión de pérdidas: pérdida de la vida, de la tierra, de la libertad, de la familia, de las ideas, del pasado biográfico, del futuro y hasta de la propia identidad. La realidad exigía el olvido de lo vivido y la

⁸⁴ V. GABARDA, *Els afussellaments al País Valencià (1938-1956)*. Valencia, 1993, pp. 54-57.

⁸⁵ G. REDONDO, op. cit., pág. 113.

⁸⁶ Ibidem, pág. 114. V. GABARDA, op. cit., pág. 33.

⁸⁷ Ver, por ejemplo, R. FRASER, op. cit., pp. 211-212. El protagonista de este libro, el alcalde republicano de Mijas, permaneció treinta años escondido y sólo se atrevió a salir a la calle con el Decreto de marzo de 1969. Aun así recibió anónimos amenazándole de muerte y tuvo que recibir protección.

⁸⁸ E. GONZÁLEZ, op. cit., pág. 88.

obsesión por la supervivencia, lo que implicaba un retraimiento a la conciencia individual, pues la escasez y el miedo no hacían posible la solidaridad. La victoria de Franco se recordaba una y otra vez, provocando la constante humillación de los vencidos, cuya resistencia parecía imposible [...]

4. La Ley de Responsabilidades Políticas.

Los antecedentes.

A finales de 1938, una vez acabada la batalla del Ebro, el ejército franquista inició su ofensiva final sobre Cataluña, que no pudo resistir el empuje de un ejército que ya se sabía victorioso. En unos 20 días cayeron Tarragona, Barcelona y Gerona, en lo que fue un auténtico derrumbe republicano. Decenas de miles de personas huyeron a pie hacia Francia arrastrando todo lo que tenían o lo que podían salvar de sus pertenencias. Las autoridades francesas tuvieron que abrir sus fronteras, previa entrega de las armas, a más de 300.000 soldados republicanos que huían de una más que previsible represión franquista. En total, se calcula que unos 500.000 españoles cruzaron la frontera, entre ellos el Presidente de la República, el Presidente del Gobierno y el President de la Generalitat de Cataluña.

Antes de salir de España, el Presidente del Gobierno, Juan Negrín, intentó llegar a un acuerdo con las autoridades franquistas en base a tres propuestas: la conservación de la integridad nacional, la libertad del pueblo para elegir su forma de gobierno y, sobre todo, garantías para que no se procediera a la represión de los republicanos. Nada más lejos de la realidad, ya que a la represión llevada a cabo durante la guerra civil en los territorios que se iba ocupando, el régimen franquista añadió la publicación sólo unos días más tarde de la Ley de Responsabilidades Políticas. Virtualmente ganada la guerra, nadie podría evitar la represión y el ajuste de cuentas programado por el bando vencedor. En un vano intento de limitar esta previsible venganza, catorce días más tarde Francia e Inglaterra reconocieron oficialmente al gobierno franquista. En menos de dos meses la guerra habría terminado definitivamente.⁸⁹

En Europa los aliados de Franco no perdían el tiempo. Tras la incorporación a Alemania de Austria en marzo de 1938 y posteriormente de los Sudetes, en marzo de 1939 Hitler anexionó Checoslovaquia, Bohemia, Moravia y parte de Lituania, mientras Mussolini ocupaba Albania en abril de 1939 y firmaba con Hitler el Pacto de Acero en

⁸⁹ J. M. SOLÉ y J. VILLARROYA, "La represión de un ejército en retirada", en S. JULIÁ (coord.), op. cit., pp. 259-264; G. JACKSON, *La República española y la guerra civil*. Barcelona, 1990, pp. 399-405; P. VILAR, *La guerra civil española*. Barcelona, 1986, pp. 88-92.

mayo de 1939. Tras la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939, sólo cinco meses después del final de la guerra civil española, se desencadenó la Segunda Guerra Mundial.

Como veremos, la Ley de Responsabilidades Políticas permitió el ajuste de cuentas con aquellas personas que habían participado activamente tanto en el desarrollo como en la defensa de la República. Sin embargo, con anterioridad a su publicación en febrero de 1939 el régimen franquista articuló los mecanismos necesarios para la represión de sus enemigos. En su vertiente económica, el franquismo utilizó todo tipo de medidas para expoliar a sus enemigos, con medidas de dudosa legalidad e inculcando el miedo a los vencidos. A las situaciones de abuso del derecho de propiedad del vencedor sobre el vencido dados en plena guerra se añadió el expolio legalmente organizado por el nuevo Estado.⁹⁰

El Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, del 13 de septiembre de 1936, ofreció la posibilidad de la incautación de bienes a todas las personas, instituciones y asociaciones contrarias al régimen franquista, que se declaraban fuera de la ley, quedándose el nuevo Estado con su propiedad⁹¹. Este Decreto se completó con otro de 10 de enero de 1937, que introdujo la teoría de la responsabilidad civil de los inculcados, que articulaba un marco estructural y un procedimiento para proceder a las incautaciones, completados con las Órdenes de instrucción de 11 de enero de 1937 y con la Orden de 24 de abril de 1937, que ratificó la propiedad estatal de los bienes incautados.⁹²

⁹⁰ F. MORENO, op. cit., pp. 343-347; S. JULIÁ (coord.), op. cit., pp. 343-350.

⁹¹ Este decreto es el punto de partida de los principales instrumentos represivos del Estado franquista, ya que permitía decretar sanciones económicas a los contrarios al régimen por su presunta responsabilidad política, a la vez que depuraba a los funcionarios. Además, se permitía a los jefes de los Ejércitos tomar las medidas necesarias para evitar la ocultación de bienes de los calificados como contrarios al nuevo Estado, mientras se ordenaba a los Juzgados de Primera Instancia el embargo provisional de estos bienes. A partir de este decreto se activaron toda una serie de medidas represivas encaminadas a garantizar el pago de estas presuntas responsabilidades. M. ÁLVARO, “*Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo*”. *La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945)*. Madrid, 2007, pp. 65-66.

⁹² F. MORENO, op. cit., pp. 345-347.

Con este cuerpo legal se organizó la represión económica legal de los desafectos al régimen franquista, iniciando una labor depuradora que culminará con la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939⁹³. Quedaba fuera de la Ley y se procedió a la incautación de sus bienes a *Izquierda Republicana, Unión Republicana, CNT, UGT, PSOE, PCE, Partido Sindicalista, Sindicalistas de Pestaña, FAI, PNV, Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Partido Galleguista, POUM, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional y cualesquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales de análoga significación a los expresados, a juicio de la Junta Técnica del Estado*, así como a todas las personas que de alguna forma se demostrara que se hubieran opuesto al régimen.⁹⁴

Según las Órdenes de 11 de enero de 1937 se concedía un plazo de quince días hábiles a las Delegaciones de Hacienda y a los Bancos y Cajas de Ahorro, y de veinte días hábiles para los Registradores de la Propiedad, para que informaran a la Comisión de Justicia sobre los bienes de los afectados y su situación. Los expedientes que se incoaban a tal efecto eran en principio individuales, aunque también podían incoarse expedientes sobre bienes de distintas personas que hubieran participado en hechos conexos. Se establecía que sólo se podía iniciar un único expediente por los mismos bienes, siendo publicados los mismos en el Boletín Oficial de la provincia en que radicasen los bienes. El inculcado debía declarar ante el Juez, quien podía citar testigos y solicitar informes sobre el mismo al Presidente de la Comisión Gestora municipal correspondiente, a la guardia civil de la localidad y a las Autoridades que el Juez estimara oportuno, decretando, si era el caso, el embargo de sus bienes.⁹⁵

Para llevar a cabo toda esta labor se creó la Comisión Central de Incautación de Bienes que, previa autorización de la Junta Técnica del Estado, se encargaba de inventariar, administrar e incautar los bienes de los inculcados. Además, nombraba las distintas Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes que, compuestas por un

⁹³ Algunos sectores dirigentes del franquismo consideraron que estas medidas eran insuficientes y que había que ir más allá en la exigencia de responsabilidades a los republicanos. À. GARCÍA, “Un aspecto de la repressió franquista de postguerra: la Ley de Responsabilidades Políticas”, en M. RISQUES y F. VILANOVA (eds.), *Les ruptures de l'any 1939*. Barcelona, 2000. Pág., 131.

⁹⁴ C. MIR et al. (1997), op. cit., pág. 67.

⁹⁵ BOE n° 83. Burgos, 11 de enero de 1937.

abogado del Estado, un magistrado de la Audiencia Provincial y presididas por el gobernador civil correspondiente, tenía básicamente tres funciones: en primer lugar, designaba a un juez instructor, entre un Jefe u Oficial del Ejército o un funcionario de carrera judicial, para que instruyera el caso y presentara un resumen de la instrucción del proceso; en segundo lugar, las Comisiones Provinciales valoraban tras el estudio de dicho resumen si existía o no responsabilidad civil del inculcado; en tercer lugar, y en caso afirmativo, emitía un informe a un alto cargo militar para que éste determinara la responsabilidad civil, fijara la sanción económica a satisfacer y ordenara definitivamente el embargo de bienes. Como se puede comprobar, la presencia e influencia del ejército, como pasará con la Ley de Responsabilidades Políticas, era determinante en la represión, papel que perduró tras el final de la guerra civil.⁹⁶ Finalmente, las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes crearon sendas Comisiones Administradoras de los Bienes Incautados, que se encargaban de recaudar las deudas de los inculcados y de remitir las cantidades al gobierno.⁹⁷

Por tanto, desde sus mismos inicios existió en el régimen franquista una clara voluntad de perseguir no sólo política sino también económicamente a aquellos que se opusieron al cambio forzoso del régimen republicano. La voluntad de reprimir duramente a sus adversarios demuestra el convencimiento del nuevo régimen que sólo por la fuerza podría imponer su proyecto político, social y económico. La persecución económica de los vencidos fue, pues, una de las dimensiones más importantes de la represión franquista, teniendo su origen en las distintas Comisiones de Incautación de Bienes y, con la guerra virtualmente ganada y los aliados fascistas en pleno apogeo en Europa, su culminación con la Ley de Responsabilidades Políticas.

⁹⁶ M. ÁLVARO (1990), op. cit., pp. 144-145.

⁹⁷ MIR et al. (1997), op. cit., pp. 67-68 ; F. SANLLORENTE, op. cit., pp. 15-18. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 65-80.

La elaboración de la Ley de Responsabilidades Políticas.

A pesar que la Ley de Responsabilidades Políticas respondía a una unívoca voluntad de castigo para todos aquellos que habían colaborado con la República⁹⁸, su proceso de gestación parece que no fue fácil y que no estuvo exento de polémica entre varios de los componentes del bando vencedor. Desde sus inicios fue el Ejército el que impuso su criterio destacando su papel preponderante en la represión de las responsabilidades políticas, anteponiéndose especialmente a las pretensiones de FET de las JONS. De hecho, su protagonismo en la estructura diseñada por la Ley es aplastante, ocupando la mayoría de los puestos clave y dejando al partido único un papel meramente testimonial.⁹⁹

Aún así hubo varios proyectos previos al proyecto de Ley que protagonizaron estos grupos interesados en influir en la exigencia de responsabilidades. Parece que estos proyectos se empezaron a gestar desde la misma formación del primer gobierno de Franco, en enero de 1938. Existe constancia que en febrero de 1938 se presentó un proyecto redactado por el Juez de primera instancia Luis Pérez del Río que ofrecía la competencia al Ejército junto con las Juntas de Incautación. Al mismo tiempo, existe constancia de la realización simultánea de otro proyecto obra de los juristas Lorenzo Martínez Fuset y Blas Pérez, asesores de la presidencia del Gobierno. En cualquier caso, estos primeros proyectos surgieron del entorno directo de Franco, con el objetivo de diseñar una salida jurídica a la incautación de bienes que permitiera ordenarla sin mermar su capacidad represiva.¹⁰⁰

⁹⁸ El espíritu vengativo de la Ley nos habla de la actitud de los vencedores sobre los vencidos y demuestra la categoría de los primeros. De hecho, existían otras posibilidades de finalizar un conflicto, como se analiza en ÀNGEL GARCÍA, “Un aspecto de la repressió franquista de postguerra: la Ley de Responsabilidades Políticas”, en M. RISQUES y F. VILANOVA (eds), op. cit., pp. 129-131.

⁹⁹ Para el proceso de creación de la Ley de Responsabilidades Políticas son fundamentales M. ÁLVARO (1990), op. cit., pp. 145-152; M. RISQUES y F. VILANOVA, op. cit., pp. 129-152; F. VILANOVA, *Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942)*. Barcelona, 1999. Pp. 445-476; y M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 81-122.

¹⁰⁰ Lorenzo Martínez Fuset era un hombre de confianza de Francisco Franco desde que éste fue destinado a la comandancia de las Canarias y se convirtió en Auditor del Cuartel General del Jefe del Estado. Blas Pérez formó parte de la asesoría jurídica del Cuartel General de Franco desde 1937 y hasta su nombramiento como Fiscal del Tribunal Supremo en 1938, siendo ministro de la Gobernación en el periodo 1942-1957. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 84-85.

En este proyecto se trataba de exigir sólo responsabilidades civiles, aunque después se añadieron las políticas a través de la afiliación a partidos, los antecedentes políticos y sociales y la resistencia pasiva al *Movimiento*. Una perspectiva más radical introducía el proyecto original de Falange Española, que incluía a las personas físicas y jurídicas, así como el castigo a los que activamente no se incorporaron al *Movimiento*. Se proponían sanciones penales relacionadas con la posición social del inculpaado y se reservaba un papel preponderante para el partido. Aún así, se proponía la exención de las personas menores de 17 años, aspecto que no recogió la Ley de Responsabilidades Políticas que, como veremos, la redujo exageradamente a los menores de 14 años.¹⁰¹

Con estos precedentes surgió el primer proyecto de Ley que dependía de la Vicepresidencia del Gobierno¹⁰², en manos del general Gómez Jordana junto con el subsecretario el Auditor de Brigada del Cuerpo Jurídico Militar Cirilo Genovés, que otorgaba plenamente al Ejército la potestad de las responsabilidades Políticas a través de la creación de Tribunales exclusivamente militares, a la vez que defendía la pena de pérdida de la nacionalidad como medida de seguridad nacional. Este proyecto introdujo la retroactividad de la Ley al 1 de octubre de 1934¹⁰³, así como la ilegalidad de los partidos simpatizantes del Frente Popular, los separatistas y los contrarios al golpe de Estado franquista.¹⁰⁴

¹⁰¹ M. RISQUES y F. VILANOVA (eds.), op. cit., pp. 131-132.

¹⁰² En el proyecto que fue remitido al Consejo de Ministros no participaron Lorenzo Martínez Fuset ni Blas Pérez.

¹⁰³ En el proyecto de Ley no se fijaba límite temporal a la retroactividad de la Ley, lo que hubiera significado, como los mismos ponentes reconocían, su extensión al menos hasta 1812, ya que consideraban a la Constitución de Cádiz como un *hito generador de la ruptura de nuestra tradición política y del afrancesamiento y liberalización subversiva de nuestra Patria, y premisa doctrinal de la que arranca, lógicamente, a través de un siglo, el proceso desintegrador que nos ha conducido a las tristes consecuencias que hoy estamos padeciendo*. Al final, y fruto de la presión de algunos ministerios, especialmente del de Justicia, la Ponencia propuso la retroactividad desde octubre de 1934, por considerar que a partir de esta fecha quedaba perfectamente definido quién pertenecía a España y quién a la *anti-España*. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 100-101.

¹⁰⁴ Según M. Álvaro el general Gómez Jordana ejercía en el gobierno funciones de coordinación, sin interferir en el poder de Franco y Serrano Súñer, que eran los que realmente mandaban y, por tanto, los que realmente tuvieron un control directo sobre el proyecto. Se conoce poco sobre la comisión redactora del proyecto, en el que participaron el citado Auditor de Brigada Cirilo Genovés, el ministro de Hacienda Andrés Amado y el jurídico militar Miguel Gamba. Ibidem, pág. 86.

Este proyecto fue repartido entre los ministerios para su evaluación durante el verano de 1938, generando una intensa polémica entre distintas posturas¹⁰⁵. Algunos ministerios, como los de Hacienda y Obras Públicas, se mostraron completamente a favor del proyecto, pero otros fueron muy críticos. Desde el ministerio de Educación se advirtió de la peligrosidad de abarcar a un número excesivo de personas responsables políticamente en el contexto de una guerra que todavía no había acabado y los numerosos problemas prácticos que ello representaría, se criticaba aspectos como la sanción a aquellos que habían retrasado su incorporación a la zona franquista desde el extranjero y se advertía del peligro que para el poder suponía una Ley de esta naturaleza¹⁰⁶. El ministerio de Justicia, ocupado por tradicionalistas y encabezado por el Conde de Rodezno, sugirió que no se castigara la simple adhesión, sino que el peso de la culpa recayera en ésta junto con actuaciones concretas u omisiones graves, es decir, que el peso de la Ley se centrara en acciones objetivas y no en aspectos subjetivos, como los meramentos políticos¹⁰⁷. A pesar de todo, la mayoría de las críticas y observaciones no fueron tenidas en cuenta y, tras advertir de la disparidad de opiniones, la Ponencia redactora rechazó todas las enmiendas formuladas por los ministerios que modificaban sustancialmente el proyecto.

¹⁰⁵ De hecho, existe un documento que valora las observaciones que realizaron los ministerios y que comienza así: *Estudiadas con el mayor detenimiento las observaciones que se han formulado por los distintos Ministerios al Proyecto de Ley denominado por la Ponencia de "Responsabilidades Políticas", lo primero que llama la atención es el fenómeno no por previsto menos significativo, de la disparidad de juicios que ha producido.* Por poner un ejemplo, en este documento se explica que desde el Ministerio de Organización y Acción Sindical se consideraban excesivos los plazos que se concedía a los inculpados para comparecer y proponer pruebas de descargo, mientras al Ministerio de Justicia estos plazos le parecían "angustiosos". "Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. Réplica a las observaciones formuladas por distintos ministerios", en F. VILANOVA, op. cit., pág. 445.

¹⁰⁶ El ministro de Educación Nacional, Pedro Sainz Rodríguez acabó calificando el proyecto de inoportuno, contraproducente y carente de sentido político. Este ministro era partidario de abandonar la Ley y crear la figura delictiva imprescriptible de alta traición, con unas sanciones ejemplarizantes. La respuesta de la Ponencia redactora fue que la Ley era oportuna, necesaria y urgente por el estado de guerra y por la necesidad de poner orden en los procedimientos represivos en funcionamiento. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 88.

¹⁰⁷ El Ministerio de Justicia fue uno de los más críticos con el proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. A las críticas reseñadas se unieron otras centradas en su excesiva extensión y en el castigo a las ideas políticas en el plano meramente subjetivo, lo que les llevó incluso a cuestionar el nombre de la Ley, que proponían se llamara *Ley de Reparaciones Civiles al Estado Nacional*, porque su función creía que era, más que castigar actitudes políticas, garantizar las reparaciones. En su escrito se decía que el título de Ley de Responsabilidades Políticas *rezuma represalia o paganía*. Esta enmienda fue desestimada por ser considerada demasiado "liberal". F. VILANOVA, op. cit., pág. 447. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 89.

Como ha explicado M. Álvaro, las discrepancias de los ministerios en distintos aspectos de la Ley no son más que la expresión de las diferencias políticas que existían en el seno del primer gobierno franquista. Los aspectos que centraron las discrepancias fueron los plazos para la comparecencia de los inculpados, la proposición de las pruebas de descargo o la extensión del arbitrio judicial. Sin embargo, el aspecto fundamental fue el de la composición de los Tribunales, auténtica clave del control de la jurisdicción.¹⁰⁸

Sobre todo este proyecto acabó siendo criticado por varios ministros falangistas, como el Secretario General del Movimiento y ministro de Agricultura Raimundo Fernández Cuesta y el ministro de Organización Sindical Pedro González Bueno, que reclamaban para FET de las JONS el protagonismo en la ejecución de la Ley¹⁰⁹, a la vez que criticaban aspectos concretos como la referencia a la pérdida de la nacionalidad española.

El debate sobre las competencias fue solucionado salomónicamente por Franco tras el Consejo de Ministros creando los Tribunales Mixtos, en los que participan el Ejército, el partido y la Justicia ordinaria¹¹⁰. Así, se conseguía un cierto equilibrio entre

¹⁰⁸ M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 88-90.

¹⁰⁹ Para los ponentes que elaboraron la Ley de Responsabilidades Políticas *no es posible desconocer que la actuación judicial de FET y de las JONS se miraría por muchos con enorme recelo, pues no faltarían quienes dijeran, aunque fuese injustamente, que sus fallos se inspiraban en la pasión y que utilizaban la función pública que se les encomendaba como formidable arma política para fines de captación o de represalia exclusivamente*. “Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. Réplica a las observaciones formuladas por distintos ministerios”, en F. VILANOVA, op. cit., pág. 458.

¹¹⁰ La presencia de jueces profesionales se aceptó como forma de introducción de algún elemento de normalidad en estos Tribunales Especiales. Por otra parte, esta estrategia de repartir la presencia de las distintas fuerzas vivas del régimen fue típica en Franco para lograr un equilibrio entre ellas y salir él mismo reforzado. M. LANERO, op. cit., pág. 332.

La Ponencia redactora del proyecto de Ley propuso que fuera el Ejército el que formara los Tribunales encargados de enjuiciar las responsabilidades políticas, lo que despertó, como hemos visto, los recelos del FET y de las JONS, que reclamaba para sí esta competencia. Por otra parte, hay que recordar que la Ley de Responsabilidades Políticas suponía un complemento de la actividad represora que el mismo ejército estaba llevando a cabo a través de las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes, con lo que todo parecía indicar que lo lógico sería que el Ejército continuara con una función que ya ejercía. Por otra parte, se indicaba que el *Glorioso Movimiento Nacional* era iniciativa y obra del Ejército, a las que posteriormente se adhirieron *españoles dignos de tal nombre*, en referencia a los falangistas. El Ejército era, con todo, la única institución que se consideraba que trascendía las diferencias entre partidos. Además, se defendía que la justicia militar era más rápida, rígida y expeditiva que la ordinaria. Por si faltaran argumentos, la Ponencia redactora alude a insinuaciones del mismo Franco para ofrecer el protagonismo de la nueva jurisdicción especial al Ejército. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 91-94

La confección de los Tribunales mixtos fue la única modificación importante que se introdujo en el proyecto original, y partió del mismo Francisco Franco. Las características y contenido del proyecto de la Ley de Responsabilidades Políticas se pueden consultar en Ibidem, op.cit., pp. 90-91.

las distintas familias del régimen¹¹¹, se hacía partícipe a la justicia ordinaria en una jurisdicción especial represiva¹¹² y se aparentaban ciertas garantías procesales para los inculcados. Como veremos, las tres instancias participarán en la aplicación de la Ley, aunque con preponderancia del Ejército. Lo que sí parece clara es la vinculación directa de la nueva jurisdicción especial con la Jefatura del Gobierno, a través de su vicepresidencia, lo que implicaba un control directo de Franco y, por otro lado, la garantía de que el Ejército conservaría su independencia en este ámbito represivo.¹¹³

Las críticas posteriores a la Ley de Responsabilidades Políticas también procedieron del mismo Ministerio de Justicia ante las numerosas aberraciones que introducía, aunque no supusieron ningún cambio. Éstas se centraban en el procedimiento (plazos para la defensa exigüos, confusión e indefinición en la correlación entre conducta sancionable y pena correspondiente, inexistencia de recurso en caso de ausencia de unanimidad en el fallo) y en las sanciones (castigo de la simple militancia en partidos o sindicatos, primacía de la sanción económica a favor del Estado, etc.).¹¹⁴

Nació así la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, creando una jurisdicción especial que, con la participación del Ejército, de FET de las JONS y de la justicia ordinaria, con la colaboración del personal político, de la guardia civil y de la Iglesia, y utilizando como base normativa el Código de Justicia Militar por tratar los delitos políticos como delitos de rebelión militar, emprendió la tarea de investigar y juzgar a todos los ciudadanos para exigirles responsabilidades por sus actuaciones políticas pasadas. Tras su publicación, se dio un plazo de seis meses para la puesta en

¹¹¹ Esta política aparentemente indefinida, como hemos dicho, era una estrategia de Franco para conseguir un equilibrio entre las distintas fuerzas que sostenían el nuevo régimen, una estrategia que aplicó también en su política internacional ante un contexto cambiante. Sobre este tema ver P. PRESTON, *Las políticas de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX*. Barcelona, 1997.

Sin embargo, hay que matizar este aparente equilibrio, ya que en realidad se otorgaba los puestos clave de la jurisdicción al Ejército. La constitución de Tribunales mixtos ya se había realizado en Italia y Alemania. Sin embargo, el caso español se distinguía por el predominio no del partido único, sino del Ejército. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 94-96.

¹¹² Como veremos, la justicia ordinaria participará en la parte económica y administrativa del proceso legal propio de la Ley.

¹¹³ M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 96-97.

¹¹⁴ M. LANERO, op. cit., pág. 331.

marcha de los nuevos juzgados, que tuvieron dificultades de implantación por los problemas que generaba la desmovilización de la población tras el final de la guerra, problemas que se intentaron solucionar con la Ley de 8 de agosto de 1939 que designaba con carácter de urgencia a jefes u oficiales del Ejército como jueces y a suboficiales y tropa con una experiencia mínima de seis meses en tareas como secretarios¹¹⁵. Comenzaba así la ingente tarea de investigar a gran parte de la población y de liquidar culpas.

La Ley de Responsabilidades Políticas, herramienta para el castigo.

Antes de abordar la Ley de Responsabilidades Políticas es recomendable, siguiendo a Conxita Mir¹¹⁶, tener presente una serie de consideraciones previas para un provechoso análisis histórico. Hay que tener en cuenta que vamos a analizar una norma jurídica que, como tal, es expresión de una clara voluntad política, que hay que valorar en sus intenciones y objetivos, pero que esa expresión de una voluntad política tuvo sus distorsiones a la hora de aplicarse en la realidad. De esta forma, se hace necesario un primer estudio teórico para después poder valorarlo y contrastarlo con los datos que las fuentes que hemos analizado en esta investigación nos han ofrecido y que nos permitirán valorar cómo esta Ley fue utilizada desde el poder como herramienta represiva ante la sociedad y hasta qué punto afectó a la vida de los ciudadanos. A la primera de estas tareas consagraremos las siguientes páginas.

La Ley de Responsabilidades Políticas expone los puntos básicos de su filosofía en su Preámbulo¹¹⁷. Ante el continuo avance del ejército franquista sobre Cataluña las autoridades franquistas empezaron a tener claro que la guerra civil estaba ganada, por lo que se dedicaron lenta y pacientemente a acabar la guerra asegurándose la detención y represión del mayor número de republicanos. Esta certeza hizo que el gobierno franquista sacara a la luz la Ley de Responsabilidades Políticas que había diseñado

¹¹⁵ M. ÁLVARO (1990), op. cit., pag. 155.

¹¹⁶ C. MIR et al., (1997), op. cit., pp. 9-10

¹¹⁷ La Ley de Responsabilidades Políticas fue publicada en el BOE número 44 de 13 de febrero de 1939. Ver el Preámbulo en el Apéndice Documental.

anteriormente¹¹⁸ y cuyo proceso de elaboración, de un año de duración, ya ha sido comentado.

La intención de las autoridades franquistas era crear un nuevo orden en el cual los antiguos republicanos no tenían lugar o si lo tenían era después de haberse arrepentido públicamente y haber pagado por unos actos que a partir de ese momento pasan a ser considerados como delictivos. De hecho, una de las características de esta jurisdicción especial será la de la infracción del principio *nullum crimen sine lege*, por el que no se puede castigar a una persona por un hecho que cuando fue cometido no era delito. Actos como participar en huelgas o manifestaciones, pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y, en general, haber mantenido una postura pública favorable al régimen republicano pasaron a convertirse en delito de *subversión roja*¹¹⁹. El criterio era muy amplio, ya que se establecía que se podían derivar responsabilidades tanto de actos como de omisiones graves (por cierto, ampliamente desarrollados en la Ley, incluso con distinta gradación de responsabilidad), con lo que la pasividad o las medias tintas podían constituir también delito. Con ello se demuestra la intención de depurar las

¹¹⁸ Hay que considerar que esta Ley fue aprobada el 9 de febrero de 1939, trece días después de la entrada del ejército franquista en Barcelona, cinco días después de la ocupación de Gerona y en plena desbandada de los republicanos, militares y civiles, hacia la frontera francesa ante la inminente ocupación total de Cataluña por las tropas franquistas, que se consiguió el 10 de febrero de 1939, capturándose a unos 108.000 soldados republicanos que no pudieron escapar a Francia. En menos de dos meses la guerra acabaría definitivamente. Como veremos, la Ley de Responsabilidades Políticas no tendrá como requisito la presencia física del inculcado e incluirá la posibilidad de sancionar a los familiares de los perseguidos. E. GONZÁLEZ, op. cit., pág. 16.

¹¹⁹ Es importante aquí reseñar la influencia del pensamiento del jurista y militar Felipe Acedo, para quien las elecciones de febrero de 1936 fueron ilegales por romper con las normas constitucionales republicanas, lo que le sirvió de excusa para considerar fuera de la Ley y como delito todos los actos y manifestaciones del gobierno del Frente Popular, siendo considerados una prolongación de la tentativa revolucionaria de octubre de 1934. Esto le permite considerar como *subversión* todos los actos cometidos por las fuerzas políticas, sindicales y sociales de izquierda desde octubre de 1934, con lo que, además de legitimar la rebelión del Ejército contra la República, se consuma una auténtica inversión de la realidad que tendrá importantes efectos prácticos, entre ellos, como veremos, la retroactividad de la Ley hasta el 1 de octubre de 1934. Sobre esta base los ideólogos del régimen franquista se esforzaron por presentar una realidad en la que serían los republicanos quienes se basarían en la ilegitimidad al oponerse al ejército garante del orden legítimo. Incluso se llegó a formar en diciembre de 1938 una Comisión para “instruir las actuaciones encaminadas a demostrar plenamente la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República española en 18 de julio de 1936”, formada por veintidós “hombres buenos”, entre los que se encontraban juristas, ex ministros monárquicos y primorriveristas y altos cargos de las instituciones culturales más importantes de España. Esta tesis fue propagada tanto a nivel interior como exterior y todavía hoy es invocada por la historiografía revisionista sobre el franquismo. F. ESPINOSA “Fundamentos ideológicos de la represión”, en J. CASANOVA (coord.), op. cit., pp. 95-102. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 49-52.

culpas de una gran parte de la población¹²⁰. Se perseguía, por tanto, a todos aquellos que de alguna forma no habían favorecido activamente el triunfo de los rebeldes contra el régimen republicano.

Esta gran empresa tenía una doble dimensión. En primer lugar, se trataba de castigar. Como veremos, la Ley de Responsabilidades Políticas establece una serie de sanciones para todos aquellos que se opusieron activa o pasivamente al *Movimiento* que son fundamentalmente de carácter económico¹²¹, acompañadas de otras sanciones, calificadas como *medidas de seguridad*, que consistían en la inhabilitación, el alejamiento geográfico o la pérdida de nacionalidad, todas ellas aplicadas con carácter de urgencia. Esta dimensión no carece de importancia, ya que uno de los objetivos prioritarios que se buscaba era, precisamente, el de castigar ejemplarmente a los republicanos.

En segundo lugar, se trataba de construir una nueva realidad social sobre la base de la represión. Se presentaba esta Ley como parte integrante de un nuevo modelo de justicia, del que ya hemos visto sus características básicas, que primero castigaba como medida de justicia social y después trataba de integrar al castigado, como si hubiera pasado por una especie de purgatorio, con lo que se incurría en una serie de contradicciones cínicas como son la invitación a un nuevo orden social al reprimido o a un nuevo orden económico al multado, confiscado y/o inhabilitado y/o desterrado. En un contexto publicitado como de presunto desequilibrio entre la enorme pena cometida y la modesta sanción impuesta, se presentaba como presunta protección económica de los afectados por la Ley, y de *humana moderación*, el hecho de buscar fórmulas para que éstos pudieran hacer efectiva su sanción y la posibilidad, previo pago de sus culpas,

¹²⁰ Ya vimos cómo una de las grandes lamentaciones de Felipe Acedo era la imposibilidad práctica de investigar a todas las personas que merecían serlo. ¿Se podría investigar a los más de 5.000.000 de votantes del Frente Popular y las opciones nacionalistas vascas en las elecciones de febrero de 1936, a los que había que sumar los anarquistas y las opciones de centro y centro-izquierda?

¹²¹ Se consideraba que las personas afectas al Frente Popular eran responsables de los presuntos daños que se habían cometido contra la nación desde octubre de 1934, creando una situación calificada como “estado anárquico y tiránico” que presuntamente obligó al alzamiento franquista y causó la destrucción del país por el desarrollo de la guerra. Los autores de la Ley de Responsabilidades Políticas consideraron que la forma más adecuada para la compensación por estos daños debía ser una sanción económica individual, acorde al grado de responsabilidad de la actuación pasada del individuo procesado. En este proceso, el Estado asumiría el papel de acusador de la multitud de individuos afectados. N. IBÁÑEZ, “Prácticas de depuración y expolio en la jurisdicción especial durante la guerra y la posguerra en Álava”, en I. GIL BASTERRA, op. cit., pp. XXI-XXII.

de la integración en la nueva sociedad. Y es que el franquismo lo que buscaba con esta Ley no era únicamente que los republicanos pagaran la reconstrucción material después de la guerra, sino algo más: la *reconstrucción espiritual* de los españoles, una reconstrucción que sólo se conseguiría con la purga de los elementos republicanos más recalcitrantes e indeseables¹²² y que llevaría a España al lugar que le correspondía en la historia.

Conocidos los objetivos, faltaban los medios. Para llevar a cabo esta ingente y urgente tarea de búsqueda y pago de responsabilidades la Ley de Responsabilidades Políticas creó una nueva jurisdicción especial¹²³ compartida entre tres de las fuerzas vivas del *Movimiento*: el Ejército, FET de las JONS y la Magistratura. Estas tres instituciones compartieron la responsabilidad de “limpiar” España de republicanos y hacerles pagar sus culpas, aunque como veremos, otras instituciones, como la Guardia Civil, la Iglesia y los poderes públicos locales, colaboraron en este sentido. El papel preponderante lo ejercerá el Ejército, que ocupará los cargos de mayor relevancia de la estructura de Tribunales Especiales que crea esta Ley.

En definitiva, y tal y como la describe su Preámbulo, esta Ley fue fruto de una *madura reflexión* por parte de las autoridades franquistas, que la concibieron como uno de los pilares básicos a partir del cual lograr la reconstrucción de España después de la guerra civil y la experiencia republicana. Por ello hemos de considerar sus elementos básicos, la persecución, la represión y la constante violación del Derecho tradicional, como fundamentales para la caracterización del nuevo régimen franquista. En la práctica lo que se buscaba era el castigo, tanto a nivel económico como social, de los

¹²² Esta purga se realizaría a través de la eliminación física de los casos más graves e irrecuperables, y la reinserción, previo pago de sus penas según su responsabilidad, del resto de casos. En este sentido, no hay que olvidar que la Ley de Responsabilidades Políticas en realidad lo que viene es a completar la acción represiva procedente de otros ámbitos, como la de los Consejos de Guerra, centrándose en penas especialmente orientadas en el terreno económico. La purga es tan completa que se posibilitará incluso el juicio de personas fallecidas, muchas veces fusiladas por motivos políticos, siendo las familias las que afronten la *dimensión económica* del pago por su responsabilidad política. Como comprobaremos, en esta acción de purga y limpieza social se le concederá un papel activo a las instituciones y a los ciudadanos, invitados a realizar todo tipo de denuncias sobre sospechosos, convirtiendo esta tarea en una misión colectiva.

¹²³ Se trata de una jurisdicción especial que utiliza como supletorios el Código de Justicia Militar para la tramitación del expediente de responsabilidad, y la Ley de Enjuiciamiento Civil para la tramitación de la pieza separada de carácter económico y la reclamación de terceros (artículo 87 de la Ley de Responsabilidades Políticas).

simpatizantes republicanos, su anulación completa y su expolio en beneficio del nuevo Estado franquista.

En cuanto a su contenido, la Ley de Responsabilidades Políticas comienza en su artículo 1º con la aclaración de quién está inmerso en su ámbito de acción. Se declaran sujetos responsables políticamente en primer lugar a aquellas personas físicas y a aquellas organizaciones que ayudaron a configurar y protagonizaron la última etapa republicana, estableciendo una retroactividad que se remonta al 1 de octubre de 1934, en lo que supone una de sus grandes aberraciones legales¹²⁴. En segundo lugar, también lo son todos los que se han opuesto o lo están haciendo¹²⁵ al nuevo Estado franquista bajo cualquier forma, ya que se incluye tanto actos concretos como *pasividad grave*, lo que supone una extensión enorme de la sospecha y la presunta culpabilidad¹²⁶. Por tanto, únicamente podría considerarse libres de toda sospecha aquéllos que pudieran demostrar una adhesión pública y activa al bando franquista.¹²⁷

Esta definición de los presuntos culpables necesitaba una mayor precisión para no convertir a la Ley en una herramienta de tan vasto alcance que quedara sin aplicación práctica. Recogiendo la legislación franquista anterior se incluye lo establecido en el Decreto número 108 de 13 de septiembre de 1936 por el que se ilegalizó a los partidos integrantes y simpatizantes del Frente Popular y las organizaciones nacionalistas, a las que se añadió todas las que de alguna forma se habían opuesto al franquismo.

¹²⁴ Ya hemos comentado el origen de la concepción política que basaba la retroactividad de las responsabilidades a esta fecha y que permitía, no sin forzar el correcto sentido del concepto, tratar a sus protagonistas como “rebeldes”, al mismo tiempo que legitimar la subversión militar del 18 de julio de 1936. En esta misma línea, Máximo Cajal en su análisis de la Ley considera un acierto la retroactividad porque si no la exigencia de responsabilidades no tendría límites y esto llevaría a “una perturbación general de la vida española”, en M. CAJAL, *La Ley de Responsabilidades Políticas. Comentada y seguida de un Apéndice de disposiciones legales y formularios más en uso*. Madrid. Gráfica Ediciones, 1939, pág. 18. Según los autores de la Ley, *desde aquella época [1 de octubre de 1936] quedaron perfectamente definidos quienes representaban a España y quienes a la anti-España*. “Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. Réplica a las observaciones formuladas por distintos ministerios”, en F. VILANOVA, op. cit., pág. 448.

¹²⁵ No hay que olvidar que la Ley se publicó cuando la guerra todavía no había finalizado.

¹²⁶ Para M. Cajal la simple pasividad en estos momentos ya debe calificarse como grave. M. Cajal, op. cit., pág. 18. Sin embargo, la pasividad es un concepto legal relativo y fácilmente manipulable.

¹²⁷ Como comprobaremos la Ley de Responsabilidades Políticas fomenta e invita a la denuncia entre los ciudadanos. En este contexto, en la práctica todo expedientado pasaba a ser considerado culpable mientras no se demostrara lo contrario, dificultándose con distintos mecanismos la presentación de pruebas. M. Lanero, op. cit., pp. 329-330.

El artículo 2º de la Ley especifica cuáles son estas organizaciones para que no haya ningún tipo de duda: Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional del Trabajo, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Sindicalista de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Partido Galleguista, Partido Obrero de Unificación Marxista, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional, Partido Socialista Unificado de Cataluña, Unión de Rabassaires, Acción Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña y Estat Catalá, a los que se añadió todas las Logias masónicas. Si esta lista ya era de por si extensa, este artículo añade a *cualesquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales o de análoga significación a los expresados*, con lo que las autoridades franquistas se cubrían las espaldas a la hora de poder exigir responsabilidades a todo tipo de organizaciones¹²⁸.

Basándose nuevamente en el Decreto anteriormente citado se establecía que estas organizaciones declaradas ilegales perdían automáticamente todos sus derechos y todos sus bienes, que pasan a manos del Estado franquista. De esta forma, la Ley no hace más que ratificar el conjunto de medidas legales que en el sentido de represión económica fue articulando el franquismo desde sus orígenes.

La relación de organizaciones declaradas fuera de la ley y objeto sancionable por esta Ley quedaba fijada suficientemente, por lo que el artículo 4º especifica los casos en los que se pueden exigir estas responsabilidades a nivel personal e individual. La Ley establecía 17 casos en los que las personas podían incurrir en responsabilidades políticas, llamando la atención el hecho que las sanciones son también individuales y que en ningún momento se tiene en cuenta la voluntariedad o involuntariedad de los hechos¹²⁹. Los distintos casos que se recogían eran:¹³⁰

¹²⁸ En esta relación los ponentes creadores de la Ley no incluyeron a la Lliga porque no formó parte del Frente Popular, ni al Partido Centro, aunque especificaron que sus afiliados se hallaban incursos en la Ley casi en su totalidad. “Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. Réplica a las observaciones formuladas por distintos ministerios”, en F. VILANOVA, op. cit., pp. 449-450.

¹²⁹ Retomamos nuevamente en este punto el pensamiento del militar y jurista Felipe Acedo, para el que los actos juzgados constituían sin duda delito de rebelión militar, en el que lo importante era la

1. Haber sido condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión militar¹³¹. Como comprobaremos en el posterior análisis normalmente se trataba de soldados milicianos o republicanos o personas que públicamente se habían distinguido en la vida republicana.
2. Haber formado parte de la dirección de las organizaciones declaradas ilegales o haberlas representado pública o privadamente¹³². Se trataba, pues, claramente de perseguir a los dirigentes de estas organizaciones.
3. Estar afiliado a las organizaciones declaradas ilegales de forma mantenida y hasta el 18 de julio de 1936. Sin embargo, la Ley hace una confusa distinción entre los afiliados a los partidos políticos, considerados todos como responsables políticamente, y los afiliados de sindicatos, entre los que se distingue los “simples afiliados”, excluidos de responsabilidad, y “más que simples afiliados”, con responsabilidad exigible.¹³³

trascendencia social del delito y no había que tener en cuenta la voluntariedad o no del agente, ni grados ni atenuantes. En España había, simplemente, buenos y malos, y cada uno debía ser tratado según su condición. J. CASANOVA (coord.), op. cit., pp. 99-101.

¹³⁰ Muchos de los supuestos eran muy generales e imprecisos, lo que suponía que podían implicar a un gran número de personas. Según la Ponencia esta circunstancia fue intencionada, ya que se pretendía que el gobierno pudiera regular la intensidad de su acción represiva de acuerdo con criterios e intereses políticos. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 102.

¹³¹ El 28 de julio de 1936 la Junta de Defensa Nacional aprobó un Bando por el que se implantaban los Juzgados Militares encargados de juzgar a todos los que activamente se opusieron al nuevo orden siguiendo el Código de Justicia Militar. La gran mayoría de ellos fueron condenados por rebelión, adhesión, auxilio, inducción o excitación a la rebelión, o por traición a las nuevas autoridades y éstas son las personas a las que posteriormente se les exigirá responsabilidades políticas, independientemente de la condena que les impuso el Tribunal Militar. Por tanto, la condena por responsabilidades políticas se añadía, o si se prefiere, complementaba, a la sanción militar (fundamentalmente era una sanción económica). Para llevar a cabo este proceso los Tribunales Militares debían remitir las sentencias firmes al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas competentes para que éste estableciera la correspondiente sanción económica. De esta forma, y como hemos dicho anteriormente, se violaba el principio *non bis in idem*, por el que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Por otra parte, según el Código de Justicia Militar en su artículo 237 regulaba el delito de rebelión militar, al que correspondía una pena de doce a veinte años, y en su artículo 240 regulaba el delito de adhesión a la rebelión, al que correspondía la pena de muerte o una de entre veinte a treinta años. El delito de adhesión a la rebelión se relacionaba con una participación decidida a favor de la República, el de auxilio a la rebelión a la cooperación con la misma y el de excitación a la rebelión se aplicaba a los simples simpatizantes que no habían tomado parte físicamente. M. ORTIZ, op. cit., pág. 370.

¹³² No se especifica desde cuando, aunque M. Cajal entiende que desde la formación del Frente Popular. M. Cajal, op. cit., pág. 26.

¹³³ Como veremos más adelante este supuesto traerá de cabeza a los miembros de los Tribunales de Responsabilidades Políticas por su falta de precisión y confusión, porque ¿cómo determinar si una persona es un *simple* afiliado o *más que un simple* afiliado? En el fondo subyace la consideración que los simples afiliados fueron manipulados por las mentes perversas de los dirigentes de partidos y sindicatos,

4. Haber ocupado cargos o cumplido misiones por nombramiento del Frente Popular y sean considerados de *calificada confianza* del mismo, así como haber continuado ejerciendo cargos bajo dicho gobierno. Se entiende, por tanto, que en este caso la responsabilidad se remonta al 16 de febrero de 1936, fecha de las elecciones que dieron el poder al Frente Popular.
5. Haber ayudado de cualquier forma, y sobre todo económicamente, al Frente Popular, de forma libre y voluntaria, con la intención de favorecerlo.
6. Haber sido candidato del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, incluyendo los que luego fueron ministros, altos cargos y todos los que participaron en dichas elecciones, independientemente de si fueron elegidos o no: *por el solo hecho de ser candidatos*¹³⁴. Se incluye también a todos los que participaron activamente en la política a favor de dicho gobierno.
7. Los diputados no pertenecientes al Frente Popular que “colaboraron” en algún momento, votando afirmativamente o absteniéndose, para que las medidas propuestas por el Frente Popular salieran adelante.¹³⁵

por lo que es a éstos a los que especialmente hay que exigir responsabilidades. En el proceso de elaboración de la Ley el Ministerio de Justicia propuso la eliminación de este supuesto por su falta de concreción y objetividad. En el mismo sentido opinaron los Ministerios de Industria y Comercio, Agricultura y Organización y Acción Sindical. Finalmente la ponencia redactora de la Ley defendió este supuesto ya que *precisamente por el gran número de afiliados a esos partidos pudieron los mismos adquirir la preponderancia a que llegaron en 1936, y además la consideración de que tal afiliación suponía siempre una ayuda económica mediante la cotización que se lleva a cabo; [la ponencia] estimó político diferenciar a aquellos que cedieron a las coacciones en muchas ocasiones, afiliándose a tales partidos, de aquellos otros que resistieron valientemente y no realizaron tal filiación. También se tuvo en cuenta [...] la fecha de la inscripción, por estimar que a partir del 18 de julio de 1936 las inscripciones en los partidos marxistas no podían ser estimadas como voluntarias, sino más bien como medio de defensa personal [...]*. “Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. Observaciones formuladas por distintos Ministerios en relación con el artículo 4º” y “Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. Réplica a las observaciones formuladas por distintos ministerios”, en F. VILANOVA, op. cit., pág. 460 y pp. 471-472. Según M. Álvaro, la intención de la Ponencia que redactó la Ley de Responsabilidades Políticas era evitar la responsabilidad de aquellas personas que se vieron forzadas durante la guerra a afiliarse a estas organizaciones. Sin embargo, por razones políticas se prefirió no ofrecer ninguna tabla de salvación a los afiliados de este partido, lo que posteriormente generó numerosos problemas. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 103.

¹³⁴ Para M. Cajal “altos cargos” hace referencia a los que fueron nombrados por el gobierno y se retiraron con él, concretamente Subsecretarios, Directores Generales, Gobernadores Civiles, Representante del Estado en la Campsa, etc. M. Cajal, op. cit., pág. 29.

¹³⁵ En la práctica esto supone una reevaluación de toda la actividad parlamentaria de 1936. Estos diputados son acusados de traición a sus electores, ya que innecesariamente habrían posibilitado la convocatoria de unas elecciones anticipadas que otorgaría el poder a los partidos del Frente Popular, tras la destitución fraudulenta de Alcalá Zamora. En el proceso de elaboración de la Ley el Ministerio de Industria y Comercio criticó la vaguedad de este supuesto y lo consideró peligroso socialmente. En el fondo se trataba de otorgar legitimidad a un discurso montado por la derecha por el que el Frente Popular habría llegado al poder gracias al fraude electoral, por lo que su gobierno sería ilegítimo. “Proyecto de Ley

8. Pertenecer o haber pertenecido a la Masonería, excepto los que fueron expulsados de la misma o los que pidieron su baja voluntariamente por no participar ni de sus principios ni de sus fines.
9. En este noveno supuesto de responsabilidad se hace referencia directa a la actuación de los ciudadanos durante la guerra civil. Así, se considera que se debe investigar las responsabilidades políticas de todo aquel que hubiera formado parte de cualquier tipo de tribunales populares que juzgaron a personas simpatizantes del bando franquista; de todo el que hubiera denunciado a personas adictas a las fuerzas rebeldes; y de todo el que hubiera participado en incautaciones de este tipo de personas (excluyendo a todos los que demostrasen que hubieran actuado por obligación de su cargo y sin iniciativa propia).
10. Haber excitado a cometer los hechos anteriormente citados por cualquier medio público o privado siempre que estén dirigidos a más de una persona.¹³⁶
11. Haber protagonizado cualquier acto que pueda considerarse como provocador de la sublevación del ejército contra la República.¹³⁷
12. Haberse opuesto activamente al nuevo Estado franquista.
13. Haber permanecido fuera de España más de dos meses sin integrarse en la zona franquista, ya que este supuesto se considera abandono de patria. Sin embargo se excluían cinco casos: los que tenían en el extranjero su vivienda habitual y permanente; los que cumplían misiones de las autoridades franquistas; los que tenían autorización expresa del gobierno franquista; los imposibilitados; y los que no volvieron por causas excepcionales.¹³⁸

de Responsabilidades Políticas. Réplica a las observaciones formuladas por distintos ministerios”, en F. VILANOVA, op. cit., pp. 462-463.

¹³⁶ Si el caso fuera dirigido a una sola persona entraría en otro supuesto de responsabilidades políticas.

¹³⁷ Para M. Cajal debe entenderse que este décimo supuesto debe considerarse desde el 1 de octubre de 1936. La indefinición del supuesto delito es tan grande que se abren enteramente las puertas a todo tipo de arbitrariedades, abusos, chantajes, venganzas y corruptelas. M. Cajal, op. cit., pág. 36.

¹³⁸ Ésta es una forma clara de castigar la pasividad de todas aquellas personas que quisieron o pudieron pasar la guerra fuera del país esperando su desenlace. La rigidez de los plazos causó polémica entre los ministerios. Finalmente, la Ponencia fijó los dos meses como cifra conveniente, ya que consideraron que los que realmente quisieron incorporarse a la zona sublevada lo hicieron en ese plazo. Sin embargo, en la práctica se dejó al arbitrio de los Tribunales la consideración de las circunstancias particulares que pudieran justificar un retraso. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 109.

14. Haber salido de la zona republicana y haber permanecido en el extranjero más de dos meses y no haberse integrado en la zona franquista, salvo causas excepcionales a valorar por los Tribunales.¹³⁹
15. Haber cambiado la nacionalidad española por otra a partir del 18 de julio de 1936, salvo los casos en los que se haya producido este hecho para evitar persecuciones o huir de la zona republicana y que se han integrado en la zona franquista, solicitando la recuperación de la nacionalidad española. Por tanto, se incluye a los que volvieron a España y no solicitaron esta recuperación.
16. Haber colaborado con el gobierno republicano ejerciendo misiones en el extranjero, salvo que esta situación se haya producido precisamente para huir de la zona republicana, no se haya consumado ninguna misión y se hayan reincorporado rápidamente a la zona franquista.
17. Haber ayudado económicamente al Frente Popular desde los altos cargos de todo tipo de empresas y asociaciones, tanto para su financiación como para su propaganda, gastos electorales, etc. (se excluye, pues, a los socios normales de dichas empresas y asociaciones). Se penaliza no sólo el hecho de ayudar económicamente al Frente Popular, sino la intención de hacerlo. Si la ayuda se llevó finalmente a cabo o no sólo servirá en el juicio por responsabilidades políticas como circunstancia modificativa.¹⁴⁰

A todos estos casos se podían añadir las agravantes que establece la Ley, que básicamente hacen referencia a la consideración de la posición social del inculpado (agravando las penas en caso de tratarse de un dirigente o destacado miembro de la vida social) y haber pertenecido a las altas instancias de la masonería.

Como se puede comprobar, estos 17 supuestos castigan a todos los que de alguna forma participaron activamente en la vida republicana o que manifestaron su simpatía por ella. Políticos, sindicalistas, demócratas, excombatientes, exiliados, participantes en mítines, huelgas o manifestaciones, periodistas o intelectuales partidarios de la libertad,

¹³⁹ Se incluye aquí a la gran mayoría de los exiliados españoles que no volvieron a España haciendo caso omiso de las ofertas y promesas pacificadoras del gobierno franquista.

¹⁴⁰ Según M. Cajal los castigados económicamente por su responsabilidad deben serlo respondiendo con sus bienes propios y particulares, no con los de su asociación. M. Cajal, op. cit., pág. 37

ateos, divorciados, etc., junto con sus familiares, pasaron a ser objeto de denuncias, investigación y represión. La tarea, pues, era inmensa.

El espíritu de la Ley era claramente represivo y parcial, manifestándose también en sus aspectos más benevolentes, como los casos de exención de sanción, que podían ser por edad o por motivos político-militares. Por el primero, la edad mínima por la que se podía exigir responsabilidades se rebajó a 14 años¹⁴¹. Por motivos político-militares se conseguía estar exento de responsabilidad si se había demostrado públicamente su adhesión al Estado franquista, mediante la obtención de la Cruz Laureada de San Fernando o la Medalla Militar a título individual, ser voluntario en el ejército franquista y haber resultado herido grave, siempre que la incorporación a filas haya sido temprana¹⁴², ostentar el título de “Caballero Mutilado Absoluto” o demostrar arrepentimiento público antes del inicio de la guerra con colaboración activa a favor del Estado franquista (en este caso, a juicio del Tribunal, se considerará eximente o atenuante).

La misma parcialidad se manifiesta en las circunstancias atenuantes recogidas en la Ley: ser menor de 18 años, haber ayudado eficazmente al Estado franquista, haber sido herido en la guerra en defensa del ejército franquista, haberse incorporado a él voluntariamente al inicio de la guerra o con antelación al llamamiento normal a filas de su quinta acompañado de buena conducta en el frente, haber perdido un hijo o el padre en la guerra o por represión del bando republicano y cualquier circunstancia similar a juicio del Tribunal.¹⁴³

La Ley de Responsabilidades Políticas tenía como objetivo “completar” las sanciones derivadas de motivos políticos que otros Tribunales habían impuesto previamente. La Ley pone un especial énfasis en las sanciones de tipo económico, con lo que puede llegar a pensarse que uno de sus objetivos prioritarios era la extracción de

¹⁴¹ La edad penal estaba cifrada en esos momentos en 16 años, con lo que esta Ley incorpora como sujetos penales a la población entre 14 y 15 años. M. LANERO, op. cit., pág. 329. Por supuesto, se declaraban exentas las personas que tenían menos de 14 años cuando se cometió el hecho investigado.

¹⁴² Ser herido grave defendiendo el ejército franquista pero sin que hubiera una anticipación al llamamiento a filas normal no era motivo de eximente de responsabilidad. M. Cajal, op. cit., pág. 41.

¹⁴³ Los atenuantes no incluían la devolución de los bienes previamente incautados.

recursos de los republicanos. Con incapacidad para establecer penas limitativas de la libertad (aspecto tratado por otros Tribunales), se establecían cuatro tipo de sanciones:

- a) Restrictivas de la actividad, como la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial, siempre con un sentido temporal, reseñado en la sentencia.
- b) Limitativas de la libertad de residencia: obligan a vivir al condenado fuera del lugar de su residencia habitual. Se trata del extrañamiento, la relegación, el confinamiento y el destierro, que se distinguen por la distancia y lugar en que deben ser cumplidos.¹⁴⁴
- c) Económicas, pudiendo consistir en el pago de una sanción económica, en la pérdida de bienes determinados o en la pérdida total de bienes¹⁴⁵.
- d) Pérdida de la nacionalidad, reservado para los casos excepcionales y graves. Los Tribunales de Responsabilidades Políticas proponían al gobierno esta sanción y éste era quien decidía. En caso afirmativo la sentencia se acompañaba de extrañamiento y pérdida total de bienes.

¹⁴⁴ El extrañamiento supone la expulsión temporal del territorio español, teniendo prohibido regresar el territorio nacional durante el tiempo de la condena. A diferencia del extrañamiento recogido en el Código Penal, no expira a los 30 años, sino que con esta Ley lo hace a los 15 años.

La relegación hace referencia, según el Código Penal, al confinamiento de una persona en Ultramar, donde, con vigilancia, se le permite ejercer su profesión libremente (art. 111). Con la Ley de Responsabilidades Políticas el condenado goza de libertad, ya que se equipara al confinamiento. En la práctica, el relegado era enviado a África, donde se le permitía ejercer libremente cualquier actividad profesional, bajo vigilancia de las autoridades. Durante el tiempo de la condena el condenado perdía todos sus cargos y su empleo.

El confinamiento implica alejamiento del lugar del delito de quien lo cometió. Según el Código Penal los confinados son enviados a una localidad de Baleares o Canarias, donde permanecerá vigilado por las autoridades pero en libertad. Sin embargo, la Ley que analizamos los destina a África.

Tanto el extrañamiento como la relegación y el confinamiento conllevan la inhabilitación absoluta temporal.

El destierro consistía en el traslado forzoso a un lugar dentro de la península, según el artículo 111 del Código Penal. Los desterrados no podían acercarse al punto designado en la sentencia en un radio de entre los 25 y los 250 kilómetros. Sin embargo, el destierro no llevaba consigo ninguna pena accesoria.

¹⁴⁵ El espíritu de la Ley de Responsabilidades Políticas era el de imponer una sanción económica al inculcado teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados y *principalmente* sus posibilidades económicas. De hecho, se consideraba conveniente no embargar la totalidad de su patrimonio y que el inculcado pagara voluntariamente su sanción. En este sentido, en la elaboración de la Ley el Ministro de Organización y Acción Sindical propuso que la responsabilidad se extendiera a los bienes del cónyuge, lo que fue rechazado *porque es indudable que una gran parte de las mujeres españolas carecía de ideario político y si alguna vez denotaban alguno, era por proyección del de su marido*. “Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. Réplica a las observaciones formuladas por distintos ministerios”, en F. VILANOVA, op. cit., pp. 454-455.

Por otra parte, la Ponencia redactora de la Ley de Responsabilidades Políticas no utilizó el concepto *multa* sino el de *sanción económica* para evitar la connotación de castigo y reforzar la de pago de cantidad material para reparar un daño. Sin embargo, los mismos autores de la Ley reconocieron que dicha sanción económica era, en realidad, una multa y un castigo. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 112.

La importancia que se da a la sanción económica se evidencia en el hecho que es el único tipo de sanción que siempre se debía imponer, siendo compatible con el resto de tipos de sanción. A consideración de los Tribunales se acompañaba la sanción económica de una o dos de entre las sanciones restrictivas de la actividad y limitativas de la libertad de residencia¹⁴⁶. Insistimos, pues, que esta Ley imponía sanciones complementarias a las condenas establecidas por los Tribunales Militares, estableciéndose que en este caso sólo se podían dictar sentencias de tipo económico.

Extrañamiento, relegación y confinamiento conllevaban la sanción de inhabilitación absoluta, lo que suponía la pérdida de todos los cargos o empleos de carácter público que el inculcado tuviera, así como de empresas que ejercieran servicios públicos, e implicaba la incapacidad para ejercer nuevamente a dichos cargos o empleos durante el tiempo de la condena. En el caso de inhabilitación especial sus efectos pueden abarcar el libre ejercicio de una profesión determinada.

Por otra parte, los Tribunales debían calificar en sus fallos los hechos probados como *de gravedad extraordinaria, graves, menos graves o leves*. Los primeros implicaban la pérdida automática de la nacionalidad; los hechos graves debían incluir la obligada sanción económica y en el caso de que conllevaran inhabilitación, extrañamiento, relegación, confinamiento o destierro sería por un período de entre 8 años y un día a 15 años; con los hechos menos graves, además de la sanción económica, se podían establecer penas limitativas de la libertad de residencia para un período de entre 3 años y un día a 8 años; los hechos calificados como leves se regían por el mismo criterio, pero en base a un período de entre seis meses y un día a tres años. La sanción económica debía establecerse teniendo en cuenta tanto la gravedad del hecho cometido como la solvencia y la situación socioeconómica del inculcado.

¹⁴⁶ El Ministerio de Defensa criticó en la elaboración de la Ley a este margen de decisión a los Tribunales, pensada para amoldarse a la variedad y complejidad de la realidad. Los ponentes de la Ley ponían varios ejemplos para explicarlo: *La actuación de un propagandista del Frente Popular será leve si la hizo un hombre de escasa cultura, en pocas ocasiones y ante un reducido número de personas de una aldea, y será, en cambio, gravísima si un ilustre escritor la realiza por medio de un periódico de gran difusión y de manera persistente [...]* De igual modo, *la libre permanencia de estos propagandistas en la nación, puede presentar un peligro para el nuevo Estado y, por ello, preciso será inhabilitarles para todos o algunos de los cargos que indica el artículo 11, e incluso relegarles o extrañarles de España, sin perjuicio de que paguen la reparación del daño. En tanto que, tratándose de un separatista Vasco, acaso sea bastante sanción la reparación económica y el destierro a una provincia meridional [...]*. Ibidem, pág. 451.

Dada la desastrosa situación económica de un gran número de inculpados y de la complejidad de algunos patrimonios (valoración de bienes inmuebles, negocios, etc.), la Ley establecía la posibilidad para solicitar el pago de la sanción económica establecida en las sentencias a plazos, en un marco temporal nunca más allá de los cuatro años. Para ello el afectado debía realizar una solicitud, pagar una cantidad inicial en un plazo de tres meses tras la notificación de la sentencia y realizar el resto del pago siguiendo las instrucciones que marcara el correspondiente Tribunal. De esta forma, una medida realista y obligada por las circunstancias era vendida como prueba del espíritu humano y reconciliador de la Ley.¹⁴⁷

Sin embargo, la Ley establece que las sanciones económicas debían asumirse en caso de fallecimiento del inculcado, antes o durante el procedimiento, por sus herederos, salvo en el caso, y ese era uno de los objetivos que se perseguía, que éstos repudiaran la herencia o no la aceptaran, con lo que ésta pasaría al Estado. En cualquier caso, se autorizaba a la extensión familiar de las sanciones. Al mismo tiempo, se establecían mecanismos para anular esta medida a los partidarios del franquismo, pues se proponía la exención en caso que los herederos hubieran prestado servicios eminentes al Estado franquista o si se había demostrado su adhesión, con lo que nuevamente se evidencia el distinto trato que la Ley da a los españoles según su orientación política¹⁴⁸. El concepto de heredabilidad de las sanciones rompía con el principio del Derecho Penal por el que la muerte extingue la responsabilidad del culpable y, como hemos indicado, supone una de las aberraciones que introduce esta Ley.

¹⁴⁷ Para Máximo Cajal *El legislador, con generosidad, quiere evitar en lo posible perturbar gravemente la vida económica de los responsables con arreglo a esta Ley, no obligándoles al pago total e inmediato de las sanciones económicas que les sean impuestas*. M. CAJAL, op. cit., pp. 62-63.

¹⁴⁸ En su comentario de la Ley Máximo Cajal se muestra confuso a la hora de abordar este apartado, ya que sigue lo establecido en el Código Penal, aunque no asegura que éste marque todas las pautas de funcionamiento. De esta forma, expone los siguientes casos: la responsabilidad económica recae sobre los herederos, no sobre los legatarios, debiéndose prorratar la deuda si es necesario; si la herencia está sin repartir primero se deberá pagar la deuda entre todos los herederos y después se procederá al reparto; se podrá exigir el pago proporcionalmente a los herederos que no hayan renunciado a la herencia; la responsabilidad de los herederos es solidaria; la dote de la mujer y sus bienes parafernales no quedan afectados. Estos asuntos no serán tratados por el Juez Civil, sino por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas correspondiente. M. CAJAL, op. cit., pp. 65-72.

Posteriormente se aclarará que el procedimiento a seguir por los herederos exentos de la transmisibilidad de las sanciones económicas por su colaboración activa con el franquismo. Éstos debían realizar una reclamación ante el Tribunal Regional correspondiente, con la posibilidad última de un recurso de alzada contra el Tribunal Nacional. "Instrucciones para los Tribunales Regionales". AHPCS. Caja 19637.

Una muestra más del carácter expoliador de la Ley contra los republicanos con el objetivo que éstos pagaran la reconstrucción después de la guerra y sirvieran de financiación al nuevo Estado franquista es el establecimiento de la caducidad de las responsabilidades políticas en quince años, así como de las sanciones no económicas impuestas (salvo la pérdida de nacionalidad), contadas desde la publicación de la correspondiente sentencia firme¹⁴⁹. Se trataba de anular durante un periodo prudencial pero suficiente a los republicanos más destacados después de haber expoliado su patrimonio y anulado su capacidad económica. Prueba de ello es que la Ley establece que las sanciones económicas son imprescriptibles, con lo que las multas y los bienes incautados se declararon irrecuperables.

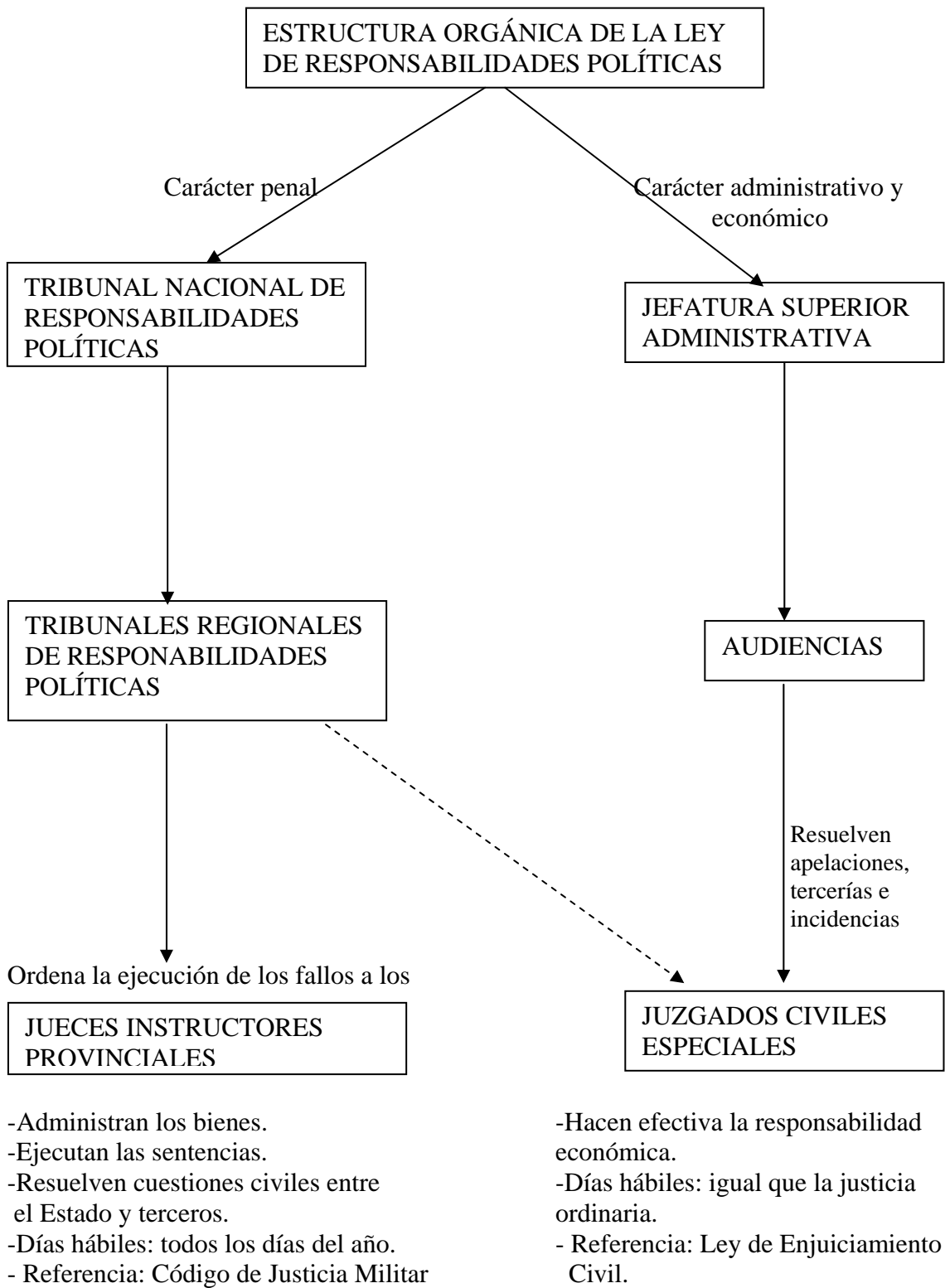
Estructura orgánica de la Ley.

Una vez conocidos los aspectos generales de la Ley es conveniente abordar su parte orgánica antes de entrar en sus mecanismos de funcionamiento. La Ley de Responsabilidades Políticas suponía la creación de una jurisdicción especial que necesitaba unos organismos especiales y específicos que permitieran poner en práctica sus objetivos. En general, la Ley establece dos tipos de organismos distintos y jerárquicamente organizados que entendían de toda la variedad de aspectos que quedaban afectados por ella. El primer organismo era de carácter penal y se componía, de mayor a menor rango y jerarquía, del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, Los distintos Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas y los Jueces Instructores Provinciales. En su vertiente administrativa y económica se creaba la llamada Jefatura Superior Administrativa, que se encontraban por encima de las Audiencias y de los llamados Juzgados Civiles Especiales. De esta forma, se creaban como hemos dichos dos tipos de organismos distintos pero complementarios, que únicamente se comunicaban por la autoridad que tenían los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas sobre los Juzgados Civiles Especiales. Antes de pasar a

¹⁴⁹ Como la Ley de Responsabilidades Políticas fue publicada en el BOE número 44 de 13 de febrero de 1939 se supone que las responsabilidades contraídas que no hubieran sido objeto de expediente quedarían canceladas a partir del 13 de febrero de 1954. A su vez, las sanciones también cancelarían como máximo a los 15 años a partir del día en que se dictó la sentencia firme, excepto las sanciones económicas y la de pérdida de nacionalidad, que son declaradas por la Ley imprescriptibles.

analizar la composición y las funciones de cada uno de estos organismos resumimos esta estructura en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.1



Fuente: Ley de Responsabilidades Políticas. Elaboración propia.

En su parte penal el organismo de mayor rango y categoría que crea la Ley de Responsabilidades políticas es el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Se trataba de un tribunal que dependía directamente de la Vicepresidencia del gobierno, con una relación directa con los ministerios. Estaba compuesto por cuatro personas, un Presidente y tres Vocales, acompañados por un Secretario y por tres suplentes. El Presidente era nombrado por el gobierno, pudiendo ser civil, militar o juez¹⁵⁰. Disponía de voto de calidad en caso de empate en las votaciones. Uno de los vocales era nombrado Vicepresidente y sustituía al Presidente en su ausencia. Los tres Vocales y los suplentes eran escogidos de los tres ámbitos que comparten poder en esta jurisdicción: el ejército (Generales de Brigada o División), de FET de las JONS (Consejeros Nacionales que fueran abogados) y la Magistratura (Magistrados de Audiencia Territorial y superiores). De cada ámbito se escogía un titular y un suplente. Sólo se constituía válidamente el Tribunal si estaban representados los tres ámbitos. El cargo de Secretario era ostentado por un Secretario de Gobierno de Audiencia Territorial, ayudado por un Oficial primero de Audiencia Provincial, los dos nombrados por el Vicepresidente del gobierno a propuesta del Ministro de Justicia.¹⁵¹

¹⁵⁰ Las dos personas que ejercieron este cargo no fueron falangistas, ni pertenecían al ejército o a la magistratura, sino que eran catedráticos de universidad de orientación política tradicional católica, con antecedentes de colaboración con la dictadura de Primo de Rivera y oposición a la República. Se trataba de Enrique Suñer Ordóñez y desde el 21 de diciembre de 1940 Wenceslao González Oliveros. Según R.C Cancio este perfil se debió a la búsqueda de equilibrio por parte de Franco entre ejército, partido único y magistratura.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas creado en 1939 tenía como presidente a Enrique Suñer Ordóñez, Director de la Real Academia de Medicina, Presidente del Consejo General del Colegio de Médicos y Catedrático de Medicina (fue sustituido el 21 de diciembre de 1940 por Wenceslao González Oliveros, Catedrático de Filosofía del Derecho y Gobernador Civil de Barcelona; fue Director General de Enseñanza Superior y Media en la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente fue vicepresidente del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, así como Presidente del Consejo Nacional de Educación en el periodo 1948-1962). El vicepresidente fue Guillermo Kirpatrick O'Farrill, general de brigada. Los vocales fueron el consejero nacional de FET y de las JONS y abogado José María Mazón Sainz (fue sustituido el 12 de agosto de 1941 por Eduardo Aunós, Consejero nacional y miembro de la Junta Política de FET y de las JONS, y embajador de Argentina; durante el periodo 1925-1929 había sido ministro de Trabajo; en el periodo 1943-1945 fue ministro de Justicia y entre 1946 y 1969 fue Presidente del Tribunal de Cuentas) y el magistrado Juan Hinojosa Ferrer. Los suplentes fueron el contraalmirante honorario de la Armada Manuel Rodríguez Bárcena, el consejero nacional de FET y de las JONS y periodista Jesús Suevos Fernández (el 12 de agosto de 1941 fue sustituido por el Catedrático de Universidad y consejero nacional de FET y de las JONS Manuel Torres López) y el magistrado Manuel Ruiz Gómez. El secretario fue José Anguita Sánchez, procedente de alguna Secretaría de Gobierno de Audiencia Territorial. Su sustituto era un oficial primero de sala de Audiencia Provincial. R.C. CANCIO, op. cit., pp. 149-152. M. ÁLVARO, "El decoro de nuestro aire de familia. Perfil político e ideológico de los presidentes del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, *Revista de Estudios Políticos*, nº 105, 1999, pp. 147-173; y M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 124-128 y 260-261.

¹⁵¹ En principio estos cargos no tenían una duración establecida y dependían totalmente del gobierno. Tampoco se establecía sus sueldos, honores o tratamiento. En este sentido la Ley fue criticada incluso personas adictas como Máximo Cajal: "*Suponemos que los del Nacional serán equiparados a los del*

Las funciones del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas eran las propias de un organismo superior: decidir sobre compatibilidades entre Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, aclarar cualquier tipo de duda que éstos tengan, inspeccionar y corregir su funcionamiento (sus decisiones eran inapelables), actuar como instancia superior de resolución definitiva, conocer los casos de exención de responsabilidad de los herederos, llevar a cabo alzadas de revisión de expedientes, revocar acuerdos de archivo de casos, declarar la nulidad de todo o parte de algún expediente, etc. Al mismo tiempo, proponía a la Vicepresidencia del gobierno el nombramiento del personal subalterno propio, de los Tribunales Regionales y de los Juzgados Instructores Provinciales.

Bajo la tutela del Tribunal Nacional se encontraban los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas. Sus funciones eran mucho más concretas que las del Tribunal Nacional y suponían los verdaderos impulsores de los expedientes. Se componía de tres miembros, con sus respectivos suplentes, todos ellos nombrados por el Vicepresidente del gobierno, pero a propuesta de diferentes organismos. El Presidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas debía ser un alto cargo del Ejército, a propuesta del Ministerio de Defensa. A éste se unían dos Vocales: un funcionario de la Carrera Judicial de categoría no inferior a Juez de ascenso, propuesto por el Ministerio de Justicia, y un militante de FET de las JONS que fuera abogado, propuesto por el Secretario de dicho partido. Cada uno de estos vocales tenía un sustituto de igual procedencia. El Tribunal Regional se completaba con un Secretario y su suplente, Oficiales de Sala de Audiencia Provincial, a propuesta del Ministerio de Justicia, que también proponía al personal subalterno necesario.

Competía a los Tribunales Regionales la incoación de todos los expedientes¹⁵², archivar los casos en los que no existan responsabilidades políticas, dar testimonio de las sentencias, fallar los expedientes de exención instruidos a los herederos en ramos separados, tomar medidas precautorias sobre los bienes del inculcado y resolver los

Tribunal Supremo; los del regional, a los Territoriales, y los Jueces, a los de Instrucción y Primera Instancia". M. CAJAL, op. cit., pp. 79-80.

¹⁵² Esta era la única instancia capacitada para incoar un expediente. Ni siquiera un Juez Instructor podía hacerlo por su cuenta. La incoación se podía iniciar por iniciativa propia, por denuncia de particulares, por comunicación de las autoridades militares o como resultado de sentencias militares anteriores.

expedientes de revisión. Además, debía plantear al Tribunal Nacional las posibles cuestiones de competencia con otros Tribunales Regionales y podía pedir la nulidad del proceso si su tramitación no había sido correcta. Por otra parte, debía derivar el caso al Tribunal Nacional si la votación no era unánime, si los inculpadados no se habían presentado o si se había producido una apelación. Finalmente, debía dictar sentencia en el plazo de 5 días siguientes al de 48 horas dado al inculpadado para presentar el correspondiente escrito de defensa y proceder a ejecutar la sanción si en el plazo de 20 días desde la notificación el inculpadado no la había satisfecho.

En cuanto a su número, la Ley establecía la creación, por lo menos, de un Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en cada una de las capitales de provincia en las que hubiera una Audiencia Territorial, a los que se sumaron los de Bilbao, Ceuta y Melilla. Algunos tuvieron jurisdicciones provinciales propias: Albacete, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Ceuta, La Coruña, Granada, Las Palmas, Madrid, Melilla, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Bajo las órdenes inmediatas de los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas se encontraban los Juzgados Instructores Provinciales. Éstos eran los encargados de hacer llegar a los primeros las denuncias que podían originar un expediente de responsabilidades políticas y, una vez dada la orden de incoación, se encargaban de instruir los expedientes. Se dirigían a las autoridades civiles, militares y religiosas y a todos los organismos públicos y privados para recabar datos e informes del caso, redactando con ellos un resumen metódico que era elevado al Tribunal Regional correspondiente. Por tanto, era la instancia que llevaba a la práctica la investigación sobre el caso, aunque no su valoración final. Además, eran los encargados de administrar los bienes, de ejecutar las sentencias y de resolver las cuestiones civiles entre el Estado y terceros. Para ellos, y como prueba de su afán por depurar responsabilidades, se declaraban hábiles todos los días del año.

Los Jueces Instructores de Responsabilidades Políticas y sus sustitutos, así como los Secretarios de los Juzgados Instructores de Responsabilidades Políticas y sus sustitutos eran nombrados por el Vicepresidente del gobierno a propuesta del Ministerio

de Defensa, siendo todos ellos militares relacionados con la abogacía¹⁵³. Como se puede comprobar, la presencia en la estructura orgánica de la Ley de Responsabilidades Políticas del Ejército era preponderante y decisiva¹⁵⁴.

La Ley de Responsabilidades Políticas no sólo tenía carácter penal, sino que afectaba al nivel administrativo y económico de las personas imputadas. Para entender de estos asuntos se crearon otros organismos que también forman parte de la estructura orgánica de la Ley. En este ámbito el órgano superior era la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas, encargada de inventariar todos los bienes de las personas o asociaciones inculpadas, ocupar y administrar dichos bienes¹⁵⁵, llevar, junto con las Delegaciones de Hacienda, la “Cuenta Especial” que se forme con lo confiscado a los políticamente responsables, administrar el Registro Central de Responsables Políticos y colaborar con los Jueces Civiles Especiales, encargados, como veremos, de las cuestiones administrativas y económicas.

La Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas la ostentaba el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, acompañado por un

¹⁵³ Se nombraba Jueces Instructores de Responsabilidades Políticas a Oficiales de complemento u honoríficos del Cuerpo Jurídico Militar o de la Armada, o a profesionales de cualquier Arma o Cuerpo del Ejército que posean el título de Abogado, y Secretarios a Brigadas, Sargentos o soldados que ostenten el mismo título o que hayan desempeñado cargos de Secretario u Oficiales de Secretaría en Juzgados Civiles o Militares durante por lo menos un año (art. 27).

¹⁵⁴ El protagonismo del Ejército en la Ley de Responsabilidades Políticas fue incuestionable: *Con arreglo a la Ley Constitutiva del Ejército, “constituye la primera y más importante misión del mismo, sostener la independencia de la Patria y defenderla de sus enemigos interiores y exteriores”, y, en cumplimiento de tal deber, en julio de 1936 se alzó contra los enemigos interiores que, desde las alturas del Poder usurpado, querían entregar a España al marxismo y a la Masonería internacional. Al Movimiento iniciado por el Ejército, se sumaron los tradicionalistas, falangistas y afiliados a Renovación Española y a otros partidos que, por encima de todo, sentían la Patria [...] es indudable que al Ejército corresponde exigir las responsabilidades; tanto en lo criminal como en lo político, a cuantos coadyuvaron de algún modo a la subversión de todo orden de que era víctima nuestra Nación [...] Por las anteriores consideraciones y porque la jurisdicción militar se caracteriza por ser más rápida, rígida y expedita que la ordinaria, se ha encomendado a ella la aplicación de la presente Ley, atendiendo, además, insinuaciones de S.E. el Generalísimo.* “Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas. Réplica a las observaciones formuladas por distintos ministerios”, en F. VILANOVA, op. cit., pp. 457-458.

¹⁵⁵ Los bienes afectados pasaban a ser propiedad del Estado, siendo administrados a su conveniencia. En este sentido, los bienes se podían ceder, enajenar o gravar. En estos casos el producto se ingresaba en la “Cuenta Especial” de la Delegación de Hacienda de la provincia correspondiente (en esta cuenta, creada en cada delegación de Hacienda de cada provincia, se debía ingresar todo lo recaudado por esta jurisdicción especial). La enajenación o venta sólo podía ser autorizada por la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas sólo tenía, en este caso, la potestad de informar del fallo al Juez Civil para que abriera la pieza separada correspondiente.

segundo Jefe que era un alto funcionario civil o militar nombrado libremente por el gobierno, ayudados por los asesores y funcionarios que hicieran falta, nombrados por el Vicepresidente del gobierno. Por tanto, las máximas autoridades en esta jurisdicción estaban en mano de la misma persona, que había sido directa y libremente nombrada por el gobierno.

Para estudiar y valorar las apelaciones que se pudieran producir en el proceso de resolución de la pieza separada económica de un expediente se crearon secciones especiales en las Audiencias¹⁵⁶, siempre que las sanciones fueran superiores a las 5.000 pesetas¹⁵⁷. Se componían de tres Magistrados, junto con tres suplentes (Magistrados de la misma Audiencia) y un Secretario elegido entre los funcionarios Oficiales de Secretaría.

La tarea de hacer efectiva la responsabilidad económica recaía en los Juzgados Civiles Especiales. A cada Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le correspondía uno de estos Juzgados, que carecían de iniciativa para actuar por sí mismos. Cuando el Tribunal Regional correspondiente tomaba la iniciativa y lo ordenaba el Juzgado Civil Especial se encargaba de abrir una pieza separada para tomar medidas precautorias o ejecutar el correspondiente fallo, lo cual ocurría en los siguientes casos:

- Cuando el sancionado no presentaba la relación jurada de sus bienes y de su cónyuge en el plazo de ocho días.
- Cuando existía la sospecha de que el inculpado trataba de hacer desaparecer sus bienes.
- Cuando el sancionado no había hecho efectiva la sanción dentro del plazo de 20 días de haberle sido notificada la sentencia (salvo si la pagaba a plazos).

Los Juzgados Civiles Especiales eran los encargados de realizar el inventario valorado de los bienes del sancionado, practicando las medidas precautorias que

¹⁵⁶ Había tantas Audiencias como Tribunales Regionales.

¹⁵⁷ M. CAJAL, op. cit., pág. 105. La Audiencia podía imponer al litigante que estimara temerario la sanción del 10% de la cuantía en litigio (art. 75) y el 5% obligatoriamente (art. 84) si confirmaba totalmente la sentencia.

considerara necesarias. En caso de existencia de recurso debía derivar el caso a la Audiencia. También eran los encargados de realizar la venta de los bienes afectados por la sentencia, siempre con la autorización de la Jefatura Superior Administrativa.

Estos Juzgados estaban compuestos por un Juez de Primera Instancia o Magistrado de la Carrera Judicial y un Secretario del Cuerpo de Secretarios Judiciales, nombrados por la Vicepresidencia del gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia. Sus sustitutos eran un Juez de Primera Instancia de la localidad y un Oficial de Secretaría habilitado. Para estos Juzgados los días hábiles eran los mismos que en la Justicia ordinaria.

Dinámica procesal.

La Ley de Responsabilidades Políticas tenía un funcionamiento procesal específico que ayuda a comprender su naturaleza y objetivos. Es importante tener en cuenta que únicamente el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas estaba capacitado para ordenar la incoación de un expediente y que su tramitación sólo podía llevarla a cabo el Juez Instructor de la provincia en la que se hubiera producido el desencadenante de la responsabilidad. La Ley establecía, pues, unos mecanismos claros con distribución precisa de tareas, primando la centralización de las decisiones en los organismos superiores.

Uno de los aspectos más significativos de la Ley, como hemos visto, eran los motivos por los cuales se podía incoar un expediente de responsabilidades políticas. Así, se podía iniciar un expediente a iniciativa del mismo Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, normalmente como consecuencia de comunicaciones de autoridades civiles (Ayuntamientos, Jefes Locales de FET y de las JONS, etc.) o militares que debían informar sobre cualquier comportamiento sospechoso de cualquier persona tanto en el pasado como en el presente. Por tanto el Tribunal Regional actuaba como ámbito receptor de todo tipo de informaciones sobre la población. En segundo lugar, los Tribunales Militares tenían la obligación de enviar al Tribunal Regional correspondiente la documentación de los juicios ya realizados¹⁵⁸ a la población que

¹⁵⁸ La Ley establecía en su Artículo 37 la obligación de las Autoridades Judiciales de remitir a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, a mayor brevedad posible, el testimonio de todas

había actuado contra el régimen franquista a través de resúmenes o copias de los mismos, lo que implicaba automáticamente el procesamiento por responsabilidades políticas del afectado, que, por tanto, volvía a ser juzgado por la misma causa, con lo que se violaba, tal como hemos indicado, la legalidad básica tradicional. Era muy importante, pues, la correcta comunicación entre las autoridades militares y esta jurisdicción especial. En tercer lugar, se podía incoar expediente por denuncia de cualquier persona. El franquismo fomentó la denuncia entre los ciudadanos imponiéndola como obligación y utilizándola como herramienta para perseguir a los republicanos y fomentar un ambiente de tensión y miedo útil para la construcción de su proyecto social y político. En este sentido, no son escasos los llamamientos de las autoridades franquistas a la colaboración mediante la denuncia de personas y hechos pasados para “depurar” la sociedad¹⁵⁹. Estas denuncias podían presentarse en cualquier Juzgado (de Primera Instancia o Municipal) de la jurisdicción de residencia del denunciante, aunque debían serlo preferentemente en los correspondientes Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas o en los Juzgados Instructores Provinciales competentes. Con todo, las denuncias siempre debían estar dirigidas al Tribunal Regional.

Una vez abierto el proceso de incoación de expediente se establecía que la competencia preferente recaía en el Tribunal Regional correspondiente a su última vecindad, aunque podía serlo cualquiera en los que el inculcado tuviera bienes o, en

las sentencias firmes en este sentido, así como todas las que se dictaran por motivos de oposición al nuevo régimen en lo sucesivo.

¹⁵⁹ Ver el Bando del general Antonio Aranda Mata en el BOE nº 71 de 23 de junio de 1938, que afectaba a la provincia de Castellón. Apéndice documental.

Por otra parte, estas denuncias nunca podían ser anónimas, sino que debían presentarse por escrito firmado, con los datos del denunciante. Con ello, y según M. Cajal, se pretendía mantener la apariencia de un Estado de derecho en el cual se evitara la denuncia irresponsable, vengativa y de mala fe. Sin embargo, su limitación de este tipo de denuncias se nos antoja muy superficial y poco efectivo, ya que las prácticas vengativas y los ajustes de cuentas estuvieron a la orden del día según la mayoría de los estudios. Por ejemplo, C. MIR (2000), op. cit., pp. 199-210, o los numerosos ejemplos en F. VILANOVA, op. cit. Concretamente la Ley establecía que las denuncias debían contener, *a ser posible*, los siguientes datos: nombre, apellidos, edad, estado y profesión del denunciado, último domicilio, domicilio actual, relación, localización y valor de sus bienes, hechos que se le imputan y pruebas para acreditarlos, así como la causa establecida en la Ley para procesarlo. Se deduce, pues, que si no era totalmente imprescindible la presencia de la totalidad estos datos.

Una prueba más de la parcialidad de esta Ley en este sentido es su artículo 45, en el que se establece que si el Juez Instructor aprecia que una denuncia es completamente infundada únicamente se limitará a consultar al Tribunal Regional, añadiendo acto seguido que se incoará el expediente *tan pronto como aparezca algún indicio de racionalidad de responsabilidad para el denunciado*, con lo que realmente la persona denunciada quedaba en una situación de continua sospecha y vigilancia.

última instancia, cualquiera de los Tribunales Regionales. Para la resolución de cualquier conflicto de competencias se dejaba el caso en la decisión arbitral del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas¹⁶⁰. La Ley denegaba al inculpado y a los terceros reclamantes o afectados plantear cualquier cuestión de competencia, aunque sí establecía la posibilidad de *dirigir escritos al Tribunal que juzguen competente* para que éste los tuviera presentes de la forma que considerara¹⁶¹.

Una vez recibida una denuncia y una vez que ésta fuera declarada estimada, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas informaba de la incoación del expediente al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y remitía la denuncia y toda la documentación existente al Juez Instructor Provincial correspondiente para que éste comenzara su instrucción. En este punto, es importante tener presente algunos aspectos básicos del proceso de instrucción. En este proceso únicamente intervenía el Juez Instructor, nunca el Tribunal Regional, que era su superior y el que había dado la orden de incoación. En todo el proceso sólo los inculpados o sus herederos¹⁶² tenían representación legal y derecho de defensa, y sólo el juez y el inculpado intervenían en el expediente de manera activa. Por tanto, el resto de personas afectadas como el denunciante, los presuntos perjudicados, etc., únicamente participaban como testigos, sin ninguna otra capacidad. Los inculpados que se encontraban en situación de ausentes o desaparecidos perdían su capacidad de ser representados y defendidos, conservando sólo la obligación de presentar la correspondiente declaración de bienes, que debía realizarse por sus herederos.

A la hora de valorar las denuncias a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas se les pedía una valoración de los presuntos delitos cometidos para ver si se podían exigir tanto responsabilidades políticas como criminales. En el caso de detectar que el delito cometido constituía, además de un delito de responsabilidad política, otro de responsabilidad criminal, el caso se debía remitir a

¹⁶⁰ Esta situación podía darse, por ejemplo, cuando dos Tribunales Regionales se dan cuenta que están investigando un mismo asunto. En cualquier caso, la decisión del Tribunal Nacional se emitía en un plazo máximo de 10 días.

¹⁶¹ Artículos 43 y 44 de la Ley de Responsabilidades Políticas.

¹⁶² Los herederos estaban obligados a comparecer en caso de fallecimiento del inculpado y en el caso que se abriera un expediente a una persona fallecida.

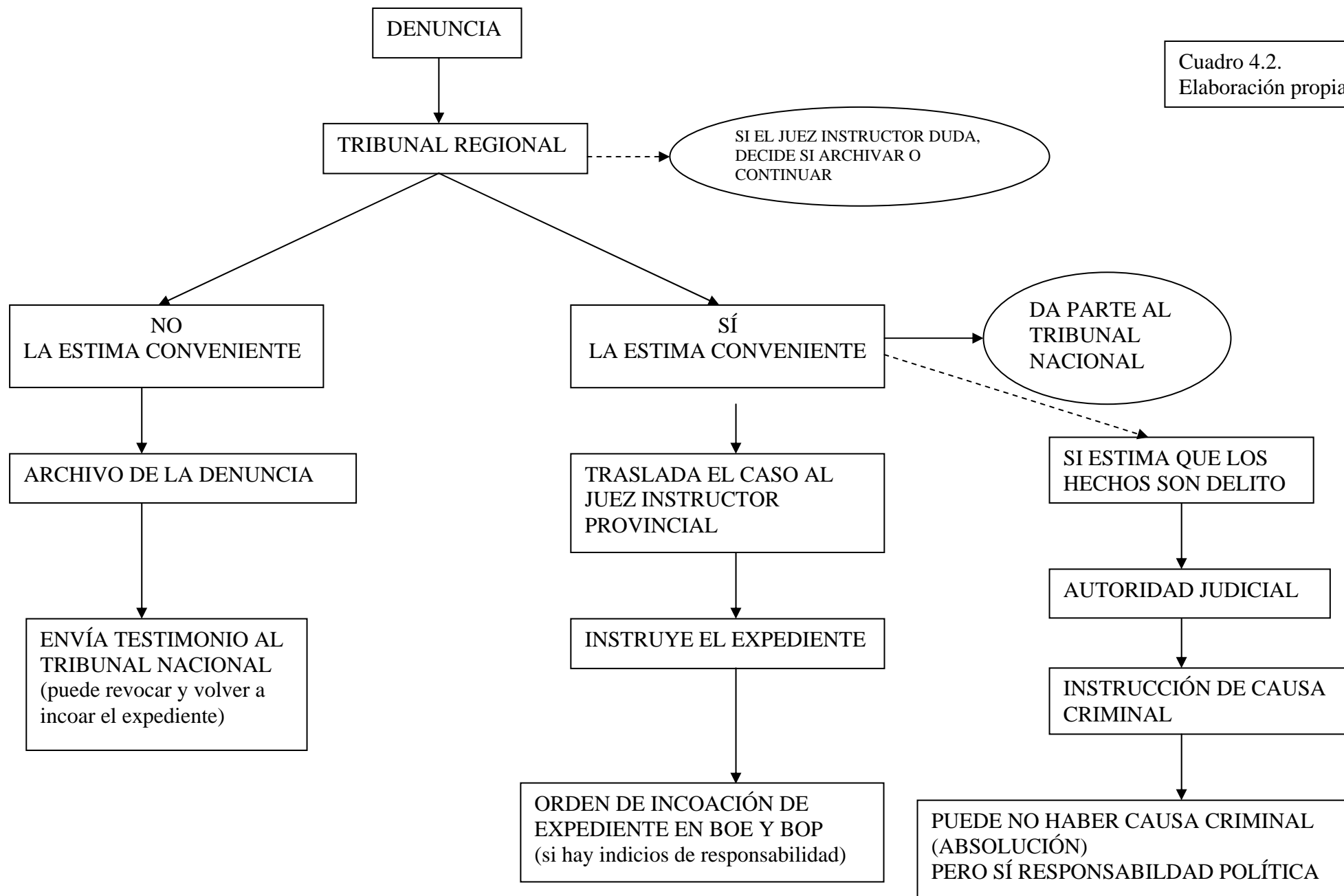
las autoridades judiciales, con lo que el caso se instruía en una doble vía. Si el delito cometido se consideraba que no entrañaba delito de responsabilidad criminal el caso seguía por los cauces normales establecidos por la Ley de Responsabilidades Políticas. Ante la posibilidad que el Tribunal Regional decidiera que no existía delito en el caso analizado ni entrañaba delito de responsabilidad política se procedía al archivo de la denuncia, aunque se abría una puerta a la continuación del proceso, ya que debía remitirse testimonio del caso al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que, a su vez, podía revocar la decisión del Tribunal Regional y ordenar directamente la incoación del expediente.

Una vez tomada la decisión de incoar el expediente los Juzgados de Responsabilidades Políticas enviaban al Boletín Oficial del Estado y al Boletín Oficial Provincial correspondiente su anuncio, que debía realizarse *con toda urgencia*¹⁶³. Estos anuncios debían contener la siguiente información: nombre, apellidos, profesión, estado, vecindad y domicilio de los inculpadlos, Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se hacía cargo del caso, fecha de la decisión de incoación del expediente y el Juzgado de Instrucción Provincial que se hacía cargo del caso. También se procedía a advertir que ni el fallecimiento, ni la ausencia ni la incomparecencia del presunto responsable detendría la tramitación y el fallo del expediente, y se advertía a todos aquellos que pudieran dar testimonio de la conducta del inculpadlo o de sus bienes que tenían la obligación de informar a las autoridades ante las autoridades judiciales, tanto las de responsabilidades políticas como las ordinarias. Con este procedimiento se declaraba público el proceso.

A continuación presentamos un cuadro resumen del procedimiento analizado:

¹⁶³ Ante la presunta avalancha de casos a publicar, la Ley prevé en su artículo 45 la posibilidad que en estas publicaciones oficiales se anuncien los casos en una sola relación bajo el epígrafe “Anuncio de incoación de expediente de responsabilidades políticas”. Según M. Eiroa, la publicación de los datos personales en estos boletines oficiales suponía la pérdida inmediata del empleo y sueldo. M. EIROA, op. cit.

Cuadro 4.2.
Elaboración propia



La admisión a trámite de la denuncia implicaba serias consecuencias para el inculpado de forma inmediata. Aparte de la presión social de quedar públicamente marcado como responsable políticamente y de tener la libertad limitada, el peso de la Ley caía sobre su base económica. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas correspondiente intervenía económicamente al inculpado, ya que uno de los propósitos de la Ley era la sanción económica. Una vez controlados sus bienes, al inculpado se le debía autorizar a disponer mensualmente de una pensión alimenticia¹⁶⁴, según el texto de la Ley “prudencial”, y se le podía autorizar a disponer de su dinero para realizar el pago de contribuciones. En el caso de disponer de algún negocio se nombraba un interventor mercantil que controlara los pagos y los ingresos del mismo, con la posibilidad de proponer al Juzgado la disposición de los recursos necesarios para el funcionamiento del mismo¹⁶⁵. El negocio, pues, quedaba completamente controlado y la posibilidad de permanecer nominalmente al frente del mismo era considerado por los que aplaudían esta Ley como un gesto de piedad y de generosidad¹⁶⁶. Lejos de una situación que pueda calificarse de normalidad, comenzaba para el inculpado un verdadero martirio social y burocrático.

Una vez recibida la orden de procesamiento de un sospechoso de delito de responsabilidades políticas, lo primero que debía hacer el Juez Instructor era citar al inculpado para comparecer en un plazo de cinco días¹⁶⁷. Acto seguido se pedían

¹⁶⁴ Ante la indefinición de la Ley, para M. Cajal esta pensión alimenticia debe ser variable teniendo en cuenta los productos y las rentas del negocio y según las circunstancias, su pago debe finalizar cuando el expediente se falle y debe poder ser reclamada por los herederos en caso de fallecimiento del inculpado. Este autor destaca el espíritu de la Ley, invocando su Preámbulo, destacando *el deseo de que los inculcados no sufran más perjuicios que los absolutamente indispensables, dentro de la necesidad impuesta para hacer frente la Justicia*. M. CAJAL, op. cit., pág. 128.

¹⁶⁵ La Ley asignaba unas dietas de 10 pesetas diarias para estos interventores mercantiles, a cargo de los productos del negocio del inculpado (artículo 47).

¹⁶⁶ En este sentido, es oportuno el comentario de M. CAJAL: *Obsérvese que el negocio o industria lo llevará y dirigirá el inculpado como hasta aquel momento; que no tendrá limitación alguna en sus iniciativas ni en su dirección, y que solamente en la contabilidad se mezclará el Interventor, que será quien en definitiva asuma la responsabilidad de las inversiones económicas normales, para la vida del negocio en cuestión*. M. CAJAL, op. cit., pág. 130. Sin embargo, en el contexto social, económico y político de la posguerra esto sería muy difícil de mantener.

¹⁶⁷ Si el inculpado no se presentaba en estos cinco días el expediente no se detenía, sino que continuaba sin posibilidad de volver a citarlo ni oírlo, perdiendo así, su derecho de representación. En este sentido, la Ley de Responsabilidades Políticas era muy dura, como lo demuestra el comentario de M. CAJAL: *Pero si se presenta [el inculpado] entendemos se le debe oír y permitir la defensa a partir de cuanto acontezca del momento de la personación. De otra suerte, se colocaría al inculpado en situación más desfavorable que los rebeldes de jurisdicción criminal o de un declarado en rebeldía en asunto civil. En la penal, si el*

informes del presunto responsable a las autoridades de la localidad de su residencia. Estas autoridades eran el Alcalde, el Jefe local de FET de las JONS, el cura párroco y el Comandante de la Guardia Civil de la localidad¹⁶⁸. Estos informes debían centrarse en los antecedentes políticos, sociales y morales del inculpado, anteriores y posteriores al inicio de la guerra, haciendo hincapié en los hechos objeto de la denuncia y en los bienes que pudiera poseer¹⁶⁹. Dichos informes debían ser realizados y presentados en un plazo de cinco días.

La comparecencia del inculpado se recogía en la Ley no como una obligación, ya que el proceso continuaba sin esta comparecencia, sino como un acto voluntario (y conveniente). El Juez Instructor, pues, no podía obligar a comparecer al inculpado. Esto es normal en un contexto de guerra y posguerra en el que la muerte primero y el miedo después hizo que muchos inculpados no compareciesen. En el caso de que sí existiera comparecencia, tras la declaración se concedía un nuevo plazo de 5 días para que el inculpado preparara la documentación, los testigos y las pruebas que considerara para su defensa¹⁷⁰.

inculpado está en rebeldía se suspende el procedimiento y se vuelve a abrir cuando comparece; y declara y actúa, por ordenación de la Ley. En el procedimiento civil, en el que la Justicia es rogada, al no compareciente se le declara también en rebeldía, con distintos efectos, naturalmente, y cuando comparece, se le admite y tiene por parte para actuaciones futuras. En uno y otro procedimiento hay incluso una legislación especial, separada, que se ocupa de los procedimientos contra ausentes (art. 663-670 del Código de Justicia Militar, 834-846 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 308, 309, 521, 1462 y concordados de la Ley de Enjuiciamiento Civil. M. CAJAL, op. cit., pp. 142-143.

Para realizar la citación, tal y como mandaba el Código de Justicia Militar en su artículo 386, se hacía un llamamiento en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la “Gaceta de Madrid”. Siguiendo los artículos 381-385 del Código de Justicia Militar, la citación se podía realizar, según M. CAJAL, tanto personalmente como a través de los familiares del inculpado. M. CAJAL, op. cit., pág. 133.

¹⁶⁸ A éstos se añadía el informe de la Jefatura Provincial de Policía si el inculpado era vecino de una capital de provincia. Si el inculpado no tenía domicilio conocido los informes se pedían al Servicio de Información y Policía Militar y a la Delegación Nacional de Información e Investigación de FET de las JONS.

¹⁶⁹ Excelentes análisis de estos informes en C. MIR et ali. (1997), op. cit., pp. 180-189; C. MIR (2000), op. cit., pp. 189-240; F. SANLLORENTE, op. cit., pp. 35-40; o en M. ORTIZ, op. cit., pp. 361-440.

¹⁷⁰ Se contabilizaban todos los días del año, incluidos los festivos, ya que el artículo 81 de esta Ley establece que todos los días y horas eran hábiles para actuar. Por causa de fuerza mayor se podía conceder un nuevo plazo de cinco días (10 días en total como máximo).

Una vez realizada la declaración ante el Juez Instructor el inculpado tenía prohibido ausentarse del lugar donde residía sin permiso expreso del Juez¹⁷¹, bajo la amenaza de ser detenido y procesado por un delito de desobediencia grave, que se uniría a su juicio por responsabilidad política. Por otra parte, se le imponía un plazo de 8 días para que presentara una declaración jurada de sus bienes, que en caso de incumplimiento suponía automáticamente el castigo como autor de un delito de desobediencia grave y en caso de presentar una declaración falsa se le castigaba como autor de un delito de falsedad en documento público. Además, desde el mismo momento de la firma de la declaración jurada de bienes dejaba de poder disponer de los mismos, de lo contrario era procesado como autor de un delito de alzamiento de bienes o desobediencia grave¹⁷². Como podemos ver, los inculpados perdían tanto su libertad como sus bienes automáticamente.

De esta forma, una de las características de esta Ley es su enorme rapidez en el procesamiento¹⁷³: en sólo cinco días se comparecía ante el Juez Instructor, se perdía la libertad y en 13 días como máximo ya no se podía disponer de los bienes personales. Esta rapidez está en la base de múltiples abusos y falta de garantías procesales. En primer lugar, se establecían unos plazos muchas veces inasumibles. En segundo lugar, no se contempla en la Ley la obligación de hacer público el proceso de instrucción, con lo que el inculpado no tenía el derecho de conocer, por ejemplo, la denuncia que contra él se había formulado. Esta rapidez suponía la imposibilidad de practicar métodos de comprobación de pruebas y testimonios ante informaciones y versiones contradictorias, como el careo entre testigos o entre testigos e inculpado¹⁷⁴. Finalmente, la Ley establecía que se podían presentar testigos voluntariamente en las causas, sin tener en cuenta el principio de anular aquellos testimonios de personas con parentesco, amistad,

¹⁷¹ Dentro de su localidad sí tenía, en principio, libertad de movimiento.

¹⁷² En el caso de que el inculpado tratara de hacer desaparecer sus bienes el Juez Instructor informaba al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que, a su vez, ordenaba al Juez Civil especial una pieza separada de embargo, independientemente del resultado del expediente que se estaba formando.

¹⁷³ Como veremos, en unos 45 días podía el denunciado tener una sentencia definitiva que le limitara su libertad y la disposición de sus bienes.

¹⁷⁴ El careo se recogía en este sentido en el Código de Justicia Militar en sus artículos 466 y 469 y en la Ley Procesal Criminal en sus artículos 451-455.

enemistad o relación con el inculpado: ¿se podía presentar un testigo voluntariamente en un caso sin tener ninguna relación con el inculpado?

En el plazo de un mes como máximo el Juez Instructor debía comprobar todas las informaciones que iba recibiendo¹⁷⁵ y tener terminado el expediente, en el que, de forma resumida, y tras cinco días más de plazo, debía informar al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de la presunta responsabilidad política del inculpado. Una vez transferido el expediente al Tribunal Regional se abría un período de cinco días tras el que se declaraba nulo el proceso si no se habían cumplido los requisitos, se ordenaba que se ampliaran las pruebas disponibles, que se suspendiera si no existían pruebas suficientes¹⁷⁶ o se publicaban públicamente los autos para que el inculpado o sus representantes pudieran formular, en un plazo de dos días, un escrito de defensa. En este último caso si no se presentaba el escrito de defensa el Tribunal tenía cinco días para dictar sentencia.

Una vez la sentencia se notificaba al inculpado el expediente se elevaba al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas en el caso que no hubiera existido sin audiencia ni defensa del mismo, si no se hubiera conseguido unanimidad en el Tribunal o si se había presentado por parte del inculpado o sus herederos en un plazo de cinco días recurso de alzada. En estos casos el Tribunal Nacional tenía 20 días para dictar sentencia definitiva¹⁷⁷.

La sentencia definitiva se notificaba al inculpado en su domicilio, pero si éste se desconocía se debía publicar en los estrados del Tribunal y en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia. Si la sentencia era absolutoria se

¹⁷⁵ La Ley establecía que el Juez Instructor no debía investigar los hechos previamente juzgados en la sentencia firme de la Jurisdicción Militar, sino basarse en ellos. Si era el caso, se limitaba a pedir el correspondiente resumen de la sentencia e informes a las autoridades sobre el inculpado. En el caso que éste estuviera en la cárcel se le exigía una declaración jurada de bienes y un documento como que se le había informado de su situación.

¹⁷⁶ En este caso el expediente quedaba en manos del Tribunal Regional en espera de la existencia de las pruebas (este caso estaba pensado para los tiempos de guerra, cuando las pruebas estuvieran todavía en el territorio enemigo). En los dos casos anteriores el expediente era devuelto al Juez Instructor.

¹⁷⁷ En su artículo 56 la Ley de Responsabilidades Políticas ofrecía la posibilidad de multar al recurrente con un 10% del importe de la sanción económica establecida en la sentencia definitiva si el recurso se consideraba temerario o sin fundamento.

publicaba en los periódicos oficiales citados que dicha persona había recobrado la libre disposición de sus bienes. Si el fallo era condenatorio se le daba al condenado un plazo de veinte días para satisfacer la multa o para que solicitara el pago a plazos¹⁷⁸. Una vez pagada la sanción en el plazo establecido también se publicaba en los periódicos oficiales que el inculcado había recobrado la libre disposición de sus bienes. Si en el plazo establecido de veinte días desde la notificación de la sentencia no se había pagado la multa establecida el Tribunal ordenaba a las autoridades hacer efectivas todas las sanciones limitativas de la libertad de residencia y al Juez Civil Especial que procediese a los embargos.

Más complicados eran los trámites que se realizaban por parte del Juez Civil Especial para realizar la investigación sobre la pieza separada para la sanción económica. Como hemos visto la Ley de Responsabilidades Políticas se dividía en dos órganos, uno político y otro económico y administrativo, que trataban tanto de investigar los hechos o presuntos delitos cometidos como todo lo referente a el patrimonio de los acusados. La tarea de hacer efectiva la sanción económica era llevada a cabo por los Juzgados Civiles Especiales, a través de un Juez Civil Especial.

Una vez recibida la sentencia definitiva, el Juez Civil Especial hacía publicar en el Boletín Oficial del Estado un edicto informativo para propiciar cualquier reclamación a aquellas personas de alguna forma afectadas, para lo que se establecía un plazo, único e improrrogable, de treinta días hábiles. En dicho plazo ordenaba practicar los embargos y todas las medidas que estimase necesarias¹⁷⁹. Una vez finalizado este plazo el Juez mandaba el peritaje de los bienes¹⁸⁰, que generaba un informe tanto de bienes declarados como de bienes poseídos en la realidad y de terceras personas afectadas, que era remitido a la Jefatura Superior Administrativa. Ésta, teniendo en cuenta las

¹⁷⁸ En este caso se le concedía un primer plazo de 3 meses para realizar el primer pago.

¹⁷⁹ El Juez Civil Especial debía prever, en consonancia con el espíritu de la Ley, que el inculcado pudiera disponer de los recursos propios mínimos necesarios para poder subsistir, ya fueran cantidades en metálico, rentas o productos de algún negocio.

¹⁸⁰ Esta valoración de los bienes del inculcado debía realizarse, según el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades Políticas por peritos técnicos o prácticos de forma totalmente obligatoria y gratuita, aunque se admitía la posibilidad de cobrar los gastos de desplazamiento u otros que se ocasionaren, siempre a cuenta de los bienes tasados. La justificación de esta obligatoriedad y gratuidad es simple y clara: *como servicio a la Patria*.

instrucciones que reciba del gobierno, mandaba la venta inmediata de todos o parte de los bienes del inculpado¹⁸¹. Las cantidades obtenidas se destinaban a la llamada “Cuenta Especial” de la correspondiente Delegación de Hacienda.¹⁸²

La sanción económica podía consistir en la pérdida de todos los bienes, en el pago de una cantidad fija o en el pago de bienes determinados¹⁸³. En la mayoría de los casos, pues, se procedía a la venta de los bienes del inculpado, que se realizaba mediante pública subasta. La Ley incluso establecía los mecanismos por los cuales debían realizarse estas ventas y subastas¹⁸⁴ y preveía la posibilidad que la subasta se declarara desierta¹⁸⁵.

Si la sanción económica impuesta era la de la pérdida de todos los bienes, tras los treinta días de plazo establecidos para la reclamación de terceros y en los que se procedía al embargo de los bienes, el Juez Civil Especial dictaba auto adjudicando al Estado los bienes que no hubieran sido reclamados o los que habían sido pero las

¹⁸¹ Si existía una reclamación de terceras personas se aplazaba la venta y se esperaba a la resolución del conflicto de tercerías.

¹⁸² Es indudable que uno de los grandes objetivos de la Ley de Responsabilidades Políticas era que los perdedores de la guerra pagaran con su patrimonio los daños ocasionados por la guerra, a la vez que se les dificultaba alcanzar, en igualdad de condiciones respecto a los vencidos, una vida normalizada. Además, no se especificaba el destino de los fondos ingresados (simplemente se aseguraba que se destinaría a la reconstrucción nacional), lo que pudo haber generado situaciones de corrupción y apropiamiento de dicho dinero con toda impunidad. En este sentido S. Vega ha calificado estas sanciones económicas como *un préstamo sin intereses efectuado por los adversarios políticos para cimentar la construcción del Nuevo Estado*. S. VEGA, “La represión en la provincia de Segovia en los orígenes del régimen de Franco”, en *Hispania Nova*, nº 4 (2004), pág. 10.

¹⁸³ Si la venta de bienes determinados cubría la sanción económica fijada, el Juez Civil Especial debía liberar el resto de bienes del inculpado.

¹⁸⁴ Las alhajas y metales preciosos, las obras de arte o de valor histórico y los semovientes se subastaban públicamente tras un anuncio de ocho días. Los valores mobiliarios debían venderse a un precio no inferior al establecido tras la valoración de la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas. Los bienes inmuebles se subastaban tras un anuncio oficial de quince días. Los establecimientos industriales o comerciales debían subastarse junto con el compromiso del comprador del funcionamiento de los mismos según la importancia de los mismos para la economía nacional y el número de trabajadores que disponga. Los créditos se subastaban con todas sus circunstancias. El mobiliario y los enseres domésticos seguían el mismo procedimiento que las alhajas y metales preciosos, salvo la diferencia que si tenían escaso valor el Juez podía decretar su venta directa. El resto de bienes eran enajenados “conforme a su naturaleza” y según las instrucciones de la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas.

¹⁸⁵ En este caso la Jefatura Superior Administrativa debía adoptar una de estas tres soluciones: celebrar subasta con rebaja de un tercio del precio inicial en la región en la que se prevea un mayor interés; aplazar la venta hasta nueva orden; sacar los bienes a subasta sin precio inicial.

reclamaciones no hubieran prosperado. Si existían tercerías se satisfacían sus créditos tras la venta de los bienes y el dinero restante se ingresaba en la “Cuenta especial” de la Delegación de Hacienda.

Los efectos de la sentencia tenían una retroactividad que se remontaba al 18 de julio de 1936¹⁸⁶, lo que suponía que, en relación a los bienes del inculcado, se anulaba cualquier tipo de operación económica considerada “sospechosa” o “fraudulenta” (transmisiones, concesiones, traspasos, hipotecas, préstamos, donaciones, etc.) relacionada con los mismos¹⁸⁷.

Como hemos visto, la Ley de Responsabilidades Políticas ofrecía la posibilidad de atender las demandas sobre los bienes de los inculcados de terceras personas con algún derecho sobre ellos, siempre a cargo de los bienes embargados y, en algunos casos, con preferencia sobre el Estado. Para ello había de presentarse una demanda dentro del plazo de 30 días anteriormente citado, especificando los derechos que se tenían y la cuantía de los mismos. Cada una de las demandas generaba la incoación por parte del Juez Civil Especial de un ramo separado, con la participación de un Abogado del Estado. Si la cuantía en litigio superaba las 5.000 pesetas se procedía a un juicio declarativo de menor cuantía, que establecía un plazo ampliado de 30 días para que el Abogado del Estado correspondiente realizara consultas a la Jefatura del Servicio Nacional de lo Contencioso del Estado, tras el cual se publicaba en un término de cinco días un resumen de las conclusiones, tras el cual el Juez dictaba sentencia en otro plazo de cinco días, que podía ser apelada a la Audiencia correspondiente¹⁸⁸. Si la cantidad en litigio no superaba la anterior cantidad se producía un juicio verbal, sin posibilidad de recurso y sin consulta a la Jefatura citada. En caso que la demanda fuera aceptada se

¹⁸⁶ Todos los efectos del fallo se retrotraían a esta fecha. Basándose en el Código Civil se establecía que las sanciones económicas fruto de la sentencia tenían preferencia sobre cualquier tipo de crédito.

¹⁸⁷ Se exceptuaba las que se hubieran hecho a favor del Estado franquista, de su Ejército, al frente de guerra, hospitales o Auxilio Social, u otras con fines caritativos o religiosos de escasa cuantía, siempre que no redujesen sensiblemente los bienes del inculcado destinados a la “Cuenta Especial” que creaba esta Ley.

¹⁸⁸ Nuevamente se establecía una multa del 10% del valor de la reclamación en el caso que el recurso, tanto por parte del tercer reclamante como del inculcado, fuera desestimado en todas sus partes. Con ello se pretendía desincentivar la presentación de recursos.

suspendía el procedimiento por diez días, tras los cuales seguía la tramitación con oposición de la misma por parte del Abogado del Estado¹⁸⁹.

También se recogía en la Ley la posibilidad de que los bienes de la persona presuntamente con responsabilidades políticas estuvieran en zona republicana durante la guerra. En este caso éste podía solicitar la suspensión temporal de la tramitación de la demanda hasta que el territorio en el que se encontraban sus bienes cayera en manos franquistas, aunque se establecía un plazo de dos días para que presentara de la forma legal que escogiera el demandado una fianza de como mínimo la cuarta parte de la cuantía en litigio. En el caso que se demuestre que los bienes han sido destruidos esta fianza se hará automáticamente efectiva. Evidentemente, desde la publicación de la Ley de Responsabilidades Políticas y el final de la guerra transcurrieron escasamente dos meses, con lo que esta posibilidad no se utilizó.

En otro orden de cosas, la Ley de Responsabilidades Políticas suponía la derogación de toda la legislación franquista anterior en materia de incautación e intervención de bienes a los republicanos¹⁹⁰. Todos los créditos existentes a favor de personas que desde el 18 de julio de 1936 residían en zona republicana contra personas establecidas en territorio franquista desde mayo de 1937 se declaraban intervenidos por

¹⁸⁹ Esta legislación se basaba en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque suponía algunas alteraciones en los plazos establecidos, que se ampliaban, o la anulación de algunos procesos extraordinarios a favor del demandante.

¹⁹⁰ Las Comisiones de Incautación de Bienes creadas tras el Decreto-Ley de enero de 1937 debían abstenerse a partir de la publicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de iniciar nuevos expedientes, debiendo derivar toda la documentación que poseían a los Tribunales de Responsabilidades Políticas (que lo derivarían para su estudio a los Jueces Civiles Especiales). Las personas que habían sido multadas anteriormente ya no lo podían ser por la nueva Ley y se establecía la posibilidad de revisión no del fallo, sino de la sanción impuesta (el Tribunal de Responsabilidades Políticas podía proponer la sustitución de la incautación de bienes acordada por otra sanción económica más benigna). Hay que recordar que el citado decreto otorgaba al Ejército la potestad de *tomar toda clase de medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desapariciones de bienes de personas que por su actuación sean lógicamente responsables directos o subsidiarios por acción u omisión de daños y perjuicios de toda índole ocasionados directa o como consecuencia de oposición al triunfo del Movimiento Nacional* y las cantidades de dinero que recaudaban eran destinadas a la Caja General de Depósito, siendo destinadas *a los fines estatales de resarcimiento que procedan o a los que acuerde el Presidente de la Junta Técnica del Estado*. Por tanto la Ley de Responsabilidades Políticas sustituye a los organismos anteriores en esta materia y desarrolla sus funciones. M. CAJAL, op. cit., pp. 249-254. Las citadas Comisiones de Incautación tenían un plazo máximo de seis meses a partir de febrero de 1939 para entregar la documentación, rendir cuentas a los nuevos organismos y disolverse. Las únicas órdenes en este ámbito que quedaron vigentes fueron las de 19 de febrero de 1937, por la que el Estado incautaba y asumía la propiedad de los bienes de las entidades contrarias al Movimiento Nacional, que eran declaradas fuera de la Ley.

el Estado¹⁹¹. El afán recaudatorio de la Ley es innegable, siendo destinado lo recaudado, según su artículo 88 *a los fines estatales que, en relación con los daños causados por la guerra, el Gobierno determine*. Por tanto, se dejaba en manos del Gobierno la concreción del uso de esta fuente de recursos económicos, aunque su destino era el de reparar los daños producidos por la guerra. En otras palabras, se hacía pagar a los republicanos los destrozos de la guerra.

Desarrollo posterior de la Ley.

En general, la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidades Políticas fue problemática, debido a la avalancha de expedientes que tuvo que afrontar y que pronto evidenciaron el colapso de una jurisdicción que, además, adolecía de un gran número de defectos, como lo demuestran las consultas que se elevaron al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas de Madrid. En general, la Ley no fue acompañada de una financiación adecuada para su correcto funcionamiento y la correcta constitución de Tribunales y Juzgados y su procedimiento se evidenció como ineficaz.¹⁹²

Hay que tener en cuenta que la dotación de la jurisdicción de Responsabilidades Políticas debía ser, por su estructura interna y por los sujetos susceptibles de ser juzgados, mucho mayor que la del resto de jurisdicciones. De entrada, había que cubrir una plantilla de 373 personas, con perfiles diferentes, reforzadas con personal auxiliar. A su vez, la constitución de los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas y los Juzgados Instructores sufrió la escasez de personal que reuniera las condiciones marcadas por la Ley, por lo que finalmente la mayoría de nombramientos recayó sobre oficiales de complemento o provisionales que eran abogados pero no militares profesionales ni pertenecientes al Cuerpo Jurídico Militar. En cuanto a la justicia

¹⁹¹ Los responsables de los créditos debían presentar antes del 1 de junio de 1937 ante las Comisiones de Incautación de Bienes de las provincias donde residiesen una declaración jurada de esas deudas y de las que se hubieran satisfecho desde el 18 de julio de 1936. Las citadas Comisiones podían decretar el embargo de los créditos, anular la intervención de los mismos o, en el caso que la conducta y los antecedentes del acreedor fuera dudosa, se ordenaba el pago del importe de los créditos en una cuenta corriente a nombre de Incautación en el Banco de España de la capital de provincia correspondiente, con un plazo máximo de seis meses (prorrogables) y con posibilidad de realizarlo en fracciones. Todos los expedientes generados tenían que ser examinados por la Comisión Central administradora de los bienes incautados y las cuentas inspeccionadas por los Inspectores de Hacienda.

¹⁹² M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 124-149.

ordinaria, tuvo que pagar el desvío de parte de su personal a esta jurisdicción especial, normalmente el personal con menor antigüedad de las Audiencias. Por si estos problemas no fueran suficientes, la financiación resultó insuficiente, con lo que desde los mismos inicios de la actividad de los Tribunales los retrasos comenzaron a acumularse. La solución, tal y como propusieron los mismos Tribunales Regionales, era la ampliación de su número y la dotación de mayor personal, pero el incremento de recursos siempre fue notoriamente insuficiente, como lo demuestra la evolución de su presupuesto:¹⁹³

Año	Presupuesto total
	(ptas.)
1940	3.275.000
1941	3.581.275
1942	3.795.650
1943	3.313.500
1944	3.312.500
1945	3.252.500
1946	1.226.500
1947	1.052.500

Lo que es evidente es que hubo un gran número de quejas y consultas al máximo organismo de esta jurisdicción especial. Una de las atribuciones del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas era la de dictar instrucciones a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas para unificar criterios a la hora de aplicar la Ley. Los Tribunales Regionales planteaban dudas y problemas que iban surgiendo con su puesta en práctica, a la vez que realizaban memorias sobre su actividad. Disponemos de dos informes del Tribunal Nacional en los que se plantean estos problemas, en los que se demuestran los aspectos que más preocupaban a las autoridades y, en definitiva, los objetivos que realmente perseguía la Ley¹⁹⁴.

¹⁹³ Datos obtenidos de M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 262.

¹⁹⁴ Algunas referencias a estos informes en M. RISQUES y F. VILANOVA (eds.), op. cit., pp. 136-139.

El primero de estos documentos está fechado el 16 de junio de 1939, firmado en San Sebastián por el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas¹⁹⁵, siendo la primera ocasión que el Tribunal Nacional daba instrucciones a los Tribunales Regionales. En este documento el Tribunal Nacional hace un llamamiento para no olvidar el espíritu de la Ley, en el sentido que no debía utilizarse como arma vengativa, sino como elemento constructivo basado en la caridad cristiana. Este llamamiento demuestra cómo en la realidad la Ley supuso verdaderamente una herramienta de represión para el ajuste de cuentas. A pesar de este teórico espíritu conciliador se marcan claramente sus límites: *en cuanto sea compatible con la necesaria e imprescindible sanción a que se han hecho acreedores quienes con su desacertada conducta política condujeron a España al borde del abismo.*¹⁹⁶

Una de las cuestiones que más dificultades creó a los Tribunales Regionales fue la distinción entre responsabilidades individuales o criminales y las políticas. Éstas últimas son el objeto de la Ley y tienen características especiales¹⁹⁷. Así, según el Tribunal Nacional las responsabilidades políticas deben quedar claras por su gran trascendencia social y por ser fruto de una situación de excepción. La divide en dos aspectos: la reparación económica de los daños que se hayan causado (basándose en el artículo 1902 de Código Civil) y la prevención de los daños que pudieran causarse a la sociedad por la conducta política¹⁹⁸. Además, la responsabilidad política se valora en un período concreto: del 1 de octubre de 1934 al 1 de abril de 1939¹⁹⁹; y se considera que

¹⁹⁵ “Instrucciones sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas dirigidas a los Tribunales Regionales”. AHPCS. Caja 19637.

¹⁹⁶ Ibidem. Pág. 1. En este informe se alude a un discurso de Franco pronunciado el 18 de julio de 1938: *Lo pródigo de la caridad cristiana, que no tiene límites para los engañados y para los que arrepentidos y vengan de buena fe a nuestro campo, no rebasará los límites de la prudencia ni permitirá infiltrarse a nuestro lado a los recalcitrantes enemigos de la Patria: que la salud de ésta, como la de los cuerpos necesita de cuarentena para quienes procedan del campo apestado*”.

¹⁹⁷ Ibidem. Pág. 2. *Una subversión semejante a la que hemos sufrido, que ha puesto en peligro la vida de la misma de la Patria y ha originado tan terribles estragos de todo orden, ha sido creada e incubada por una temeraria conducta política, siendo natural que se haga a los culpables responsables con sus bienes de los gravísimos daños inferidos a la sociedad, y también que se adopten medidas para evitar en determinados casos que los culpables que sigan siendo peligrosos puedan dañarla nuevamente.*

¹⁹⁸ Se invocaba el antecedente de la Ley de Vagos y Maleantes de la República, que incluye incluso la reclusión indefinida para los reincidentes en el delito contra la propiedad a título de peligrosidad.

¹⁹⁹ Aunque cuando se publica la Ley de Responsabilidades Políticas la guerra todavía no ha finalizado.

existen dos niveles en ella: una difusa, que afecta a la mayoría de los españoles, por lo que es prácticamente imposible de juzgar, y otra concreta en hechos y juzgable.

[...] En la inmensa catástrofe que ha representado para España la revolución roja, hay una responsabilidad difusa de casi todos los Españoles, por ello inexigible: la de todos aquellos que con sus tolerancias y debilidades permitieron las propagandas contrarias a los ideales de la España eterna o con su conducta egoísta prestaron un sólido punto de apoyo a las rebeldías sociales, pero hay otra más circunscrita y limitada, que es la que se exige: la de aquellos que después de la Revolución de octubre de 1934 que hizo ver a los más ciegos el abismo a que nos conducía la revolución continuaron favoreciéndola o secundándola²⁰⁰

Por tanto, una de las ideas básicas de los que controlaban la aplicación de esta Ley era que prácticamente todos los españoles eran sospechosos de responsabilidad política y que existía una responsabilidad inexigible y otra exigible. Este debate se relaciona con otra de las preocupaciones manifestadas por los Tribunales Regionales: la cuestión de la inculpación o no de los meros afiliados a los partidos políticos y organizaciones afines al Frente Popular. En general, la idea que se manifiesta es la de perseguir sin ningún tipo de duda a los dirigentes o a las personas que hayan tenido una importancia pública notoria, ya sean dirigentes de partidos, sindicatos u organizaciones sociales, diputados, periodistas, intelectuales, masones, etc. En este sentido, las instrucciones eran perseguir especialmente a las personas que ostentaron cargos durante el gobierno del Frente Popular (desde el 16 de febrero de 1936) y el final de la guerra, sobre todo si eran de nombramiento por confianza del gobierno, los diputados que favorecieron la formación del gobierno del Frente Popular, los masones de todo tipo, los que persiguieron y juzgaron a personas adictas al golpe franquista, etc. Mención especial merecían los que controlaban los medios de comunicación social²⁰¹,

²⁰⁰ Ibidem. Pág. 3.

²⁰¹ Ser redactor de un periódico se consideraba automáticamente motivo de responsabilidades políticas, así como haber participado en cualquier reunión política de carecer público. Eran, pues, culpables *todos los oradores de los mítines revolucionarios, todos los redactores de los periódicos rojos, todos los locutores de radio [...]*. Ibidem. Pág. 6.

considerados verdaderos inductores de los hechos que la Ley sancionaba, y los intelectuales de izquierdas²⁰².

Donde existían dudas o podían surgir diversidad de criterios era en la cuestión de la exigencia de responsabilidades a los simples afiliados a los partidos, sindicatos o asociaciones afines al Frente Popular. Siguiendo la Ley estrictamente se podía exigir responsabilidades a aquellos afiliados que lo eran antes del estallido de la guerra y que mantuvieron su afiliación. Pero esta cuestión, que ya había generado polémica entre diversos Ministerios en el proceso de creación de la Ley, era impracticable por el elevado número de personas implicadas. La decisión del Tribunal Nacional fue dictaminar que no se podía exigir responsabilidades políticas a los simples afiliados ya que en muchos casos la afiliación era obligada para poder trabajar, con lo que no se trataba de una afiliación libre y sincera, aunque se exceptúa concretamente al Partido Socialista y a los partidos miembros del Frente Popular. Como comprobaremos, la cuestión seguirá generando dudas y diversas opiniones.

Otras cuestiones que reclamaron la atención del Tribunal Nacional fue el aviso a los Tribunales Regionales que únicamente podían aplicar obligatoriamente a los inculcados sanciones económicas, con lo que suponemos que inicialmente algún Tribunal de Responsabilidades Políticas se excedería en sus atribuciones; o que en los casos de sanción a los que permanecieron en el extranjero durante la guerra no incurren en responsabilidades políticas los hijos y la mujer, ya que no eran libre de abandonar al cabeza de familia.

Finalmente el documento del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas acaba explicando que el objetivo de la Ley es la revisión de conductas que lleve a la aclaración de las culpas del pasado, con una triple finalidad: pagar las culpas para reparar los daños causados, evitar que los hechos puedan repetirse y tratar de

²⁰² Según el Tribunal Nacional tenían una especial responsabilidad los intelectuales del izquierdismo, porque *aparte de su cooperación personal, contribuyeron a arrastrar a las masas ignorantes [...]. En estos casos, y singularmente cuando se trate de profesores u otros elementos directivos de la sociedad que envenenaron a los jóvenes con sus propagandas subversivas será de suma conveniencia que los Tribunales requieran las informaciones pertinentes.* Ibidem. Pág. 7. Asimismo, se pone el ejemplo del maestro para comentar que las inhabilitaciones pueden ser de cargos y de funciones: *Así el maestro conocido por sus predicaciones demolidoras a sus discípulos podrá ser privado de la facultad de enseñar cuando existan motivos para temer que persista en su actitud anterior.* Ibidem. Pág. 8.

reincorporar al nuevo orden a aquellos casos susceptibles de rectificación. Se trata de un llamamiento para que todos los miembros de la justicia *acierten a dar fin a una de las tareas más delicadas a una de las empresas más arduas que nos incumben en esta hora solemne de Paz: la de REVISAR la conducta de un gran número de españoles durante el doloroso período que va de octubre de 1934 hasta el fin de nuestra guerra liberadora, para determinar su parte de culpa en la gran catástrofe que ha representado para España la revolución roja, fijar con equidad la contribución de los culpables a la obra reparadora, adoptar las medidas indispensables para evitar la repetición de hechos semejantes con el alejamiento temporal de algunos de sus causantes de determinados puestos y reincorporar cuanto antes a España a tantas inteligencias enfermas, a tantas voluntades claudicantes, a fin de que todos puedan trabajar en la formación de una España libre y poderosa, profundamente enraizada en su glorioso pasado y capaz por eso mismo de afrontar todas las perspectivas del porvenir.*²⁰³

Los problemas en la aplicación de la Ley y las consultas de los Tribunales Regionales al Tribunal Nacional debieron ser abundantes porque sólo seis meses después se redactó otro informe, que ha llegado hasta nosotros²⁰⁴. En él se retoman los temas que en el anterior documento habían tenido más importancia, a la vez que se unen nuevas consultas, fruto de una Ley que abarca una gran variedad de aspectos de la vida de la mayoría de los ciudadanos. Es significativo el nuevo llamamiento a la prudencia apelando el presunto espíritu de la Ley, en el sentido que, excepto los casos más graves, no debía destruirse el patrimonio familiar del inculpado, ya que, en última instancia, se trataba de integrarlo en el nuevo orden.

Una de las cuestiones más importantes ya hemos visto que fue la del juicio de los meros afiliados a los partidos políticos. En este segundo informe se expone nuevamente la necesidad de unificar criterios para imponerles las sanciones, para lo que se dan nuevas instrucciones orientadas a una mayor concreción de las penas, aunque dentro de un confuso marco de flexibilidad, ya que al final se dejaba plena libertad a los

²⁰³ Ibidem. Pág. 10.

²⁰⁴ “Instrucciones para los Tribunales Regionales”. AHPCS. Caja 19637. Este documento está firmado el 2 de febrero de 1940, aunque es fruto de la reunión de los miembros del Tribunal Nacional el 19 de diciembre de 1939.

Tribunales para establecer las sanciones que considerara oportunas. Así, se condicionaba la sanción a los simples afiliados a sus medios de vida, buscando la proporción entre castigo y patrimonio personal, y se especificaba que únicamente debía aplicarse para casos especiales y concretos. Se establecía que la sanción no excedería de 500 pesetas si el patrimonio del inculcado no superaba las 6.000 pesetas, y no excedería de 1.250 pesetas si no lo hacía de las 12.000 pesetas. Por otra parte, el Tribunal Nacional ordenaba que la simple afiliación debía conllevar la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos de mando o de confianza. De esta forma, esta importante cuestión seguía sin regirse por criterios totalmente claros y objetivos, con lo que se abría la puerta a la disparidad de criterios según el Tribunal y, en definitiva, a sus abusos y caprichos.

Otro tema importante fue nuevamente el de la determinación de la responsabilidad, que el Tribunal Nacional entendía que debía valorarse en una doble dimensión: la objetiva, basada en el cargo ocupado por el inculcado o su actitud concreta en el pasado, y la subjetiva o individual, siempre delicada porque surge de las circunstancias personales del inculcado, por lo que los Tribunales debían tener más cuidado a la hora de valorarlas²⁰⁵. En el fondo, continuaba la idea de exigir mayores responsabilidades a aquellas personas que tenían una dimensión pública notoria. En este sentido, se daban instrucciones para que en estos casos se impusiera sistemáticamente la inhabilitación, como forma de prevenir la reproducción de situaciones peligrosas para el régimen.²⁰⁶

El resto de instrucciones tenían un marcado carácter técnico, respondiendo directamente a consultas concretas de algunos Tribunales Regionales. De esta forma, se aclaraba que los candidatos de partidos de centro y de derechas no debían ser procesados (por tanto, alguno pudo verse afectado por esta Ley), pero sí los de centro y

²⁰⁵ *No se puede medir con el mismo rasero al hombre inculto, de formación deficiente, víctima muchas veces de las sugerencias del ambiente, que al intelectual, que, traicionando su misión y de espaldas a los más elementales postulados de la moral y a los imperativos de nuestra Historia, ha envenenado con sus predicaciones, frecuentemente utilitarias, el alma popular.* Ibidem. Pág. 2

²⁰⁶ El Tribunal Nacional hacía en este sentido un llamamiento específico: *Llamamos especialmente la atención de los Tribunales Regionales sobre la necesidad de impedir que aquellos profesores que se han distinguido por sus propagandas subversivas, muchas veces en la misma cátedra continúen en la posibilidad de ejercerla en lo sucesivo.* Ibidem. Pág. 2.

de izquierda que se coaligaron con el Frente Popular, así como los candidatos del gobierno que convocó las elecciones de 1936. Si existían dudas sobre la dependencia de algunos partidos respecto al Frente Popular se debía consultar directamente al gobierno.

Uno de los problemas a los que parece que se tuvieron que enfrentar los Tribunales Regionales fue el de la insolvencia de la mayoría de procesados por responsabilidades políticas. La solución propuesta por el Tribunal Nacional fue la de aplicar en estos casos sanciones que realmente pudieran llevarse a la práctica, es decir, sanciones prudentes y de escasa cuantía, para lo que se encomendaba a los Tribunales Regionales una atenta vigilancia de los inculpados y de su evolución económica. Se demuestra, por tanto, que uno de los objetivos de la Ley era la recaudación de dinero castigando en la medida de lo posible a los que consideraba responsables políticos.

Una cuestión importante, que ya fue tratado en las anteriores instrucciones del Tribunal Nacional, era el de la incoación de expedientes. Todo parece indicar que la tendencia de los Tribunales Regionales fue la de convertirse en verdaderos agentes de investigación de la población. El Tribunal Nacional comenta los numerosos casos de Tribunales Militares que, *con celo digno de admiración*, estaban remitiendo a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas testimonios de sentencias sobre delitos que no eran competencia de los Tribunales de Responsabilidades Políticas o de sentencias absolutorias pero que podían dar lugar a responsabilidades políticas. El Tribunal Nacional explica que estas sentencias no deberían ser tenidas en cuenta, pero daba instrucciones para pedir a los Tribunales Militares ampliación de testimonio de los expedientes para iniciar investigaciones por si procedía iniciar causas y expedientes de responsabilidades políticas, o proceder al archivo del testimonio²⁰⁷. Por si esto no bastase, el Tribunal Nacional recordaba que los Tribunales Regionales no tenían iniciativa para realizar averiguaciones para incoar un expediente (debían esperar a tener una denuncia), pero daba instrucciones para que si se consideraba necesario se podía

²⁰⁷ Por tanto, una persona podría haber sufrido un Consejo de Guerra, con todo lo que ello conllevaba, haber sido declarado absuelto y posteriormente tener que sufrir la incoación de un expediente de responsabilidades políticas, con todo lo que ello también conllevaba de pérdida de libertad y de anulación de la capacidad económica que ya hemos analizado. Aunque, en el mejor de los casos, en ambos procesos estas personas fueran absueltas, el resultado podían ser varios años de sospecha y represión.

realizar²⁰⁸. Esto nos demuestra el verdadero estado policial en que se convirtió España tras la guerra civil y cómo toda la legalidad se subordinaba a la persecución de los republicanos. La mancha de la sospecha se extendía por toda la población y se hacía omnipresente. En otro sentido, la dependencia de los Tribunales Militares era clara²⁰⁹, aunque se especificaba que había dos casos en los que los Tribunales de Responsabilidades Políticas no necesitaban de la jurisdicción militar: el de rebeldía del inculcado por causa criminal y el de huida del territorio nacional o de paradero desconocido.

Una prueba más de la disfunción de la Ley en su aplicación y de su dureza fue la constatación de la imposibilidad del cumplimiento de muchos de sus aspectos. Como ha analizado M. Álvaro, pronto se evidenció la ineficacia del procedimiento, demostrada con la acumulación de expedientes sin incoar y de expedientes incoados sin tramitar, a lo que se unía el escaso compromiso de los particulares e incluso de algunas autoridades a la hora de denunciar y el bajo perfil de las personas procesadas²¹⁰. Así, el Tribunal Nacional dio permiso para que los plazos que marcaba la Ley pudieran alterarse si los informes preceptivos no llegaban a tiempo, se daban instrucciones para aceptar las declaraciones juradas de bienes de los inculcados que se presentaran fuera del plazo de

²⁰⁸ Literalmente las instrucciones del Tribunal Nacional eran que si un Tribunal Regional necesitaba verdaderamente realizar averiguaciones para incoar un expediente podía decidir “sin más” la formación de un nuevo expediente. Ibidem. Pág. 5.

²⁰⁹ Se especificaba que los Jueces de Responsabilidades Políticas no debían investigar los hechos prejuzgados en la sentencia militar, pero sí las circunstancias económicas y familiares del encausado. En el fondo, lo que se producía era un nuevo juicio por los mismos hechos que ya habían sido enjuiciados, aunque no se realizara una nueva investigación.

²¹⁰ Parece que algunos Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas se quejaron de la falta de colaboración de los ciudadanos a la hora de denunciar a presuntos responsables políticos, lo que habría que achacar al desconocimiento de esta nueva jurisdicción especial y al miedo a las consecuencias de la represión, especialmente, como comenta M. Álvaro, en zonas como Canarias donde la represión franquista fue brutal y no se correspondió a situaciones represivas graves anteriores. Otros problemas que tuvo la Ley de Responsabilidades Políticas en su desarrollo fue, según M. Álvaro, la ineficacia de los informes que las autoridades locales remitían y la tardanza con la que llegaban. En cualquier caso, esta circunstancia se debería más a la saturación de estas autoridades, que debían realizar informes para múltiples jurisdicciones especiales y trámites de la vida cotidiana (certificados de buen comportamiento, etc.), y a la falta de medios propia de la situación de posguerra, que a la dudosa colaboración de las autoridades, ya que éstas solían ser incondicionales del poder que les había nombrado y legitimado. Los jueces, además, se quejaron de la tardanza con la que se publicaban sus edictos en los Diarios Oficiales. Por otra parte, no se les facilitaba el paradero del inculcado, con lo que perdían tiempo en su localización (normalmente una cárcel si el procesado había sufrido un consejo de guerra). Tampoco se tuvieron en cuenta las dificultades de comunicación con algunas zonas del país, especialmente las islas y las zonas rurales, con lo que cumplir los plazos establecidos por la Ley era prácticamente imposible. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 129-141.

8 días que marca la Ley o para que se facilitara la presentación de pruebas de descargo por parte del inculcado²¹¹. Además, se pedía a los jueces que, al igual que las cargas familiares y los bienes del inculcado debían regirse por la claridad y la concreción, las sentencias debían ser concretas, huyendo de la ambigüedad y la vaguedad²¹².

En definitiva, las instrucciones que el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas dio a los distintos Tribunales Regionales nos demuestran cómo esta Ley fue utilizada ampliamente como instrumento de represión hacia los antiguos republicanos. Este mecanismo represivo estuvo plagado de dificultades técnicas y prácticas por la excesiva amplitud del número de personas afectadas y por la naturaleza misma de la materia exigible, tendente a la subjetividad. Como hemos visto, en muchos aspectos la Ley no estaba completamente clara y su dependencia respecto a la intencionalidad represiva gubernamental era decisiva. Esta falta de claridad fue, sin duda, base de una mayor represión de la población.

Desde el punto de vista de la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidades Políticas uno de los asuntos de mayor importancia fue el de ocupar y repartir los cargos creados por esta nueva jurisdicción especial. Muchos de los candidatos los pretendían para ganarse la vida, pero otros pretendían de paso demostrar su adhesión al nuevo Estado franquista e iniciar su carrera profesional y social dentro del régimen²¹³. Para estos cargos se presentaron secretarios de Juzgados de Instrucción, jueces y militares principalmente, aportando normalmente como méritos haber sido encarcelado, haber sido refugiado y, en general, haber sufrido la represión republicana. En un contexto de

²¹¹ Parece que algunos Tribunales Regionales se quejaron de la indefensión en que quedaban los inculcados, a los que la Ley dificultaba la presentación de estas pruebas de descargo.

²¹² Esta vaguedad podía ser el origen de multitud de abusos y venganzas. Para el Tribunal Nacional *Decir, por ejemplo, que el inculcado se opuso al Movimiento Nacional, o que contribuyó con su actuación a la subversión que lo hizo necesaria es no decir nada concreto y categórico. Hay que consignar de modo específico los hechos que, a juicio del Tribunal, permiten hacer tales afirmaciones.* Ibidem. Pág. 6.

²¹³ Por ejemplo inicialmente en el Tribunal Regional de Valencia el Presidente era un Teniente Coronel de Infantería (su suplente era un Comandante de Infantería), Los vocales eran un Juez (su suplente también), un abogado de FET de las JONS y Catedrático (su suplente era del partido, abogado y notario), el Secretario era un Oficial Primero de Sala (su suplente era un Oficial segundo de Sala), el Juez Civil Especial era un Juez de Primera Instancia, con un Secretario que era Secretario de Juzgado de Primera Instancia. En el Juzgado Instructor de Castellón el Juez era un Teniente Provisional de Infantería y abogado, el Secretario era un Brigada de Infantería y su suplente era un soldado de Infantería. BOE nº 156, de 5 de junio de 1939. Ver Apéndice Documental.

corrupción, abandono de funciones e incompatibilidades laborales, fue el propio gobierno el que prohibió, parece ser que sin éxito, la simultaneidad de cargos de abogado por cuenta propia y miembro de un Tribunal de Responsabilidades Políticas, una situación que se hizo frecuente ²¹⁴ y que generaba múltiples abusos. Otro problema fue el hecho de que muchos trabajadores realizaban su función lentamente por miedo a liquidar pronto su trabajo y quedarse sin empleo. La solución adoptada fue nombrarlos funcionarios públicos en propiedad. ²¹⁵

La situación de colapso de esta jurisdicción especial no tardó en ser evidente, como lo demuestran los datos de su primer año de vigencia. Entre octubre de 1939 y septiembre de 1940 los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas habían incoado 38.058 expedientes, de los que únicamente 13.410, el 35,23%, habían sido resueltos. Es decir, la incoación de expedientes era masiva, pero su resolución muy lenta. ²¹⁶

A mediados de 1941 se ordenó la realización de una serie de informes a los diversos Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas para conocer la situación real de la jurisdicción especial, evidenciándose unos problemas que cuestionaban seriamente la puesta en práctica la Ley de Responsabilidades Políticas y la necesidad de ciertos cambios en ella. La ocasión vino a principios de 1942, tras tres años de vigencia de la Ley ²¹⁷. Una serie de factores fueron los decisivos. En primer lugar, el número de inculpados y afectados era enorme: en el año 1941 se había incoado 125.250 expedientes (de los que sólo se habían resuelto el 29%), a los que había que sumar 101.440 expedientes pendientes de incoación ²¹⁸. Con estas cifras los Juzgados

²¹⁴ Orden de 25 de marzo de 1941. BOE nº 173.

²¹⁵ M. RISQUES y F. VILANOVA (eds.), op. cit., pp. 144-146.

²¹⁶ M. ÁLVARO (2007), op. cit., pp. 141-143.

²¹⁷ Tras la crisis de gobierno de mayo de 1941, que llevó a la Subsecretaría de la Presidencia a Luis Carreiro Blanco, se procedió a recoger información sobre la actuación de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y sus Juzgados hasta principios de octubre de 1941. Esta información fue decisiva para decidir la reforma de la Ley. M. ÁLVARO (1990), op. cit., pág. 153.

²¹⁸ En este año se había resuelto 38.055 expedientes y había 87.231 pendientes de resolución. En el Tribunal Regional de Valencia, que es el que corresponde a la presente investigación, existía en 1941 la cantidad de 15.841 expedientes incoados, 2.739 expedientes resueltos, 10.115 en trámites y 13.102 expedientes pendientes de resolución. La cifra de expedientes pendientes de incoación es relativa porque los Tribunales de Responsabilidades Políticas se recibían testimonios constantemente y no se registraban

estaban desbordados de trabajo, no podían dar abasto²¹⁹ y las cárceles rebosaban prisioneros políticos, con lo que se producía un importante problema de financiación para el nuevo Estado. En segundo lugar, la mayoría de los procesados eran pobres y carecían de bienes para afrontar las sanciones económicas que se les imponía y muchos permanecían en el exilio, lejos del alcance de los Tribunales. En tercer lugar, en 1942 ya se había producido la parte más importante de la represión de los republicanos, cuyos más destacados dirigentes habían sido juzgados, encarcelados, fusilados u obligados al exilio²²⁰. El trabajo de “limpieza” había sido realizado en su parte fundamental. Y en cuarto lugar, la evolución de la Segunda Guerra Mundial, que a partir de finales de 1941 comenzó a favorecer a los Aliados, aconsejaba cierta moderación en los planteamientos y el retorno, en la medida de lo posible, a la legalidad²²¹. En definitiva, se hacía necesaria una reforma de la Ley para adecuarla a la nueva situación social y política, tanto nacional como internacional, y lograr aumentar su efectividad real. Según las investigaciones de M. Álvaro, en otoño de 1941 ya se estaba pensando la modificación de la Ley de 9 de febrero de 1939.²²²

y numeraban hasta la incoación del mismo. F. VILANOVA, op. cit., pág. 511. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se habla de expedientes y no de inculpadados, lo que no es lo mismo, ya que un expediente perfectamente podía afectar a decenas o cientos de personas (la mayoría eran expedientes colectivos), por lo que la cifra real de afectados era mucho mayor. M. ÁLVARO (1990), op. cit., pág. 153; M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 144.

²¹⁹ Conviene recordar que se trataba de una red de 18 Tribunales Regionales y de 61 Juzgados de Instrucción Provinciales. Incluso así resultaron insuficientes para atender a los expedientes abiertos masivamente.

²²⁰ Los efectos de la Ley de Responsabilidades Políticas alcanzaban todo el territorio nacional, incluyendo a partir de junio de 1941 la zona de Tánger, según la Ley de 31 de mayo de 1941, publicada en el BOE de 3 de junio de 1941. El Tribunal Regional competente era el de Ceuta. Hay que recordar que Franco quería convertir a España en la potencia dominadora del Norte de África, después de la derrota francesa en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la única iniciativa real que llevó a cabo fue la ocupación de Tánger y sus alrededores el 14 de junio de 1940. Esta ciudad disponía desde 1906 de estatuto de ciudad internacional. La ocupación franquista duró hasta 1945, cuando la ciudad volvió a su situación inicial. Pág. 152.

²²¹ M. LANERO, op. cit., pp. 332-333; I. BERDUGO, op. cit., pág. 100; I. DOMÉNECH y F. VÁZQUEZ, op. cit., pág. 222; C. MIR (2000), pág. 80; M. RISQUES y F. VILANOVA, op. cit., pág. 147. Hay autores como M. ÁLVARO que relativizan la importancia de la evolución de la Segunda Guerra Mundial porque consideran que a principios de 1942 todavía no se evidenciaba un cambio de orientación en ella favorable a los Aliados. Este autor concede más importancia a la consumación de la parte más importante de la represión. M. ÁLVARO (1990), op. cit., pág. 156.

²²² M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 159.

La reforma de febrero de 1942.

En su introducción se justifica esta reforma como medida necesaria para aplicar la Ley de Responsabilidades Políticas en un nuevo contexto que ya no es de guerra, acelerar la liquidación de las culpas que persigue y evitar motivos para que la población se sienta dividida. En general se busca una mayor efectividad y una normalización de la situación con medidas como los supuestos acusatorios, la vuelta a la jurisdicción ordinaria, la encomienda de la parte administrativa al Ministerio de Hacienda y toda una serie de cambios que pasamos a comentar encaminados al ahorro presupuestario.²²³

Como hemos visto, uno de los objetivos prioritarios de la reforma era disminuir, en la medida de lo posible, los casos afectados por la Ley debido al colapso judicial, el hacinamiento de las cárceles, el problema financiero y la evidencia que la mayoría de los casos no podían hacer frente a las sanciones impuestas. De esta forma, dejaron de estar afectados por la exigencia de responsabilidades políticas las personas incluidas en estos supuestos: aquellos que todavía no habían sido juzgados y que tenían una sentencia previa de los Tribunales Militares inferior a seis años y un día; aquellos cuya pena no excedía de doce años si el Tribunal lo consideraba de escasa significación social y peligrosidad política; aquellos que ocuparon cargos de poca importancia, de efímera posesión o de escasa peligrosidad en los partidos y asociaciones declarados ilegales, quedando sus casos sobreesidos; los simples afiliados a estas organizaciones, siempre que no hubieran tenido actuaciones destacadas; y los simples electores de candidaturas de estos partidos, los simples asistentes a reuniones o manifestaciones y los sólo simpatizantes que no se hubieran distinguido por su actuación pública. Respecto a la masonería únicamente se pasaba a juzgar los que ya lo hubieran sido por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y los que hubieran fallecido, a los que sólo se les pasaba a poder sancionar económicamente. Por lo demás, el resto de supuestos por los que una persona podía ser investigada se mantenían.

Como podemos comprobar, el número de afectados por la Ley quedó rebajado, pero sobre todo se redujo el número de sospechosos de ser responsables políticamente,

²²³ Esta reforma se ordenó por Ley de 19 de febrero de 1942 y se encuentra en el BOE nº 66, de 7 de marzo de 1942.

con todo lo que ello implicaba²²⁴. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos cambios en ningún caso implicaban una revisión de los fallos que ya se habían emitido, con lo que el elevado número de personas que se encontraba en pleno proceso de juicio o en la cárcel no se benefició de ella. Por otra parte, en general, es importante la introducción de un factor nuevo y decisivo como es la consideración por parte del Juez de la importancia político-social del inculcado y de los hechos investigados, lo que, en el fondo, vuelve a basar la Ley en aspectos subjetivos.

Por otra parte, se concedía la posibilidad que, si el Tribunal lo creía conveniente, las atenuantes de la Ley se convirtieran directamente en eximentes, dando lugar al sobreseimiento provisional del caso. En este sentido, una de las mayores aberraciones de la Ley se rectificó al convertir la anterior atenuante de ser menor de 18 años a ser eximente para los efectos de responsabilidades políticas. También pasaba a poder ser atenuante o incluso eximente el arrepentimiento público seguido de adhesión y colaboración con el régimen franquista.

Esta reforma también supuso una reorganización de su estructura orgánica. El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas se mantuvo, aunque desapareció la Jefatura Superior Administrativa²²⁵. Se eliminaron los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, siendo asumidas sus funciones por las Audiencias Provinciales²²⁶, y desaparecieron los Juzgados Instructores Provinciales y los Juzgados Civiles Especiales, cuyas funciones pasaron a los Juzgados de Instrucción y de Primera

²²⁴ De alguna forma, esta reforma pone fin al debate anterior sobre quién debía o no estar afectado por la Ley de Responsabilidades Políticas y dejaba de lado propuestas prácticamente irrealizables en las que casi toda la población se convertía en susceptible de ser juzgada por responsabilidades políticas.

²²⁵ Sus funciones se desglosaron y pasaron a ser asumidas por distintos organismos como la Presidencia del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, los Ministerios de Hacienda y Justicia, y los Presidentes de las Audiencias Territoriales. El personal que trabajaba en ella fue asumido por el Tribunal Nacional y el resto de personal se integró en el Ministerio de Justicia. En este sentido, ver la Orden de 27 de junio de 1942 en el BOE nº 184 de 1942, así como la Orden de 9 de julio de 1942 en el BOE nº 208 de 1942. Por la Orden de 14 de agosto de 1942 publicada en el BOE nº 230 de 1942 se establecía que se diera derecho preferente al personal que había integrado los Juzgados Civiles Especiales de Responsabilidades Políticas a la hora de hacer valer sus méritos en los concursos para ingresar en las Secretarías Oficiales.

²²⁶ Las Audiencias Provinciales quedaban en situación de subordinación respecto los organismos especiales de responsabilidades políticas. Así, recibían instrucciones del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, al igual que del Fiscal del Tribunal Supremo, siempre con un carácter preferente respecto a los asuntos de la justicia ordinaria.

Instancia ordinarios. En palabras de M. Lanero, se trataba de pasar de una jurisdicción especial a una aplicación de una Ley especial²²⁷. Se concedió a los fiscales la posibilidad de entender tanto de causas criminales como políticas y se les dio la potestad exclusiva de la incoación de nuevos expedientes, ya que no se admitía como causa de apertura de expediente cualquier informe condenatorio de otra jurisdicción. Para toda esta reforma se destinaron las ayudas económicas necesarias²²⁸.

Como hemos indicado el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas continuaba ejerciendo con su misma composición sus funciones, aunque dependiendo del Ministerio de Justicia y funcionando en dos Salas para lograr una mayor rapidez en el despacho de los asuntos. La primera Sala estaba compuesta por el Presidente, el suplente del Vicepresidente y los dos Vocales propietarios. La segunda Sala se componía de los dos suplentes de los Vocales y el Vicepresidente, teniendo como función el estudio de los posibles recursos de revisión de fallos y de alzada, siempre bajo la autoridad del Presidente²²⁹. El Tribunal Nacional podía modificar las sanciones que se acuerden tras estos recursos o imponer las penas accesorias que propone la Ley si lo considera oportuno y podía aceptar revisiones fuera del plazo por motivos justificados, como en el caso de gestiones realizadas desde el extranjero.

A fin de agilizar la tramitación de los expedientes se aprobó que si no se recibían en el término establecido de 48 horas los informes informativos por parte de las autoridades locales en vez de paralizarse el proceso podían ser sustituidos por una rápida información del Servicio de Investigación y Vigilancia o de la Guardia Civil en un plazo máximo de un mes, y si todo esto fallaba se permitía que continuase la

²²⁷ M. LANERO, op. cit., pág. 333. Sin embargo, esto supuso un mayor colapso de la justicia ordinaria, ya que se tuvieron que asumir importantes competencias como los asuntos de tercerías o la incautación de bienes a particulares o sociedades, que se declaraba tenían carácter preferente respecto los asuntos de la justicia ordinaria. Esta nueva estructura orgánica fue ratificada por el Decreto de 15 de junio de 1942, publicado en el BOE nº 182 de 1 de julio de 1942 y completada por el Decreto rectificado de 15 de junio de 1942 en el BOE nº 199 de 18 de julio de 1942.

²²⁸ Por la Ley de 10 de noviembre de 1942, publicada en el BOE nº 328 de 21 de noviembre de 1942 se concedieron varios créditos extraordinarios por un importe total de 1.597.625 pesetas destinadas a la reorganización de los servicios de Responsabilidades Políticas. De esa cantidad 1.157.000 pesetas se destinaban a gastos de Personal, 425.625 pesetas gastos de material y 15.000 pesetas a gastos diversos.

²²⁹ Para acceder a la composición y los salarios de los componentes del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas a partir de noviembre de 1942 consultar el Apéndice Documental.

tramitación sin más. Además, se permitía que el Juez prescindiera de dichos informes para casos de destacada actuación pública.

Se estableció que cuando el inculcado fuera considerado insolvente o que su jornal o renta fuera realmente escaso (la referencia era el doble de un jornal de un bracero), aunque poseyera bienes, si todo ello no excedía de un valor de 25.000 pesetas, el caso debía ser declarado por el Juez sobreseído²³⁰, informando al gobernador civil y al Jefe provincial de FET de las JONS de los cargos, quienes podían acordar la inhabilitación del inculcado para cargos municipales o provinciales por un periodo de cinco años y su depuración dentro del partido. De esta manera se daba una solución al problema que la gran mayoría de los casos investigados eran insolventes y no podían hacer frente a las sanciones que se les imponían, con lo que se perjudicaba el objetivo recaudatorio de la Ley. Como veremos, la mayor parte de los casos quedaron sobreseídos por este motivo.

Administrativamente, se creaba un Registro Central de Responsables Políticos en el Ministerio de Justicia, que recogía información sobre todas las personas que habían sufrido la incoación de un expediente y sus posibles sentencias, como una sección especial del Registro General de Antecedentes Penales. El Ministerio de Hacienda asumía todas las competencias en cuanto a investigación de los bienes de los inculcados, su modificación, las posibles reclamaciones sobre bienes incautados y el cobro de las sanciones.

Finalmente esta reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas establecía un plazo de tres meses a los Tribunales Regionales, a los Juzgados Instructores Provinciales y a los Juzgados Civiles Especiales para entregar los expedientes y la documentación que disponían²³¹ a cada uno de los organismos que pasaban a cumplir sus funciones.

²³⁰ Como veremos en el caso de la Vall d'Uixó y como ocurrió también en Manlleu, la mayoría de los casos incoados a partir de 1939 conocieron su sentencia a partir de 1942 y, al tratarse de personas insolventes y en la miseria, sus casos quedaron sobreseídos. I. DOMÉNECH y F. VÁZQUEZ, op. cit., pág. 223.

²³¹ Se daba un plazo de dos meses a los Tribunales Regionales para que fallaran los asuntos que tuvieran pendientes y el mismo plazo a los Juzgados Instructores Provinciales y a los Juzgados Civiles Especiales para que terminaran las diligencias pendientes de urgente resolución. En ningún caso se permitía la ejecución de nuevos trámites.

En definitiva, la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas buscaba aligerar los trámites y plazos de ejecución, buscar mayor eficiencia al descartar a los inculpadados insolventes, cambiar su estructura interna acercándola a la justicia ordinaria y suavizar los casos de posibles afectados por la misma, cuyo número se había convertido en un auténtico problema financiero y de gestión para el Estado. La voluntad de depurar a todos aquellos que habían participado anteriormente a favor de la República se mantenía exactamente igual, lo único que cambiaba eran los mecanismos para lograr una mayor eficiencia y un impacto económico más real.²³²

Evolución posterior y fin de la Ley de Responsabilidades Políticas.

La represión económica que representaba la Ley de Responsabilidades Políticas continuó en marcha, aunque poco a poco fue centrándose más en aquellos casos que por su solvencia podían reportar beneficios al Estado. Sin embargo, el efecto más importante de esta reforma de la Ley llevada a cabo en febrero de 1942 fue, sin duda, la serie de problemas que se trasladaron a la justicia ordinaria, que pronto se vería colapsada ante la avalancha de expedientes con carácter preferente que resolver.

Para solucionar esta situación de bloqueo se crearon por Decreto de 19 de junio de 1943 dos Salas especiales de Instancia adscritas al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que tenían como misión resolver los expedientes que se hallaban en tramitación en las Audiencias. En el mismo sentido, por Orden de 16 de mayo de 1944 las circunstancias obligaron a crear un Juzgado Especial de ejecutorias con jurisdicción especial en todo el territorio nacional con la misión de ayudar a la jurisdicción ordinaria en aquellos asuntos derivados de las responsabilidades políticas que por su volumen y circunstancias le suponían un recargo notorio en perjuicio del desarrollo de la normalidad de su tarea. Incluso todas estas medidas resultaron

²³² M. RISQUES y F. VILANOVA, op. cit., pp. 147-148; C. MOLINERO, M. SALA, J. SOBREQUÉS, op. cit., pág. 332; M. ÁLVARO (1990), op. cit., pág. 154; C. MIR, F. CORRETGÈ, J. FARRÉ, J. SAGUÉS, op. cit., pp. 80-81.

insuficientes y por Decreto de 23 de diciembre de 1944 se crearon dos Juzgados especiales de ejecutorias, dependientes de las dos Salas especiales de instancia²³³.

Estaba claro que el trabajo a resolver era el acumulado desde 1939 porque parece que el número de denuncias realizadas a partir de 1942 fue disminuyendo y la mayoría de ellas acababan siendo archivadas²³⁴. Una vez depurada la mayor parte de los republicanos que habían tenido una actitud más o menos pública estaba claro que la Ley iba perdiendo sentido²³⁵ y que incluso comenzaba a suponer un problema para el Estado, tanto desde el punto de vista económico como de funcionamiento del sistema de justicia o de orden internacional, ya que los Aliados ganaban la guerra y una Ley especial de carácter político no era fácilmente explicable a las potencias liberales.

De esta forma, por Decreto de 13 de abril de 1945 la jurisdicción de Responsabilidades Políticas quedó suprimida. En este Decreto se alude al cumplimiento definitivo del objetivo inicial de la Ley, es decir, la liquidación de las responsabilidades políticas de los republicanos, reforzando la idea con el dato que en el último año no se había producido ninguna denuncia ni oficialmente ni por particulares. El problema, por tanto, estaba resuelto y la Ley debía pasar a la historia. Pero este Decreto no implicaba el fin de los procesos en marcha, ya que lo que impedía era la tramitación de nuevos expedientes. Si bien los Tribunales especiales quedaban suprimidos, se creaba una Comisión Liquidadora para administrar sus recursos y se establecía que la exigencia de responsabilidades políticas en aquellos expedientes que se habían incoado seguían su curso a través de la justicia ordinaria²³⁶.

Así, por Orden de 27 de junio de 1945 se suprimió definitivamente el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y se dio forma definitiva a la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas. Ésta estaba formada por un Presidente y vocales titulares

²³³ Estos dos Juzgados Especiales estaban constituidos por un Juez, un Secretario y los Oficiales y funcionarios auxiliares que eran necesarios, junto con un fiscal, designados libremente por el Ministro de Justicia. BOE nº 10 de 10 de enero de 1945.

²³⁴ M. LANERO, op. cit., pág. 334.

²³⁵ M. EIROA, op.cit. De hecho, como hemos indicado previamente, en 1942 muy pocos republicanos destacados habían escapado de la represión o del exilio.

²³⁶ Decreto de 13 de abril de 1945, publicado en el BOE de 25 de abril de 1945.

nombrados a título personal por el Ministerio de Justicia. Su misión era resolver los expedientes de responsabilidades políticas que se hallaban todavía pendientes y los posibles recursos que se presentaran. Todos los expedientes incoados con posterioridad a la publicación del Decreto de 13 de abril de 1945 quedaban definitivamente archivados. También se establecía que las Salas de Instancia afectas al Tribunal Nacional tenían un plazo de un año para solucionar los casos que tuvieran pendientes. Todo el personal que formaba los distintos tribunales de responsabilidades políticas pasó a integrarse en la Comisión Liquidadora, cuyo presidente debía proceder al reparto de cargos.²³⁷

En julio de 1946, una vez se habían resuelto y concluido casi la totalidad de los expedientes de Responsabilidades Políticas, se procedió a la supresión de las Salas de Instancia del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, siendo sustituidas por una Sección, integrada por un Presidente y dos Vocales antiguos integrantes de las extintas Salas, encargada de resolver en un breve plazo no superior a los tres meses y de forma definitiva los escasos expedientes que todavía estaban pendientes. Con esta medida finaliza definitivamente el desarrollo administrativo de los expedientes.²³⁸

La apertura del régimen de Franco en materia de Responsabilidades Políticas dio un nuevo paso con el Decreto de 21 de febrero de 1947, por el que se declaraban extintas las penas de extrañamiento que se habían impuesto como consecuencia de la Ley de Responsabilidades Políticas. De esta forma, el gobierno franquista trataba de facilitar el regreso de todas aquellas personas que residían por motivos políticos en el extranjero o que habían sido castigados por la Ley, aunque se especificaba que las sanciones económicas continuaban vigentes. También se articulaban mecanismos para el perdón de las penas de inhabilitación como consecuencia de la Ley. Sin embargo, hay que dudar de los efectos reales de esta medida, ya que, como la Ley permitía el juicio de personas que no se encontraban presentes, la mayoría de sus bienes habían sido incautados y, en el contexto social y político de la España de los años 1940, es dudoso que muchas personas decidieran volver tanto a España como a sus lugares de origen.

²³⁷ Orden de 27 de junio de 1945, publicada en el BOE nº 180 de julio de 1945.

²³⁸ Orden de 10 de julio de 1946, publicada en el BOE nº 194 de 13 de julio de 1946

El capítulo final de la Ley de Responsabilidades Políticas podría ubicarse en noviembre de 1966, con el Decreto que declaraba, como gracia, la extinción definitiva de responsabilidades políticas. Este Decreto implicaba el indulto total de las sanciones derivadas de la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas a partir del final del plazo concedido a todos los Organismos dependientes que finalizaba el 31 de diciembre de 1966²³⁹. Más de 27 años después el franquismo declaraba oficialmente extinta las penas por responsabilidad política.

Sin embargo, y a pesar que oficialmente con el Decreto de 1966 finalizaba definitivamente la exigencia de responsabilidades políticas, hay que recordar que el franquismo continuó persiguiendo a todas aquellas personas que tenían ideas y propuestas políticas diferentes y alternativas. Este trabajo quedó encomendado a los Tribunales Militares hasta la creación en 1963 del Tribunal de Orden Público, cuyos miembros eran elegidos libremente por parte del gobierno. Un nuevo paso se dio con el Decreto-Ley 10/69 de 31 de marzo de 1969 que declaraba la prescripción de todos los delitos cometidos antes del final de la guerra civil y que no habían sido todavía juzgados y en ellos, aunque no se citaran, se entiende que se incluían los políticos. Es sintomático que la Ley 44/71 de 15 de noviembre de 1971 (Disposición Derogativa 2) todavía mantenía en vigor la ilegalidad de todas las agrupaciones políticas y sociales integradas en el Frente Popular, así como los grupos separatistas y los contrarios al llamado Movimiento Nacional.

Realmente el cambio vendría con el espíritu de reconciliación nacional y la superación de las consecuencias de la guerra civil que presidió la transición democrática, sobre todo a partir del Real Decreto Ley 10/76 de 30 de julio de 1976, por el que se concedía amnistía a todos los presos políticos. Con el tiempo la democracia ha ido aprobando medidas para reconocer algunos derechos pasivos a algunas personas e instituciones afectadas por la represión franquista por motivos políticos, así como la indemnización de aquellas personas que por motivos políticos sufrieron penas de privación de libertad. En este sentido, destacan la Ley 4/86 de 8 de enero de 1986 de restitución de bienes y derechos del patrimonio del llamado sindicalismo histórico, que había sido confiscado, y la Ley 43/98 de 15 de diciembre de 1998, junto con el Real

²³⁹ Decreto de 10 de noviembre de 1966, publicado en el BOE nº 271 de 12 de noviembre de 1966. Para recordar la importancia de este Decreto volvemos a proponer R. FRASER, op. cit., pp. 212-214.

Decreto 610/99 de 16 de abril de 1999, en los que se reconoce la naturaleza injusta de la legislación represiva del franquismo, la condición de justicia de su restitución y la constatación que es una tarea ingente por su desmesurado alcance²⁴⁰. Con todo, queda todavía por considerar la reparación de aquellas miles de personas que quedaron afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, cuya libertad quedó eliminada, cuyo patrimonio se vio afectado y cuya intimidación a nivel social fue decisivo en sus vidas.

Algunas consideraciones finales

La Ley de Responsabilidades Políticas fue, sin lugar a dudas, una medida legislativa sin parangón en la historia de España tanto por sus objetivos como por sus medios y por su alcance en la sociedad española. Sin embargo, algunas de las aberraciones que introducía en el marco judicial clásico pueden rastrearse en algunos de los episodios más oscuros de nuestra historia, con lo que esta Ley debería enmarcarse en una corriente represiva de largo alcance a favor de los grupos dirigentes más reaccionarios. No en vano el franquismo se identificó como un movimiento social y político que pretendía superar las alteraciones que presuntamente había introducido en la sociedad española el proceso revolucionario liberal desde la Constitución de Cádiz. Es este el campo en el que coincide, como hemos visto, en muchos aspectos, tanto con la tradición más reaccionaria como con algunos de los proyectos fascistas que se estaban llevando a cabo en esos momentos en Europa.

En este sentido, es sorprendente la cantidad de puntos en común que la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas tiene con una institución tan alejada originalmente en el tiempo como la Inquisición²⁴¹. El objetivo fundamental de esta antigua institución era la generación de miedo en la sociedad, a partir del fomento de la denuncia mutua, lo que servía tanto para controlarla como para obtener información detallada de la misma. El resultado fue muy parecido al generado a partir de 1939 por la

²⁴⁰ M. RISQUES y F. VILANOVA, op. cit., pp. 148-150. Esta última Ley, junto con el Real Decreto, limitan la restitución de bienes a los bienes inmuebles de los partidos políticos que todavía pertenecen al Estado o los que fueron adquiridos por terceros con mala fe, siempre que no hayan sufrido alteraciones sustanciales (en estos casos se prevé una compensación económica). Los derechos personales, las rentas o lo bienes muebles no se contemplan.

²⁴¹ H. KAMEN, *La Inquisición española*. Barcelona, 2005, pp. 171-191.

Ley de Responsabilidades Políticas: la utilización de la denuncia para la venganza y la extensión de la sospecha y de las acusaciones basadas en conjeturas a toda la sociedad. Además, también se producía una situación en la que todas las acusaciones eran tomadas en serio e, independientemente de la culpabilidad o no del acusado, los problemas que se le venían encima eran inmensos.

Por otra parte, también en la Inquisición se pedía la opinión a teólogos sobre los delitos presuntamente cometidos, actuando éstos como calificadores de los que dependía la tramitación del expediente y la detención y encarcelamiento del inculcado. Como hemos comprobado, también los párrocos actuaron en este sentido con la Ley de Responsabilidades Políticas, aunque con una posición no tan decisiva y preeminente.

Al igual que en la Ley de Responsabilidades Políticas, el inculcado era tenido desde el principio del proceso como culpable y era a él a quien le tocaba demostrar su inocencia. Además todo se hacía más difícil porque los detenidos desconocían de qué se les acusaba, con lo que se conseguía deprimirlos tanto si eran culpables como inocentes, tal y como ocurría con los procesados por responsabilidades políticas²⁴². Una vez conocida la acusación se le exigía una contestación inmediata, con lo que la rapidez debía caracterizar todo el proceso. En la Inquisición española, a diferencia del resto de Europa, se permitía la intervención de un abogado defensor y proponer testigos favorables al inculcado, aunque su efectividad era muy limitada, como en la Ley de Responsabilidades Políticas.

En el aspecto económico las coincidencias también resultan sorprendentes. La detención de una persona por la Inquisición era acompañada de la inmediata confiscación de sus bienes, de los que se hacía un inventario y una valoración económica²⁴³. Pero de nuevo el proceso se extendía a los familiares del inculcado, que sufrían la privación de sus medios de vida y, en algunos casos, hasta de sus hogares. Por

²⁴² Los procesados por responsabilidades políticas sabían que se seguía un proceso contra ellos pero sólo cuando se les facilitaba el resumen metódico redactado por el Juez Instructor Provincial conocían de qué se les acusaba. A esas alturas las autoridades locales ya habían emitido sus informes y el Juez Instructor Provincial ya había emitido una propuesta de fallo que solía respetarse en las sentencias de los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas. La indefensión de los procesados era evidente, así como la ansiedad en la que se veían sumidos.

²⁴³ Los procesados por responsabilidades políticas, como hemos comprobado, perdían momentáneamente el poder sobre su patrimonio familiar.

si fuera poco, los gastos de manutención del detenido se hacían a cargo de sus bienes, que podían llegar a ser subastados para afrontarlos.

El Tribunal de la Santa Inquisición perduró hasta las revoluciones liberales del siglo XIX, cuando ya no fue restablecida por Fernando VII tras el Trienio Liberal en 1823²⁴⁴. Ya durante el llamado Sexenio Absolutista Fernando VII volvió a utilizar el terror como herramienta para el control social, práctica que retomó en 1823 con el objetivo de eliminar físicamente a los liberales o expulsarles al extranjero, en una operación de limpieza similar a las que anteriormente se habían realizado en España como con la expulsión de judíos y moriscos²⁴⁵, y similar a la que el franquismo pretendió con los republicanos. Encontramos, pues, nuevamente la utilización de una estrategia represiva con el objetivo de eliminar al oponente, de “limpiar de indeseables” la sociedad española, estrategia que retomará sin ningún tipo de cortapisas la Ley de Responsabilidades Políticas.

El contexto represivo a partir de 1823 fue muy intenso. La Iglesia desencadenó una feroz persecución de sus elementos favorables al liberalismo y el Estado articuló mecanismos especiales de represión como el cuerpo de los Voluntarios Realistas, la Policía General del Reino y las Comisiones Militares Permanentes²⁴⁶. Estas últimas fueron el instrumento fundamental de la acción represiva del nuevo Estado absolutista, permitiendo una represión brutal de aquéllos que se consideraba alteraban el orden social, como bandoleros y liberales.

El análisis de las Comisiones Militares Permanentes nos demuestra la tendencia del Estado absolutista a la creación de jurisdicciones especiales encaminadas a la represión y el control social, en las que, al igual que en la Ley de Responsabilidades Políticas, el Ejército tenía un papel fundamental²⁴⁷. Según P. Pegenaute²⁴⁸, esta

²⁴⁴ El Tribunal de la Santa Inquisición fue abolido definitivamente por una orden de 9 de marzo de 1820. Tras el Trienio Liberal, Fernando VII ya no lo recuperó por la creación de nuevas instituciones represivas.

²⁴⁵ J. FONTANA, *La crisis del Estado Absolutista*. Barcelona, 1988, pp. 125-126 y 168-173.

²⁴⁶ D. LÓPEZ, *La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista*. Barcelona, 1982, pp. 40-41.

²⁴⁷ Entre otras cosas, la incorporación de estas Comisiones Militares al ámbito jurisdiccional militar permitía incrementar la rapidez de los procesamientos, aspecto importante a la hora de hacer efectiva la eliminación del contrario.

tradición se remontaría al siglo XVIII, con la introducción de la legislación borbónica, que tendió a eliminar mecanismos legales de suavización y a castigar implacablemente delitos comunes, considerados como contrarios a la estabilidad del Estado. En esta tradición habría que enmarcar la creación de las Comisiones Militares Permanentes.

Los periodos de gobierno absolutista de Fernando VII utilizaron estas prácticas represivas. Ya en septiembre de 1814 se crearon en cada capital de provincia una Comisión Militar que se encargaba de enjuiciar, según la legislación castrense, las numerosas conspiraciones liberales que amenazaban el nuevo orden absolutista. Sin embargo, estas Comisiones Militares, a diferencia de las creadas en 1824, sólo entendían de delitos políticos. Tras el Trienio Liberal, Fernando VII intensificó su labor represiva otorgando a estas Comisiones Militares la capacidad de entender de delitos comunes que se considerara alteraran el orden público²⁴⁹, con lo que se introducía uno de los principios básicos de que posteriormente basará la Ley de Responsabilidades Políticas: la invasión de competencias de la justicia ordinaria por parte de la jurisdicción militar alegando el peligro del orden social. Esta invasión pretendió legitimar, incluso, y en última instancia, la rebelión militar contra el gobierno de la República.

A partir de octubre de 1824 se estableció una graduación de las penas según el delito: se condenaba a muerte a los partidarios declarados de la Constitución de Cádiz desde el 1 de octubre de 1823, con lo que se introducía la retroactividad, característica también de la Ley de Responsabilidades Políticas, a los que llevaran armas, los que hubieran seducido o intentado seducir a otros a la conspiración, los que promovieran alborotos para alterar la forma de gobierno, los que hubieran gritado muera el rey, los masones, comuneros y otros sectarios (a los que se les expropiará todos sus bienes) y los que usaran las voces alarmantes y subversivas de “Viva Riego”, “Viva la Constitución”, “Mueran los serviles”, “Mueran los tiranos”o “Viva la libertad”.

²⁴⁸ P. PEGENAUTE, *Represión política en el reinado de Fernando VII. Las Comisiones Militares (1824-1825)*. Pamplona, 1974.

²⁴⁹ Real Orden de 13 de enero de 1824.

Según esta Orden las Comisiones pasarían a juzgar delitos como ser partidario de la Constitución de Cádiz, tanto oralmente como por escrito, y los que criticaran el gobierno de Fernando VII, así como los que produjeran alborotos públicos y los que sedujeran a otras personas para conspirar. Las Comisiones Militares estaban formadas por 16 miembros: 1 presidente, 6 vocales, 1 asesor jurídico, 4 fiscales y 4 secretarios, a los que se unía el Capitán General. Cada 15 días este último debía enviar un informe al Ministerio de la Guerra.

También se castigaba con penas de entre 4 a 10 años de prisión a “los que en parajes públicos hablen contra la soberanía de Su Majestad o a favor de la abolida Constitución, no produjesen actos positivos y fuesen efecto de una imaginación indiscretamente exaltada”. En cuanto a los delitos comunes, se aplicaba la pena de muerte a los ladrones y malhechores que actuaran en casas y caminos, y se enviaba a galeras y azotes a los que tenían entre los 15 y 16 años que únicamente hubieran intentado realizar el delito.²⁵⁰

Las Comisiones Militares Permanentes no tenían ningún tipo de norma establecida que permitiese la defensa del inculcado, con lo que no existía una correlación entre infracción y castigo similar a la existente en el Código Penal. Al igual que en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, se condenaba a los inculcados por actos que no eran delitos, como tener un retrato de Riego en casa, gritar “Viva la Constitución”, manifestarse partidario del liberalismo en conversaciones o, simplemente, ser sospechosos de ser revolucionarios. El Estado, pues, se inmiscuía en los aspectos de la vida privada de los ciudadanos y fomentaba la denuncia entre ellos. Se extendía, nuevamente, el terror como medio de represión y control social, lo que generó un resultado de persecuciones arbitrarias que propició el procesamiento de un gran número de ciudadanos y, sobre todo, la huída masiva de liberales al extranjero.²⁵¹

De esta forma, la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 no sólo mantendría puntos de conexión con medidas jurídicas represivas puestas en

²⁵⁰ Estas medidas fueron tomadas en la práctica en muy pocos casos. De hecho, las Comisiones Militares tuvieron una vida muy corta, de enero de 1824 a agosto de 1825, por presión de los Ayuntamientos y de la justicia ordinaria, que denunciaban las numerosas irregularidades que introducía. P. PEGENAUTE, op. cit. Esta corta vida, sin embargo, no debe hacernos olvidar la intensidad de la represión practicada (en la Comisión Militar de Valencia se procesó en un año a 215 personas por delitos políticos y se dictaron 40 sentencias de muerte) y la tendencia de la tradición más reaccionaria en España a utilizar elementos represivos para liquidar a sus adversarios. Sorprendentemente también la Ley de Responsabilidades Políticas rebajó la edad de responsabilidad jurídica por debajo de los 16 años.

²⁵¹ En este periodo huyeron al extranjero más de 20.000 liberales. Tal como explica J. Fontana, el objetivo de las Comisiones Militares era limpiar España de revolucionarios. J. FONTANA, *De en medio del tiempo. La segunda restauración española, 1823-1834*. Barcelona, 2006, pp. 85-99. Sobre el exilio de los liberales V. LLORENS, *Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834)*. Madrid, 1979. Para conocer algunos casos concretos de represión directa contra liberales sublevados I. CASTELLS, *La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa*. Barcelona, 1989. La represión franquista también supuso el exilio para centenares de miles de españoles.

práctica por movimientos contemporáneos de carácter fascista, tal y como hemos visto, y no sólo compartiría algunos aspectos con las legislaciones de periodos anteriores como la Segunda República y la llamada dictadura de Primo de Rivera, propios de los Estados capitalistas modernos, sino que se podría enmarcar en una tradición represiva que arranca de la Edad Moderna y que, basada en la extensión del terror entre la población y los abusos y atropellos jurídicos, pretendió en cada época histórica anular y eliminar a todos aquellos elementos que pudieran suponer cambios que amenazaran el orden establecido. No en vano la Inquisición y el absolutismo de Fernando VII fueron reivindicados por el franquismo, teniendo como enemigo común una corriente liberal que, partiendo del Renacimiento y la Ilustración, habría desembocado en los proyectos democráticos liberales²⁵². Precisamente los demócratas que pretendieron aprovechar la ocasión que brindaba la Segunda República para la modernización de España fueron los que sufrieron toda la fuerza del aparato represivo franquista, en el que la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 fue pieza fundamental.

²⁵² G. CÁMARA, op. cit., pp. 300-331; A. SOPEÑA, op. cit., pp. 150-220.

5. La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón.

La represión en la Comunidad Valenciana: aportaciones historiográficas.

Los estudios sobre la represión franquista en la Comunidad Valenciana se puede considerar que arrancan con las obras pioneras de J. Picó¹ y de H. Heine², este último inspirado en documentación procedente del servicio de información británico y de comisiones internacionales de los años 1950. Los datos que aportaban estas primeras investigaciones era evidente que no reflejaban más que una parte de la magnitud de la represión y que hacían falta nuevas investigaciones para determinar unas cifras que se acercaran a la realidad.³

Actualmente se considera que la cifra de personas que pasaron por prisión en España en los años 1939-1943 podría superar las 280.000⁴, a las que habría que añadir todas aquellas personas que sufrieron la represión sin pasar por ella, como en gran parte de los casos que se analizan en el presente estudio, y que se refieren a miembros de batallones de trabajo, docentes y funcionarios depurados, trabajadores depurados por sus empresarios, exiliados, víctimas del desarrollo de la nueva vida cotidiana, etc. En este sentido, deberíamos también considerar víctimas de la represión franquista aquellas personas procesadas por responsabilidades políticas que durante años tuvieron coartada su libertad de movimientos, que estaban señaladas socialmente y que su economía se

¹ J. PICÓ, *El franquisme*. Valencia, 1982.

² H. HEINE, op. cit. En resumen, este autor sitúa la cifra de ejecutados en Valencia en el período 1939-1944 en más de 5.700 personas y de 1.595 en la provincia de Castellón.

³ Entre otros M. BALDÓ y J. MILLÁN, “El País Valenciano bajo el franquismo”, en P. RUIZ (dir.), *Historia del País Valenciano*. Tomo VI. Barcelona, 1981, pp. 385-422; M. BALDÓ, “La cultura durante la II República y el franquismo”, Ibidem, pp. 467-510; J. PICÓ y R. REIG, “El franquismo: de la autarquía al Plan de Estabilización”, en M. CERDÁ (dir.), *Historia del Pueblo Valenciano*. Vol. III. Valencia, 1988, pp. 905-924; I. SAZ, “República, guerra i franquisme”, en P. RUIZ (coord.), *Història del País Valencià*. Barcelona, 1990, pp. 287-352.

⁴ Aproximadamente un 10% de la población según R. C. TORRES, “La repressió franquista al País Valencià”, en P. PAGÈS (dir.), op. cit., pág. 104. En este estudio se realiza una buena síntesis del estado de la historiografía sobre la represión en la Comunidad Valenciana.

encontraba controlada por las autoridades, por no hablar de su posible situación de extrañamiento o inhabilitación además de la obligación de satisfacer una sanción económica. Y si consideramos a estas personas también deberíamos contar a sus familiares directos y personas dependientes. Por tanto, la cifra de represaliados por el franquismo es difícil de determinar pero seguro que es mucho más elevada.

La mayor parte de los estudios centrados en la Comunidad Valenciana⁵ hace incidencia en el fenómeno de la represión como medida de defensa de las clases sociales tradicionalmente dominantes respecto a la radicalización de las propuestas revolucionarias, especialmente plasmadas en el proceso de colectivizaciones y la amenaza de la eliminación de la propiedad privada. En este contexto, conviene recordar dos elementos que caracterizan la represión en la Comunidad Valenciana como es el hecho que, a diferencia, por ejemplo, de Cataluña, los republicanos reunidos en nuestra comunidad no pudieron, por imposibilidad real o por falta de organización del gobierno republicano, huir ordenadamente, lo que desencadenó la segunda característica, que fue una represión realizada cuando el franquismo ya había ganado la guerra y que adquirió marcados tintes vengativos⁶, con la complicidad de las nuevas autoridades. Prueba de ello son los 14 campos de clasificación y concentración documentados en la Comunidad Valenciana y los abundantes centros penitenciarios que se habilitaron, que abarcaban desde prisiones provinciales a edificios religiosos, monasterios, asilos, escuelas, Ayuntamientos, campos de fútbol, castillos, cines, reformatorios, etc.⁷

⁵ Especialmente las obras referencia V. GABARDA, op. cit.; y M. ORS, *La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945)*. Alicante, 1995.

⁶ En esta situación debería exceptuarse el territorio al Norte, precisamente, de la Vall d'Uixó, que fue incorporado a la España franquista a partir de abril de 1938. De esta forma, muchos republicanos se hallaron "atrapados" en Valencia y Alicante y no pudieron escapar al extranjero como lo hicieron los catalanes que cruzaron la frontera francesa en febrero de 1939.

En este sentido, merece la pena destacar los casos de depuración de los organismos oficiales y los de persecución de liberales y republicanos. M. BALDÓ, "La Diputación en Camisa Azul (1939-1959)", en M. CHUST (dir.), *Historia de la Diputación de Valencia*. Valencia, 1995, pp. 357-402; M. BALDÓ y M.F. MANCEBO, "Vida y muerte de Juan Peset", en AA.VV. *Proceso a Juan Peset Aleixandre*. València, 2001, pp. 11-44.

⁷ P. PAGÈS (dir.), op. cit., pág. 120. Los campos de clasificación y concentración documentados son los de Albatera, Alfara de Algimia, los Almendros, Benaguasil, Carcaixent, Elx, Oriola, Catarroja, Portaceli, Sueca, Venta del Moro, Villena y los de la provincia de Castellón en Moncofa y Soneja. A éstos se les podría añadir otros campos provisionales de los que existen referencias, como precisamente en la Vall d'Uixó, en V. GABARDA, op. cit., pág. 34, F. PEÑA (1998), op. cit., pág. 102, y A. CALZADO y R.C. TORRES, *Valencians sota el franquisme*. Simat de la Vall d'Uixó, 2002, pág. 71; o J. DANIEL, "El franquismo vivido e imaginado desde una sociedad industrial", en I. SAZ y A. GÓMEZ (eds.), op. cit.

Por otra parte, se extendió la percepción popular que el territorio de la Comunidad Valenciana fue más duramente castigado que otras zonas de España por el hecho de haber permanecido fiel a la República hasta el final de la guerra. Sin embargo, esta percepción puede basarse en la precaria situación en que quedó su economía, orientada tradicionalmente a la exportación, dentro del contexto de sustitución de importaciones y aislamiento que suponía la autarquía. Se trataba más que de una situación de castigo voluntario de una falta de voluntad de favorecer la economía valenciana lo que facilitó su proceso de desarticulación. Al final, este proceso se tradujo en dificultades económicas que favorecieron el mercado negro y la extensión de la miseria.⁸

En cuanto a estudios relativos a la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la Comunidad Valenciana, la obra pionera, y prácticamente única, es la de G. Sánchez Recio sobre el Partido Judicial de Monóvar (Alicante), que, a pesar de su concisión, supone un primer y valioso acercamiento al tema y al planteamiento de su análisis.⁹

Para el caso de la represión franquista en la provincia de Castellón V. Gabarda¹⁰ propone su análisis en tres fases. La primera abarcaría desde julio a octubre de 1936 y sería la de los fusilamientos en calles y carreteras sin ningún tipo de trámite oficial. La segunda se extendería de noviembre de 1936 a febrero de 1937, en la que se instruyeron

pág. 173. Es conocido el drama de las 15.000 personas que esperaron en vano un barco que les alejara de la península y que pasaron al campo de concentración de Albaterra.

⁸ A. GÓMEZ e I. SAZ, “Valencia en la etapa franquista: política y sociedad”, en P. PRESTON e I. SAZ (eds.), *De la revolución liberal a la democracia parlamentaria. Valencia (1808-1975)*. Valencia, 2001, pp. 262-267; J.L. GARCÍA DELGADO, “La industrialización y el desarrollo económico de España durante el franquismo”, en J. NADAL, A. CARRERAS, C. SUDRIÀ (comp.), *La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica*. Barcelona, 1987, pp. 164-189; M.A. FABRA, *El País Valencià (1939-1959): autarquia i industrialització*. Valencia, 2000, pp. 38-47; R. MORENO, *La autarquía en Alicante (1939-1952)*. Alicante, 1995.

⁹ G. SÁNCHEZ, *Las responsabilidades políticas en la posguerra española. El Partido Judicial de Monóvar*. Alicante, 1984.

¹⁰ V. GABARDA, “Les conseqüències de la guerra civil. Les morts violentes a la província de Castelló (1936-1950)”, en M. MARTÍ (coord.), *D’Història Contemporània: debats i estudis. Un homenatge casolà a E.P. Thompson (1924-1993)*. Castellón, 1996, pp. 133-156. Esta es la obra de referencia actual sobre la represión franquista en la provincia de Castellón.

expedientes, sin ningún tipo de garantías procesales, a los detenidos, con el protagonismo de las autoridades militares. Las características de estas dos primeras fases sólo se aplicarían en la provincia de Castellón puntualmente y de forma inminente tras la conquista de las poblaciones. La última etapa, de alto alcance en la provincia, llegaría hasta el final de la guerra y unos años más, en la que se procedió masivamente a juicios sumarísimos a través de consejos de guerra que muchas veces acababan en la ejecución de los procesados. En general se llevó a cabo una represión durísima, consciente, planificada y permitida y protagonizada por las autoridades franquistas.

Los consejos de guerra se celebraron en Vinaroz, Morella, Borriol, Almazora, Vila-Real, Segorbe y Castellón, poblaciones en las que se encontraban las prisiones comarcales y provinciales. El número de Juzgados Militares que se establecía estaba en consonancia con el número de personas que se tenía que juzgar, aunque lo normal era que se estableciera uno por provincia para la ejecución de la sentencia final. El Juzgado Militar que ejercía estas funciones en la provincia de Castellón era el *Juzgado Militar Letra <<F>>*.

En total están documentadas¹¹ en la provincia de Castellón 1.014 ejecuciones realizadas por las fuerzas franquistas, de las cuales 928 fueron vecinos de alguna de sus localidades, lo que representaba el 3,1% de la población total, con la siguiente evolución:

Tabla 5.1

Año	Nº de víctimas	Año	Nº de víctimas
1938	158	1943	37
1939	219	1944	3
1940	396	1945	2
1941	126	1946	2
1942	70	1950	1

Fuente: V. Gabarda, *Els afusellaments al País Valencià (1938-1956)*.

¹¹ Ibidem. Pp. 147-154. Este mismo autor contabiliza en 1.031 las víctimas de la represión republicana, con marcadas diferencias en la composición socio profesional de las víctimas y en la naturaleza misma de la represión.

A estas muertes habría que añadir en Castellón 112 muertos en las cárceles de la provincia, 2 muertes violentas fuera de ellas y 36 muertes de guerrilleros (no ejecutados), lo que haría un total de 1.078 víctimas relacionadas con la represión.¹²

Los estudios sobre la represión franquista en Castellón son escasos¹³. Por ahora la historiografía destaca aspectos que hemos visto en el resto de España, como el inicio de la misma inmediatamente después de la llegada de las tropas franquistas, su gran alcance social, la situación de saturación de las diferentes cárceles de la provincia, el goteo incesante de detenciones y los juicios sin garantías que podían acabar en fusilamiento. A todo ello se unió la depuración de funcionarios, docentes, trabajadores de fábrica, agentes de servicios públicos e incluso jubilados, así como la restricción de la libertad de circulación de personas, de comunicación, etc. Finalmente se deben incluir medidas que afectaban directamente a la vida cotidiana como las instrucciones dictadas desde el Gobierno Civil, la imposición de pseudo impuestos como el Subsidio al Combatiente o la colaboración con Auxilio Social, la Prestación Personal Obligatoria a favor del Estado para la reconstrucción nacional, la obligatoriedad de compra de la “Ficha Azul”, etc.¹⁴. En definitiva, no debemos olvidar que la represión franquista adoptó múltiples formas diferentes a las ejecuciones de personas, formas que no por menos espectaculares o por menos públicas afectaron menos decisivamente a la población. En este sentido, la tarea de investigación de los historiadores es fundamental para analizar la experiencia vivida por los castellonenses en estos años tan duros.

¹² V. GABARDA (1993), op. cit., pág. 215.

¹³ Sin embargo, han aparecido recientemente estudios sobre el tema, como J.V. MOYA, *Alcalá de Xivert. Revolución, guerra y represión, 1936-1948*. Alcalá de Xivert, 2004, especialmente en pp. 232-239, donde se aborda parcialmente el tema de la represión de los habitantes de Alcalá de Xivert por responsabilidades políticas; A. ARNAU, *Nuestros días oscuros ¿ubi est, mors, victoria tua?* Vinaroz, 2005, obra que rastrea multitud de datos relativos a Vinaroz y los pueblos de su vecindad a partir fundamentalmente del análisis de los registros civiles municipales; o M. VICENT, “Los expedientes de responsabilidades políticas: una documentación esencial para el estudio del primer franquismo en las comarcas de Castellón”, en R. MONLLEÓ (ed.), *Castelló al segle XX*. Castelló, 2006, pp. 579-602.

¹⁴ R. GODES, “El franquismo”, en M. CHUST (dir.), *Historia de Castellón*. Castellón, 1992, pp. 641-660; los aspectos explicados también se desarrollan en R. GODES, *Política y sociedad en Castellón durante la década de los años 40*. Diputación Provincial de Castellón. Castellón, 1990. Para este autor la represión franquista llevó a la población de Castellón a un recogimiento interior que hizo que las personas se preocuparan especialmente por sus asuntos personales y privados, sin cuestionarse lo que públicamente estaba pasando.

En definitiva, la provincia de Castellón sufrió con todo el rigor posible el peso de la represión franquista, máxime si se tiene en cuenta su situación especial en el marco de la guerra civil española, ya que desde aproximadamente mayo-junio de 1938 fue conquistada por las fuerzas franquistas y en ella se estableció una línea de frente estable hasta el final de la misma. Un gran número de franquistas y falangistas ansiosos por entrar en Valencia permanecieron en la provincia hasta finalizar el conflicto y el Ejército franquista pudo realizar su labor depuradora con las manos libres.

La Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón: estudio introductorio.

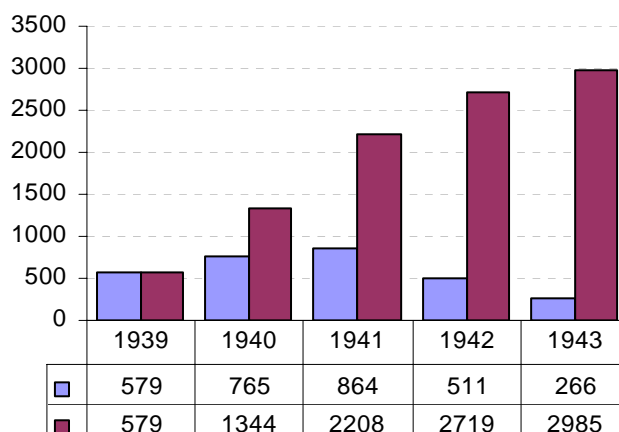
En cuanto a la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón, tenemos noticias de la creación del Juzgado Instructor Provincial de Castellón entre finales de julio y principios de agosto de 1939¹⁵. Según nuestros cálculos, basados en la publicación de la incoación de nuevos expedientes en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón¹⁶, desde finales de julio de 1939 hasta finales de 1943 se incoaron expedientes como mínimo a 2.985 personas, siguiendo la siguiente cadencia: 579 personas en 1939 (de finales de julio a diciembre), 765 en 1940, 864 en 1941, 511 en 1942 y 266 en 1943.

¹⁵ R. GODES, op. cit., pág. 735. Las decisiones de este Juzgado Instructor se publicaban en el periódico “Mediterráneo”. Sin embargo, a pesar que según esta fuente se anunció la creación del Juzgado a principios de agosto de 1939, existen expedientes incoados a partir del 31 de julio de 1939 por orden del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia.

La composición inicial de este Juzgado Instructor de Castellón fue inicialmente publicada en el BOE de 5 de junio de 1939 y posteriormente en el BOP de 1 de julio de 1939. Ver Apéndice Documental. Según R. GODES, a principios de 1940 el Juez fue sustituido por V.N.E., Alférez provisional de Infantería. Se trataba de Víctor Núñez Escalona.

¹⁶ Hemos de recordar que la Ley de Responsabilidades Políticas ordenaba que todos los expedientes que se incoaban debían ser publicados en el BOE y en el BOP correspondiente. La primera noticia de la incoación de un expediente aparece en el BOP de Castellón de 24 de agosto de 1939. Sin embargo, como hemos indicado, los expedientes más antiguos son del 31 de julio de 1939. Archivo de la Diputación Provincial de Castellón.

Gráfica 5.1
EXPEDIENTES INCOADOS EN 1939-1943: EVOLUCION ANUAL Y TENDENCIA ACUMULADA.



Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, 1939-1943.
Elaboración propia.

Por tanto, se observa claramente un primer periodo de incoación de gran número de expedientes por responsabilidades políticas desde julio de 1939 a 1942, que responde a la voluntad de las nuevas autoridades de anular y desmovilizar a las personas que mantuvieron cierto protagonismo social, político y sindical durante el régimen republicano. De hecho, en esta primera etapa se incoaron 2.308 expedientes, lo que supone el 77% de los mismos en el periodo 1939-1943. Destaca especialmente el año 1939, ya que sólo en los meses de julio a diciembre se incoaron 579 expedientes, lo que demuestra la vertiente vengativa de esta Ley, a la vez que su éxito en la persecución de los republicanos. Una segunda etapa comienza en 1942, cuando, al calor de la reforma de la Ley de ese mismo año, el número de expedientes incoados comienza una tendencia descendente que parece que se consolida hasta 1945, cuando, como hemos visto, se dan instrucciones para la no incoación de nuevos¹⁷. Se trata, por tanto, de cifras

¹⁷ Se trata de una tendencia observada en el resto de casos donde se ha analizado el ritmo de incoación de expedientes de responsabilidades políticas, aunque con algunas diferencias. Así, en Albacete el ritmo es similar, aunque con un descenso más acusado en el periodo 1942-1943, según M. ORTIZ, op. cit., pp. 406-409; en Lleida se produce un intenso proceso de incoación de expedientes en 1939-1940, especialmente en 1939, seguido de una disminución ya en 1941 y 1942, recuperándose las cifras en 1943, según C. MIR, F. CARRETGÉ, J. FARRÉ y J. SAGÜÉS, op. cit., pp. 136-141; en Baleares, con una situación política diferente durante la guerra, el periodo 1939-1940 no se caracteriza por la incoación de un elevado número de expedientes, ya que fue en 1941 donde las cifras aumentan espectacularmente, según F. SANLLORENTE, op. cit., pág. 24. En general, el ritmo de incoación de expedientes parece que se adecuó a la situación política durante la guerra, según el protagonismo de las autoridades y fuerzas vivas republicanas, aunque se observa una tendencia general a la intensificación de las incoaciones durante los primeros meses después de la guerra. La evolución posterior parece que responde a la

importantes: casi un mínimo de 3.000 familias que a partir de la incoación de sus expedientes en los primeros años de la posguerra vieron cómo caía sobre ellas el peso de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón y que, por tanto, quedaban “marcados “por el régimen.

Sin embargo, estos datos basados en la publicación de la incoación de los expedientes en el Boletín Oficial de la Provincia han de ser tenidos en cuenta no como datos definitivos, sino como tendencias, ya que, a pesar que la Ley de Responsabilidades Políticas establecía como obligatoria esta publicación para todos los expedientes incoados, conocemos expedientes de personas concretas, e incluso grupos de expedientes de localidades enteras, que se incoaron y siguieron su curso normal pero nunca fueron publicados en dicho Boletín. De esta forma, se da el caso de bastantes expedientes que se incoaron pero nunca fueron publicados oficialmente, por lo que las cifras comentadas se ven incrementadas considerablemente.

Por otra parte, y como hemos indicado, no disponemos en el Archivo Histórico Provincial de Castellón de todos los expedientes de responsabilidades políticas que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, por extravío, deterioro o destrucción final. Además, en dicho Archivo no sólo disponemos de expedientes de responsabilidades políticas incoados, sino también de testimonios de condena por parte de un tribunal militar que lo normal es que dieran paso a un expediente y que fueron remitidos al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia por las autoridades militares, pero que, hoy por hoy, no podemos afirmar que llegaron a dar el paso de convertirse en expedientes incoados. Para terminar de complicar la cuestión, en dicho Archivo encontramos una gran cantidad de expedientes de responsabilidades políticas de otras provincias españolas, con lo que no se puede descartar la idea que en los archivos de otras provincias, especialmente Valencia, Tarragona, Teruel y Barcelona, existan expedientes de responsabilidades políticas de vecinos de la provincia de Castellón.¹⁸

consecución de los objetivos de la Ley más o menos tempranamente y a las reformas de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1942 y posteriormente de 1945.

¹⁸ En los fondos del Archivo Histórico Provincial de Castellón encontramos 111 expedientes de personas de lugares desconocidos, 1 de Madrid, 42 de Valencia, 13 de Barcelona, 1 de Cantabria, 5 de Tarragona, 2 de Alicante y 1 de Zaragoza.

Esta situación convierte en un problema casi irresoluble la creación de una base estadística definitiva. Para la realización del presente estudio hemos optado por combinar los datos de los expedientes publicitados en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón con los disponibles en el Archivo Histórico Provincial, con lo que los datos, estadísticas y valoraciones que ofrecemos han de ser considerados, como hemos dicho, tendencias a la espera que futuras investigaciones vayan aclarando poco a poco el problema. Para ser correctos, los datos que vamos a ofrecer han de ser entendidos en términos de probabilidad, ya que incluimos datos de personas que se vieron implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas, pero que quizás nunca vieron cómo se les incoaba un expediente por falta de tiempo, por las reformas de la Ley, por incapacidad y colapso administrativo, etc., pero sobre los que, sin duda, recayó el peso de la Ley¹⁹.

De esta forma, podemos afirmar definitivamente que en la provincia de Castellón durante el periodo comprendido entre julio de 1939 y finales de 1945 se estaba a punto de abrir o se abrió expediente de responsabilidades políticas a un mínimo de 6.240 personas. Esto representa el 1,99% de la población provincial total según el Censo de población de 1940. Entre estas personas constatamos la presencia de 5.853 hombres, un 93,78% de los afectados, y de 387 mujeres, un 6,22% de los mismos.

Estas cifras hacen referencia a los datos concretos conocidos. Sin embargo, en nuestro trabajo de campo con los expedientes en el Archivo Histórico Provincial de Castellón hemos observado que cada expediente tenía asignado un número de orden y que éste fue correlativo hasta finales del año 1942, fecha en la que hemos encontrado

¹⁹ Archivo Histórico Provincial de Castellón. Índice de expedientes de responsabilidades políticas. Las causas de esta situación ya han sido reseñadas: falta de medios económicos para hacer frente a todos los expedientes, colapso administrativo, razones de conveniencia política por el contexto internacional, frustración por la situación de miseria en la que se hallaban la mayoría de los inculpados, etc.

Hemos de tener toda la precaución del mundo en la valoración de estas cifras, ya que no todos los expedientes existentes en la realidad han llegado al citado archivo, muchos de ellos lo han hecho en un estado de deterioro muy avanzado y, además, constantemente se están incorporando nuevos expedientes a la base de datos existente. Por otro lado en este archivo se encuentran bastantes expedientes de personas de otras provincias del Estado, por lo que no es descabellado pensar que los expedientes de muchos castellonenses se encuentren también dispersos por otros archivos.

Como referencia, en la localidad de Castellón se incoaron 678 expedientes, mientras esperaban hacerlo, según los datos disponibles, 33 casos en los que se contaba con testimonio de condena por parte de un tribunal militar.

En este sentido, M. Vilanova contabiliza en 2.777 los expedientes de responsabilidades políticas incoados en la provincia de Castellón, en R. MONLLEÓ (ed.), op. cit., pág. 586.




expedientes con un número de orden superior de 8.301. En los años 1943, 1944 y 1945 los números de orden se cerraban con el año y, según lo observado, la cifra final de expedientes podría perfectamente alcanzar un número final que se podría situar entre los 9.500 y los 10.000, con lo que el porcentaje final de afectados en la provincia de Castellón se situaría entre el 3,04% y el 3,2%. Si consideramos que en la mayoría de los casos el afectado era el cabeza de familia, es decir, la persona que llevaba el jornal a su casa, y que por término medio el número de personas dependientes de esta persona, fuera hombre o mujer, entre hijos, cónyuges y familiares dependientes, podría situarse en la cifra de 4, esto implicaría que la Ley de Responsabilidades Políticas afectó directamente a entre el 12,16% y el 12,8% de la población de la provincia de Castellón. Si pensamos en términos de implicación indirecta la cifra podría elevarse mucho más.

En general, las localidades de la provincia de Castellón que tuvieron un mayor número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas se corresponden con las de mayor número de población y mayor y más diversificada actividad económica. Se trata de poblaciones en las que, por lo observado en los análisis de los expedientes correspondientes, la conflictividad durante la guerra civil fue intensa. Por otra parte, hay cuatro municipios en los que sus vecinos no fueron acusados de responsabilidades políticas o las fuentes disponibles no hacen referencia a ninguno de ellos: Sacañet, Pavías, Bel y Corachar.

Mapa 5.1

LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN ANALIZADAS



-  Localidades de las que existen expedientes.
-  Localidades con sólo testimonios de condena.
-  Localidades sin datos.

Fuente: FCHS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas. Elaboración propia.

Tabla 5.2
LOCALIDADES CON MAYOR NÚMERO DE IMPLICADOS
EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

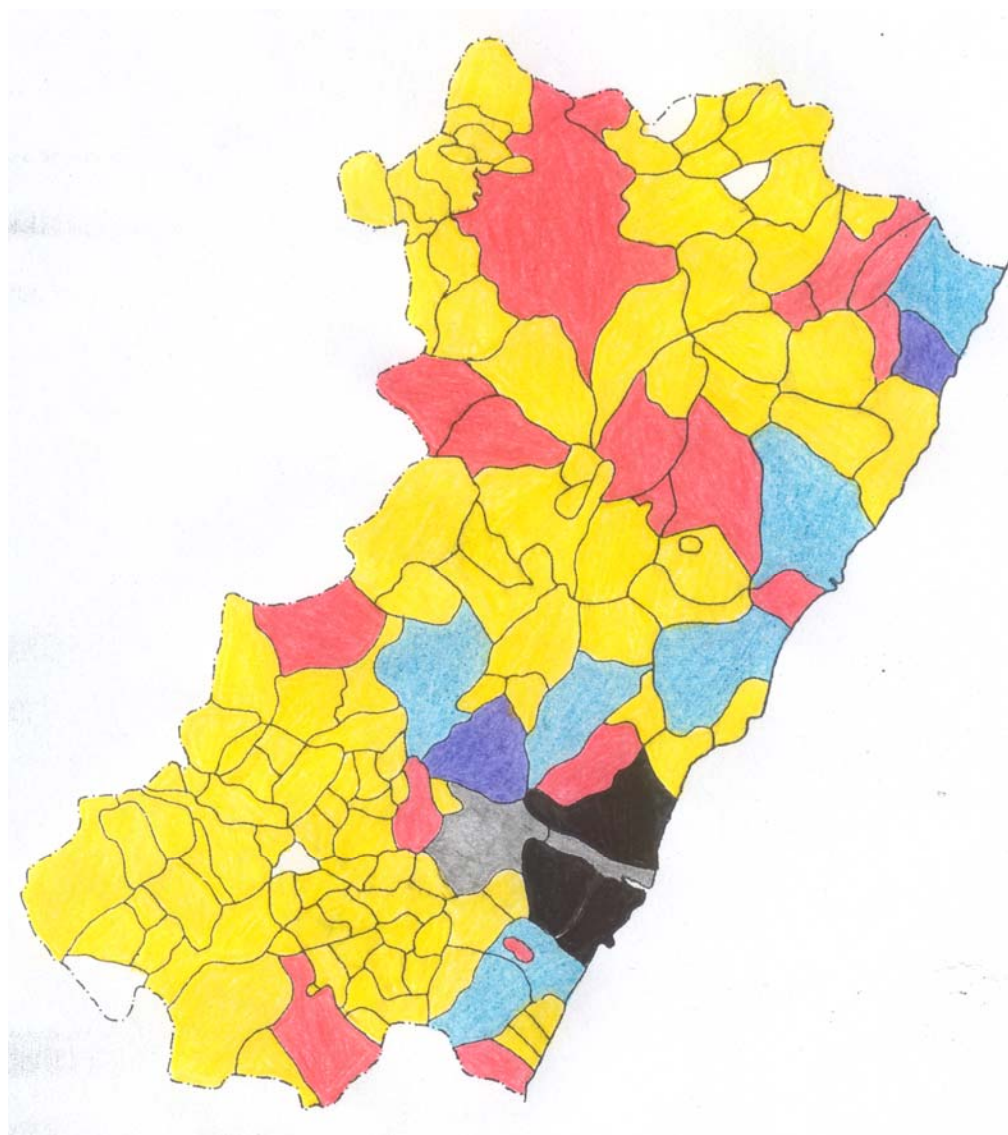
LOCALIDAD	Nº AFECTADOS
Castellón	711
Burriana	434
Villarreal	292
Onda	214
Almazora	208
Alcora	169
Benicarló	158
La Vall d'Uixó	137
Alcalà de Xivert	130
Lucena	129

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Mapa5.2

NÚMERO DE AFECTADOS POR LA
LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS POR MUNICIPIOS



	Sin datos
	Entre 1 y 49 afectados
	Entre 50 y 99 afectados
	Entre 100 y 149 afectados
	Entre 150 y 199 afectados
	Entre 200 y 250 afectados
	Más de 250 afectados

Fuente: BOP 1939-1946. AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades
Políticas. Elaboración propia

Sin embargo, la intensidad de la represión relativa a la exigencia de responsabilidades políticas fue mucho mayor en términos relativos en las pequeñas poblaciones que en los mayores núcleos urbanos. Así, podemos observar cómo es en el ámbito de las pequeñas localidades rurales donde un mayor porcentaje de población tuvo que pagar las consecuencias de una Ley que buscaba la venganza, la denuncia mutua y el ajuste de cuentas con las personas que más se significaron durante el periodo republicano.

Tabla 5.3
LOCALIDADES CON MAYOR PORCENTAJE DE SU POBLACIÓN
IMPLICADA EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

LOCALIDAD	% IMPLICADOS
Sarratella	16,58
Fanzara	9,75
Benafer	9,65
Vallat	6,75
Pobla de Benifassà	6,66
Castell de Cabres	6,6
Argelita	5,74
Torre Embesora	5,6
Espadilla	5,51
Villafamés	4,95

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Las cifras son muy altas, ya que si consideramos, como hemos dicho, que cada afectado por la Ley significaba la implicación directa de unas 4 personas más por término medio, la cifra de afectados por ejemplo de Sarratella se situaría en el 66,32% de la población de la localidad. En el caso de Villafamés la cifra de afectados directamente se situaría en el 19,8%.

Por sexos la diferencia era importante. La población masculina se vio más afectada directamente que la población femenina, lo que sin duda se explica en gran parte por la tradicional marginación de la mujer en los asuntos políticos y públicos hasta esa fecha, especialmente en el ámbito rural, lo que derivaría posteriormente en un menor nivel de exigencia de responsabilidades políticas. Así, la localidad con mayor porcentaje de población masculina afectada fue Sarratella con el 26,66%, mientras la población con mayor porcentaje de población femenina afectada fue también Sarratella con el 7,7%. Sin embargo, esta última cifra es excepcionalmente alta, ya que ninguna otra localidad de la provincia supera el 2% de su población femenina afectada por la Ley. Es más, en 73 de las localidades de la provincia hubo varones implicados pero ninguna mujer²⁰. Las poblaciones más afectadas en este sentido también son de un número de habitantes reducidos, aunque, a diferencia de los hombres, aparecen núcleos importantes, como Alcora, Onda o la Vall d'Uixó, caracterizados por su base industrial, por lo que el elemento revolucionario durante la guerra ha de ser también tenido en cuenta.

En este caso las cifras también son bastante reveladoras. En Sarratella el 26,66% de la población masculina local se vio afectada por la Ley, lo que significa en primer lugar que, salvo la coincidencia de hermanos o padres e hijos, la inmensa mayoría de las familias de la población se vio implicada, mientras que en segundo lugar si eliminamos la cuarta parte de la población masculina por ser menor de 14 años, el porcentaje de hombres adultos afectados también se incrementa enormemente. Estas reflexiones nos sitúan en el verdadero alcance de una Ley pensada para el castigo de los vencidos.

²⁰ Ver tabla adjunta.

Tabla 5.4

LOCALIDADES CON MAYOR PORCENTAJE DE POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA AFECTADA POR LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

HOMBRES

LOCALIDAD	% AFECTADOS
Sarratella	26,66
Fanzara	20,26
Benafer	18,66
Vallat	15,15
Castell de Cabres	13,1
Argelita	12,78
Pobla de Benifassà	12,29
Torre Embesora	11,79
Espadilla	11,53
Montán	9,34

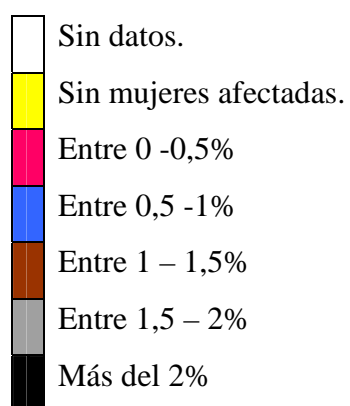
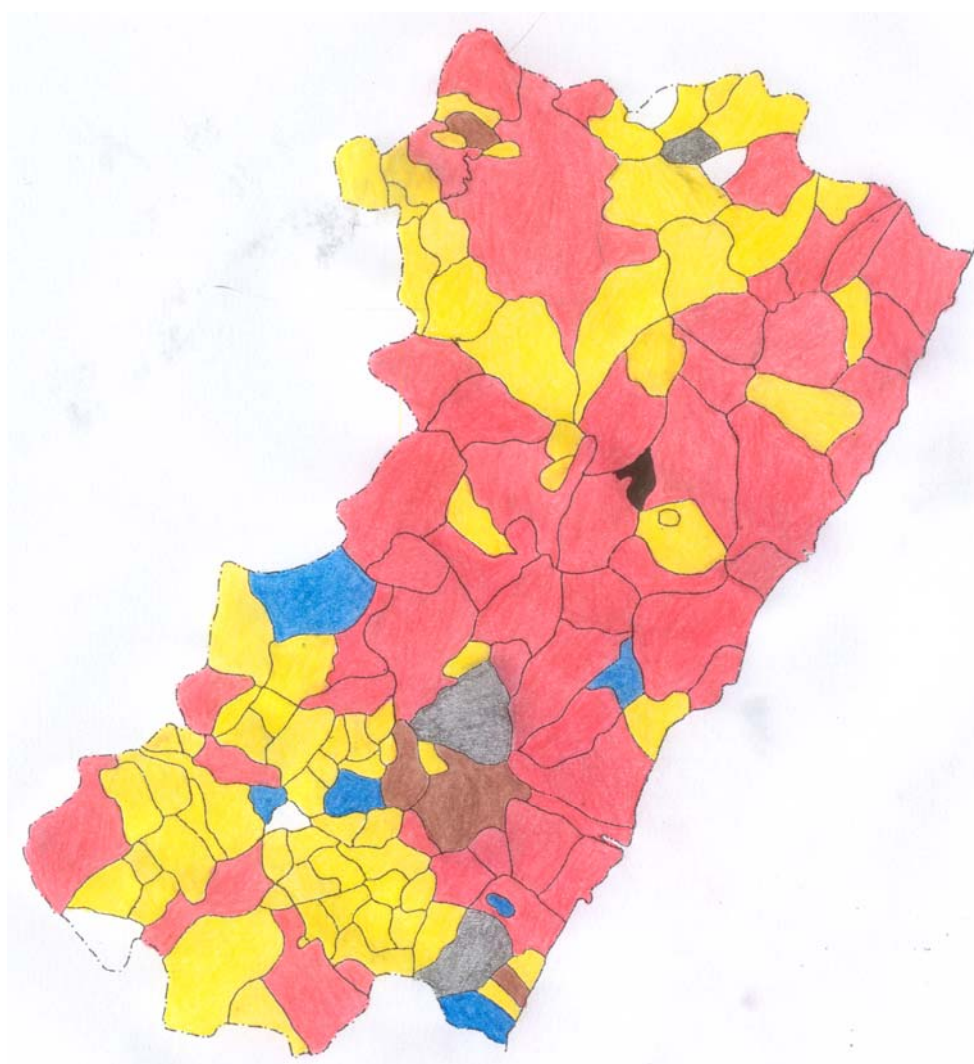
MUJERES

LOCALIDAD	% AFECTADAS
Sarratella	7,7
La Vall d'Uixó	1,98
Alcora	1,81
Pobla de Benifassà	1,74
Fanzara	1,35
Chilches	1,15
Onda	1,14
Higueras	0,94
Villavieja	0,68
Almenara	0,62

Fuente: BOPCS; AHPCS, sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.
Elaboración propia.

Mapa 5.3

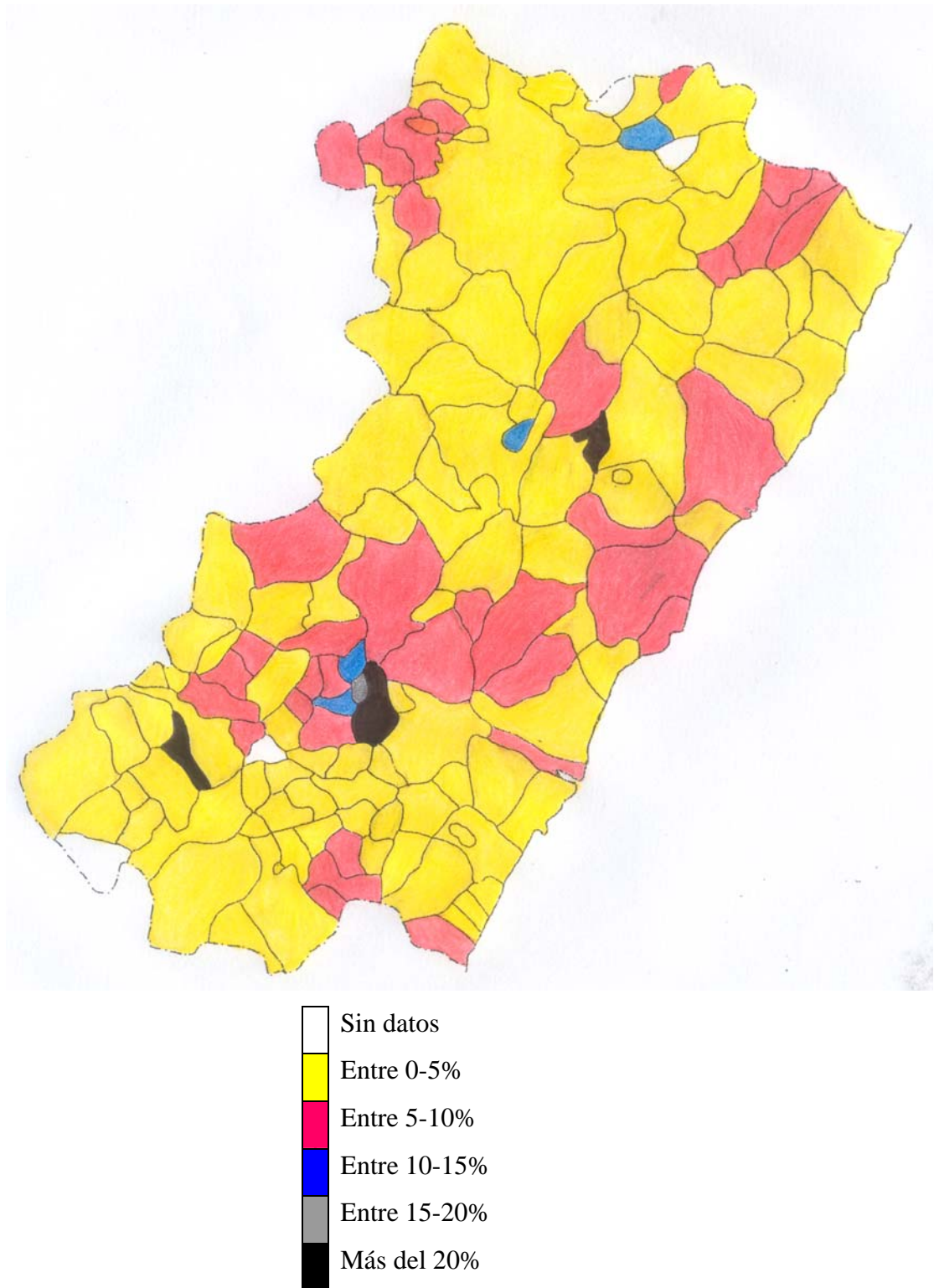
PORCENTAJE DE MUJERES AFECTADAS EN RELACIÓN A LA
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE



Fuente: BOP, 1939-1946; AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades
Políticas. Elaboración propia

Mapa 5.4

PORCENTAJE DE HOMBRES AFECTADOS EN RELACIÓN A LA
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE

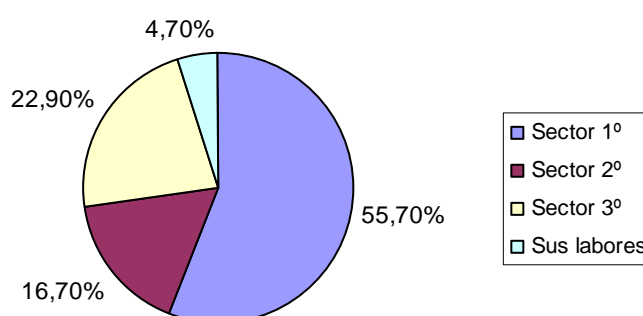


Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Por otra parte, conocemos la profesión de 1.872 de los casos que aparecen publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón²¹, un 62,7% del total de casos publicados²², lo que nos permite conocer a nivel general el perfil social de los inculcados. De esta forma, la mayoría de ellos, 1.044 casos que suponían un 55,7%, pertenecían al sector primario de la economía, destacando de forma notoria los procesados cuya profesión era “labrador”, con 811 casos, seguidos de “jornaleros”, con 190 casos. El segundo sector de la economía representado fue el terciario, con 429 casos que representaban un 22,9%, en los que encontramos representantes de sectores como seguridad, salud, enseñanza, comercio, transportes, etc. El sector menos representado, con 313 casos que suponían el 16,7% de los procesados analizados, fue el secundario. Finalmente, existen 86 casos de mujeres cuya profesión se califica como “Sus labores”, lo que representa el 4,7% de los implicados analizados.²³

Gráfica 5.2



Fuente: BOP, 1939-1946.

²¹ Se puede consultar la totalidad de los datos en el Apéndice Documental.

²² En el resto de los casos en el Boletín Oficial de la Provincia en la parte correspondiente a la profesión se indica “se ignora” o simplemente no se especifica.

²³ En general, las mujeres aparecen con la profesión “Sus labores”, aunque también aparecen mujeres con profesiones como mecanógrafa (2 casos), modista (3), sirvienta (1), maestra (4) o jornalera (2). En general, pues, parece que las mujeres habían iniciado su presencia en el mundo laboral, aunque con todavía una escasa presencia.

En general la preponderancia del sector primario y la relativa escasa presencia del secundario se podría explicar por el incipiente grado de industrialización que todavía presentaba la provincia de Castellón en términos globales y el predominio de la actividad agrícola²⁴. La relativa importancia de los representantes del sector terciario se explicaría por la tendencia a posiciones progresistas de las profesiones liberales. En cualquier caso, lo que demuestran estos datos es que, salvo algún caso aislado, los procesados por responsabilidades políticas en la provincia de Castellón fueron personas humildes y de escasa trascendencia pública, lo que refuerza todavía más la idea de la utilización de la Ley de Responsabilidades Políticas como herramienta de castigo social.

En conclusión, la Ley de Responsabilidades Políticas tuvo un impacto considerable en la provincia de Castellón y sirvió en general, y en cada localidad en particular, para lograr los objetivos que las autoridades franquistas se habían planteado con ella: la depuración de los vencidos y su castigo mediante un proceso largo de exigencia de responsabilidades que incluía en la mayoría de los casos cárcel, sospecha pública y desarticulación económica, lo que frecuentemente llevaba a la pobreza, el hambre y, en muchos casos, la muerte. La exigencia de responsabilidades políticas fue un proceso que afectó gravemente a una parte importante de la población, a la que se le negó la posibilidad de rehacer sus vidas con normalidad tras la guerra.

La Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón: aspectos económicos

Es difícil determinar el impacto económico que tuvo la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón, ya que conllevaría un seguimiento exhaustivo de cada uno de los casos personales y familiares de cada uno de los expedientes incoados, además de realizar un seguimiento individual de la evolución los bienes de cada patrimonio familiar en los años 1940, lo cual es una tarea inmensa que desborda el presente trabajo. Conocemos muchos casos en los que el inculcado en responsabilidades políticas acaba pagando una sanción económica establecida por la

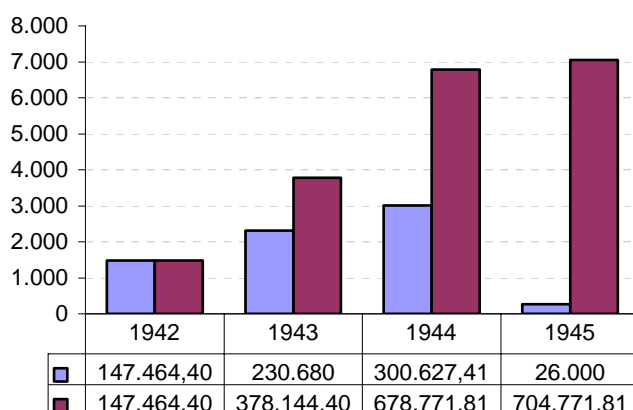
²⁴ V. ABAD, “El crecimiento capitalista”, en M. CHUST (dir.), 1992, op. cit., pp. 561-580.

Para el marco general de la estructura ocupacional en la provincia de Castellón se pueden consultar C. DOMINGO, *La Plana de Castellón. Formación de un paisaje agrario mediterráneo*. Castellón, 1983; J. SANCHO, *Atlas de la provincia de Castellón de la Plana*. Castellón, 1982; y V. ORTELLS (dir.), *Atlas de Castelló de la Plana*. Castellón, 2004.

correspondiente sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, en muchos casos accesible para ser pagada en unos meses, lo que significa un constante goteo de dinero en manos del Estado. Sin embargo, vamos a centrarnos en las cifras que aparecen recogidas en las memorias del Juzgado de Instrucción de Responsabilidades Políticas de la provincia de Castellón, una vez se había integrado en la Audiencia de Castellón como consecuencia de la reforma de la Ley de febrero de 1942.

En el periodo comprendido entre julio de 1942 y diciembre de 1945, fueron ingresadas en la “Cuenta Especial” de la Delegación de Hacienda de Castellón la cantidad de 678.771,84 pesetas, distribuidas de la siguiente forma: 147.464,40 pesetas en 1942, 230.680 pesetas en 1943, 300.627,41 pesetas en 1944 y 26.000 pesetas en 1945²⁵. Esta evolución nos demuestra cómo 5 años después del final de la guerra la política de castigo y venganza de los vencedores de la misma se hallaba en pleno vigor y que las autoridades franquistas no hicieron nada por la integración en la nueva sociedad de los vencidos. El ritmo represivo y recaudatorio sólo finalizaría tras los cambios producidos en 1945 con la derogación de la Ley y tras las reajustes del régimen como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial.

Gráfica 5.3
CANTIDADES INGRESADAS POR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE JULIO DE 1942 A DICIEMBRE DE 1945:
EVOLUCIÓN ANUAL Y TENDENCIA ACUMULADA



Fuente: AHPCS, Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas, Caja 19637.
Elaboración propia.

²⁵ Archivo Histórico Provincial de Castellón. Caja 19637.

Tabla 5.5

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS EN LA “CUENTA ESPECIAL” DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE CASTELLÓN EN EL PERIODO 1942-1945 POR SANCIONES DERIVADAS DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS²⁶

Año	Cantidad ingresada	Total acumulado	Sanción mínima	Sanción máxima
1942	147.464,40	147.464,40	24,70	37.500 ²⁷
1943	230.680	378.144,40	7	100.000 ²⁸
1944	300.627,41	678.771,81	20	149.223,75
1945	26.000	704.771,81	500	15.000

Fuente: AHPCS, Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas, Caja 19637.
Elaboración propia.

En el presente trabajo analizaremos algunos ejemplos individuales significativos, así como los centrados en la localidad de la Vall d’Uixó que nos pueden ayudar a entender la situación en la que quedaron estas personas y lo que significaba para ellas el pago de estas sanciones en tiempos muy difíciles donde lo penoso era simplemente sobrevivir.

²⁶ Se pueden consultar estos datos con mayor detalle en el Apéndice Documental.

²⁷ Corresponde al pago realizado por Fernando Gasset de Lacasaña.

²⁸ Corresponde al pago realizado por Cayetano Huguet Segarra. Este importante político castellonense, del que tenemos constancia de la apertura de su expediente en 1940, pero que desgraciadamente no se encuentra en el fondo documental del Archivo Histórico Provincial de Castellón, fue uno de los más castigados económicamente por la Ley de Responsabilidades Políticas de Castellón. Su perfil se adecuaba perfectamente al marcado por la Ley: una persona de orientación republicana y de izquierdas, con importante actividad pública y con un patrimonio notable del que aprovecharse y sacar dinero.

Los pagos que realizó son muy importantes, 305.530 ptas., casi el 50% de lo recaudado en toda la provincia en el periodo analizado, por lo que se le concedió la posibilidad de afrontarlos en cinco plazos, que fueron los siguientes: febrero de 1943: 100.000 ptas.; septiembre de 1944: 20.401,59 ptas.; octubre de 1944: 149.223,75 ptas.; noviembre de 1944: 26.161,30 ptas.; y diciembre de 1944: 9.744,07 ptas. Archivo Histórico Provincial de Castellón, Caja 19637.

Una situación parecida de pago de una sanción económica muy elevada se produjo en la provincia de Álava, en la que la sanción económica más elevada que se dictó fue de 100.000 pesetas (debido a una valoración económica del patrimonio de la familia del procesado de 180.000 pesetas), sumando el resto de sanciones impuestas en la cuadrilla de Vitoria 671.142 pesetas. N. IBÁÑEZ, “Prácticas de depuración y expolio en la jurisdicción especial durante la guerra y la posguerra en Álava”, en I. GIL BASTERRA, op. cit., pág. XXV.

La liquidación de la Ley

Con la publicación del Decreto de 13 de abril de 1945 finaliza el proceso de exigencia de nuevas responsabilidades políticas. Sin embargo, a partir de este año los expedientes en curso no finalizados debían seguir su normal desarrollo, lo que con los años generó problemas importantes a la justicia ordinaria, que había asumido las competencias, y a las correspondientes Delegaciones de Hacienda.

A través de unas instrucciones dadas a los distintos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia de Castellón por parte de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, con sede en Madrid, en enero de 1947, conocemos la voluntad de la administración franquista por acabar con las consecuencias de una jurisdicción que no hacía más que crear problemas burocráticos, especialmente relacionados con los bienes de los inculpados.²⁹

En este escrito se apelaba a los jueces a la rapidez en la liquidación de las consecuencias derivadas de la aplicación de la Ley, para lo que dictaba las siguientes instrucciones:

- Acordar el sobreseimiento inmediato de los casos pendientes si el patrimonio del inculcado no sobrepasa las 25.000 ptas., según marca la reforma de febrero de 1942.
- Notificar con rapidez los fallos, sean cuales sean. En el escrito se admite que frecuentemente pasan meses o incluso años sin que fallos y sentencias lleguen al implicado, con todos los perjuicios que ello implica para él.
- Liberar los bienes inmediatamente después de recibir un fallo absolutorio o de sobreseimiento, independientemente de que el inculcado esté inmerso en otros procesos judiciales.
- Devolver los bienes inmuebles con rapidez, mediante la anulación del control de los mismos y del correspondiente informe del administrador.

²⁹ “Instrucciones dirigidas al Juez de Primera Instancia e Instrucción de Lucena”, Caja 10208. AHPCS. Ver Apéndice Documental.

- Entregar “sin dificultad” los bienes muebles deben entregarse. Si nadie se presentara por ellos éstos deben pasar a registrarse por el Título VIII “De la ausencia” del libro 1º del Código Civil.

Estas instrucciones dejan clara la voluntad de finalizar o liquidar las consecuencias de la Ley, pero no por afán reconciliatorio o por voluntad de integración de los perjudicados, sino por solventar el tremendo problema burocrático que la Ley había provocado y que tenía en la administración de justicia colapsada. Prueba de esta voluntad de rapidez es la conclusión que remarca el inspector: “cualquier duda debe decidirse a favor del reo”.³⁰

Sin embargo, la exigencia de responsabilidades políticas no se detuvo, sino que los expedientes que ya estaban en marcha iniciaron un largo camino de resolución que en algunos casos llegó incluso a los años 1950. Así, en mayo de 1952, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Audiencia de Castellón recordaba al Presidente de la Audiencia Provincial de Castellón las instrucciones para la liquidación de las responsabilidades políticas, insistiendo en el levantamiento de embargos para los fallos absolutorios y sobreseimientos, así como la entrega de bienes sobrantes después del pago según la sentencia a los herederos de los inculcados, sin olvidar el estricto cumplimiento de las penas impuestas, tanto económicas como restrictivas de la actividad o limitativas de la libertad.³¹

Como hemos dicho anteriormente, la exigencia de responsabilidades políticas continuará su curso a lo largo de los años 1950 e incluso 1960, y no tendrá su verdadero punto final hasta noviembre de 1966, con el indulto a las responsabilidades políticas de cualquier clase y la disolución del Tribunal y la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, con su colofón de marzo de 1969, con la prescripción de todos los delitos cometidos hasta el final de la guerra civil.

³⁰ Ibidem.

³¹ “Instrucciones de la Fiscalía de la Audiencia de Castellón al Ilm. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Castellón”. Caja 10208. AHPCS.

La exigencia de responsabilidades políticas en la provincia de Castellón: estudio estadístico por localidades

Hemos considerado necesario para el presente estudio la elaboración de un banco de datos que nos permita hacernos una idea aproximada de lo que significó para cada localidad de la provincia de Castellón la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Como hemos indicado, estos datos no pueden considerarse definitivos, sino que son los que hemos podido saber a partir del análisis de las fuentes disponibles.

Para su correcta interpretación hemos de considerar una serie de cuestiones metodológicas previas. El listado de personas que ofrecemos de cada pueblo es el resultado de cruzar los datos de la incoación de expedientes publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón en el periodo 1939-1945 con los datos de los expedientes y testimonios de condena por tribunal militar (que dan lugar a futuros expedientes) depositados en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Castellón. Ambas fuentes, como hemos indicado anteriormente, son complementarias, pero es posible que algunos testimonios de condena por tribunal militar no hayan acabado en la incoación de un expediente de responsabilidades políticas. Son por tanto, listados que se acercan en un alto porcentaje al real, pero con distorsiones. Recordemos, además, que muchos de los expedientes de responsabilidades políticas se han perdido, han sido extraviados intencionadamente, están por descubrir o se han deteriorado para siempre, por lo que el problema es casi irresoluble.

Junto con el listado de personas ofrecemos una localización visual del término municipal de cada localidad y el cálculo de porcentajes de afectados, tanto a nivel provincial, como local y por sexos. Estos cálculos se han realizado teniendo como base los datos obtenidos del Censo Oficial de Población de la Provincia de Castellón de 1940³², por ser la fuente que hemos considerado más fiable de la población de la provincia en el periodo analizado. En este Censo la población está especificada por localidad y por sexo (también por estado civil y según la instrucción).

³² www.ine.es. Censo Oficial de la Población de la Provincia de Castellón. Población por municipios (población de hecho).

A continuación realizamos un comentario de las distintas profesiones de los inculcados, conocidas a través de los expedientes analizados y por la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, en muchos casos la profesión publicada en este Boletín aparece como “se ignora” o “se desconoce”, con lo que únicamente explicamos las profesiones en los casos en que las fuentes nos facilitan la información, que en la mayoría de los casos son bastante menos que el número total de implicados.

Incluimos también un estudio del ritmo de incoación de expedientes. Conocemos la fecha de incoación de expedientes tanto por el análisis de distintos expedientes como por la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, tampoco conocemos en todos los casos esta fecha, ya que tanto de los expedientes que no fueron publicados en dicho Boletín y no han sido analizados como muestra para este estudio como los testimonios de condena por un tribunal militar no conocemos dicha fecha. Por todo ello, consideramos los datos presentados como tendencias, y así deben ser entendidos.

Finalmente realizamos un estudio introductorio de los informes que las autoridades locales (alcaldía, FET y de las JONS, Guardia Civil y cura local) estaban obligados por la Ley sobre los inculcados. En estos informes no sólo podemos ver reflejados los cargos que se les imputan, sino también el origen de la incoación de expedientes, la situación en que quedaron personalmente tanto los inculcados como sus familias, así como su patrimonio y otros detalles menores. Observamos también a través de estos informes las distintas o parecidas, según el caso, actitudes de las autoridades, su grado de implicación con el régimen franquista y con el proceso de depuración de la sociedad, además de conocer la relación de poder que en cada localidad se estableció, ya que en la mayoría de los casos una de las autoridades locales o dos ejercían una influencia decisiva en las demás, aunque hay casos en que cada una de las autoridades se mantenía independiente. Para todo ello hemos analizado al menos un expediente de cada una de las localidades de la provincia de Castellón. Se trata, por tanto, de elementos importantes para la creación de un marco general de análisis, un conjunto de tendencias que sirvan de necesaria referencia al estudio más específico que abordamos en el presente trabajo, dedicado al análisis histórico de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón.

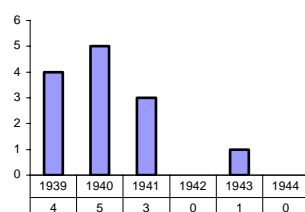
ADZANETA



En esta localidad conocemos la existencia de 28 personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que supone el 0,44% de los afectados por este concepto a nivel provincial y el 1% de los habitantes de la localidad. Los hombres son una gran mayoría, ya que constituyen 27 casos, con lo que sólo existe conocimiento de 1 mujer afectada. Esto significa que en Adzaneta se vieron implicados el 2,01% de los hombres y el 0,06% de las mujeres. Los implicados pertenecían especialmente al sector primario, aunque existe una presencia también importante del sector terciario.

Cronológicamente se puede observar cómo la incoación de expedientes tuvo un ritmo alto en los años 1939 (de agosto a diciembre) y 1940, ralentizándose en 1941 y finalizando a partir de 1942, excepto un caso incoado en 1943. La imputación de habitantes de Adzaneta se hizo, pues, desde el principio de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.

Gráfica 5.4



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia

En cuanto a las autoridades que colaboraron en el procesamiento de estos ciudadanos¹, la alcaldía se limitaba a la información personal y familiar, así como su localización y tributación, además de ofrecer datos sobre el trabajo y salario del cónyuge. No informaba de antecedentes políticos. La guardia civil realizaba informes independientes de la alcaldía, aunque tampoco informaba de antecedentes políticos. No era raro que realizara un mismo informe para varios imputados. No pasaba lo mismo con FET y de las JONS de Adzaneta, que, de la mano de su Delegado Local Francisco Bellés,

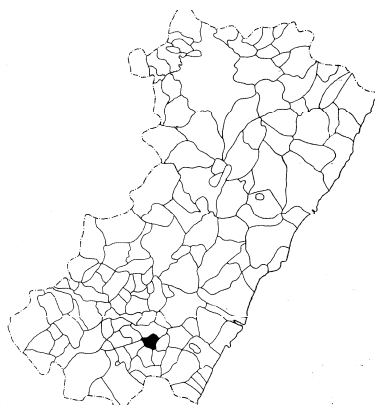
¹ Expediente de Responsabilidades Políticas a Benjamín Barberá Monferrer. Caja 10131. AHPCS.

realizaba informes copiados, aunque no calcados, de la alcaldía. De esta forma, podemos conocer que el poder local estaba en manos de la alcaldía y la guardia civil. En cuanto a la Iglesia, el cura párroco de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Adzaneta, Francisco Escorihuela, informaba en sus informes acerca de los bienes del imputado y su cónyuge, así como de su situación familiar y profesional.

Afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas en Adzaneta:

Agut Vidal, Jacinto	Fabra Dealbert, Manuel
Aparici Fabra, José	Gil Barberá, Perfecto
Barberá Monferrer, Ángel	Gil Centelles, Ramón
Barberá Monferrer, Benjamín	Hurtado Valiente, Eulogio
Barberá Vidal, María	Izquierdo Gil, Manuel
Beltrán Moliner, Angelino	Juan Escrig, Felipe
Beltrán Rovira, Manuel	Marín Sánchez, Miguel
Bellés Moldona, José	Monferrer Roig, Juan
Bellés Mollón, José	Roig Juan, Vicente
Escrich Colomer, Salvador	Roig Roig, Carlos
Escrig Agut, Salvador	Rovira Colomer, Juan
Escrig Aparicio, Miguel	Rovira Porcar, Mateo
Escrig Escrig, Sacramento	Silvestre Escrig, Joaquín
Fabra Agut, Manuel	

AHÍN



En Ahín hubo 3 afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,04% a nivel provincial y el 1,02% de los habitantes de la localidad. Las tres personas son hombres, con lo que el 2% de los varones se vieron afectados. Sólo poseemos datos profesionales de uno de los implicados, que era labrador.

En cuanto a la periodicidad sólo disponemos de los datos de un expediente, que fue incoado en 1941.

La alcaldía de Ahín parece que llevaba la voz cantante en cuanto a la confección de los informes de los afectados. El informe realizado por el alcalde José Lengua se centraba en la situación familiar y profesional del inculcado, dando una gran importancia a los datos relativos a propiedades inmuebles del mismo. Su influencia sobre FET de las JONS era directa, ya que el informe que emitía su Delegado Local, H. Lengua, era calcado del primero. La guardia civil encargada de los informes de los habitantes de Ahín era la de Artana, centrándose también en la situación familiar, profesional y económica del inculcado, aunque con menor detalle que el informe de la alcaldía. El informe de Esteban Saborit, cura de la Parroquia de San Miguel de Ahín, era más breve, pero informaba en general de todos los aspectos económicos: sueldo del inculcado y situación de su mujer e hijos.²

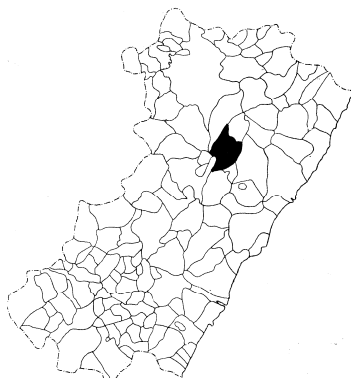
En esta localidad conocemos la existencia de 28 personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que supone el 0,45% de los afectados por este concepto a nivel provincial y el 1% de los habitantes de la localidad. Los hombres son una gran mayoría, ya que constituyen 27 casos, con lo que sólo existe conocimiento de 1 mujer afectada. Esto significa que en Adzaneta se vieron implicados el 2,01% de los hombres y el 0,06% de las mujeres.

Vecinos de Ahín afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Navarro Navarro, Ramón
Lengua Esteve, Ambrosio
Gil Molina, Herminio

² Expediente de Responsabilidades Políticas a Ramón Navarro Navarro. Caja 10130. AHPCS.

ALBOCÁCER



En Albocácer 76 personas se vieron implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas, un 1,21% a nivel provincial y el 2,79% de la población local. De esas 76 personas, 72 eran hombres, con lo que el 5,82% de la población masculina de la localidad se vio implicada, mientras que 4 eran mujeres, un 0,27% de las mismas. La mayoría pertenecían al sector primario.

En cuanto al ritmo de incoación de expedientes, conocemos los datos de 33 de los mismos, de los cuales 1 corresponde al año 1939 y los 32 restantes a 1940. Se puede decir, pues, que es en este último año en el que la persecución de los afectados se llevó a cabo con mayor intensidad.

Según el expediente que hemos analizado la autoridad que más se significó a la hora de hacer los informes de los inculpados fue la guardia civil. Esteban López, el Comandante del Puesto de Albocácer en 1941 se significó por sus gestiones a la hora de recabar información de un gran número de vecinos. Una fuente independiente era la del alcalde M. Adell. Sin embargo, no hemos conocido informes de FET y de las JONS ni del cura párroco correspondiente³. Hemos de recordar que desde el Puesto de la Guardia Civil de Albocácer también se realizaban los informes de los vecinos de Sierra Engarcerán.

³ Expediente de Responsabilidades Políticas a Enrique Monfort Miralles. Caja 10099. AHPCS.

Vecinos de Albocácer afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Roca, Jaime	Ferrer Ferreres, José
Adell Sales, Saturnino	García Artola, Emiliano
Adell Segarra, Saturnino	García Edo, Samuel
Anglés Roda, Bautista	García Meliá, Juan Bautista
Barberá Boix, Joaquín	García Peraire, Vicente
Belmunt Tomás, Francisco	Llopis Beltrán, Ismael
Beltrán Bellés, Francisco	María Miralles, Ismael
Beltrán Bellmunt, Manuel	Meliá Boix, Ángel
Beltrán Peraire, Pablo	Meliá Ferrando, Miguel
Beltrán Tena, Rogelio	Mestre Fando, Manuel
Bellés Beltrán, Daniel	Monfort Miralles, Enrique
Bellmunt Esteller, Pablo	Montañés Sales, Ismael
Bellmunt Febrer, Vicente	Montañés Sales, Vicente
Bellmunt Ferrando, José	Orlandes Ortiz, Pablo
Bellmunt Peraire, José	Ortí Albert, Joaquín
Bellmunt Segarra, Vicente	Peraire Llopis, Francisco
Blas Segarra, Ismael	Peraire Miralles, Francisco
Boix Albert, Argimiro	Porcar Montañés, Vicente
Boix Ales, Vicente	Puig Peraire, Miguel
Boix Carcacer, Carmen	Queral Vallés, Vicente
Boix Peraire, Antonio	Roca Llopis, Joaquín
Boix Pitarch, Juan	Roca Llopis, Juan
Boix Segarra, Antonio	Sales Beltrán, Benjamín
Boix Segarra, José	Sales Moliner, María
Boix Segarra, Manuel	Sales Sabater, José
Bonet Bellmunt, Vicente	Sales Soligó, Miguel
Bort Ferrando, Carmen	Segarra Albert, Vicente
Caballer Monteverde, Juan	Segarra Beltrán, Agustín
Carceller Meliá, Dionisio	Segarra Centelles, Antonio
Colom Iturat, Francisco	Segarra Pitarch, Losar
Collado Montañés, Ismael	Segarra Prats, Vicente
Della Segarra, Casimiro	Segarra Sales, Vicente
Escrig Celma, Ismael	Segarra Segarra, Miguel
Escrig Ortí, José Vicente	Severo Claro, Pablo
Esteller Miralles, Ángel	Tena Segarra, Juan
Expúa Expósito, Dolores	Tena Segarra, Vicente
Ferrando Adell, Emilio	Tomás Segarra, Pablo
Ferrando Adell, Miguel	Vicente Adell, Pedro

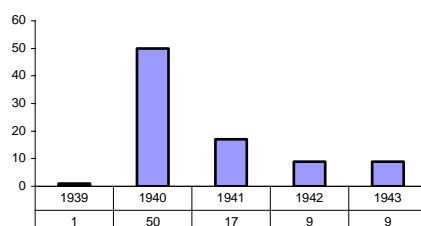
ALCALÀ DE XIVERT



En Alcalà de Xivert la población afectada por la Ley de Responsabilidades Políticas se eleva a 130 personas, es decir, el 2,08% a nivel provincial y el 2,7% a nivel local. Los hombres, un total de 124, constituyen la gran mayoría de los casos, lo que significa que un 5,44% de los varones de la localidad fueron imputados, mientras que los 6 casos de mujeres suponen el 0,23% de las mismas de la localidad. La gran mayoría de los implicados pertenecían al sector primario, especialmente labradores y jornaleros, con una presencia de los sectores secundario y terciario que se puede situar en torno al 8% de los implicados.

Conocemos la fecha de incoación de 86 de estos expedientes que nos marcan un ritmo cronológico que destaca especialmente al año 1940 como el de mayor represión. También hay que destacar el elevado número de expedientes que se incoan en los años 1942 y 1943, cuando ya habían transcurrido tres y cuatro años después del final de la guerra civil.

Gràfica 5.5



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Respecto a las autoridades locales⁴, existía un claro dominador que ejercía influencia directa sobre el resto de autoridades: el alcalde José Bosch emitía unos informes que

⁴ Esta información está basada en la consulta de los expedientes del AHPCS correspondientes a Francisco Almela Griñó, Caja 10080; Raimundo Antón Piquer, Caja 10078; Vicente Arín Tarrago, Caja 10078; Pascual Arnau Caudet, Caja 10078; Miguel Bou Almela, Caja 10078; José Colom Anglés, Caja 10079; Lorenzo Cucala Pitarch, Caja 10079; Festiva Cherta Albert, Caja 10080; Severo Dempere Traver, Caja 10078; Eduardo Ferreres Sospedra, Caja 10080; Vicente Fresquet Ferreres, Caja 10078; Manuel Herrera Herrera, Caja 10078; Isabel Herrera Rovira, Caja 10079; Manuel Mañez Cherta, Caja 10078; Jaime Peguerols Albert, Caja 10079; Francisco Puig Vinuesa, Caja 10079; Ramón Roca Martorell, Caja 10078; Joaquín Salvador Cherta, Caja 10078; Pascual Sancho Ferreres, Caja 10078; y Luis Sospedra Galarza, Caja 10079.

eran posteriormente calcados y firmados tanto por el Delegado Local de FET y de las JONS, Juan Bautista Sospedra, como por el cura párroco de la Parroquia de San Juan Bautista de Alcalà de Xivert José Luis Adell García. Se trataba de informes en los que se daba cuenta detallada, con un tono directamente acusatorio, del pasado político del inculpado y de sus acciones más destacadas desde el 1 de octubre de 1934. Además, se ofrecían datos de la situación económica del inculpado como patrimonio, jornales que cobra la familia, etc. La otra fuente dominante en Alcalà de Xivert parece ser la guardia civil, que, con una redacción independiente, informaba también de aspectos políticos y económicos, estos últimos muchas veces confeccionados con una gran minuciosidad. Estaban firmados por el Brigada José Vinuesa Aicart. En contadas ocasiones este informe de la guardia civil era la fuente directa del informe del cura párroco y a veces solía ser la fuente también del informe de la alcaldía.

Personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas en Alcalà de Xivert:

Albert la Rosa, Joaquín	Centelles Martínez, José
Albiol Maura, Arturo	Cepillo de los Reyes, Cristóbal
Alcalá Roures, José	Colom Anglés, José
Almela Griñó, Francisco	Colom Anglés, Pascual
Ángeles Calduch, Francisco	Cucala Pitarch, Lorenzo
Anglés Espert, Tomás	Cucala Roure, José
Antolí Climent, Ildefonso	Cucala Sancho, José
Antón Piquer, Raimundo	Cherta Albert, Festiva
Añó Valverde, Ramón	Cherta Cherta, Pascual
Arín Tarragó, Vicente	Dempere Traver, Severo
Arnau Candel, Pascual	Ebrí Ebrí, Francisco
Arnau Folch, Manuel	Ebrí Fabrer, Ramón
Barceló Iturat, Joaquín	Espallergues Molina, Leonardo
Barceló Pitarch, Agustín	Espallergues Sospedra, Pascual
Bayarri Arnau, Ramón	Esteller Máñez, Jaime
Beltrán Ebri, José	Estellés Tomás, Pascual
Beltrán Juan, José	Fabregat Roca, Juan
Bellés Marco, Matías	Ferrando Traver, Andrés
Blach Lavernia, Francisco	Ferrer Bellés, Miguela
Bou Almela, Miguel	Ferreres Sospedra, Amparo
Bruno Calduch, Manuel	Ferreres Sospedra, Bautista
Burriel Maura, Francisco	Ferreres Sospedra, Eduardo
Burriel Maura, Manuel	Ferreres Sospedra, Manuel
Calduch Fonchero, Francisco	Folch Ebri, Francisco
Calduch Fresquet, José	Fresquet Ferreres, Vicente
Calduch Tena, Juan	Fresquet Roda, Joaquín
Calduch Vela, Juan José	Fuster Bou, Juan
Castillo Ibáñez, Emilio	Fuster Juan, Bautista
Catabella Cucala, Joaquín	Galarza Millán, Bautista

García Silvestre, Germán
Gil Herrero, Manuel
Guillamón Roda, Bautista
Herrera Herrera, Manuel
Herrera Martí, Pascual
Herrera Roda, Vicente
Herrera Rovira, Isabel
Iturat Foix, Antonio
Iturat Gil, José
Iturat Sospedra, Antonio
Iturat Sospedra, José
La Rosa Barrachina, Juan Bautista
Lorient Puig, José
Mañes Doménech, Juan
Máñez Cherta, Manuel
Marín Bou, Bautista
Martí Paris, Juan Bautista
Martínez Belda, Leandro
Martínez Torrent, Mario
Martínez Torrente, Antonio
Martorell Galindo, Ramón
Marzá Moliner, Antonio
Moya García, Francisco
Moya Vilaplana, Antonio
Muñoz Añó, Eugenio
Obiol Juan, Joaquín
Ortiz Gonzalbo, Juan
Ortiz Vinuesa, Pablo
Pascual Conesa, Miguel
Peguerotes Albert, Jaime
Peraire García, Francisco
Pitarch Arrufat, Joaquín
Pitarch Ortiz, Manuel
Puig Peraire, Vicente
Puig Vinuesa, Francisco
Ribalta Soler, José

Roca Martorell, Pascual
Roca Martorell, Ramón
Roda Moya, Bautista
Roda Robres, Ramón
Roda Sospedra, Isidro
Ronchera Mundo, Antonio
Rubio Folch, Pascual
Salvador Adell, Vicente
Salvador Cherta, Joaquín
Sánchez Ferreres, Pascual
Sancho Caballer, José
Sancho Febrer, Benito
Sancho Ferreres, Pascual
Sancho Querol, Bautista
Sancho Sanz, José
Sancho Sospedra, Antonio
Sanz Febrer, Benito
Sanz Segarra, Gaspar
Soriano Bayarri, Lorenzo
Soriano Ebrí, Juan Bautista
Sorlí Iturat, José
Sospedra Bas, Joaquín
Sospedra Esteller, Ismael
Sospedra Galarza, Luís
Sospedra Herrera, Enrique
Sospedra Herrera, Francisco
Sospedra Pavia, Pascual
Traver Lavernia, Antonio
Vela Cucala, Dolores
Vela Herrera, Tomás
Vidal Sancho, Antonio
Vidal Soligó, José
Vinuesa Rodríguez, Rosa
Vinuesa Sorlí, Joaquín
Vinuesa Sospedra, José
Voltes Bayarri, Pascual

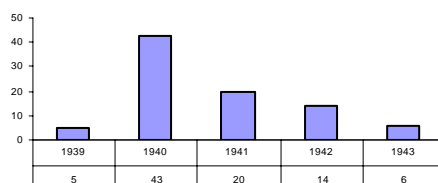
ALCORA



En Alcora fueron 169 las personas implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas durante la posguerra, lo que representa el 2,7% a nivel provincial y supone que el 4,5% de la población de dicha localidad sufrió personalmente la persecución que implicaba. De las 169 personas 133 eran hombres, lo que supone el 7,62% de la población masculina de la localidad, mientras que las 36 mujeres implicadas suponían el 1,81% de la población femenina correspondiente. La gran mayoría de los implicados pertenecían al sector primario de la economía, siendo de menor importancia el número de encuadrados en el sector secundario y testimoniales los casos del sector terciario.

Conocemos el momento de incoación de 88 de los expedientes de habitantes de Alcora, que ofrecen una periodización en la que se ve claramente cómo es en los años 1940 y 1941, especialmente en el primero de ellos, cuando se llevan a cabo más procesos. Por otra parte, destaca también un número relativamente alto de expedientes incoados en 1942 y 1943. En definitiva, en Alcora todos los años que estuvo vigente la Ley de Responsabilidades Políticas se procedió a la incoación de expedientes.

Gráfica 5.6



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Las autoridades de Alcora⁵ se implicaron en su mayoría en la depuración de responsabilidades políticas. Como hemos visto en otras poblaciones son la guardia civil y la alcaldía las que parecen ejercer un mayor peso en el control de la población. El Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Alcora, Juan Sifre, realizaba informes en los que se trataba especialmente el pasado político del inculcado, destacando sus

⁵ Datos obtenidos del Expediente de Responsabilidades Políticas de Justo Sanz Albalade. Caja 10083. AHPCS.

hipotéticos actos delictivos, sin obviar, naturalmente, el aspecto más solicitado por las instancias superiores: los datos económicos relativos a los bienes de los inculpados. Parece que en Alcora el informe de la Guardia Civil influía claramente en el informe del Jefe Local de FET y de las JONS, Pedro Cotando, quien se limitaba a firmar un resumen del anterior. Una fuente independiente era la alcaldía. El alcalde de Alcora (firma como Benjamín con apellido ilegible) ofrecía más y detallados datos sobre el pasado político y los presuntos actos vandálicos cometidos por el inculpado, en un informe realizado a puño y letra. Tampoco olvidaba la relación detallada de bienes correspondiente al inculpado. Finalmente, no tenemos constancia del informe que realizaba el cura párroco de Alcora.

Relación de personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas en Alcora:

Aicart Andrés, Ramón	Bellés Capilla, José
Alegre Garcés, Guadalupe	Benlliure Safont, Ramona
Álvaro Artero, Francisco	Branchadell Beltrán, Manuel
Andrés Gasulla, María	Branchadell Beltrán, Pilar
Andrés Nebot, Rosario	Branchart Nebot, Ernesto
Andreu Doménech, Vicente	Brisach Gómez, Vicente
Andreu Guillamón, Vicenta	Carnicer Andrés, Antonio
Añó Pardo, Ana María	Carnicer Gallén, Manuel
Añó Pardo, Jaime	Carnicer Manselgas, Manuel
Añó Pardo, Juan	Centelles Nebot, Ramón
Aparicio Tomás, Joaquín	Cervera Bachero, Manuela
Artero Flores, María	Cervera Latorre, Vicente
Artero Forés, Salvador	Chiva Manselgas, Vicente
Artero Forés, Vicente	Chiva Prades, Juan
Bachero Álvaro, Manuel	Chiva Tomás, José
Bachero Arzo, José	Chiva Tormo, José
Bachero Bachero, Juan	Chordá Grangel, Vicente
Bachero Safont, Jaime	Chorva Villalonga, Manuel
Bachero Safont, Juan	Edo Badenes, Vicente
Bachero Safont, Manuel	Escrich Herrando, Juan
Bachero Torner, Ramón	Escriche Vallés, Pedro Juan
Bachero Vidal, José	Escrig Valles, Gracia
Badenes Calvo, Arcadio	Eugenio Martí, Antonio
Badenes Calvo, Fernando	Eugenio Ten, Eugenio
Badía Safont, Francisco	Ferrer Álvaro, José
Bariel Masó, José	Ferrer Álvaro, Narciso
Bartoll Herrando, Manuel	Ferrer Bachero, María
Bartoll Nebot, Manuel	Ferrer Pérez, Encarnación
Beltrán Edo, Juan	Ferrer Pérez, Mercedes
Beltrán Edo, Vicente	Ferrer Vila, Vicente

Ferrer Villalonga, Agustín
Forés Alepuz, Cristóbal
Forés Costa, Cristóbal
Forés Garcés, Cristóbal
Forés Saborit, Vicente
Fornés Safont, Ramón
Gallén Albalat, Antonio
Gallén Albalat, Francisco
Gallén Albalat, José
Gallet Masó, Vicente
Garcés Andrés, María
Garcés Peña, Rosario
Garcés Salvador, Antonio
Garcés Salvador, Cristóbal
Garcés Salvador, Salvador
Gargallo Alegre, Guadalupe
Gargallo Alegre, Julio
Gas Bachero, Carmen
Gasch Bachero, María
Gasch Bernat, María
Gasch Garcés, Teresa
Gasch Salvador, Vicente
Gasch Serrano, Vicente
Gayet Masó, Vicente
Gil Aparici, José
Gil Ibáñez, José
Gonzalbo Gasch, Cristóbal
Gozalbo Gasch, Francisco
Grangel Arzo, Cristóbal
Guía Renau, Constancio
Guillamón Bachero, Cristóbal
Guillamón Pérez, José
Guillamón Ruiz, José
Herrero Ferrer, María
Juan Albalate, Justo
Juan Mániz, Gerardo
Latorre Bou, José
Luna Carnicer, Manuel
Manselgas Gómez, Manuel
Manselgas Remolar, Manuel
Martí Bernat, José
Martí Herrero, José
Martí Nebot, Vicenta
Martí Nebot, Vicente

Martín Bernad, José
Mascarós Vaquer, Antonio
Miravet Aicart, Francisco
Miravet Forés, Daniel
Miravet Lluesma, José
Monferrer Latorre, Vicente
Montes Cercos, Braulio
Montoliu Martí, Daniel
Montoliu Martín, Miguel
Morte Nebot, Juan
Muriach Ribes, Faustino
Nebot Beltrán, Manuel
Nebot Cubedo, Manuel
Nebot Edo, Juan Antonio
Nebot Forés, José
Nebot Ibáñez, Manuel
Nebot Miralles, Vicente
Nebot Porcar, Ernesto
Nebot Porcar, Rosario
Nebot Redón, José
Nebot Redón, Manuel
Nebot Vilar, María
Negre Alberó, Vicente
Negre Herrando, José
Pallarés Prats, Vicente
Pallarés Segura, Guillermo
Pancho Vela, José
Pastor Falcó, Vicente
Peña Aicart, Carmen
Peña Cervera, Francisco
Peña Miravet, Pilar
Peñarrocha Aixa, Antonio
Plaza Maneus, Salvador
Prades Forés, Vicente
Redolat Aicart, Vicente
Redolat Mallol, Ramona
Redolat Nadal, Ana
Renau Meneu, María
Ribes García, Miguel
Ribes Gasch, Carmen
Ribes Gasch, Joaquín
Royo Peris, Lorenzo
Royo Peris, Rosario
Saborit Chiveli, Cristóbal

Saborit Forés, Cristóbal
Safont Martí, Cristóbal
Safont Nebot, Joaquín
Safont Tena, María
Sanchiz Aicart, Fernando
Sanz Albalade, Justo
Sanz Setembre, Pascual
Setembre Safont, Francisco
Serrano Prats, Ramón
Setembre Safont, Francisco
Severino Sanz, Diego

Soriano Garcés, Vicente
Tomás Ferrer, Vicenta
Tormo Zaragoza, Antonio
Tormo Zaragoza, Rosario
Trilles Ahís, Matías
Vallés Capilla, José
Valls Torner, Ramón
Vázquez Expósito, Rosario
Ventura Morte, Vicente
Ventureira Peña, Ramón

ALCUDIA DE VEO



En esta población no tenemos constancia que se haya incoado ningún expediente de responsabilidades políticas. Sin embargo, tenemos constancia de la disposición en el archivo del Juzgado Especial de Responsabilidades Políticas de Castellón de dos testimonios de condena por un tribunal militar que, como tales, deberían haber originado sendos expedientes de responsabilidades políticas. Si finalmente no se llevaron a cabo seguramente fue por falta de medios o por las instrucciones que daba la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942, por la que se ordenaba centrarse únicamente en aquellos casos que realmente pudieran dar beneficio económico, es decir, en los que el inculcado poseía una cantidad considerable de bienes.

Las personas de Alcudia de Veo cuyo testimonio de condena estaban a disposición de las autoridades eran:

Pallarés Barres, David

Molina Pérez, Justo

ALFONDEGUILLA



En Alfondeguilla el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 14 personas, es decir, el 0,22% de los inculcados a nivel provincial y el 1,75% respecto a la población local. Todos ellos eran varones, lo que representa el 3,78% de los hombres de la localidad. Entre los afectados destaca especialmente la dedicación al sector secundario, con casi el 75% de los casos, seguido del sector primario. Este predominio del sector industrial podría deberse a la influencia de la potente empresa Segarra de la Vall d'Uixó.

Según los datos que disponemos sobre 11 de estos expedientes, cronológicamente destaca el hecho que en los años 1939 y 1940 no se procedió a la incoación de expedientes, realizándose el primero en 1941 y los 10 restantes en 1942, tres años después del final de la guerra. En 1943 no hubo tampoco ningún expediente.

Las autoridades locales también colaboraron en la redacción de informes sobre los inculcados. La alcaldía, presidida por Domingo Herrero, y FET y de las JONS local, liderada por José Clausell, realizaban informes que se centraban especialmente en los aspectos patrimoniales del inculcado y en la situación económica de su cónyuge e hijos, cada uno con una redacción independiente. Centrado en aspectos políticos, económicos y familiares, el informe de la Guardia Civil se realizaba desde el puesto de la Vall d'Uixó, a través del Comandante del Puesto Gaspar Corominas en 1942. La redacción del informe del cura de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Alfondeguilla también era independiente, aunque con un texto casi telegráfico y con tan poca información que puede indicar cierta resistencia del mismo, Andrés Calderón, a la realización de este tipo de informes.⁶

⁶ Información basada en el Expediente de Responsabilidades Políticas de Pascual Juan Centelles, Caja 10099. AHPCS

Relación de personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas en
Alfondeguilla:

Benet Andrés, Vicente
Berenguer Villalba, Vicente
Carreras Gil, Ramón
Centelles Bou, José
Ferrerres Herrero, Ernesto
Herrero Piquer, Ernesto
Herrero Piquer, Vicente

Herrero Villalba, Blas
Juan Centelles, Pascual
Moreda Coballa, Manuel
Rodríguez Milla, Matías
Rodríguez Valls, José
Rodríguez Villalba, Simeón
Villalba Fonfría, Bartolomé

ALGIMIA DE ALMONACID



De Algimia de Almonacid sólo tenemos constancia de la posesión del Juzgado Especial de Responsabilidades Políticas de Castellón de testimonios de condena por un tribunal militar a 5 de sus vecinos, así como un caso, el de Juan Bautista Calvo Blay, al que sí sabemos que se le abrió expediente, pero que éste no se encuentra en los fondos del Archivo Histórico Provincial de castellón. Todos ellos eran varones, lo que significa que el 0,09% de los afectados a nivel provincial, el 0,7% de los habitantes de esta localidad y el 1,33% de los hombres que en ella habitaban.

Relación de vecinos de Algimia de Almonacid afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Tolos Cifre, Joaquín

Calvo Blay, Juan Bautista

Calvo Navarro, Joaquín

Gil Martín, Francisco

García Martín, Manuel

Gil Martín, Rafael

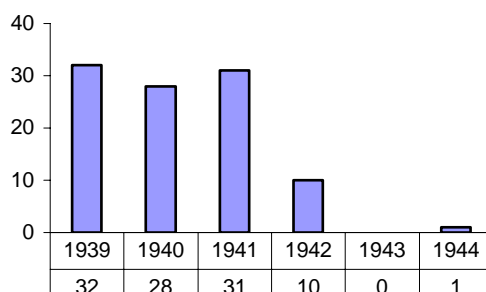
ALMAZORA



En Almazora el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 208, lo que representa el 3,32% de los afectados a nivel provincial. Respecto a su población, éstos representaban el 2,53%. Los hombres dominaban claramente, con 191 casos, lo que implicaba que el 5,15% de los varones de Almazora se vieron directamente implicados en la exigencia de responsabilidades políticas. El número de mujeres fue de 17, un 0,37% de las mujeres de la población. En cuanto a su actividad profesional, la mayoría se dedicaban al sector primario (labradores sobre todo), aunque con una presencia de los sectores secundario y terciario que se situaba alrededor del 15% de los mismos.

Los expedientes se incoaron tanto por existencia de un testimonio de condena de un tribunal militar como por la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola en 1940. En cuanto al ritmo de incoación de expedientes, éste fue alto desde el primer año, 1939, manteniéndose hasta 1941. En 1942 el número de casos desciende significativamente para quedarse en 0 casos en 1943. Sin embargo, en 1944, cinco años después del final de la guerra civil, la exigencia de responsabilidades políticas se retoma con la incoación de 1 caso.

Gráfica 5.7



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En Almazora todas las autoridades locales que la Ley de Responsabilidades Políticas obligaba a colaborar en la realización de informes sobre los procesados lo hicieron

activamente⁷. La Guardia Civil emitía informes centrados especialmente en la situación económica y patrimonial del implicado, aunque en los casos de mayor significación pública y política no se ahorraban detalles en largos informes recogidos a partir de la colaboración de vecinos. Estos informes, en los que se incluían valoraciones morales sobre los procesados, eran independientes del resto y estaban firmados por el Comandante Antonio Molina González (1939-1942), cuyas fuentes eran, como hemos dicho, las informaciones de los vecinos y los datos en posesión del Ayuntamiento. Los informes emitidos por la alcaldía no eran muy diferentes, aunque tendían a ser un poco más resumidos y a añadir datos sobre la situación familiar del procesado. Firmados en su mayoría por José Grifo Soler, no añadían mucha más información respecto a los informes elaborados por la Guardia Civil. Este alcalde intervino en algún expediente como acusador directo de algún procesado.

Los informes realizados por FET y de las JONS de Almazora tenían también una redacción propia e independiente y solían centrarse en los aspectos familiares y políticos del procesado, pero, sobre todo, en sus bienes. En ocasiones solían citar los nombres de los vecinos que habían proporcionado la información para demostrar su solvencia y fiabilidad. En algunas ocasiones su redacción era igual a los informes de la alcaldía. Estaban firmados por José de apellido ilegible. En algunos expedientes se aportaban informes de la alcaldía y FET y de las JONS de Castellón.

En algunos de los expedientes no se incluye el correspondiente informe del cura párroco, aunque en los que aparece se centran sobre todo en los aspectos económicos personales y familiares. No eran muy extensos, a veces telegráficos, aunque sí muy directos y, en ocasiones, no ahorraban calificativos morales relativos a la presunta peligrosidad social del inculpado, como por ejemplo la utilización de “izquierdista y malo” como única descripción del mismo. Están firmados por Alejandro Colom, de la Parroquia del Nacimiento de Nuestra Señora, aunque en 1943 comienza a firmar los informes un cura párroco llamado Guillermo (apellido ilegible) que directamente muestra su reticencia a informar de aspectos no religiosos.

⁷ Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Vicente Beltrán Gómez, Caja 10096; María Claramonte Martínez, Caja 10064; Vicente Clausell Ferrer, Caja 10079; Vicente Chabrera Agustí, Caja 10064; Leonor Díaz López, Caja 10130; Ángel Esquembre Carreras, Caja 10096; Manuel Galí Fraga, Cajas 10080 y 10061; Daniel Grifo Arquimbau, Caja 10079; Federico Martínez Vives, Caja 10064; Vicente Monsó Morales, Caja 10079; Joaquín Mundina Soler, Caja 10064; Enrique Pitarch Felip, Caja 10079; Vicente Sansano Seder, Caja 10130; Enrique Vicente Corell, Caja 10097; y José Vidal Paul, Caja 10130; AHPCS.

Relación de vecinos de Almazora afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abella Bernat, Inocencio	Boira Sancho, José Manuel
Adsuara Miralles, José Manuel	Bovea Domínguez, José
Adsuara Pons, Joaquín	Brisach Amiguet, Lorenzo
Adsuara Pons, Vicente	Brisach Amiguet, Miguel
Agustí Beltrán, Manuel	Brisach Amiguet, Ramón
Agustí Bellido, José	Brisach Amiguet, Vicente
Agustí Claramonte, Manuel	Brisach Santolaria, Vicente
Agustí Esteve, Vicente	Burdeos Vidal, Bautista
Amiguet Cebría, Dolores	Burdeus Fortea, Francisco
Andrés Igual, Joaquín	Burdeus Vidal, Bautista
Aragón Montoliu, José	Cabrera Agustí, Vicente
Aragón Montoliu, Pascual	Calduch Almela, Manuel Jesús
Arenós Cabedo, Joaquín	Campos Benedicto, Vicente
Arenós Domínguez, Enrique	Carceller Orti, Enrique
Arquimbau Praga, Enrique	Castellanos Chiva, José
Artero Beche, Joaquín	Cepriá Cubertorer, José
Artero Chust, Francisco	Cifre Fortuño, Juan Bautista
Artero Felip, Joaquín	Claramente Martínez, María
Artero Fondría, Joaquín	Claramonte Esmeralda, Vicente
Artero Igual, María	Claramonte Forcada, José
Artero Vicent, Rosario	Claramonte Gómez, Salvador
Artero Villarroig, Joaquín	Claramonte Gómez, Vicente
Badal Planelles, José	Claramonte Martínez, Joaquín
Balaguer Piñana, José	Claramonte Martínez, María
Ballester Amiguet, Rosa	Claramonte Martínez, Vicente
Ballester Forcada, Vicente	Claramonte Pilar, José
Ballester Pseudo, Eliseo	Clausell Clausell, Francisco
Ballester Pseudo, Encarnación	Clausell Ferrer, Vicente
Ballester Pseudo, Juan	Clausell González, Manuel
Ballester Petit, Juan	Climent Beltrán, Dolores
Beltrán Gómez, Vicente	Climent Beltrán, José
Beltrán Pons, Vicente	Colera Sancho, Francisco
Beltrán Salais, Francisco Antonio	Comín Arquimbau, Francisco
Beltrán Salais, Joaquín	Comins Arquimbau, Manuel
Beltrán Sansano, Vicente	Corones Adsuara, Miguel
Bellido Broch, Ricardo	Costa Francisco, José
Bernat Gil, Vicente	Costa Francisco, Vicente
Blanch Clausell, Vicente	Cucala Clausell, Joaquín

Chabrera Agustí, Vicente
 Chust Mingol, Vicente
 Díaz López, Leonor
 Dols González, Manuel
 Domínguez Miralles, José
 Enguidano Salabarta, Miguel
 Escurida Montenacrero
 Esquembre Carreras, Ángel
 Esteve Comins, Enrique
 Esteve Esmeralda, Enrique
 Facundo Asensi, Juan
 Fernández Toledo, Teófilo
 Ferrer Esteller, José
 Ferrer Llopis, Vicente
 Fonfría Burdeos, Francisco
 Fonfría Sancho, Antonio
 Forcada Miralles, Regina
 Forcada Rosell, Dolores
 Forcada, Enrique
 Fortea Claramonte, Ramón
 Fraga Adsuara, Joaquín
 Fraga Adsuara, José
 Fraga Clausell, José
 Galí Artero, Vicente
 Gali Fraga, Manuel
 Galí Pons, Blas
 Gallart Adsuara, Ismael
 García Puzol, Joaquín
 Genís Viñals, Joaquín
 Gil Beltrán, Rosa
 Gimeno Agustí, Vicente
 Gimeno Flors, Alfonso
 Ginés Mingol, Antonio
 Ginés Selusi, Antonio
 Gómez Hidalgo, José
 Gómez Maciá, Bautista
 González Rivelles, José
 Grifo Arquimbau, Daniel
 Grifo Igual, Daniel
 Grifo Igual, Enrique
 Herrero Igualada, José
 Herrero Igualada, Vicente
 Ibáñez Carmen, Rosa
 Ibáñez Caudet, Antonio

López Mellado, Juan
 Llop Artero, Vicente
 Llop Artero, Vicente
 Machordom Gimeno, Ignacio
 Marmeneu Ballester, Vicente
 Martí Agramunt, José
 Martí Gali, Remigio
 Martinavarro Blanch, Pascual
 Martínez Cervantes, María
 Martínez Vives, Federico
 Mas Gómez, Pascual
 Mas Gómez, Vicente
 Matutano Monferrer, Antonio
 Medina Amigué, Vicente
 Mir Gimeno, Blas
 Miralles Ochando, José
 Monsó Miralles, Manuel
 Monsó Morales, Vicente
 Montañés Castellanos, José
 Montoliu Igual, Alejandro
 Monzó Morales, Manuel
 Morales Ros, Vicente
 Mosó Morales, Manuel
 Mundina Amigué, Vicente
 Mundina Beltrán, Vicente
 Mundina Francisco, José
 Mundina Mollar, Joaquín
 Mundina Soler, Joaquín
 Mundina Traver, José
 Muñoz Fernández, Timoteo
 Navarro Aymerich, Tomás
 Nicolau Balaguer, Manuel
 Nicolau Bondía, José
 Ocaña Ortega, Benito
 Ortiz Mingol, Ramón
 Ortiz Segarra, Julián
 Palanques Fonfría, Manuel
 Peris González, Vicente
 Pseudo Grifo, Joaquín
 Pitarch Felip, Enrique
 Polo Flors, José
 Pons Ballester, Daniel
 Pons Brisach, Pascual
 Pons Cubertoret, Manuel

Pons de la Puerta, José
Pons Julve, Eugenio
Pons Manrique, José
Pons Manrique, Pascual
Querol Romero, Vicente
Rambla Fabregat, Joaquín
Ramos Amiguet, Vicente
Renal Barberá, Bautista
Renal Soriano, Carmen
Renau Barberá, Bautista
Renau Soriano, Enrique
Riera Beltrán, José
Rochera Fabregat, Enrique
Rovira Cervera, Joaquín
Sabater Miralles, Antonio
Sáez Faéz, José
Safont Manrique, José
San Eduardo Volta, Jaime
Sancho Benedicto, José
Sansano Sender, Vicente
Santamagdalena Capdevila
Sebastiá Tormo, Miguel

Serra Agustí, Julio
Solá Gil, Carmen
Soler González, Francisco
Soriano Mundina, Enrique
Talens Escandell, José
Tormo Adsuara, Miguel
Trenco Domínguez, Vicente
Tusón Chust, Pascual
Valero Varón, José
Valls Juan, José
Ventura Adsuara, Francisco
Ventura Igual, Bautista
Ventura Puchol, Miguel
Vicent Cordell, Enrique
Vidal Paul, Joaquín
Vidal Paul, José
Vidal Paul, Vicente
Vilá Montoliu, Antonio
Villarroig Vizcarro, Pilar
Vives Boix, Antonio
Vizcarro Fortuño, Bautista
Vizcarro Fortuño, Manuel

ALMEDÍJAR



En Almedíjar hubo 8 personas, todas ellas varones, afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas. Esto significa el 0,12% del total provincial, el 1,37% del total de los habitantes de la localidad y el 2,67% de sus varones. La inmensa mayoría eran labradores y, por tanto, pertenecían al sector primario de la economía. La incoación de expedientes se realizó, según nuestros datos, en el año 1941.

La autoridad que ejercía mayor influencia sobre el resto era la alcaldía, ya que tanto los informes de la guardia civil como los de FET y de las JONS eran copiados del emitido por el alcalde, aunque incorporaran alguna parte independiente, sobre todo en lo relativo a los datos económicos de los inculcados. El informe de la alcaldía se centraba en los datos familiares y en los económicos del inculcado. El informe de la guardia civil lo copiaba y añadía nuevos datos económicos, realizándose desde el Puesto de la cercana localidad de Sot de Ferrer. El informe de FET y de las JONS estaba firmado por Manuel Torres y se limitaba también a copiar el de la alcaldía. Manuel Torres, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Almedíjar, se centraba exclusivamente en las fincas que poseía el inculcado y en su contribución.⁸

Relación de vecinos de Almedíjar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Giner Latorre, Honorato
Ginés Ginés, Joaquín
Latorre Latorre, Amador
Latorre Latorre, Jesús
Latorre Monzonís, Generoso
Manrique Pesudo, Manuel
Martí Pérez, Eusebio
Vilanova Miralles, Justo

⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Eusebio Martínez Pérez, Caja 10130. AHPCS.

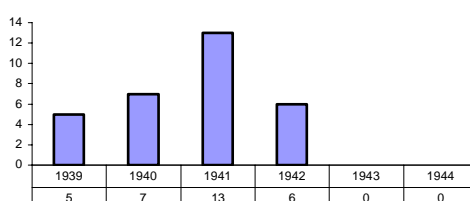
ALMENARA



En Almenara el número de vecinos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas se eleva a 85, lo que representa el 1,36% provincial y supone el 3,52% a nivel local. De ellos, 77 fueron varones, lo que supone que el 6,8% de la población masculina, mientras que las 8 mujeres restantes representaban el 0,62% de la población femenina local. La gran mayoría de estas personas pertenecían al sector primario de la economía, con un porcentaje cercano al 10% que lo hacía al sector terciario. Los representantes del sector secundario eran una clara minoría.

La incoación de expedientes se produjo desde el primer año de forma regular y bastante homogénea, excepto el año 1941, en el que se produjo el máximo número de ellos. Los últimos expedientes se incoaron en 1942.

Gráfica 5.8



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Las autoridades de Almenara tuvieron un papel activo en la represión de estos vecinos. De hecho, el Delegado Local de FET y de las JONS procedió a la denuncia de algunos. Tanto el partido único como la alcaldía centraban sus informes en los aspectos políticos y económicos del inculcado, de una forma bastante detallada en el caso del informe de la alcaldía, firmado por el alcalde José Beltrán. La Guardia Civil realizaba un informe independiente que se centraba en el pasado político del inculcado. Dionisio N., cura de la Parroquia de los Santos Juanes de Almenara, realizaba una descripción minuciosa de los actos políticos que podían servir para acusar al inculcado y, cómo no, de sus bienes⁹. La Guardia Civil de Almenara realizaba también los informes de los vecinos de Chilches y de la Llosa.

⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Navarro Dasca, Caja 10091. AHPCS.

Relación de vecinos de Almenara afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abad Marzal, Enrique	Juan Ferrer, Felipe
Aguilar Lacomba, Matías	López Ros, Otilio
Aguilar Lacomba, Vicente	Llopis Faet, Joaquín
Arcos San Eduardo, Jaime	Llopis Faet, José
Arcos San Eduardo, José	Llusar Guinot, Antonio
Badal Guinot, Constantino	Llusar Guinot, Joaquín
Bayo Castelló, Miguel	Marín Castelló, Adela
Berenguer Ferrer, José	Martínez Buendía, Cipriano
Blanco Hernando, Marciano	Melchor Moliner, Pascual
Blas Altabella, Mateo	Mira Vicent, Francisco
Bonet Montesinos, Vicente	Monzó Morales, Vicente
Campo Roig, Vicente	Morales Forner, José
Campos Campos, Francisco	Morales Pastor, Bautista
Casanova Giménez, Ramón	Navarro Aymerich, Tomás
Comis Lacomba, José	Navarro Dasca, Vicente
Cueco Salvador, Francisco	Navarro Ferrer, Joaquín
Dasca Fenollosa, Emilio	Palacios Montesinos, Elodia
Dembilio Clausell, Antonio	Panís Gil, Francisco
Ferrer Domingo, Álvaro	Peralta Cano, Julián
Ferrer Llopis, Francisco	Pitarch García, Antonio
Forment Blat, Encarnación	Polo Flors, José
Forment Vila, José	Quiles Herrero, Vicente
Forner Ribes, Domingo	Rebollar Roig, Vicente
Franch Chust, Vicente	Remohí Roldán, José
García Blanco, Segundo	Royo Bonet, Domingo
García Jover, Faustino	Royo Gollart, Vicente
García Marín, Blas	Sáez Bensach, Juan Bautista
García Pover, Faustino	Sáez Bensach, Vicente
García Sanguillo, Segundo	Sáez Crofent, José
Gázquez Fajardo, Pedro	Sáez Faez, José
Gil Pérez, Teresa	Sancho Navarro, José
Gómez Maciá, Bautista	Sancho Salvador, José
Gómez Marín, Bautista	Santolaria Benedicto, Pascual
Gómez Sevilla, Francisco	Sanz Clofent, Carmen
Gomis Gomis, José M ^a	Sanz Clofent, Eleuterio
Gomis Maciá, Vicente	Soria Gimeno, Ramón
González Roda, Manuel	Suria Ferrer, Elías
Guerri Domingo, José	Talens Escandell, José
Guinot Barrachina, Encarnación	Torrecilla Poves, Diego
Guinot Nebot, Miguel	Torres Pastor, Facundo
Hurtado Casanova, Antonio	Vilar Vilar, Juan
Hurtado Casanova, Bautista	Villagrasa Maraguat, Rosa
	Villagrasa Palop, Clara

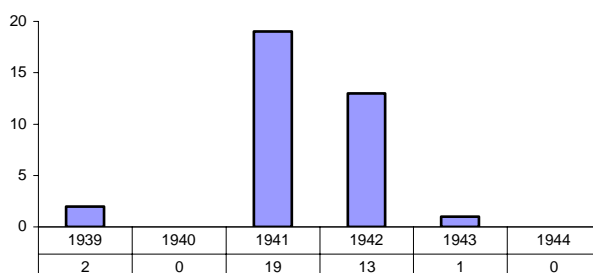
ALTURA



En Altura hubo 46 personas implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas, lo que suponía el 0,73% de los implicados a nivel provincial y el 1,59% de los vecinos de la localidad. Todos ellos eran varones, con lo que el 3,28% de los mismos fueron afectados. Prácticamente la totalidad de ellos eran labradores, campesinos o jornaleros, aunque existe el caso de un cartero.

Los expedientes se incoaron desde el mismo año 1939, aunque en 1940 no se produjo ningún caso. Sin embargo, en los años 1941 y 1942 la apertura de expedientes se reproduce con fuerza, decayendo en 1943. En 1944 ya no se produjo ningún expediente.

Gráfica 5.8



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En Altura el alcalde Miguel Ventura realizaba informes de los inculcados muy breves en los que se informaba telegráficamente de la situación familiar y la económica del inculcado y de su familia. Ejercía una influencia directa sobre Teodoro Ors, Delegado Local de FET y de las JONS, ya que éste copiaba el mismo informe (aunque no lo calcaba). La Guardia Civil encargada de realizar el correspondiente informe era la de Segorbe. El Comandante del Puesto Joaquín Ortiz no añadía datos nuevos respecto a los anteriores, aunque su redacción era completamente distinta. Algo parecido ocurría con el informe de Ramón Blasco, cura de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Altura, éste escrito a mano.¹⁰

¹⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Torrejón Cabot, Caja 10099. AHPCS.

Relación de vecinos de Altura afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Aguilar Rodríguez, Manuel	Lozano Herrero, Eugenio
Aguilar Salvador, Vicente	Marín Blasco, Ignacio
Arnau Rodríguez, Vicente	Marín Salvador, José
Arnau Serrano, Manuel	Martín Blasco, Miguel
Asensio Rodríguez, José	Martín Máñez, Miguel
Asensio Vilar, Manuel	Martín Salvador, José
Ballestar Marqués, Pedro Santiago	Martínez Máñez, Gregorio
Ballester Lozano, José	Martínez Rubio, José
Ballester Marqués, Manuel	Martínez Sierra, Leonardo
Blasco Bonanad, Manuel	Pérez García, Manuel
Blasco Torrejón, Miguel	Ramírez Ballester, Manuel
Bolumar Martí, Eugenio	Rodríguez Carot, Juan
Bonanad, Górriz, Manuel	Rodríguez Carot, Manuel
Eixarch Balmes, Ernesto Manuel	Salvador Cebriá, Jesús
Gil Portolés, Miguel	Sanjuán Lara, Severiano
González Pérez, José	Sanjuan Romero, Nemesio
Herrero Bononad, Miguel	Sellés Calas, Marcelino
Horts Rodríguez, Francisco	Sierra Soriano, Manuel
Ibáñez Santamaría, José	Torrejón Aguilar, Vicente
Just Prieto, Agustín	Torrejón Cabot, Vicente
Lorenzo Herrero, Eugenio	Torrejón Carot, Antonio
Lozano Carbó, Juan	Villalba Monte, Manuel
Lozano Caro, Juan	Zarzoso Garnés, Esteban

ARAÑUEL



En Arañuel fueron 17 las personas afectadas por la exigencia de Responsabilidades Políticas, lo que representaba el 0,27% de los afectados a nivel provincial y el 2,63% de la población local. Todos ellos eran varones, lo que implicaba que el 5,52% de la población masculina se vio directamente afectada. La mayoría de ellos eran labradores y uno de ellos comerciante. De los 10 expedientes de los que tenemos constancia documental, 4 se incoaron en 1940 y el resto en 1941.

La Guardia Civil de la cercana localidad de Argelita era la encargada de realizar los correspondientes informes, llegando incluso a denunciar a los vecinos a instancias de las instrucciones recibidas de las autoridades superiores. El Guardia 2º Encargado, Cristóbal Tomás, se centraba especialmente en el pasado político del inculpado y en su calificación moral. Tanto los informes de la alcaldía, firmados por Manuel Solsona, como los del Delegado Local de FET y de las JONS, firmados por Daniel Fabregat, se centraban en aspectos familiares y en la situación concreta del individuo en esos momentos. Isidro Maicas, cura de la Parroquia de Miguel Arcángel de Arañuel, emitía informes escuetos que no ofrecían muchos detalles del inculpado, más bien se mostraba en un tono neutro, sin facilitar voluntariamente demasiados datos.¹¹

¹¹ Expediente de Responsabilidad Política contra José Bernía Brun, Caja 10095. AHPCS.

Relación de vecinos de Arañuel afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Badenas Gargallo, Francisco

Barberán Brun, José

Bernia Brun, José

Brun Zarzoso, Manuel

Ferrando Villanueva, Francisco

Gil Bonet, Joaquín

Juan Martí, José

Juan Señor, Francisco

Lage Fabregat, Vicente

Martín Catalán, José

Montalio Fornás, Juan

Navarro Gil, Francisco

Sanahuja Bou, Daniel

Santolaria Benedito, Pascual

Serrano Gil, Francisco

Vernia Ventura, Ceferino

Villalonga Barberán, Manuel

ARES DEL MAESTRE



En Ares del Maestre la jurisdicción de Responsabilidades Políticas afectó a 19 personas, un 0,71% del total provincial y un 1,2% de la población local. Todos los implicados eran varones, con lo que el 2,65% de la población masculina se vio afectada directamente. La mayoría eran labradores, aunque hay un caso de un comerciante. De los 9 expedientes que tenemos constancia 8 se incoaron en 1941 y el último lo hizo en 1943.

La alcaldía de Ares del Maestre parece que era la que llevaba la voz cantante a la hora de realizar los informes de los inculcados. Se trataba de informes bastante completos que abarcaban información sobre la situación familiar y personal, el paradero, los bienes que poseía y su valoración económica, que eran prácticamente copiados por Tomás Bono, Delegado Local de FET de las JONS y la Guardia Civil de Villafranca, encargada de esta población. Luis Beltrán, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Ares del Maestre también parecía inspirarse en el informe de la alcaldía.¹²

¹² Expediente de Responsabilidades Políticas a Juan Mir Mestre, Caja 10103. AHPCS.

Relación de vecinos de Ares del Maestre afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Badal García, José Vicente
Bayot Salvador, Ramón
Beltrán Sales , José
Beltrán Sebastián, Ángel
Cabedo Nebot, Salvador
Mestre Esteve, Juan
Mestre Esteve, Ramón
Mir Mestre, Antonio
Mir Mestre, Juan
Monfort Pitarch, Fernando

Ortí Orenga, José
Ortiz Folch, Santiago
Pitarch Tena, Antonio
Prats Armelles, Vicente
Prats Ferrando, Celestino
Puig Centelles, Álvaro
Salvador García, Jaime
Sorribes Cruz, Francisco
Troncho Salvador, Amadeo

ARGELITA



En Argelita fueron 17 las personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, un 0,27% del total provincial y un 5,74% de la población total de la localidad. Todos ellos eran varones, por lo que el 12,78% de la población masculina se vio afectada. La documentación consultada nos revela la existencia entre estas personas de 2 labradores y 2 jornaleros. Además, sabemos que los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1942, a razón de 2 expedientes en 1939, 1 en 1940 y 8 en 1941.

La Guardia Civil de Argelita realizaba informes en los que se explicaba el historial político del inculcado, así como sus principales actos durante la guerra, además de la relación de bienes y su correspondiente valoración económica. A veces incluía valoraciones sobre la peligrosidad moral del inculcado. El cura de Argelita Miguel Serrano se atenía en sus informes especialmente a la evolución política y a la parte económica. El alcalde Agustín Soriano informaba de la conducta político-social del inculcado y ofrecía datos sobre su tributación. El Delegado Local de FET y de las JONS, Vicente Nebot Benedito, se centraba en los antecedentes políticos y en la relación de bienes con su correspondiente valoración económica. La Guardia Civil de Argelita también realizaba los informes de los vecinos de Torrechiva y de Vallat.¹³

¹³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Herrando Ibáñez, Caja 10070; y contra Antonio Sanz Nebot, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Argelita afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bachero Bartoll, Francisco
Bachero Bartoll, Juan
Fabra Pons, Antonio
García Gil, Manuel
Guillén Bertolín, Ángel
Herrando Ibáñez, Francisco
Herrando Montins, Avelino
Julián Edo, Alfonso
Martí Gisbert, Manuel
Miravet Adán, José
Morte Prades, José
Nebot Beltrán, Vicente
Nebot Royo, Ángel
Rapalo Julián, Jacobo
Solsona Fortea, Manuel
Soriano Pérez, Antonio
Vivas Buj, José .María

ARTANA



En Artana el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas se eleva a 38 personas, el 0,6% del total provincial y el 1,74% de la población local. De estas personas, 37 eran hombres, lo que implica que el 3,62% de la población masculina estuvo implicada en la exigencia de responsabilidades políticas, mientras que sólo hay 1 caso entre las mujeres, que representa el 0,08% de la población femenina. Según nuestros datos, la mayoría eran jornaleros con la presencia de un camarero.

Cronológicamente los expedientes comenzaron a incoarse en 1939 (2 casos), con un máximo en 1940 (8 casos) y un descenso en 1941 (2 casos) que llevó a la finalización del proceso, ya que a partir de 1943 no tenemos constancia que se incoara ningún expediente nuevo.

La Guardia Civil de Artana, de la mano del Comandante del Puesto, Salvador Vilar Martí, realizaba informes centrados casi exclusivamente en los datos económicos de los procesados. Igual pasaba con el informe de la alcaldía y no tenemos constancia de informe de FET y de las JONS. El cura Facundo Manzano, de la Parroquia de San Juan de Artana, realizaba también informes muy breves centrados en los aspectos económicos.¹⁴

¹⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Balaguer Gallart, Caja 10099. AHPCS.

Relación de vecinos de Artana afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Badía Agramunt, Vicente
Balaguer Gallart, Enrique
Barres Pla, Vicente Ramón
Blasco Llidó, Vicente
Blasco Segarra, Vicente R.
Blasco Vilar, José
Domingo Pitarch, Pascual
Herrero Blasco, Enrique
Herrero Blasco, José M^a
Herrero Blasco, Pascual
Herrero Traver, Vicente
Ibáñez Blasco, José
Ibáñez Herrero, Vicente
Llidó Herrero, José María
Llidó Herrero, Pascual Ramón
Llidó Torralba, José
Marco Pitarch, Vicente
Martí Andrés, Vicente
Martí Blasco, Blas

Martí Guinot, Juan José
Martí Portalés, Juan
Montoliu Llidó, Miguel
Montoliu Sales, José
Moros Pitarch, Juan
Oriola Albiol, María
Peris Andrés, Juan
Pitarch Badenes, Andrés
Pitarch Ferrer, Juan Antonio
Pitarch Guerrero, Amado
Sales Herrero, Felipe
Sancho Mondragón, José
Torralba Vilar, Vicente Ramón
Traver Bagán, Juan R.
Vilar Blasco, José
Vilar Pitarch, Juan
Villar Llidó, Juan
Villar Silvestre, Pascual
Villar Villanueva, Ramón

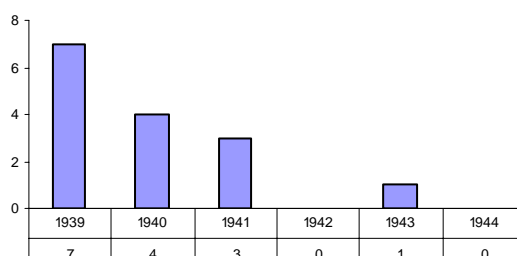
AYÓDAR



En Ayódar la población afectada por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 24 personas, un 0,38% del total provincial y un 3,28% del total de la población. 22 de ellos eran hombres, lo que significa que un 6,12% de la población masculina se vio implicada, mientras que el número de mujeres era de 2, un 0,53% de la población femenina. La mayoría de ellos eran labradores y jornaleros, gente dedicada al trabajo del campo.

El ritmo de incoación de expedientes fue alto desde el primer año de la Ley, manteniéndose elevado hasta 1942, cuando se deja de incoar expedientes hasta 1944, con la única excepción de un caso en 1943.

Gráfica 5.9



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En cuanto a las autoridades, la Guardia Civil encargada de hacer los informes era la de Fanzara, que, firmados por el Comandante José Traver Gual, realizaba unos informes muy detallados sobre la situación familiar y económica de los inculcados. Sin embargo, la autoridad local que parece que influyó más fue la alcaldía. El alcalde Luis Gimeno realizaba informes detallados de los bienes de los inculcados y dejaba clara su situación familiar. Estos informes eran copiados tanto por el Delegado Local de FET y de las JONS, Manuel Navarro, como por el cura de la Iglesia parroquial de Ayódar, Antonio Pons, aunque este último en algunos expedientes mantenía una redacción algo independiente.¹⁵

¹⁵ Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Manuel Peris Monzonís y Ramón Bou Pérez, Caja 10130. AHPCS.

Relación de vecinos de Ayódar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Balaguer Balaguer, Eugenio
Balaguer Cortés, Enrique
Balaguer Montoliu, Clemente
Balaguer Zorita, Juan
Barberán Sanahuja, Emilio
Barberán Sanahuja, Francisco
Bou Pérez, Constantino
Bou Pérez, Pilar
Bou Pérez, Ramón
Brun Granell, Antonio
Capilla Gil, Guillermo
Gil Albalat, Francisco

Monzonís Peris, José
Nebot Albalat, Baltasar
Pérez Gimeno, Domingo
Pérez Macián, María
Peris Ballester, Vicente
Peris Bayo, Francisco
Peris Monzonís, Manuel
Piquer Monzonís, Miguel
Piquer Salag, José
Sanahuja Peña, Vicente
Solsona Morte, Cándido
Ventura Zamel, Juan

AZUÉBAR



En Azuébar fueron 15 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que supone el 0,24% de los afectados a nivel provincial y el 2,54% de los habitantes de la localidad. Todos ellos eran varones, con lo que el 5,32% de la población masculina se vio implicada. Como en un gran número de localidades, la gran mayoría eran labradores y campesinos, junto con algún alpargatero y algún pintor.

La mayoría de expedientes (11) se incoaron en 1941, teniendo constancia de la apertura de 1 en 1942.

Los informes de la Guardia Civil se realizaban desde el puesto de la cercana Sot de Ferrer, incluyendo datos personales y del pasado político del inculpado, de una forma parecida a los informes de Agustín Navarro, cura párroco local. Los de FET y de las JONS, firmados por Francisco Piquer, se centraban en aspectos exclusivamente económicos y los de la Alcaldía, dirigida por José Piquer, eran exhaustivos, completos y se estructuraban en forma de plantilla fija a rellenar para cada inculpado. En este último caso la relación de bienes era muy detallada¹⁶. El cura de Azuébar también era el encargado de realizar los informes de los vecinos de Chóvar.

¹⁶ Expedientes de Responsabilidades Políticas de Manuel Gómez Luna y José Miravet Gómez, Caja 10130, AHPCS.

Relación de vecinos de Azuébar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Gómez Gómez, Angelino
Gómez Gómez, Bernardo
Gómez Luna, Manuel
Gómez Miravet, Vicente
Gómez Molina, José
Gómez Murria, Pedro
Gómez Ortín, Adolfo
Gómez Ortín, Antonio

Gómez Ortín, Víctor
Gómez Piquer, José
Miravet Gómez, José
Miravet Molina, Domingo
Molina Mondragón, Ramón
Ortín Molina, Eleuterio
Zorrilla Gómez, Evaristo

BALLESTAR



En Ballestar sólo 5 personas estuvieron implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas. Esto significaba el 0,08% de los afectados a nivel provincial, pero el 1,08% de la población local. Las cinco personas eran varones, con lo que el 3,01% de los habitantes masculinos de la localidad se vieron implicados. Carecemos de información sobre sus ocupaciones, aunque presumiblemente se trataría de personas dedicadas a la agricultura. Los dos expedientes que conocemos fueron incoados en 1940 por la liquidación de datos del Servicio Nacional de Recuperación Agrícola.

Los informes de la Guardia Civil se realizaban desde el puesto de Rosell, centrándose en los presuntos delitos cometidos y en los antecedentes políticos. En realidad todas las autoridades locales de Ballestar emitieron informes muy duros y agresivos. El que marcaba la tendencia a seguir en este caso era el informe de FET y de las JONS, realizado en un tono muy contundente sobre el pasado político del inculcado. Firmado por Francisco Bel, añadía un anexo muy detallado sobre los movimientos económicos y las fincas del mismo. Curiosamente el informe de la alcaldía es posterior y copiado del mismo, firmado por el alcalde Tomás Pla y por el secretario municipal José Cardona. El informe de Vicente Castellano, cura de la población, también se centraba en el pasado político y estaba escrito en términos muy duros y directamente acusatorios.¹⁷

Relación de vecinos de Ballestar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bel Masip, Pedro
Boix Vidal, Ángel
Branchat Ferrer, Ramón
Giner Segura, Gabriel
Tellado Sabater, Pedro

¹⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Tellado Sabater, Caja 10080. AHPCS.

BARRACAS



Tampoco en Barracas hubo un elevado número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas. Las 6 personas implicadas suponían el 0,09% a nivel provincial y el 1,28% a nivel local. Las 6 personas eran varones, con lo que el 2,85% de la población masculina local se vio afectada. En otro orden de cosas, no tenemos datos de sus ocupaciones laborales y sólo conocemos en dos casos la fecha de apertura de expediente: 1940 y 1941.

Los informes que disponemos nos ofrecen un panorama en el que la autoridad local que tiene más información o más medios para acceder a la misma era la Guardia Civil, centrándose en aspectos laborales y en el pasado político. Ni el alcalde Francisco Salvador ni el Delegado Local de FET y de las JONS, Juan Salvador, ofrecen una información valiosa sobre el inculcado. No tenemos información sobre informes del cura de la localidad. Desde el Puesto de la Guardia Civil de Barracas también se redactaban los informes de los inculcados de Benafer y Fuente la Reina.

Relación de vecinos de Barracas afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Blasco Domínguez, Jesús

Orduña Gual, Miguel

Orduña Igual, Joaquín

Orero Garro, Manuel

Roig Vidal, Juan

Selvi Lázaro, Manuel

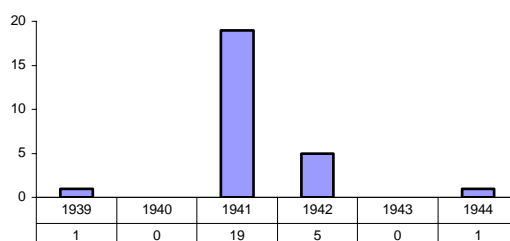
BECHÍ



En Bechí fueron 43 las personas implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas, lo que representa el 0,68% a nivel provincial y el 1,9% de la población local. Los hombres eran mayoría, con 42 casos, lo que significaba que el 3,91% de la población masculina local fue afectada. El único caso de mujer procesada representaba el 0,08% de la población local femenina. En cuanto a su ocupación económica, la mayoría se dedicaba a la agricultura, con algún representante del sector terciario y del comercio.

En Bechí se incoaron expedientes desde 1939, aunque el mayor número se dio claramente en 1941. Pese a no abrirse ningún expediente en 1943, en 1944 se abrió el último de la localidad.

Gráfica 5.10



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Las distintas autoridades locales de Bechí realizaban informes independientes. La guardia civil encargada de hacer el informe correspondiente era la de Villarreal, informando de la situación personal y familiar y en los antecedentes políticos del inculcado. Los informes de FET y de las JONS, firmados por Antonio Rius, se estructuraban en una amplia plantilla centrada en los aspectos personales y políticos. La alcaldía ofrecía una información parecida, aunque todavía más detallada, donde ocupaba un lugar importante los bienes que se poseían y su valoración económica. Según nuestras impresiones José Gargallo, cura de la Parroquia de la villa, realizaba un informe copiado del anterior de la Guardia Civil de Villarreal.¹⁸

¹⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Amorós Meneu, Caja 10093. AHPCS.

Relación de vecinos de Bechí afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alcalá Aguilera, Manuel
Amorós Amens, Vicente
Amorós Meneu, Vicente
Amorós Recatalá, Vicente
Beltrán Sanchís, Recaredo
Calpe Arandis, Leopoldo
Catret Saura, Joaquín
Cervera Llimbau, Caridad
Cervera Meneu, Vicente
Doñate Doñate, Tomás
Doñate Granell, Vicente
Doñate Meneu, José
Doñate Moreno, José
Doñate Vilar, Pascual
Ferrandis Juan, Antonio
Forner Sebastíá, Antonio
Franch Bovaira, Pascual
Franch Ferrandis, Emilio
Franch Forner, José María
Franch Forner, Ricardo
Franch Meneu, Felipe
Franch Mollar, Cristóbal

Garrido Rodríguez, Eugenio
Gozalbo Sanahuja, Manuel
Gozalbo Sanahuja, Miguel
Gumbau Traver, Felipe
Hernández Mollar, Tomás
Ibáñez Nebot, Vicente
Ibáñez Orenge, Vicente
Meneu Meneu, Juan
Miravet Serrano, Bautista
Mollar Blanco, Joaquín
Mollar Franco, José
Monzonís Doñate, José
Nebot Nebot, Andrés
Nebot Vilar, Julio
Palanques Expósito, Avelino
Remolar Castelló, Enrique
Remolar Doñate, Eliseo
Roca Agustí, Bautista
Sanahuja Grifo, Antonio
Saura Nebot, Avelino
Traver Giménez, Manuel

BEGÍS



En Begís hubo 18 vecinos que fueron afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas. Esto supone el 0,28% a nivel provincial y el 1,78% de la población local. Todos ellos eran hombres, lo que implica que el 3,35% de la población masculina local estuvo implicada en la exigencia de responsabilidades políticas. La mayoría de ellos eran labradores, aunque también hay muestras de otras profesiones como médico, albañil o fundidor.

Los 17 expedientes que conocemos su fecha de incoación nos muestran que se realizaron en 1941 (7 casos) y en 1942 (10 casos), con lo que la exigencia de responsabilidades políticas en esta población fue bastante tardía.

Las autoridades de Begís emitían informes bastante independientes entre sí, aunque todos se centraban en los antecedentes políticos y en una relación detallada de los bienes que poseía el inculcado. Los informes de la alcaldía eran firmados por Plácido Clemente y los de FET y de las JONS por el Delegado Local Matías Castillo. Los informes de la Guardia Civil se hacían desde el Puesto de Barracas, incluyendo más detalles sobre los antecedentes políticos y algunos calificativos morales de la persona afectada.¹⁹

¹⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carlos Vicente Mañez, Caja 10091. AHPCS.

Relación de vecinos de Begís afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Capilla Lázaro, Amadeo
Clemente Flor, Juan
Cortés Marzá, Bernardo
Cortés Masip, Ramiro
Lázaro Máñez, Vicente
Lázaro Pérez, Vicente
Lázaro Pons, Juan
Maciá Lázaro, José
Mañez Bayona, Antonio

Máñez Prades, Avelino
Miravet Villalba, Manuel
Pérez Lázaro, Emilio
Pons Gil, Eduardo
Pons Lázaro, Elías
Ponz Gil, Eduardo
Prades Capilla, Juan
Prades Gil, Joaquín
Vicente Máñez, Carlos

BENAFER



En Benafer el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 28 personas, todos ellos hombres. Esto supone el 0,44% a nivel provincial y que el 9,65% de la población local fue afectada por la Ley. Al ser todos hombres podemos observar cómo el 18,66% de la población masculina sufrió los efectos de la Ley. Este porcentaje es muy elevado, sobre todo si tenemos en cuenta que deberíamos eliminar el número de menores de 14 años que no especifica el censo de 1940. La inmensa mayoría de estas personas eran labradores. Los 16 expedientes de los que conocemos la fecha de incoación lo hicieron en 1941.

La autoridad local que parece la dominante era la alcaldía. El alcalde Ismael P. emitía informes breves centrados en los bienes económicos de los inculcados aunque en los casos más significados detallaba también la actuación durante el periodo revolucionario. Francisco Pérez, Delegado Local de FET y de las JONS se limitaba a copiarlos. El informe de la Guardia Civil se realizaba desde el Puesto de Caudiel y también se inspiraba en el anterior informe, aunque con una redacción independiente. Manuel Rozalén, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Benafer realizaba informes muy esquemáticos centrados en la riqueza y los bienes que poseía el inculcado, aunque también tenemos informes en los que firma como cura de la parroquia de la Transfiguración del Señor y en los que aborda la evolución política y moral del inculcado.²⁰

²⁰ Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Santiago Moliner Tobán, Caja 10130 y contra Vicente Moreno Bonet, Caja 10091. AHPCS.

Relación de vecinos de Benafer afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Aliaga Cortes, José
Badal Expósito, José
Bazán Tudón, Vicente
Benedicto Pons, José
Calpe Navarro, Clemente
Cortés Genés, Francisco
Cortés Torres, Miguel
Estall Expósito, José
Estall Ibáñez, Vicente
Fruto Canovas, Pedro
Genes Pons, Salvador
Geres Orero, Celestino
Herrero Cortés, Jesús
Herrero Pérez, José

Ibáñez Ramos, Manuel
Julián Bayona, Trinitario
Lizondo Ballester, José
Lizondo Torres, Ramiro
Marzo Pons, Antonio
Moliner Tobán, Domingo
Moliner Tobán, Santiago
Monleón Bou, José
Monleón Bou, Miguel
Moreno Bonet, Vicente
Navarro Genés, José
Navarro Genés, Pedro
Torres Cortés, Joaquín
Torres Oreros, Emilio

BENAFIGOS



En Benafigos sólo 8 personas estuvieron implicadas en la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,12% a nivel provincial. Esto significa que respecto al total de habitantes de la población se vieron afectados el 0,96%, aunque respecto a la población masculina estuvieron implicados el 1,98%, ya que el total de implicados eran varones. Sólo conocemos la profesión de 4 de ellos: 1 labrador, 1 carpintero, 1 barbero y 1 cartero. Tenemos datos de la fecha de incoación de 6 expedientes, 1 de ellos en 1941 y los 5 restantes en 1942.

Las autoridades locales de Benafigos ofrecían en sus informes sobre los inculcados información básicamente económica y datos personales generales. El informe de la alcaldía, firmado por Joaquín Monferrer, parece que servía como modelo al resto, aunque todos tenían una redacción independiente. Así, los informes del Delegado Local de FET y de las JONS, Miguel Gil, eran formalmente muy diferentes y escritos a máquina, mientras que los informes de José Escrig, cura de la localidad se centraba sólo en los bienes y en los datos personales de una forma esquemática. Los informes de la Guardia Civil no añadían nada nuevo y se realizaban desde el Puesto de Adzaneta.²¹

²¹ Expediente de Responsabilidades Políticas a Melchor Marín Monserrat, Caja 10144. AHPCS.

Relación de vecinos de Benafigos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Barrera Cabedo, Modesto
Gómez Monserrat, Samuel
Marín Monserrat, José
Marín Monserrat, Melchor

Monfort Barrera, Eugenio
Monserrat Monferrer, Emilio
Rovira Monferrer, Juan
Solsona Domingo, Adolfo

BENASAL



En Benasal fueron 50 las personas implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas, lo que supon el 0,8% a nivel provincial. En relación al total de sus habitantes esta cifra supone el 2,21%. 47 de estas personas eran hombres, lo que implica que el 4,43% de la población masculina local se vio afectada por la Ley, mientras que 3 fueron las mujeres afectadas, el 0,25% de la población femenina local. En cuanto a su ocupación económica, según nuestros datos, domina el sector primario, con una importante presencia de jornaleros, y con algunos casos pertenecientes al sector secundario. Todos los casos en los que conocemos la fecha de incoación del expediente (19) éste se realizó en 1940, como consecuencia de la remisión al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia de los datos del Servicio de Recuperación Agrícola.

Las autoridades locales realizaban informes con redacciones independientes, aunque parece que los que ejercían más influencia sobre el resto eran los confeccionados por el Comandante del Puesto de la Guardia Civil José Roig Beltrán, quien detallaba los datos personales, el pasado político, la actuación durante la guerra, la situación en ese momento del inculpado y una detalladísima relación de bienes. La alcaldía parece que resumía este informe, al igual que el Delegado de FET y de las JONS, M. Martínez, aunque éste añadía algún pequeño dato nuevo. El cura Tobías Sales, de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción realizaba informes independientes, escritos a mano, que se centraban en los antecedentes políticos, en la actuación durante la guerra y en la valoración de los bienes²². La Guardia Civil del Puesto de Benasal también realizaba los informes de los vecinos de Vilar de Canes, Culla y Torre Embesora.

²² Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Monfort Fabregat, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Benasal afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Artola Bort, Manuel
Badal Badal, José María
Badal Bort, Joaquín
Badal Ferrando, Manuel
Barreda Boix, José
Barreda Miralles, Tomás
Beltrán Barreda, Arcadio
Beltrán Beltrán, Eliseo
Beltrán Fabregat, José
Beltrán Roig, Manuel
Beltrán Salvador, José
Beltrán Serrat, Joaquín
Beltrán Tena, Ernesto
Bellés Moliner, Vicente
Bonet Prats, Fernando
Centelles Cova, Antonio
Colom Bort, Florencio
Colom Miralles, Jeremias
Fabregat Climent, José María
Fabregat Roig, Aurelio
Fabregat Sales, Vicente
Folch Fabregat, José
García Forés, José
García Miralles, José María
García Roig, Guillermo

Joaquín Miralles, José
Machi Zaragoza, Ángel
Miralles Beltrán, José Joaquín
Miralles Centelles, Guillermo
Miralles Sales, Antonio
Miralles Sales, Enrique
Miralles Sales, Leovigildo
Monfort Buenaventura, Joaquín
Monfort Fabregat, José
Monterde Roig, José
Pitarch Celma, Enrique
Pitarch Roig, Matilde
Roig Beltrán, Arturo
Roig Beltrán, Concepción
Roig Beltrán, Manuel
Roig Moliner, Amadeo
Roig Solsona, Guillermo
Salvador Moliner, Juan
Salvador Moliner, Ramiro
Segura Badenes, Manuel
Tena Beltrán, José
Tena Beltrán, Piedad
Tena Boix, José
Vives Fabregat, Domingo
Vives Forés, José

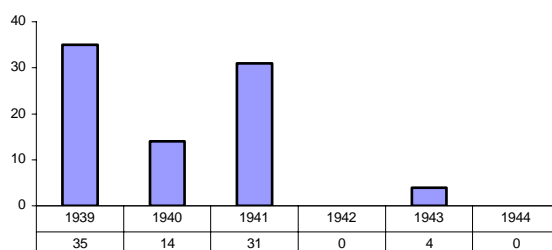
BENICARLÓ



En Benicarló hubo una amplia persecución de personas en relación con la exigencia de responsabilidades políticas. 158 personas sufrieron los rigores de esta Ley, lo que significa el 2,52% provincial. En relación a la población local implica que el porcentaje general de afectados fue del 1,66%. De todas estas personas 145 fueron hombres, con lo que el 3,08% de la población masculina se vio afectada por la Ley. Las 13 mujeres afectadas suponían el 0,27% de la población femenina local. A diferencia de muchas de las localidades existía un predominio del sector terciario en sus ocupaciones (médicos, ferroviarios, escribientes, estudiantes, comerciantes, etc.), aunque el sector primario también mantiene cierta importancia, tanto con jornaleros como con labradores.

El ritmo de incoación de expedientes fue alto desde el principio y hasta 1941. Destaca especialmente la intensidad de 1939, año en el que hay que recordar que se incoan expedientes desde el mes de agosto (además en Benicarló se instaló una prisión militar que daba cabida a un gran número de presos de las poblaciones cercanas). En el periodo 1942-1944 sólo se incoaron 4 expedientes, todos ellos en 1943.

Gráfica 5.11



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Las autoridades locales emitían informes con redacción totalmente diferentes, sin aparentemente conexión entre ellas. No tenemos constancia de informes redactados por la autoridad religiosa de la localidad²³. Hemos de recordar que la Guardia Civil de Benicarló realizaba los informes de los vecinos de Peñíscola.

²³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Miralles Subirats, Caja 10094. AHPCS.

Relación de vecinos de Benicarló afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albor Expósito, Joaquín
 Alcocer Cortés, Vicente
 Alsina Albiol, Pablo
 Álvarez Vázquez, Amanda
 Añó Añó, Bautista
 Añó Foix, José María
 Arín Arnau, Miguel
 Arín Beltrán, Mariano
 Arín Melo, Juan
 Arnau Arnau, Manuel
 Arnau Piñol, Joaquín
 Arrufat Boix, José
 Ávila Bayarri, Joaquín
 Ayoro Pardillo, Antonio
 Ballester Marzá, Joaquín
 Bayarri Arán, Joaquín
 Bayarri Fresquet, Antonio
 Bayarri Moros, Manuel
 Bellés Herrera, Vicente
 Benixalet Ros, Isidoro
 Biosca Álvaro, Genaro
 Borrás Anglés, José Amador
 Borrás Fabregat, Josefa
 Brau Climent, Anastasio
 Bretó Miralles, Juan José
 Cardona Ortiz, Francisco
 Castell Añó, Bautista
 Celda Lahuerta, Rafael
 Cerdá Ferrer, José María
 Cerdá Vizcarro, Gabriel
 Cerdá Vizcarro, Gregorio
 Ciurana Beltrán, Juan Bautista
 Climent Meseguer, Patricio
 Coll Fresquet, José María
 Coll Maura, Bartolomé
 Cornelles Milián, Juan Bautista
 China Albiol, Pablo
 Descarga Álvarez, Antonio
 Entrada Maura, Miguel

Eroles Soguer, María
 Esbrí Ferreres, José
 Esbrí Rambla, Antonio
 Esbrí Rambla, Francisco
 Esteller Sastriques, Gregorio
 Esteller Sastriques, Mariano
 Esteller Soriano, Bautista
 Esteller Traver, Francisco
 Fabregat Fabregat, Vicente
 Falcó Sancho, Clotilde
 Febrer David, Fernando
 Febrer Lluch, Manuel
 Febrer Ortiz, José Antonio
 Ferrer Bosch, Tomás
 Ferrer Caldes, Francisco
 Ferrer David, Fernando
 Ferrer Fresquet, Bautista
 Ferrer Ortiz, José Antonio
 Ferreres Compte, Manuela
 Fibla Delhorte, Antonio
 Fibla Llopis, Vicente
 Foix aragoz, Antonio
 Foix aragoz, Margarita
 Foix Piñol, Ramón
 Foix Segarra, Jaime
 Forcadell Miravet, Miguel
 Forcadell Reverter, Miguel
 Forés Lluch, José
 Fornalut Miravet, Juan
 Freixes Blasco, Gonzalo
 Freixes San Sebastián, Gonzalo
 Freixes San Sebastián, Milagros
 García Rodríguez, Faustino
 García Sánchez, José
 García aragoz, Joaquín
 Garro Martínez, Antonio
 Garro Martínez, Pedro
 aragoz Coscollano, Jesús
 Gerona Casanova, Manuel
 Giner Arnau, Antonio

Gómez Martínez, Antonio
Gregori Sanahuja, Arcadio
Guillén Alfonso, Vicente
Julve aragoz, Manuel
Julve Peruga, Miguel
Klein Riedinger, Felipe
Lafuente Martínez, Carlos
Llopis Ruiz, José
Lluch Borrás, Ricardo
Lluch Foix, Bautista
Lluch Pitarch, Francisco Pascual
Maña Alsina, Francisco
Marqués Añó, Juan Manuel
Martínez Guarch, Agustín
Martínez Guarch, Joaquín
Martínez Lores, Bautista
Martínez Vizcarro, Manuel
Marzá Sifre, Julián
Marzá Vives, Francisca
Masip Fuster, Bautista
Mateo Gauchia, José
Maura Piñana, Gregorio
Maura Vallés, Vicente
Meseguer Gabalda, José
Milan Verge, José
Minguillón Mustieles, Romualdo
Miralles Soro, Gregorio
Miralles Subirats, Joaquín
Monfort Fontanet, Federico
Monfort Fresquet, Antonia
Monfort Tena, Benjamín
Muñoz Benet, Bernardo
Muñoz Benet, Miguel
Olea González, Elisa
Orero Monzonís, José
Palomo Puig, Antonio
Pascual Lluch, Francisco
Pastor Albert, Amparo
Pellicer aragoza, José

Peña Ferreres, Vicente
Pérez Domínguez, Francisco
Piñana Zaragoza, Vicente
Pont Cebolla, Blas
Prats Monfort, José
Pruñonosa Borrás, Antonio
Pruñonosa Borrás, Miguel
Querol Marzá, Joaquín
Ribot Dols, Cirilo
Roca Añó, Miguel
Roca Llorens, José
Roca Lluch, Jaime
Roca aragoza, José
Romero Lluch, Francisco
Salvador Roca, Jerónimo
San Sebastián Cebriá, Milagros
Sancho Castellano, Francisco
Sanz Esbrí, Bautista
Sastrigues Pareja, José
Segarra Ferrer, Vicente
Simó Ferrer, Manuel
Soriano Masip, Ramón
Soriano Pedra, Bautista
Sorlí Forés, José
Sorlí Iturat, José
Sorlí Llorach, Úrsula
Sorlí Ruiz, José
Sospedra Vizcarro, Antonio
Tarragó Forcadell, José
Tena Fabregat, Fortian
Tena Fabregat, Ismael
Tierno Blasco, Elías
Tiller Pedra, José
Timoteo Castellfort, Rosendo
Tomás Llorach, José María
Tormo Martínez, Bautista
Traver Urquizu, Vicente
Valles Brau, Eusebio
Vallés Pla, Francisco

BENICASIM



En Benicasim hubo 16 personas implicadas en la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que representa el 0,25% a nivel provincial y el 0,86% del total de la población local. Todos ellos eran varones, con lo que el 1,8% de la población masculina se vio afectada por esta Ley. La gran mayoría eran labradores y jornaleros, aunque conocemos la existencia de dos albañiles y un chofer. Los expedientes cuya fecha de incoación conocemos nos informan que 9 de ellos se realizaron en 1941, teniendo constancia de 2 más que lo hicieron en 1942.

Las autoridades locales realizaban informes sin conexión entre sí, abordando todos los aspectos que pedía la Ley: antecedentes políticos, datos personales y familiares y valoración económica de los bienes. Los informes más extensos eran los de la FET y de las JONS local y los más breves, casi telegráficos, los de F. Escoin, cura de la Parroquia de Benicasim.²⁴

²⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bernal Casañ, Caja 10094. AHPCS.

Relación de vecinos de Benicasim afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albella Onofre, Manuel

Bernal Casañ, José

Casañ Calvo, Agustín

Casañ Tomás, José

Escoín Casañ, Vicente

Ferrando Escuder, Vicente

García Soldevila, Vicente

Julve Figueres, Vicente

Justo Bestad, Manuel

Miralles Conill, Francisco

Ramón Márquez, José

Rebullida Pallarés, Vicente

Ribes Casañ, Alfonso

Roca Peña, Antonio

Rubio Rodríguez, Salvador

Torres Escuder, Tomás

BENLLOCH



En Benlloch el número de implicados en la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 42 personas, un 0,67% a nivel provincial y un 2,74% de la población total de la localidad. 41 de ellos eran varones, lo que representaba un 5,66% de la población masculina local y el único caso de mujer representaba el 0,12% de la población femenina local. La mayoría de estas personas eran labradores, aunque conocemos la existencia también de un médico. Conocemos la fecha de incoación de 9 de los expedientes: 2 se produjeron en 1940 y 7 en 1941.

La Guardia Civil de Cabanes era la encargada de realizar los informes de los inculcados de Benlloch. Tuvo un papel activo e importante porque realizó en algunos casos las denuncias a personas que después fueron procesadas por responsabilidades políticas. Los informes firmados por el Comandante Jesús Fabregat se centraban en aspectos políticos, en los cargos ostentados durante la guerra y en la valoración económica de los bienes del acusado. Una redacción independiente tenían los informes de Rogelio Fabregat, Delegado Local de FET y de las JONS, que parece que servía como modelo al alcalde José Falcó, aunque éste se centraba más en los aspectos económicos. Los informes del cura Remigio Meliá, de la Parroquia de Benlloch, tenían un tono más bien neutro, aunque resumía el pasado político del inculcado.²⁵

²⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Felipe Mateo Caldach, Caja 10104. AHPCS.

Relación de vecinos de Benlloch afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alonso Carnicero, Justina
Andreu Gil, Dionisio
Andreu Ordóñez, Miguel
Asostegui Jover, Vicente
Ballester Berenguer, David
Bernat Radiu, Rogelio
Bort Bort, Juan
Casanova Mateu, Daniel
Casanova Mateu, José
Casanova Pons, Julio
Casanova Simó, Manuel
Castellet Martín, Victoriano
Climent Sabater, Tomás
Chirivella Soria, José
Fabregat Ahís, Ramiro
Fabregat Mateu, Remigio
García Edo, Vicente
García Nebot, Manuel
Gauchia Martín, José
Martín Benignar, Anselmo
Martínez Lecha, José

Martínez Vives, José
Mateo Calduch, Felipe
Mateu Andreu, Manuel
Mateu Calduch, Felipe
Mateu García, Genaro
Mateu Radio, Bautista
Meliá Bernal, Agustín
Ortells Bernat, Leovigildo
Ortí Mateu, Rogelio
Ortiz Bellés, José
Pascual Esteve, Arturo
Pavía Borrás, Javier
Pons Mateu, Daniel
Radiu Adelantado, Ovidio
Roig Alsina, Lamberto
Sabater Peris, Bautista
Sabater Peris, Ricardo
Sanchis Martín, José
Tena Soria, Bautista
Traver Gil, Vicente
Vives Gil, Manuel

BOJAR



En la pequeña localidad de Bojar sólo 2 personas fueron afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, es decir, el 0,03% a nivel provincial y el 0,51% de la población local. Como los dos implicados eran varones esto significaba el 1,01% de la población masculina local. Sabemos que uno de ellos era jornalero y que su expediente se incoó en 1941.

El informe de la alcaldía era el que influía en el resto de los demás informes de las autoridades locales, y lo hacía hasta tal punto que el informe del Delegado Local de FET y de las JONS, Víctor Meliá, no es más que un texto que dice exactamente lo mismo, aunque redactado por otro puño y letra, como si el informe hubiera sido dictado y copiado al mismo tiempo por dos personas diferentes. El alcalde José Bel aportaba datos personales y familiares, con detalles que demostraban mucha proximidad, y finalmente una valoración económica de los bienes correspondientes. El informe de la Guardia Civil se realizaba desde el puesto de Rosell y no aportaba datos nuevos u originales, aunque ahora sí con una redacción independiente. Vicente Castellano, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Vallibona, resumía la información de los anteriores informes y añadía especificaciones propias como el salario que el inculcado cobraba.²⁶

Relación de vecinos de Bojar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Tellado Bel, José M^a

Centelles Miró, Joaquín

²⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José María Tellado Bel, Caja 10131. AHPCS.

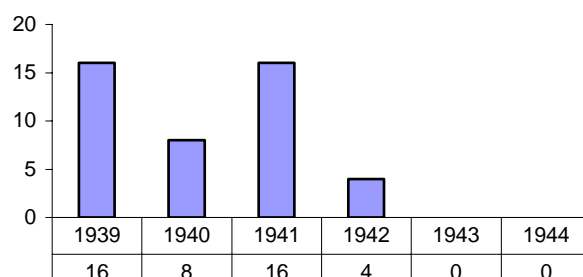
BORRIOL



En esta localidad cercana a Castellón fueron 97 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que significa el 1,55% de toda la provincia y el 3,65% de su población local. El número de hombres era 94, con lo que el 7,61% de la población masculina local fue afectada. Las 3 mujeres implicadas representaban el 0,2% de la población femenina local. Las ocupaciones laborales de los implicados los sitúan a partes iguales entre el sector primario y el terciario, aunque la presencia del sector secundario se sitúa en torno al 10%. Por tanto, los afectados se distribuyen entre los tres sectores de la economía.

La incoación de expedientes se produjo desde 1939 a un ritmo alto que descende en 1940 pero que en 1941 vuelve a cobrar fuerza, decayendo finalmente en 1942. En los años 1943 y 1944 no tenemos noticias que se incoara ningún expediente.

Gráfica 5.12



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Los informes de la alcaldía, firmados por José Montañés, eran muy detallados, dando mucha importancia a los datos económicos y patrimoniales del inculcado. Su influencia era muy grande, ya que los informes del Delegado Local de FET y de las JONS, firmados por Benjamín Bosch, eran una copia calcada de los mismos y, además, los informes del cura Juan Andreu eran también una copia, esta vez realizada a mano. Muy parecido al informe de la alcaldía era el de la Guardia Civil, que daba una gran protagonismo a los aspectos económicos y estaban firmados por el sargento José Sánchez en el año 1939.²⁷

²⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Sánchez Balaguer, Caja 10064. AHPCS.

Relación de vecinos de Borriol afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Andreu Ferrer, Vicente
Aragón Ucher, José
Aragón Valls, Vicente
Arandez Bernad, Vicente
Arandez Bernat, Manuel
Ariño Pallarés, Adelina
Babiloni Llansola, Vicente
Babiloni Tena, Salvador
Balaguer Castellano, José
Balaguer Castillo, José
Balaguer Francisco, José
Balaguer Montañés, Jaime
Balaguer Portolés, José
Balaguer Rubio, Tomás
Balaguer Santamaría, Salvador
Balaguer Valls, José
Balaguer Valls, Vicente
Barrera Balaguer, Aurelio
Bernat Esteve, Ramón
Bernat Esteve, Vicente
Bernat Gascón, Vicente
Bernat Luna , Vicente
Blasco Falomir, Manuel
Bort Saura, Daniel
Castellano Balaguer, José
Clemente Llorens, Enrique
Colom Safont, Vicente
Cortijo Heredia, Juan
del Campo Montañés, Manuel
Del Campo Montañés, Salvador
Del Campo Pallarés, Vicente
Delcampo Montañés, Bartolomé
Escrich Aragón, Vicente
Escrich Rubio, Vicente
Espín Vaquer, Vicente
Esteve Balaguer, Salvador
Esteve Linares, Pablo
Esteve Pallarés, Vicente
Esteve Pascual, Vicente

Esteve Rivas, José
Fabregat Navarro, Tomás
Falomir Santamaría, Fulgencio
Falomir Santamaría, José
Francisco Esteve, José
Francisco Pallarés, José
Francisco Valls, Bautista
García Safont, Arcadio
Gascón Ariño, Jaime
Linares Llopis, José
Llansola Halcón, Manuel
Llansola Martí, Moisés
Llansola Pallarés, Vicente
Mateu Vidal, Vicente
Meseguer Balaguer, Salvador
Meseguer Pascual, Vicente
Montañés Castellano, Joaquín
Montañés Gil, José
Montañés Gil, Manuel
Montañés Gil, Vicente
Montañés Gregori, Manuel
Navarro Soler, Juan
Palau Valls, Vicente
Pallarés Castellano, Perfecto
Pallarés Santamaría, Ramón
Portolés Falomir, Bautista
Portolés Falomir, Julián
Portolés Monferrer, José
Ramírez Llansola, María Dolores
Ramos Castellanos, José
Rovira Costa, Ramón
Rovira Montañés, José
Rubio Salvador, Vicente
Safont Albalat, José Ramón
Safont Reig, Enrique
Safont Ucher, Vicente
Safont Vaquer, Fernando
Salas Fonseres, Rafael
Salvador Vicent, Miguel
Sánchez Balaguer, José M.

Sánchez Balaguer, José Samuel
Sánchez Balaguer, Juan
Sánchez Balaguer, Vicente
Sánchez Castelló, Eleuterio
Sánchez Castelló, Vicente
Sola Montesinos, Valero
Sos Esteve, Carmen
Tena Ventura, Juan
Ucher Llorens, Vicente

Vallas Tena, Vicente
Valls Gil, Marcelino
Valls Montañez, Bartolomé
Valls Morera, Juan
Valls Tena, Vicente
Vaquer Castellanos, Vicente
Vicent Pallarés, Juan
Vicent Pallarés, Vicente
Villarrocha Fullea, Gaspar

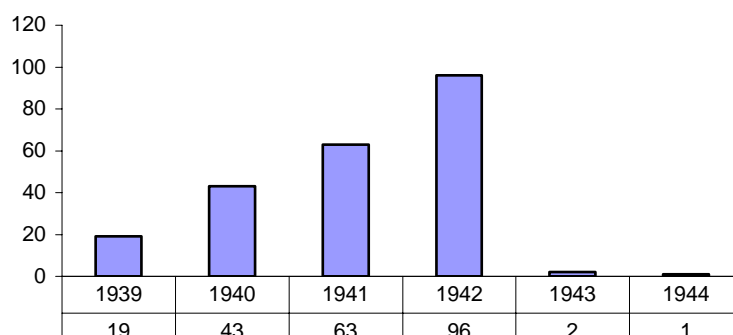
BURRIANA



Después de la ciudad de Castellón, Burriana es la localidad donde más afectados hubo por responsabilidades políticas, concretamente 434, un 6,94% del total provincial y un 2,35% respecto a la población local total. Entre estas 434 personas, 403 eran hombres, con lo que podemos afirmar que el 4,52% de la población masculina local se vio implicada, mientras que las 31 mujeres restantes suponían el 0,32% de la población femenina local. En relación con las ocupaciones de los afectados, la mayoría pertenecían al sector primario (labradores y jornaleros), aunque el sector secundario y el sector terciario también tenían un número considerable de representantes. De las 31 mujeres tenemos noticias que 10 trabajaban en sus hogares y 1 era modista.

En Burriana el ritmo de incoación de expedientes fue alto desde el año inicial de 1939. Sin embargo, lo que más nos llama la atención es que, a diferencia de la mayoría de poblaciones analizadas, el ritmo va incrementándose progresivamente hasta alcanzar su culminación en 1942, año en el que parece que el proceso de depuración agotó las expectativas, ya que en 1943 y 1944, siguiendo también la dinámica de la misma Ley y las órdenes de las autoridades franquistas, el ritmo decrece considerablemente, aunque sin llegar a la situación de no producirse ninguna incoación de expediente.

Gráfica 5.13



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En cuanto a las autoridades, la alcaldía confeccionaba unos informes que se centraban en la situación personal y familiar del inculcado, además de indagar en sus bienes. Los informes del Delegado Local de FET y de las JONS, R. García Tejedo (1939) o Vicente Ferrandis (1941), se basaban en el anterior y no añadían nada nuevo, salvo en algunos informes, que especifica la relación de bienes. El cura Elías Milián realizaba informes independientes, a puño y letra, en los que la relación de bienes jugaba un papel importante, casi exclusivo.²⁸

²⁸ Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Francisco Roca Alcayde, Caja 10094; Jesús Montañola Español, Caja 10102; y Joaquín Romero Gómez, Caja 10064. AHPCS.

Relación de vecinos de Burriana afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abad Ballester, Carmen	Barquero Lorenzo, Simeón
Abad Piquer, Juan	Barres Cañada, Bautista
Adánez Portolés, Victoriano	Batalla Miró, Manuel
Adsuara Gil, José	Bataner Gadea, Antonio
Aguilar Piquer, Miguel	Beltrán Forcada, Vicente
Aguilella Tortajada, Miguel	Beltrán Ibáñez, Ramón
Agustín Romay, Joaquín	Beltrán Puerto, Antonio
Aimerich Capilla, Vicente	Benedicto Claramonte, Pascual
Albella Gavaldá, José	Betoret Fonfría, Ramón
Albella Roca, Antonio	Blanch García, Bautista
Alcón Ferrando, Ramón	Blanch Peris, Vicente
Alonso Bernat, Jaime	Blasco Manrique, Bautista
Alonso Pérez, Alfonso	Blasco Peris, José
Álvaro Latorre, Carmen	Blasco Rubles, Manuel
Amiguet Oria, Vicente R.	Blasco Subiés, Bautista
Amiguet Sorli, José	Blasco Subiés, Manuel
Amiguet Torla, Vicente	Boix Oria, Manuel
Ancher Linares, Victoriano	Bonet Margarit, Joaquín
Antonio Ortiz, Amadeo	Broch Forés, José
Archelós Monzonís, José	Broch Piquer, Joaquín
Arnau Catalá, Rafael	Broch Poyatos, José
Arnau Ferreres, Amado	Buchardo Godos, Simeón
Arnau Piñol, José	Burdeus Clausell, Manuel
Artero Collado, Vicente	Caballer Granell, Jeremías
Ausoles Muñoz, Enrique	Cabedo Beltrán, Vicente
Avella Mallén, Joaquín	Cabezas Ortells, José
Aymerich Capilla, Vicente	Cabrera Monfort, Victoriano
Aymerich Esbrí, Bautista	Calduch Román, Vicente
Aymerich Melchor, Vicente	Campos Aparici, José
Bachero Safont, María	Candau Bono, Ricardo
Badía Brotons, Juan	Canós Solá, Manuel
Badía Ferrer, Salvador	Cantos Ferrer, Joaquín
Badimón Pinazo, Enrique	Cañada Sánchez, Ramón
Balaguer Mundina, Vicente	Capella Almela, Manuel
Ballester Gómez, Purificación	Capella Martínez, Jesús
Ballester Mondragón, Manuel	Capella Martínez, Pascual
Ballester Personat, Bautista	Capella Rovira, Jesús
Banus Bernat, Emilia	Carbó Mas, Amadeo
Barceló Guillamón, Francisco	Carbonell Salas, Vicente

Carbonell Sales, Ismael
Carbonell Sales, Vicente
Carbonell Salvez, José
Carceller Sabater, Vicente
Cardá López, Francisco
Cárdenas Castells, Pascual
Cardet Monfort, Joaquín
Cardo López, Francisco
Carratalá Cano, Amadeo
Casanova Feltret, Encarnación
Casinos March, Francisco
Castillo Celades, Sebastián
Cepriá Cubertorer, José
Cerdá Ramos, Vicente
Cervera Perelló, Francisco
Cervera Torres, Ismael
Claramente Ríos, Vicente
Claramonte Vidal, Joaquín
Clau Musoles, Ramón
Claus Bernat, Vicente
Claus Musoles, Ramón
Clofent Casaus, Manuel
Codina Martí, Bautista
Codina Ribes, Bautista
Collado Godos, Bautista
Comes Enrique, Vicente
Comes Molina, Bautista
Comes Usó, Enrique
Conejero Sánchez, Juan
Corell Nebot, Manuel
Cortés Fornás, Ricardo
Costa Francisco, Joaquín
Cubedo Peris, Pascual
Cherta Borja, Vicente Ramón
Chiva Torres, Juan
Chordá Alcalá, Vicente
Chordá Ferrer, Domingo
Chordá García, Bautista
Chordá Peiró, Bautista
Chordá Planelles, Joaquín
Chordá Tornador, Bautista
Daudi Fandos, Vicente

Devis Martí, Enrique
Devis Martí, María Antonia
Devís Monzonís, José
Devis Pérez, Vicente
Devis Ramón, José
Diago Renau, Juan
Diago Torres, José
Domingo Peris, Juan
Domingo Simarro, Ramón
Domingo Tejedo, Eliseo
Domingo Tormo, Vicente
Doñate Badía, Teresa
Doñate Margalit, José
Dosda Vidal, Enrique
Durá Piquer, Cristóbal
Durá Piquer, José
Enrique Llopis, Manuel
Esbrí Peris, Francisco
Escriba Cuevas, Lorenzo
Escuder Esteve, Manuel
Fandos Almela, Vicente
Fandos Carbonell, Bautista
Fandos Guinot, Bautista
Felip Monzonís, Vicente
Félix Orts, Carlos
Feltret Piquer, Andrés
Femenias Egido, José
Femenias Higido, Juan
Fenollosa Sanz, Juan
Ferrada Cantos, José
Ferrandis Franch, Francisco
Ferrer Agut, Bautista
Ferrer Bernat, Elvira
Ferrer Caro, Leopoldo
Ferrer Cherta, Hilario
Ferrer Ferrer, Bautista
Ferrer Mingarro, José
Ferrer Perelló, Ana María
Ferrer Piquer, Andrés
Ferrer Pitarch, Salvador
Folch Blasco, Ricardo
Font de Mora Boix, Carlos
Forcada Balaguer, Bautista

Forés Garcés, Cristóbal
 Fortea Cubedo, Bautista
 Fortea Cubedo, Bautista
 Fortea Palomero, Asunción
 Francisco Guerola, José
 Francisco Guerola, Manuel
 Franch Burdeos, Manuel
 Fuster Oria, José
 Gallén Catalá, Vicente
 Garcés Piquer, Rosa
 García Cebriá, Vicente
 García Gómez, José
 García Monzonís, José
 García Vicent, Antonio
 Gari Arnau, Bautista
 Garí Oria, Vicente
 Garí Simó, Vicente
 Gascó Ferreira, Manuel
 Gascó Mezquita, Francisco
 Gascó Peris, Manuel
 Gavara Aragó, José
 Gil Delás, Vicente
 Gil Escuriola, Enrique
 Gil Muñoz, Pascual
 Gimeno Boix, José
 Gimeno Martí, Hilario
 Gimeno Martín, Antonia
 Gloria Balaguer, José de la
 Godina Martí, Bautista
 Gómez González, José
 Gómez Molina, Bautista
 Gómez Moncayo, José M^a
 Gomis Tornador, José
 González Nebot, Carmen
 Gozalbo Félix, Vicente
 Gozalbo Guerola, Bautista
 Gozalbo Peris, Vicente
 Granell Félix, Hilario
 Granell Tornador, Joaquín
 Gresa Montoliu, Joaquín
 Griñó Suay, José
 Gual Fabra, Emilio
 Guasach Sagí, José
 Guerola González, Juan

Guerola González, Vicente
 Guinot Brisach, Joaquín
 Guinot Saera, Francisco
 Guinot Villalba, Vicente
 Guiral Queral, Enrique
 Guiral Queral, Ernesto
 Hernández Merlos, José
 Hernández Falomir, Bautista
 Herrero Granaje, Vicente
 Herrero Herrero, Enrique
 Hurtado Ferrandis, Silvestre
 Ibáñez Nebot, Bautista
 Insa Bodí, Antonio
 Isaac Sanz, Ramón
 Isaac Soria, Matías
 Julve Piqueres, Francisco
 Latorre Recolat, José
 Linares Bort, Vicente
 Lucas Esbrí, José
 Luis Gómez, Pascual
 Llácer Mingarro, Juan Bautista
 Llidó Calvo, José
 Llopis Machancoses, Manuel
 Llorach Michavila, Antonio
 Llorens Ibáñez, Tomás
 Maiques Gomis, José
 Manrique Monfort, Pascual
 Marco Gracia, Joaquín
 Marco Pérez, Ismael
 Marco Sampedro, Francisco
 Marcos Roig, Miguel
 Marín Sánchez, Pedro
 Marín Ventura, Manuel
 Marqués Heredia, Vicente
 Martí Agramunt, José
 Martí Bernat, Fernando
 Martí Boix, José
 Martí Cubells, Hilario
 Martí Fortea, José
 Martí Rosell, Vicente
 Martínez Álvaro, Manuel
 Martínez Climent, Joaquín
 Martínez Enrique, Bautista
 Martínez Martínez, Carmen

Martínez Morella, Antonio
 Martínez Roig, José M^a
 Masiá Pastor, Manuel
 Mesado Archelo, Vicente
 Miguel Aragonés, Recadero
 Mingarro García, Ismael
 Miralles Barres, José María
 Miró Beltrán, José
 Molés Ferrandis, Antonio
 Moliner Balaguer, Andrés
 Moliner Nadal, Vicente
 Moliner Vidal, Vicente
 Mondragón Gómez, Vicente
 Monferrer Pascual, Pascual
 Monfort Ripollés, Herminio
 Monlleó Juan, Jaime
 Monserrat Franch, Vicente
 Montañola Español, Jesús
 Montoliu García, Bautista
 Montoya Fenollosa, José
 Montoya Pachés, Joaquín
 Monzó Arenós, Pascual
 Monzonís Burgos, Evaristo
 Muñoz Diego, Pascual
 Muñoz Gurrea, María
 Muñoz Rodríguez, Vicente R.
 Murgui Ferrando, José
 Musoles Muñoz, Enrique
 Musoles Zaragoza, Domingo
 Navarro Badenes, Francisco
 Navarro Forcada, Vicente
 Navarro Gabaldón, Juan
 Navarro Saborit, José
 Navarro Saborit, Manuel
 Nebot Bartoll, Juan Bautista
 Nebot Palmer, Vicente
 Nebot Pérez, Amparo
 Nicolás Blandina, Hilario
 Ninot Ferrer, Ramón
 Ochando Muñoz, Miguel
 Olivares Herrero, Pedro
 Orias Soler, José
 Orosia Aimerich, José
 Ortells Feltret, Bautista

Ortells Nebot, Amparo
 Ortells Nebot, José
 Padilla Tomás, Salvador
 Paga Palomero, José
 Palau Blasco, Juan Bautista
 Palomar Ramos, Bautista
 Palomero Burdeos, Francisco
 Palomero Tormo, Manuel
 Paula Badenes, Antonia
 Peirats Almela, José
 Pérez Carranque, Juan
 Peréz García, Ciro
 Pérez Ribas, Concepción
 Pérez Rivas, Ignacio
 Peris Dosdá, José Carlos
 Peris González, Blas
 Peris González, José
 Peris Martínez, Francisco
 Peris Muñoz, Bautista
 Peris Vilá, Salvador
 Peris Vila, Vicente
 Peset Petit, Pascual
 Peset Petit, Pedro
 Petit Vilá, Carlos
 Pitarch Domingo, Salvador
 Pitarch Monfort, Vicente
 Plá Aguilera, José
 Plá Boronat, José
 Porcar Balaguer, Bautista
 Porcar Pau, María
 Porcar Ribes, Francisco
 Praga Palomero, José
 Puig Amiguet, Joaquín
 Puig Amiguet, Manuel
 Queral Domingo, Juan
 Queral Farcha, Vicente
 Quijal Archelós, José
 Ramón Blac, Vicente
 Ramos Porcar, Bautista
 Ramos Rosell, Vicente
 Ramos Ventura, Francisco
 Regal Bodí, Teresa
 Regal Bodi, Vicente
 Resguart Vidal, Joaquín

Reula Fuster, Mercedes
Riado Pradal, Ramón
Ribes Verdegall, Vicente
Rico Martín, Miguel
Ríos Ríos, Manuel
Ripollés Blasco, Vicente
Ripollés Boix, José
Rius Gil, Vicente
Rius Rosell, Vicente
Roca Agustí, Vicente
Roca Alcayde, Francisco
Roda Montoliu, Antonio
Rodríguez Agut, Luís
Roig Balaguer, Justo
Roig Peris, Salvador
Romero Gómez, Joaquín
Rosell Tornador, Manuel
Rubert Franch, Blas
Rubio Cheza, Crescencio
Rubio Cheza, Vicente
Rubio Monfort, Bautista
Rufino Usó, Pascual
Ruiz González, Antonio
Ruiz Recio, Alejo
Saborit Gafó, Daniel
Saborit Ripollés, Bautista
Saborit Ripollés, Manuel
Saborit Vidal, Juan
Saera Enrique, Blas
Safont Benlliure, Bautista
Safont Benlliure, Constantino
Safont Benlliure, Manuel
Safont Benlliure, María
Safont Palomero, Bartolomé
Safont Perelló, José
Sala Borja, Francisco
Sales Verdiá, Santiago
Salvador Calvo, Antonio
San Martín Ribes, Manuel
Sanchis Gimeno, Salvador
Sanchis Gozalbo, Juan Bautista
Sanchis Sanjosé, Amparo
Sancho Arenós, Joaquín
Sanjuán García, José

Sanmartín Ribes, Manuel
Santágueda García, Camilo
Santágueda García, Evaristo
Sanz Aymerich, Francisco
Saura Arayo, Bautista
Segarra Guinot, José
Segarra Torres, Juan
Segura Guinot, Pascual
Serra Gorris, Bautista
Serrano Fabregat, Isaac
Serrano Vila, Ricardo
Simarro Colombri, Bautista
Simarro Piqueras, Ramón
Simarro Piqueras, Domingo
Simarro Piqueras, Ramón
Socarrades Meliá, Manuel
Socarrades Meliá, Manuela
Solá Foix, Manuel
Suñer Diago, Teresa
Taura Monzonís, Vicente
Tormo Abad, Juan Bautista
Tormo Fernández, Manuel
Tormos Beltrán, Vicente
Tornador Bernat, Amparo
Tornador Buchardo, Joaquín
Torres Viala, Emilio
Tortes Sancho, Rafael
Traver San Martín, Aurelio
Trenco Vidre, José
Ull Marín, Elisa
Urrea Fuentes, Vicente
Valera Monfort, Hilario
Valero Almela, Bautista
Vaquer Conde, Manuel
Vaquero Lorenzo, Simeón
Varela Monfort, Hilario
Varella Lahoz, Hilario
Ventura Ballester, José
Ventura Campos, Carmen
Ventura Cherta, José
Ventura Fortea, Asunción
Ventura Fortea, Gracia
Ventura González, Evaristo
Vernia Blasco, Manuel

Vernia Peris, José
Vicente Solsona, Víctor
Vidal Musoles, José
Vido Beltrán, Manuel
Vila Monzonis, Serafín

Vilar Bodí, José
Violeta Serrano, Filomena
Zaragoza Chust, Vicente
Zaragoza Jarque, Francisco

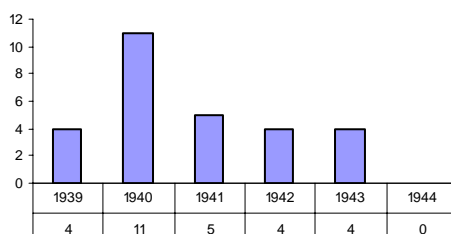
CABANES



En Cabanes 111 personas se vieron afectadas por la exigencia de responsabilidades políticas, lo que representa un 1,77% del total provincial y un 3,2% de la población total de la localidad. De esas 111 personas, 104 eran varones, lo que quiere decir que un 6,18% de la población masculina local se vio implicada. Las 7 mujeres afectadas representan al 0,39% de la población femenina. Se trataba de labradores, jornaleros y algún propietarios, en definitiva, gente vinculada al sector primario de la economía.

La incoación de expedientes se hizo desde el mismo año inicial de 1939 hasta 1943 de forma bastante regular, excepto 1940, año en el que se incoaron el máximo número de expedientes, según los datos que poseemos actualmente. Los expedientes se incoaron tanto por disposición de testimonios de condena por un tribunal militar como por liquidación de los datos del Servicio de Recuperación Agrícola.

Gráfica 5.14



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Los informes de las autoridades locales de Cabanes eran bastante completos. El informe de la Guardia Civil se centraba en los antecedentes políticos y en la actuación del inculcado durante la guerra civil, además de incluir una relación de bienes valorada económicamente. El alcalde José M^a Borrás realizaba informes centrados en los mismos puntos, aunque con una gran proliferación de calificativos morales. Los informes de Vicente Sidro, Jefe Local de FET y de las JONS eran de redacción independiente, aunque recabando el mismo tipo de información. El cura Jaime Agut, de la Parroquia de San Juan Bautista de Cabanes se basaba en informaciones de personas adictas al régimen y en los anteriores informes, teniendo especial atención en los antecedentes políticos y en la calificación moral de la persona.²⁹

²⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Mulet Julve, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Cabanes afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agud Tena, Ezequiel
Alcácer Boira, Vicente
Álvarez Boira, Vicente
Andreu Llorens, José
Arnau Llorens, José
Ballester Planell, Manuel
Baset Capdevila, Vicente
Beltrán Bellés, Francisco
Beltrán Segarra, Francisco
Bellés Cubedo, Manuel
Bellés Lavernia, Remigio
Bellés Pelechá, Antonio
Bellés Planell, Vicente
Bernal Navarro, Jaime
Boira Bellés, Modesto
Boira Capdevila, Elías
Bojados Baset, Vicente
Bonet Guimerá, Daniel
Borrull Giménez, Miguel
Bruch Esfort, José
Capdevila Boira, José
Capdevila Vallejo, Miguel
Casanova Vidal, Francisco
Casañ Escorihuela, Vicente
Castellet Boira, Eladio
Castells Palleja, Francisco
Ciurana Pitarch, Joaquín
Ciurana Planells, Vicente
Claret Gauchía, Constancio
Climent Roca, José
Colomer Traver, Vicente
del Palillo Boira, José
Esteller Ibáñez, José
Esteller Planell, Manuel
Fabregat Boix, Francisco
Fabregat Ribes, Herminio
Falomir Gual, Manuel
Fernández Julve, Juan
Fernández Julve, Vicente
Ferrando Pauner, Bautista
Forés Julve, José
Garcés Manzano, Antonio

García Capdevila, Salustiano
Gil Casanova, Manuel
Gual Segarra, Vicente
Guimerá Balaguer, Antonio
Ibáñez Valls, José
Julve Branchadell, Perfecto
Julve Roca, Francisco
Llorens Gual, Juan
Llorens Gual, Javier
Llorens Gual, Laurentino
Llorens Roca, Ernesto
Llorens Roca, Vicente
Llorens Sánchez, Pilar
Llorens Sánchez, Vicente
Manzano Gil, María
Martí Beltrán, José
Martí Boix, Salvador
Mestre Esteve, Ramón
Moliner Reula, Victoriano
Monroy Manzano, José
Montoliu Climent, José
Moreno García, Jesús
Moreno Guía, Jesús
Mulet Julve, Ángel
Mulet Julve, Antonio
Mulet Marqués, Francisco
Muñoz Reula, José
Navarro Caudiel, Lorenzo
Paulet Llorens, Juan
Pauner Segarra, Vicente
Pavía Borrás, Javier
Pelechea Bellés, Hipólito
Peris Bellés, Juan Bautista
Pitarch Bellés, Manuel
Pitarch Manzano, Gabriel
Planell Gómez, José
Pons Beltrán, Laurentino
Queral Selma, Antonio
Reula Bou, Gumersindo
Reula Selma, Plácido
Ribes Lavernia, Federico
Ribes Roca, Federico
Ribés Roca, Vicente

Ribes Salvador, Emilio
Roca Bojados, José
Roca Capdevila, Rogelio
Roca Carceller, José
Roig Belenguer, Cándido
Salvador Ciurana, José
Santamaría Forés, Antonio
Santamaría Manzano, José
Santamónica Bort, Vicente
Segarra Alcácer, Plácido
Segarra Gauchia, Herminia
Selma Pitarch, Miguel
Sidro Pitarch, Joaquín

Simó Salvador, Ernesto
Soldevila Falomir, Plácido
Tejedor Vidal, María
Telloles Pons, Pascuala
Tena Casanova, Gabriel
Tena Pitarch, María
Torán Sanpedro, José
Traver Carceller, Argimiro
Turlo Llobet, Carmen
Vidal Capdevila, José
Vidal Casanova, José
Vidal Llovet, José
Vives Roca, Federico

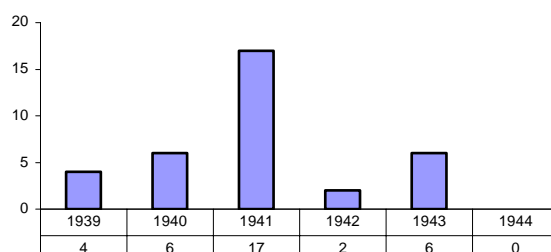
CÁLIG



En Cáliz el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 55, un 0,88% del total provincial y un 2,25% de la población local total. Los 55 casos corresponden a varones, con lo que el 4,88% de la población masculina de la localidad se vio implicada. Según nuestros datos se trataba en su mayoría de personas vinculadas al sector primario de la economía, aunque en torno al 15% de los mismos lo hacían al sector secundario y una minoría al terciario.

La incoación de expedientes se mantuvo constante en el periodo 1939-1943, con un máximo en 1941. Curiosamente el año 1943 fue uno de los que mayor número de incoación de expedientes registró.

Gráfica 5.15



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

La Guardia Civil de Cáliz³⁰ mantuvo una activa colaboración con la jurisdicción de responsabilidades políticas, que iba más allá de la elaboración de informes solicitados por las autoridades superiores, ya que denunció directamente a algunos de los vecinos. Sus informes se centraban en el pasado político, en la actuación durante la guerra y en la valoración económica de los bienes del inculcado. Además, este Puesto de la Guardia Civil realizaba los informes de los vecinos de Cervera del Maestre. La alcaldía informaba de la situación familiar y el jornal que ganaba la persona en cuestión. El informe de FET y de las JONS local recogía comentarios sobre su conducta y catadura moral, con una redacción independiente a las anteriores. Ángel Aznar, cura de la Parroquia de San Lorenzo de Cáliz calificaba moralmente a los inculcados y se regía por los datos de los que disponía en las listas del Cumplimiento Pascual para catalogar a los inculcados, sin ofrecer ningún otro tipo de información.

³⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roure Ferreres, Caja 10104. AHPCS.

Relación de vecinos de Cáliz afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agramunt Valls, Manuel
Anglés Bel, Joaquín
Anglés Roda, Vicente
Antolí Borrás, Vicente
Batista Anglés, Eliseo
Batiste Marzá, José
Bel Ortí, José
Boner Solís, Amador
Borrás Anglés, Domingo
Borrás Anglés, Joaquín
Borrás Gombau, Enrique
Conesa Borrás, Joaquín
Cuartero Bonet, Joaquín
Cuartero Bonet, Ramón
Cuartero Castellanos, Emilio
Cuartero Pedra, Samuel
Forner Quixal, Vicente
Gallén Alberich, Bautista
Gamón Chillida, José
Gascó Borrás, Casimiro
Gil Beltrán, Daniel
Giro Rayo, José
Gumbau Pruñonosa, Juan
Lacruz Zaragoza, Mador
Marzá Agramunt, Federico
Marzá Albiol, Manuel
Marzá Cuartero, José

Meseguer Ponce, Bautista
Paumer Valls, Benjamín
Prats Anglés, Claudio
Prats Anglés, José
Pruñonosa Ferrer, Francisco
Querol Esteller, Carlos
Querol Marzá, Joaquín
Querol Pruñonosa, Joaquín
Querol Sanjuan, Juan Bautista
Querol Sanjuan, Manuel
Redó Gascó, Joaquín
Redó Ortiz, Manuel
Roig Batiste, Joaquín
Roures Ferreres, Ramón
San Abdón Gascó, Amador
San Abdón Gascón, Manuel
Sanz Giro, José
Sanz Gómez, Vicente
Sanz Vicent, Joaquín
Segarra Sanz, Joaquín
Serret Forner, Pedro
Sorlí Cuartero, Ernesto
Tolós Rueda, Manuel
Tous Pedra, Casimiro
Valls Sanz, Manuel
Verges Querol, Vicente
Vicente Ballester, Daniel
Vidal Lluch, Ángel

CAMPOS DE ARENOSO



En Campos de Arenoso fueron 4 las personas afectadas por la exigencia de responsabilidades políticas, el 0,06% provincial, todos ellos varones. Por tanto, el 0,98% de la población total local y el 2% de la población masculina local se vieron implicados en este proceso. En este caso desconocemos su ocupación laboral y sólo tenemos noticias de la incoación de uno de los expedientes en el año 1941.

En principio las autoridades locales realizaban informes independientes. El alcalde Vicente Pérez reflejaba en sus informes los bienes, los datos personales y profesionales y el jornal que recibía el inculcado. Vicente Tadeo, Delegado Local de FET y de las JONS, añadía información sobre la situación familiar. La Guardia Civil no añadía nada nuevo y realizaba su informe desde el Puesto de Cortes de Arenoso. Isidoro Marías, cura de la localidad, se centraba en la situación familiar del inculcado y en su situación en aquellos momentos.³¹

Relación de vecinos de Campos de Arenoso afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Escrig García, Ramón

Navarro Collado, Vicente

Collado Navarro, Vicente

Beltrán Lloscos, José María

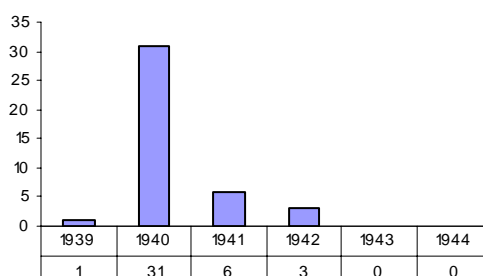
³¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Escrig García, Caja 10128. AHPCS.

CANET LO ROIG



En Canet lo Roig 49 personas se vieron implicadas en la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,78% provincial y un 2,41% de la población total local. Como todos ellos eran varones en esta población el 4,85% de la población masculina local se vio afectada por la Ley. Se trataba predominantemente de labradores y jornaleros, con algún representante del sector secundario (herrero) y del terciario (guardia civil). La incoación de expedientes se hizo desde 1939, pero fue en el año 1940 cuando tenemos documentada la notificación de un mayor número de expedientes, siguiendo el proceso progresivamente en disminución durante los años 1941 y 1942. A partir de 1943 no tenemos noticias de la incoación de ningún expediente nuevo.

Gráfica 5.16



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En cuanto a las autoridades³², la alcaldía de Canet lo Roig tuvo mantuvo una postura decidida y con iniciacitva la hora de confeccionar los correspondientes informes, llegando incluso a la denuncia directa de vecinos, fruto, entre otras cosas, de venganzas personales y resentimientos arrastrados desde los tiempos bélicos. En este caso, participaba no sólo el alcalde, Joaquín Castro, sino también el Secretario municipal, Manuel Ramos Tusón. Los informes de la alcaldía se centraban en el historial político del inculpado y su catalogación moral, dejando de lado otras cuestiones (incluso el juez provincial de responsabilidades políticas obligó a realizar un segundo informe en el que se especificaran los bienes del mismo). José Pruñonosa, Delegado Local de FET y de las JONS realizaba informes parecidos, aunque con un tono mucho más exaltado, agresivo y radical. Los informes de la Guardia Civil se realizaban desde la Jana y no

³² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS.

añadían nada nuevo respecto a los anteriores, sin descartar la posibilidad de estar inspirado en ellos. Heliodoro Martí, cura de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Canet lo Roig se basaba en los primeros informes citados.

Relación de vecinos de Canet lo Roig afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bel Meseguer, José	Meseguer Querol, Francisco
Beltrán Meseguer, Juan	Meseguer Royo, Emilio
Capafons Cuartiella, Miguel	Miralles Vives, Vicente
Capafons Plá, Juan	Muñoz Villach, Juan
Capafons Plá, Ramón	Nadal Oliver, Manuel
Castell Martí, Vicente	Pla Meseguer, José
Cifre Marzá, Vicente	Pla Muñoz, Miguel
Cifre Salvador, Vicente	Pla Vives, José
Cla Gimeno, Ramón	Prats Capafons, José
Cruella Muñoz, Vicente	Pruñonosa Meseguer, Joaquín
Curella Roca, Alberto	Querol Marzá, Vicente
Eroles Marco, Domingo	Querol Miravet, Guillermo
Falcó Pla, Ricardo	Salom Morera, Ángel
Ferreres Cuartiella, Joaquín	Salvador Ferreres, Martín
Ferreres Ferreres, Joaquín	Salvador Peña, Vicente
Gaspar Michavila, Vicente	Segura Cabanes, Vicente
Gimeno Cardona, Hermenegildo	Segura del Río, Domingo
Gimeno Jovaní, José	Segura del Río, Joaquín
Grañana Bengoechea, Vicente	Sola Igual, Vicente
Jaime Pla, Vicente	Tolós Gargallo, Joaquín
Jovaní Miralles, Tomás	Tolós Sabater, Francisco
Jovani Pons, José	Vidal Bengoechea, Tomás
Jovaní Sales, Miguel J.	Vidal Grañana, Francisco
Marzá Cifre, Julián	Viola Jovaní, Vicente
Meseguer Gasulla, Vicente	

CASTELL DE CABRES



En Castell de Cabres hubo 16 varones implicados en la exigencia de responsabilidades políticas. Esto supone el 0,25% a nivel provincial y el 6,6% respecto a su población total e implica que el 13,1% de la población masculina local se vio afectada por la Ley. Según nuestros datos se trataba de labradores y jornaleros prácticamente en su totalidad. Conocemos la incoación de 8 expedientes en 1940 y 4 en el año 1941.

La alcaldía de Castell de Cabres tenía todo el peso a la hora de confeccionar los informes correspondientes. De hecho, era la autora de la denuncia de algunos de los vecinos inculcados. En sus informes se atendía a la situación económica del inculcado, a su situación familiar y a la valoración económica de sus bienes. El Delegado Local de FET y de las JONS, Vicente Segura, se limitaba a firmar el mismo texto. Los informes de la Guardia Civil se realizaban en el Puesto de Morella y no añadían datos nuevos respecto a los anteriores. No tenemos constancia de informe del cura.³³

³³ Expediente de Responsabilidades Políticas a Ramón Giner Querol, Caja 10104. AHPCS.

Relación de vecinos de Castell de Cabres afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Antolí Bonfill, Ramón
Beltrán Beltrán, Manuel
Boix Segura, Manuel
Gasulla Segura, José
Gasulla Segura, Manuel
Giner Querol, Ramón
Grau Grau, Vicente
Jovaní Sabater, Joaquín

Juni Viñals, Joaquín
Mestre Tena, Julián
Rallo Segura, José
Sabater Rallo, Ramón
Segura Ferreres, Francisco
Segura Guimerá, José
Segura Martí, José
Segura Prades, Bernardino

CASTELLFORT



Los 17 vecinos de Castellfort implicados en la Ley de Responsabilidades Políticas representaban el 0,27% de los implicados a nivel provincial y el 1,81% respecto la población total local. Como todos ellos eran varones esto representa que el 3,77% de la población masculina se vio afectada por la Ley. En general se trataba de labradores y jornaleros, aunque también tenemos documentada la existencia de dos “industriales”. La incoación de expedientes se realizó de forma casi homogénea en el periodo 1940-1942, ya que en 1940 conocemos la apertura de 3 expedientes y la de 4 más en cada uno de los años 1941 y 1942.

Todos los informes de las autoridades se centraban especialmente en los datos económicos concernientes a los inculpados: fincas, jornales, etc., sobre todo los de la alcaldía, FET y de las JONS y Guardia Civil. Enrique Farnós, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Castellfort añadía al informe económico la situación familiar del inculpadado.³⁴

³⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Moles Peiró, Caja 10103. AHPCS.

Relación de vecinos de Castellfort afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Carbó Centelles, Rubén
Celma Porcar, Ismael
Cerdá Molés, Macario
García Font, Esteban
Ibáñez Barreda, Bautista
Ibáñez Monfort, Julián
Marín Ripollés, Leonardo
Martí Artola, Guillermo
Mestre Segura, Pedro

Molés Peiró, Francisco
Monfort Celma, Daniel
Ortí Folch, Vicente
Ortiz Vives, Florencio
Querol Bayarri, Manuel
Ramos Quintana, Juan
Segarra Molés, Alejandro
Segura Ripollés, Nicolás

CASTELLNOVO



En Castellnovo los 10 hombres implicados en la exigencia de responsabilidades políticas representaban el 0,16% de los afectados a nivel provincial y el 0,77% respecto a la población total local, así como al 1,56% de la población masculina local. Se trataba esencialmente de labradores, acompañados de algún miembro del sector secundario como un carpintero. Los 7 expedientes que tenemos documentados se incoaron en 1941 (1) y en 1942 (6).

A la hora de realizar los informes de las autoridades locales, parece que el que más peso tenía era el de la Guardia Civil. Realizado desde el Puesto de Segorbe, se centraba en la situación familiar y el estado económico y patrimonial del inculcado. La alcaldía y el Delegado Local de FET y de las JONS, Vicente Llop, se basaban en el primero, aunque, sobre todo en el segundo caso, con una redacción independiente. Alejandro Ancesto, cura de la Parroquia de los Santos Reyes de Castellnovo no añadía datos nuevos, pero tenía una redacción completamente diferente.³⁵

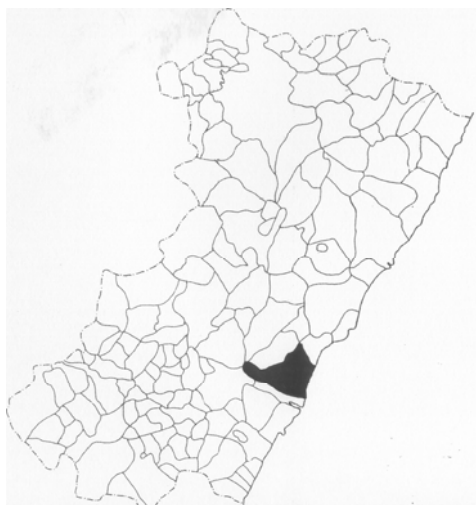
³⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín López Gil, Caja 10099. AHPCS.

Relación de vecinos de Castellnovo afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Blay Gil, Bernardino
Clemente Pérez, Benjamín
Cruzat Samper, Vicente
Cucala Forner, Francisco
Escrig Pastor, Antonio

López Alegre, Francisco
López Gil, Joaquín
López López, Francisco
López Orduña, Emilio
Martínez Soriano, José Vicente

CASTELLÓN

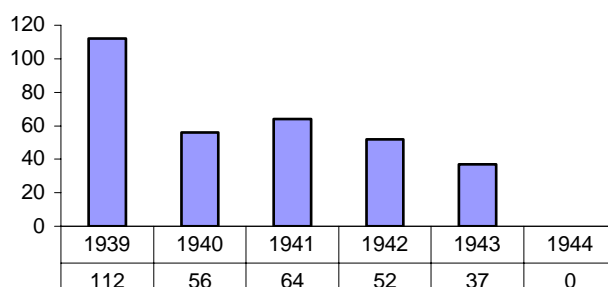


En la capital de la provincia, y núcleo urbano más poblado en 1940 con 46.876 habitantes, estuvieron implicados en la exigencia de responsabilidades políticas, según nuestros datos, 711 personas, lo que representa el 11,37% del total provincial y el 1,51% de la población total local. De estas personas 660 eran varones, lo que implica que el 2,86% de la población masculina local se vio implicada. Las 51 mujeres afectadas por la Ley representaban el 0,21% de la población femenina local.

Se trataba de personas mayoritariamente pertenecientes al sector terciario, con oficios liberales, vinculados a tareas de estudio o administrativas o al comercio. Sin embargo, la presencia de personas pertenecientes al sector secundario se situaba en torno al 20%, sobre todo albañiles, alpargateros, carpinteros e industriales. El sector primario estaba menos representado, aunque alcanzaba aproximadamente el 10% de los analizados, especialmente labradores y jornaleros. En cuanto a las mujeres, tenemos documentadas la existencia de 1 dedicada a las labores del hogar, 2 mecanógrafas, 1 oficinista, 1 modista y 1 telefonista.

La incoación de expedientes fue muy intensa en el año 1939. A partir del año 1940 y hasta el año 1943 el ritmo de incoación fue alto y se mantuvo más o menos constante hasta este último año, en el que decayó visiblemente. En 1944 no tenemos documentada ninguna incoación de expediente.

Gráfica 5.17



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En Castellón parece que la fuente fundamental a la hora de recabar información de los procesados por responsabilidades políticas era la Guardia Civil. Ésta emitía informes que se centraban especialmente en el pasado político y delictivo del mismo, aportando un número considerable de detalles conocidos tanto de primera mano como por informaciones facilitadas por los mismos vecinos de Castellón. Por supuesto, también ofrecía información patrimonial y económica de los inculcados e, incluso, se permitía calificativos morales despectivos.

Más breves eran los informes de la alcaldía. Firmados por Vicente Traver, se centraban en los aspectos económicos sin olvidar la situación personal y familiar del inculcado. En algunos casos la alcaldía proclama no disponer de datos económicos de los inculcados y remite a otras fuentes de información como las Delegaciones de Hacienda. Dado el volumen de informes a firmar y la escasa proximidad entre las autoridades y los inculcados, se trata de informes que en algunos casos fueron firmados maquinalmente.

Los informes de FET y de las JONS eran firmados por el Delegado Provincial y se centraban también en los aspectos económicos y patrimoniales del inculcado, siempre a nivel general. Hay que recordar que la brevedad de estos informes muchas veces venía impuesta por el estado de miseria en que se encontraban los inculcados.

No tenemos constancia de la existencia de informes de los curas de la localidad. En algunos expedientes se añadía un informe de la Comisaría de Policía³⁶

³⁶ Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Manuel Almela Prats, Caja 10064; contra Enrique Monzonís Ferrán, Caja 10064; contra Joaquín Ortiz Esrich, Caja 10064; contra Vicente Porcar Vilar, Caja 10064; contra Jaime Torrella Archilés, Caja 10064; contra Rafael Balaguer Ferrer, Caja 10102; contra Vicente Artero Pérez, Caja 10068; y contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069.

Relación de vecinos de Castellón afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abril Bayo, Antonio
Adelantado Centelles
Adell Senís, Consuelo
Adell Senís, Nieves
Aduara Collado, José
Aduara Segarra, José
Agost Beltrán, José
Agost Miralles, Vicente
Agost Moliner, Juan
Aguilella Ramos, Vicente
Aicart Arnau, José
Albalat Adell, Vicente
Albella Cabedo, Pascual
Albella Catalá, Pascual
Albert Cervera, Jaime
Albert Porcar, Agapito
Albiol Ayet, Juan Bautista
Albiol Meliá, Jaime
Albiol Tárrega, Tomás
Alcaide Ariza, Blas
Alcántara Juan, Amadeo
Aledón Pachés, Salvador
Alejandro Urbano, Asunción
Alfonso Quiles, Juan
Almela Ibáñez, Vicente
Almela Prats, Manuel
Alonso Marco, José
Alonso Viana, Gonzalo
Alonso Viana, Miguel
Altadill Guilla, Jesús
Altadill Mora, José
Altava Segarra, Francisco
Alloza Bermell, Leandro
Amat Galmes, Vicente
Amat Más, Federico
Amat Ortiz, Vicenta
Ana Zaragoza, José
Andrés Sabater, Vicente
Andreu Boira, Miguel
Andreu Casteller, Julián

Andreu García, Rafael
Andreu Marzá, José
Andreu Renau, Rafael
Anto Roig, Eduardo
Añó Esbrí, Manuel
Aparici Fabrega, José
Aparici Marmaneu, Vicente
Aragón Gómez, David
Aragonés Cucala, Juan
Archilés Providencia, José
Archilés Providencia, Vicente
Arenós Llopis, José
Arin Melo, Juan
Armero Ceballos, Ángel
Armero López, Ángel
Armiño Gómez, Manuel
Arnal Alonso, Pascual
Arnau Catalán, José
Arnau Monzón, Manuel
Arranz Mangas, Ángel
Artero González, Félix
Artero Pérez, Vicente
Artola Tomás, Bernardo
Asensi Merenciano, José
Avinent Gimeno, Francisco
Azorín Puche, Pablo
Babiloni Gascón, Enrique
Babiloni Valls, Francisca
Babiloni Valls, José
Babilonia Andrés, Jaime
Badal Alonso, Cirilo
Badenes Barberá, Fernando
Badenes Igual, José
Baeza Vilar, José
Balaguer Ferrer, Rafael
Balaguer Francisco, José
Baldayo Andreu, Francisco
Baldayo Balaguer, José
Baldayo Rovira, José
Baldayo Vallés, Antonio

Ballester Pesudo, Eliseo
Barberá Albert, Cristóbal
Barberá García, Vicente
Barberá Ramón, Nicolás
Barberá Ramón, Ramón
Barberá Vilar, Teresa
Barrachina Marzá, Pilar
Barreda Castillo, Manuel
Barreda Pitarch, José
Bartual Ortiz, Juan Antonio
Bausá Flor, Juan
Belaire Moreno, José
Beltrán Aicart, Enriqué
Beltrán Barreda, Magdalena
Beltrán Salaix, Francisco
Beltrán Sanchis, Recaredo
Beltrán Solsona, Hipólito
Bellés Marzá, Miguel
Bellido Tirado, Juan Bautista
Bellmunt Ortiz, Antonio
Benet Torrent, Miguel
Benot Fragua, Octavio
Bermell Samit, José
Bernat Nebot, Daniel
Bernat Pascual, José
Bernat Radio, Celedonio
Betoret Llorens, Francisco
Bien Mauri, Emilio
Blasco Blasco, Antonio
Blasco Gallosta, Carlos
Blasco Pastor, Francisco
Blasco Valero, José
Bonet Diago, Joaquín
Borea Domínguez, Antonio
Brenes Delgado, Juan
Breva Gil, Gaspar
Breva Ramón, Antonio
Brisach Gómez, Vicente
Bueso Marín, Vicente
Cabedo Juan, María
Calatayud Piquer, Carmen
Calduch Pascual, Luis

Calduch Roig, Vicente
Calvo Breva, Carlos
Calvo Calvo, Juan
Calvo Calvo, Martín
Calvo Rovira, Antonio
Camahort Carballo, Esteban
Camañes García, Antonio
Campos Castells, Miguel
Candela Ortells, José
Capdevila Expósito, José
Capdevila Vilallonga, Vicente
Capella Saborit, Vicente
Capilla Vives, Manuel
Carbó Tornés, Vicente
Carceller Solsona, José
Carda Usó, Pascual
Carmona Pintor, José
Carrascal Badenes, Lucio
Casado Antonio, Constantino
Castell Carreras, Manuel
Castell Navarro, Antonio
Castellano Mañez, Manuel
Castelló Tárrega y Arroyo, José
Castells Gimeno, José
Castells Negre, María
Castillo Agut, Agustín
Castillo Espinosa, Bautista
Castillo Gil, José
Castillo Zaera, Victoriano
Catalá Durá, Salvador
Caudet Ontoñanzas, Ildefonso
Causaras Fuster, Vicente
Causaras Garcés, Santiago
Cean Limor, Tomás
Centelles Ripoll, Miguel
Cercos Catalá, Manuel
Cerdá Alonso, Francisco
Cervelló Olaya, Carmen
Cervera Badenes, Juan
Cervera Bellmunt, Manuel
Cervero Tárrega, Pascual
Claramonte Sos, Tomás

Claros Castell, Vicente
Coello López, José
Colón Beltrán, Tomás
Comas Aldea, Vicente
Conde Sánchez, Alejandro
Cordobilla Lázaro, Maximino
Cortés Bou, José
Cotolí Vivas, Francisco
Covillos Ferrer, Antonio
Covillos Ferrer, Ramón
Cubedo Ramos, Joaquín
Cubedo Varella, Francisco
Cuevas Vacas, Francisco
Cuselles Gómez, Juan
Chamorro Fornés, Antonio
Checa Patiño, Felipe
Cheliz Bernal, Agustín
Chiva Félix, Jaime
Chivas Albalat, José
Chover Ordóñez, Felipe
Dámaso Roda, José
Dávalos Masip, Ezequiel
De la Cruz Sánchez, Rufino
De la Transfiguración Roda
del Alba y del Olmo, Mariano
del Cacho Pastor, Estanislao
Del Cacho Villarraig, Francisco
Del Campo Benlloch, Blas
Del Campo Montañés, Bartolomé
Devis Nebot, Matías
Diago Segarra, Vicente
Díaz Díaz, Ginés
Díaz Romain, Guillermo
Dols Fernando, Vicente
Dols Hernández, Vicente
Dols Mas, Joaquín
Dols Rovira, José
Doménech Bautista, Francisco
Doménech Bel, Angelino
Doménech Palomar, Enrique
Domingo Roig, Miguel
Domínguez Álvarez, Antonio

Domínguez Mico, Cándido
Dordella Gilabert, Jaime
Drago Oms, Rafael
Ecryd Heil, Rusell
Echevarría de la Torre, Juan
Edo Zandalinas, Joaquín
Eixau Royo, Victoriano
Eliphe Rabadán, Mariano
Erdozaín Lacort, Luis
Escrig Gonzalbo, Ramón
Escrig Monfort, Joaquín
Escuder Altava, Tomás
Escuder Pascual, José
Escuder Rabasa, Antonio
Esteban Vernia, Vicente
Esteban, Ricardo
Esteruelas López, Macario
Esteve Herrero, Santiago
Esteve Marco, Luis
Estrada Camañes, Carmen
Estrada Miralles, Francisco
Estrada Tormo, Fernando
Extrems Fabregat, Constantino
Fabregat Boix, Pascual
Fabregat Ferrandiz, Julio
Fabregat Mir, Pascual
Fabregat Serrano, Emilio
Fabuel del Toro, Francisco
Falomir Babiloni, José
Fas Segarra, Celestino
Fauli Beltrán, Jaime
Fauli Beltrán, José
Felip Segarra, Francisco
Fernández Álvarez, José
Fernández Rodríguez, Carlos
Ferrando Boix, Francisca
Ferrando Boix, Francisco
Ferrer Tomás, José
Ferrer Tomás, Norberto
Ferrer Tomás, Ricardo
Ferrer Viciano, Pedro
Ferriols Nebot, Manuel
Ferruz Lorente, Leonor

Figas Albalat, Antonio
 Flor Gallén, Daniel
 Flor Goterriz, Fernando
 Flors Goterris, Fernando
 Flors Goterris, Juan Bautista
 Font Sánchez, Josefa
 Font Sancho, José
 Forcada , Enrique
 Forcada Estada, J.
 Forcada García, Carmen
 Forcada Gregorio, Manuel
 Forcada Manrique, Enrique
 Forcada Segarra, José
 Forés Bort, José
 Forner Pascual, Alfredo
 Francisco Pallarés, Antonio
 Francisco Pallarés, Vicente
 Franch Ortega, José
 Fullea Polo, Manuel
 Gallén Nebot, Eugenio
 Garcés Andreu, Antonio
 Garcés Antonino, José
 Garcés Cardona, Joaquín
 Garcés Díaz, Ismael
 García Bojados, Elías
 García Carcadillo, Mariano
 García Faura, Magdalena
 García Hermosilla, Sixto
 García Izquierdo, Francisco
 García Marzá, Facundo
 García Muñoz, Santiago
 García Petit, Vicente
 García Ramón, Marina
 García Sabater, Luis
 Gargallo Claros, Teresa
 Gari Martinavarro, Enrique
 Garí Martinavarro, Julián
 Garrido Salado, Enrique
 Gas Vachero, Joaquín
 Gasch Alonso, Martín
 Gasch Bachero, Joaquín
 Gasque García, Manuel
 Gasset Lacasaña, Fernando
 Gauchia Bellmunt, Joaquín

Gavara Artero, Francisco
 Gavara Vilar, José
 Gea Linares, José
 Gil Artero, Francisca
 Gil Beltrán, Magdalena
 Gil Centelles, Amadeo
 Gil Salvador, Gaspar
 Gil Yuste, Pedro
 Giménez Almela, Dolores
 Giménez Selma, Teresa
 Gimeno Barberia, José Luís
 Gimeno Caudet, Enrique
 Gimeno García, Manuel
 Gimeno Gómez, Vicente
 Gimeno Segarra, Manuel
 Gómez Fayos, Vicente
 Gómez Forcada, Manuel
 Gómez Guillamón, Doroteo
 Gómez Mas, Vicente
 Gómez Moya, Ignacio
 Gómez Rubio, Cristóbal
 Gómez Rubio, José
 Gómez Salvador, Gonzalo
 Gomis Aguirre, Pascual
 Gonzalbo Benedicto, Francisco
 González Pérez, Sebastián
 González Rubio, Miguel
 Gordoncillo García, Juan
 Gracia Rajadel, Primitivo
 Granell Gascó, Miguel
 Grijalbo Guía, Adrián
 Gual Ramos, José
 Guerrero Vega, Miguel
 Guia Renau, Constancio
 Guillén Tarazona, Joaquín
 Guillén Tarazona, Julián
 Guiñón Sánchez, Ramón
 Guiral Ribalta, Agustín
 Hernández Lorente, Francisco
 Herrero Ortega, Juan
 Herrero Ruíz, Balbino
 Huerta Calap, Rafael
 Huguet Juan, Ramón M^a
 Huguet Segarra, Cayetano

Ibáñez Alicart, Miguel
Ibáñez Arnau, Manuel
Ibáñez Celades, Manuel
Ibáñez Martí, Manuel
Ibáñez Piñana, Eduardo
Ibáñez Tirado, Elías
Igual Babiloni, Juan
Insa Manzaner, José
Iserte Rovira, Victoriano
Jaime Calvo, Carlos
Janes Pagés, José
Jiménez Vaquer, Alejandro
Juli Beltrán, Jaime
Lafuente Pérez, Dolores
Lara Bagán, José
Latorre Martínez, Miguel
López Fabregat, Joaquín
López Fernández, Francisco
López Lorenzo, Manuel
López Rovira, Gaspar
López Vayo, Ángel
Llago Meliá, Fernando
Llobet Casanova, Álvaro
Llopis Prades, Salvador
Llorens Alicart, Vicente
Llorens Edo, Miguel
Llorens Pachés, Francisco
Llorens Parra, Pascual
Llorens Peris, Vicente
Llorens Planchadell, Antonia
Llorens Salazar, Antonio
Manrique Ferrando, Pascual
Mañas Mínguez, Jerónimo
Marco Chalmeta, Josefina
Marco Forcada, Joaquín
Marco López, Antonio
Marco Llorens, José
Marco Mir, Álvaro
Marco Nebot, Pascual
Marco, Armando
Marcos Torres, Álvaro
Marí Esteller, Bautista
Marín Gil, Antonio
Marín Sales, Victoriano

Marmaneu Castillo, Joaquín
Marqués Ripollés, Antonio
Márquez Ortiz, Francisca
Marro Cano, Armando
Martí Benages, Vicente
Martí Fauro, José Vicente
Martí Gargallo, Francisco
Martí Iserte, Juan
Martí Miñana, Vicente
Martín Oviedo, Valeriano
Martín Sales, Victoriano
Martín Sorribes, Tiburcio
Martínez Compte, José
Martínez Fonte, José
Martínez García, Joaquín
Martínez García, Juan
Martínez González, Carlos
Martínez Nicolás, Valentín
Martínez Romeu, José
Martínez Sánchez, Francisco
Martorell Rabascall, Ramón
Marzá Baldayo, Virginio
Marzá Medall, Miguel
Marzá Trilles, Miguel
Marzal Pérez, Zoilo
Mas Ginesta, Víctor
Mas Inés, Miguel
Mas Marqués, Joaquín
Más Pinter, Ramón
Mas Torrent, Ramón
Mata Juan, Manuel
Mateo Zamora, José
Mercé Arambul, Joaquín
Mercé Arambul, Vicente
Mercé Pascual, Pascual
Meseguer Ferrer, Manuel
Mezquita Castañer, Jaime
Mir Primavera, Vicente
Mir Roig, José
Miralles Campos, Emilio
Miralles Vidal, Amadeo
Miravet Segarra, José
Miró Miró, Lorenzo
Molés Garcés, Vicente

Molina Cotilla, Narciso
Molina Eseberri, Joaquín
Moliner Pallardó, Rafael
Moltó Martínez, Vicente
Moltó Semper, Eduardo
Monfort Edo, Francisco
Monfort Fontanet, Joaquín
Monfort Ortega, Josefa
Monreal Armengot, Joaquín
Montañés Estrada, José
Montañés Leal, Baltasar
Montañés Leal, Francisco
Montañés Leal, Manuel
Montañés Leal, María
Montañés Sabado, Vicente
Montañés Segarra, Vicente
Montesinos Macián, Francisco
Montó Marco, José
Montoliu Ballester, José María
Montoliu Moliner, Eduardo
Monzonís Ferrán, Enrique
Morales Beltrán, Joaquín
Morales Carles, Ángel
Moya Salceda, Santiago
Muñoz Lozano, José
Mut Chermá, Antonio
Mut Nebot, Javier
Nácher Monfort, José
Nácher Monfort, Juan
Nácher Monfort, Manuel
Navarro Babiloni, Fernando Vicente
Navarro Gallego, Tobías
Navarro Juan, Manuel
Navarro Sánchez, Juan
Nebot Moliner, José
Nicolau Guiral, Cristóbal
Nogueras Sanmartín, José
Nos Salva, Manuel
Ochando Tárrega, José
Ojalvo Abella, Eduardo
Olivares Ramos, Domingo
Oliver Pinto, Nicolás Fernando
Ora Moltó, Dolores
Ora Ribera, Marcelino

Orguín Gueyton, Adolfo
Ortells Escrig, José
Ortiz Campañ, Miguel
Ortiz Escrig, Joaquín
Ortuño Muñoz, Francisco
Ortuño Vargas, Indalecio
Pablo Rodríguez, Eusebio
Pachés Moliner, Vicente
Pascual Castell, Tomás
Pascual Izquierdo, María
Pastor Guinot, Antonio
Pastor Segarra, Ernesto
Pastor Segarra, Vicente
Pastor Torres, Francisco
Pastor Vilanova, Miguel
Patiño de Castro, María de la C
Paulo Traver, Joaquín
Pauner Pitarch, Aniceto
Peinado Castillo, Joaquín
Peiró Benedicto, José
Pellicer Sánchez, Amadeo
Peña Arnau, Juan
Peña Tobajas, Bernardo
Perales Valls, Hipólito
Pérez Adsuara, Ramón
Pérez Batalla, Manuel
Pérez Castelló, Evaristo
Pérez Ciurana, Luis
Pérez Coicoa, Martín
Pérez Esteban, Evaristo
Pérez Martínez, Pedro Benjamín
Pérez Rosa, Juan
Peris Cubedo, Vicente
Peris Chillida, Miguel
Peris Ferrando, Dolores
Peris Miralles, Antonio
Peris Pallarés, José
Peris Pallarés, Vicente
Peris Seder, Manuel
Peris Soler, José
Peris Soriano, Dolores
Perona Martínez, Juan
Personat Ferrara, Joaquín
Personat Tortes, Vicente

Picazo Requena, Acacio
Pico Esteve, Vicente
Pintor Soler, José
Pitarch Arrufat, Francisco
Pitarch Ferrando, Bautista
Pla Roca, Sebastián
Planell Gómez, José
Planell Reula, José
Planell Soldevila, Daniel
Polo Braulio, José
Pons García, Julián
Porcar Llugast, Manuel
Porcar Ribes, Vicente
Porcar Sanahuja, Francisco
Porcar Vilar, Vicente
Portolés Marco, Carmen
Prades Altaba, Miguel
Prades Delas, José
Prades Forés, Manuel
Prades Richart, Miguel
Prades Trueba, Rafael
Purín Pérez, Ramón
Purón Orquín, Gerardo
Queral Safont, Bautista
Queral Safont, Vicente
Rambla Viñes, Joaquín
Ramón Bernat, José
Ramón Torrent, José
Ramón y Muñoz, José
Ramos Altaba, José
Ramos Mateu, José Antonio
Ramos Mateu, Tomás
Ramos Muñoz, José
Raposo Montero, Jesús
Redín Asurmendi, Joaquín
Redó Balaguer, Pascual
Renau Segarra, Vicente
Renau Soriano, Carmen
Renau Torrent, Vicente
Reposo Montero, Jesús
Ribalta Berenguer, Ramón
Ribalta Navarro, Antonia
Ribes Gonzalbo, Carmen
Ribes Huguet, Facundo

Rillo Juan, Juan Bautista
Rius Pérez, Salvador
Rivera Lengua, Pascual
Rivero Rodríguez, Fernando
Rives Huguet, Facundo
Robles Uriarte, Roberto
Roca Albiol, Joaquín
Roca Hervás, Emilio
Rodrigo Sales, Joaquín
Rodríguez Gutiérrez, Antonio
Rodríguez Jordá, Camilo
Rodríguez Úbeda, Francisco
Roig Forcada, Francisco
Roig Ibáñez, Juan
Roig Moliner, Faustino
Roig Mustieles, Juan
Roig Tena, José
Roig Vidal, Juan
Romá Alabau, Vicente
Romero Cervantes, Victoriano
Ros Martínez, Anastasio
Ros Serrador, José
Ros Serrador, Vicente
Rosell Agramunt, Mateo
Rubert Ramos, Manuel
Rubio Aparici, Martín
Rubio Castell, Joaquín
Rubio García, Estanislao
Sáez Tortosa, José
Safont Agustina, Vicente
Safont Berenguer, Nicolás
Saiz Salvat, Gumersindo
Salas Vicent, José
Salazar Mon, Vicente
Sales Almela, Teresa
Sales Baldayo, José
Sales Moliner, María
Sales Verdiá, Santiago
Salvador Ciurana, José
Salvador Gallén, Ramón
Salvador San Juan, Juan
Samit Balaguer, Francisco
Sánchez Berenguer, Emilia
Sánchez León, José

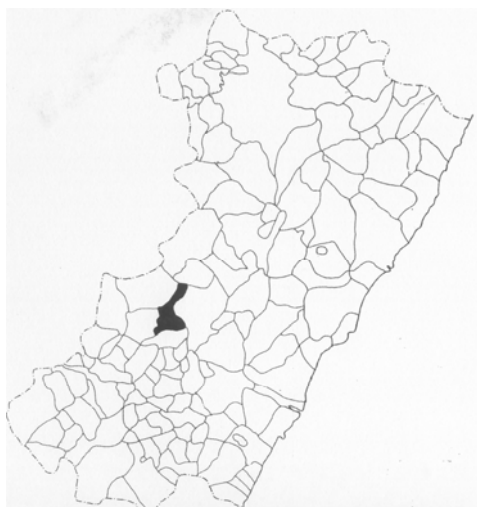
Sánchez Llopis, Amadeo
Sánchez Morán, Valentín
Sanfeliu Santolaria, Joaquín
Sanjosé Gual, Vicente
Santos Molina, Miguel
Santos Moliner, Miguel
Sanz Mercé, Teodoro
Sanz Museros, Miguel
Sanz Rosales, Rafael
Sanz Soria, Jerónimo
Sapiña Camaró, Juan
Sebastián Sierra, Antonio
Segarra Escolano, Juan
Segarra Pastor, Isidro
Segarra Pastor, Vicente
Segarra Ramos, Daniel
Segarra Rosell, Marcelino
Seguí Llorens, Francisco
Segura Palazón, Francisco
Segura Royo, Araceli
Senen Mayo, Fernando
Senís Almela, Luís
Sierra Silvestre, Agustín
Simó Melia, Alfredo
Simó Simó, Concepción
Socarrades Barberá, José
Socarrades Barrera, Pilar
Soler Avinent, Enrique
Soler Campos, Vicente
Soler Molina, Pedro
Soler Oliva, Rosa
Soler Redón, Francisco
Solsona Catalán, Arturo
Soriano Soporta, Ramón
Soriano Soriano, Manuel
Sorribes Fabregat, Félix
Sos Esteve, Carmen
Sos Febrero, Vicente
Sos Gómez, Antonio
Sos Martínez, Enrique
Sos Navarro, José
Soto Moreno, Manuel
Suárez Gallego, Daniel
Such Sanchís, Manuel

Suller Ribes, Antonio
Talamantes Paulo, Antonio
Talamantes Serra, Antonio
Tamborero Escoín, Avelino
Tarazona Giménez, Vicente
Tárrega Nebot, Francisco
Tejeiro Rosi, Joaquín
Tena Fauro, Antonio
Tena Gil, Enrique
Tomás Aparici, Salvador
Tomás Mateo, Salvador
Tomé Adsuara, Luís
Tormos Perche, Miguel
Torrella Archilés, Jaime
Torres Martínez, Manuel
Tort Marín, Pedro
Tortajada esteban, Juan
Trilles Bernat, Emilio
Trilles Capdevila, Agustín
Trilles Montoro, Manuel
Trilles Valls, Joaquín
Trilles Valls, Miguel
Tubilla Sanz, Pedro
Ubeda Bauza, Joaquín
Usó Cortés, Vicente
Valdayo Rovira, José
Valero Gualberta, José
Valero Montoro, Carmen
Valverde Fabregat, José
Valls Benet, Medín
Valls Benet, Vicente
Valls Climent, Juan Bautista
Valls Darás, Francisco
Vaquer Reigada, Ernesto
Varella Gómez, Salvador
Varella Montañés, Vicente
Vaya Meseguer, Vicente
Vera Ortuño, Manuel
Verchili Meliá, Vicente
Vicent Casimiro, José
Vicent Ventura, José
Vicente Martínez, Alberto
Vicente Mir, Amalia
Vicente Quiles, Alberto

Viciano Mundo, Antonio
Vidal Muñoz, Francisco
Vidal Muñoz, José
Vidal Torres, Ramón
Vila Bosca, Francisco
Vila Montoliu, Antonio
Vilar Climen, Domingo
Vilar Torres, Ramón
Villalba Escrig, Emilia
Villanueva Domingo, Pedro

Villar Catret, Miguel
Villarroig Aparici, Vicente
Villegas Martínez, Juan
Visquet García, Manuel
Vivas Lázaro, Modesto
Vivas Lloret, Fernando
Vives Tena, Humildad
Yañez Tirado, Elías
Zabalza Ripollés, Fernando
Zaplana Ortega, Indalecio

CASTILLO DE VILLAMALEFA



En Castillo de Villamalefa la jurisdicción de Responsabilidades Políticas afectó a un total de 21 personas, un 0,33% del total provincial y un 1,92% de la población local total. Al ser todas ellas menos una varones, el 3,67% de la población masculina local se vio implicada en la Ley. La única representante del sexo femenino suponía el 0,18% de la población femenina local. La gran mayoría eran labradores y jornaleros, aunque también tenemos constancia de obreros e industriales.

La incoación de expedientes fue muy intensa en el año 1939 (14 casos constatados) y parece que fue suficiente para conseguir el grado de represión buscado, porque sólo encontramos nuevas incoaciones en 1940 (1 caso) y en 1941 (un caso). A partir de 1942 no se volvieron a incoar expedientes a vecinos de esta localidad, según los datos disponibles.

En Castillo de Villamalefa el informe que marcaba la tendencia a seguir y el modelo a imitar era el de la Guardia Civil, que se realizaba en el Puesto de Villahermosa. El sargento Salvador Vilar Martí emitía informes en los que tenía una importancia capital la relación de bienes inmuebles del inculpado y su valoración económica. Los informes del alcalde Luis Salas y del Delegado Local de FET y de las JONS Raimundo Gascó se basaban en estas informaciones. Antonio Amigó, cura de la Parroquia de Castillo de Villamalefa emitía informes que incluían una detalladísima relación de fincas e informaciones tributarias sacadas del Libro del Avance Catastral, sin tratar otras cuestiones. En cierta forma, era un informe basado en el de la alcaldía.³⁷

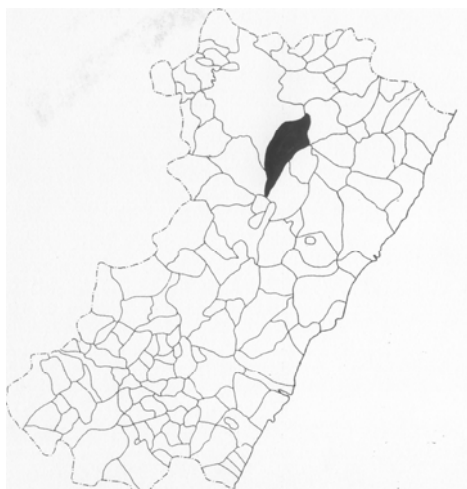
³⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Granell Chiva, Caja 10064. AHPCS.

Relación de vecinos de Castillo de Villamalefa afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Colom Barreda, Fernando
Collado Chiva, José
Collado Prats, Francisco
Gallén Ibáñez, José
Gallén Negre, Ernesto
Gasque Nebot, José
Granell Chiva, José
Ibáñez Bartoll, Daniel
Ibáñez Gallén, José
Ibáñez Gimeno, Celestino
Ibáñez Ibáñez, Benito

Ibáñez Ibáñez, Eloy
Ibáñez Negre, Gabriel
Ibáñez Primo, Celestino
Jarque Nebot, José
Montón Mor, Práxedes
Negre Armado, Alfredo
Negre Gil, Vicente
Negre Herrando, Alfredo
Negre Ibáñez, Pedro
Safont Mor, Vicente

CATÍ



Los 15 habitantes de Catí que estuvieron afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas significaban el 0,24% a nivel provincial y el 0,91% de la población local total. Todos eran hombres, con lo que el 1,72% de la población masculina local estuvo implicada. Sólo conocemos la profesión de uno de los inculpados, que era labrador. Según los datos disponibles, sabemos que 1 de los expedientes se incoó en 1939 y otro en 1940.

Los expedientes de los que disponemos sobre vecinos de esta localidad están incompletos, ofreciendo en la mayoría de los casos únicamente una copia del testimonio de sentencia por un tribunal militar que debería haber abierto el expediente de responsabilidades políticas. Por este motivo no podemos acceder a los informes de las autoridades locales.

Relación de vecinos de Catí afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Roca, Jaime	Moliner Blasco, Pedro
Adell Roca, Vicente	Moliner Gonzalbo, Dámaso
Adell Sales, Francisco	Querol Puig, Primitivo
Adell Vaquer, Antonio	Roca Capsir, Joaquín
Blasco Segura, Bautista	Sales Segarra, Francisco
Boix Troncho, Vicente	Sales Segarra, Pedro Vicente
Ferrando Blasco, Vicente	Segarra García, Rafael
Gozalbo Folch, Dámaso	

CAUDIEL



En Caudiel el número de personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 13, un 0,2% del total provincial y un 1,01% de la población total de la localidad. Al ser las 13 personas varones, el 2,04% de la población masculina local se vio afectada. Según los datos disponibles, se trataba fundamentalmente de labradores y de algún albañil. Los expedientes se incoaron en el período 1940-1943, siguiendo la siguiente cadencia: 1 caso en 1940, 2 casos en 1941, 1 caso en 1942 y 2 casos en 1943. En 1944 ya no se incoaron nuevos expedientes.

La Guardia Civil del Puesto de Caudiel, a través del Comandante Norberto Angulo, realizaba informes en los que se destacaba la evolución política del inculcado, sus principales actos durante la guerra y la relación de bienes a su nombre. Roberto Miralles, Jefe Local de FET y de las JONS ofrecía la misma información, aunque la ampliaba con detalles sobre los cargos que el inculcado había ejercido durante el periodo republicano. En algunos casos los curas de la localidad, de la Parroquia de la Degollación de San Juan Bautista de Caudiel, emitían informes complementarios. Así, mientras Juan Fajardo se limitaba a copiar el informe emitido por FET y de las JONS, Miguel Campos se centraba en el comportamiento del inculcado, su religiosidad y su orientación política. No tenemos constancia de informe de la alcaldía, pero hay que tener en cuenta que en esta población el mismo alcalde fue denunciado por el Jefe Local de FET y de las JONS por haber pertenecido a Izquierda Republicana.

Relación de vecinos de Caudiel afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adelantado Pérez, Salvador
Bagán Pintado, Mariano
Belarte Esteban, Silverio
Carabella Centelles, Federico
d'Ocon Inglada, Víctor
García García Doroteo
Jarque Romero, José
Marco Pérez, Joaquín
Nebot Juan, José
Pérez Boira, Ángel
Sánchez Herrero, Camilo
Urban Romero, Joaquín
Vicente Moliner, Miguel

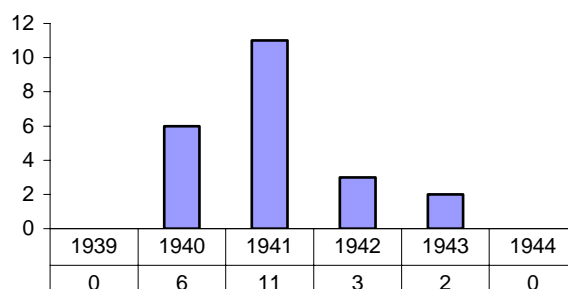
CERVERA DEL MAESTRE



En Cervera del Maestre fueron 46 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,73% a nivel provincial y un 2,43% de la población total de la localidad. Los 42 hombres implicados representaban el 4,64% de la población masculina local, mientras las 4 mujeres implicadas suponían el 0,4% de la población femenina local. La mayoría de estas personas eran labradores, aunque encontramos representantes del sector terciario de la economía como maestros, militares o comerciantes.

La incoación de expedientes en Cervera del Maestre comenzó en 1940, alcanzando su momento álgido al año siguiente. En 1942 y 1943 se continuaron incoando expedientes, aunque ya a un menor ritmo. En 1944 ya no se incoaron más expedientes.

Gráfica 5.18



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

La Guardia Civil encargada de realizar los informes de los inculcados de esta población lo hacía desde el Puesto de Cáliz, centrándose en los datos personales del inculcado, su situación familiar y los datos económicos. Con una redacción independiente, el alcalde Daniel Chillida insistía en los mismos datos, mientras que Domingo Segarra, Delegado Local de FET y de las JONS ofrecía un resumen del anterior. Cornelio Monfort, cura de la Iglesia Parroquial de Cervera del Maestre se inspiraba en los dos últimos informes.³⁸

³⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Adell Pauls, Caja 10131. AHPCS.

Relación de vecinos de Cervera del Maestre afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Pauls, Juan
Antigás Besalduch, Federico
Balaguer Ramos, Vicente
Balaguer Redó, Joaquina
Ballester Alcácer, Agustín
Ballester Sorlí, José
Bergamina Olbiol, Juan
Besalduch Salvador, Sebastián
Cardona Balaguer, Bautista
Castell Roca, Vicente
Cervera Fuster, Joaquín
Ciurana Cardona, Enrique
Ciurana Cardona, José
Ciurana Pastor, Julio
Compte Salvador, Joaquín
Cros Romeu, Marcelo
Ferrerres Cherta, Diego
Fuster Chillida, José
Fuster Chillida, Juan
Fuster de la Fuente, José
Fuster de la Fuente, Sebastián
Fuster Querol, José J.
García Ferrer, Genaro

García Fuster, Dolores
García Vidal, Vicente
Gimeno García, José
Giner Querol, Juan
Martínez Martínez, José
Palau Ferrer, Ismael
Ramos Sorlí, Eladio
Roca Alcaide, Francisco
Salvador Ballester, Juan
Salvador Ballester, Manuel
Salvador Miñana, José
Salvador Miñana, Manuel
Salvador Peña, Vicente
Segarra Martí, José
Segarra Sorli, Carlos
Sorlí Ferreres, Antonio
Sorlí Roig, Emilio
Valor Ballester, Josefa
Vidal Fenollosa, Renato
Vidal Sorlí, José
Viñes Almela, Elvira
Viñes Salvador, Sebastián
Viola Agramunt, Tomás

CINCTORRES



En Cinctorres fueron 31 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,49% del total provincial y un 2,3% de la población total de la localidad. Todos estas personas eran varones, con lo que el 5,14% de la población masculina local se vio afectada. Según los datos disponibles, se trataba de labradores y jornaleros, especialmente abundantes estos últimos, más algunas personas dedicadas al comercio.

Los expedientes de los que conocemos su fecha de incoación nos informan que las incoaciones se produjeron en el periodo 1941-1943, con un máximo destacado en 1942. A partir de 1944 ya no se produce ninguna incoación de expediente.

El informe de la autoridad local más completo y preparado es el de la Guardia Civil, especialmente centrado en la relación de bienes pertenecientes al inculcado y con su valoración económica correspondiente. Este informe parece ser el modelo en el que se basa el de Daniel Pérez, Delegado Local de FET y de las JONS. El alcalde Santiago Segurola informaba en el suyo de la situación del inculcado en ese momento y de la situación económica de su esposa. El cura Antonio Monfort no añadía nada nuevo, aunque daba importancia sobre todo a la situación familiar y al aspecto económico³⁹. Hemos de recordar que la Guardia Civil de Cinctorres también era la encargada de realizar los informes de los vecinos de Portell de Morella.

³⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Valentín Carceller Pitarch, Caja 10103. AHPCS.

Relación de vecinos de Cinctorres afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albalat Gasulla, Cristóbal
Bordás Albalat, José
Bordas Cardona, Francisco
Borrás Albalat, Juan Bautista
Borrás García, Francisco
Borrás Querol, Manuel
Carceller Pitarch, Valentín
Escuder Adell, Santiago
Ferrer Guardiola, Tomás
Girona Montaña, Domingo
Guardiola Monserrat, Ramón
Guardiola Monserrat, Regino
Marín Borrás, Francisco
Marín Borrás, José
Marmaneu Mestre, Juan
Martí Artola, Guillermo

Martí Querol, Manuel
Meseguer Ferrer, José
Mestre Sánchez, Rafael
Miguel Artola, José
Molés Ferrando, Manuel
Molinos Bono, Miguel
Perona Montaña, Domingo
Polo Ejarque, Francisco
Querol Bayarri, José
Querol Bayarri, Manuel
Querol Peris, Eduardo
Querol Ulldemolins, Joaquín
Salvador Ripollés, Manuel
Santapau Chivela, Ismael
Santapau Milian, Valentín

CIRAT



En Cirat 9 hombres se vieron implicados en la exigencia de responsabilidades políticas, lo que suponía el 0,14% del total provincial y el 0,7% de la población total local. Todos ellos eran hombres, por lo que el 1,33% de la población masculina local se vio afectado directamente. Las fuentes disponibles no nos especifican sus profesiones y sólo conocemos la de uno de los inculpadados, que era labrador. Conocemos la fecha de incoación de 6 de los expedientes, todos ellos abiertos el año 1940. Los motivos de incoación fueron tanto testimonios de sentencia por parte de un tribunal militar como la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola de 1940.

La autoridad que marcaba la pauta a seguir en Cirat era la alcaldía. El alcalde Vicente Badal realizaba informes bastante completos en los que se especificaban datos personales y familiares, antecedentes políticos y la relación de bienes del inculpadado. Con una redacción completamente distinta, el Delegado Local de FET y de las JONS calificaba moralmente al inculpadado y remarcaba lo dicho por la alcaldía. La Guardia Civil realizaba su informe desde Argelita, firmados por el Comandante Ramón Mateos, centrándose en sus antecedentes políticos y los presuntos actos delictivos realizados durante la guerra. Vicente Juan, cura de Cirat especificaba los antecedentes delictivos en tiempos de guerra y evaluaba moralmente al inculpadado.⁴⁰

Relación de vecinos de Cirat afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Escrig Santolaria, José
Gaselva Brun, Manuel
Montoliu Guadalupe, Vicente
Peña Santolaria, Vicente
Santolaria Escrig, Vicente
Santolaria Torres, Jesús
Suay Brun, Joaquín
Tamborero Soler, Juan
Ventura Ibáñez, Joaquín

⁴⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Tamborero Soler, Caja 10081. AHPCS.

CORTES DE ARENOSO



Las 11 personas de Cortes de Arenoso implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas eran todas hombres. Con un 0,17% del total provincial y un 0,8% de la población local total, representaban el 1,57% de la población masculina local. No disponemos de información sobre la ocupación económica de estas personas, aunque sí sabemos que 4 de los expedientes fueron incoados en 1941.

El informe de referencia en esta población era el de la Guardia Civil, centrado especialmente en datos familiares y económicos. Este informe servía de modelo para el de la FET y de las JONS local y, posteriormente, para el de la alcaldía, que en un breve informe obviaba los aspectos económicos. Éstos formaban, sin embargo, parte importante del informe de Avelino Martínez, cura de Cortes de Arenoso, que añadía también datos sobre la familia del inculcado⁴¹. Hay que recordar que la Guardia Civil de Cortes de Arenoso era la encargada de realizar los informes de los inculcados de Campos de Arenoso y de Puebla de Arenoso.

Relación de vecinos de Cortes de Arenoso afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Allepuz Bartoll, Eliseo
Bagán Bagán, Daniel
Bagán Bagán, Pelegrín
Catalán Iserte, Vicente
Escrig Carot, Ramón
Gresa Bagán, Gaspar
Gresa Bagán, Juan José
Montolio Gresa, Ramón
Mor Peña, Julio
Nebot Tomás, Joaquín
Tomás Herrando, Joaquín

⁴¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Catalán Iserte, Caja 10128. AHPCS.

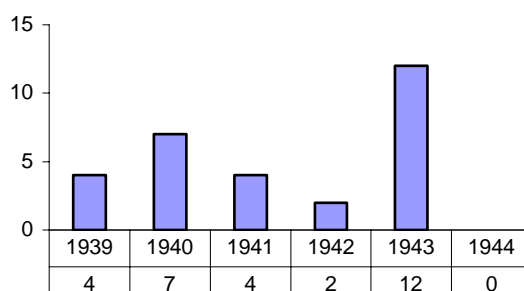
COSTUR



En Costur 36 personas estuvieron relacionadas con la exigencia de responsabilidades políticas, un 0,59% del total provincial y un 4,55% del total de la población local. Los 34 varones implicados suponían el 9,01% de la población masculina de la localidad, mientras las 2 mujeres implicadas constituían el 0,48% de la población femenina local. Según los datos disponibles la gran mayoría de los inculpados eran labradores.

La incoación de expedientes se realizó sin interrupciones desde 1939. La peculiaridad de Costur en este sentido es que, tras un aumento de la incoación de expedientes en 1940, tal y como hemos visto en otras poblaciones, y el consiguiente paulatino descenso, se produce un máximo destacado en 1943, para finalizar sin la apertura de ningún expediente en 1944.

Gráfica 5.19



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En cuanto a las autoridades⁴², en este caso también el informe de la Guardia Civil era el que marcaba la pauta al resto de informes de las autoridades locales. Se realizaba desde el Puesto de Useras y, redactado por el Comandante Salvador Forner, consistía en una detalladísima relación de bienes del inculcado y su valoración económica. Joaquín Herrero, Jefe Local de FET y de las JONS, realizaba un informe similar al anterior, al igual que posteriormente el alcalde Hipólito Herrero. No tenemos constancia de la existencia de informe del cura de la localidad.

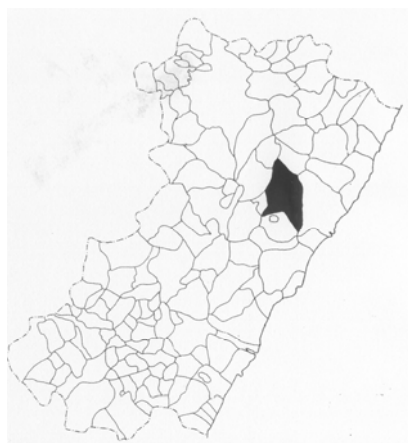
⁴² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Pallarés Gual, Caja 10065. AHPCS.

Relación de vecinos de Costur afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Centelles García, José
Centelles García, Plácido
Centelles Ruiz, Ramón
Chiva Pallarés, Manuel
Folch Escrig, José
Francés Soriano, José
García García, Juan
García Gonzalbo, Felipe
García Ribes, José
García Ruíz, Ramón
Gimeno Nebot, Francisco
Gozalbo García, Dolores
Gozalbo García, Juan
Gozalbo Miravet, Julio
Gozalbo Pallarés, Federico
Gozalbo Ribes, Felipe
Gozalbo Sanahuja, José
Gozalbo Segura, José

Gual Portola, Miguel
Gual Puértolas, Miguel
Herrero Seguer, José
Miralles Cortés, Miguel
Miravet García, Manuel
Miravet Saller, José
Miravet Saller, Manuel
Molina Cutilla, Narciso
Nebot García, Alfredo
Nebot Juan, José
Nebot Monserrat, José
Nebot Montserrat, Manuel
Pallarés Gual, Manuel
Pallarés Pallarés, Trinidad
Ribes Escrig, José
Vilar Gual, Daniel
Vilar Sabater, Manuel
Villalba Carralero, Adolfo

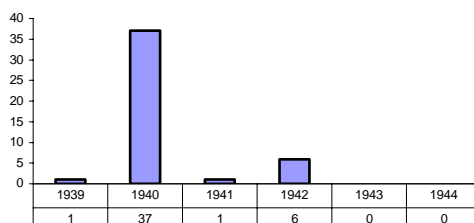
CUEVAS DE VINROMÁ



En Cuevas de Vinromá la persecución por responsabilidades políticas afectó a 82 personas, un 1,31% del total provincial y un 2,49% de la población total de la localidad. De estas personas 78 eran varones, con lo que el 4,81% de la población masculina se vio afectada, mientras que las 4 mujeres implicadas suponían el 0,24% de la población femenina local. Según nuestros datos se trataba de labradores y jornaleros, con algún industrial.

La incoación de expedientes se produjo desde 1939 y hasta 1942, con un máximo muy destacado en el año 1940 y un segundo repunte en el año 1942. A partir de 1943 ya no se producen más incoaciones de expedientes.

Gráfica 5.20



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En cuanto a las autoridades⁴³, la alcaldía era la autoridad que en Cuevas de Vinromá marcaba la tendencia al resto de autoridades locales. El alcalde Tomás Fabregat combinaba en sus informes acusaciones sobre hechos presuntamente delictivos con la valoración de bienes. Con una redacción diferente, muy telegráfica y escueta, pero en la misma línea se situaban los informes de Laureano Alsina, Jefe Local de FET y de las JONS. El Comandante del Puesto de la Guardia Civil Francisco Ortí no añadía ninguna novedad a sus informes, realizados posteriormente a los primeros. Clemente Juan Adell, cura de la Iglesia Parroquial de Cuevas de Vinromá se basaba directamente en el informe de la alcaldía. La Guardia Civil de Cuevas de Vinromá también realizaba los informes de los vecinos de Torre Endoménech.

⁴³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Zaragoza Selma, Cja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Cuevas de Vinromá afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abad Peraire, José
Agut Adell, Miguel
Albalat Adell, José M^a
Albella Albella, Jaime
Albert Ferrer, Vicente
Albert Serret, Joaquín
Albert Serret, Vicente
Albert Zaragoza, Francisco
Beltrán Barreda, Ángel
Beltrán Moliner, Joaquín
Beltrán Salvador, Vicente
Beltrán Segarra, Manuel
Boira Albert, Pascual
Bueso Puig, Manuel
Cabedo Julián, José
Cabedo Vidal, José
Capsir Eixarch, Vicente
Carbó Forés, Manuel
Carceller Garcés, Vicenta
Cifre Capafons, José
Compte Castellet, Vicente
Cucala Jover, Agustín
Cucala Nos, Bautista
Denia Expósito, Salvador
Escoí Agut, Miguel
Escoí Barreda, José
Espelt Cubels, Miguel
Espinosa Ripollés, Jaime
Fabregat Nos, Vicente
Fabregat Selma, Jaime
Fernando Ciurana, Pascual
Foix Barreda, José
Folch Jover, Vicente
Forés Bort, Fernando
Forés Bort, José
Forés Bort, Pascual
Forés Bort, Vicente
Forés Castellet, Fernando
Gallén Ripollés, Enrique
Garcés Carceller, Evaristo

Gasulla Puig, José
Girona Alsina, Manuel
Granell Sales, Pascual
Jover Gascó, Vicente
Julve Serret, Vicente
Llopis Beltrán, Vicente
Llopis Forés, José
Llopis Granell, Joaquín
Martí Girona, Eulogio
Mateu Roca, Miguel
Miralles Cucala, Nicolás
Moliner Sancho, Vicente
Monfort Escuder, Miguel
Monfort Escuder, Vicente
Muñoz Albella, Vicente
Muñoz Marzá, Gertrudis
Muñoz Pastor, José
Muñoz Vaquer, Maximiano
Nos Sales, Antonio
Nos Segarra, Antonio
Olsins Pastor, Francisco
Palos Palau, Ramón
Pitarch Ferrer, Vicente
Prades Giner, José
Roselló Moreno, Jesús
Sales Tena, Vicente
Salvador Beltrán, José
Segarra Centelles, Joaquín
Serrano Maneus, Cristóbal
Vallés Monfort, Vicente
Vaquer Martínez, Jaime
Vaquer Ripollés, Olvido
Vaquer Sales, Ramón
Vaquer Villalonga, Antonio
Vaquer Villalonga, Pascual
Vilaplana Albella, Vicente
Villalonga Giner, Jaime
Villalonga Zaragoza, Antonia
Vives Beltrán, Francisco
Zaragoza Colón, Luís
Zaragoza Selma, Jaime
Zaragoza Zaragoza, Miguel

CULLA



En Culla hubo 39 personas implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas, un 0,62% del total provincial y el 1,51% de la población de la localidad. 36 de estas personas eran varones, con lo que en esta población el 2,85% de la población masculina se vio afectada. Las 3 mujeres implicadas representaban el 0,22% de la población femenina local. Sabemos poco de la profesión de estas personas, únicamente que 4 de ellos eran labradores, 1 jornalero y 1 industrial. Los expedientes se incoaron en su gran mayoría en el año 1940 (17 casos documentados), como consecuencia de la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola, aunque conocemos la incoación de 1 en 1941.

En Culla hubo dos autoridades locales que influían claramente en las demás: la alcaldía y la Guardia Civil. El alcalde Robustiano Miralles firmaba unos informes acusatorios escritos en tono muy duro en los que se incluían datos personales, la situación familiar, la evolución política desde 1934 y los presuntos delitos cometidos durante ese tiempo. Además, no se ahorraban calificativos despectivos para algunos acusados como, por ejemplo, “indeseable para la sociedad”. Por supuesto, no se olvidaba la relación detallada de bienes con su valoración económica. Tanto el Delegado Local de FET y de las JONS, Juan Bellés, como el cura de la Parroquia del Salvador de Culla, Aurelio Fernández, firmaban copias calcadas de este informe original de la alcaldía. La Guardia Civil encargada de realizar los informes sobre los vecinos de Culla era la del Puesto de Benasal. El Comandante José Roig Beltrán realizaba informes similares con redacción independiente respecto a la alcaldía, aunque curiosamente la parte de la relación detallada de bienes con su valoración económica estaba directamente calcada de esa fuente original.

Relación de vecinos de Culla afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albert Traver, Álvaro
Albert Vidal, Constanca
Badal Fabregat, Joaquín
Barreda Moliner, Prudencio
Barrera Ortí, Rodrigo
Batalla Bellés, Secundino
Bellés Barreda, Benjamín
Bellés Rull, Patricio
Bellés Solsona, Miguel
Boix Agut, Juan Bautista
Castell Barreda, José
Celades Agut, José
Celades Vidal, Vicente
Erasmus Bellés, Manuel
Fandos Cruz, Antonio
García Moliner, Francisco
Gil Pitarch, Agustina
Irene Vidal, Letancio
Moliner Bellés, Luís
Orenga Vidal, Cristóbal

Pitarch Albert, León
Pitarch Bellés, Bautista
Pitarch Moliner, Felipe
Pons Vives, Fidel
Porcar Sánchez, Perfecto
Roig Gil, José
Sales Sales, José
Sales Vidal, Fabián
Sánchez Márquez, Florencio
Segarra Albert, Agustín
Segarra Orenga, Daniel
Traver Barreda, Manuel
Traver Bellés, Ramón
Traver Pitarch, Ambrosio
Vidal Beltrán, Aniceto
Vidal Orenga, Felipa
Vidal Pitarch, Francisco
Vidal Pitarch, José
Villar Pitarch, Clemente

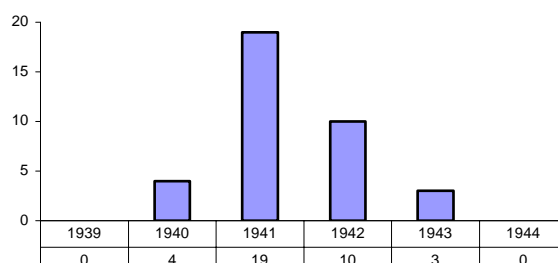
CHERT



Las 41 personas vecinas de Chert implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas eran todas varones, lo que suponía el 1,8% de la población total de la localidad y el 3,71% de su población masculina. En relación con el total provincial esta cifra representa el 0,65% de implicados. Profesionalmente los afectados representaban a los tres sectores de la economía, aunque con una clara mayoría de los labradores, propietarios de tierra y jornaleros.

La incoación de expediente a vecinos de Chert comenzó en 1940, teniendo sus máximos en 1941 y 1942. En 1943 todavía tenemos documentados tres casos y ya en 1944 no se produjo ninguna incoación de expediente.

Gráfica 5.21



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

La alcaldía de Chert tomó parte activa en el proceso de denuncia de ciudadanos. Realizaba informes dirigidos a las instancias superiores de responsabilidades políticas en los que se recogía los cargos que el inculcado había ostentado durante la República, una valoración de su conducta y la relación de bienes con su valoración económica. En términos similares se expresaba el Comandante de la Guardia Civil Enrique Boix Roig, añadiendo la situación familiar. Manuel Ferreres, Delegado Local de FET y de las JONS, realizaba un seguimiento de su ideología política y detallaba la actividad económica de los miembros de la familia del afectado. Miguel Segarra, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Chert no añadía nada nuevo respecto a los anteriores, salvo que detallaba con claridad los bienes y la ideología del inculcado.⁴⁴

⁴⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Caballer Querol, Caja 10104. AHPCS.

Relación de vecinos de Chert afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bel Ferras, Juan José	Ferreres Meseguer, Juan
Beltrán Adell, Joaquín	Ferreres Sanz, Francisco
Beltrán Beltrán, Antonio	Folch Roca, Francisco
Beltrán Beltrán, Emilio	Gil Beltrán, Vicente
Beltrán Beltrán, José Vicente	Gregori Porcar, Eduardo
Beltrán Beltrán, Miguel	Guardiola Romeu, Vicente
Beltrán Celma, Miguel	Jovaní Monfort, José
Beltrán Jovaní, Manuel	Jovaní Ortí, Manuel
Beltrán Meseguer, Vicente	Marzá Sanz, Joaquín
Beltrán Pla, José	Meseguer Jovaní, Juan
Beltrán Rambla, Gaspar	Ortega Díaz, Conrado
Caballer Querol, José	Pérez Montero, Emili
Calduch Carbó, Tomás	Ripollés Marín, Joaquín
Calduch Zaragoza, Juan José	Sales Molero, Manuel
Carceller Guardiola, José Vicente	Sales Puig, Miguel
Doménech Royo, José	Sanz Beltrán, José
Ferreres Beltrán, José	Sanz Ferreres, Manuel
Ferreres Beltrán, Vicente	Sanz Guardiola, Vicente
Ferreres Cherta, Carlos	Vilanova Beltrán, Manuel
Ferreres Cherta, Juan	Vives Beltrán, Joaquín
Ferreres Ferreres, José Vicente	

CHILCHES



En Chilches fueron 27 los vecinos implicados en la exigencia de responsabilidades políticas, un 0,43% del total provincial y un 3,47 del total de la población de la localidad. 20 de estas personas eran hombres, con lo que el 3,49% de la población masculina se vio implicada, mientras que las 7 mujeres afectadas representaban el 1,15% de la población femenina local. Poca información nos dan las fuentes de las profesiones de estas personas, ya que lo único que conocemos es que 2 de las mujeres se dedicaban a las faenas del hogar, 1 era labrador y 1 era recogedor de naranjas. Los expedientes se incoaron en los años 1939, año en el que sólo tenemos documentada 1 incoación, y 1940, en el que conocemos la incoación de 6 expedientes.

La alcaldía de Chilches, en manos de Joaquín Sanz, ofrecía en sus informes información sobre el pasado político de los inculcados y sobre presuntos delitos cometidos durante la República, a la vez que añadía los obligados datos económicos del inculcado. Bautista Casabó, Delegado Local de FET y de las JONS realizaba un informe original en el que se detallaban aún más los detalles políticos, aunque los económicos eran un calco de los ofrecidos por la alcaldía. A la Guardia Civil le correspondía el papel de indagar en el pasado político y en denunciar a los ciudadanos. Los informes se realizaban desde el Puesto de Almenara. No tenemos constancia de informes de la autoridad religiosa de la localidad.⁴⁵

⁴⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Torres Lapuerta, Caja 10075. AHPCS.

Relación de vecinos de Almenara afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agut González, Amparo
Agut González, Gloria
Agut González, Pascual
Casals Casabó, Teresa
Cebrián Verde, Andrés
Doñate Segarra, Manuel
Franch Gomis, Vicente
Franch Nebot, José
Franch Torres, Isabel
Gamón Mora, Joaquín
Gargallo Varea, Manuel
Garrido Salado, Enrique
Girona Torregrosa, Antonio
Gozalbo Casabó, Vicente

Gozalbo Guillén, Ricardo
Melchor Lapuerta, Ricardo
Miguel Alagarda, Joaquín
Mora Gomis, Enrique
Pallarés Serra, Manuel
Pallarés Serra, Miguel
Sanz Bernat, Balbina
Sanz Segarra, Alfonso
Sanz Segarra, Ramona
Segarra Mora, Vicente
Serra González, Rosa
Terol Benedito, Juan
Torres Lapuerta, Vicente

CHIVA DE MORELLA



En Chiva de Morella fueron 8 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,12% del total provincial y un 1,94% de la población total de la localidad. Al ser todos hombres se vieron afectados el 4,6% de la población local masculina. No tenemos información sobre sus dedicaciones profesionales y únicamente conocemos que 6 de los expedientes fueron incoados en 1940 a consecuencia de la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola.

El informe de referencia para estos casos era el de la Guardia Civil, realizado desde el Puesto de Morella. El Comandante Francisco Sánchez se centraba en sus informes en los antecedentes políticos y en la relación de bienes con su valoración detallada. Tanto Benjamín Viñals, alcalde, como Agustín Rallo, Jefe Local Accidental de la población, realizaban el mismo tipo de informe pero mucho menos detallado. El cura encargado de realizar el informe era el de la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor de Morella, quien en sus informes trataba de desmarcarse del proceso alegando el desconocimiento de unos vecinos de una localidad a la que acudía “sólo cuando reclaman mi presencia”.⁴⁶

⁴⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Adell Pascual, Caja 10082. AHPCS.

Relación de vecinos de Chiva de Morella afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Adell, Joaquín

Adell Pascual, Vicente

Albalat Ferrer, Francisco

Boldo Grau, Miguel

Casanova Querol, Avelino

Guimerá Grau, José

Ibáñez Adell, Jacinto

Pallarés Viñals, Joaquín

CHODOS



En Chodos se vieron implicados en la exigencia de responsabilidades políticas 6 vecinos, lo que representa el 0,09% del total provincial y el 0,71% de la población total de la localidad. 5 de ellos eran hombres, con lo que el 1,25% de la población masculina se vio afectada. La única mujer afectada representaba el 0,22% de la población femenina local. En los dos casos que hemos conocido la profesión de los implicados esta era la de labrador. Conocemos también la incoación de 1 expediente en 1939 y de otro en 1940.

En Chodos los informes de la alcaldía y del Delegado Local de FET y de las JONS eran iguales y estaban realizados con el mismo puño y letra. Se trataba de informes muy breves que trataban de los bienes del inculcado. No aportaba más información el texto de la Guardia Civil, realizado en el Puesto de Vistabella, escrito por el cabo Ernesto Ramón Pla. La misma tónica se repetía en el informe del cura local Antonio Ayza, quien en el encabezamiento de su informe, y de su puño y letra, lucía la expresión “¡Saludo a Franco! ¡Arriba España!”.⁴⁷

Relación de vecinos de Chodos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Aparicio Gonell, David
Colomer Solsona, Feliciano
Escrig Aparici, Joaquín
Escrig Aparici, José
Escrig Aparici, Rosa
Tena Ibáñez, Eduardo

⁴⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra David Aparicio Gonell, Caja 10065. AHPCS.

CHÓVAR



Las 5 personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas en Chóvar representaban el 0,08% del total provincial, así como el 0,86% de la población total de la localidad. Todos ellos eran hombres, con lo que el 1,68% de la población masculina local se vio afectada. Tenemos documentada la existencia de dos labradores y un comerciante entre estos vecinos, cuyos expedientes se incoaron 1 en 1941 y los dos restantes en 1942.

La alcaldía de Chóvar, bajo el mando de Alberto Ganau, emitía informes en los que exclusivamente se ofrecían datos económicos de los inculpados. Rafael Mondragón, Delegado Local de FET y de las JONS, copiaba y firmaba estos informes. La Guardia Civil, desde el Puesto de Sot de Ferrer, tenía una redacción independiente. El Comandante Ramón Casaña añadía a las informaciones económicas las correspondientes a la situación familiar del implicado. El cura de la Iglesia Parroquial de San Mateo de Azuébar era el encargado de los informes de los vecinos de Chóvar, ofreciendo únicamente información económica, eso sí, bastante detallada: sueldos, fincas, valoración económica, etc.⁴⁸

Relación de vecinos de Chóvar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Beltrán Ten, Antonio
Beltrán Ten, Marcelino
Mondragón Beltrán, Miguel
Palacio Mondragón, Carlos
Renau Navarro, Arsenio

⁴⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carlos Palacio Mondragón, Caja 10065. AHPCS.

ESLIDA



Las 17 personas implicadas en Eslida en la exigencia de responsabilidades políticas significaban el 0,27% del total provincial y el 1,51% de la población total de la localidad. Todos los implicados eran varones, con lo que el 3,2% de la población masculina local se vio afectada por la Ley. Únicamente conocemos la profesión de dos de ellos, 1 labrador y 1 corchero. Según nuestras informaciones, 4 de los expedientes se incoaron en 1939, 1 en 1941 y 1, el último, en 1942.

El informe de referencia para los vecinos de Eslida lo realizaba el alcalde Pascual Sorribes, quien se centraba casi exclusivamente en la relación de bienes del inculpaado y su valoración económica. Tanto el Jefe Local de FET y de las JONS, Álvaro Manzana, como la Guardia Civil del Puesto de Artana, decían lo mismo con ligeras variaciones de redacción. El cura Esteba Saborit firmaba informes que consistían en un resumen del valor de los bienes del inculpaado.⁴⁹

⁴⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Manzana Mondragón, Caja 10070. AHPCS.

Relación de vecinos de Eslida afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Álvaro Rochera, Plácido
Centelles Bou, José
Doñate Herrandis, Roque
Doñate Mondragón, Rafael
Gómez Doñate, Antonio
Gómez Sorribes, José
Latorre Martínez, Miguel
Manzana Mondragón, Pedro
Martín Galindo, Samuel

Miravet Ballester, Vicente
Miravet Doñate, León
Miravet Gómez, José
Mondragón Ballester, Rafael
Pitarch Martínez, Emilio
Sanchis Miravet, Vicente
Segarra Galindo, José
Segarra Galindo, Rafael

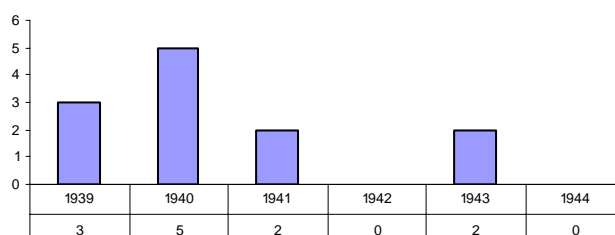
ESPADILLA



En Espadilla hubo 15 personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que supone el 0,24% del total provincial y el 5,51% de la población total de la localidad. Al ser todas estas personas varones el 11,53% de la población masculina local se vio implicada en la exigencia de responsabilidades políticas. La mayoría eran labradores y jornaleros, aunque conocemos la existencia de 1 albañil, 1 armero y 1 maestro.

Según nuestros datos los expedientes se incoaron desde 1939, con un máximo en 1940 y dos años, 1941 y 1943, en los que continuó la incoación de expedientes. En 1942 y 1944 no se abrió ningún expediente a vecinos de Espadilla.

Gráfica 5.22



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

El alcalde de Espadilla, Benjamín Guillamón, se centraba en sus informes en la situación familiar del inculcado y en sus bienes, con la correspondiente valoración económica de los mismos. El cura Miguel Serrano, de la Parroquia de San Juan de Espadilla, firmaba un informe escrito por el mismo puño y letra que el anterior, en el que el aspecto más importante era el económico. El Delegado Local de FET y de las JONS firmaba un informe igual al de la alcaldía, ya que era el mismo Benjamín Guillamón.⁵⁰

⁵⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Sanz Nebot, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Espadilla afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alejandro Guillamón, José
Alejandro Ibáñez, Joaquín
Almor Marín, Estanislao
Barceló Guillamón, Francisco
Bayo Benlloch, Vicente
Cotolí Pérez, Benjamín
Monferrer Guillamón, Pascual
Monferrer Gustín, José

Olaria Martínez, Joaquín
Pérez Benlloch, Francisco
Pérez Benlloch, Vicente
Pérez Villaplana, José
Pradas Campos, José
Pradas Lecha, Joaquín
Salla Guillamón, Hilario

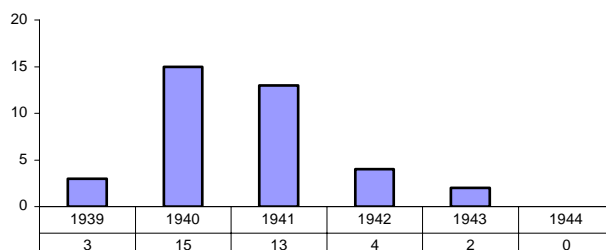
FANZARA



En Fanzara fueron 52 las personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, un 0,83% del total provincial y un 9,75% de la población total de la localidad. Los 48 varones implicados representaban el 20,16% de la población local masculina, mientras los cuatro casos de mujeres eran el 1,35% de la población femenina local. La mayoría eran labradores, aunque conocemos también la implicación de 2 molineros, 2 herreros, 1 barbero y 1 comerciante.

La incoación de expedientes comenzó en 1939, aunque los años de mayor número de apertura de expedientes fueron 1940 y 1941. Sin embargo, la exigencia de responsabilidades parece que no se agotó, porque se continuaron incoando expedientes de responsabilidades políticas en 1942 y 1943. En 1944 las responsabilidades políticas parece que ya estaban liquidadas.

Gráfica 5.23



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Joaquín Prades, alcalde de Fanzara tuvo una decidida actuación en la persecución de la población local con el fin de liquidar responsabilidades políticas⁵¹. Sus informes-denuncia permitían la incoación de expedientes a personas que en los años anteriores se habían significado por delitos políticos y otras faltas consideradas graves. Sus informes posteriores ofrecían información sobre la evolución política del encausado, la situación familiar y el nivel económico de la familia. Este informe era la base del de la Guardia Civil de Fanzara, aunque éste especificaba el valor económico de sus bienes. La

⁵¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisca Barceló Pejo, Caja 10104. AHPCS.

Delegación Local de FET y de las JONS ponía el acento en la orientación política del encausado. El cura Vicente García, de la Parroquia de Fanzara, resumía la evolución política del encausado y enumeraba sus presuntos hechos delictivos. La Guardia Civil del Puesto de Fanzara realizaba también los informes sobre los vecinos de Fuentes de Ayódar.

Relación de vecinos de Fanzara afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Arnau Bernad, Joaquín	Monferrer Gual, Antonio
Barceló Pejo, Francisca	Montolio Andrés, José
Bartoll García, Salvador	Montoliu Villalba, Matías
Batalla Gimeno, Vicente	Muñoz Santillana, José
Bernat Chiva, Agustín	Natividad Gascó, Cristóbal
Castillo Andrés, Francisco	Natividad Gascó, Pablo
Chiva Abad, Ernesto	Nebot Pejó, Vicente
Chiva Abad, Fernando	Ortell Bonet, Carmen
Chiva Nebot, José	Pau Olaria, Manuel
Edo Benedito, Miguel	Paus Nebot, Pablo
Edo Gómez, José	Pérez Aranau, Joaquín
Edo Villalba, Joaquín	Pérez Arnau, Faustino
Escrig Alentado, José	Pérez Arnau, Fernando
Forés Branchadell, José Vicente	Pérez Arnau, José
Furió Agustina, Antonio	Pérez Blanco, Antonio
Furió Andrés, Bernarda	Piquer Ronda, Joaquín
Gascó Salisa, José	Porcar Porcar, David
Gasch Andrés, José	Porcar Porcar, José María
Gregori Bartoll, Ramón	Porcar Riber, Francisco
Guarque Cañada, José	Porcar Vilar, David
Guarque Castillo, Cristóbal	Ribes Bernat, Alberto
Guarque Castillo, Julián	Ros Ortiz, Delfín
Guarque Edo, Cristóbal	Salisa Villalba, José
Guinot Alcón, José	Serrano Castillo, Vicente
Gustens Monfort, Francisco	Ventura Villalba, Francisco
Miravet Cañada, Amparo	Vivas Pejó, Evaristo

FIGUEROLES



Los 10 vecinos de Figueroles implicados en la exigencia de responsabilidades políticas suponían el 0,16% del total provincial y el 1,68% de la población total de la localidad. Todos eran hombres, con lo que el 3,8% de la población masculina local se vio afectada por la Ley. En su gran mayoría eran labradores, aunque conocemos la existencia de 1 pastor. De los 10 expedientes, 8 se incoaron en 1939 y 2 en 1943. Por tanto, en el periodo 1941-1942 y en 1944 no se procesó a ningún vecino.

Benjamín Cano, alcalde de Figueroles, realizaba en sus informes una relación muy detallada de los bienes del inculpado. A estos datos Fructuoso Cano, Delegado Local de FET y de las JONS añadía algunos datos familiares. Los informes de la Guardia Civil, realizado desde el Puesto de Lucena, se ceñían únicamente a un resumen de los bienes del inculpado y su valoración económica. El cura local, Vicente Cubertorer, ofrecía una redacción distinta e independiente, centrándose en aspectos familiares y en los económicos.⁵²

Relación de vecinos de Figueroles afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bernat Chiva, Agustín
Chiva Nebot, José
Chiva Abad, Ernesto
Chiva Abad, Fernando
Escrig Adelantado, José
Gregori Bartoll, Ramón
Porcar Porcar, José M^a
Porcar Porcar, David
Ribes Bernat, Alberto
Ros Ortiz, Delfín

⁵² Expediente de Responsabilidades Políticas contra RamonGregori Bartoll, Caja 10071. AHPCS.

FORCALL



En Forcall 44 personas sufrieron el peso de la jurisdicción de Responsabilidades Políticas, un 0,7% del total provincial y un 2,99% de la población total de la localidad. De estas personas, 41 eran hombres, con lo que el 6,14% de la población masculina local estuvo implicada en la exigencia de responsabilidades políticas, mientras las 3 mujeres afectadas suponían el 0,37% de la población femenina local. No disponemos de datos sobre sus profesiones, aunque conocemos la fecha de incoación de 19 de los expedientes, todos ellos en 1940, a consecuencia de la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola.

El informe de la alcaldía, firmado por el alcalde Antonio Peñarroya, era muy extenso, realizado a máquina, ofreciendo información de la evolución política del inculcado, sus presuntos delitos cometidos en los años anteriores y una relación detallada de bienes. El Delegado Local de FET y de las JONS se limitaba a copiar este informe y firmarlo. La Guardia Civil se centraba en los mismos puntos, aunque sin ofrecer tantos detalles como la alcaldía. Una redacción propia tenía el informe de Ezequiel Saura, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Forcall, mucho más resumido pero más contundente en sus calificativos. Estas dos últimas autoridades locales se basaban en la información que les proporcionaban vecinos de Forcall “de total solvencia moral y patriotismo”⁵³. La Guardia Civil de Forcall también era la encargada de realizar los informes de los vecinos de la Mata de Morella, Olocau del Rey y Villorres.

⁵³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Eixarch Frasnó, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Forcall afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bellés Bono, Fermín
Boix Eixarch, Francisco
Bordas Peñarroya, Jaime
Bordas Peñarroya, Víctor
Borrás Balaguer, Juan Isidro
Borrás Palos, Joaquín
Borrás Querol, Blas
Borrás Rambla, Domingo
Carbó Peñarrocha, Agustina
Carbó Roca, Joaquina
Carceller Andrés, José
Cardona Juan, Francisco
Casanova Querol, Valentín
Eixarch Frasnó, Antonio
Ejarque Dabón, Antonio
Ferrando Muñoz, Braulio
García Artola, Manuel
García Borrás, Francisco
García Márquez, Francisco
Gascón Peñarroya, Domingo
Gascón Urquizu, Manuel
Gil Camañes, José

Guarch Ripollés, Antonio
Guarch Ripollés, Juan
Guarch Ripollés, Ramón
Llop Giner, Domingo
Llop Giner, Vicente
Mampel Fuster, Juan
Martín Querol, Julio
Mestre Querol, Francisco
Milián Omedes, Ramón
Monfort Gil, José
Monfort Gil, Manuel
Monfort Guardiola, Ramón
Ortí Balaguer, José
Ortí Balaguer, Manuel
Peñarroya Bordas, Jaime
Sabater Viñals, Juan
Sancho Sorribes, José
Segura Querol, José
Sorribes Julián, José
Vela Cucala, Dolores
Viñals Aguilar, Juan
Viñals Gil, Francisco

FREDES



En Fredes fueron 4 los vecinos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas, todos ellos varones. Esto significaba el 0,06% del total provincial, el 3,53% de la población total de la localidad y el 8% de la población masculina local. Hasta hoy en día, no disponemos de los expedientes de ninguna de estas personas, con lo que o bien se han perdido o todavía no se han incorporado a los fondos del Archivo Histórico Provincial de Castellón o se encuentran en un estado de tal deterioro que impide su consulta o bien, simplemente, no pasaron de ser meros testimonios de condena que nunca llegaron a generar la incoación de un expediente de responsabilidades políticas.

Relación de vecinos de Fredes afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Prades Abellá, José

Soler Segura, Joaquín

Millán Prades, Juan

Ferrer Vives, Juan

FUENTE LA REINA



En Fuente la Reina 6 vecinos, todos ellos varones, se vieron implicados en la exigencia de responsabilidades políticas. Representaban el 0,09% del total provincial, el 2,07% de la población total de la localidad, así como el 4,22% de la población masculina local. Desconocemos la profesión de los implicados, pero como la mayoría vieron incoado su expediente por la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola no sería descabellado pensar que se tratara de labradores. Los 4 expedientes de los que conocemos su fecha de incoación nos indican que se llevaron a cabo en 1940.

La alcaldía de Fuente la Reina, en manos de Ramón Ventura, y la Delegación Local de FET y de las JONS, a cargo de Antonio Moliner, realizaban informes iguales en los que se trataban los antecedentes políticos del inculcado junto con una relación detallada de bienes. La Guardia Civil encargada de la realización de informes sobre vecinos de esta localidad era la del Puesto de Barracas, centrándose, tras haber consultado a varios vecinos, en los antecedentes políticos, en la moral personal y en los cargos que ejerció el inculcado durante el periodo republicano. El cura de la Parroquia de Fuente la Reina, Manuel Sánchez, realizaba informes similares a los de la alcaldía, aunque no incluía la relación de bienes y su valoración económica.⁵⁴

Relación de vecinos de Fuente la Reina afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Moliner Villalba, Domingo

Moliner Villalba, Ildefonso

Nebot Beltrán, Vicente

Tort Moliner, Emilio

Villalba Moliner, Bienvenido

Villalba Moliner, Domingo

⁵⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bienvenido Villalba Moliner, Caja 10082. AHPCS.

FUENTES DE AYÓDAR



La exigencia de responsabilidades políticas afectó en Fuentes de Ayódar a 10 vecinos, un 0,16% del total provincial y un 4,2% de la población total de la localidad. Todos ellos eran hombres, con lo que el 7,81% de la población masculina local se vio implicada en la Ley de Responsabilidades Políticas. Entre estas personas tenemos documentada 1 que era labrador y 1 que era maestro. Conocemos la incoación de 2 expedientes en 1939, 3 en 1940 y 1 en 1941.

Los informes de la alcaldía, firmados por Juan Lecha, y los del Delegado de FET y de las JONS, firmados por Ramón Puerto, tenían exactamente el mismo texto e incluso estaban escritos por la misma persona. Se trataba de informes centrados exclusivamente en la valoración económica de los bienes del inculpado. La Guardia Civil encargada de realizar los informes era la del Puesto de Fanzara, sin añadir datos nuevos respecto los informes anteriores. Antonio Pons, cura de la Parroquia de San Roque de Fuentes de Ayódar también se basaba descaradamente en el informe de la alcaldía.⁵⁵

Relación de vecinos de Fuentes de Ayódar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Tamborero Gil, Vicente
Bayo Bou, Ramón
Bou Cortel, Francisco
Bou Pradas, Joaquín
Bou Tamborero, Vicente
Capilla Gil, Vicente
Moreno Bonet, Vicente
Pastor Gil, Miguel
Sales Ferrer, Francisco
Vaquero Prades, Enrique

⁵⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Bou Tamborero, Caja 10073. AHPCS.

GAIBIEL



En Gaibiel fueron 9 los vecinos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,14% del total provincial y un 1,17% de la población total de la localidad. Al ser todos varones, el 2,23% de la población masculina local se vio implicada. Se trataba fundamentalmente de labradores, aunque conocemos la existencia de 1 albañil y 1 carpintero. Conocemos la incoación de 2 de los expedientes en 1942 y de 4 en 1943.

La alcaldía y la Guardia Civil eran las autoridades locales que llevaron la iniciativa en la realización de los informes sobre los inculpados. El alcalde Vicente Pérez incluso llegó a denunciar a algunos vecinos. La Guardia Civil del Puesto de Gaibiel indagaba en el pasado político del inculpado y en su actuación durante la guerra. Analizaba la situación familiar y describía y valoraba económicamente su patrimonio. El alcalde después copiaba a mano este informe y lo firmaba. El Delegado de FET y de las JONS también analizaba la actuación del inculpado, llegando incluso a ofrecer una versión diferente, más próxima al inculpado, a la de la Guardia Civil y describía en general su patrimonio. El cura Manuel Mañes trataba en sus informes de desmarcarse del proceso al aludir al poco tiempo que permanecía en la localidad.⁵⁶

Relación de vecinos de Gaibiel afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albero Torrejón, Emilio
Calvo Bonet, Daniel
Capilla Garafulla, José
Escusa Ballester, Vicente
Gimeno Jolí, Jesús
Pérez Mateo, Vicente
Polo Santafé, Manuel
Solís Pérez, Vicente
Torres Joli, José

⁵⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Calvo Bonet, Caja 10129. AHPCS.

GÁTOVA



En Gátova fueron 13 los vecinos implicados en la exigencia de responsabilidades políticas, lo que significa un 0,2% del total provincial y un 1,07% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos hombres, el 2,16% de la población masculina local se vio afectada por la Ley de Responsabilidades Políticas. Hemos de recordar que Gátova en 1995 pasó a formar parte de la provincia de Valencia. La mayoría de estas personas eran labradores y sus expedientes se incoaron en el año 1942.

Jaime Tello, alcalde de Gátova, emitía unos informes en los que se especificaba la edad, profesión, situación familiar y contribución del inculpado. Trinitario Romero, Delegado Local de FET y de las JONS, se limitaba a copiar y firmar el informe de la alcaldía. La Guardia Civil realizaba su informe desde el Puesto de Segorbe y se centraba en la situación familiar del inculpado y sus datos económicos. El cura de Geldo, José Rodrigo Aparicio, era el encargado de realizar informes sobre vecinos de Gátova y en ellos explicaba la edad del inculpado y sus datos económicos.⁵⁷

Relación de vecinos de Gátova afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Esteve Bargas, Cipriano
Esteve Martínez, Cipriano
Martínez Morelló, Bernardino
Martínez Sierra, Manuel
Romero Romero, Abdón
Romero Sánchez, Ángel
Romero Santamaría, Ricardo
Romero Verga, Miguel
Sierra Martínez, Manuel
Sierra Navarro, Ángel
Sierra Sierra, Manuel
Zapata Romero, Justo
Zapata Verga, Miguel

⁵⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Sierra Martínez, Caja 10099. AHPCS.

GELDO



Las 21 personas que en Geldo se vieron implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas suponían el 0,33% del total provincial y el 2,37% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos hombres el 4,62% de la población masculina local se vio afectada. Según nuestros datos, la mayoría de estas personas eran labradores. El ritmo de incoación de expedientes fue discontinuo, ya que conocemos la incoación de 4 expedientes en 1939, 3 en 1942 y 7 en 1944.

El informe de referencia para esta localidad era el de la Guardia Civil, realizado desde el Puesto de Segorbe, y en el que únicamente se especificaban los bienes del inculcado y su valoración económica. No tenemos constancia de informes de la alcaldía de Geldo, sino de su Juzgado Municipal, centrado en el análisis de la situación familiar. Tampoco tenemos constancia de informe de FET y de las JONS ni del cura, aunque hemos de recordar que el cura de Geldo era el que realizaba los informes sobre los vecinos de Gátova.⁵⁸

⁵⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Doñate Fuentes, Caja 10099. AHPCS.

Relación de vecinos de Geldo afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Arnau Albiach, Blas
Arnau Chover, Miguel
Bibiano Samper, Francisco
Bielsa Máñez, Ramón
Bielsa Muñoz, Francisco
Bielsa Sales, Francisco
Doñate Fuentes, Miguel
Herrando Ibáñez, Francisco
Mañez Ascensión, Vicente
Máñez Ascensión, José
Máñez Soriano, Ramón

Martínez Monzón, Manuel
Morós Puerta, José
Muñoz Bibiano, Miguel
Muñoz Tert, Venancio
Ortín Torres, Vicente
Rueda Alairach, Ángel
Salas Vivas, Francisco
Salas Vivas, Manuel
Sales López, José
Sanmatías Ginés, Vicente

HIGUERAS



En Higuera hubo 8 vecinos implicados en la exigencia de responsabilidades políticas, lo que significa un 0,12% del total provincial y un 4,26% de la población total de la localidad. De estas personas 7 eran hombres, con lo que el 6,66% de la población masculina local se vio afectada, mientras que el caso de mujer vecina de Higuera representaba el 0,94% de la población femenina local. Fundamentalmente se trataba de labradores y de 1 maestra. Los expedientes fueron incoados en 1941.

En la incoación de estos expedientes tuvieron mucho que ver el alcalde y el Delegado Local de FET y de las JONS, que remitieron al Juzgado de Instrucción de Responsabilidades Políticas de Castellón una relación de vecinos presuntamente responsables políticos. Esta lista remitida al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia que posteriormente ordenó la incoación.

El alcalde y Miguel Alegre, Delegado Local de FET y de las JONS, realizaban el mismo informe (el del partido único firmado unos días más tarde que el de la alcaldía, pese a ser el mismo y estar escrito con la misma letra), basado en la evolución política del inculcado, sus actuaciones más destacadas durante la República y la guerra, así como la relación de bienes con su valoración económica. Sospechosamente el informe de la Guardia Civil, firmado por el Comandante Joaquín Bellés, era muy similar, aunque cronológicamente era el primero, y servía directamente de inspiración al informe del cura de Higuera, quien sabiamente se limitaba a cambiar un poco las palabras del texto.⁵⁹

⁵⁹ Expediente de Responsabilidades Política contra Gumersindo Alegre Monterde, Caja 10094. AHPCS.

Relación de vecinos de Higuera afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alegre Barrachina, Francisco
Alegre Monterde, Gumersindo
Barrachina Alegre, Salvador
Barriel Gimeno, Joaquín
Borrachina Alegre, Salvador
Castillo Capilla, Nieves
Gimeno Ramos, Manuel
Jsen Folio, Esteban

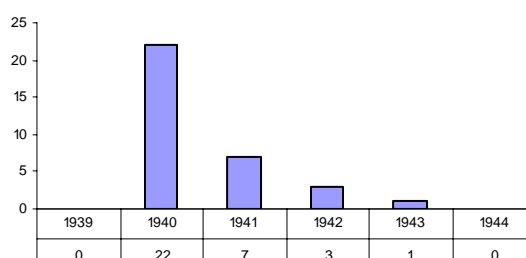
LA JANA



En la Jana la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 51 personas, un 0,81% del total provincial y un 2,92% de la población total de la localidad. De estas personas 49 eran varones, con lo que el 6,01% de la población masculina local se vio afectada, mientras las 2 mujeres suponían el 0,21% de la población femenina de la localidad. La gran mayoría de estas personas eran labradores y jornaleros, aunque tenemos documentado el caso de un albañil.

Los expedientes se incoaron de una manera tardía pero decidida, ya que no encontramos los primeros hasta el año 1940, como consecuencia de los datos aportados por el Servicio de Recuperación Agrícola, descendiendo progresivamente el número de expedientes incoados hasta el año 1943. En 1944 ya no se incoaron expedientes.

Gráfica 5.24



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

Las dos fuentes de información más importantes eran las de la Guardia Civil y la de la alcaldía⁶⁰. La primera, firmada por el Comandante José Gómez ofrecía datos de los antecedentes políticos del inculcado, así como una relación completa de bienes con su valoración económica. Hemos de recordar que en el Puesto de la Jana se redactaban también los informes de los vecinos de Canet lo Roig. La alcaldía, en manos de Francisco Simó, especificaba un poco más los antecedentes políticos y el valor de los

⁶⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jacinto Lládser Verge, Caja 10083. AHPCS.

bienes y los informes de Pedro Vallés, Delegado Local de FET y de las JONS eran exactamente iguales (aunque a veces eran firmados un día antes). No tenemos constancia de informe del cura de la localidad.

Relación de vecinos de la Jana afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Balaguer Balaguer, José Joaquín	Lladser Verge, Francisco
Balaguer Huguet, Vicente	Lladser Verge, Jacinto
Balaguer Lladser, Julio	Martí Adell, José
Balaguer Pavía, Manuel	Meseguer Gavaldó, José
Balaguer Roca, Francisco	Nicolau Pla, José
Balaguer Vallés, Blas	Pavía Gargallo, Matías
Balaguer Veà, Joaquín	Ribas Pla, Bartolomé
Bayarri Beltrán, Inocencio	Roca Cumba, Manuel
Bayarri Beltrán, José Vicente	Roca Ferrer, Pascual
Bayarri Valles, Tomás	Roig Balatuer, Francisco
Beltrán Coloma, Sandalio	Romero Vallés, Pedro
Beltrán Pareja, José A.	Sanz Peris, Hilario
Boix Bernal, Vicente	Saurina Boix, Ángel
Boix Ferrer, Jacinto	Segura Vilanova, José
Boix Vallés, Tomás R.	Sierra Alcántara, Vicente
Boix Verge, Trinidad	Tolos Lluch, Bautista
Branchat Boix, Ángel	Vallés Ferrer, Pedro
Carrero Expósito, Ángel Juan	Vallés Vallés, Modesto
Cladser Ferrer, Miguel	Valls Lluch, José
Doménech Esteller, Inocencio	Verge Marco, Carlos
Ferrer Coloma, Manuel	Verge Vallés, Dolores
Ferrerres Pitarch, Gaspar	Verge Viola, Jaime
Gimeno Vilanova, José Vicente	Verge Viola, Pedro Vicente
Guax Marco, Federico	Verges Vallés, Domingo
Lladser Eroles, Jacinto	Vilanova Roca, Ramón
Lladser Ferrer, Miguel	

JÉRICA



La Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 16 vecinos de Jérica, un 0,25% del total provincial y un 0,67% de la población total de la localidad. La única mujer representaba el 0,08% de la población femenina local, mientras los 15 casos de hombres implicaban que el 1,23% de la población masculina de la localidad se vio afectado. Según nuestros datos, se trataba en su mayoría de labradores. Conocemos la incoación de 4 expedientes de estas personas en 1941 y de 4 más en 1943.

El alcalde de Jérica, Jesús Bernat, ofrece en sus informes datos personales sobre el inculpado, explica la situación familiar y su contexto económico, al igual que el informe del Delegado Local de FET y de las JONS. La Guardia Civil de Viver aporta la misma información, aunque especifica las características de algunas de las fincas de los inculpados. El informe más temprano es el del cura Manuel Zarzoso, de la Iglesia Arciprestal de Santa Águeda de Jérica, que ofrece también información personal, familiar y económica independiente.⁶¹

⁶¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benet Gil, Caja 10128. AHPCS.

Relación de vecinos de Jérica afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Benet Gil, José
Camarero Mayona, Eduardo
Campos Monleón, Joaquín
Campos Monterde, Jesús
Carot Collado, Manuel
Giménez Cortés, Atanasio
Lafuente Barrachina, Wenceslao
Monleón Giménez, Emilio

Monterde Sebastián, Consuelo
Montesinos Gallart, Félix
Montoliu Marco, José
Pérez Esteban, Jesús
Redón Bertolín, Antonio
Ríos Aguilar, Emilio
Sánchez Cortés, Manuel
Sebastián Monterde, Francisco

LA LLOSA



En la Llosa fueron 10 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,16% del total provincial y un 2,23% de la localidad. Como todos ellos eran varones el 4,46% de la población masculina local se vio implicada. Se trataba fundamentalmente de labradores y jornaleros y los 6 expedientes de los que conocemos su fecha de incoación son de 1941.

Las autoridades locales de la Llosa utilizaban fichas informativas preescritas en sus informes, una especie de plantillas que sólo había que rellenar con los datos concretos del inculpado. Así lo hacía la alcaldía, que hacía hincapié en los aspectos de la evolución política del inculpado. El Delegado Local de FET y de las JONS calcaba dicho informe y lo firmaba. La Guardia Civil, desde el Puesto de Almenara, también utilizaba este tipo de informes, aunque con una redacción un poco diferente, insistiendo en los datos familiares y en los bienes y su valoración económica. El único que no realizaba este tipo de informes con plantilla era el cura de Almenara Dionisio Nostrart, que informaba de los datos personales, de la situación familiar y de las propiedades de todos los miembros de la familia.¹

Relación de vecinos de la Llosa afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Cebriá Forner, Jesús
Doménech Pérez, Bautista
Fernández Toledo, Teófilo
Latorre Martí, Francisco
Martí Romá, Bautista
Melchor Arango, Fabián
Peris Cebriá, Francisco
Sales Villanova, Vicente
Tel Cebriá, Francisco
Villarroig Royo, Vicente

¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Villarroig Royo, Caja 10127. AHPCS.

LA MATA DE MORELLA



En la Mata de Morella hubo 8 personas implicadas en la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,12% del total provincial y un 1,51% de la población total de la localidad. Todos ellos eran hombres, con lo que el 3,22% de la población masculina local estuvo afectada por la Ley. Sólo conocemos la profesión de uno de los afectados, que era médico, cuyo expediente se incoa en 1940 como consecuencia del registro de su casa por parte de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Castellón.

En esta localidad las autoridades locales se esmeraron en aportar informes completos de sus vecinos. El alcalde Pedro Casanova y el Jefe Local de FET y de las JONS Andrés Monserrat realizaban extensos y detallados informes, muy similares entre si, que se centraban en el pasado republicano del inculcado, así como un resumen de los bienes de los que disponía. La Guardia Civil del Puesto de Forcall era la encargada de realizar los informes de los vecinos de la Mata de Morella, detallando los bienes del inculcado y su evolución política en los años de la República. El cura José Carceller, de la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de la Mata de Morella decía basarse en la información que le suministraban los feligreses, sin ahorrarse duros calificativos sobre la actuación del inculcado durante la República y la guerra ni una copia detallada de sus bienes.²

Relación de vecinos de la Mata de Morella afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alcón Gruñón, Antonio
Beltrán Beltrán, Simón
Beltrán Pallarés, Jacinto
Cerdá Ferrer, Justo
Loras Loras, Pedro
Piquer Centelles, Manuel
Piquer Royo, Miguel
Roselló Pallarés, Rafael

² Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Pedro Loras Loras, Caja 10074. AHPCS.

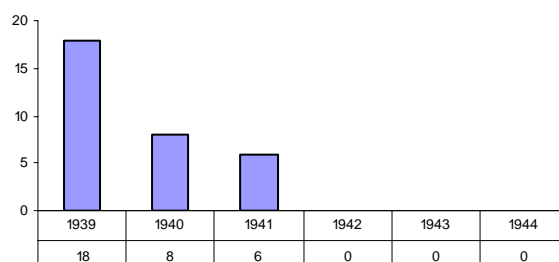
LUCENA



En Lucena fueron 129 las personas implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas, un 2,06% del total provincial y un 3,6% de la población total de la localidad. De ellos 122 eran varones, con lo que un 7,03% de la población masculina local se vio afectada, mientras las 7 mujeres implicadas suponían el 0,37% de la población femenina de la localidad.

En cuanto a las profesiones de los inculpados conocemos los casos de 5 labradores, 1 albañil, 1 mecánico, 1 hojalatero, 1 médico y 1 comerciante. Entre las mujeres, sabemos que al menos 1 de ellas se dedicaba al hogar. Los expedientes se comenzaron a incoar con fuerza en 1939, llegando hasta 1941, año en el que, según los datos a nuestro alcance, se incoa el último (hay que recordar que, como es evidente, no disponemos de la fecha de incoación de todos los expedientes, por lo que estos datos hay que tomarlos como tendencias).

Gráfica 5.25



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

En Lucena la autoridad más influyente parece ser la Delegación Local de FET y de las JONS, que llegó incluso a denunciar a algunos vecinos³. En sus denuncias informaba del pasado político del inculpad, su actuación antes y durante la guerra, así como de sus bienes. La alcaldía no añadía nada nuevo respecto a estos informes, salvo algún detalle de la situación concreta y en ese momento del inculpad. La Guardia Civil se encargaba de dar más detalles sobre la actuación política del inculpad e, incluso, de

³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bartolins Montins, Caja 10129. AHPCS.

calificarle moralmente, con una redacción independiente. Vicente Cubertorer, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción informaba, con una redacción independiente, de todos los aspectos posibles: político, criminal y económico, aunque no entraba en calificaciones morales.

Relación de vecinos de Lucena afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albert Chiva, Arcadio	García Chiva, José
Almor Llorens, Ignacio	García Fortanet, Daniel
Andrés Planchadell, Antonio	García Gil, Antonio
Artero Ahís, Enrique	Gimeno Cervelló, José
Balaguer Villar, José	Gozalbo Nebot, Juan
Bartolins Montins, José	Gozalbo Porcar, Antonio
Bartoll Olaria, Antonio	Gregori Nebot, Antonio
Bartoll Segura, Julio	Gresa Montolio, José Luís
Campos Albalat, Vicente	Herrando Monferrer, Antonio
Campos Aparici, José	Isidro Bachero, Manuel
Castillo Celades, Ángel	Isidro Beltrán, Casimiro
Castillo Celades, Manuel	Latorre Redolat, Cristóbal
Catalán Escrig, Ana	Mas Pastor, Julio
Celades Escrig, María	Miralles Granell, Jaime
Colom Gimeno, Josefina	Miralles Mor, Manuel
Conell Porcar, Miguel	Moliner Sanz, Joaquín
Edo Chiva, Decoroso	Montis Chiva, Juan
Edo Nebot, Manuel	Montoliu García, Pablo
Edo Olaria, Vicente	Nebot Alicart, Joaquín
Edo Ribes, Arcadio	Nebot Aparici, Dolores
Edo Ribes, Juan Ramón	Nebot Beltrán, Ramiro
Edo Ribes, Vicente	Nebot Celades, José
Edo Rives, Arcadio	Nebot Prades, Ramiro
Edo Villanueva, Ángel	Nomdedeu Ferrer, Emilio
Escrigh Climent, Pascual	Olaria Negre, Generosa
Escrigh Aparici, Enrique	Ortells Porcar, Álvaro
Escrigh Badenes, Francisco	Palanques Franch, Decoroso
Escrigh Edo, Ignacio	Pallarés Marín, Vicente
Escrigh Martínez, Federico	Porcar Agut, José Antonio
Escrigh Martínez, Miguel	Porcar Bartoll, Antonio
Escrigh Monfort, Serafín	Porcar Bartoll, Luis
Estall Montoliu, José	Porcar Gallén, Ernesto
Fabra Miralles, Delfín	Porcar Gallén, José
García Bachero, Enrique	Porcar Negre, Federico
	Prades Alcón, Carmen

Prades Montín, Antonio
Rolda Tomás, José
Safont Tena, Francisco
Salvador Palanques, Miguel
Salvador Porcar, Antonio

Salvador Porcar, Vicente
Sangüesa Villach, Joaquín
Vidal Gozalbo, Dolores
Vidal Porcar, José
Villagrasa Olaria, José Juan

LUDIENTE



En Ludiente fueron 33 las personas a las que presuntamente se les exigió responsabilidades políticas, un 0,52% del total provincial y un 3,21% de la población total de la localidad. Las 2 mujeres implicadas suponían el 0,36% de la población femenina local, mientras los 31 hombres afectados implicaban que el 6,51% de la población masculina local se viera implicada.

La mayoría de estas personas eran trabajadores del sector primario, sobre todo labradores, jornaleros y campesinos, aunque tenemos documentada la existencia de 1 molinero y de 1 obrero. Las dos mujeres implicadas se dedicaban al trabajo en sus hogares. Los expedientes de los que conocemos su fecha de incoación se sitúan en el periodo 1939-1941, con la siguiente distribución: 5 en 1939, 12 en 1940 y 4 en 1941.

José Zafón, alcalde de Ludiente aportaba en sus informes información sobre el pasado político del inculcado, sin ahorrarse calificativos morales y sobre su peligrosidad social. Emilio Sanz, Delegado Local de FET y de las JONS realizaba informes similares en el mismo tono. Tampoco dejaban de lado ambas fuentes el análisis de la evolución política y la relación de bienes con su valoración económica. Basados en estas autoridades, la Guardia Civil de Argelita era la encargada de los informes de vecinos de Ludiente, dando una gran importancia a su evolución política. No tenemos constancia de informe de la autoridad religiosa local de Ludiente.⁴

⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Sanz Nebot, Caja 10083. AHPCS. Esta persona era vecino de Vallat, pero su relación con Ludiente hizo que en su expediente informaran sus autoridades locales.

Relación de vecinos de Ludiente afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abarques Granell, Vicente
Bort Granell, Álvaro
Chiva Granell, Modesto
Chiva San Félix, Andrés
Chiva Sanfélix, Andrea
Felipe Albalate, Fermín
Felipe Albalate, José
García Benavent, Rafael
García Campos, Ángel
García Campos, José
García Campos, Ramón
García Felipe, Pascual
García Ibáñez, José
Gargallo Chiva, Francisco
Gil Espelleta, Juan
Granell Gallén, Primitivo
Mor Chiva, Ramón

Mor Chiva, Valentín
Mor Gil, Emilio
Mor Granell, Álvaro
Mor Granell, José
Mor Sacristán, Joaquín
Mor Sacristán, Rogelio
Peris Garcerán, Carolina
Rocher Izquierdo, Francisco
Rocher Sanz, Marcelino
Royos Molinos, José
Sanz Ibáñez, Francisco
Sanz Miravet, Antonio
Sanz Peris, Francisco
Sanz Peris, Hilario
Ventura Peris, Pascual
Vilaplana Gil, Indalecio

MATET



De esta localidad sólo conocemos la implicación de 1 vecino, dada la existencia de una copia de testimonio de condena por parte de un tribunal militar. Desconocemos si efectivamente este testimonio dio lugar a la incoación de un expediente de responsabilidades políticas o si éste se vio suspendido por la reforma de la Ley de febrero de 1942. Este caso supondría el 0,01% del total provincial de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas, el 0,22% de la población local y el 0,44% de la población masculina local.

Relación de vecinos de Matet afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas.⁵

García Morte, José

⁵ Testimonio de condena de José García Morte, Caja 19625. AHPCS.

MONCÓFAR



En Moncófar fueron 36 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,57% del total provincial y un 1,32% de la población total de la localidad. Todos ellos eran varones, con lo que el 2,74% de la población masculina local se vio implicada. Se trataba fundamentalmente de labradores (tenemos documentados 13 casos), a los que se añadían 1 albañil, 1 mecánico, 1 carpintero, 1 comerciante y 1 carabinero. En los años 1939 y 1940 se incoó 1 expediente por año, subiendo la cifra a 11 en 1941 y a 5 en 1943. No conocemos la existencia de expedientes incoados a partir de 1943.

En Moncófar el informe más influyente era el que realizaba el Comandante Amadeo Bartoll Aicart, desde el Puesto de la Vall d'Uixó. Éste se centraba en los bienes personales y familiares, así como sus jornales. La alcaldía de Moncófar no añadía novedades respecto este primer informe, igual que el de FET y de las JONS local, que era una copia del de la alcaldía. Vicente Aguirre, el cura de Moncófar también copiaba su informe del de la alcaldía.⁶

⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Simón Boix, Caja 10103. AHPCS.

Vecinos de Moncófar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alemany Vera, Ernesto
Arnau Canós, Andrés
Arnau Gabaldá, Francisco
Arnau Pérez, Manuel
Baldó Alós, Jaime
Canós Flich, Jerónimo
Canós Ibáñez, Vicente
Darás Fuster, Bautista
Espinós Canós, José María
Espinós Fabregat, Avelino
Esteve Isaac, Fabio
Gascó Gavara, Pascual
Gasch Gavara, Vicente
Ibáñez Flors, José
Julia Andrés, Bautista
Julia Catalá, Mariano
López Alaida, Manuel
Maciá Benlloch, Bautista

Macián Guillamón, Emilio
Martí Beilla, Pascual
Martí Beltrán, Francisco
Martí Goya, Pascual
Martí Melchor, Manuel
Martí Villa, Pascual
Martín Melchor, Manuel
Marzá Canós, Pedro
Marzal Canós, Jaime
Nebot Martí, Pascual
Peixó Clavell, José
Piñón Torrella, José
Recatalá Corma, Antonio
Recatalá Corma, Francisco
Recatalá Corma, Joaquín
Sacristán Fabregat, Primitivo
Simó Boix, José
Teresa Espinós, José

MONTÁN



En Montán fueron 41 las personas implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas, un 0,65% del total provincial y un 4,7% de la población total de la localidad. Sólo una de ellas era mujer, lo que representaba el 0,22% de la población femenina local, mientras que los 40 hombres suponían el 9,34% de la población masculina de la localidad.

Desconocemos la profesión de los inculpados, pero sabemos que la gran mayoría de expedientes se incoaron en 1940 (18 casos) con 1 caso incoado en 1941. Esta localidad es un perfecto ejemplo de cómo hay poblaciones de las que tenemos noticias de la incoación de expedientes en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, pero cuyos expedientes no están en el Archivo Histórico Provincial de Castellón.

Relación de vecinos de Montán afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Ávila Donís, Jerónimo	Guiñón Guiñón, Segundo
Ávila Donís, Vicente	Guiñón Nebot, Ángel
Badenes Navarro, Pedro	López Gil, José
Barrachina Benedicto, Víctor	Macián Martín, Mateo
Bou Gil, Vicente	Martín Ávila, Victoriano
Calpe Badía, Joaquín	Martín Gimeno, Alfredo
Calpe Gil, Cesáreo	Martín Peris, Francisco
Calpe Gil, Vicente	Martín Santolaria, Alfredo
Cervera Escrich, Juan	Martín Vea, Francisca
Donís Guiñón, Eugenio	Moliner Navarro, Francisco
Fornás Gil, Manuel	Montolio Huerta, Celestino
Fornas Guiñón, Vicente	Navarro Guiñón, Manuel
Fornás Martín, Basilio	Navarro Vea, Ramiro
Garcés Montolio, Constantino	Salvador Gil, Benjamín
Gimeno Moya, Manuel	Salvador Gil, Pedro
	Salvador Meseguer, Antonio

Salvador Villalba, Manuel
Santiago Salvador, Emilio
Santolaria Gimeno, Antonio
Tusón Badenes, Juan
Tusón Soriano, Manuel

Tuzón Bayo, Juan
Tuzón Soriano, Juan
Vea Escrig, Ángel
Vea Montolio, Ángel
Vea Vea, Javier

MONTANEJOS



En Montanejos fueron 20 las personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, un 0,32% del total provincial y un 2,71% de la población total de la localidad. Todos ellos eran hombres, con lo que el 5,4% de la población masculina local estuvo afectada. La mayoría eran labradores, aunque conocemos la existencia 1 molinero, 1 carpintero y 1 carnicero. Tenemos constancia de la incoación de 3 expedientes en 1941 y de 4 en 1942.

La Guardia Civil de Montanejos tenía una actitud decidida en la exigencia de responsabilidades políticas. El Comandante Camilo Ramos llegó a denunciar a algunos vecinos y en sus informes ofrecía datos de su evolución política y sobre la valoración económica de sus bienes. Curiosamente los informes de la alcaldía y los de FET y de las JONS eran exactamente iguales y los firmaban la misma persona, Miguel Brun, haciendo especial hincapié en los bienes y en la situación familiar del inculcado. El cura J.Maicas, de la Parroquia de Santiago Apóstol de Montanejos, realizaba informes muy resumidos que se centraban en los antecedentes políticos, en la situación personal y familiar del inculcado y en algunos datos económicos, por lo que era una fuente bastante completa.⁷

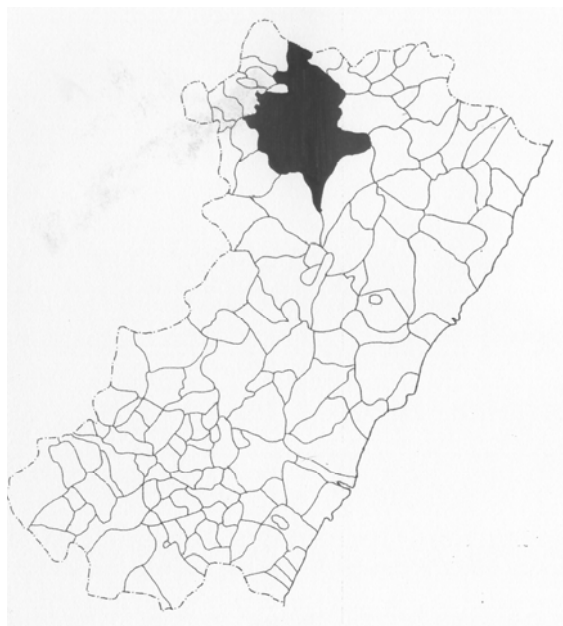
⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Peris Peris, Caja 10095. AHPCS.

Relación de vecinos de Montanejos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

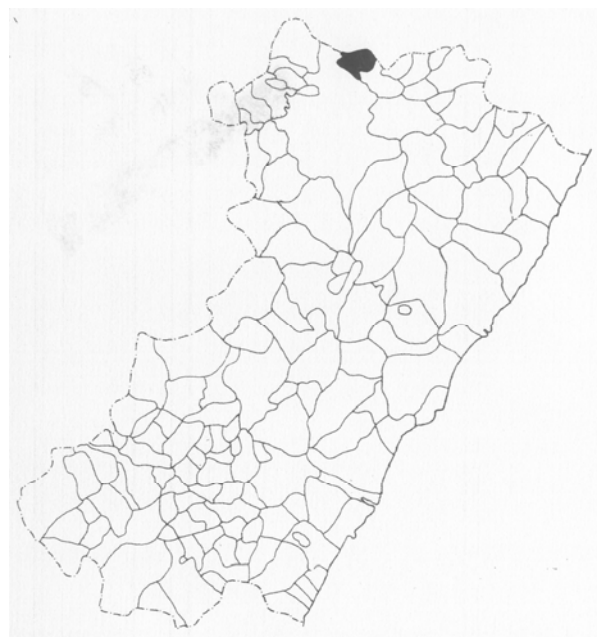
Fornás Albalat, Juan
Fornás Navarro, Manuel
Fornas Sanz, Constantino
Gil Balaguer, Manuel
Guillamón Santamaría, Joaquín
Izquierdo Calvo, Manuel
López Álvaro, José
López Peiró, Manuel
Macián Badenas, Vicente
Macián Navarro, José

Martí Martí, Pascual
Monserga Fornas, Manuel
Monte Albalate, Enrique
Morte Martín, Pascual
Navarro Aroza, Fernando
Peiró Peris, Francisco
Peris Peris, Francisco
Tamborero Villalba, Benito
Ventura Morte, Leandro
Vivas Collado, Vicente

MORELLA



MORELLA



HERBÉS

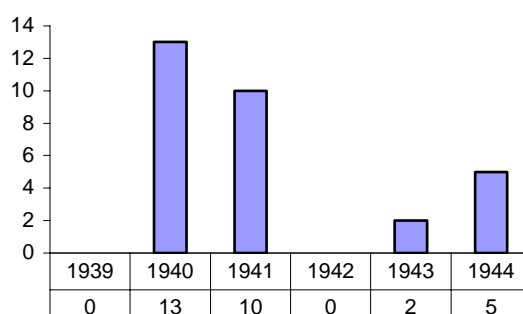
En Herbés tenemos noticias de la relación de 9 vecinos con la jurisdicción de Responsabilidades Políticas. Esto significaba un 1% del total provincial. Hemos de recordar que en 1926 Herbés pasó a formar parte del término municipal de Morella, y que no fue hasta los años 1970 cuando se constituyó en municipio independiente. Por esta razón el Censo de población de 1940 no recoge separadamente la población de este municipio y no podemos realizar los cálculos correspondientes al porcentaje de población local afectada y población masculina y femenina implicada. Desconocemos la profesión de estas personas, pero sí sabemos que sus expedientes se incoaron de la siguiente forma: 4 en 1941 y 5 en 1944. Por todo lo expuesto, trataremos de forma conjunta las poblaciones de Morella y Herbés.⁸

En Morella (incluyendo Herbés) hubo 62 implicados en la exigencia de responsabilidades políticas, un 1,01% del total provincial y un 1,25% de la población total del término municipal. Las tres mujeres implicadas representaban el 0,11% de la población femenina, mientras que los 59 varones afectados suponían el 2,52% de la población masculina local.

Sólo tenemos documentados 3 labradores, 1 pintor, 1 carpintero, 1 mecánico y 1 comerciante. Los expedientes se incoaron a partir de 1940, muchos de ellos como consecuencia de los datos facilitados por el Servicio de Recuperación Agrícola.

⁸ Los nombres de los 8 afectados de Herbés están escritos en cursiva para diferenciarlos de los de Morella.

Gráfica 5.26



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

El informe de referencia en Morella era el de la alcaldía, que incluía la evolución política del inculcado, los cargos que había desempeñado y sus datos económicos. Este informe era la fuente directa sobre el que se basaba el de FET y de las JONS, prácticamente igual. La Guardia Civil realizaba informes con una redacción independiente, aunque prácticamente sin añadir datos nuevos. Hay que recordar que desde el Puesto de Morella se realizaban también los informes de los vecinos de Castell de Cabres y Chiva de Morella. Francisco María, cura de la Parroquia de Santa María la Mayor de Morella realizaba un informe que era directamente un resumen del informe de la alcaldía. Recordemos que también hacía los informes de los vecinos de Chiva de Morella.⁹

⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Querol Querol, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Morella (y Herbés) afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Ferrer, Manuel
Adell Ferrer, Ramón
Almela Ferrer, Miguel
Amela Aguilar, Jaime
Antolí Gasulla, José
Beser Segura, Felipe
Blasco Pallarés, Francisco
Borrás Martí, Severiana
Borrás Martí, Teodoro
Borrás Pascual, Domingo
Centelles Martí, Joaquín
Cortell Sánchez, Casimiro
Ferrer Moya, José
Figols Llisterri, Ramón
Gasulla Pascual, José
Guimerá Sebastiá, Arsenio
Ibáñez Andreu, Luis
Marín Chillida, Matías
Marín Gil, Víctor
Martí Carrascull, José
Martí Meseguer, José
Martí Palos, Manuel
Mestre Ferras, José
Ortí Casanova, Manuel
Ortiz Beltrán, Manuel
Ortiz Salvador, Clinio
Pallarés Eixach, Francisco
Pallarés Eixarch, Jacinto
Pallarés Roda, José
Pallarés Sebastiá, Luis
Pallarés Sebastiá, Mariano

Pascual Millán, Nicasio
Pascual Pascual, Agustín
Plana Carceller, Álvaro
Puig Ripollés, José
Querol Antolí, Miguel
Querol Mestre, Tomás
Querol Milián, Nicanor
Querol Querol, José
Querol Ripollés, Macario
Querol Tena, Marcos
Ripollés Marín, José
Ripollés Marín, Luís
Ripollés Prats, José
Sales Ferrando, Aurelio
Salvador Puig, José
Sánchez Llopis, Carmelo
Sangüesa Guimerá, Matías
Sebastiá Prats, José
Segura Guimerá, Matías
Segura Mestre, Francisco
Segura Querol, Ricardo
Ulldemolins Martí, Tomás
Ulldemolins Orti, Joaquín
Ulldemolins Orti, José
Vallés Adell, Alfredo
Villalta Mestre, Vicente
Viñals Barceló, Clotilde
Viñals Ripollés, Manuel
Viñals Sebastián, José
Vives Aguilar, Manuela
Vives Viñals, Andrés

NAVAJAS



En Navajas 5 personas se vieron implicadas en la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que representa el 0,08% del total provincial y el 0,56% de la población local total. Todos ellos eran varones, con lo que el 1,17% de la población masculina local se vio afectada. Sólo disponemos de información relativa a sus profesiones en un caso, que se trataba de un panadero. Conocemos la incoación de 2 de los expedientes en 1943.

Finalmente, no podemos aportar datos sobre las autoridades locales porque en el Archivo Histórico Provincial de Castellón sólo existen copias de testimonios de condena por parte de tribunales militares. Por tanto, realmente no podemos asegurar, con los datos que hoy disponemos, que se llegara a incoar algún expediente por responsabilidades políticas a vecinos de esta población.

Relación de vecinos de Navajas afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Arandiga Escrich, Francisco

Aucejo Aucejo, Fulgencio

Aucejo Muñoz, Serafín

Muñoz Castillo, Joaquín

Sáez Muñoz, Ramón

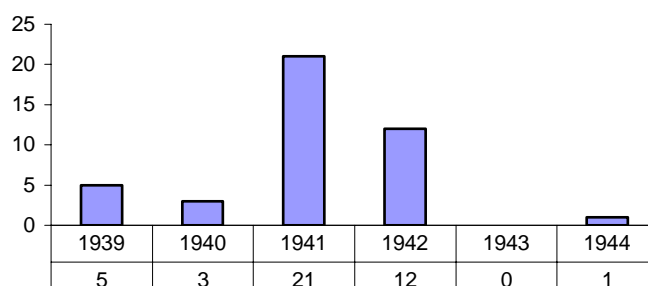
NULES



En Nules fueron 108 las personas que se vieron implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, lo que suponía un 1,72% del total provincial y un 1,7% de la población total local. Entre estas personas 105 eran varones, con lo que el 3,47% de la población masculina local se vio implicada, mientras las 3 mujeres afectadas representaban al 0,09% de la población femenina local. Se trataba fundamentalmente de labradores y jornaleros, aunque tenemos constancia de la presencia de 2 carpinteros, 1 pescador, 1 chofer, 1 farmacéutico, 1 abogado o 2 empleados del comercio.

La incoación de expedientes se realizó desde el mismo año 1939 y hasta el 1944, a excepción de 1943, único año en el que no se llegó a incoar ningún expediente. El periodo de mayor intensidad en este proceso fueron los años 1941-1942.

Gráfica 5.27



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

La Guardia Civil de Nules¹⁰, bajo la firma del Comandante Salvador Vilar, realizaba informes de vecinos de Nules en los que se hacía un repaso de su ideología, su pasado y evolución políticos, su situación en ese momento y la relación de bienes. En gran parte, tanto este informe como el de la alcaldía, que era mucho más resumido, parecían basarse en la copia de testimonio de condena por parte del correspondiente tribunal militar. El Delegado Local de FET y de las JONS hacía un repaso exhaustivo de los

¹⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Cubedo Martínez, Caja 10083. AHPCS.

presuntos delitos cometidos por el inculpado durante la República y la guerra civil, sin olvidar la relación de bienes, con duras calificaciones de su conducta, en un tono generalmente agresivo. El cura de Nules repasaba también los antecedentes políticos y la situación económica del inculpado, en un tono también bastante radical. La Guardia Civil de Nules también realizaba los informes de los vecinos de Villavieja.

Relación de vecinos de Nules afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adsuara Pascual, Vicente	Darás Casaus, Vicente
Adsuara Recatalá, Tomás	Devís García, Vicenta
Alagarda Ballester, Vicente	Devis García, Vicente
Alagarda Benito, Miguel	Dosdá Vernia, José
Alagarda Maciá, Pedro	Esbrí Mora, Francisco
Alcázar Bartrina, Pedro	Espinosa Cabedo, Vicente
Alfonso Roglá, Miguel	Estañal, Gerardo
Algara Masia, Pedro	Felip Castelló, Vicente
Alós Beltrán, Pascual	Felip Oliver, Benito
Alós Navarro, Miguel	Flich Miralles, Francisco
Arnau Bertomeu, Vicente	Franch Canós, Francisco
Arnau Darás, Pascual	García Redondo, Julián
Arrufat Capella, Agustín	Gil Navarro, José
Arrufat Capella, Carmen	Giménez García, Manuel
Ballester Franch, José	Ginés Darás, Vicente
Ballester Franch, Manuel	Gonzalbo Vinaixa, Joaquín
Bartolomé Margalet, José María	Gozalbo Martínez, Bartolomé
Bernat Sabater, Francisco	Gozalbo Martínez, Vicente
Bonet Capella, Manuel	Hueso Recatalá, Bautista
Bono Hernández, Julio	Hueso Recatalá, José
Broch Gómez, José	Ibáñez Miranda, José
Bruno Bodi, Vicente	Lafuente Lucas, Ramón
Bruno Sanahuja, Manuel	Lafuente Lucas, Salvador
Canós Ballester, José	Lucas Saborit, Josefa
Canós Navarro, Ramón	Llanes Canós, Asensio
Carbonell Canós, José	Marco Pedro, Vicente
Cases Franch, Vicente	Marines Gabata, José
Castelló Ballester, Bautista	Martínez Martínez, Pascual
Castelló Calatayud, Alfredo	Martínez Martínez, Vicente
Caudet, Bautista	Martínez Masso, Francisco
Cervera Vilar, José	Martínez Mechó, Carmen
Cervera Vilar, Vicente	Martínez Mechó, José
Cubero Martínez, Fernando	Mateo Monzón, José
Darás Brun, Manuel	Mezquita Castañer, Jaime
Darás Casaus, Francisco	Miralles Recatalá, Alejandro
	Miralles Recatalá, Antonio
	Miralles Recatalá, Vicente

Molés Vicente, Bautista
Moliner Darás, Vicente
Mondragón Gómez, Narciso
Monlleó Broch, Francisco
Monlleó Recatalá, Florencio
Mora Esbrí, José
Mosquera Doménech, José
Muñoz González, Manuel
Muñoz González, Miguel
Nebot González, Ramón
Nogueres Vilar, Nicolás
Palmer Martínez, José
Pascual Jarque, Casto
Pérez Ferrades, Lorenzo
Pérez Ortiz, Simón
Rodrigo Darás, Miguel
Romero Casañ, Antonio
Romero Daras, Miguel

Romero Huesa, José
Roselló Gavara, Vicente
Roselló Herrero, Miguel
Roselló Navarro, Miguel
Salas Adsuara, Vicente
Salvador González, Fabio
Sanz Romero, Bautista
Saura Casimiro, Manuel
Silvestre Ballester, Salvador
Solá Guiral, José
Torres Sancho, Rafael
Valentín Torrejón, Faustino
Valls Chillida, José
Ventura Abella, Pascual
Vilar Gasulla, José María
Vilar Llorens, José
Vinaixa Romero, Vicente
Vinueva March, Antonio

OLOCAU DEL REY



En Olocau del Rey la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 14 personas, todos ellos varones. Esto representaba el 0,22% del total provincial y el 3,33% del total de población local. Al ser todos ellos hombres, el 7,03% de la población masculina local se vio afectada. De la profesión de estas personas sólo tenemos noticias de la presencia de 1 labrador, 1 cantero y 1 alfarero. Conocemos también la incoación de 1 expediente en 1939 y 3 en 1941.

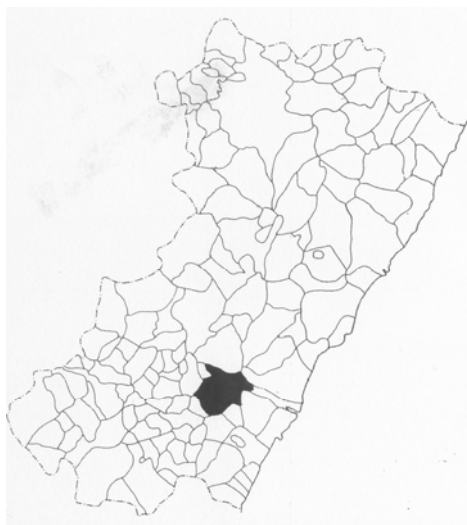
Rafael Carbó, alcalde de Olocau del Rey, realizaba unos informes muy exhaustivos y detallados en los que se daba información de todos los aspectos posibles: personales, familiares, económicos, morales y políticos. Junto con el Delegado Local de FET y de las JONS, Vicente Soler, fueron los autores de algunas denuncias de sus vecinos. Enrique Royo, cura de la Parroquia de Olocau del Rey, realizaba informes bastante extensos que, en realidad, no eran sino copias del informe de la alcaldía. También la Guardia Civil, desde el Puesto de Forcall, realizaba informes muy completos y detallados, abarcando todos los aspectos posibles.¹¹

¹¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Salvador Serrano, Caja 10107. AHPCS.

Relación de vecinos de Olocau del Rey afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Sánchez, Ramón
Adell Soler, José
Adell Soler, Julián
Beltrán García, Jaime
Beltrán Ulldemolins, Francisco
Ejarque Gascó, José
Escorihuela Soler, Marcos
Escorihuela Sorribas, Marcos
Espada Violeta, José
Espada Violeta, Manuel
Guarch Soler, Marcos
Royo Molina, Francisco
Salvador Serrano, Fernando
Soler Meseguer, Miguel

ONDA

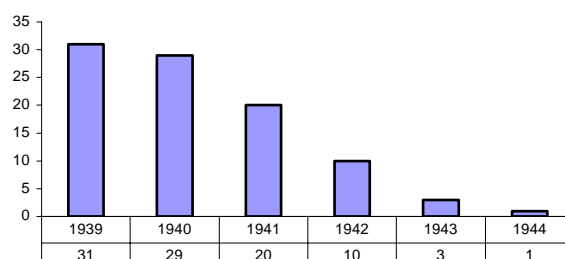


En Onda fueron 214 las personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, un 3,42% del total provincial y un 2,93% de la población total de la localidad. 170 de estas personas eran varones, con lo que el 4,9% de la población masculina local se vio implicada. Las 44 mujeres afectadas representaban el 1,14% de la población femenina local.

La mayoría de estas personas eran labradores, campesinos y jornaleros, aunque encontramos una presencia significativa de representantes del sector secundario de la economía, especialmente de azulejeros (12 casos), aunque también albañiles (4), fabricantes (2), así como zapateros, aserradores, naranjeros, industriales, molineros, obreros o silleros, todos ellos con 1 caso documentado. El sector terciario también estaba representado con comerciantes, panaderos, carreteros o barberos, también con un caso documentado.

Durante el periodo 1939-1944 cada uno de los años se incoaron expedientes a vecinos de Onda. El ritmo fue inicialmente muy alto, aunque progresivamente menos intenso hasta llegar al año 1944, en el que sólo se llegó a incoar 1 expediente.

Gráfica 5.28



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

La alcaldía de Onda¹² realizaba unos informes en los que se destaca especialmente la relación de bienes del inculcado y su valoración económica, sin entrar en ningún tipo de valoración moral o social, aunque sí indagaba en la situación familiar. Todo parece indicar que este informe servía de modelo para el de la FET y de las JONS local. La Guardia Civil de Onda, con el Comandante Miguel Blasco Blasco como firmante, realizaba informes en sintonía al de la alcaldía. No tenemos constancia de informes de la autoridad religiosa de Onda. Por otra parte la Guardia Civil de Onda realizaba también los informes de los vecinos de Suera.

¹² Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Antonio Diago Torres y Francisco Muñoz Prades, Caja 10064. AHPCS.

Relación de vecinos de Onda afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Aguilella Carceller, Salvador	Castelló Casalta, Dolores
Aguilella Castelló, Trinidad	Castelló Sol, Dolores
Aguilella Feliu, José	Castells Negre, María
Aguilella Gaya, Joaquín	Catalán Esteve, Joaquín
Aguilella Huguet, Salvador	Catalán Esteve, Vicente
Aguilella Olucha, José	Catalán García, Vicente
Aguilella Piquer, Vicente	Catalán Plaza, Luis
Aguilella Prades, Miguel	Catalán Rochera, José
Aguilella Solsona, Antonio	Catalán Rochera, Miguel
Albella Roca, Antonio	Catalán Vives, Miguel
Alfonso Perales, José	Colera Aguileña, Salvador
Alfonso Varea, José	Chiva Torres, Juan
Alfonso Vicente, Vicente	Chorva Granell, Vicente
Alonso Perales, Vicente	Diago Carceller, José
Amorós Bonet, Carmen	Diago Palatsí, Carmen
Amos Marín, Delfín	Diago Peris, Bernardo
Arrando Sansano, Enrique	Diago Sidro, Vicente
Aznar Villanueva, Avelina	Diago Torres, Antonio
Bachero Vilar, José	Diago Torres, Vicente
Bagán Ramos, Antonio	Esteve Prades, Ramón
Ballestar Varea, Francisco	Fabregat Ferrandis, Teresa
Ballester Centelles, Francisco	Feliu Guillamón, Tomás
Barea Vicente, Encarnación	Feliu Pons, Antonia
Barriel Masó, Javier	Feliu Ramos, Antonio
Barriel Masó, José	Foya Vives, Antonio
Bernat Gasch, Ramón	Franch Diago, Antonio
Bernat Vilar, Modesto	Furió Agustina, Antonio
Bernia Calatayud, Salvador	Furió Durá, Pedro
Bonet Castellet, Antonia	Gabaldá Aguilella, Manuel
Bonet Castells, Antonia	Gálvez Segarra, Ramón
Bonet Llopis, Paulina	García Alfonso, Elías
Cabedo Ripollés, Bautista	García Bert, Santiago
Canelles Ten, Vicente	García Carceller, María
Carda Sansano, Vicente	García Lapiedra, Vicente
Casalta Badenes, José	García Vives, Bautista
Caselles Ten, Vicente	Gasch Guillamón, Ana María
Castañ Fasius, Vicente	Gavaldá Aguilella, Manuel
Castañ García, Encarnación	Gaya Llopis, Rafael
Castelló Aguilella, José	Gaya Vives, Antonio

Gil Alberó, Joaquín
 Gil Alvarado, Juan Bautista
 Gimeno Llopico, José
 Gonet Llopis, Paulina
 Gorris Varea, Joaquín
 Gra Montoliu
 Guillamón Castelló, Luis
 Guinot Álvaro, Ramón
 Guinot Castells, Miguel
 Guinot Corella, Adela
 Herrando Castellón, Ramón
 Herrera Sales, Bautista
 Huguet Piñón, Francisco
 Insa Feliu, Rosario
 Insa Manzanera, José
 Insas Prades, Ramón
 Lapica Miravet, Francisca
 Linares Chaume, Juan
 Lleó Traver, Francisco
 Llopico Momplet, José
 Llopis García, Emilio
 Llorens Dubon, Joaquín
 Llorens Renau, Salvador
 Llorens Sol, Salvador
 Lloscos Sol, Emilio
 Macián Marco, José
 Manuel Castelló, Francisco
 Manuel Castellón, Antonio
 Marco Pérez, Ismael
 Marcos Sansano, Francisco
 Marimón Corbella, Salvador
 Marimón Corella, Salvador
 Marimón Guillamón, Dolores
 Marqués Moliner, José
 Marqués Moliner, Julia
 Martí Agramunt, Vicente
 Martí Aguilera, Dolores
 Martí Alfonso, Antonio
 Martí Álvaro, Antonia
 Martí Álvaro, Vicente
 Martí Ballester, Salvador
 Martí Diago, Andrés
 Martí Varea, Dolores

Marzá Herrero, Pedro
 Masó Forés, Juan
 Mirallave Sales, Pedro
 Mirallave Sales, Sofía
 Miramón Guillamón, Vicente
 Miravet Sales, Pedro
 Moliner Balaguer, Teresa
 Montoliu Badenes, Juan
 Montoliu Badenes, Teresa
 Morro Ortells, Joaquín
 Muñoz Arrando, Rafael
 Muñoz Prades, Carmen
 Muñoz Prades, Francisco
 Nebot Llansola, Ramón
 Olucha Gaya, Vicente
 Olucha Llister, María
 Ortells Alfonso, Francisco
 Osuna Calvo, Francisco
 Padilla Emo, José
 Pascual Dobón, Antonio
 Pascual García, Ismael
 Pascual Vidal, Antonio
 Pejo Aguilera, José
 Pejo Taús, José
 Pérez Badía, Ángeles
 Pérez Gallén, Elías
 Pérez Muñoz, Cecilia
 Pérez Prades, José
 Pérez Prades, Vicente
 Peris Muñoz, Cecilia
 Piquer, Vicente
 Piquer Ronda, Joaquín
 Pitarch Beltrán, Higinio
 Pitarch Beltrán, Miguel
 Prades Aguilera, José
 Prades Forés, Vicente
 Prades Pejó, Emilio
 Raigada Sansano, José
 Ramos Catalá, Antonio
 Ramos Pastor, Francisca
 Ramos Sanahuja, José
 Ramos Serrano, José
 Rausell Martí, Salvador
 Rebol Aguilera, Carmen

Reboll Olucha, Joaquín
Ribes Castellón, Salvador
Roca Andreu, Joaquín
Roca Blasco, Miguel
Roca Gadea, Joaquín
Roca Miguel, Federico
Roca Montoliu, Antonio
Roca Vidal, José
Ronda Emo, Amparo
Rovira Muñoz, Miguel
Rovira Sansano, Salvador
Sales Huguet, José María
Salvia Aguilera, Felipe
Sanahuja Prats, María
Sansano Gaya, Carmen
Sansano Peris, Tomás
Satiner Gadea, Antonio
Sidro Moria, Amado
Silvestre Gadea, José
Silvestre Pallarés, Bautista
Sol Aguilera, Salvador
Sol Pérez, Miguel
Sola Arnau, José
Solá Safont, Antonio
Taus Castañ, Antonio

Taus Ferri, Miguel
Taus Ribes, Manuel
Tomás Monserrat, Pilar
Torres Diago, Salvador
Torres Herrera, Emilio
Torres Viala, Emilio
Tosca Gil, José
Varea Blasco, María
Varea Vicent, Antonio
Varea Vicent, Dolores
Varea Vicent, Encarnación
Varea Vicente, Antonio
Vernia Calatayud, Salvador
Vicent Molina, Juan
Vicent Salvador, Tomás
Vidal Martí, Antonio
Vidal Verdia, Juana
Villa Zurita, Bartolomé
Villar Inarvaiza, María del Pilar
Vives March, Manuel
Vives March, Vicente
Vives Olucha, Elías
Vives Olucha, Salvador
Zarzoso Sansano, Sofia

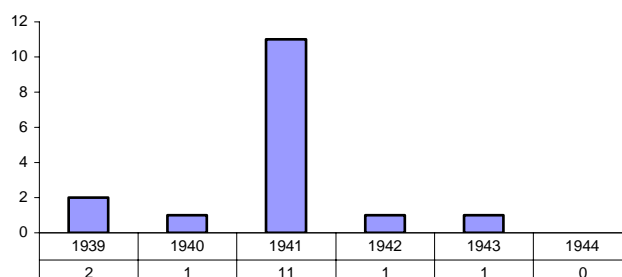
OROPESA



En Oropesa la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 32 personas, un 0,51% del total provincial y el 3,03% de la población total de la localidad. Sólo hubo 1 caso de mujer, que representaba el 0,17% de la población femenina local. Los 31 hombres implicados suponían el 6,54% de la población masculina de la localidad.

La mayoría nuevamente eran labradores y jornaleros, aunque en esta población existe una notable representación de trabajadores del sector terciario de la economía, ya que entre ellos había 3 funcionarios, 1 chofer, 1 guardia civil. También había 1 industrial y 1 albañil. Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1943, aunque fue en el año 1941 cuando se registró el mayor número de incoación de expedientes.

Gráfica 5.29



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

La Guardia Civil de Oropesa realizaba informes en los que se describía la evolución política del inculcado, así como la situación familiar y económica. Los informes de la alcaldía y de FET y de las JONS de la localidad estaban claramente conectados, siendo el primero el original, con un tono fiscalizador que no ahorraba en calificativos morales y sociales despreciativos y acusatorios. No tenemos constancia de informe de la autoridad religiosa.¹³

¹³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Herrero Lleonart, Caja 10094. AHPCS.

Relación de vecinos de Oropesa afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Aguilar Querol, Francisco
Aixa Ofrecio, José
Aixa Ribes, Vicente
Albert Juan, Vicente
Belda Gandía, Agustín
Bernat Rubio, Pascual
Bort Borrás, Eduardo
Casanova Ibáñez, Pedro
Cuevas García, Antonio
Cuevas Martí, Bautista
Cuevas Pitarch, Adolfo
Cuevas Pitarch, Bautista
Cuevas Pitarch, José
Cuevas Sales, Vicente
Doménech Pitarch, Vicente
Galarza Traver, Caralampio

García Alós, Manuel
García Bojados, Elías
Gor Borrás, Eduardo
Gual Mateo, José
Herrero Lleonart, José
Llorens Aragonés, Magín
Llorens Dols, José
Llorens Persiva, Elvira
Martínez Vidal, Constantino
Moreno Llorens, Modesto
Ribes Ferri, José
Segarra Gimeno, Fermín
Sirvert Escoín, Celestino
Valls Traver, Daniel
Vidal Llorens, Marcelino
Vidal Martínez, Salvador

ORTELLS



En Ortells hubo 10 personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, lo que supone un 0,16% del total provincial y el 2,94% del total de la población de la localidad. Dos de estas personas eran mujeres, lo que representaba el 1,07% de la población femenina local, mientras que los 8 hombres restantes suponían el 5,22% de la población masculina de la localidad.

No disponemos de más datos sobre las mujeres implicadas se dedicaba a trabajar en su casa, mientras que dos de los expedientes se incoaron en 1940. En el Archivo Histórico Provincial de Castellón únicamente se conservan testimonios de condena por parte de un tribunal militar, por lo que tampoco podemos ofrecer datos sobre las actitudes de las autoridades locales.

Relación de vecinos de Ortells afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bonet Almela, Francisco
Eixach Giner, Filomena
Folch Rebolleda, Isabel
Giner Pitarch, Fernando
Michavila Ramia, Antonio
Ramos Giner, Domingo
Sabater Querol, Gabriel
Tallada Martí, Miguel
Tallada Martín, Pedro Juan
Tena Vives, Manuel

PALANQUES



En Palanques fueron 3 los vecinos implicados en la exigencia de responsabilidades políticas, un 0,04% del total provincial y un 1,38% de la población total de la localidad, además de un 2,83% de la población masculina local. Únicamente conocemos la profesión de ebanista de uno de los implicados, así como la incoación de 2 expedientes en 1941.

La alcaldía de Palanques, en manos de José Allepuz, y la Delegación Local de FET y de las JONS, a cargo del mismo, realizaban idénticos informes en los que se primaba la explicación de la situación familiar y la económica del inculpado (el informe del partido único era una copia a mano del de la alcaldía, por lo que a pesar de tener el mismo autor se mantenían las apariencias de ser distintos informes). La Guardia Civil encargada de realizar los informes de Palanques era la de Zorita, sin aportar datos nuevos respecto a los anteriores informes. Ezequiel Saura, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Palanques ofrecía básicamente la misma información aunque con una redacción totalmente distinta e independiente.¹⁴

Relación de vecinos de Palanques afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Balaguer Balaguer, José Joaquín

Cardona Mampel, José

Milián Castell, José

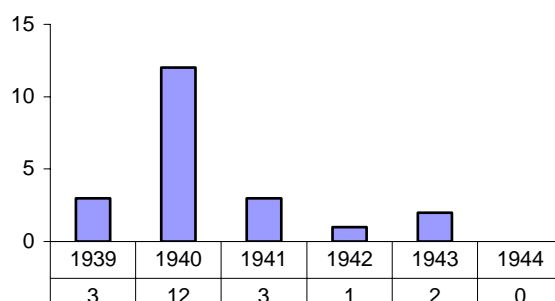
¹⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Milián Castell, Caja 10127. AHPCS.

PEÑÍSCOLA



En Peñíscola el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 42, un 0,67% del total provincial y un 1,43% de la población total de la localidad. Sólo 1 de estas personas era mujer, lo que representaba el 0,06% de la población femenina local, mientras los 41 hombres restantes suponían el 2,9% de la población masculina de la localidad. Sabemos de la existencia de 3 labradores, 2 jornaleros, 1 pescador, 1 albañil y 1 empleado comercial. La incoación de expedientes se realizó durante los años 1939-1943, teniendo su momento álgido en el año 1940, como consecuencia de la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola.

Gráfica 5.30



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

La Guardia Civil encargada de realizar los pertinentes informes era la del Puesto de Benicarló, centrándose en la evolución política y en la explicación de los presuntos delitos cometidos durante la guerra, así como en la inevitable relación de bienes con su valoración económica. Juan Bayarri, alcalde de Peñíscola se centraba en su orientación política y en sus bienes, con una redacción independiente de la anterior. La Delegación Local de FET y de las JONS, en manos de Jaime Martí, hacía lo mismo, aunque su valoración económica era mucho más detallada. No tenemos constancia de informes de la autoridad religiosa local.¹⁵

¹⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Castell Albiol, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Peñíscola afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Aiza Albiol, José	Forner Blasco, Juan Antonio
Albiol Arenós, Romualdo	Forner Geida, Romualdo
Albiol Guzmán, José	Galán Castell, José
Albiol Llorens, Agustín	Gondomar Expósito, Gabriel
Albiol Vidal, Alfredo	Limperia Rull, Matías
Albiol Vinaiza, Isabel	Llopis Albiol, Mateo
Albiol Zaragoza, Vicente	Monroig Bayarri, Vicente
Alloza Bermell, Leandro	Morales Albiol, Manuel
Ayza Oms, José	Oms Oms, Antonio
Bayarri Albiol, Manuel	Paris Ayza, Antonio
Bayarri Albiol, Valentín	París Colom, Bautista
Beltrán Simó, Manuel	Pastor Orts, Olegario
Benito Ibáñez, Ignacio	Roig Castell, Ventura
Blasco Albiol, Agustín	Roig París, Vicente
Castell Albiol, Manuel	Roig Salvador, Bautista
Castell Ayza, Miguel	Rovira Arenós, Vicente
Castell Boix, José	Serrat Martí, Agustín
Castillo Pons, Francisco	Sierra Oro, Carlos
Cheto Marín, Manuel	Vicente Salvador, Leoncio
Esbrí Albiol, Antonio	Vizcarro Ayza, José
Esbrí Tomás, Vicente	Vizcarro Roca, José

PINA DE MONTALGRAO



En Pina de Montalgrao 2 personas, hermanos, fueron los implicados en la exigencia de responsabilidades políticas. Esto suponía el 0,03% del total provincial, el 0,38% de la población total de la localidad y el 0,71% de la población masculina local. Los únicos datos que las fuentes nos muestran sobre estos expedientados son que ambos se incoaron en 1940. En el Archivo Histórico Provincial de Castellón sólo se encuentran los testimonios de condena por un tribunal militar que pudieron en su día generar la incoación de sendos expedientes.

Relación de vecinos de Pina de Montalgrao afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Ávila Clemente, Julián

Ávila Clemente, Vicente

POBLA DE BENIFASSÀ



En la Pobla de Benifassà fueron 43 las personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, lo que representa un 0,68% del total provincial y un 6,66% de la población total local. Entre estas personas 6 eran mujeres, con lo que un 1,74% de la población femenina local estuvo afectada, mientras que los 37 hombres implican que el 12,29% de la población masculina de la localidad estuvo implicada.

Dado que la única información que tenemos en el Archivo Histórico Provincial de Castellón sobre estas personas proviene de copias de testimonio de condena por un tribunal militar y lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, sólo podemos asegurar, salvo los nombres de los implicados, que 1 de los expedientes fue incoado en 1939.

Relación de vecinos de la Pobla de Benifassà afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Bel, José	Castellet Roig, Indalecia
Andreu Castellet, Julián	Castellet Valls, Juan
Bel Bel, Agustín	Castellets Casanova, Francisco
Bel Berge, Ramón	Castillo Negre, Vicente
Bel Pallarés, Fernando	Clausell Ferreira, Luís
Bel Verge, Ramón	Garay Bonet, Vicente
Calvet Clot, Dolores	Ibáñez Bellés, Francisco
Capdevila Roig, Herminia	Ibáñez Castellet, Manuel
Casanova Bellés, Obdulio	Ibáñez Castellet, Vicente
Casanova Roig, Matilde	Latorre Beltrán, Cristóbal
Casanova Sabater, José	Luna Pauner, Carmen
Casañ Doménech, Daniel	Llorens Rubio, Francisco
Castellet Casanova, Tomás	Llorens Rubio, Leocadia
Castellet Llorens, Juan	Marzá Pallarés, Diosdado
Castellet Marzá, Diosdado	Marzá Roig, Diosdado
Castellet Roig, Delfín	Marzá Roig, Domingo

Miró Pla, José
Pallarés Bel, Manuel
Pallarés Palau, Miguel
Pallarés Rubio, Vicente
Renau Casanova, Vicente
Renau Tomás, Vicente

Roig Renau, José
Safont Personat, Senen
Selma Campos, Pascual
Tomás Pauner, José
Valero Castillo, José

PORTELL DE MORELLA



En Portell de Morella hubo 11 vecinos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que significaba un 0,17 del total provincial, un 1,2% del total de la población local y, como todos ellos eran varones, un 2,4% de la población masculina de la localidad. Prácticamente todas estas personas eran labradores y jornaleros, y sus expedientes se incoaron en 1940 (1 caso) y 1941 (4 casos).

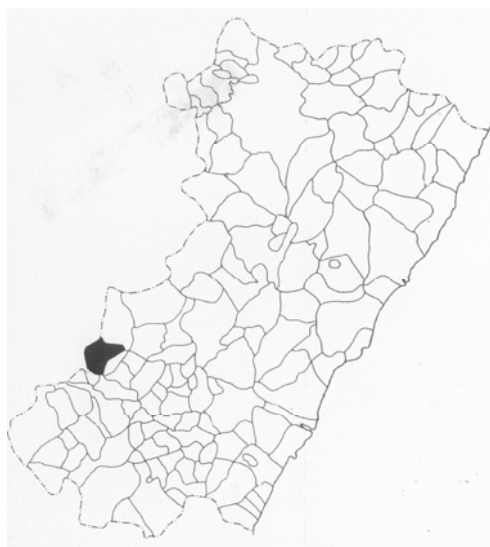
La Guardia Civil encargada de realizar el informe de estos vecinos era la del Puesto de Cincorres. El comandante Ramón Castell realizaba informes en los que se resumía la situación personal del inculcado y sus bienes. El alcalde de la localidad, Amado Dols, añadía a estos datos algunos detalles familiares y profesionales. Germán Agut, Jefe Local de FET y de las JONS, se limitaba a copiar a mano el informe de la alcaldía y firmarlo. Antonio Monfort, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Portell de Morella aludía en sus informes el hecho de llevar poco tiempo en la población para realizar el informe, llegando incluso a no especificar sus bienes, una información que estaba a su alcance.¹⁶

Relación de vecinos de Portell de Morella afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bono Roig, Miguel
Carceller Segura, Elías
Carceller Segura, Rufino
Ferrer Boix, Valeriano
Ferrer Julián, Alejandro
Guarch Boix, Miguel
Mestre Camañes, Jeremías
Monteagudo Carrión, Salustiano
Piquer Plana, Bernardo
Rambla Ferrer, Clemente
Royo Boix, Enrique

¹⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Royo Boix, Caja 10128. AHPCS.

PUEBLA DE ARENOSO



En Puebla de Arenoso fueron 17 los vecinos implicados en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, un 0,27% del total provincial y un 1,14% de la población total de la localidad. La única mujer implicada representaba el 0,13% de la población femenina local, mientras los 16 hombres restantes suponían el 2,15% de la población masculina de la localidad.

La totalidad de los encausados, incluida 1 de las mujeres, aparecen como labradores y jornaleros. Sabemos que 1 expediente fue incoado en 1939, 3 en 1940 y 3 más en 1941.

Las autoridades locales de Puebla de Arenoso realizaban informes aparentemente independientes entre sí pero que curiosamente ofrecían el mismo tipo de información, ya que tanto la Guardia Civil, desde el Puesto de Cortes de Arenoso, como el alcalde Pedro Gil o el Delegado Local de FET y de las JONS Joaquín Navarro, se centraban exclusivamente en los bienes del inculcado y su valoración económica. No tenemos constancia de informes de la autoridad religiosa local.¹⁷

¹⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Collado Mansergas, Caja 10075. AHPCS.

Relación de vecinos de Puebla de Arenoso afectados por la Ley de Responsabilidades
Políticas:

Calpe Cebrián, Jaime
Calpe Nebot, Ángel
Collado Mansergas, Miguel
Martín Pérez, Joaquín
Montes Sanjaime, Vicente
Montes Zarzoso, Samuel
Morte San Jaime, Vicente
Navarro Mansergas, Antonio
Navarro Mansergas, Arcadio
Nebot Catalán, Joaquín
Oliveras Collado, Ramón
Pérez Salvador, Santiago
Salvador Navarro, Manuel
Salvador Sacristán, Joaquín
Salvador Salvador, Antonio
San Jaime, Vicente Montes
Zarzoso Izquierdo, Engracia

PUEBLA TORNESA



En Puebla Tornos fueron 17 las personas que sufrieron las consecuencias de la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que supone un 0,27% del total provincial y un 2,2% de la población total de la localidad. De estas personas 14 eran varones, lo que representaba el 3,64% de la población masculina local, mientras las 3 mujeres suponían el 0,77% de la población femenina de la localidad. La mayoría eran labradores, además de 1 jornalero y 1 barbero. Sabemos que 2 de las mujeres trabajaban en sus hogares. La incoación de expedientes se produjo en el periodo 1939-1941, teniendo documentados 4 casos en 1939, 9 casos en 1940 y 3 casos en 1941. A partir de este último año ya no se incoaron más expedientes a vecinos de esta localidad. Algunos de los expedientes fueron incoados por la remisión al Juzgado Instructor de Provincial de Responsabilidades Políticas de una relación de presuntos vecinos responsables políticamente por parte del Gobernador Civil de la Provincia.

La alcaldía, en manos de Vicente Roig, realizaba informes en los que se detallaba el pasado político del inculcado, sus presuntos hechos delictivos producidos durante la guerra y la valoración económica de sus bienes. El Delegado Local de FET y de las JONS se limitaba a copiarlo y firmarlo. La Guardia Civil, bajo el mando del Comandante José Sospedra Vidal, no añadía ningún dato nuevo, aunque utilizaba una redacción independiente. Emilio Pons, cura de la Parroquia de la Puebla Tornos, también se limitaba a copiar el informe de la alcaldía.¹⁸

¹⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Castellet Llorens, Caja 10091. AHPCS.

Relación de vecinos de Puebla Ternes afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albalat Pitarch, Teresa
Castellet Casanova, Francisco
Castellet Casanova, Tomás
Castellet Llorens, Juan
Castellet Marzá, Diosadado
Castellet Roig, Indalecia
Castellet Valls, Juan
Castellet Valls, Manuel
García Tore, Dolores
Llorens Rubio, Francisco
Marzá Roig, Diosdado
Pallarés Palau, Miguel
Renau Tomás, Vicente
Roig Llorens, Eduardo
Roig Renau, José
Selma Campos, Pascual
Tomás Casanova, José

RIBESALBES



En Ribesalbes también fueron 17 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,27% del total provincial y un 1,93% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos varones el 4,27% de la población masculina local se vio afectada. Las profesiones de estas personas que tenemos documentadas son muy variadas: 2 carpinteros, 1 labrador, 1 comerciante, 1 albañil, 1 panadero, 1 secretario y 1 recaudador de contribución. Conocemos la fecha de incoación de 9 de los expedientes, repartidos en 5 casos en 1940 y 4 casos en 1941.

Las autoridades locales de Ribesalbes realizaban informes sobre los vecinos inculcados de forma independiente y sin aparente conexión. La Guardia civil, en la figura del Comandante José Traver, se centraba en los bienes que disponían y en su forma de ganarse la vida. El alcalde Julio Bonet analizaba la situación familiar e insistía en los bienes y su valoración económica. Vicente Colom, Delegado Local de FET y de las JONS, analizaba el trabajo del inculcado y en la situación económica de sus familiares. El cura Vicente García, de la Iglesia Parroquial de Ribesalbes, realizaba informes bastante detallados y completos que ofrecían datos de todos los aspectos, salvo los morales, desde una posición totalmente independiente.¹⁹

¹⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Quijón Orbay, Caja 10103. AHPCS.

Relación de vecinos de Ribesalbes afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

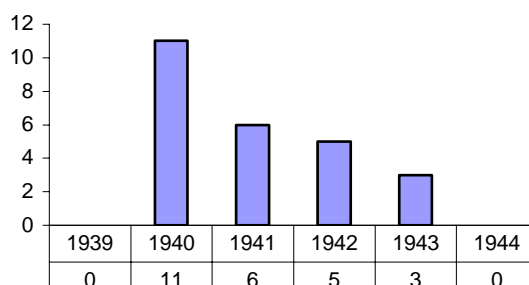
Albalat Masó, José
Arza Lavall, Cristóbal
Bonet Edo, Alfonso
Catalán Durá, Salvador
Figás Albalat, Antonio
Figas Sanahuja, José
García Abad, Emilio
Ibáñez Baguena, Antonio
Ibáñez Baguena, José
Ibáñez Pastor, José
Llach Carbó, José
Lluesma Nebot, Antonio
Moliner Albalat, Vicente
Pastor Ventura, Honorato
Quijón Orbay, Manuel
Ros Benet, Vicente
Ten Baguen, Antonio

ROSELL



En Rosell el número de implicados en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas fue de 37, un 0,59% del total provincial y un 2,07% de la población total de la localidad. Entre ellos sólo hubo 1 caso de mujer, que representaba el 0,1% de la población femenina local, mientras los 36 varones restantes suponían el 4,31% de la población masculina de la localidad. Tenemos documentados entre estas personas a 10 labradores, 2 jornaleros, 1 carpintero, 1 albañil y 1 comerciante. Los expedientes se incoaron en el periodo 1940-1943, siendo el primero de los años el de mayor número de incoaciones.

Gráfica 5.31



Fuente: BOP, AHPCS. Elaboración propia.

La alcaldía era la autoridad local de referencia. Su actitud colaboracionista le llevó incluso a denunciar a algunos de los vecinos. Realizaba informes en los que se analizaba la situación familiar y la evolución política del inculcado en los últimos años, además de informar sobre los bienes y su valoración económica. Tanto los informes de la Guardia Civil como de FET de las JONS local se basaban en este informe original, siendo todos ellos bastante extensos. Juan Bayarri, de la Parroquia de los Santos Juanes de Rosell realizaba en sus informes catalogaciones ideológicas y económicas de los inculcados²⁰. Hemos de recordar que la Guardia Civil de Rosell también realizaba los informes de los vecinos de Ballestar y Bojar.

²⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Prades Querol, Caja 10104. AHCS.

Relación de vecinos de Rosell afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abella Adell, Bernabé
Achover Guimerá, José
Caballer Pla, Matías
Caballes Benet, Vicente
Canós Gabaldá, Bautista
Cardona Juan, Francisco
Cardona Muñoz, Joaquín
Cardona Tomás, Valentín
Cervera Arasa, José
Cervera Bel, Bautista
Comos Gabalda, Bautista
Cuartiella Roda, Joaquín
Fenollosa Cuartiell, Angelina
Gabalda Martí, Vicente
Gavaldá Fenollosa, Jaime
Griña Querol, Juan
Griño Niñerola, Virgilio
Hilario Expósito, Ignacio
Jovaní Meseguer, Vicente

Meseguer Michavila, Bautista
Niñerola Pla, José
Niñerola Pla, Juan
Niñerola Pla, Vicente
Pagues Ron, Vicente
Pla Cardona, Valentín
Pla Fenollosa, José
Pla Tomás, Juan
Prades Querol, Francisco
Querol Cardona, José
Querol Fenollosa, Manuel
Querol Roda, Joaquín
Querol Roda, José
Querol Zaragoza, Bautista
Roda Iranzo, José
Sabater Baila, Vicente
Segura Expósito, Emilio
Verge Cardona, Francisco

SALSADELLA



En Salsadella fueron 24 las personas implicadas en la jurisdicción especial de responsabilidades políticas, lo que supone el 0,38% del total provincial y el 1,67% de la población total de la localidad. Sólo conocemos el caso de 1 mujer, que representaba el 0,13% de la población femenina local. Los 23 varones restantes suponían el 3,33% de la población masculina de la población. Profesionalmente, tenemos documentada la existencia de 3 labradores y 4 jornaleros, todos ellos, por tanto, pertenecientes al sector primario de la economía. Conocemos la incoación de 5 expedientes en 1941, 2 en 1942 y 2 en 1943.

Sin ningún tipo de duda la autoridad local que servía de modelo y referencia en Salsadella era la Guardia Civil. Ésta emitía unos informes en los que se explicaba la situación familiar del inculcado y la relación de bienes que disponía y su valoración económica. Tanto el alcalde Tomás Montrell, como el Delegado Local de FET y de las JONS, Bautista Montrell, como el cura Vicente Paulo Sales, se limitaban a copiar este informe original y firmarlo como propio. Además, todas las copias se fechaban en el mismo día.²¹

²¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Carceller Albiol, Caja 10127. AHPCS.

Relación de vecinos de Salsadella afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

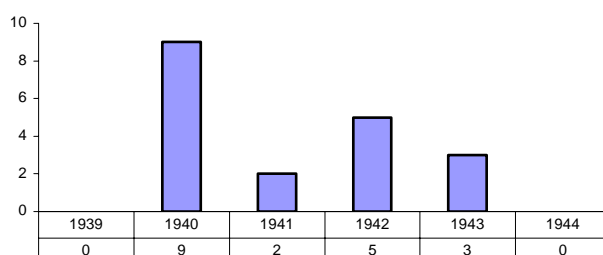
Beltrán Mateo, Tomás
Beltrán Monfort, Eleuterio
Benlliure Beltrán, Pedro
Boix Ripoll, Joaquín
Boix Ripoll, José María
Carceller Albiol, Miguel
Casals Monfort, José Manuel
Cifre Salvo, Rafael
Ferrerres Montull, Daniel
Fraga Vilaplana, Asunción
Juan Albiol, Salvador
Mateu Sales, Raquel
Milián Castells, José
Pauls Vilaplana, Eduardo
Pruñonosa Querol, Miguel
Pruñonosa Tena, José
Ripoll Fenollosa, Antonio
Ripoll Montoliu, Severino
Ripoll Pruñonosa, Antonio
Roca Albert, Enrique
Sales Benet, Vicente Tomás
Sales Puig, Domingo
Salvador Monfort, Nicolás
Tena Tereixa, Francisco

SAN JORGE



En San Jorge fueron 51 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,81% del total provincial y un 4,46% de la población total de la localidad. Tenemos documentado los casos de 3 mujeres, que representaban el 0,48% de la población femenina local, mientras que los 48 varones afectados suponían el 9,24% de la población masculina de la población. En su mayoría eran labradores y jornaleros, aunque conocemos la presencia de 1 barbero, 1 albañil y 1 esquilador. Los expedientes se incoaron en el periodo 1940-1943, con dos máximos, uno principal en el año 1940 y otro secundario en el año 1942. Muchos de los expedientes incoados en 1940 se deben a los datos aportados por el Servicio de Recuperación Agrícola.

Gráfica 5.32



Fuente: BOP, AHPCS

La autoridad local más independiente era la Guardia Civil, que realizaba informes que trataban los datos personales y el historial político y sindical del inculcado. El alcalde Ismael Puchal, el Delegado Local de FET y de las JONS, Juan Esteller y el cura Antonio B., realizaban informes muy parecidos entre si, atendiendo a informaciones personales y familiares.²²

²² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Batalla Jovaní, Caja 10089. AHPCS.

Relación de vecinos de San Jorge afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agramunt Esteller, Bautista	Esteller Esteller, Manuel
Agramunt Esteller, Vicente	Esteller Marín, José
Arnau Duatis, Pascual	Ferreres Borrás, Bautista
Batalla Esteller, Domingo	Ferreres Esteller, Vicente
Batalla Jovaní, Juan	Ferreres Verge, Juan Bautista
Batiste Ferrer, Bautista	Folia Pla, Juan
Batiste Ferrer, Joaquín	Franch Balaguer, Vicente
Bayarri Ferreres, Bautista	López Esteban, Tomás
Bel Cano, José	Lladser Sanz, Antonio
Cabanes Martorell, Tomás	Marín Adell, Hilario
Cañada Folía, Bautista	Martínez Julve, Alfredo
Capafons Conesa, Guillermo	Michavila Agramunt, Ángel
Castell Balaguer, Vicente	Miralles Ronchera, María Rosa
Castelló Bonet, Gregorio	Molina Rubio, Pedro Juan
Centelles Agramunt, Francisco	Palatsí Lluch, Juan
Doménech Esteller, Inocencio	Puchol Betti, José
Doménech Esteller, Juan Bautista	Roca Querol, Francisca
Duatis Blasco, José	Ronchera Conesa, Vicente
Duatis Sancho, Bautista	Ronchera Ferrer, José
Duch Esteller, Cándido	Ronchera Ferrer, Vicente
Esteller Batalla, José	Sancho Cabanes, Francisco
Esteller Cifre, Antonio	Sancho Marcos, Agustín
Esteller Esteller, Bautista	Sancho Sogues, José
Esteller Esteller, Carlos	Valls Sanz, Domingo
Esteller Esteller, José	Vidal Casanada, Josefa
	Vidal Ripollés, Vicente

SAN MATEO



En San Mateo el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 47, un 0,75% del total provincial y un 1,57% de la población total de la localidad. Entre estas personas 44 eran varones, lo que representaba el 3,05% de la población masculina local, mientras los 3 casos de mujeres suponían el 0,19% de la población femenina de la localidad. Tenemos documentadas entre estas personas a 2 panaderos, 1 labrador, 1 jornalero, 1 sirviente, 1 abogado, 1 chofer y 1 industrial. Conocemos también la incoación de 3 expedientes en 1940, 5 en 1941 y 4 más en 1943.

Las autoridades locales de San Mateo emitían informes en los que de forma casi exclusiva la única información que se ofrecía de los inculpados era la económica. Tanto la alcaldía como el Jefe Local de FET y de las JONS, Tomás Vilagrassa, como el Comandante de la Guardia Civil se limitaban a realizar una relación de los bienes y acompañarla de su valoración económica. No tenemos constancia de informes de la autoridad religiosa.²³

²³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Caballer Monterde, Caja 10099. AHPCS.

Relación de vecinos de San Mateo afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Mulet, Bautista
Adell Mulet, Benjamín
Aragóns Cucala, Juan
Ballester Forner, Vicente
Barreda Pavía, Tomás
Bel Mulet, Juan
Beltrán Giner, Manuel
Boix Escorihuela, Blas
Bort Escorihuela, Joaquín
Caballer Besalduch, Juan
Caballer Besalduch, Luis
Calduch Altava, Bienvenido
Carbó Saura, Joaquín
Carreres Fullea, Joaquín
Cimarro Sorli, José
Conesa Subirats, José
Cot Roda, Agustín
Cucala Artiga, Francisco
Diago Monteverde, Rafael
Escorihuela Vilanova, Vicente
Fenollosa Granell, José
Ferrer Puig, Manuel
Ferrerres Cherta, Vicente
Ferrerres Despons, Vicente

Ferrerres Forner, José
Ferrerres Garcerán, Gaspar
Ferrerres Ortiz, Vicente
García Vallejo, Federico
Granell Diago, Pilar
Granell García, José
Granell Redó, Juan
Mateu Selma, Asunción
Monteverde Bonfill, Vicente
Mulet Jovaní, Agustín
Mulet Mateu, Manuel
Pascual Moliner, Vicente
Peraire Bellés, Pascual
Puig Puig, Francisca
Roig Font, Joaquín
Sabater Moliner, José
Sabater Moliner, Mateo
Sales Monzó, Severino
Simó García, Juan
Simó Sorli, Joaquín
Sospedra Catay, Luciano
Sospedra Estrada, Vicente
Vilanova Mateu, José

SAN RAFAEL DEL RÍO



En San Rafael del Río la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 17 personas, todos ellos varones. Esta cifra representaba el 0,27% del total provincial y el 2,79% de la población total de la población. Al ser todos ellos varones el 8,17% de la población masculina local se vio implicada. Se trataba fundamentalmente de labradores y jornaleros, acompañados al menos por 1 carpintero y 1 albañil. Los expedientes se incoaron en el periodo 1940-1942. En 1941 tenemos documentada la incoación de 1 expediente, en 1941 8 expedientes y en 1942 el último de ellos.

Vicente Balada, alcalde y Delegado Local de FET y de las JONS tuvo un papel activo y muy importante a la hora de realizar los informes sobre los implicados, ya que realizó distintos informes-denuncia de vecinos. Para ello utilizaba una plantilla que indagaba multitud de aspectos políticos, familiares, personales y morales de los inculcados, sin olvidar los datos de las fuentes (ver Apéndice Documental). Tras este informe-denuncia los obligados informes posteriores no eran más que un resumen de su situación familiar y evolución política. La Guardia Civil atendía también a esta evolución política y se centraba en los bienes y su valoración económica. Antonio Caballer Pla, cura de la localidad se desmarcaba de todo el proceso aludiendo desconocimiento por estar en la localidad poco tiempo.²⁴

²⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Obiol Caldach, Caja 10094. AHPCS.

Relación de vecinos de San Rafael del Río afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

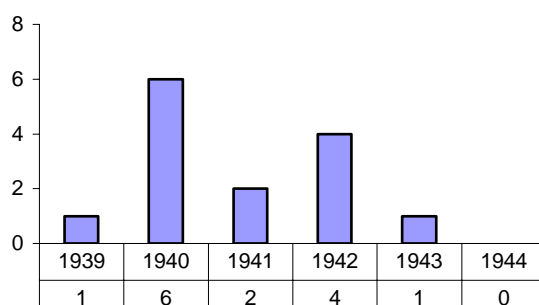
Balada Cuartiella, Vicente
Balada Tallada, Ezequiel
Castell Ricart, José
Cervera Balada, Valentín
Cervera Fibla, Bautista
Cuartiella Miñerola, Joaquín
Fibla Sales, Hermenegildo
Justiniano Prades, Antonio
Lluch Pruñonosa, Bautista
Obiol Calduch, José
Olviol Vizcarro, José
Pepió Salada, Juan
Prades Sancho, Ángel
Querol Magdalena, Juan
Querol Roda, Joaquín
Reverter Cuartiella, Evaristo
Reverter Itarter, Bautista

SANTA MAGDALENA DE PULPIS



En Santa Magdalena de Pulpis la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 23 personas, un 0,36% del total provincial y el 2,1% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos varones, en esta población el 4,37% de la población masculina local se vio afectado. La mayoría eran labradores y jornaleros, a los que acompañaban, según las fuentes consultadas, 1 industrial, 1 médico y 1 estudiante. Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1943, con un máximo principal en 1940 (como consecuencia de la remisión de datos a las autoridades por parte del Servicio de Recuperación Agrícola) y otro secundario en 1942.

Gráfica 5.33



Fuente: BOP, AHPCS

La autoridad local de referencia en Santa Magdalena de Pulpis era la Guardia Civil. El Comandante Juan Sancho realizaba informes centrados en la situación familiar del inculcado y en los bienes tanto personales como de la familia. Joaquín Pegueroles, Delegado Local de FET y de las JONS, realizaba un informe que no era una copia del anterior pero sí estaba claramente inspirado en él. El alcalde José Roig directamente firmaba una copia calcada del informe realizado por el partido único. No tenemos constancia de informes de la autoridad religiosa.²⁵

²⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Domingo Marín Bou, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Santa Magdalena de Pulpis afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

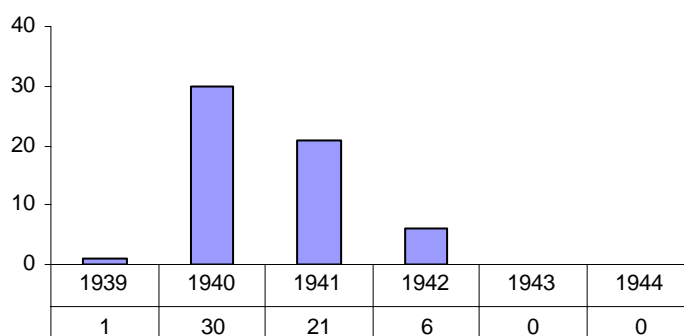
Achell Bou, Bautista Pascual
Acher Fabregat, José
Aicart Pruñonosa, Bautista
Azais Fernández, Leonardo
Bayarri Esbrí, Felipe
Blasco Beltrán, Francisco
Bonet Cucala, José
Calduch García, Zacarías
Cheto Marín, Hilario
Cheto Marín, Vicente
Esteller Gaudet, Vicente
Ferrerres Roso, José
Gamón Chillida, José
González Marín, Vicente
Ibáñez Valls, Francisco
Just Carot, Vicente
Marín Bou, Domingo
Martorell Nebot, Vicente
Palomo Bernat, Joaquín
Pavía Vilaplana, Bautista
Sospedra Ripollés, Joaquín
Sospedra Sospedra, Bautista
Sospedra Sospedra, Jaime

SARRATELLA



En Sarratella hubo 69 personas sobre las que cayó el peso de la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas, un 1,1% del total provincial y el 16,58% de la población total de la localidad. 17 de esas personas eran mujeres, con lo que el 7,7% de la población femenina local se vio afectada, mientras los 52 hombres implicados representaban el 26,66% de la población masculina de la localidad. Éstas son unas de las cifras más elevadas de toda la provincia de Castellón, consecuencia seguramente del intenso proceso revolucionario vivido por la localidad durante la guerra civil y por la voracidad de las autoridades locales. Entre los afectados tenemos documentados 14 labradores, 3 jornaleros y 2 propietarios. Llama la atención el número de mujeres implicadas, de las que conocemos 14 casos de dedicación a las tareas del hogar. Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1942, con dos años muy intensos: 1940 y 1941.

Gráfica 5.34



Fuente: BOP, AHPCS

El Delegado Local de FET y de las JONS, Ismael Villalonga, fue el autor de un gran número de denuncias de vecinos de su localidad. Además de a algunos hombres, podemos constatar que él solo denunció, y en sólo dos días, el 30 y el 31 de diciembre de 1940, a 15 de las mujeres a las que se abrió un expediente de responsabilidades políticas, la mayoría esposas cuyos maridos se encontraban encarcelados, lo que suponía un verdadero ajuste de cuentas. En sus denuncias Ismael Villalonga dejaba claros los datos personales del denunciado, su historial político y los presuntos delitos cometidos durante la República y la guerra civil, muchos de ellos como “votó al Frente Popular” o asistir a manifestaciones. El alcalde Antonio Miralles resumía la situación familiar y la económica del afectado, un texto que volvía a firmar sin modificaciones el mismo Ismael Villalonga en representación del partido único. A veces el informe de ambos consistía en una mera copia del informe-denuncia original. El Comandante de la Guardia Civil Esteban López se atenía también al texto de la alcaldía, al informe-denuncia original o especificaba algunos datos económicos. No tenemos constancia de ningún informe del cura párroco de la localidad.²⁶

²⁶ Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Manuela Alameda Cámara, Caja 10129; Carmen Martínez Sales, Caja 10129; Vicenta Monfort Peraire, Caja 10129; Visitación Monfort Sales, Caja 10143; Antonia Ortiz Sales, Caja 10129; Amparo Pastor Albert, Caja 10093; María Pastor del Rosario, Caja 10093; Vicenta Pastor García, Caja 10093; Adelina Pastor Sales, Caja 10129; Amparo Sales Beltrán, Caja 10143; Ana Sales Beltrán, Caja 10143; Genoveva Sales Centelles, Caja 10094; Susana Sales Centelles, Caja 10143; Rosa Valls Monfort, Caja 10143; Juana Salaes Centelles, Caja 10143; Antonia Barberá Beltrán; y también Manuel Pastor Pastor. AHPCS.

Relación de vecinos de Sarratella afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albert Monfort, Agustín
Alcocer Barreda, Antonio
Arín Barreda, Jaime
Asís Broch, Miguel
Barberá Beltrán, Antonia
Barberá Beltrán, Tomás
Barberá del Rosario, Antonia
Barreda García, Manuel
Barreda Ibáñez, Jaime
Barreda Pastor, Agustín
Barrera Beltrán, Tomás
Beltrán Pastor, Manuel
Bort Asunción, Vicente
Cardona Mampel, José
Castell Monfort, Jaime
Climent Pastor, Bernardino
Climent Pastor, Evaristo
Ferrando Tena, Javier
García Barrera, Tomás
García Ferrando, Jaime
García Monfort, Joaquín
García Rovira, Manuel
Llansola Carmona, Manuela
Martínez Sales, Carmen
Monfort Barberá, Pascual
Monfort Peraire, Jerónimo
Monfort Peraire, José
Monfort Peraire, Vicenta
Monfort Sales, Visitación
Monfort Tena, Manuel
Monfort Vilaplana, Daniel
Monfort Vilaplana, José
Montañés Dolz, Pablo
Nolco Rello, Vicente
Nos Llopis, Vicente

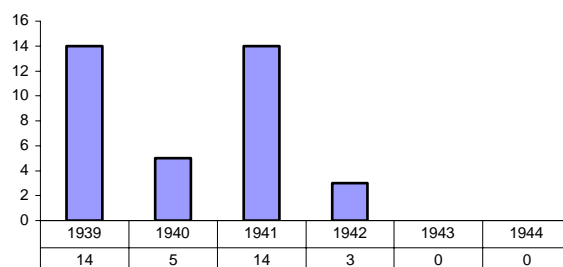
Ortiz Sales, Antonia
Pastor Albert, Amparo
Pastor Albert, Manuel
Pastor Barreda, Francisco
Pastor del Rosario, María
Pastor Ferrando, Elodia
Pastor García, Vicenta
Pastor Giner, Agustín
Pastor Pastor, Daniel
Pastor Pastor, José
Pastor Pastor, Manuel
Pastor Sales, Adelina
Pastor Sales, Marcel
Peraire Beltrán, Francisco
Roig García, Vicente
Sales Beltrán, Amparo
Sales Beltrán, Ana
Sales Centelles, Ángel
Sales Centelles, Daniel
Sales Centelles, Genoveva
Sales Centelles, Joaquín
Sales Centelles, Juana
Sales Peraire, Francisco
Sales Peraire, Manuel
Sales Sales, Joaquín
Selma Escrich, José
Solsona Barreda, Eulogio
Tena Barreda, José
Tena García, Daniel
Tena García, José
Tena Ibáñez, José
Valls Monfort, Rosa
Villalonga Monfort, Daniel
Villalonga Monfort, Manuel

SEGORBE



En Segorbe fueron 74 las personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, un 1,18% del total provincial y un 1,13% de la población total de la localidad. De estas personas 7 eran mujeres, lo que representaba el 0,2% de la población femenina local, mientras que los 67 hombres restantes suponían el 2,21% de la población masculina de la localidad. Según la documentación consultada conocemos la existencia entre estas personas de 7 labradores, 1 jornalero, 1 arboricultor, 2 industriales, 1 metalúrgico 1 albañil, 1 mecánico, 1 médico, 1 comerciante y 1 propietario. El periodo de incoación de expedientes abarcó los años 1939-1942, con dos máximos en 1939 y 1941.

Gráfica 5.35



Fuente: BOP, AHPCS

En Segorbe tanto el Delegado Local de FET y de las JONS como la Guardia Civil realizaban informes centrados en el análisis de la situación familiar del inculcado junto con la relación de sus bienes y la valoración económica pertinente. No tenemos constancia de informe de la alcaldía. El cura Manuel Sebastián, de la Parroquia de San Pedro de Segorbe se refería a los bienes y a la situación personal del inculcado, con una redacción completamente independiente²⁷. Hemos de recordar que en el Puesto de la Guardia Civil de Segorbe se realizaban los informes de los vecinos de Castellnovo y Gátova.

²⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Montesinos Clavel, Caja 10103. AHPCS.

Relación de personas de Segorbe afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Barón Molés, Ángel
Barrachina Gómez, Juan
Bolumar Lara, Inocencio
Bolumar Royo, Manuel
Bolumar Salvador, Manuela
Bolumar Salvador, Pilar
Calpe González, Luis
Carceller Albiol, Miguel
Carnes Reguillo, Francisco
Cebrián Llor, Julián
Clausich Morro, María
Clausich Sebastián, Manuel
Collado Villalba, Manuel
Chagoyen López, Manuel
Chagoyent Font, Rosa
Escrig Molins, Vicenta
Esteban Villalba, Jesús
Esteller Lores, Francisco
Fajardo García, Francisco
Fenollosa Medina, José
Fenollosa Medina, Manuel
Fornás Beltrán, Jaime
Fornás Beltrán, Rafael
Frías Sánchez, Pascual
Garcerán Bordón, Manuel
García Marín, Francisco
García Simón, Ignacio
García Simón, Luis
Garnes Asensio, José
Garnes Berga, Agustín
González Fajardo, Ramón
Grifo Romero, José
Hernández García, José
Hernández Molés, Vicente
Hervás Ginés, Vicente
Ibáñez Martínez, Leopoldo
Lázaro Mascarell, José

López Manzanera, José
Llora Villagrasa, Luís
Maicas Villarroja, Tomás
Marín Aguilar, Enrique
Martí Morro, Francisco
Martín Hervás, Vicente
Martínez Calpe, Vicente
Montesinos Clavel, José
Montesinos Sanz, José
Montesinos Sanz, Tomás
Muñoz Barrachina, Antonio
Muñoz Barrachina, Marcelo
Novella Clausich, Antonio
Novella Roig, José
Pedro Pedro, Vicente
Peres Soler, Dolores
Pérez Montero, Emilio
Raro Llor, Vicente
Roca Ajado, Vicente
Romero Montesinos, Juan
Royo Hernández, Dolores
Rubio Cruz, Pedro
Rueda Gómez, Esteban
Ruiz Martínez, Francisco
Sánchez Calvo, Joaquín
Sánchez Gil, Francisco
Sánchez Gil, Santiago
Sansebastián Escrig, Vicente
Santamaría Fenollosa, Melchor
Sebastiá Escrich, Vicente
Selles Dental, Simeón
Sender Plasencia, Ángel
Sender Plasencia, Federico
Sendeter Plasencia, Ángel
Simón Soriano, Manuel
Torres Lafuente, Manuel
Vallés Felipe, Andrés

SIERRA ENGARCERÁN



En Sierra Engarcerán la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 30 personas, lo que significaba un 0,48% del total provincial y el 1,33% de la población total de la localidad. El único caso de mujer representaba el 0,08% de la población femenina local, mientras los 29 hombres restantes implicaban que el 2,63% de la población masculina de la localidad se vio afectado. La mayoría de los implicados eran labradores, a los que se unían 1 jornalero, 2 albañiles, 1 carpintero y 1 comerciante, según nuestros datos. Los expedientes de los que conocemos su fecha de incoación lo hicieron en el periodo 1940-1942, a razón de 10 casos en 1940, 3 en 1941 y 2 en 1942.

El alcalde de Sierra Engarcerán, Juan Antonio Sanz, analizaba la evolución política del inculcado en sus informes, además de añadir la valoración de bienes y de calificarlo moralmente, algo que también hacía José Agut, Delegado Local de FET y de las JONS, que parece que se basaba en el informe de la alcaldía para realizar el suyo. Más independientes eran los informes del Comandante Ángel Lopez, del Puesto de Albocácer, quien describía la situación personal del inculcado y repasaba sus presuntos delitos en los años anteriores. El cura de la Parroquia de San Bartolomé de Sierra Engarcerán acusaba directamente a los inculcados por sus actos pasados, calificando moralmente su actitud presente y resumiendo los bienes de los que disponía. En ocasiones, especialmente si había que aclarar algún término o actuación se acompañaba otro informe de un segundo cura de la localidad, Juan Antonio Doménech, y del sacristán, Jaime Sabater Barreda.²⁸

²⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Castell Moliner, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Sierra Engarcerán afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Agut, José
Adell Sales, Saturnino
Albado Agut, Adrián
Álvaro Agut, Miguel
Barreda Fabregat, Jaime
Barreda Fabregat, Ricardo
Batalla Bellés, Ernesto
Batalla Boix, Juan
Beltrán Albado, Miguel
Beltrán Albalat, José
Beltrán Gauchía, Agustín
Bellés Beltrán, Vicente
Bellés Fabregat, Fabián
Bellés Salvador, Miguel
Castell Moliner, Vicente

Edo Bellés, José
Fabregat Salvador, Frigidiano
Ferrando Agut, Germán
Ferrando Edo, Bernardino
Marzá Mateu, Gaspar
Mateu Meliá, José
Meliá Sabater, Bautista
Pitarch Agustina, Jaime
Queralt Albert, Hermenegildo
Salvador Bellés, José
Salvador Ferrando, Antonio
Sanz Agut, Juan Antonio
Tena Albalat, Manuel
Tena Barreda, José
Vicente Aicart, Elvira

SONEJA



En Soneja la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 48 personas, lo que representaba un 0,76% del total provincial y el 2,9% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos varones el 5,98% de la población masculina local se vio implicada. Únicamente disponemos de datos sobre la profesión de los inculcados en un caso, en el que la persona era militar. Además sólo conocemos la comprobación documental de la incoación de 2 expedientes en 1940.

El Puesto de la Guardia Civil encargado de realizar los informes de los vecinos de Soneja era el de Sot de Ferrer. El Comandante Ramón Casaña describía en sus informes la situación personal del inculcado, la de su familia, todo en un tono muy neutro, sin entrar en valoraciones. El alcalde Abel Soriano se basaba en los datos disponibles en los fondos documentales de de contribuciones para realizar un informe en el que lo más importante eran los bienes y su valoración económica. Gaspar Marín, Delegado Local de FET y de las JONS, se inspiraba en el anterior informe, al igual que José María García, cura local que confesaba basarse en los datos suministrados en el Ayuntamiento y en las informaciones de “personas fidedignas”.²⁹

²⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Bautista Gómez Gil, Caja 10078. AHPCS.

Relación de personas de Soneja afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alonso Perandones, Miguel
Aparicio Gorriz, Manuel
Arellano Mastorella, Rodrigo
Ballester Gil, Miguel
Berbis Martínez, Manuel
Bolumar Sánchez, José
Costa Gimeno, Ramón
Domingo Soriano, Miguel A.
Garay Mora, Celestino
García Domingo, Joaquín
García Gorriz, José
García Marín, Miguel
Gil Bolos, Juan Bautista
Gil Piquer, Salvador
Gil Villar, José
Gómez Garcés, Francisco
Gorriz Gil, Juan Bautista
Gorriz Miravete, Miguel
Herrerías López, Antonio
Julián Torres, José
Marín Vivas, Juan Bautista
Martínez Aparicio, Miguel
Martínez Clemente, Ramón
Martínez Gómez, Gaspar

Martínez Gómez, Miguel
Martínez Piquer, Julio
Mirabete Soriano, Manuel
Miravete Martín, Fernando
Miravete Montón, Bernardo
Montón Clemente, Vicente
Morata Blasco, Miguel
Muñoz Amorós, Julián
Piquer Cabrero, Salvador
Piquer Gil, Miguel
Piquer Soriano, Fernando
Ribas Gil, Domingo
Rivas Aparici, Ramón
Romani Aparicio, Manuel
Segarra Gil, Manuel
Soriano Campos, Dionisio
Soriano Doñate, José
Soriano Marco, Manuel
Soriano Muria, Miguel
Soriano Piquer, José Ramón
Tárrega Garnés, Julio
Torres Bervi, Miguel
Vilanova Piquer, Jacinto

SOT DE FERRER



En Sot de Ferrer 17 personas se vieron implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, un 0,27% del total provincial y el 2,6% del total de la población de la localidad. La única mujer implicada representaba el 0,29% de la población femenina local, mientras los 16 hombres restantes suponían el 5,03% de la población masculina de la localidad.

No disponemos de más información sobre esta localidad, ya que en el Archivo Histórico Provincial de Castellón lo único que se conservan son testimonios de condena por parte de un tribunal militar. Sin embargo, sabemos que la Guardia Civil del Puesto de Sot de Ferrer era la encargada de realizar los informes de los vecinos de Chóvar y de Soneja.

Relación de vecinos de Sot de Ferrer afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Aguilar Balaguer, Francisco
Aparicio Aznar, David
Aparicio García, Antonio
Bada López, Daniel
Balaguer Nebot, Dolores
Boch Sima, José
Bon López, Miguel
Bon López, Severo
García Marzo, Teodoro

Lima García, Miguel
Maicas Bou, Antonio
Martínez Giménez, Javier
Martínez Pascual, Ramón
Pascual Llopis, Herminio
Peiró Julián, Abelardo
Rada Edo, Francisco
Zorita Valero, Enrique

SUERAS



En Sueras 18 personas se vieron afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que representaba el 0,29% del total provincial y el 2,08% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos hombres el 4,36% de la población masculina local se vio implicada. Se trataba en su mayoría de labradores, aunque tenemos documentada la existencia de 1 barbero. Los expedientes se incoaron en el periodo 1940-1943, a razón de 5 expedientes en 1940, 3 en 1941 y 1 en 1943, según nuestros datos.

El alcalde de Sueras realizaba informes en los que los datos económicos del inculcado tenían el protagonismo. Hilario Montoliu, Delegado Local de FET y de las JONS, añadía la situación familiar al informe anterior. La Guardia Civil encargada de realizar los informes era la del Puesto de Onda. El Comandante Miguel Blanco se basaba en los anteriores informes y aportaba únicamente datos sobre los bienes del inculcado. José Lapica, cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Sueras informaba tanto de los bienes de los inculcados como los de sus familiares.³⁰

³⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Peris Serrano, Caja 10078. AHPCS.

Relación de vecinos de Sueras afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Almor Marín, Delfín
Balaguer Serrano, José
Barceló Montoliu, José
Calatayud Palanques, Vicente
Calatayud Tomás, Pascual
Estall Vives, Joaquín
Martí Serrano, José
Martí Serrano, Juan
Palanques Aguilar, Blas
Peris Serrano, Vicente
Piquer Pallarés, Bautista
Prades Serrano, Bernardo
Prades Serrano, Fernando
Ramos Zurita, José
Serrano Lengua, Vicente
Serrano Palanques, Miguel
Serrano Palanques, Salvador
Zorita Estall, José María

TALES



Las 13 personas que en Tales se vieron implicadas en el proceso de exigencia de Responsabilidades Políticas representaban el 0,2% del total provincial y el 1,39% de la población total de la localidad. Las 2 mujeres representadas suponían el 0,42% de la población femenina de la localidad, mientras los 11 hombres implicaban que se vio afectado el 2,38% de la población masculina local. Conocemos la presencia entre estas personas de 2 labradores, 1 jornalero, 1 industrial y 1 maestro. Los 5 expedientes de los que disponemos su fecha de incoación son de 1941.

Tanto la alcaldía de Tales como el Delegado Local de FET y de las JONS realizaban informes parecidos en los que se informaba sobre la situación laboral y económica de la familia del inculcado. Amadeo Escrig, Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Tales ofrecía los mismos tipos de datos, aunque con mayor detalle. El cura Luis Bellés de la Parroquia de San Juan Bautista de Tales, ofrecía una redacción independiente, a pesar de informar casi exclusivamente de la situación económica tanto del inculcado como de su familia. En ocasiones, la alcaldía y la Delegación de FET y de las JONS de Onda intervenía en la elaboración de estos informes.³¹

³¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Eduardo Rausell Arrando, Caja 10103. AHPCS.

Relación de vecinos de Tales afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Arrando Ortells, Manuel
Badenes Prades, Francisco
Castellón Miravet, Rosario
Chaume Montoliu, Juan
Chaume Ramos, Mercedes
Chaume Ramos, Rosario
Devillo Clausell, Antonio
García Moliner, Salvador
Llorens Torres, José
Melchor Arrando, Fabián
Montoliu Pradells, José
Rausell Arrando, Eduardo
Soler Badenes, José

TERESA



En Teresa fueron 3 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,04% del total provincial y el 0,36% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos hombres el 0,74% de la población masculina local se vio implicada.

No disponemos de más información por disponer el Archivo Histórico Provincial de Castellón únicamente de testimonios de condena por parte de un tribunal militar de vecinos de esta localidad.

Relación de vecinos de Teresa afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alcaide Lázaro, Francisco

García Viña, Francisco

Rivas Martínez, José

TÍRIG



Las 12 personas que en Tírig estuvieron implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas representaban el 0,19% del total provincial, así como el 0,98% del total de la población de la localidad. Todos estas personas eran hombres, por lo que el 1,98% de la población masculina se vio afectada. Los tres casos de los que conocemos la profesión hacen referencia a labradores. Sabemos también que 2 de los expedientes se incoaron en 1940 como consecuencia de la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola y que 3 expedientes se incoaron en 1941.

La autoridad local que funcionaba como referencia en Tírig era la alcaldía. El alcalde, Joaquín Matamoros en 1940 y Jaime Prats en 1941, explicaba en sus informes los datos personales del inculcado, su profesión y su jornal. Este informe era la base de los informes tanto del Delegado Local de FET y de las JONS, Timoteo Segarra en 1940 y José Rocha en 1941, como de Manuel Moliner, cura de la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Tírig, aunque éste incluía una valoración de su trayectoria política y una calificación de su conducta. En algunos informes el cura admite haber recibido el informe de la alcaldía como herramienta para confeccionar el suyo. Desde el Puesto de San Mateo, la Guardia Civil no añadía datos nuevos respecto a los anteriores informes.³²

³² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Dionisio Puig Adell, Caja 10083; y contra José Beltrán Calduch, Caja 10107. AHPCS.

Relación de vecinos de Tírig afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adell Puig, Clemente
Beltrán Calduch, José
Beltrán Calduch, Manuel
Beltrán Roda, Vicente
Bellmunt Sales, Francisco
Folch Salvador, Eduardo
Gozalbo Pérez, Primitivo
Puig Adell, Daniel
Puig Adell, Dionisio
Safont Albalat, Samuel
Salvador Centelles, Jaime
Segarra Beltrán, Custodio

LA TODOLELLA



En La Todolella la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 15 vecinos, todos ellos varones. Esto representaba el 0,24% del total provincial, el 2,94% de la población total de la localidad y el 5,9% de la población masculina local. Entre estas personas tenemos documentados 1 labrador, 1 jornalero, 1 alpargatero y 1 comerciante, así como también tenemos noticias de la incoación de 6 de los expedientes en 1940 y de 3 expedientes en 1941.

El alcalde de La Todolella, Miguel Artola, junto con el Jefe Local de FET y de las JONS, Pedro M. Mestre, tuvieron parte activa en el proceso de denuncia de los vecinos de La Todolella, ya que remitieron informes-denuncia a las autoridades provinciales para que éstas incoaran expediente de responsabilidades políticas. En los informes de la alcaldía, y por extensión los de FET y de las JONS que no eran más que meras copias, se repasaba la evolución política del inculpado, sus datos personales y familiares, así como la relación de bienes y su valoración económica. La Guardia Civil no aportaba datos diferentes pero ofrecía una redacción completamente diferente. El cura José Carceller, de la Parroquia de San Bartolomé de La Todolella se limitaba a confirmar los datos anteriores después de haber hablado con “personas de todo crédito” y a firmar una copia calcada de la parte del informe de la alcaldía relativa a los bienes del inculpado y su valoración económica.³³

³³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Ejarque Eixarch, Caja 10129. AHPCS.

Relación de vecinos de La Todolella afectados por la Ley de Responsabilidades
Políticas:

Artola Belmonte, Manuel
Ejarque Eixarch, Joaquín
Fuster Eixarch, Severino
Fuster Morella, Gabriel
Meseguer Prats, Pedro
Pascual Pascual, Agustín
Prats Julián, Jorge
Querol Monfort, Simón
Querol Monfort, Terencio
Ripollés Celma, Emilio
Ripollés Querol, Antonio
Ripollés Querol, Miguel
Ripollés Querol, Pascual
Ripollés Querol, Vicente
Sorribes Membrado, Víctor

TOGA



En Toga el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 13, un 0,2% del total provincial y el 4,06% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos varones el 7,51% de la población masculina local se vio afectada.

El alcalde de Toga, junto con el Delegado Local de FET y de las JONS, Rafael Barceló, emitían unos informes que priorizaban la información relativa a la relación de bienes y su valoración económica.³⁴

Relación de vecinos de Toga afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adelantado Bagán, Francisco
Agustín Barberán, Miguel
Barberán Negre, Francisco
Barceló García, Vicente
Campos Guillamón, Francisco
García Morte, Matías
Lecha Barceló, José
Lecha Puerto, Vicente
Lecha Salvador, Joaquín
Puerto Barceló, Basilio
Puerto Monferrer, Bienvenido
Puerto Monferrer, Felipe
Sans Miravet, Antonio

³⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Sanz Nebot, Caja 10083. AHPCS.

TORÁS



Las 5 personas que en Torás se vieron implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas suponían el 0,08% del total provincial, así como el 0,75% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos varones el 1,48% de la población masculina local se vio afectada. Únicamente conocemos la profesión de una de estas personas, militar retirado, el cual vio incoado su expediente en el año 1940.

En el Archivo Histórico Provincial de Castellón sólo disponemos de testimonio de sentencia por parte de un tribunal militar, por lo que no podemos informar sobre las autoridades locales.

Relación de vecinos de Torás afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Flor Máñez, Manuel

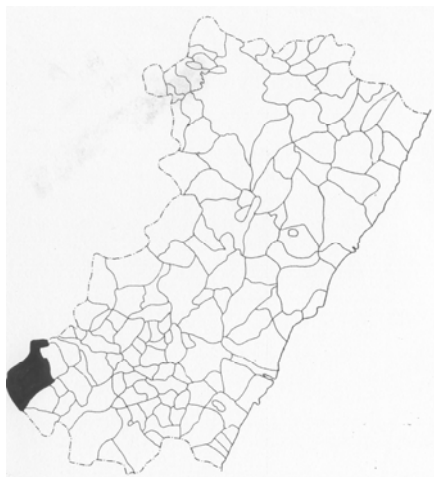
Macián Castillo, José

Montesinos Macián, Francisco

Moyano Moncada, Salvador

Silvestre Máñez, Manuel

EL TORO



Las 25 personas que fueron afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas en el Toro suponían el 0,4% del total provincial de afectados, así como el 2,58% de la población total de la localidad. El único caso de mujer afectada suponía el 0,21% de la población femenina local, mientras los 24 varones restantes representaban el 4,85% de la población masculina de la localidad. Sólo disponemos de información de 2 de los implicados, 1 maestro, cuyo expediente fue incoado en 1941, y 1 labrador, cuyo expediente fue incoado en 1942.

El alcalde de El Toro era el informe que servía de referencia a las demás autoridades. Realizaba informes escuetos en los que se resumía la situación personal del acusado y se daba cuenta de sus bienes. Tanto el Delegado Local de FET y de las JONS, como la Guardia Civil de la localidad y el cura realizaban informes parecidos, poco extensos, sin añadir datos nuevos.³⁵

³⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Rafael Alegre Gálvez, Caja 10104. AHPCS.

Relación de vecinos de El Toro afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alegre Gálvez, Rafael
Alfagarín Salvador, Rogelio
Aliaga Gorriz, Francisco
Aliga Clemente, Manuel
Cerco Peyró, Joaquín
Clemente Máñez, Julio
Clemente Tudón, Vicente
Escrich Escrich, Francisco
Escrich Escrich, José
García Andrés, Juan
Gil Collado, Francisco
Gil Collado, Juan
Gil Martín, Fernando

Juan Palomar, Pablo
Martín Plomar, Ricardo
Ordún Tudón, Fermín
Orduña Aparicio, Avelino
Orduña Clemente, José
Orduña Cubero, Vicente
Orduña Perales, María
Palomar Gil, Francisco
Salvador Ardiña, Vicente
Selvi Gorriz, Ramón
Zorio Sánchez, José
Zorio Tudón, Benjamín

TORRALBA DEL PINAR



Los 3 vecinos que en Torralba del Pinar estuvieron afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas representaban el 0,04% del total provincial, así como el 1,34% de la población total local y el 2,6% de la población masculina de la localidad. El único vecino del que poseemos información era labrador y su expediente fue incoado en 1942.

En Torralba del Pinar sólo disponemos de informes de la alcaldía y de FET y de las JONS. La alcaldía, en manos de José Calvo, realizaba unos informes escuetos en los que los bienes del inculcado eran la información más importante que se ofrecía, fuera de los datos personales más generales. Miguel Calpe, Delegado Local de FET y de las JONS realizaba un informe independiente del anterior pero que ofrecía el mismo tipo de información, complementada con algún detalle relativo a los datos familiares.³⁶

Relación de vecinos de Torralba del Pinar afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Nebot Segarra, Aquilino
Pérez Baume, Genaro
Pérez Gil, Julio

³⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Julio Pérez Gil, Caja 10145. AHPCS.

TORRE EMBESORA



El número de vecinos de Torre Embesora implicados en la exigencia de responsabilidades políticas fue de 21, todos ellos varones. Esta cifra representaba el 0,33% del total provincial, así como el 5,6% del total de la población local y el 11,79% de la población masculina de la localidad. Entre los inculcados conocemos la existencia de al menos 1 labrador y 1 albañil. Tenemos noticias de la incoación de 9 de los expedientes en 1940, como consecuencia de la remisión de datos a las autoridades del Servicio de Recuperación Agrícola.

El alcalde de Torre Embesora, Valero Bellés, realizaba unos informes en los que se ofrecía gran cantidad de detalles sobre la situación personal del inculcado, su evolución política, sus hechos más destacados durante la guerra, su catalogación moral y la relación de bienes, con su correspondiente valoración económica. Alfredo Colomer, Jefe Local de FET y de las JONS, firmaba el mismo texto que la alcaldía, que estaba copiado con el mismo puño y letra. Desde el Puesto de Benasal, el Comandante de la Guardia Civil José Roig Beltrán realizaba también informes detallados y extensos en los que la calificación moral y la peligrosidad social del implicado ocupan un lugar importante. El cura Cristóbal Guardiola, de la Parroquia de San Juan Bautista o San Bartolomé de Torre Embesora se inspiraba también en el informe de la alcaldía.³⁷

³⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Eladio Vidal Sales, Caja 10083. AHPCS.

Vecinos de Torre Embesora afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agut Tena, José
Barreda Barreda, Francisco
Bellés Barreda, Sebastián
Bellés Rull, Valentín
Bort Calduch, Jaime
Bort Miralles, Ángel
Centelles Folch, José
Fabregat Celma, Ramón
Ferrando Bort, Bautista
García Pastor, José
Pastor Capsir, José Antonio

Pastor Salvador, Laurentino
Pitarch Pitarch, Gaspar
Porcar Barrada, Vicente
Porcar Pitarch, Miguel
Sales Márquez, Vicente
Salvador Calduch, Manuel
Saura Borrás, Genaro
Selma Traver, Elías
Valls Beltrán, Aladino
Vidal Sales, Eladio

TORRE ENDOMÉNECH



En Torre Endoménech la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 4 personas, un 0,06% del total provincial y un 0,78% del total de la población local. Como todos ellos eran varones el 1,6% de la población masculina se vio afectada. Sólo conocemos la profesión de labrador de uno de los implicados y la incoación de su expediente en 1941.

El alcalde Jaime Andrés únicamente informaba de los bienes del inculpado, según los datos de contribución de rústica y urbana disponibles en la alcaldía, y su valoración económica, al igual que el Delegado Local de FET y de las JONS Jaime Villalonga y que el cura de la localidad. La Guardia Civil, desde el Puesto de Cuevas de Vinromá, repetía también el mismo tipo de informe.³⁸

Relación de vecinos de Torre Endoménech afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bellés Vidal, Valero
García Moliner, Andrés
García Moliner, Isidro
Roca Barreda, Vicente

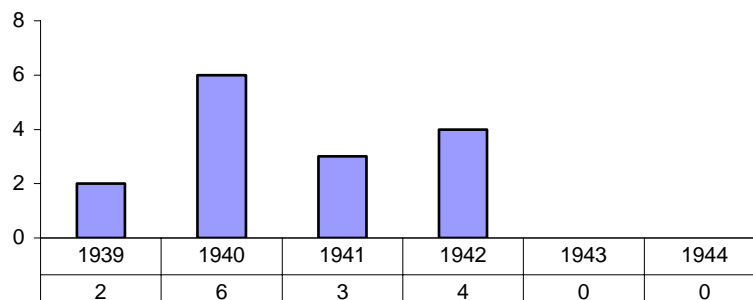
³⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel

TORREBLANCA



En Torreblanca 67 personas se vieron implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, un 1,07% del total provincial y el 1,88% del total de la población local. Los 6 casos de mujeres que se vieron afectadas representaban el 0,32% de la población femenina local, mientras los 61 hombres restantes suponían el 3,55% de la población masculina de la localidad. Conocemos la presencia entre estos inculpados de 1 labrador, 2 alpargateros, 2 militares, 2 ferroviarios, 1 propietario, 1 carabinero y 1 guardia civil. Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1942, con un ligero máximo en 1940.

Gráfica 5.36



Fuente: BOP, AHPCS

La alcaldía de Torreblanca³⁹ realizaba unos informes muy completos que abarcaban los aspectos personales y los familiares del inculcado, sus antecedentes políticos, sus presuntos delitos durante la guerra y una detallada relación de sus bienes. En sintonía con el anterior, el informe de FET y de las JONS también era muy detallado, aunque con una redacción independiente, al igual que el informe de la Guardia Civil, realizado con un tono menos conciliador y más agresivo. El cura Arcadio G. se inspiraba en los

³⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Bastart Pedra, Caja 10091. AHPCS.

anteriores informes, ya que trataba los mismos aspectos, incluido el económico, sin aportar datos nuevos.

Relación de vecinos de Torreblanca afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adam Lluís, José	Folch Vidal, Cándido
Alacreu Lloret, Juan	Folch Vidal, Daniel
Alcocer Cuadrado, Atanasio	Fuster Boix, José
Amare Fabregat, Francisco	García Doménech, Juan
Barceló Bort, Francisco	Gil Arnau, Ramón
Bastart Pedra, Vicente	González Piquer, José
Bellés Sancho, Ramón	González Vilaplana, Ramiro
Betoret Bernal, Emilio	Griñó Traver, Magín
Betoret Bernal, Miguel	Huguet Cucala, Vicente
Betoret Llorens, Abel	Llansola Sorli, Amparo
Betoret Llorens, Emilia	Lleonart Pitarch, José
Betoret Llorens, Francisco	Máñez Soldevila, Vicente
Betoret Llorens, Joaquina	Marcos San Miguel, José
Betoret Llorens, José	Muria Vila, Miguel
Betoret Marmaneu, Joaquín	Oms Pitarch, Francisco
Betoret Oms, Abel	Oms Pitarch, Gabriel
Betoret Oms, José	Pastor Albert, Vicente
Bort Beltrán, Manuel	Pegueroles Ferrando, Higinio
Bort Fonte, Rosa	Pegueroles Juan, Rosario
Bravo Pérez, Joaquín	Peraire Martínez, Antonio
Calvet Sales, Andrés	Pérez Blasco, Isidro
Carceller Gallén, Miguel	Peris Guin, Ramón
Cardenach Cerdá, Antonio	Persiva Aicart, Vicente
Casanova Persiva, Emilio	Persiva García, Alberto
Centelles Arnau, Joaquín	Piñol Roda, Jaime
Clausell Eixa, Vicente	Pitarch Betoret, Juan
Cortes Martínez, Nicolás	Roca Bellés, Higinio
Doménech Fabregat, Claudio	Salvador Fabregat, Antonio
Doménech Ferrando, Inés	Segura Folch, Javier
Drago, Pascual	Segura Folch, Ramón
Esteve García, Vicente	Simó Vinuesa, José
Fabregat Bastard, Francisco	Vilaplana Ebrí, Julio
Fabregat Simó, Vicente	Vinuesa Fabregat, Manuel
Falcó Nebot, Dionisio	

TORRECHIVA



Las 11 personas que en Torrechiva se vieron afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas suponían el 0,17% del total provincial, así como el 3,44% del total de la población local. Al ser todos ellos varones el 7,14% de la población masculina local se vio implicada. Conocemos la presencia entre estas personas de 2 labradores y 1 albañil, así como la incoación de 3 de los expedientes en 1941.

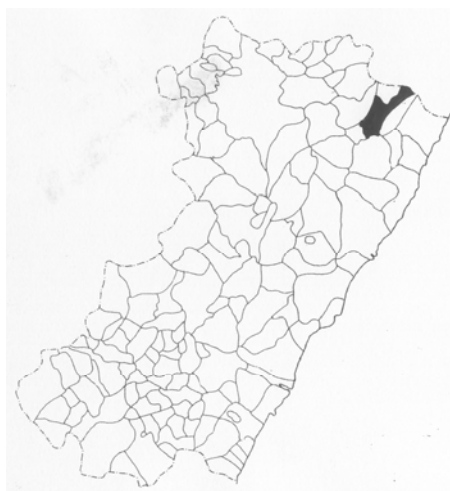
Pascual Salas, alcalde de Torrechiva, aportaba datos en sus informes sobre la situación familiar del inculcado, aunque dedicaba la mayor parte de su extensión a dejar bien claros los bienes de los que disponía y su valoración económica. El Delegado Local de FET y de las JONS se limitaba a firmar una copia calcada del informe de la alcaldía, un informe que servía también como modelo al Comandante José Villalobos, del Puesto de la Guardia Civil de Argelita. No tenemos constancia de informes de la autoridad religiosa local.⁴⁰

Relación de vecinos de Torrechiva afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Bagán Silvestre, Agustín
Campos Herrero, Manuel
Coscolla Expósito, Jorge
Guillamón Guillamón, Juan
Guillamón Lecha, Manuel
Guillamón Lecha, Vicente
Guillamón Peris, José
Lecha Montoliu, Vicente
Monferrer Herrero, Vicente
Peris Puerto, José
Vivas Tiburcio, Francisco

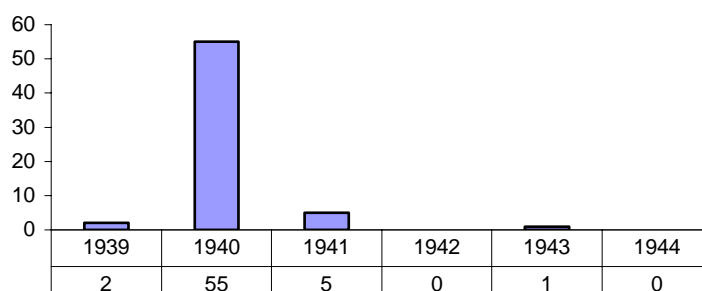
⁴⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Monferrer Herrero, Caja 10093. AHPCS.

TRAIGUERA



En Traiguera el número de vecinos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas se eleva a 84, un 1,34% del total provincial y el 3,96% de la población total de la localidad. El único caso de mujer afectada representaba el 0,08% de la población femenina local, mientras los 83 hombres restantes suponían el 8,22% de la población masculina de la localidad. Tenemos documentada la presencia entre estas personas de 11 labradores, 5 jornaleros, 1 cafetero, 1 carabinero y 1 escribiente. Los expedientes se incoaron, según nuestras noticias, en el periodo 1939-1943, con un máximo muy acusado en 1940 como consecuencia de la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola.

Gráfica 5.37



Fuente: BOP, AHPCS

En Traiguera⁴¹ el cura Francisco Pastor calificaba moral y socialmente a los implicados, frecuentemente de forma negativa, remitiendo a las informaciones que pudieran dar las otras autoridades para el resto de datos. La alcaldía emitía informes en los que se daba importancia al historial político del inculcado, así como a su actuación durante la guerra sin olvidarse de calificarlo socialmente y detallar sus bienes. Daniel Grañana, Jefe Local de FET y de las JONS, se basaba en el anterior informe, llegando incluso a firmar una

⁴¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Lládser Ferreres, Caja 10144. AHPCS.

copia calcada de los bienes y su valoración económica. Sin embargo, era la Guardia Civil la que realizaba unos informes con mayor número de detalles acerca de la evolución política y el historial del inculcado, añadiendo también la relación de bienes y su valoración económica.

Relación de vecinos de Traiguera afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adella Pierrá, José	Ferreres Adrover, Ángel
Belsa Doménech, Vicente	Grañana Roig, Pedro
Belsa Tolós, Vicente	Hijarro Expósito, Pedro
Belliure Ferrer, Juan Ramón	Jorge Expósito, Juan
Belliure Ortí, Vicente	Justiniano Prades, Antonio
Bengochea Bort, Vicente	Lladser Ferrer, Ramón
Benlliure Doménech, José	Lladser Ferrer, Vicente
Benlliure Ferrer, Juan	Mampel Bort, Bautista
Bort Romeu, Vicente	Mampel Peset, Joaquín
Cabanes Dellá, Pascual	Mampel Peset, Miguel
Cervera Bort, Santiago	Mampel Sebastiá, Vicente
Cervera Ferreres, Juan Ramón	Mampel Solí, Bautista
Cervera Marco, Bautista	Marzá Dellá, Pedro Vicente
Cervera Roig, Julián	Marzá Dellá, Vicente
Cervera Tolós, Ramón	Masiá Dellá, Pedro
Cervera Vidal, Bautista	Monroig Vericat, Joaquín
Climent Calduch, Juan	Monroig Vericat, Manuel
Climent Cervera, Cristóbal	Muñoz Gales, Joaquín
Climent Vericart, Juan	Náquer Sogues, Vicente
Climent Vericart, Manuel	Pla Fonollosa, Pedro
Compte Belliure, Vicente	Pla Lladser, Joaquín
Compte Sogues, Pedro	Puig Bort, Miguel
Della Ferrer, Sebastián	Puig Ferrer, Vicente
Della Meseguer, Francisco	Puig Sogues, Bautista
Della Olbiol, Pedro	Queral Sorribes, Vicente
Della Riera, Sebastián	Querol Queral, Bautista
Esteller Doménech, Manuel	Riera Expósito, María
Esteller Ferrer, Miguel	Roig Mampel, Joaquín
Esteller Llorach, Benjamín	Rovira Costa, Manuel
Esteller Llorach, Carlos	Sancho Sanz, Vicente
Fenollosa Ferré, Domingo	Sanz Bort, Miguel
Fenollosa Ferré, Juan	Sanz Climent, José
Fenollosa Traver, Juan Bautista	Sanz Climent, Pedro
Ferrer Ferreres, José	Sanz Mampel, Vicente Anselmo
Ferrer Marco, Vicente	Sanz Mestre, Mauricio
Ferrer Rambla, Joaquín	Sanz Oriol, Ramón
	Sanz Sebastiá, Daniel

Sanz Sebastiá, Tomás Felipe
Sorribes Villalta, Ramón
Torres Deya, Constantino
Vallés Pla, Bautista
Vallés Puig, Vicente
Verical Roig, Bautista

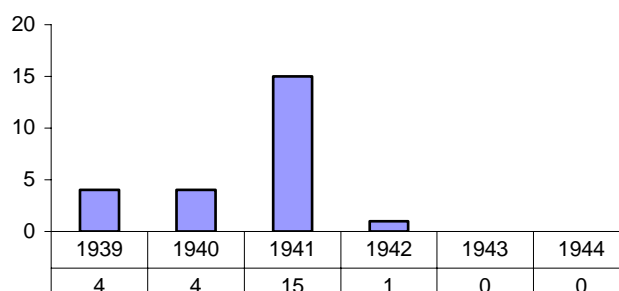
Vericat Roig, Tomás
Vidal Caballer, Jaime
Vidal Cervera, Ramón
Vidal Ortí, José A.
Villalta Ferreres, Miguel

USERAS



En Useras fueron 32 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,51% del total provincial y el 2,11% de la población total de la localidad. Los 31 hombres afectados representaban el 2,7% de la población masculina local, mientras el único caso de mujer implicada suponía el 0,08% de la población femenina de la localidad. La mayoría de estas personas eran labradores, a los que acompañaron, según la documentación consultada, 1 maestro, 1 propietario, 1 curandero, 1 carretero y 1 guardia de seguridad. Los expedientes de los que conocemos su fecha de incoación se abrieron en el periodo 1939-1942, con un máximo importante en 1941.

Gráfica 5.38



Fuente: BOP, AHPCS

En Useras tanto la Guardia Civil como la alcaldía y FET y de las JONS local emitían informes muy parecidos en los que el aspecto que tenía mayor importancia, si no era el único, era la relación de bienes del inculcado y su valoración económica. Incluso los informes del cura Cristóbal Beltrán, de la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Useras, tenían como único tema el económico⁴². Hemos de recordar que la Guardia Civil de Useras realizaba también los informes de los vecinos de Costur.

⁴² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Marcelino Vidal Llorens, Caja 10075. AHPCS.

Relación de vecinos de Useras afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Aicart Mateu, Cristóbal
Aicart Montoliu, Cristóbal
Andrés Edo, Enrique
Andrés Edo, Fermín
Bachero Miñana, Baldomero
Bernat Dealbert, Jaime
Centelles Capdevila, Francisco
Chiva Vidal, Julio
Dealbert Tomás, Agustín
Dimas Forés, Agustín
Dimas Orenge, Agustín
Escrig Marcos, Joaquín
Escrig Planchadell, Balbino
Fabra García, José Vicente
Font Valls, Jaime
García Herrero, Vicente

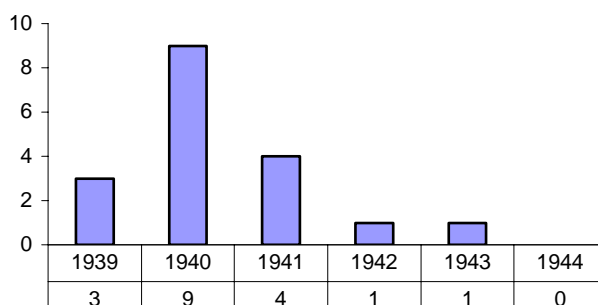
Juan Benagues, Rogelia
Martí Forés, Alejandro
Martí Tomás, José
Perez Ribes, Juan
Pruñonosa Royo, Juan
Ribés Andrés, José
Royo Dealbert, Vicente
Sabater Bernal, Joaquín
Sabater Pérez, Dionisio
Saborit Fabregat, Constantino
Tomás Branchadell, Alfredo
Tomás Ribes, Secundino
Tomás Valls, Isidro
Valdivieso Cuevas, Moisés
Vidal Llorens, Marcelino
Villalba Carralero, Adolfo

VALL D'ALBA



Las 43 personas que en Vall d'Alba sufrieron el peso de la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas suponían el 0,68% del total provincial y el 1,6% de la población total de la localidad. La única mujer afectada representaba el 0,07% de la población femenina local, mientras los 42 hombres restantes suponían el 3,2% de la población masculina de la localidad. Conocemos la profesión de 7 de estas personas, todos ellos labradores. Los expedientes se incoaron durante el periodo 1939-1943, con un máximo en el año 1940.

Gráfica 5.39



Fuente: BOP, AHPCS

En cuanto a los informes,⁴³ la Guardia Civil encargada de realizar los informes de los vecinos de Vall d'Alba era la del Puesto de Villafamés. El Comandante Amadeo Escrig Roda realizaba informes en los que se repasaba el historial político del inculcado, sus principales acciones durante la guerra, su situación personal en ese momento e incluía un informe detallado de sus bienes. El alcalde Vicente Roig no aportaba datos nuevos tras el anterior informe, pero su redacción era completamente diferente. Manuel Rovira, Delegado Local de FET y de las JONS, confeccionaba informes muy contundentes y agresivos que incluían calificaciones morales y sociales. El cura Manuel Fabregat, de la Parroquia de San Juan Bautista de Vall d'Alba se colocaba en sintonía con el informe del partido único, dando gran importancia a la calificación moral del inculcado, que en ocasiones era calificado en sus informes como “recluso”.

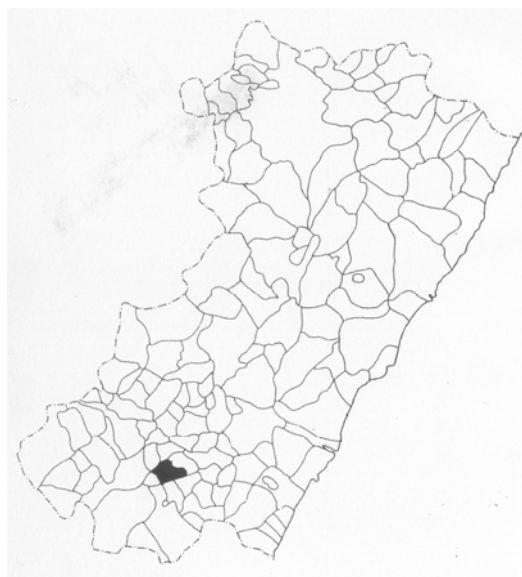
⁴³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Ferrando Ribes, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Vall d'Alba afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agut Monfort, Bernardo
Aicart Pons, Luís
Albalat Capdevila, Arturo
Asuatequi Barrachina, José
Barrachina Ribés, Aurelio
Beltrán Ferrando, Manuel
Beltrán Palau, Salustiano
Bernat Nebot, Daniel
Capdevila Torner, Vicente
Casanova Ibáñez, Enrique
Casanova Valls, Daniel
Castillo Agut, Agustín
Centelles Moliner, Juan
Chiva Albalat, Bernardino
Chiva Albalat, José
Chiva Capdevila, Victoriano
Dols Badal, Emilio
Edo Valls, Benjamín
Esteve Edo, Josefina
Ferrando Ribes, Vicente
García Marzá, Facundo
Ibáñez Capdevila, José

Martí Martí, José
Marzá Ibáñez, Aurelio
Marzá Ibáñez, Manuel
Marzá Meseguer, Vicente
Mateu García, Jaime
Navarro Gallego, Aurelio
Nebot Casanova, Hipólito
Pitarch Capdevila, Serafín
Pons García, Julián
Ribes Pitarch, Constantino
Roig Tena, José
Sabater Pérez, Vicente
Tena Roig, Juan
Torner Monfort, Ramón
Traver Navas, Agustín
Trilles Capdevila, Agustín
Vallés Alcácer, Manuel
Vallés Barrachina, Manuel
Vallés Marzá, Severino
Vallés Traver, Daniel
Valls Ribes, Ismael

VALL DE ALMONACID



Los 6 vecinos que en Vall de Almonacid se vieron afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas representaban el 0,09% del total provincial, así como el 0,93% de la población total de la localidad y el 1,89% de la población masculina local. Conocemos la existencia entre estos inculcados de 3 labradores y 1 jornalero. Los 4 expedientes de los que conocemos su fecha de incoación fueron abiertos en 1941.

Francisco Torres Salvador, alcalde de Vall de Almonacid, denunciaba a sus vecinos para su procesamiento por responsabilidades políticas. En sus informes-denuncia daba datos sobre la situación personal del inculcado, su historial ideológico y político, así como su actuación durante la guerra. Posteriormente realizaba un segundo informe en el que se incluía la relación de bienes y su valoración económica. El Delegado Local de FET y de las JONS, José Culla, no añadía nada nuevo, sino que se basaba en el informe del alcalde. La Guardia Civil emitía informes en los que únicamente se trataba el aspecto económico del inculcado. El cura Juan J. Santamaría Pérez ratificaba los datos anteriores, pero ampliaba el informe con comentarios sobre la evolución del inculcado en el aspecto moral y valoraba su práctica religiosa antes y después de la guerra.⁴⁴

Relación de vecinos de Vall de Almonacid afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Acero Heredia, Fructuoso

Blay Rodilla, Serafín

Cases Calvo, José

Ramos Rodríguez, Manuel

Salvador Pérez, Valentín

Torres Ramos, Manuel

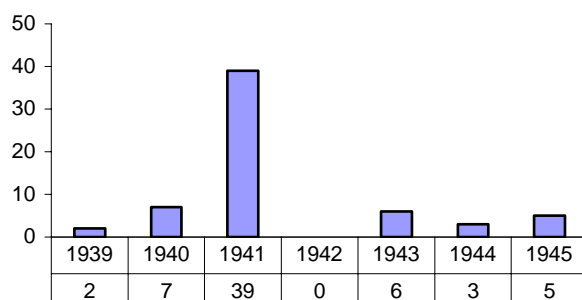
⁴⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Valentín Salvador Pérez, Caja 10129. AHPCS.

LA VALL D'UIXÓ



En la Vall d'Uixó el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 137, un 2,19% del total provincial y el 1,42% de la población total de la localidad. Los 127 varones implicados representaban el 2,8% de la población masculina local, mientras los 10 casos de mujeres suponían el 1,98% de la población femenina de la localidad. En general, existe entre estas personas una importante presencia tanto de representantes del sector primario como del secundario de la economía, este último como consecuencia de la empresa Segarra. Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1945, con un máximo destacado en 1941. Es significativo que, a diferencia de lo que conocemos en otras poblaciones, se incoaron expedientes en 1945.

Gráfica 5.40



Fuente: BOP, AHPCS

El análisis de la actitud y las relaciones entre las autoridades locales de la Vall d'Uixó se encuentran detalladas con detalle en otro apartado del presente trabajo. En general⁴⁵ la Guardia Civil realizaba informes muy extensos en los que se repasaba el historial político del inculcado, así como su actuación durante la guerra y la relación de bienes. Además, denunció a algunos de los implicados. El alcalde Juan Aragó no solía añadir muchos datos nuevos respecto a este primer informe, al igual que el Delegado Local de FET y de las JONS, Gabriel Cortés. Estas dos autoridades sólo aportaban más detalles

⁴⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Alejandro Valero Montesinos, Caja 21507. AHPCS. También hemos utilizado 62 expedientes más de responsabilidades políticas contra vecinos de la Vall d'Uixó, analizados en otro apartado del presente trabajo.

en casos de especial trascendencia local. El cura José Pons o Pedro Navarro, de la Parroquia del Ángel, no solían aportar datos originales, más bien se basaban en el informe de la alcaldía. La Guardia Civil de la Vall d'Uixó también realizaba los expedientes de los vecinos de Moncófar.

Relación de vecinos de la Vall d'Uixó afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abat Nebot, Manuel	Escrig Bermís, Manuel
Adrián Porcar, José	Esteve Buills, Abelardo
Aguilella Pérez, Josefina	Fas Climent, Joaquín
Agut Aledón, Eleuterio	Fas Diago, Vicente
Agut Juliá, Manuel Ramón	Fas Traver, José
Aledón Buix, Vicenta	Fas Valls, Eleuterio
Almela González, Miguel	Fenollosa Alcaide, Francisco
Almela Segarra, Vicente	Fenollosa Bernat, José
Antonio Mingarro, José	Fenollosa Segarra, José
Aragó Rubert, Manuel	Fenollosa Segarra, Rosa
Aragón Segarra, Adolfo	Ferrer Caro, Leopoldo
Arnau Ferrer, José	Ferrer Segarra, José
Arnau Salvador, Joaquín	Ferrer Turch, Wenceslao
Arnau Vallés, Bautista	Ferreres Lloret, Manuel
Arzo Monzonís, Vicente	Ferreres Traver, Manuel
Badal Rosell, Heraclio	Ferreres Traver, Rosario
Badenes Fas, Manuel	Ferreres Villalba, Manuel
Badenes Paulo, Daniel	Font Bonig, José
Baldayo Mestre, José	Font Borrás, Francisco
Bernad Boils, Vicente	Forner Segarra, José
Bernat Rovira, Vicente	Fornet Arnau, Joaquín
Bernat Sánchez, Joaquín	Ganau Mingarro, Anselmo
Bernat Serrano, Emilio	García Bernat, Juan Bautista
Bernat Serrano, Julio	García Climent, Vicente
Blat García, José	Gijón Orbay, Francisco
Bonet Blasco, Antonio	Gil Ferreres, Vicente
Bonig Mangrinán, Manuel	Gil Moliner, José
Borrás Fas, Teodoro	Gil Moliner, Vicente
Burguete Alcaide, Vicente	Giménez Mangriñán, Joaquín
Cases Aparicio, Antonio	Giménez Roig, Manuel
Cases Aparicio, José	Giner Martínez, Rosa
Castelló Antolino, Vicente	Gregori Lluch, Vicente
Cueco Safont, Manuel	Ibáñez Martínez, Alfredo
Dupla Beltrán, Victoriano	Langa Palatsí, Francisco
Esbrí Bernús, Manuel	Lozano Asunción, Alfonso
	Llovet Marín, Manuel

Marco Soler, Enrique
Marco Tur, José
Marco Zaragoza, Enrique
Marín García, Manuel
Martínez Blaya, Joaquín
Martínez Paredes, Pedro
Maya Tremedal, Gregorio
Melchor Domingo, Primitiva
Miguel Segarra, José
Miralles Prats, Abilio
Moliner Rodríguez, José
Montesinos Duflo, Vicente
Monzonís Segarra, Leonardo
Navarro Estrada, Pascual
Navarro García, Constantino
Nebot Canós, Francisco
Nebot Prior, Vicente
Nebot Roig, Leopoldo
Palomo Orensa, José
Pasés Barrera, Miguel
Paulo Traver, José
Peñarroja Moliner, Leonor
Plaza Albalat, Pascual
Porcar Porcar, Vicente
Ramón Segarra, Adolfo
Rebollar Aragón, Manuel
Rico Callau, Eduardo
Rico Veral, Eduardo
Roig Beltrán, Vicente
Roig Rovira, Teresa
Rovira Nebot, Eleuterio
Rubio Aragón, José
Salafranca Alminir, José

Salvador Bueso, José
Sanz Melchor, Bautista
Segarra Carnes, Isabel
Segarra Paulo, Daniel
Segarra Talamantes, Manuel
Segarra Tuch, Vicente
Segarra Valls, Andrés
Segarra Valls, Vicente
Senent Talamantes, Bautista
Senent Talamantes, Vicente
Serení Bello, Martí
Serrano Aymir, Manuel
Serrano Serrano, Pascual
Sorribes Abad, José
Sorribes Abat, Vicente
Soto Lucas, Ángel
Ten Gregori, Francisco
Ten Mollar, Emilio
Ten Orensa, Francisco
Tido Porcar, Joaquín
Traver Segarra, José
Valero Montesinos, Alejandro
Valero Peiró, Joaquín
Valls Diago, Rosario
Valls Rubert, Benjamín
Vicente Nebot, Vicente
Vilar Cubells, Pascual
Vilar Gimeno, Ramón
Villalba Ten, Francisco
Villalba Ten, Manuel
Villalta Arnau, José
Villalta Nebot, Ángela
Villar Gimeno, Ramón

VALLAT



Los 10 vecinos de Vallat implicados en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas representaban el 0,16% del total provincial y el 6,75% de la población total de la localidad. Al ser todos ellos varones el 15,15% de la población masculina local se vio afectada. Ignoramos la profesión de estas personas, aunque conocemos la fecha de incoación de 7 de los expedientes, todos ellos abiertos en 1940 como consecuencia de la liquidación de datos por parte del Servicio de Recuperación Agrícola.

La Guardia Civil de Argelita era la encargada de realizar los informes de los vecinos de Vallat, con unos informes completos en los que se explicaba el pasado político del inculcado, sus principales actos durante la guerra, una valoración social y moral del mismo y, por supuesto, de sus bienes. El Delegado Local de FET y de las JONS, Vicente Monfrerrer repasaba sus principales actos durante la guerra como tema más importante, aunque incluía la valoración económica de sus bienes. La alcaldía de Vallat se centraba en su comportamiento antes, durante y después de la guerra, así como la valoración económica de los bienes. El cura de Vallat era Miguel Serrano, el mismo de Argelita, localidad desde donde firmaba los informes, en los que lo más destacado era la valoración económica de los bienes.⁴⁶

⁴⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Sanz Nebot, Caja 10083. AHPCS.

Relación de vecinos de Vallat afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Campos Agustina, Jacinto
Campos Blanco, Jacinto
Campos Blanco, Matías
Centelles Genesias, Vicente
Centelles Tomás, Vicente
Gustems Albalat, Manuel
Monferrer Guillamón, Francisco
Sanz Nebot, Antonio
Serra Perales, José María
Villaplana Gil, Julio

VALLIBONA



En Vallibona fueron 15 los vecinos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 0,24% del total provincial y el 1,24% de la población total de la localidad. Todos ellos eran varones, con lo que el 2,65% de la población masculina local se vio implicada. Desconocemos más datos sobre estas personas, porque en el Archivo Histórico Provincial de Castellón sólo se encuentran copias de testimonios de condena por parte de un tribunal militar en relación a vecinos de esta localidad.

Relación de vecinos de Vallibona afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Ferraz Vives, Rafael
Ferrer Serret, Ramón
García Salvador, Tomás
Guerol Carceller, Domingo
Meseguer Borrás, Adolfo
Mestre Querol, Domingo
Miró Bel, Vicente
Ortí Fenollosa, José
Ortí Meseguer, Joaquín
Ortí Segura, Manuel
Pla Benet, Ramón
Segura Boix, Ramón
Segura Guimerá, José
Segura Meseguer, Ramón
Segura Ortí, Francisco

VILAR DE CANES



Los 9 vecinos de Vilar de Canes afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas representaban el 0,14% del total provincial, así como el 1,92% de la población total de la localidad y el 4,22% de la población masculina local. En relación con estas personas conocemos la existencia de 4 jornaleros, y que se incoaron 4 casos en 1939 y 2 casos en 1940.

El informe de referencia en Vilar de Canes era claramente el de la alcaldía, firmados por Juan Escrig. En ellos se hacía únicamente referencia a la relación de bienes del inculcado y su valoración económica. Tanto el Delegado Local de FET y de las JONS, Eduardo Sales, como el cura local Pascual Vives, copiaban el texto y lo firmaban. Desde el Puesto de Benasal, se firmaba unos informes que no aportaban ninguna novedad respecto a los anteriores, pero que mantenían una redacción diferente.⁴⁷

Relación de vecinos de Vilar de Canes afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Barreda Pitarch, Valero

Barrera Solsona, Juan

Beltrán Lazaga, Vicente

Blasco Roda, José

Escrig Sancho, José

Folch Escrit, Bautista

García Beltrán, Demetrio

García Beltrán, Nicomedes

Monfort Miralles, Joaquín

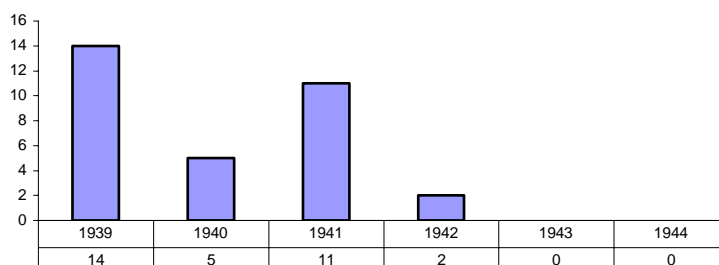
⁴⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Beltrán Lazaga, Caja 10065. AHPCS.

VILLAFAMÉS



En Villafamés fueron 118 las personas afectadas por la Ley de Responsabilidades Políticas, lo que representa un 1,88% del total provincial y el 4,95% de la población total de la localidad. Las 3 mujeres implicadas representaban el 0,15% de la población femenina local, mientras los 115 hombres restantes suponían el 6,59% de la población masculina de la localidad. En esta población tenemos documentada la presencia entre los inculcados de 10 labradores, 3 carreteros, 2 maestros, 1 jornalero, 1 farmacéutico y 1 barbero. Los expedientes de los que conocemos su fecha de incoación se abrieron en el periodo 1939-1942, destacando el elevado número de incoaciones producidas el primer año, que hemos de recordar que empieza a contar desde agosto.

Gráfica 5.41



Fuente: BOP, AHPCS

La Guardia Civil denunció a varios vecinos de Villafamés para su posterior procesamiento por responsabilidades políticas. El Comandante José Sospedra Vidal acompañaba sus denuncias con informes en los que se explicaba el historial político del inculcado y sus principales actividades durante la guerra civil. El alcalde de Villafamés únicamente informaba de los bienes del inculcado y su valoración económica, lo que servía de modelo para el Delegado Local de FET y de las JONS. No tenemos constancia del informe de la autoridad religiosa local.⁴⁸

⁴⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Ferrer Pallarés, Caja 10094; y contra Aureliano Santiago Alijas, Caja 10103. AHPCS.

Hemos de recordar que la Guardia Civil de Villafamés realizaba también los informes de los vecinos de Vall d'Alba.

Relación de vecinos de Villafamés afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agut Monforta, Bernardino	Escorihuela Valls, Vicente
Ahís Marzá, Francisco	Fabregat Navarro, Tomás
Ahís Marzá, Juan	Febrer Gil, Amadeo
Alejandro Benajes, Domingo	Febrer Pallarés, Enrique
Alejandro Benajes, Tomás	Febrer Pallarés, Juan
Alejandro Tomás, José	Febrer Pallarés, Manuel
Alús Marzá, Juan	Ferrer Gil, Amadeo
Andreu Barberá, Francisco	Ferrer Pallarés, Juan
Andreu Benet, Melchor	Fornals Lidón, Bautista
Andreu García, Manuel	García Andreu, Antonio
Andreu García, Miguel	García Andreu, Manuel
Andreu Lluesma, Vicente	García Beltrán, Emilio
Andreu Marzá, José	García Martínez, Aniceto
Andreu Marzá, Vicente	García Montañés, Vicente
Andreu Trilles, Miguel	García Pallarés, José Antonio
Baldayo Valls, Bautista	García Pallarés, Ramón
Barrachina Meseguer, María	Gasulla Vicente, Benito
Barrachina Montañés, Emilio	Gil Andreu, Vicente
Barrachina Ribés, Vicente	Gil Gil, Agustín
Barreda Castillo, Inocente	Gil Gil, Juan
Beire Expósito, Jesús	Gozalbo Andreu, Miguel
Beltrán Valero, Emilio	Ibáñez Casanova, Antonio
Benet Gozalbo, Juan	Laviñana Chiva, Rosendo
Benet Marzá, Miguel	Linares Portalés, José
Benet Pons, Vicente	Lliberós García, Francisco
Benet Renau, José	Lliberós Navarro, Vicente
Benet Renau, Tomás	Llorens Renau, Ángel
Benet Valls, Vicente	Llorens Renau, Miguel
Blasco Centelles, Vicente	Lluesma Rubio, Vicente
Blasco Trilles, Bautista	Mallasén Marzá, Miguel
Bou Pallarés, Vicente	Marco Aparici, Emilio
Cano Blasco, Constantino	Marta Gil, José Miguel
Capdevila Vicente, Vicente	Martínez Centelles, Jaime
Casañ Vilar, Facundo	Marzá Baldayo, Virginio
Castillo Vallés, Joaquín	Marzá Gil, José Miguel
Cervera Broch, Lorenzo	Marzá Ibáñez, Aurelio
Conde Benet, Miguel	Marzá Meseguer, Francisca
Corredor Martínez, Ángel	Marzá Oliver, José
Edo Doménech, Federico	Masallén Condén, Miguel
Escorihuela Valls, Juan	Molina Marzá, Ramón

Molina Marzá, Vicente
Molina Renau, Vicente
Moliner Renau, José
Monfort Pons, Manuel
Oliver Orlas, Manuel
Palau Ferrer, Ramón
Palau Monfort, Juan
Pallarés Barrachina,
Leovigildo
Pallarés Pallarés, Enrique
Pallarés Pallarés, Juan
Pallarés Renau, Manuel
Pallarés Rubio, José
Pastor Barrachina, Tomás
Pastor Cebriá, Agustín
Porcar Cepria, José
Puchol Albalat, Antonio
Puchol Arnau, José
Ramos Renau, José
Ramos Renau, María

Renau Pallarés, Manuel
Renau Tomás, Ramón
Roig Llorens, Eduardo
Sales Benet, Juan
Sales Benet, Manuel
Santiago Alijas, Aureliano
Segarra Valls, José María
Seguer Casan, Domingo
Suller Centelles, Vicente
Tomás Trilles, Eulogio
Torner Edo, Vicente
Trilles Martí, Aniceto
Trilles Valls, Bautista
Valles Aparici, José
Valls Llansola, Agustín
Valls Mallasen, Agustín
Velpé Expósito, Jesús
Vicente Guillamón, Julián
Vilar Llansola, Miguel

VILLAFRANCA



En Villafranca fueron 55 las personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, lo que suponía el 0,88% del total provincial y el 1,54% de la población total de la localidad. Los 50 hombres afectados representaban el 3,05% de la población masculina local, mientras las 5 mujeres suponían el 0,25% de la población femenina de la localidad. Entre estas personas conocemos la presencia de 5 labradores, 4 jornaleros, 1 chofer, 1 aserrador, 1 comerciante textil, 1 electricista, 1 albañil, 1 comerciante y 1 hojalatero. Tenemos documentada la incoación de 7 expedientes en 1941, de 11 en 1942 y de 7 más en 1943.

La Guardia Civil de Villafranca informaba de la situación personal y familiar del inculcado, así como de la relación de bienes y su consiguiente valoración económica. Este texto era copiado y firmado tanto por el alcalde como por el cura de la localidad. El informe del Delegado Local de FET y de las JONS era más detallado y con una redacción independiente⁴⁹. La Guardia Civil de Villafranca era también la encargada de realizar los informes de los vecinos de Ares del Maestre.

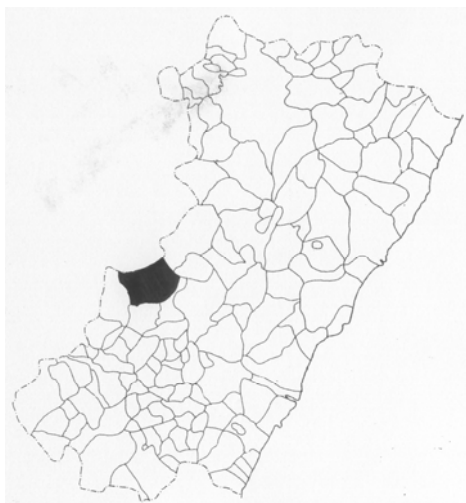
⁴⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fidel Marín Colom, Caja 10103. AHPCS.

Relación de vecinos de Villafranca afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Andrés Lecha, Alfredo
Andrés Lecha, José
Andrés Monfort, Vicente
Andrés Vicente, Simón
Barreda Celma, Inocente
Beltrán Escuder, Carmen
Camañes Badal, Enrique
Camañes Vidal, Enrique
Casanova Colón, Felipe
Casanova Monfort, Antonio
Centelles Querol, Jeremías
Colomer Lázaro, Saturnino
Corbatón Insertis, Gloria
Doménech Beltrán, José
Escuder Monfort, Amadeo
Fabregat García, Ángel
Fabregat Monfort, Antonio
Fabregat Monfort, Felipe
Fontanet Gil, Eliseo
Fontanet Gil, Rogelio
García Fabregat, Julián
García Gual, Domingo
García Tena, Victoriano
Gil Fernández, Antonio
Gil Fernández, Custodio
Marín Colom, Fidel
Marín Falcó, Manuel

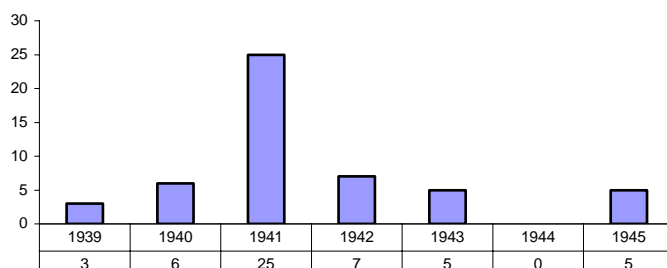
Marín Prades, Juan Antonio
Miralles Monfort, Jaime
Monfort Centelles, Carmen
Monfort Clemente, Francisco
Monfort Edo, Jerónimo
Monfort Fabregat, Alfredo
Monfort Fabregat, Isidoro
Monfort Fabregat, Juan
Monfort Fontaner, Carmen
Monfort Marín, Catalina
Monfort Molés, José
Monfort Pons, Ernesto
Monfort Pons, Manuel
Monfort Salvador, Amado
Monfort Solés, José
Monteverde Mestre, Clemente
Palomo Pallarés, Manuel
Pons Pons, Manuel
Prades García, Felipe
Prades García, Francisco
Prades García, Miguel
Roca Márquez, José
Tena Deusdal, Benjamín
Tena Fabregat, Miguel
Tena García, Tomás
Tena Vicente, Alejandro
Vicente Vicente, Honorato
Vidal Prades, José

VILLAHERMOSA DEL RÍO



Las 72 personas de Villahermosa del Río que se vieron afectadas por la exigencia de responsabilidades políticas representaban el 1,16% del total provincial, así como el 3,05% de la población total de la localidad. Las 6 mujeres afectadas suponían el 0,55% de la población femenina local, mientras los 66 hombres restantes representaban el 5,55% de la población masculina de la localidad. Tenemos documentada la presencia entre los inculpados de 17 labradores, 2 jornaleros y 1 chofer. Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1943, con un máximo destacado en 1941.

Gráfica 5.42



Fuente: BOP, AHPCS

En cuanto a las autoridades⁵⁰, el alcalde de Villahermosa del Río, Nicolás García, explicaba en sus informes los antecedentes políticos del inculpado y valoraba su conducta. Además, finalizaba los informes con una ficha descriptiva de los bienes y fincas con su valoración económica. Este informe era copiado, aunque sin la parte económica final, por el cura local Luis Fernández. El Delegado Local de FET y de las JONS realizaba informes más duros y agresivos en los que la acusación directa era la norma, acompañados también por una relación detallada de bienes. La Guardia Civil se basaba en la información de la alcaldía sobre el historial político, especificando aspectos como a quién votó el inculpado en las elecciones de febrero de 1936. Los bienes se

⁵⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gonzalo Castillo Mollón, Caja 10075. AHPCS.

valoraban de una forma mucho más global. La Guardia Civil de Villahermosa del Río se encargaba también de los informes de los vecinos de Zucaína.

Relación de vecinos de Villahermosa del Río afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Badenas Piñón, Sebastián
Bau García, Celestino
Beltrán Edo, Vicente
Benages Bou, Concepción
Benages Herrando, Manuel
Benajes Flor, Manuel
Benajes Gasch, Emilia
Bou Benages, Sebastián
Bou Bou, Antonio
Bou Bou, Gabriel
Bou Pérez, Víctor
Castillo Bajés, Vicente
Castillo Benages, José
Castillo Benages, Vicente
Castillo Castillo, Eugenio
Castillo Mollón, Gonzalo
Castillo Montón, Ramón
Cubedo Iserte, Juan
Chillida Castillo, Andrés
Domingo Mas, Godofredo
Flor Bou, Manuel
Flor Gallén, Juan
Flor Guillamón, Manuel
Flor Ibáñez, Vicente
Flores Gargallo, Ramón
García Bou, Julio
García Catalán, Manuel
Gargallo Benajes, Rosa
Gargallo Gargallo, Antonio
Gil Monterde, María
Gimeno Ibáñez, José Ramón
Gimeno Zafón, Antonio
Granell Guillamón, Francisca
Guillamón Bau, Amadeo
Guillamón Benages, Juan José
Guillamón Flor, Manuel

Guillamón Guillamón, Ramón
Guillamón Salvador, José
Iserte Badenas, Manuel
Iserte Solsona, Juan
Iserte Solsona, Pedro
Llach Ibáñez, David
Llach Ibáñez, José
Martín Melián, Rafael
Mas Bou, Modesto
Mas Bou, Teresa
Mollón Castillo, Juan
Monferrer Benages, Horacio
Montoliu Flor, Higinio
Montoliu García, Manuel
Montoliu Porcar, Antonio
Nebot Nebot, José
Peña Castillo, Tomás
Peña Catalán, Juan
Peret Bea, Vicente
Piñón Miravete, Joaquín
Porcar Gallén, José
Robles Bou, Antonia
Rubio Monferrer, Emilio
Sola Villarrasa, Juan
Solsona Bort, Miguel
Solsona Expósito, Juan
Solsona Fortea, José
Solsona Gimeno, Juan
Solsona Mas, Pedro
Solsona Mor, Vicente
Solsona Silvestre, León
Tomás Adelantado, Antonio
Ventura Alós, Agustín
Villagrassa Guillamón, Genaro
Villagrassa Guillamón, Jerónimo
Xanco Adelantado, Manuel

VILLAMALUR



En Villamalur el único vecino afectado por la Ley de Responsabilidades Políticas suponía el 0,01% del total provincial, así como el 0,4% de la población total de la localidad y el 0,6% de la población masculina local. No disponemos de más datos sobre estas personas porque en el Archivo Histórico Provincial de Castellón no existe ningún expediente de responsabilidades políticas de vecinos de esta localidad.

Relación de vecinos de Villamalur afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Gimeno Alcócer, Ignacio⁵¹

⁵¹ Aparece como vecino de Valencia, según los datos del Archivo Histórico Provincial de Castellón, aunque en el Boletín Oficial de la Provincia es nombrado como vecino de Villamalur.

VILLANUEVA DE ALCOLEA



En Villanueva de Alcolea la exigencia de responsabilidades políticas alcanzó a 19 vecinos, todos ellos varones. Esta cifra representaba el 0,3% del total provincial, así como el 1,16% de la población total de la localidad y el 2,46% de la población masculina local. Únicamente tenemos documentada la presencia entre estas personas de 1 jornalero, así como la incoación e 6 expedientes en 1940 y de 2 en 1941.

La alcaldía de Villanueva de Alcolea, en manos de Joaquín Garrido, informaba de la situación personal y familiar del inculcado, así como de su jornal y de los bienes de que disponía, con su valoración económica. Este informe no era muy distinto del de A. Ferreres, Jefe Local de FET y de las JONS. La Guardia Civil encargada de la realización de los informes de estos vecinos era la del Puesto de Torreblanca, que aportaba detalles nuevos y una redacción distinta e independiente respecto las anteriores. No tenemos constancia de informe de la autoridad religiosa local.⁵²

⁵² Expediente de Responsabilidades Políticas contra José María García Ortiz, Caja 10091. AHPCS.

Relación de vecinos de Villanueva de Alcolea afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Albella Casanova, Bautista
Borrás Bort, Vicente
Bort Borrás, Hermenegildo
Bort Borrás, Joaquín
Bort Traver, Julio
Capdevila Bellés, Antonio
Capdevila Siler, Antonio
García Martínez, Manuel
García Ortiz, José María
Martín Maimo, Evaristo
Martínez Borrás, Tomás
Martínez Octavio, Salustiano
Martínez Rambla, Bautista
Ostal Beltrán, Manuel
Puchol Selma, Manuel
Puchol Selma, Vicente
Roig Capdevila, Emilio
Saura Benlliure, Vicente
Saura Saura, Jaime

VILLANUEVA DE VIVER



En Villanueva de Viver la exigencia de responsabilidades políticas alcanzó a 6 vecinos, un 0,09% del total provincial, así como el 1,95% de la población total de la localidad y el 4,13% de la población masculina local. De esta población únicamente disponemos de copias de testimonios de condena por un tribunal militar depositadas en el Archivo Histórico Provincial de Castellón, por lo que no podemos ofrecer más datos.

Relación de vecinos de Villanueva de Viver afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alegre Amorós, Vicente
Colas Pastor, Julián
Gómez Medina, Blas
Ibáñez Benedicto, José
Tamborero Pastor, José
Villanueva Villalba, Santiago

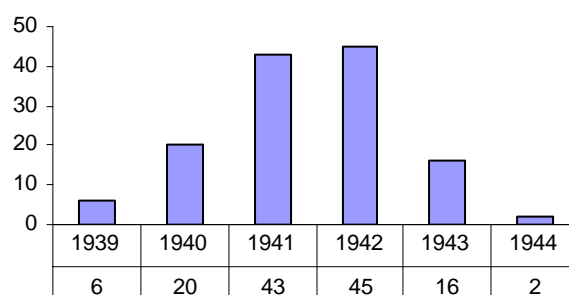
VILLARREAL



En Villarreal fueron 292 las personas que se vieron afectadas por la exigencia de responsabilidades políticas, lo que supone un 4,67% del total provincial y el 1,57% de la población total de la localidad. Los 284 casos de varones afectados implican que el 3,07% de la población masculina local se vio afectada, mientras que los 8 casos de mujeres afectadas representan el 0,07% de la población femenina local. La mayoría de estas personas pertenecían al sector primario de la economía, ya que se trataba de labradores y jornaleros, aunque también hay una notable presencia de representantes del sector secundario, especialmente albañiles, metalúrgicos, azulejeros, alpargateros y maquinistas. Por parte del sector terciario encontramos militares, maestros, comerciantes, posaderos, escribientes, etc. Hemos de recordar que en esta población se incluía la de la localidad de Alquerías del Niño Perdido, que en 1985 obtuvo su autonomía como municipio.

Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1944, con un bienio muy intenso, 1941-1942, a partir del cual la situación se normaliza. Destaca el elevado número de expedientes y el hecho que su incoación no haya cesado ningún año del periodo analizado.

Gráfica 5.43



Fuente: BOP, AHPCS

En cuanto a las autoridades⁵³, la alcaldía de Villarreal, en manos de Pascual Renal en 1941, confeccionaba unos informes en los que se destacaba la filiación política del

⁵³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benlloch Portolés, Caja 10093; contra Juan Bautista Albiol Ayet, Caja 10069; y contra Vicente Soriano Ramos, Caja 10145. AHPCS.

inculpado, su actuación durante la guerra, la situación económica de su familia y su patrimonio. El Delegado Local de FET y de las JONS no aportaba ningún dato nuevo, al igual que la Guardia Civil. El cura Miguel Pedrós, de la Parroquia Arciprestal de Villarreal se expresaba en un tono más conciliador y analizaba la conducta social y moral del inculpado después de la guerra.

Relación de vecinos de Villarreal afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Abad Sales, Vicente	Bautista Ferrer, Silverio
Adell Beltrán, Vicenta	Belaire Mundina, Bautista
Aguilella García, Enrique	Beltrán Fortuño, Benjamín
Aguilella Moyano, Manuel	Beltrán Juan, Vicente
Agulleiro Giner, Pascual	Beltrán Llopico, José
Albella Broch, Salvador	Beltrán Llopis, Bautista
Albella Cabedo, José	Beltrán Llorens, Joaquín
Albiol Ayet, Juan Bautista	Beltrán Moreno, Manuel
Albiol Castell, Luis	Bellmunt Della, José
Almela Nácher, Bautista	Bellmunt Monzó, Ramón
Almela Ortells, Antonio	Bellmunt Nebot, Domingo
Amorós San Nicolás, Pascual	Benedicto Sancho, Vicente
Amposta Cabanes, Pascual	Benlloch Portolés, José
Andrés Girona, Pascual	Bernad Soriano, José
Arnal Mezquita, Pascual	Bernat Llop, José
Arrufat Cortés, José	Bisbal Buixens, Enrique
Arsis Broch, Miguel	Bodi Vilar, Vicente
Artero Fusales, Ramón	Bono Albiol, Pascual
Asencio Reverter, Julián	Bono Cardona, Vicente
Asencio Seglar, Pascual	Bono Ramos, Joaquín
Asensi Guiso, José	Bonos Ramos, Pascual
Asensio Bonet, Pascual	Borrás Fabregat, José
Augusto Becher, karl Alejandro	Bort Agulleiro, José
Ayet Menero, Pascual	Bort Broch, Pascual
Balaguer Diago, Ángela	Bort Serra, José
Balaguer Molés, Bautista	Broch Blasco, Bautista
Balaguer Ortiz, Enrique	Broch Bort, José
Ballester Carda, Emilio	Broch Manrique, Antonio
Ballester Claramonte, Vicente	Broch Manrique, Vicente
Ballester Martí, Bautista	Broch Ortí, José
Ballester Rubert, Vicente	Cabedo García, Miguel
Basiero Molés, Bautista	Cabedo Gil, Vicente
Batalla Laporta, José	Cabedo Meseguer, Manuel
Batalla Lapuerta, Enrique	Cabedo Nebot, Salvador
Batalla Llop, Bautista	Cabedo Nebot, Vicente

Cabella Vicent, José
 Cabrera Cremades, Pascual
 Cabrera Guinot, Teresa
 Cabrera Palomar, Vicente
 Candao Gil, Vicente
 Capella Arrufat, Serafín
 Capella Pastor, Ramón
 Capella Saborit, Bautista
 Capella Saborit, Vicente
 Capella Vicent, José
 Capella Vives, Serafín
 Carceller Sanz, Bautista
 Carceller Sanz, Santiago
 Carda Canós, Lorenzo
 Carda López, Blas
 Carda Meseguer, Constantino
 Carda Peris, Enrique
 Carda Peris, Manuel
 Carda Puig, Manuel
 Carda Usó, Pascual
 Casalta Carda, Vicente
 Casalta Cerdá, Blas
 Casalta Romero, Blas
 Casañ Vilar, Facundo
 Casinos Sogues, José
 Castell Montañés, José
 Cataluña Badal, Benjamín
 Centelles García, Rogelio
 Cercos Carda, Vicente
 Cercos Catalá, Pascual
 Cercos Rochera, Pascual
 Cerdá Peris, José
 Cervera Artero, Vicente
 Cortés Moreno, José
 Cortés Peset, Alberto
 Costa Aguilar, Vicente
 Costa Cantavella, Vicente
 Costa Juan, José
 Cotolí Nebot, José
 Cuarto Figueras, Juan
 Cubedo Chalmeta, José
 Cubero Guiral, Pascual
 Cubertoret Oria, Manuel
 Curto Figueras, Juan

Chabrera Guinot, Teresa
 Chiva Escriche, Luís
 Chiva Pallarés, Manuel
 Chust Martínez, Vicente Juan
 Darás Fuster, Bautista
 Delas Font, José María
 Delas Pons, José M^a
 Díaz Estrems, Antonio
 Eixea Petit, Elias
 Eixea Vilar, Manuel Segundo
 Esteller Llop, Manuel
 Félix Mesado, Bautista
 Ferrer Menero, Pascual
 Ferriols Muñoz, Manuel
 Fortunato Pitarch, José
 Fortuño Peris, Domingo
 Gallego Forés, Ramón
 García Bort, Rosario
 García Delgado, Elías
 García Mata, Carmen
 García Monzonís, Pascual
 García Pérez, José
 Gascó Salisa, José
 Gil Caparrós, Damián
 Gil Esteve, Lorenzo
 Gil Esteve, Manuel
 Gil Mesado, José
 Gil Muñoz, Francisco
 Gil Parros, Daniel
 Gimeno Molina, Manuel
 Gual Pirós, Salvador
 Guinot Balaguer, Carlos
 Guzmán Bernat, Francisco
 Herrero Chabrera, Vicente
 Herrero Gil, Domingo
 Herrero Gil, Vicente
 Ibáñez Almansio, Francisco
 Ibáñez Almela, Manuel
 Jordá Goterris, Pascual
 José Moles, Vicente
 Juan Franco, José
 Juan Franco, Juan
 Juan Pons, Francisco
 López Membrado, Jaime

Llop Capella, Nicomedes
Llop Lisart, Jerónimo
Llop Llop, Pascual
Llop Llop, Ramón
Llop Manrique, Pascual
Llop Notari, Pascual
Llorens Catalá, Antonio
Llorens Llidó, Vicente
Llorens Melchor, Vicente
Llorens Miró, Vicente
Llorens Usó, Bautista
Llorens Usó, Francisco
Lloret Manrique, Juan Bautista
Macià Martí, Pascual
Manzanet Cabedo, Vicente
Marín Sales, Bienvenido
Marmaneu , Vicente
Marmaneu Esteve, José
Martí Vidal, Pascual
Mata Almela, José
Mata Beltrán, Agustín
Mata Notari, Pascual
Melià Agustí, Joaquín
Meseguer Devis, José
Meseguer Sanjuan, Felix
Meseguer, Concepción
Mezquita Badenes, Francisco
Mezquita Peris, Francisco
Mezquita Puig, Francisco
Micó Veralt, José
Mir Olaria, Vicente
Miralles Cabedo, Pascual
Miró Ferrer, Domingo
Miró Huguet, José
Miró Olaria, Vicente
Miura Vicent, Juan
Molés Barrera, Vicente
Moles Capella, Benjamín
Molés Grifo, Manuel
Molés Melchor, Bautista
Molés Melchor, Ramón
Molés Rius, José
Molés Usó, Vicente
Moliner Barrube, José

Moliner García, Francisco
Moliner Traver, Domingo
Monfort Miralles, Joaquín
Montero Martín, Juan
Montons Campos, Manuel
Monzó Mulet, Vicente
Moreno Jordá, José
Mulet Delas, Antonio
Nácher Gómez, José
Navarro Barrue, Pascual
Navarro Bernat, Vicente
Navarro de la Cinta, Pascual
Navarro Rodríguez, Luis
Navarro Segarra, Alejandro
Nebot Balaguer, José
Nebot Ibáñez, Pascual
Nebot Menero, Pascual
Nomdedeu Badenes, Ángel
Nota Notari, Pascual
Ortega, José
Pascual Ruiz, Eduardo
Peña Gresa, Roberto
Pérez Pérez, Pascual
Pérez Saborit, Manuel
Peris López, Vicente
Personat Pitarch, Vicente
Pesudo Bort, Manuel
Pesudo Cantavella, José
Pesudo Navarro, Blas
Pitarch Balaguer, José
Pitarch Canós, Pascual
Pitarch Clausell, José
Pla Vilella, Segundo
Porcar Pitarch, José
Rambla Almela, Vicente
Ramos Gil, Serafín
Renau Cabedo, Julián
Ribelles Aymerich, Joaquín
Rivelles Torres, Enrique
Roca Agustí, Vicente
Roca Lorca, Pascual
Ronchera Castelló, Pascual
Rubert Moreno, Vicente
Rubert Soriano, Juan

Saera Canós, Alfonso
Safont Benlliure, Manuel
Safont Rambla, Miguel
San Miguel Capella, Luís
Sánchez León, José
Sanchis Tronchini, Amador
Sancho Cortés, José
Sanmiguel Capellá, Luís
Saura Menero, Francisco
Sebastián Cubero, Antonio
Seglar Costa, Vicente
Seglar García, Concha
Segura Ferrer, Joaquín
Segura Fonfría, Lorenzo
Segura Meseguer, José
Sifre Monzó, Vicente
Sifre Petit, Manuel
Simarro Piqueras, Félix
Simó Aimerich, Vicente
Simó Alberich, Vicente
Soriano Bernat, Salvador
Soriano Ramón, Vicente
Sorribes Franch, José

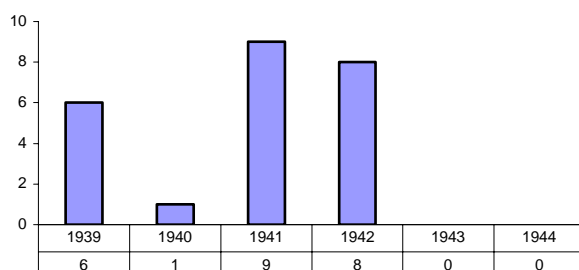
Subirats Jaime, José
Tellols Garí, Manuel
Usó Cabedo, Santiago
Usó Giménez, Bautista
Usó Jarque, Manuel
Usó Puchol, José
Vall de Cabres San Martín, Onofre
Valls Flores, Tomás
Ventura Ballester, Agustín
Vicent Casalta, Ramón
Vicent Vila, Salvador
Vicente Carda, Juan
Vicente Pablo, Sebastián
Vidal Cubedo, David
Vidal Cubero, Eliseo
Vidal Segura, José Ramón
Vila Zurita, Vicente
Vilanova Menero, Antonio
Vilar Bodí, José
Vilar Parra, José E.
Vilar Parra, José Ramón
Villalba Pinella, Francisco
Villarreal Cabedo, Jaime

VILLAVIEJA



En Villavieja fueron 63 las personas implicadas en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas, lo que supone un 1% del total provincial y el 2,45% del total de la población de la localidad. Los 9 casos de mujeres afectadas representan el 0,68% de la población femenina local, mientras los 54 hombres restantes suponen el 4,39% de la población masculina de la localidad. Tenemos documentados los casos de 8 labradores, 5 jornaleros, 3 albañiles y 1 caso de camarero, secretario, industrial, panadero, chofer y alpargatero. Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1942, siendo los dos últimos años los de mayor intensidad represiva.

Gráfica 5.44



Fuente: BOP, AHPCS

Tanto la alcaldía de Villavieja, en manos de Vicente Carratalá, como el Delegado Local de FET y de las JONS, José Roig, daban una prioridad absoluta en sus informes a la relación de bienes del inculcado y su valoración económica. La Guardia Civil encargada de los informes de los vecinos de esta localidad era la del Puesto de Nules. El Comandante Salvador Vilar emitía informes en los que se repasaba los antecedentes políticos del inculcado, sus actos más importantes durante la guerra y sus bienes. No tenemos constancia de informe de la autoridad religiosa de Villavieja.⁵⁴

⁵⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Dolores Vicent Peirats, Caja 10091. AHPCS.

Relación de vecinos de Villavieja afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Adsuara Ferrandis, Benjamín
Almela Capella, Vicente
Ballester Carratalá, Sebastián
Ballester Orenga, Vicente
Bandrés Adsuara, Benjamín
Barres Orenga, Vicente
Bertomeu Fernández, Ramón
Bonet Caballer, Francisco
Caballer Recatalá, Pascual
Carceller Carratalá, Sebastián
Carratalá Caballer, Vicente
Carratalá Casinos, Juan
Carratalá Casinos, Mariana
Carratalá Casinos, Vicente
Carratalá Recatalá, Juan
Carratalá Rogi, Pascual
Carratalá Vicent, José
Carreguí Recatalá, Antonio
Casino Gómez, Marina
Cifre Adsuara, Remedios
Clofent Aleixandre, Pascual
Clofent Armillas, Vicenta
Garregui Recatalá, Antonio
Gómez Romero, Miguel
Lengua Badenes, Blas
Lengua Badenes, Francisco
Lengua Badenes, Vicente
Lenguas Badenes, Blas
Mallén Santaregina, Vicente
Martínez Gómez, Lázaro
Martínez Monlleó, José

Martínez Peirach, Vicente
Martínez Romero, Francisco
Martínez Vicente, Miguel
Naixes Agramunt, Vicente
Naixes Gómez, Pascual
Nebot Millán, Ramón
Peirats Ibáñez, Francisco
Peirats Molés, Dolores
Pla Pla, Juan
Recatalá Cano, Ramón
Recatalá Ibáñez, Miguel
Recatalá Recatalá, Juan
Recatalá Recatalá, Ramón
Roig Lengua, Blas
Roig Lengua, Elías
Romero Millán, Pascual
Romero Peirats, Pascual
Sales Bertomeu, José
Sales Recatalá, Pascual
Sales Ventura, Manuel
Sanahuja Lecina, Sebastián
Sánchez Naixes, Francisco
Vicent Orenga, José
Vicent Pablo, José
Vicent Pedro, Dolores
Vicente Orenga, José
Vicente Pablo, Dolores
Vicente Pablo, José
Vicent Pitarch, Dolores
Vicente Robles, María
Vidal Estellés, Carmen
Zaragoza Castelló, Pascual

VILLORES



Los 13 vecinos que en Viltores sufrieron el peso de la jurisdicción de Responsabilidades Políticas representaban el 0,21% del total provincial, además del 3,12% de la población total de la localidad y, como todos ellos eran varones, el 6,46% de la población masculina local. Desconocemos la profesión de estas personas, pero las fuentes disponibles nos permiten saber que 6 de los expedientes fueron incoados en 1940, como consecuencia de la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola.

El alcalde de Viltores, Juan Centelles, analizaba en sus informes los antecedentes políticos del inculcado y realizaba un repaso de sus actos más significativos durante la guerra, adjuntando aparte un informe con la relación de bienes y su valoración económica. Bruno P., Delegado Local de FET y de las JONS, copiaba este informe (ambos escritos del mismo puño y letra) y lo firmaba. El Comandante de la Guardia Civil del Puesto de Forcall era el encargado de realizar estos informes, que tenían una estructura similar a los anteriores. No tenemos constancia de informe de la autoridad religiosa local.⁵⁵

⁵⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gerónimo Troncho Troncho, Caja 10089. AHPCS.

Relación de vecinos de Villoros afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

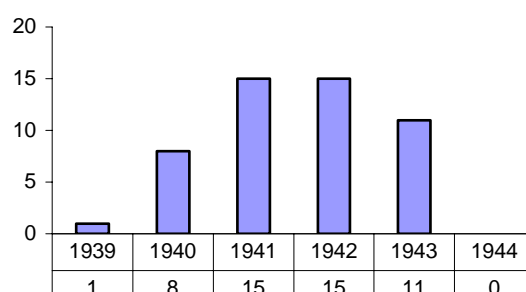
Celma Lecha, Pedro
Fuentes Julián, Antonio
Guimerá Carbó, Antonio
Mampel Martí, Antonio
Manuel Carceller, José
Martí Expósito, Francisco
Noguera Beltrán, Agustín
Nogueres Beltrán, Augusto
Peñarroya Guimerá, Francisco
Peñarroya Mampel, Cipriano
Riera Lloret, José
Sánchez Tejada, Antonio
Troncho Troncho, Gerónimo

VINARÓZ



En Vinaroz el número de afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas fue de 126⁵⁶, un 2,01% del total provincial y el 1,35% del total de la población de la localidad. Los 120 casos de hombres implicaban que se vio afectado el 2,89% de la población masculina de la localidad, mientras los 6 casos de mujeres suponían el 0,11% de la población femenina local. En Vinaroz destaca la presencia entre los inculcados de un mayor número de personas pertenecientes al sector secundario de la economía que del sector primario. Destaca también una fuerte presencia de representantes del sector terciario (maestro, químico, comerciante, político, militar, etc.). Los expedientes se incoaron en el periodo 1939-1943, con sendos máximos los años 1941 y 1942.

Gráfica 5.45



Fuente: BOP, AHPCS

La Guardia Civil de Vinaroz, a través del Comandante Narciso Camilo emitía unos informes en los que se explicaba la situación familiar del inculcado y sus bienes, con su correspondiente valoración económica. La alcaldía, y el Delegado Local de FET y de las JONS, se centraba exclusivamente en los bienes del inculcado y su valoración económica. El cura V. Escrig, de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Vinaroz, repasaba la actuación del inculcado durante la guerra y lo calificaba moralmente.⁵⁷

⁵⁶ A. Arnau cita para esta población 79 procesados por responsabilidades políticas. A. Arnau, op. cit. Pp. 501-515.

⁵⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Artola Roca, Caja 10103; y contra Sebastián Pedra Canós, Caja 10145. AHPCS.

Relación de vecinos de Vinaroz afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agramunt Agramunt, Bautista
Aguilar Corcuera, Rafael
Albella Escribá, Sebastián
Anguera Llovera, José
Aragonés Valenzuela, José
Artola Roca, Juan
Baila Giner, Elías
Baila Segura, Valeriano
Bas Miralles, Juan
Boix Estellera, Vicente
Bonet Ribera, Bautista
Bordes Agramunt, Francisco
Brau Roso, Sebastián
Caballer Forner, Gerardo
Calduch Doménech, Pascual
Callarías Miralles, Domingo
Camos Calleriza, Salvador
Castells Llorens, Luis
Caudet Puchol, Alfredo
Cervera Lluesma, Vicente
Cifre Pellicer, Manuel
Codorniz Guarch, Anselmo
Cucala Valls, Juan
Chaler Doménech, Francisco
Chaler Martí, Agustín
Delgado Yagüe, Eladio
Doménech Baldrich, Antonio
Doménech Baldrich, Teresa
Doménech Esteller, Germán
Doménech Miralles, Bautista
Doménech Miralles, José
Doménech Pertegás, Sebastián
Espallergues Molina, Leonardo
Fenollosa Castell, Juan
Ferrá Corbeto, Miguel
Ferrerres Sospedra, Cándido
Fibla Pellicer, Manuel
Folch Estadella, Vicente
Forner Caballer, Bautista

Forner Miralles, Juan
Forner Querol, Alfredo
Fraile Giner, Cristóbal
Gabalda Gisbert, Santiago
Galindo Castillejos, Pedro
García Galarza, Jesús
Gasulla Reguart, Juan
Gómez Fabregat, Francisco
Grande González, Melchor
Guardino Sospedra, Bautista
Guimerá Gisbert, Ángel
Jornaler Aragonés, José
Jovaní Ferreres, Marcos
Juan Mengual, Tomás
Juan Miralles, Sebastián
Leses Camos, Domingo
López Dóriga, Luis
López Sospedra, Ramón
Llácer Clará, Antonio
Llatser Fenollosa, Antonio
Lluch Falcó, Francisco
Marmaña Gaso, Sebastián
Martínez Bonet, Bautista
Martínez Broch, Juan Manuel
Martínez Martínez, Demetrio
Marzá Lluch, Bautista
Meseguer Llopis, Carlos
Mir Felip, Manuel
Mir Feliu, Sixto
Mira Rull, Enrique
Miralles Cosme, Sebastián
Miralles Esteller, Juan Bautista
Miralles Forner, Felipe
Miralles Matamoros, Vicente
Monroig Bayarri, Vicente
Monroig Bericart, Manuel
Niñerola Niñerola, Cinta
Obiol Galán, Sebastián
Oms Roca, Antonia
Orero Chaler, Sebastián
Palatsí Lluch, Juan

Palomo Puig, Antonio
Palomo Serrat, Joaquín
Palomo Serrat, Magdalena
Pavía Serrano, Emilio
Pedra Caños, Sebastián
Perra Corbeto, Miguel
Polo Callfrisa, Josefa
Porcar Candel, Antonio
Puchol Baila, Sebastián
Puchol Bordes, Sebastián
Puchol Gauxarch, Agustín
Puchol Sabater, Juan
Querol Artola, Vicente
Querol Niñerola, Ricardo
Quixal Garriga, Joaquín
Rabasa Carceller, Manuel
Rabasa Gumbau, José
Rabasa Gumbau, Juan
Ribera Pascual, Bautista
Ricart Miralles, Juan
Roca Blasco, Federico
Roca Roca, Antonia
Roig Arenós, Manuel

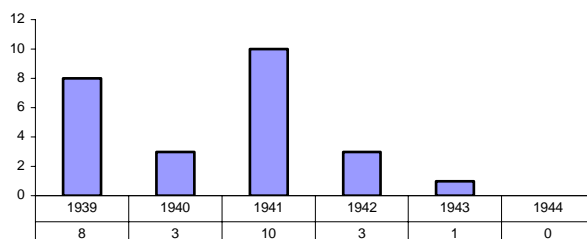
Romeu Puig, Antonio
Sabater Miralles, Sebastián
Salazar Pla, Juan
Salom Jardín, Francisco
Salvador Arnau, Sebastián
Salvador Beltrán, Francisco
Santacruz Burriel, Sebastián
Serrat Pegueroles, Alfonso
Serrer Forner, Pedro
Serret Mestre, Ricardo
Soto Marmaña, Sebastián
Subirats Matamoras, Ramón
Tarragó Peris, José
Tonadijo Gil, Ramón
Tormo Martínez, Bautista
Tornadijo Gil, Ramón
Torres Marmaña, Sebastián
Torres Sabater, Juan Bautista
Valls Brau, Sebastián
Vidal Martín, Domingo
Vidal Martínez, Bautista
Vilaplana Ebrí, José
Vizcarro Miralles, Joaquín

VISTABELLA



Las 40 personas que en Vistabella se vieron afectadas por la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas representaban el 0,64% del total provincia, así como el 2% de la población total de la localidad. El único caso de mujer afectada suponía el 0,09% de la población femenina local, mientras los 39 casos de hombres representaban el 4% de la población masculina de la localidad. Tenemos documentados 10 labradores y 1 jornalero, además de 3 albañiles, 1 canastero, 1 sastre y 1 chofer. Los expedientes fueron incoados en el periodo 1939-1943, con un máximo en el año 1941.

Gráfica 5.46



Fuente: BOP, AHPCS

La alcaldía de Vistabella, en manos de Ramón Fabregat, emitía unos informes en los que se repasaba el historial político del inculcado, su actuación durante la guerra y su situación familiar. Tras su calificación moral se analizaban sus bienes. El informe de Joel Fabregat, Delegado Local de FET y de las JONS solía ser una copia calcada del informe de la alcaldía, aunque esto no debe ocultar que denunció a varios de los vecinos de la localidad. La Guardia Civil repasaba su actitud durante la guerra, su evolución política y valoraba su situación económica general. El cura José Escrig se limitaba a calificar moral e ideológicamente al inculcado y a basarse en el informe de la alcaldía.⁵⁸

⁵⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Saturnino Centelles Olaria, Caja 10129; y contra Leonardo Salvador Fabregat, Caja 10129. AHPCS.

Relación de vecinos de Vistabella afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Alcón Safont, Ramón

Ana Zaragoza, José

Arnau Pons, Pascual

Campos Traver, Julián

Castelló Olaria, Saturnino

Centelles García, José

Centelles García, Juan

Centelles Olaria, Saturnino

Edo Campos, Rodrigo

Edo Orenga, Eduardo

Edo Robles, Basilio

Escrig Escrig, Ramón

Escrig Orenga, José

Escrig Salvador, Eduardo

Fabregat Solsona, Francisco

Folch Badenes, Ulciber

Folch Olerig, Olegario

García Folch, Silvestre

Gonzalo Amarante, Juan

Gual Miravet, Manuel

Gual Miravet, Ramón

Mateo Pérez, Manuel

Miralles Monfort, Saturnino

Monfort Alcón, Carmen

Monfort Monferrer, Antonio

Peris Escrig, Francisco

Peris Escrig, Fulgencio

Pons Solsona, Gil

Pons Vives, Feliciano

Robles Monferrer, Patrocinio

Safont Olerig, Francisco

Safont Olerig, José

Salvador Fabregat, Fernando

Salvador Fabregat, Leonardo

Salvador Prat, Victoriano

Salvador Prats, Estanislao

Salvador Prats, Tomás

Salvador Prats, Victoriano

Tena Edo, Odilón

Tena Lázaro, Augusto

VIVER



En Viver fueron 43 los vecinos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas, todos ellos varones. Esto representaba el 0,68% del total provincial de afectados, así como el 2,07% de la población total de la localidad y el 4,12% de la población masculina local. Tenemos documentada la presencia de 3 labradores y 1 maestro, así como la incoación de 1 expediente en 1939, 1 en 1940 y 3 en 1941.

Curiosamente en Viver el informe del cura local, Manuel Rozalén, de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Viver, era el que en ocasiones servía de referencia al resto de autoridades locales, aunque en todos los informes lo único que se expresa es la cantidad de bienes de los que dispone el inculpaado y su valoración económica.⁵⁹

⁵⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Narciso Simón Pinado, Caja 10075. AHPCS.

Relación de vecinos de Viver afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Agustín Noguera, Francisco
Agustín Villanueva, José
Aliaga Igual, Rafael
Barrachina Camilo, José
Benages Badía, Gonzalo
Benedicto Callur, Juan
Benedito Gallut, Laureano
Campos Aliaga, Miguel
Carasa Cortés, Fernando
Cortés Belarte, Miguel
Estiguin Julián, Jacinto
Estiguin Julián, Manuel
Estinguín Fornás, José
Fonrás López, Miguel
Herrero García, Manuel
Ibáñez Pérez, Francisco
Isen Folio, Esteban
Julián Fornás, Manuel
López Monzonís, José
Maicas Estiguin, Miguel
Manuel Guillamón, Vicente
Máñez Pradillas, José

Moteo Flor, Manuel
Navarro Macián, Martín
Noguera Gallut, Arturo
Noguera Montañés, Francisco
Noguera Povo, Antonio
Ordaz López, Francisco
Orero Martínez, Rafael
Parreño Gorriz, Miguel
Perales Tudón, José
Pérez Blanch, Manuel
Pérez Simón, Gregorio
Povo Alcaide, José
Puerta Martínez, Miguel
Rivelles Vidal, José
Salvador Moliner, José
Salvador Navarro, Joaquín
Simón Pintado, Narciso
Simón Piquer, Antonio
Sirvent Mayor, Alejandro
Soler Povo, Isidro
Torres Sorlí, Joaquín

ZORITA



En Zorita hubo 17 personas afectadas por la exigencia de responsabilidades políticas, lo que supone el 0,27% del total provincial y el 1,97% de la población total de la localidad. El único caso de mujer afectada representaba el 0,22% de la población femenina local, mientras los 16 casos de hombres restantes suponían el 3,84% de la población masculina de la localidad. Tenemos documentada la presencia entre estas personas de 2 labradores, 1 abadero y 1 comerciante, así como la incoación de 3 expedientes en 1940, fruto de la liquidación de datos del Servicio de Recuperación Agrícola, 5 en 1941 y 1 en 1943.

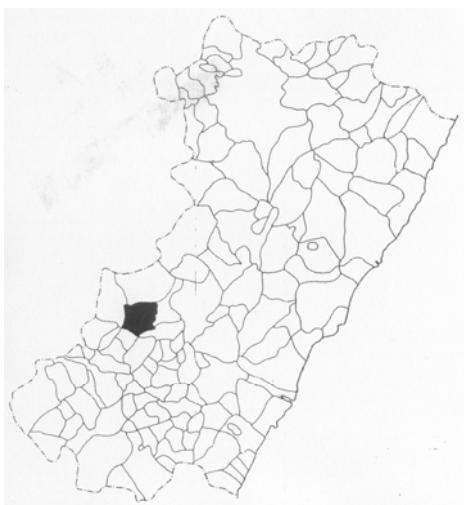
La alcaldía de Zorita emitía unos informes en los que se destacaba el historial político del inculcado y de su familia, acompañado de la oportuna relación de bienes y su valoración económica. José Martí, Jefe Local de FET y de las JONS, no añadía nada nuevo pero su redacción era independiente, con un tono agresivo y acusatorio. La Guardia Civil no aportaba nada nuevo, salvo una relación de bienes más detallada. El cura Ezequiel Saura, de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Zorita, estaba en clara conexión con el informe de la alcaldía, aunque mantenía una redacción diferente, aportando una valoración resumida de los bienes.⁶⁰

⁶⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra María Pastor Martí, Caja 10089. AHPCS.

Relación de vecinos de Zorita afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Arrufat Aznar, Luis
Beser Benages, Joaquín
Beser Milián, Joaquín
Camí Agustí, Ramón
Eixarch Grau, Ramón
Ferrer Gil, Francisco
Ferrer Giner, Francisco
García Climent, Vicente
Hernández Viñals, Antonio
Mampel Fenollosa, José
Martí Beser, José
Martí Martí, Joaquín
Morelló Albamonte, Vicente
Pastor Martí, María
Pastor Martí, Ramón
Royo Molinos, José
Temprado Martí, Manuel

ZUCAINA



En Zucaína la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a 9 vecinos, lo que supone el 0,14% del total provincial, así como el 0,79% de la población total de la localidad y el 1,58% de la población masculina local. Los 4 casos que tenemos documentados hacen referencia a labradores, siendo incoados sus expedientes 1 en 1939 y 3 en 1941.

El alcalde de Zucaína, Vicente Cabedo, informaba escuetamente sobre los bienes del inculcado y su valoración económica, igual, aunque con redacción independiente, que el Delegado Local de FET y de las JONS, Emilio A. La Guardia Civil encargada de realizar los informes de los vecinos de Zucaína era la del Puesto de Villahermosa del Río, que no aportaba nada nuevo respecto a los anteriores informes. El cura Eugenio Laguarda, de la Parroquia de San Salvador de Zucaína, tampoco ofrecía más información que la económica.⁶¹

Relación de vecinos de Zucaína afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas:

Castillo Castillo, Juan
Castillo Silvestre, Eladio
Castillo Silvestre, Manuel
Catalán Iserte, Miguel
Guillamón Montón, Vicente
Peris Montoliu, Daniel
Peris Peris, Enrique
Sales Andreu, Joaquín
Vivas Gil, Alberto

⁶¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Castillo Castillo, Caja 10071. AHPCS.

Localidad	Número de inculcados en la localidad	% inculcados en la localidad	Número de hombres	% hombres	Número de mujeres	% mujeres	% de los inculcados provinciales
Adzaneta	28	1	27	2,01	1	0,06	0,44
Ahín	3	1,02	3	2	-	-	0,04
Albocácer	76	2,79	72	5,82	4	0,27	1,21
Alcalà de Xivert	130	2,7	124	5,44	6	0,23	2,08
Alcora	169	4,5	133	7,62	36	1,81	2,7
Alcudia de Veo	2	0,36	2	0,74	-	-	0,03
Alfondegulla	14	1,75	14	3,78	-	-	0,22
Algimia de Almonacid	6	0,7	6	1,33	-	-	0,09
Almazora	208	2,53	191	5,15	17	0,37	3,32
Almedíjar	8	1,37	8	2,67	-	-	0,12
Almenara	85	3,52	77	6,8	8	0,62	1,36
Altura	46	1,59	46	3,28	-	-	0,73
Arañuel	17	2,63	17	5,52	-	-	0,27
Ares del Maestre	19	1,2	19	2,65	-	-	0,30
Argelita	17	5,74	17	12,78	-	-	0,27
Artana	38	1,74	37	3,62	1	0,08	0,60
Ayódar	24	3,28	22	6,12	2	0,53	0,38
Azuébar	15	2,54	15	5,32	-	-	0,24
Ballestar	5	1,08	5	3,01	-	-	0,08
Barracas	6	1,28	6	2,85	-	-	0,09
Bechí	43	1,9	42	3,91	1	0,08	0,68
Begís	17	1,78	17	3,35	-	-	0,27
Benafer	28	9,65	28	18,66	-	-	0,44
Benafigos	8	0,96	8	1,98	-	-	0,12
Benasal	50	2,21	47	4,43	3	0,25	0,80
Benicarló	158	1,66	145	3,08	13	0,27	2,52
Benicasim	16	0,86	16	1,8	-	-	0,25
Benlloch	42	2,74	41	5,66	1	0,12	0,67
Bojar	2	0,51	2	1,01	-	-	0,03
Borriol	97	3,65	94	7,61	3	0,2	1,55
Burriana	434	2,35	403	4,52	31	0,32	6,94
Cabanes	111	3,2	104	6,18	7	0,39	1,77
Càlig	55	2,25	55	4,88	-	-	0,88
Campos de Arenoso	4	0,98	4	2	-	-	0,06
Canet lo Roig	49	2,41	49	4,85	-	-	0,78
Castell de Cabres	16	6,6	16	13,1	-	-	0,25

Localidad	Número de inculpados en la localidad	% inculpados en la localidad	Número de hombres	% hombres	Número de mujeres	% mujeres	% de los inculpados de la provincia
Castellfort	17	1,81	17	3,72	-	-	0,27
Castellново	10	0,77	10	1,56	-	-	0,16
Castellón	711	1,52	660	2,86	51	0,21	11,37
Castillo de Villamalefa	21	1,92	20	3,67	1	0,18	0,33
Catí	15	0,91	15	1,72	-	-	0,24
Caudiel	13	1,01	13	2,04	-	-	0,20
Cervera del Maestre	46	2'43	42	4,64	4	0,4	0,73
Cinctorres	31	2,43	31	5,14	-	-	0,49
Cirat	9	0,7	9	1,33	-	-	0,14
Cortes de Arenoso	11	0,8	11	1,57	-	-	0,17
Costur	37	4,55	34	9,01	2	0,48	0,59
Cuevas de Vinromá	82	2,49	78	4,81	4	0,24	1,31
Culla	39	1,51	36	2,85	3	0,22	0,62
Chert	41	1,8	41	3,71	-	-	0,65
Chilches	27	3,47	20	3,49	7	1,15	0,43
Chiva de Morella	8	1,94	8	4,6	-	-	0,12
Chodos	6	0,71	5	1,25	1	0,22	0,09
Chóvar	5	0,86	5	1,68	-	-	0,08
Eslida	17	1,51	17	3,2	-	-	0,27
Espadilla	15	5,51	15	11,53	-	-	0,24
Fanzara	52	9,75	48	20,26	4	1,35	0,83
Figueroles	10	1,68	10	3,8	-	-	0,16
Forcall	44	2,99	41	6,14	3	0,37	0,70
Fredes	4	3,53	4	8	-	-	0,06
Fuente la Reina	6	2,07	6	4,22	-	-	0,09
Fuentes de Ayódar	10	4,2	10	7,81	-	-	0,16
Gaibiel	9	1,17	9	2,23	-	-	0,14
Gátova	13	1,07	13	2,16	-	-	0,2
Geldo	21	2,37	21	4,62	-	-	0,33
Herbés	9	?	9	?	-	-	0,14
Higueras	8	4,26	7	6,66	1	0,94	0,12
La Jana	51	2,92	49	6,01	2	0,21	0,81
Jérica	16	0,67	15	1,23	1	0,08	0,25
Lucena	129	2,08	122	7,03	7	0,37	2,06
Ludiente	33	3,21	31	6,51	2	0,36	0,52
La Llosa	10	2,23	10	4,46	-	-	0,16

Localidad	Número de inculpad ^{os} en la localidad	% inculpad ^{os} en la localidad	Número de hombres	% hombres	Número de mujeres	% mujeres	% de los inculpad ^{os} de la provincia
La Mata de Morella	8	1,51	8	3,22	-	-	0,12
Matet	1	0,22	1	0,44	-	-	0,01
Moncófar	36	1,32	36	2,74	-	-	0,57
Montán	41	4,7	40	9,34	1	0,22	0,65
Montanejos	20	2,71	20	5,4	-	-	0,32
Morella	62	1,25	59	2,52	3	0,11	1
Navajas	5	0,56	5	1,17	-	-	0,08
Nules	108	1,7	105	3,47	3	0,09	1,72
Olocau del Rey	14	3,33	14	7,03	-	-	0,22
Onda	214	2,93	170	4,9	44	1,14	3,42
Oropesa	32	3,03	31	6,54	1	0,17	0,51
Ortells	10	2,94	8	5,22	2	1,07	0,16
Palanques	3	1,38	3	2,83	-	-	0,04
Peñíscola	42	1,43	41	2,9	1	0,06	0,67
Pina de Montalgrao	2	0,38	2	0,71	-	-	0,03
Pobla de Benifassà	43	6,66	37	12,29	6	1,74	0,68
Portell de Morella	11	1,2	11	2,4	-	-	0,17
Puebla de Arenoso	17	1,14	16	2,15	1	0,13	0,27
Puebla Tornesa	17	2,2	14	3,64	3	0,77	0,27
Ribesalbes	17	1,93	17	4,27	-	-	0,27
Rosell	37	2,07	36	4,31	1	0,1	0,59
Salsadella	24	1,67	23	3,33	1	0,13	0,38
San Jorge	51	4,46	48	9,24	3	0,48	0,81
San Mateo	47	1,57	44	3,05	3	0,19	0,75
San Rafael del Río	17	2,79	17	8,17	-	-	0,27
Sta.Magdalena de Pulpis	23	2,1	23	4,37	-	-	0,36
Sarratella	69	16,58	52	26,66	17	7,7	1,1
Segorbe	74	1,13	67	2,21	7	0,2	1,18
Sierra Engarcerán	30	1,33	29	2,63	1	0,08	0,48
Soneja	48	2,9	48	5,98	-	-	0,76
Sot de Ferrer	17	2,6	16	5,03	1	0,29	0,27
Sueras	18	2,08	18	4,36	-	-	0,29
Tales	13	1,39	11	2,38	2	0,42	0,2
Teresa	3	0,36	3	0,74	-	-	0,04

Localidad	Número de inculpados en la localidad	% inculpados en la localidad	Número de hombres	% hombres	Número de mujeres	% mujeres	% de los inculpados de la provincia
Tírig	12	0,98	12	1,98	-	-	0,19
La Todolella	15	2,94	15	5,9	-	-	0,24
Toga	13	0,2	13	7,51	-	-	0,2
Torás	5	0,75	5	1,48	-	-	0,08
El Toro	25	2,58	24	4,85	1	0,21	0,4
Torralba del Pinar	3	1,34	3	2,6	-	-	0,04
Torre Embesora	21	5,6	21	11,79	-	-	0,33
Torre Endoménech	4	0,78	4	1,6	-	-	0,06
Torreblanca	67	1,88	61	3,55	6	0,32	1,07
Torrechiva	11	3,44	11	7,14	-	-	0,17
Traiguera	84	3,96	83	8,22	1	0,08	1,34
Useras	32	2,11	31	2,7	1	0,08	0,51
Vall d'Alba	43	1,6	42	3,2	1	0,07	0,68
Vall de Almonacid	6	0,93	6	1,89	-	-	0,09
La Vall d'Uixó	137	1,42	127	2,8	10	1,98	2,19
Vallat	10	6,75	10	15,15	-	-	0,16
Vallibona	15	1,24	15	2,65	-	-	0,24
Vilar de Canes	9	1,92	9	4,22	-	-	0,14
Villafamés	118	4,95	115	6,59	3	0,15	1,88
Villafranca	55	1,54	50	3,05	5	0,25	0,88
Villahermosa del Río	72	3,05	66	5,55	6	0,55	1,16
Villamalur	1	0,4	1	0,6	-	-	0,01
Villanueva de Alcolea	19	1,16	19	2,46	-	-	0,3
Villanueva de Viver	6	1,95	6	4,13	-	-	0,09
Villarreal	292	1,57	284	3,07	8	0,07	4,67
Villavieja	63	2,45	54	4,39	9	0,68	1
Villores	13	3,12	13	6,46	-	-	0,2
Vinaroz	126	1,35	120	2,89	6	0,11	2,01
Vistabella del Maestrazgo	40	2	39	4	1	0,09	0,64
Viver	43	2,07	43	4,12	-	-	0,68
Zorita	17	1,97	16	3,84	1	0,22	0,27
Zucaina	9	0,79	9	1,58	-	-	0,14

6. La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón: dinámica y casos.

A la hora de abordar el estudio de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón se hace indispensable realizar un recorrido por los distintos pasos del procesamiento y los distintos casos que éste generó, para lograr de esta forma un acercamiento a su puesta en práctica y a los efectos concretos que tuvo en el ámbito determinado para el estudio. Para ello describimos las principales fases por las que atravesaba tanto la tramitación de la Ley como el procesamiento del inculcado, la actitud de las autoridades locales y de las personas que intervenían, así como la situación en que quedaban los inculcados y sus familiares, y sus reacciones. Se trata, pues, no de una descripción teórica de la Ley, sino de un acercamiento a lo que las fuentes nos informan que ocurrió en la realidad. A pesar que un estudio completo implicaría el análisis de todos los expedientes de responsabilidades políticas que afectaron a vecinos de las localidades de la provincia de Castellón, basamos nuestras conclusiones en el análisis de al menos 1 expediente de cada una de las 141 localidades de la provincia, aunque en muchas de ellas nos hemos ocupado de varios casos, con un total de 252 expedientes analizados.

En general, la dinámica que generaba un expediente de responsabilidades políticas se basaba en el siguiente esquema: tras la llegada de información por múltiples fuentes y motivos de algún sospechoso, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia ordenaba al Juez Instructor de Responsabilidades Políticas de la Provincia de Castellón la apertura de un expediente. El primer paso que se daba era la petición con carácter urgente a las autoridades de la localidad del inculcado de informes relativos a su conducta político-social y moral, así como sobre su situación económica. Con esta información el Juez Instructor Provincial resumía en un escrito los cargos que podían ser imputados al inculcado. Posteriormente el inculcado era citado en el Juzgado Municipal y se le leían los cargos que se le imputaban, aprovechando esta lectura para permitirle manifestar su versión, que normalmente desmentía la mayoría de imputaciones. Tras la lectura de cargos se le leían las 5 prevenciones generales de la

Ley y se le concedían 5 días para que pudiera presentar una hoja de descargo o escrito de defensa que incluía la posibilidad de citar testigos a su favor. Si era el caso, estos testigos eran interrogados y se realizaba un informe sobre su perfil social y político. Al mismo tiempo, se concedía al inculcado un plazo de 10 días para presentar una relación jurada de bienes, en la que debía describir y valorar tanto su patrimonio personal como el familiar. Inmediatamente después se ordenaba la publicación de la incoación del expediente en los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia.

Oídos los testigos, si era el caso, el Juez Provincial realizaba un resumen metódico en el que se destacaban nuevamente los cargos, casi siempre ampliados respecto al primer informe, y se avanzaba la presunta culpabilidad del inculcado¹. Este resumen se enviaba al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, que era el encargado de dictar sentencia a partir del mismo. Anteriormente el resumen metódico había sido comunicado al inculcado y se le concedía un plazo de 3 días para presentar un recurso, que casi nunca se presentó y si lo hizo no fue tenido en cuenta. Emitido el fallo de la sentencia, se concedía un nuevo plazo de 6 días para recurrirla, transcurrido el cual si no se había presentado, que era lo normal, ésta se declaraba firme. La sentencia firme se notificaba al inculcado, que tenía un plazo de 20 días para satisfacer la sanción económica impuesta, y al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, con sede en Madrid. El inculcado podía solicitar la posibilidad de realizar el pago de la sanción a plazos si lo solicitaba y el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas lo estimaba conveniente. El procesamiento finalizaba cuando el inculcado acababa de pagar la sanción impuesta o cuando el caso quedaba sobreseído y archivado como consecuencia de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942, en un proceso que podía alargarse perfectamente hasta 1945. Si el inculcado no pagaba sus bienes quedaban controlados y embargados. Teóricamente todo terminaba con la publicación de la liberación de los bienes del inculcado en los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia, una publicación que podía ser inmediata, pero también tardar varios años en producirse. Tras el procesamiento la

¹ En este momento se consideraba cerrado el periodo de instrucción del expediente, que, según los expedientes analizados, podían tener una duración mínima de 1 mes y una máxima de 7 meses. La rapidez, pues, era una de las características del procesamiento. A pesar de esta característica, el proceso también se podía eternizar, como en el caso del expediente del vecino de Almazora Enrique Vicente Corell, que comenzó a tramitarse el 20 de marzo de 1941 y finalizó el 29 de octubre de 1943. Finalmente su caso fue sobreseído el 18 de noviembre de 1943. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Vicente Corell, Caja 10097. AHPCS.

situación personal y patrimonial del inculpado y su familia había quedado gravemente afectada.

LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTES

Los motivos que implicaban la apertura de un expediente de responsabilidades políticas estaban, como hemos visto, ampliamente especificados en el Artículo 4º del Capítulo II de la Ley de Responsabilidades Políticas, siguiendo los procedimientos que establecían los Artículos 35-37 de la citada Ley². En la práctica, las vías a través de las cuales se procedió a la incoación de los expedientes en las localidades de la provincia de Castellón fueron la recepción por parte de las autoridades de testimonios de condena por un tribunal militar, la denuncia, los datos ofrecidos por organismos oficiales, las listas de personas confeccionadas por las autoridades y las consecuencias de algún incidente aislado.

El motivo más frecuente de incoación de un expediente de responsabilidades políticas en las localidades de la provincia de Castellón fue el envío al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia de series de copias de testimonios de condena de personas procesadas por un tribunal militar³. Se trataba de resúmenes de los consejos de guerra sumarísimos y sumarísimos de urgencia que se fueron celebrando desde 1939 a 1943 a la población más implicada con el régimen republicano, normalmente militares, altos cargos de la administración municipal y personas políticamente significadas de cada localidad. Afectaban a personas que eran acusadas en distinto grado de delitos de rebelión militar, a pesar de juzgarse hechos legales en su época de carácter civil, condenadas a prisión por un tiempo que podía ir de seis meses y

² Estos Artículos establecían tres vías por las que se podía iniciar un expediente de responsabilidades políticas: en virtud de testimonios de sentencias dictadas por la Jurisdicción Militar; por denuncia escrita y firmada por cualquier persona natural o jurídica; y por iniciativa del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas o cualquier autoridad militar o civil (art. 35).

Las denuncias debían incorporar todos los datos personales posibles sobre el inculpado, una relación valorada de sus bienes, los hechos que se le imputan, las posibles pruebas y la causa en que se le considera incurso (art. 36).

El artículo 37 dice textualmente: “Las Autoridades Judiciales militares remitirán a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas competentes, a la mayor brevedad posible, testimonios de todas las sentencias firmes condenatorias que, por los delitos expresados en el apartado a) del artículo 4º, se hayan dictado en las causas falladas en el territorio de su jurisdicción, así como de las que se dicten en lo sucesivo, tan pronto como adquieran carácter de firmeza”.

³ Ver ejemplos en el Apéndice Documental.

un día a treinta años, cuando no implicaban pena de muerte. Eran personas que normalmente estaban en las distintas prisiones provinciales cumpliendo condena o que habían sido ya ejecutadas, lo que, como sabemos, no detenía el proceso de exigencia de responsabilidades políticas. También encontramos casos en los que los inculpados se encontraban en Campos de concentración o en Batallones Disciplinarios de Trabajo⁴, o personas que se sabía que habían huido al extranjero.⁵

Su situación económica era deplorable y era bastante frecuente que se tuvieran familiares directos o indirectos en la misma situación. Aunque conocemos ejemplos de mujeres que sufrieron estos consejos de guerra, lo normal era que los procesados fueran hombres y que sobre sus mujeres recayera el peso de su manutención, ante la imposibilidad de afrontarla convenientemente por parte del Estado, y de la posterior exigencia de responsabilidades políticas.

En este sentido, la exigencia de responsabilidades políticas suponía una segunda fase de exigencia de responsabilidades, su “dimensión económica”, que incluso era recogida en las sentencias condenatorias de los citados consejos de guerra. Con la exigencia inicial de responsabilidades penales y la posterior exigencia de responsabilidades políticas, de tipo fundamentalmente económico, se completaba el proceso de exigencia de responsabilidades que determinaba la limpieza o purificación del inculpado y su familia, necesaria para la integración en el nuevo orden franquista. Por tanto, los implicados eran sabedores, desde la cárcel, que su depuración no acababa en su reclusión, sino en una sanción económica que las nuevas autoridades les impondrían más tarde.

⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Mir Mestre, Caja 10103. AHPCS. Este vecino de Ares del Maestre se encontraba en 1941, mientras se le procesaba por responsabilidades políticas, en el Batallón Disciplinario de Trabajadores, Primera Compañía, de Valencia. En estos casos se citaba al inculpado a través del director del Campo de Concentración o del Batallón Disciplinario, que cumplían un papel similar al de los directores de prisión. Su misión era citar y dar lectura de las prevenciones de la Ley a los inculpados.

⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Tellado Sabater, Caja 10080. AHPCS. Según el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas en este caso simplemente se debía publicar la incoación del correspondiente expediente en el Boletín Oficial del Estado y en el de la provincia correspondiente. Según el artículo 50 de la Ley se establece en estos casos, y en los de fallecimiento del inculpado, un plazo de 10 días a sus herederos a partir de ese momento para la presentación de la correspondiente declaración jurada de bienes, lo que supone una ampliación de los plazos de 5 días, ya que a los inculpados con domicilio y paradero conocido se les exigía la declaración jurada de bienes en un plazo máximo de 5 días. Los herederos pasaban a asumir toda la responsabilidad y se encontraban sujetos a todas las posibles sanciones que la Ley preveía en caso de falsedad u ocultamiento.

Este era el orden normal del proceso de exigencia de responsabilidades políticas, pero también se dan casos en los que el inculcado es procesado por cualquier otro de los motivos que a continuación comentamos y, durante el procesamiento, es llevado ante un consejo de guerra sumarísimo y condenado. En este caso, se consideraba siempre que la jurisdicción militar tenía preferencia sobre la especial de Responsabilidades Políticas, con lo que algunos expedientes llegaban incluso a paralizarse durante un tiempo en espera de la sentencia del consejo de guerra. Es el caso del vecino de Alcalá de Xivert Lorenzo Cucala Pitarch, quien, estando primero en un campo de concentración y después en la cárcel de Benicarló, fue procesado por responsabilidades políticas a partir de marzo de 1940. Dos meses después, el 22 de mayo de 1940, fue juzgado en Benicarló por un Consejo de Guerra Permanente por el procedimiento sumarísimo de urgencia y condenado a la pena de muerte, que fue ejecutada antes de agosto de 1940. Su procesamiento por responsabilidades políticas continuó sin alteraciones hasta abril de 1941, recayendo todas las actuaciones sobre su mujer y herederos, que vieron cómo sus bienes fueron embargados y controlados hasta mayo de 1943.⁶

Una vez recibida por parte del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia las copias de las sentencias éste ordenaba al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, Víctor Núñez Escalona, la incoación del correspondiente expediente de responsabilidades políticas, con lo que se iniciaba todo el proceso. Como hemos indicado, éste era el motivo más frecuente de incoación de expediente y prácticamente en todas las localidades de la provincia de Castellón existen ejemplos. Volvemos a insistir en el hecho que algunas veces el inculcado ya había sido ejecutado, pero esto no detenía el proceso, pasando los herederos a asumir las responsabilidades.

La llegada de estos testimonios de condena fue tan masiva durante el periodo 1939-1945 que llegó a superar las posibilidades administrativas de esta jurisdicción especial y gran parte de ellos nunca llegaron a incoar expediente alguno. Por tanto, si no

⁶ Durante el proceso fueron condenados al pago de 250 pesetas, de las que sólo pudieron pagar 153,88 pesetas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Lorenzo Cucala Pitarch, Caja 10079. AHPCS.

se incoaron más expedientes no fue por voluntad de reconciliación sino por imposibilidad y colapso técnico.

Sin embargo, la cantidad de testimonios de condena por Tribunal Militar fue tan masiva y la voluntad represiva fue tan intensa que se desbordaron los mismos límites que la misma Ley de Responsabilidades Políticas establecía y que, en cierta forma, nos situán en una esfera de enjuiciamiento claramente kafkiano. Así, como hemos visto, el Artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Políticas especificaba que se remitirían los testimonios de *sentencias firmes condenatorias*, con lo que se prohibía procesar a las personas que habían sido absueltas por dichos Tribunales. En la práctica, esto no se respetó y se procesó por responsabilidades políticas a todas las personas que pasaron por un consejo de guerra, entre ellas bastantes que habían sido absueltas⁷. Es el caso del vecino de Alfondegulla Pascual Juan Centelles, antiguo alcalde republicano de la localidad que fue absuelto el 19 de enero de 1940 en un consejo de guerra, lo que no le impidió ser procesado por responsabilidades políticas en 1941. A pesar que su expediente no incluyó sentencia final, su libertad personal y económica no se normalizó hasta el sobreseimiento de su caso el 4 de septiembre de 1943⁸. El vecino de Puebla Tornesa Juan Castellet Llorens fue absuelto por falta de pruebas por el consejo de guerra a que fue sometido. Sin embargo, esta absolución fue declarada provisional y se indicó claramente en su sentencia que no debía interrumpir un futuro proceso de exigencia de responsabilidades políticas, como así ocurrió.⁹

Otro motivo de incoación de expedientes de responsabilidad política fueron las denuncias. Como ya sabemos, el Estado franquista y la misma Ley de Responsabilidades Políticas incitaban a la denuncia¹⁰, entendida como un elemento más contribuyente a la limpieza y depuración nacionales. En este sentido, las denuncias podían ser tanto de unos ciudadanos a otros como proceder de las autoridades locales,

⁷ Como en el caso del poeta castellonense Bernat Artola Tomás, posteriormente analizado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069.

⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Juan Centelles, Caja 10099. AHPCS.

⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Castellet Llorens, Caja 10091. AHPCS.

¹⁰ No hay más que leer el Bando de Antonio Aranda Mata, General Jefe del Cuerpo de Ejército de Galicia firmado el 17 de junio de 1938, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 17 de junio de 1938. Apéndice documental.

que acusaban a vecinos con pasado públicamente republicano que trataban de pasar desapercibidos en el nuevo orden social y político.

Incluso conocemos el caso de denuncia de las autoridades entre si. El Jefe Local de FET y de las JONS de Caudiel, Roberto Miralles, presentó el 1 de octubre de 1939 un escrito por el que denunciaba a Camilo Sánchez Herrero, alcalde franquista de la localidad, desvelando su presunto pasado izquierdista. Esta denuncia motivó la incoación de un expediente de responsabilidades políticas contra el alcalde. El escrito de denuncia no deja lugar a dudas sobre la intención depurativa del Jefe Local de FET y de las JONS. Llamamos la atención sobre un tema que trataremos más adelante como el del recurso a los rumores como base para la denuncia:¹¹

El Alcalde de Caudiel (Castellón) D. Camilo Sánchez Herrero, antes y después del Glorioso Movimiento Nacional perteneció al partido de Izquierda Republicana, durante el Glorioso Movimiento actuó como Secretario del Sindicato campesino formado por Izquierda Republicana y actuó en compañía del maestro de Escuela, Don Federico Carabella Castells (detenido en la cárcel de Segorbe) como miembro de la Junta de Revisión de Incautaciones, autorizando la devolución a sus dueños de las fincas incautadas por los rojos a elementos de izquierdas y reteniendo las que pertenecían a individuos de derechas con gran perjuicio para estos, con lo que demuestra su actuación contraria a la Causa Nacional.

Este individuo, que hoy representa la Alcaldía, se presentó en los primeros momentos al Jefe de las Fuerzas de Ocupación, el cual, desconociendo las actividades del citado individuo lo nombró Alcalde al ser liberada esta villa, fingiéndose como elemento de derechas, teniendo fundadamente el ser detenido por sus actividades en contra del Glorioso Movimiento Nacional.

Antes del Glorioso Movimiento su situación económica era muy modesta y hoy blasona su familia de que el único hijo que tiene no necesita trabajar en su vida, porque posee bastante capital para ello.

Según versiones, por haber sido casi la totalidad de la población evacuada forzosamente por los rojos se aprovechó de la situación en compañía de otros elementos, saqueando y vendiendo los objetos que al ser evacuados habían escondido los elementos de derechas, encontrándose estas a su regreso desposeídas de todo de lo que tenían, y dicho Sr. Alcalde no ha dado ninguna explicación categórica de nada.

¹¹ Camilo Sánchez Herrero declaró en su defensa que fue obligado a ser alcalde de Caudiel por las autoridades militares franquistas cuando ocuparon la población. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Camilo Sánchez Herrero, Caja 10068. AHPCS.

Con el fin de disimular cuanto queda dicho instaló una taberna durante un mes, la cual estaba instalada en casa del vecino de esta villa Miguel Martín (alias “El Mono”) donde se guardaban objetos y se efectuaban las transacciones.

*Caudiel 28 de septiembre de 1939. Año de la Victoria
El Jefe Local de FET y de las JONS,
Roberto Miralles.*

Otrosí. A medida que transcurren los días circulan noticias con respecto a esta denuncia, pues se dice en la localidad que el mentado Alcalde forma sociedad con un tal Miguel “De los Machos” dedicándose a la venta de ladrillos y explotación de una mina.

También es de rumor público que forma parte con Vicente Burdeos de un negocio de compra de árboles frutales para madera.

Todos estos hechos, el que suscribe no puede probarlos por falta de medios creyendo que la autoridad de V.I. los ha de poner inmediatamente en claro.

*Caudiel, 1 de octubre de 1939. Año de la Victoria.
El Jefe Local de FET y de las JONS
Roberto Miralles*

Frecuentemente eran las autoridades de la jurisdicción especial de responsabilidades políticas las que animaban con insistencia, incluso exigían, la denuncia por parte de las autoridades locales de sus propios convecinos, creando un marco de convivencia asfixiante y lleno de tensión. En un escrito-denuncia de abril de 1941 del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Argelita, Camilo Ramos, dirigido al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, encontramos el siguiente encabezamiento:¹²

En cumplimiento de cuanto a V.I. interesa en su escrito nº 3361-A de fecha de 12 de diciembre último, referente a que sistemáticamente se vaya remitiendo a ese Juzgado informes de los individuos comprendidos en el art. 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas...

Otro ejemplo lo constituye el alcalde de Castellón en septiembre de 1939, Vicente Traver, quien, en su informe previo al procesamiento por responsabilidades políticas del político Fernando Gasset Lacasaña hace referencia a la invitación del Juez

¹² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Peris Peris, Caja 10095. AHPCS.

Instructor Provincial y del Tribunal de Responsabilidades Políticas para denunciar a los cargos municipales más importantes:¹³

En contestación a su atento oficio n° 681, fecha 8 del corriente, adjunto tengo el honor de remitir a V. relación detallada de las personas que desempeñaron el cargo de Concejal o consejero durante el mando del Frente Popular anterior al 18 de julio de 1936 y las que lo ejercieron desde dicha fecha hasta la liberación. Así mismo se acompaña relación de los empleados nombrados en esta Corporación durante el tiempo rojo.

[...]

Acompaño una relación de personas que más han destacado durante el mando marxista. Algunas de ellas, de familia y situación acomodada, acaso se encuentre ahora en que todos los bienes con cuyo producto se permitían llevar una vida dedicada por entero a actividades rojas, son hoy legalmente de sus padres, de sus hermanos o de sus hijos, familiares que en más de los casos asistían complacidos a la actuación izquierdista de su familiar.

[...]

Con todo lo expuesto cree esta Alcaldía haber contribuido al cumplimiento del deber que la actuación judicial reclama y a determinar las responsabilidades de las personas que contribuyeron con su actuación o complacencia a la desgracia nacional.

En este sentido, el Juzgado Instructor de Responsabilidades Políticas de Castellón publicó el siguiente texto en el diario *Mediterráneo* a principios de diciembre de 1940:¹⁴

Por la presente se hace saber: Que para el más exacto cumplimiento de lo preceptado por la Ley de 9 de febrero de 1939, es necesario que, tanto las Autoridades Locales como los particulares, denuncien a este Juzgado todos los individuos comprendidos en el art. Cuarto de la citada Ley que hasta la fecha no se les ha exigido responsabilidad política, especialmente de aquéllos que disfrutaban de buena posición social y económica.

¹³ El resto del texto se puede consultar en el Apéndice Documental. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña. Caja 10074. AHPCS.

¹⁴ Diario *Mediterráneo*, 4 de diciembre de 1939. Archivo Histórico Municipal de Castellón.

Hay que destacar que a finales del año 1940 las autoridades franquistas ya se habían dado cuenta que era poco productivo económicamente exigir responsabilidades políticas a los numerosos presuntos responsables insolventes, de ahí su énfasis en la preferencia por los presuntos responsables *de buena posición social y económica*.

En cuanto al fomento de la denuncia entre ciudadanos, cuando en octubre de 1940 se creó en Castellón la Fiscalía de Tasas, con el objetivo de perseguir a los defraudadores de productos y el mercado negro, se avisó a la población que el 40% de la multa resultante de una denuncia se la desembolsaba el denunciante. Se trataba, pues, de incentivar la sospecha, la vigilancia y la denuncia entre los ciudadanos. Diario *Mediterráneo*, 23 de octubre de 1940. Archivo Histórico Municipal de Castellón.

Esta insistencia en la denuncia y el afán de las autoridades locales provocaban la aparición de situaciones absurdas en las que una persona era primero denunciada y después defendida por la misma autoridad local, situación que parece responder a un proceso de “denuncia automática” de muchos vecinos que incluía la firma por parte de las autoridades de algunos informes sin su lectura previa¹⁵, es decir, muchos alcaldes posiblemente firmaron muchos de estos informes sin haberlos redactados ellos mismos y sin leerlos detenidamente. En otras palabras, todo parece indicar que hubo una política de denuncia masiva de ciudadanos al calor de la Ley de Responsabilidades Políticas en los primeros años del franquismo.

Muchas veces los motivos de la denuncia, tal y como especificaba la Ley de Responsabilidades Políticas, no hacían referencia a hechos cometidos sino a pasividades ante situaciones comprometidas. Así, el vecino de Gaibiel Daniel Calvo Bonet, alcalde republicano, fue denunciado por el alcalde franquista de la población, Vicente Pérez, por varios cargos entre los que figuraba su pasividad.¹⁶

Durante su actuación se cometieron en ésta toda clase de atropellos, saqueos, persecuciones, quema de imágenes, y en cambio a él a todo esto decía: “no puedo, no puedo hacer nada”, es decir, fue un envenenador de conciencias, un fervoroso partidario del frente popular y por su triunfo hubiera consentido se hiciera todo cuanto hubiera sido.

Además, las mismas autoridades provinciales manejaban listados de personas con pasado republicano, confeccionadas normalmente por el Delegado Local de FET y de las JONS¹⁷, por los alcaldes, por la Guardia Civil o por algunos de ellos

¹⁵ Como veremos más adelante, el alcalde de Castellón Vicente Traver firmó en octubre de 1939 un informe inculpatario contra Bernardo Artola Tomás, pero más tarde firma otro totalmente exculpatario. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069. AHPCS. Casos similares en los informes de los curas párrocos se citan en J. CASANOVA (2001), versión 2005, op. cit., pág. 295.

¹⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Calvo Bonet, Caja 10139. AHPCS.

¹⁷ En la denuncia que el Delegado Local de FET y de las JONS de Villahermosa del Río realiza contra el vecino Gonzalo Castillo Mollón a principios de 1939 asegura que dicha Delegación Local ha remitido al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas un total de seis fichas correspondientes a seis vecinos de la localidad. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gonzalo Castillo Mollón, Caja 10075. AHPCS.

En ocasiones era el Delegado Local de FET y de las JONS de una localidad vecina el que denunciaba a un vecino de otra localidad, como le ocurrió al vecino de Villanueva de Alcolea José María García Ortiz, que fue denunciado el 31 de diciembre de 1940 por Ismael Villalonga Ortiz, Delegado Local de FET y de

conjuntamente, que se depositaban en el Gobierno Civil y que posteriormente también eran enviados al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Podemos observar algunos ejemplos.

Denuncia de la Delegación Local de FET y de las JONS de la localidad de Higuera:¹⁸

Ramón Repollet, Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón,

CERTIFICO: que en este Juzgado existe una relación de presuntos responsables políticos, firmada y rubricada por los Srs. Alcalde y Jefe Local de FET y de las JONS de Higuera (Castellón) y remitidas por los mismos con fecha 23 de los corrientes, constando el siguiente particular:

“Gumersindo Alegre Monterde, fallecido.- Fue miembro del Frente Popular y desempeñó el cargo de Alcalde durante la dominación roja, manifestando públicamente su significación a beneficio de dicha agrupación”

Y para que conste y sea remitido al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, por si tiene a bien ordenar la incoación del oportuno expediente y en virtud de lo ordenado expido el presente con el Vº Bº de S.Sª en Castellón a 28 de enero de 1941.

Denuncia de la alcaldía de Rosell contra su vecino Francisco Prades Querol:¹⁹

En cumplimiento a lo interesado en su escrito número 4066 de fecha 3 del actual, tengo el honor de informar a V.S. que Francisco Prades Querol, de 48 años de edad, de estado casado, de profesión labrador, vecino de esta villa, tanto antes del 18 de julio de 1936 como posterior perteneció a izquierda moderada.

Según el Padrón de Rústica vigente que obra en esta Alcaldía posee fincas con un líquido imponible de 267,84 ptas.

Dios guarde a V.S. muchos años

Rosell, 7 de febrero de 1941.

El Alcalde,

Denuncia de la alcaldía de Vall de Almonacid contra su vecino Valentín Salvador Pérez:²⁰

las JONS de Serratella. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José María García Ortiz, Caja 10091. AHPCS.

¹⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gumersindo Alegre Monterde, Caja 10094. AHPCS.

¹⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Prades Querol, Caja 10104. AHPCS.

²⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Valentín Salvador Pérez, Caja 10129. AHPCS.

Don Francisco Torres Salvador, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Nacional de Vall de Almonacid:

INFORMO que Valentín Salvador Pérez, de 53 años de vida, de estado casado, de profesión labrador, vecino de este pueblo y habitante en la calle de Algimia nº 14,

ANTES DEL GMN

Desde el advenimiento de la República manifestó públicamente su ideología como a tal, destacándose seguidamente por su adhesión al partido de Izquierda Republicana, cuyo partido en este pueblo dirigía y acrecentaba en su propaganda.

DURANTE EL GMN

Al estallar el GMN siguió acrecentando su ideología propagándola con más fuerza hasta que en el mes de noviembre o diciembre de 1936 fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo Popular.

Y para que conste y a petición del Juzgado de Instrucción de Responsabilidades Políticas expido el presente que firmo en Vall de Almonacid a 2 de febrero de 1941.

El alcalde,

Francisco Torres.

Denuncia conjunta de la alcaldía y la Delegación Local de FET y de las JONS de la Todolella.²¹

El Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, Ramón Repollet:

CERTIFICO: que en este Juzgado existe una relación de presuntos responsables políticos, remitida por el Sr. Alcalde y Delegado Local de FET y de las JONS de Todolella, constando el siguiente particular:

“Joaquín Ejarque Eixarch.- El informado proviene del partido Izquierda Republicana y ya antes del Movimiento fue Juez Municipal. En seguida de establecerse el dominio marxista, se constituyó en uno de los más destacados agentes de la causa roja, interviniendo en incautaciones y hechos tiranos y repugnantes, habiendo sido miembro del Consejo Municipal por elección de la CNT”.

Y para que conste y sea remitido al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, por si tiene a bien ordenar la incoación del oportuno expediente y en virtud de lo ordenado expido el presente con el Vº Bº de S.Sª en Castellón a 4 de febrero de 1941.

²¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Ejarque Eixarch, Caja 10129. AHPCS.

Denuncia de la Guardia Civil de Villafamés contra el vecino de la misma localidad Juan Ferrer Pallarés:²²

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de 9 de febrero de 1939, tengo el honor de informar a V.S. del vecino de esta localidad, anotado al margen [Juan Ferrer Pallarés], el cual según los antecedentes que obran en este puesto se halla comprendido en dicho artículo y es de la siguiente conducta: Antes del Glorioso Movimiento Nacional perteneció al Partido Radical; durante el mismo, desempeñó el cargo de Secretario del Comité Revolucionario, hizo guardias, intervino en la detención de Francisco Renal, en la confección de listas de personas de orden, confeccionaba letreros antifascistas, Dios guarde a V.S. muchos años. Villafamés 4 de febrero de 1941.

*El Comandante del Puesto,
José Sospedra Vidal.*

El Cuerpo de Policía de la capital provincial, a través de su Comisaría de Investigación y Vigilancia, tenía a su disposición listados de personas recopiladas por los servicios de información del Gobierno Civil que, oportunamente remitidas al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades de Castellón, acababan en la incoación de un expediente de responsabilidades políticas. Una muestra de estos datos es el siguiente escrito del Juez Instructor Provincial sobre un vecino de Oropesa:²³

El Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, Ramón Repollet:

CERTIFICO: que en este Juzgado existe una relación de presuntos responsables políticos, procedente de los archivos de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de esta Capital y remitida con fecha de 22 de enero del año en curso por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, constando el siguiente particular:

“José Herrero Lleonar.- que vive en c/ Cárcel de Oropesa (Castellón) de 37 años, directivo de la CNT antes del Alzamiento, saqueador e inductor de asesinos de personas de derechas”.

Y para que conste y sea remitido al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, por si tiene a bien ordenar la incoación del oportuno expediente y en virtud de lo ordenado expido el presente con el Vº Bº de S.Sª en Castellón a 4 de febrero de 1941.

²² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Ferrer Pallarés, Caja 10094. AHPCS.

²³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Herrero Lleonart, Caja 10094. AHPCS.

El afán de venganza por hechos presuntamente cometidos durante la guerra civil también impulsó a algunos ciudadanos a la denuncia, con el fin evidente de llevar a cabo un ajuste de cuentas. Es el caso de la que propició el expediente de responsabilidades políticas contra el vecino de Canet lo Roig Vicente Querol Marzá:²⁴

DENUNCIA

Manuel Ramos Tusón, de setenta años de edad, casado, vecino de Canet lo Roig (Castellón) con domicilio en la calle de Soldevila, comparece ante ese Juzgado Instructor Provincial al amparo del art. 35 número 2º de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, por creer competente para conocer de la denuncia al Tribunal Regional que ese Juzgado pertenece a tenor de lo dispuesto en el art. 3º de la Ley en cuestión y pone en su conocimiento: Que debido a su actuación y antecedentes derechistas, la Comisión gestora de este Municipio constituida por los miembros Vicente Castell Martí, Francisco Meseguer Querol, Vicente Meseguer Casulla, Vicente Querol Marzá, Vicente Grañana Bengoechea, Ramón Plá Gimeno, Ángel Salom Morera, José Bel Meseguer y Miguel Jovaní Sales, todos pertenecientes al llamado Frente Popular, destacados de extrema izquierda y en absoluto desafectos a la Causa Nacional, en sesiones celebradas los días 21 de marzo y 8 de abril de 1936, el primer fruto que dio fue suspender al suscrito de empleo y sueldo y destitución respectivamente de Secretario de este Ayuntamiento, cargo que venía desempeñando pacíficamente y sin interrupción alguna desde el 7 de julio de 1931. Seguidamente dicha Gestora y los mismos miembros, no satisfechos del fruto anterior, con marcado ensañamiento y fines malévolos, el 8 de agosto de igual año, cuando las hordas marxistas campaban por sus respectivos y más enfurecidas estaban en cometer asesinatos, robos y otros hechos vandálicos, contra las personas de orden y elementos de derecha, propuso otra vez el cese (y cesantía) digo emitió informe del dicente como desafecto y notoriamente enemigo del régimen, en su virtud el Gobernador rojo decretó mi cesantía el 13 del mismo mes y año, privándoseme de percibir a consecuencia de estos atropellos, anomalías y acuerdos lesivos de la cantidad de 6.000 pesetas anuales en concepto de sueldo, emolumento y quinquenios mas daños y perjuicios que arrojan un total de 17.000 ptas. Sufriendo a la vez quebrantamiento de salud, persecuciones, robo, amenazas y otras vicisitudes que me tuvieron sumido en la miseria y famélico durante la dominación roja. Indicando para sus efectos que dichos gestores rojos Vicente Castell Martí, Francisco Meseguer Querol, Vicente Meseguer Casulla, Vicente Grañana Bengoechea, Ángel Salom Morera y José Bel Meseguer, en la actualidad se hallan sujetos a proceso y detenidos en la Cárcel de Benicarló a disposición del Sr. Juez Militar por otros hechos que se les imputan aparte de lo que puedan afectarles respecto a la presente denuncia; Vicente Querol Marzá, muerto en campo rojo y Ramón Clá Gimeno y Miguel J. Jovaní Sales en libertad y residentes en esta localidad, todos ellos solventes. Estimados cumplidos los requisitos del art. 35 y estando dispuesto a ratificar el contenido de este escrito al que se acompañan once documentos acreditativos de los extremos que en el mismo se expresan, SUPlico AL JUZGADO se sirva admitir la presente denuncia y darle el curso por la Ley determinado. Justicia que

²⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS.

no dudo alcanzar de su recto proceder. Canet lo Roig a 25 de septiembre de 1939, año de la Victoria. Manuel Ramos.

Sr. Juez Instructor de Responsabilidades Políticas de Castellón

Por otra parte, existían organismos estatales que manejaban datos útiles para el conocimiento de los hechos producidos durante el tiempo republicano y que los ofrecían a las autoridades, como el Servicio de Recuperación Agrícola, que en 1940 ofreció datos de multitud de vecinos de gran parte de las localidades de la provincia de Castellón y que acabaron en un expediente de responsabilidades políticas²⁵.

Las denuncias masivas de ciudadanos eran el marco ideal para la comisión de verdaderas injusticias, como en el caso de la inculpada de Fanzara Francisca Barceló Pejo, acusada por unos actos realizados no por ella, sino por sus hijos, en un proceso lleno de contradicciones internas. Su expediente comenzó por una denuncia del alcalde de Fanzara, Joaquín Prades, en estos términos:

Informe acerca de los antecedentes políticos y sociales tanto antes del 18 de julio de 1936, de la vecina de este pueblo Francisca Barceló Pejo y de los hijos de ésta Pascual Gil Barceló y Francisco Gil Barceló.

Ésta antes del 18 de julio de 1936 era de izquierdas. Durante el Glorioso Movimiento se dedicó al robo y asalto de los bienes de la propiedad de los elementos de derechas asesinados, siendo una persona peligrosa contra nuestro Régimen;

Los expresados hijos de ésta antes del 18 de julio eran de ideología anarquista.

Durante el Glorioso Movimiento Nacional intervinieron en los asesinatos de esta.

Los bienes de esta se calculan en unas diez mil pesetas.

Los hijos no tienen bienes, pues todos son de la madre.

Fanzara, 16 de noviembre de 1940.

El Alcalde,

Joaquín Prades.

Sin embargo, en el preceptivo informe de la alcaldía correspondiente a su expediente por responsabilidades políticas el alcalde afirma con la mayor impunidad que *se ignora si ha intervenido en hechos delictivos, pero aparentaba disfrutar de*

²⁵ Posiblemente los datos ofrecidos a las autoridades por parte del Servicio de Recuperación Agrícola a lo largo de 1940 incluían a vecinos de casi la totalidad de localidades de la provincia de Castellón. Las catas practicadas en los expedientes del Archivo Histórico Provincial de Castellón para la realización del presente trabajo de investigación nos permiten afirmar que, como mínimo, afectaron a vecinos de Alcalá de Xivert, Alcora, Almazora, Benasal, Cabanes, Cirat, Cuevas de Vinromá, Culla, Chiva de Morella, Forcall, Fuente la Reina, La Jana, Morella, Peñíscola, San Jorge, Santa Magdalena de Pulpis, Tírig, Torre Embesora, Traiguera, Vallat, Villafamés, Villores y Zorita.

*satisfacción de los hechos cometidos por los marxistas en esta localidad. Añadiendo inmediatamente que Sus hijos eran los que robaron a los asesinados. Por tanto, eran los hijos los verdaderamente responsables de presuntos actos punibles por la Ley de Responsabilidades Políticas. Además, El Comandante de la Guardia Civil decía en su informe que se le veía comentar con regocijo los hechos cometidos por la horda roja. La clave de su procesamiento, quizá, está en la denuncia inicial, en la que el alcalde asegura que los hijos no tienen bienes, pues todos son de la madre. Por otro lado, en aquellos momentos uno de los hijos había fallecido en la guerra y los otros dos se encontraban en Francia. Por tanto, para castigar a esta familia, pues, la figura idónea era la madre, que presuntamente no había intervenido en ningún hecho delictivo y a la que únicamente se le podía acusar no de hechos sino de actitudes.*²⁶

Lo que está claro es que había una parte importante de la sociedad que estaba dispuesta a colaborar en la facilitación de información a las autoridades con el fin de procesar a presuntos responsables políticos. Si bien hemos encontrado en nuestra investigación pocas denuncias de ciudadanos contra ciudadanos, son continuas las referencias de las autoridades locales a la colaboración de “gente de orden” o “derechistas”, dispuestos a colaborar en la redacción de sus informes. Hemos de recordar que esta colaboración no sólo podía significar el hundimiento de un adversario político, social o económico, sino también la salvación personal por demostración de colaboración activa, una especie de huída hacia adelante en la que más valía ser acusador que acusado y en la que las antiguos lazos de amistad y relación quedaban volatilizados. En un contexto marcado por el terror, lo importante era no cruzar la delgada línea que separaba la tranquilidad de los buenos ciudadanos del infierno de los sospechosos. En este sentido, se impuso una sociedad de autovigilancia, en la que pocos se encontraban a salvo de la sospecha.²⁷

La triste realidad era, pues, que un gran número de personas colaboraban en la acusación. No hay que olvidar que hubo una parte de la sociedad que vio con buenos

²⁶ La inculpada, de 65 años, tenía también una hija encarcelada. Al final fue condenada en agosto de 1941 a inhabilitación por tres años y al pago de 300 pesetas, sanción que no hay constancia en el expediente que fuera pagada. Su caso fue sobreseído definitivamente en octubre de 1943. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisca Barceló Pejo, Caja 10104. AHPCS.

²⁷ J. CASANOVA (2001), op. cit., versión de 2005, pp. 286-287.

ojos el alzamiento militar y la eliminación de la República, la llamada derecha sociológica, los vencedores directos de la guerra y los que sufrieron la represión republicana principalmente, que sirvió de soporte al nuevo Estado y colaboró con él en sus propuestas, incluso en la de depurar a una buena parte de la sociedad²⁸. Como en otras experiencias dictatoriales²⁹, sin ellos, no se hubiera alcanzado el clima de terror necesario para llevar a cabo una represión tan intensa.

Frecuentemente la animación a la denuncia en un contexto de posguerra en el que se estaban reestructurando los ámbitos de poder y la administración resultaba un elemento propicio para la extensión de los rumores más o menos malintencionados, los ajustes de cuentas y las venganzas personales. El vecino de Cuevas de Vinromá Jaime Zaragoza Selma, al que se le imputó por responsabilidades políticas en abril de 1940 a raíz de los datos suministrados por el Servicio de Recuperación Agrícola, además de denunciar informes fraudulentos de las autoridades, se quejó amargamente en una carta

²⁸ Las distintas actitudes de la población frente al franquismo se analizan en C. MOLINERO, P. YSÀS (1992), op. cit., pp. 68-76; I. SAZ, A. GÓMEZ, op. cit.

²⁹ La historiografía actual tiende a demostrar cómo la colaboración de la población era imprescindible para el funcionamiento de los aparatos represivos en el régimen nazi y en la mayoría de las dictaduras. Concretamente los nazis se debatieron entre el fomento de la denuncia para incrementar su poder y la prevención de la utilización de la misma como herramienta indiscriminada para lograr fines privados. A pesar de ello, en el análisis de las denuncias del régimen nazi se constata una gran variedad de motivaciones de los ciudadanos a la hora de proceder a su denuncia. En este sentido, cabría, pues, relativizar el poder real tanto de los aparatos gubernamentales de las dictaduras fascistas como los de sus aparatos de control social más importantes, como la Gestapo, ya que sin la colaboración ciudadana no hubiesen podido desempeñar con eficacia su labor. Como comprobamos en el análisis de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón, también fue importante la denuncia y sobre todo la aportación de información sobre personas presuntamente culpables que realizaron vecinos de las distintas poblaciones que pertenecían a lo que se puede considerar los vencedores de la guerra civil. Aunque a menor escala, porque todo parece indicar que la mayoría de las denuncias fueron fruto de la iniciativa de organismos estatales u oficiales (FET y de las JONS, Servicio Nacional de Recuperación Agrícola, alcaldes, órdenes del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, etc.), sin su colaboración el alcance de la Ley de Responsabilidades Políticas hubiese sido sensiblemente menor. Para el análisis de las denuncias en el régimen nazi, en las dictaduras del periodo de entreguerras e incluso en otros sistemas políticos desde la revolución francesa se puede consultar S. FITZPATRICK, R. GELLATELY (ed.), *Accusatory practices. Denunciation in Modern European History, 1789-1989*. Chicago-London, 1994; sobre el régimen nazi y en particular sobre las denuncias en el caso de Viena F.M. DE TORO, "Política, denuncia y control social: Alemania y Austria durante el Tercer Reich", en *Historia Social*, nº 34. Valencia, 1999, pp. 117-134; sobre el régimen nazi destacan también los estudios de R. Gellately sobre el papel del ciudadano medio en la dictadura nacionalsocialista y sobre el papel de las denuncias de los ciudadanos en beneficio de la acción represora de la Gestapo en las ciudades de Dusseldorf y Würzburg. R. GELLATELY, *No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso*. Barcelona, 2001; y *La Gestapo y la sociedad alemana. La política nazi (1933-1945)*. Barcelona, 2004.

dirigida al Tribunal de Responsabilidades Políticas de Valencia de ser víctima de un rumor público.³⁰

El cargo casi único que se me formula es el de iconoclasta o destructor de imágenes, basado en el error de un rumor público. La verdad de los hechos es que por orden del Comité y ante sus amenazas Jaime Zaragoza se vio forzado a trasladar los restos de unas imágenes desde el lugar de su destrucción hasta el local en que todavía se hallan sin que se hayan ocupado de su restauración.

En este sentido el ajuste de cuentas incluso entre las personas del considerado bando vencedor estaba servido. La denuncia servía para desbancar a la persona odiada o simplemente a la competencia, causando al afectado verdaderos estragos por el deterioro de su situación legal y por la tardanza en la resolución de sus casos. Un ejemplo magnífico es el de Juan Artola Roca, empresario vecino de Vinaroz de orientación conservadora que fue perseguido por los republicanos. Con la llegada de las tropas franquistas se convirtió en Delegado de Auxilio Social de Vinaroz, lo que le imponía organizar parte del suministro de alimentos de la población, en una época en la que éstos eran un bien muypreciado. Sin embargo, acabó siendo denunciado por utilizar estos alimentos para su provecho económico, lo que le comportó un procesamiento por responsabilidades políticas, ingresando en la Prisión Provincial de Castellón. Desde allí organizó su defensa y se quejó de una situación que consideraba totalmente injusta: *[el que declara] no quiere entrar en consideraciones sobre la forma en que se produjo la denuncia origen del juicio y esta inexplicable tardanza, que motivaron tan graves estragos para un hombre honrado y de tan claros antecedentes políticos.* Por un Decreto de 14 de abril de 1941 fue declarado inocente, pero aún así el procesamiento por responsabilidades políticas continuó, una situación realmente sin sentido de la que se quejaba muy amargamente: *si hubo indulto total por la persona más autorizada [Franco] ¿cómo pudo haber excitado a la rebelión quien tenía antecedentes de perseguido y de militante del Movimiento, resultando además que los hechos de que se*

³⁰ Acusado de destructor de imágenes, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas no hizo caso de esta queja y el inculcado fue condenado en febrero de 1941 al pago de 250. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Zaragoza Selma, Caja 10083. AHPCS.

*le acusa son inexactos?*³¹ Así, la Ley de Responsabilidades Políticas no sólo afectó a los llamados vencidos, sino también, y de forma excepcional, a personas que aparentemente habían podido integrarse en el nuevo régimen, víctimas del ajuste de cuentas y la lucha encarnizada por el poder.

El origen de las denuncias era un misterio para los inculpados hasta que se les hacía llegar una copia del resumen metódico que redactaba el Juez Instructor Provincial y que era enviada al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Esta circunstancia suponía un contexto ideal para el ajuste de cuentas y sumía a los inculpados en un estado de angustia e incertidumbre kafkianos³² que se puede rastrear en ejemplos como el del maestro nacional de Villarreal José Benlloch Portolés, quien, en un escrito de defensa declaraba:³³

Ignoro en qué pueda basarse el denunciante para tildarme de comunista, puesto que todo el pueblo de Villarreal sabe que, con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional, estuve adscrito al partido Radical, en el que desempeñé el cargo de secretario. Si hubiera sido comunista, no habría tenido necesidad de afiliarme a U.R. para poder conseguir avales, que, como funcionario del Estado se me exigían para seguir desempeñando el cargo de Maestro.

[...] En cuanto a la masonería, demasiado sabe el denunciante que no soy masón. Por esta acusación calumniosa sufrí un mes de cárcel, hasta que el señor Juez, convencido en absoluto de que no había el menor indicio de mi presunta masonería, me puso en libertad el día tres de diciembre de 1938.

No era extraño que fueran las mismas autoridades las que elevaban a categoría de verdad rumores públicos, con la misma validez que un documento escrito, como en el caso del vecino de Culla Daniel Segarra, en el que el informe de referencia de la localidad, realizado por el alcalde Robustiano Miralles en junio de 1940 comienza

³¹ Finalmente Juan Artola Roca fue condenado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas al pago de 200 pesetas, declarándose los hechos graves. La sanción fue pagada en octubre de 1941. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Artola Roca, Caja 10103. AHPCS.

³² Recordemos el principio de la gran novela *El Proceso*, de J. Kafka: *Alguien tuvo que calumniar a Joseph K., ya que, sin haber hecho nada malo, una mañana lo detuvieron*. Como es conocido, el protagonista de esta novela nunca llega a saber quién le denunció y, entre otras cosas, esta circunstancia le hace perder la confianza en la Ley y la justicia. J. KAFKA, *El Proceso*. Madrid, 2007.

³³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benlloch Portolés, Caja 10093. AHPCS.

diciendo *según los antecedentes que constan y de público se sabe*³⁴. Este informe fue copiado por el Delegado Local de FET y de las JONS y el cura párroco local. En el informe-denuncia del vecino de Lucena José Barolín Montins, realizada por el Delegado Local de FET y de las JONS, se finaliza la descripción de sus cargos afirmando que *se dice formó parte de una checa de Barcelona*³⁵. En el caso del vecino de Nules Fernando Cubedo Martínez, el cura de Nules afirmaba en su informe que *según rumores tomó parte en saqueos y profanación de objetos de la Iglesia*, lo cual bastaba para considerarlo culpable. Pero es que el Delegado Local de FET y de las JONS de Nules también afirmaba sobre el mismo que *según rumor público formaba parte del Comité que exigía metálico a las personas derechistas*³⁶. Estos rumores a veces podían ser muy incriminatorios y graves, como en el caso del vecino de Almazora Vicente Clausell Ferrer, del que se dice en el informe del Delegado Local de FET y de las JONS que *se dice que pertenecía también a una secta marxista que planeaba asesinatos de personas derechistas que poco después aparecían asesinadas*.³⁷

En el caso de José Benlloch Portolés la acusación *según la opinión de muchos* de reunirse con otras tres personas en el Círculo Radical para formar una Logia masónica que presuntamente actuaba en las localidades de Villarreal y Onda supuso el primero de sus procesamientos y visitas a la cárcel de los años de la posguerra. Aunque posteriormente un juez le permitió salir de la prisión por no demostrarse su condición de masón, la acusación de masonería volvería a causarle disgustos por general, entre otros cargos, un expediente de responsabilidades políticas.³⁸

En ocasiones el rumor tiene una base probatoria tan endeble que son las mismas autoridades las que reparan en ello. Es el caso del vecino de San Juan de Moró, localidad perteneciente a Villafamés, Emilio Marco Aparici, en cuyo expediente el Comandante del Puesto de la Guardia Civil afirma que *se le atribuye la frase que al*

³⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Segarra Orensa, Caja 10081. AHPCS.

³⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bartolín Montins, Caja 10129. AHPCS.

³⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Cubedo Martínez, Caja 10083. AHPCS.

³⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Clausell Ferrer, Caja 10079. AHPCS.

³⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benlloch Portolés, Caja 10093. AHPCS.

matar el cabeza de familia había que exterminar toda la raza (2 de noviembre de 1940), mientras el alcalde asegura que *se vanagloriaba diciendo “que cuando le daban el paseo a una persona, debían de dárselo a toda la familia para evitar venganzas el día de mañana* (13 de noviembre de 1940). El punto de mínima sensatez en este caso lo aportó Manuel Juan, cura párroco de la localidad, que tuvo el valor de decir que *lo que aseguran es [...] que en ese tiempo dijo esta o parecida frase: “en la casa que empiecen por matar un individuo que no paren hasta matar a todos”. Pero, vamos, las palabras el viento se las lleva por aquello de que “del dicho al hecho hay gran trecho”*.³⁹

La extensión de los rumores implicaba incluso la parte más importante de los informes de las autoridades locales: la relación de bienes del inculpado y su valoración económica. Así, por ejemplo, en los informes relativos la vecina de Almazora María Claramonte Martínez el alcalde de la localidad afirma que *ni ella ni su esposo Vicente Bernat Gil poseen bienes, aunque se dice que pueden poseer una casa en Almazora*, a lo que el cura Leandro Colom añade en su informe *según mis informes nada posee. Dicen si su cónyuge posee una casa con un valor de 7.000 pesetas*. En el caso del vecino de Alcalá de Xivert Lorenzo Cucala Pitarch, el Comandante de la Guardia Civil José Vinuesa Aicart asegura que *se dice que su cónyuge tiene dos fincas de viña y almendros, algarrobos y olivos*, lo que no se demostró documentalmente en ningún momento de la instrucción del caso⁴⁰. La cuestión adquiere gran relevancia, ya que esta valoración económica era la información que teóricamente avalaba una futura sanción económica.⁴¹

En uno de los casos analizados un vecino de Almazora incluso llega a rogar al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas que no se deje llevar por

³⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Emilio Marco Aparici, Caja 10098. AHPCS.

⁴⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Lorenzo Cucala Pitarch, Caja 10079. AHPCS.

⁴¹ De hecho, esta vecina de Almazora fue condenada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia al pago de 3.750 pesetas el 1 de diciembre de 1939, sanción que nunca pagó y que determinó la vigilancia de los bienes familiares hasta el sobreseimiento y archivo definitivo del caso el 28 de febrero de 1945. Expediente de Responsabilidades Políticas contra María Claramonte Martínez, Caja 10064. AHPCS.

pruebas basadas en especulaciones públicas, sino en pruebas documentales y antecedentes oficiales:⁴²

[...] suplico a V.I. guarde las reglas indicadas en las Leyes pues debe recordar que el vulgo es una ola polvorienta que se aclara y se ensucia según las normas de los aires que la atraen y como quiere que existe un punto de lógica donde la autoridad puede basarse como realidad de lo que existiera contra una tercera persona sin necesidad que su conducta sea ponderada o menospreciada por la ola antes indicada, ruego y suplico se exija de la sección correspondiente de la Dirección de Seguridad y Penales la realidad de mis antecedentes, pues puedo enorgullecerme que en 38 años jamás recibí de autoridad municipal ni gubernativa llamada de atención por haberme separado del camino en que todos los ciudadanos tenemos obligación de conducirse ante la Ley.

Algunos expedientes fueron incoados a partir de la actuación de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Castellón. De esta forma, el expediente que se abrió a Pedro Loras Loras, de la Mata de Morella, se realizó como consecuencia de un registro domiciliario (se trataba de un médico que huyó de la población ante la llegada de las tropas franquistas), en el que se encontraron *muebles, fotografías, libros y utensilios profesionales médicos*⁴³

Finalmente, conocemos ejemplos de expedientes de responsabilidades políticas incoados a raíz de algún incidente público menor, pero con ciertas dimensiones políticas que permitían “desenmascarar” a algunos ciudadanos y sus verdaderas inclinaciones políticas. El vecino de Chilches Vicente Torres Lapuerta fue procesado por responsabilidades políticas a raíz de un comentario realizado en contra de un bando municipal, lo que generó una pelea con otro vecino, la actuación policial y la correspondiente investigación de su pasado, que le condujo a la jurisdicción especial de responsabilidades políticas. Independientemente de su sanción por alteración del orden público, acabó siendo condenado a la sanción de 100 pesetas, que pagó en noviembre de 1940.

⁴² El texto corresponde a un fragmento de la hoja de descargo, firmada por Enrique Pitarch Felip el 15 de abril de 1940 desde la Prisión de Burriana. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Pitarch Felip, Caja 10079. AHPCS.

⁴³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Loras Loras, Caja 10074. AHPCS.

Una vez el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón había recibido la orden del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia de incoar un expediente, éste mandaba un escrito a las autoridades locales correspondientes⁴⁴ ordenándoles la realización de sendos informes sobre diversos aspectos de los inculcados, como su domicilio, su orientación socio-política antes y después del 18 de julio de 1936 y una relación valorada de sus bienes. Estas autoridades locales eran, según el Artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas, el Alcalde⁴⁵, el Jefe Local de FET y de las JONS, el cura párroco y el Comandante del Puesto correspondiente de la Guardia Civil, a los que se unía la Jefatura Provincial de Policía si se trataba de un vecino de alguna capital de provincia o si éste se encontraba en paradero desconocido. Estos informes tenían carácter de urgencia y debían remitirse antes de 5 días, aunque en la práctica esto no era siempre posible. Además, algunos informes no valoraban alguna de las partes exigidas, especialmente la económica, con lo que era frecuente que el Juez Instructor exigiera su repetición. Realmente eran los datos económicos de los inculcados los que más interesaban a las autoridades, ya que eran los que se pedían en todos los casos, los que motivaron la repetición de algunos de estos informes (para su aclaración) e, incluso, los que provocaron la paralización de algunos expedientes, especialmente tras la reforma de la Ley de febrero de 1942. El Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas, Víctor Núñez Escalona, lo dejó muy claro en una aclaración en un expediente precisamente en febrero de 1942: *Apareciendo en los mismos [informes de las autoridades] que el inculcado carece de toda clase de bienes de fortuna, suspéndase la tramitación del presente expediente, en espera de que sean tramitados los seguidos contra los presuntos responsables de*

⁴⁴ Si el inculcado estaba relacionado con diversas localidades, por vivir en una y trabajar en otra, o por tener propiedades en distintas localidades, eran las autoridades de todas las localidades afectadas las que debían realizar sendos informes. En relación a la localidad de nacimiento, si se trataba de una localidad más o menos lejana era frecuente que se pidiera la correspondiente partida de nacimiento. Ocasionalmente, se pedían también informes a las autoridades locales de la población de donde era oriundo el inculcado. Si era una ciudad importante los informes eran de la policía y de la Guardia Civil. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Artola Roca, Caja 10103. AHPCS.

⁴⁵ En ocasiones era el Juez Municipal el encargado de realizar el informe de la alcaldía si el alcalde estaba ausente, como en el caso del vecino de Useras Marcelino Vidal Llorens. En su expediente aparecen los informes de las autoridades locales de Useras, Ludiente y Oropesa. Ante la ausencia del alcalde de Oropesa es el Juez Municipal el que realiza el correspondiente informe. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Marcelino Vidal Llorens, Caja 10075. AHPCS.

*reconocida solvencia económica*⁴⁶. De hecho, muchas veces eran estos datos económicos los únicos que el Juez Instructor exigía a las autoridades locales.⁴⁷

Por otra parte, no era extraño que otras autoridades intervinieran a la hora de informar sobre los inculpadados, como los directores de las prisiones o Batallones disciplinarios en los que se encontraban, que ofrecían datos sobre su paradero, traslado, posible jornal, etc.

Si bien estos informes de las autoridades locales eran el principal punto de referencia que tenía el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas a la hora de realizar el resumen metódico, que, a su vez, constituía la base argumental de la posterior sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, en algunas ocasiones el citado Tribunal daba más importancia o veracidad a las acusaciones vertidas en la sentencia del consejo de guerra que a los informes de las autoridades locales. Un ejemplo de ello es el del maestro Marcelino Vidal Llorens. Acusado en el consejo de guerra sumarísimo celebrado en Castellón el 4 de enero de 1939 de ser un fanático del comunismo, transmitir los valores revolucionarios a sus alumnos y participar en un mítin de la FAI, las autoridades locales de Useras aseguraron que no disponía de bienes y las de Oropesa, su población natal, coincidieron en su conducta intachable de persona de orden, apolítica, católica y de buenas costumbres. A pesar de todo, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le condenó en diciembre de 1940 al pago de 7.000 pesetas, cantidad que acabó pagando en febrero de 1941, a costa seguramente de su patrimonio familiar, ya que él se encontraba en la Prisión de San Simón de Vigo.⁴⁸

El análisis de estos informes nos permite conocer la influencia de las distintas fuerzas del régimen franquista en cada localidad en los primeros años del franquismo, ya que los informes solían basarse en un primer informe de alguna de las autoridades o en la influencia de uno de ellos, los distintos grados de colaboración y compromiso de las distintas autoridades locales con la represión franquista, el tipo de información que

⁴⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Beltrán Gómez, Caja 10096. AHPCS.

⁴⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra María Claramonte Martínez, Caja 10064. AHPCS.

⁴⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Marcelino Vidal Llorens, Caja 10075. AHPCS.

ofrecían, las fuentes que utilizaban, cómo describían el periodo republicano, cómo calificaban a los inculpados y el nivel de preparación de cada una de estas autoridades. Para ello combinaremos el análisis de cada una de las autoridades locales por separado y después en su conjunto.

La Guardia Civil

El Cuerpo de la Guardia Civil fue uno de los puntales sobre los que se apoyó el régimen franquista en sus primeros años a la hora de mantener el orden social y de obtener información sobre la población. Ya lo había sido desde sus inicios decimonónicos, pero desde octubre de 1934 se había convertido en un elemento fundamental a la hora de garantizar la estabilidad del sistema. No es casualidad que este Cuerpo de carácter militar tuviera a su disposición ficheros de personas sospechosas consideradas peligrosas socialmente que se habían significado por su tendencia izquierdista y revolucionaria desde la fecha comentada⁴⁹. Así, en el expediente del inculpado de Canet lo Roig Vicente Querol Marzá el Guardia segundo del Puesto de La Jana asegura que la información que ofrece se ha conseguido *según informes que obran en el fichero de este puesto e informes adquiridos de las autoridades de dicha localidad y demás personas solventes de la misma*⁵⁰. En el informe sobre el inculpado de Vistabella Saturnino Centelles Olaria el Comandante del Puesto de la Guardia Civil asegura que *figura como sospechoso en el registro de este pueblo*⁵¹. Por otra parte,

⁴⁹ Esto es evidente en algunos de los expedientes que hemos analizado, en los que la Guardia Civil confiesa tener y manejar listados de personas sospechosas desde 1934. Ejemplo de ello son algunos de los informes que la Guardia Civil del Puesto de la Vall d'Uixó realizaron sobre algunos de sus vecinos, y que analizamos más adelante. Sin embargo, esta situación no es característica únicamente de las localidades de la provincia de Castellón. La relación entre los sucesos de octubre de 1934 y la represión desencadenada a partir del estallido de la guerra civil y tras ésta se encuentra extraordinariamente analizada para la región de La Rioja en C. GIL, *Lejos del frente. La guerra civil en la Rioja Alta*. Barcelona, 2006. En este estudio se demuestra, entre otros factores de la represión franquista, cómo la Guardia Civil estaba perfectamente informada, a partir de los datos generados tras la represión del movimiento insurreccional de octubre de 1934, de todas y cada una de las personas que en cada localidad podían ser acusadas de ser partidarias de las opciones de izquierda i/o de la revolución. Concretamente en La Rioja esta información permitió una represión rápida, feroz e implacable. También se puede consultar G. HERRERO, A. HERNÁNDEZ, *La represión en Soria durante la Guerra Civil*. Soria, 1982.

⁵⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS. La misma expresión se repite en el expediente contra el vecino de Forcall Antonio Eixarch Frasno. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Eixarch Frasno, Caja 10083. AHPCS.

⁵¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Saturnino Centelles Olaria, Caja 10129. AHPCS.

como ya hemos comentado, la Guardia Civil participó activamente en el proceso de denuncia de ciudadanos.

Aún así hemos de ser conscientes que el Cuerpo de la Guardia Civil también sufrió un proceso de depuración interna que le convirtió en un agente adicto al franquismo casi en su totalidad. Como muestra de esa depuración se podrían citar los tres guardias civiles a los que les fue incoado un expediente de responsabilidades políticas y que aparecen publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.⁵²

Normalmente la Guardia Civil en cada localidad realizaba informes caracterizados por su independencia respecto al resto de autoridades locales, aunque en general ofrecían datos bastante similares. La razón es que la información demandada por el Juzgado de Instrucción Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón era concreta, centrándose en la localización del inculcado, sus datos personales, los de su familia directa, la consideración política e ideológica del mismo⁵³ y sus actos (antes, durante y después de la guerra) así como la relación de bienes del inculcado y su valoración económica. Este último aspecto era considerado el más importante de todos, ya que, como hemos indicado, en teoría basaba una futura e hipotética sanción económica, lo que explica que en muchos de los informes esta información aparezca en un amplio anexo. De hecho, algunas veces el informe correspondiente consistía sólo en una relación de bienes del inculcado y su valoración económica⁵⁴. Al mismo tiempo, los informes de la Guardia Civil también eran copiados en algunos casos por el resto de las autoridades locales.⁵⁵

⁵² Se trataba del guardia civil retirado Modesto Menero Llorens, vecino de Oropesa (BOP del 9-10-1941); del guardia civil Miguel Martínez Sánchez, vecino de Adzaneta, (BOP del 11-11-1939); y el guardia civil expulsado Ricardo Falcó Pla, vecino de Canet lo Roig, (BOP del 15-6-1940). Por otra parte, también se abrió expediente de responsabilidades políticas a cuatro Guardias de Asalto y diversos militares.

⁵³ En el expediente contra el vecino de Villahermosa del Río Gonzalo Castillo Mollón se especifica en el informe de la Guardia Civil incluso a quién votó el inculcado en las elecciones de febrero de 1936. Expediente de Responsabilidades Políticas contra el inculcado Gonzalo Castillo Mollón, Caja 10075. AHPCS.

⁵⁴ Por ejemplo en el caso del vecino de Figueroles Ramón Gregori Bartoll, cuyo informe fue realizado por la Guardia Civil del Puesto de Lucena. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Gregori Bartoll, Caja 10071. AHPCS.

⁵⁵ Por ejemplo, en Higuera el informe de la Guardia Civil es copiado descaradamente por la alcaldía y por el Delegado Local de FET y de las JONS. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gumersindo Alegre Monterde, Caja 10094. AHPCS.

Pero también podía darse el caso que la información ofrecida por la Guardia Civil estuviera total o parcialmente copiada de otra autoridad local, sobre todo de la alcaldía⁵⁶. Esta situación se producía especialmente en aquellos casos en los que el inculcado no poseía bienes, por lo que su caso no ofrecía excesivo interés para las autoridades y su caso se zanjaba con informes muy breves.⁵⁷

Sin embargo, el historial político y sindical, así como los hechos presuntamente delictivos del inculcado cometidos durante la guerra civil también ocupaban buena parte de muchos de estos informes⁵⁸. Como ejemplo puede servir el informe que realizó el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Almazora sobre el inculcado de la misma localidad Vicente Clausell Ferrer.⁵⁹

⁵⁶ Es el caso de la localidad de Almedíjar. El Puesto de la Guardia Civil encargado de realizar el informe de los vecinos de Almedíjar era el de Sot de Ferrer. Parece que por desconocimiento previo los informes correspondientes eran copiados parcialmente de la alcaldía de esa localidad. Y lo eran sólo parcialmente porque la relación de bienes y su valoración económica se realizaba con datos propios y redacción independiente. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Eusebio Martínez Pérez, Caja 10130. AHPCS.

En el expediente del vecino de Culla Daniel Segarra Orenga el informe de la Guardia Civil del Puesto de Benasal es de redacción independiente al resto de las autoridades, pero en su parte final se adjunta una copia de los bienes del inculcado y su valoración económica que está calcada del informe de la alcaldía de Culla. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Segarra Orenga, Caja 10081. AHPCS. En su expediente sobre un vecino de Viver la Guardia Civil de Jérica informa que los datos que ofrece le han sido facilitados por la alcaldía de Viver. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benet Gil, Caja 10128. AHPCS.

⁵⁷ Los informes de la alcaldía, del cura y de la Guardia Civil de Artana se limitan a decir *no se le conocen bienes de ninguna clase*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Balaguer Gallart, Caja 10099. AHPCS.

El informe de la Guardia Civil de Castellón sobre el inculcado Vicente Porcar Vilar se limita a estas palabras: *No posee bienes de fortuna de ninguna clase, así como su esposa, viviendo de lo que le proporciona a él su oficio de carpintero*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Porcar Vilar, Caja 10064. AHPCS.

⁵⁸ Por ejemplo, además de incluir su relación de bienes, en el informe sobre el vecino de Alcora Justo Sanz Albalate, el Comandante del Puesto de esa localidad Juan Sifre incluía su historial político antes del 18 de julio de 1936 y su actuación durante la guerra. Concretamente se informó que pertenecía a la CNT, que durante la guerra realizaba guardias y controles armado de escopeta y que protagonizó saqueos, quema de distintas iglesias, el incendio del Archivo y Juzgados de Alcora, así como detenciones de personas de orientación conservadora. También informa que fue ejecutado el 15 de abril de 1940. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Justo Sanz Albalate, Caja 10083. AHPCS.

⁵⁹ El informe acaba diciendo que el inculcado posee un huerto valorado en 6.000 pesetas y una casa valorada en 2.000 pesetas, con un total de 8.000 pesetas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Clausell Ferrer, Caja 10079. AHPCS.

Antes del GMN estaba afiliado a la sindical CNT y observó mala conducta. Durante el citado Movimiento a la misma sindical, fue miliciano armado a las órdenes del Comité Antifascista, intervino en registros, saqueos y en el incendio de la Iglesia Parroquial de esta villa. Al practicar un registro en el domicilio del vecino Vicente Mingol le derribó la puerta de entrada a tiros de escopeta; era uno de los individuos que cargaba los cartuchos de escopeta que usaban los milicianos, gran propagandista del Marxismo; un día durante la dominación roja se encontraba este sujeto en el arrabal de esta población y al pasar por dicho sitio el vecino de la misma, Manuel Serra Usó dijo aún va este hombre por la calle y no lo matan y en efecto a los pocos días fue asesinado; individuo peligroso para la Causa Nacional.

En consonancia con el espíritu de la Ley de Responsabilidades Políticas, muchas veces se acusaba a los inculpados de la comisión de actos considerados delitos que cuando fueron cometidos eran completamente legales, como en el caso del inculpado de Alcalá de Xivert Manuel Máñez Cherta, a quien la Guardia Civil de su localidad le acusaba con los siguientes términos: *Dicho informado desde que tuvo derecho a emitir su voto, siempre lo ha hecho a favor de los partidos de izquierda y del funesto frente popular, habiéndose distinguido en sus conversaciones privadas a favor de los ideales marxistas.*⁶⁰

Las fuentes utilizadas por la Guardia Civil para la realización de sus informes podían ser muy variadas. Normalmente se recurría a la información de las otras autoridades locales, sobre todo de la alcaldía⁶¹, aunque no se descartaba recabar información de los vecinos de la localidad⁶², vecinos que eran calificados como

⁶⁰ Posteriormente el informe especificaba la relación de bienes del inculpado y su valoración económica. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Máñez Cherta, Caja 10078. AHPCS.

⁶¹ El informe de la Guardia Civil del Puesto de Almazora sobre el inculpado José Vidal Paul comienza con estas palabras: *De las gestiones practicadas por el que suscribe y en los libros de riqueza pública del Ayuntamiento resulta que...*, con lo que podemos deducir que parte del proceso de información de la Guardia Civil era examinar la documentación que sobre el inculpado existía en los archivos municipales. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Vidal Paul, Caja 10130. AHPCS.

En el informe correspondiente al vecino de Alcalá de Xivert Raimundo Antón Piquer el Comandante de la Guardia Civil especifica que *en el Registro de Estadística y Solares de este pueblo no figura ningún amillaramiento a nombre del mismo*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Raimundo Antón Piquer, Caja 10078. AHPCS.

En Serratella no se calcaba, pero la Guardia Civil, a través de su Comandante Esteban López, copiaba sistemáticamente el informe que realizaba la alcaldía (también lo hacía el Delegado Local de FET y de las JONS). Ver, por ejemplo, el Expediente de Responsabilidades Políticas contra Amparo Pastor Albert, Caja 10093. AHPCS.

⁶² Es el caso de la Guardia Civil del Puesto de Albocácer, que en el informe sobre el inculpado Enrique Monfort Miralles afirma: *a pesar de las gestiones practicadas tanto cerca de las autoridades locales como de un gran número de vecinos de esta villa, dicho individuo es desconocido en esta localidad*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Monfort Miralles, Caja 10099. AHPCS.

*personas solventes*⁶³, *personas de verdadera solvencia moral*⁶⁴. En muchos casos todo parece indicar que los Guardias Civiles tenían acceso a las copias de los testimonios de sentencia por un Tribunal militar, con lo que sus informes pocas cosas añadían a éstas, salvo los bienes y su valoración económica⁶⁵. Lo que sí parece claro es que existía un proceso de investigación de la Guardia Civil⁶⁶. En el proceso de dicha investigación tampoco podemos dejar de contemplar la práctica de algún tipo de interrogatorio más o menos violento.⁶⁷

En la mayoría de los casos los informes de la Guardia Civil ofrecen información, especialmente económica, más detallada que el resto de autoridades, aunque siempre con excepciones⁶⁸. La realización de la valoración económica se hacía basándose en fuentes contributivas y podían incluir complicados cálculos⁶⁹. La importancia de esta información se demuestra en los casos en los que el Juez Instructor Provincial obliga a la realización de segundos informes para especificar bien los bienes y, sobre todo, su

⁶³ Ya hemos visto cómo en este expediente la Guardia Civil se asegura que las fuentes de las que se ha extraído la información son un fichero propio, datos de las autoridades locales e informaciones de *personas solventes*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS.

⁶⁴ En el expediente contra el vecino de Fuente la Reina Bienvenido Villalba Moliner el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Barracas comenta las fuentes en las que se ha basado diciendo *en virtud de las gestiones practicadas por el que suscribe ante autoridades y personas de verdadera solvencia moral de dicho pueblo*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bienvenido Villalba Moliner, Caja 10082. AHPCS.

⁶⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Cubedo Martínez, Caja 10083. AHPCS.

⁶⁶ El informe de la Guardia Civil del vecino de Onda Francisco Muñoz Prades comienza con la frase *Hechas las oportunas averiguaciones se ha averiguado que...* Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Muñoz Prades, Caja 10064. AHPCS.

⁶⁷ En el informe del inculcado vecino de Alcalá de Xivert Vicente Arín Tarrago el Comandante del Puesto de esa localidad José Vinuesa Aicart dice que *su mujer, Filomena Carbonero Elvira, no satisface contribución ninguna “si bien ha confesado” que posee una finca rústica por un valor de 1.000 pesetas y otra de olivos con el mismo valor*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Arín Tarrago, Caja 10078. AHPCS.

⁶⁸ La Guardia Civil del Puesto de Ahín ofrecía una valoración general de las fincas de los inculcados, mientras el resto de las autoridades locales ofrecían datos muy detallados. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Navarro Navarro, Caja 10130. AHPCS.

⁶⁹ El Comandante del Puesto de Benasal José Roig Beltrán aclara en su informe sobre el inculcado de Benasal José Monfort Fabregat que *la valoración [de sus bienes] se ha obtenido de capitalizar el 5 por 100 la riqueza asignada a cada uno de los inmuebles reseñados, por lo que el valor efectivo de la misma en la actualidad se supone tiene que ser mucho mayor*.

valoración económica⁷⁰. Como ilustración podemos ofrecer el informe que la Guardia Civil del Puesto de Alcalá de Xivert realizó sobre su vecino Pascual Arnau Caudet en mayo de 1940:⁷¹

Pascual Arnau Caudet siempre ha militado en los partidos de izquierda; durante el dominio rojo formó parte de la Junta Popular Antifascista y durante el tiempo que desempeñó este cargo se efectuaron la detención de seis personas de derecha, estando conceptualizado como significado del marxismo, actualmente se halla enfermo en esta localidad de alguna gravedad. Sus bienes son los siguientes:

Fincas	Cultivo	Ptas.
Marsella.....	Almendros diez jornales...	..15.000
Cuart.....	Almendros ½ jornal.....400
Prigó del Rey.....	Olivar cinco cuartas.....300
Alió.....	Viña una cuarta.....200
Capi-Corp.....	Naranjos riego y una casa...	...7.000
Costes.....	Olivar.....	...2.000
Balsa de Asmet.....	Almendros.....	...3.500
Camí de Alió.....	Cereales.....700
Una casa calle Calvo Sotelo nº 410.000
Una casa con horno de cocer pan20.000
	TOTAL	...59.100

Algunos informes incluían calificaciones a modo de sentencia que tenían como objetivo dejar muy clara la ubicación del inculcado en la nueva sociedad franquista. Así, del vecino de Arañuel José Bernía Brun la guardia civil aseguró en 1941 que *continúa desafecto al Régimen actual*⁷². Más comunes eran las expresiones *elemento peligroso*⁷³, *extremista*, *patrullero*⁷⁴, *persona de mala conducta*⁷⁵, *pendenciero*⁷⁶, *desafecto*⁷⁷, *mala persona y peligroso*⁷⁸, *individuo peligroso para la Causa Nacional*⁷⁹,

⁷⁰ En este expediente el primer informe de la Guardia Civil, firmado por el guardia segundo José Artiga Canal, trataba del pasado político del inculcado, pero no de sus bienes. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS.

⁷¹ Dicho informe está firmado por el Comandante del Puesto José Vinuesa Aicart. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Arnau Caudet, Caja 10078. AHPCS.

⁷² Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bernía Brun. Caja 10095. AHPCS.

⁷³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carlos Vicente Máñez, Caja 10091. AHPCS.

⁷⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Eixarch Frasnó, Caja 10084. AHPCS.

⁷⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bartolins Montins, Caja 10129. AHPCS.

⁷⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Loras Loras, Caja 10074. AHPCS.

⁷⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Batalla Jovaní, Caja 10089. AHPCS.

*de pésimos antecedentes para a paz social*⁸⁰. Algunas de las calificaciones eran bastante peculiares, como en el caso del vecino de Chilches Vicente Torres Lapuerta, que es calificado por la Guardia Civil del Puesto de Almenara como *apasionado de Azaña*.⁸¹

La realización de los informes estaba presidida por la rapidez, por lo que en ocasiones la Guardia Civil ofrece datos de diversos inculcados en un único informe⁸².

La redacción de los informes era mayoritariamente libre e independiente respecto a los informes de las otras autoridades, aunque ya hemos comentado algunos casos en los que se basan en ellos. Algunos tenían una redacción peculiar, como los redactados por la Guardia civil de Almenara para los vecinos de La Llosa en 1940, que consistían en una ficha informativa preescrita que sólo había que rellenar.⁸³

Normalmente los informes los redactaban y firmaban los Comandantes del Puesto de la Guardia Civil de la localidad correspondiente al inculcado, aunque en su ausencia lo firmaba algún subordinado, es decir, un sargento⁸⁴, un cabo⁸⁵, un guardia primero⁸⁶, un guardia segundo encargado⁸⁷, un simple oficial⁸⁸. Además, como hemos

⁷⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Eladio Vidal Sales, Caja 10083. AHPCS.

⁷⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Grifo Arquimbau, Caja 10079. AHPCS.

⁸⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Lorenzo Cucala Pitarch, Caja 10079. AHPCS.

⁸¹ Se supone que esta calificación era altamente descalificatoria. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Torres Lapuerta, Caja 10075. AHPCS.

⁸² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Benjamín Barberá Monferrer, Caja 10131. AHPCS.

⁸³ En ella se informaba del nombre del inculcado, su paradero, sus datos personales más importantes, los de su familia y una relación de bienes con su correspondiente valoración económica. Expediente de Responsabilidades Políticas contra el inculcado Vicente Villarroig Royo, Caja 10127. AHPCS.

⁸⁴ En este caso se trata de un vecino de la localidad de Villarreal (concretamente de Alquerías del Niño Perdido). Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bautista Balaguer Molés, Caja 10099. AHPCS.

⁸⁵ En este caso se trata de un vecino de Chodos y el informe está realizado por el Puesto de la Guardia Civil de Vistabella. Expediente de Responsabilidades Políticas contra David Aparicio Gonell, Caja 10065. AHPCS.

⁸⁶ En este caso se trata de un vecino de Benafigos y el informe está realizado por el Puesto de la Guardia Civil de Adzaneta. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Melchor Marín Monserrat, Caja 10144. AHPCS.

comprobado en el análisis de cada una de las localidades de la provincia de Castellón, algunas no disponían de destacamento de Guardia Civil, con lo que los informes lo firmaban los Comandantes de los Puestos más cercanos o directamente relacionados. Si era necesario para aclarar algún expediente se pedían informes a varios Puestos diferentes.⁸⁹

La alcaldía

De todas las autoridades locales es posible que la que estaba más directamente en contacto con sus vecinos fuera la alcaldía. Tras la ocupación franquista de cada localidad el alcalde fue designado inicialmente por las autoridades militares entre otros militares o entre las personas de tendencia conservadora que parecían con mayor influencia local⁹⁰. Posteriormente las alcaldías fueron asignadas a personas adictas al nuevo Estado franquista por decisión del Gobierno Civil y el gobierno central⁹¹. En

⁸⁷ En este caso se trata de un vecino de Arañuel denunciado por un guardia civil del Puesto de Argelita. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bernía Brun, Caja 10095. AHPCS.

⁸⁸ En este caso se trata de un vecino de Castellfort. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Molés Peiró, Caja 10103. AHPCS.

⁸⁹ En el expediente contra el vecino de Vallat Antonio Sanz Nebot realizaron informes la Guardia Civil de los Puestos de Argelita y Fanzara, que, por cierto, dieron informaciones peligrosas porque mientras que para el Comandante del Puesto de Argelita el inculpado era *peligrosísimo* para el Comandante del Puesto de Fanzara era *persona de buena conducta*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Sanz Nebot, Caja 10083. AHPCS.

⁹⁰ En su estudio sobre las principales poblaciones aragonesas A. Cenarro destaca que la nueva clase dirigente a nivel local procedía de anteriores clases dirigentes que estaban acostumbradas al privilegio y cuyo puesto estaba ligado a intereses muy concretos. En definitiva, se trataría de personas acostumbrada por tradición familiar al acceso a los puestos de poder que garantizaban al régimen tanto el control social y político como la garantía de la continuidad de los intereses económicos tradicionales. Así se trataría de una verdadera recuperación de poder. A. CENARRO, *Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945*. Zaragoza, 1997, pp. 117-136 y 153-161.

⁹¹ Por ejemplo en la Vall d'Uixó a los pocos días de la ocupación por parte del ejército franquista de la localidad a principios de marzo de 1939 se le entregó la autoridad al capitán de infantería Juan Calduch. A finales de ese mismo mes el gobernador civil Martín Sada Moneo nombró como alcalde a Vicente Rebollar Llorens, quien ejerció el cargo hasta septiembre de 1940, cuando el gobernador civil lo mandó sustituir por Ismael Llopis Arnau. En mayo de 1941 el alcalde fue sustituido por Domingo Pérez Nebot, quien renunció al cargo en febrero de 1942 a favor de Juan Aragón Moliner, hasta ese momento Jefe Local de FET y de las JONS y trabajador de la empresa Segarra que ejerció su cargo hasta abril de 1949. E.GAJA y M. FERRER, *25 años de paz en Vall de Uxó*. La Vall d'Uixó, 1954.

En esta dinámica era posible que se produjeran errores y los alcaldes no fueran personas plenamente adictas al franquismo, a pesar de todos sus esfuerzos por disimularlo, como en el caso del vecino de Caudiel Camilo Sánchez Herrero, quien a pesar de haber sido nombrado alcalde por las autoridades militares que ocuparon la población, fue denunciado por su pasado republicano. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Camilo Sánchez Herrero, Caja 10068. AHPCS.

ocasiones el informe era también redactado y firmado por el Secretario municipal⁹² o, incluso, realizado, en ausencia del alcalde, por el Juez Municipal⁹³. En muy pocos casos hemos encontrado expedientes en los que no se incluye el preceptivo informe de la alcaldía sobre el inculpado⁹⁴.

Como en el caso de la Guardia Civil, si era necesario se pedían informes sobre la misma persona a alcaldes de distintas localidades, lo que se producía cuando el inculpado era natural de otra localidad, trabajaba en una localidad diferente a la que vivía o había estado de alguna forma relacionado. Así, por ejemplo, en el expediente contra Antonio Sanz Nebot, intervinieron los alcaldes de Toga (donde presuntamente había participado en la quema de la iglesia), Ludiente (donde presuntamente había cometido asesinatos), Espadilla (donde tenía fincas) y Vallat (donde residía).⁹⁵

Los alcaldes solían realizar informes que destacaban por la riqueza de datos que aportaban, abarcando todos los aspectos útiles para las autoridades de la jurisdicción de Responsabilidades Políticas: datos personales y familiares del inculpado, evolución política y sindical, presuntos delitos cometidos durante la guerra, paradero del inculpado⁹⁶, contribución pagada, relación de bienes y su valoración económica, etc⁹⁷.

En cualquier caso la reconstrucción del poder local pudo generar conflictos entre las autoridades locales, especialmente entre las corporaciones locales y FET y de las JONS, partido al que parte de la población comenzó a afiliarse para mantener una buena relación con el nuevo régimen o para intentar borrar hechos y acciones pasadas, tal como se constata para la provincia de Teruel en A. CENARRO (1997), op. cit., pp. 125-131.

⁹² Es el caso de los informes de la alcaldía de Ballestar, firmados en 1940 tanto por el alcalde Tomás Pla como por el Secretario municipal José Cardona. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Tellado Sabater, Caja 10080. AHPCS.

⁹³ Es el caso del informe sobre el vecino de Geldo Miguel Doñate Fuentes. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Doñate Fuertes, Caja 10099. AHPCS.

⁹⁴ Es el caso de la alcaldía de Segorbe. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Montesinos Clavel, Caja 10103. AHPCS.

⁹⁵ En este expediente los distintos informes son contradictorios y finalmente se descubre una confusión en la identidad del inculpado. Finalmente éste fue absuelto por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Sanz Nebot, Caja 10083. AHPCS.

⁹⁶ Si el inculpado se hallaba en prisión, en un campo de concentración, en un Batallón de Trabajadores o en otra localidad, la alcaldía, junto con la Guardia Civil, era normalmente la autoridad con más información para esclarecer el paradero. Por ejemplo, el inculpado de Ares del Maestre Juan Mir Mestre se encontraba en marzo de 1941 en un Batallón de Trabajadores y fue localizado gracias a la información del alcalde de la población. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Mir Mestre, Caja 10103. AHPCS.

Se ofrecían detalles de primera mano sobre presuntos asesinatos de personas, registros de domicilios, saqueos, incendios de iglesias, amenazas, detenciones, etc., aunque también detalles de la vida cotidiana del inculcado, como en del informe del alcalde de Bojar, José Bel, sobre el inculcado José María Tellado Bel, del que asegura: *De ordinario trabaja la pequeña propiedad de sus mayores y acepta un jornal cuando se le ofrece, lo que ocurre ocho o diez veces al año, y gana entonces seis pesetas diarias*⁹⁸

Como pasaba con los informes de la Guardia Civil, la información más importante y, por tanto, la que más esfuerzos exigía a la alcaldía era la relativa a los bienes del inculcado y su valoración económica. Incluso muchos de los informes sólo contenían valoraciones económicas del patrimonio del inculcado⁹⁹. En muchos de los informes de la alcaldía se añadía, como hemos visto, información sobre el oficio del inculcado, su jornal y sus medios de vida. De hecho, también se dan casos en los que el Juez Instructor Provincial ordena la realización de un segundo informe cuando en el primero sólo se habían tratado aspectos políticos o ideológicos.¹⁰⁰

El inculcado de Benafer Santiago Moliner Tobán se encontraba detenido en la Colonia Penitenciaria de Dos Hermanas, en Sevilla, y fue localizado gracias al informe del alcalde de la localidad. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Santiago Moliner Tobán, Caja 10130. AHPCS.

⁹⁷ En el análisis de estos informes hemos detectado situaciones hasta cierto punto “curiosas”, como en el informe que el alcalde de Villores realiza sobre el inculcado Gerónimo Troncho Troncho en noviembre de 1940, en el que, tras aportar datos sobre los antecedentes políticos del inculcado, relatar sus presuntos delitos durante la guerra y su relación de bienes, todo es validado con un cuño del Ayuntamiento en el que se puede leer claramente: *Alcaldía Constitucional Villores*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gerónimo Troncho Troncho, Caja 10089. AHPCS.

⁹⁸ Esta situación es comprensible en una población pequeña como Bojar que, según el Censo de población de 1940 tenía una población de hecho de 389 habitantes, 197 hombres y 192 mujeres. En localidades con tan poca población el control social y la vigilancia de las autoridades se presumen muy intensos. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José María Tellado Bel, Caja 10131. AHPCS.

⁹⁹ Es el caso del informe del alcalde de Onda sobre el inculcado Antonio Diago Torres, realizado en agosto de 1939. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Diago Torres, Caja 10064. AHPCS.

¹⁰⁰ Un ejemplo son los informes del alcalde de Canet lo Roig, Joaquín Castro, quien tuvo que realizar un segundo informe sobre el inculcado Vicente Querol Marzá porque en el primero había indicado que había muerto en filas rojas, que era izquierdista, que fue concejal y que, naturalmente, y a pesar de haber fallecido, era desafecto al franquismo. El Juez Instructor le obligó a realizar un segundo informe en el que se especificaran los bienes de su esposa. Finalmente ésta acabó siendo condenada al pago de 500 pesetas, de las que acabó pagando un primer plazo de 125 pesetas, debido al sobreseimiento del caso en marzo de 1944. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS.

Aún así estos informes podían ser muy extensos, aunque también muy breves, prácticamente telegráficos¹⁰¹. Podemos poner el ejemplo del informe realizado por el alcalde de Castell de Cabres sobre el inculcado Ramón Giner Querol, quien tras indicar que no tenía hijos menores dice simplemente *su situación económica es superlativamente precaria. Ni él ni su esposa ganan sueldo o jornal*¹⁰². Algunos informes consistían en una plantilla predeterminada que el alcalde sólo tenía que cumplimentar¹⁰³.

En muchos casos era la fuente de información que se convertía en referencia para las otras autoridades locales¹⁰⁴, que incluso llegan a copiar su informe o a calcarlo, aunque también podía ocurrir que el informe de la alcaldía fuera una copia del informe de la Guardia Civil¹⁰⁵ o del Delegado Local de FET y de las JONS¹⁰⁶. Hay incluso

¹⁰¹ Es el caso del informe sobre el inculcado Vicente Torreón Cabot que realiza el alcalde de Altura en marzo de 1941 Miguel Ventura. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Torreón Cabot, Caja 10099. AHPCS.

¹⁰² Hemos de recordar que el expediente incoado contra este inculcado, de 65 años y enfermo, en marzo de 1941 tuvo su origen en una denuncia del mismo alcalde que después realiza el informe indicando su situación de pobreza. Al final fue condenado en septiembre de 1941 al pago de 50 pesetas que tuvo que pagar su hija en noviembre del mismo año. Reproducimos aquí la denuncia por considerarla significativa:

Por si fuera procedente la incoación de expediente de Responsabilidad Política contra Ramón Giner Querol de 65 años de edad, casado, jornalero, vecino de esta localidad, participo a V.I. que este individuo es de ideología izquierdista, desempeñó el cargo de alguacil municipal durante el dominio rojo y posee bienes por valor de mil pesetas.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Castell de Cabres 23-2-1941.

El Alcalde

Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Giner Querol, Caja 10104. AHPCS.

¹⁰³ Es el caso de los informes de la localidad de Azuébar. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Gómez Nuña, Caja 10130. AHPCS. También en La Llosa. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Villarroig Royo, Caja 10127. AHPCS.

¹⁰⁴ Por ejemplo, el informe del Delegado Local de FET y del las JONS del Castillo de Villamalefa eran copias calcadas del informe de la alcaldía. El Delegado Local, Raimundo Gascó, se limitaba a estampar su firma en esta copia calcada. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Granell Chiva, Caja 10064. AHPCS.

La misma circunstancia se repite, por ejemplo, en el informe que el alcalde de Santa Magdalena de Pulpis realizó sobre el inculcado Domingo Marín Bou. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Domingo Marín Bou, Caja 10083. AHPCS.

El informe del Delegado Local de FET y de las JONS de Forcall era una copia, aunque no calcada, del informe del alcalde de la localidad, Antonio Villarroya. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Eixarch Frasnó, Caja 10083. AHPCS.

¹⁰⁵ El informe sobre el vecino Daniel Calvo Bonet del alcalde de Gaibiel, Vicente Pérez, realizado el 20 de junio de 1941, estaba copiado del informe de la Guardia Civil de la localidad, realizado dos días antes. Curiosamente el informe de la Guardia Civil está escrito a máquina y el de la alcaldía a mano, pero son exactamente iguales. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Calvo Bonet, Caja 10129. AHPCS.

informes en los que la alcaldía realiza un informe independiente, pero que presentan los bienes del inculcado y su valoración en un anexo que es una copia de la misma parte del informe de la Guardia Civil¹⁰⁷. En el caso del vecino de Cuevas de Vinromá Jaime Zaragoza Selma, el inculcado en su Hoja de descargo se queja de que el informe realizado por el cura de la localidad es una copia directa del informe de la alcaldía, y que éste es un informe erróneo porque le atribuye acusaciones de las que no se considera responsable.¹⁰⁸

En pequeñas poblaciones se podía dar el caso que el alcalde era, a la vez, el Jefe Local de FET y de las JONS, con lo que sus informes eran idénticos, incluso escritos con el mismo puño y letra¹⁰⁹. Era el caso de Montanejos. Los informes de la alcaldía y FET y de las JONS sobre el inculcado Francisco Peris Peris estaban escritos del mismo puño y letra, con el mismo texto, y firmados como alcalde y Delegado Local de FET y de las JONS por la misma persona, Miguel Brun,¹¹⁰

Las fuentes que utilizaba la alcaldía eran las que obraban en los archivos municipales y la información que podían facilitarles los empleados del mismo Ayuntamiento¹¹¹ o los mismos vecinos de la localidad. Así, Joaquín Monferrer, alcalde

Asimismo, el informe del alcalde de Salsadella, Tomás Montrell, sobre el inculcado Miguel Carceller Albiol, es una copia, esta vez calcada, del informe que había realizado la Guardia Civil del Puesto de San Mateo sobre el inculcado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Carceller Albiol, Caja 10127. AHPCS.

¹⁰⁶ Es el caso de la alcaldía de Ballestar. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Tellado Sabater, Caja 10080. AHPCS.

También ocurre lo mismo en Palanques. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Milián Castell, Caja 10127. AHPCS. O en Sarratella. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

¹⁰⁷ Es el caso de la alcaldía de Alcalá de Xivert. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Almela Griñó, Caja 10080. AHPCS:

¹⁰⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Zaragoza Selma, Caja 10083. AHPCS.

¹⁰⁹ En este sentido hemos de tener en cuenta, como indica J. CASANOVA, que el alcalde era además el jefe local del Movimiento. Sin embargo, en la gran mayoría de los expedientes analizados la persona que firma como alcalde no es la misma que firma como Delegado Local de FET y de las JONS. J. CASANOVA (2001), op. cit., versión de 2007, pág. 291.

¹¹⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Peris Peris, Caja 10095. AHPCS.

¹¹¹ El informe del alcalde de Nules sobre el inculcado Fernando Cubedo Martínez comienza con estas palabras: *Según los informes suministrados por los Agentes de mi autoridad*. Por tanto, existiría un determinado grupo de personas, funcionarios o, incluso, policías, a los que se les ordenaba investigar sobre el inculcado. Esta investigación suponemos que abarcaría desde el examen de documentación

de Benafigos en agosto de 1941, informa de cómo ha obtenido la información: *examinados los padrones de Rústica y Urbana de este término por estar destruido el Avance Catastral del mismo*¹¹². En este sentido, es curiosa la actitud poco participativa detectada en algunos informes del alcalde de Castellón Vicente Traver¹¹³. En el proceso de recogida de información, como hemos comprobado, se incluía también el rumor público¹¹⁴

Las calificaciones de los inculpados podían ser, como en el caso de la Guardia Civil, de una ferocidad intensa y con efectos relevantes para la resolución final del expediente en curso. Algunas de estas calificaciones fueron: *era el terror de la gente de orden*¹¹⁵, *inductor máximo de asesinatos, gran propagandista, sujeto de malos antecedentes e indeseable para la sociedad*¹¹⁶, *extremista revolucionario*¹¹⁷, *individuo*

pública procedente del archivo municipal como la recogida de testimonio de vecinos y/o familiares del inculpado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Cubedo Martínez, Caja 10083. AHPCS.

¹¹² En este caso se trataba esencialmente de información económica. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Melchor Marín Monserrat, Caja 10144. AHPCS.

Un caso similar lo encontramos en el expediente contra Juan Bautista Gómez Gil, en el que el informe del alcalde de Soneja, Abel Soriano, fechado en marzo de 1940, se comienza afirmando: *Han sido examinados detenidamente los distintos repartos de las contribuciones de rústica, urbana e industrial de este término municipal y resulta que...* Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Bautista Gómez Gil, Caja 10078. AHPCS.

Hay informes en los que se especifica todavía más. En el informe del alcalde de Torre Endoménech, Jaime Andrés, sobre el inculpado Manuel Salvador Calduch, se cita: *Examinados los datos del Repartimiento de rústica del año en curso y demás de avance catastral obrantes en la secretaría a mi cargo...*, para posteriormente afirmar *examinados los repartos de urbana y padrón industrial del año en curso, obrantes en el archivo de la misma secretaría...* Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Salvador Calduch, Caja 10164. AHPCS.

¹¹³ En la mayoría de los informes analizados de vecinos de Castellón el alcalde Vicente Traver firma un texto que dice *En este Ayuntamiento no consta ningún dato ni antecedente acerca de los bienes con que cuenta [el inculpado], ni su cónyuge, ignorando si satisfacen contribución al Estado por algún concepto o también No existe en esta Alcaldía ningún dato ni antecedente, por depender de la Delegación de Hacienda de esta provincia, todo lo relativo al amillaramiento de fincas y Contribuciones, en todos sus aspectos.* Expedientes de responsabilidades Políticas contra Enrique Monzonís Ferrán y contra Vicente Porcar Vilar, Caja 10064. AHPCS.

¹¹⁴ Recordamos que el informe del alcalde de Culla, Robustiano Miralles, sobre el inculpado Daniel Segarra Orenga, comienza con la frase *según los antecedentes que constan y de público se sabe.* Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Segarra Orenga, Caja 10081. AHPCS.

¹¹⁵ Es el caso de la alcaldía de Alcora. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Justo Sanz Albalade, Caja 10083. AHPCS.

¹¹⁶ Informe del alcalde de Culla, Robustiano Miralles, contra el inculpado Daniel Segarra Orenga. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Segarra Orenga, Caja 10081. AHPCS.

¹¹⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Lládser Ferreres, Caja 10144. AHPCS.

*peligroso para la Causa*¹¹⁸, *entusiasta del marxismo*¹¹⁹, *propagador del marxismo*¹²⁰ *insultadora de nuestro invicto Caudillo y de cuantos simpatizaban con él*¹²¹, o el original calificativo de *individuo característico de la vieja política*.¹²²

También se podía producir una situación inversa, en la que el alcalde de una localidad se decide a defender a un inculpado. Así, el alcalde de Vistabella, Ramón Fabregat, defendió al inculpado Saturnino Centelles Olaria, denunciado por figurar en un listado de sospechosos confeccionado por el Delegado Local de FET y de las JONS, Joel Fabregat, por “haber presidido la UGT local a pesar de no cometer ningún desmán y ser persona de orden”. En este informe se dice del inculpado que *ha observado una conducta intachable por todos conceptos* y que a pesar de su pasado izquierdista *su actuación fue de persona de orden y moderada*. La cercanía a la población de la alcaldía en relación a la Guardia Civil se evidencia en este expediente porque ésta en su informe se limita a decir que su actitud fue *algo moderada* y que *figura como sospechoso en el registro de este puesto*.¹²³

Recordamos también que las alcaldías jugaron un papel muy importante a la hora de procesar a sus vecinos por responsabilidades políticas y, como hemos visto, participaron activamente en el proceso incluso tomando la iniciativa y denunciando a los sospechosos. Incluso algunos alcaldes trataron de corregir presuntos errores que habían detectado en la tramitación de los expedientes¹²⁴.

¹¹⁸ Informe del alcalde de Almazora, José Grifo. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Galí Fraga, Caja 10080. AHPCS.

¹¹⁹ Informe del alcalde de Alcalá de Xivert, José Bosch. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Arnau Caudet, Caja 10078. AHPCS.

¹²⁰ Informe del alcalde de Benafer. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Moreno Bonet, Caja 10091. AHPCS.

¹²¹ Informe del alcalde de Sarriatella, Antonio Beltrán. Expediente de Responsabilidades Políticas contra María Pastor del Rosario, Caja 10093. AHPCS.

¹²² Informe del alcalde de Villahermosa del Río, Nicolás García. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gonzalo Castillo Mollón, Caja 10075. AHPCS.

¹²³ Finalmente el inculpado fue condenado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas al pago de 50 pesetas, sanción que acabó pagando. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Saturnino Centelles Olaria, Caja 10129. AHPCS.

¹²⁴ En el informe del alcalde de Arañuel, Manuel Solsona, sobre el inculpado José Bernía Brun realizado en junio de 1941 dicho alcalde recuerda al Juez Instructor Provincial que ha habido un error y que el

Es frecuente también el ajuste de cuentas entre antiguos miembros del Ayuntamiento, muchas veces respondiendo a desplazamientos más o menos irregulares de personal municipal de los ámbitos de poder. Por ejemplo, Manuel Ramos, de 70 años, antiguo Secretario del Ayuntamiento de Canet lo Roig, cargo que ejercía desde julio de 1931, fue desplazado del mismo en abril de 1936 por la Gestora Municipal y pasó a ser, según su testimonio, perseguido y acosado, hasta quebrantar su salud y sumirlo en la miseria y el hambre. La hora de su venganza llegó con el nuevo Estado franquista y la Ley de Responsabilidades Políticas, ya que en septiembre de 1939 denunció a la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas a todos los miembros de aquella Comisión Gestora¹²⁵. Conocemos también el caso anteriormente comentado de la denuncia del Delegado Local de FET y de las JONS de la localidad de Caudiel contra el alcalde de la localidad por su pasado de orientación izquierdista¹²⁶. Muchos de los inculcados cuyos expedientes hemos analizado eran miembros del gobierno municipal de sus localidades: alcaldes, secretarios, concejales, jueces municipales, empleados, etc.

Por otra parte, el papel de la alcaldía como instrumento represor no se limitaba a la confección de denuncias y la elaboración de informes sobre los inculcados, sino que realizaba otras acciones propias de su función social y política. Así, por ejemplo, en el expediente contra el inculcado de la Jana Jacinto Lládser Verge, se presentan dos informes de dos vecinos de la localidad, a modo de testigos contra el inculcado, a los que se les adjunta un certificado de la alcaldía sobre su calificación social y política¹²⁷.

inculcado no es de Arañuel, al tiempo que advierte que de las 8 personas que se había emitido denuncia de esa localidad sólo se han pedido informes de 7, faltando 1 persona a la que identifica. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bernía Brun, Caja 10095. AHPCS.

¹²⁵ Concretamente el concejal Vicente Querol Marzá, fallecido durante la guerra en filas del ejército republicano, fue condenado a raíz de esta denuncia al pago de 500 pesetas, de las que el tutor de su hijo menor acabó pagando un primer plazo de 125 pesetas. Esta situación sólo tenía sentido como un verdadero ajuste de cuentas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS.

¹²⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Camilo Sánchez Moreno, Caja 10068. AHPCS.

¹²⁷ El certificado expedido es el siguiente:

Don Francisco Simó Aviñó, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Jana.

CERTIFICO: que según los datos obrantes en esta Alcaldía y de los antecedentes suministrados por los dependientes de mi Autoridad Manuel Erales Pla, natura de La Jana, provincia de Castellón, hijo de Evaristo y de Francisca, vecino de esta población, de 42 años de edad, de estado soltero y de profesión labrador, ha observado constantemente "buena conducta".

Hay que tener en cuenta que estos certificados de buena conducta se convirtieron en necesarios para multitud de actividades y permisos en la vida cotidiana.

FET y de las JONS

La tercera autoridad local que vamos a analizar es la correspondiente el partido único del franquismo, creado por Francisco Franco en abril de 1937 como resultado de la fusión del partido fascista Falange Española y de otras fuerzas políticas como los carlistas y otros tradicionalistas¹²⁸. Este nuevo partido, Falange Española Tradicionalista de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, se convertía, pues, en un instrumento de poder que permitió a las autoridades franquistas vigilar, controlar y encuadrar a la población española. En cada localidad se nombraba a un responsable de este partido único, que se denominaba “Delegado Local” o “Jefe Local”¹²⁹, y que era el elemento fundamental en el cumplimiento de los objetivos anteriormente comentados. En los casos de los inculpados de la ciudad de Castellón los informes solían ser firmado por el “Delegado Provincial” de FET y de las JONS, también llamado “Jefe Local”, mientras que en algunos casos quien firma es el “Delegado Comarcal”.¹³⁰

Los informes de los Delegados Locales de FET y de las JONS mantienen una conexión bastante clara con los informes de la alcaldía correspondiente¹³¹, aunque su

Y a petición de parte interesada expido la presente en La Jana a 22 de junio de 1940.

El Alcalde-Presidente,

Francisco Simó

Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jacinto Lládser Verge, Caja 10083. AHPCS.

¹²⁸ S. PAYNE (1987), op. cit., pp.180-191.

¹²⁹ El Delegado Local de FET y de las JONS de Soneja, en su afán de incrementar su propia importancia, firma su informe sobre Juan Bautista Gómez Gil como *Jefe Local del Movimiento*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Bautista Gómez Gil, Caja 10078. AHPCS.

¹³⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Artola Roca, Caja 10103. AHPCS.

¹³¹ Los ejemplos son numerosos, como en el caso de la localidad de Adzaneta. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Benjamín Barberá Monferrer, Caja 10131. AHPCS.

También abundan las localidades en las que el informe del Delegado Local de FET y de las JONS es una copia calcada del informe de la alcaldía, como, por ejemplo, en el caso de Ahín. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Navarro Navarro, Caja 10130. AHPCS.

En ocasiones los informes son iguales, utilizando las mismas expresiones y la misma estructura, aunque cambiando algunas palabras, con lo que la sensación que produce la lectura de ambos informes es que dicho informe en algún momento se dictó y que dos personas diferentes lo pasaron a escrito. Un ejemplo

tono suele ser mucho más directo, duro, incriminatorio y despectivo que el resto de informes de las otras autoridades locales. En cualquier caso, está claro que gozaba de la ventaja, al igual también que la alcaldía, de la proximidad con los vecinos, especialmente en las localidades más pequeñas. También podía darse una clara conexión con el informe realizado por la Guardia Civil¹³².

En realidad no existe una lógica clara para establecer una conexión u otra entre las autoridades locales, ya que, por ejemplo, el Delegado Local de FET y de las JONS de Alcalá de Xivert, Juan Bautista Sospedra, realizó informes que eran tanto una copia calcada de la alcaldía¹³³ como una copia a mano del informe de la Guardia Civil¹³⁴. En este sentido, se supone que se basaría en el informe que ofreciera más y mejores datos. Lo que es indudable es que en esa población eran la alcaldía y la Guardia Civil las autoridades locales más poderosas.

en el expediente del vecino de Bojar José María Tellado Bel. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José María Tellado Bel, Caja 10131. AHPCS.

El informe sobre el inculcado Vicente Bou Tamborero que firma el alcalde de Fuentes de Ayódar, Juan Lecha, y el que firma el Delegado Local de FET y de las JONS, Ramón Puerto, son iguales y están escritos a mano por la misma persona. Lo único que cambia, pues, es quién estampa su firma. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Bou Tamborero, Caja 10073. AHPCS.

Germán Agut, Delegado Local de FET y de las JONS de Portell de Morella realiza un informe sobre Enrique Royo Boix que consiste en una copia a mano del original informe de la alcaldía, escrito originalmente a máquina. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Royo Boix, Caja 10128. AHPCS.

¹³² Como en el caso del informe sobre el vecino de Cincorres Valentín Carceller Pitarch que realiza el Delegado Local de FET y de las JONS en marzo de 1941. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Valentín Carceller Pitarch, Caja 10103. AHPCS.

El informe que realiza el Delegado Local de FET y de las JONS de Salsadella, Bautista Montrell, sobre Miguel Carceller Albiol en mayo de 1941 es una copia calcada del informe realizado por la Guardia Civil del Puesto de San Mateo. De hecho, en este expediente todos los informes son copias calcadas de este informe original. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Carceller Albiol, Caja 10127. AHPCS.

Sin embargo, podían darse conflictos entre las autoridades locales, especialmente entre los Delegados Locales de FET y de las JONS y la Guardia Civil, sobre todo en referencia a competencias que tenían que ver con el poder local, tal y como se analiza para una población rural parecida a la de la provincia de Castellón en A. CENARRO, *Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945*. Zaragoza, 1997, pp. 57-62. Sin embargo, en la documentación que hemos consultado no hemos encontrados inicios de esta desconfianza o de tensiones similares entre las dos autoridades locales.

¹³³ Se trataba de la gran mayoría de los informes que hemos analizado. También era la tónica general de los informes del cura párroco de la localidad. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Almela Griñó, Caja 10080. AHPCS.

¹³⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Raimundo Antón Piquer, Caja 10078. AHPCS.

Ya hemos visto cómo los Delegados Locales de FET y de las JONS estaban implicados directa y activamente en el proceso de recogida de información sobre la población y en el de represión de la misma. De hecho, en algunos de los expedientes analizados el motivo de la incoación era bien una denuncia directa del Delegado Local contra un vecino de su localidad o la remisión al Gobernador Civil de listados de personas supuestamente con responsabilidades políticas. Es el caso del expediente contra el vecino de Lucena José Bartolín Montins, incoado por la existencia de un informe contra él en la Delegación Local de FET y de las JONS. Su expediente comienza exponiendo el texto de origen:¹³⁵

FET y de las JONS

Jefatura Local de Lucena del Cid

En contestación a la comunicación de V.S. fecha 5 de los corrientes, he de participar.

Que en el archivo de esta Delegación consta copia del INFORME remitido con fecha 4 de julio de 1938 al Sr. Juez Militar de esta plaza que lo interesó por oficio de 30 de junio del mismo año, el cual dice así:

José Bartolín Montins.- Gestor Municipal rojo en la segunda época. Afiliado a la FAI y CNT de la que era uno de los dirigentes más destacados. Se incautó de varias casas de las que se llevaba ropa y demás objetos de valor. Robó, entre otros, unas monedas de oro de D. Tertuliano Puerto. Finalmente tuvo que ausentarse de Lucena ya que sus mismos compañeros le expulsaron del sindicato porque habían desaparecido, siendo él cajero, unas monedas de oro y dinero en metálico. Uno de los culpables del asesinato de D. Saturnino Lizondo. De mala conducta. Se dice formó parte de una checa de Barcelona”.

En cuanto a bienes, lo que le puedan corresponder de la herencia de su padre fallecido, que según noticias no se ha practicado la partición todavía y son de escaso valor.

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.

Lucena a 7 de Febrero de 1941.

El Delegado Local

Al Sr. Juez Instructor de Responsabilidades Políticas de esta Provincia.

Todo ello no evitaba que, como hemos comprobado, se recurriera al rumor a la hora de realizar las acusaciones. El Delegado Local de FET y de las JONS de Nules realizó en julio de 1940 un informe sobre el vecino Fernando Cubedo Martínez en el que se aporta como acusación formal que *Según rumor público formaba parte del Comité que exigía metálico a las personas derechistas*¹³⁶. El alcalde y Delegado Local

¹³⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bartolín Montins, Caja 10129. AHPCS.

¹³⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Cubedo Martínez, Caja 10083. AHPCS.

de San Rafael del Río Vicente Balada reconocía que los datos que aportaba sobre el inculpado José Obiol Calduch se sabían *por ser pequeño el pueblo*.¹³⁷

En ocasiones es el informe de FET y de las JONS el que marca la tendencia en los informes de las autoridades locales¹³⁸ y el que ofrece una mayor riqueza de detalles sobre el inculpado, su situación general, sus bienes y los de su familia¹³⁹. Prueba de ello, por ejemplo, es el informe que sobre el inculpado de Bechí realiza el Delegado Local de la localidad, Antonio Rius, quien comenta en un informe con forma de cuestionario: *Amistades: con gente de sus ideas*¹⁴⁰. El informe que en enero de 1940 realiza el Delegado Local de FET y de las JONS de Villahermosa del Río sobre Gonzalo Castillo Mollón asegura que ir chuleando por la calle diciendo que si pudiera votar lo haría por los marxistas, por lo que, asegura, no se muestra arrepentido.¹⁴¹

Existen casos en los que el Delegado Local de FET y de las JONS es, al mismo tiempo, el alcalde de la localidad. Así, por ejemplo, Vicente Balada era el alcalde de San Rafael del Río y, a la vez, Delegado Local de FET y de las JONS.¹⁴²

Como ocurre en los informes del resto de autoridades locales existen diferencias importantes en la manera en cómo están redactados los informes de los Delegados Locales de FET y de las JONS. Hay informes que son muy breves y concisos¹⁴³,

¹³⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Obiol Calduch, Caja 10094. AHPCS.

¹³⁸ Parece ser el caso de la localidad de La Jana, al menos en el expediente contra Jacinto Lladser Verge. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jacinto Lladser Verge, Caja 10083. AHPCS.

¹³⁹ En el expediente contra el vecino de Burriana Joaquín Romero Gómez el informe de la alcaldía y el del cura párroco aseguran que el inculpado no poseen bienes. Sin embargo, el Delegado Local de FET y de las JONS, R. García Tejedo, aclara que él no tiene bienes, pero sus padres poseen una finca en una partida determinada con un valor de 2.000 pesetas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Romero Gómez, Caja 10064. AHPCS.

¹⁴⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Amorós Meneu, Caja 10093. AHPCS.

¹⁴¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gonzalo Castillo Mollón, Caja 10075. AHPCS.

¹⁴² Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Obiol Calduch, Caja 10094. AHPCS.

¹⁴³ El informe que realiza en mayo de 1940 el Delegado Local de FET y de las JONS de Cuevas de Vinromá, Laureano Alsina, sobre Jaime Zaragoza Selma es prácticamente telegráfico. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Zaragoza Selma, Caja 10083. AHPCS. El informe que realiza Bautista Aparici, Delegado Local de FET y de las JONS de Chodos, sobre David Aparicio Gonell en septiembre de 1939 se limita a decir que el inculpado no posee bienes de ninguna clase. Expediente de Responsabilidades Políticas contra David Aparicio Gonell, Caja 10065. AHPCS.

mientras que otros podían ser muy extensos y detallados. Un buen ejemplo es el informe que el Delegado Local de FET y de las JONS de Almazora realizó sobre el inculpado Manuel Galí Fraga:¹⁴⁴

Antes del 18 de julio de 1936 era de ideas socialistas, afiliado a CNT-FAI y gran propagandista del marxismo.

Durante el Movimiento actuó como Jefe de milicianos, intervino en registros domiciliarios, entre ellos en casa del sacerdote D. Pascual Usó Mundina, lo mismo que en casa del Recaudador del Ayuntamiento D. Facundo Beltrán Beltrán y otros, profanación e incendio de las Iglesias parroquial y del Convento de Monjas Clarisas de esta población.

Además de haber formado parte del Comité Antifascista, perteneció también al de Defensa, que son los que acordaban las personas que habían de ser asesinadas de derechas. A principios del Movimiento se le vio por las calles como cacheaba a las personas de derechas, amenazándoles con darles el paseo si no presentaban todas las armas; también formó parte del Consejo de Economía, Departamento de Construcción, al cual se le denominaba en este Organismo MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. Era Jefe Director de la incautación de las casas y demás fincas en todas las asambleas que se celebraron en esta villa, y en ellas como principal dirigente de la CNT incitaba a los reunidos a toda clase de atropellos y asesinatos, pues en la que se celebró en la casa del Ayuntamiento de esta villa, José Safont Manrique (a) Pedregalo, les dejó a los que se reunieran cuando éstos protestaban por la emisión de vales de este Ayuntamiento, que la SOLUCIÓN MAÑANA haciéndoles acciones de amenazas y aquella misma noche aparecieron asesinados José Pons Llácer, Bautista Cantavella Claramonte, y pudieron salvar su vida los vecinos Francisco Comis, Lorenzo Sivera Vilar y Vicente Almela Esteve, los que salieron saltando las tapias de los corrales de sus casas; el Galí Fraga junto con el Safont en el balcón del citado Ayuntamiento poniéndose su mano en el cuello manifestaba a las masas que el que no estaría conforme le cortarían el cuello, y pasó aquella noche lo que ya se cita.

Al acercarse las Fuerzas Nacionales, días antes de ser liberada esta población le robó al vecino de ésta José Grifo Soler (hoy Alcalde), su carro, la caballería y guarniciones y con todo esto evacuaron.

También manifestaba en las asambleas que el fascismo era un monstruo y mala bestia que había que terminar con él, lo mismo que con el Generalísimo Franco, Queipo de Llano y todo su ejército. Antes de cometerse los asesinatos se le oyó decir “Fulano ya comerá poco pan” “Sotano le quedan pocos días”, en fin anunciaba ya las personas que habían de asesinarse, demostrando con esto claramente que efectivamente era uno de los que acordaban las personas que habían de asesinarse. Su única idea era terminar con todos los elementos de derechas afectas a nuestro Glorioso Movimiento Nacional.

¹⁴⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Galí Fraga, Caja 10080. AHPCS.

Parece que la extensión del informe dependía más de la persona sobre la que se realizaba que de la que lo confeccionaba, porque el mismo autor de este informe redactó otro sobre el vecino de Almazora Federico Martínez Vives que se limitaba a estas palabras: *No se le conocen bienes inmuebles en esta población.* Expediente de Responsabilidades Políticas contra Federico Martínez Vives, Caja 10064. AHPCS.

El día que detuvieron a D. Facundo Beltrán, depositario del Ayuntamiento de esta villa, y en la misma Casa del Ayuntamiento, se le oyó decir como ordenaba a los milicianos que le subieran al coche, que lo asesinaran, como sucedió, conducido que fue al cementerio de Burriana donde fue asesinado.

Cuando estaba detenido el vecino Manuel García Cuecos al interesarse los familiares de este por su libertad, les contestó el Galí Fraga que había que asesinarlo porque era un destacado fascista y así sucedió a mediados de agosto del año 1936 en la carretera de Benicasim. Formó parte del grupo de milicianos el día que sacaron del Barco anclado en el puerto de Castellón todos los que allí había detenidos y asesinaron en la carretera de Almazora a dicho Puerto, pues se vio cómo subió a uno de los coches que formaba la expedición y bien armado de fusil.

El día que un grupo de milicianos fue a Onda y detuvieron a 27 personas que asesinaron en la carretera de Bechí, el Manuel Galí Fraga se le vio cómo arengaba a los milicianos cuando subían en los camiones en esta villa, diciéndoles “A ONDA Y NO DEJÉIS UNO HASTA LAS MADRES” no hay que dejar un fascista.

Como principal dirigente y a la vez albañil es el que con otros escondía parte del ORO que robaron a las personas de derechas de esta población, y antes de evacuar escondieron armamento, pues no hace más que unos días se ha encontrado en la casa que estaba el Centro de la CNT un buen arsenal y muchísimas joyas. Tratase del principal revolucionario e incitador a toda clase de desmanes y asesinatos, considerándolo responsable de casi todos los hechos delictivos ocurridos en esta villa y peligrosísimo para nuestra Santa Causa.

Bienes que se le conocen son:

Una casa en la calle san Felipe valorada en unas 3.000 ptas.; y dos anegadas con una alquería en partida Alters de les Raboses, desembocadura del Río Mijares, valoradas en unas 500 ptas.

Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista.

Almazora a 11 de abril de 1940.

El Jefe local

También había Delegados Locales que utilizaban la técnica de las plantillas con datos fijos que únicamente hay que rellenar. El informe más completo basado en una plantilla es el diseñado en la Delegación Local de FET y de las JONS de San Rafael del Río:¹⁴⁵

¹⁴⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Obiol Calduch, Caja 10094. AHPCS.

INFORME

Nombre y apellidos:

Apodo:

Edad:

Estado:

Profesión:

Nombre del cónyuge:

Nacido en:

Provincia de:

Vecino de:

Provincia de:

Domiciliado en la calle:

Hijo de:

Filiación o ideología política antes del Movimiento:

Cargos que desempeñó:

- *Políticos:*
- *Sindicales:*
- *Provinciales o municipales:*

Actuación antes del Movimiento:

Candidatura que votó el 16 de febrero de 1936:

Dónde se encuadró al estallar el Movimiento:

Cargos que desempeñó:

- *Políticos:*
- *Sindicales:*
- *Provinciales o municipales:*

Actuación durante el Movimiento:

Conceptuación policial:

Conceptuación religiosa:

Conceptuación de su vida pública:

Está afiliado?

Amistades:

Posición económica:

Nombres y domicilios de quienes han facilitado los datos:

Informes facilitados por:

Señas personales:

DELEGACIÓN LOCAL DE

Día mes de 19

(sello de la Delegación)

En general, los Delegados Locales de FET y de las JONS tendían a centrarse en los aspectos políticos e ideológicos de los inculcados. Sin embargo, también destacaban datos relativos a la localización del inculcado, su oficio, la situación de su familia, así

como la correspondiente relación de bienes con su valoración económica. Esta última parte en muchos informes aparecía en forma de anexo específico al final de cada informe¹⁴⁶. Menos frecuente era el informe del Delegado Local que única y exclusivamente abordaba los aspectos económicos del inculcado.¹⁴⁷

En ocasiones los Delegados Locales de FET y de las JONS se permitían descripciones morales que rayaban en el informe psicológico sobre el inculcado, con un tono insultante y degradante, como el emitido por el de Villarreal E. Moreno sobre el maestro nacional inculcado José Benlloch Portolés:¹⁴⁸

Como cosa digna de observación hay que hacer resaltar su poca constancia de carácter, su fácil conocimiento y conductibilidad. Su moralidad y conducta personal fueron siempre buenas, en la actualidad por sus manifestaciones y forma de obrar puede considerársele un arrepentido.

También existía la posibilidad que el Juez Instructor Provincial ordenara la realización de un segundo informe al Delegado Local de FET y de las JONS, especialmente si en su primer informe se había centrado excesivamente en los aspectos sociales, políticos e ideológicos del inculcado, descuidando los económicos¹⁴⁹. Esta circunstancia podía llegar a irritar a algún Delegado Local, como el de Almazora en mayo de 1943, quien en su segundo informe, y tras declarar que no tenía datos sobre sus

¹⁴⁶ Es el caso del Delegado Local de FET y de las JONS de Ballestar, Francisco Bel. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Tellado Sabater, Caja 10080. AHPCS. En el caso del informe que realiza el Delegado Local de FET y de las JONS de Chilches sobre Vicente Torres Lapuerta en enero de 1940, todo el texto es independiente respecto a los informes de las otras autoridades locales, pero incluye al final un anexo económico que es una copia de los mismos datos que ofrece la alcaldía. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Torres Lapuerta, Caja 10075. AHPCS.

¹⁴⁷ Por ejemplo, en el caso del Delegado Local de FET y de las JONS de Azuébar, Francisco Piquer. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Gómez Nuña, Caja 10130. AHPCS.

¹⁴⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benlloch Portolés, Caja 10093. AHPCS.

¹⁴⁹ Esta circunstancia se dio en el expediente contra el vecino de Gaibiel Daniel Calvo Bonet, con la peculiaridad que entre el primer y el segundo informe transcurre 1 mes y los están firmados por distintas personas, pese a figurar en los dos el firmante como Delegado Local de FET y de las JONS. Poco después se realizó un tercer informe firmado por el autor del primero. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Calvo Bonet, Caja 10129. AHPCS.

bienes, declara que *la misión de la misma [Jefatura Local de FET y de las JONS] únicamente se refiere al orden y actuación político-social-moral y religioso.*¹⁵⁰

Si era necesario para la investigación del procesamiento por responsabilidades políticas, se ordenaba a los Delegados Locales de distintas poblaciones sus correspondientes informes. En el informe sobre el vecino de Vallat Antonio Sanz Nebot realizaron informes los Delegados Locales de FET y de las JONS de Toga, Ludiente, Espadilla y Vallat¹⁵¹.

Las fuentes que utilizaban para la realización de sus informes podían abarcar desde información obtenida de los vecinos de la localidad¹⁵², al examen de la documentación municipal o a la confección previa de fichas de personal presuntamente responsable políticamente¹⁵³. Lo que está claro es que se producía un proceso de investigación sobre la persona del inculcado y, por extensión, de su familia.¹⁵⁴

Sin embargo, no siempre se producía un proceso de investigación en el que todas las puertas se abrían ante el partido único. La debilidad de éste se manifestaba en casos concretos como en el del poeta Bernat Artola. En su informe redactado por el Delegado Provincial de FET y de las JONS, A. Asensi, se asegura que no se ha podido determinar el dinero que el inculcado tiene en los bancos porque *los Agentes de este Servicio no tienen autorización para poder indagar en los mismos*¹⁵⁵. Además, los casos en los que se cita como fuente la colaboración de los vecinos no son tan abundantes como en el

¹⁵⁰ El primer informe sobre el inculcado en cuestión se realizó en abril de 1941, es decir, dos años antes, con lo que no sería extraño que el Delegado Local firmante hubiera cambiado. Esta es la única muestra de cierta no colaboración que hemos detectado en esta autoridad local en toda la provincia de Castellón. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Vicente Corell, Caja 10097. AHPCS.

¹⁵¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Sanz Nebot, Caja 10083. AHPCS.

¹⁵² En el informe que realiza el Delegado Local de FET y de las JONS de Almazora sobre el inculcado Vicente Clausell Ferrer, éste se basa en informaciones que le han suministrados dos vecinos de la citada localidad, citando sus nombres. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Clausell Ferrer, Caja 10079. AHPCS. Esta circunstancia se repite en varios de los expedientes analizados de Almazora.

¹⁵³ Son los casos de los Delegados Locales de FET y de las JONS de Bechí,

¹⁵⁴ El informe del Delegado Local de FET y de las JONS de Onda sobre Francisco Muñoz Prades comienza de la siguiente forma: *Hechas las oportunas averiguaciones se ha averiguado que...* Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Muñoz Prades, Caja 10064. AHPCS.

¹⁵⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069. AHPCS.

caso de las autoridades locales de la alcaldía o el cura párroco, lo que nos habla de la frialdad con la que la gente pudo acoger al partido único, independientemente de las manifestaciones públicas de adhesión, prácticamente obligadas para dar constancia de la adhesión al régimen¹⁵⁶. Por tanto, sí existieron límites en cuanto a la investigación, al menos en lo referido a FET y de las JONS en la ciudad de Castellón.

Como hemos dicho, el tono de estos informes es duro e incriminatorio, con lo que se pueden destacar multitud de calificativos despreciativos dirigidos contra los inculpados y sus familiares, como *completamente desafecto a la Causa Nacional*¹⁵⁷, *insultador y provocador, persona muy dudosa*¹⁵⁸ o *está mal conceptuado en su vida pública y en materia religiosa*¹⁵⁹

Mención especial requiere Ismael Villalonga Ortiz, Jefe Local de FET y de las JONS de Sarratella, quien durante los días 28, 29, 30 y 31, según las fuentes que hemos analizado, se encarga de denunciar, que nosotros sepamos, a 17 personas, 15 mujeres y 1 hombre de su localidad, más otra persona de la localidad vecina de Villanueva de Alcolea¹⁶⁰. Posteriormente sus informes eran una copia, no calcada, del informe realizado por la alcaldía¹⁶¹. Destacamos un ejemplo de estas denuncias:¹⁶²

¹⁵⁶ En este sentido, y para el caso de Aragón, se puede consultar A. CENARRO, (1997), op. cit., pp. 87-91.

¹⁵⁷ Informe del Delegado Local de FET y de las JONS de Canet lo Roig, José Pruñonosa, sobre el vecino Vicente Querol Marzá, realizado en noviembre de 1939. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS.

¹⁵⁸ Informe del Delegado Local de FET y de las JONS de Oropesa del Mar sobre el vecino José Herrero Lleonart, realizado en enero de 1942. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Herrero Lleonart, Caja 10094. AHPCS.

¹⁵⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Vidal Paul, Caja 10130. AHPCS.

¹⁶⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José María García Ortiz, Caja 10091. AHPCS. También denunció al vecino de Sarratella Manuel Pastor Pastor. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Pastor Pastor, Caja 10093. AHPCS.

Presumimos que el resto de inculpados de Sarratella y un número indeterminado de vecinos de otras localidades vieron cómo se les abría un expediente de responsabilidades políticas por culpa de las denuncias de esta persona. Además, estas denuncias se realizaron en un periodo de tiempo muy corto, concretamente, según los datos consultados, entre el 28 y el 31 de diciembre de 1940.

¹⁶¹ En varios de los informes sobre vecinos de Alcalá de Xivert el informe de la alcaldía y el de FET y de las JONS están escritos por la misma persona. Por ejemplo, Expediente de Responsabilidades Políticas contra Amparo Pastor Albert, Caja 10093. AHPCS.

¹⁶² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

Ismael Villalonga Ortiz, Jefe local de FET y de las JONS de Sarratella, emite ante V.E. el siguiente informe-denuncia de la vecina de ésta Carmen Martínez Sales, de 48 años, casada, natural de ésta, de profesión labores, que habita en la calle de Vila.

Antes de GMN se destacó por su afección al Frente Popular, destacándose en sus conversaciones, yendo en cabeza en las manifestaciones dando gritos de mueran las derechas. Hacía siempre burla y le gritaba en todos momentos que lo encontraba al sacerdote asesinado D. Víctor Julián. Votó en las elecciones tanteo en las del 36 como en las anteriores al Frente Popular del que se destacaba por propagandista. Asistió a la destrucción de los Altares. Siendo anti-católica, demostrando en todo momento odio a nuestra Santa Religión Católica. Cuando comentaban entre ellos la muerte de algún buen derechista se regocijaba y decía que muy bien, que aún era poco. En ocasión de ser asesinado el buen derechista José Pastor Miralles decía a gritos que bien muerto. Tiene un hijo cumpliendo condena.

Posee bienes entre ella y su marido por valor aproximado de siete mil pesetas (7.000 ptas.).

Sarratella 30 de diciembre de 1940.

Firmado por el Jefe Local de FET de las JONS Ismael Villalonga.

Al Sr. Juez Instructor Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia.

En algunos expedientes no tenemos constancia de la presentación del correspondiente informe del Delegado Local de FET y de las JONS.¹⁶³

El cura párroco

El papel de la Iglesia en la represión franquista durante los primeros años del régimen fue muy importante¹⁶⁴. Consagrada la conquista del poder como una auténtica cruzada, los representantes de la Iglesia asumieron el doble papel de agentes morales representantes de Dios y agentes guardianes de un determinado orden social, económico y político. La Ley de Responsabilidades Políticas convirtió a los sacerdotes de cada localidad en auténticos investigadores del pasado de sus vecinos, con la potestad y la obligación de realizar informes de los sospechosos de tener un pasado republicano. De hecho, junto con la alcaldía, incluso en mayor grado que ella, eran la autoridad local que

¹⁶³ No hemos encontrado informe del Delegado Local de FET y de las JONS en las localidades de Albocácer, Artana y Geldo.

¹⁶⁴ C. MIR (2000), op. cit., pp. 189-240. J. CASANOVA (2001), op. cit. A. CENARRO (1996), op. cit., pp. 149-154. C. GIL ANDRÉS, op. cit., pp. 274-287.

tenía un acceso más directo a la vida cotidiana de los vecinos y a sus múltiples detalles, como lo demuestra el acto mismo de la confesión.

De esta forma, la Iglesia se convirtió, con un mayor entusiasmo como comprobaremos, en agente de la injusta justicia franquista, con un papel de control social sin parangón en el resto de regímenes europeos¹⁶⁵, renunciando a un hipotético papel de reconciliación y perdón¹⁶⁶. En palabras de Santos Juliá “La Iglesia no colaboró con el Nuevo Estado: la Iglesia fue parte del Nuevo Estado”¹⁶⁷, componente esencial de la vuelta al considerado orden tradicional basado en los conceptos de Dios, Patria y Rey. Como ha escrito J. Casanova, “La Iglesia y el Estado: dos caras de una misma moneda”¹⁶⁸. Por otra parte, en la mayoría de los casos, la identificación de los curas párrocos con el nuevo Estado era total, lo que se demostraba en el tono de los informes, en el lenguaje utilizado y otros detalles como el uso de papeles con membretes con la efigie de Franco impresa. Por ejemplo, un informe del cura párroco de Chodos Antonio Ayza comenzaba con las palabras *¡Saludo a Franco! ¡Arriba España!* de su mismo puño y letra.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Pese a la actitud de connivencia o pasividad de la Iglesia en los regímenes nazi o de la Francia de Vichy. C. MIR (2000), op. cit., pág. 191. J. Casanova, tras realizar un análisis comparativo de las distintas guerras civiles europeas en el periodo de entreguerras, ha explicado cómo la dictadura franquista fue el único régimen dictatorial del siglo XX que surgió de una guerra civil y posteriormente no dejó tregua a los vencidos hasta su propio final, creando una situación calificada como “larga paz incivil”. En esta situación influyó la actitud de Francia y Gran Bretaña tras la derrota de los fascismos, que no estuvieron realmente interesadas en la imposición de una verdadera democracia en España, con lo que ofrecieron la oportunidad a las autoridades franquistas para consolidar su violento proyecto contrarrevolucionario. J. CASANOVA (comp.), *Guerras civiles en el siglo XX*. Madrid, 2001, pp. 1-28; y *La Iglesia de Franco* (2005), op. cit., pp. 278-281.

¹⁶⁶ Hay que tener en cuenta, como indica J. Casanova, que por otra parte la Iglesia española había sufrido un proceso de persecución muy violento, lo que, como veremos, exasperó los ánimos inquisitoriales y vengativos de muchos curas párrocos. J. CASANOVA (2001), op. cit., versión de 2005, pág. 292.

¹⁶⁷ S. JULIÁ, “Un fascismo bajo palio, en uniforme militar”, *El País*, Babelia, 18 de julio de 1998, pp. 12-13.

¹⁶⁸ J. CASANOVA, (2001) op. cit., pág. 275 (cita de la versión revisada y con notas de 2005).

¹⁶⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra David Aparicio Gonell, Caja 10065. AHPCS. Otro caso lo encontramos en el cura párroco de Vilar de Canes, Pascual Vives. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Beltrán Lazaga, Caja 10065. AHPCS.

Sin embargo, no todos los curas párrocos de las distintas localidades asumieron positivamente este nuevo papel asignado por el franquismo a la Iglesia¹⁷⁰. Sus actitudes fueron muy variadas, entre la abierta y entusiástica colaboración a la negativa a realizar un papel claramente fiscalizante de la población, pasando por el estricto cumplimiento de una obligación impuesta a la pasividad o la protesta abierta. Los factores que explican esta diversidad de actitudes se centrarían en la ideología del sacerdote, en su situación familiar tras la guerra y en la mayor o menor intensidad de la represión sufrida durante la misma.

En este punto, es necesario realizar un repaso sobre las distintas actitudes de los curas párrocos de las localidades de la provincia de Castellón a la hora de realizar los preceptivos informes sobre los inculpadados en los procesos de responsabilidades políticas durante los primeros años del franquismo.

En la mayoría de los casos los curas párrocos colaboraron abiertamente con la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas a la hora de ofrecer datos sobre sus vecinos procesados. Fruto muchas veces de una mala experiencia durante la guerra civil, estaban convencidos de su papel en el proceso de depuración social que representaba esta jurisdicción. Vicente Castellano, cura párroco de Ballestar, en abril de 1940 utilizó los siguientes términos en uno de sus informes:¹⁷¹ *fue uno de los principales dirigentes de cuantos abusos y atropellos, robos e incautaciones se cometieron en este pueblo y los colindantes*. El tono podía ser muy duro y contundente, como el utilizado por el cura párroco de Vall d'Alba, Manuel Fabregat, que decía:¹⁷² *el citado individuo es de malos antecedentes políticos, sociales, religiosos y morales. [...] Contrario a la Religión y a la Patria*.

A pesar de todo, hubo curas párrocos que mostraron cierto desinterés respecto a su función inquisitorial, con actitudes que van desde la indiferencia a la apatía e, incluso, a una abierta no colaboración en el proceso de exigencia de responsabilidades

¹⁷⁰ Hemos de recordar que la Iglesia ya jugó un papel muy importante como colaboradora en la represión franquista en las zonas que durante la guerra civil permanecieron en la zona franquista. J. CASANOVA, (2001) op. cit.; C. GIL, op. cit.

¹⁷¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Tellado Sabater, Caja 10080. AHPCS.

¹⁷² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Ferrando Ribes, Caja 10083. AHPCS.

políticas. En este sentido, algunos sacerdotes se escudaron en su escaso conocimiento de la población y de sus vecinos por tratarse de recién llegados, para no realizar un informe extenso con suficientes detalles acerca de los inculpados¹⁷³. Por ejemplo, el cura párroco de Alfondegulla, Andrés Calderón, en su informe sobre Pascual Juan Centelles de enero de 1941 afirma:¹⁷⁴ *Téngase presente que por no residir en la parroquia, estos datos no pueden ser completamente exactos, pues se retrasaría mucho este informe*. En su informe sobre Ramón Roure Ferreres, el cura párroco de Cálíg afirmaba que *Recién venido a esta Parroquia de mi cargo, debo manifestarle en contestación a su oficio que los jóvenes de referencia me son absolutamente desconocidos excepto el Prats*¹⁷⁵. Igualmente el cura párroco de Gaibiel, Manuel Mañes, manifestaba en un informe de agosto de 1941 *Debo manifestar que mi actuación como cura de Gaibiel es desde noviembre de 1939, y por consiguiente nada sé acerca de los antecedentes políticos y sociales, tanto anteriores como posteriores al 18 de julio de 1936*¹⁷⁶. En relación a un inculpado de Chiva de Morella el cura párroco de Morella encargado de realizar el informe declaró, en este sentido, que desconocía al inculpado porque sólo acudía a dicha localidad *cuando reclaman mi presencia*¹⁷⁷.

Un tono más severo y directo que denotaba claramente malestar por la obligatoriedad de realizar estos informes lo demuestran expresiones utilizadas por estos sacerdotes como *Con el único fin de cumplimentar a su oficio n° 4144 tengo el honor de poner en su conocimiento...*¹⁷⁸. En el caso de San Rafael del Río en abril de 1941 se pidió al cura párroco, Antonio Caballer Pla, que realizara un informe conjunto de varios inculpados. Seguramente irritado contestó *no les conozco y ninguna referencia de ellos*

¹⁷³ Esta circunstancia es puesta de relieve en su análisis de los expedientes de Responsabilidades Políticas de la provincia de Lleida por C. MIR., quien destaca la importancia de no olvidar que tras la guerra civil muchos sacerdotes nuevos ocuparon las plazas de los que habían desaparecido como consecuencia del conflicto bélico. C. MIR (2000), op. cit., pp. 195-196.

¹⁷⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Juan Centelles, Caja 10099. AHPCS.

¹⁷⁵ En este caso el sacerdote liquidaba varios informes en uno solo. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roure Ferreres, Caja 10104. AHPCS.

¹⁷⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Calvo Bonet, Caja 10129. AHPCS.

¹⁷⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Adell Pascual, Caja 10082. AHPCS.

¹⁷⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Loras Loras, Caja 10074. AHPCS.

*he tenido durante el tiempo que regento esta Parroquia*¹⁷⁹. En febrero de 1940 el cura párroco de Sueras parecía en un informe no tener una predisposición positiva, ya que confusamente se limita a comentar que *Nada puedo concretar sobre los bienes, porque si bien sus padres lo mismo que los de su mujer están bastante bien, ignoro si de casamiento le han dado algo*¹⁸⁰. Más directo fue el cura párroco de Traiguera, Francisco Pastor, que en un informe de agosto de 1940 se limitó a decir: *Conducta religiosa mala, para demás informes aténganse con las demás autoridades*¹⁸¹ o el cura párroco de Almazora que en 1943 se atrevió a contestar al Juez Instructor Provincial en los siguientes términos:¹⁸²

En contestación a su comunicado del 24 de mayo del presente año referente a los bienes que posee Enrique Vicent Corell y su esposa María Abella Bernat, debo manifestar que no es de mi incumbencia informar sobre estas materias y me remito a la información que sobre este asunto dé el Ayuntamiento de esta villa donde deben constar los datos por V. pedidos.

En este sentido, algunos sacerdotes hallaron una manera de no implicarse excesivamente en este proceso de investigación que se apartaba de su teórica función pastoral limitándose a firmar informes que eran una copia¹⁸³ o una copia calcada¹⁸⁴ de los informes de las otras autoridades locales, especialmente de la alcaldía, aunque

¹⁷⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Obiol Calduch, Caja 10094. AHPCS.

¹⁸⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Peris Serrano, Caja 10078. AHPCS.

¹⁸¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Lládser Ferreres, Caja 10144. AHPCS.

¹⁸² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Vicente Corell, Caja 10097. AHPCS.

¹⁸³ Es el caso de los informes realizados por los curas párrocos de las localidades de Ares del Maestre, Ayódar, Borriol, Castillo de Villamalefa, Cervera del Maestre, Cuevas de Vinromá, Moncófar, Olocau del Rey, Puebla Tornesa, Tírig, Todolella, Villahermosa del Río. Posiblemente en algunas localidades era la misma alcaldía la que facilitaba los informes a los curas párrocos para agilizar y simplificar el proceso. El cura párroco de Tírig, Manuel Moliner, dice en uno de sus informes *según informes recibidos de la alcaldía*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Beltrán Calduch, Caja 10107. AHPCS.

El cura párroco de Todolella, José Carceller, firmó un informe en el que el texto era una copia a mano del informe de la alcaldía, pero el informe tenía un anexo relativo a los bienes del inculpado y su valoración económica que era una copia calcada del mismo anexo del informe de la alcaldía. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Ejarque Eixarch, Caja 10129. AHPCS.

¹⁸⁴ Es el caso de los informes realizados por los curas párrocos de las localidades de Culla, Alcalá de Xivert o la Vall d'Uixó. Pedro Navarro, cura párroco de esta última localidad, firmó un informe calcado directamente de la alcaldía en el que simplemente tachó parcialmente las palabras "El alcalde" y las sustituyó por "El cura párroco", para después firmar el documento. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Rosa Giner Martínez, Caja 10144. AHPCS.

también de la Guardia Civil¹⁸⁵. En este sentido los informes que hemos analizado en ningún caso son copia de los informes del Delegado Local de FET y de las JONS. Algunos curas párrocos, como el de Alcalá de Xivert, José Luis Adell García, indistintamente firmaba informes que eran copia de la alcaldía como de la Guardia Civil.¹⁸⁶

Otra forma de delegar responsabilidades a la hora de realizar los informes era alegar desconocimiento y que la información que se ofrecía era fruto de la declaración de los vecinos. Así, el cura párroco de Higuera, José María Navarro, en un informe de marzo de 1941 comenta esta circunstancia: *Estos son cuantos datos he podido obtener de personas fidedignas ya que yo desconozco a la citada Nieves, por estar únicamente encargado de esta Iglesia parroquial (Iglesia desde abril del año pasado)*¹⁸⁷. También se podía alegar desconocimiento, como lo hace el cura párroco de Burriana, Elías Milián, en un informe de marzo de 1941 en el que afirma: *tendrá algunos bienes pero no puedo detallar.*¹⁸⁸

¹⁸⁵ El informe sobre el inculcado Vicente Amorós Meneu que realizó el cura párroco de Bechí, José Gargallo, era una copia bastante fiel del informe realizado dos días antes por el Brigada Juan Martínez en el Puesto de la Guardia Civil de Villarreal. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Amorós Meneu, Caja 10093. AHPCS.

Vicente Cubertorer, cura párroco de Figueras ante la ausencia de bienes de un inculcado especifica los bienes de sus padres, considerándolos heredables. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Gregori Bartoll, Caja 10071. AHPCS.

Otro tanto ocurre con un informe del cura párroco de Higuera. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Gumersindo Alegre Monterde, Caja 10094. AHPCS.

Vicente Paulo Sales, cura párroco de Salsadella en mayo de 1941, firmó un informe que era una copia calcada del informe que había realizado la Guardia Civil. En este caso también firmaron la copia calcada la alcaldía y el Delegado Local de FET y de las JONS. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Carceller Albiol, Caja 10127. AHPCS.

En el mismo caso están las autoridades de Villafranca. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fidel Marín Colom, Caja 10103. AHPCS.

¹⁸⁶ Consultar, por ejemplo, Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Almela Griñó, Caja 10080 y Expediente de Responsabilidades Políticas contra Raimundo Antón Pérez, Caja 10078. AHPCS. En la mayoría de los casos estas copias eran calcadas, sobre todo de la alcaldía, como en Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Arnau Caudet, Caja 10078. AHPCS. En muchos de los casos el informe de la alcaldía estaba basado en el informe de la Guardia Civil.

¹⁸⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Nieves Castillo Capilla, Caja 10102. AHPCS.

¹⁸⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Roca Alcayde, Caja 10094. AHPCS.

La información que ofrecían los curas párrocos se centraban, como hemos visto en el resto de autoridades locales, en datos personales del inculpado, de su familia¹⁸⁹, su pasado político e ideológico, los presuntos delitos cometidos durante la guerra civil y, cómo no, los bienes del inculpado y su valoración económica. A todos ellos se unían normalmente, aunque menos veces de lo esperado, valoraciones sobre su moral y el grado de cumplimiento de sus obligaciones religiosas. Como en el resto de informes, la información más valiosa para el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas era la económica, por lo que no debe extrañar la existencia de informes de curas párrocos que únicamente ofrecen este tipo de información. Es el caso de los informes realizados, por ejemplo, por los curas párrocos de Almedíjar. En el caso de los informes del cura párroco de Almazora, éstos se basaban en una calificación social y moral breve y después los datos económicos. Así, el informe que firmó Leandro Colom en abril de 1939 decía literalmente: *Izquierdista y malo. Tiene una casa que vale 3.000 pesetas y tierras por valor de 400 pesetas*. El mismo cura párroco firma otro informe en marzo de 1939 con las siguientes palabras: *En bienes tiene 2.500 pesetas. Izquierdista de acción y que produjo muchos daños*.¹⁹⁰

Hay que tener en cuenta que la información ofrecida venía determinada, en un marco presidido por la rapidez de los plazos exigidos, por las exigencias del Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, que enviaba a los curas párrocos las siguientes instrucciones:¹⁹¹

Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón.

Por orden del Tribunal Regional de esta jurisdicción, instruyo expediente de Responsabilidades Políticas al individuo anotado al margen.

Ruego a Vd. tenga a bien remitir a este Juzgado, dentro del término de cinco días, conforme a lo dispuesto en el art. 48, 2º de la Ley de 9 de febrero 1939, informes acerca de los antecedentes políticos y sociales del mismo, tanto anteriores como posteriores al 18 de julio de 1936.

¹⁸⁹ En el expediente que sobre la inculpada de Fanzara Francisca Barceló Pejo realizó el cura párroco Vicente García se habla más de sus hijos y familia que de la misma inculpada, a la que simplemente se le acusa de la misma conducta que a sus hijos. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisca Barceló Pejo, Caja 10104. AHPCS.

¹⁹⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Galí Fraga, Caja 10080; Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Grifo Arquimbau, Caja 10079. AHPCS.

¹⁹¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Pitarch Felip, Caja 10079. AHPCS.

Igualmente espero comunique en relación valorada los bienes de la pertenencia del citado individuo que se le conozcan.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Castellón, a de de 194...

El Juez.

En este sentido, el mayor o menor cumplimiento de las obligaciones religiosas era entendido como una determinada postura ante el nuevo orden social, político y económico del franquismo. Es decir, la actitud moral y religiosa del inculcado se traducían en una mayor o menor proximidad al Estado franquista (como hemos dicho la Iglesia era parte del Estado franquista). Así, para el cura párroco de Cáliz [de unos inculcados] *si su conducta religiosa flojea en la actualidad, cuánto peor sería anteriormente, en que en estos pueblos se gloriaban de ser todos izquierdistas consumados*¹⁹².

Un mismo informe nos indica la importancia que tenía la relación del inculcado con la religión a la hora de establecer las responsabilidades políticas. Así, a modo de sentencia, el cura párroco de Vall de Almonacid termina uno de sus informes diciendo *No ha cumplido con la Parroquia*. Como vemos, tener un historial religioso podía convertirse en una especie de aval para obtener la absolución o, al menos, un atenuante que condujera a condena más suave, aunque también podía suponer todo lo contrario, es decir, la condena definitiva del inculcado. De esta forma, el cura párroco anteriormente citado comenta en su informe que *Antes del Glorioso Movimiento Nacional en su juventud fue miembro de la Adoración Nocturna, apartándose posteriormente de la doctrina de Cristo hízose de Izquierda Republicana y tomando su dirección*.¹⁹³

Hemos de recordar nuevamente en este punto la privilegiada situación de estos sacerdotes para acceder a los detalles de la vida cotidiana de los vecinos de cada localidad. El acceso a estos detalles suponía la disposición y difusión de informaciones variopintas que, aparentemente anecdóticas, podían jugar un papel importante, incluso decisivo, a la hora de establecer la exigencia de responsabilidades políticas,

¹⁹² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roure Ferreres, Caja 10104. AHPCS.

¹⁹³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Valentín Salvador Pérez, Caja 10129. AHPCS.

demostrando si se pertenecía al bando de los represaliados o vencidos o al de los vencedores merecedores de paz y tranquilidad. En este sentido el cura párroco de Cirat afirma de un inculpado: ¹⁹⁴

Después de la liberación se mostraba muy arrepentido y no se veía nada más que cuando venía del campo; frecuentaba los santos sacramentos; oía la Santa Misa y daba muestras de un verdadero arrepentimiento. Yo estoy convencido que su arrepentimiento era sincero y que verdaderamente estaba ciego y envenenado por las malas compañías y lecturas.

Algunos de estos detalles son de una fuerza reveladora y estremecedora, significativos de un nuevo clima social basado en el silencio, la represión y la soledad de los vencidos, como lo atestigua el informe sobre un inculpado de Fuente la Reina que realizó el cura párroco de la localidad en mayo de 1940 y que incluía el siguiente comentario: *Aún hoy en día, aun cuando sumiso, está apartado de la convivencia y de todo acto religioso.* ¹⁹⁵

En su función de investigadores tampoco descartaron el recurso al rumor público como fuente de información veraz, fiable y probatoria. El cura párroco de la Iglesia Parroquial de Nules comenzó uno de sus informes diciendo que *Según rumores tomó parte en saqueos y profanación de objetos de la Iglesia* ¹⁹⁶.

No todos los curas párrocos daban la misma importancia a los rumores como base probatoria de responsabilidades políticas. La sinceridad de algunos de ellos era suficientemente esclarecedora de una situación acusatoria eminentemente injusta, como en el caso que hemos analizado previamente del cura párroco de San Juan Moró (Villarreal), quien en su informe sobre Emilio Marco Aparici desconfiaba abiertamente de los rumores públicos. ¹⁹⁷

¹⁹⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Tamborero Soler, Caja 10081. AHPCS.

¹⁹⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bienvenido Villalba Moliner, Caja 10082. AHPCS.

¹⁹⁶ En este expediente el Delegado Local de FET y de las JONS también recurre al rumor para basar sus acusaciones, no así la alcaldía, que dice basarse en informaciones de sus propios agentes. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Cubedo Martínez, Caja 10083. AHPCS.

¹⁹⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Emilio Marco Aparicio, Caja 10098. AHPCS.

En cuanto a las fuentes que utilizaron, los curas párrocos se basaron en informaciones procedentes preferentemente de los vecinos de cada localidad, concretamente los que tenían disposición a ofrecer información inculpatoria sobre las personas afectadas, vecinos escogidos por su orientación social, política, ideológica y moral, con lo que, nuevamente, la parcialidad era la característica que presidía la mayoría de los informes. Las expresiones que sobre estas personas solían realizar los curas párrocos eran *según informes de personas fidedignas y en todo adictas al Glorioso Movimiento Nacional*¹⁹⁸; *según referencias*¹⁹⁹; *así resulta de lo manifestado por personas de solvencia, patriotismo y moralidad*²⁰⁰; *según informes que he podido adquirir de mis feligreses*²⁰¹; *según los datos facilitados por personas que merecen todo crédito*²⁰²; *según informes que he procurado adquirir se me indica que...*²⁰³ Algunos combinaban pruebas documentales con informaciones vecinales, como el cura párroco de Soneja Abel Soriano, quien indica en un informe que *según los datos que se me han suministrado en la secretaría de este Ayuntamiento y otros habidos de personas fidedignas*²⁰⁴

También se recurría, como hemos indicado, a la información que proporcionaban el resto de autoridades locales, así como a la consulta de diversa documentación, normalmente de origen municipal. En un informe firmado por el cura párroco de Castillo de Villamalefa se advierte que los datos que se ofrecen han sido obtenidos del Libro del Avance Catastral municipal²⁰⁵.

¹⁹⁸ Informe del cura párroco de Cabanes, Vicente Sidro. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Mulet Julve, Caja 10083. AHPCS.

¹⁹⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Valentín Carceller Pitarch, Caja 10103. AHPCS.

²⁰⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Eixarch Frasnó, Caja 10083. AHPCS.

²⁰¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Loras Loras, Caja 10074. AHPCS.

²⁰² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Ejarque Eixarch, Caja 10129. AHPCS.

²⁰³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Rafael Alegre Gálvez, Caja 10104. AHPCS.

²⁰⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Bautista Gómez Gil, Caja 10078. AHPCS.

²⁰⁵ En este informe, el cura párroco, Antonio Amigó, ofrecía sólo información económica sobre el inculpado y estaba escrito teniendo como base el informe realizado por la alcaldía. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Granell Chiva, Caja 10064. AHPCS.

Por supuesto, la documentación generada por la misma Iglesia ofrecía información sobre los inculpadados, como las listas del Cumplimiento Pascual. Se trataba de unos auténticos registros de las personas que acudían a la Iglesia y cumplían los preceptos religiosos, y que en estos años fueron utilizados como prueba y medida de la adhesión de los ciudadanos al nuevo orden franquista. En su informe sobre vecinos de Cáliz, el cura párroco Ángel Aznar comenta *Vistas las listas del Cumplimiento Pascual del año anterior y presente (que es lo que más califica a los feligreses) siento manifestarle que en ellas únicamente aparecen los nombres de [...]*²⁰⁶. Nuevamente constatamos que existía un proceso de búsqueda de información y de investigación sobre los inculpadados. En este sentido, Elías Milián, cura párroco de Burriana indicaba en un informe *Hechas las oportunas diligencias sobre bienes que pueden ser propiedad de...*²⁰⁷ y el de Segorbe comenzaba su informe diciendo *Después de varias averiguaciones e indagaciones*²⁰⁸. El cura párroco de Almazora comienza uno de sus informes diciendo *Según mis informes...*²⁰⁹

Los curas párrocos eran conscientes de la importancia de los informes que realizaban y de los detalles que desvelaban. Esto se demuestra en los casos en los que una persona considerada “de orden” o “derechista”, o con una actitud valorada como positiva durante la guerra era procesada por responsabilidades políticas, normalmente como consecuencia de haber ostentado algún cargo municipal durante el periodo republicano. En estos casos no se dudaba en ofrecer informes muy favorables e, incluso, en movilizar tanto a vecinos para que testificaran como a otros sacerdotes. En este sentido, no era extraño devolver favores a personas que durante la guerra protegieron a sacerdotes o que cuidaron de objetos artísticos eclesiásticos. De esta forma, el cura párroco de Vinaroz, V. Escrig, en mayo de 1941 devolvió en cierta forma favores anteriores defendiendo a un inculpadado del que aseguró que *Ha observado siempre buena conducta y religiosa, durante la dominación marxista salvó escondiéndolo en un*

²⁰⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roure Ferreres, Caja 10104. AHPCS.

²⁰⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Romero Gómez, Caja 10064. AHPCS:

²⁰⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Montesinos Clavel, Caja 10103. AHPCS.

²⁰⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Federico Martínez Vives, Caja 10064. AHPCS.

*huerto de su propiedad el tesoro de la Iglesia*²¹⁰. En ocasiones, la defensa era más sutil y con menos fuerza, como el comentario que incluyó en un informe el cura párroco de Vistabella: *su actuación dentro del campo de sus ideas fue moderada*²¹¹, o podía incluir algún reproche, como el comentario del mismo cura párroco de Vistabella en otro informe: *Su actuación se puede calificar de ordenada pero demasiado suelto de lengua.*²¹²

Un caso paradigmático es el del inculpado vecino de Sierra Engarcerán Vicente Castell Moliner, detenido en la cárcel de Benicarló. En un primer informe de junio de 1940 el cura párroco de dicha localidad le acusa de izquierdista, aunque posteriormente indica dos informaciones diferentes que defienden y acusan a la vez al inculpado. En primer lugar aseguró en su favor que trató con gran interés que no ocurrieran asesinatos durante la guerra y que le realizó favores tanto personalmente a él como a la Iglesia local, comportándose siempre pacíficamente. Sin embargo, en segundo lugar advierte que *siente poco ahora como antes por desgracia suya la Religión Católica*.

El caso mereció la movilización de un cura párroco más y del sacristán de la localidad. El primer informe era, a modo de declaración testifical, el del sacristán Jaime Sabater Barreda, quien relató cómo el inculpado protegió y salvó a curas, personas de derechas y objetos de culto. Un mes más tarde se recoge en el expediente un segundo informe de un cura párroco, esta vez de la localidad vecina de Benlloch, firmado por Ángel López, quien aseguraba que el inculpado fue muy respetuoso y que le protegió durante la guerra. Tres meses después se recibe el tercer informe de un cura párroco sobre el inculpado, esta vez nuevamente del de Sierra Engarcerán, exculpándole de todos los crímenes cometidos en la localidad y asegurando que le protegió y cuidó de los objetos de culto de la Iglesia.²¹³

²¹⁰ Curiosamente el informe acababa diciendo *Posee un molino de aceite*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Artola Roca, Caja 10103. AHPCS.

²¹¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Saturnino Centelles Olaria, Caja 10129. AHPCS.

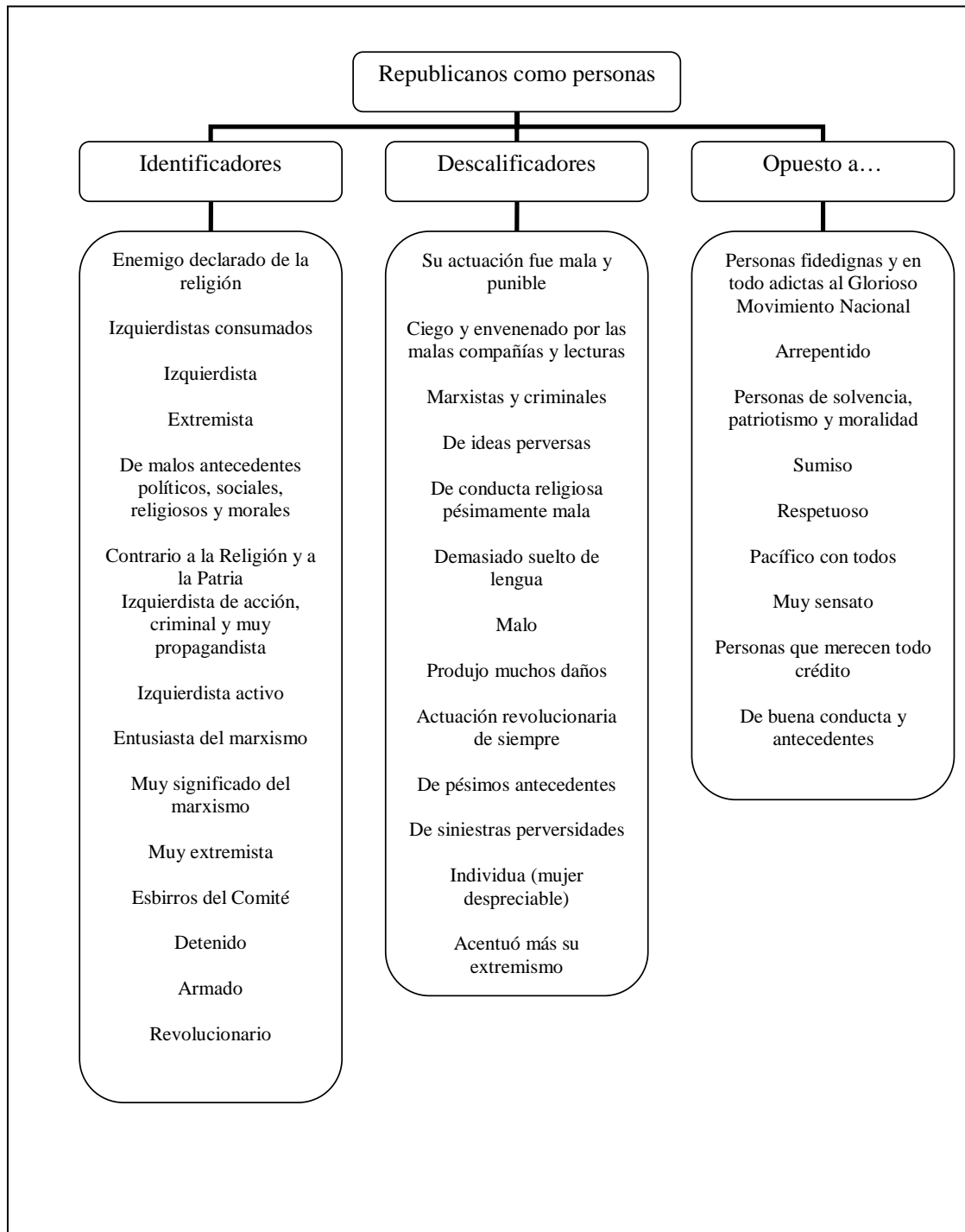
²¹² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Leonardo Salvador Fabregat, Caja 10129. AHPCS.

²¹³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Castell Moliner, Caja 10083. AHPCS.

Es interesante el análisis de las calificaciones que realizaban los curas párrocos sobre los inculpados, muy diferentes según fueran considerados presuntos culpables o personas de orden a exculpar. Siguiendo a C. Mir ofrecemos un cuadro en el que reflejamos una tipificación moral de los republicanos inculpados según el lenguaje utilizado por los curas párrocos en sus informes.²¹⁴

²¹⁴ C. MIR (2000), op. cit., pág. 235.

Cuadro 6.1



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas. Elaboración propia

Igual que en el resto de autoridades locales, los informes que realizaron los curas párrocos podían ser breves o podían ser muy extensos y detallados, en función de la voluntad de su autor, de su grado de conocimiento de los vecinos y del caso del inculpado en cuestión. Así, el cura párroco de Alfondeguilla en octubre de 1941 realizó

un informe sobre un convecino prácticamente telegráfico en el que informaba sobre la situación familiar del inculcado y los bienes de los que disponía. En relación a estos últimos se limita a indicar que *tiene bienes*²¹⁵. El informe del cura párroco de Artana, Salvador Vilar Martí, sobre Enrique Balaguer Gallart únicamente consta de las siguientes palabras:²¹⁶ *el sujeto al que se refiere este oficio no posee bienes de ninguna clase*. Leandro Colom, cura párroco de Almazora, realizó un informe en agosto de 1939 que únicamente dice así: *Según mis informes a Federico Martínez Vives no se le conocen bienes en esta villa*²¹⁷. El cura párroco de Benicasim presentó en marzo de 1941 el siguiente informe:²¹⁸

*Parroquia de Benicasim
Contestación al oficio nº 5358-A
José Pascual Casañ-Moreno-Soltero-Ejecutado-Labrador-Sin bienes propios.
F. Escoin, cura
Benicasim, 20 de marzo de 1941*

Algunos informes son breves y estremecedores, como el que firmó el cura párroco de Alcalá de Xivert José Luis Adell García sobre el inculcado Luis Sospedra Galarza: *Por sus extremismos fue juzgado y sentenciado a la última pena, habiéndose cumplido la sentencia*.²¹⁹

En algunas localidades no tenemos constancia de la existencia de informe del cura párroco²²⁰: Alcora, Barracas, Begís, Benicarló, Castell de Cabres, Costur, Chilches, Geldo, la Jana, Onda, Oropesa, Puebla de Arenoso, San Mateo, Sarratella, Torrechiva, Villafamés, Villanueva de Alcolea, Villavieja, Villores. En los 10 expedientes que

²¹⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Juan Centelles, Caja 10099. AHPCS.

²¹⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Balaguer Gallart, Caja 10099. AHPCS.

²¹⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Federico Martínez Vives, Caja 10064. AHPCS.

²¹⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bernal Casañ, Caja 10094. AHPCS.

²¹⁹ Se trataba de un informe que literalmente igual habían firmado también la alcaldía y el Delegado Local de FET y de las JONS. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Luis Sospedra Galarza, Caja 10079. AHPCS.

²²⁰ En este sentido, hemos de ser conscientes que, a parte de la Vall d'Uixó, Castellón, Almazora, Alcalá de Xivert, Sarratella Villarreal y Burriana, en el resto de poblaciones hemos realizado para nuestro análisis catas de 1 ó 2 expedientes, por lo que es de esperar que futuras investigaciones aclaren este punto definitivamente.

hemos analizado de vecinos de Castellón tampoco aparece el preceptivo informe del cura párroco, pero no porque la Iglesia se negara a implicarse en el procesamiento por responsabilidades políticas de la población, sino porque el Juez Instructor Provincial en este caso no lo exigía, tal y como se puede observar en la siguiente diligencia del Juez Instructor Gabriel Castro Marcos:²²¹

Háganse al inculpado [...] las prevenciones 3ª, 4ª y 5ª del artículo 49 de la Ley de 9 de febrero último, por conducto del Director de la Prisión Provincial de Castellón donde cumple su condena, con los requisitos que determina el artículo 53 de la citada Ley. Interesese informe urgente al Alcalde, Delegado Provincial de Información e Investigación de FET de las JONS, Comisario Jefe del Cuerpo de Investigación y vigilancia y Comandante del Puesto de la Guardia Civil de esta plaza, sobre los bienes de pertenencia del presunto responsable que se le conozcan y remítase a los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia el anuncio a que se refiere el citado artículo 53, en relación con el artículo 45.

El Servicio Nacional de Seguridad: la Comisaría de Investigación y Vigilancia

Como hemos visto, si el inculpado sobre el que se debían hacer los informes era vecino de la capital de la provincia o se hallaba en paradero desconocido, la Policía, a través de la Comisaría de Investigación y de Vigilancia de la Provincia de Castellón, debía realizar un informe del mismo. En general, se trataba de informes que ofrecían datos sobre los bienes del inculpado y su valoración económica, además de esclarecer aspectos sobre su paradero, profesión y situación familiar.²²²

Seguían aproximadamente la misma dinámica que las autoridades locales anteriores. Sus fuentes eran la información que ofrecían los vecinos y otras fuentes documentales de origen municipal²²³. En algunos casos se realizaban estos informes

²²¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Artero Pérez, Caja 10068. AHPCS.

²²² Por ejemplo Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Almela Prats, Caja 10064. AHPCS.

²²³ En el expediente sobre el vecino de Castellón Vicente Porcar Vilar la Policía dice haber consultado las Cámaras Rústicas y Urbanas municipales. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Porcar Vilar, Caja 10064. AHPCS.

En el expediente sobre el vecino de Castellón Jaime Torrella Archilés el firmante del informe policial se queja de que no ha podido recabar información de los bancos ni del Monte de Piedad. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Torrella Archilés, Caja 10064. AHPCS.

sobre vecinos de poblaciones determinadas para determinar sus actos durante la guerra civil si habían tenido relación con la ciudad de Castellón o si habían tenido cierta relevancia.²²⁴

LA ORDEN DE CITACIÓN DEL INCUPLADO PARA LA LECTURA DE CARGOS

Recibidos los informes de las autoridades locales, el siguiente paso en el procesamiento por responsabilidades políticas era la citación del inculcado para realizarle la lectura formal de cargos. Normalmente era el titular del Juzgado Municipal el que llevaba a cabo la lectura, que se hacía bien delante físicamente del inculcado o bien delante de algún familiar o representante si se trataba de un caso de persona fallecida, enferma (para lo cual necesitaba un certificado médico oficial) o en paradero desconocido. En los frecuentes casos en los que el inculcado estaba cumpliendo condena en la cárcel era el director de la misma el que realizaba la lectura ante el inculcado²²⁵. En condiciones normales si el inculcado no estaba en la cárcel sino haciendo vida normal en su localidad se le obligaba a acudir a la secretaría del Juzgado de Instrucción Provincial de Castellón para proceder a la lectura de cargos²²⁶. El respeto por los inculcados era mínimo, como lo demuestra el caso del vecino de Alcalá de Xivert Vicente Fresquet Ferreres, quien, de 75 años y afectado de apoplejía, tras presentar un certificado médico y postrado en cama, vio cómo en abril de 1940, la Guardia Civil de su localidad entraba en su habitación, le leía los cargos y le hacía

²²⁴ Por ejemplo, en el informe sobre el vecino de Alcalá de Xivert Joaquín Salvador Cherta la Comisaría de Policía de Castellón informa que el inculcado permaneció durante una temporada en la localidad. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Salvador Cherta, Caja 10078. AHPCS.

²²⁵ Es el caso, por ejemplo, del vecino de Almazora Vicente Clausell Ferrer, que se hallaba en la Prisión Provincial de Castellón cumpliendo una condena de muerte todavía no ejecutada dictada el 14 de noviembre de 1939. En marzo de 1940 comenzó su procesamiento por responsabilidades políticas y se le leyeron los cargos que se le imputaban el 11 de abril de 1940, pudiendo al día siguiente realizar una hoja de descargo en la que negaba todos y cada uno de los delitos que se le imputaban, llegando incluso a pedir el testimonio de algunos testigos. Sin embargo, en una fecha indeterminada entre abril y octubre de 1940 fue ejecutado. Finalmente el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le condenó el 20 de febrero de 1941 al pago de 4.000 pesetas, siendo impagada y, por tanto, todos sus bienes embargados hasta el sobreseimiento y archivo definitivo del caso el 23 de abril de 1944. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Clausell Ferrer, Caja 10079. AHPCS.

²²⁶ Es el caso de las mujeres vecinas de Sarriell de Sarriell que sufrieron proceso de exigencia de responsabilidades políticas a raíz de la denuncia del Delegado Local de FET y de las JONS de Sarriell, Ismael Villalonga, a finales de diciembre de 1940. Por ejemplo, Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicenta Monfort Peraire, Caja 10129. AHPCS.

firmar su declaración con el dedo²²⁷. Si el inculpado había cambiado de localidad y ésta era lejana la lectura de cargos se solía realizar en el Juzgado Municipal de su nueva localidad.²²⁸

El acto de la lectura de cargos tenía una estructura claramente marcada, con tres partes fundamentales: identificación, declaración y firma de la misma. De esta forma, en primer lugar se identificaba convenientemente al inculpado, se le advertía que iba a prestar declaración y, por tanto, tenía la obligación de decir la verdad, para más tarde preguntarle si conocía la Ley de Responsabilidades Políticas. También debía aclarar en esta primera parte de la lectura de cargos si pertenecía o no a FET y de las JONS y si tenía o no instrucción. A continuación se procedía a la lectura de cargos en voz alta por parte del Juez Instructor Provincial, informándole que disponía desde ese momento de cinco días para realizar un escrito de defensa o aportar pruebas documentales o testificales en ese sentido. Posteriormente el inculpado se defendía dando su versión sobre los cargos que se le imputaban, lo que consistía normalmente en la negación de la parte menos objetiva de los mismos (insultos, asesinatos, quema de iglesias, amenazas, y comportamientos en general), ya que los datos que podían ser demostrados documentalmente, como la pertenencia a partidos o sindicatos, no solían desmentirse (si se hacía era para corregir la filiación política, aunque solía justificarse con motivos como necesidad de trabajo, presión social, etc.). Acto seguido se le preguntaba al inculpado si tenía algo más que añadir, a lo que en la mayoría de los casos se contestaba que no. Finalmente se le leía la transcripción de la declaración recién hecha, se le entregaba un texto con las cinco prevenciones de la Ley y el inculpado firmaba la declaración, ratificada con la firma del Secretario del Juzgado. Para un mejor conocimiento podemos acudir a una de estas comparecencias para la lectura de cargos al inculpado:²²⁹

²²⁷ En el mes de octubre de 1940 el inculpado ya había fallecido. A partir de ese momento su viuda fue la que tuvo que hacer frente al procesamiento por responsabilidades políticas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Fresquet Ferreres, Caja 10078. AHPCS.

²²⁸ La vecina de Sarratella Antonia Barberá Beltrán se fue a vivir tras la guerra civil a la localidad de Valverde de los Arroyos (Guadalajara). Tras su denuncia por parte del Delegado Local de FET y de las JONS, tuvo que acudir al Juzgado Municipal de esta localidad para prestar declaración. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonia Barberá Beltrán, Caja 10093. AHPCS.

²²⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonia Ortiz Sales, Caja 10129. AHPCS.

En Castellón a veinte de junio de 1941. Ante S.S. y de mí el Secretario compareció la inculpada anotada al margen, quien advertida de que iba a prestar declaración y de la obligación que tiene de decir verdad, juró ser veraz en sus manifestaciones y preguntada por las Generales de la Ley, dijo llamarse como queda dicho, de 72 años de edad, casada, sus labores, natural y vecina de Sarratella, que no pertenece a FET y de las JONS y sin instrucción.

El Sr. Juez le dio lectura de los cargos que se le imputan para que conteste y se defienda, haciéndole saber paralelamente que le concedía el plazo de cinco días a fin de que aporte la prueba documental y testifical que interese en su defensa, o para que la proponga en un escrito que deberá contener todos los datos necesarios para su práctica de oficio.

Acto seguido la inculpada manifestó: que con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional no estuvo afiliada a ningún partido político ni sindical y que las veces que emitió su voto lo hizo a favor de los partidos de izquierda toda vez que las propagandas decían que a ganar los citados partidos les bajarían las contribuciones y otras cargas y como quiera que la declarante se hallaba necesitada, emitía su voto a favor de los precitados partidos por los motivos antes expuestos.

Acerca de los cargos que se le hacen de haber sido interventora del Frente Popular dijo: que en ciertas ocasiones que hubo sin precisar cual de ellas por no recordarlo le notificaron del Ayuntamiento que por abecedario le correspondía ser interventora en dichas elecciones, cargo que desempeñó obligatoriamente e ignorando al partido que pudiera representar.

Que una vez iniciado el GMN formó parte de la colectividad de las incautaciones que les fueron hechas a las personas de derechas de la localidad, estando la declarante al cargo y cuidado de las gallinas, palomas y cerdos procedentes de la requisita. Que es incierto exteriorizara sus alegrías al circular los rumores de que habían sido detenidas o asesinadas las personas de derechas.

Preguntado si tiene algo más que manifestar dijo que no.

En este punto se dio por terminada su declaración y leída que le fue la presente, junto con las cinco prevenciones del artículo 49 de la Ley, la encuentra conforme, se afirma y ratifica y la firma con S.S. de lo que yo el Secretario doy fe.

Excepcionalmente se podían admitir escritos de defensa a modo de ampliación de las manifestaciones realizadas en la lectura de cargos, si el Juez Instructor Provincial lo permitía por considerar que aclaraba las circunstancias del caso.²³⁰

Por otra parte, ante cualquier adversidad a la hora de llevar a buen ritmo la tramitación de los expedientes, se solía recurrir a cualquiera de las autoridades locales para llevar a cabo los mismos. Así, el inculpado de Alcalá de Xivert Pascual Arnau Caudet se encontraba enfermo cuando llegó el momento de proceder a la lectura de

²³⁰ El inculpado de Villarreal José Benlloch Portolés presentó un escrito de defensa a modo de ampliación de su declaración prestada en el acto de la lectura de cargos y le fue admitido por el Juez Instructor Provincial. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benlloch Portolés, Caja 10093. AHPCS.

cargos, por lo que se recurrió a la Guardia Civil de la localidad para que procediera a la misma. En este caso simplemente el acto consistió estrictamente en una lectura de cargos y la firma de un representante del inculpado:²³¹

CARGOS QUE SE LEEN EN EL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES POLITICAS Nº 4107, QUE SE INSTRUYE CONTRA PASCUAL ARNAU CAUDET

PASCUAL ARNAU CAUDET, vecino de Alcalá de Chivert. Antes del Glorioso Movimiento Nacional, siempre ha militado en partidos de izquierda, durante el dominio rojo, formó parte de la Junta Popular Antifascista, durante su actuación se efectuaron detenciones, conceptuando como significado del marxismo.

A fin de que se pueda contestar y defenderse de los cargos que se le imputan y que arriba se hallan expresados, se le concede por este Juzgado un plazo de cinco días, a partir de aquel en que firme la presente, a fin de que aporte la prueba documental y testifical que interese en su defensa, o para que la proponga en un escrito que deberá contener todos los datos necesarios para su práctica de oficio.

*Castellón 18 de abril de 1940.
El Juez, Núñez Escalona.*

*Me doy por enterado del presente escrito.
El interesado.*

En ocasiones el inculpado no colaboraba en el proceso por parecerle a todas luces injusto y se negaba incluso a declarar a su favor. Es el caso del vecino de Alcalá de Xivert Manuel Herrera Herrera, quien, tras la lectura de cargos que se le realizó en la cárcel de Benicarló simplemente quiso añadir *Me doy por enterado del presente escrito*.²³²

En muchos de los casos analizados el trámite de la lectura de cargos no se realiza, lo que no detiene el proceso pese a dejar al inculpado sin la ocasión para conocer los cargos que se le imputan y la primera de sus oportunidades para defenderse. Sin embargo, hay casos, como el del poeta Bernat Artola²³³, en los que la no realización de la lectura de cargos hace que el proceso se detenga en el Tribunal de

²³¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Arnau Caudet, Caja 10078. AHPCS.

²³² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Herrera Herrera, Caja 10078. AHPCS.

²³³ Expediente de Responsabilidades contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069. AHPCS.

Responsabilidades Políticas y sea devuelto al Juez Instructor Provincial de Castellón para cumplir rigurosamente los trámites marcados por la Ley. En este sentido, la escrupulosidad a la hora de cumplir los distintos pasos procesales y el respeto a los derechos de los inculpadados fue absolutamente discrecional.

LAS CINCO PREVENCIONES DE LA LEY

Tras la lectura de los cargos que se le imputaban el inculpadado quedaba en una situación especial que limitaba su libertad tanto de circulación como económica. En general, debía estar controlado por las autoridades y para cualquier cambio o actividad debía pedir previamente permiso al juez. Esta situación se prolongaba por todo el tiempo que duraba el procesamiento por responsabilidades políticas. Este es el documento que se remitía a los inculpadados:

Tengo el honor de dirigirme a Vd a fin de que por su conducto haga saber al individuo al margen, al cual instruyo expediente de Responsabilidades Políticas, las siguientes prevenciones:

1ª Que no podrá ausentarse del lugar en que resida al iniciarse el expediente, sin permiso del Juez; permiso que sólo podrá concederle bajo su responsabilidad, por causas muy justificadas.

2ª Que en el caso de infringir el inculpadado la anterior prohibición, será detenido y procesado por el delito de desobediencia grave a la Autoridad.

3ª Que en el plazo de ocho días, deberá presentar ante este Juzgado, una relación jurada de todos sus bienes, de los de su cónyuge, si fuera casado, de los que tuviera en su poder, propiedad de terceros y todas sus deudas. Esta relación será valorada y al final de ella se expresará también el número de hijos legítimos, naturales reconocidos o adoptivos, menores de edad o incapacitados que tuvieran a su cargo.

4ª Que la falta de presentación de esta relación en plazo indicado, se castigará como delito de desobediencia grave a la Autoridad, y la ocultación de bienes, simulación de deudas y demás inexactitudes que pudieran descubrirse, serán penadas como constitutivas del delito de falsedad en documento público, si se estimase por los Tribunales que por su gravedad o intencionalidad revestían carácter punible; y

5ª Que desde la fecha de esta primera declaración, no podrá realizar acto de disposición de bienes, bajo apercibimiento de ser procesado por los delitos de alzamiento de bienes o desobediencia grave a la Autoridad.

En la citada declaración jurada de bienes deberá hacer constar su naturaleza, vecindad, profesión, si tiene instrucción y jornal que ganan tanto él como su esposa e hijos.

Al propio tiempo, deberá exigirle la firma y fecha de hallarse enterado, consignada en el duplicado del presente oficio que se adjunta y remitirlo a este Juzgado, con la relación jurada de bienes a que se refiere la primera prevención, si el inculpado la presentase dentro del término citado. En caso negativo, comunicará la referida omisión al día siguiente de concluirse el plazo, a los efectos oportunos.

Finalmente, el inculpado daba su conformidad al acta que recogía su declaración firmándola bien con la firma o con su impresión digital.

LA PRESENTACIÓN DE LA DEFENSA U “HOJA DE DESCARGO”

Tras la lectura de cargos el inculpado tenía un plazo de cinco días para presentar un escrito de defensa u “hoja de descargo”, en la que le era permitido explicar su versión sobre los cargos que se le imputaban y que en ocasiones se convertían en oportunidades para apelar a la clemencia del tribunal ante una situación familiar desesperada. Ejemplo de ello lo encontramos en la Hoja de descargo que presentó Josefa Puig Esteller, viuda del inculpado Luis Sospedra Galarza, que había sido condenado a muerte por un consejo de guerra en septiembre de 1939, poco después ejecutado y posteriormente procesado por responsabilidades políticas:²³⁴

Al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia.

La que suscribe no tiene nada que alegar contra los cargos políticos que se le hacen a mi difunto marido pero sí que recurre en defensa de sus intereses que son fincas heredadas de mis padres pues mi difunto marido no poseía bienes de ninguna clase lo que acredita con la certificación que acompaña.

Al embargar mis bienes dejarían en la indigencia a una madre con tres hijos menores de edad, pues ni ella ni sus hijos son culpables de los hechos achacados a mi marido que ya pagó con la muerte.

En las oficinas municipales correspondientes consignaron sin asegurarse las fincas mías propias a nombre de mi marido.

Por o expuesto, suplica a V.I. se digne atender a las razones, enmendando la equivocación y dejando sin efecto el embargo de mis bienes si lo hubiere.”

Alcalá de Chivert, 12 de febrero de 1941.

²³⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Luis Sospedra Galarza, Caja 10079. AHPCS.

Si lo creía conveniente el inculpado podía solicitar la citación e interrogatorio de varios testigos, presuntamente a su favor. Podemos proponer el ejemplo de la Hoja de descargo que presentó el vecino de Alcalá de Xivert José Colom Anglés:²³⁵

HOJA DE DESCARGO

“Primero: ni antes ni después del Glorioso Movimiento pertenecí a partido político alguno, no pudiendo ser de ideas extremistas y a que lo hubiera demostrado siendo de algún partido de izquierdas.

Segundo: en ningún momento ni antes ni después del Movimiento pude ser presunto autor de asesinatos ya que odiaba los procedimientos seguidos por los que los cometían.

Tercero: no fui afiliado a la UGT y sí a la CNT por razones de trabajo, ya que sin un carnet sindical (a los que obligaban) no podía desenvolverse para los asuntos de trabajo.

Por los motivos expuestos le puedo citar a los vecinos de Alcalá de Chivert Gaspar Segarra Sanz y Agustín Fresquet Roda los cuales podrán dar crédito a todo lo anteriormente expuesto”

Firmado en Benicarló el 18 de abril de 1940.

Normalmente se aceptaba la comparecencia de los testigos propuestos²³⁶. El interrogatorio al que se sometía a los testigos también tenía una estructura muy definida. El Juez Instructor Provincial ordenaba al Juez Municipal de la localidad correspondiente que realizara un interrogatorio a estos testigos siguiendo el siguiente esquema: primero se preguntaba al testigo si conocía la Ley de Responsabilidades Políticas y si se consideraba afectado por ella (naturalmente el inculpado decía que no). En segundo lugar, se le preguntaba sobre los antecedentes políticos y sociales del inculpado antes del 18 de julio de 1936 y, en tercer lugar, se le preguntaba sobre la actuación del inculpado durante la guerra civil.

El informe sobre la comparecencia de los testigos propuestos por el inculpado debía finalizar con una valoración por parte del Juez Municipal sobre la conducta política y social de los testigos citados, lo que determinará fundamentalmente si son

²³⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Colom Anglés, Caja 10079. AHPCS.

²³⁶ Aunque no en todos los casos. El vecino de Alcalá de Xivert Lorenzo Cucala Pitarch en su Hoja de descargo pidió la comparecencia de varios vecinos que le conocían. Sin embargo, nunca se produjo la comparecencia. Seguramente algo tuvo que ver en esta circunstancia el hecho que pocos días después de realizar la Hoja de descargo fue condenado a muerte por un consejo de guerra y posteriormente ejecutado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Lorenzo Cucala Pitarch, Caja 10079. AHPCS.

partidarios del nuevo Estado franquista o no, con lo que de esto dependía la mayor o menor validez de sus declaraciones. La parcialidad, pues, presidía totalmente el proceso. En el expediente que se siguió contra el vecino de Almazora Daniel Grifo Arquimbau los dos testigos propuestos por el inculcado merecieron el siguiente comentario del Juez Municipal: *los testigos propuestos y que han depuesto son personas de gran solvencia social y política y afectos en sumo grado a la Causa Nacional.*²³⁷

En ocasiones el mismo Juez Municipal aprovecha esta parte final no sólo para valorar la orientación social y política de los testigos, sino para dar su opinión personal sobre el inculcado. El expediente del vecino de Alcalá de Xivert José Colom Anglés nos sirve nuevamente para ilustrar cómo eran estos comentarios finales del informe sobre la comparecencia de los testigos y, a la vez, cómo el Juez Municipal aprovechaba la ocasión para emitir su “veredicto”:²³⁸

[Agustín Fresquet Roda]Este testigo es persona muy extremista destacándose algunas veces, negándose rotundamente a decir la actuación del inculcado. El inculcado José Colom es uno de los más extremistas de la CNT, desempeñando el cargo de miembro del Control Obrero, intervino en la requisa de la naranja; siendo así mismo uno de los dirigentes de la colectividad. El testigo Gaspar Segarra Sanz es persona de buenos antecedentes, adicto al Glorioso Movimiento, pero no quiere decir nada.

El Juez Municipal de la localidad de Alcalá de Xivert, como hemos visto, aprovechaba la ocasión para participar en la acusación de los inculcados, como lo demuestran otros ejemplos similares de procesamiento de vecinos de aquella localidad:

*Los testigos Juan Bautista Sospedra Agut y Vicente Sospedra Granell son personas de buenos antecedentes y adictos al Glorioso Movimiento Nacional. El inculcado Jaime Peguerotes era cómplice de asesinatos e incautaciones.*²³⁹

²³⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Grifo Arquimbau, Caja 10079. AHPCS.

²³⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Colom Anglés, Caja 10079. AHPCS.

²³⁹ En el texto se cita al inculcado en pasado porque había sido previamente ejecutado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Peguerotes Albert, Caja 10079. AHPCS.

*El testigo Antonio Marzal no es de mucha confianza, referente al testigo Vicente Vinuesa, es persona adicta al Glorioso Movimiento; en cuanto al inculpado, era muy extremado, delegado del Comité Ferroviario, se dedicaba a firmar denuncias contra los mismos compañeros, dos de ellos fueron asesinados llamados Pablo Esteller Vela y el otro el capataz de la misma brigada pertenecía a la sindical CNT.*²⁴⁰

Es interesante el análisis de las declaraciones de estos testigos, quienes teóricamente habían de testificar a favor del inculpado, entendiendo a favor incluso una explicación objetiva y veraz sobre los hechos imputados. O al menos eso era lo que esperaban los inculpados, aunque no siempre era así. Era frecuente que los testigos testificaran en contra del inculpado, seguramente debido a la situación de desconfianza y miedo que despertaba, en el contexto de posguerra, la participación en un proceso que podía acabar salpicando al propio testigo si demostraba demasiada identificación con el inculpado. En este sentido, algunas veces el efecto conseguido era la denuncia agresiva del inculpado, utilizada posiblemente como arma de salvación personal o como herramienta para el ajuste de cuentas.²⁴¹

De esta forma, Vicente Sospedra Granell y Juan Bautista Sospedra Agut, dos de los testigos citados por el inculpado de Alcalá de Xivert José Colom Anglés, declararon que antes de la guerra pertenecía a partidos de izquierda, con tendencia socialista y que durante la misma fue concejal del Ayuntamiento, miembro del Control Obrero de Abastos y le califican como *uno de los extremados y de actuación, en general, mala*²⁴². En el expediente del también vecino de Alcalá de Xivert Ramón Roca Martorell el testigo propuesto José Antonio Marzal Sospedra, casado, de 42 años y propietario, declaró ignorar su actuación durante la guerra y se limitó a confirmar que pertenecía antes de la misma al Frente Popular. El Juez Municipal dijo que este testigo *no es de mucha confianza*²⁴³.

²⁴⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roca Martorell, Caja 10078. AHPCS.

²⁴¹ Como explica J. Casanova “el terror exigía también romper los lazos de amistad y de solidaridad social [...]”. J. CASANOVA, (2001) op. cit., versión de 2005, pág. 286.

²⁴² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Peguerotes Anglés, Caja 10079. AHPCS.

²⁴³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roca Martorell, Caja 10078. AHPCS.

En el expediente del vecino de Almazora Daniel Grifo Arquimbau se produce un caso similar. Al citar como testigo al alcalde de la localidad José Grifo Soler, el inculpado seguro que no se esperaba que éste ratificara que había pertenecido a Unión Republicana, Izquierda Republicana y CNT, a la Colectividad Nueva Humanidad y que fue propagandista de ideales anarquista, además de ordenador de todo tipo de requisas a la gente de orden. El testimonio fue demoledor, incluyendo una calificación final definitiva como *desafecto en grado sumo a nuestra Santa Causa*²⁴⁴. Suponemos que la sorpresa del inculpado ante esta actitud acusatoria de los testigos que él mismo había propuesto sería mayúscula y profundamente decepcionante.

Aún así, también hubo testigos que no defraudaron a los inculpados y les defendieron. En el caso anteriormente comentad el testigo José Forcada Morales confirmó que el inculpado había pertenecido antes del 18 de julio de 1936 al partido Unión Republicana, aunque añadió posteriormente que durante la guerra *observó buena conducta ocupándose únicamente del trabajo*²⁴⁵. Es más que probable que esta actitud respondiera en gran parte a la condición de primo hermano del inculpado de este testigo. Otro de los casos en los que los testigos defendieron a los inculpados fueron los de Fernando Gasset Lacasaña y Bernardo Artola Tomás, ambos desarrollados ampliamente más adelante.²⁴⁶

A pesar de todo, lo más común era una tercera vía que consistía en la realización de una declaración neutra en la que lo normal era declarar que se desconocían los hechos realizados por el inculpado. Como hemos visto, en el expediente contra el vecino de Alcalá de Xivert de José Colom Anglés se citó a los testigos que pidió el inculpado. Uno de ellos, Agustín Fresquet Roda, casado, labrador y de 33 años, declaró ignorar los antecedentes políticos y sociales del inculpado antes del 18 de julio de 1936 y su actuación durante la guerra. Al final sólo admitió que había pertenecido a la CNT. Ya conocemos que el Juez Municipal calificó a este testigo como *persona muy*

²⁴⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Grifo Arquimbau, Caja 10079. AHPCS.

²⁴⁵ Ibidem.

²⁴⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña, Caja 10074; y contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069. AHPCS.

*extremista destacándose algunas veces, negándose rotundamente a decir la actuación del inculpado*²⁴⁷, con lo que su declaración pasaba a tener un valor casi nulo.

El miedo a la declaración se puede observar incluso en los testigos calificados como adictos al nuevo Estado franquista. Siguiendo con el ejemplo de José Colom Anglés, observamos que en su declaración de Gaspar Segarra Sanz, calificado posteriormente por el Juez Municipal como *persona de buenos antecedentes, adicto al Glorioso Movimiento*, se limita a confirmar que el inculpado pertenecía a CNT, que durante la guerra formó parte del control obrero y que fue dirigente de la colectividad. La declaración se realiza en términos generales, sin aportar detalles que podrían haber sido valiosos para las autoridades, y es que, según el Juez Municipal, a pesar de su inequívoca postura favorable al franquismo el inculpado *no quería decir nada*²⁴⁸. En el caso del vecino de Alcalá de Xivert Ramón Roca Martorell el segundo testigo propuesto por el inculpado, Antonio Marín Espalleguer, a pesar de ser calificado por el Juez Municipal como *de buenos antecedentes y adicto al Glorioso Movimiento* declaró que ignoraba la actuación del inculpado tanto antes como después del estallido de la guerra civil. Seguramente este silencio era lo máximo que el testigo por el inculpado.²⁴⁹

Cuando los testigos propuestos por el inculpado no se encontraban en la localidad o si se desconocía su paradero no se realizaban esfuerzos por conseguir su testimonio. Así, de los cuatro testigos propuestos por el vecino de Alcalá de Xivert Jaime Peguerotes Albert dos no declararon, uno alegando que vivía en Valencia y el otro diciendo que era desconocido en la localidad (a pesar que el inculpado lo había propuesto como vecino de la localidad). Curiosamente los dos testigos que finalmente declararon fueron calificados por el Juez como de buenos antecedentes y adictos al franquismo.²⁵⁰

²⁴⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Colom Anglés, Caja 10079. AHPCS.

²⁴⁸ Ibidem.

²⁴⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roca Martorell, Caja 10078. AHPCS.

²⁵⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Peguerotes Albert, Caja 10079. AHPCS.

También podía darse el caso de citación de testigos no propuestos por los inculpados, sino por las mismas autoridades, en base a la información que sobre el inculpado se poseía. En el expediente contra el vecino de Alcalá de Xivert Miguel Bou Almela se citó como testigo a Joaquín Royo Cucala, en esos momentos Alguacil del Ayuntamiento, quien ratificó la pertenencia del inculpado a partidos políticos de izquierda y le acusó de hacer propaganda de los mismos en sus conversaciones y de ser el protagonista del corte de las líneas telegráficas en octubre de 1934. Según el testigo durante la guerra civil el inculpado protagonizó guardias, detenciones y amenazas de muerte en su propia persona. Además, aclaró las circunstancias de su suicidio²⁵¹. En el caso comentado de Ramón Roca Martorell, los dos testigos propuestos resultaron ser uno sospechoso y otro adicto al franquismo. A ellos se añadió un testigo que no había sido propuesto por el inculpado, Vicente Vinuesa Sospedra, que fue calificado como *persona adicta al Glorioso Movimiento* y, a pesar que aseguró haber pasado 21 meses escondido por ser perseguido durante la guerra, afirmó que la actuación del inculpado durante la misma fue de *republicano extremado*²⁵². Parece como si se facilitara a las personas que más habían sufrido durante la guerra la persecución de los extremistas revolucionarios la oportunidad de vengarse con su testimonio en los procesos de responsabilidades políticas.

En ocasiones el proceso normal de los expedientes se alteraba con la admisión de documentos que no estaban inicialmente previstos, como en el caso del vecino de Almazora Vicente Monsó Morales, que se vio beneficiado justo antes de la realización del correspondiente resumen metódico de la presentación de un escrito en el que seis vecinos de Almazora defendiéndole argumentando su carácter apolítico y explicando que su filiación a Izquierda Republicana se hizo en 1936 por necesidades laborales. A pesar de todo este acto de solidaridad no produjo grandes efectos en el resumen

²⁵¹ El testigo Joaquín Royo Cucala era partidario del franquismo y su parcialidad se manifiesta en el hecho que, ante las presuntas amenazas de detención del inculpado, tuvo que esconderse, una situación que hubo de mantener durante ocho meses. El ajuste de cuentas estaba servido. En el expediente no se explica la causa de la citación de este testigo, pero podemos deducir que fue citado por su implicación directa con los presuntos delitos cometidos por el inculpado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Bou Almela, Caja 10078. AHPCS.

²⁵² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roca Martorell, Caja 10078. AHPCS.

metódico del Juez Instructor Provincial y finalmente fue condenado a inhabilitación de cargos de mando o confianza durante ocho años y al pago de 350 pesetas.²⁵³

En el caso del alcalde republicano de Gaibiel Daniel Calvo Bonet se presentaron adjuntos al expediente una carta de un médico de Castellón y otra de los familiares de uno de los curas asesinados durante la guerra civil, en las que se aseguraba que el inculcado era una persona de orden y que había tratado de evitar por todos los medios, incluso exponiendo su vida, los excesos que una minoría de exaltados habían provocado en la localidad. Estas cartas fueron acompañadas de nuevos informes favorables de las autoridades locales, pero toda esta documentación no fue suficiente para evitar una sanción por parte del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia consistente en cuatro años de inhabilitación y el pago de 300 pesetas.²⁵⁴

Finalmente, los expedientes que hemos analizado demuestran que los datos que aportaban estos testigos no eran tenidos muy en cuenta a la hora decisiva de las sentencias, especialmente si se trataba de personas previamente consideradas no partidarias del régimen franquista. Las referencias para el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia eran invariablemente las consideraciones iniciales y los resúmenes metódicos realizados por el Juez Instructor Provincial de la provincia de Castellón. Las aportaciones que podían realizar los testigos tenían un valor siempre relativo y se consideraba que podían esclarecer algún detalle significativo, pero no tenían peso a la hora de presentar el fallo de la sentencia correspondiente. Mucho menos se tenía en cuenta la versión ofrecida por el inculcado en los momentos procesales en los que se le dejaba defenderse, es decir, en el interrogatorio correspondiente a la lectura de cargos y en la hoja de descargo que podía presentar tras la notificación del resumen metódico. Esta circunstancia convertía todo el proceso de responsabilidades políticas en una farsa donde se aparentaba que el inculcado tenía las mínimas garantías judiciales, aunque en la realidad su versión de los hechos no era tenida en cuenta. Los inculcados estaban sentenciados de antemano.

²⁵³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Monsó Morales, Caja 10079. AHPCS.

²⁵⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Calvo Bonet, Caja 10129. AHPCS.

En estas condiciones los sentimientos de abuso e injusticia debieron ser intensos entre los inculpados. Como podemos comprobar en el análisis de 14 casos de mujeres vecinas de Sarratella procesadas por responsabilidades políticas, su versión de los hechos imputados nunca fue tomada en cuenta ni por el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas ni por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. La mayoría de estas mujeres fueron acusadas de ser propagadoras del marxismo, haber acudido a manifestaciones marxistas, haber pertenecido a partidos de izquierda, haber insultado a la gente de orden y a Franco, haber participado en la quema de la Iglesia y ermita locales, así como de las imágenes sagradas. Sistemáticamente estas circunstancias fueron negadas por las inculpadas, ofreciendo una versión completamente diferente de los hechos a la reflejada en los informes tanto del denunciante como de las distintas autoridades locales y del Juez Instructor Provincial de Castellón. En este sentido, ¿cómo se ha de evaluar los hechos juzgados? ¿quién dice la verdad? o ¿quién dice un mayor porcentaje de la verdad?²⁵⁵ Como comprobaremos, el problema siempre se solucionó dando por verdaderas las versiones de las autoridades locales.

El Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón emitía en dos momentos del procesamiento su opinión sobre qué cargos se le podían imputar al inculpado. El primero de ellos se realizaba cuando dicho Juez tenía a su disposición tanto la denuncia origen del expediente como los distintos informes aportados por las correspondientes autoridades locales. Era el momento de evaluar los hechos imputados y elevar los cargos que se derivaran. Se trataba de una propuesta inicial en la que, en teoría, el Juez debería decidir si se seguía o no con el procesamiento. En todos los casos el proceso siguió adelante. Posteriormente, tras la lectura de cargos al inculpado, que incluía por primera vez su versión de los hechos imputados, y tras la recepción de su prescriptiva declaración jurada de bienes, el Juez realizaba el llamado “resumen metódico”, en el que brevemente exponía el caso y volvía a proponer los cargos que se le deberían imputar, según la Ley de Responsabilidades Políticas, al inculpado.

²⁵⁵ Está claro que las declaraciones de las inculpadas se centrarían en la medida de lo posible en no admitir los hechos imputados que más les podía comprometer en la nueva sociedad franquista. De hecho, algunas sí admiten algunos cargos, como haber asistido a manifestaciones o haber votado a partidos de izquierda, aunque intentan aclarar que nunca lo hicieron con la intención de perjudicar a nadie. Ver, por ejemplo, Expediente de Responsabilidades Políticas contra Genoveva Sales Centelles, Caja 10094. AHPCS.

Normalmente estos cargos eran ampliados respecto a la propuesta inicial. Este resumen era el que el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas tenía como referencia para dictar su sentencia.

Así, realizado el seguimiento de los casos comentados de expedientes a mujeres de Sarratella, como veremos más adelante, podemos comprobar que, pese a que, como hemos dicho, las inculpadas negaron prácticamente todos los cargos, y algunas con pruebas²⁵⁶, la sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia siempre siguió las propuestas del Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, tanto en su propuesta inicial, en la mayoría de los casos, como en su resumen metódico, o incluso en ambos. La defensa del inculpado, pues, no servía para nada y los trámites que se seguían durante el proceso no servían más que para ahondar la sensación de impotencia e indefensión del inculpado y para profundizar en su culpabilidad.

LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES

Uno de los grandes objetivos de la Ley de Responsabilidades Políticas era, como hemos visto, sancionar económicamente a los inculpados. Por ello el perfil ideal de responsable político era el que tenía una base económica suficiente para soportar o cubrir una multa lo más elevada posible. En este sentido, ya hemos visto cómo las autoridades locales debían incluir en sus informes sobre el inculpado una relación de sus bienes y su valoración económica. El proceso se completaba con el establecimiento de la obligatoriedad por parte del inculpado de la presentación en 8 días como máximo a partir de la lectura de cargos de una declaración jurada de sus bienes, con su respectiva valoración económica²⁵⁷.

²⁵⁶ Por ejemplo, algunas inculpadas no se encontraban en Sarratella cuando se destruyó la Iglesia y la ermita de la localidad y cuando se quemaron sus imágenes y, pese a ello, fueron declaradas en la sentencia final del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia autoras de dicha destrucción y quema. Por ejemplo, Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuela Alameda Cámara, Caja 10129. AHPCS.

²⁵⁷ En la práctica se solía ampliar el plazo a 10 días. Aún así algunos inculpados no presentaban en plazo la declaración jurada, lo que se solucionaba insistiendo en que lo hiciera, con lo que se acababan aceptando declaraciones juradas completamente fuera de plazo. Incluso frecuentemente el inculpado no ofrecía con claridad los datos y era obligado por las autoridades a volver a presentar nuevas declaraciones juradas.

Ya hemos visto cómo la Ley preveía para casos de ocultación o falsedad de datos en estas declaraciones juradas de bienes una imputación por un delito de desobediencia grave a la Autoridad y de falsedad en documento público. Sin embargo, era frecuente que si se detectaba alguna anomalía en dicha declaración jurada de bienes, como una ocultación de alguna propiedad o una valoración confusa de los mismos, el Juez Instructor Provincial concedía una nueva oportunidad a los mismos obligándoles a rectificar presentando una segunda declaración jurada de bienes. Si la rectificación tampoco satisfacía al Juez éste mandaba una investigación y valoración a peritos de la localidad correspondiente.²⁵⁸

Según el Artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Políticas en estas declaraciones juradas se debía incluir una relación de todos los bienes del inculcado y los de su cónyuge si estaba casado, así como los bienes de terceros en su poder y de todas sus deudas, así como el número de hijos menores o incapacitados a su cargo. En la práctica los informes incluían datos personales del inculcado como edad, estado civil, domicilio, número de hijos (fueran menores o mayores de edad) y nivel de instrucción junto con la relación de bienes, tanto propia como familiar (incluyendo padres e hijos), y su valoración económica, así como las deudas contraídas (especificando la identidad del deudor y la cuantía). Las declaraciones juradas de bienes se realizaban normalmente en un documento fruto de la libre redacción del inculcado o bien se utilizaban algunas plantillas diseñadas para el efecto. Estos documentos normalmente se redactaban en primera persona y eran firmados por los inculcados y, ante su ausencia, por su mujer, hijos o familiares más cercanos.

²⁵⁸ Esto es lo que pasó con el vecino de Almazora Enrique Vicente Corell. Tras presentar una declaración jurada de bienes el 12 de mayo de 1943 el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas Víctor Núñez Escalona detecta que no incluye una finca que las autoridades locales en sus informes le atribuyen, por lo que le ordena rectificar con una segunda declaración jurada. Ésta se presenta el 1 de junio de 1943 y en ella el inculcado se ratifica en que la finca en discordia no es de su propiedad. Tras mandar también nuevos informes a las autoridades locales, éstas rectifican y aseguran que ni el inculcado ni su mujer tienen bienes. Ante tal situación, el Juez ordena que dos peritos valoren los posibles bienes del inculcado. En su informe del 29 de octubre de 1943 los peritos concluyen que el inculcado poseía una casa valorada en 13.000 pesetas y un huerto valorado en 9.000 pesetas. Al final el caso se paraliza por no llegar el patrimonio del inculcado a 25.000 pesetas y el caso se declaró sobreseído el 18 de noviembre de 1943. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Vicente Corell, Caja 10097. AHPCS.

Las declaraciones juradas de bienes podían ser escuetas o muy detalladas, según la cantidad de bienes propiedad del inculcado y su familia, según el distinto grado de colaboración de los mismos a la hora de redactarlos o según también el nivel cultural del inculcado²⁵⁹. Un ejemplo de declaración jurada de bienes escueta es la del inculcado de Alcalá de Xivert Raimundo Antón Piquer, quien, desde la cárcel de Benicarló, tras comenzar dando sus datos personales simplemente se limita a indicar:²⁶⁰

Bienes propios: ninguno.

Bienes de terceros: ninguno.

Deudas: ninguna.

Hijos: ninguno.

Sin embargo, no todas las declaraciones juradas de bienes eran escuetas. Había vecinos que, presionados por la Ley de Responsabilidades Políticas, realizaban auténticos informes detallados de todas sus propiedades y de su valoración económica, como en el caso del vecino de Alcalá de Xivert Pascual Arnau Caudet, que reproducimos seguidamente:²⁶¹

²⁵⁹ De todas formas, son relativamente abundantes los expedientes en los que el inculcado se confiesa “sin instrucción” y presenta declaraciones juradas de bienes e, incluso, hojas de descargo perfectamente redactados, por lo que seguramente estos inculcados, incluso entre los que se encontraban en prisión, han tenido la ayuda de personas “con instrucción”. Esto se puede comprobar en ejemplos como

²⁶⁰ En este caso el hecho de realizar una declaración jurada de bienes tan escueta se debe seguramente a la falta de colaboración del inculcado, ya que su capacidad de redacción se le sobreentiende al ser maestro nacional. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Raimundo Antón Piquer, Caja 10078. AHPCS.

²⁶¹ Esta declaración jurada de bienes está firmada por su hijo, por imposibilidad física del inculcado, que presenta un certificado médico en el que se asegura que está enfermo de colitis crónica y astenia cardíaca. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Arnau Caudet, Caja 10078. AHPCS.

RELACIÓN JURADA QUE PRESENTA PASCUAL ARNAU CAUDET DE LOS BIENES DE SU PROPIEDAD ADQUIRIDOS DURANTE SU MATRIMONIO ACTUAL Y ÚNICO CON JOSEFA MORENO ESBRI

<i>Partida</i>	<i>Cultivo</i>	<i>Cabida en jornales</i>	<i>Valor en ptas.</i>
<i>Barsella</i>	<i>Almendros</i>	<i>10</i>	<i>15.000</i>
<i>Cuart</i>	<i>Almendros</i>	<i>½</i>	<i>400</i>
<i>Prigó del Rey</i>	<i>Olivar</i>	<i>5 cuartas</i>	<i>300</i>
<i>Alió</i>	<i>Viña</i>	<i>1 cuarta</i>	<i>200</i>
<i>TOTAL</i>			<i>15.900</i>

Fincas donadas a su hija Ángeles Arnau Moreno al contraer matrimonio en 29 de abril de 1925.

<i>Partida</i>	<i>Cultivo</i>	<i>Cabida en jornales</i>	<i>Valor en ptas.</i>
<i>Capicort con una casa</i>	<i>Naranjos</i>	<i>Dos jornales</i>	<i>7.000</i>
<i>Cortes</i>	<i>Olivar</i>	<i>Cinco cuartas</i>	<i>2.000</i>
<i>Balsa de Asmet</i>	<i>Almendros</i>	<i>2 jornales y ½</i>	<i>3.500</i>
<i>Camí de Alió</i>	<i>Cereales</i>	<i>½ jornal</i>	<i>700</i>
<i>Una casa calle Calvo Sotelo, 4</i>			<i>10.000</i>
<i>TOTAL</i>			<i>23.200</i>

Fincas donadas a su hijo Francisco Arnau Moreno al contraer matrimonio en 16 de enero de 1929.

Una casa con horno de cocer pan calle de san Fernando números 56-58.....20.000
No tiene más hijos que los expresados.

Alcalá de Chivert a 20 de marzo de 1940.

Por imposibilidad física no firma.

Su hijo: Francisco Arnau.

Es evidente que a través de las declaraciones de bienes podemos conocer el nivel económico del inculpado y su situación en los años de la posguerra. En muchas localidades predomina el pequeño propietario de tierras que vive del fruto de su trabajo, aunque en las localidades más importantes también encontramos inculpados que prácticamente no poseen nada y viven en una situación de auténtica pobreza. A través de estos informes también conocemos casos de abusos, injusticias y pillajes que se produjeron como consecuencia del desorden provocado por la guerra. Así, el vecino de Burriana Jesús Montañola Español desde la prisión de Totana en Murcia donde cumplía una pena de 20 años de reclusión menor declara en su escrito que no posee nada, añadiendo que *lo único que poseía eran muebles de mi hogar y la ropa mía y de mi*

*familia, cosas ambas que han desaparecido de allí donde vivía, ignorando quién las hizo desaparecer y dónde están.*²⁶²

Como es normal, los inculpadados aprovechaban todas las oportunidades que el proceso les permitía para aportar pruebas y argumentos en su defensa, y la declaración jurada de bienes también fue utilizada en este sentido. El vecino de Burriana Francisco Roca Alcayde, maestro de profesión, aprovechó su declaración jurada de bienes en este sentido:²⁶³

Francisco Roca Alcalde, declara en la presente:

Que no tiene otros bienes que su sangre, de la que hizo donación al Ejército Nacional, según consta en su carnet del Servicio Oficial de Transfusión de Sangre número 152 fecha 2 de septiembre de 1938, grupo A, firmado por el Jefe del Equipo Dr. D. Rafael Sánchez Gozalbo; pues si tuvo dinero en las sucursales en Burriana de los bancos de Valencia y Vizcaya, en 1936 y 1937 me despojaron de él para salvarme y salvar a mi hermano sacerdote D. Amalio y hermana D^a Clotilde y para comer las tres familias, cuando me quedé sin cargo, pues también me despojaron [sic] por desafecto al llamado Gobierno Rojo, del cargo de Maestro de Burriana, en cuya población he prestado servicios desde 1917 y 39 años entre Barcheta, Requena (Valencia) y Burriana (Castellón).

Hago constar que tengo dos hijos menores de edad y que mi esposa tampoco tiene bienes de fortuna ni poseemos bienes de terceros y que yo nunca he desempeñado ningún cargo político [sic] ni pertenecido a ningún partido; siempre he sido y soy católico y durante la Dictadura del General Primo de Rivera presté relevantes servicios y fundé el semanario “Patria”; proclamé patrona de las Escuelas Graduadas de Burriana a la Virgen del Pie de la Cruz y fundé varios comedores de caridad para niños y ancianos bajo el título y protección de la Santísima Virgen, según consta con toda mi vida profesional y pública en el Libro de Oro (Visitas distinguidas) y de Correspondencia de las Escuelas Graduadas de Burriana, donde siempre inauguré y cerré los cursos escolares con una misa a la que asistí con los demás maestros y niños: ésta es mi política.

Mi familia vive hoy de limosna y a expensas de mi hermano sacerdote D. Amalio, ya que no cobro nada bajo ningún concepto.

Castellón a 12 de abril de 1941.

En algunos casos el inculpadado no podía presentar la declaración jurada de bienes, por lo que la presentaba su cónyuge su cónyuge. Es el caso de Francisca Bayerri

²⁶² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jesús Montañola Español, Caja 10102. AHPCS.

²⁶³ Esta declaración jurada de bienes fue realizada en la Prisión Provincial de Castellón, donde el inculpadado estaba cumpliendo una condena de seis años y 1 día de prisión mayor dictada por un consejo de guerra sumarísimo celebrado en Castellón el 14 de septiembre de 1939. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Roca Alcayde, Caja 10094. AHPCS.

Espallarguer, vecina de Alcalá de Xivert, que tuvo que realizar la declaración jurada de bienes en abril de 1940 al no poder realizarla el inculpado, su marido Francisco Almela Griñó, que se encontraba en prisión (a pesar que la lectura de cargos sí se hizo en la prisión).²⁶⁴

Si el inculpado no presentaba finalmente ninguna declaración jurada de bienes se ordenaba la presentación de un certificado oficial de los mismos. En los casos en los que el patrimonio del inculpado era extenso u ofrecía dudas sobre su valoración el Juez Instructor Provincial ordenaba la realización de informes a una serie de peritos de la localidad con un perfil muy determinado. De hecho, el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón José Antonio González Cienfuegos, en el expediente abierto contra la vecina de Almazora Leonor Díaz López en junio de 1941, ante las dudas sobre el patrimonio de la inculpada y su valoración, determinó *que se nombren dos peritos o prácticos de reconocida adhesión a la Causa Nacional, vecinos de esa localidad*, con lo que su neutralidad era un valor al que se renunciaba expresamente. Además, el trabajo de los peritos era obligatorio y gratuito, ya que el mismo juez, tal y como ordena la Ley de Responsabilidades Políticas, especificaba que *a los peritos o prácticos nombrados se les hará saber que lo realizarán gratuita y obligatoriamente como servicio prestado a la Patria*.²⁶⁵

LA PUBLICACIÓN DE LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE EN LOS BOLETINES OFICIALES

La Ley de Responsabilidades Políticas determinaba la obligatoriedad de hacer pública la incoación de un expediente de responsabilidades políticas, estableciendo que el medio de hacerlo era la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente. En los expedientes se anotaba el número, la página y la fecha correspondientes de los Boletines en los que se había

²⁶⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Almela Griñó, Caja 10080. AHPCS.

²⁶⁵ El único bien que tenían que valorar era una casa que, según los informes de los peritos, estaba muy destrozada por los bombardeos de la aviación y que finalmente valoraron en 1.000 pesetas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Leonor Díaz López, Caja 10130. AHPCS.

publicado la incoación. Sin embargo, hemos comprobado que no todos los expedientes acabaron siendo publicados en los dos Boletines, siendo el Boletín Oficial del Estado el que tenía cierta preferencia, como lo demuestra el caso del político Fernando Gasset Lacasaña. Por otra parte, de forma complementaria también se publicaba el anuncio de la incoación de expedientes en el diario oficial local, “Mediterráneo”. En última instancia, el objetivo era hacer pública la situación del inculcado y avisar a la población por si podía aportar alguna prueba en su contra.

LA REALIZACIÓN DEL RESUMEN METÓDICO

Con todos los datos obtenidos en este momento del proceso por parte del Juez Instructor Provincial, éste realizaba el llamado “resumen metódico”, un documento en el que se destacaban de forma resumida los aspectos más importantes de la causa, como el motivo de la apertura de expediente, las conclusiones de los informes de las autoridades locales, los datos económicos procedentes de la declaración jurada de bienes y, en algunos casos, los principales argumentos esgrimidos por el inculcado en su defensa. El documento solía finalizar con una conclusión en la que el Juez Instructor emitía su opinión en cuanto a los cargos que se imputaban al inculcado y los supuestos recogidos en el Artículo 4º de la Ley en los que éste se consideraba inmerso.

Como ilustración podemos ofrecer el resumen metódico que el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón envió al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia en mayo de 1940 sobre el inculcado Pascual Arnau Caudet, vecino de Alcalá de Xivert:²⁶⁶

²⁶⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Arnau Caudet, Caja 10078. AHPCS.

“AL TRIBUNAL REGIONAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS”

DON VÍCTOR NÚÑEZ ESCALONA, Juez Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, e Instructor del expediente nº 4106 de 1940, en cumplimiento de lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 52 de la Ley de 9 de febrero de 1939, en relación con los apartados d) y e) del artículo 29 del propio Cuerpo Legal, tiene el honor de exponer:

Se inició este expediente por orden del Tribunal a quien me dirijo como consecuencia de liquidación facilitada por el Servicio de Recuperación Agrícola de esta Capital contra PASCUAL ARNAU CAUDET.

De los informes remitidos por las Autoridades de Alcalá de Chivert de quienes fueron reclamados resulta: que con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional militó siempre en los partidos de izquierda, durante el dominio rojo tomó parte de la Junta Popular antifascista y durante el tiempo que desempeñaba este cargo se efectuaron la detención de personas de derechas. Estando conceptuado como significado del marxismo.

Informan las citadas Autoridades acerca de sus bienes que los posee rústicos y urbanos que valoran en 59.100 ptas.

Citado el inculpado para que comparezca ante este Juzgado a fin de darle lectura de cargos, remitió en tiempo hábil certificado facultativo de encontrarse enfermo, dándose lectura de los cargos mediante hoja de los mismos al interesado en la localidad, la cual firma por poder Vicente Calduch y transcurrido el plazo de cinco días para que presentara la prueba documental y testifical que interese a su defensa, no presentó ninguna.

De la relación jurada de bienes presentada por el inculpado resulta poseer fincas rústicas y urbanas que valora en 59.100 ptas.

Por haberse estimado la existencia de indicios racionales de responsabilidad, se mandó a publicar en los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia, el anuncio al que se refiere el artículo 45 de la Ley, insertándose en los números 95 y 49 respectivamente.

De todo lo actuado el Juez que suscribe considera como hechos probados el haber formado parte de la Junta Popular antifascista durante el Movimiento y el estar afiliado en los partidos del frente popular antes del 18 de julio de 1936.

Dichos hechos están comprendidos en los apartados b) y c) del artículo 4º de la repetida Ley.

En atención a lo expuesto y estimando concluso el expediente se eleva a ese Tribunal para la resolución que proceda.

Notifíquese al inculpado para que recurra si a bien lo tiene ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas de esta jurisdicción.

Castellón a 15 de mayo de 1940”

El resumen metódico era enviado también al inculpado, que, por tanto, comenzaba a descubrir aspectos importantes que hasta ese momento le eran desconocidos, como el origen de la denuncia, lo que aportaban las distintas autoridades locales que con él convivían o los cargos exactos que se le imputaban. A veces, no se había realizado ni la citación para la lectura de cargos y las prevenciones de la Ley, con lo que el desconocimiento del inicio del proceso era total. La viuda de Felipe Mateo Calduch lo deja claro en su escrito de defensa: *La exponente comparece por primera vez en este procedimiento ya que hasta el momento presente no ha tenido la menor noticia de que se incoaba expediente alguno de responsabilidades políticas contra su malogrado consorte, puesto que ha sido ésta la única oportunidad que se le ha ofrecido para ello al hacerle entrega de la cédula de la notificación librada por ese Tribunal Regional poniéndole de manifiesto los referidos autos.* Tras rogar al Tribunal que tuviera en cuenta que era mujer y viuda, con poca cultura y que no se había enterado de los trámites que debía realizar, pidió al Tribunal *considerar que no ha podido defenderse a lo largo del expediente ni aportar los documentos necesarios para que hicieran prueba a su favor durante el periodo de instrucción del mencionado procedimiento.*²⁶⁷

El desconocimiento de las causas por las que la justicia franquista actuaba muchas veces era la norma. En la lectura de cargos realizada al inculpado de Alcalá de Xivert Francisco Puig Vinuesa se queja amargamente de que su hijo se halla encarcelado desde hace tiempo y que desconoce completamente las causas²⁶⁸. En este contexto, podemos imaginar que la inseguridad en que se hallaban los ciudadanos era un factor represivo muy efectivo para lograr su sometimiento.

Una vez recibido el documento, el inculpado o sus familiares disponían de tres días de plazo para presentar un recurso contra el mismo, posibilidad que se presentó en muy pocos casos y que pocas veces influyó en el resumen metódico original. Las pocas veces que el recurso se presentaba se correspondía con personas de ingresos medios más

²⁶⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Felipe Mateo Calduch, Caja 10104. AHPCS.

²⁶⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Puig Vinuesa, Caja 10079. AHPCS.

altos que la mayoría de los inculpados, con posibilidades de contratar o contar con la ayuda de un abogado, como en el caso del vecino de Alcalá de Xivert Manuel Máñez Cherta, quien presentó un largo recurso que nos sirve como ejemplo de los escasos recursos presentados en este momento procesal.

En este recurso, tras admitir haber votado a los partidos de izquierda, el inculcado se presentó como persona de escasa cultura y relevancia social, abocado desde su infancia a un ambiente político inadecuado, al trabajo y con una familia que mantener a la que se unían parientes sin recursos propios. Desmentía cualquier vinculación con el Frente Popular y aseguraba haber sido partidario de los sublevados en 1936, a los que responsabiliza de *la reacción espiritual lógica en toda persona de buenos sentimientos*, es decir, de su conversión a ideas franquistas. Su baza era, pues, admitir su pasado izquierdista y vender su conversión al franquismo. Tras negar haber ofrecido cualquier ayuda a los republicanos confirmaba que, por el contrario, había auxiliado a los perseguidos partidarios de la sublevación, lo que aseguraba poder demostrar con testimonios. Finalmente, tras invocar varios artículos de la Ley de Responsabilidades Políticas, que parecía conocer con solvencia, apelaba al espíritu de dicha Ley en cuanto al establecimiento de sanciones de acuerdo con el principio de *humana moderación* y teniendo en cuenta siempre las cargas familiares, para suplicar la exención de una responsabilidad que pretendía haber demostrado que no existía y, si ello no fuera posible, el establecimiento de una sanción de acuerdo con los principios indicados. En este caso el recurso tampoco sirvió de mucho, ya que Manuel Máñez Cherta fue condenado en marzo de 1941 al pago de 500 pesetas, cantidad que satisfizo rápidamente. Lo que sí parece claro es que se trataba de una persona con recursos económicos suficientes, capaz de asumir el servicio de asesoramiento legal y de pagar la sanción impuesta casi inmediatamente.²⁶⁹

Como hemos indicado, la presentación de recurso era una posibilidad que no era frecuente, debido a las limitaciones económicas de los inculpados y, en muchos casos, al nivel de instrucción tanto propio como de los familiares. Cuando se presentaban los

²⁶⁹ Hay que tener en cuenta que Manuel Máñez Cherta era labrador, con lo que, aunque era posible que tuviera cierta base cultural, el conocimiento de la Ley de Responsabilidades Políticas y la misma redacción de su recurso nos inclinan a pensar que gozó de la ayuda de algún abogado. El texto completo del recurso se puede consultar en el Apéndice Documental. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Máñez Cherta, Caja 10078. AHPCS.

recursos servían sobre todo para exponer la precaria situación personal y familiar del inculcado, buscando clemencia y magnanimidad en las sentencias. Es el caso de la viuda del inculcado de Argelita Francisco Herrando Ibáñez, que, en un tono suplicante, exponía claramente al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas la situación en que había quedado su familia: Viuda del procesado Francisco Herrando Ibáñez, que había fallecido en abril de 1939, a los quince días de haber ingresado en la Prisión Provincial de Castellón, y con dos hijos. Tras exculpar a su marido asegurando que siempre había sido una persona de orden y *con verdadero arraigo derechista, hasta el momento en que las hordas rojas le impulsaron a cometer actos que siempre había reprobado*, describía su situación familiar como *angustiosa tanto moral como material*, ya que era su difunto marido el que sustentaba a la familia con su trabajo. Por todo ello, esta Rosa Montins Ibáñez suplicaba que el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas declarara la no responsabilidad de su marido y que tuviera en cuenta *la situación precaria que quedaría esta modesta familia si se diera el caso de incautación o multa*. Aquí se puede observar cómo la Ley de Responsabilidades Políticas lo que buscaba era el castigo ejemplar, más allá del castigo que significaba la pérdida de la vida.²⁷⁰

Finalmente, una vez transcurrido el plazo de tres días que posibilitaba el recurso, el resumen metódico finalizaba la labor del Juez Instructor Provincial de Castellón y era remitido al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, que lo utilizaba como única referencia para dictar sentencia. Aunque no era vinculante, este Tribunal sí lo utilizaba como base para sus sentencias, por lo que su importancia era enorme. Esta relevancia provocó situaciones de abuso e ilegalidad, llegando incluso a establecer plenamente culpabilidades que, en realidad, no estaban demostradas, como se puede comprobar en el resumen metódico del expediente del vecino de Alcalá de Xivert Miguel Bou Almela, en el que el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas afirma *transcurrido el plazo legal la esposa del inculcado no presentó prueba de descargo lo que demuestra la veracidad de los hechos que se le imputan*.²⁷¹

²⁷⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Herrando Ibáñez, Caja 10070. AHPCS. El escrito es de la viuda, pero lo escribe y firma la hija del inculcado, María Herrando Ibáñez.

²⁷¹ Miguel Bou Almela fue detenido al regresar a Alcalá de Xivert, donde fue detenido y encarcelado. En estas condiciones se suicidó ahorcándose en el mes de abril de 1939, al enterarse de la caída de Valencia. Su mujer, Vicenta Colom Anglés, tuvo que soportar todo el peso del proceso de exigencia de responsabilidades políticas, que comenzó en marzo de 1940 y finalizó con el sobreseimiento del caso en

Contrariamente, pues, a lo que dicta el Derecho clásico liberal, los inculpados eran tratados como culpables si no demostraban lo contrario.

No era habitual, pero el inculpado parece que podía ser citado en cualquier momento del proceso para comparecer personalmente ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en Valencia. Es lo que le ocurrió al alcalde republicano de Gaibiel, cuyo expediente se había complicado con varios documentos de distintas personas que acudieron en su defensa, por lo que dicho Tribunal hizo que el inculpado se presentara en sus dependencias para proceder a la lectura de cargos. Tras la lectura el inculpado negó todos los cargos y solicitó la realización de nuevos informes a las autoridades locales y a las personas que el Tribunal Regional considerara oportunas.²⁷²

En el caso que el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, ante los datos obtenidos del inculpado, de las autoridades y de los testigos, no encontrara indicios de responsabilidad, el caso debía derivarse o elevarse en consulta al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, que era la instancia que debía resolver la cuestión, absolviendo en su sentencia en el caso de no encontrar indicios de responsabilidad y emitiendo una sentencia condenatoria en caso contrario.²⁷³

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL REGIONAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE VALENCIA

Una vez remitido el resumen metódico por parte del Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, éste se tomaba un tiempo para deliberar y finalmente dictaba sentencia. Las sentencias estaban numeradas por meses y en ellas se recogían datos como un resumen de los cargos imputados, el apartado o apartados del Artículo 4º de la

octubre de 1943. Sus bienes fueron embargados de forma definitiva en octubre de 1941. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Bou Almela, Caja 10078. AHPCS.

²⁷² No le sirvió de nada, porque pocos días después se dictó sentencia. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Calvo Bonet, Caja 10129. AHPCS.

²⁷³ Un ejemplo en Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benlloch Portolés, Caja 10093. AHPCS.

Ley de Responsabilidades Políticas en el que se consideraba inmerso al inculcado, la calificación de los hechos (leves, menos graves, graves o muy graves) y la resolución sancionadora propuesta.

La sentencia podía ser condenatoria o absolutoria²⁷⁴. El más frecuente era el primer caso, con lo que se dictaba una penalización que incluía obligatoriamente una sanción económica, cuya cuantía estaba teóricamente en relación a la gravedad de los hechos castigados y al patrimonio del inculcado, pero podía incluir otros aspectos como penas de inhabilitación para ejercer cargos de mando o confianza²⁷⁵, general o específica, por un tiempo determinado, alejamiento geográfico, extrañamiento, destierro²⁷⁶, pérdida de bienes²⁷⁷ o pérdida de nacionalidad, que comportaba pérdida total de bienes.

²⁷⁴ La sentencia absolutoria era excepcional y respondía a casos con influencias político-sociales o a motivos económicos. En el caso del vecino de Cervera del Maestre Juan Adell Pauls el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia le absolvió por no llegar su patrimonio a las 25.000 pesetas que marcaba la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942. La sentencia fue dictada el 14 de marzo de ese mismo año. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Adell Pauls, Caja 10131. AHPCS.

²⁷⁵ El vecino de Begís Carlos Vicente Máñez fue condenado el 8 de julio de 1941 por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas al pago de 500 pesetas y a inhabilitación para el ejercicio de cargos de responsabilidad por un periodo de 15 años. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carlos Vicente Máñez, Caja 10091. AHPCS.

²⁷⁶ El vecino de Ballestar Pedro Tellado Sabater fue condenado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia el 6 de agosto de 1940 a confinamiento durante 15 años a la provincia de Soria, además de al pago de 10.000 pesetas. Sin embargo, el mismo tribunal conocía que el inculcado se encontraba en el extranjero. No se le conocían familiares y su caso acabó sobreseído el 25 de septiembre de 1943. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Tellado Sabater, Caja 10080. AHPCS.

El vecino de Culla Daniel Segarra Orenge fue condenado el 28 de septiembre de 1940 a inhabilitación por 15 años, confinamiento por el mismo tiempo a Huesca y al pago de 3.000 pesetas. Únicamente se le pudo cobrar las 249,45 pesetas que el Servicio de Recuperación Agrícola le había confiscado. Su caso fue sobreseído el 26 de noviembre de 1943.

El vecino de la Mata de Morella Pedro Loras Loras fue condenado en abril de 1940 a inhabilitación absoluta por 8 años, al destierro a 250 km. de la provincia de Castellón y al pago de 3.000 pesetas, que finalmente tuvo que pagar su hermano. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Loras Loras, Caja 10074. AHPCS.

²⁷⁷ José Bartolín Montins, vecino de Lucena, fue condenado por sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades de Valencia el 20 de diciembre de 1941 a extrañamiento por 15 años, inhabilitación por el mismo periodo de tiempo y pérdida total de sus bienes. El extrañamiento suponía la expulsión del territorio nacional por el tiempo indicado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bartolín Montins, Caja 10129. AHPCS.

El vecino de Santa Magdalena de Pulpis Domingo Marín Bou fue condenado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia a la pérdida total de bienes el 18 de febrero de 1941. Como el inculcado fue fusilado en cumplimiento de una pena de muerte ordenada por un consejo de guerra celebrado el 30 de agosto de 1939, quien perdió todos sus bienes fue su viuda. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Domingo María Bou, Caja 10083. AHPCS.

La sentencia comenzaba a tener valor una vez comunicada al inculcado. En muchos casos esta comunicación se realizó después de mucho tiempo, lo que prolongaba la situación de precariedad y angustia del mismo. La forma de comunicación solía ser a partir de la citación del inculcado en los Juzgados Municipales²⁷⁸ o por comunicación del Director de la prisión en la que éste se encontrara²⁷⁹, aunque si el inculcado se hallaba en alguna localidad española se le notificaba a través de la alcaldía correspondiente²⁸⁰. A partir de esta comunicación el inculcado tenía un plazo de seis días para presentar nuevamente un recurso, lo que se hizo en casos muy contados y concretos. En este supuesto el caso era derivado directamente al Tribunal Nacional de Responsabilidades de Madrid²⁸¹, que difícilmente modificaba la sentencia original y cuya sentencia era definitiva e inapelable.

Una vez transcurrido el plazo de seis días sin presentación de recurso la sentencia se declaraba firme y, a partir de ese momento, el inculcado tenía un nuevo plazo de 20 días naturales para pagar la sanción económica o ejecutar la orden de alejamiento.

²⁷⁸ En el expediente de la vecina de Sarratella Carmen Martínez Sales se especifica claramente el mecanismo de la notificación de la sentencia a la inculpada: el Juez Instructor Provincial ordena que se cite en el Juzgado Municipal a la inculpada. Ésta es avisada por un alguacil y comparece ante el citado Juzgado Municipal, donde se le facilita una copia de la sentencia y firma un documento que demuestra que le ha sido notificada. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

²⁷⁹ Al vecino de Almazora Federico Martínez Vives el 22 de febrero se le comunicó la sentencia en la Prisión Central de San Miguel de los Reyes de Valencia, donde se hallaba cumpliendo la pena de 30 años de reclusión mayor que se le impuso en un consejo de guerra celebrado en Castellón el 18 de marzo de 1939. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Federico Martínez Vives, Caja 10064. AHPCS.

²⁸⁰ Es el caso de la vecina de Almazora Leonor Díaz López. Durante la mayor parte de su procesamiento por responsabilidades políticas se hallaba cumpliendo condena en la Cárcel de Mujeres de Valencia, donde se le notificó el resumen metódico y desde donde realizó su declaración jurada de bienes. Sin embargo, cuando se dictó sentencia por parte del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia el 13 de diciembre de 1941, ésta se encontraba desterrada en la población de Herencia (Ciudad Real). Allí le fue notificada la sentencia el 5 de octubre de 1942, casi 10 meses más tarde. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Leonor Díaz López, Caja 10130. AHPCS.

²⁸¹ Se puede consultar un ejemplo en Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benlloch Portolés, Caja 10093. AHPCS.

Si el inculpado se encontraba huido en el extranjero o en paradero desconocido la sentencia se notificaba a los cónyuges, familiares o herederos²⁸². Si éstos también se encontraban en paradero desconocido la sentencia se consideraba notificada con su anuncio público a través del Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.²⁸³

LA POSIBILIDAD DE PAGO A PLAZOS

El plazo de 20 días concedido para realizar el pago de la sanción económica impuesta también era el plazo establecido para que el inculpado solicitara al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia la concesión de la posibilidad de realizar el pago de dicha sanción a plazos, aludiendo normalmente imposibilidad de hacer frente de golpe a la totalidad de la multa²⁸⁴ y presentando avales que garantizaran el pago. En caso afirmativo, el Tribunal Regional establecía la manera de la realización del pago de los plazos, consistiendo normalmente en el pago de una cantidad en los primeros tres meses y posteriormente unos plazos que podían ser de meses, de tres meses o de años. Esta posibilidad suponía un mayor desahogo para el inculpado y su familia, aunque alargaba varios años la situación procesal. Sin embargo, en muchos casos los beneficiados por estos plazos vieron cómo, por efecto de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942, sus casos se declaraban sobreseídos, lo que suponía la liberación del pago de parte de la sanción impuesta.

²⁸² La sentencia contra el vecino de Alcalá de Xivert Eduardo Ferreres Sospedra se le notificó a “la cuñada de la viuda” (el inculpado había sido condenado a muerte por un consejo de guerra sumarísimo en septiembre de 1939 y ejecutado en enero de 1940) porque la viuda se encontraba “prestando servicios” en Tarragona. Se le notificó, pues, la sentencia a una hermana del inculpado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Eduardo Ferreres Sospedra, Caja 10080. AHPCS.

²⁸³ Es el caso del vecino de Lucena José Bartolins Montins. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Bartolins MONTINS, Caja 10129. AHPCS.

²⁸⁴ En muchos casos eran los familiares, sobre todo las viudas de los inculpadados, los que debían solicitar esta posibilidad de pago en plazos. En el caso del expediente contra Vicente Querol Marzá tuvo que ser el tutor de su hijo menor el que solicitara el pago a plazos, para hacer frente a la sanción de 500 pesetas impuestas y que, en teoría, debía pagar este hijo menor. Finalmente le fue concedida esta posibilidad, teniendo que realizar un pago inicial de 125 pesetas y tres plazos de 125 pesetas más el 1 de febrero de los años 1942, 1943 y 1944. Por suerte para esta familia sólo tuvo que realizar el pago inicial y el primer plazo, puesto que el caso fue sobreseído el 22 de marzo de 1944, en virtud de la reforma de la Ley de febrero de 1942. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Querol Marzá, Caja 10073. AHPCS.

Veamos un ejemplo. El inculpado de Alcalá de Xivert Pascual Arnau Caudet presentó en plazo un escrito de súplica al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas por el cual solicitaba el pago a plazos.²⁸⁵

“Al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia”

Pascual Arnau Caudet, con cédula personal de la clase décima, Tarifa segunda, número 1198 expedida en esta villa el día 24 de enero de 1941, hablando en el expediente de responsabilidades políticas que se me siguió, ante el Tribunal, como mejor proceda parezco y digo:

Con fecha 27 de abril próximo pasado se me notificó la sentencia firme por virtud de la cual se me condena al pago de 1.500 ptas.

Para evitar mayores perjuicios en mi patrimonio y en los intereses de la economía en general, y haciendo uso del derecho que le otorga el párrafo segundo del artículo 57 de la Ley de 9 de febrero de 1939, me comprometo a entregar en el plazo de tres meses la cantidad que el Tribunal fije, y a pagar el resto en cuatro años divididos por anualidades garantizándolo con la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad del Partido de San Mateo de la finca situada en este término municipal partida Barsella tierra de Almendros de sobre diez jornales poco más o menos, que linda por Norte con Francisco Pauner, Sur Herederos de Vicente Moya, Este carretera de Alcocebre y Oeste José Roca; por todo lo cual suplico al Tribunal que habiendo por presentado este escrito en tiempo y forma tenga a bien resolver como dejo interesado.

Gracia que espero alcanzar de ese digno Tribunal cuya vida guarde DIOS muchos años.

Alcalá de Chivert 6 de mayo de 1941

Por imposibilidad física, Francisco Arnau.

El resultado fue que el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas decidió concederle lo que solicitaba, teniendo que realizar los pagos de la siguiente forma: 300 pesetas en los siguientes tres meses; 300 pesetas el 1 de julio de 1942; 300 pesetas el 1 de julio de 1943; y 300 pesetas el 1 de julio de 1944. El procesamiento, pues, se prolongaba varios años más, a cambio de un pago más cómodo de la sanción.²⁸⁶

²⁸⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Arnau Caudet, Caja 10078. AHPCS.

²⁸⁶ Al final el Pascual Arnau Caudet realizó los pagos de 1941, 1942 y 1943, pero en septiembre de 1943 caso fue declarado sobreseído en virtud de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942, por lo que se libró de pagar las 300 pesetas correspondientes al pago del 1 de julio de 1944. Esta situación suscitó algunas dudas administrativas, pero su caso fue definitivamente sobreseído el 28 de febrero de 1944. Ibidem.

Finalmente, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia debía remitir información de todas las sentencias que emitía al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas con sede en Madrid, de lo que tenemos constancia en muy pocos de los casos que hemos analizado.

EL FIN DEL PROCESAMIENTO

El procesamiento por responsabilidades políticas finalizaba con el pago de la sanción económica establecida por la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. El pago se podía realizar en su totalidad, cuando el inculcado cubría de una sola vez toda la cuantía de la sanción, o, como hemos visto, a plazos, finalizando en este caso con el pago del último de los plazos, en un proceso que podía prolongarse unos cuatro o cinco años. A pesar que se acabaron pagando muchas de las sanciones, en la mayoría de los casos la sanción económica impuesta superaba ampliamente las posibilidades económicas reales de los inculcados y sus familias. Por ejemplo, pese a que los informes de las autoridades de Onda avisaban que ni el vecino inculcado Francisco Muñoz Prades ni su cónyuge disponían de bienes de ninguna clase, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas les condenó en abril de 1940 al pago de 7.500 pesetas, que, obviamente, nunca pudieron ser pagadas, prolongándose la situación del inculcado y su familia hasta el sobreseimiento y archivo del caso en marzo de 1944.²⁸⁷

La forma en la que se realizó el pago de las sanciones económicas eran mediante la presentación física del inculcado en las dependencias del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia para realizar el abono correspondiente²⁸⁸, mediante la presentación del mismo en la Delegación de Hacienda de Castellón o mediante el pago de la misma por giro postal²⁸⁹. En algunos casos el pago lo realiza un

²⁸⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Muñoz Prades, Caja 10064. AHPCS.

²⁸⁸ Jacinto Lladser Verge se trasladó desde San Quintín de Mediona (Barcelona), donde trabajaba, o desde la Jana hasta Valencia para realizar personalmente el pago de 893,65 pesetas que cubrían la sanción económica que le había sido impuesta. Concretamente realizó el pago el 28 de abril de 1941 en la secretaría de la sede del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jacinto Lladser Verge, Caja 10083. AHPCS.

²⁸⁹ El vecino de Cáliz Ramón Roure Ferreres pagó la sanción de 100 pesetas que le fue impuesta por sentencia de 8 de agosto de 1940 mediante un giro postal. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Roure Ferreres, Caja 10104. AHPCS. En algunos casos sabemos que el giro postal se

abogado que actúa como representante del inculcado o su familia²⁹⁰. Si el Estado ya se había apropiado de parte del patrimonio del inculcado su valor se descontaba de la sanción económica a pagar. Así, por ejemplo, el dinero que quedaba confiscado por el Servicio de Recuperación Agrícola era descontado del importe total de la sanción económica. De esta forma, el vecino de Cuevas de Vinromá Jaime Zaragozá Selma fue condenado el 12 de febrero de 1941 al pago de 250 pesetas. Nunca pagó la sanción, pero como el Estado le retenía 108,33 pesetas procedentes del Servicio de Recuperación Agrícola, esta cantidad fue ingresada en la “Cuenta Especial” de Hacienda, con lo que su sanción real pasó a ser de 141,67 pesetas²⁹¹. Al vecino de La Jana Jacinto Lládser Verge le fue impuesta una sanción económica de 1.000 pesetas. Como el Servicio de Recuperación Agrícola le había incautado la cantidad de 106,20 pesetas, tuvo que pagar directamente 893,65 pesetas para cubrir la totalidad de la sanción²⁹². A veces el único pago que el inculcado acababa realizando era el de esta operación administrativa, como en el caso del vecino de Alcalá de Xivert Vicente Fresquet Ferreres, quien en junio de 1940 fue condenado al pago de 2.400 pesetas, pero lo único que las autoridades

realizaba desde los Juzgados Municipales de la localidad correspondiente. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Querol Querol, Caja 10083. AHPCS.

²⁹⁰ Es el caso del vecino de Alcalá de Xivert Manuel Máñez Cherta, que fue condenado en febrero de 1941 al pago de 500 pesetas. A los 11 días de habersele notificado la sentencia el abogado de Valencia D. Juan Antonio Carrera Lucas se presentó en la secretaría del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia y, en nombre de su representado, pagó la totalidad de la sanción. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Máñez Cherta, Caja 10078. AHPCS.

En el caso del vecino de Forcall Antonio Eixarch Frasnó, en paradero desconocido, fue su suegro el que tuvo que afrontar todo el proceso y asumir todas las responsabilidades. Sin embargo, condenado en febrero de 1941 a pagar 2.000 pesetas de sanción económica, éste no realizó ningún pago, con lo que el procesamiento se prolongó hasta septiembre de 1943, cuando el caso fue declarado sobreseído. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonio Eixarch Frasnó, Caja 10083. AHPCS.

El hermano de Pedro Loras Loras, de la Mata de Morella tuvo que hacer frente a la sanción económica que se le impuso por sentencia de abril de 1940, por hallarse éste en paradero desconocido. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Loras Loras, Caja 10074. AHPCS.

Un caso parecido al anterior es el del vecino de Morella José Querol Querol. En paradero desconocido y condenado en noviembre de 1940 al pago de 50 pesetas, se le notificó la sentencia a su hermano Antonio, quien tuvo que pagar la sanción. Curiosamente la forma de pago fue ir al Juzgado Municipal y realizar un giro postal, y como los gastos de envío fueron de 0,50 pesetas sólo pagó oficialmente 49,50 pesetas de sanción económica. Aún así se consideró la sanción pagada y en enero de 1941 se decretó la liberación de los bienes de su hermano. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Querol Querol, Caja 10083. AHPCS.

²⁹¹ Como hemos indicado, nunca pagó y su caso se mantuvo abierto hasta el 14 de octubre de 1943, fecha en la que se declaró sobreseído. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Zaragozá Selma, Caja 10083. AHPCS.

²⁹² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jacinto Lládser Verge, Caja 10083. AHPCS.

podieron obtener fueron las 568,05 pesetas que le retuvo el Servicio de Recuperación Agrícola.²⁹³

Una vez realizado el pago de la sanción económica los bienes del inculcado quedaban liberados y éste recobraba su libertad y, en teoría, estaba en condiciones para su reinserción en la sociedad franquista. En teoría la sanción económica debía estar en consonancia con la situación económica del inculcado. Algunas de las sentencias cumplían este requisito y pudieron ser pagadas en poco tiempo, lo que permitía una relativamente rápida solución al procesamiento. Así, el vecino de Ayódar Manuel Peris Monzonís fue condenado el 31 de diciembre de 1941 al pago de 75 pesetas. Una vez recibida la sentencia, pudo pagarla el 25 de febrero de 1942 y el 5 de marzo de ese año se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia la liberación de sus bienes²⁹⁴. Igualmente el vecino de Castell de Cabres Ramón Giner Querol pagó el 20 de noviembre de 1941 las 50 pesetas impuestas como sanción por la sentencia que se le comunicó el 12 de noviembre del mismo año, siendo liberados sus bienes con la publicación del pago en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 23 de diciembre de 1941.²⁹⁵

Sin embargo, algunos expedientes no finalizaron de esta forma. Era relativamente frecuente que el inculcado sufriera una situación de auténtica pobreza y desestructuración económica que le impedía realizar el pago de la sanción económica. En estos casos el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia decretaba el control y embargo de sus bienes hasta que éstos sufrieran una mejora que permitiera cobrar la sanción. Es decir, el patrimonio del inculcado quedaba en vigilancia y en espera de algún progreso. De esta forma, ante el impago de la sanción de 7.500 pesetas impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Valencia el 26 de noviembre de 1939 al vecino de Almazora Federico Martínez Vives, el Juez Instructor

²⁹³ Por este motivo sus bienes fueron embargados y controlados hasta octubre de 1944, cuando su caso quedó definitivamente sobreesido. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Fresquet Ferreres. AHPCS.

²⁹⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Peris Monzonís, Caja 10130. AHPCS.

²⁹⁵ Por tanto, 39 días después de serle notificada una sanción “asequible” este ciudadano recuperó su condición de ciudadano no procesado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Giner Querol, Caja 10104. AHPCS.

Provincial Gabriel Castro Marcos ordenó el archivo temporal del caso *hasta que conste al Tribunal que el encartado ha mejorado de fortuna*²⁹⁶. En cambio, en algunos expedientes se decide realizar un embargo no “provisional” sino definitivo de los bienes²⁹⁷. En muchos de los casos simplemente el inculcado no podía pagar la sanción económica impuesta y el caso quedaba en situación de parálisis, una situación que se solucionó posteriormente con el sobreseimiento de los casos.

En cualquier caso, la situación de control, embargo o vigilancia de los bienes no suponía una carga sin importancia, ya que suponía la imposibilidad que el inculcado y su familia progresaran fuera del estricto nivel de supervivencia. Por ello algunos de los inculcados en esta situación sí acabaron pagando aunque hubiera pasado de largo el plazo establecido por la Ley. Es el caso del vecino de Almazora Vicente Monsó Morales, quien fue condenado al pago de 350 pesetas el 20 de febrero de 1941. Al no pagar la sanción sus bienes fueron embargados, lo que motivó que finalmente se pagara la sanción el 2 de enero de 1942. En este caso se prefería el pago de la sanción al embargo de bienes²⁹⁸.

Por otra parte, los familiares de los inculcados no se encontraban a salvo del embargo de bienes. En el caso del vecino de Alcalá de Xivert Lorenzo Cucala Pitarch, que fue ejecutado durante su procesamiento por responsabilidades políticas, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas sancionó a sus herederos al pago de 250 pesetas en agosto de 1941. Como en enero de 1942 todavía no habían pagado ninguna

²⁹⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Federico Martínez Vives, Caja 10064. AHPCS. La vigilancia por parte de las autoridades se supone que era estrecha, tal y como lo demuestra el caso del vecino de Alcalá de Xivert Severo Dempere Traver. Condenado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia en agosto de 1940 al pago de 1.000 pesetas, no satisfizo la sanción, con lo que el citado Tribunal ordenó el 18 de febrero de 1941 el archivo provisional del expediente hasta que constara que el inculcado hubiera mejorado de fortuna, orden que se volvió a emitir en enero de 1943, con lo que se supone que existía una vigilancia efectiva del patrimonio del inculcado. Finalmente el caso se declaró definitivamente sobreseído el 22 de marzo de 1944. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Severo Dempere Traver, Caja 10078. AHPCS.

²⁹⁷ Esta situación de embargo definitivo de los bienes del inculcado suponemos que equivalía a una pérdida total de los bienes, ya que cuando el caso queda finalmente sobreseído no se ordena, como es habitual, la liberación de los bienes del afectado. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Bou Almela, Caja 10078. AHPCS.

²⁹⁸ Pese al pago de la sanción el 2 de enero de 1942 su caso, no sabemos si por ineficacia administrativa o como castigo, no se publicó la liberación de bienes en los Boletines Oficiales. El caso no se declaró sobreseído y archivado definitivamente hasta el 6 de noviembre de 1944. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Monsó Morales, Caja 1079. AHPCS.

cantidad, se ordenó el embargo de los bienes de los herederos, lo que provocó que éstos realizaran un pago de 153,88 pesetas en abril de 1942, lo que no cubría la sanción. Los bienes de los herederos sólo fueron liberados en abril de 1943 con el sobreseimiento y archivo definitivo del caso en función de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942.²⁹⁹

La reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942 tenía como objetivos desbloquear la administración de justicia y centrar los esfuerzos represivos en la exigencia de responsabilidades políticas en aquellos casos en los que el inculcado tenía una base económica suficiente para garantizar los pagos. Por ello, se estableció que todos los casos de inculcados que dispusieran de bienes con un valor inferior a 25.000 ptas. se declararían automáticamente sobreseídos. Esto propició que muchos de los expedientes que se hallaban en proceso de liquidación por el pago a plazos o los que no se habían concluido por insolvencia de los inculcados se declararan sobreseídos, con lo que los inculcados se vieron liberados de la exigencia de responsabilidades políticas.

Por ejemplo, al vecino de Ahín Ramón Navarro Navarro el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le condenó el 14 de febrero de 1942 al pago de 500 pesetas, sanción que nunca fue pagada y que le mantuvo en situación de control de bienes y vigilancia hasta el 10 de mayo de 1944, cuando su caso fue declarado sobreseído en virtud de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942. En este caso, pues, esta persona y su familia estuvieron 2 años y 1 mes en una situación de precariedad y sospecha. Si consideramos que su procesamiento por responsabilidades políticas comenzó el 21 de junio de 1941, todo el proceso les afectó prácticamente 3 años³⁰⁰. La situación de precariedad de muchos de los condenados no les permitía incluso afrontar pagos como el impuesto contra el vecino de Almedíjar Eusebio Martín Pérez, al que se le impuso una sanción de 100 pesetas que nunca pagó. Su caso fue sobreseído en mayo de 1944, 3 años después de la incoación del expediente³⁰¹. En algunos casos el proceso fue muy largo. Vicente Sánchez Balaguer, vecino de Borriol,

²⁹⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Lorenzo Cucala Pitarch, Caja 10079. AHPCS.

³⁰⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ramón Navarro Navarro, Caja 10130. AHPCS.

³⁰¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Eusebio Martín Pérez, Caja 10130. AHPCS.

fue condenado el 26 de noviembre de 1939 al pago de 2.500 pesetas. Como nunca pagó su situación procesal se prolongó casi 5 años, ya que su caso se declaró sobreseído el 23 de abril de 1944.

Frecuentemente el peso de la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas caía directamente no sobre los inculpad@s sino sobre sus familiares, como podemos observar en algunos ejemplos de vecinos de Castellón. Manuel Almela Prats fue condenado el 17 de mayo de 1939 a la pena de muerte, que se ejecutó el 19 de junio del mismo año. Como sabemos, esta circunstancia no detenía el proceso de exigencia de responsabilidades políticas y el 9 de septiembre de 1939 se le incoaba un expediente. A pesar que todas las autoridades locales de Castellón (excepto la inexistente del cura párroco) indicaban que ni él ni su familia poseían ningún tipo de bienes, fue condenado por sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia a la sanción de 7.500 pesetas, siendo su madre la que tenía que hacer frente a la misma. Obviamente la sanción nunca se pagó, pero los escasos bienes de la madre fueron vigilados y embargados hasta el sobreseimiento y archivo definitivo del caso, el 14 de marzo de 1945. El proceso represivo había durado prácticamente seis años.³⁰²

Un caso parecido fue el de Enrique Monzonís Ferrán, condenado también el 17 de mayo de 1939 a doce años y un día de reclusión menor, fue recluido en la Prisión Provincial de Castellón, desde donde asistió desde el 9 de septiembre de ese mismo año a su nuevo procesamiento por responsabilidades políticas. Nuevamente los informes de las autoridades locales destacan la no disposición de ningún tipo de bienes, calificando su situación económica como “bastante precaria”. Esta circunstancia la ratificó el propio inculpad@ en su declaración jurada de bienes, realizada desde la prisión el 10 de septiembre. Finalmente fue condenado el 26 de noviembre de 1939 por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas al pago de 3.750 pesetas, sanción que le fue comunicada no a él en la prisión, sino a su madre. La sanción tampoco se pudo pagar y los precarios bienes familiares fueron controlados y embargados hasta el sobreseimiento y archivo definitivo del caso el 25 de noviembre de 1944, cinco años y medio después de la celebración del consejo de guerra inicial.³⁰³

³⁰² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manel Almela Prats, Caja 10064. AHPCS.

³⁰³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Monzonís Ferrán, Caja 10064. AHPCS.

Hubo también casos en los que el colapso administrativo de la jurisdicción de Responsabilidades Políticas o la imposibilidad de localizar al inculcado o a sus familiares llevó a la no conclusión de los expedientes, a lo que seguramente también contribuyó el hecho que los inculcados ofrecían un perfil económico que dejaban bien a las claras su incapacidad de afrontar cualquier sanción económica. De esta forma, el caso del vecino de Albocácer Enrique Monfort Miralles se archivó en agosto de 1944, tres años después de su incoación, porque era desconocido completamente en la localidad y no se conocía su paradero³⁰⁴. Muchos expedientes dejaron de interesar a las autoridades y claramente fueron abandonados, por lo que nunca tuvieron sentencia. En este caso el expediente finalizaba con la revisión general de casos provocada por la reforma de la Ley de febrero de 1942 y el consiguiente sobreseimiento.³⁰⁵

Otro caso que podía ocurrir era la interrupción del pago de la sanción económica en los casos de mayor pobreza, en virtud de la reforma de la Ley. Así, la viuda del inculcado ejecutado Justo Sanz Albalade, de Alcora, condenado al pago de 2.000 pesetas en febrero de 1941, solicitó el pago de dicha sanción a plazos. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le concedió la posibilidad de pagar 125 pesetas cada trimestre hasta julio de 1946. La viuda sólo pudo realizar el primer pago, pero tuvo la suerte que en septiembre de 1943 el caso fuera también declarado sobreseído.

Finalmente todo el proceso acababa con la publicación en los Boletines Oficiales del anuncio de sobreseimiento del caso, con lo que los bienes del inculcado quedaban liberados, los inculcados recuperaban su libertad teórica personal y el caso quedaba definitivamente en espera de ser archivado. La resolución del sobreseimiento se debía tramitar con urgencia, para evitar un mayor colapso administrativo, tal y como lo demuestra el siguiente documento-tipo de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas de abril de 1946:³⁰⁶

³⁰⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Enrique Monfort Miralles, Caja 10099. AHPCS.

³⁰⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Bou Tamborero. Caja 10073. AHPCS.

³⁰⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Galí Fraga, Caja 10080. AHPCS.

COMISIÓN LIQUIDADORA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Devuelvo a V.S. el expediente seguido contra el inculcado anotado al margen, comunicándole que en el mismo se ha dictado por esta Sala AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, fecha 27 de junio de 1945, que ha quedado firme por no haberse interpuesto recurso por el Ministerio Fiscal, debiendo por V.S. acordarse:

1º Que se notifique al interesado.

2º Que se publiquen los edictos prevenidos para estos casos.

3º Que se dejen sin efecto las medidas precautorias adoptadas, incluso el nombramiento de administradores, interventores, etc.

4º Que se cancelen las anotaciones preventivas, si se hubieren producido y todas cuantas diligencias estuvieran acordadas por virtud de las prescripciones de la Ley de 27 de septiembre 1940.

5º Que se devuelvan los bienes intervenidos a los interesados, así como los productos líquidos de los mismos.

Sírvase V.S. cumplimentar esta orden con la urgencia posible, dado el carácter preferente de esta jurisdicción, y dar cuenta a esta Sala de haberse ejecutado, acusando recibo de la presente y del expediente.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Madrid, 11 de abril de 1946.

Al Sr. Juez de Instrucción de Castellón.

El último paso del procesamiento por responsabilidades políticas era el del archivo definitivo del caso, con meros efectos administrativos, que podía realizarse en muy poco tiempo o durar meses o incluso algunos años³⁰⁷. El tiempo de espera del

³⁰⁷ En el caso del vecino de Bechí Vicente Amorós Meneu la sanción de 250 pesetas impuesta por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas fue pagada el 31 de octubre de 1941, siendo publicada la liberación de bienes en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 15 de noviembre del mismo año. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Amorós Meneu, Caja 10093. AHPCS.

El vecino de Castellfort Francisco Molés Peiró pagó la sanción que se le había impuesto de 250 pesetas el 14 de febrero de 1942 y dos días después apareció en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón la liberación de sus bienes. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Molés Peiró, Caja 10103. AHPCS.

Sin embargo, otra cuestión era el archivo definitivo del expediente, que podía tardar mucho más tiempo. Los bienes de José Querol Querol, vecino de Morella, quedaron liberados el 16 de enero de 1941, tras el pago de la sanción de 50 pesetas impuesta por sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Aún así, su expediente quedó definitivamente archivado el 4 de noviembre de 1943, casi tres años más tarde. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Querol Querol, Caja 10083. AHPCS.

En algunos casos se sobreseía y se archivaba el mismo día, como en el ejemplo del vecino de Onda Antonio Diago Torres, al que se condenó por sentencia de 28 de noviembre de 1939 al pago de 2.000 pesetas, que nunca fueron pagadas y que dejaron su caso estancado hasta el 22 de marzo de 1944, cuando se declaró de golpe sobreseído y archivado.

En ocasiones todo el proceso era lento y tremendamente largo. El vecino de Villahermosa del Río Gonzalo Castillo Mollón fue condenado el 27 de diciembre de 1939 al pago de 500 pesetas, cantidad que pagó en su totalidad el 28 de febrero de 1941, 1 año y 2 meses después. Rápidamente, concretamente el 6 de marzo de 1941, se publicó en los Boletines Oficiales la liberación de sus bienes. Sin embargo, su caso

inculpado al archivo definitivo de su caso no solía tener consecuencias para el mismo, que ya disponía libremente de sus bienes tras haber satisfecho la sanción económica que dictaba la correspondiente sentencia. Sin embargo, las autoridades podían todavía “incordiar” al inculpado con la exigencia de documentación, vigilancia u otras molestias que, en cierta forma, le recordaban que estaba todavía en vigilancia o bajo sospecha.³⁰⁸

no se archivó definitivamente hasta el 11 de diciembre de 1943. Es decir, desde la publicación de la sentencia hasta el archivo definitivo del caso transcurrieron prácticamente 3 años.

³⁰⁸ Por ejemplo, al maestro nacional de Castellón Vicente Artero Pérez, pese a que se publicó en el Boletín Oficial del Estado que había satisfecho la sanción económica impuesta y que ya podía disponer libremente de sus bienes, todavía en octubre de 1943, antes de proceder al archivo definitivo del caso, se le exigía la presentación de la carta de pago de la sanción económica, un pago que se había realizado en diciembre de 1940. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Artero Pérez, Caja 10068. AHPCS.

7. El procesamiento de las mujeres de Sarratella



Sarratella es una pequeña población que se encuentra en la comarca de la Plana Alta a medio camino entre el mar Mediterráneo y las montañas de el Maestrat, situada en plena Serra d'en Galceran. En 1940, según el Censo de Población, tenía 416 habitantes, repartidos en 195 varones y 221 mujeres¹. Se trataba, pues, de uno más de los pequeños pueblos de la provincia de Castellón dedicado a la agricultura de secano, sobre todo centrada en el olivo y el almendro, con una estructura socioeconómica basada en la figura del pequeño propietario agrícola, como en la mayoría de localidades vecinas, y que todo parece indicar que vivió durante la guerra civil una situación tensa y difícil que propiciaría la proliferación en los primeros años del franquismo de acciones de venganza y ajuste de cuentas². De hecho, tal y como hemos visto, fue en Sarratella donde hemos detectado una mayor intensidad relativa en la exigencia de responsabilidades políticas.

Efectivamente, Sarratella fue la localidad de la provincia de Castellón con mayor porcentaje de población afectada por la Ley de Responsabilidades Políticas, un 16,58%. Fue la localidad con mayor porcentaje de población masculina afectada por dicha Ley, un 26,6%, y también la localidad con mayor porcentaje de población femenina directamente afectada, un 7,7%. Si consideramos que el procesamiento de un miembro

¹ Censo de población de hecho del año 1940. Clasificación por municipios. Provincia de Castellón de la Plana. *www.ine.es*.

² Desgraciadamente no tenemos referencias de estudios históricos que traten de la República y la guerra civil en esta población, como pasa con tantas otras localidades de la provincia de Castellón.

de una familia por responsabilidades políticas podía tener graves consecuencias para el resto de la familia y que, por término medio, según los expedientes analizados, cada familia podía estar compuesta de 4 personas, podemos observar que, dado que los afectados de Sarratella fueron 69, 52 hombres y 17 mujeres, la Ley de Responsabilidades Políticas pudo afectar a unas 276 personas, un 66,3% de la población de esta localidad o, lo que es lo mismo, a 2 de cada 3 personas³.

Ya hemos comentado que conocemos la fecha de incoación de 58 de estos expedientes, que indican claramente que fue el bienio 1940-1941 el de mayor intensidad represiva. Así, hemos de recordar que en 1939 tenemos noticias de la incoación de 1 expediente, en 1940 está documentada la incoación de 30, en 1941 de 21 expedientes y, finalmente, en 1942, de los 6 últimos. En 12 casos, pues, desconocemos la fecha de incoación de expediente.

Uno de los aspectos en los que destaca el procesamiento de los vecinos de Sarratella por responsabilidades políticas es el elevado número de mujeres procesadas. Con un total de 17 mujeres⁴, el 7,7% de la población femenina de la localidad se vio directamente procesada⁵. Es este aspecto, el procesamiento de mujeres, el que pretendemos analizar como muestra representativa de la represión directa que la Ley de Responsabilidades Políticas suponía también para este sector de la población.⁶

Los expedientes de responsabilidades políticas por los que se procesó a las 15 mujeres de Sarratella que analizamos tuvieron un origen muy determinado y claro: la denuncia realizada por el Delegado Local de FET y de las JONS, Ismael Villalonga

³ Posiblemente esta cifra es algo superior a la real, porque hay casos en los que se expedientan a varios miembros de la misma familia, pero incluso si rebajamos estas cifras al 50% de la población se trata de cifras muy elevadas.

⁴ En el Archivo Histórico Provincial de Castellón únicamente podemos encontrar 15 de estos 17 expedientes, por lo que hay dos expedientes actualmente sin localizar.

⁵ Si elimináramos a la población femenina menor de 14 años el porcentaje sería aún mayor y más representativo, pero el Censo de Población de 1940 no especifica las edades.

⁶ Evidentemente la Ley de Responsabilidades Políticas afectó en casi la totalidad de sus expedientes a la población femenina, porque, como veremos en algunos ejemplos más adelante, normalmente eran las mujeres las que tenían que asumir las consecuencias de esta Ley, sea porque estuvieran directamente afectadas como en los casos que pasamos a analizar, o sea por tener que sufrir las consecuencias de las condenas a sus maridos, hermanos o hijos.

Ortiz. Estamos ante un caso de denuncia masiva de la población ya que el mencionado falangista denunció a 13 de estas mujeres el 30 de diciembre de 1940 y a las 2 restantes el 31 de diciembre de 1940⁷. Las razones para llevar a cabo este proceso de denuncia masiva pueden ser muy variadas: desde el cumplimiento de órdenes superiores a procesos de depuración para afianzar el poder personal a nivel local, el estricto ajuste de cuentas o la búsqueda del castigo ejemplarizante, siendo esta última razón la que, según los expedientes consultados, parece la más congruente. De cualquier forma, lo que sí parece claro es que hubo un interés especial por denunciar a un grupo de mujeres por su actitud anterior a la imposición del franquismo. Esta voluntad expresa de denuncia contra las mujeres se evidencia en el hecho que ninguna de ellas fue acusada de cometer directamente ningún delito⁸. Es más, existió una evidente voluntad de provocar un castigo más intenso, ya que se penalizaba a mujeres que ya estaban sufriendo una situación delicada por tener al marido y/o a los hijos en la cárcel. Se trataba, pues, de castigar a un grupo social, las mujeres, a las que no se perdonaba haber dado en tiempos de democracia un paso adelante hacia la normalización pública de sus vidas. En este sentido, estas mujeres pagaban su doble condición de izquierdistas y de mujeres.

Hemos de tener en cuenta, siguiendo a A. Aguado⁹, que una de las consecuencias de la guerra civil fue la alteración de la vida cotidiana, que llevó a las gentes a salir de sus casas y llevar a cabo acciones que nada tenían que ver con las pautas de comportamiento anteriores. Así, en un ambiente marcado por la tensión, la violencia y el miedo, las personas que vivían en las zonas de retaguardia, como la provincia de Castellón y Sarratella, desarrollaron actitudes encaminadas a vivir su vida cotidiana intensamente, lo que frecuentemente llevaba a una actividad desbordante, urgente e inmediata que desbordaba lo que se consideraba “normalidad”. En este contexto habría que entender la asistencia de las inculpadas analizadas a las

⁷ Como hemos indicado anteriormente, este falangista también denunció a como mínimo una persona más de Sarratella el 30 de diciembre de 1940 y a personas de las poblaciones vecinas.

⁸ Sobre todo se denuncian actitudes frente a hechos cometidos. Aunque hemos de recordar que la alteración del delito de rebelión militar convertía en delitos actos perfectamente normales y legales producidos en tiempos democráticos, como asistir a una manifestación, afiliarse a un partido político o a un sindicato o expresar libremente las opiniones personales.

⁹ A. AGUADO y M.D. RAMOS, *La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana*. Madrid, 2002, pp. 240-268.

manifestaciones que se les acusaba, acción que se veía agravada por su condición de mujer, cuyo papel público tradicional era prácticamente inexistente.

Por otra parte, la guerra civil generó un desarrollo de las expectativas de integración social e independencia de las mujeres. Aunque con una duración limitada y un alcance relativo, apareció la figura de una “mujer nueva”, capaz de asumir roles sociales públicos en igualdad respecto al hombre, como su incorporación al ejército popular y al mundo laboral. Aún así, las mujeres fueron las que con su esfuerzo y sacrificio sostuvieron la supervivencia cotidiana en las dificultades generadas por la guerra.

Pero, ¿quiénes eran estas mujeres a las que era necesario castigar cuando la guerra civil hacía 1 año y 8 meses que había finalizado? Se trataba, en primer lugar, de mujeres con una edad media elevada, situada en 51,6 años. La más joven tenía, a finales de 1940, 22 años y la más mayor tenía 72 años. Por grupos de edades encontramos la siguiente división:

< 30 años.....	1
30-39 años.....	4
40-49 años.....	7
50-59 años.....	2
> 60 años.....	3

Eran, por tanto, en general, mujeres en etapa de madurez que tenían una familia claramente estructurada y con importantes cargas familiares, lo que las convertía en escasamente sospechosas de protagonizar ningún movimiento revolucionario. Todas ellas eran casadas y declararon en sus expedientes que no tenían profesión, especificando que se dedicaban a las tareas del hogar¹⁰ ¿podemos considerar, pues, que estas “amas de casa” eran un peligro para la sociedad y para el franquismo? ¿Podía representar un peligro social una mujer de 72 años?

¹⁰ Sólo en un caso se alude a que la inculpada trabajaba anteriormente en un negocio de venta de piezas textiles y justamente esta actividad es utilizada en su contra al manifestar el denunciante que aprovechaba su trabajo de despacho de telas tras un mostrador para realizar todo tipo de propaganda de las fuerzas políticas de izquierdas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra María Pastor del Rosario, Caja 10093. AHPCS.

En cuanto a sus cargas familiares, como mínimo¹¹ sólo 1 de las mujeres no tenía hijos, 3 mujeres tenían 1 hijo, 4 mujeres tenían 2 hijos, 2 mujeres tenía 3 hijos, 2 mujeres tenían 4 hijos y 1 mujer tenía 6 hijos, mientras en uno de los expedientes la procesada se limita a decir que no tenía hijos menores o incapacitados, información que era la que realmente demandaba la Ley de Responsabilidades Políticas. Sin embargo, las cargas familiares no se limitaban a la prole. Algunos de estos hijos eran mayores de edad y eran en teoría independientes, pero la situación bélica y la posguerra los convirtieron en dependientes, incluso gravemente dependientes. Así, 5 de las 15 mujeres tenían a hijos en la cárcel por delitos políticos, destacando especialmente el caso de la mujer con seis hijos, en el que la inculpada tenía 1 hijo en la Prisión de Castellón, otro en la de Burriana, un tercero que estaba ciego y, además, tenía a su cargo un nieto de 8 años.¹²

Las cargas no finalizaban con los hijos, ya que en 9 casos los maridos también se encontraban en la cárcel y estas mujeres debían encargarse parcialmente de su manutención, vestido, etc., con lo que debían multiplicar sus esfuerzos¹³. Los maridos que no se encontraban en la cárcel podían sufrir de otras variadas formas modo la represión franquista. Así, en uno de los casos se dice que el marido también está siendo procesado por responsabilidades políticas¹⁴ y en otro se asegura que las fincas de la familia están embargadas por las autoridades por seguirse contra el marido un expediente de responsabilidades políticas¹⁵. En un caso diferente el marido, y con él su mujer, tuvieron que irse a vivir a otra población¹⁶. Finalmente, uno de los maridos se encontraba en filas, cobrando un sueldo diario de 25 céntimos¹⁷. Aunque el marido no

¹¹ En algunos expedientes las inculpadas nombran a todos sus hijos, pero en otros expedientes únicamente nombran a los hijos menores de edad o dependientes, que era lo que realmente les exigía la Ley de Responsabilidades Políticas, por lo que a estas cifras podría añadirse algún hijo más.

¹² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicenta Monfort Peraire, Caja 10143. AHPCS.

¹³ El papel que jugaron las mujeres durante la posguerra como sostenimiento de la base familiar y como apoyo fundamental para sus familiares encarcelados se analiza en F. ROMEU, op. cit.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

¹⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonia Barberá Beltrán, Caja 10093. AHPCS.

¹⁷ Se trataba del marido de Adelina Pastor Sales, quien en su declaración jurada de bienes informaba que vivía de cobrar un sueldo de 2 pesetas diarias de la Jefatura de Subsidio al Combatiente. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Adelina Pastor Sales, Caja 10129. AHPCS.

estuviera en prisión la situación no era esperanzadora. Por ejemplo, en uno de los expedientes se comenta que al marido sólo le dan trabajo *algún día al año*, cobrando en ese caso un jornal compuesto de 6 pesetas más la comida¹⁸. En otro ejemplo el marido se encuentra en situación de prisión atenuada, con lo que estaba estrechamente vigilado por las autoridades¹⁹. Sólo en uno de los casos se dice que la familia vive del trabajo agrícola del marido en las pequeñas fincas familiares, pero se trata de un marido que según la denuncia había hecho guardias durante la República, por lo que lo más normal es que también se siguiera contra él un procesamiento paralelo por responsabilidades políticas.²⁰

En otro orden de cosas el nivel de instrucción de las inculpadas era bajo. De las 15 mujeres procesadas 7 se declaran completamente analfabetas y 3 confiesan tener *un poco de instrucción*²¹ o se declaran *con poca instrucción*²², mientras únicamente 3 declaran saber leer y escribir²³. En los 2 casos restantes no se especifica el nivel de instrucción de la inculpada, aunque, como no se especifica, se les supone bajo. De hecho, en uno de estos dos expedientes la procesada manifiesta *que jamás he hecho propaganda para las izquierdas ni tenía cultura para ello*.²⁴

Por tanto, se trataba de un grupo de personas que no podían suponer ninguna amenaza ni por su edad, ni por su profesión, ni su capacidad económica, ni por su nivel de instrucción. Lo que realmente les hacía, a ojos de las autoridades franquistas, merecedoras de un castigo era su actitud respecto los diversos acontecimientos

¹⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuela Alameda Cámara, Caja 10129. AHPCS.

¹⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Visitación Monfort Sales, Caja 10143. AHPCS.

²⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

²¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juana Sales Centellles, Caja 10143. AHPCS.

²² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ana Sales Beltrán, Caja 10143; y Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juana Sales Centelles, Caja 10143. AHPCS.

²³ Se trata de la inculpada más joven, con 22 años, de dos mujeres más de 47 y 48 años. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Adelina Pastor Sales, Caja 10129; Expediente de Responsabilidades Políticas contra Visitación Monfort Sales, Caja 10143; y Expediente de Responsabilidades Políticas contra Amparo Sales Beltrán, Caja 10143. AHPCS.

²⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonia Barberá Beltrán, Caja 10093. AHPCS.

producidos en tiempos de la República, el hecho de pertenecer a la familia de opositores al franquismo y, especialmente, su condición femenina. El estilo de vida y el modelo de mujer que representaban estas mujeres repugnaban a las autoridades franquistas y les hacían merecedoras de un intenso proceso de depuración.

Las acusaciones que se realizaban a estas mujeres se basaban en actitudes que éstas habían adoptado durante los años de la República ante hechos de diversa naturaleza como el problema religioso, el respeto a las personas de derechas o el asesinato o encarcelamiento de personas conservadoras, así como haber protagonizado actos como asistir a manifestaciones, votar por partidos de izquierda, pertenecer a partidos políticos y/o sindicatos, hacer propaganda política o asistir y/o participar en la destrucción de la Iglesia de la localidad y la quema de sus imágenes religiosas. También se les imputaron acciones ajenas, realizadas por otras personas. Por ejemplo, el hecho que el marido, un hijo o un hermano cometiera algún acto considerado contrario al franquismo, o simplemente su permanencia en la cárcel, pasaban a formar parte de la acusación de estas mujeres. El siguiente ejemplo ilustra cómo eran las denuncias:²⁵

Ismael Villalonga Ortiz, Jefe local de FET y de las JONS de Sarratella, emite ante V.E. el siguiente informe-denuncia de la vecina de ésta Amparo Sales Beltrán, de 26 años, casada, natural de ésta, sus labores, que habita en Arrabal, cuya conducta es como sigue:

Antes de GMN se destacó por su afección y simpatía con los marxistas, yendo en cabeza en toda manifestación gritando y dando voces contra todos los valores mejores de nuestra Patria. En las elecciones aunque no tenía voto, iba animando a sus compañeras para que fueran a votar. Insultaba a nuestra Santa Religión Católica en la persona del sacerdote, al cual calumniaba muchísimo. Asistió por propio placer a la destrucción y quema de los Altares y Santos lo mismo en la Iglesia, que en la ermita de San Juan. Su marido se halla en prisión atenuada.

Los bienes que le corresponden heredar son por valor aproximado de cinco mil pesetas. Sarratella 31 de diciembre de 1940.

Firmado por el Jefe Local de FET de las JONS Ismael Villalonga.

Al Sr. Juez Instructor Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia.

A continuación ofrecemos un cuadro resumen de las distintas acusaciones que el Delegado Local de FET y de las JONS de Sarratella imputó a estas mujeres:²⁶

²⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Amparo Sales Beltrán, Caja 10143. AHPCS.

²⁶ Hemos preferido en estos casos obviar el nombre de las acusadas porque creemos que no es un dato necesario e imprescindible para las conclusiones del análisis. Por ello hemos numerado los casos de estas mujeres del 1 al 15.

Cuadro 7.1

ACUSACIONES SOBRE HECHOS ANTERIORES DEL 18 DE JULIO DE 1936

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Revolucionaria/marxista	•				•	•				•		•		•	•
Odiar a las derechas	•												•		
Asistir a manifestaciones	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Votar a izquierdas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Simpatizante izquierdas		•	•					•							
Gritos contra las derechas		•					•	•	•	•		•	•		•
Burla al sacerdote ²⁷		•					•								
No bautizar a los hijos	•														
Odiar la religión	•							•							
Insultadora					•		•	•	•	•		•	•	•	•
Interventora Frente Popular					•										
Participación en motines						•				•			•		•
Bailar y cantar ofensas					•	•		•		•					
Animó a vecinas a votar						•	•						•	•	
Atrajo personas a su partido						•									
Asistió a mítines						•									
Propagandista del marxismo							•				•				•
Ateísmo								•	•						
Impedir voto de las derechas											•				

Fuente: AHPCS, Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

²⁷ Concretamente al sacerdote Remigio Meliá. Por ejemplo, a Juana Sales Centelles se le acusó de llamar a este sacerdote el grave insulto de “el cuervo”. Según el Comandante del Puesto de la Guardia Civil, Esteban López, en su informe, Juana Sales Centelles *iba a propósito a la cárcel a insultar al cura preso*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juana Sales Centelles, Caja 10143. AHPCS.

El alcalde de Serratella, Antonio Beltrán, acusó a Rosa Valls Monfort de llamar “zángano” al sacerdote de la localidad. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Rosa Valls Monfort, Caja 10143. AHPCS.

También existen referencias a insultos al sacerdote Víctor Julián. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

Como podemos comprobar, las acusaciones básicamente se centraban en haber votado a partidos políticos de izquierda en las elecciones²⁸, haber asistido a manifestaciones²⁹ y haber insultado o haberse mofado de las personas de derechas en algún momento³⁰, sobre todo en el momento de emitir el voto, en las mismas manifestaciones o en el momento en el que dichas personas se dirigían a misa. Es especialmente significativa la acusación de animar a otras mujeres a votar, lo que denota una especial concepción perversa de estas mujeres.

Además, a todo ello se unían los componentes ideológico de ser partidarias de los partidos políticos de izquierda, cuando no del marxismo, calificándolas muchas veces de revolucionarias o revoltosas, y el religioso, calificándolas de ateas o enemigas de la religión.

²⁸ En 3 de los casos se especifica que votaba a Izquierda Republicana, mientras que en el resto de los casos se dice que la inculpada votaba al Frente Popular.

²⁹ Como hemos comprobado, la acusación de participar en manifestaciones era generalizada, aunque con matices según el caso. Así, acusaba a estas mujeres de *asistir a las manifestaciones con entusiasmo, encabezar las manifestaciones, estar en primera fila en las manifestaciones o asistir a manifestaciones pese a su juventud*,

³⁰ Es curioso cómo en este aspecto el denunciante da mucha importancia a las formas, ya que se distinguía el insulto simple o el que utilizaba bailes, gritos, canciones o coplas.

Cuadro 7.2

ACUSACIONES SOBRE HECHOS POSTERIORES AL 18 DE JULIO DE 1936

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ³¹
Asistir destrucción iglesia	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Negar existencia de Dios	•									•					
Anticatólica			•				•				•				
Insultó al sacerdote					•				•				•		
No bautismo/comunión hijos	•									•				•	
Animar a incautaciones		•													
Enemiga de la religión		•													
Insultadora del caudillo		•	•	•			•	•			•	•			
Insultadora de derechistas									•						
Manifestaciones marxistas		•								•					
Atraer mujeres a izquierda			•								•				
Realizar propaganda			•												
Familiares en la cárcel				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Perteneció partido político						•								•	
Se alegraba por asesinatos								•	•						

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

³¹ En este caso no se le imputaron delitos después del 18 de julio de 1936.

Las acusaciones sobre hechos ocurridos con posterioridad al inicio de la guerra civil se centraban, pues, en la asistencia a la destrucción de la Iglesia de Serratella³², en proferir insultos a Francisco Franco y al ejército franquista, así como el hecho de tener familiares en la cárcel³³ por motivos fundamentalmente políticos. Como en el anterior grupo de acusaciones el componente religioso jugaba un papel importante, centrándose en la convicción personal atea de las inculpadas, la negación a que sus hijos recibieran algún sacramento, incluso en el año 1940, y el insulto tanto a sacerdotes como a las personas religiosas que asistían a misa. Las implicaciones en hechos de tipo político eran secundarias, ya que ya se habían dejado claras en el anterior grupo de acusaciones.

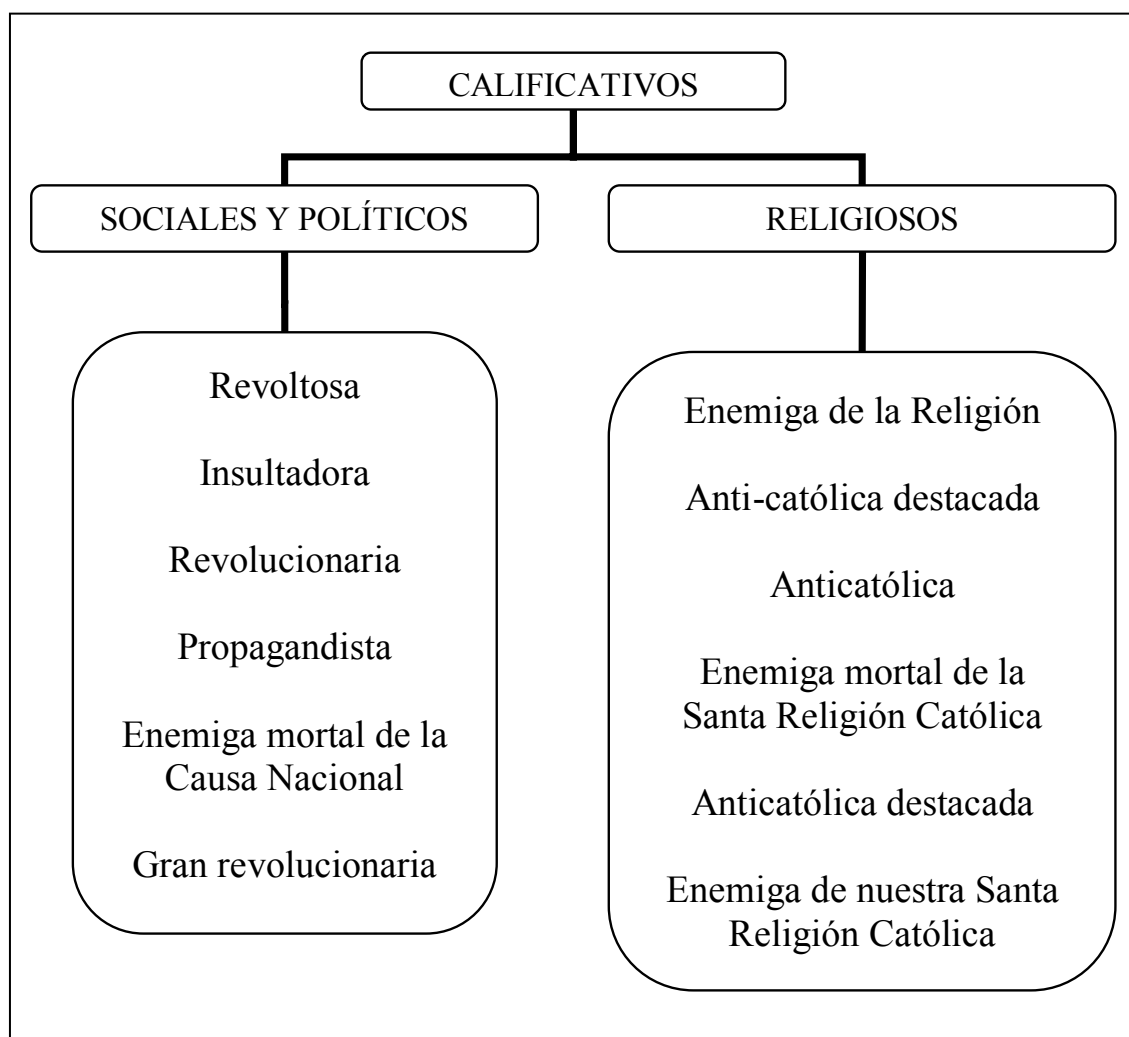
El lenguaje que utilizó el Delegado Local de FET y de las JONS de Serratella para redactar las denuncias de estas 15 mujeres ofrecen una imagen negativa y descalificadora de las mismas, adelantando su más que presunta culpabilidad en relación a su procesamiento por responsabilidades políticas. Esta concepción negativa que ofrece Ismael Villalonga Ortiz está en consonancia con las expresiones y los calificativos que utilizó para caracterizar a la República y los años republicanos, en claro contraste con los empleados para describir el régimen franquista y las personas que lo apoyaban. A continuación ofrecemos dos cuadros en los que se recogen las principales expresiones y calificativos que utilizó este falangista en sus denuncias:

³² Se citan la destrucción de la Iglesia de Serratella y de la ermita de san Juan de dicha localidad. En algunos expedientes se especifica que posteriormente se quemaron los altares y las imágenes de dicha iglesia. Frecuentemente se pretendía enfatizar la gravedad de la acusación informando que la inculpada había asistido a dicha destrucción y quema acompañada de los hijos o del marido y los hijos. Como curiosidad a Ana Sales Beltrán se le acusó de apropiarse de una cortina de la iglesia para confeccionarse una cortina para su casa, extremo que la inculpada negó en todo momento. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ana Sales Beltrán, Caja 10143. AHPCS.

³³ Fundamentalmente se trataba de los maridos, aunque también de hijos y de algún hermano. Las prisiones en las que se encontraban eran las de Castellón y Burriana.

Cuadro 7.3

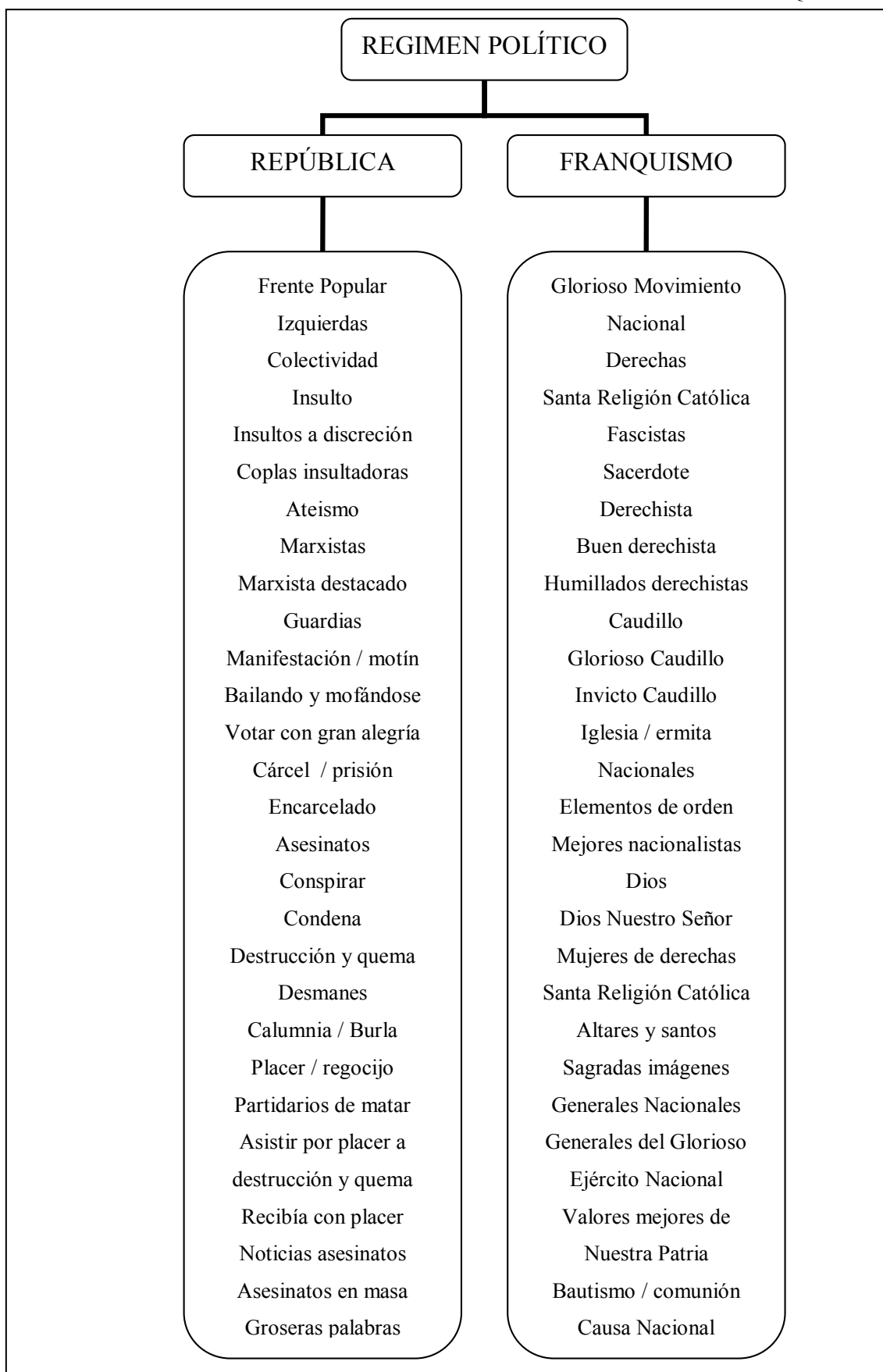
CALIFICATIVOS APLICADOS EN LAS DENUNCIAS A LAS INCULPADAS



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Cuadro 7.4 DENUNCIAS: CARACTERIZACIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL FRANQUISMO



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas. Elaboración propia

Las denuncias del falangista Ismael Villalonga Ortiz estaban dirigidas al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas³⁴, quien debía derivarlas a Valencia. Tras recibir la denuncia el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia decidió ordenar al Juez Instructor Provincial de Castellón la incoación de los correspondientes expedientes de responsabilidades políticas. Esta decisión se tomó en 9 de los casos analizados el 11 de febrero de 1941 y en los 6 casos restantes un día más tarde, con lo que el tiempo que transcurrió desde la firma de la denuncia hasta la incoación del correspondiente expediente fue de 1 mes y 12 ó 13 días.

El siguiente paso era la realización de los preceptivos informes de las autoridades locales. En general, podemos destacar que estos informes fueron fieles a la denuncia original, especialmente en los casos del informe del Comandante del Puesto de la Guardia Civil, firmados por Esteban López, aunque en algunos informes aportaba datos novedosos, fundamentalmente de tipo económico. Son muy pocos los casos en los que este informe tenía una redacción propia e independiente.³⁵

Los informes de FET y de las JONS no estaban firmados por Ismael Villalonga Ortiz, sino por Antonio Miralles, siguiendo fielmente en muchos casos los informes redactados por la alcaldía³⁶. También podía darse el caso que el informe fuera una copia exacta de la denuncia original del expediente.

El informe de la alcaldía, firmado por Antonio Beltrán, no era muy diferente, aunque solía aportar algún dato, especialmente de tipo familiar y económico, aunque también sobre algún suceso producido durante la guerra civil. En ocasiones también el alcalde firmaba informes que consistían en una copia exacta de la denuncia original.

³⁴ Aunque él las remitió al Juez Instructor *Regional* de Responsabilidades Políticas, sin duda por confusión.

³⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Genoveva Sales Centelles, Caja 10094. AHPCS.

³⁶ Esta conexión se demuestra alguno de los expedientes, en el que el encabezamiento del informe del Delegado Local de FET y de las JONS es diferente al del informe de la alcaldía, aunque unas líneas después los informes son idénticos. Además, los informes están redactados, que no firmados, por el puño y letra de la misma persona. En este caso el informe de la alcaldía está firmado en una fecha anterior que el informe del Delegado Local de FET y de las JONS. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Amparo Pastor Albert, Caja 10093; Expediente de Responsabilidades Políticas contra María Pastor del Rosario, Caja 10093; Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicenta Pastor García, Caja 10093. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Genoveva Sales Centelles, Caja 10094. AHPCS.

Finalmente, no deja de ser llamativo que en ninguno de los expedientes analizados de estas 15 mujeres procesadas por responsabilidades políticas, a las que se les imputaron hechos y actuaciones muy relacionados con la Iglesia y la religión, ni en los otros expedientes de responsabilidades políticas que hemos inspeccionado, aparece el teóricamente preceptivo informe de la autoridad religiosa local. Aunque desconocemos la razón, en ningún momento el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, como hacía en casos de otras localidades, detuvo el procesamiento por la falta de este informe.

Con estos datos, el Juez Instructor Provincial decidía si había lugar a la continuación de la causa, destacando el apartado del artículo cuarto de la Ley de Responsabilidades Políticas en el que existían indicios o evidencias que la inculpada había incurrido. En todos los casos el expediente siguió adelante.

Una vez en manos del Juez Instructor Provincial los informes de las autoridades locales el siguiente paso en el procesamiento de estas mujeres fue su citación para proceder a la lectura de cargos y darles la primera oportunidad para que explicaran su versión de los hechos. Excepto el caso de Antonia Barberá Beltrán, que vivía en Valverde de los Arroyos (Guadalajara)³⁷, el resto de inculpadas tuvieron que ir a las oficinas de la secretaría del Juez Instructor Provincial de Castellón a escuchar los cargos que contra ellas se realizaban y a contestar a los mismos en su defensa. De los 14 casos en los que el acto se realizó en Castellón 3 se hicieron el 4 de abril de 1941, 1 el 7 de abril, 1 el 14 de junio, 6 el 20 de junio y los 3 últimos el 10 de septiembre de 1941³⁸.

Ya hemos comentado la estructura general de estos actos: el Juez Instructor identificaba a las inculpadas, les leía sus cargos y les daba la oportunidad de ofrecer una

³⁷ Esta inculpada acudió a la lectura de cargos el 27 de abril de 1941 en los Juzgados Municipales de Valverde de los Arroyos (Guadalajara). Este caso nos demuestra que el abandono de la localidad donde se residía no era impedimento para las autoridades franquistas a la hora del procesamiento por responsabilidades políticas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonia Barberá Beltrán, Caja 10093. AHPCS.

³⁸ Desconocemos las razones por las cuales un expediente del mismo lugar de origen y con la misma fecha de incoación de expediente podía retrasarse hasta 5 meses más que otro para dar el siguiente paso procesal, aunque seguramente la explicación sean simples problemas burocráticos.

explicación sobre los mismos. Esta explicación siempre tenía como resultado que las inculpadas negaban la mayor parte de los cargos, utilizando todo tipo de excusas o estrategias explicativas. Manuela Alameda Cámara dijo en su defensa que en cuanto las tropas franquistas bautizó a sus hijos, pero que no lo había hecho antes por no haber sacerdote³⁹. Además no pudo participar en la destrucción de la Iglesia porque cuando ésta se produjo ella hacía diez meses que se encontraba en Barcelona⁴⁰. Carmen Martínez Sales argumentó que no pudo haber insultado al sacerdote porque no lo conocía en absoluto⁴¹. Amparo Pastor Albert negó haber realizado manifestaciones antirreligiosas *toda vez que se encuentra casada canónicamente y la hija que tiene ha sido bautizada, asistiendo a los actos Religiosos cuando sus ocupaciones se lo han permitido*⁴². Ana Sales Beltrán confesó haber acudido a ver la destrucción de la Iglesia, a la que acudió *por curiosidad para ver lo que hacían en ella*, que a las manifestaciones en las que participó iba en la cabeza o en la cola según le parecía y que sus dos hijos menores no fueron bautizados *por seguir la corriente de lo que hacían por aquella fecha*.⁴³

Los únicos cargos que algunas de las inculpadas tuvieron el valor de admitir fueron el voto a favor del Frente Popular o haber asistido a manifestaciones, aunque con matices. Visitación Monfort Sales aseguró que había asistido a manifestaciones, *pero sin dar gritos ni insultar a nadie*, así como que su única participación en la destrucción de la Iglesia fue presenciarla desde su casa, *por vivir frente a ella*⁴⁴. Carmen Martínez Sánchez admitió haber participado en manifestaciones marxistas, *pero por ver a la mayoría del pueblo, no porque sintiera afecto ni alegría por tales actos*⁴⁵. En este sentido, Amparo Sales Beltrán admitió haber asistido a las manifestaciones *siendo su*

³⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuela Alameda Cámara, Caja 10129. AHPCS.

⁴⁰ La misma circunstancia fue alegada por Adelina Pastor Sales, aunque sin especificar el tiempo que llevaba en Barcelona. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Adelina Pastor Sales, Caja 10129. AHPCS.

⁴¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

⁴² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Amparo Pastor Albert, Caja 10093. AHPCS.

⁴³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Ana Sales Beltrán, Caja 10143. AHPCS.

⁴⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Visitación Monfort Sales, Caja 10143. AHPCS.

⁴⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

*asistencia en las mismas por seguir la corriente de las amigas y haciendo las manifestaciones que hacían las demás*⁴⁶.

Vicenta Monfort Peraire confesó haber votado a las izquierdas y acudir a manifestaciones marxistas *con regocijo*, aunque negó haber coaccionado a ninguna vecina para acompañarla. Además, aseguró no haber participado en la destrucción de la Iglesia por realizarse ésta a altas horas de la noche y ella no salía de casa a esas horas⁴⁷. Antonia Ortiz Sales admitió haber votado a los partidos de izquierda exclusivamente porque se hallaba en una situación muy precaria y estos partidos habían prometido que *bajarían las contribuciones y otras cargas*. Además admitió haber sido interventora del Frente Popular, aunque explicó que lo fue por obligación impuesta por el Ayuntamiento de Sarratella tras haber realizado un sorteo alfabético entre toda la población y que nunca supo a qué partido representaba. Por otra parte, admitió haber participado en la Colectividad pero únicamente *estando a cargo de las gallinas, palomas y cerdos procedentes de las requisas*.⁴⁸

En este abanico de actitudes que estamos analizando no faltó un ejemplo de valentía, sinceridad y coherencia, como en el caso de Vicenta Pastor García, quien confesó *que las veces que emitió su voto lo hizo a favor de los partidos de izquierda, por ser esa su ideología*⁴⁹. Genoveva Sales Centelles confesó pertenecer a Izquierda Republicana, aunque negó haber hecho propaganda alguna, bailar y cantar con algunas mujeres sin insultar a las personas de derechas y votar en 1936 por las izquierdas, negando también haber llevado a persona alguna para que votara por ellas.⁵⁰

En ocasiones se planteaban acciones concretas que servían como seguro para demostrar una actitud profranquista que pudiera salvar a la inculpada o, al menos,

⁴⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Amparo Sales Beltrán, Caja 10143. AHPCS.

⁴⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Monfort Peraire, Caja 10129. AHPCS.

⁴⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonia Ortiz Sales, Caja 10129. AHPCS.

⁴⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicenta Pastor García, Caja 10093. AHPCS.

⁵⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Genoveva Sales Centelles, Caja 10094. AHPCS.

conseguir una condena menor. En este sentido, en el acta de lectura de cargos de María Pastor del Rosario se recoge la siguiente declaración:⁵¹

Preguntado si tiene algo más que manifestar dijo que siempre se ha manifestado a favor de la Causa Nacional y que para la restauración de la Iglesia de Serratella ha sido una de las que más interés ha puesto para recoger y guardar los objetos sagrados.

La situación en la que quedaban estas mujeres les hacía utilizar conceptos y calificar situaciones en sentido franquista, forzando la que seguramente sería su opinión sincera, y con la esperanza que la utilización de estos nuevos conceptos pudieran demostrar, de alguna forma, su más que dudosa adhesión al régimen franquista dominante. Así, en sus declaraciones utilizaron conceptos como *Fuerzas Nacionales*, *Imágenes Sagradas*⁵²; *Glorioso Movimiento Nacional*⁵³; *dominio rojo*, *Generalísimo*, *Causa Nacional*⁵⁴; *Caudillo*, *Ejército Nacional*⁵⁵, etc.

Desmentidos los cargos, en teoría le quedaba tanto al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas como al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia la tarea de decidir quién decía la verdad o quién decía un mayor porcentaje de la verdad. La solución a este problema sería difícil para un juez imparcial, pero la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas se caracterizaba, como hemos comprobado, por su parcialidad. De esta forma, y como ha quedado explicado anteriormente, las declaraciones de los inculpados no eran tomadas en cuenta en ningún caso, salvo en algunos en relación no a la culpabilidad o no del inculpadado sino a la magnitud de la sanción que se le debía aplicar. Esto se demuestra comprobando cómo las indicaciones del Juez Instructor Provincial no eran modificadas por estas declaraciones y eran respetadas por el Tribunal Regional encargado de dictar sentencia:

⁵¹ Estas declaraciones no le sirvieron para tener una sentencia más favorable que el resto de inculpadas. El mismo texto se recoge en la declaración de Vicenta Pastor García. Expediente de Responsabilidades Políticas contra María Pastor del Rosario, Caja 10093; y Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicenta Pastor García, Caja 10093. AHPCS.

⁵² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuela Alameda Cámara, Caja 10129. AHPCS.

⁵³ Esta expresión es utilizada por prácticamente las 15 mujeres en sus declaraciones. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Carmen Martínez Sales, Caja 10129. AHPCS.

⁵⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra María Pastor del Rosario, Caja 10093. AHPCS.

⁵⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Amparo Sales Beltrán, Caja 10143. AHPCS.

Tabla 7.1
CARGOS IMPUTADOS A LAS MUJERES DE SARRATELA
SEGÚN EL MOMENTO PROCESAL⁵⁶

Caso ⁵⁷	Informe inicial del Juez Instructor Provincial	Resumen metódico del Juez Instructor Provincial	Sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas
1	K	J E K L	K
2	K	J K L	K
3	L	K L	K
4	K L	K L	K
5	K	B F I J K L	F I
6	K	E K L	E K
7	C	E J K L	C
8	K	E K L	E K
9	L	J K L	K
10	K L	K L	K
11	K L	C K L	K
12	E	C E K L	C E
13	K L	K L	K
14	E	E I J K	K
15	K L	K L	K

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

⁵⁶ Según los distintos apartados del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas, la lectura de cargos y la oportunidad de las inculpadas de explicar su versión de los hechos se producía entre la realización del informe inicial del Juez Instructor Provincial y el Resumen Metódico que éste redactaba una vez consideraba que había finalizado el proceso de instrucción del expediente. Como se puede observar el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia nunca quitó la razón al Juez Instructor Provincial. El apartado del artículo 4º de la citada Ley que fue más útil para el castigo por responsabilidades políticas fue, como se puede comprobar, el k, que hacía referencia a la pertenencia a partidos políticos de izquierda.

⁵⁷ Los casos corresponden, por este orden, a Manuela Alameda Cámara, Carmen Martínez Sales, Vicenta Monfort Peraire, Visitación Monfort Sales, Antonia Ortiz Sales, Amparo Pastor Albert, María Pastor del Rosario, Vicenta Pastor García, Adelina Pastor Sales, Amparo Sales Beltrán, Ana Sales Beltrán, Genoveva Sales Centelles, Rosa Valls Monfort, Antonia Barberá Beltrán y Juana Sales Centelles.

Los cargos que se imputaron a estas mujeres hacían referencia a los publicados en el artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas:

b) Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones a que alcanza la declaración del artículo 2º, así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de corporaciones y organismos, tanto públicos como privados.

c) Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del 18 de julio de 1936, y mantenida hasta esa fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.

e) Haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular o de los partidos y agrupaciones comprendidos en el artículo 2º, o contribuido con ayuda económica a los mismos, prestada de manera voluntaria y libre y con propósito deliberado de favorecerles, aunque no se hubiesen desempeñado puestos directivos o de representación, ni cargos o misiones de confianza, ni se tratase de afiliados a aquéllos.

f) Haber convocado las elecciones para Diputados a Cortes del año 1936; formado parte del Gobierno que las presidió o desempeñado altos cargos con el mismo, o haber sido candidato del Gobierno, o candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular y de sus aliados o adheridos en ellas; o haber sido compromisario de tales partidos para la elección de Presidente de la República en el propio año.

i) Haber intervenido desde el 18 de julio de 1936, salvo casos de justificación muy calificada, en Tribunales u organismos de cualquier orden, encargados de juzgar a personas por el solo hecho de ser adictas al Movimiento Nacional, o el haber sido los denunciantes de éstas o intervenido en la incautación de sus bienes, a no ser que lo hayan verificado obligatoriamente, en virtud de las funciones que le están asignadas por razón de su cargo y sin iniciativa por su parte.

j) Haber excitado o inducido a la realización de los hechos comprendidos en alguno de los apartados anteriores, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta, de la radio o de cualquier otro medio de difusión, bien en escritos dirigidos a diferentes personas.

k) Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.

l) Haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional.

En este sentido, en los resúmenes metódicos realizados por el Juez Instructor Provincial al final del proceso de instrucción se concedía absoluta veracidad a la

denuncia inicial y a los informes de las autoridades locales y se daba por probados completamente los cargos que las inculpadas habían tratado de negar rotundamente. En todos los casos se declaraban probados los siguientes cargos:

- Haberse destacado a favor del Frente Popular.
- Haberse distinguido por sus ideas extremistas.
- Haber intervenido en la destrucción de la Iglesia.
- Haberse destacado por ideas antirreligiosas.
- Insultar a las personas de derechas⁵⁸.

La discordancia entre la información dada por las autoridades locales y la ofrecida por las inculpadas se manifestaba también en la distinta valoración que realizaban de su patrimonio, un dato que era muy importante porque teóricamente basaba la magnitud de la sanción económica que debía imponer el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. En cualquier caso, nos demuestra la voluntad de las autoridades locales de imponer el máximo castigo a las inculpadas y, por el contrario, como es natural, y pese a las advertencias de la Ley de Responsabilidades Políticas, la tendencia de éstas a minusvalorar sus bienes para sufrir una sanción menor. Por otra parte, se valoraba tanto su patrimonio personal como el familiar, con lo que en muchos casos el único patrimonio examinado es el del marido de la inculpada.

En general, se trataba de inculpadas pertenecientes a familias con pequeñas propiedades agrícolas que vivían del trabajo de sus fincas. Por tanto, en sus declaraciones juradas de bienes solían relacionar sus fincas y, si era el caso, algún bien inmueble en Sarriatella, así como las fincas o bienes que podían heredar de sus padres en un futuro, sobre las que también recaía el peso de la jurisdicción especial de responsabilidades políticas.

En los casos en los que el Juez Instructor consideraba conveniente aclarar el patrimonio de las inculpadas se ordenaba la realización de informes a peritos que debían ser personas totalmente adictas al régimen franquista, lo que ocurrió en cuatro de los 15

⁵⁸ Este cargo sólo aparece en el resumen metódico del expediente de Antonia Barberán Beltrán, aunque la mayoría fueron acusadas de este presunto delito. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonia Barberán Beltrán, Caja 10093. AHPCS.

casos analizados. En dos de estos casos el perito rectificó una valoración exagerada del patrimonio de la inculpada, en un tercer caso lo valoró igual que las autoridades locales y en un cuarto lo rectificó al alza.

Tabla 7.2

VALORACIONES DEL PATRIMONIO DE LAS INCULPADAS (PESETAS)

	Valoración de la inculpada	Valoración de las autoridades locales	Valoración de los peritos	Diferencia entre ambos	Deudas declaradas
1	2.000	10.000	7.000	+5.000	-
2	7.275	7.000	-	-	1.500
3	9.000	15.000	-	+6.000	-
4	2.750	20.000	11.000	+8.250	-
	7.750	7.000	-	-750	-
6	2.600	5.000	-	+2.400	4.000
7	1.800	10.000	-	+8.200	1.000
8	4.500	17.000	-	+12.500	-
9	700	6.000	-	+5.300	-
10	2.750	5.000	9.000	+2.250	-
11	2.500	8.000	8.000	+5.500	-
12	3.350	15.000	-	+11.650	-
13	3.800	6.000	-	+2.200	-
14	1.000	8.000	-	+7.000	750
15	2.750	12.000	-	+9.250	-

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

En relación al ejercicio del derecho de defensa que precariamente establecía la Ley de Responsabilidades Políticas, sólo una de estas mujeres se atrevió o tuvo la capacidad de llevarlo a cabo. Se trataba de Antonia Barberá Beltrán⁵⁹, que había abandonado la

⁵⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Antonia Barberá Beltrán, Caja 10093. AHPCS.

localidad de Sarratella para trasladarse a Valverde de los Arroyos (Guadalajara). Su expediente se inició el 10 de febrero de 1941, cuando el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia ordenó la incoación del expediente tras haber recibido la denuncia firmada por el Delegado Local de FET y de las JONS el 30 de diciembre de 1941. Esta inculpada tuvo las primeras noticias de su procesamiento el 27 de abril de 1941, cuando el Juez Municipal de Valverde de los Arroyos la citó para proceder a la lectura de cargos. Para esa fecha, ya estaban realizados la denuncia, los informes de las autoridades locales de Sarratella y las primeras conclusiones del Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón.

Una vez hubo realizado su declaración jurada de bienes y fue informada de los cargos que se le imputaban, centrados en su adhesión y voto al Frente Popular, animar a votar a otras mujeres, insultar a personas de derechas, acudir a manifestaciones y ser enemiga de la religión, no tardó más que tres días en dirigir un escrito al citado Juez Instructor. En este escrito realizó una enconada defensa de su actuación antes de la guerra. Así, admitió sólo parcialmente el cargo de haber votado a la izquierda en las elecciones de 1936, ya que advirtió que sólo lo hizo en una primera votación, que por distintos problemas fue anulada, y en su repetición ya no acudió a votar. Además, pidió que se tuviera en cuenta que si votó inicialmente a las izquierdas fue porque su marido era practicante y fue advertido que si no votaban a la izquierda sus partidarios dejarían de acudir a su consulta. Por tanto, la Antonia Barberán concluía diciendo:

Fue pues el pan el que me determinó a votar en las indicadas primeras elecciones y no ningún motivo político y de no existir tal amenaza es absolutamente cierto que no hubiera votado.

Su escrito finalizaba declarando que el resto de cargos que se le realizaba *son absolutamente falsos*, indicando que si hubiera sido de tendencias izquierdistas no hubiera abandonado Sarratella en tiempos de la República, por lo que acababa concluyendo que se consideraba totalmente fuera de los presupuestos marcados por los apartados del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas. Para asegurar sus afirmaciones pedía que acudieran tres testigos a declarar.

15 días más tarde los testigos propuestos fueron citados para declarar en los Juzgados Municipales de Sarratella. El primer testigo no acudió porque se encontraba

en esos momentos en la Prisión de Astorga (León). El segundo declaró ser primo hermano de la inculpada, confirmando que era de izquierdas, pero que ignoraba si había amenazado a alguien para que votara a favor de las izquierdas o si insultó a alguien. Además, confirmó que al principio de la guerra ella y su marido abandonaron Sarratella. El tercer testigo volvió a confirmar que la inculpada era de izquierdas, declaró no recordar si se llegó a amenazar a la inculpada y a su marido con perder la clientela si no votaban a la izquierda y confirmó que abandonaron la localidad. En un contexto de fuerte tensión y de amenaza represiva, la actitud de los testigos fue, pues, de tímida colaboración con el régimen y de recurrir a la falta de memoria en las situaciones más comprometidas.

A pesar de todo estos testimonios no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, porque, como era preceptivo, esta fase procesal finalizaba con un breve informe del Juez Municipal de Sarratella, Daniel Villalonga, en el que éste informaba que uno de los testigos estaba en prisión y los otros dos se encontraban en prisión atenuada concedida por el Juzgado Militar de Albocácer, añadiendo además que eran íntimos amigos de la inculpada, lo que suponía la fulminante invalidez, a efectos prácticos, de sus declaraciones.

Antonia Barberán Beltrán volvió a insistir sobre su inocencia en la siguiente oportunidad que se le concedió, tras la comunicación del resumen metódico realizado por el Juez Instructor Provincial, emitiendo un nuevo escrito de defensa en agosto de 1941. En este escrito la inculpada parece volver a estamparse contra el muro de la acusación fácil y falsa, sin entender que no se estaba llevando a cabo un proceso de justicia objetivo e imparcial, sino uno abusivo e imparcial que tenía como objetivo la depuración del contrario. Su impotencia se ve reflejada perfectamente en sus palabras:

En los cargos que se me hacen tengo que decir lo siguiente:

El error debe proceder del origen ya que las Autoridades que lo confirman no lo habrán copiado de la documentación legal, las que se pueden extraer de tal forma.

Me refiero a lo que dice que voté todas las elecciones a las izquierdas, no voté más que el 16 de febrero de 1936 y a los pocos días fue repetida la misma elección para su definición seguramente y repito que no voté, por lo tanto no puede figurar mi nombre en los documentos que se deben guardar en secretaría del pueblo a donde se guardan, de donde me creo que puede confirmarse mi manifestación.

Tampoco he asistido a manifestaciones públicas ni he dado gritos de ninguna clase, bien lo sabe Dios que es cierta esta afirmación no puedo comprender de donde puede

salir la afirmación de que iba a todas las citadas manifestaciones, así como insultaba a las personas cuando iban a la Iglesia ya que no cita a qué personas han sido, lo cual si fuera cierta tal afirmación debía decirlo para una confirmación.

Tampoco he hecho propaganda política y la única vez que voté fui sola, ningún amigo o mujer me acompañó.

Tampoco es cierto de que me haya destacado por mi adhesión al frente popular, lo que no me he podido manifestar a favor de las derechas por haber un practicante en el partido de derechas de la localidad en competencia con mi marido, por lo que no era libre y aunque mi corazón lo sintiese tenía que ocultarlo, lo que está indicado por tener que marchar los primeros días del Glorioso Movimiento Nacional, de la localidad, si hubiera sido cierto tal afirmación hubiera estado muy tranquila viviendo entre las supuestas amigas izquierdistas de la localidad como en el paraíso terrenal según lo que se me acusa y no fue así, sino lo contrario, ni actué absolutamente en nada ni seguí en el pueblo.

El siguiente paso fue simplemente la notificación de la sentencia emitida por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que declaraba demostrados los hechos imputados, los mismos que ella había repetido que eran falsos, y le condenaba a tres años de inhabilitación para cargos públicos y de confianza y al pago de 100 pesetas, sanción que fue finalmente satisfecha dos días después de su notificación, en diciembre de 1941. A finales de enero de 1942 sus bienes dejaron de estar controlados y la inculpada recuperó la capacidad de utilizarlos libremente.

En cuanto a las sentencias finales pronunciadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, 1 de los expedientes no llegó al trámite final y quedó sobreesido en febrero de 1945 sin sentencia, 5 de ellas se produjeron en el mes de agosto de 1941, 2 en noviembre de 1941 y las 7 restantes en febrero de 1942. Los cargos que se declararon probados fueron los correspondientes a los apartados siguientes del artículo 4º de la Ley:

- Apartado k): *Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.* Aparece en 11 de las 14 sentencias.
- Apartado f): *Haber convocado las elecciones para Diputados a Cortes del año 1936; formado parte del Gobierno que las presidió o desempeñado altos cargos con el mismo, o haber sido candidato del Gobierno, o candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular y de sus aliados o adheridos en ellas; o haber sido compromisario de tales partidos para la elección de Presidente de la República en el propio año.* Aparece en 1 de las sentencias, junto con el apartado i) *Haber intervenido desde el 18 de julio de*

1936, salvo casos de justificación muy calificada, en Tribunales u organismos de cualquier orden, encargados de juzgar a personas por el solo hecho de ser adictas al Movimiento Nacional, o el haber sido los denunciantes de éstas o intervenido en la incautación de sus bienes, a no se que lo hayan verificado obligatoriamente, en virtud de las funciones que le están asignadas por razón de su cargo y sin iniciativa por su parte.

- Apartado e): *Haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular o de los partidos y agrupaciones comprendidos en el artículo 2º, o contribuido con ayuda económica a los mismos, prestada de manera voluntaria y libre y con propósito deliberado de favorecerles, aunque no se hubiesen desempeñado puestos directivos o de representación, ni cargos o misiones de confianza, ni se tratase de afiliados a aquéllos.* Aparece junto con el apartado k) en 2 de las sentencias. También aparece junto con el apartado c) en 1 de las sentencias.
- Apartado c): *Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del 18 de julio de 1936, y mantenida hasta esa fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.* Aparece en solitario en 1 de las sentencias y junto con el apartado e) en otra sentencia.

En las 14 sentencias emitidas para estas mujeres de Sarratella se calificaron los hechos como leves⁶⁰. Según la Ley de Responsabilidades Políticas los hechos calificados como leves permitían, además de la correspondiente sanción económica, fijar sanciones limitativas de la libertad de residencia para un periodo de entre seis meses y un día a tres años⁶¹. De hecho, 12 de las 14 mujeres fueron condenadas a 3 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o de confianza⁶². El elemento común de todas las sentencias fue la sanción económica, que osciló entre las 25 pesetas y las 350 pesetas:

⁶⁰ Las sentencias correspondientes a María Pastor del Rosario y Vicenta Pastor García calificaron los hechos como “muy leves”, calificativo que no recogía la Ley de Responsabilidades Políticas, que sí recogía el de “leves” en su artículo 11.

⁶¹ Quedaba en mano de los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas la fijación del tiempo de duración de las sanciones. Como veremos, en el caso de estas 15 mujeres de Sarratella el tiempo de duración de la sanción impuesta fue de tres años, el máximo permitido para hechos calificados como leves. Ley de Responsabilidades Políticas, artículo 13.

⁶² Todas menos Visitación Monfort Sales y Juana Sales Centelles, que únicamente fueron condenadas al pago de una sanción económica.

Tabla 7.3
SENTENCIAS DE LAS MUJERES DE SARRATELLA
PROCESADAS POR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

	Apartado del artículo 4º de la Ley aplicado	Sanción económica	Inhabilitación por tres años	Fecha
Manuela Alameda Cámara	-	-	-	-
Antonia Barberá Beltrán	K	100	Sí	12-8-41
Carmen Martínez Sales	K	200	Sí	21-2-42
Vicenta Monfort Peraire	K	250	Sí	21-2-42
Visitación Monfort Sales	K	250	No	21-2-42
Antonia Ortiz Sales	F I	250	Sí	22-11-41
Amparo Pastor Albert	E K	100	Sí	23-8-41
María Pastor del Rosario	C	200	Sí	8-8-41
Vicenta Pastor García	E K	300	Sí	8-8-41
Adelina Pastor Sales	K	25	Sí	22-11-41
Amparo Sales Beltrán	K	150	Sí	21-2-42
Ana Sales Beltrán	K	200	Sí	21-2-42
Juana Sales Centelles	K	250	No	21-2-42
Genoveva Sales Centelles	C E	350	Sí	8-8-41
Rosa Valls Monfort	K	250	Sí	21-2-42

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Ninguna de las inculpadas recurrieron las sentencias y todas acabaron pagando la sanción impuesta, tanto llevando la cantidad exigida al Juzgado Municipal de Sarratella como pagando por medio de un giro postal. En cuanto a la fecha del pago de la sanción llama especialmente la atención el hecho que las 7 mujeres cuya sentencia data del 21 de febrero de 1942 pagaron su correspondiente sanción el mismo día, el 16 de abril de

1942, y por giro postal. En total, las 14 mujeres sentenciadas pagaron un total de 4.875 pesetas.

Una vez pagada la sanción se ordenaba la liberación de los bienes del procesado y el sobreseimiento de su caso. De los 7 casos anteriormente comentados 2 fueron sobreseídos el 23 de abril de 1942, mientras que los 5 restantes lo fueron el 5 de mayo del mismo año. El resto de casos lo hicieron en diciembre de 1941, en enero de 1942, en abril de 1942, en enero de 1943 y en febrero de 1945. La duración del proceso, en cierta forma, dependía de los problemas de funcionamiento burocrático de esta jurisdicción especial. En este sentido, el procesamiento por responsabilidades políticas para estas mujeres tuvo una duración global que osciló entre 1 año y 4 años, como se puede comprobar en la siguiente tabla:

Tabla 7.4

	Inicio del proceso	Sobreseimiento del caso	Duración global del procesamiento
Manuela Alameda Cámara	30-12-1940	28-2-1945	4 años
Antonia Barberá Beltrán	30-12-1940	24-1-1942	1 año y 1 mes
Carmen Martínez Sales	30-12-1940	23-4-1942	1 año y 4 meses
Vicenta Monfort Peraire	30-12-1940	5-5-1942	1 año y 5 meses
Visitación Monfort Sales	31-12-1940	5-5-1942	1 año y 5 meses
Antonia Ortiz Sales	30-12-1940	20-1-1942	1 año y 1 mes
Amparo Pastor Albert	30-12-1940	16-1-1943	3 años y 1 mes
María Pastor del Rosario	30-12-1940	18-12-1941	1 año
Vicenta Pastor García	30-12-1940	18-12-1941	1 año
Adelina Pastor Sales	30-12-1940	20-1-1942	1 año y 1 mes
Amparo Sales Beltrán	31-12-1940	5-5-1942	1 año y 4 meses
Ana Sales Beltrán	30-12-1940	5-5-1942	1 año y 4 meses
Juana Sales Centelles	30-12-1940	23-4-1942	1 año y meses
Genoveva Sales Centelles	30-12-1940	16-4-1942	1 año y 15 días
Rosa Valls Monfort	30-12-1940	5-5-1042	1 año y 4 meses

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.
Elaboración propia

En definitiva, el ejemplo del procesamiento de este grupo de mujeres vecinas de la localidad de Sarratella demuestra que la Ley de Responsabilidades Políticas también se utilizó como herramienta para el castigo de aquellas mujeres que habían participado de alguna forma en la dinámica pública propia de la Segunda República, es decir, en la dinámica de una sociedad democrática igualitaria. Y además se hizo de forma consciente. En este sentido, hechos como realizar propaganda política, invitar a otras mujeres a participar en las votaciones políticas democráticas, pertenecer a partidos políticos, tener una actitud no religiosa o participar en manifestaciones eran considerados por las autoridades franquistas como delitos especialmente graves por haber sido cometidos por mujeres. De esta forma, las 4.875 pesetas que liquidaron estas mujeres, junto con el largo periodo de procesamiento en el que no podían ausentarse sin permiso de su localidad y en el que sus bienes estaban embargados, junto con el sacrificio familiar, la vigilancia de las autoridades y el señalamiento público fueron el verdadero precio que tuvieron que pagar las mujeres procesadas para acceder a vivir en la nueva sociedad inaugurada en el franquismo.

8- Los afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas.

Para lograr un conocimiento más aproximado de lo que supuso para parte de la población de la provincia de Castellón el procesamiento por responsabilidades políticas durante los primeros años del franquismo hemos considerado útil proceder a la descripción individual de casos particulares, ya que es a partir de los detalles de cada caso concreto desde donde podemos alcanzar a comprender toda la dimensión de los efectos que la Ley de Responsabilidades Políticas causó en dicha población. A partir de estos ejemplos intentamos también comprender las bases económicas y sociales a partir de las cuales se articuló el franquismo en la provincia de Castellón.

Para ello vamos a relatar el procesamiento de 15 personas representativas de la sociedad de la provincia de Castellón¹. Entre ellas hemos escogido hombres y mujeres, personas humildes y personas con cierta significación social, con patrimonio y sin patrimonio, progresistas y conservadoras, pero todas ellas víctimas del gran proceso de castigo y depuración social que fue el procesamiento por responsabilidades políticas. En este sentido, en 6 de los relatos los protagonistas no van a ser los procesados, sino sus familiares, ya que en estos casos fue sobre ellos sobre los que realmente recayó todo el peso de la represión, generando una situación todavía más injusta al ser personas completamente inocentes que tuvieron que hacer frente a sanciones por hechos de los que no tuvieron nada que ver. En muchas ocasiones fueron las verdaderas víctimas de la Ley y de la represión franquista y como tal hay que valorarlas históricamente. Tenerlas en cuenta supone ampliar de forma considerable el número de personas que fueron procesadas por esta Ley, pero implica un mayor acercamiento a sus repercusiones reales.

Modestamente, pues, pretendemos que los protagonistas de nuestros relatos sean los pertenecientes a la parte más humilde de la sociedad, aquella que, salvo

¹ Se trata de 15 casos elegidos por su variada representatividad de la población de la provincia de Castellón tras la guerra civil, pero podrían haberse elegido cualquiera de los 252 casos que hemos analizado para realizar este trabajo de investigación, o cualquiera de los miles que todavía están por consultar en el Archivo Histórico Provincial de Castellón. Hemos procurado con esta selección ofrecer una visión variada pero equilibrada de los posibles casos que se podían ofrecer. Miles de historias personales están por rescatar en el citado archivo.

excepciones², tiende a olvidar la historiografía sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, centrada preferentemente en los casos de víctimas de mayor importancia y relevancia pública. Ya hemos visto cómo la Ley de Responsabilidades Políticas buscaba castigar especialmente a las personas con grandes patrimonios y significación pública, pero queremos demostrar también que esta Ley también fue una herramienta importante para volver a castigar conscientemente a una población ya castigada en otros procesos judiciales, más o menos cuestionables, que era la perteneciente a las clases más modestas. Esta Ley tuvo, por tanto, importantísimas consecuencias para la población humilde y para las clases medias, siendo decisiva en muchas localidades para la articulación de la nueva sociedad franquista. En definitiva, tratamos de llegar a una “historia del pueblo”, tal y como proponía R. Samuel, para alcanzar un mejor conocimiento de todo el entramado social, político, económico y cultural que fue el franquismo.

Por otra parte, pretendemos demostrar cómo la Ley de Responsabilidades Políticas, pese a su corta vigencia (1939-1945) fue fundamental para construir la nueva sociedad franquista sobre las bases del castigo, el abuso, la violencia, la injusticia y el olvido de los más elementales principios de generosidad, perdón y comprensión, sumiendo a la población afectada en situaciones frecuentemente cercanas a la desesperación. Los encarcelamientos, las ejecuciones, los embargos de bienes, la vigilancia de las autoridades, la pérdida de la libertad de circulación y de la libertad económica, el miedo, las denuncias, la negación de la posibilidad de trabajar, los informes de las autoridades locales, la arbitrariedad judicial, todos estos elementos permitieron a las autoridades franquistas fundar una nueva sociedad en la que a los vencidos se les negó durante los primeros años de la posguerra la posibilidad de normalizar su vida tras la experiencia bélica. En este sentido, esta Ley fue decisiva a la hora de construir el franquismo, sentando las bases de una sociedad asentada en el aprovechamiento de unos pocos de la desgracia de una gran mayoría.

² Son los casos especialmente de C. MIR (2000), op. cit.; C. MIR, C. AGUSTÍ, J. GELONCH (eds.), *Pobreza, marginación, delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo*. Lleida, 2005.

En 1932 la antigua Escuela Normal de Maestras, que desde 1922 había incorporado a algunos alumnos varones, se convierte en la Escuela Normal del Magisterio Primario, con alumnos y alumnas que estudiaban para ser en el futuro maestros nacionales. Su primer director fue el valenciano Rafael Balaguer Ferrer³, quien ocupó el cargo desde 1932 hasta 1938, año de la llegada de las tropas franquistas a la ciudad de Castellón⁴.

Su suerte cambió con la llegada del franquismo. El 13 de febrero de 1940 fue condenado por un delito de auxilio a la rebelión militar en un consejo de guerra sumarísimo celebrado en Castellón. Se le acusó de izquierdista y de pertenecer *al grupo al servicio de la República acaudillada por el Sr. Ortega y Gasset*, aunque el tribunal militar reconocía que se trataba de una persona de buena conducta. En su condición de Director de la Escuela de Magisterio de Castellón se le incluyó en el grupo de personas que meses atrás procedieron a depurar a algunos profesores, aunque también se reconoció que en este proceso protegió a personas de derechas y nunca utilizó la violencia. Hemos de recordar que el solo hecho de pertenecer a un partido o asociación de izquierdas o haber formado parte de alguna institución u organismo republicanos era motivo suficiente para el castigo y la depuración, independientemente de los actos cometidos. También se recordó que durante la guerra se afilió a una asociación llamada “Amigos de la Unión Soviética”, que las autoridades republicanas le concedieron su confianza y que en el aniversario de la muerte de Pablo Iglesias pronunció una conferencia en la que ensalzó tanto a su figura como a lo que el tribunal denominó “obrerismo”. La pena que se le impuso fue de seis años de prisión.⁵

Las autoridades militares hicieron llegar al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia una copia resumen o testimonio de esta

³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Rafael Balaguer Ferrer, Caja 101021. AHPCS.

⁴ AAVV., *Centenari dels estudis de Magisteri a Castelló de la Plana*. UJI. Castellón, 2004.

⁵ Firmaron la sentencia Fernández, Calduch, González, Betoret y Monferrer. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Rafael Balaguer Ferrer, Caja 10102. AHPCS. Todos los datos ofrecidos a partir de este momento pertenecen, salvo indicación contraria, a este expediente.

condena, con lo que este Tribunal ordenó el 13 de marzo de 1941 la incoación del correspondiente expediente de responsabilidades políticas. Rafael Balaguer no se encontraba en prisión, debido seguramente a sus contactos, a sus antecedentes positivos y a que su caso se hallaba en revisión, según sus propias declaraciones.

El Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Castellón, Emilio Bellés, en su informe del 2 abril de 1941 daba cuenta de una situación familiar que demostraba la desgracia en la que había caído el inculcado. Con cuatro menores a su cargo, el inculcado ganaba unas 8 pesetas diarias mientras su mujer, también profesora de la Escuela de Magisterio⁶, cobraba 8.400 pesetas anuales. Además, no tenían bienes en Castellón. La mitad de los recursos familiares, pues, habían desaparecido, aunque quedaba el sueldo de su mujer. El alcalde Vicente Traver ratificó estos datos cinco días más tarde, mientras que el 17 de abril de 1941 el Servicio Nacional de Seguridad aseguró que Rafael Balaguer Ferrer había evacuado Castellón ante la llegada de las tropas franquistas y se había ido con los republicanos a Valencia, aunque se especifica que tuvo buena conducta y que se consideraba *recuperable para el Estado español*.

Hemos de esperar a la declaración jurada de bienes que firma Rafael Balaguer Ferrer para conocer más detalles de su situación en 1941. El inculcado comentaba que había sido depurado o apartado del servicio, pero que su expediente se hallaba en revisión y en espera de resolución. Se dedicaba en aquellos momentos a *algún trabajo eventual en un colegio*, lo que le reportaba unas ocho pesetas diarias cuando podía trabajar. Su familia se mantenía por el trabajo de su mujer en la Escuela de Magisterio, cobrando 626,20 pesetas mensuales, a lo que se añadían 150 pesetas mensuales más por su trabajo como profesora en un colegio particular. En cuanto a sus bienes, el inculcado se resignó a decir que una bomba había destruido los pocos que tenían. Además, aseguraba tener deudas por un valor de 4.775 pesetas, teniendo a su cargo tres hijos de 14, 15 y 12 años, así como una sobrina de 18. La situación era, como mínimo, degradante para el director de la Escuela de Magisterio, aunque, a diferencia de otros casos, tenía la fortuna de que su familia disponía del sueldo de su mujer.

⁶ Su mujer era Gloria Camphuís Fernández, profesora de Pedagogía de la Escuela del Magisterio de Castellón. Fue directora de la Escuela del Magisterio (maestras) en el periodo 1947-1960. Según el antiguo alumno Marc Antoni Adell era hija de madre inglesa y padre catalán, siendo muy directa y asertiva. AAVV. (2004), *Centenari...*, op. cit., pp. 56-57.

Teniendo en cuenta estos datos el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón le consideró inmerso en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁷. Como persona con posibilidades y con una preparación cultural alta pudo presentar un escrito de defensa, en el cual Rafael Balaguer Ferrer indicaba que nunca había recibido denuncia de ningún ciudadano, que ayudó en su momento a personas de derechas, que nunca coaccionó a nadie y que si fue director de la Escuela de Magisterio no fue por nombramiento del gobierno republicano, sino por elección del claustro de profesores. Además, se quejaba de que se le había notificado verbalmente la anulación de la pena por parte del tribunal militar, por lo que no podía aportar prueba documental en su defensa y que la rigidez del procesamiento por responsabilidades políticas hacía que no su caso no pudiera detenerse.

La queja era razonable, ya que su procesamiento continuó y el 17 de julio de 1941 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia le consideró inmerso en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas, valoró los hechos como graves y le condenó al pago de 500 pesetas. Dicha sentencia le fue notificada el 12 de agosto y el 27 de dicho mes, ante las dificultades económicas familiares, Rafael Balaguer Ferrer solicitó el pago a plazos, lo que le fue concedido el 25 de abril de 1942, estableciendo la siguiente forma de pago: 100 pesetas a pagar en los siguientes tres meses y 100 pesetas más a pagar el 3 de abril de los años 1943, 1944, 1945 y 1946.

Finalmente el 28 de julio de 1941 pagó el primer plazo de 100 pesetas, pero se libró de los siguientes pagos porque su caso fue sobreseído el 25 de septiembre de 1943, en virtud de la reforma de la Ley de febrero de 1942. Seguramente fue avisado que no debía pagar el segundo plazo en espera del sobreseimiento, porque en abril de 1943 no se realizó ningún pago.

⁷ Dicho apartado es el siguiente: *Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma, o por los de traición, en virtud de la causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional.*

Una vez había pagado su responsabilidad política Rafael Balaguer Ferrer volvió a ser admitido como profesor de la Escuela de Magisterio⁸, demostrando lo acertado de las palabras del Servicio Nacional de Seguridad de abril de 1941, cuando le calificaron de *recuperable para el Estado español*. El precio que tuvo que pagar no fue pequeño: humillación, multa, penalidades económicas, resignación a no manifestar las ideas propias, olvido del pasado, aceptación de lo no compartido... sólo él y su familia sabían el precio que el franquismo les hizo pagar para permanecer y sobrevivir. El procesamiento por responsabilidades políticas sirvió en este caso únicamente como precio absurdo que pagar por el olvido y la reintegración en la sociedad. La aceptación que Rafael Balaguer Ferrer pudo haber realizado del franquismo suponemos se nutriría de resignación y prudencia. La Ley de Responsabilidades Políticas había hecho su trabajo.

⁸ Enseñaba la asignatura de Física y Química Según Marc Antoni Adell, antiguo alumno de la Escuela del Magisterio, Rafael Balaguer era un hombre absolutamente liberal y sabio, que se especulaba si había sufrido la represión del régimen franquista. Calificado como ser excepcional, acompañó a los alumnos a diversas excursiones y era además un experto guitarrista, profesor reconocido del famoso guitarrista Narciso Yepes. AAVV. (2004), *Centenari...*, op. cit., pp. 51-78.

Vicente Artero Pérez⁹ compartía con Rafael Balaguer su profesión de docente y su orientación ideológica, ya que también formó parte de la sociedad “Amigos de la Unión Soviética” que posteriormente persiguieron las autoridades franquistas. Sin embargo, Vicente Artero Pérez mantuvo una militancia socialista públicamente más notoria que el anterior¹⁰, lo que le convertía en víctima propiciatoria de la Ley y, a diferencia del anterior, era un elemento no a recuperar sino a castigar.

Poco más de un año después de la entrada de las tropas franquistas a la ciudad de Castellón el 15 de junio de 1938 se celebró un consejo de guerra al maestro nacional y dirigente político local Vicente Artero Pérez¹¹. Por el procedimiento sumarísimo de urgencia un tribunal compuesto por los militares Eduardo Oria, Regino Sarasola, Mateo Andrés, Álvaro Cortes y otra firma ilegible el 4 de julio de 1939 le condenaron por un delito de excitación a la rebelión a seis años y 1 día de prisión mayor, con las accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante dicho plazo de tiempo, dejando para un futuro inmediato el pago económico de su responsabilidad civil, que correspondería al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Los cargos que se le imputaron, en grado de ejecución material y directa, fueron haber sido fundador del Partido Radical Socialista en Castellón, afiliándose posteriormente a Izquierda Republicana, pertenecer a la Federación de Trabajadores Españoles de la Enseñanza (sección de UGT) y haber expresado públicamente ideas anticlericales, todo ello antes del 18 de julio de 1936. Durante la guerra civil se le imputó ser el vicepresidente de la asociación “Amigos de la Unión Soviética”, firmar un manifiesto a favor del régimen comunista e intervenir en un “Homenaje a Rusia” celebrado a finales de 1936 en el Teatro Principal de Castellón, así como organizar un festival taurino en la plaza de toros para celebrar el vigésimo aniversario de la URSS y haber sido secretario

⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Artero Pérez, Caja 10068. AHPCS.

¹⁰ En enero de 1938 participó en un acto de homenaje al Ejército Popular, junto a intelectuales como Bernat Artola, Vicent Sos Baynat, Diego Perona, etc. LL. MESEGUER, *Castelló literari. Estudi d'història cultural de la ciutat*. Castelló, 2003, pág. 330.

¹¹ Salvo indicación específica, la información que ofrecemos procede de su expediente de responsabilidades políticas. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Artero Pérez, Caja 10068. AHPCS.

de la Gestora del Patronato de Trabajo de Castellón. Vicente Artero Pérez tenía 52 años y se encontraba recluido en la Prisión de Castellón.

Como era preceptivo, una copia resumen de este consejo de guerra fue remitida por parte de las autoridades locales al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. El 11 de agosto de 1939 este tribunal recibió la documentación y acto seguido ordenó la incoación del correspondiente expediente de responsabilidades políticas, al que se le asignó número 351¹². Sin embargo, esta orden no llegó al Juez Instructor Provincial, el teniente de infantería Gabriel Castro Marcos, hasta el 14 de octubre de 1939, ordenándose inmediatamente la realización de los informes de las autoridades locales (exceptuando al cura párroco e incluyendo al Servicio de Información y Vigilancia) y la declaración jurada de bienes.

El proceso era muy rápido porque esta última la realizó Vicente Artero Pérez desde la Prisión Provincial de Castellón el 17 de octubre y dos días más tarde ya estaba en manos del Juez Instructor. En ella Vicente Artero declara sus bienes, que se resumían en dos Títulos de Deuda del Estado comprados en 1927 con un valor de 5.000 pesetas depositados en el Banco de España en Castellón, a nombre suyo pero también de su esposa Julia Serrano Jarque, al igual que una libreta en la Caja de Ahorros de Castellón, de la que declaraba ignorar su saldo. Además, tenía deudas con un familiar y con el Banco de España por un valor de 2.650 pesetas. En cuanto a la situación familiar, declaraba estar recluido en la cárcel y tener un hijo menor de edad. Su claudicación se demostraba a la hora de la firma, junto a la cual aparece de su puño y letra la frase *17 de octubre. Año de la Victoria*.

Los informes de las autoridades locales también fueron muy rápidos, realizados desde el 17 al 21 de octubre. Los informes de la alcaldía, firmado por Fausto Cruz, y el del Delegado Provincial de FET y de las JONS coincidían en asegurar que no se tenían datos sobre los bienes que pudiera disponer el inculcado, así como de otros recursos diferentes a los proporcionados por su profesión de maestro nacional. El informe de la Guardia Civil introdujo nuevos datos: el inculcado y su esposa tenía Títulos

¹² Como hemos indicado, la oficina del Juzgado de Instrucción Provincial de Responsabilidades Políticas comenzó a funcionar desde finales de julio o principios de agosto de 1939. Por tanto, en aproximadamente 11-15 días se incoaron como mínimo 351 expedientes a ciudadanos de la provincia de Castellón.

amortizables en el Banco de España por 6.000 pesetas y una cuenta en la Caja de Ahorros en las que había 2.026 pesetas. Como podemos comprobar los datos económicos eran los que realmente interesaban. Estos informes llegaron a manos del Juez Instructor Provincial el 23 de octubre. Sin embargo faltaba un informe, el de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la Provincia de Castellón, que se firmó el 18 de noviembre y en el que se rectificaba la cantidad que el inculcado tenía en Títulos de Deuda, elevando la cifra a 8.000 pesetas.¹³

Recibidos, pues, los informes y la declaración jurada de bienes, el 18 de noviembre de 1939 se ordenó la publicación del anuncio de la incoación del expediente de responsabilidades políticas contra Vicente Artero Pérez en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Boletín Oficial del Estado. Era, por tanto, el momento de realizar el resumen metódico final y de remitirlo al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Vicente Artero Pérez no presentó ningún escrito de defensa ni presentó ningún recurso. Sin tiempo para más acciones el 1 de diciembre de 1939 se dictó sentencia, por la cual se consideraba a Vicente Artero Pérez incurso en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas¹⁴, se consideraban los hechos muy graves y se le condenaba a la sanción de 1.875 pesetas.

Esta sanción suponía casi la totalidad de los ahorros del inculcado y su mujer, concediéndosele, como era preceptivo, 20 días para satisfacerla. Al no realizarse el pago el 3 de marzo de 1940 se ordenó el embargo de sus bienes. Todo parece indicar que esta situación fue incómoda y molesta para el inculcado y su familia, porque la sanción acabó siendo pagada en su totalidad el 18 de diciembre de 1940. Sin embargo, el castigo duraría todavía unos meses, porque no fue hasta el 25 de abril cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado que Vicente Artero Pérez podía, por fin, disponer libremente de sus bienes. La pesadilla que suponía el procesamiento por responsabilidades políticas acabaría para el inculcado mucho más tarde, ya que en octubre de 1943 todavía se le

¹³ Por tanto, Vicente Artero Pérez declaró poseer 5.000 pesetas en Deuda del Estado, la alcaldía y FET y de las JONS rectificaron la cifra a 6.000 pesetas y el Servicio Nacional de Investigación y Vigilancia a 8.000 pesetas. Pese a las advertencias de la Ley de Responsabilidades Políticas, la tendencia del inculcado era a rebajar la cifra, pero la de las autoridades era a incrementarla. Sin embargo, la cifra de los ahorros en una cuenta bancaria el inculcado no la conoce (recordemos que hacía tiempo que estaba en la cárcel) y las autoridades locales coinciden en su información. No hay que olvidar que, en teoría, la valoración del patrimonio del inculcado determinaba la magnitud de su futura sanción.

exigió que presentara la carta de pago de la sanción para proceder definitivamente al archivo definitivo de su caso, que se produjo finalmente el 29 de octubre de 1943.

En este caso, pues, el precio a pagar por este maestro nacional para simplemente reintegrarse en la sociedad, además de la prisión y el desgaste psíquico y físico de la represión¹⁵, fue el pago de una multa que equivalía a prácticamente la totalidad de sus ahorros. ¿Pretendían, pues, las autoridades franquistas integrar a este ciudadano o simplemente castigarlo? ¿Con qué legitimidad le privaban del patrimonio familiar? ¿Esperaba el franquismo que esta persona aceptara sinceramente la nueva sociedad como la suya propia? Nuevamente la resignación y la tristeza se encontraban en la base de la construcción de la sociedad franquista. Actualmente Vicente Artero Pérez da su nombre a un colegio de Castellón.

¹⁵ Carecemos de información al respecto pero estamos seguros que Vicente Artero Pérez fue depurado como maestro nacional, con lo que, al menos durante un tiempo, no podría haber ejercido su profesión. A diferencia de otros maestros procesados, en ningún momento se hace referencia en su expediente a su separación de la tarea docente (excepto el hecho mismo de estar en la prisión condenado a seis años y 1 día) ni se le hace ninguna acusación relativa a su función docente.

Una actitud menos resignada y más combativa mantuvo otro maestro nacional, José Benlloch Portolés, vecino de Villarreal¹⁶. En la portada de su expediente se puede leer destacado en uno de los márgenes “masón y maestro”, como si ambas condiciones supusieran un delito por si mismas. De hecho, el inculcado había pasado 1 mes en la cárcel en noviembre de 1938 por una acusación inicial de pertenecer a la masonería, acusación que no se verificó y que finalizó con la puesta en libertad del mismo. La pesadilla no había hecho más que comenzar para José Benlloch Portolés. El procesamiento por responsabilidades políticas de este maestro de Villarreal comenzó el 31 de enero de 1941, cuando en el Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón se procedió a actuar contra las personas que figuraban en una lista de presuntos responsables políticos remitida el 16 de enero del mismo año por el Gobernador Civil de la provincia de Castellón. En esta lista de personas se podía leer:

JOSÉ BENLLOCH PORTOLÉS, Maestro Nacional, de 47 años, que vive en Santa Isabel de Villarreal (Castellón), comunista antes del alzamiento, laico y supónese masón”, muy propagandista y quitó los Crucifijos de la escuela.

Ante tales cargos, el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas, Víctor Núñez Escalona, informó al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, que ordenó el 11 de febrero de 1941 la definitiva incoación de un expediente. 16 días más tarde el Víctor Núñez Escalona ordenó a las autoridades locales de Villarreal la realización urgente de los informes pertinentes.

El primer informe se realizó por parte de la alcaldía de Villarreal el 5 de marzo, convirtiéndose en el informe de referencia para el resto de autoridades locales. El alcalde Pascual Renal informó de sus datos personales y de su evolución política, asegurando que antes de la guerra el inculcado perteneció al Partido Radical, destacando por la propaganda que realizó a favor de la República. Según el alcalde, durante la guerra se afilió a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, manteniendo su afiliación al Partido Radical, añadiendo una información sumamente grave: *como maestro que era, en la Escuela con los niños hacía toda la propaganda*

¹⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Benlloch Portolés, Caja 10093. AHPCS:

que podía en contra de la España Nacional y de la Religión. Finalizaba el informe añadiendo que tenía tres hijas menores y que ni el inculpado ni su esposa ganaban jornal alguno, careciendo totalmente de bienes. Tanto el informe del Brigada de la Guardia Civil Juan Martínez, realizado 1 día más tarde, como el del cura párroco Miguel Pedrós, realizado el 13 de marzo, no añadían nada nuevo, salvo este último, que aseguró que el inculpado desde el final de la guerra *observa buena conducta*.¹⁷

Rápidamente, el 20 de marzo, se citó a José Benlloch Portolés a la preceptiva lectura de cargos, que se realizó en la Secretaría del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, y en el que se informa por primera vez que el inculpado había sido destituido de su cargo de maestro por la Junta Clasificadora Provincial del Magisterio Nacional¹⁸. Tras conocer por primera vez los cargos y concedérsele un plazo de cinco días para presentar pruebas a su favor, se le dio por primera vez oportunidad de explicar su versión sobre las acusaciones. José Benlloch Portolés desmintió rotundamente las acusaciones de comunista, laico y masón¹⁹, admitiendo únicamente haber realizado propaganda del partido al que estaba afiliado, el Partido Radical²⁰. Aseguró que retiró el crucifijo de la escuela porque así lo habían ordenado las autoridades republicanas y en su defensa argumentó que como dicho crucifijo tenía valor artístico lo quiso proteger escondiéndolo en su casa. Admitió haberse afiliado a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en septiembre de 1936, pero únicamente porque las autoridades le obligaron, para conservar su trabajo, a estar afiliado a algún sindicato. Negó también haber realizado propaganda republicana en sus clases y en su descargo describió cómo fue encarcelado, junto con su mujer,

¹⁷ En el expediente no consta el preceptivo informe del Delegado Local de FET y de las JONS.

¹⁸ Se especificaba también que tenía entablado un recurso ante el Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de recuperar su plaza de maestro.

¹⁹ En un informe posterior veremos cómo José Benlloch Portolés fue acusado de masón. El origen de la denuncia fue un rumor, concretamente *la opinión de muchos* aseguraba que se reunía con frecuencia con tres destacadas personas más en el Círculo Radical de Villarreal, supuestamente formando una logia masónica acusada de actuar en Villarreal y Onda.

²⁰ Este partido en principio no entraba en el grupo de partidos perseguidos por la Ley de Responsabilidades Políticas, aunque muchos de sus afiliados, como José Benlloch Portolés, tuvieron que sufrir el procesamiento por las dudas y sospechas que sus comportamientos habían despertado a ojos de las autoridades franquistas.

porque en enero de 1938 sufrió un registro de su domicilio²¹ y encontraron en crucifijo, aunque más tarde fueron puestos en libertad.

Una vez realizada la lectura de cargos el inculcado presentó la preceptiva declaración jurada de bienes, en la que admitió poseer una alquería valorada en 7.000 pesetas (la mitad la tenía alquilada, cobrando 300 pesetas al año), y declaró tener un sueldo anual de 4.800 pesetas, sueldo que sin duda era, en ese momento, más un deseo que una realidad, porque todavía se hallaba fuera del ejercicio de su profesión. Declaró también unas deudas con la Caja de Ahorros de Villarreal de 300 pesetas. Su mujer y sus hijas se dedicaban a *las labores domésticas*. En principio, pues, no era una familia de la que las autoridades franquistas pudieran esperar obtener muchos rendimientos económicos.

La actitud de José Benlloch Portolés distó mucho de ser conformista. A los pocos días de la lectura de cargos no desaprovechó la ocasión de presentar un escrito de defensa, más elaborado y argumentado que el propio interrogatorio anterior, y solicitó la citación de varios testigos. En este escrito lo primero que realiza es una queja sobre la denuncia realizada, en estos términos: *Ignoro en qué pueda basarse el denunciante para tildarme de comunista, puesto que todo el pueblo de Villarreal sabe que, con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional, estuve adscrito al partido Radical, en el que desempeñé el cargo de secretario*. Posteriormente añadió que si hubiera sido comunista no tendría que haberse sindicado para mantener su puesto de trabajo. En el aspecto religioso trató de demostrar que no era *laico* enumerando sus distintos apoyos a la religión católica: su vida era regida por los mandatos de la Santa Madre Iglesia, fue administrador del Ermitorio de la Virgen de Gracia en 1932 y públicamente jamás profirió palabras en contra de la Iglesia. Su escrito finalizaba amargamente con una queja respecto a la acusación de masón:

En cuanto a la masonería, demasiado sabe el denunciante que no soy masón. Por esta acusación calumniosa sufrí un mes de cárcel, hasta que el señor Juez, convencido en absoluto de que no había el menor indicio de mi presunta masonería, me puso en libertad el día tres de diciembre de 1938.

²¹ Dicho registro parece que fue motivado por la creencia que José Benlloch Portolés había ido a repartir pistolas entre las personas conservadoras de Alcalá de Xivert, o al menos esta es la versión que ofrece él mismo en este interrogatorio.

Las mismas palabras que le dije al Sr. Juez que me tomó declaración sobre la masonería, tengo que repetir ahora: “Ningún hecho delictivo he cometido, por acción u omisión, antes ni después del Alzamiento”. No obstante ello, he perdido mi cargo, ganado en buena lid y servido con todo el decoro y la honorabilidad de un hombre honrado.

Esta declaración de defensa fue acompañada por las copias de dos informes de las autoridades locales de Villarreal que, en un tono mucho más favorable, ofrecían inexplicablemente una versión distinta a la de los informes presentados para el procesamiento por responsabilidades políticas. Así, el mismo cura párroco, Miguel Pedrós Bañón informaba que *cumple como buen cristiano sus deberes morales y religiosos*. El mismo Brigada de la Guardia Civil, Juan Martínez Tudela aseguraba su conducta con las siguientes palabras:²²

[...]trabajó denodadamente en conseguir avales para cuantas personas de significación derechista se le indicaba. La mayor parte de sus compañeros de profesión, consiguieron esquivar las molestias y peligros de aquellos azarosos días gracias a sus nobles sentimientos que le llevaron a comprometer su tranquilidad en aras de defensa ajena. Su condición de haber estado afiliado al partido Radical y sus actividades a favor de personas afectas al Glorioso Alzamiento Nacional determinaron el que, considerado como sospechoso, se le detuviese en compañía de su esposa, tras de sufrir un registro domiciliario y en el orden profesional se le propusiese para traslado. Cuando las fuerzas liberadoras se acercaban a esta ciudad, refugiado en el campo y tras no pocos esfuerzos y peligros, pudo esquivar la evacuación forzosa, presentándose inmediatamente de ser liberada esta ciudad a las Autoridades por si sus servicios eran de utilidad, designándosele ara prestar servicios a las órdenes del Sr. Jefe de Policía y poco después para llevar los libros de las Oficinas de Auxilio Social. Por su conducta durante el Movimiento y por las persecuciones de que fue objeto, es considerado como persona afecta al Glorioso Movimiento Nacional.

Existe un tercer informe, firmado el 17 de enero de 1941 por el Delegado Local de FET y de las JONS, en el que se aseguraba que el inculpado se dio de baja de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en diciembre de 1936, que fue perseguido por los marxistas, que se presentó a las autoridades franquistas al entrar en Villarreal y que *como maestro cumplía con su obligación observando siempre muy buena conducta*. Por tanto, ¿a qué se debe esta actitud contradictoria entre los primeros informes, correspondientes a la investigación por su supuesta masonería, y los últimos,

²² El informe del Brigada de la Guardia Civil es del 14 de diciembre de 1940, casi tres meses antes que el primer informe citado en este expediente. El informe del cura párroco es del 9 de enero de 1940, sólo dos meses antes que el anterior.

correspondientes a su procesamiento por responsabilidades políticas? ¿Existía alguien interesado en procesar a José Benlloch Portolés? ¿Cuál era el precio que debía pagar para integrarse en la nueva sociedad franquista?

El siguiente paso en su procesamiento por responsabilidades políticas fue la comparecencia de tres testigos que pudieran dar fe de la actitud y actuaciones de José Benlloch Portolés. Los testigos debían cumplir tres condiciones: “afectos a la Causa Nacional”, “Conocedores de la población” y conocedores del inculpado. Dicha comparecencia se produjo el 14 de abril de 1941 ante el Juez Municipal de Villarreal. El Guardia Municipal José María López Ayet sólo aseguró su pertenencia a Unión Republicana, desmintiendo las acusaciones de masón, propagandista de la república con los niños y de laico, aunque añadía que *frecuentaba muy poco la iglesia*. Los empleados José Font Marco y Vicente Reverter Clausell utilizaron la estrategia de decir que no les constaban cada uno de los cargos realizados. Los testimonios, pues, fueron favorables al inculpado y el Juez Municipal de Villarreal certificó que *los declarantes son personas de buena conducta y afectos a la Causa Nacional sin que nada me conste en contrario*.

Aún hubo tiempo para la recepción de un nuevo informe del Delegado Local de FET y de las JONS de Villarreal, indicando que el inculpado fue concejal del Ayuntamiento de Villarreal a propuesta del Partido Radical, que siempre destacó por ser respetuoso con los demás, con una vida pública calificada de buena, que nunca simpatizó con las ideas marxistas y que aunque *se mostró inicialmente anticlerical, en la actualidad cumple sus prácticas religiosas*. Finalmente el informe puede darnos la clave del caso, a la vez que se permite hacer una valoración psicológica del inculpado:

Como cosa digna de observación hay que hacer resaltar su poca constancia de carácter, su fácil conocimiento y conductibilidad. Su moralidad y conducta personal fueron siempre buenas, en la actualidad por sus manifestaciones y forma de obrar puede considerársele un arrepentido.

Con toda esta información el Juez Instructor Provincial ordenó la publicación de la orden de incoación de expediente en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Posteriormente realizó el resumen metódico, en el que concluyó que no se encontraban indicios de responsabilidad, por lo que elevaba el caso en consulta al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Este

Tribunal pidió consultar una copia del expediente de depuración del Ministerio de Educación por el que se le separó de su cargo de Maestro Nacional.

En este informe, realizado por la Guardia Civil para su depuración administrativa, se asegura que el José Benlloch Portolés hizo propaganda republicana mediante discursos, era simpatizante del marxismo, hacía años que no practicaba la religión y, a falta de más acusaciones, *como maestro es muy descuidado*. También se le acusaba de masón²³, de sabotear actos religiosos y de explicar a los niños que el ejército franquista mataba a los niños y las mujeres. El mismo guardia civil aseguraba que los padres de los alumnos le odiaban con estas crudas palabras:

En ocasión de celebrar un acto religioso en esta ciudad consistente en bendecir los crucifijos de los colegios, pudo comprobar el que suscribe que el maestro referido concurrió a la ceremonia y como tal dirigía a los niños en su formación, cual sería el agravio que en su presencia producía en el ánimo del vecindario, en especial las mujeres, que éstas no pudiendo frenar sus ímpetus decía en voz alta y sin temor a ser oídas que el susodicho maestro no era merecedor de estar en aquel sitio y sí en la cárcel, sin duda por recordar lo que había hecho durante el dominio rojo.

En el mismo informe existía un escrito de la alcaldía de Villarreal que le acusaba de propagandista, descuidado, socialmente dudoso e irreligioso. Por todo ello la citada Comisión Depuradora consideró las siguientes imputaciones: conducta antirreligiosa, ser descuidado en la Escuela, estar adscrito a la masonería, *ser aficionado al juego* y haber tomado parte en un mitin comunista durante la guerra. Así, finalmente se ordenó su separación definitiva como maestro nacional el 15 de noviembre de 1940. El inculpado solicitó la revisión de esta depuración, aunque estaba todavía sin respuesta durante su procesamiento por responsabilidades políticas.

Este informe fue nuevamente remitido al Juez Instructor Provincial de Castellón, quien realizó un nuevo resumen metódico en el que se le consideraba inmerso en responsabilidades políticas, concretamente en los apartados j) k) y l) de su artículo 4º²⁴.

²³ Este parece ser el origen de su encarcelamiento por presunta pertenencia a la masonería.

²⁴ Estos apartados son los siguientes:

j) *Haber excitado o inducido a la realización de los hechos comprendidos en alguno de los apartados anteriores, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta, de la radio o de cualquier otro medio de difusión, bien en escritos dirigidos a diferentes personas.*

Aún le quedó a José Benlloch Portolés una nueva oportunidad de defensa, presentando un escrito en el que desmintió haber saboteado actos católicos, que ningún padre o madre de alumnos se alborotara por su presencia y tuvo que afirmar tajantemente que nunca perteneció a la masonería, a la que calificó de “secta”. Su exasperación parecía haber rebasado los límites de su paciencia y de su desesperación, lo que es notorio en el tono de su conclusión final:

Así pues ni ideas marxistas, pues todos los informes que constan en el expediente coinciden en que pertenecía al Partido Radical, ni laico, pues he cumplido siempre los preceptos de la Santa Madre Iglesia, sin que en momento alguno de mi vida, ni público ni privado haya ido contra la Religión ni sus Ministros; ni masón, porque en todo expediente no he visto ni una sola sospecha de mi presunta masonería.

Finalmente el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia publicó su sentencia contra José Benlloch Portolés. Aunque la desconocemos por no figurar en su expediente de responsabilidades políticas, sí sabemos que el inculpado la recurrió, por lo que el caso fue derivado al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas de Madrid, quien finalmente el 15 de septiembre de 1942 resolvió que *dada la base económica del inculpado, según la reforma de la Ley se le absuelve de la sentencia que dictó el Tribunal de Valencia.*²⁵

José Benlloch Portolés recuperó la libre disposición de sus pocos bienes en diciembre de 1942, 1 año y 10 meses después del inicio de su procesamiento. Este maestro en cuatro años sufrió registro domiciliario y encarcelamiento por parte de las autoridades republicanas por presunto tráfico de armas en beneficio de personas conservadoras en enero de 1938, 1 mes de encarcelamiento en noviembre de 1938 porque un rumor lo señalaba como masón y el procesamiento por responsabilidades políticas de febrero de 1941 a diciembre de 1942. Entretanto, la depuración como maestro nacional, la dependencia de la cambiante orientación de los informes de las autoridades locales, el señalamiento público, la miseria y, siempre, la constante búsqueda de la demostración de su inocencia. El desgaste que él y su familia sufrieron

k) *Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.*

l) *Haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional.*

²⁵ La sentencia estaba firmada por Wenceslao González de Oliveros, Guillermo Kirkpatrick, Juan de Hinojosa y Manuel Torres López.

fue el precio a pagar por sobrevivir. En él se incluía una nueva forma de comportarse, de actuar y de pensar, evidenciada en los elogiosos calificativos del Delegado Local de FET y de las JONS y del cura párroco sobre su nueva actitud social y moral. Ese fue el triunfo de la represión en general y de la Ley de Responsabilidades Políticas en particular.

El 17 de febrero de 1940 el vecino de Alcalá de Xivert José Colom Anglés se hallaba detenido en la cárcel militar de Benicarló, por su pertenencia a la Colectividad y otros hechos de carácter revolucionario ocurridos en su población²⁶. En su espera a ser juzgado por un consejo de guerra comenzó su procesamiento por responsabilidades políticas, que, en teoría, debía fijar la *dimensión económica* de su castigo. La causa aducida fue la remisión al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia de los datos existentes en el Servicio de Recuperación Agrícola de Castellón, datos que fueron acompañados de un informe del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Alcalá de Xivert, José Vinuesa Aicart, quien le calificaba de extremista, de estar afiliado a la CNT y de ser el autor del asesinato del cura de Chert, Tomás Tafalla Campanals. Adjuntaba también una relación valorada de bienes en la que se aseguraba que el inculcado poseía dos fincas de almendros y olivos valoradas en 1.500 pesetas y su mujer, que nada tenía que ver en el proceso, dos fincas más de algarrobos y almendros valoradas en 2.500 pesetas.

El 23 de marzo de 1940 se le hicieron las cinco prevenciones de la Ley de Responsabilidades Políticas y, alterando el procedimiento de la misma, se le obligó a José Colom Anglés a realizar desde la cárcel una valoración jurada de sus bienes, en la que declaró tener dos hijas menores y, entre él y su mujer, cinco fincas con un valor total de 2.750 pesetas.

Con estos datos iniciales el Juez Instructor Provincial, Víctor Núñez Escalona, ordenó la urgente realización de los informes de las autoridades locales. Estos informes se basaron en el informe original de la Guardia Civil y, tanto el informe del cura párroco, José Adell García, como el del Delegado Local de FET y de las JONS, Juan Bautista Sospedra, fueron simples copias del realizado por el alcalde José Bosch, firmado el 10 de abril de 1940. Un día más tarde se ordenó el anuncio de la incoación de los expedientes en los Boletines Oficiales y el 16 de abril se procedió a la lectura de cargos al inculcado en la cárcel de Benicarló.

²⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Colom Anglés, Caja 10079. AHPCS.

Dos días más tarde José Colom Anglés pudo redactar y presentar una “hoja de descargos”, en la que negó pertenecer a ningún partido político y, por tanto, ser “extremista”, aunque admitió pertenecer a CNT, a la que se afilió *por razones de trabajo, ya que sin carnet sindical (a los que obligaban) no podía desenvolverse para los asuntos de trabajo*. Además, aseguró odiar la violencia, con lo que consideraba desmentida su participación en ningún asesinato. Finalmente pidió la comparecencia de dos testigos de Alcalá de Xivert, circunstancia que fue aceptada por el Juez Instructor Provincial.

La comparecencia de los dos testigos propuestos se produjo ante el Juez Municipal de Alcalá de Xivert el 24 de abril de 1940. Su interrogatorio se centró en los antecedentes políticos y sociales de José Colom Anglés antes de la guerra y su actuación durante la misma. La actitud de estos testigos, de los que el inculcado esperaba un testimonio favorable, fue dispar. Agustín Fresquet Roda, labrador de 33 años, admitió que José Colom Anglés perteneció a la CNT pero recurrió a su ignorancia sobre sus antecedentes y actuación durante la guerra, sin duda para no perjudicarlo. Sin embargo, el Juez Municipal anuló su testimonio con un informe sobre el inculcado y el testigo demoledor: *este testigo es persona muy extremista destacándose algunas veces, negándose rotundamente a decir la actuación del inculcado. El inculcado José Colom es uno de los más extremistas de la CNT, desempeñando el cargo de miembro del Control Obrero, intervino en la requisita de la naranja; siendo así mismo uno de los dirigentes de la colectividad*. El segundo testigo, Gaspar Segarra Sanz, jornalero de 43 años, confirmó su pertenencia a la CNT y le acusó de ocupar cargos dirigentes tanto en la colectividad como en el control obrero de la población, aunque parece que no quiso contar todo lo que sabía. Este testimonio fue validado con un comentario favorable del Juez Municipal: *El testigo Gaspar Segarra Sanz es persona de buenos antecedentes, adicto al Glorioso Movimiento, pero no quiere decir nada*. Un tercer testigo, no solicitado por el inculcado, no pudo testificar por haber fallecido durante la guerra.²⁷

El expediente siguió su curso hasta el 30 de agosto de 1940, cuando se recibió el testimonio de condena en consejo de guerra que por el procedimiento sumarísimo de

²⁷ Se trataba de de Francisco Izquierdo Bosch. Ignoramos su relación con los hechos y con el inculcado, pero suponemos que realizaría un testimonio contrario al mismo, ya que el Juez Municipal indicó que había sido *asesinado por los rojos*.

urgencia se había seguido contra José Colom Anglés el 30 de mayo de 1940 en Benicarló. En este consejo de guerra se le consideró responsable de pertenecer a la CNT, de pertenecer como voluntario en una columna miliciana, ser dirigente de la Colectividad de Alcalá de Xivert y participar, aunque de forma confusa, en la detención, extorsión y asesinato de un sacerdote²⁸. Finalmente, la sentencia calificaba a José Colom Anglés de *sujeto de pésimos antecedentes*. La sentencia condenó al inculcado a la pena de muerte.²⁹

El mismo 30 de agosto en el que se recibió este testimonio de condena, el Juez Instructor Provincial realizó el resumen metódico, en el cual se le consideró inmerso en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas³⁰, y en el que se daba cuenta de que el inculcado ya había sido ejecutado.

El procesamiento por responsabilidades políticas no finalizaba con el fallecimiento del inculcado, por lo que el de José Colom Anglés continuó absurdamente. El 7 de febrero de 1941, aproximadamente medio año después de su ejecución, se comunicó a sus herederos el resumen metódico elaborado el 30 de agosto de 1940. Sus herederos eran su mujer y sus dos hijos menores, quienes no presentaron ningún escrito de defensa y esperaron la correspondiente sentencia, dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia el 18 de febrero de 1941, en la que se consideraba responsable al difunto José Colom Anglés según el apartado anteriormente citado, considerándose los hechos como graves y condenándole, es decir, condenando a sus herederos al pago de una sanción económica de 1.000 pesetas.

²⁸ Se trataba, según la sentencia del consejo de guerra del cura Salvador Tafalla, quien fue detenido por el inculcado junto con otros vecinos del pueblo y conducido a Tortosa, donde fue llevado al Banco del que sacó 90.000 pesetas que se entregaron al Comité Revolucionario de Alcalá de Xivert. Por estos servicios parece que el inculcado cobró 100 pesetas. Posteriormente este sacerdote fue conducido al término municipal de Cervera donde fue asesinado. La sentencia aclara expresamente que *aunque no consta de manera clara que fue el autor de la muerte del dicho sí que estuvo con los asesinos antes y después de cometido el asesinato, sabiéndolo*.

²⁹ El consejo de guerra estaba formado por Bean Callejas, Oleza Bestard, Mínguez Gómez, Correcher Correcher y Ferrán. La sentencia fue aprobada por el Auditor de Guerra el 24 de junio de 1940 y el Capitán General de la Tercera Región Militar se dio por enterado de la pena capital impuesta. José Colom Anglés fue ejecutado el 7 de mayo de 1940. J.V. MOYA, op. cit., pág. 231.

³⁰ Este apartado era el siguiente: *Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma, o por los de traición, en virtud de la causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional*.

¿Qué sentido tenía exigir a una viuda con dos hijos menores, sin bienes ni recursos, y tras haber perdido por fusilamiento al padre de familia, el pago de una cantidad tan desorbitada? Sin duda, el castigo. Las autoridades franquistas añadían cruelmente al ya de por sí intenso castigo de la muerte el de la hipoteca y la ruina familiar. La culpa se extendía injustamente a los familiares que nada tenían que ver con los hechos presuntamente cometidos y juzgados. ¿Cómo se podía esperar de esta familia una reinserción social plena y convencida? Seguramente no se buscaba ni esto, sino simplemente, y nuevamente, el castigo.

Por otra parte, la sentencia no fue comunicada a los herederos, es decir, a los que iban a sufrir el castigo, hasta el 14 de junio de 1941, cuatro meses después de producida la sentencia, y, aunque su validez no comenzaba hasta esta comunicación, sí se había prolongado cuatro meses la situación de vigilancia que la Ley de Responsabilidades Políticas sometía a sus inculpados. Naturalmente la sanción económica no pudo ser satisfactoria, con lo que el 30 de enero de 1942 se decretó el embargo de los bienes de esta familia, hasta el 23 de abril de 1944, cuando, al amparo de la reforma de la Ley de febrero de 1942, el caso fue declarado sobreseído y los bienes familiares se declararon definitivamente libres del embargo. Por tanto, el procesamiento por responsabilidades políticas supuso para esta familia cuatro años y dos meses de sospechas, vigilancia, acusaciones, embargo de bienes y miseria.

La situación de la familia de Manuela Alameda Cámara fue similar a la del caso anterior³¹. Esta vecina de Sarratella fue denunciada el 30 de diciembre de 1940 por el Delegado Local de FET y de las JONS de su localidad, Ismael Villalonga Ortiz. La suya fue una más de las, al menos, 15 denuncias de mujeres de Sarratella que realizó esta persona. En este caso Manuela Alameda Cámara fue acusada de haber sido revolucionaria, de *odiar a las derechas y a nuestra Santa Religión Católica*, demostrándolo presuntamente por haber sido la primera que en aquella localidad se había negado a bautizar a sus hijos y a que recibieran la primera comunión. Se le acusó también de acudir a las manifestaciones convocadas por las fuerzas de la izquierda *con gran entusiasmo*, así como de animar a los milicianos a disparar sobre *los fascistas*. Además, según la denuncia, fue a contemplar la destrucción de la iglesia de Sarratella, a la que presuntamente acudió *por gusto y se regocijaba mucho* de la quema de los altares y los santos. Finalmente, el último cargo que se le imputó fue votar *en todas las elecciones* al Frente Popular, fuerza política que sólo se presentó, como tal, a las elecciones de 1936.

Ante semejante denuncia, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia decidió abrirle expediente de responsabilidades políticas el 11 de febrero de 1941. El Juez Instructor Provincial de Castellón ordenó la realización de los informes de las autoridades locales. Curiosamente no hubo en un expediente con cargos que afectaban al ámbito religioso, informe del cura párroco de la localidad, mientras que los informes del Delegado Local de FET y de las JONS, esta vez firmados por Antonio Miralles, y el de la Guardia Civil, firmado por el Comandante del Puesto de Sarratella Esteban López, se limitaron a copiar el confeccionado el 31 de mayo de 1941 por el alcalde Antonio Beltrán, en el que se ratificaba en los cargos expuestos en la denuncia inicial, añadiendo que la inculpada tenía cuatro hijos menores de edad y que la única fuente de ingresos de su familia era el jornal de 9 pesetas que cobraba *muchos días al año* su marido.

³¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuela Alameda Cámara, Caja,10129. AHPCS.

El 20 de junio de 1941 Manuela Alameda Cámara fue citada en el Juzgado Municipal de Sarratella para proceder a la lectura de cargos. Medio año más tarde la inculpada podía conocer los cargos que contra ella se realizaban y podía dar su versión sobre los mismos. Manuela Alameda Cámara argumentó en su defensa que sólo había votado una vez al Frente Popular, que nunca había faltado al respeto a nadie y que sus hijos fueron bautizados nada más llegar las tropas franquistas a la localidad (argumentó que no lo había hecho antes por la inexistencia de sacerdote en Sarratella). Negó también el hecho de presenciar con alegría la destrucción y quema de la iglesia y aportó una prueba contundente: cuando se procedió a la misma ella se encontraba en Barcelona.

A pesar de todas las negaciones de los cargos el Juez Instructor Provincial sólo dio crédito a las autoridades locales y a la denuncia original, con lo que en su propuesta inicial consideró probados todos los cargos y la consideró inmersa en el apartado k) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas³². Inmediatamente ordenó la publicación de la incoación del correspondiente expediente en los Boletines Oficiales.

Simultáneamente Manuela Alameda Cámara presentó su declaración jurada de bienes, en la que declaró algunas pequeñas fincas de su marido valoradas en 2.000 pesetas, indicando sobre su situación económica *no percibo ningún jornal ni sueldo de ninguna clase ni tampoco mi marido, a excepción de algunos días que tiene jornal cobrando 6 pesetas diarias más la comida*. Obsérvese que el jornal se ha reducido respecto al citado por las autoridades locales (9 pesetas) y que ya no son *muchos días al año* sino *algunos días al año*. Nuevamente se trataba de una familia humilde de la que no se podía esperar dinero, por lo que su exigencia de responsabilidades políticas sólo tenía el sentido nuevamente del castigo. Dadas las diferencias patrimoniales según las versiones se decidió recurrir a dos peritos de la localidad y adictos al nuevo régimen, que elevaron el valor patrimonial de esta familia a las 7.000 pesetas, facilitando así una futura sanción elevada.

³² Este apartado es el siguiente: *Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional*.

En su resumen metódico el Juez Instructor Provincial consideró probados el haberse destacado a favor del Frente Popular, el haber intervenido en la destrucción de la iglesia de Sarratella y el haberse distinguido por sus ideas extremistas, cargos como hemos visto todos negados por la inculpada. Por todo ello se le propuso como inmersa en los supuestos j) k) l) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas³³.

Sin embargo, en su expediente no aparece ninguna sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, con lo que este sería uno de los expedientes que quedaron “dormidos” como consecuencia del desinterés de las autoridades (por no poder pagar la sanción económica en la práctica) o del colapso administrativo de esta jurisdicción especial. Pero, lejos de ser esto totalmente beneficioso para la inculpada y su familia, supuso una prolongación exagerada de su situación de procesamiento, con la correspondiente pérdida de libertad de circulación y de disposición de los bienes propios, ya que su caso no fue sobreseído hasta el 28 de febrero de 1945. Para esta familia, pues, el castigo duró nada más y nada menos que 4 años, tiempo que presumimos eterno en el duro contexto de la posguerra.

³³ Estos apartados son los siguientes:

j) *Haber excitado o inducido a la realización de los hechos comprendidos en alguno de los apartados anteriores, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta, de la radio o de cualquier otro medio de difusión, bien en escritos dirigidos a diferentes personas.*

k) *Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.*

l) *Haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional.*

El caso de Juan Artola Roca es un ejemplo claro de la diversidad de situaciones en que se vieron envueltos los ciudadanos tras la guerra civil, fruto de un contexto social, político y económico muy complejo en el que nadie estaba a salvo de la arbitrariedad, cayendo fácilmente en las redes del aparato represivo franquista³⁴.

Juan Artola Roca era un industrial nacido en Barcelona pero residente en Vinaroz, dedicado fundamentalmente al negocio del aceite. Pese a tener antecedentes políticos conservadores, por lo que parece que sufrió persecución y acoso de las autoridades republicanas, acabó siendo denunciado en algún momento durante los primeros meses de dominio franquista, en lo que parece un turbio asunto relacionado con el mercado negro. Conocemos los puntos básicos de la denuncia gracias al resumen de la sentencia del consejo de guerra al que fue sometido en Vinaroz el 24 de octubre de 1939 como consecuencia de la misma.

Tras la llegada de las tropas franquistas parece que Juan Artola Roca fue nombrado Delegado de Auxilio Social³⁵ de Vinaroz, lo que no es de extrañar por sus antecedentes políticos y su dedicación profesional. En el desarrollo de su cargo recibió órdenes de la Delegación de Auxilio Social para desplazarse a Mallorca, donde adquirió 1.800 kg. de bacalao, 20 cajas de leche condensada y 1.000 kg. de alubias destinados a la organización y comedores de Auxilio Social de Vinaroz. La denuncia le acusó de comercializar por su cuenta 1.200 kg. de bacalao, 15 cajas de leche condensada y 400 kg. de alubias, entregando el resto a Auxilio Social de Vinaroz.

³⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Juan Artola Roca, Caja 10103. AHPCS.

³⁵ Nacida en 1937, Auxilio Social fue un órgano de FET y de las JONS que pretendía ofrecer asistencia a la población más necesitada en los contextos de guerra y posguerra. Sin embargo, esta asistencia más que como fruto de la caridad cristiana o que como derecho básico de los individuos, fue concebida como un instrumento de socialización del partido fascista español, que vendía la ayuda como una medida de justicia social y de integración en el nuevo proyecto fascista español. En realidad, lo que demostró fue ser un buen instrumento de control de una sociedad necesitada no sólo de artículos de primera necesidad sino también de integración social y política en el nuevo Estado franquista. C. MOLINERO (2005), op. cit., pp. 26-31 y 163-169. A. CENARRO, *La sonrisa de la Falange. Auxilio Social en la guerra civil*. Barcelona, 2005. Para información general sobre la actuación de Auxilio Social en Castellón durante los primeros años de la posguerra R. GODES, op. cit., pp. 84-85.

Desconocemos si la denuncia hizo referencia a hechos verídicos o no, pero sí sabemos las consecuencias que se derivaron de dicha denuncia y el hecho que en el Boletín Oficial del Estado del 14 de abril de 1941 se publicó un Decreto firmado por el mismísimo Franco indultando expresamente a Juan Artola Roca. La primera consecuencia de esta denuncia fue el paso por un consejo de guerra, celebrado como hemos indicado previamente en Vinaroz el 24 de octubre de 1939, del denunciado, que acabó siendo condenado por un delito de excitación a la rebelión a la pena de 6 años y 1 día de prisión mayor³⁶. No es ocioso detenernos a considerar que una simple denuncia podía comportar para una persona catalogada “de derechas” una pena de cárcel y cómo un presunto delito económico, producido además en posguerra, se convertía fácilmente en delito de rebelión militar. Además, la existencia de una sentencia por un consejo de guerra abría las puertas a un futuro expediente de responsabilidades políticas.

Efectivamente, el 12 de marzo de 1941 llegó a manos del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, entre otros, el testimonio de condena contra Juan Artola Roca, por lo que se ordenó la incoación del correspondiente expediente de responsabilidades políticas. Juan Artola Roca estaba en la Prisión de Castellón desde como mínimo octubre de 1939. Pero por poco tiempo, ya que sabemos que el 14 de abril de 1941 se publicó su indulto y que tres días más tarde fue puesto en libertad. Sin embargo, esto no importaba a la hora de su procesamiento por responsabilidades políticas.

El Juez Instructor Provincial ya había pedido informes a las autoridades locales³⁷. El Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Vinaroz, Narciso Camilo, declaró que Juan Artola Roca tenía tres hijos menores de edad y tanto él como su esposa no ganaban ningún jornal. Sus bienes se reducían a un molino de aceite que valoraba en

³⁶ El consejo de guerra lo integraron Juan García, More Rabe, Fernández Moreno Pérez Gutiérrez y Martínez Aduriz. A Juan Artola Roca no le sirvieron de nada sus antecedentes derechistas ni la presentación el 11 de noviembre de 1939 de un escrito del Jefe Provincial Accidental de FET y de las JONS, Federico de Francia y Pascual, en el que se aseguraba que el inculcado mantuvo siempre una actuación correcta y que su cese no fue por sanción, sino por sus reiterados deseos de abandonar el cargo de Delegado de Auxilio Social de Vinaroz.

³⁷ Como el inculcado era nacido en Barcelona se pidieron primero informes a las autoridades locales de aquella ciudad, concretamente a la Delegación de Policía y a la Guardia Civil. Ambas autoridades locales declararon que se desconocía completamente al inculcado. Ante esta información, en manos del Juez Instructor Provincial el 22 de abril de 1941, se decidió pedir los informes a las autoridades locales de Vinaroz, que se firmaron del 10 al 17 de mayo.

6.000 pesetas. El cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Vinaroz, V. Escrig, realizó una defensa del inculpaado como pago a favores anteriores, indicando que *ha observado siempre buena conducta y religiosa, durante la dominación marxista salvó escondiéndolo en un huerto de su propiedad el tesoro de la Iglesia*. Posteriormente el alcalde de Vinaroz añadió datos económicos como que el inculpaado tenía una finca valorada en 900 pesetas, que la maquinaria que había en su molino de aceite no le pertenecía y que su mujer poseía una casa valorada en 2.000 pesetas. El informe del Delegado Local de FET y de las JONS consistió en una copia del informe de la alcaldía. En principio, pues, los informes eran favorables o neutros (por informar asépticamente de cuestiones económicas).

El 13 de mayo de 1941, mientras las autoridades de Vinaroz realizaban sus informes, se procedió a la lectura de la cinco prevenciones de la Ley a Juan Artola Roca. Cinco días más tarde éste presentó su declaración jurada de bienes, en la que ratificó las informaciones que darán las autoridades locales, añadiendo *en la actualidad no puedo ganar ningún jornal por no tener el molino en funcionamiento hasta la próxima cosecha*, con lo que no es descabellado pensar que económicamente su familia había quedado gravemente perjudicada por su estancia en la cárcel.

Dos meses más tarde el Juez Instructor Provincial redactó el correspondiente resumen metódico, en el que le consideró inmerso en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas³⁸. Tras su notificación Juan Artola Roca pudo presentar un escrito de defensa se quejó amargamente de haber sido encarcelado por un asunto que los mismos dirigentes de Auxilio Social habían demostrado que no era cierto. Además, se quejó de todas las molestias y atropellos que acompañaban su procesamiento:

[El que declara] no quiere entrar en consideraciones sobre la forma en que se produjo la denuncia origen del juicio y esta inexplicable tardanza, que motivaron tan graves estragos para un hombre honrado y de tan claros antecedentes políticos. Por el respeto que debe a ese dignísimo Tribunal, que, por otra parte, tampoco puede juzgar de nuevo sobre hechos, y el a sí mismo se debe, omite tratar de esta dolorosa cuestión. Sufrió

³⁸ Recordamos que este apartado era el siguiente: *Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma, o por los de traición, en virtud de la causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional.*

prisión hasta la publicación en el BOE de 15 de abril de 1941, nº 105, que se refiere a él personalmente por su honradez y claros antecedentes.

En su defensa, también aportó el texto del decreto por el que se le indultaba y un amargo comentario sobre su absurda situación:

Decreto de 10 de abril de 1941 por el que se concede el indulto a la pena que le quede por cumplir a Juan Artola Roca.

En atención a las circunstancias que concurren y a los servicios prestados a la Causa Nacional por Juan Artola Roca, Vengo en indultarle del resto de la pena de seis años y un día que le falte por cumplir.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 10 de abril de 1941.

Francisco Franco

Si hubo indulto total por la persona más autorizada ¿cómo pudo haber excitación a la rebelión quien tenía antecedentes de perseguido y militante del Movimiento, resultando además que los hechos de que se le acusa son inexactos?

Como siempre, no sirvió de nada. Finalmente, en la sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia le consideró inmerso en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas, consideró los hechos como “menos graves” y se condenó a Juan Artola Roca al pago de una sanción económica de 200 pesetas.

La situación provocada por la Ley de Responsabilidades Políticas era absurda, si es que alguna vez tuvo sentido, pero en este caso el inculpado tuvo que sentirse profundamente desconcertado y decepcionado. Para evitar males mayores, Juan Artola Roca optó por no recurrir la sentencia y pagar la sanción económica, lo que hizo el 11 de octubre de 1941. El 3 de noviembre de 1941 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón la liberación de sus bienes. La pesadilla del franquista perseguido por el franquismo había finalizado. Nadie podría encontrar un sentido que no fuera el de la arbitrariedad al procesamiento de Juan Artola Roca, y era esa arbitrariedad la que, a su vez, fomentaba el miedo y la denuncia.

Uno de los propósitos de la Ley de Responsabilidades Políticas era rendir cuentas con los dirigentes de los partidos políticos de izquierdas y con los de los sindicatos. Nada más claro y más sencillo: franquistas contra “rojos”. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja que este simple análisis, como lo demuestra el caso del vecino de Vistabella Leonardo Salvador Fabregat.³⁹

El procesamiento de Leonardo Salvador Fabregat comenzó el 5 de febrero de 1941, cuando el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón remitió al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia una lista de presuntos responsables políticos de la localidad de Vistabella elaborada previamente por el Delegado Local de FET y de las JONS de dicha localidad. En esta lista se incluía un comentario resumido de la actuación de cada uno de los acusados. En el caso de Leonardo Salvador Fabregat el comentario era conciso, directo y contradictorio:

Leonardo Salvador Fabregat, fue primeramente de derechas y por el año 1936 a las elecciones de marzo se afilió a las izquierdas y después de iniciado el Movimiento se constituyó la UGT, de la que fue Presidente, su actuación antes y después moderada.

El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia ordenó la incoación del expediente de responsabilidades políticas el 13 de marzo de 1941, con lo que el Juez Instructor Provincial mandó la realización de los informes de las autoridades locales. Leonardo Salvador Fabregat, de 40 años de edad, se encontraba en esos momentos en el Batallón Disciplinario de Trabajadores número 63 de Valencia, sin duda por su condición de expresidente de la UGT de Vistabella. Desconocemos desde cuándo estuvo en este Batallón, aunque sí conocemos que causó baja en él el 9 de junio de 1941, cuando todavía desconocía que estaba siendo procesado de nuevo, esta vez por la jurisdicción de responsabilidades políticas.

El informe de la alcaldía de Vistabella fue favorable. En él se explicaba que, a pesar de haber sido presidente de la UGT, su conducta fue buena y su actitud moderada. Padre de cinco hijos menores de edad y chofer de profesión, el alcalde Ramón Fabregat

³⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Leonardo Salvador Fabregat, Caja 10129. AHPCS.

calculaba que sus bienes podían ser valorados en 2.000 pesetas. Ni él ni su esposa ni sus hijos ganaban jornal alguno. Este informe fue calcado por el Delegado Local de FET y de las JONS de Vistabella, el mismo que le había denunciado al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas. José Escrig, el cura párroco de Vistabella se permitió el siguiente comentario: *su actuación se puede clasificar de ordenada pero demasiado suelto de lengua*, lo que manifestaba algún reproche por alguna acción del pasado. El Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Vistabella informó en sentido contrario de forma muy escueta, ya que su informe simplemente ofrecía esta información: *simpatizante de izquierdas, clasificado como desafecto por lo que se encuentra en el Batallón Disciplinario de Trabajadores nº 63 de Valencia*. A estos informes, firmados entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 1941 se añadió posteriormente el del director del citado Batallón de Trabajadores, quien únicamente informó de su baja en la fecha anteriormente citada.

Reunidos los informes de las autoridades locales, el 26 de junio de 1941 se citó a Leonardo Salvador Fabregat en la Secretaría del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas en Castellón para proceder a la lectura de los cargos que se le imputaban. En la única oportunidad que se le ofreció para dar su versión de los hechos que se le imputaban Leonardo Salvador Fabregat manifestó que desde junio de 1936 militó en *los partidos de Derecha*, por lo que fue *clasificado y perseguido* durante la guerra, periodo en el que detentó el cargo de Secretario del Ayuntamiento de Vistabella y por el que tuvo que sufrir amenazas de expulsión por su orientación política, siendo al final obligado a afiliarse a algún partido político para conservar su puesto, eligiendo el partido de Unión Republicana, aunque especificó que no lo hizo por ideología sino por necesidad. Además, explicó que se convirtió en presidente de la UGT de Vistabella impulsado por las personas de derechas de la localidad y para salvar la vida de unos familiares perseguidos que tenía escondidos, cesando del cargo voluntariamente cuando acabaron las persecuciones.⁴⁰

⁴⁰ En este sentido, en el expediente del también vecino de Vistabella Saturnino Centelles Olaria el inculpado también afirma que se convirtió en presidente de la UGT impulsado por las personas de derechas de la localidad, con la intención de contrarrestar la fuerza de la CNT. Curiosamente en la denuncia inicial del expediente, también realizada por el Delegado Local de FET y de las JONS de Vistabella, también se le califica de *persona de orden antes y después del 18 de julio de 1936*. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Saturnino Centelles Olaria, Caja 10129. AHPCS.

Por su interés transcribimos la declaración de Leonardo Salvador Fabregat en la lectura de cargos: *Acto seguido el inculpado manifestó: que desde el año 1931 hasta el mes de junio de 1936 militó en los partidos de Derecha, estando clasificado y perseguido como personas destacadísima y en el citado mes*

Al mismo tiempo en su declaración jurada de bienes Leonardo Salvador Fabregat valoró sus bienes en 2.500 pesetas, aunque especificó que eran todos propiedad de su esposa. Su situación era realmente desesperada, pues tras informar que tenía cinco hijos menores de edad declaró *no gano ningún jornal por no tener trabajo*. Era el último intento para pedir misericordia a las autoridades franquistas.

Pero de nuevo la versión del inculcado no sirvió para nada. El resumen metódico elaborado por el Juez Instructor Provincial le consideró exageradamente inmerso en los apartados b) c) k) y l) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁴¹. Finalmente el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia dictó su sentencia el 22 de noviembre de 1941: se le consideró responsable político según los apartados b) y c) del artículo 4º de la Ley, se calificaron los hechos como leves y se condenó a Leonardo Salvador Fabregat a la privación para ocupar cargos de mando o confianza durante tres años y al pago de una sanción económica de 100 pesetas. Dicha sanción fue pagada, mediante giro postal, el 29 de mayo de 1942.

El ejemplo de Leonardo Salvador Fabregat es el del perfecto *cabeza de turco*. Persona de derechas, fue perseguido por las fuerzas republicanas y acabó siendo presidente de la UGT de su localidad alentado por los principales elementos

de junio de 1936, cuando el declarante ejercía el cargo de auxiliar en la Secretaría del Ayuntamiento, fue objeto de amenazas de expulsión del cargo que desempeñaba por su significación de derechista y como quiera que necesitaba trabajar para llevar el sustento familiar, se vio obligado a afiliarse al Partido de Unión Republicana, haciéndolo por conservar el puesto, no porque sintiera dicha ideología. Acerca del cargo que se le hace de haber sido Presidente de la Sindical UGT durante el Movimiento dijo que a requerimiento de las personas de derechas de la localidad y por salvaguardar la vida de algunos familiares que el declarante tenía escondidos por ser objeto de persecución de los dirigentes marxistas, se vio obligado a aceptar dicho cargo por salvar de la muerte a sus precitados familiares, así como a las personas más destacadas de derechas que se hallaban escondidas y que una vez transcurridos los siete u ocho meses primeros del Alzamiento, en que las persecuciones habían cesado, dimitió voluntariamente del cargo que desempeñaba, sin volver a ostentar ningún otro cargo .

⁴¹ Estos apartados son los siguientes:

- b) Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones a que alcanza la declaración del artículo 2º, así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de corporaciones y organismos, tanto públicos como privados.*
- c) Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del 18 de julio de 1936, y mantenida hasta esa fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.*
- k) Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.*
- l) Haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional.*

conservadores de la misma. Llegado el franquismo, el absurdo aparato represivo puesto en marcha lo incluyó en la categoría de “vencido”, siendo enviado seguramente desde algún mes de 1939 hasta junio de 1941 a la prisión y desde allí a un Batallón Disciplinario de Trabajadores. Liberado del mismo, volvió a Vistabella y allí se encontró con el procesamiento por responsabilidades políticas, fruto de una denuncia de un vecino de los que seguramente le pidieron ser presidente de la UGT, lo que le llevó a un periodo de vigilancia, falta de libertad y control de bienes de 1 año y 3 meses, acabando con una condena de inhabilitación por tres años y una multa de 100 pesetas. Por si fuera poco, meses después de su llegada a Vistabella se encontraba sin trabajo. Y todo con cinco hijos menores. Salvador Fabregat, un perdedor de la historia, pero, sobre todo, una víctima más del franquismo, de un sistema represivo que, en su rigidez, voracidad y sinsentido, ni siquiera supo distinguir entre partidarios y enemigos.

El 10 de febrero de 1941 el alcalde franquista de la localidad de Gaibiel, Vicente Pérez, denunció a las autoridades franquistas al que había sido alcalde republicano de Gaibiel⁴². La denuncia se realizó en un tono muy agresivo, calificando al denunciado como *envenenador de conciencias* o *fervoroso partidario del Frente Popular*, palabras que bastaban por si mismas para arruinar la vida a cualquiera en los primeros años del franquismo. La intensidad de la denuncia es tal que preferimos reproducirla íntegramente:

Informe de Daniel Calvo Bonet por considerarlo comprendido en el artículo 4º de la Ley de 9 de febrero de 1939.

Daniel Calvo Bonet, natural y vecino de ésta, de 34 años de edad, soltero, fue alcalde desde el 28 de mayo de 1936 hasta el 22 de noviembre de 1936. En esta fecha se constituyó el Consejo Municipal de Economía y se quedó de Presidente hasta el 11 de marzo de 1937 que cesó, pero se quedó de concejal hasta el día 1º de mayo de 1938 que se incorporó al ejército rojo; en la actualidad está detenido por desafecto.

Durante su actuación se cometieron en ésta toda clase de atropellos, saqueos, persecuciones, quema de imágenes, y en cambio a él a todo esto decía: “no puedo, no puedo hacer nada”, es decir fue un envenenador de conciencias, un fervoroso partidario del frente popular y por su triunfo hubiera consentido se hiciera todo cuanto hubiera sido.

Tan pronto tomó posesión de la Alcaldía empezó a molestar al Sr. Secretario y éste tuvo que presentar la dimisión. Un mes antes del Glorioso Movimiento Nacional nos cerró la iglesia y el Sr. cura tuvo que marcharse.

Y para que conste y a los efectos que proceda extiendo el presente informe en Gaibiel a 10 de febrero de 1941.

El Alcalde,

Vicente Pérez.

La denuncia activó el mecanismo de la jurisdicción especial de responsabilidades políticas y el 13 de marzo de 1941 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas ordenó al Juez Instructor Provincial la incoación de un expediente y éste a su vez ordenó los preceptivos informes de las autoridades locales. Sorprendentemente la mayoría de éstos fueron benévolos con el procesado. El Comandante del Puesto de la Guardia Civil le acusó de *pasividad en la comisión de todo tipo de desmanes*, una circunstancia punible por la Ley de Responsabilidades Políticas, que entendía de actos u omisiones, y que ya había sido reseñada en la denuncia del alcalde. Sin embargo, también se informó que su ingreso en el ejército

⁴² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Calvo Bonet, Caja 10129. AHPCS.

republicano fue forzoso. Económicamente era labrador, trabajando fincas propias valoradas en 15.000 pesetas, y no tenía hijos menores que mantener. El informe del alcalde consistió en una copia a mano del informe de la Guardia Civil, firmado dos días más tarde. Manuel Mañes, el cura párroco de Gaibiel, se escudó en su llegada a esa población en noviembre de 1939 para asegurar que no sabía nada del caso. Curiosamente fue el informe del Delegado de FET y de las JONS el más favorable. En él se aseguraba que el inculpado había pertenecido al Frente Popular pero que en ningún momento llegó a ser *elemento destacado*, contradiciendo la denuncia inicial. Además se indicó que *pese a los atropellos que venían haciéndose por forasteros, cuando era alcalde sujetó bastante bien a los indeseables*, lo cual anulaba también la inicial acusación de pasividad.

Por tanto, la situación no estaba muy clara, por lo que más que nunca se hizo necesaria la lectura de cargos al inculpado, donde se oiría su versión y se le permitiría presentar pruebas en su defensa. Así, el 13 de septiembre de 1941 se convocó al inculpado en la secretaría del Juzgado Instructor Provincial en Castellón. En su comparecencia Daniel Calvo Bonet admitió haber pertenecido a Izquierda Republicana, partido del que fue Presidente en Gaibiel en el periodo de abril-mayo de 1936, así como haber sido elegido alcalde por la Gestora Municipal, cargo que ejerció desde agosto de 1937 hasta abril de 1938. Respecto a su actuación como alcalde rechazó firmemente las acusaciones de pasividad ante los atropellos que se cometieron, afirmando que gracias a su actuación salvó algunos objetos sagrados e incluso aseguró haber arriesgado su vida por salvar a las personas de derechas.⁴³

⁴³ De nuevo, vale la pena acudir directamente a la declaración del inculpado para conocer todos los términos de su defensa:

Preguntado con relación a los atropellos y desmanes cometidos durante el periodo rojo y su actuación de alcalde en el pueblo de Gaibiel dijo que repetidas veces fueron los milicianos con objeto de destruir la Iglesia e imágenes sagradas, impidiéndolo dos o tres veces, pero ya una de las veces, integrada por milicianos procedentes de Valencia no tuvo otro remedio que acceder a su petición, toda vez que pistola en mano dentro de la casa Consistorial le arrebataron las llaves de la antedicha iglesia, procediendo los mismos a la destrucción de los Santos e Imágenes sagradas, logrando el declarante la noche anterior al siniestro y como precaución de lo que iba a suceder sacar y esconder entre paja todos los tesoros y valores que pudo, en unión de personas de orden de la localidad y entre ellas al actual Alcalde de la misma.

Preguntado si tiene algo más que manifestar dijo que durante su actuación de Presidente del Comité Local fueron milicianos desconocidos a buscar una lista en que figuraban las personas más destacadas de derechas, a lo que el declarante se opuso consiguiendo que no maltrataran a ninguna persona de la localidad, exponiéndose por sus esfuerzos realizados a que tomaran represalia contra él como le sucedió en ciertas ocasiones, en que fue sacado por los milicianos diciéndole que lo iban a asesinar por no haber dejado sacar de la localidad a las personas de Derechas y por responder de las mismas, en Actas que acordaron y firmaron todos los presidentes de los Comités y Sindicatos locales.

A diferencia de otros casos, Daniel Calvo Bonet sí aprovechó el plazo de cinco días que concedía la Ley de Responsabilidades Políticas para presentar escritos y testimonios en su defensa. Para ello presentó cuatro documentos. El primero era un escrito del médico de Castellón José Sanahuja Gil, quien dijo que del inculpado *no recibió más que beneficios y que durante mi convivencia con él ni le vi, ni oí que cometiese ningún acto por el cual surgieran consecuencias irreparables*. Además, demostró que las acusaciones de pasividad eran falsas describiendo su actuación durante la guerra: [...] *llegando en una ocasión en que una patrulla de Guardias de Asalto Rojos llegaron a Gaibiel para detener a algunos desafectos a los rojos (entre los que se encontraba el declarante) a oponerse en forma plenamente airada a que esta detención se llevase a cabo, requiriendo para ello y como presidente que era de Izquierda Republicana al concurso de varios vecinos y consiguiendo lo que se proponían*.

El segundo y el tercer documento se corresponden a informes de dirigentes locales de FET y de las JONS. El primero, fechado el 16 de septiembre, estaba firmado por el Jefe Local Ramón Poses, quien ratificó la buena conducta del inculpado y volvió a demostrar la falsedad de su pasividad con estas declaraciones: [...] *no pudiendo evitar con toda su buena voluntad y el cargo que desempeñaba que unos individuos incontrolados que a este pueblo vinieron que cometieran algunos desmanes, pero sí logró encarándose con dichos individuos que continuaran su propósito, pues logró a todo trance, exponiéndose mucho, que a ningún elemento de derechas se le detuviese, como así era el deseo de dichos individuos, logrando así interrumpir los actos desagradables en este pueblo*. El segundo documento de FET y de las JONS estaba firmado el 17 de septiembre por Ramón Capilla, autor del primero de los informes del partido único, quien volvió a ratificar su buena conducta como alcalde, añadiendo que *evitó que fuesen quemados algunos Ornamentos Sagrados*.

El cuarto documento reforzó la línea de defensa del inculpado por personas consideradas “de orden”. En este caso el documento estaba firmado por Marcelino

Nótese que, según la versión del inculpado, él y el en ese momento alcalde de Gaibiel colaboraron en la ocultación de objetos religiosos para que no cayeran en manos de los milicianos. ¿Qué razón habría, pues, para que Vicente Pérez denunciara a Daniel Calvo Bonet?

Pérez Pérez y Amparo Bonet, familiares del sacerdote asesinado Basilio Maritolio. Su contenido no deja dudas de la actuación moderada y sensata del inculpado:

Declaramos que Daniel Calvo Bonet observó siempre una conducta intachable antes y después del Glorioso Movimiento Nacional, viéndose una buena voluntad en todos sus actos, corriendo un grande peligro para él por el cargo que desempeñaba vino y nos dio secretamente los guardamientos sagrados que gracias a él son los que están celebrando el sacerdote e igualmente declaramos que vinieron varias veces a destruir las imágenes de la iglesia oponiéndose airadamente poniendo de su parte toda la voluntad que pudo para evitar el que se realizasen tales intenciones y en vista ya de las veces que vinieran con la intención de ejecutar ordenó se llevasen en cuarto secreto todas las imágenes que de más valor se encontraban en la iglesia también podemos decir que cierto día vinieron unos milicianos rojos que a la fuerza absoluta y poniendo la pistola en pecho lograron coger las llaves del ayuntamiento para cometer tales desmanes per noches antes trabajó todo cuanto pudo para sacar los tesoros de la iglesia y los escondió en un montón de paja donde estuvieron guardados durante toda su actuación como alcalde cosa que podemos justificar.

Como era habitual, estos testimonios no surtieron efecto a la hora de la defensa del inculpado y el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas en su resumen metódico lo declaró inmerso en los apartados b) e) j) i k) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁴⁴. Tras la notificación del resumen metódico al inculpado éste aún tuvo fuerzas para presentar, en las 48 horas de plazo que tenía para ello, un escrito de defensa. En este escrito, presentado en la oficina del Tribunal Regional de Responsabilidades de Valencia el 31 de diciembre de 1942, Daniel Calvo Bonet se quejó amargamente de todos los aspectos de su procesamiento: de los cargos de la denuncia, de sus acusaciones personales, con la valoración de sus bienes, acabando con la solicitud de una revisión total de su caso, lo que nunca se llevó a cabo. Los términos de su defensa son también elocuentes:

⁴⁴ Estos apartados son los siguientes:

b) Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones a que alcanza la declaración del artículo 2º, así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de corporaciones y organismos, tanto públicos como privados.

e) Haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular o de los partidos y agrupaciones comprendidos en el artículo 2º, o contribuido con ayuda económica a los mismos, prestada de manera voluntaria y libre y con propósito deliberado de favorecerles, aunque no se hubiesen desempeñado puestos directivos o de representación, ni cargos o misiones de confianza, ni se tratase de afiliados a aquéllos.

j) Haber excitado o inducido a la realización de los hechos comprendidos en alguno de los apartados anteriores, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta, de la radio o de cualquier otro medio de difusión, bien en escritos dirigidos a diferentes personas.

k) Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.

Compareciendo yo Daniel Calvo Bonet en el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Valencia y a requerimiento de este mismo Tribunal para ser enterado de los cargos que se me imputan. Hago constar no estar conforme con los cargos que se me hacen en los informes dados por Don Vicente Pérez, actual alcalde de Gaibiel y Don Francisco Nicolau Sargento Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Viver.

En dichos informes se me imputan que en ese período en que fui alcalde del pueblo de Gaibiel se cometieron desmanes y que no hice de mi parte cuanto pude por evitarlos.

También se me acusa de haber sido un envenenador de conciencias y de que un mes antes de estallar el Glorioso Movimiento Nacional hice cerrar la iglesia y expulsar al sacerdote del pueblo.

Con lo que respecta a mi periodo de alcalde hice todo lo posible por que no se cometieran desmanes e incluso llegué a exponer mi vida por salvar a personas de derechas lo que logré.

Con respecto a la quema de imágenes lo que hice fue oponerme a que este acto se realizara influyendo sobre el que hoy es alcalde de Gaibiel para que se salvaran algunas imágenes de la iglesia cosa que se realizó por el mismo.

Se me acusa de envenenador de conciencias y esto no es cierto por que no he perseguido a nadie en mi vida ni he tratado de hacer opresión sobre nadie del pueblo.

También formulo no estar conforme con las declaraciones de bienes con respecto a la cuantía que hacen estos señores.

Por todo lo expuesto pido a este Tribunal se me revise la causa que se me instruye y pido de nuevo informes de mi actuación a estos señores y a los que crean convenientes este Tribunal

Todos los intentos de defensa volvieron a ser vanos. El 3 de enero de 1942 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia dictó su sentencia, en la que se le consideraba inmerso en los apartados b) y c) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁴⁵, se calificaron los hechos como “menos graves” y se le condenó a la privación para ocupar cargos de mando o confianza por 4 años, así como a la sanción económica de 300 pesetas. Notificada la sentencia al inculpado el 19 de febrero de 1942, el 10 de marzo siguiente Daniel Calvo Bonet pagó su sanción económica mediante giro postal.

⁴⁵ Estos apartados son los siguientes:

b) *Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones a que alcanza la declaración del artículo 2º, así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de corporaciones y organismos, tanto públicos como privados.*

c) *Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del 18 de julio de 1936, y mantenida hasta esa fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.*

En este caso el proceso duró 1 año y 1 mes, pero más que la duración del mismo este caso es importante por la demostración que las autoridades franquistas utilizaron la Ley de Responsabilidades Políticas no para castigar a los elementos más radicales de las propuestas republicanas, sino también a aquellas personas que, desde posiciones progresistas, mantuvieron una actuación equilibrada, responsable y sensata. Este tipo de personas también fueron sujetos a castigar por parte del franquismo.

El caso de Vicente Torres Lapuerta⁴⁶ es especial porque nos demuestra cómo la Ley de Responsabilidades Políticas también fue utilizada para intensificar el castigo a una persona que había cometido algún tipo de delito, en este caso alteración del orden, ya que, como comprobaremos, cuando una persona, por el motivo que fuera, entraba en la peligrosa situación de ser investigada por algún incidente, las autoridades siempre tenían el recurso a la Ley de Responsabilidades Políticas para añadir un segundo castigo depurativo. En este caso se trataba de un delito de “desafección al régimen” a raíz de una discusión pública.

El 28 de noviembre de 1939 el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Almenara Gaspar Corominas Esteban recibió un escrito-denuncia del alcalde de Chilches que literalmente decía:

En el día de hoy y sobre las diecinueve horas, se ha presentado ante mi Autoridad el Vigilante Nocturno de esta Villa, Pascual Navarro, denunciándome que el día de ayer sostuvo una discusión con el vecino de ésta, Vicente Torres Lapuerta, intentando hasta incluso la agresión de éste, sobre el Vigilante, cuyo hecho parece fue motivado porque el Vicente Torres, hablaba mal del actual Régimen, y al llamarle la atención se insolentó. Y como quiera que este hecho reviste una gravedad, dada la situación en la que nos encontramos, lo pongo en conocimiento de V., para caso de que se confirmase, tome las medidas propias del caso, para ejemplo de los saboteadores de nuestro Glorioso Alzamiento Nacional.

Dios salve a España y guarde a V. muchos años.

Chilches a 27 de noviembre de 1939. Año de la Victoria.

El Alcalde, Bautista Bosch.

Ante esta denuncia, el anteriormente citado guardia civil ordenó que se presentaran ante él el denunciante, el denunciado y todos los testigos que hubo en el momento del incidente, en un alarde del poder que en aquel año tenía la Guardia Civil. El primero en comparecer, el 28 de noviembre de 1939, fue el denunciante Vicente Pascual Navarro, labrador y en ese momento vigilante nocturno de la localidad de Chilches, quien describió que al pasar por la plaza del pueblo vio cómo un grupo de vecinos se encontraban reunidos *discutiendo sobre la interpretación de un Bando que acababa de leer el pregonero del pueblo*. Parece que observó que el denunciado,

⁴⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Torres Lapuerta, Caja 10075. AHPCS.

Vicente Torres Lapuerta estaba defendiendo *los procedimientos empleados por los rojos durante su dominio*, por lo que se lo echó en cara, por lo que el denunciado le contestó *que si hubieran ganado ellos la guerra no quedaría uno de los de derecha*. Posteriormente, según siempre la versión del denunciante, el denunciado intentó agredirle, impidiéndolo el resto de personas que se encontraban hablando. Por estos hechos Vicente Pascual Navarro decidió denunciarlo al alcalde de Chilches, justificándose porque *le parece de mal español defender todavía a los rojos*.

Uno a uno fueron pasando por el Puesto de la Guardia Civil todos los testigos de los hechos. El primero en comparecer, el mismo 28 de noviembre de 1939, fue el comerciante Vicente Sanz Suay quien aclaró que el Bando que se leyó y que motivó los comentarios iniciales trataba sobre las listas del pueblo, que hubo quien interpretó que había que presentarse con las escrituras de propiedades en el Ayuntamiento y que algunos dijeron que la mayoría no podría hacerlo *porque los rojos las habían destruido* o por lo menos las habían quitado. Parece que el denunciado trató de defender a “los rojos” y que el denunciante le dijo *Tú eres socialista y como tal defiendes a los tuyos*, a lo que el denunciado contestó *Tú debías estar...* intentando agredirle. Curiosamente dijo ser todo lo que sabía, ya que puso como excusa que su hija le llamó a cenar y se fue a su casa. En los mismos términos se expresó el siguiente testigo, el labrador Vicente Casals Safont, el labrador Baustista Alcañiz Casabó que testificaron el 31 de noviembre de 1939.

El labrador Vicente Torres Royo añadió datos nuevos, ya que, según su versión, el denunciado dijo que había que culpar de la desaparición de las escrituras no a los socialistas de Chilches sino al Gobierno, lo que provocó la reacción airada del denunciante, que *le amenazó con el puño pegándole y aguantó los golpes*, y que posteriormente los separaron. Además añadió que el denunciado era de la UGT antes de la guerra, aunque nunca se había significado haciendo guardias o como escopetero. Un día más tarde testificó el labrador José Serra Blasco, quien aclaró que el denunciado lo que realmente dijo era que las escrituras no habían sido destruidas, sino que estaban guardadas, a lo que el denunciante replicó que *por culpa de los rojos estaban en la miseria*, lo que hizo que casi llegaran a las manos.

La actuación de la Guardia Civil finalizó con un informe personal sobre Vicente Torres Lapuerta realizado por el Comandante del Puesto de la Guardia Civil Gaspar Corominas, realizado incluso antes que comparecieran todos los testigos, que abría completamente la puerta al procesamiento de esta persona por responsabilidades políticas:

El informe a que este informe se refiere y que ha motivado el presente atestado, según las autoridades locales, es individuo que perteneció al Frente Popular desde antes del Glorioso Movimiento Nacional y durante él fue escopetero haciendo guardias armado, personas sensatas y de responsabilidad y afección al Glorioso Alzamiento le consideran como propagandista del Régimen rojo, siendo apasionado de Azaña, insultó continuamente a las personas de derechas durante el dominio rojo excitando a sus amigos para que cometieran sus desmanes; tiene fincas por un líquido imponible en el Catastro de 106 pesetas cuyo valor en renta es de unas dos mil y pico pesetas. Almenara 29 de noviembre de 1939.

De hecho, este informe fue remitido al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón. Y se hizo el 29 de noviembre de 1939, antes de que se testificaran todos los testigos, lo que indica que la suerte del denunciado estaba ya decidida y que la comparecencia de testigos era un acto sin efectos prácticos. Los informes de las autoridades locales, entre los que no se encontraba el del cura párroco, se firmaron el 8 de enero de 1940 y confirmaron la pertenencia del inculcado a la UGT y al Frente Popular, así como actuaciones suyas haciendo guardias y como *escopetero*. Curiosamente, el alcalde de Chilches, Joaquín Sanz, le intentó descalificar con el calificativo de *apasionado de Azaña*.

El 30 de enero de 1940 se procedió a la lectura de cargos contra Vicente Torres Lapuerta, a lo que él respondió negándolos todos. Además presentó el 1 de febrero un escrito firmado por dos vecinos de Chilches en el que se aseguraba que el inculcado *de siempre ha observado buena conducta moral siendo un trabajador honrado*. Nuevamente no sirvió de nada. El 28 de octubre de 1940 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia le consideró responsable político según los apartados c) y e) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁴⁷ y le condenó

⁴⁷ Estos apartados son los siguientes:

c) *Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del 18 de julio de 1936, y mantenida hasta esa fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.*

a inhabilitación para ejercer cargos de mando o confianza por tres años y al pago de una sanción económica de 100 pesetas. La sanción acabó pagándose el 14 de noviembre de 1940.

La pesadilla que comenzó con una airada discusión en la plaza de Chilches el 26 de noviembre de 1939 terminó casi un año después con un procesamiento por responsabilidades políticas, inhabilitación y multa de 100 pesetas. Con todo, este ejemplo prueba la tensión que se vivía en los primeros meses de posguerra en las localidades de la provincia de Castellón, fruto de la convivencia de vecinos que habían padecido y seguían padeciendo un gran número de situaciones conflictivas, a la vez que demuestra cómo éste era un tiempo en el que el silencio y la no significación pública eran aconsejables como herramienta de supervivencia.

e) Haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular o de los partidos y agrupaciones comprendidos en el artículo 2º, o contribuido con ayuda económica a los mismos, prestada de manera voluntaria y libre y con propósito deliberado de favorecerles, aunque no se hubiesen desempeñado puestos directivos o de representación, ni cargos o misiones de confianza, ni se tratase de afiliados a aquéllos.

“DELITOS QUE NO SE DEBEN”: VIUDAS, MADRES E HIJOS, LAS OTRAS VÍCTIMAS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Como hemos visto, la Ley de Responsabilidades Políticas no sólo afectó a las personas que más se distinguieron en la vida pública republicana sino también a personas humildes que, aunque es cierto que eran partidarias del régimen republicano, nunca ocuparon un cargo dirigente o una significación especial. Una simple afiliación a un partido o sindicato, la asistencia a un mitin o a una manifestación, la ocupación de un cargo municipal, la realización de un comentario favorable a las libertades o incluso la no realización de actos a favor del franquismo podían implicar el procesamiento por responsabilidades políticas. También hemos comprobado cómo la mayoría de estas personas implicadas en la exigencia de responsabilidades políticas eran varones. Sin embargo, cada varón procesado tenía una familia que también quedaba afectada y, en ese caso, eran las mujeres, madres y esposas fundamentalmente, las que debían multiplicarse para sobrevivir a la situación.

Ya hemos comprobado cómo en el caso que el marido o el hijo estuvieran en la cárcel eran sus mujeres o sus madres las que debían hacer un esfuerzo descomunal por protegerles de todas las maneras posibles: haciendo gestiones para su liberación, llevándoles ropa y alimentos, transmitiéndoles mensajes esperanzadores, etc., y todo ello en el contexto de dificultades económicas propio de la posguerra y con normalmente una prole que mantener. En este sentido la Ley de Responsabilidades Políticas también afectó a las mujeres, y lo hizo de lleno, tanto indirectamente, cuando debían sufrir las privaciones económicas impuestas por la Ley a sus maridos o hijos, como directamente, cuando a efectos prácticos eran consideradas ellas mismas las responsables por la desaparición de sus maridos o hijos como consecuencia de su ejecución, suicidio o fallecimiento.

Los siguientes casos de responsabilidades políticas demuestran cómo lejos de afectar mayoritariamente a los hombres, la Ley de Responsabilidades Políticas afectó sobre todo y de manera muy intensa a las mujeres. Y es de justicia rescatar del olvido a estas inocentes víctimas por partida doble del franquismo, ya que no sólo lo sufrieron por su retrógrada concepción de la mujer, sino que tuvieron que asumir las consecuencias de una Ley injusta e inhumana que se aplicó sobre sus maridos o hijos.

Según las autoridades franquistas, el marido de Rosa Capilla Martín fue *el terror de la gente de orden*, una de aquellas personas que intentaron hacer la revolución aprovechando el contexto bélico de la guerra civil⁴⁸. En sus informes, tanto el alcalde de Alcora como el Comandante del Puesto de la Guardia Civil, Juan Sifre, y el Jefe Local de FET y de las JONS, Pedro Cotando, coincidieron en hacerle responsable de delitos sumamente graves como haber realizado detenciones de personas de derechas que luego fueron asesinadas, haber quemado los archivos del Ayuntamiento de Alcora y de su iglesia, saquear diversas iglesias, ir armado de escopeta y hacer guardias y controles. Además, el Comandante del Puesto de la Guardia Civil aseguró que pertenecía a la CNT y el alcalde de Alcora le calificó como hemos citado más arriba⁴⁹.

A pesar de su extenso historial presuntamente delictivo y de seguramente encontrarse en la cárcel se le abrió un expediente de responsabilidades políticas por los datos que el Servicio de Recuperación Agrícola de Castellón remitió al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia el 28 de febrero de 1940. Tras la recepción de los informes de las autoridades locales su procesamiento se reforzó con la recepción del testimonio de sentencia del consejo de guerra al que fue sometido Justo Sanz Albalade el 17 de octubre de 1940, por el que se le condenó por un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Posteriormente, en una fecha sin determinar, el inculcado, de 52 años, fue ejecutado.

A partir de la ejecución de Justo Sanz Alabalate todo el peso de la Ley de Responsabilidades Políticas recayó en su esposa, Rosa Capilla Martín, a pesar de que ésta no participó en ninguno de los presuntos delitos cometidos por su marido. Como es sabido, el fallecimiento del inculcado no detenía el procesamiento por responsabilidades políticas, pasando a ser responsables los herederos y familiares del inculcado. De esta forma, el 20 de febrero de 1942 el Tribunal de Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia dictó su sentencia contra el ejecutado marido de Rosa Capilla Martín,

⁴⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Justo Sanz Albalade, Caja 10083. AHPCS.

⁴⁹ En su expediente no hay constancia del informe del cura párroco.

considerándolo inmerso en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁵⁰, calificando los hechos como graves y condenándolo, es decir, condenando a su mujer, al pago de una sanción económica de 2.000 pesetas.

Rosa Capilla Martín se encontraba viuda, en una situación económica miserable y con nada más y nada menos que con siete hijos menores de edad que mantener. Ante esta desesperada situación que le impedía hacer frente a la sanción impuesta, decidió, tras recibir la notificación de la desorbitada sentencia, pedir clemencia al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Y lo hizo en los siguientes términos:

La sentencia antedicha se comunicó a la dicente el 26 de abril del año en curso, sin que hasta la fecha le haya sido posible allegar los fondos necesarios para satisfacer la sanción, ya que, dada la mísera situación económica en que la sumió la defunción de su esposo, apenas si ha podido subvenir con dolor y grandes insuficiencias a las necesidades de sus siete hijos menores de edad.

Según consta en el expediente referido, el esposo de la dicente no tenía otros bienes que la mísera casita en que vive la exponente con sus hijos y una pequeña heredad que cultiva por sí misma y con cuyos frutos atiende al sustento de los mismos. Nada más hay en el patrimonio familiar y en tales circunstancias no se ocultará al superior conocimiento de ese Tribunal que la pérdida de cualquiera de dichos bienes privaría a una familia numerosa y paupérrima de la última posibilidad de subsistencia.

La respuesta del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia no ofrece ninguna duda en cuanto al verdadero objetivo que se perseguía con la Ley de Responsabilidades Políticas: castigar a los partidarios del régimen republicano. En vez de rebajar la sanción impuesta a una viuda con una situación familiar tan desesperada, lo único que ofreció fue pagar la sanción económica impuesta en 15 plazos. Así, se le comunicó a Rosa Capilla Martín que debía pagar 125 pesetas el primer día de los meses enero, abril, julio y octubre de los años 1943, 1944 y 1945, así como el primer día de enero, abril y julio de 1946. Ese era el precio que se fijó para esta viuda y su familia para reinsertarse con normalidad en la sociedad franquista por unos presuntos delitos cometidos por un padre que previamente había sido ejecutado.

⁵⁰ Este apartado es el siguiente: *Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma, o por los de traición, en virtud de la causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional.*

Finalmente Rosa Capilla Martín pagó el primer pago de 125 pesetas en enero de 1943, lo que supuso un gran esfuerzo económico, pero no pagó ninguno más, seguramente porque no pudo. Esto implicó el control por parte de las autoridades de sus bienes o la estrecha vigilancia de la evolución de los mismos hasta el sobreseimiento de su caso, que se produjo el 17 de septiembre de 1943. Casos como el de esta viuda es probable que no centraran la atención preferente de las autoridades franquistas, pero sin embargo la amenaza constante de los posibles progresos del patrimonio familiar, que podían implicar automáticamente un embargo de los mismos, suponían sin ningún género de duda un castigo suficiente para una familia ya suficientemente castigada con la ejecución del padre y que, sin duda, se vio sumida en la pobreza durante la posguerra. Ese era también el precio de la Ley de Responsabilidades Políticas.

VIUDA DE FELIPE MATEO CALDUCH, FALLECIDO POR PENA Y TRISTEZA EN LA CÁRCEL

Desconocemos el nombre de la viuda del vecino de Benlloch Felipe Mateo Calduch, pero sí tenemos noticias de su lucha por la justicia y contra el sinsentido de una Ley sumamente cruel que no sólo volvió a castigar a su difunto marido por unos hechos que no había cometido, sino que le obligó a ella, ajena a todo lo relacionado con el caso, a satisfacer una inconveniente e injusta sanción económica.

A principios de febrero de 1941 el Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón animó a distintos Comandantes de diferentes Puestos de la Guardia Civil a denunciar a todos aquellos que tuvieran un pasado republicano público. Siguiendo sus instrucciones Jesús Fabregat, Comandante del Puesto de la localidad de Benlloch, remitió un informe-denuncia en el que se decía que Felipe Mateo Calduch, ya difunto, era afiliado a Izquierda Republicana y había desempeñado el cargo de concejal del Ayuntamiento de Benlloch desde el principio del régimen republicano hasta su desplazamiento por parte de una *Comisión marxista*. Era, pues, en principio, un hombre al que no se le podían imputar extremismos. De hecho, el mismo guardia civil lo calificó con las siguientes palabras: *su actuación fue moderada*. La denuncia finalizó con la valoración de sus bienes, que se calculó en unas 3.000 pesetas.

Hemos dicho que el inculpado era difunto porque había fallecido el 22 de agosto de 1939 en la cárcel de Benicarló, donde compartía celda con tantos otros republicanos. La causa oficial de la muerte fue por bronconeumonía, pero su viuda aseguró posteriormente que su marido *murió de pena y de tristeza*. Sólo había pasado tres meses en la cárcel. Esto nos demuestra cómo no es que la Ley de Responsabilidades Políticas no detenía su proceso por fallecimiento del inculpado, sino que incluso procesaba a personas que previamente habían desaparecido. Y, naturalmente, el afectado ya no era el difunto, sino sus familiares y herederos.

Ante esta denuncia el 13 de marzo de 1941, 1 año y 7 meses después de su fallecimiento, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas ordenó incoar expediente de responsabilidades políticas contra Felipe Mateo Calduch. La situación

inicial no podía ser más cruel y más injusta para la familia. Entre el 5 y el 7 de abril de 1941 se realizaron los informes de las autoridades locales, que ratificaron la orientación política del inculpado, valoraron sus bienes ahora en 6.000 pesetas y se limitaron a decir que había fallecido en la cárcel de Benicarló.

Muerto el inculpado, su viuda tuvo que asumir la defensa de su marido, que ya se había convertido en la defensa de su propia familia ante las sanciones que se podían imponer, así como todas las consecuencias del procesamiento por responsabilidades políticas. Ella fue la que tuvo que asistir a la lectura de cargos, limitándose tristemente a negar que su marido era de izquierdas, la que tuvo que redactar una declaración jurada de bienes, valorando el patrimonio familiar en 3.800 pesetas, y la que presentó, tras la notificación de un resumen metódico en el que el Juez Instructor Provincial consideraba a su marido inmerso en los apartados b) c) y k) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁵¹, un escrito de defensa que nuevamente no sirvió para nada.

En este escrito de defensa podemos rastrear la miserable situación en la que se quedó la familia del fallecido y la rabia contenida de su viuda por unos hechos total y absolutamente injustos. En él la primera queja fue el desconocimiento que la viuda tenía del procesamiento de su difunto marido por responsabilidades políticas hasta agosto de 1941, seis meses más después del inicio del procesamiento y dos años después del fallecimiento de su marido. Después pidió clemencia al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas por su poca cultura, que le impedía enterarse de los trámites a realizar y presentarlos a tiempo. Aseguró que su esposo nunca tuvo una actitud extremada y que los bienes que poseía habían sido sobrevalorados por las autoridades locales. El escrito finaliza con la petición de absolución y con una tristísima descripción de las circunstancias que hicieron caer en desgracia a su marido:

⁵¹ Estos apartados son los siguientes:

b) *Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones a que alcanza la declaración del artículo 2º, así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de corporaciones y organismos, tanto públicos como privados.*

c) *Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del 18 de julio de 1936, y mantenida hasta esa fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.*

k) *Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.*

Su desgraciado esposo, tras de soportar con estoicidad digna de loa, juntamente con su esposa e hijos, todas las incomodidades propias del ominoso periodo rojo, no quiso evacuar el pueblo, como se pretendió que lo hiciera al llegar los victoriosos Ejércitos del Caudillo y creyendo fundadamente que su honrada actuación pasada jamás sería discutida, salió gozoso a recibir a aquellos heroicos soldados, ofreciéndoles cuanto era y tenía. Un año se le dejó tranquilo en su trabajo y cuando en la primavera de 1939 fue encarcelado, no pudiendo soportar la ignominia, que según su propia expresión, había caído injustamente sobre él, murió de pena y de tristeza en la cárcel de Benicarló el 22 de agosto de 1939, tres meses después de su detención.

Esta vez tampoco hubo piedad, ya que se condenó al difunto, es decir, a su viuda y a sus hijos, por encontrarlo inmerso en los apartados b) y c) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas, calificando los hechos como leves y condenándoles al pago de 150 pesetas. La sanción era injusta y podemos imaginar la rabia de esta viuda y sus hijos por tener que soportar no sólo el fallecimiento en la cárcel de su marido y padre, que no había cometido ningún delito, sino además 2 años y medio más tarde una sanción económica. En este caso la cuantía de la misma queda en segundo plano tras la consumación de una injusticia que podemos calificar de total. La sanción fue pagada mediante giro postal el 10 de diciembre de 1941 y no fue hasta el 24 de enero de 1942 cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón la liberación de los bienes familiares.

Sabemos que según esta valiente viuda su marido murió en la cárcel de pena y tristeza, pero presumimos que la pena y la tristeza se quedaron con ella el resto de sus días.

El 31 de julio de 1939 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia recibió el testimonio de condena por un consejo de guerra contra el albañil y vecino de Castellón Joaquín Ortiz Escrich, celebrado en Castellón el 7 de junio de 1939⁵². Los cargos que se le imputaron fueron haber pertenecido a las Juventudes Socialistas, a Izquierda Republicana y a la UGT, haber realizado servicios como miliciano armado, haber exaltado públicamente la revolución, enrolarse en las milicias populares antifascistas, haber prestado servicios en controles de carreteras y varias checas, y haber ingresado voluntariamente en el ejército republicano. Por todo ello se le condenó por un delito de adhesión a la rebelión a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación e interdicción civil⁵³. Inmediatamente volvió a la prisión provincial de Castellón, de donde había salido.

Dada la orden de incoación de expediente al Juez Instructor Provincial, se realizaron los correspondientes informes de las autoridades locales⁵⁴. El alcalde de Castellón, Vicente Traver, aseguró no poseer datos del inculcado. El Delegado Provincial de FET y de las JONS y el Comandante del Puesto de la Guardia Civil informaron que el inculcado no tenía más bienes que el fruto de su propio trabajo personal. El más explícito fue el Jefe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la Provincia de Castellón, quien describió una situación familiar realmente miserable:

Se halla en miserable situación económica, teniendo a su cargo a su madre y tres hermanas, las cuales tampoco tienen bienes de fortuna y para cuya manutención así como la propia solamente disponen de su trabajo personal cuando encuentran ocupación, no poseyendo propiedades rústicas ni urbanas de clase alguna.

⁵² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Joaquín Ortiz Escrich, Caja 10064. AHPCS.

⁵³ Este consejo de guerra estuvo integrado por Camlo Llovera Merino, Fausto Antolin, José Luis Escobar, Luis Olleros y Emilio Robles Gómez.

⁵⁴ Como en todos los expedientes de vecinos de la ciudad de Castellón, no se pidió informes a las autoridades locales religiosas.

El 8 de septiembre de 1939 y desde la prisión provincial de Castellón, Joaquín Ortiz Calduch tuvo que realizar la declaración jurada de bienes, en la que aseguró no poseer nada. La sentencia se hizo esperar hasta el 16 de noviembre. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia estudió el caso y consideró al inculcado inmerso en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁵⁵, considerando los hechos como graves y condenándolo al pago de 5.000 pesetas. Esta sentencia le fue comunicada al inculcado el 5 de enero de 1940 en la prisión de San Miguel de los Reyes de Valencia, adonde había sido trasladado. La sanción nunca se pagó y la situación procesal del inculcado y de su familia se prolongó hasta el 25 de octubre de 1943, cuando el caso fue sobreseído y archivado.

Este caso demuestra cómo la propaganda del régimen franquista basada en el hecho que la Ley de Responsabilidades Políticas estaba guiada por principios humanos y caritativos que hacían que las sentencias tuvieran en cuenta la distinta capacidad económica de los inculcados es totalmente falsa. Las autoridades franquistas sabían perfectamente que tanto Joaquín Ortiz Calduch como su madre y sus hermanas eran pobres, y aún así, y a pesar que éste había sido condenado a cadena perpetua, les impusieron una desorbitada sanción económica que naturalmente nunca pudieron pagar. La situación de las madres y las hermanas durante el tiempo en el que el caso permaneció abierto, cuatro años, hubo de ser realmente penosa, ya que la vigilancia de las autoridades sobre los progresos de su patrimonio les impediría integrarse con normalidad de condiciones en la nueva sociedad franquista. Joaquín Ortiz Calduch poco pudo hacer desde la cárcel, pero las verdaderamente castigadas fueron su madre y sus hermanas, que vivieron un auténtico infierno. Son las otras víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, y como tales deberían ser contabilizadas.

⁵⁵ Este apartado es el siguiente: *Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma, o por los de traición, en virtud de la causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional.*

VICENTA COLOM ANGLÉS, RESPONSABLE POR SU MARIDO SUICIDADO

El 17 de febrero de 1940 llegaron al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia nuevos datos del Servicio de Recuperación Agrícola de Castellón que inculpaban al vecino de Alcalá de Xivert Miguel Bou Almela⁵⁶, con lo que se ordenó al Juez Instructor Provincial de Castellón, Víctor Núñez Escalona, la incoación del correspondiente expediente de responsabilidades políticas.

El primer paso que se dio fue averiguar el paradero del inculpado, lo que se solucionó con un informe del alcalde de Alcalá de Xivert en el que se daba a conocer que éste había fallecido por suicidio. Normalmente la desaparición física del inculpado debería haber detenido la causa, pero la Ley de Responsabilidades Políticas permitía que ésta fuera adelante y el 28 de marzo de 1940 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas ordenó la realización de los informes de las autoridades sobre el fallecido Miguel Bou Almela.

El primer informe fue el José Vinuesa Ricart, Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Alcalá de Xivert, quien aseguró que el inculpado *estaba complicado* en un asesinato ocurrido durante la guerra y al volver a su localidad en abril de 1939 fue detenido por la guardia civil, para posteriormente ahorcarse. El inculpado fue calificado como *de funestísima actuación durante el periodo rojo y de pésimos antecedentes*. El informe finalizaba con una detalladísima relación valorada de bienes, que ascendía, entre pequeñas fincas y una casa en la localidad, a un valor de 11.700 pesetas.

El resto de informes de las autoridades locales no aportaron nada nuevo, salvo la especificación de algún detalle económico. El informe de la alcaldía fue copiado tanto por el cura párroco José Luis Adell García como por el Delegado Local de FET y de las JONS, Juan Bautista Sospedra. Todos los informes estuvieron en manos del Juez

⁵⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Miguel Bou Almela, Caja 10078. AHPCS.

Instructor Provincial el 2 de abril de 1940, con lo que se ordenó la publicación en los Boletines Oficiales la incoación del expediente.

El siguiente paso era citar al inculcado para proceder a la lectura de cargos y darle la primera oportunidad para contestar a los mismos. Sin embargo, en este caso el inculcado ya no existía. La solución fue la citación de su viuda, Vicenta Colom Anglés, de 53 años, quien tuvo que responder ante la justicia por cargos que nada tenían que ver con ella. Tras escuchar los cargos que se le imputaban a su marido, fallecido hacía 1 año y 1 mes, simplemente se limitó a negar que perteneciera a ningún partido político, aseguró que su esposo no había intervenido en ningún hecho delictivo y confirmó que durante la guerra se afilió a la CNT. Finalmente, interrogada por el Juez Instructor, respondió con silencio sobre las causas que impulsaron a su marido al suicidio, lo que fue interpretado como ignorancia de las mismas.

Ante la vaguedad de los datos aportados, el Juez Instructor Provincial ordenó la realización de nuevos informes a las autoridades locales, que fueron realizados entre el 3 y el 10 de mayo de 1940. Nuevamente el informe de referencia fue el del Comandante de la Guardia Civil, que, fruto como él mismo reconoce de *practicar nuevas gestiones acerca de su situación*, relata el historial político del inculcado, remontándose a octubre de 1934 tal y como permitía la Ley de Responsabilidades Políticas:

dicho informado con anterioridad al 18 de julio de 1936 siempre había militado en los partidos de izquierda estando conceptuado como muy significado del marxismo. El día 6 de octubre de 1934 fue uno de los autores de haber cortado los postes telegráficos de esta localidad por lo cual fue detenido; durante el Movimiento y desde el instante mismo de haberse iniciado éste empuñó las armas a favor de la causa roja haciendo guardias a las órdenes del Comité Revolucionario, autor de haber ido armado juntamente con varios más a detener a varios elementos de derecha, entre ellos al vecino de ésta Joaquín Royo Cucala y debido a su actuación puramente marxista se suicidó, estando conceptuado como muy extremista.

Nuevamente tanto el alcalde como el Delegado Local de FET y de las JONS o el cura párroco no añadieron datos nuevos respecto al informe de la Guardia Civil⁵⁷. Con estos nuevos datos el Juez Instructor Provincial decidió citar a Joaquín Royo Cucala, quien presuntamente había sido coaccionado por el inculcado.

⁵⁷ Incluso el informe del cura párroco esta vez era una copia calcada del informe de la alcaldía.

La comparecencia se produjo en la secretaría del Juez Instructor Provincial en Castellón el 17 de mayo de 1940. Joaquín Royo Cucala, de 50 años de edad, era el alguacil del Ayuntamiento de Alcalá de Xivert y declaró estar seguro de la pertenencia del inculpado a partidos de izquierda, de los que hacía propaganda incluso en sus conversaciones por ser uno de sus dirigentes, y manifestó que fue uno de los que en octubre de 1934 procedieron al corte de los postes telegráficos de la localidad. Posteriormente describió cómo durante la guerra el Miguel Bou Almela hizo propaganda marxista y guardias armado. Describió cómo en octubre de 1936 fue en compañía de tres compañeros suyos a su casa para detenerle, pudiendo el declarante huir y esconderse, por lo que su familia fue amenazada de muerte⁵⁸. Finalmente declaró que Miguel Bou Almela se suicidó a las dos horas de ser detenido por la guardia civil.

Estaba claro que el perfil del inculpado era el propicio para recibir un castigo ejemplar por las autoridades franquistas. Sin embargo, su fallecimiento, su acto de suicidio, impedían tal castigo, por lo que fue su viuda la que tuvo que sufrir el mismo. Esta filosofía punitiva se puede detectar en el resto del sumario. Tras destacar que la viuda no había presentado la correspondiente declaración jurada de bienes, que era teóricamente obligatoria, se realizó el 21 de mayo de 1940 un resumen metódico del caso que incluía grandes aberraciones. Así, el Juez Instructor Provincial declaró: *transcurrido el plazo legal la esposa del inculpado no presentó prueba de descargo lo que demuestra la veracidad de los hechos que se le imputan*. Por tanto, se consideró probado el haber pertenecido a partidos políticos del Frente Popular, haber detenido a personas durante la guerra y *haber contribuido con eficacia al desarrollo del Estado anárquico en que se encontró España*. Todo ello le encuadraban en los apartados c) i) y k) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁵⁹.

⁵⁸ Según su testimonio Joaquín Royo Cucala tuvo que pasar ocho meses escondido, es decir, de octubre de 1936 a mayo de 1937. Preguntado sobre la actuación del inculpado en dicho periodo, aseguró desconocerla por estar escondido.

⁵⁹ Estos apartados eran los siguientes:

c) *Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del 18 de julio de 1936, y mantenida hasta esa fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.*

i) *Haber intervenido desde el 18 de julio de 1936, salvo casos de justificación muy calificada, en Tribunales u organismos de cualquier orden, encargados de juzgar a personas por el solo hecho de ser adictas al Movimiento Nacional, o el haber sido los denunciantes de éstas o intervenido en la incautación*

Vicenta Colom Anglés no presentó ningún escrito de defensa, lo que dio vía libre a la sentencia definitiva. EL 22 de febrero de 1941 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia le declaró responsable políticamente según los apartados c) i) y k) del artículo 4º de la Ley, calificando los hechos como “menos graves” y condenando al inculpado, es decir, a su viuda Vicenta Colom Anglés al pago de 3.000 pesetas.

El 26 de abril de 1941 le fue notificada esta sentencia y como no pagó la sanción el 27 de octubre de ese mismo año el Juez Instructor Provincial ordenó el embargo definitivo de sus bienes. En esta situación se quedó Vicenta Colom Anglés hasta el 2 de octubre de 1943, cuando su caso se declaró sobreseído por no sobrepasar el patrimonio de esta viuda de 25.000 pesetas, en virtud de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942. Más de cuatro años después del suicidio de su marido Vicenta Colom Anglés dejaba de pagar por actos que ella no había cometido.⁶⁰

de sus bienes, a no se que lo hayan verificado obligatoriamente, en virtud de las funciones que le están asignadas por razón de su cargo y sin iniciativa por su parte.

k) Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.

⁶⁰ Aún así no era la única experiencia que Vicenta Colom Anglés tuvo respecto a la exigencia de responsabilidades políticas, ya que su hermano José Colom Anglés también fue procesado a partir de marzo de 1940, tal y como hemos relatado anteriormente. Desde la cárcel de Benicarló su hermano fue calificado de extremista de la CNT. Durante este procesamiento fue condenado a muerte por un consejo de guerra y rápidamente ejecutado. Aún así fue condenado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas al pago de la sanción económica de 1.000 pesetas, sanción que fue notificada a sus herederos, entre los cuales posiblemente también se podía encontrar, como hermana, Vicenta Colom Anglés. La sanción tampoco fue pagada, se procedió a los correspondientes embargos y finalmente el caso fue sobreseído en abril de 1944. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Colom Anglés, Caja 10079. AHPCS.

A principios de 1940 Manuel Herrera Herrera⁶¹, de 38 años de edad, se encontraba en la cárcel de Benicarló. En los siguientes meses afrontaría un procesamiento doble por los mismos hechos: un expediente de responsabilidades políticas y, durante el mismo, un consejo de guerra celebrado por el procedimiento sumarísimo de urgencia, en el que se le condenó a muerte. En algún día entre junio de 1940 y febrero de 1941 fue ejecutado. Como en otros muchos casos, el fusilamiento no fue suficiente castigo, ya que el procesamiento por responsabilidades políticas continuó sin ninguna alteración, centrando su acción represiva en la viuda del inculpado, María Cucala Ebrí.

Efectivamente, el 17 de febrero de 1940, a raíz de una información suministrada por el Servicio de Recuperación Agrícola de Castellón el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas ordenó la incoación de un expediente de responsabilidades políticas contra el vecino de Alcalá de Xivert Manuel Herrera Herrera. Como era habitual, el Juez Instructor Provincial, Víctor Núñez Escalona, ordenó realizar al inculpado las cinco prevenciones que marcaba la Ley de Responsabilidades Políticas y la confección urgente de los informes de las autoridades locales, que se realizaron durante la segunda quincena del mes de marzo de 1940.

El informe del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Alcalá de Xivert fue muy claro. Además de relacionar tanto los bienes del inculpado como los de su esposa (afectada, por tanto, directamente por la Ley) relataba así su historial político:

Dicho individuo siempre ha pertenecido a los partidos de izquierdas. Al iniciarse el Glorioso Movimiento empuñó las armas a favor de la causa roja, haciendo guardias armado a las órdenes del Comité, siendo muy significado del marxismo exaltando sus teorías en conversaciones particulares a favor de este ideal.

José Bosch, alcalde de Alcalá de Xivert, valoró sus propiedades en 3.000 pesetas y en otras tantas las de su esposa, todas consistentes en pequeñas fincas de secano. Sobre su actuación política añadió:

⁶¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Herrera Herrera, Caja 10078. AHPCS.

Siempre ha militado en partidos de izquierda. Durante el Movimiento empuñó las armas a favor de los rojos, a las órdenes del Comité local, siendo muy significado entre los marxistas propagando sus ideales en conversaciones

Los informes de Juan Bautista Sospedra, Delegado Local de FET y de las JONS y del cura párroco José Luis Adell García consistieron en copias calcadas de los informes de la alcaldía.

Simultáneamente desde la cárcel de Benicarló Manuel Herrera Herrera redactó su declaración jurada de bienes, en la que aseguró tener bienes valorados en 3.400 pesetas, que pertenecían realmente a su esposa, así como también deudas que ascendían a 3.400 pesetas. Sus cargas familiares eran dos hijos, uno de 18 años y otro de 13 años.

El 4 de abril de 1940 el Juez Instructor Provincial ordenó la publicación en los Boletines Oficiales de la incoación del correspondiente expediente de responsabilidades políticas. El siguiente paso fue la citación del inculcado para proceder a la lectura de cargos que se realizaban contra él, acto que se realizó en la cárcel de Benicarló el 9 de abril. Lo único que quiso declarar Manuel Herrera Herrera fue *me doy por enterado del presente escrito*. Pese a esta falta de colaboración el inculcado sí aprovechó el mecanismo de defensa propia que le otorgaba la Ley de Responsabilidades Políticas y cinco días más tarde presentó un escrito de defensa, en el que negó haber pertenecido a partido político alguno, haber empuñado un arma, haber realizado guardias y haber realizado propaganda marxista. La negación fue simple, sin detalles ni explicaciones. Además, solicitó la comparecencia de tres vecinos de Alcalá de Xivert para corroborar sus manifestaciones.

Sin embargo, el Juez Instructor Provincial no consideró oportuna la citación de estos testigos, a diferencia de otros casos. Posiblemente esta negativa fue debida a la recepción del testimonio de condena del consejo de guerra que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se celebró contra el inculcado en Benicarló el 29 de mayo de 1940. Los cargos que se le imputaron fueron ser afiliado a la CNT, haber realizado durante la guerra guardias armado como miliciano, haber profanado la iglesia de Alcalá de Xivert, detener a un sacerdote que fue posteriormente asesinado y a su padre que fue

liberado y haber colaborado con el marxismo *como es público y notorio en esta plaza*. Así, se le condenó a la pena de muerte. La sentencia recomendaba la abstención en solicitar la conmutación de dicha pena.⁶²

Una vez retomado el procesamiento por responsabilidades políticas, el 30 de agosto de 1941 se procedió a la redacción del resumen metódico, momento en el que se especificó que todos los aspectos debían ser notificados a los herederos del inculcado, por lo que éste había sido ya ejecutado⁶³.

En abril de 1941 se publica la sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, que consideró inmerso a Manuel Herrera Herrera en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁶⁴, calificando los hechos como “graves” y condenándole, es decir, condenando a sus herederos, al pago de 1.500 pesetas. La sentencia fue notificada a la viuda María Cucala Esbrí el 26 de abril de 1941. Al no presentarse recurso alguno fue declarada firme el 2 de mayo.

Sin embargo, María Cucala Esbrí presentó ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia un escrito en el que, tras describir su situación familiar y económica, suplicó a dicho Tribunal una reducción de la condena y la concesión de la posibilidad de pago a plazos del resto de sanción impuesta. Merece la pena reproducir su escrito por su intensidad y por la descripción que realiza de la situación en la que ha quedado su familia. En ella destaca especialmente una frase desesperada: *no tengo por tanto que sufrir las consecuencias de los cargos que imputan a mi citado marido*.

⁶² Este consejo de guerra sumarísimo de urgencia estaba compuesto por Beán Callejas, Oleza Bestard, Mínguez Gómez, Correcher y Revuelta. La sentencia fue aprobada por el Auditor de Guerra el 24 de junio de 1940.

⁶³ Manuel Herrera Herrera fue ejecutado en Castellón el 13 de julio de 1940. J.V. MOYA, op. cit., pág. 235.

⁶⁴ Este apartado es el siguiente: *Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma, o por los de traición, en virtud de la causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional*.

AL TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE VALENCIA

MARÍA CUCALA EBRÍ, mayor de edad, viuda de MANUEL HERRERA HERRERA, profesión labores y vecina de Alcalá de Chivert, ante el mismo comparezco y con el debido respeto tengo el honor de exponer:

Que con fecha 26 de abril del corriente año, se me notificó la sentencia dictada por el Tribunal al que me dirijo en el expediente nº 4108, sentencia nº 1412, seguido contra mi fallecido marido Manuel Herrera Herrera, por la que se le condena al pago de MIL QUINIENTAS PESETAS.

Siendo como lo son escasísimos mis bienes, no poseyendo metálico con que poder satisfacerla, poseer cargas familiares como lo es, tener a mi cargo dos hijos de menor edad constituida, habidos de mi matrimonio con mi difunto marido, y no poseyendo otro medio de vida que el jornal eventual que gano por mis trabajos y labores, es por lo que estimo debería dispensarme del pago de la misma, teniendo en cuenta además que la finca señalada para el pago de la deuda y que figura como propiedad de mi marido, no lo es en verdad de su exclusiva propiedad puesto que fue adquirida por los dos durante nuestro matrimonio y por consiguiente la mitad de ella es de mi exclusiva propiedad y no tengo por tanto que sufrir las consecuencias de los cargos que imputan a mi citado marido.

Y para el caso que ello no fuerapreciado, al amparo de lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Políticas, espero se me conceda un plazo de cuatro años para ver de poder satisfacer su importe, fijándome la cantidad que he de abonar cada anualidad, ofreciendo satisfacer uno de ellos dentro del plazo de tres meses y sin perjuicio de que se acuerden las garantías que tenga a bien acordar con respecto a ello desde el punto de vista hipotecario y personal.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL TRIBUNAL, que teniendo por presentado este escrito, y en atención a lo que en el mismo manifiesto, acuerde dispensarme de la mitad de la multa impuesta y me conceda para el pago de la cantidad que en definitiva tenga que abonar, la prórroga del plazo establecido en el artículo 14 antes indicado, en la forma y manera que tenga a bien.

Gracia que espera merecer del recto proceder de este Tribunal.

Valencia a 28 de mayo de 1941.

Ante esta súplica el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia el 18 de septiembre de 1941 decidió concederle el pago a plazos, no la solicitada reducción a la mitad de la sanción impuesta. Este Tribunal ordenó a María Cucala Esbrí el pago de 300 pesetas en los siguientes tres meses y el pago de 300 pesetas cada 1 de agosto de los años 1942, 1943, 1944 y 1945. Esta era la única prueba

de magnanimidad del citado Tribunal ante una viuda empobrecida y desesperada. A la carga económica diaria se le añadiría esta sanción económica impuesta por unos hechos que nada tenían que ver ni con ella ni con sus dos hijos menores de edad.

Finalmente, no existe en el expediente analizado constancia alguna de que María Cucala Esbrí realizara ningún pago, ni siquiera el inicial, con lo que el 15 de abril de 1943 el Juez Instructor Provincial decretó el embargo de sus bienes. El caso fue al fin sobreseído el 2 de octubre de 1943, en virtud de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942, que decretaba el sobreseimiento de todos aquellos casos de inculpados cuyos bienes no alcanzaran un valor de 25.000 pesetas. Casos como este no interesaban a las autoridades por la manifiesta imposibilidad de sacar rendimiento económico de ellos. Sin embargo, nadie devolvería a María Cucala Esbrí lo perdido en los más de tres años en que su marido fue encarcelado, procesado en consejo de guerra sumarísimo de urgencia y ejecutado, para posteriormente ser multada, señalada públicamente y embargada. Este matrimonio sufrió claramente la represión franquista, pero no sólo fue Manuel Herrera Herrera víctima de la Ley de Responsabilidades Políticas, sino también, y quizás en mayor medida su mujer María Cucala Esbrí.

CONSUELO PEDRA BONET: “NO ES DE RAZÓN QUE LAS INCAUTAS CRIATURAS PAGUEN DELITOS QUE NO DEBEN”

Como en el caso anterior, el expediente de responsabilidades políticas contra el vecino de Alcalá de Xivert Jaime Pegueroles Albert, tuvo su origen en la remisión al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de los informes del Servicio de Recuperación Agrícola de Castellón el 17 de febrero de 1940⁶⁵. En esos momentos el inculcado se hallaba esperando su ejecución en la cárcel de Benicarló.

Los trámites correspondientes al procesamiento por responsabilidades se activaron con normalidad y durante el mes de marzo se redactaron los informes de las autoridades locales, a la vez que se realizaron las prevenciones que exigía la Ley de Responsabilidades Políticas en la citada cárcel de Benicarló. El informe de referencia volvió a ser el de la Guardia Civil, ya que fue el texto origen del informe de la alcaldía y, a su vez, los informes del cura párroco y del Delegado Local de FET y de las JONS fueron copias calcadas suyas. El Comandante del Puesto de la Guardia Civil, José Vinuesa Aicart, informó que Jaime Pegueroles Albert había votado siempre a las fuerzas políticas de izquierda, que durante la guerra realizó guardias utilizando armas y que estuvo empleado en la sección de Abastos de Alcalá de Xivert, calificándolo como *muy significado del marxismo*. Además, detalló sus bienes, resumidos en cinco fincas de secano que fueron valoradas en 3.550 pesetas, una valoración que coincidió aproximadamente con la realizada por el mismo inculcado desde la cárcel en su declaración jurada de bienes, que fue de 3.700 pesetas.

El 11 de abril de 1940 se procedió a la lectura de cargos, esta vez realizada en la cárcel de Castellón, adonde fue trasladado Jaime Pegueroles Albert, seguramente para proceder de forma inminente a su ejecución, sin que realizara manifestación alguna en su defensa. Ésta se reservó para la “hoja de descargo” que presentó seis días más tarde. En este escrito el inculcado argumentó que si había votado a la izquierda había sido *debido a que un miembro de dicho partido [Izquierda Republicana] me tenía a jornal todos los días*. Aseguró que las guardias que realizó fueron debidas a que fue el único trabajo que le ofrecieron, añadiendo que creía servir al orden público por ignorar que se

⁶⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Jaime Pegueroles Andrés, Caja 10079. AHPCS.

estuvieran cometiendo acciones abusivas o ilegales y, en cualquier caso, aseguró que él no intervino en ninguno de ellos, tal y como, decía, podía atestiguar toda la localidad. Sobre su condición de marxista aseguró no haber pertenecido nunca a ningún partido político, aunque sí al sindicato UGT porque era requisito para que le ofrecieran trabajo. Además, dijo que en Alcalá de Xivert nunca había existido un partido marxista. Finalmente propuso a tres testigos para que declararan y corroboraran su defensa.

Esta vez la propuesta sí fue aceptada por el Juez Instructor Provincial y el 20 de abril de 1940 se citó a los testigos propuestos en los Juzgados Municipales de Alcalá de Xivert. El primero en comparecer fue Vicente Sospedra Granell, el 20 de abril. Este jornalero de 36 años confirmó que el inculcado pertenecía a *partidos de izquierdas con tendencias socialistas*, desempeñando el cargo de concejal del Ayuntamiento de Alcalá de Xivert, siendo también miembro de la comisión de Abastos del mismo. Finalizó calificándole con estas palabras: *fue uno de los más extremados*. Ocho días más tarde declaró Juan Bautista Sospedra Agut, quien confirmó la información dada por el primer testigo y catalogó al inculcado con la siguiente frase: *su actuación durante la dominación roja fue, en general, mala*. El procedimiento finalizó con el informe del Juez Municipal, que, como era preceptivo, realizó una valoración sobre los testigos, diciendo que *son personas de buenos antecedentes y adictos al Glorioso Movimiento Nacional*. Además, se permitió emitir un juicio sobre el inculcado, del que dijo que *era cómplice de asesinatos e incautaciones*.⁶⁶

En este sentido, ¿qué es lo que hizo al inculcado citar como testigos a personas adictas plenamente al nuevo régimen? ¿Sabía que estas personas iban a testificar en su contra? ¿Tenían los testigos en los años anteriores una postura sociopolítica diferente? ¿Traicionaron a un antiguo amigo? ¿Utilizaron las acusaciones para salvarse personalmente? Estas son cuestiones a las que las fuentes consultadas no ofrecen contestación, pero sin duda se encuentran en el meollo de la construcción de la nueva realidad franquista. Por otra parte, el testigo propuesto Manuel de la Viña Masip no testificó, justificándose esta circunstancia porque vivía en Valencia. Sin embargo, no se

⁶⁶ Incluso el testigo Juan Bautista Sospedra Agut, jornalero de 37 años, se había convertido en el Delegado Local de FET y de las JONS en Alcalá de Xivert. Él mismo firmó su correspondiente informe sobre el inculcado como autoridad local.

le hizo testificar porque no interesaba, ya que en otros casos similares las autoridades franquistas buscaron al testigo y le obligaron a participar en el proceso.

Poco después, el 17 de mayo de 1940, llegó al Juez Instructor Provincial la noticia de la ejecución de Jaime Peguerols Albert⁶⁷, en virtud del cumplimiento de una sentencia del consejo de guerra celebrado en Benicarló el 28 de septiembre de 1939 que, por el procedimiento sumarísimo de urgencia, le había condenado por un delito de adhesión a la rebelión con circunstancias agravantes de perversidad y trascendencia de los hechos cometidos, a la pena de muerte⁶⁸. Su ejecución se produjo entre el 13 de abril de 1940 y el 9 de mayo del mismo año.

Con todos estos datos, el 25 de mayo de 1940 se procedió a la realización del resumen metódico por parte del Juez Instructor Provincial, considerando al inculcado responsable político según el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁶⁹. Estos términos fueron ratificados por la sentencia dictada el 18 de febrero de 1941 por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, quien consideró los hechos como graves y multó al inculcado, es decir, a sus herederos, concretamente a su mujer, al pago de una sanción económica de 2.000 pesetas.

La sentencia se le comunicó a la viuda Consuelo Pedra Bonet el 24 de abril de 1941, un año después del fusilamiento de su marido. Poco después, conteniendo la rabia y sacando fuerzas de flaqueza, esta desgraciada mujer, con dos hijos menores, uno de

⁶⁷ El inculcado fue ejecutado el 15 de abril de 1940, es decir, cinco días antes de la citación de los testigos. Esta situación nos demuestra la tremenda crueldad y la falta de garantías jurídicas de la justicia franquista en general y de la Ley de Responsabilidades Políticas en particular. J.V. MOYA, op. cit., pág. 215.

⁶⁸ Este consejo de guerra estuvo formado por García Plaza, Pagoda Arana, Nieto Lorenzo, de la Calle Castellanos y Martínez Aduriz. Los cargos que se le imputaron fueron actuar voluntariamente al servicio del comité revolucionario de Alcalá de Xivert, realizar guardias, dirigir el saqueo y profanación de la iglesia, ser vocal del Comité de Abastos y de la Directiva del Centro Obrero, intervenir en robos y saqueos y formar parte del Comité Revolucionario durante 1937, periodo en el cual hubo 9 asesinatos de personas adictas a la causa franquista. La sentencia fue de pena de muerte fue aprobada por el Auditor de Guerra el 18 de octubre de 1939.

⁶⁹ Este apartado es el siguiente: *Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma, o por los de traición, en virtud de la causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional.*

ellos enfermo⁷⁰, presentó al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia un escrito al que llamó “Hoja de súplica”, en la que, tras explicar su situación familiar, expuso que le era completamente imposible pagar la sanción de 2.000 pesetas impuesta, atreviéndose únicamente a suplicar la concesión del pago a plazos. Merece la pena por su intensidad acudir directamente al texto de esta súplica:

Que viuda y sin recursos careciendo por completo de bienes de fortuna con dos hijos uno de ellos de 10 años de edad desgraciada, justifica con el certificado que acompaña expedido por el médico titular de esta villa.

Ha sido sancionada por ese digno Tribunal con 2.000 ptas. y tiene que manifestar que le será completamente imposible satisfacer dicha cantidad por no poseer recurso alguno pues las fincas de su marido además de estar intervenidas por ese Tribunal ilegible.

Los únicos recursos que poseo para alimento de mis hijos y mía son los jornales de estajo cuando los dan que en muy pocas veces, que es al hacer serones de esparto.

Por lo expuesto,

Suplico a ese digno tribunal tenga en cuenta mi situación ya que mi marido pagó con vida sus errores y no es de razón que las incautas criaturas paguen delitos que no deben, prolongando la multa impuesta ya que me será imposible satisfacerla.

Antes esta miserable situación el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia le concedió generosa y caritativamente la posibilidad de realizar el pago de las 2.000 pesetas en cinco plazos: uno inicial de 400 pesetas a pagar entre mayo y julio de 1942 y otros cuatro plazos a pagar el 1 de agosto de los años 1943, 1944, 1945 y 1946.

Consuelo Pedra Bonet se personó en las oficinas del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia el 10 de agosto de 1942 para pagar el primer plazo. Los esfuerzos que debió hacer para reunir las primeras 400 pesetas en el contexto de posguerra sólo ella podría explicarlos. No realizó ningún otro pago. El 25 de septiembre de 1943, dos meses después de la fecha prevista para el segundo plazo, su expediente quedó sobreseído. Los esfuerzos y las privaciones que tuvo que realizar esta heroica mujer para afrontar la exigencia de unas responsabilidades de las que ella no era responsable fueron enormes. Ella también fue víctima del franquismo y, especialmente, de la Ley de Responsabilidades Políticas.

⁷⁰ Consuelo Pedra Bonet adjuntaba en el expediente de responsabilidades políticas de su marido un certificado médico en el que se informaba que su hija de 10 años tenía las facultades mentales perturbadas.

9- Bernat Artola Tomás: proceso a la libertad

BERNAT ARTOLA: VIDA DE UN POETA

SERENOR (1947)

*En un món de rancúnies i misèries,
ple de frenètics i de mala gent,
encara jo vull voleiar mes dèries,
vanes milotxes a l'atzar del vent!
El món és trist; l'enveja i la venjança
diuen arreu son argument brutal.
I qui viurà si ens manca l'esperança
d'un altre temps més just i sense mal ?
Res no hi ha cert, més que l'amor, fingida;
la fe, dubtada; llagimeig als ulls.
Sortós aquell qui, al rastre de la vida,
Collint les roses no ha trobat abrulls!
Potser la vida, per cantar victòria,
vol anar sempre pel mateix camí,
puix mai no cull la palma de la glòria
l'ingenu heroi que trenca son destí.
O potser és que fugen els conceptes
davant l'acció, que és l'argument de pes,
i l'innocent és colliter de reptes,
que no té dret ni a somniar ni a res.
Tinc enemics que volen ma desteta
i a son desig no puc trobar raó:
potser sabran que l'obra de poeta
ha de tenir arrel de passió !
Mes jo no blasme la tristor que em deixa
la fel amarga de l'endeny cobrad;
sol i en silenci, no sé dir la queixa
que al cor gemega quan és ja ben fart.
Jo beneisc aquell qui em desestima
i em fa la guerra sense eixir la llum.
Gràcies a ell tinc l'ànima més prima
I a tota punxa puc trobar balum!*



Bernat Artola vio por primera vez la luz el 20 de diciembre de 1904 en Castellón¹. Nacido en el seno de una familia con raíces artísticas, ya que su padre era delineante municipal, profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Castellón y

¹ Salvo indicación contraria todos los datos relativos a la biografía de Bernat Artola Tomás proceden de LL. MESEGUER, "Introducción", en *Bernat Artola Tomás. Obres completes*. Volum primer. Castelló, 1983, pp. XVII-LXXVIII. Para un análisis de su obra también se puede consultar J.J. CONILL, "Els poetes castellonencs", en J. PALOMERO, LL. MESEGUER, *Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32*. València, 2007. Pp. 189-216, especialmente las páginas 202-206. Para el contexto cultural general valenciano y de Castellón en particular desde los años 1930 M. BALDÓ (1981), op. cit., y "La recerca d'una cultura moderna", en P. RUIZ (coord.), *Història del País Valencià*. Barcelona, 1990, pp. 383-440.

buen aficionado a la música, tuvo desde pequeño inquietudes culturales y artísticas, centradas en el ámbito de la literatura. Su hermano Francesc se dedicó a la medicina. El joven Bernat destacó desde el principio de su escolarización en el campo de las letras y el dibujo. A partir de 1914 en el Instituto General y Técnico entró en contacto con profesores pertenecientes a la intelectualidad castellonense, como Eduard Julià Martínez, Salvador Guinot Vilar o Lluís Revest Corzo, y con alumnos y amigos que en el futuro se distinguirán como Manuel Segarra Ribes, Alexandre Sos Baynat, Enric Soler i Godes, etc. Inicialmente sus intereses se centraron en el dibujo y la pintura, aunque paulatinamente fue mostrando más interés por la literatura.

Fue una época de gran efervescencia cultural en Castellón que dio paso a la creación de la Societat Castellonenca de Cultura, uno de los faros culturales más importantes de las tierras valencianas. Tras acabar el Bachillerato su tío el arquitecto Francesc Tomás Traver, se fue a estudiar Arquitectura a Barcelona. Sin embargo, estos estudios no convencieron a Bernat Artola, que decidió abandonarlos por las letras. Fue en esta época cuando comienza a escribir sus primeros poemas y en 1925 recibió su primer premio literario², siendo a partir de este momento cuando empieza a publicar en el “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” y en los distintos diarios de la ciudad, con lo que comienza a hacerse un nombre en la vida pública castellonense. En el siguiente año, mientras realiza el servicio militar en Barcelona, gana la Flor Natural de los Juegos Florales de Lo Rat Penat³, lo que le convierte definitivamente en una figura literaria de renombre en Castellón.

En 1928, mientras continuaba sus estudios de Letras en Barcelona también publicó con éxito *Elegies*, que le valió más notoriedad pública y la amistad de Unamuno. Los siguientes años fueron de más premios, de vinculación a la vida cultural local y a la valenciana, así como de regreso a Castellón, inaugurando una vida cercana a la bohemia distinguida por una decidida actitud de vida libre, en la que, rodeado de amistades, sus preocupaciones únicamente eran vivir y crear, dedicándose a la escritura, el dibujo, la práctica de la amistad y la asistencia a multitud de tertulias. Es una época en la que frecuentemente se desplaza a Madrid, Barcelona, Valencia y Salamanca.

² La “Viola d’Or” en los Juegos Florales de Valencia de 1925, con su poema “L’Ermità”.

³ Ganó este certamen con su primera recopilación literaria, compuesta por doce “Cançons d’Amor”.

Fue esta una etapa muy fructífera y creativa. Prueba de ello fue que Bernat Artola participó en 1930 en la edición del libro de Josep Pasqual Tirado *Tombatossals*, que acabó ganando el Premio Anual de la Cámara Oficial del Libro de Madrid, el año siguiente publicó *L'Art Novell*, un estudio de estética contemporánea, y realizó un exitoso diseño de la senyera para la Diputación de Castellón, inventa un nuevo sistema de persianas de aluminio, realiza dibujos para cerámica y envoltorios para diversos productos comerciales, realiza fotografías⁴, etc. Además, tuvo la suerte de ganar un premio en la lotería que le reportó mayor estabilidad y tranquilidad económica⁵, circunstancia que utilizó para manifestar algunos lujos, reforzar su vida de intelectual y ayudar a algunas amistades en apuros. Es esta una época en que su obra es escrita tanto en valenciano como en castellano. En esta última lengua escribió el conjunto de poemas *Santoral*, que le valió en 1933 el premio del “Concurso Nacional de Literatura”.⁶

Un año más tarde fue también premiado con la “Englatina d’Or” de los Juegos Florares de Valencia y esta fructífera etapa culminó en 1935 con la publicación de su libro de poemas *Terra*, escrito durante su estancia en Salamanca, donde acabó los estudios de Filosofía y Letras y mantuvo relación con Miguel de Unamuno y todo el ambiente cultural que rodeaba la ciudad castellana universitaria⁷. En enero de 1936 se licenció en Filosofía y Letras con calificaciones meritorias y en junio de ese mismo año participó en los “Cursillos” que organizaba el Ministerio de Instrucción Pública que abrían la puerta a la docencia, tras una etapa de prácticas bajo la dirección de un catedrático. En ese momento volvió a Castellón.

Sin embargo, inmediatamente empezó la guerra civil y tanto la carrera de Bernat Artola como el mismo desarrollo cultural de Castellón sufrieron un cambio tan inesperado como negativo. Ante la guerra, la obra de Bernat Artola se resintió

⁴ LL. MESEGUER (2003), op. cit, pàg. 217.

⁵ Le tocó la lotería con un billete que había comprado en Salamanca. Posteriormente esta circunstancia será recogida por los informes de su expediente de Responsabilidades Políticas.

⁶ Este premio lo compartió con Alfredo Marqueríe, Adriano del Valle y José Antonio Muñoz Rojas.

⁷ Sobre su estancia en Salamanca y la huella que allí dejó Bernat Artola se puede consultar M. GARCÍA BLANCO, “En la muerte de Bernardo Artola”, *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, nº XXXV, 1959. Pp. 96-99.

considerablemente y se sumió en la resignación, en palabras del profesor Lluís Meseguer *Com a home va sofrir. Com a poeta va callar*⁸. Como comprobaremos, Bernat Artola fue depurado y perseguido, lo que le marcó profundamente y le hizo sufrir y callar.

Iniciada la guerra, entró a trabajar como “encargado de curso” en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Castellón, donde también trabajaba su padre, donde se realizaban actos culturales extraescolares como conferencias y donde se intentó estructurar la enseñanza de la lengua valenciana⁹. Durante la época de la guerra civil mantuvo también una intensa actividad social y cultural, aunque nunca directamente política. Sin embargo, realizó una serie de actos públicos que en 1939 le traerían problemas, a pesar de tener un contenido meramente cultural. Se trata, por ejemplo, de un manifiesto de tono altamente humorístico redactado en 1936 y titulado “Associació antifeixista d’amics de les Arts” o su participación en 1937 en el *Segon Congrés Internacional d’Escriptors Antifeixistes*, celebrado en Valencia, donde formó parte de la “Delegació Valenciana” junto con otros intelectuales de Castellón¹⁰ o su participación en un acto de homenaje al Ejército Popular en enero de 1938¹¹.

Por otra parte, también protagonizará acciones que, como veremos, le permitirán tener cierto aval en la sociedad franquista, como fue su participación en la Junta de Recuperación del Patrimonio Artístico, en la que parece que participó activamente en la recuperación de diversas obras de arte¹². Al fin y al cabo, esto no hace más que demostrar el perfil humanístico de una persona que, ante todo, era un intelectual.

⁸ LL. MESEGUER (1983), op. cit., pág. XLIII.

⁹ Este intento de enseñanza coherente de la enseñanza en valenciano fue llevado a cabo por Ángel Sánchez Gozalbo en representación de Esquerra Valenciana y el propio Bernat Artola, en representación del citado Instituto. LL. MESEGUER (2003), pág. 232.

¹⁰ Se trata del único acto en su vida con cierto contenido político. Lo cierto es que este Congreso reunió a las personas más destacadas del ámbito cultural de la zona republicana. Junto a Bernat Artola asistieron Carles Salvador, Enric Navarro Borràs, Aldolf Pizcuela y Ricard Blasco.

¹¹ En este acto se leyeron dos poemas de Bernat Artola, titulados “Poemas de la defensa de Madrid” y “Estampa de retaguardia”. LL. MESEGUER (2003), op. cit., pág. 330.

¹² Entre estas obras recuperadas estaba la Virgen del Lidón, patrona de Castellón. Junto a Bernat Artola participaron en la Junta de Recuperación del Patrimonio Artístico, entre otros, Joan B. Adsuara, Joan B. Porcar y Ángel Sánchez Gozalbo.

Llegado el franquismo Bernat Artola fue depurado. Fue encarcelado, aunque su hermano consiguió que sólo pasara una noche en la prisión, y posteriormente fue procesado por responsabilidades políticas, un procesamiento que le complicó enormemente la vida y que analizaremos más adelante. A todo esto se unió el hecho que a su promoción, la de los “cursillistas” de 1936, le fue negada la posibilidad de acceder a la docencia, con lo que a Bernat Artola se le cerraron las puertas de un trabajo estable en contacto con la cultura. La intermitencia laboral será la tónica de su vida hasta su fallecimiento.

En el curso 1939-1940 se sacó, mediante convalidación de asignaturas, el título de Maestro de Primera Enseñanza, una profesión que nunca ejerció. Su obra pasó a orientarse en una doble dirección: por un lado el canto irónico a su pueblo de Castellón, con un tono eminentemente populista¹³, y por otro un sendero poético metafísico e intimista, claramente culto¹⁴. Su obra le reportó algunos premios más, aunque sin tanta facilidad como antes de la guerra.

Integrado en la sociedad castellanense de posguerra, poco a poco se incorporó a las tertulias que volvieron a organizarse, participando junto a las personalidades culturales más destacadas de la localidad. Destacó la participación de Bernat Artola en la “Junta Central de Festejos” que organizó las primeras fiestas de la Magdalena, aportando todo tipo de versos sobre temas festeros hasta llegar a la redacción en 1947 del famoso *Pregó*, que todavía hoy en día se lee al inicio de las fiestas. En 1943 participó en el estreno de la ópera *La filla del Rei Barbut*, en colaboración con Manuel Segarra Ribes¹⁵ y con música de Matilde Salvador.

A pesar de esta actividad cultural, los años 1940 fueron para Bernat Artola un tiempo de inestabilidad laboral, que demostró la desubicación de su espíritu libre en la

¹³ Se trata de obras como *Festívoles* (1941), *A l'ombra del Campanar* (1945), *Poble* (1947), *Lledons* (1951) y todo tipo de colaboraciones en *Llibrets de Gaiata*, *Llibrets de Falla* y otras publicaciones populares.

¹⁴ Son sus obras de mayor calidad y más minoritarias, como *Llàntia viva* (1947), *Tornaveu* (1950), *Raons i paraules* (1950), *El delme del temps* (1950), *Recès de solituds* (1951-1952) o *Veus i cançons* (1952).

¹⁵ Con este autor colaboró también en la escenificación en 1947 y en el Teatro Principal de Castellón de su obra *A l'ombra del Campanar*, con música de Josep Godes i Roig.

gris sociedad franquista. Así, trabajó temporalmente en la “Jefatura Local de la Oficina de adquisición y distribución de la chatarra de hierro y acero”, un trabajo inadecuado para un poeta, poco después fracasó en su intento de comercializar ventanas metálicas y trabajó también temporalmente en la Academia Coloma, donde muchos de los jóvenes de Castellón recibían parte de su educación, trabajos todos indignos para su categoría intelectual y humana. Son años en los que participa con algunos artículos de contenido artístico en *Mediterráneo*, el único periódico con que contó Castellón tras la guerra, y se presentó a certámenes literarios menores con ocasión de las fiestas de la Magdalena y otros de carácter popular y local de algunas poblaciones de Castellón, ganando varios premios y rindiéndosele algunos homenajes¹⁶. A finales de 1951, y como consecuencia de una ampliación de la directiva de la Sociedad Castellonense de Cultura, pasó a formar parte de la misma como vocal¹⁷, con lo que se reconocía su valía cultural en el ámbito local.



Intelectuales castellonenses junto a Bernat Artola. A su derecha, José M^a Mira de Orduña. A su izquierda, Ángel Sánchez Gozalvo¹⁸. Ambos testificaron a su favor en su procesamiento por responsabilidades políticas.

¹⁶ En 1947 ganó un Certamen literario en Castellón que significó su consagración definitiva como el mayor poeta vivo de Castellón en aquellos años. Su figura fue enaltecida incluso por el periódico *Mediterráneo*, el único oficial y controlado por FET y de las JONS. Sin embargo, esta especie de reconocimiento no sirvió de nada a Bernat Artola. Por ganar dicho Certamen únicamente le fue concedido por parte del Ayuntamiento de Castellón unas piezas de cerámica. Lo que en realidad le hubiera ayudado, su reintegración como profesor de Enseñanza Media, nunca le fue planteado. M. GARCÍA GRAU, *La poesia castellonense durant el franquisme: poètiques i cultures en una societat perifèrica (1939-1975)*. Tesis doctoral inédita. Universitat de València, 1993, pp. 38-40.

¹⁷ Pasó a ser vocal de la Directiva de la Sociedad Castellonense de Cultura junto a Juan Bautista Porcar, Casimiro Meliá Tena, Lluís Sales Boli y José María Mira de Orduña. V. FALOMIR, “*Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*”. *Index general (1920-1991)*. Valencia, 1992, pág. 16.

¹⁸ LL. MESEGUER, “La cultura de los años treinta”, en M. CHUST (dir), 1992, op. cit., pág. 632.

Pero precisamente, y a pesar de la citada Sociedad, el ambiente gris y provinciano en el que se había convertido Castellón en estos años acabaron por asfixiar a Bernat Artola, que finalmente decidió a trasladarse a Barcelona a realizar estudios de Doctorado en la Universidad Central, aunque nunca inició su tesis doctoral. En realidad, se trasladó a Barcelona buscando nuevos horizontes intelectuales relacionados con la literatura y el mundo del diseño, en definitiva, un ambiente más amplio en el que desarrollar sus capacidades. Y es que además había sufrido desengaños notables como los que en 1952 le negaron una plaza en el Instituto Laboral de la Vall d'Uixó o su fracaso de sus poemas en el prestigioso Premio “Valencia” de la Diputación Provincial de Valencia, ambos debidos al hecho de que su obra se había realizado mayoritariamente en idioma valenciano. Eran, pues, tanto el contexto local como el cultural general de las tierras valencianas los que le impulsaron a desplazarse a Barcelona, buscando un camino que seguirá el resto de su vida, el de la libertad de la soledad.¹⁹

En Barcelona esperaba que la influencia de su antiguo compañero Joan Iglesias, Catedrático de Derecho y Delegado del Ministerio de Información y Turismo le abriera las puertas a alguna oferta de trabajo interesante y estimulante. Ante el fracaso de todos los intentos decidió trasladarse a Madrid, donde consiguió trabajos ocasionales en distintas revistas oficiales y en la redacción de diferentes discursos de importancia relativa. En 1953 el gobierno franquista reconoció los derechos de los “cursillistas” de 1936 y Bernat Artola empezó a vislumbrar una plaza de profesor, plaza que irónicamente le sería concedida tras su fallecimiento. Su desconexión con el mundo cultural castellanense se empieza a hacer evidente al tiempo que establece vínculos con distintas publicaciones madrileñas.

Sin embargo, no había alcanzado la tranquilidad económica. En 1954 pasa a formar parte de la editorial “Editora Latina, S.A.”, que tiene cierto éxito inicial pero que no solucionó sus problemas económicos. Posteriormente colaboró con Radio Nacional de España, aunque sin continuidad, como las diversas colaboraciones que iba

¹⁹ LL. MESEGUER (2003), op. cit., pág. 288.

manteniendo con distintas revistas. En 1955, a la edad de 51 años, se casa con la valenciana Enriqueta Castellet Folch, consiguiendo por fin estabilizar su vida material y espiritualmente, a lo que contribuyó el anuncio de una inminente adjudicación oficial de una plaza de profesor en Madrid. En espera de esta plaza continuó su colaboración más o menos puntual con todo tipo de publicaciones, entre ellas el periódico *Levante*, a las que se unió la dirección de la exposición “Un siglo de pintura española (1856-1956)” a propuesta de La Dirección General de Bellas Artes, o el trabajo como secretario particular del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, su amigo Joan Iglesias. En este contexto, el año 1957 nace su único hijo.

Posteriormente desarrolló trabajos como crítico de Arte y profesor ayudante universitario, aunque en la primavera de 1958 falleció por diversas complicaciones coronarias. Tristemente al poco de su fallecimiento le fue adjudicada una plaza de profesor que nunca llegó a ocupar. Era el desgraciado destino de un espíritu libre atajado por el franquismo.

La noticia de la muerte de Bernat Artola sorprendió a todas sus amistades y fue ampliamente reseñada en multitud de periódicos. Su entierro no fue multitudinario, sino que sólo asistieron su estrecho y selecto grupo de amistades, los mismos que en 1959 le dedicaron loas y comentarios en el *Boletín Oficial de la Sociedad Castellonense de Cultura* correspondiente a la primavera de 1959²⁰, en la revista *Mijares*, y en distintos homenajes celebrados tanto en Castellón como en Valencia. Su figura humana, su talento literario y su ejemplo han perdurado hasta nuestros días como la de una de las personalidades del ámbito cultural más importantes de la historia del siglo XX de Castellón y de la cultura valenciana.

La llegada del franquismo, pues, significó para Bernat Artola un antes y un después en el desarrollo tanto de su personalidad como de su obra. Eliminando el dinámico ambiente cultural que se había estructurado en la ciudad de Castellón y negando los derechos legítimos de ejercer como profesor de Instituto el franquismo, como hemos visto, hizo que la obra literaria de Bernat Artola se reorientara en dos nuevos ámbitos, el popular propio de los Juegos Florales y las fiestas locales, y el más

²⁰ *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, vol. XXXV, abril-junio 1959.

puramente intimista. En ambos casos se trataba de una huida hacia el silencio y una clara manifestación de libertad, configurando una etapa que se puede resumir con palabras de LL. Meseguer como de “nostalgia y decaimiento”²¹, que no impidieron que su obra se mantuviera fiel a su Castellón natal y que se convirtiera en referencia literaria máxima. En este sentido, pretendemos analizar cómo influyó el procesamiento por responsabilidades políticas de Bernat Artola en este proceso de inhibición intelectual que marcó su vida, así como en el inicio de sus dificultades laborales y económicas.

SOBREVIVIR EN EL FRANQUISMO: LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Con la llegada de las tropas franquistas a Castellón la situación de Bernat Artola, de 33 años, se puede calificar como mínimo como paradójica. El día 15 de junio de 1938, un día después de la toma de Castellón por estas tropas, los miembros de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Castellón, entre los que se encontraba Bernat Artola, fueron nombrados por los miembros del franquista Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional “agentes de enlace de nuestra Comisaría, en la provincia de Castellón”, siendo calificados como “nuestros amigos de la Junta republicana” por su actitud colaboracionista en la entrega del patrimonio previamente protegido²². La mayoría de los miembros de la Junta se integraron fácilmente en el franquismo, pasando incluso a desempeñar cargos de relevancia, pero todo parece indicar que el proceso de investigación posterior no salvó a Bernat Artola de ser depurado y procesado por responsabilidades políticas.²³

²¹ LL. MESEGUER (2003), op. cit., pág. 286. Tal como demuestra LL. Meseguer en algunas cartas dirigidas a colegas intelectuales en los años 1940 se puede rastrear su nostalgia de los tiempos anteriores a la guerra en los que la actividad cultural y la vida en general gozaban de amplios márgenes de libertad, frente a la sociedad franquista, calificada como *situació del seny en crisi*. Ibidem, pág. 287.

²² Junto a Bernat Artola formaban parte de esta Junta Delegada de Incautación intelectuales castellonenses como Ángel Sánchez Gozalbo, Samuel Ventura Solsona, Vicente Traver Tomás (futuro alcalde franquista de Castellón), Juan Porcar Ripollés y Vicente Ramírez. Todos trataron en la medida de lo posible rescatar el mayor número de obras de arte de la destrucción que se promovió sobre todo al principio de la guerra civil. F. OLUCHA, *El tesor artístic castellonenc durant la guerra civil*. Castelló, 2004. Pág. 40.

²³ Toda la información que ofrecemos sobre el procesamiento por responsabilidades políticas de Bernat Artola proceden, salvo especificaciones concretas, de Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069. AHPCS.

De hecho, conocemos que llegó a ser encarcelado en la Prisión Provincial de Castellón, en la que permaneció sólo una noche gracias a las gestiones realizadas por su hermano Francesc Artola²⁴, y, sin duda, por las influencias que pudo conseguir de personas de relevancia local de orientación conservadora.

Sin embargo, la primera noticia fechada que tenemos sobre la represión sobre Bernat Artola es del 9 de marzo de 1939, cuando fue juzgado en Consejo de Guerra por el procedimiento sumarísimo de urgencia en Castellón. Los cargos que se le imputaron fueron ser nombrado por las autoridades republicanas como profesor encargado de curso²⁵, ser nombrado miembro del “Institut d’Estudis Valencians” por sus estudios sobre la lengua valenciana²⁶ y haber sido nombrado auxiliar técnico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico Nacional²⁷. Como se puede comprobar, se trataba de

²⁴ LL. MESEGUER (1983), op. cit., pág. XLV.

²⁵ En este sentido se debería haber procesado a todos los profesores que fueron adquirieron su título durante la República. En el auto de procesamiento, sin embargo, se especificaba que fue nombrado profesor adjunto *por recurrir para ello las condiciones legales*. También se especificaban las cantidades que Bernat Artola había cobrado por su trabajo como profesor, que eran 5.000 pesetas anuales en concepto de sueldo y 3.000 pesetas de gratificación. Como sabemos, determinar la base económica de los inculcados era un dato considerado importante para establecer una sanción económica.

²⁶ Esto demuestra la predisposición a la persecución y represión de la lengua valenciana por el franquismo, al convertir a una persona dedicada a la cultura en valenciano sospechosa de responsabilidades políticas. Por otra parte, el auto especificaba que no cobraba ninguna retribución por ser miembro de este organismo.

²⁷ La recuperación y protección de obras artísticas durante la guerra civil en la provincia de Castellón se realizó en dos etapas. En la primera se desarrolló la actividad del Museo Provincial junto con la llamada Junta de Incautación Provincial y Protección del Tesoro Artístico, en un contexto prácticamente revolucionario. Posteriormente esta función la desarrolló la Junta de Recuperación del Tesoro Artístico, cuando hubo una conciencia más clara de la gran pérdida que la guerra estaba causando al patrimonio cultural castellanense.

Dependiente de la Dirección General de Bellas Artes se creó en julio de 1936 la Junta Provincial de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, reuniendo, según la prensa, a un grupo de intelectuales antifascistas preocupados por la quema de iglesias y del patrimonio nobiliario que se estaba produciendo. Junto a Bernat Artola, entre ellos se encontraban José Castelló Tárrega, Juan Adsuara Ramos, Juan Porcar Ripollés, Samuel Ventura Solsona, Ángel Sánchez Gozalbo y Eduardo Codina Armengol.

Una vez estabilizada la situación política, por una Orden Ministerial de mayo de 1937 se creó la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Castellón, nuevo organismo que no era más que una reestructuración de la anterior Junta. Sus integrantes fueron Joaquín Marco Tur (presidente), sustituido en diciembre de 1937 por Fernando Vivas Lloret, después por Vicente Viciano Personat y posteriormente por José Castelló Tárrega, y como vocales Juan Bautista Porcar Ripollés, Juan Bautista Adsuara Ramos, Vicent Sos Baynat, Samuel Ventura Solsona y Ángel Sánchez Gozalbo. En julio de 1937 se les añadieron como auxiliares técnicos Vicente Traver Tomás, Eduardo Codina Armengol, Vicente Ramírez Velasco y Bernat Artola Tomás.

La actuación de Bernat Artola fue la propia de un auxiliar técnico, con una responsabilidad existente pero limitada. De su actividad conocemos que en abril de 1938, tras la llegada de las tropas franquistas a Vinaroz, participó, junto con Vicent Sos Baynat, Samuel Ventura Solsona y Vicente Ramírez Velasco, y por órdenes superiores, en el traslado de diversas cajas con obras de arte, entre ellas varios lienzos de Zurbarán.

cargos inconsistentes que no suponen en ningún caso una manifestación contraria firme contra el franquismo. Incluso son cargos contradictorios, porque en el último de los cargos se especificaba que veló por las obras de arte y consiguió salvar momentáneamente el Retablo de Rubielos de Mora (Teruel)²⁸, lo que suponía un aspecto positivo a valorar por el franquismo.

Ante estos cargos el Consejo de Guerra, formado por Luis Giménez Buesa, José Luis Escobar, Carlos Labrador Salaverri, Luis Olleros Céspedes y Emilio Robles Gómez, propuso el sobreseimiento provisional del caso al Auditor de Guerra, Pedro F. Valladares, quien ante el hecho de que *no se comprueba debidamente de lo actuado la realización de actos punibles que en concreto puedan atribuirse a Bernardo Artola Tomás y que agotada la investigación se carece por tanto de la indispensable base para seguir el procedimiento por lo que es procedente acceder a lo que propone el Tribunal de referencia*. Así, el 24 de marzo de 1939 se aprobó que el “detenido” quedara en libertad.

A priori todo parecía indicar que con esta resolución Bernat Artola se libraría de la vigilancia y la represión franquistas. Sin embargo, el poeta no contaba con la maquinaria represiva de la jurisdicción especial de responsabilidades políticas, que tenía como objetivo abrir expedientes a todas las personas que habían pasado por un consejo de guerra y, como en su caso, incluso si su sentencia no determinaba ningún *acto punible*. Enviada la copia de la sentencia al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia el 14 de agosto de 1939, este Tribunal ordenó al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas, Gabriel Castro Marcos²⁹, la incoación del correspondiente expediente de Responsabilidades Políticas, lo que ocurrió el 21 de

Curiosamente el 15 de junio de 1938 todos los miembros de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Castellón entregaron sus Libros de Actas y las obras custodiadas a las autoridades franquistas del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, pasando a ser considerados *agentes de Enlace de nuestra Comisaría en la provincia de Castellón*. F. OLUCHA, op. cit. Pp. 7-41.

Los antiguos antifascistas supieron convertirse en franquistas. El único que no encontró acomodo en el franquismo, quizá por su apoliticismo sincero y su afán de preservación de su libertad personal, fue Bernat Artola, pagándolo con un consejo de guerra, la pérdida de su empleo y su procesamiento por responsabilidades políticas.

²⁸ Sin embargo, se decía en el auto de procesamiento que dicho retablo fue traído a Castellón pero que se ignoraba dónde fue trasladado después.

²⁹ El secretario ayudante del Juez Instructor Provincial fue Rafael Bover Vázquez.

octubre de 1939. Se abrió, así, segundo procesamiento de Bernat Artola por unos cargos que ya habían sido juzgados y aclarados. La pesadilla no había hecho más que empezar.

El mismo día que el Juez Instructor Provincial recibió órdenes superiores de incoar el expediente de responsabilidades políticas contra Bernat Artola ordenó la citación del inculcado para el día 25 de octubre y la realización urgente de los informes de las autoridades locales, en este caso el Alcalde, el Comisario Jefe del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, el Delegado Provincial de Información e Investigación de FET y de las JONS y el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Castellón, pidiendo que se centraran en los bienes del inculcado y en su actuación político-social.

El 23 de octubre de 1939, dos días antes de lo indicado, Bernat Artola compareció ante el secretario del Juzgado de Instrucción Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón y se procedió únicamente a la lectura de las cinco prevenciones que determinaba la Ley, resumidas en la prohibición de abandonar Castellón sin permiso del Juez Instructor, la obligación de presentar en un plazo de ocho días una declaración jurada y valorada de bienes, y la prohibición de disponer libremente de sus bienes, bajo todo tipo de amenazas legales³⁰. Esta será la única comparecencia de Bernat Artola en todo el proceso hasta la realización de la lectura de cargos realizada el 19 de junio de 1940. Aún así no será hasta el 21 de junio de 1940, justo un año después del inicio de su procesamiento, cuando se le permitirá presentar un escrito para su defensa.

Cuatro días después de la comparecencia para la lectura de las cinco prevenciones de la Ley, el 27 de octubre de 1939, Bernat Artola presentó su declaración jurada de bienes. En ella, aparte de declarar ser licenciado en Filosofía y Letras y su domicilio en Castellón, declara que *como hombre de estudio que es, y no de negocio, carece de bienes propios adquiridos por sí, excepción hecha de los libros de su modesta biblioteca que constituyen su instrumento de trabajo*. Los únicos bienes con los que asegura tener relación se corresponden con la mitad indivisa de la casa propiedad de su padre y que le pertenece por herencia de su madre (un bien, pues, heredable), junto a un

³⁰ Las cinco prevenciones de la Ley de Responsabilidades Políticas se pueden consultar en el Apéndice Documental.

solar con vivienda en la calle Borrachina y un mas *totalmente devastado* en la Avenida Gimeno, todo ello valorado en 15.000 pesetas. Posteriormente admite haber contraído deudas por 9.600 pesetas³¹, justificadas de la siguiente forma:

En estos últimos tiempos se ha visto obligado a contraer algunas deudas, ya que los ingresos profesionales devengados por su trabajo de Profesor en una Academia de Enseñanza Media de esta ciudad, y a los cuales le ha sido forzoso atenerse, no podían, en modo alguno, cubrir el mínimo de sus necesidades vitales más ineludibles.

Mientras tanto se fueron realizando los informes de las autoridades locales. El que se realizó con mayor urgencia fue el de la Guardia Civil (23 y 25 de octubre de 1939), seguido del de la alcaldía (25 de octubre), la Comisaría de Investigación y Vigilancia (9 de noviembre) y el de FET y de las JONS (11 de noviembre). A estos informes, que se recibieron en su totalidad por parte del Juez Instructor el 13 de noviembre de 1939, se acompañó un informe del vicedirector del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Castellón. Como comprobaremos, estos informes ofrecieron datos contradictorios que elevan sospechas sobre las verdaderas intenciones de los firmantes, tanto a favor como en contra de Bernat Artola.

El informe de la Guardia Civil firmó el 23 de octubre de 1939. En él se informaba que Bernat Artola había pertenecido a la *Comisión nombrada para la recogida del Tesoro Artístico*, a la vez que se aseguraba que pertenecía al partido Radical, lo que era falso, aunque se puntualizaba que el Comandante firmante desconocía si había tomado parte en hechos delictivos. Dos días más tarde el Juez Instructor Provincial recibió un segundo informe de la Guardia Civil, a modo de ampliación del primero, en el que se admitía el error inicial de su adscripción política, declarándolo *apolítico, si bien demostraba simpatías por las izquierdas*, añadiendo también que desde octubre de 1937 ejerció el cargo de profesor del Instituto de Enseñanza Media, con nombramiento del Ministerio de Instrucción Pública.

Mucho más escueto fue el informe de la alcaldía. Firmado el 25 de octubre de 1939 por el alcalde de Castellón, el arquitecto Vicente Traver, aseguraba que Bernat

³¹ Bernat Artola dice especificar sólo sus deudas más importantes, que son 1.600 pesetas a Antonio Fayos Marín, 2.000 pesetas a E. Forcada Traver y 6.000 pesetas al Banco de España, en dos letras de 3.000 pesetas con garantía de 3ª persona. Estas deudas le permiten concluir que tenía un “haber teórico” de 5.600 pesetas.

Artola siempre había *sido* de izquierdas y que durante la guerra se había afiliado a Esquerra Valenciana, lo que también era falso. Por el contrario, se aseguraba que su conducta siempre había sido buena y que había sido nombrado profesor de Retórica en el Instituto de Enseñanza Media. En cuanto a sus bienes, el informe se limitó a decir que no se le conocía ninguna propiedad registrada en los libros municipales de bienes rústicos ni en los urbanos³². Este informe no tendría mayor importancia si no fuera porque el alcalde Vicente Traver era tío de Bernat Artola y después aparece en su procesamiento como uno de los testigos a su favor, aportando informaciones totalmente diferentes a las de este primer informe. Esta circunstancia nos lleva a pensar que en las poblaciones menos pequeñas muchas veces las autoridades firmaban informes, seguramente en un número elevado, que alguien redactaba en su nombre, sin atender excesivamente a su contenido.

Una mayor información fue aportada el 9 de noviembre de 1939 por el Comisario-jefe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la Provincia de Castellón, de la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, quien profundizó en la orientación política de Bernat Artola con las siguientes palabras:

El informado con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional era de ideología republicana con carácter izquierdista no pudiendo concretar si perteneció directamente a partido político alguno, ya que a pesar de lo anteriormente dicho no se llegó a destacar de modo activo en la política.

Sin embargo, estas palabras moderadamente conciliatorias se diluyeron al asegurar que *durante la etapa roja se afilió al partido de Izquierda Republicana y a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza*, lo que, según los datos disponibles, tampoco llegó a ser cierto. Hay que destacar que esta afirmación podía suponer una condena efectiva por responsabilidades políticas.

Según el comisario al iniciarse la guerra se encontraba realizando los cursillos que daban acceso a una plaza de docente, descalificándolos al describirlos como *convocados en junio de 1936 por el Gobierno marxista*, y tras su superación regresó a Castellón. La descalificación de su condición de docente, que tantos problemas le

³² Declarar desconocer las propiedades de los procesados por responsabilidades políticas es la tónica general en los informes de la alcaldía de Castellón en el periodo 1939-1940, según los expedientes que hemos consultado.

causaría a Bernat Artola, continuó con la siguiente descripción: *En octubre de 1936 le fueron reconocidos por el Gobierno rojo los derechos adquiridos en dichos cursillos siendo entonces nombrado Encargado de Cátedra, quedando en definitivo como tal en octubre de 1937 cuyo cargo desempeñó hasta la liberación de esta plaza por las Fuerzas Nacionales.*

En el apartado de datos positivos el comisario informó que Bernat Artola no desempeñó cargos directivos en Izquierda Republicana ni en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que no se le conocían hechos delictivos y que fue vocal de la Junta del Tesoro Artístico de la Provincia de Castellón, puntualizando *en donde su actuación fue un tanto favorable a la Causa Nacional, ya que al ser evacuados todos los objetos de arte, pudo ocultar algunos de ellos para que no se los llevaran los marxistas.* El informe continuaba asegurando que no tenía bienes de fortuna, *salvo el rendimiento de su profesión* y finalizaba con una frase esperanzadora: *de su conducta profesional, moral y privada está públicamente bien conceptuado.*

El informe del Delegado Provincial de FET y de las JONS, A. Asensi, comenzaba calificándolo como Catedrático de ideas izquierdistas. Insistía en la idea de su afiliación a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y a UGT, ofreciendo incluso la fecha de su afiliación: septiembre de 1936. Le calificaba como *afecto a la causa marxista*, agregando como prueba su amistad con los hermanos Sos³³ y los hermanos Roma³⁴. Contradictoriamente, se aseguraba que en las tertulias del conocido Café Suizo de Castellón no se alineaba con la República. Finalmente, no ofrecía datos económicos de Bernat Artola, pero hacía saber que le había tocado la lotería anteriormente y que no se había podido determinar el dinero que tenía en los bancos por no tener los falangistas autorización para ello.

Es muy interesante la información que se puede obtener del informe que se realizó desde el mismo Instituto de Enseñanza Media en el que trabajaba Bernat Artola. Firmado por el vicedirector, Sanz de Bremond, el 23 de noviembre de 1939, era mucho

³³ Se refiere al eminente geólogo Vicente Sos Baynat y a su hermano Alejandro, ambos calificados en el informe como *de filiación comunista*. De hecho, Vicente Sos Baynat fue procesado por la Ley contra la Masonería.

³⁴ Se trata de los intelectuales castellanenses Juan Justo y José Roma.

más favorable y, seguramente, más cercano a la realidad. Se trata de un breve informe en el que se repasa su conducta laboral, social y moral:

Este señor cuya conducta social y moral es excelente, no le consta a esta Dirección que con anterioridad ni durante la dominación roja en Castellón tuviese actividad política alguna.

Durante el curso 1937-1938 en período rojo, fue nombrado Encargado de Curso de Lengua y Literatura de este centro, porque con anterioridad al 18 de julio había hecho cursillo de Selección para alcanzar esta categoría. Durante su permanencia en el Instituto como Encargado se limitó a explicar su asignatura sin hacer manifestación política alguna.

Reunidos los distintos informes de las autoridades locales era el momento de que el Juez Instructor Provincial, Gabriel Castro Marcos, realizara el preceptivo resumen metódico, con su propuesta de delimitación de responsabilidades políticas, en la que curiosamente parece olvidarse el cargo por haber pertenecido al Institut d'Estudis Valencians. Vale la pena destacar aquí el resumen de los informes realizado por el citado Juez:

De los informes remitidos por las distintas Autoridades de Castellón, de quien fueron reclamados, resulta: que si bien antes del GMN parece simpatizaba con las izquierdas, no perteneció a ningún partido hasta la iniciación de aquél, afiliándose entonces a izquierda republicana y sindicales de FETE y UGT. Pero su conducta social, moral y profesional (Catedrático del Instituto), ha sido buena, como lo demuestra el decir públicamente que no se significaba en pro del Gobierno de la República, así como el hecho de ocultar algunos de los objetos de arte que intentaban llevarse los rojos, ya que era miembro de una comisión nombrada para la recogida del Tesoro Artístico, siendo su actuación dentro de dicha comisión un tanto favorable para la Causa Nacional, según el informe emitido por el Jefe de Investigación y Vigilancia.

Por todo ello al final el Juez Instructor Provincial entendió que los hechos descritos no estaban comprendidos en ninguno de los apartados del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas, por lo que proponía al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia su absolución. Suponemos que las influencias que pudieron ejercer distintas personalidades del ámbito cultural, social y político de Castellón (recordemos que el alcalde era tío suyo) determinaron esta decisión, ya que el sólo hecho de considerar demostrado su afiliación a cualquier partido político o sindicato era, como lo demuestran los informes analizados en la presente investigación, motivo más que suficiente para el procesamiento y la condena. El 29 de septiembre de

1939 se le comunicó a Bernat Artola el envío de la propuesta de absolución al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, con lo que pudo respirar tranquilo, de momento.

Más de ocho meses tardó el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia en ofrecer un dictamen sobre el procesamiento por responsabilidades políticas de Valencia de Bernat Artola, meses en los que hay que recordar que el inculpado seguía estando bajo las condicionantes de las cinco prevenciones de la Ley de Responsabilidades Políticas y con la ansiedad de la resolución de su caso para acceder a una vida regularizada en la nueva sociedad franquista.

Dicho Tribunal, formado por Eugenio Serrano, E. Piquer Arilla, José M^a Zumalacárregui y Mariano San José, observó que existían indicios de responsabilidad política en el caso de Bernat Artola siguiendo el siguiente resultando:

que el encartado Bernardo Artola Tomás de 33 años de edad, soltero, licenciado en Filosofía y Letras, natural y vecino de Castellón, apolítico, fue nombrado por las autoridades rojas, profesor encargado del curso, miembro del “Institut de Estudis Valencians” y auxiliar técnico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico Nacional, por estos hechos fue objeto de procedimiento sumarísimo cuyas diligencias fueron sobreseídas en auto del Consejo de Guerra celebrado en Castellón el 9 de marzo de 1939, y seguido al presente expediente aparece que desempeñó los cargos a que se alude mostrando tendencia izquierdista, observando buena conducta en su labor educativa, su capacidad para el desempeño del cargo lo obtuvo en los cursillos que se estaban efectuando en Madrid al comienzo del Movimiento Nacional.

Se consideraba que *en principio el hecho de desempeñar cargos administrativos y de confianza por nombramiento del Gobierno rojo, objetivamente supone una responsabilidad política*, con lo que el expediente debía seguir su curso. Sin embargo, este Tribunal entendió que se había vulnerado la Ley al no ofrecer al inculpado la oportunidad de defenderse mediante el procedimiento de la lectura de cargos, con lo que ordenó que el expediente volviera a Castellón para que se realizaran los pasos preceptivos. Se trataba, pues, de una decisión teóricamente positiva para Bernat Artola, que tendría la posibilidad de defenderse, aunque posiblemente la no realización de la lectura de cargos se hiciera intencionadamente para acelerar los trámites conducentes a una definitiva absolución. Volvemos, pues, a destacar una anomalía en este expediente respecto al resto de expedientes analizados, ya que en los casos en los que no se

procedió a la lectura de cargos al inculpado el expediente siguió sin problemas su tramitación hasta la sentencia final, lo que demuestra la discrecionalidad de esta jurisdicción especial.

El 14 de junio de 1940 el expediente de responsabilidades políticas contra Bernat Artola volvió al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, que ya no era Gabriel Castro Marcos, sino Víctor Núñez Escalona, y el secretario ya no era Rafael Bover Vázquez, sino Ramón Repollet. Este Juez inmediatamente mandó citar al inculpado, especificando que la citación se haría a través del alcalde de Castellón, familiar del inculpado. Sin más dilación el 19 de junio de 1940 Bernat Artola compareció ante el Juez Instructor Provincial, donde volvió a escuchar los cargos que se le imputaban. Tras esta lectura aprovechó para ofrecer por primera vez, después de ocho meses de procesamiento, su versión de los hechos imputados, que pasamos a transcribir fielmente:

Acto seguido el inculpado manifestó: que con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional se mantuvo alejado de toda labor política, no habiendo pertenecido a ningún partido ni asociación de carácter político, así como tampoco hizo manifestaciones que demostraran su tendencia política. Que el día 18 de julio de 1936 se encontraba en Madrid celebrando cursillos para encargado de curso y por motivo de las revueltas que había en Madrid el Gobierno rojo suspendió automáticamente dichos cursillos, que ya estaban por finalizar, concediendo sobre el mes de octubre nombramiento de encargado de curso a todos los que en aquella fecha se encontraban, pero que no es cierto que en este nombramiento fuera tenida en cuenta la ideología política y máxime que tuvo que transcurrir un año para que se le concediera Cátedra al declarante. Sobre el cargo que se le hace de haber sido miembro del Instituto de Estudios Valencianos, dice que sobre el año 1937 fue nombrado miembro de la Sección Filológica del mismo Instituto y de carácter puramente profesional, cuyo nombramiento lo concedió el Director del citado instituto y debido a la labor que el declarante realizó sobre estos estudios.

Sobre el cargo que se le hace de haber sido nombrado por el Gobierno rojo Auxiliar Técnico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico Nacional, manifiesta que por motivos profesionales y por la misma causa que los anteriores nombramientos, desempeñó este cargo de una manera puramente formularia ya que dicha labor en realidad la realizaban personas de reconocida competencia como son D. Vicente Traver Tomás, D. Ángel Sánchez Gozalbo y D. Eduardo Codina Armengol.

Sobre el cargo que se le hace de hacerse manifestar durante el Glorioso Movimiento Nacional y bajo el domino rojo a favor del Gobierno marxista, dijo: que son inciertos.

Preguntado si tiene algo más que manifestar dijo que no.

Dos días más tarde, el 21 de junio de 1940, Bernat Artola presentó un escrito de defensa al que tenía derecho para ofrecer una versión ampliada de su declaración y pedir a las autoridades la comparecencia de varios testigos que podían confirmar su defensa. En este amplio documento, que reproducimos íntegramente en el Apéndice Documental, Bernat Artola realiza una minuciosa y apasionada defensa de su actuación antes y durante la guerra civil.

Tras mostrar su disgusto por volver a empezar unos trámites que pensaba que habrían finalizado hacía meses y de los que únicamente esperaba la notificación de su absolución definitiva, Bernat Artola se proponía aclarar todas las dudas sobre su actuación pasada, dejándole claro al Juez Instructor Provincial que se había afiliado a FET y de las JONS como muestra de integración con el nuevo régimen³⁵. Se declaró sorprendido por la necesidad de aclaración de algunos conceptos que consideraba zanjados. Así, destacó el hecho que ocupaba su plaza de profesión en el Instituto de Segunda Enseñanza de Castellón por haber aprobado los cursillos preceptivos y legalmente establecidos y nunca por preferencia o simpatía de las autoridades republicanas, a las que designaba *dirigentes rojos*, y para demostrarlo aseguró que le fue asignada esa plaza un año después que a sus compañeros de cursillos, con lo que no podía haber ningún trato de favor. Además, animaba a las autoridades a recurrir a la documentación pública oficial para verificar estos términos.

Para probar lo que califica como *el constante decoro de sus comentarios circunstanciales y su decidida protección a los valores esenciales de España* comenta que tras la llegada del ejército franquista a Castellón colaboró dando clases de repaso *a los muchachos del SEU* y que a pesar que había cesado como profesor encargado por mandato legal del nuevo Estado colaboró activamente en la puesta en marcha de las clases del Instituto de Enseñanza Media de Castellón.

³⁵ Como se puede observar en el texto original, Bernat Artola asegura haber sido bien recibido en el seno del partido único e incluso especifica que su número de afiliación en FET y de las JONS de Castellón es el 67, un número relativamente bajo como para dejar clara su voluntad de integración. Esta afiliación no era más que una necesidad en tiempos en los que el encuadramiento en el bando de los vencidos no era más que un pasaporte directo a la marginación, la miseria y la represión en todas sus formas. Atendiendo a la biografía y la trayectoria personal de Bernat Artola, esta afiliación no fue fruto más que de la necesidad y el precio a pagar por una futura absolución.

En cuanto a la acusación de haber pertenecido como auxiliar técnico a la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Castellón intentó quitarse responsabilidades al declarar que tal cargo *casi no llegó a ser ni formulario apenas*, que los auxiliares técnicos jamás fueron convocados a sus reuniones y que él fue nombrado por su amor a las obras de arte, especialmente *a las que muestra con alientos de eternidad el espíritu y la inspiración de lo español*. Además añadía que su cargo no tenía remuneración alguna y que la labor realizada por dicha Junta fue reconocida oficialmente por el Gobierno Nacional, siendo sus miembros declarados inmediatamente después de la llegada de las tropas franquistas “agentes de enlace del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

Seguidamente Bernat Artola realiza una observación en cierto tono de lamento al considerar que a todos los miembros de la citada Junta les ha sido reconocidos *sus valiosos servicios en defensa de la Religión y de la Patria*, excepto a él. Para ello repasa la situación en la que han quedado sus miembros en el franquismo: Ángel Sánchez Gozalvo era Presidente del Colegio de Médicos y Teniente-Alcalde de Castellón; Juan Bautista Porcar era Jefe Provincial de los Servicios de Plástica de Falange; Vicente Traver Tomás era el alcalde de Castellón; Vicente Ramírez era Secretario particular del Director General de Enseñanza Primaria y Director de un Grupo Escolar en Madrid; Eduardo Codina Armengol era Jefe Provincial del Artesanado en la Central Nacional Sindical y Bibliotecario Municipal. Ninguno de ellos sufrió el peso de la justicia franquista³⁶. Significativamente Bernat Artola solo había podido ser Delegado Provincial de la Comisión Reguladora de la Producción de Metales “Rama de la Chatarra” de Castellón³⁷. Su lamento finaliza con una enardecida defensa de la acción de esta Junta como salvadora de muchas obras de arte.

³⁶ Una parte importante de los escritores de Castellón sufrieron la justicia militar franquista. Así, Amadeu Pitarch, Lluís Sales y Maximià Alloza fueron procesados. Diego Perona se exilió en Moscú y Enric Soler Godes fue desterrado seis años a Santander. Por el contrario, algunos escritores sí se integraron en la administración franquista, como Luis Revest, que fue miembro de las Comisiones Depuradoras de Primera Enseñanza, Eduard Julià, que fue inspector de Segunda Enseñanza, y Joan Manel Borrás Jarque, que fue presidente del Sindicato Nacional de Maestros. LL. MESEGUER, *Cultura i literatura a Castelló de la Plana: Bernat Artola Tomás, 1904-1958*. Tesis doctoral inédita, Universitat de València, 1989, pág. 85.

³⁷ Quizá fue el exclusivo carácter intelectual de Bernat Artola, alejado de todos los entresijos y movimientos políticos locales, lo que expliquen esta marginación que acabó, como estamos viendo, en la pérdida de empleo y su procesamiento por responsabilidades políticas.

En relación a su pertenencia al Institut d'Estudis Valencians defiendió su ingreso como especialista en lingüística, sin ningún tipo de vinculación política ni gratificación económica, alegando también haber asistido sólo a la sesión de constitución por las dificultades en el transporte motivadas por la guerra. En otro orden de cosas declaró desconocer la filiación política de sus miembros, aunque citó el ejemplo de Felipe Mateu Llopi, franquista nombrado director del Museo Arqueológico Nacional. De esta forma, trataba de convencer al Tribunal que le juzgaba que su trabajo en dicho Instituto era una cuestión absolutamente científica.

La acusación realizada en su informe por el Delegado Provincial de FET y de las JONS, A. Asensi, de ser de ideología marxista la calificó de calumniosa, declarando que sabía la procedencia de la denuncia porque *ha sabido el declarante por indignada confianza de un amigo auténtico que no cejó en su hostilidad hacia el causante de tal arbitrariedad, hasta verle desposeído de su cargo de inmediata confianza*, destacando que en el mismo informe hay contradicciones importantes y cargó contra él con estas palabras: *El individuo que firma tal informe, no cuidó de asesorarse debidamente y con la inconsciencia que le es privativa, lanzó la especie al viento de su antojo. Como su actuación en un Servicio de tanta trascendencia resultaba peligrosa, fue rápidamente sustituido; pero antes pudo extender su absurdo informe.*

Bernat Artola insistió vehementemente en su apoliticismo, calificando a los que se dedicaban a su acusación política de *obcecado cerril, de los que no pueden enjuiciar a los demás sino a través de un sambenito cualquiera*. Y no sólo se confiesa apolítico sino que declara que en ocasiones a criticado al omnipotente partido republicano de Castellón *lo cual le valió disgustos y el que le motejaran de izquierdista, cuando en realidad el mote que le cuadra es de inconformista frente a toda injusticia y todo desmán*. Bernat Artola concluye su defensa con estas elevadas palabras:

Su afán de siempre ha sido servir a su Patria rindiéndole, con emocionante fervor, el mejor homenaje de su espíritu; sus obras, en las cuales, ajenas a toda contingencia deleznable, con llama estremecida de pasión, arde su amor a lo noble y puro, a lo libre de miserias bajas y mezquinas pasiones. La Justicia sabrá estimar la sinceridad de cuanto en este escrito se contiene. Ella descubrirá la verdad y dará su definitivo veredicto.

Finalmente solicitó la citación de cinco testigos de relevancia local para que aporten información verídica sobre su persona y aclaren las circunstancias de los hechos que se le imputan. Significativamente su escrito de defensa finaliza de la siguiente forma:

¡Que la Justicia brille y la razón se restablezca!
¡ARRIBA ESPAÑA!

Una semana más tarde, el 28 de junio de 1940, el Juez Instructor Provincial declaró pertinente la prueba testifical solicitada por Bernat Artola y ese mismo día comparecieron los dos primeros, José María Mira de Orduña Jefe Provincial accidental del Movimiento y Ángel Sánchez Gozalvo, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castellón y Teniente-Alcalde de Castellón. La declaración de estos testigos se estructuró en relación a los antecedentes políticos y sociales de Bernardo Artola, su conducta durante la guerra, el origen de su nombramiento como Encargado de Curso, su vinculación con el Institut d'Estudis Valencians y su actuación como auxiliar técnico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico. Como comprobaremos, la declaración de los testigos fue ampliamente favorable al inculcado y demuestran su categoría humana³⁸.

El primero en testificar fue José María Mira de Orduña³⁹ el 28 de junio de 1940, quien ratificó el carácter apolítico de Bernat Artola, describiéndolo como un estudiante nato cuyas amistades pertenecían en su mayoría al ámbito “derechista”. Como prueba destacaba su colaboración con la Sociedad Castellonense de Cultura, a la que califica como *integrada por personas cuya significación es absolutamente Católico-Derechista*. En cuanto a su comportamiento durante la guerra sabía por experiencia directa que *su actitud fue pasiva en cuanto a los actos externos, comentando en términos de censura la actuación de los rojos y esperando el triunfo rápido del Alzamiento nacional*. Además

³⁸ Los testigos que declararon a favor de Bernat Artola eran personas de reconocida relevancia que formaban parte de la elite cultural y política castellanense. Menos José María Mira de Orduña, todos fueron compañeros de Bernat Artola en la Junta Delegada Provincial del Tesoro Artístico.

³⁹ Ilustre abogado castellanense, Secretario Provincial del Movimiento, fue Jefe Provincial del Movimiento de abril a septiembre de 1940, debido al cese del Jefe Provincial Lorenzo Villalonga, que acabó siendo sustituido por Ricardo Suárez y López Altamirano. También fue presidente de la Diputación Provincial en los años 1941-1947. A finales de 1951 pasó a formar parte de la directiva de la Sociedad Castellonense de Cultura como vocal. En opinión de R. Godes se trataba de una persona de orientación conservadora y, pese a todo, escasamente falangista. R. GODES, op. cit., pág. 86.

declaraba saber por *testigos de toda fe* que *se inclinó a proteger por todos los medios la salvación de obras de arte, acompañado de los demás miembros que fueron designados para constituir la Junta del Tesoro Artístico, pasándose a las filas Nacionales cuando la liberación de esta Ciudad.*

En relación a su nombramiento como profesor Encargado de Curso declaró deberse a haber ganado una oposición y nunca a favores concedidos en atención a *ideas izquierdistas*. Su vinculación con el Institut d'Estudis Valencians no le extrañaba por *tratarse de un eminente filólogo y escritor destacado en lengua valenciana*, con numerosos e importantes premios por su escritura incluso castellana, aunque precisaba que *su orientación como escritor en lengua valenciana es y ha sido siempre exclusivamente literaria, sin mezclar el amor a la lengua vernácula con orientaciones políticas marcadamente tendenciosas en otras Regiones de España, pero afortunadamente desconocidas en Castellón*. A continuación realizó una apasionada defensa de la Junta Delegada del Tesoro Artístico Nacional, calificando a sus miembros como *personas derechistas*, destacando su ejemplo y abnegación⁴⁰. La declaración finalizó asegurando que *en todo momento se mostró defensor de la Causa Nacional y esperando la liberación de las Tropas Nacionales*.

El mismo día compareció el segundo testigo, Ángel Sánchez Gozalvo⁴¹, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castellón y vicealcalde de Castellón,

⁴⁰ José María Mir de Orduña declaró que estas personas llegaron incluso a arriesgar su vida para salvar algunas obras de arte porque en algunos pueblos les recibían con amenazas de muerte. Además, destaca que se pasaron rápidamente a la zona franquista y que los Libros de Actas que redactaron fueron ejemplares al condenar algunas de las acciones de los sindicalistas y milicianos que iban por los pueblos destruyendo obras religiosas. Estas Actas fueron la base de una publicación oficial en la que se demostraba la barbarie de los republicanos en esta materia. Para más información ver F. OLUCHA, op. cit., pág. 40.

⁴¹ Nacido en Castellón en 1894, licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad de Madrid, fue presidente del Colegio Oficial de Médicos en el periodo 1940-1943 y vicealcalde del Ayuntamiento de Castellón, Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Castellón, Presidente del Ateneo, Diputado provincial, Cronista Oficial de Castellón y fervoroso colaborador del Museo de Bellas Artes de Castellón. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Castellonense de Cultura en 1919, de la que fue director de Publicaciones a partir de 1930, teniendo una brillante carrera como especialista en análisis clínicos, como investigador del mundo del arte medieval castellonense y como literato (en 1934 fue mantenedor de los Juegos Florales de Valencia). Erudito de temas locales, colaborador en distintas revistas literarias y firmante del *Les Normes de Castelló* en 1932, entre sus obras literarias destaca la obra *Bolanger de dimonis* (1931). Falleció en 1987. J. SÁNCHEZ, E. DÍAZ, F. OLUCHA y F. PASCUAL, *Personajes ilustres castellonenses. Diccionario biográfico de la provincia de Castellón*. Castellón, 1997. Pág. 88; S. BELLÉS, *Seres humanos de Castellón*. Castellón, 2004. Pp. 215-218; V. FALOMIR, op. cit., pág. 16.

quien volvió a confirmar que Bernat Artola no pertenecía a ningún partido político ni a ningún sindicato, definiéndolo como *alejado de la política, siendo sus amistades preferentemente personas de cierta labor cultural*. Manifestó también que durante la guerra había conversado con él con frecuencia y que siempre se había mostrado *completamente adicto a la Causa Nacional*, así como *contrario al Frente Popular*. La disposición a la defensa del inculpado era evidente.

Sobre su pertenencia al Institut d'Estudis Valencians también aludió a su preparación cultural para justificarla, manifestando: *que ignora la Autoridad que le dio este nombramiento y que por tratarse de una persona de gran relieve cultural y destacado escritor en Lengua Valenciana así como también en Lengua Castellana, supone que se le diese este nombramiento por sus méritos*. Añadía también que tenía profundos conocimientos de arqueología y que ese fue el motivo por el que la Junta Delegada Provincial del Tesoro Artístico Nacional le nombró auxiliar técnico. La conclusión final no dejaba ningún tipo de dudas sobre su comportamiento y su orientación: *nunca demostró tendencias izquierdistas, siempre todo lo contrario, entusiasta de la Causa Nacional y persona de confianza en cuanto se recibiese asuntos de trascendencia a favor del Glorioso Movimiento*.

El 3 de julio de 1940 compareció el tercer testigo, Casimiro Meliá Tena⁴², Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Castellón, quien volvió a reiterar el carácter apolítico de Bernat Artola, aunque apostillaba que era *de ideología anti-marxista*. Valoró su conducta durante la República como buena y añadió que en las conversaciones que mantuvo con él *se manifestó adicto a la Causa Nacional*. En relación a su pertenencia al Institut d'Estudis Valencians dijo que no le extrañaba *ya que es una persona de alabadas dotes poéticas, escritor de poesías indistintamente en castellano y valenciano y muy conocido por estos motivos en la región valenciana*, especificando que en el uso que hizo del valenciano *nunca se desprendió interés alguno*

⁴² Nacido en Albocácer en 1902. Licenciado en Ciencias Exactas en Barcelona se convirtió tras la guerra en Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Castellón, cargo que ejerció más de treinta años. Fue Diputado provincial y Consejero de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Destacó en sus estudios sobre electricidad y energía nuclear, realizando diversas obras sobre la economía de la provincia de Castellón. En 1970 sustituyó a Carlos González Espresati en la presidencia de la Sociedad Castellonense de Cultura, realizando también algunas obras literarias. Fue nombrado Hijo Predilecto de Albocácer en 1986 e Hijo Adoptivo de la ciudad de Castellón en 1989. Falleció en el año 1991. J. SÁNCHEZ et al., op. cit., pág. 59. S. BELLÉS, op. cit., pp. 155-158.

*en el cultivo de esta lengua con fines políticos ni separatistas.*⁴³ Finalmente añadió que su pertenencia a la Junta Delegada Provincial del Tesoro Artístico se debió *a sus vastos conocimientos artísticos y amor a todas las joyas arqueológicas de la provincia*, advirtiendo que dicha Junta estaba formada *por personas de marcado relieve derechista*, sugiriendo que sus miembros fueron los que pudieron proponer su nombramiento como auxiliar técnico. La conclusión final sobre su comportamiento también fue contundente:

Preguntado si sabe las manifestaciones políticas que hizo durante el desempeño de estos cargos, contestó que en sus conversaciones con el inculcado, así como también las de éste con todas las personas a que trató se deducía tendencia a favor de la Causa Nacional y le consta que jamás se manifestó a favor del Frente Popular. Que en el desempeño de los cargos mencionados es casi seguro e imposible que las personas con quienes trató le hubieren mantenido manifestaciones anti-nacionales y con seguridad puede declarar que en todas las partes el inculcado se manifestó francamente nacional.

El mismo día compareció el alcalde de Castellón, Vicente Traver Tomás⁴⁴, quien otra vez manifestó el apoliticismo de Bernat Artola *desde octubre de 1934 hasta julio de 1936* y que durante la guerra en todos los aspectos observó buena conducta. Aclaró que su pertenencia al Institut d'Estudis Valencians fue motivada por la recomendación

⁴³ Como se ha podido comprobar la escritura en lengua valenciana era motivo de sospecha para las autoridades franquistas. Esa es la razón por la que los testigos, en su afán por defender a Bernat Artola, especifican que es autor en lengua valenciana pero también o “indistintamente” en lengua castellana.

⁴⁴ Vicente Traver Tomás fue un importante arquitecto castellanense, arquitecto de la Comisaría Regia de Turismo en 1913, fue arquitecto diocesano de Tortosa y posteriormente de Valencia, miembro fundador de la Sociedad Castellonense de Cultura, premiado por sus obras en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, de la que fue director artístico, con premios, méritos y honores de primer orden a nivel nacional e internacional, y autor de numerosas obras arquitectónicas de la ciudad de Castellón, de la que fue el responsable de su Plan de Ordenación y Urbanización en 1925, y sus comarcas especialmente tras la guerra civil. Aparte de más de cien edificios individuales (en Castellón destacan los edificios de la Diputación Provincial, la arciprestal de Santa María, la Delegación de Hacienda y el Colegio Carmelitas, entre otros, y en Valencia el Palacio Arzobispal, el Seminario de Moncada y su colaboración en el edificio del Banco de Valencia), realizó el diseño de viviendas para obreros, entre las que destacaron las realizadas en Sevilla con los proyectos de viviendas y escuela del Real Patronato de Casas Baratas “El Porvenir” en 1915 y “Huerta del Platinal” (1926-1927). En la provincia de Castellón destacó también la creación del grupo de viviendas para obreros de la empresa Segarra de la Vall d'Uixó, conocida como “colonia Segarra”. Nacido en 1888, fue autor de un gran número de trabajos artísticos y científicos, y fue alcalde de Castellón en el periodo 1939-1942. Fue vicepresidente de la Sociedad Castellonense de Cultura y perteneció a las Academia de la Historia San Fernando, Santa Isabel de Hungría y la de San Carlos. Falleció en Alicante en 1966. Para ver más información ver A. PEÑÍN, “Arquitectura y urbanismo”, en *Historia del Arte Valenciano*. Vol. 6: “El siglo XX hasta la guerra del 36”. Valencia, 1988. Pp. 60-68; R. GODES, op. cit., pp. 333-335; V. CÁRCEL, “Perfil biográfico de don Vicente Traver y Tomás”, *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*. Tomo XLVIII, nº 3. Castellón, 1967, pp. 178-194; F. PEÑA (1998), op. cit., pp. 264-272; Y. GIL, op. cit.; J. SÁNCHEZ, op. cit., pág 100; y S. BELLÉS, op. cit., pp. 251-254.

de amigos profesionales de Castellón al Consejero de Cultura de la Diputación de Valencia y que perteneció a la Junta Delegada Provincial del Tesoro Artístico Nacional por sus aficiones y conocimientos artísticos. Finalizó su declaración, la más escueta de todos los testigos, especificando que *en todo momento realizó manifestaciones contrarias a la causa marxista*.

El último testigo, Eduardo Codina Armengot⁴⁵, compareció el 9 de julio de 1936, quien volvió a insistir en su carácter apolítico y en su buena conducta. En este último sentido afirmó que en algunos momentos llegó a comentar con Bernat Artola los partes oficiales de guerra del ejército franquista. Sin embargo, contradictoriamente manifestó que creía que después de 1936 se había afiliado a Izquierda Republicana, siendo éste el único dato contrario a Bernat Artola que se puede extraer de las declaraciones de los testigos. El resto de la declaración no añadía ninguna novedad respecto a los datos aportados por los cuatro anteriores testigos.

Una vez se había procedido a la lectura de cargos, dando oportunidad al inculpado a su defensa y a la presentación de testigos para la misma, era el momento de realizar de nuevo el resumen metódico, esta vez realizado por el Juez Instructor Provincial Víctor Núñez Escalona, que debía ser enviado al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Entre el primer resumen metódico y el segundo había pasado siete meses y medio. Sin embargo, el informe es exactamente el mismo, excepto la última parte en la que se añade:

Practicada la comparecencia del inculpado a fin de darle lectura de los cargos que se le imputan para que los constate y se defendiera, manifestó: “Que no ha pertenecido a ningún partido político con anterioridad al Glorioso Movimiento ni durante el mismo; que fue nombrado profesor de cargo por haber celebrado los cursillos para ello requeridos; que fue miembro del Instituto Valenciano debido a la labro realizada por el declarante en tiempos anteriores y sobre el cargo de haber sido nombrado Auxiliar Técnico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico Provincial por el Gobierno rojo fue debido a motivos profesionales.

⁴⁵ Nacido en Castellón en 1908 Eduardio Codina Armengot fue Cronista de la provincia de Castellón, Archivero Provincial, Conservador del Museo de Bellas Artes de Castellón y Delegado del Ministerio de Educación, Delegado Provincial del Frente de Juventudes, así como director de la Sociedad Castellonense de Cultura y alcalde de Castellón en el periodo 1960-1967, años en los que también fue Procurador en Cortes. Miembro de la Hispanic Society of America, amante de la arqueología y estudioso de los aspectos provinciales, destacó también por su obra literaria y de recuperación artística. Falleció en 1979 J. SÁNCHEZ et al., op. cit., pág. 24 ; S. BELLÉS, op. cit., pp. 71-74.

Manifestando el inculpado que es afiliado a FET y de las JONS, el Juez que suscribe lo pone en conocimiento de la Delegación Nacional de Justicia y Derecho.

De la prueba de descargo aportada por el inculpado se deduce su irresponsabilidad política, ya que los testigos propuestos y declarantes en el presente expediente son personas de significativa adhesión a la Causa Nacional, quienes convienen en manifestar la buena actuación del presunto responsable.

De todo lo actuado el Juez que suscribe no lo considera comprendido en ninguno de los apartados de la Ley de 9 de febrero.

En atención a lo expuesto y estimando concluso el expediente se eleva a ese Tribunal propuesto para la ABSOLUCIÓN.

No obstante ese Tribunal resolverá.

Este informe tan claramente favorable fue recibido por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia el 30 de julio de 1940, quedando el caso listo para sentencia. Ésta se hizo pública tres meses más tarde⁴⁶, concretamente el 3 de noviembre de 1940, declarando probados los siguientes cargos:

simpatizante de izquierdas antes del Glorioso Movimiento que se afilió a Izquierda Republicana y a la sindical UGT; fue nombrado por las tituladas autoridades rojas, Catedrático del Instituto, cargo que obtuvo en los cursillos al comienzo del Glorioso Movimiento, siendo su conducta social, moral y profesional, buena, diciendo públicamente que no se significaba en pro del Gobierno de la República; por sus estudios sobre “lengua valenciana”, sin retribución alguna y Auxiliar Técnico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico Nacional, siendo su actuación un tanto favorable para la Causa Nacional.

La resolución final del Tribunal fue la absolución. Esto demuestra tanto la incoherencia del Tribunal, por considerar probados hechos no demostrados y reiteradamente desmentidos por todos los participantes en el proceso salvo uno de los denunciados, como su parcialidad, ya que si bien se consideraban probados hechos punibles por parte de la Ley de Responsabilidades Políticas, y que en la inmensa mayoría de los casos conllevó sanciones legales y económicas, el caso de Bernat Artola mereció la absolución. En definitiva, lo que pone en evidencia la sentencia y todo el

⁴⁶ Los miembros del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que firman la sentencia son Eugenio Serrano García, Gil López Ordás y Salvador Montesinos Bonet.

procesamiento de Bernat Artola es el carácter injusto, abusivo e intolerable de la jurisdicción especial de responsabilidades políticas.

Para el poeta Bernat Artola el procesamiento había finalizado. El 15 de noviembre se le notificó la sentencia y en Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del día de nochebuena de 1940 Bernat Artola pudo brindar por la recuperación de la libertad de circulación y de la libre disposición de sus bienes. Finalmente su caso fue archivado el 1 de diciembre de 1943.

El caso de Bernat Artola demuestra cómo el franquismo mantuvo en el punto de mira de la sospecha a los intelectuales republicanos que se destacaron por su libertad personal y por el uso de la lengua valenciana. Tras más de 14 meses de angustia e incertidumbre, el procesamiento por responsabilidades políticas de Bernat Artola quedó en un susto, en una advertencia, en un aviso que fue suficiente para derrotar al poeta que tan libre había despuntado en los años anteriores. A partir de la guerra civil conocemos la evolución del poeta: pérdida de empleo, introspección interior, orientación al folklorismo local, insatisfacción, inestabilidad laboral, emigración a Madrid y muerte envuelta en tristeza y resignación⁴⁷. Puede que las razones de su procesamiento haya que buscarlas en las palabras del profesor Lluís Meseguer:⁴⁸

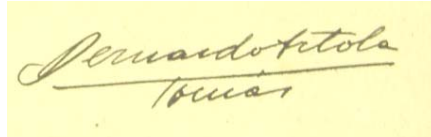
[...] L'única acusació possible contra un poeta com ell haguera estat (i potser ho va ser realment) la seua activitat literària i humana, el seu lúcid valencianisme, el seu esperit immensament liberal i rònegament humanista i, al capdavall, la fidelitat al seu poble.

Sin duda hubo un antes y un después en la vida y en la obra de Bernat Artola tras la guerra civil y en este aspecto hay que incluir necesariamente su procesamiento por responsabilidades políticas. A pesar de su absolución final, si el objetivo del franquismo fue castigar a un liberal progresista, amante de la cultura y la libertad, sin duda lo consiguió, desvaneciendo para siempre las palabras invocadas por el poeta:

⁴⁷ El intelectual castellanense Carlos García Espresati le calificó como “soñador de dolores” en su repaso biográfico y análisis de su obra. C. GARCÍA, “Patografía cordial de un poeta”, *Sociedad Castellonense de Cultura*, nº XXXV, 1959. Pp. 100-128.

⁴⁸ LL. MESEGUER (1983), op. cit., pág. XLV.

¡Que la Justicia brille y la razón se restablezca!



Fernando Titola
Tomas

10- Fernando Gasset Lacasaña, republicano de buena fe o el Nacional imperfecto.

La Ley de Responsabilidades Políticas perseguía fundamentalmente castigar a aquellas personas que públicamente se habían distinguido por apoyar el régimen republicano. Se trataba de realizar una limpieza de la sociedad de todos aquellos ciudadanos partidarios de los valores que iban en contra de la concepción más conservadora y autoritaria de la sociedad española. El perfil idóneo de ciudadano al que se podía someter al proceso de exigencia de responsabilidades políticas era una persona públicamente comprometida con los ideales progresistas y, además, con un patrimonio lo suficientemente rico como para poder exigir una importante sanción económica. Hemos visto cómo la Ley de Responsabilidades Políticas afectó a muchísimas personas que estaban literalmente en la pobreza y a las que se les tuvo que sobreseer sus casos ante la evidente imposibilidad de poder cobrar cualquier sanción económica. Esa fue la razón por la que la tendencia de las autoridades franquistas fue concentrar todos sus esfuerzos en la persecución de personalidades capaces de acrecentar las “Cuentas Especiales” de las Delegaciones de Hacienda. Fernando Gasset Lacasaña fue la personalidad pública más importante que en Castellón fue sometido a un expediente de responsabilidades políticas.¹

Pocas personas acumulan tantos méritos y tanta importancia en el desarrollo político de la ciudad y la provincia de Castellón como Fernando Gasset Lacasaña. Doctor en Derecho Administrativo, fue Delegado y Presidente del Banco de España en Castellón, Presidente de la Liga de Contribuyentes, concejal y alcalde de la ciudad de Castellón², Diputado Provincial durante muchos años (1901, 1905, 1919, 1920, 1923 y 1923), líder del todopoderoso Partido Republicano de Castellón, Hijo Predilecto de Castellón, Decano del Colegio de Abogados de Castellón y Presidente del Tribunal de

¹ Sabemos también que el importante político e intelectual castellonense Gaetà Huguet Segarra también fue procesado por responsabilidades políticas, ya que conocemos la publicación de la incoación de su expediente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, pero este expediente hoy en día se encuentra en paradero desconocido.

² Fue presidente accidental del Banco de España en Castellón en 1896, por ausencia del director de la sucursal, Ramón Echevarría.

Garantías Constitucionales en el periodo 1935-1936, son algunos de los aspectos de un currículum extraordinario.

FERNANDO GASSET LACASAÑA: BIOGRAFÍA DE UN POLÍTICO³

Fernando Gasset Lacasaña nació el 2 de julio de 1861. Su padre fue el militar liberal del cuerpo de carabineros Ruperto Gasset y Messina, lo que determinó un ambiente burgués familiar en el que creció a medio camino entre Castellón y Valencia, por los destinos asignados a su padre. En esta última ciudad realizó sus estudios primarios, acabando los de Bachiller en el Instituto Provincial de Castellón, en la modalidad de Artes. En 1875 se trasladó nuevamente a Valencia para realizar sus estudios universitarios⁴, donde fue elegido presidente de la sociedad de estudiantes librepensadores licenciándose en Derecho Civil y Canónico con Premio Extraordinario en 1880. Los contactos en el ambiente universitario le sumergieron en el ambiente krausista, fundamental para consolidar su liberalismo y su republicanismo.

Su larga carrera política se inauguró con una intervención pública en el Ateneo Científico de Valencia, en el que pronunció un discurso sobre la incompatibilidad entre democracia y monarquía. En 1882 presentó en la Universidad Central de Madrid su tesis doctoral, titulada *La Nación: su conceptos, elementos constitutivos y límites. Leyes que presiden su desarrollo*⁵. Ese mismo año abrió su primer despacho de abogado en Castellón y se integró en el ambiente político de la ciudad, como lo demuestran sus

³ Para el acercamiento a la biografía de Fernando Gasset de Lacasaña es imprescindible consultar la tesis doctoral de I. BADENES-GASSET, *Fernando Gasset Lacasaña. Biografía política de un republicano (1861-1941)*. Tesis doctoral inédita. Universitat Jaume I. Castellón, 2003. Salvo indicación contraria los datos biográficos acerca de Fernando Gasset Lacasaña se encuentran en esta obra de referencia. También se puede consultar I. BADENES, “Fernando Gasset Lacasaña”, en J. PANIAGUA, J.A. PIQUERAS (ed.), *Diccionario biográfico de políticos valencianos. 1810-2006*. Valencia, 2006. Pp. 260-261; así como también F.A. MARTÍNEZ, “Dinásticos, republicanos y sindicalistas (1902-1929)”, en M. CHUST (dir.) (1992), op. cit., pp. 581-594 y A. LORENZO, “La II República”, Ibidem, pp. 601-620. Para una introducción al contexto histórico de la ciudad de Castellón A. ARCHILÉS, “La identitat local de la ciutat de les Normes. Patriotismes locals i valencianisme polític a Castelló (1900-1932)”, en J. PALOMERO, L. MESEGUER (eds.), op. cit., pp. 57-80. Para anécdotas testimoniales S. BELLÉS, op. cit., pp. 111-114.

⁴ Parece ser que no se dedicó a la carrera militar, como su padre, por problemas de miopía.

⁵ Un análisis de esta tesis doctoral y del concepto de nación en el pensamiento político de Fernando Gasset Lacasaña se encuentra en F. ARCHILÉS, *Parlar en nom del poble. Cultura política, discurs i mobilització social al republicanismo castellonenc (1891-1909)*. Castellón, 2002. Pp. 94-174.

primeros artículos en *Revista de Castellón* y su ingreso como redactor del diario *El Clamor*, periódico que recogía las reivindicaciones del Partido Republicano de Castellón. Rápidamente se convirtió en uno de los principales dirigentes de este partido, liderado por Francisco González Chermá hasta su fallecimiento en 1896. También perteneció a varias asociaciones de librepensadores, en la que destacó por su anticlericalismo, basado en la separación Iglesia-Estado, y se hizo con la propiedad del Centro Republicano, creando un espacio de debate y comunicación de ideas, muchas de ellas conspirativas.

En estos años parece que ingresó en la logia masónica “Tres Estrellas” de Castellón⁶, ostentando el número 135 y desempeñando el cargo de orador adjunto, para lo que utilizaba el nombre de *Velarde*. En 1886 fundó su propia logia, denominada “Esperanza 5º”, con el número 214. En 1889 alcanzó el grado de *Venerable Maestro*, hasta 1933, cuando dejó la masonería.

Su rápida ascensión en la sociedad castellonense se evidencia por la serie de importantes cargos que fue acumulando. Así, en 1883 fue nombrado secretario de la Liga de Contribuyentes⁷. Al mismo tiempo, fue uno de los impulsores de la instalación de la sucursal del Banco de España en Castellón, convirtiéndose poco después en consejero delegado local del mismo⁸. Tras casarse en 1884, en 1889 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Castellón⁹ y cinco años más tarde, en 1894, diputado

⁶ La elite del Partido Republicano parece que perteneció desde finales del siglo XIX a la masonería, un ámbito que en aquella época podía llegar a ser difícil de separar del republicanismo.

⁷ Fernando Gasset Lacasaña perteneció a la Liga de Contribuyentes desde 1876. Esta asociación reunía a diversas personalidades y empresarios de Castellón con el objetivo de fomentar los intereses económicos de la ciudad. Su gran proyecto fue la construcción del puerto de Castellón, pieza clave para la definitiva integración económica y modernización de Castellón. Además, impulsó medidas proteccionistas para la naranja en Madrid, la mejora del sistema ferroviario, intervino en la modernización de los gremios y fue uno de los promotores del Banco de Castellón. También impulsó la creación de la Cámara de Comercio de Castellón en 1886, llegando a ser su presidente.

Sobre la actuación de la Liga de Contribuyentes se puede consultar M. MARTÍ, *Cossieros i anticossieros. Burguesia i política local: Castelló de la Plana (1875-1891)*. Castelló, 1985.

⁸ Fue consejero delegado del Banco de España junto con Cayetano Huguet Segarra, también después procesado por responsabilidades políticas.

⁹ Impulsó numerosos proyectos de modernización agrícola relacionados con la conversión de tierras de secano en regadío, el encauzamiento del río Seco, la creación del Sindicato de Aguas y Policía Rural, los gremios de san Miguel y san Isidro, el Círculo de Labradores, la construcción de la carretera de Castellón a Almazora, etc. G. REGUILLO, *El Partido Republicano de Castellón (1868-1936)*. Castellón, 2001.

provincial por uno de los distritos de la ciudad. Un año más tarde volvió a casarse tras haber enviudado en 1887¹⁰, y en 1896 ocupó la presidencia de la Liga de Contribuyentes.



Fundadores de la sucursal del Banco de España en Castellón

Sentados: en el centro, el director Ramón Echevarría; en la derecha, Fernando Gasset Lacasaña¹¹

El Partido Republicano¹² fue fundamental para la formación política e intelectual de Fernando Gasset Lacasaña, quien asumió su dirección tras la desaparición de su carismático y primer líder. El Partido Republicano en Castellón canalizó las expectativas de un amplio espectro social compuesto por pequeños propietarios agrícolas y pescadores, miembros de profesiones liberales, pequeños comerciantes, funcionarios y trabajadores del sector terciario, que compartían un antiguo liberalismo que fue consagrado por la defensa que en 1937 realizó la ciudad de Castellón frente a las tropas carlistas del general Cabrera. Así, con las bases de una fuerte tradición liberal y una estructura de la propiedad de la tierra muy repartida, el republicanismo se convirtió en la fuerza política dominadora, provocando que todos los intentos tanto de la

¹⁰ Su primera mujer fue Ramona Solís y Claras, que falleció en 1887. En 1895 se volvió a casar, esta vez con Amparo Bellver Martí.

¹¹ M. CHUST (dir.), 1992, op. cit., pág. 580.

¹² Para el análisis del Partido Republicano de Castellón la referencia es G. REGUILLO, op. cit.

burguesía local como de los trabajadores de crear fuerzas políticas dominantes propias fueran estériles.

Fundado en 1860 por Francisco González Chermá, ideológicamente el Partido Republicano de Castellón era un partido liberal que compartía tanto la defensa de la propiedad privada, de la que defendía su función social, como aspectos propios de las fuerzas de izquierdas, especialmente en lo relativo a las relaciones entre la Iglesia y el Estado y a su visión reformista y de cambio respecto a los problemas sociales. Respecto al primer aspecto, era partidario de una clara separación entre Iglesia y Estado, así como del desarrollo de una escuela laica, en la mejor tradición liberal heredera de las ideas ilustradas. Este anticlericalismo fue un signo identificador del partido, pero en él se manifestaron diferentes formas de desarrollarlo, pasando del respeto como institución al más duro rechazo. Sin embargo, en general el tema religioso era tratado como un aspecto que debía ceñirse al ámbito de la conciencia personal.

Su relación con las fuerzas socialistas siempre fue tensa, aunque salpicada de distintas coaliciones electorales. En cuanto al nacionalismo, fue partidario de un federalismo especial que no cuestionaba la unidad del Estado español, alejándose de los movimientos nacionalistas valencianos. En el fondo, se consideraba que los intereses castellanenses se veían mejor defendidos mediante la negociación directa con Madrid que implicaba su proyecto federalista, que mediante la creación, por ejemplo, de la Mancomunidad Valenciana, proyecto que, por cierto, acabó frustrando¹³. En este sentido, fue un ferviente defensor de la lengua castellana, aunque individualmente alguno de sus líderes realizó una defensa de la lengua valenciana, aunque siempre en términos culturales y destacando la dualidad y la coexistencia pacífica de las dos lenguas. En cuanto al militarismo, fue partidario de un sistema de reclutamiento nacional heredero de la tradición de la revolución francesa, aunque los distintos conflictos africanos en los que se vio envuelto el país le hicieron dudar sobre éste y un sistema profesional. En cualquier caso, no fue un partido antimilitarista.

¹³ En 1933 se llegó a consensuar unos puntos comunes para comenzar a debatir el proyecto de autonomía valenciano, pero más por el pragmatismo de Fernando Gasset Lacasaña que por el convencimiento pleno del Partido Republicano de Castellón.

Para un análisis del problema del nacionalismo en el republicanismo de Castellón F. ARCHILÉS, "La invenció del patriotisme local a Castelló de la Plana (1891-1922): republicanisme i nacionalisme espanyol", en R. MONLLEÓ (ed.), op. cit., pp. 159-206.

En general, el Partido Republicano de Castellón vivió dos grandes etapas, coincidentes con los liderazgos de sus dos grandes dirigentes: Francisco González Chermá y Fernando Gasset Lacasaña. La primera etapa arrancó con el sexenio democrático y los primeros éxitos electorales¹⁴, caracterizándose por su radicalismo y por su base social popular. Fernando Gasset Lacasaña transformó el Partido Republicano de Castellón, convirtiéndolo en un partido más moderno, con bases sociales menos definidas, dando cabida a prácticamente todos los sectores sociales que se veían beneficiados por la ampliación de los derechos públicos, la libertad, el igualitarismo y las reformas laborales. Teniendo como objetivo irrenunciable la modernización de Castellón, políticamente se orientó a posiciones más moderadas¹⁵, aunque nunca renunció a sus reivindicaciones populares más tradicionales. En la práctica persiguió la modernización de Castellón a partir de la reivindicación de infraestructuras, de las que el puerto de Castellón era la más significativa.¹⁶



Fernando Gasset Lacasaña¹⁷

¹⁴ Francisco González Chermá fue el primer alcalde de Castellón elegido democráticamente en 1868, cuando consiguió el 100% de los escaños municipales.

R. MONLLEÓ, “La época del Sexenio Democrático”, en M.J. GIMENO, op. cit., pp. 263-267.

¹⁵ E. PÉREZ, *Polítics i cacics a Castelló (1876-1901)*. Valencia, 1988. Pp. 33-35. M. MARTÍ, “Grups socials agraris i política urbana: la ciutat de Castelló de la Plana (segles XIX i XX)”, en M. MARTÍ (coord.), op. cit., pp. 99-102.

Análisis de su pensamiento liberal en G. REGUILLO, op. cit.; F. ARCHILÉS, “La invenció del patriotisme local a Castelló de la Plana (1891-1922): republicanisme i nacionalisme espanyol”, en R. MONLLEÓ (ed.), op. cit., pp. 159-206; V. GRAU, *Segona República i guerra civil a Castelló. Discurs republicà, mobilització política i sindicalisme revolucionari*. Tesis doctoral, inédita. Universitat Jaume I, juny 2007, pp. 103-116.

¹⁶ Para el análisis de esta etapa y del papel jugado por Fernando Gasset Lacasaña se puede consultar J. HERRÁIZ, P. REDÓ, *Republicanisme i valencianisme (1868-1938): la família Huguet*. Castellón, 1995. Pp. 107-152. Sobre la construcción del puerto de Castellón M. MARTÍ (1985), op. cit., pp. 200-264, y J. VALLS (coord.), *Rumbo al progreso. El puerto de Castelló a través de la Historia*. Castellón, 2003, especialmente pp. 33-117.

¹⁷ M. CHUST (dir.), op.cit., pág. 582.

Su consagración política fue la elección para el Congreso de los Diputados en 1898, cargo para el que volvería a ser elegido en los periodos 1901-1909, 1919-1923 y 1931. En 1914 se le puso su nombre a una de las calles más importantes de Castellón¹⁸. Además, en 1917 fue elegido alcalde¹⁹. En 1920 fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de las asociaciones sociales y económicas locales. En 1927 fue operado por primera vez de cataratas, enfermedad que le iría alejando poco a poco de la vida política activa. En 1930 fue nombrado Decano del Colegio de Abogados de Castellón y volvió a ser concejal del Ayuntamiento de Castellón. Sin exageraciones, se puede decir que llegó a dominar la política castellanense.

No sólo fue un gran político y un gran abogado, sino que también le sonrió el mundo de los negocios, fundando una fortuna que parece tuvo la clave en la transformación de algunos terrenos de secano que poseía en terrenos de regadío. Por todo ello, a la altura de los años 1930 aparece como uno de los mayores contribuyentes de Castellón.²⁰

Fernando Gasset Lacasaña tuvo un importante papel en los actos de proclamación de la Segunda República en Castellón, ya que encabezó la manifestación que recorrió festivamente las principales calles de la ciudad hasta llegar al Gobierno Civil, donde colaboró decisivamente en la conducción pacífica de la celebración, llegando incluso a disolverla desde sus balcones pidiendo orden y sensatez. El 21 de abril de 1931, en el acto de posesión del nuevo gobierno municipal republicano, ofreció un discurso en el que elogió al régimen republicano y la democracia.²¹

¹⁸ Se hizo a propuesta de Pascual Leone. En 1932 el Ayuntamiento de Valencia hizo lo mismo, a igual que Almazora y Vinaroz. En enero de 1936 la localidad de Rosell le dedicó un grupo escolar. G. REGUILLO, op. cit., pág. 245.

¹⁹ En estas elecciones fue elegido alcalde de Castellón por el método del sufragio universal. Sin embargo, ya lo había sido previamente Francisco González Chermá en 1869 y 1870. Por otro lado, hay que tener en cuenta que por no figurar en las listas republicanas de noviembre de 1917 no pudo ser reelegido en enero de 1918 y sólo fue alcalde de Castellón 26 días.

²⁰ G. REGUILLO, op.cit., pág. 254; A. LORENZO, *Movilización popular y burguesía republicana en Castellón de la Plana, 1931*. Castellón, 1988. Pp. 147.

²¹ I. BADENES, (2003)op. cit., pág. 215.

Con la llegada de la Segunda República el Partido Republicano sufrió diversas alteraciones que culminaron con la escisión de los republicanos más jóvenes y la creación por parte de Fernando Gasset Lacasaña del Partido Republicano Autónomo de la provincia de Castellón, integrándose en el Partido Radical de Lerroux, en el que a su vez pasó a ocupar un puesto en su Comité Ejecutivo Nacional. Esta nueva orientación de su carrera política demostraba su progresiva moderación, aunque también la pérdida de protagonismo político en Castellón. Acabó siendo elegido diputado en las Cortes Constituyentes de la República.²²



Fernando Gasset Lacasaña con los miembros del Ayuntamiento republicano de Castellón

Como presidente del Partido Republicano Fernando Gasset Lacasaña ofreció un discurso al constituirse el gobierno municipal republicano en el que explicó las líneas maestras de lo que consideraba como fundamental para la modernización de la provincia de Castellón (conexión del puerto con un ferrocarril hacia Zaragoza y Segorbe, segregación de la diócesis de Tortosa, saneamiento de las marjales respetando las propiedades de los pequeños campesinos y la mejora del pantano de M^a Cristina, para la ciudad de Castellón señaló la construcción del Palacio de Justicia, del Palacio sede del Gobierno Civil, la Escuela Industrial y la Escuela Normal de Magisterio, además de finalizar el puerto), aspectos que recogían las aspiraciones de la burguesía local. Además, señaló la llegada de la República como símbolo de mayoría de edad del pueblo español, un proyecto en el que se debía integrar a todos los ciudadanos, incluidos los que hasta ese momento eran considerados como monárquicos. Finalizó su discurso rememorando la figura del republicano Francisco González Chermá, primer líder del republicanismo castellanense. V. GRAU, op. cit., pp. 332-335.

²² Una valoración global de la actuación políticas de Fernando Gasset Lacasaña en I. BADENES-GASSET, "La experiencia política de Fernando Gasset durante la Segunda República (1931-1936), en R. MONLLEÓ (ed.), op. cit., pp. 343-356. Su intervención en las Cortes Constituyentes de la República se caracterizaron por la moderación y el espíritu de consenso, teniendo cierto protagonismo en la elaboración de la Ley del Divorcio. V. GRAU, op. cit., pp. 404-406.

En 1932 fue elegido presidente del Sindicato de Riegos y al año siguiente vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales²³, después fue galardonado con la Banda de la República, máxima distinción honorífica del régimen republicano, para acabar ocupando su presidencia desde enero de 1935 a agosto de 1936²⁴. Tras este último nombramiento, que culminaba su larga trayectoria política, fue recibido en Castellón

²³ La Constitución de 1931, en su Título IX, Artículo 121, regulaba las funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales, estableciendo las siguientes competencias:

- a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes.
- b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades.
- c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos otros surjan entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí.
- d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de la República.
- e) La responsabilidad criminal del jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros.
- f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República.

En su Artículo 122 se establecía su composición, formada por: Un presidente designado por el Parlamento, sea o no Diputado. El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República. El presidente del Tribunal de Cuentas de la República. Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes. Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que determine la ley. Dos miembros nombrados efectivamente por todos los Colegios de Abogados de la República. Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento entre todas las de España.

En su artículo 123 se establecía que eran competentes para acudir ante dicho Tribunal los siguientes organismos:

1. El Ministerio fiscal.
2. Los jueces y tribunales en el caso del art. 100.
3. El Gobierno de la República.
4. Las Regiones españolas.
5. Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.

Según las propias declaraciones de Fernando Gasset Lacasaña durante su procesamiento por responsabilidades políticas fue elegido vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales por unanimidad y en representación de las provincias valencianas. Posteriormente el Tribunal le eligió primer vicepresidente, lo que marcó el inicio de su progresivo abandono de la política y actos públicos.

Como vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales mantuvo una postura independiente que, en algunas ocasiones, le llevaron a votar en contra del Partido Radical. Además, votó a favor de la sentencia que condenó al presidente de la Generalitat Lluís Companys a 30 años de reclusión mayor. G. REGUILLO, op. cit., pág. 275.

Parece que en los primeros días del régimen republicano se le ofreció el cargo de embajador de España en el Vaticano, pero Fernando Gasset Lacasaña renunció, ya que se sentía plenamente satisfecho, como colofón a su larga trayectoria política, con su cargo de presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales.

²⁴ Según su propia versión el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, Sr. Albornoz, dimitió a causa de las discrepancias con el gobierno conservador, asumiendo él mismo interinamente la presidencia del citado Tribunal. Esto probaría, según su propia defensa, su compromiso con los gobiernos conservadores y su alejamiento de las fuerzas que poco después integrarían el Frente Popular. Como imponía la Ley constitutiva del Tribunal, fue elegido por mayoría absoluta, imponiéndose a otros cuatro candidatos. La duración de su cargo se establecía en 10 años.

Tras su proclamación como presidente de dicho Tribunal fue recibido con gran expectación tanto en Castellón como en las vecinas Nules y Villarreal.

con grandes honores. A pesar de todos los éxitos, a estas alturas ya era un político en retirada cuyo trabajo era dificultado por una creciente ceguera, fruto de su miopía²⁵. De hecho, tras su nombramiento manifestó su intención de mantenerse alejado de la vida política.



Homenaje de los republicanos de Castellón a Fernando Gasset y Vicente Cantos.²⁶

De izquierda a derecha, sentados: Cofre (gobernador civil), Fernando Gasset, Vicente Cantos (ministro de Justicia), Tirado Gimeno (alcalde de Castellón), Peláez (gobernador civil de Castellón y exalcalde de Castellón), Fernando Vivas, Carlos Selma (presidente de la Diputación de Castellón).²⁷

De pie: José Forcada, Concepción Gasset Solís, Josefa Bueso de Gea, Teresa Peláez, Lía Uberos de Gea, María Gasset Bellver, Ramón Cantos (diputado por Valencia) y Conrado Marc.²⁸

La victoria del Frente Popular y la guerra civil marcaron el declive definitivo del Partido Republicano en Castellón y el afianzamiento de las fuerzas de izquierda que ofrecían mayores expectativas a la población para el cumplimiento de los postulados progresistas tradicionales. Su formación política acabó entrando en crisis y finalmente acabó en 1935 abandonando el Comité del Partido Republicano Radical de Castellón.

Desde el mismo inicio de la guerra la situación de Fernando Gasset Lacasaña se complicó. A pesar que el 11 de agosto de 1936 el Tribunal de Garantías

²⁵ En 1931 ya necesitaba la ayuda de un secretario que le facilitaba las lecturas. Ibidem, pág. 265.

²⁶ J. PALOMERO, LL. MESEGUER (coord.), op. cit., pág. 59.

²⁷ M. CHUST (dir.), op. cit., pág. 613.

²⁸ J. PALOMERO, L. MESEGUER, op. cit., pág. 59.

Constitucionales que él presidía condenó el alzamiento militar contra el gobierno de la República, su dimisión el 21 de agosto, junto con la dimisión de los vocales de orientación conservadora, que el gobierno aceptó, fue interpretada un acto de desafección al mismo por lo que en los meses siguientes fue identificado como enemigo de la República, con lo que acabó sufriendo la incautación de sus bienes por parte del Comité del Frente Popular y de Salud Pública, fue expulsado del Colegio de Abogados de Castellón y fue extorsionado a cambio de su libertad.

Finalmente huyó a Francia, desde donde ingresó voluntariamente en la zona franquista, presentándose a las autoridades. Pese a sus avales, acabó siendo juzgado por un consejo de guerra que lo condenó a seis años de prisión. Posteriormente fue procesado por responsabilidades políticas, imponiéndosele una sanción económica de 250.000 pesetas, que posteriormente fue reducida a 100.000 pesetas. El 13 junio de 1941, con ochenta años, falleció.

FERNANDO GASSET LACASAÑA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO

La historia de Fernando Gasset Lacasaña durante los años de la guerra civil española es la de tantos hombres y mujeres que no tuvieron lugar en ninguno de los bandos en litigio. Como veremos, tuvo problemas con las autoridades republicanas, en su periodo de máxima exaltación, y, después, acabó siendo represaliado por el régimen franquista. Para realizar un seguimiento en profundidad de los detalles de su procesamiento por responsabilidades políticas es conveniente detenernos en su situación durante los años de la guerra civil.

Al principio del verano de 1936 Fernando Gasset Lacasaña era el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales y era un político de 77 años progresivamente moderado que empezaba a ver con preocupación el rumbo que la República estaba adquiriendo. Según I. Badenes-Gasset, desde el principio de la guerra se mostró esperanzado del triunfo de los sublevados, ya que éstos podían representar la solución a los problemas de orden que representaban las fuerzas políticas de izquierda. Esta actitud sin duda le suponía un gran sentimiento de frustración ante el desarrollo de su anhelado régimen republicano.

Al estallar el conflicto bélico se encontraba en el Balneario de Fuente En Segures de Benasal, en el interior de la provincia de Castellón pasando sus vacaciones estivales y atendiendo a su salud²⁹. Como una de las máximas autoridades del Estado, desde el principio trató de estar informado de los acontecimientos que se estaban produciendo, a pesar de las dificultades³⁰. El 8 de agosto ya había contactado con el secretario del Tribunal de Garantías Constitucionales, José Serrano Pacheco, lo que le convenció de la necesidad de partir inmediatamente hacia Madrid. Una vez en la capital convocó urgentemente un pleno del citado Tribunal, pero la mayoría de sus miembros o estaban ausentes o habían fallecido³¹. El 11 de agosto de 1936 el Tribunal de Garantías Constitucionales que él mismo presidía condenó el alzamiento militar:³²

²⁹ Las famosas aguas medicinales de esta fuente y su refrescante clima estival convirtieron este balneario en uno de los lugares predilectos de veraneo para la burguesía castellanense y valenciana desde finales del siglo XIX.

Hay que tener en cuenta que las vacaciones estivales del Tribunal de Garantías Constitucionales comenzaban el 10 de julio de cada año y finalizaban el 10 de septiembre. El 10 de julio de 1936 Fernando Gasset Lacasaña partió de Madrid hacia Castellón, donde permaneció tres días para ver a la familia y realizar distintos papeleos, para posteriormente dirigirse a Benasal, en cuyo famoso balneario, como hemos visto, poseía propiedades.

³⁰ Según I. Badenes-Gasset desde el mismo inicio de la guerra sintonizó en dicho balneario emisoras franquistas, como Unión Radio Sevilla o Radio Salamanca, pese a las prohibiciones del gerente del Balneario y posteriormente de los milicianos. Además, se da por hecho que desde el principio manifestó su convencimiento del triunfo de las tropas franquistas. Según su propia versión, incluso fue perseguido sistemáticamente por los representantes del Frente Popular durante su estancia en el citado balneario. Estos términos habría que ponerlos al menos en duda, ya que se basan en las declaraciones que realizó posteriormente durante su procesamiento tanto en consejo de guerra como en el de responsabilidades políticas, donde Fernando Gasset Lacasaña lo único que trataba era de salvarse argumentando su distanciamiento con un régimen republicano que él mismo había proclamado en Castellón.

Lo que sí parece un hecho demostrado plenamente es que las comunicaciones entre Benasal y Madrid fueron difíciles. Concretamente se cita que las líneas de teléfono estaban cortadas. Sin embargo, como él mismo testimonia durante su procesamiento el día 8 de agosto salió de Benasal y llegó a Madrid el 10 de agosto, con lo que, al menos los transportes, no ofrecieron grandes problemas.

³¹ Hay que tener en cuenta que todos se encontraban dispersos por toda España por hallarse en periodo de vacaciones. Al final, no llegaron a reunirse ni la mayoría de sus miembros.

³² Fernando Gasset Lacasaña ya había condenado el golpe militar del general Sanjurjo en 1932, como demuestra el siguiente texto publicado en el diario *República*, citado en I. BADENES-GASSET, op. cit., pág. 281.

La rebelión de ayer, gestada y llevada a cabo por elementos inadaptables a todo régimen de progreso y libertad debe servir al Gobierno de lección y va a ser llegada la hora de desprenderse en absoluto de cuantos militares o paisanos, que, alimentados por el Erario público, en vez de servir al Estado republicano, laboran contra él... Es más, no debemos, no podemos tolerar que se tengan que guardar consideraciones a los que buscaron encumbrarse a capa del dictador y ahora se rebelan contra la República porque éste no se presta a saciar sus ambiciones. Así pues, solicitamos mano dura contra los traidores cargada más contra los que desempeñando cargos elevados han sido los cabecillas de este movimiento.

El Tribunal de Garantías Constitucionales, en la primera reunión celebrada, condena explícitamente el movimiento subversivo contra el Gobierno legítimo del país, ratificando su promesa de guardar y defender la Constitución de la República. Los señores vocales decidieron ceder un día de su haber para la suscripción a favor de las fuerzas leales.

Por tanto, no puede haber dudas que en agosto de 1936 Fernando Gasset Lacasaña condenó la sublevación militar, y no podía ser de otra forma, dada su trayectoria política y su fidelidad al régimen republicano³³. Otra cosa diferente serán sus intentos durante el procesamiento por responsabilidades políticas por ofrecer una imagen diferente.

Sin embargo, el 21 de agosto de 1936 presentó su dimisión al Presidente del Consejo de Ministros, José Giral. Esta dimisión se produjo como consecuencia de la división interna entre los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales fruto de la situación bélica y posiblemente por la magnitud de una situación excesiva para un hombre cercano a los 80 años de edad³⁴. El Gobierno admitió inmediatamente la dimisión de los vocales conservadores, pero la de Fernando Gasset Lacasaña tuvo que esperar hasta el 27 de agosto, cuando se reunió la Diputación Permanente del Congreso³⁵.

Esta dimisión posteriormente complicó muchísimo su situación, ya que comenzó a ser acusado de “fascista”. El Presidente del Consejo de Ministros le disuadió de su idea inicial de volver a Castellón y le ofreció un pasaporte para salir al extranjero, circunstancia que fue rechazada por Fernando Gasset Lacasaña, que decidió permanecer en Madrid. Se trató de una decisión acertada porque en Castellón el control había pasado a manos de los sectores más exaltados del movimiento obrero. La Junta de Incautaciones de Castellón le calificó como “fascista” y sus bienes y los de sus

³³ G. REGUILLO, op. cit., pág. 280.

³⁴ Según el propio testimonio de Fernando Gasset Lacasaña inmediatamente después de reunirse los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales se planteó la necesidad de su dimisión ante la evolución de los acontecimientos. Sin embargo, no todos plantearon esta dimisión. Fernando Gasset Lacasaña cita como vocales de dicho Tribunal de orientación derechista, y por tanto presuntamente favorables como él a la dimisión al exgobernador de Madrid Carlos Martín Álvarez y al Magistrado jubilado Sr. Alcón.

³⁵ Su sustituto al frente del Tribunal de Garantías Constitucionales fue Pedro Vargas, antiguo vocal del mismo.

familiares acabaron siendo confiscados³⁶ mientras el grupo anarquista “La Desesperada” intentaba localizarlo. Además, se rompió un retrato suyo en el Ayuntamiento, se suprimió el nombre de su calle, se le expulsó del Colegio de Abogados y se pintaron las palabras RIP en su domicilio. Su familia fue amenazada de muerte y extorsionada³⁷. Así explicaba el propio Fernando Gasset Lacasaña su situación:³⁸

Mi dimisión como era de esperar fue el toque de arrebató contra los míos y contra mi mismo. Los rojos estimaron que mi dimisión era una declaración de fascismo y que yo además había perdido la consideración propia del cargo. Apenas se hizo público, los comités de Frente Popular y de Salud Pública se dirigieron a mi familia exigiéndoles cien mil y doscientas mil pesetas como más y no teniéndolas se recurrió a los Bancos que prestaron hasta ciento setenta mil pesetas [...] Se apoderaron de todas las fincas rústicas y urbanas, incluso de las que correspondía a algunas de mis hijas por herencia de su difunta madre, y todo ello fundamentándolo en que yo era fascista. Así se publicó en el Boletín Oficial y en el diario de la localidad advirtiéndome del derecho de recurrir, lo que no hice por no querer ni agradecer ni la justicia de atenderme. Entraron en la casa que nací y heredé de mis padres, despidiendo de ella a todos mis hijos casados y a mi, aunque no me encontraba en ella, constituyendo un caso único en Castellón. De lo que en casa tenía se lo llevaron todo, sin dejarme una sola prenda y además quemaron todos los papeles propios y ajenos, públicos o privados. Tomaron el acuerdo de no permitirme el ejercicio de mi profesión. Así me dejaron en la indigencia y hubiera muerto de hambre si mis familiares no me hubieran atendido.

Con todo, una de las acciones que más dolieron a Fernando Gasset Lacasaña fue la violación de su propio domicilio. Al parecer el 23 de septiembre de 1936 un grupo de individuos armados del POUM dio un plazo de 48 horas para que sus familiares abandonaran su casa por quedar ésta requisada. Según su propia versión, a sus familiares se les permitió sacar sus objetos personales, pero no se respetaron los muebles, ropas, documentos y libros del propio Fernando Gasset Lacasaña, al igual que los pertenecientes al despacho de su yerno José Morelló.

³⁶ El mismo Fernando Gasset Lacasaña, a través de su abogado, manifestó que no quiso reclamar nada a esta Junta de Incautaciones *por no deber a los del Frente Popular ni siquiera como favor de justicia*.

³⁷ Según declaración de Fernando Gasset Lacasaña a su yerno José Morelló, de orientación conservadora, sólo por serlo le fueron exigidas 50.000 pesetas, que acabó pagando. A este mismo yerno y a su otro yerno Alfonso Gil, además, se les prohibió el ejercicio de su profesión de abogados.

³⁸ G. REGUILLO, op. cit., pág. 276.

Con esta situación en Castellón, a través de su yerno José Morelló, que era Diputado a Cortes, se consiguió que Largo Caballero le dotara de una guardia personal para su protección en el hotel Asturias de Madrid, donde fijó su residencia temporal y donde fue acompañado de su nieto Ramón Badenes Gasset, recién licenciado en Derecho, que hizo funciones de secretario particular. En el citado hotel permaneció hasta mayo de 1937, gozando de momentos agradables como la formación de tertulias literarias con varios huéspedes³⁹, aunque también desagradables como diversos registros, controles policiales y cercanos tiroteos en la calle. Uno de estos incidentes desagradables ocurrió en octubre de 1937, cuando la brigada de Agapito Atadell García Atadell⁴⁰ condujo a Fernando Gasset Lacasaña a Comisaría primero y a la Dirección General de Seguridad más tarde para ser interrogado y reconocido por los médicos, tras lo cual se le permitió volver al hotel en condición de prisión preventiva⁴¹, siendo desde ese momento acompañado por 1 agente por espacio de más de cuatro meses⁴².

En mayo de 1937, aprovechando la evacuación obligatoria, se trasladó a Valencia, donde fue acogido por la familia de su primera esposa. Permaneció en este domicilio escondido hasta junio de 1938. Su intención de abandonar la zona

³⁹ Allí coincidió con Josefina, la mujer de Valle Inclán, y sus hijos M^a Antonia y Jaime.

En un contexto de generalización de las sospechas sobre la existencia de traidores o quintacolumnistas, en los primeros meses de la guerra civil, los huéspedes de hoteles, pensiones y fondas eran considerados peligrosos para las autoridades republicanas, ya que muchos de los contrarios al régimen republicano abandonaron sus hogares por miedo a las represalias. R. CANCIO, op. cit., pág. 68. Para una visión general de la situación creada por el fomento de la sospecha entre los madrileños se puede consultar J. CERVERA, *Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939*. Barcelona, 1998

⁴⁰ Agapito García Atadell fue un tipógrafo socialista que durante la guerra civil fue uno de los creadores a principios de agosto de 1936 del llamado Comité Provincial de Investigación Pública, que con el beneplácito de las autoridades de la Dirección de Seguridad republicanas, y constituida en checa, persiguió a personas de derechas y destacados católicos realizando robos, saqueos, detenciones e incluso asesinatos. En sus investigaciones utilizaba especialmente los datos proporcionados por las agrupaciones sindicales socialistas y, entre otros, las de numerosos porteros, de tendencia socialista, de Madrid. Su forma de trabajar era itinerante y sus acciones recibieron un gran eco en la prensa madrileña. En octubre de 1936 huyó con dos compañeros con el botín que había acumulado. Tras venderlo en Marsella se dirigió hacia Sudamérica, pero fue arrestado en una escala en Santa Cruz de Tenerife y posteriormente ejecutado en Sevilla. Los mismos republicanos acabaron repudiando sus acciones y su memoria. www.geocities.com, www.sbhac.net.

⁴¹ Según su propia versión la intención era encerrarlo en un calabozo, pero ante sus protestas por no haber cometido ningún delito junto a sus importantes problemas de vista y su avanzada edad hicieron que un equipo médico lo evaluara y decidieran no encerrarlo en un calabozo sino mantenerlo en prisión preventiva en su hotel. Parece que permaneció detenido por espacio de 28 horas.

⁴² Fernando Gasset Lacasaña, parece que tuvo que pagar las dietas del agente en el citado hotel. Tras cuatro meses simplemente este agente fue reclamado para otro servicio en Valencia y abandonó el hotel.

republicana⁴³ le llevó a protagonizar el siguiente periplo: de Valencia se trasladó por carretera Alicante, donde consiguió un pasaporte que le permitió volar, con un avión de compañía francesa, hasta la localidad francesa de Tolosa, desde donde se trasladó en tren hasta Biarritz y, previo sondeo de las autoridades franquistas, pasó a Fuenterrabía⁴⁴. Una vez en territorio nacional su intención fue ir a Burgos a contactar con Ramón Serrano Súñer, pero no lo consiguió y pronto se encontró desamparado y sin avales⁴⁵. Finalmente consiguió el aval del conde de Romanones, que se lo ofreció principalmente por su estado físico y su evidente incapacidad de abandonar el territorio nacional, pero también por su antigua relación profesional⁴⁶.

Sin embargo, lo único que consiguió fue su traslado a la Prisión Provincial de Castellón, en la que ingresó el 22 de junio de 1938⁴⁷. Allí permaneció incomunicado seis días, saliendo de la celda únicamente en dos ocasiones para prestar declaración⁴⁸, tras la cual le fue concedida prisión atenuada en el domicilio de una de sus hijas. Su procesamiento no se detuvo y hasta principios de noviembre Fernando Gasset Lacasaña pudo presentar una larga lista de pruebas y testimonios en su defensa, que fueron aceptados parcialmente por el juez. Sin embargo, el juez López Cancio fue trasladado a Madrid ante su inminente caída, lo que supuso que el procesamiento de Fernando Gasset Lacasaña sufrió alteraciones varias que desembocaron en un consejo de guerra

⁴³ Según su propio testimonio y el de I. Badenes-Gasset su intención no era simplemente abandonar la zona republicana, sino volver a la ciudad de Castellón, que ya había sido tomada por las tropas franquistas. Seguramente pensaba que allí encontraría la tranquilidad y el reconocimiento tras haber sido hostigado por las fuerzas revolucionarias republicanas, pero se equivocaba.

⁴⁴ Según su testimonio, se presentó a las autoridades franquistas manifestando su deseo de entrar en España, lo que le fue concedido tras consultar sus antecedentes. Su entrada en España la hizo el 16 de junio de 1938 cruzando el puente internacional que separa la española Fuenterrabía y la francesa Hendaya

⁴⁵ También según su testimonio permaneció cuatro días en Francia y otros cuatro días en Fuenterrabía. En esta ciudad al principio todo fueron atenciones, incluso pidió el documento necesario para trasladarse a Burgos y presentarse ante las autoridades, pidiendo vía telegráfica a sus familiares que le acompañaran, pero a las pocas horas la actitud de las autoridades franquistas cambió y el día 21 de junio fue detenido con la intención de trasladarlo a Castellón.

⁴⁶ La relación de Fernando Gasset Lacasaña con el Conde de Romanones provenía de la actividad del hermano de Fernando, Rafael Gasset Lacasaña, representante de la empresa de plomos “Villarroya”, de la que era accionista.

⁴⁷ Si fue detenido el 21 de junio de 1938 en Fuenterrabía y al día siguiente ingresaba en la prisión provincial de Castellón suponemos que su traslado a esta última ciudad se hizo en avión, lo que demuestra la importancia que el detenido tenía para las autoridades franquistas.

⁴⁸ Al parecer fue interrogado por el Juez Militar López Cancio.

sumarísimo. El día 12 de marzo de 1939 se le anunció que tres días más tarde se celebraría contra él un juicio oral. Pese a la invitación a nombrar un abogado que lo defendiera no se admitió que se defendiera él mismo o un abogado conocido que él proponía, eliminando además más de la mitad de las pruebas propuestas y previamente admitidas por el juez ausente López Cancio. El consejo de guerra sumarísimo, pues, fue una auténtica farsa judicial.

Finalmente, la vista se celebró el 15 de marzo de 1939, 16 días antes del final de la guerra. Se le acusó de ser el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales al estallar la guerra (aunque admitió su dimisión como un acto positivo) y de tener *una larga carrera política de tendencias izquierdistas*, haciendo énfasis en la promoción de *conceptos de antirreligión, antipatria y antimilitarismo, afines a los que preconizaban la violencia, incitando a las masas a la rebeldía y a toda destrucción material y de orden existente*. Por todo ello se consideró que *es indudable que la actuación política del procesado, si no puede calificarse plenamente de adhesión a la rebelión en el sentido de decidido apoyo a aquellas fuerzas del Frente Popular culpables de los actos y desmanes, de los que el mismo procesado discrepaba y de los que no aparece cuando menos inmediata y directamente como culpable, lo cierto que su responsabilidad innegable parece clara en cuanto se considera su actuación total y especialmente la de fecha próxima anterior al Glorioso Movimiento en que contribuyó a excitar a las masas de izquierda en forma que no podía tener otro resultado que el fatal que tuvo y hubo tal vez de sorprender y desde luego desagradar al propio procesado; hecho éste que no puede estimarse en modo alguno como prueba o demostración de que sentía simpatías por la Causa Nacional según el procesado pretende sostener*.

[...] que tampoco estima el Consejo aplicable la calificación de auxilio a la rebelión, porque la prueba referente a la actuación del encausado después del 19 de julio de 1936 se limita a referencias de un periódico [...] y por otra el único hecho cierto respecto al apoyo o auxilio que pudo prestar a aquel su Gobierno es el de la dimisión que no cabe interpretar, ni en el sentido favorable de una protesta ni el desfavorable al reo, de una forma de obstaculizar en aquellos momentos la actuación del Gobierno rojo.

[...] que si por una parte concurren la circunstancia agravante de trascendencia de los hechos, también es de apreciar la atenuante de la edad avanzada del procesado y su

decisión de no rehuir la acción de la Justicia Nacional como otros de su representación han hecho.

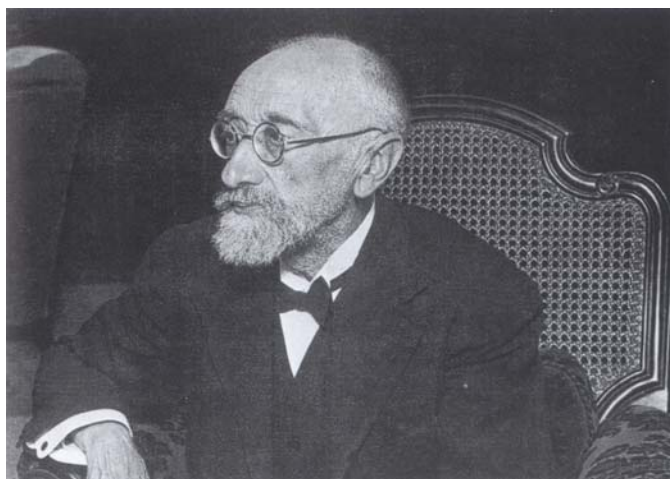
Y todo ello le valió una condena de seis años y un día de prisión mayor, con las accesorias de suspensión de todo cargo y pago de responsabilidades civiles según la jurisdicción de responsabilidades políticas.⁴⁹

Tras el consejo de guerra Fernando Gasset Lacasaña fue trasladado del domicilio de su hija donde cumplía prisión preventiva a la prisión provincial de Castellón el 28 de marzo de 1939, tres días antes del final de la guerra, donde permaneció hasta el 23 de junio⁵⁰, cuando, por viejo y enfermo, y a instancias del ministro de Justicia, se le permitió el traslado al Hospital Provincial. En este centro permaneció hasta el 24 de noviembre de 1939, cuando una orden de Francisco Franco le permitió volver al domicilio de su hija, en condición de prisión atenuada con vigilancia y sin posibilidad de recibir visitas.

Posteriormente fue procesado por responsabilidades políticas. Su expediente comenzó a tramitarse el 25 de noviembre de 1939, siendo el suyo un procesamiento largo, difícil y duro que finalizó con la sentencia del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que le condenó el 19 de junio de 1940 al pago de una sanción económica de 100.000 pesetas. Cuatro días más tarde le fue concedida la libertad provisional, accediendo la Comisión Provincial de Examen de Penas a la reducción de su condena a seis meses y un día de prisión menor. Finalmente, el 14 de junio de 1941, tres años después de la ocupación de Castellón por las tropas franquistas, Fernando Gasset Lacasaña falleció.

⁴⁹ Los detalles del juicio sumarísimo al que fue sometido Fernando Gasset Lacasaña se pueden consultar en I. BADENES (2003), op. cit., pp. 289-300 y 467-469. El consejo de guerra estuvo formado por Pablo Martín Alonso, Luis Barrio, José Rodríguez Abella, Alberto Lagarde, Rafael Sevillano, Enrique Adrados e Ignacio Grau Singlar.

⁵⁰ Durante su estancia en la prisión provincial de Castellón tuvo la voluntad y la lucidez de estudiar a fondo su auto de procesamiento y escribir unas notas de defensa dirigidas a sus hijos en el caso que, ante su avanzada edad y su situación penal, falleciera. Ibidem, pág. 298.



Fernando Gasset Lacasaña⁵¹

LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Como sabemos, el procesamiento por un consejo de guerra era sólo una parte de todo el proceso represivo del aparato judicial franquista. Tras la pena de prisión establecida por dicho consejo de guerra se activaba la segunda parte, la correspondiente a la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas, cuya función era volver a juzgar los hechos juzgados para fundamentalmente fijar una sanción económica que sirviera de expiación y permitiera la reinserción del inculcado en la sociedad franquista. Como hemos visto, Fernando Gasset Lacasaña fue juzgado por un consejo de guerra el 15 de marzo de 1939 y empezó a ser procesado por responsabilidades políticas el 25 de noviembre de 1939.⁵²

Como hemos visto, desde septiembre de 1938 Fernando Gasset se encontraba en Castellón. La relevancia de su persona era suficientemente importante para que las autoridades franquistas prepararan su procesamiento. Tras su paso por un consejo de guerra sumarísimo, el alcalde de Castellón, Vicente Traver Tomás, envió a las autoridades judiciales un extenso informe en el que aclaraba la situación social y

⁵¹ M. CHUST (dir.), op. cit., pág. 602.

⁵² Salvo indicaciones específicas todos los datos que se ofrecen han sido extraídos del Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña, Caja 10074. AHPCS.

política de Castellón antes de la guerra con el objetivo de explicar tanto la gran relevancia de la figura política de Fernando Gasset Lacasaña como la circunstancia, al parecer advertida por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, que la gran mayoría de la población procesada por responsabilidades políticas en Castellón eran *personas de clase humilde y modesta*.

Según Vicente Traver, Castellón estaba dominada por el republicanismo de Fernando Gasset Lacasaña quien, independiente de otros movimientos políticos a nivel estatal, habría formado una eficaz red de relaciones que permitía a la mayoría de las personas ricas y a los miembros de las profesiones liberales tener el dominio político. En su afán de control habría utilizado a su conveniencia y con apariencia democrática *intereses, votos, dominio de masas, y cuestiones obreras, todos los izquierdismos, irreligiosidad, falta de respeto a las autoridades, etc.* Todas las personas que se hubieran atrevido a plantar cara a esta *oligarquía* fracasaron, pero poco a poco una parte de esta estructura política fue disidiendo y derivando en la creación de pequeños partidos y organizaciones que fueron las que acabaron formando el Frente Popular, uniéndose *al elemento trabajador más subversivo*. Por tanto, dicha coalición política habría estado formada en Castellón por *elementos fracasados socialmente en su mayoría y disidentes del partido radical*. La conclusión era que eran muy pocas las personas *de alguna solvencia social y económica* que se integraron en el Frente Popular, a lo que habría que añadir que las que sí lo eran se pasaron interesadamente, con contadas excepciones según el alcalde, al bando franquista. Por todo ello, Vicente Traver se felicitaba del procesamiento de Fernando Gasset Lacasaña, ya que desde antes de 1900 había dominado todos los aspectos de la vida castellanense.⁵³

Por tanto, por parte de las autoridades locales franquistas existía un verdadero interés por llevar a cabo el procesamiento por responsabilidades políticas de Fernando Gasset Lacasaña. Como comprobaremos más adelante con un informe reservado de FET

⁵³ El texto completo se puede consultar en el Apéndice Documental.

Esto demuestra, como ha estudiado M. Álvaro, que en los casos de personalidades políticas de relevancia la retroactividad de la Ley de Responsabilidades se remontaba más atrás que la establecida de octubre de 1934. Como en los casos de Azaña, Negrín, Alcalá Zamora o Largo Caballero, la exigencia de responsabilidades políticas se remontó a los mismos inicios de su actividad política. Esta circunstancia suponía una violación de la misma Ley y demuestra el carácter meramente represivo del procesamiento por responsabilidades políticas. M. ÁLVARO (2007), op. cit., pág. 54.

y de las JONS, este interés rayó en una clara voluntad de castigo, protestando incluso cuando su expediente parecía derivar en una sentencia suave.

Con esta predisposición de fondo, y atendiendo a una providencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, el 17 de noviembre de 1939 se ordena al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, Gabriel Castro Marcos la incoación del oportuno expediente por responsabilidades políticas. Ante las dificultades que podía entrañar el conocimiento, análisis y valoración del patrimonio del inculcado, también se ordenó el traslado del expediente a un Juez Civil para que instruyera una pieza separada, tal y como permitía la Ley de Responsabilidades Políticas.⁵⁴

La investigación no había hecho más que comenzar. Al día siguiente de recibir la orden de actuación, el 18 de noviembre de 1939, el Juez Civil Especial ordenó el embargo de bienes de Fernando Gasset Lacasaña, *sin fijación de cantidad, por no ser conocida la sanción económica que pueda imponérsele, como presunto responsable político*, quedando anotada esta circunstancia preventivamente en el Registro de la Propiedad, así como la retención de todo el metálico o depósito de valores que pudiera tener en los bancos. Esto demuestra que la rapidez era una de las características de la justicia franquista a la hora del procesamiento por responsabilidades políticas, al menos en los casos considerados importantes. En un solo día y sin que el inculcado supiera todavía que había comenzado su procesamiento, sus bienes quedaban embargados y controlados. Paralelamente se ordenó a los Bancos de Castellón que informaran sobre las cuentas y valores del inculcado.

El 22 de noviembre se envió al Hospital Provincial de Castellón un agente judicial con el propósito de que el inculcado informara sobre los bienes que poseía. Fernando Gasset declaró poseer dos fincas urbanas y una rústica, aunque avisó que en la contribución era posible que aparecieran más fincas a su nombre, pero que realmente pertenecían a sus hijas, comprometiéndose a justificar este hecho en su declaración

⁵⁴ El juez civil especial encargado de analizar el patrimonio de Fernando Gasset Lacasaña fue Ramón Díaz Fanjul, auxiliado por el secretario Rafael Benito. El número de pieza separada de este expediente era el 90 de 1939. A lo largo del análisis del procesamiento de Fernando Gasset Lacasaña haremos referencia a algunas partes de esta pieza separada. *Pieza separada de responsabilidad para la efectividad de la sanción económica de Don Fernando Gasset Lacasaña*, Caja 10110. AHPCS.

jurada de bienes. Además, también avanzó que no poseía las escrituras de sus fincas por la expoliación que las mismas sufrieron por parte de los republicanos.

En los siguientes cinco días las investigaciones comenzaban a dar sus frutos: la sucursal del Banco Hispano Americano de Castellón informaba que Fernando Gasset Lacasaña tenía en una cuenta 38,95 pesetas y el Banco de Castellón tenía una cuenta a su nombre con 12,80 pesetas bloqueadas y 83,25 pesetas libres, así como 900 pesetas en préstamos impagados exigibles y 199,075 pesetas en préstamos impagados bloqueados. A su vez, el Banco de España informó que tenía una cuenta con 1,24 pesetas, al mismo tiempo que una deuda crediticia por una cifra superior a las 100.000 pesetas. Por el contrario, la sucursal del Banco de Vizcaya de Castellón aseguró que *no consta nada a nombre del interesado*, al igual que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, la sucursal del Banco Exterior de España en Castellón, la del Banco Central y la del Banco Español de Crédito⁵⁵. Parecía, pues, en principio, que la situación económica de Fernando Gasset Lacasaña era bastante precaria en consideración a la relevancia de su perfil político y social.

Finalmente, el Juez Civil ordenó la consulta a los Administradores de Rentas Públicas y Propiedades de Castellón de los límites exactos de las fincas del inculpado, respuesta que llegó sólo dos días después. En ella se aseguraba que Fernando Gasset Lacasaña satisfacía anualmente una contribución al Tesoro de 2.138 pesetas por Rústica y 2.751,92 pesetas por Urbana.

Por su parte, el 25 de noviembre de 1939 el Juez Instructor Provincial ordenó las actuaciones propias de la primera parte del procesamiento por responsabilidades políticas, como son los informes de las autoridades locales⁵⁶ y el anuncio de incoación del expediente en los Boletines Oficiales. Dos días más tarde se le hicieron saber a Fernando Gasset Lacasaña las cinco prevenciones del artículo 4º de la Ley de

⁵⁵ Esta última entidad financiera informó que a nombre de Fernando Gasset Lacasaña existía un riesgo de 25.000 pesetas como consecuencia de un crédito concedido durante la guerra, estando en aquellos momentos bloqueado *de acuerdo con las Disposiciones en vigor*. Ibidem.

⁵⁶ Como en todos los casos de vecinos de la ciudad de Castellón no se incluyó al cura párroco entre las autoridades locales y sí a la Comisaría de Investigación y Vigilancia, además de al director de la prisión provincial de Castellón, que confirmó que Fernando Gasset Lacasaña se encontraba cumpliendo condena en su domicilio.

Responsabilidades Políticas⁵⁷. Preocupado porque en su primera declaración de bienes parece que no había convencido a las autoridades franquistas de que la mayoría de los bienes que se le atribuían eran realmente de sus hijas, Fernando Gasset compareció ante el Juez Civil Especial para suplicar la oportunidad de explicar, ampliar y clarificar sus declaraciones⁵⁸. Esta oportunidad le llegó poco después, el 5 de diciembre, cuando presentó, el último día del plazo establecido tras habersele realizado las prevenciones de la Ley, su declaración jurada de bienes.

En este extensísimo documento Fernando Gasset ofreció por primera vez su versión de los hechos de los que era acusado, a la vez que presentaba interesadamente su situación como la de una gran víctima de la presunta barbarie republicana. A través de sus palabras podemos rastrear su situación anímica, su gran lucidez a los 78 años y, sobre todo, la desorientación personal que le causó haber sido perseguido y castigado por las dos Españas que se enfrentaron en la guerra civil.

En todo momento Fernando Gasset Lacasaña se muestra respetuoso con el juez que le procesa, lo que indicaba sumisión y aceptación de su legitimidad a la hora de evaluar su actuación política y su situación personal. Sin embargo, en algunos pasajes se muestra un poco arrogante dentro de la natural prudencia aconsejada, como correspondía a una personalidad estatal de primer orden y a un político acostumbrado a altas cotas de poder desde hacía 30 años⁵⁹. En este sentido, se permitió hacer continuas indicaciones al Juez Instructor Provincial sobre las actuaciones que debía o podía realizar, lo que realmente se produjo durante todo su procesamiento. Así, ante algunas dudas sobre la situación en ese momento de algunas fincas urbanas utilizó frases como *Sin duda que el Juzgado podrá averiguarlo mejor que yo ya que dispone de autoridad y*

⁵⁷ Estas prevenciones se pueden consultar en el Apéndice Documental.

⁵⁸ Por los documentos existentes en su expediente de responsabilidades políticas se puede deducir que el día 1 de diciembre de 1939 Fernando Gasset Lacasaña presentó un escrito a modo de declaración de bienes que parece resultó insatisfactorio por insuficiente, por lo que se comprometería a presentar una nueva detallada, que es la que nos disponemos a analizar. Según indicaciones del propio Fernando Gasset Lacasaña el día 2 de diciembre *por la noche* se le comunicaría que el escrito no resultaba suficiente.

⁵⁹ En este sentido el tono empleado y el lenguaje utilizado por Fernando Gasset Lacasaña contrastan significativamente con los utilizados por la mayoría de los ciudadanos expedientados por responsabilidades políticas analizados en el presente trabajo de investigación, que en su mayoría eran personas de poca cultura o analfabetos que o bien presentaron como pudieron sus escritos o bien recurrieron a la ayuda de compañeros que supieran escribir, o incluso de los mismos agentes de la justicia franquista, con todo lo que ello implicaba.

medios; Sin duda el Juzgado tendrá más facilidad para averiguarlo; Si el Juzgado desea aclarar el punto ha de serle facilísimo con sólo enviar a cualquier dependiente a la citada casa; [...] lo que falte podrá fácilmente conseguirlo el Juzgado; Para comprobar este hecho el Juzgado deberá pedir relación de todas las letras firmadas por mi apoderado como aceptante, tirador, endosante o a la vista, dirigiéndose a los bancos que quedan citados [...]; El Juzgado puede pedir a la oficina recaudatoria certificación del importe en cada trimestre; [...] Según el Juzgado podrá saber si dirige comunicación a la alcaldía [...]. A medio camino entre la colaboración y la facilitación de la acción judicial y la arrogante imposición, Fernando Gasset Lacasaña se atrevió finalmente a dibujar el camino a seguir por el Juez Instructor Provincial:

Los dos citados primeros documentos pueden dejar bien precisados la cabida, lindes, fechas, valores, inscripción en el Registro de la Propiedad, títulos y otros detalles que el juzgado puede considerar interesantes y que yo no he podido transcribir por falta material de tiempo. Para utilizarlos en la medida que el Juzgado estime necesaria caben tres medios, sin privarme de poder utilizar dichas escrituras, tan indispensables por la quema de Registros y protocolos. Es el primero la exhibición de los documentos para que el Juzgado tome todas las notas que estime convenientes; el segundo que presente copia simple de todos los extremos que el Juzgado señale y después se practique un cotejo y el tercero que inscriba los documentos en el Registro de la Propiedad y después se dé del mismo certificado según se estime conveniente.

La declaración jurada de bienes presentada por Fernando Gasset Lacasaña recoge una serie de quejas importantes para su situación en diciembre de 1939. La referida al funcionamiento de la justicia franquista hacía referencia a la urgencia del procesamiento por responsabilidades políticas, que no le permitió prepararse su defensa con el tiempo necesario para realizarla convenientemente, aunque esta circunstancia también le permitió introducir algunas vaguedades en los detalles de sus propios bienes. Como sabemos ésta era una de las bazas que conscientemente habían preparado los creadores de la Ley de Responsabilidades Políticas para precisamente dificultar la defensa de los inculcados y proceder más rápidamente a la represión de los mismos.

La queja más amarga y más recurrente fue acerca de la actuación de las fuerzas republicanas respecto a sus propiedades y a sus familiares, a lo que se sumó las consecuencias directas de la guerra, en forma de ocupaciones y destrucción de casas, y también algunas actitudes de las autoridades franquistas. Hay que tener en cuenta que, a consecuencia de su dimisión como Presidente del Tribunal de Garantías

Constitucionales, fue acusado de fascista y de colaborador con los golpistas, con lo que muchas de sus propiedades fueron confiscadas. De esta forma, Fernando Gasset Lacasaña declaró inicialmente su situación prácticamente de pobreza, justificándola de la siguiente manera:

Muebles no tengo por haberse apoderado de ellos los rojos, que asaltaron mi casa el 23 de septiembre de 1936, no dejándome signo algo inservible y sin valor hasta el punto que tengo que vivir con alguna de mis hijas, para que me faciliten todo lo necesario para la vida.

El asalto de su casa el 23 de septiembre de 1936 fue el acto que más dolor le produjo. A la natural indignación por la violación del domicilio había que añadir la desaparición de toda su documentación personal⁶⁰, lo que posteriormente le reportó numerosos problemas. Esta casa, según su declaración, fue *destinada a diversas oficinas y almacenes, tales como abastos, transeúntes, fortificaciones y otros semejantes, que la perjudicaron en gran manera*. A todo ello habría que añadir su posterior destrucción por el efecto de los bombardeos franquistas⁶¹ y de varios obuses durante la ocupación franquista.

Pero también fueron intervenidas otras de sus propiedades, como la casa de la calle Calvo Sotelo de Castellón, que fue ocupada en agosto de 1936 por el Ateneo Racionalista, entidad de carácter anarquista, siendo posteriormente sede de la Junta Oficial de Incautaciones. La queja se extendía también al franquismo, ya que esta casa fue convertida a partir de junio de 1938 en sede de Frentes y Hospitales franquistas y ocupada posteriormente por las autoridades franquistas, convirtiéndola en sede de la Organización Juvenil de FET y de las JONS *sin haber celebrado contrato ninguno de arrendamiento y sin satisfacer ninguna cantidad*.

⁶⁰ El mismo Fernando Gasset daba por desaparecida su documentación, ignorando si fue quemada o no. En algunos casos esto le permitía no aclarar, pese a su presunta predisposición a ello, el valor de algunas fincas por desconocimiento.

⁶¹ Para consultar los efectos de los distintos bombardeos de la ciudad de Castellón durante la guerra civil se puede consultar AA.VV., *Castelló sota les bombes*. Benicarló, 2006.

En cuanto a su masía de la Partida de Benadresa, fue también ocupada y lo primero que hicieron fue arrancar los almendros en número de unos trescientos plantados en unas treinta hanegadas, cuyo producto venía a ser el líquido que alcanzaba dicha finca. La consecuencia presuntamente era que en 1939 dicha finca le reportaba pérdidas de dinero, concretamente de algunos cientos de pesetas.

En cuanto a las fincas urbanas que teóricamente eran de sus hijas y de las que él sólo era responsable como usufructuario por viudez, también sufrieron en distinta forma los efectos de la guerra, quedando en un estado aparentemente lamentable:

Aun cuando según he dicho parte del usufructo es mío, no representa renta alguna, porque en poder de los rojos las fincas, sin prestarles atención ni cuidado, teniendo que pagar contribuciones y arbitrios, algunos de la dominación roja y reparar daños de la propia guerra, que si no han destruido los edificios, han roto cristales, levantado los techos, arrumbado los tabiques y otros supera el gasto al ingreso.

En uno de sus bienes inmuebles en Castellón aseguró que *los rojos me hicieron gastar en ella antes de quedársela mucho más de la renta que puede producir en varios años*. Otra de sus propiedades, la de la calle Pérez Galdós, fue utilizada como taller por los republicanos, uso al que también la destinaron los franquistas hasta que la abandonaron por no tener techo a causa de los bombardeos. En cuanto a su propiedad en el Balneario de Fuente En Segures de Benasal, se quejó del derribo de la casa llamada “La Primitiva”, junto con la desaparición de todos sus muebles y bienes, y la utilización del resto de bienes como *Hospital, Sanatorio y recogimiento de evacuados*.

Pero es en el capítulo de las deudas contraídas en el que con más claridad se manifestaba, a juicio de Fernando Gasset Lacasaña, la extorsión a la que fue sometido él y su familia por parte de las autoridades republicanas. De esta forma, cuantifica en más de 300.000 las pesetas que se derivan de las exigencias de las mismas. Concretamente se cita la exigencia de 100.000 pesetas a la que poco después se añadió otra de 250.000 pesetas, cantidades que fueron abonadas mediante letras que los Bancos no aceptaron, con lo que se acabaron pagando por este sistema un total de 177.000 pesetas, a las que se añadieron otras cantidades menores para evitar que amigos y familiares sufrieran persecuciones. Por todo ello su hijo Fernando tuvo que pedir un crédito de 70.000 pesetas. La conclusión no podía ser otra que responsabilizar a la guerra de su situación:

Quien no me conozca podrá creer después de esta relación de deudas que yo he vivido siempre de la trampa y de tal supuesto he de protestar enérgicamente. Desde los seis años a los diez y nueve trabajé como estudiante. Después y hasta mi renuncia del cargo de presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales no descansé sino en pequeño periodo de tiempo en que estuve enfermo. Trabajé y no tuve vicios, siempre con el deseo de dejar acrecentado a mis hijos lo que recibí de mis padres. Todas esas deudas se han producido desde el mes de agosto de 1936, por los motivos que quedan someramente indicados y que ampliaré si así lo estima el Juzgado.

A pesar de todo, con la lectura de la extensa declaración jurada de bienes presentada por Fernando Gasset Lacasaña nos damos cuenta que, a pesar que se hallaba en situación de prisión preventiva, sí pudo realizar gestiones encaminadas a recopilar datos sobre su patrimonio y a confeccionar sus escritos de defensa. Así, él mismo relata cómo había contactado con las autoridades para reparar su domicilio de la calle José Antonio, solicitando un préstamo para tal fin. Previamente había solicitado la rebaja de la contribución por estar la casa destruida. Para estas gestiones, que repitió para otras fincas destruidas, parece que envió a familiares y parientes. Además, una de sus fincas rústicas las cedió, mediante documento privado, a sus hijos para que la pudieran trabajar.

En cuanto a sus bienes, Fernando Gasset declaró valores bancarios, fincas urbanas, fincas rústicas y deudas. En el primero de los apartados reconoció la posesión de seis acciones de “Unión Levantina” y dos del Banco de Valencia, pero advirtiendo que por su valor era muy difícil que le reportaran beneficio alguno. Además, advirtió, parece que en respuesta a algún rumor malintencionado en este sentido, que no poseía valores en el extranjero.

En general describió sus bienes divididos en dos partes claramente diferenciadas. La primera la constituirían los bienes de su absoluta propiedad y la segunda harían referencia a los bienes que compartía con sus hijos por proceder de la herencia de su madre, esposa de Fernando Gasset Lacasaña⁶². Al parecer ésta en su testamento dejó un

⁶² Fernando Gasset Lacasaña se casó dos veces. De su primera esposa, Ramona Solís Claras, nacieron Ana y Concepción. Con su segunda esposa, Amparo Bellver Martí, tuvo a Fernando, Elisa, Blanca y Marita. Además, tuvo con su segunda mujer dos hijos más que fallecieron a los pocos días de nacer y otra más, Amparo, que murió a los 18 años. S. BELLÉS, op. cit., pp. 113-114.

tercio de sus propiedades entre sus hijos. Fernando Gasset Lacasaña quedó encargado de su reparto y él mismo figuraba como usufructuario en calidad de viudo. La intención de Fernando Gasset Lacasaña fue tratar que estos bienes escaparan a la exigencia de responsabilidades políticas. A pesar de esta distinción, Fernando Gasset Lacasaña realizó una relación de estos bienes distinguiendo entre bienes urbanos y bienes rústicos.

En cuanto a los bienes urbanos, enumeró como propias la casa de la calle José Antonio, que era su domicilio oficial⁶³, que valoró en 6.000 pesetas⁶⁴, teniendo en cuenta los desperfectos de bombas y obuses que le hicieron solicitar su baja en la contribución y su alta como solar, y la casa de la calle Calvo Sotelo, valorada en 3.600 pesetas, y que sufrió, como hemos visto, diversos usos durante la guerra civil. Como de sus hijas y suya en usufructo por viudez⁶⁵ citó las siguientes: una casa en la calle Buenavista en el Grao de Castellón, con un valor de 366 pesetas, realmente de su hija María Gasset Bellver; una casa en la calle Canalejas, con un valor de 354 pesetas; una casa en la calle Isabel Ferrer con un valor de 210 pesetas, compartida con su nieta Blanca Rodríguez Gasset, por fallecimiento de su madre Blanca Gasset Rodríguez; una casa en la calle Pérez Galdós, con un valor de 675 pesetas, compartida también con la anterior nieta, aunque había sido dada de alta como solar tras las destrucciones de la guerra; una casa en la calle Mayor perteneciente a su hija Elisa Gasset Bellver, de la que se desentiende por no pagar él la contribución, sino su yerno; una casa en la calle Gobernador Bermúdez de Castro con un valor de 540 pesetas, a repartir entre los herederos de su segunda esposa, Elisa Gasset de Fabra y él mismo; y una casa en la calle Sidro Vilarroig con un valor de 168 pesetas, declarada solar por destrucción durante la guerra. A estas casas se añadían una participación del 15% del Casino Clavé, finca que estaba embargada por impago y que había adquirido junto a unos amigos; una participación de 2 trigésimas partes de una mancomunidad de fincas en el Balneario de

⁶³ Esta calle llevaba antes del franquismo su propio nombre.

⁶⁴ Todas las valoraciones de los bienes las realizó teniendo en cuenta la contribución de Hacienda, ya que, como hemos indicado y él mismo no se cansa en destacar, la mayoría de su archivo personal había desaparecido.

⁶⁵ Fernando Gasset Lacasaña advertía de que estos bienes eran de sus hijos a pesar que él figuraba como el titular en los recibos de contribución. A propósito de este tema llega a confesar que en alguna finca urbana no se ha hecho el cambio de titularidad para ahorrarse trámites por su avanzada edad.

Fuente En Segures, en Benasal (Castellón); y finalmente una casa en la calle María Breva de Castellón que aseguró haber vendido hacía 20 años sin poder demostrarlo y de la que todavía figuraba él como titular en la contribución.

Resumiendo, en cuanto a fincas urbanas Fernando Gasset Lacasaña declaró tener dos fincas por un valor de 9.600 pesetas, a las que se podían añadir otras siete fincas valoradas en 2.313 pesetas, la participación en un Casino embargado y la participación en la mancomunidad del Balneario de Fuente En Segures de Benasal. Todo ello suponían un patrimonio urbano valorado en 11.913 pesetas.

En cuanto a bienes rústicos, declaró poseer una finca con dos masías en la Partida Benadresa de Castellón, valorada por él mismo por 120.281 pesetas (en un estado lamentable tras la guerra) y otra finca con una casita en el Grao de Castellón valorada en 10.037 pesetas, a las que se añadirían las que compartía con sus hijos por herencia de su segunda esposa: una alquería en la Partida de la Plana, de la que declaraba desconocer su valor, una finca en la Partida de la Marrada, valorada como *de escasísimo valor* y una marjal en la Partida de Patos, valorada en 1.000 pesetas, todas ellas en Castellón. En total, las fincas rústicas estarían valoradas por encima de las 131.281 pesetas.

El patrimonio total, pues, estaría valorado por encima de las 143.194 pesetas. Un patrimonio, pues, apetecible para las autoridades franquistas, deseosas de recaudar dinero con la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.

A este patrimonio habría que añadir la valoración de las deudas declaradas por Fernando Gasset Lacasaña. A las más de 300.000 pesetas que éste declaró haber perdido por distintas extorsiones de las fuerzas republicanas habría que añadir sus deudas en cuanto a pago de contribuciones atrasadas a las autoridades franquistas, que se comprometió a pagar en cuanto pudiera, y al pago de conceptos menores como fertilizantes para sus tierras, agua para riego y consumo, médicos, medicinas, etc. que él mismo acabó declarando. Finalmente Fernando Gasset Lacasaña resumió su situación familiar con estas palabras:

Cumpliendo el final de la prevención tercera manifiesto que soy viudo, que no tengo ningún hijo menor de edad, ni incapacitado y que no tengo bienes de terceros en mi poder; aunque sí muchos hijos y algunos necesitados de protección y ayuda.

Su situación de acorralamiento y desesperación se refleja en sus últimas palabras en esta declaración jurada de bienes: *VIVA FRANCO* *VIVA ESPAÑA*

Una vez presentada la declaración jurada de bienes se le enseñó a Fernando Gasset Lacasaña el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón en el que el Juez Instructor Provincial anunciaba la incoación de su expediente por responsabilidades políticas y se estableció la obligación de prestar declaración a todas aquellas personas que pudieran aportar información sobre el procesado tanto de antes como de después de la guerra⁶⁶. Al ser un personaje público de gran trascendencia en Castellón y durante tantos años esto alarmó mucho a Fernando Gasset Lacasaña, que al parecer ya había sufrido los efectos de acusaciones que él consideraba falsas por denunciantes secretos en el consejo de guerra al que fue sometido en marzo de 1939. Por ello, sólo tardó dos días en presentar un nuevo y extenso escrito de defensa en el que volvió a resumir sus peripecias durante la guerra y, lo que era insólito, se le permitió presentar el testimonio de varios testigos a su favor, aunque como veremos posteriormente este escrito fue rechazado. En cualquier caso, lo que no hay duda es que Fernando Gasset Lacasaña tenía en su poder estos testimonios y los utilizó cuando pudo.⁶⁷

Su intención era convencer a las autoridades de su desengaño con el régimen republicano y su aceptación de la propuesta franquista, lo que en caso de quedar plenamente demostrado significaría su absolución por responsabilidades políticas. En este sentido, su situación en diciembre de 1939 se debería, según sus propias palabras a una desgraciada fatalidad:

⁶⁶ El anuncio de la incoación de expediente de responsabilidades políticas contra Fernando Gasset Lacasaña se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 143 de 5 de diciembre de 1939 y en el Boletín Oficial del Estado nº 36 de 27 de diciembre de 1939.

⁶⁷ Él mismo explica en su escrito que no pudo utilizar estos testimonios en su defensa durante el consejo de guerra celebrado el 15 de marzo de 1939 porque la guerra todavía no había finalizado y sin duda esto hubiera podido acarrearles graves problemas a los testigos: *A más de que no hubieran podido venir, sólo indicar sus nombres podía ser una sentencia de muerte contra ellos, pues cualquier espía que se hubiera enterado podía haber motivado un proceso de horribles consecuencias.* Expresamente Fernando Gasset Lacasaña explicó que prefirió caballeramente exponerse a una condena más alta que poner en peligro a estos testigos. A principios de diciembre de 1939 la situación era diferente y el testimonio de estos testigos ya no representaban, en principio, ninguna complicación para ellos.

Estoy condenado, por una fatalidad y me considero no solo inocente, sino digno de estima por la España Nacional, y a pesar de ello no he exhalado una sola queja ni he proferido un juicio desfavorable contra nadie, lo cual no debe ser óbice para que yo aspire a reivindicar mi honor, esperando para hacerlo que se dicten disposiciones que regulen los recursos de revisión.

En cierta forma, se trataba de demostrar lo que no había podido demostrar durante el consejo de guerra sumarísimo al que había sido sometido. Conocemos las características de estos consejos de guerra sumarísimos, alejados completamente de lo que podría considerarse un juicio justo y con garantías, por lo que es bastante probable que Fernando Gasset Lacasaña se sintiera frustrado ante su propio tribunal. De hecho, a ello hace referencia en este nuevo escrito del 7 de diciembre de 1939. Además de denunciar imputaciones falsas realizadas en secreto, especifica dos irregularidades que el denomina “deficiencias”. La primera fue que sólo se tuvo en cuenta parcialmente las pruebas que él mismo aportó al consejo de guerra, que consistieron en dos escritos, todos ellos pertinentes en su opinión, presentados a principios de noviembre de 1938 que incluían una larga lista de testigos que podían testificar a su favor. Parece que sólo se tuvieron en cuenta y de manera testimonial algunos de sus argumentos. La segunda deficiencia fue su imposibilidad práctica de defensa, ya que por culpa de que la guerra todavía no había acabado no pudo presentar testigos sobre su comportamiento durante la misma, ya que todos residían en Madrid o Valencia. En definitiva, todo se reduce a la imposibilidad de una adecuada defensa, con lo que su consejo de guerra, como el de todos los procesados, careció garantías.

El objetivo principal de este nuevo escrito fue presentar la prueba que según el inculcado *estimo pertinente en justificación de mi conducta política y social antes y después del Movimiento iniciado el 18 de julio de 1936*. Para ello, como hemos indicado, se permitió presentar las declaraciones ya hechas de ni más ni menos que 22 testigos, algunos de cierta relevancia. Él mismo diseñó las preguntas, en función de su propia experiencia personal con ellos, y transcribió las respuestas, todas ellas convenientemente firmadas por los testigos, con el objetivo, decía, de *aligerar el trabajo*. Además, declaró que ninguno era pariente suyo, ni amigo íntimo y que todos conocían las disposiciones generales de la Ley de Responsabilidades Políticas.⁶⁸

⁶⁸ Este escrito se puede consultar íntegramente en el Apéndice Documental.

El primer testimonio presentado fue el de Eduardo Martínez Sabater, Decano del Colegio de Abogados de Valencia y ex vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, en representación de los Colegios de Abogados quien confirmó que la actuación del inculcado al frente del citado organismo fue apolítica y relató un rocambolesco episodio de felicitación y consideraciones mutuas del exiliado Alfonso XIII y Fernando Gasset. El Conde de Romanones, ex presidente del Consejo de Ministros y de las Cortes describió al inculcado como un republicano de larga trayectoria política *siempre de carácter templado y conservador, sin tomar parte en alborotos ni pronunciar frases malsonantes, no haciéndose merecedor de castigos ni advertencias*, por lo que declaró no tener ningún problema en avalarlo cuando entró en la España franquista⁶⁹.

La Marquesa de Dos Aguas declaró haber estado escondida durante 1937 y 1938 en el mismo edificio de Valencia⁷⁰, por estar ambos perseguidos, y en sus conversaciones diarias el inculcado siempre les informaba de las noticias de Radio Nacional de España. El militar Luis Soler y su esposa María López, vecinos de Valencia, también se encontraban perseguidos y escondidos en el mismo piso de Valencia, confirmando que el inculcado sintonizaba también Radio Salamanca y con sus informaciones animaba a los presentes *siendo entusiasta del Generalísimo Franco*. Al mismo edificio también acudían de visita Luis García, ingeniero jefe de minas jubilado y su hija Filomena García, dueña de un gabinete fotográfico, declarando que el inculcado *era un perfecto Nacional deseoso del triunfo del Caudillo Franco*.

Julián Benedito Vidó, ayudante de Obras Públicas jubilado, y su esposa Ramona Fabregat, maestra nacional, vivían en Castellón y declararon que Fernando Gasset Lacasaña siempre fue republicano *pero conservador en ideas y carácter, habiendo sido respetuoso para con todos, sin herir ningún sentimiento ni causar daño a personas ni cosas, estimándose como una garantía para la ciudad*. Declararon haber convivido con él tanto en Madrid como en Valencia sin haber cambiado su modo de ser, aunque

⁶⁹ Ya hemos visto cómo en realidad el Conde de Romanones y Fernando Gasset Lacasaña tenían una antigua relación basada en los negocios.

⁷⁰ Concretamente en la calle Samaniego número 7 de Valencia. Su propietario era Joaquín Vicente.

confirmando su retirada de la política como lo demostraba su dimisión de la presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, que se produjo, según estos testigos, para evitar cualquier contacto con el Frente Popular.

El funcionario jubilado de Gobernación Félix Peiró y ex secretario del Gobierno Civil de Castellón, su esposa Angelina y su hija Virgilia Peiró, vecinos de Madrid, consideraban al inculcado *el perfecto caballero, respetuoso con todas las ideas, personas y cosas, sin dañar a nadie ni dar motivo a las Autoridades para ningún castigo*, confirmando su alejamiento de la política y su adhesión a Franco. Carlos Ochoa, dueño del Hotel Asturias, el conserje del mismo Fernando Llano y el funcionario de Hacienda José Latre, declararon conocer bien al inculcado por sus largas estancias en el citado hotel, *estando convencidos de que fue republicano de buena fe, incapaz de molestar ni perjudicar a nadie, respetando todas las ideas y sentimientos, así como las personas y las cosas, sin promover ningún disturbio ni tener ningún punto de contacto con el Frente Popular*. Confirmaron también que fue detenido durante la guerra por las fuerzas republicanas, acabando en prisión atenuada en el hotel y teniendo que pagar él mismo la pensión del agente asignado para su vigilancia. Además, escuchó cuando pudo Radio Nacional y preguntó siempre con gran interés a las personas que le podían informar sobre el bando franquista.

El médico y ex inspector de Sanidad de Castellón José Clara Piñol, el abogado Ramón Roig Morelló y los comerciantes Severino Ramos Nebot y Salvador Masip Pellicer le calificaron como *persona de orden* y confirmaron su alejamiento de la política a partir de su presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales. El sacerdote Jaime Sagols Sales, Capellán del Hospital Provincial describió su conducta con estas palabras: *se ha comportado correctamente en todos los aspectos religiosos, moral y social, sin haber merecido ninguna corrección ni haberse ocupado para nada de política, mereciendo por ello su aprobación y estimación por lo que ha hecho en el tiempo citado [del 23 de junio al 24 de noviembre de 1938], y por lo que ha podido hacer antes, cree que ha estado al lado del Generalísimo Franco y no de los rojos*.

Finalmente la Marquesa de San Miguel y la Condesa de Sierra Clara declararon haber llegado a tratar al inculcado como amigo, calificándole como republicano *de carácter sosegado y conservador*, ratificando de nuevo su alejamiento último de la

política. La Marquesa de San Miguel parece que le invitó a trasladarse a una villa suya a Biarritz, a lo que el inculcado se negó *por temor a castigos por no haber cumplido sus obligaciones*.

Tras esta larga exposición de testimonios que demostraban claramente el carácter conservador y pacífico del inculcado, Fernando Gasset finalizó su escrito suplicando al Juez Instructor Provincial que los tuviera esta vez en cuenta, no sin antes escribir una frase contundente que nos informa del sentimiento de rabia que en aquel momento acumulaba como procesado de nuevo:

Y aquí acabo por no molestar más al Juzgado, pues si hubiera de decir cuanto pienso y siento no concluiría jamás.

El mismo día que Fernando Gasset Lacasaña presentaba este peculiar escrito de defensa llegó a manos del Juez Civil Especial un informe de la Delegación de Hacienda de Castellón en las que se relacionaban las fincas que figuraban inscritas en la lista cobratoria de edificios y solares del término municipal de Castellón a nombre del inculcado, indicando su superficie en metros cuadrados.⁷¹

Todos los esfuerzos de Fernando Gasset Lacasaña por ejercer dignamente su derecho a la defensa fracasaron. El escrito presentado por iniciativa del mismo para su defensa no fue admitido a trámite por el Juzgado de Instrucción Provincial de Castellón, ya que declaró no justificada la presentación del escrito porque los expedientes iniciados como consecuencia de testimonio de sentencia de la jurisdicción militar no admitían más diligencias que las establecidas por la Ley de Responsabilidades Políticas. Aún así

⁷¹ Esta relación era la siguiente:

1. Calle Calvo Sotelo nº2, 443 m².
2. Calle Alloza, nº 8, 140 m².
3. Calle José Antonio, nº 6, 528 m².
4. Calle Pérez Galdós, nº 16, 512 m².
5. Calle Isidro Vilarroig, nº 30 y 32, 256 m².
6. Calle Isabel Ferrer nº 57, 74 m².
7. Calle Gobernador, nº 101, 120 m².
8. Calle Buenavista (Grao) nº 15, 195 m².
9. Calle Canalejas (Grao) nº 36, 78 m².
10. Calle Partida Patos s/n, 131 m².
11. Partida Bovalar (Pla Moro) s/n, 775 m².
12. Partida Bovalar (Pla Moro) s/n, 156 m².
13. María Breva, nº 23, 69 m².

su escrito quedó adjuntado a su expediente de responsabilidades políticas por la información valiosa que contenía, aunque no fue tenido en cuenta.

Lo que sí tenía cabida en su expediente fueron los informes de las autoridades locales sobre el inculpado, que fueron realizados entre el 30 de noviembre y el 16 de diciembre de 1939, llegando en su totalidad a manos del Juez Instructor Provincial el 19 de diciembre de 1939. Lo que más llama la atención de los cuatro informes de las autoridades locales fue la gran discordancia que presentan en la valoración de los bienes de Fernando Gasset Lacasaña respecto a la declaración jurada que éste presentó el 5 de diciembre, además de algunas observaciones sobre su actitud.

El informe del alcalde de Castellón, Vicente Traver Tomás, fue exclusivamente económico, limitándose a enumerar las fincas urbanas (13) y las rústicas (4) pertenecientes al inculpado. Hemos de recordar que su opinión sobre la conducta y el perfil político de Fernando Gasset Lacasaña ya la había expresado en un escrito al inicio de su procesamiento. Del informe del Comandante del Puesto de la Guardia Civil, también centrado únicamente en aspectos económicos, destaca de forma especial la valoración de las 4 fincas rústicas y las 6 fincas urbanas que le atribuyó, que se situó en 1.105.000 pesetas aproximadamente. El informe del Delegado Provincial de FET y de las JONS de Castellón, A. Asensi, valoró ocho fincas atribuibles al inculpado en 1.085.000 pesetas, además de añadir que poseía dinero en los Bancos de España y en el Banco de Castellón. Los mismos términos fueron confirmados por el Comisario Jefe del Servicio Nacional de Seguridad, quien añadió que *sabiéndose que tiene otras fincas que de momento no ha sido posible concretar y que trata el interesado de ocultar a la Justicia, poniéndolas a nombre de sus familiares.*

A finales de diciembre de 1939 llegó también a la secretaría del Juzgado de Instrucción Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón un informe de la sucursal del Banco de España en el que se aseguraba que en la cuenta corriente a nombre de Fernando Gasset Lacasaña había depositada la cantidad de 1,24 pesetas, debiendo al mismo banco por un crédito 100.000 pesetas.

Practicadas todas las diligencias exigidas por la Ley de Responsabilidades Políticas, el 5 de enero de 1940 se procedió a la realización del correspondiente resumen

metódico. En él el Juez Instructor Provincial calificó los escritos de Fernando Gasset Lacasaña de extensos, embrollados y confusos, y acabó considerando los hechos inmersos en el apartado a) del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas⁷². Tres días más tarde este resumen metódico fue recibido por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia y a partir del 12 de enero, una vez notificado el resumen metódico al inculpado⁷³, se le concedió un plazo de tres días para presentar un escrito de defensa.

El siguiente paso dado por Fernando Gasset Lacasaña fue entregar a seis abogados la capacidad para representarle en todos sus asuntos legales, especialmente los relativos a la exigencia de responsabilidades políticas. Los abogados designados fueron José María Adell Tirado y Luis Serrano Marí de Castellón, Antonio Lledó Sánchez y Manuel Rodríguez Martínez de Valencia y Ambrosio Bordehore Ferrando y Vicente Ruiz Valarino de Madrid. Hay que tener en cuenta que el inculpado estaba cercano a cumplir 79 años, con una importante miopía que casi le impedía la visión y en prisión preventiva en el domicilio de una de sus hijas, por lo que esta medida era bastante lógica. Vuelve aquí a contrastar el caso de Fernando Gasset Lacasaña con la inmensa mayoría de los procesados por responsabilidades políticas, que no pudieron de ninguna forma pagar los servicios de un abogado que defendiera sus intereses.

El 18 de enero de 1940 el abogado de Valencia Antonio Lledó Sánchez entregó al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia un extensísimo escrito de defensa que constituía la versión completa del testimonio de Fernando Gasset Lacasaña en relación a todos los aspectos que afectaban a su procesamiento por responsabilidades políticas: desde su historial político desde los años 1920 hasta su situación actual, pasando por la relación valorada definitiva de sus bienes, algunas

⁷² Dicho apartado es el siguiente: *Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma, o por los de traición, en virtud de la causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional.*

En este resumen metódico el Juez Instructor Provincial detectó un error que posteriormente fue utilizado en un escrito de defensa por el abogado de Fernando Gasset Lacasaña, ya que a un solar se le asigna por el Comandante de la Guardia Civil y el Delegado Provincial de FET y de las JONS en 400.000 pesetas y no en 4.000 pesetas que seguramente sería su valor.

⁷³ La forma de comunicar el resumen metódico fue mediante un alguacil que visitó el domicilio de su hija en el que estaba recluido.

objeciones a la Ley de Responsabilidades Políticas y una súplica al Tribunal Regional⁷⁴. La justificación de la presentación de ese escrito se explicó con estas líneas:

[...] Es evidente que la estrechez del Juicio sumarísimo no permitió razones ni pruebas sobre hechos que son la clave de la sentencia y que es necesario que el Tribunal conozca hoy para calibrar con justicia la responsabilidad de mi mandante.

La defensa comenzó presentando políticamente a Fernando Gasset Lacasaña, definiéndolo como un republicano de siempre, aunque se destacó que nunca tuvo contacto ni con el Frente Popular ni con los extremismos. Su evolución le llevó al Partido Radical, y *dentro de él a su derecha*, siendo siempre *una garantía de orden*. Se resaltó de forma especial su nombramiento como Hijo Adoptivo de Castellón, título que se dijo fue promovido *por los elementos más derechistas de la capital*. Finalmente se aseguró que su última elección como diputado en 1931 fue forzada *por sus antiguos amigos* y que en Castellón no hubo quema de conventos e iglesias gracias a su intervención. De esta forma, se ofreció la versión más moderada de la evolución del inculpado, esperando benevolencia por parte de las autoridades del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia.

De hecho, en el relato de su evolución política se hicieron continuas referencias a los diputados de derechas y de centro como posibles testigos que podían demostrar la moderación de Fernando Gasset Lacasaña y, como exigía su cargo de presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, su alejamiento de la política. Es curioso cómo se apuntó expresamente como mérito el haber votado a favor de la condena del President de la Generalitat, Lluís Companys, en mayo de 1935, lo que reforzaría su perfil de nacionalista español o, en palabras propias, de patriota.

Inequívocamente presentó su dimisión como presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales como un acto de desafección al gobierno republicano, recordando que, junto a él, dimitieron todos los vocales de orientación conservadora. En cierta forma, elevó una queja porque el consejo de guerra al que fue sometido el 15 de marzo de 1939 no tuvo claro si esta dimisión fue a favor o en contra de dicho gobierno,

⁷⁴ Este extenso documento puede consultarse íntegramente en el Apéndice Documental.

a pesar también de todas las persecuciones de las que fue objeto durante la guerra. Es útil en este sentido recurrir a las palabras de su abogado defensor:

[...] Si substituyó al Sr. Albornoz que se declaró incompatible con el Gobierno que actuó contra la sublevación de Asturias, fue por que no participaba de igual opinión. Si actuó en la Presidencia del Tribunal que juzgó la Generalidad de Cataluña, es porque estimó justo el proceso. Si renunció al cargo bien retribuido que ostentaba sin ninguna necesidad de hacerlo y con el peligro de ser después perseguido, bien claro está que fue por no hacerse solidario con el Gobierno de la República. Y si se le admitió la renuncia como a los de derecha, es indudable que como de derecha se le considera y por consiguiente no cabe la duda respecto a la significación de la renuncia. Y si la renuncia fue como la señal de las persecuciones que después sufrió, no cabe ni presumir que ella fuera motivo de agravio para los Nacionales y de éstas persecuciones nos ocuparemos en el siguiente hecho.

Posteriormente se relataron todos los acontecimientos relativos a la persecución y acoso de las que fueron objeto tanto Fernando Gasset Lacasaña como su familia, que ya conocemos, como prueba de su distanciamiento definitivo con la República. De hecho, seguramente la radicalización del régimen republicano como consecuencia de la guerra le pudo llevar a pensar que la República, al menos la del periodo bélico, no era por la que él había luchado toda su vida política y, en ese contexto, pudo haber llegado a la conclusión que la solución era el triunfo de los golpistas.

No dejó pasar la oportunidad el abogado representante de Fernando Gasset Lacasaña de criticar el procedimiento del consejo de guerra sumarísimo al que fue sometido, cuya sentencia fue el motivo de la apertura de su expediente de responsabilidades políticas. Concretamente se quejó de que no se permitió una adecuada defensa a su defendido, que no se utilizaron las pruebas que previamente habían sido aceptadas como pertinentes y que el contexto en el que se celebró, de excitación por el inminente final de la guerra, fue el caldo de cultivo ideal para las mentiras, las venganzas y las desconfianzas frente a su defendido, que, por haber sido un gran mandatario en Castellón durante muchos años, pudo haber generado actitudes hostiles en aquellos días.

Pasó el abogado a analizar las responsabilidades políticas de su defendido. Pese a declarar que había sido toda su vida republicano destacó su actitud moderada y su pertenencia al Partido Radical, partido que no entraba en los supuestos de la Ley de

Responsabilidades Políticas, que fue exculpado expresamente por la disposición general de 27 de junio de 1939 y que muchos de sus dirigentes ocupaban en ese momento destacados cargos en la administración y el gobierno franquista, constituyendo una contradicción enorme la persecución que se estaba llevando a cabo en ese momento contra Fernando Gasset Lacasaña. La conclusión era, pues, que políticamente no se le podía considerar responsable.

De esta forma, había que entrar en consideraciones sobre su actuación personal. Respecto a su conducta privada, se destacó su brillante carrera académica y política. En cuanto a su conducta religiosa se aseguró que *cumplió siempre con todas las prácticas cristianas*, celebrando sus dos matrimonios por el rito católico, bautizando a sus nueve hijos, que también casaron por el rito católico, y enterrando a sus tres hijos fallecidos en cementerio católico. Se adjuntaron todo tipo de certificados, entre ellos el justificante de la adquisición de un nicho en el cementerio católico de Castellón para él y su esposa, el de la Madre Superiora de las Siervas de Jesús ratificando su moralidad cristiana y el del capellán del Hospital Provincial de Castellón asegurando su sincera catolicidad y su asistencia puntual a los oficios religiosos.

De su conducta patriota se destacó su clásica oposición a los regionalismos, su procesamiento contra el presidente de la Generalitat de Catalunya y el resto de sus consejeros por los sucesos de octubre de 1934 y, por supuesto, su dimisión como presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, presentada como una clara incompatibilidad con el gobierno republicano, con importantes consecuencias para su seguridad y la de su familia:

Llegó a Madrid reuniendo inmediatamente a los pocos Vocales del Tribunal que allí había y en dicha sesión se acordó la presentación de la dimisión colectiva, por sentirse incompatible con el Gobierno revolucionario, a pesar de que esta actitud era bien peligrosa. [...] Téngase presente que el Sr. Gasset no necesitaba renunciar al cargo, pues estaba elegido por diez años y no podía ser separado de él ni aun por las Cortes, pero sintiéndose incompatible con el Gobierno rojo, afrontando todos los peligros que tal renuncia le creaban, sin dudarlo, renunció a un cargo bien retribuido (sic) y que le daba una seguridad personal plena por el fuero especial de que gozaba y por la ayuda que hubiera supuesto para los rojos la permanencia en dicho cargo.

También se presentó como un acto de patriotismo su huida de la zona republicana y su rápida vuelta a la franquista:

Y seguidamente, sin dudarlo, ni entretenerse – como han hecho otros que ahora pasan como valerosos patriotas – corrió a incorporarse a la España Nacional, cuando la suerte de la guerra no estaba aún decidida, pero creyendo que así cumplía su deber de patriota. Antes, visitó a los representantes del Generalísimo que se mostraron conformes con su entrada en España. Era su propósito ir desde Fuenterrabía a Burgos para presentarse al Gobierno Nacional.

La conclusión era muy clara y se resume en la frase final de este apartado:
¿Dónde puede caber duda sobre el patriotismo de Fernando Gasset?

El siguiente paso fue comentar el patrimonio económico de Fernando Gasset Lacasaña. En primer lugar se criticaron ferozmente los datos ofrecidos por las autoridades locales de Castellón que eran, en palabras del abogado defensor, *equivocados* y sus valoraciones económicas fueron calificadas de *caprichosas*⁷⁵, llegando a la conclusión que *estos informes no nos aclaran nada*. Sirva de ejemplo el siguiente párrafo de la defensa para echar por tierra estos informes:

El propio Juez Provincial al informar dice: “Que según la Alcaldía Gasset es propietario de 4 fincas rústicas y 13 urbanas, según FET y Comisaría es propietario de una finca rústica con casa de campo valorada en 150.000 pesetas y cinco urbanas cuyo valor es de 680.000 pesetas. Ambas autoridades manifiestan que el inculcado posee así mismo un solar pero discrepan de su valoración, creyendo ser la más veraz la que la fija en 4.000 pesetas. Según la Guardia Civil es propietario de 4 fincas rústicas no valoradas y 4 urbanas, cuyo valor es de 1.050.000 pesetas. Manifiestan dichas autoridades que posee otras fincas de valor ignorado y cuentas corrientes en Banco de España, Exterior y Castellón.

Irónicamente, frente a esta maraña de datos sin sentido, se defendieron los datos ofrecidos inicialmente por Fernando Gasset Lacasaña, a pesar de que fueron calificados por el Juez Instructor Provincial de *confusos y embrollados*, por lo que se procedió a realizar de nuevo una relación de bienes todavía más ampliada y ordenada que la anterior, ratificándose plenamente en los datos anteriormente aportados y comentados⁷⁶.

⁷⁵ ¿Cuántas valoraciones económicas de tantas otras personas fueron *caprichosas*? ¿Cuántas personas que no pudieron permitirse un abogado se quedaron con las ganas de denunciar este hecho? ¿Cuántas sentencias se dictaron teniendo en cuenta datos económicos irreales, pensados muchas veces más en el futuro castigo que en la realización de justicia?

⁷⁶ El capítulo que sufría cambios era el de las deudas, profusamente especificadas como se puede comprobar en el Apéndice Documental. El capítulo de deudas bancarias se debían a los créditos que él y

Posteriormente se realizaron algunas objeciones legales teniendo como marco general la Ley de Responsabilidades Políticas. En primer lugar se estableció que una futura sanción económica debía afectar únicamente al declarado como responsable y a sus bienes, y no a sus familiares, lo que constituía una quimera como hemos comprobado en multitud de casos en la provincia de Castellón en los que los realmente perjudicados fueron los familiares de los inculpados. En segundo lugar, se calificó el caso de Fernando Gasset Lacasaña de *especialísimo*, destacando los *servicios extraordinarios prestados al Movimiento Nacional* como consecuencia de su dimisión como presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales y su disposición frustrada de colaborar con las autoridades franquistas. Todo ello debería suponer su exención de exigencia de responsabilidades políticas o, como mínimo, una importante circunstancia atenuante. En tercer lugar, se apeló a la correspondencia que marcaba la Ley entre sentencia y situación económica del inculpado, que se califica de precaria. En cuarto lugar, se recordó la posibilidad de pagar a plazos una hipotética sanción económica. En quinto y último lugar, se advirtió que, en contra del teórico espíritu de la Ley, no se habían tenido en absoluto en cuenta las pruebas presentadas por el procesado.

Finalmente, el escrito de defensa finalizó suplicando al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas la aceptación del escrito como prueba y la absolución de Fernando Gasset Lacasaña.

Este escrito de defensa no sentó bien en el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. Por escrito del 19 de enero de 1940, las pruebas que se proponían en él fueron rechazadas *por prevalecer la resolución del fuero castrense*, lo que significaba no admitir la injusticia y los fallos procesales propios del consejo de guerra celebrado el 15 de marzo de 1939. No podía ser de otra manera, ya que de lo contrario se hubiera tenido que proceder a la revisión del caso desde el principio, y no sólo el de Fernando Gasset Lacasaña, sino los miles de consejos de guerra que ya se habían producido. Además, se llamó la atención a los abogados que redactaron el escrito por verter *conceptos poco respetuosos para el Tribunal de Guerra*

sus familiares tuvieron que pedir para hacer frente a las exigencias de pago de dinero de las autoridades republicanas.

que sancionó al encartado, advirtiéndoles que se atengan en el ejercicio de su misión a los preceptos legales y moderen sus expresiones con respecto a aquellas resoluciones que tienen carácter de firmes. Al final del escrito se recuerda expresamente la obligación de advertir a estos abogados para que moderen en lo sucesivo sus expresiones en los escritos procesales.

Sin embargo, no todo fue en vano. Ante la evidente desconexión de los datos ofrecidos por las autoridades locales sí se concedió la designación de *dos peritos Ingenieros Agrónomos y dos Arquitectos o prácticos en su defecto para que practiquen la valoración de los bienes rústicos y urbanos respectivamente atribuidos a Don Fernando Gasset Lacasaña*. Al día siguiente esta resolución le fue notificada al abogado de Valencia Antonio Lledó Sánchez.

La actitud combativa de Fernando Gasset Lacasaña era muy sólida, llegando a exasperar como hemos visto a unas autoridades judiciales que no estaban acostumbradas a tanta resistencia legal, fruto sin duda de los contactos del inculpado y su preparación y bagaje personal. El 21 de enero de 1940, sólo dos días después de la advertencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia a sus abogados y la concesión de la valoración patrimonial por parte de dos peritos, Fernando Gasset Lacasaña volvió a presentar un escrito en el que se atrevió a sugerir que la designación de los peritos que debían valorar su patrimonio debía hacerse *con intervención de las partes interesadas*, por lo que pidió, citando profusamente los principios establecidos en los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estar presente en todo momento en la valoración de sus bienes.

Dos días más tarde, el 23 de enero de 1940, el nuevo Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón, Víctor Núñez Escalona, le respondió desestimando su petición. Ese mismo día fueron nombrados los peritos encargados de la valoración de los bienes de Fernando Gasset Lacasaña. Para la tasación de las fincas rústicas se nombró a los ingenieros agrónomos Antonio Rueda Munis y Julio Bravo Gil. Para la tasación de las fincas urbanas se nombró a los arquitectos Luis Ros de Ursinos y Polo de Bernabé y a Francisco Maristany Cajajuana. Las fincas rústicas y urbanas que tuvieron que tasar fueron las declaradas como propias por el inculpado y las que declaró

que pertenecían a sus hijas y de las que él gozaba de usufructo por viudez, que eran las siguientes:

Fincas rústicas

Finca-masía situada en partida de Benadresa.
Una alquería con sus tierras en partida de la Plana.
Un terreno algarrobal, partida de la Marrada.
Un terreno marjal en partida de los Patos.
Y todas cuantas se atribuyan al inculpado.

Fincas urbanas

Finca urbana en la calle José Antonio nº 6.
Calvo Sotelo, nº 2.
Alloza nº 8.
Buenavista nº 15 (Grao)
Canalejas nº 36.
Isabel Ferrer nº 57.
Pérez Galdós nº 16.
Gobernador nº 101.
Sidro Vilarroig nº 30 y 32.
María Breva nº 21.
Un almacén en la calle de san Vicente.

Los citados peritos procedieron rápidamente a la inspección y valoración de los bienes. La valoración de las fincas urbanas fue redactada el 31 de enero de 1940 y presentada al Juez Instructor Provincial el 4 de febrero. Destacamos que los peritos dieron en parte la razón a Fernando Gasset Lacasaña y le desvincularon de algunas de las casas que, por herencia, pertenecían a sus hijas y nieta. Además, el contraste en la distinta valoración realizada por el inculpado y los peritos nos demuestra la intención del mismo de infravalorar sus bienes con la intención de obtener una sentencia más favorable. A continuación ofrecemos una comparativa entre la valoración económica en pesetas realizada por Fernando Gasset Lacasaña y la de los peritos:

Tabla 10.1

FINCAS URBANAS

Finca urbana	Valoración F. Gasset	Valoración Peritos
José Antonio nº 6	6.000	140.280
Calvo Sotelo nº 2	3.600	144.300
Alloza nº 8	-	26.880
Buenavista nº 15 (Grao)	366	26.070 ⁷⁷
Canalejas nº 36	354	14.500 ⁷⁸
Isabel Ferrer nº 57	250	8.650
Pérez Galdós nº 16	675	49.500
Gobernador nº 101	540	22.860 ⁷⁹
Sidro Vilarroig nº 30-32	168	4.608 ⁸⁰
María Breva nº 21	-	- ⁸¹
Almacén c/ San Vicente	-	- ⁸²

Fuente: AHPCS. Expediente de Responsibilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña.

La valoración de las propiedades que Fernando Gasset tenía en el Balneario Fuente En Segures de Benasal no fue confiada a los peritos, sino al Delegado Provincial

⁷⁷ Los peritos hicieron constar que esta casa pertenecía plenamente a Blanca Rodríguez Gasset.

⁷⁸ Los peritos hicieron constar lo mismo que en el caso anterior.

⁷⁹ Los peritos hicieron constar que esta casa era en realidad propiedad de Elisa Gasset Bellver, María Gasset Bellver y Blanca Rodríguez Gasset, hijas y nieta respectivamente de Fernando Gasset Lacasaña.

⁸⁰ Los peritos hicieron constar lo mismo que en el anterior caso.

⁸¹ Los peritos confirmaron que esta casa había sido vendida hacía más de dos años a varios propietarios, siendo en ese momento propiedad de Vicente Roig Soler.

⁸² Los peritos no valoraron en ningún momento esta presunta propiedad.

de FET y de las JONS, quien, en un informe fechado el 14 de diciembre de 1939 las valoró de la siguiente forma:⁸³

Gran Hotel Fuente En Segures..... 83.789 pesetas.
 Chalet “Gurugú”..... 17.118 pesetas.
 Chalet “La primitiva”(derribado)..... 7.544 pesetas.
 Chalet “Pabellones”..... 38.666 pesetas.
 Fincas rústicas..... 1.073,60 pesetas.

La valoración de las fincas rústicas tardó un poco más, ya que fue redactada el 8 de marzo de 1940, tras un requerimiento por parte del Juez Instructor Provincial para acelerar su presentación. El motivo de la tardanza fue seguramente su complejidad y la minuciosidad con la que los peritos encargados realizaron sus informes, que tenían que valorar no sólo el valor del suelo, sino también de las casas, maquinaria, aguas, etc. A continuación ofrecemos de nuevo la comparativa entre las valoraciones en pesetas realizadas por Fernando Gasset Lacasaña y los peritos:

Tabla 10.2.

FINCAS RÚSTICAS

Finca	Valoración F. Gasset	Valoración Peritos
Partida Benadresa	120.000	179.875
Partida de la Plana	- ⁸⁴	53.752
Partida de la Marrada	“escasísimo valor”	1.875 ⁸⁵
Partida de Patos	1.000	600 ⁸⁶
Finca “Puchol”	10.000	18.750

⁸³ El Delegado Provincial de FET y de las JONS informó que Fernando Gasset Lacasaña tenía una parte de la Compañía propietaria de estos bienes, compuesta por un total de ocho socios, y que eran sus hijos los que figuraban como propietarios.

⁸⁴ Fernando Gasset Lacasaña declaró desconocer el valor de esta finca.

⁸⁵ En esta finca los peritos se encontraron con Fernando Gasset Bellver, hijo de Fernando Gasset Lacasaña, quien explicó que esa finca era plenamente de su propiedad, heredada de su difunta madre Amparo Bellver Martí. Obviamente el hijo de Fernando Gasset estaba esperando a los peritos para ofrecer su versión sobre la propiedad de la finca.

⁸⁶ Al evaluar esta finca los peritos se encontraron con que Rafael Fabra Compte se les presentó como el administrador de la finca, especificándoles que dicha finca no era de Fernando Gasset Lacasaña sino de sus hijas, por herencia de su madre. Sin duda, esta persona fue enviada por Fernando Gasset Lacasaña para insistir en su tesis que esas fincas no eran suyas y no debían ser valoradas como tales a efectos de la valoración de su patrimonio para establecer una sanción económica por responsabilidades políticas.

Todo parecía conducir a una próxima sentencia por parte del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, pero el 15 de febrero de 1940 Lorenzo Villalonga, Jefe Provincial de FET y de las JONS de Castellón remitió al citado Tribunal un informe reservado⁸⁷ en el que se advertía de la relevancia de la figura política de Fernando Gasset Lacasaña y del *gran malestar entre todas las personas decentes como consecuencia del poco castigo que ha recibido*. En este escrito se recordó que como presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales llegó a condenar el golpe de Estado que provocó la guerra civil. Además, aseguró *que en lo que respecta a esta Provincia ha sido el mayor responsable del envenenamiento del país y sus gentes han participado durante el dominio rojo en toda clase de hechos delictivos [...]*. Advertía también sobre la impopularidad de cualquier sanción que se pudiera aplicar en Castellón si Fernando Gasset Lacasaña no sufría la máxima sanción:

La única esperanza – si bien con un gran escepticismo que yo procuro deshacer – que tiene la opinión sana, es que ahora el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condene a la máxima sanción económica, así como a la de destierro, pues agravía y rebela que este señor pueda seguir viviendo en esta región a la que tanto daño ha causado con su actuación, doctrinas y dinero y en la que en la actualidad no a desaparecido su “tinglado” político.

Por otro lado denunciaba los mecanismos que estaba empleando Fernando Gasset Lacasaña para alargar su procesamiento y los intentos que tanto él como sus familiares y allegados, especificando que algunos de ellos eran afiliados a Falange, estaban realizando para conseguir su absolución. A algunos de ellos incluso les acusa de falta de delicadeza y de no respetar las resoluciones del consejo de guerra al que fue sometido.

También aseguró que existía malestar por la imposibilidad de perseguir a los dirigentes del Partido Radical, a los que consideraba responsables de *los enormes estragos enunciados*, indicando que, aunque llegaron a desmarcarse de las facciones

⁸⁷ El citado escrito se puede consultar en el Apéndice Documental. También aparece citado en I. BADENES-GASSET (2003), op. cit., pp. 470-472.

Lorenzo Villalonga, abogado y militar, asumió el cargo de Delegado Provincial de FET y de las JONS al principio del mes de diciembre de 1939, sustituyendo a José Luis de Navasquies. Sin embargo, ocupó su cargo sólo hasta mediados de abril de 1940. Tras un periodo de interinidad, regido por José María Mira de Orduña, su relevo llegaría el 23 de septiembre de 1940, de la mano de Ricardo Suárez y López Altamirano. R. GODES, op. cit., pp. 52-53 y 65-68.

más extremas, eran tan responsables como los extremados, asegurando que si la provincia de Castellón se manifiesta *tan fría y escéptica respecto al Movimiento y a la justicia del Nuevo Estado* era en parte porque estos dirigentes se habían mantenido impunes.

Finalmente, comentaba el efecto que había causado ver que se beneficiaba por la Ley de Prescripciones de Penas Menores de doce años y un día a Fernando Gasset Lacasaña, por lo que seguramente los últimos meses de su vida pudo haber recuperado la libertad, al menos teóricamente, y siempre teniendo en cuenta las restricciones de la Ley de Responsabilidades Políticas.

Este escrito seguramente influyó en el ánimo del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, que le condenó a una cifra superior a las 100.000 pesetas. Es lo único que conocemos de esta sentencia, porque no figura en su expediente, y no por extravío durante todos estos años, ya que en un escrito de la Audiencia Provincial de Castellón de junio de 1945 ya se advierte que extrañamente esta sentencia no figuraba en el mismo. Lo que sí sabemos es que fue recurrida por Fernando Gasset Lacasaña y, por tanto, fue derivada al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas de Madrid.

La sentencia del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas se dictó el 21 de junio de 1940⁸⁸. En ella se admitieron todos los supuestos recogidos en la sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, con tres modificaciones. La primera era admitir que los bienes que correspondían en usufructo a Fernando Gasset Lacasaña eran menores de lo que se había establecido, con lo que de alguna manera se le daba la razón en su intento de desvincularse de las mismas. La segunda consistió reconocer el incremento de las deudas contraídas por el inculpado con los bancos, que ascendían a un total de 111.411 pesetas, reconocimiento que se hizo *atendiendo a la avanzada edad del mismo y a los solos efectos de fijar la sanción*. La tercera y última fue la aceptación que su dimisión como presidente del Tribunal de

⁸⁸ Los firmantes de la sentencia fueron el presidente Enrique Suñer, el vicepresidente General Guillermo Kirkpatrick, el vocal magistrado Juan de Hinojosa, el vocal falangista José María Mazón y el secretario José Anguita Sánchez.

El texto de esta sentencia se puede consultar en el Apéndice Documental.

Garantías podía suponer un propósito de no colaboración con el gobierno del Frente Popular. Por todo ello, se le condenó al pago de una sanción económica de 100.000 pesetas.

La sanción le fue notificada el 19 de julio de 1940, fecha a partir de la cual dispuso de un plazo de 20 días para satisfacer la sanción económica impuesta, ya que las sentencias del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas no se podían recurrir. Precisamente cuatro días más tarde le fue concedida la libertad provisional (se encontraba cumpliendo pena de prisión en el domicilio de una de sus hijas).

Lo único que le quedaba por hacer a Fernando Gasset Lacasaña era solicitar el pago fraccionado de la sanción económica impuesta. Lo hizo a través de un escrito presentado al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas el 5 de agosto de 1940, en el que justificó dicho pago por su precaria situación económica. Como garantía de pago se ofreció la hipoteca de una de sus fincas, aunque se solicitó el levantamiento del embargo de sus bienes como medio para obtener recursos que posibilitaran el pago establecido. La diferencia respecto a otras solicitudes de pago fraccionado de la sanción impuesta fue que se permitió el lujo de proponer los plazos, que se propuso que fueran de 12.500 pesetas semestrales a pagar a lo largo de cuatro años, lo cual sorprendentemente le fue concedido poco después, comprometiéndose también a realizar el primer pago durante los tres meses siguientes al día de la notificación del pago a plazos.

El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia le concedió el pago a plazos el 9 de agosto de 1940, estableciendo un pago inicial de 12.500 pesetas a partir de los siguientes tres meses de la notificación de la sentencia del Tribunal Nacional y, como había propuesto el mismo Fernando Gasset Lacasaña, y el pago de las restantes 87.500 pesetas en plazos semestrales de 12.500 pesetas a realizar en los cinco primeros días de julio de 1940 y en los cinco primeros días de enero y julio de 1941, 1942, 1943 y 1944. Además, se ordenó que en cuanto se formalizara la garantía hipotecaria suficiente en el Registro de la Propiedad, se procedería al levantamiento del embargo de los bienes.

El 26 de agosto de 1940 Fernando Gasset Lacasaña se personificó en la Secretaría del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia y satisfizo

el pago del primer plazo de su sanción, consistente en 12.500 pesetas, que fueron ingresadas en la “Cuenta Especial” de la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas en la Delegación de Hacienda de Valencia.

El 22 de octubre de 1940 Fernando Gasset Lacasaña formalizó ante el notario José María Casado Pallarés la garantía hipotecaria de su deuda. Para ello eligió su casa de la calle Calvo Sotelo, valorada por los peritos en 144.300 pesetas. El 30 de octubre el abogado Antonio Lledó Sánchez solicitó en su nombre al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas el levantamiento de los embargos de sus bienes, decisión que fue adoptada finalmente el 9 de noviembre de 1940, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado número 6 de 6 de enero de 1941.

Llegado el año 1941 Fernando Gasset Lacasaña realizó puntualmente el segundo pago de su sanción económica. Posteriormente pidió al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia que le fueran devueltos los documentos oficiales que había utilizado para su defensa y que no habían sido aceptados, lo que le fue concedido el 17 de febrero de 1941.⁸⁹

Paralelamente el 17 de enero de 1940 el Servicio Nacional de Recuperación Agrícola envió los datos relativos a las fincas de Fernando Gasset de Lacasaña al Juez Civil Especial, precisando que tenía unos ingresos de 1808,37 pesetas de rendimiento de sus fincas y unos gastos de 1372,50 pesetas, ofreciendo un saldo positivo de 255,64 pesetas, cantidad que estaba retenida por este organismo y que le fue devuelta por orden de 11 de febrero de 1941 tras haber satisfecho el segundo plazo de la sanción económica que le fue impuesta. Con esta devolución finalizó el trabajo del Juez Civil Especial que

⁸⁹ Estos documentos oficiales eran los siguientes:

Certificado del Banco Exterior de España de Castellón.

Certificado del Colegio de Arquitectos sobre tasación de daños producidos por incendio.

Testimonio a requerimiento de Don Alfonso Gil Matés, de primera copia de escritura de aprobación y protocolización de herencia.

Certificado del Banco de Castellón sobre posición de bienes de Fernando Gasset.

Certificado del Banco de Español de Crédito de Castellón, sobre bienes del mismo.

Certificado del Sindicato Agrícola “La Fertilizadora de Castellón”.

Certificado de la Administración de Propiedades de Castellón, sobre contribución urbana.

Certificado de la anterior sobre fincas inscritas a su nombre.

Certificado del Sindicato de Policía Rural de la Comunidad de Labradores de Castellón, referente a una finca inscrita a nombre de D^a. Amparo Bellver Martí.

se encargaba del estudio del patrimonio del Fernando Gasset Lacasaña por su procesamiento por responsabilidades políticas, hasta que la investigación quedó archivada el 30 de noviembre de 1955.

Todo parecía normalizarse o al menos parecía adquirir una lógica por la que regirse, cosa que en los cinco años anteriores no le había ocurrido a Fernando Gasset Lacasaña. Sin embargo, éste falleció el 14 de junio de 1941⁹⁰. Su fallecimiento coincidió con el tercer aniversario de la entrada en Castellón de las tropas franquistas. Tras la asistencia a las celebraciones organizadas por este motivo por las autoridades franquistas, un gran número de personas acompañaron a la familia en el entierro del que había sido uno de los grandes personajes políticos de la historia de Castellón.

A partir de ese momento sus herederos tuvieron que elegir entre afrontar las sanciones que la jurisdicción especial de responsabilidades políticas le había impuesto o renunciar a su herencia. Se abría, pues, una nueva etapa caracterizada por la lucha de sus herederos por evitar el pago de unas responsabilidades políticas que nada tenían que ver con ellos. En este aspecto, el caso de Fernando Gasset Lacasaña se asemeja a multitud de casos que hemos analizado en la provincia de Castellón.

El 28 y el 30 de junio de 1941 los abogados José Morelló del Pozo y Alfonso Gil Maties⁹¹, como representantes de los herederos de Fernando Gasset Lacasaña, pidieron en sendos escritos al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia un plazo de entre cuatro y seis meses para satisfacer el pago que debía realizarse entre el 1 y el 5 de julio de 1941, que era el segundo pago, debido a la necesidad de realizar las correspondientes particiones, pago de impuestos de sucesión, etc., lo que fue concedido el 4 de julio de 1941.

El 3 de agosto de 1942 Alfonso Gil Maties ingresó en nombre de los herederos de Fernando Gasset Lacasaña la cantidad de 37.500 pesetas, correspondientes al segundo, tercer y cuarto pago establecido, siendo ingresada la cantidad en la “Cuenta

⁹⁰ En su certificado de defunción se apunta uremia como causa de su muerte.

⁹¹ José Morelló Pérez era el marido de Concepción Gasset Solís y Alfonso Gil Maties era el marido de María Gasset Bellver. Ambos eran, pues, yernos de Fernando Gasset Lacasaña.

Especial de Responsabilidades Políticas” a favor de la Intervención General de la Administración del Estado.

Todo parecía indicar que los herederos acabarían pagando la totalidad de la sanción impuesta por responsabilidades políticas a Fernando Gasset Lacasaña, pero el 29 de enero de 1944 el presidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia mandó una diligencia a los herederos del mismo advirtiéndole que de no pagar el plazo de su deuda *se pasará orden al Juzgado para que proceda a la ejecución por la totalidad de la misma, excepto los plazos que tiene satisfechos*. Por un escrito de la misma fecha de la Audiencia Provincial de Castellón se deduce que los herederos dejaron de pagar el plazo de agosto de 1943 y enero de 1944. El conflicto era serio y se el 2 de febrero de 1944 se envió urgentemente a un agente judicial al domicilio de los herederos citándoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castellón. La comparecencia tuvo lugar el 10 de febrero de 1944 y en ella José Morelló del Pozo y Alfonso Gil Matíes aludieron problemas con los bienes heredados y manifestaron su intención de satisfacer la cantidad debida en cuanto pudieran. Naturalmente se trataba de una medida para ganar tiempo, porque seguramente estaban bien informados y pretendían resistir hasta la supresión de la Ley de Responsabilidades Políticas, que se produjo en 1945.

Efectivamente los herederos de Fernando Gasset Lacasaña presentaron el 2 de junio de 1944 en el Registro General de la Presidencia del Gobierno en Madrid un escrito solicitando la revisión de la causa y el indulto del resto de la sanción económica que quedaba por pagar, que eran 37.500, ya que se habían satisfecho 62.500 pesetas, que correspondían a los cinco plazos comprendidos entre enero de 1941 y enero de 1943⁹². Al día siguiente se dirigió el mismo escrito al presidente de la Audiencia Provincial de Castellón.

El caso quedó en manos de las autoridades franquistas hasta el 21 de mayo de 1945, cuando se estableció el indulto del pago del resto de la sanción no satisfecha. La razón aducida fue que el 16 de noviembre de 1943 la Comisión Central de examen de

⁹² Sin embargo, en el expediente de responsabilidades políticas sólo hay constancia del pago de 4 de los pagos, lo que representaría 50.000 pesetas.

penas conmutó la pena impuesta en el consejo de guerra a Fernando Gasset Lacasaña de seis años y un día de prisión mayor por la pena de seis meses y un día de prisión menor. Como resultado de esta revisión, y conforme al párrafo segundo del artículo segundo de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de 19 de febrero de 1942, Fernando Gasset Lacasaña no sería considerado inmerso en responsabilidades políticas. Sin embargo, como su sanción había sido impuesta por el inapelable Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, únicamente se decidió proceder al indulto del pago del resto de sanción económica que faltaba por satisfacer.

La familia Gasset podía al fin respirar tranquila, porque había finalizado una pesadilla que se remontaba 9 años antes, con el inicio de la guerra civil. Sin embargo, la notificación oficial del indulto del pago de la parte de la sanción económica impuesta no se realizó a los herederos hasta el 29 de enero de 1953. Realmente era en ese momento en el que la normalidad volvía a esta familia, volviendo a poder disponer plenamente de la finca ofrecida como garantía hipotecaria.

El caso de Fernando Gasset Lacasaña es muestra significativa que la guerra civil española y el franquismo no dieron cabida a personas con planteamientos moderados que hubieran podido significar una solución democrática y sensata a los problemas sociales, políticos, económicos y culturales que arrastraba España y para los que pudo haber sido una solución el proyecto reformista y democrático de la Segunda República. Por otra parte, el procesamiento primero por un consejo de guerra y después por responsabilidades políticas de Fernando Gasset Lacasaña son una muestra excelente del mecanismo represivo del franquismo, trufado de atropellos y violaciones del Derecho liberal más elemental, que en absoluto configuraban un sistema judicial aceptable presidido por la equidad y la garantía de los derechos más elementales, y mucho menos un proyecto social integrador que tratara de sumar esfuerzos para construir un futuro mejor.

11- La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la Vall d'Uixó

La Vall d'Uixó, historia de un núcleo agrícola e industrial.

El análisis que vamos a realizar de los afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas en la Vall d'Uixó hace necesaria una introducción al marco socioeconómico que nos va a servir como referencia. Es en la escala local donde se pueden investigar un conjunto de hechos y factores cercanos a los protagonistas que permiten, más tarde, que los estudios generales del franquismo se renueven y avancen. La evolución histórica de la Vall d'Uixó se ha caracterizado por el protagonismo que ha tenido el desarrollo de la producción de calzado, primero desde una escala artesanal y más tarde desde una escala industrial. Este hecho ha conferido a la localidad un carácter propio en el contexto de poblaciones eminentemente agrarias de La Plana y, como veremos, ha tenido importantes consecuencias a nivel social y económico.

Como ha estudiado con profusión R. Viruela¹, el desarrollo de la actividad industrial ha tenido importantes consecuencias para la población. Así, la Vall d'Uixó ha mantenido un peso demográfico importante y destacado a nivel provincial. Las cifras lo demuestran: en 1857 ocupaba el cuarto lugar entre los municipios de la provincia de Castellón con 7.229 habitantes; y en 1975, con 25.494 habitantes, se superaba con creces el doble de la población de 1950. De esta forma, el desarrollo en la localidad de la actividad industrial ha determinado la dinámica demográfica de la población, aunque no siempre de forma positiva. La abundante mano de obra disponible y las sucesivas crisis industriales originaron periodos de emigración, fundamentalmente en el primer tercio del siglo XX, que sumieron a la población en un contexto de inestabilidad que sólo comenzó a superarse con la consolidación de la empresa Segarra después de la guerra civil, que marcó el inicio de un nuevo periodo de crecimiento caracterizado por

¹ Para las referencias demográficas nos hemos basado en R. VIRUELA, "La Vall d'Uixó: estructura profesional de un núcleo industrial e inmigratorio (1940-1975)", *Cuadernos de Geografía*, nº 26. Valencia, 1980. Pp. 63-84; "Dinámica poblacional de La Vall d'Uixó durante el último siglo", *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*.. Tomo LIX. Cuaderno III: Castellón, 1983. Pp. 321-341; y C. DOMINGO, "La población de La Vall d'Uixó", en AA.VV., *Honori García. El personatge. L'època. EL centre*. Diputación Provincial de Castellón. Castellón, 1997. Pp. 67-80.

la abundante llegada de inmigrantes procedentes de las zonas más deprimidas de España.

Con la importante llegada de inmigrantes, 8.430 de 1945 a 1975, la Vall d'Uixó triplicó su población y vio cómo se alteraba su composición social y cultural, a la vez que daba un paso decisivo para consolidar su nueva estructura económica. Este fenómeno se observa perfectamente en la evolución de su estructura urbana, con la aparición de nuevos barrios, a veces de forma extraoficial y de autoconstrucción, que daban cabida a los nuevos habitantes², como los de *Toledo*, *Carbonaire*, *Francisco Franco*, *Colonia Segarra*, *San Antonio* o *Carmaday*. Es indudable que la empresa Segarra actuó como polo de atracción de estos nuevos habitantes, ya que suponía una importante fuente de empleo para una mano de obra poco cualificada y necesitada de trabajo³. La Vall d'Uixó pasó de ser un núcleo de emigración a un destacado foco de recepción de inmigrantes. El crecimiento demográfico y la llegada de inmigrantes comenzaron a moderarse a partir de 1975, con la crisis económica, la fase final de la empresa Segarra, la modernización democrática y la introducción y consolidación de dinámicas demográficas más propias de una sociedad plenamente desarrollada.

Como hemos indicado, la llegada de nueva población inmigrante provocó cambios en la estructura socio-profesional de los habitantes de la Vall d'Uixó, en el sentido de una todavía mayor vinculación y dependencia respecto al trabajo artesanal e industrial. En este sentido, a finales del siglo XVIII la actividad secundaria suponía el 34,3% del empleo⁴, en 1940 el 60,3% y en 1975 el 64,3%.⁵ Esta presencia decisiva de las actividades del sector secundario condicionó la historia del municipio como lo demuestran los testimonios de ilustrados y estudiosos que han dejado constancia de sus características socioeconómicas con ocasión de su paso por la localidad.

² R. VIRUELA, (1983), op. cit., pág. 83; J. QUEREDA, V. ORTELLS, *La Plana de Castelló. Estudio geográfico*, Castellón, 1983. Pp. 120-125.

³ F. PEÑA, (1998), op. cit., pp. 23-32.

⁴ R. VIRUELA, "La industria de alpargatas en La Vall d'Uixó", *Cuadernos de Geografía*, nº 27. Valencia, 1980. Pág. 204.

⁵ R. VIRUELA, "La estructura..." (1980), op.cit., pág. 66.

Según el Censo de Floridablanca de 1786 se constataba la presencia de 278 fabricantes y 58 artesanos en la Vall d'Uixó, que suponían, como hemos indicado, el 34,3% del empleo local⁶. Posteriormente J.A. Cavanilles, aparte de constatar la presencia de la agricultura tanto de secano como de huerta, nos ofrece el dato de la existencia de 400 trabajadores alpargateros, con una producción diaria de 800 pares de alpargatas, y de 100 mujeres dedicadas a preparar trenza para las suelas, así como de 15 familias dedicadas a las fábricas de ollas y ladrillos. Cavanilles destaca el factor industrial como la principal fuente de riqueza de la población y es muy significativo que en el grabado que recoge la vista de la Vall d'Uixó aparezca, en primer plano, un grupo de personas confeccionando alpargatas.⁷



A finales del siglo XVIII, en la Vall d'Uixó se encontraban cerca del 90% de los alpargateros de la provincia y del 20,5% de la Comunidad Valenciana. Casi un siglo después la actividad alpargatera logró consolidarse en la población a partir de la mecanización del proceso productivo y la sustitución del cáñamo por el yute⁸. En 1873 B. Mundina, además de destacar su agricultura de secano, volvió a incidir en la trascendencia para la localidad de la alpargatería, ya como una actividad espacial y

⁶ R. VIRUELA, "La industria..." (1980), op. cit., pág. 280.

⁷ J.A. CAVANILLES, *Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia* (1785). Tomo I. Castellón, 1991. Pp. 115-116. Un análisis del mismo en R. VIRUELA, *La industria del calzado en la provincia de Castellón*. Castellón, 1988. Pp. 13-18; y "La Vall d'Uixó: un núcleo zapatero", en AA.VV., *Honori García. El personatge. L'època. EL centre*. Diputació Provincial de Castellón. Castellón, 1997. (1997), pp. 113-128.

⁸ R. VIRUELA, (1988), op cit., pág. 16.

preferentemente localizada en la “parte de arriba” de la localidad⁹. A principios del siglo XX, C. Sarthou vuelve a llamar la atención, junto con la agricultura de huerta y secano, sobre la importante presencia del componente industrial, progresivamente diversificado.¹⁰

Por tanto, la presencia de un fuerte sector secundario en la Vall d’Uixó condicionó desde antiguo su dinámica social y su evolución histórica. En este sentido, se produjo la formación de un creciente grupo social que, con distintos y variables grados de desvinculación respecto del trabajo agrícola, dependía especialmente de su trabajo como artesano en una fase inicial y como trabajador de taller y fábrica posteriormente. Con ello, no tardaron en manifestarse características y conflictos sociales propios del desarrollo del capitalismo, especialmente el desarrollo incipiente del movimiento obrero.

Rápidamente se evidenció la preocupación por la posible amenaza al orden establecido y por la desviación de parte de los trabajadores hacia posturas más o menos radicalizadas, que acabó generando la aparición y desarrollo del movimiento social católico¹¹. Éste trataba, desde una posición eminentemente confesional, de alejar a una parte de los trabajadores de la influencia de las organizaciones revolucionarias del movimiento obrero, a partir de la cooperación entre sus miembros desde aportaciones asequibles, asegurando y ampliando sus posibilidades económicas (facilitando préstamos y compra-venta de productos), fomentando una concepción no clasista de la sociedad, y con la dirección y tutela de las élites económicas y eclesiásticas locales. Independientemente que con anterioridad ya se hubieran desarrollado algunas congregaciones religiosas, la primera manifestación concreta del movimiento social

⁹ B. MUNDINA, *Historia, Geografía y Estadística de la provincia de Castellón (1873)*. Castellón, 1988. Pp. 595-596.

¹⁰ C. SARTHOU, *Geografía general del Reino de Valencia (1913)*. Provincia de Castellón. Castellón, 1989. Pp.810-811.

¹¹ Para el análisis de los movimientos católicos en La Vall d’Uixó nos hemos basado en S. GARRIDO, *Los trabajadores de las derechas*. Castellón, 1986; y “La eclosión del cooperativismo agrario”, en AA.VV. (2004), op. cit., pp. 21-46 y M. ARROYAS, “Apuntes para el estudio de los movimientos católicos en La Vall d’Uixó, 1880-1935”, AA.VV. (1997), op. cit., pp. 55-66.

católico se sitúa en 1889, con la creación del Círculo Católico de Obreros por el P. Vicent¹².

La creación del Círculo Católico de Obreros es, sin duda, prueba del desarrollo que en la Vall d'Uixó había experimentado el socialismo y, por tanto, el capitalismo. En este sentido, existen referencias sobre la existencia en 1903 de una asociación laica de obreros, vinculada a la UGT, y que agrupaba a unas 700 personas¹³. Un año más tarde se formó la Agrupación Socialista y se produjo una huelga de alpargateros, presuntamente con el asesoramiento de socialistas de Elche¹⁴. En esta coyuntura, como respuesta también en 1904 el movimiento social católico dio un nuevo paso formando la Cooperativa de Crédito y Producción del Gremio de Alpargateros, que incluía especialmente alpargateros, pero también labradores, y que en el mismo año se redimensionó transformándose en el Sindicato Agrícola o Gremio de Labradores de la Vall d'Uixó "San Isidro".¹⁵

El panorama social de la Vall d'Uixó quedó, por tanto, claramente dividido entre los trabajadores afines a las organizaciones católicas y los afines al socialismo. La disputa entre ambos marcará gran parte del devenir histórico de la localidad hasta la llegada del franquismo. Desde finales del siglo XIX ambos proyectos dieron prueba de vitalidad y apoyo social. En 1905 una delegación de la Vall d'Uixó participó en el Congreso fundacional de la Federación Socialista Valenciana¹⁶. En 1911 se produjo una

¹² Este Círculo Católico de Obreros tenía la peculiaridad de que todos sus socios eran numerarios, con plenos derechos, y que procedían predominantemente no del mundo agrícola como en el resto de asociaciones de este tipo de las localidades vecinas, sino de la artesanía (seguramente se trataría de artesanos que disponían de alguna pequeña parcela). Por otra parte, en 1892 esta asociación tenía 119 miembros. F. PEÑA, "Evolución histórica de los socios del Sindicato Agrícola "San Isidro" de la Vall d'Uixó", en AA.VV., *San Isidro, un siglo de la Vall d'Uixó. Caja Rural la Vall y Cooperativa Agrícola (1904-2004)*. La Vall d'Uixó, 2004. Pp. 141-193.

¹³ M. ARROYAS, op. cit., pág 59. J.A. PIQUERAS, *Persiguiendo el porvenir. La identidad histórica del socialismo valenciano (1870-1976)*. Alzira. Algar, 2005. Pp. 107-108 y 113.

¹⁴ S. GARRIDO, op. cit., pág 148.

¹⁵ Este Sindicato Agrícola de carácter católico dispuso desde su creación de distintas secciones como Caja de Socorros Mutuos, Caja de Crédito Popular y Cooperativa de Consumo y Producción. F. PEÑA (2004), op. cit., pág. 145.

¹⁶ Pág. 59. Únicamente fue acompañada por una delegación de Castellón a nivel provincial y por delegaciones de Elche, Crevillente, Alicante, Alcoy, Poble Nou del Mar, Játiva, Valencia y Almansa a nivel regional.

crisis de sobreproducción de alpargatas y unos 700 trabajadores se quedaron sin empleo y con graves problemas de subsistencia, lo que pudo desembocar en 1913 en la creación de las sociedades de Obreros Agrícolas de la Vall d'Uixó, que ingresó en la UGT¹⁷. La respuesta por parte del movimiento social católico fue la creación del Sindicato profesional de alpargateros y, vinculados a él, el Sindicato-Caja de la Vall d'Uixó "Sagrada Familia", con Caja para Socorros, Anticipos y Préstamos, y, poco después, la Cooperativa de Consumo "Sagrada Familia"¹⁸. A estas alturas se hizo evidente la apuesta de las organizaciones católicas más por los pequeños propietarios y artesanos, muy enraizados como hemos visto en la Vall d'Uixó, que por los trabajadores con menos recursos, entre los que en principio parece que tenían más éxito las organizaciones revolucionarias¹⁹. Para estos pequeños propietarios y artesanos el Sindicato suponía una garantía de estabilidad y de oportunidades económicas con base en la cooperación y el orden social.

En 1919 el Sindicato Agrícola o Gremio de labradores "San Isidro" decidió adaptarse a la legislación sindical de 1906, y se transformó en el Sindicato Agrícola católico "San Isidro", con sección de crédito incluida. Prueba del éxito social del sindicato fue la huelga de 1920 que, motivada por asuntos salariales y de mejora laboral, arrastró a 1.500 trabajadores alpargateros de la Vall d'Uixó, pero que no fue secundada por los miembros del sindicato católico²⁰ y propició la creación de la Cooperativa de Obreros Católicos.²¹ La tensión entre el sindicalismo católico y las fuerzas políticas y sindicales socialistas fue una constante en los siguientes años, radicalizándose en el contexto de la Segunda República y, especialmente, durante la guerra civil, cuando el sindicato fue incautado. A pesar de todo, los años 1920 fueron de consolidación de la economía local, en consonancia con el desarrollo de la omnipresente empresa Segarra

¹⁷ J.A. PIQUERAS (2005), op. cit., pág. 132.

¹⁸ M. ARROYAS, op. cit., pág. 61.

¹⁹ S. GARRIDO, op. cit., pág. 65. A partir de 1919, con la expansión del anarcosindicalismo, el movimiento social católico parece que hizo más esfuerzos en atraer a trabajadores con menos recursos, como los jornaleros.

²⁰ S. GARRIDO, op. cit., pp.234-235. Por otra parte, también se creó el Sindicato de Obreras Católicas, con 150 socias.

²¹ M. ARROYAS, op. cit., pp. 62-63.

de calzado²², empresa que experimentó un desarrollo decisivo con la dictadura de Primo de Rivera.²³

LA SEGUNDA REPÚBLICA EN LA VALL D'UIXÓ

Con la Segunda República se abrió en la Vall d'Uixó un periodo de crisis caracterizado por la voluntad reformista del Ayuntamiento, dispuesto a cambiar los aspectos de una sociedad ancestralmente injusta, por cierto crecimiento económico y consolidación de los proyectos empresariales locales y por la conflictividad entre los partidarios del cambio social y los contrarios a ceder su situación de dominio y de decisión tradicional. Esta situación de conflictividad repercutió negativamente en la economía y, en general, en el marco de convivencia de la localidad. En definitiva, estamos hablando de un conflicto de clases que llevará a cuestionar seriamente la tradicional estructura de poder económico, social y político, introduciendo nuevas ideas y valores que condujeron a la polarización social y a un alto grado de tensión.²⁴

En general, podemos identificar tres grandes grupos sociales protagonistas de la dinámica social que se estableció. En primer lugar, los grandes empresarios de la localidad mantuvieron una actitud de boicot a las nuevas normas reformistas, de pasividad frente a ellas o incluso de desobediencia. Prueba de ello fueron la contratación de obreros forasteros en detrimento de los locales, el despido de los trabajadores afiliados a partidos políticos y sindicatos de izquierda, el alargamiento ilegal de las jornadas de trabajo, la renegociación de contratos previamente pactados, los privilegios a los trabajadores afiliados a entidades de orientación católica o la no colaboración con el Ayuntamiento hasta 1933, cuando los conservadores se hicieron con el mismo. En este sentido, tuvieron el apoyo de la Iglesia y de la Guardia Civil.

²² F. PEÑA (1998), op. cit., pp. 55-59.

²³ A. NÚÑEZ y E. SORRIBES, “De la Monarquía a la República: la Dictablanda a la Vall d'Uixó”, en R. MONLLEÓ (ed.), op. cit., pp. 325-342.

²⁴ Para seguir el periodo de la Segunda República y la guerra civil, R. VIRUELA, “La vida cotidiana en una localitat de la rera guarda republicana: La Vall d'Uixó durant la guerra civil”, *Aigües*, nº 5. La Vall d'Uixó, 1999. Pp. 43-72; M. ARROYAS, op. cit., pp. 63-65; F. PEÑA, “República i guerra a La Vall d'Uixó: una aproximació a la conflictivitat laboral”, *Aigües*, nº 5. La Vall d'Uixó, 1999. Pp. 73-86; y F. PEÑA, (1998), op. cit., pp. 61-99; y V.E. SORRIBES y A. NÚÑEZ, *La Vall d'Uixó durant la Segona República (1931-1936): expectatives, enfrontaments i frustracions en un període de crisi*. Associació Arqueològica de la Vall d'Uixó. La Vall d'Uixó, 2001.

Dentro de este grupo, la dominadora de la economía local era la empresa Segarra, que en 1930 llegó a tener un máximo de 3.000 trabajadores para una población local de 9.216 habitantes, con una producción de aproximadamente 5.000 pares de alpargatas y zapatos diarios²⁵. A pesar de la conflictividad esta empresa consolidó notablemente su desarrollo durante el periodo republicano: inauguró su gran fábrica de calzado de cuero, consolidó su propia red de tiendas en España, modernizó su maquinaria, añadió el proceso de adobo de la piel a su estructura productiva, amplió su red de talleres dedicados a la producción de alpargatas, etc. Todo ello le permitió el control prácticamente total de la economía de la localidad.

En segundo lugar, los trabajadores forasteros y los afiliados a entidades católicas mantenían una colaboración activa con los empresarios. A cambio de estabilidad laboral estos trabajadores aceptaban las condiciones de trabajo que convenía a los empresarios, normalmente jornadas laborales más largas, contención salarial o inexistencia de conflictividad laboral. Esta actitud desembocó en más de una ocasión en incidentes con el resto de trabajadores²⁶. Finalmente, los trabajadores afiliados a partidos políticos y sindicatos de izquierdas mantuvieron una actitud fiel a la República y al Ayuntamiento hasta 1933, denunciando todas las irregularidades cometidas por los grandes empresarios, oponiéndose a las entidades católicas y utilizando las vías pacíficas y legales republicanas (denuncias a los organismos públicos, creación de bolsas de trabajo, etc). En cambio, su actitud cambió cuando lo hizo la orientación política del Ayuntamiento y desde 1933 se llevaron a cabo protestas, manifestaciones y, en octubre de 1934, importantes alteraciones del orden público. Su enfrentamiento con los trabajadores de entidades católicas fue progresivamente agravándose.

Teniendo en cuenta este esquema de tensión y enfrentamiento social, necesitado obviamente de un mayor número de estudios todavía, es útil hacer un recorrido por los acontecimientos más importantes que marcaron la dinámica social de la Vall d'Uixó durante el periodo republicano. Con la proclamación de la República, tras la

²⁵ F. PEÑA, op. cit., pág. 63.

²⁶ Ibidem. Pág. 73. En julio de 1932 hubo incidentes en los centros obreros “El Rayo” y “El Parral”, a la vez que se denunciaban públicamente todas las irregularidades que los trabajadores de entidades católicas se prestaban a llevar a cabo.

movilización de los trabajadores y la celebración de una manifestación para celebrar el acontecimiento, el Ayuntamiento pasó a manos de la “Conjunción republicano-socialista”²⁷, que desde el principio, y por primera vez, mantuvo una actitud favorable a los trabajadores en una serie de conflictos con los grandes empresarios locales²⁸ y trató de llevar a cabo iniciativas para paliar el paro de la localidad.

Esta dinámica se mantuvo hasta abril de 1933, cuando las elecciones llevaron al Ayuntamiento a las fuerzas conservadoras. A partir de este momento cambió radicalmente el panorama político en la Vall d’Uixó: los grandes empresarios comenzaron a colaborar y los trabajadores de entidades de izquierda fueron poco a poco radicalizándose. La situación de tensión desembocó en los sucesos del 7 y 8 de octubre de 1934, cuando los trabajadores de izquierda salieron a la calle y crearon una serie de alteraciones del orden público que hicieron necesaria la actuación de la Guardia Civil y posteriormente de la Cruz Roja para atender a los heridos. Estos sucesos fueron aprovechados por el gobernador civil para destituir a los concejales de los partidos de izquierda y el Ayuntamiento se paralizó durante unas semanas. Fue a partir de estos sucesos cuando, por ejemplo, la familia Segarra más colaboró con el Ayuntamiento para erradicar el paro de la localidad. La conflictividad social continuó, pero a más baja intensidad ²⁹. En febrero de 1936 las nuevas elecciones dieron la victoria en la Vall d’Uixó al Frente Popular.

²⁷ En las elecciones de abril de 1931 los republicanos obtuvieron 15 de los 17 regidores. Los dos regidores conservadores acabaron siendo obligados a dejar el Ayuntamiento, que fue plenamente ocupado por republicanos. Pocos días después se formó una Comisión Gestora que dio paso a la constitución del primer Ayuntamiento Republicano en junio de 1931. V.E. SORRIBES y A. NÚÑEZ, op. cit., pp. 50-54.

²⁸ Ibidem. Pp. 70-73. Se trataba, por ejemplo, de denuncias por irregularidades o de contratación ilegal de trabajadores forasteros, en detrimento de los locales. Así, la empresa Segarra fue denunciada por el Ayuntamiento por este último caso ante el gobernador civil y el Delegado Regional de Trabajo. Los empresarios mantuvieron una actitud de desafío y no acataron las medidas acordadas por los organismos oficiales, llegando incluso a la conspiración.

²⁹ Ibidem. Pág. 76.

En julio de 1936 estalló la guerra civil y el poder en la zona republicana quedó inicialmente fragmentado con la actuación de movimientos revolucionarios que se hicieron con el poder en muchas localidades, iniciando una labor autónoma revolucionaria que desembocó en múltiples procesos de “control obrero” y colectivizaciones de las mayores industrias. Así, en agosto de 1936 el Ayuntamiento se autoproclamó “Comité del Frente Popular”, integrado por Esquerra Republicana, Partido Comunista y Partido Socialista. Los trabajadores, por tanto, asumieron directamente el poder³⁰. Por ejemplo, la empresa Segarra fue sometida a “control obrero” por el Frente Popular local, bajo la dirección de UGT y la colaboración de CNT, mediante la sociedad obrera local “La Protectora”. Esto suponía en la práctica que la familia Segarra compartía la dirección de la empresa con un comité obrero.³¹

La Vall d’Uixó vivió la guerra con una gran intensidad. Prueba de ello es que el alcalde dimitió para mejorar su contribución a la República desde la Cooperativa Socialista. Además, toda la producción de alpargatas y gran parte de los productos agrícolas se destinaron a las milicias republicanas, se acogieron a refugiados y a niños evacuados de otras poblaciones (más de 80 en abril de 1937), etc. Como veremos más adelante, también se cometieron actos violentos como asesinatos, quema de iglesias o incautaciones de dudosa legitimidad.

En junio de 1938 las tropas franquistas tomaron la ciudad de Castellón, desde donde lanzaron una ofensiva sobre Valencia que se detuvo a la altura de Viver-la Vall d’Uixó debido a la resistencia republicana y al comienzo de la batalla del Ebro en julio de 1938, que provocó el desvío de la atención y los recursos del ejército franquista. De esta forma, y de forma estable hasta el final de la guerra, la Vall d’Uixó se convirtió en frente de guerra.

³⁰ Para este proceso nos hemos basado en A. BOSCH, *Ugetistas y Libertarios. Guerra Civil y Revolución en el País Valenciano. 1936-1939*. Valencia, 1983.

³¹ F. PEÑA (2004), op. cit., pp. 79-83. En septiembre de 1937 la empresa Segarra fue intervenida por el Estado, dadas las imperiosas necesidades de calzado y otros productos de piel del ejército republicano.

Los días 30 de mayo y 4 de junio de 1938 la Vall d'Uixó fue bombardeada por las fuerzas aéreas franquistas, quedando destruidos una gran parte de los edificios de la localidad y gran parte de sus vías de comunicación. Estos bombardeos llevaron a la evacuación de la población, que se convirtió en obligatoria a principios de junio de 1938 cuando lo ordenaron las autoridades republicanas, creando confusión y parece que algún que otro asalto a casas de familias ricas³². La empresa Segarra fue parcialmente desmantelada y trasladada a la localidad valenciana de Alcudia, donde fue reconstruida y utilizada para la producción de calzado para el ejército republicano. El día 29 de marzo de 1939 el ejército franquista entró sin oposición a la Vall d'Uixó, una ciudad casi fantasmal, destrozada por las bombas y con la mayoría de casas saqueadas, sólo con unos pocos habitantes que se enteraron de la caída de Madrid el día anterior. Poco a poco los habitantes de la Vall d'Uixó comenzaron a regresar a una población bajo el mando de la autoridad militar franquista. Una nueva etapa se abría con la llegada del franquismo y a una parte de la población se le exigieron responsabilidades políticas por su actuación durante la República.

BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA SEGARRA

La historia contemporánea de la Vall d'Uixó ha estado condicionada por el desarrollo de una gran empresa productora de calzado y artículos de piel, la empresa Segarra, ya que desde muy temprano se convirtió en el agente generador de empleo más importante y en un fuerte foco de atracción de inmigrantes de otras zonas de España en busca de trabajo. Además, ejerció una influencia decisiva en la política local y desarrolló un completo sistema de relaciones paternalistas con sus trabajadores que acabó imprimiendo un estilo de vida diferenciado en la localidad. Como veremos más adelante, la omnipresencia de la empresa Segarra hizo que también se convirtiera en un agente social decisivo a la hora de analizar la represión y el tratamiento a los republicanos en los primeros años del franquismo. Por todo ello, se hace necesaria una breve introducción al desarrollo histórico de esta empresa.³³

³² Ibidem. Pp. 82-84.

³³ Para el desarrollo de la empresa Segarra y el análisis de su política paternalista F. PEÑA (1998), op. cit., y “Treballadors i misèria: conflictivitat laboral i triomf paternalista als primers anys del franquisme”, en *Saitabi*, nº 50. Valencia, 2000. Pp. 341-364.

Como hemos visto, la Vall d'Uixó tiene una tradición artesanal muy antigua, destacando en ella la producción de alpargatas. Durante el siglo XIX esta base artesanal comenzó a desarrollarse a partir de su papel como proveedora del Ejército, surgiendo a principios del siglo XX las primeras fábricas, que tenían en el sistema de producción doméstico un importante apoyo. En este contexto encuadramos el origen de la empresa Segarra. Su fundador, Silvestre Segarra Aragó, nacido en 1861, era un alpargatero con propiedades agrarias que supo consolidar una serie de rutas comerciales, basadas en el intercambio de alpargatas y productos agrarios, en pueblos cercanos que le permitió progresivamente ampliar su negocio a nivel nacional y finalmente en 1906 lograr las influencias necesarias para la concesión de algunas adjudicaciones de alpargatas para el Ejército.

La conexión con el Ejército permitió el despegue del negocio familiar y la fundación de su primera fábrica. Prueba de la influencia que iba adquiriendo Silvestre Segarra Aragó fue su cargo de Primer Teniente de Alcalde de la Vall d'Uixó en 1906, ejercido hasta principios de 1910³⁴. Desde este momento, cada conflicto en el que participaba España suponía un impulso a la empresa Segarra, que poco a poco fue absorbiendo la mayor parte de los talleres de alpargatas de la Vall d'Uixó y consolidando sus contactos a nivel nacional.

El periodo 1910-1930 fue el de la consolidación definitiva de la empresa. Tras algunas crisis de crecimiento y problemas derivados de la dependencia de las adjudicaciones del Ejército, en 1912 se creó la “Razón Social Silvestre Segarra e Hijo, Sociedad Regular Colectiva”, punto de partida oficial de la empresa. La producción comenzó a diversificarse, introduciéndose botas, zapatos de playa, suelas de cuero, etc., gracias a la modernización del proceso productivo y a los beneficios obtenidos a través del Ejército, que permitió, entre otros, la penetración en el mercado marroquí, donde es probable que el hijo del fundador, Silvestre Segarra Bonig, pudo establecer relaciones con dirigentes castrenses que en el futuro le aseguraron importantes beneficios, como con Francisco Franco. Al mismo tiempo, se fue consolidando la producción de calzado

³⁴ De hecho, fue Alcalde en funciones de la localidad en los periodos comprendidos entre julio de 1906 y febrero de 1907, de agosto a octubre de 1907 y de octubre a diciembre de 1908. También fue presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Arbitrios y Cuentas Municipales.

orientada al mercado civil y la compra por parte de la familia Segarra de todo tipo de bienes inmuebles.

Al llegar la Segunda República la empresa Segarra era una de las más importantes empresas de calzado a nivel nacional. En 1931 inauguró su nueva y gran fábrica de calzado de cuero en las afueras de la localidad³⁵ y prácticamente consiguió monopolizar la producción de calzado en la Vall d'Uixó. Sin embargo, el periodo republicano se caracterizó por una fuerte inestabilidad social en la que la familia Segarra mantuvo una activa colaboración con las entidades católicas y con el Ayuntamiento una vez pasó a ser regido por las fuerzas conservadoras. Además, comenzó a poner en funcionamiento algunos elementos de tipo paternalista que fueron desarrollados en el franquismo.

Con el estallido de la guerra la empresa Segarra fue sometida a control obrero por parte del Frente Popular local, bajo la dirección de la UGT y la colaboración de CNT. La familia Segarra no fue apartada de la dirección de su empresa, pero sí se ejercía un fuerte control por parte de los trabajadores. Por tanto, se estableció una dirección compartida en la que la familia Segarra colaboró porque no le quedaba más remedio. En septiembre de 1937 la empresa acabó siendo intervenida por el Estado y su producción militarizada y orientada al calzado del Ejército republicano. Tras el bombardeo de la ciudad y su posterior evacuación la familia Segarra se dispersó y parece que el material de la empresa fue desmantelado, saqueado o trasladado a otras poblaciones valencianas.

Con la llegada del franquismo y la reconstrucción de la población la empresa Segarra se erigió como principal protagonista y dominadora de la vida local, convirtiéndose en un importante foco de atracción de mano de obra que influyó decisivamente en el desarrollo de la Vall d'Uixó. La comunión con el régimen franquista fue perfecta³⁶ y la empresa estuvo en condiciones muy pronto de desarrollar

³⁵ Esta nueva fábrica ocupaba un solar de unos 20.000 m² y tuvo una producción inicial de 4.000 pares de zapatos diarios. Se acompañó de una importante renovación de los medios de producción. La antigua fábrica se transformó en fábrica de adobo de pieles. La producción de alpargatas continuaba, aunque a nivel más modesto recurriendo a pequeños talleres familiares y al sistema de producción doméstica.

³⁶ Prueba de ello fue que ya en 1939 la empresa Segarra estuvo en condiciones de llevar a cabo una producción de 1.000 pares de zapatos diarios, que llevaba a cabo 556 trabajadores. F. PEÑA (1998), op. cit., pág. 106 y 110. Además, en 1942 la empresa fue declarada "Empresa Modelo", concediéndose la

su proyecto paternalista de inspiración católica que la convirtieron en un modelo de empresa a nivel nacional.

De hecho, el franquismo permitió la reconstrucción de la empresa Segarra con todo tipo de ventajas y favoritismos, dejando en manos de los propietarios el desarrollo de una política paternalista privilegiada por el régimen, que respondía a un antiguo proyecto inspirado en el catolicismo social. La reaparición del paternalismo, con base en la identificación patronos-Estado, el intervencionismo y la precaria situación de los trabajadores, especialmente en las grandes empresas, fue permitida por el Estado franquista como fórmula para el control de la población y la creación de un mercado protegido y reservado³⁷. La identificación de la familia Segarra y el Estado franquista fue total, compartiendo ambos la tarea de encuadramiento de la población, así como la represión, atracción, fijación y disciplinarización de los trabajadores.

A mediados de los años 1940 la empresa Segarra ya era una de las más importantes empresas españolas: un enorme complejo industrial basado en un modelo de autosuficiencia que combinaba una concepción autoritaria y paternalista de las relaciones laborales y con capacidad para abastecer al Ejército español y a gran parte de la población civil con sus alpargatas y botas de cuero, a las que se unían otras producciones de artículos de piel (cazadoras, cinturones, monederos, pelotas, guantes, etc.) y productos agrícolas extraídos de sus propias tierras.

Una prueba del desarrollo de la empresa nos lo ofrece el balance de sus componentes en 1946:

Medalla de Oro al Mérito al Trabajo al gerente Silvestre Segarra Bonig. A esto se añadió la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio en 1950. Básicamente el triunfo de la empresa Segarra se basaba en el disfrute de una cuota de piel muy superior a la que le correspondía, abarcando prácticamente la cuarta parte de piel destinada a pedidos oficiales. R. MORENO, "Las industrias de transformación: las empresas del calzado", en G. SÁNCHEZ y J. TASCÓN, *Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-1957*. Barcelona, 2003, pp. 190-191.

³⁷ J. BABIANO, *Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958)*. Consejo Económico y Social. Madrid, 1998; C. MOLINERO y P. YSÀS, <<Patria, justicia y pan>>. *Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya, 1939-1959*. Barcelona, 1985, pp. 93-123; *Els industrials catalans sota el franquisme*, Vic, 1991, pp. 94-97; *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*. Madrid, 1998, pp. 5-43; F. PEÑA, "Paternalismo y control social en la industria franquista. La empresa Segarra de la Vall d'Uixó", en *Sociología del Trabajo*, nº 34. Madrid, 1998. Pp.109-132.

- Dos grandes fábricas, una de calzado y otra de curtidos.
- Un edificio de oficinas para tareas administrativas.
- Un economato que proporcionaba productos de primera necesidad (alimentos y ropa fundamentalmente) a los trabajadores y que se basaba en el cultivo de las tierras de la empresa y otras alquiladas, además de la compra de productos de todo tipo al por mayor, incluyendo también una granja propia.
- Un comedor con cocina propia para los trabajadores.
- Alquiler de una flota pesquera para el abastecimiento de pescado.
- Un grupo de viviendas que acogían a 100 familias de trabajadores, incluyendo iglesia, escuela para los hijos y los adultos, mercado, fuentes, etc.
- Una clínica dedicada a la atención de los trabajadores (reparación de la mano de obra).
- Un depósito de agua y una canalización propia de 6 kilómetros para abastecer tanto a las fábricas y talleres como a las viviendas.
- Diversos locales en la Vall d'Uixó, que servían de talleres y escuelas de formación profesional.
- Una Escuela de Aprendices donde se adoctrinaba y formaba técnica, física y moralmente a los hijos de los trabajadores, futura mano de obra.
- Una Colonia escolar en Sagunto, adonde éstos eran llevados de excursión, convivencia e instrucción, y donde se profundizaba en su adoctrinamiento una vez alejados del hogar.
- Un salón de actos propio para celebraciones.
- Una banda de música, formada por los trabajadores.
- Una flota de al menos 13 grandes camiones que transportaban la producción y otros productos a todos los puntos de venta.
- Una revista mensual propia, “Revista de Aprendices”, en la que se relataba la vida de la empresa y se adoctrinaba a los trabajadores.
- Un complejo deportivo donde se practicaban todo tipo de deportes (la empresa tenía su propio equipo de fútbol, jockey, etc.) y se celebraban todo tipo de grandes actos públicos.
- Secciones que aprovechaban los restos de producción para fabricar cartón, artículos de piel, pintura, clavos, hebillas, etc.

- Un sistema financiero propio, destinado al ahorro de los trabajadores y al control del mismo.
- Una fábrica de abonos.
- Una central térmica propia que producía energía eléctrica para las fábricas, evitando así los continuos cortes de suministro eléctrico,
- Un taller de mecanización y fundición.
- Un taller mecánico.
- Una red de tiendas, en 16 de las ciudades más importantes de España.
- 2.457 trabajadores directos, que mantenían una producción de 3.600 pares diarios de zapatos, a los que había que añadir un gran número de trabajadores a domicilio.

Así, la familia Segarra logró crear un espacio social y laboral propio, prácticamente autosuficiente, que le permitía mantener disciplinados a los trabajadores al mismo tiempo que ofrecía al franquismo el control y sometimiento de los habitantes que dependían de ella. Entre ellos, como veremos, algunos de los procesados por responsabilidades políticas. La empresa Segarra aprovechó los mecanismos de influencia que le brindaba el régimen franquista y se convirtió en una de las empresas dominadoras del sector del calzado a nivel nacional, consiguiendo también casi la totalidad de la demanda de calzado del Ejército español.

La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas a los habitantes de la Vall d'Uixó, mantiene una tendencia similar a la general de la provincia de Castellón, respondiendo también a la situación concreta de la localidad tras la guerra civil. El número de expedientes incoados es bajo en el periodo 1939-1940, aunque en el año 1941 se produce un aumento espectacular de los casos incoados, intensificándose la persecución de los republicanos, cayendo las cifras en 1942 y recuperándose nuevamente en el año 1943 e iniciando un ligero descenso a partir de 1944 hasta llegar a 1945, cuando no se vuelve a incrementar el número de expedientes³⁸. En este sentido, parece que en 1941 se consiguieron los objetivos fundamentales de la Ley. Hay que tener presente que la Vall d'Uixó fue evacuada por las autoridades y formó parte del frente de batalla, con lo que gran parte de su casco urbano sufrió bombardeos y saqueos³⁹. La población fue paulatinamente llegando a la localidad tras la guerra, con lo que muchos republicanos no regresaron a la misma sino algún tiempo después. Así, sólo cuando la situación adquirió tintes de cierta normalización, y esto parece que comenzó a ocurrir a partir de 1941, las autoridades pudieron aplicar la Ley a los republicanos. A este proceso, como veremos, seguramente no estuvo ajeno la empresa Segarra, que pudo actuar como elemento integrador de la población republicana a cambio de sumisión paternalista, disciplina y explotación laboral.

De esta forma, en total tenemos noticias de la incoación en la Vall d'Uixó de expedientes de responsabilidades políticas a 62 personas en el periodo 1939-1945. La evolución del número de expedientes incoados a ciudadanos de la Vall d'Uixó se presenta en el siguiente cuadro:⁴⁰

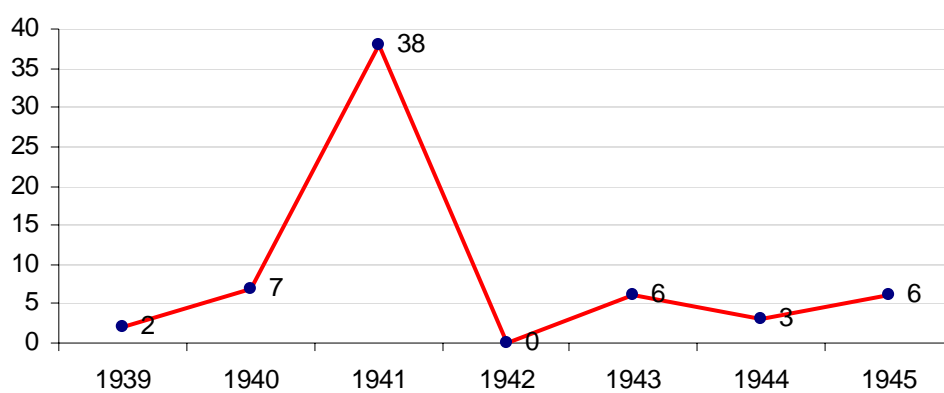
³⁸ Hay que recordar que en abril de 1945 se suprime la jurisdicción de Responsabilidades Políticas.

³⁹ La Vall d'Uixó fue bombardeada por la aviación franquista el 30 de mayo y el 4 de junio de 1938. Como consecuencia de estos bombardeos la población huyó y la población quedó prácticamente desierta. Tras haber sido frente de guerra durante 10 meses, las tropas franquistas entraron en la población el 29 de marzo de 1939, cuando comenzó paulatinamente a regresar la población. Cerca de la mitad de los edificios de la localidad estaban afectados por la guerra, muchas casas habían sido saqueadas, no había luz ni agua y las calles se encontraban cubiertas de escombros. E. GAJA y M. FERRER, *25 años de paz en Vall de Uxó*. Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. La Vall d'Uixó, 1964. Pp. 13-18.

⁴⁰ Nos hemos basado en los expedientes de responsabilidades políticas que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Castellón y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de los años 1939-1945.

Gráfica 11.1

Expedientes de responsabilidades políticas incoados a ciudadanos de la Vall d'Uixó

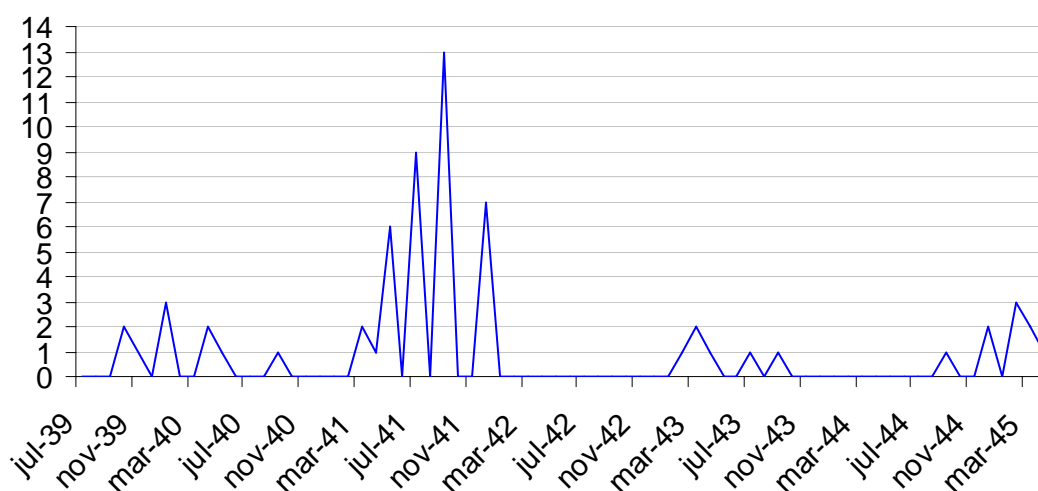


Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Gráfica 11.2

Evolución mensual de la incoación de expedientes de responsabilidades políticas a los ciudadanos de la Vall d'Uixó



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

En total, tenemos constancia de 75 ciudadanos más de la Vall d'Uixó (5 de ellos mujeres, el 7,3%) que sufrieron un consejo de guerra y, por tanto, fueron susceptibles de ser investigados y procesados por la jurisdicción de responsabilidades políticas, pero que no lo fueron por falta de tiempo, medios o por las nuevas instrucciones que procedían de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas a partir de 1942 y que hemos analizado anteriormente. En nuestro estudio vamos a centrarnos únicamente en los casos que sí sufrieron la apertura de un expediente por responsabilidades políticas.

Conviene realizar en primer lugar un análisis sobre los datos personales de los encausados para determinar el perfil de ciudadano que sufrió este tipo de represión. Se trata de cinco mujeres y 57 hombres, lo que supone unos porcentajes del 8% y 92% respectivamente. La edad media de los encausados se sitúa en los 40,2 años⁴¹, siendo la persona más mayor de 62 años y la más joven de 22. En general, se aprecia que las personas afectadas eran sobre todo de una edad comprendida entre los 31 y los 45 años, cuando los hombres se encuentran en plenitud profesional y en condiciones de formar familia⁴², aunque también destacan los jóvenes. En este sentido, en cuanto al estado civil, predominan claramente los casados sobre solteros y viudos. Por tanto, esta situación repercutiría en la normal recuperación económica y demográfica de la localidad.

⁴¹ Desconocemos la edad en cinco de los casos analizados. La edad se corresponde a la que tenía cada inculcado al iniciarse el consejo de guerra correspondiente, aunque en algunos casos corresponde a la edad del inculcado al iniciarse el consejo de guerra, por ejemplo, aquellos que no fueron juzgados por un consejo de guerra y fueron directamente denunciados.

⁴² Los datos que disponemos ofrecen una cifra media de 1,85 hijos por inculcado. Existen 13 inculcados que no tienen hijos y, en el otro extremo, un inculcado con seis hijos. No consta en la documentación a nuestro alcance el número de hijos en 8 casos.

Tabla 11.1

Procesados por responsabilidades políticas en la Vall d'Uixó
según su estado civil

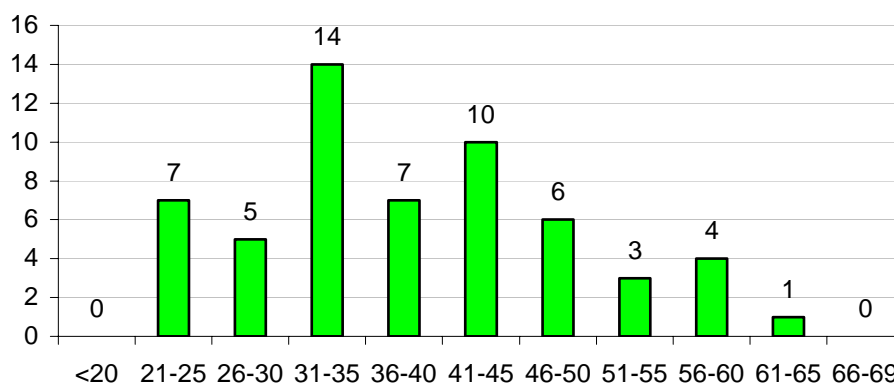
	Número de casos	%
Solteros	42	67,7
Casados	9	14,7
Viudos	5	8
Se desconoce	6	9,6

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Gráfica 11.3

Procesados por responsabilidades políticas en la Vall d'Uixó
según los grupos de edad



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

En cuanto a la profesión de los inculcados, predominan claramente las ocupaciones pertenecientes al sector secundario (45,2% de los casos frente al 20,8% del sector primario, el 17% del terciario y el 17% de los que desconocemos su profesión), lo que responde a la tradición artesanal e industrial de la Vall d'Uixó y que hemos comentado anteriormente. Entre todas las profesiones destacan las de labrador, alpargatero y zapatero. Ofrecemos en el siguiente cuadro las distintas profesiones de los inculcados:

Tabla 11.2

Profesión	Nº casos	%	Profesión	Nº casos	%
Alpargatero	12	19,3	Industrial	1	1,6
Labrador	11	17,7	Maestra	1	1,6
Zapatero	10	16,1	Empleado	1	1,6
Sus labores	3	4,8	Oficinista	1	1,6
Albañil	2	3,2	Comisionista	1	1,6
Mecánico	2	3,2	Jornalero	1	1,6
Barbero	2	3,2	Sastre	1	1,6
Comerciante	2	3,2	Desconocida	9	14,5
Cestero	2	3,2			

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

A pesar de todo, con los datos que disponemos en la actualidad podemos afirmar que la Ley de Responsabilidades Políticas en la Vall d'Uixó afectó especialmente a personas que mantuvieron una actitud pública a favor de la República, pero desde posiciones político-sociales de responsabilidad media o baja. De hecho, sólo los socialistas Pascual Navarro Estrada y Anselmo Ganau Mingarro fueron procesados entre todo el equipo de gobierno municipal de 1931-1934, que contó con 17 miembros.⁴³

Los procesados: estudio de casos.

Ya hemos visto cómo la Ley de Responsabilidades Políticas establecía una serie de supuestos suficientemente amplios como para dejar bajo sospecha a la mayor parte de la población, y cómo existían tres mecanismos a partir de los cuales una persona

⁴³ V.E. SORRIBES y A. NÚÑEZ, op. cit., pp. 52-55.

podía sufrir la incoación de un expediente de responsabilidades políticas⁴⁴. De los 62 casos de personas de la Vall d'Uixó procesadas por responsabilidades políticas 1 lo hizo por iniciativa del Tribunal Regional a expensas de informaciones de autoridades, 2 por denuncia directa de la Guardia Civil de la Vall d'Uixó, 1 por denuncia del Delegado Local de FET y de las JONS, y los 58 casos restantes sufrieron incoación de expediente por existir una sentencia condenatoria de un consejo de guerra previamente celebrado. De esta forma, se cumple la impresión que esta última causa fue la que el régimen franquista utilizó con preferencia debido a su comodidad, accesibilidad y efectividad, tal y como ocurre en otros casos analizados⁴⁵. En cualquier caso, con la información que disponemos podemos afirmar que tanto la Guardia Civil como FET y de las JONS local colaboraron activamente en el proceso de denuncia de ciudadanos en la Vall d'Uixó, pero no lo hizo la población civil, ya que no disponemos de ningún caso cuya motivación sea esta última⁴⁶.

El caso incoado por iniciativa del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia corresponde a Manuel Rebollar Aragó⁴⁷. Según la Guardia Civil se trataba de un antiguo socialista afiliado a UGT que actuó como miliciano usando armas, involucrado en el asesinato de un industrial y dos sacerdotes, así como en la quema de los templos de la localidad. Participando además como voluntario en el Ejército republicano. Se le calificaba como *individuo desafecto y peligroso para la Causa Nacional*. El 28 de octubre de 1940 el Juzgado de Responsabilidades Políticas de Castellón le condenó a inhabilitación absoluta, extrañamiento y pérdida total de bienes. Sin embargo, carecía de bienes, tal y como aseguraban los informes de la Guardia Civil,

⁴⁴ Recordemos que se podía proceder a la incoación de un expediente por iniciativa del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas correspondiente (respondiendo a informaciones de autoridades), por sentencia previa de la jurisdicción militar o por denuncia de cualquier ciudadano.

⁴⁵ Parece ser el caso de los análisis de las provincias de Albacete, Soria o Cáceres M. ORTIZ, op. cit., pp. 396-397; J. CHAVES, "La represión contra los disidentes: consecuencias de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Cáceres", en *II Encuentro de Investigadores del franquismo*. Alicante, 1995. Pp. 335-345. En otros casos, como en Lleida, parece que predominaron las denuncias, según C. MIR et al. (1997), op. cit.

⁴⁶ En este punto hemos de especificar que la alcaldía de la Vall d'Uixó también tuvo un papel activo a la hora de aportar información sobre los inculpados. Además, si bien no encontramos ningún caso de procesado por responsabilidades políticas de la Vall d'Uixó que fuera denunciado por algún vecino, sí existen indicios que algunos ciudadanos colaboraron en la aportación de datos sobre los inculpados a las autoridades locales.

⁴⁷ Expediente de Responsabilidades Políticas a Manuel Rebollar Aragó. Archivo Histórico Provincial de Castellón, Caja 10083.

la Alcaldía y el del cura párroco y, por tanto, su caso acabó en julio de 1944 siendo sobreseído. Por otra parte, otro informe de la Guardia Civil de junio de 1940 aseguraba que se encontraba en un campo de concentración en Francia, con lo que, además de no detenerse el proceso, la efectividad de la sanción era imposible. En este caso, pues, además de la pérdida total de bienes y la imposibilidad de volver a la Vall d'Uixó se vieron afectados, económica y socialmente, sus familiares directos en el periodo que va de mayo de 1940 a julio de 1944.

Los dos expedientes iniciados a partir de denuncias de la Guardia Civil son bien significativos de lo que implicaba la Ley de Responsabilidades Políticas y de la falta de justicia y garantías que ésta representaba. El primer caso es el de Daniel Segarra Paulo⁴⁸. Denunciado en agosto de 1940 por la Guardia Civil de la Vall d'Uixó⁴⁹ por haber pertenecido a Izquierda Republicana antes y después del 18 de julio de 1936, haber sido apoderado de los partidos del Frente Popular en las elecciones de 1936 y haber mantenido una activa, pública y significativa actitud de colaboración con el régimen republicano, acabó siendo condenado el 23 de mayo de 1941 a tres años de inhabilitación y al pago de una multa de 100 pesetas, sanción que fue notificada y satisfecha, porque el inculpado pagó la multa una semana después de la notificación, a finales de octubre de 1941. A pesar de esta rapidez en el pago, hasta el 7 de abril de 1942 no se publicó oficialmente en el Boletín Oficial del Estado la libre disposición de los bienes por el pago de la sanción. Así, en este caso hemos de tener en cuenta, pues, que el inculpado y sus familiares directos sufrieron la vigilancia de las autoridades y las limitaciones que la Ley de Responsabilidades Políticas de agosto de 1940 a abril de 1942. Estas limitaciones se resumían en la pérdida de la libertad de circulación, la obligatoriedad de presentar una declaración jurada de bienes, la continua sospecha para las autoridades y la indisposición de la capacidad para disponer de los bienes propios⁵⁰.

⁴⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas a Daniel Segarra Paulo. Archivo Histórico Provincial de Castellón, Caja 10130. El acusado tenía 50 años en el momento de la incoación del expediente y su profesión era alpargatero. Ver la denuncia en el Apéndice Documental.

⁴⁹ La denuncia aparece firmada el 12 de agosto de 1940 por el comandante del puesto de la Guardia Civil, Amadeo Bartoll Aicart.

⁵⁰ Ver Apéndice Documental.

El acusado Daniel Segarra Paulo tuvo la capacidad de utilizar los mecanismos que le ofrecía la Ley de Responsabilidades Políticas para presentar su defensa, lo que representó un caso prácticamente aislado, ya que la inmensa mayoría de los inculcados no pudieron o no supieron hacerlo. Además de presentar un escrito de defensa firmado por siete ciudadanos de la Vall d'Uixó, en el que se negaban las acusaciones de la Guardia Civil⁵¹ y se calificaba de su conducta moral y religiosa de *intachable*, presentó otros de la Cooperativa de Obreros Alpargateros “La Protectora” y del Sindicato Agrícola San Isidro de la Vall d'Uixó, ambos de orientación católica, alabando su buena conducta social. Sin embargo, los informes preceptivos de la Guardia Civil, de la Alcaldía, de FET de las JONS y del cura párroco insistieron en identificarle como uno de los miembros más activos y destacados de Izquierda Republicana, y acabaron por tener más peso que los escritos de defensa. Además, el inculcado poseía bienes (casa y fincas, incluidas las de su cónyuge), valorados globalmente en casi 11.000 pesetas, lo que le hacía susceptible de sanción económica. Al final, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas decidió dar por probada su militancia política y su colaboración con la República, por lo que le aplicó la sanción anteriormente comentada.

Este caso es significativo porque demuestra cómo se perseguía directamente a una persona por haber militado activamente en un partido político. De hecho, en los informes de las autoridades se insiste en que no participó en ninguna actividad delictiva y que su conducta siempre fue buena. En este sentido, el informe de la Guardia Civil se recoge: *Antes del Glorioso Movimiento Nacional pertenecía al partido Izquierda Republicana, se le llegó a nombrar vocal de la Junta Directiva, pero no aceptó el cargo, siendo su conducta buena, pero muy destacado y activista dentro del partido [...]. En el periodo rojo no tiene antecedentes delictivos, solamente desplegó mucha actividad dentro de la organización a que pertenecía en auxilio de la Causa roja, por lo que se le considera Desafecto.*

Daniel Segarra Paulo negó todos los cargos asegurando que le ofrecieron participar en los cargos directivos de Izquierda Republicana pero que se negó a ello y, sin desmentir su militancia, aseguró no haber ayudado al régimen republicano durante la

⁵¹ Uno de los puntos fuertes de su defensa fue su pertenencia al partido Esquerra Valenciana, no a Izquierda Republicana, aunque éstos acabaron fusionándose más tarde. Daniel Segarra Paulo alegaba que Esquerra Valenciana no constaba en la relación de partidos castigados por la Ley en su artículo 2º.

guerra. Tras la sentencia anteriormente comentada, volvió a presentar un nuevo escrito de defensa, quejándose amargamente de la ilegalidad y la inconsistencia de una Ley arbitraria e injusta. Se lamentó de ser castigado sin haber incumplido nunca la Ley, pero su mayor queja, que vale la pena reproducir aquí, se centra en la vaguedad de las acusaciones que se le lanzaban, que imposibilitaban una defensa efectiva y, en definitiva, un proceso justo: [...] *pero ¿en qué han consistido esas actividades? ¿no es lógico que si esos informes se debieran al espíritu de Justicia, necesario para la buena administración de la misma dirían clara y concretamente en qué ha consistido esa actuación? ¿no es más cierto que para poder enjuiciar en qué ha consistido esa colaboración era imprescindible decir lealmente qué hechos eran los cometidos*) [...]. *Lo único cierto es que no existe ningún hecho delictivo ni ninguna colaboración que caiga dentro del ámbito de las Responsabilidades Políticas, que no transgredí jamás la ley, que por circunstancias locales, víctimas los que tenemos que depender de otros de la antigua Organización caciquil política a veces nos veíamos obligados a figurar si quiera fuera como afiliados simplemente a Partidos tan apartados de nuestro íntimo sentir y pensar.* La defensa no obtuvo recompensa y, como hemos comentado, el inculpado tuvo que pagar la multa establecida y permanecer inhabilitado tres años. Quedaba, pues, marcado por el régimen.

El segundo caso de denuncia corresponde a Manuel Llobet Marín⁵², uno de los dirigentes históricos de las fuerzas de izquierda de la Vall d'Uixó. Nuevamente es la Guardia Civil de la localidad quien eleva la denuncia al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, esta vez firmada el 9 de marzo de 1940. Las acusaciones eran numerosas y graves: pertenecer antes y después del 18 de julio de 1936 a las Juventudes Socialistas, ejerciendo cargos directivos como el de Secretario de la Agrupación Socialista y de la Sociedad Cooperativa Alpargatera “La Luz del Porvenir”, participar en actos de propaganda y excitación marxista, huelgas y manifestaciones, ser detenido en octubre de 1934 por los movimientos revolucionarios en la localidad⁵³, ordenar el saqueo de distintos sindicatos y entidades de carácter

⁵² Expediente de Responsabilidades Políticas a Manuel Llobet Marín. Archivo Histórico Provincial de Castellón. Caja 10080. Manuel Llobet Marín tenía 37 años y su profesión era oficinista. Ver la denuncia en el Apéndice Documental.

⁵³ En el informe de FET de las JONS se le acusa de haber salido a la calle con armas, por lo que acabó siendo detenido y encarcelado en la posterior represión del movimiento revolucionario de 1934.

católico, formar parte del Comité local que decidió la quema de las Iglesias y ermitas del término⁵⁴, con su posterior saqueo, así como ser el inductor del saqueo de los bienes personales, detención y posterior asesinato de al menos 20 personas de ideología conservadora⁵⁵. Por todo ello, el inculpaado mereció los calificativos más duros, como *es elemento peligroso para el nuevo Estado*⁵⁶ o *es individuo desafecto y peligroso para el Nuevo Estado e indeseable para la actual sociedad*⁵⁷.

Se trataba, por tanto, de una persona a depurar por parte del régimen franquista. Sin embargo, Manuel Llobet Marín se halló durante todo el proceso en paradero desconocido. Carente de consejo de guerra previo es probable que lograra desaparecer, ya fuera huyendo del país⁵⁸, consiguiendo una identidad nueva o muriendo en la guerra. No obstante, lo significativo del caso es que las autoridades franquistas decidieron incoar la causa a pesar que también eran conocedoras que el inculpaado no poseía bienes de ningún tipo. Se conseguía así amedrentar a sus familiares directos, presionar al inculpaado allí donde estuviese y, en definitiva, hacer pagar las culpas a la familia del inculpaado.

De esta forma, y aunque el inculpaado no poseía bienes de ningún tipo y se hallaba en paradero desconocido, el 12 de julio de 1940 se le condenó a confinamiento a la provincia de Soria durante 15 años, inhabilitación absoluta y a una sanción de 10.000 pesetas. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, la sentencia se declaró firme el 13 de febrero de 1941. El juez

⁵⁴ En el informe de la Alcaldía se le acusa de formar parte de una Junta Secreta que, de acuerdo con el Gobernador civil de la provincia, planificaba la represión de personas de derechas.

⁵⁵ Tanto la Guardia Civil como FET de las JONS le acusaron de haber inducido la detención muchas personas y del posterior asesinato de Joaquín París, José Nebot, Vicente Bonig, Enrique Moya Porcar, Ramón Borrachina, Joaquín Beltrán, Vicente Centelles, Salvador Orenga, Bautista Nabas, Ignacio Orenga, Arsenio Peñarroja y Fernando Bovaira, todos ellos asesinados en el cementerio de Castellón el 2 de octubre de 1936; también de Leopoldo Peñarroja, los párrocos Recaredo Centelles y Vicente Arambul, y de Ramón Pitarch, Secretario del Juzgado municipal, sacados de sus casas y asesinados en el cementerio de Nules la mañana del 25 de octubre de 1936; así como de Salvador Orenga, Vicente Segarra Serrano, Bernardo España, José Forner, J. Bautista Serra y José Paula, ejecutados en los cementerios de Nules y Almenara en los meses de febrero y marzo de 1937.

⁵⁶ Informe de FET de las JONS.

⁵⁷ Denuncia de la Guardia Civil.

⁵⁸ Sin embargo, en algunos de los casos analizados el inculpaado había conseguido huir pero las autoridades franquistas eran conocedoras de ello.

ordenó que, ante la incomparecencia del acusado, se informara a los familiares de las sanciones⁵⁹. Tras tres años, ocho meses y una semana, el caso fue sobreesido el 16 de noviembre de 1943. Las responsabilidades políticas se declararon pagadas.

El último caso de vecino de la Vall d'Uixó denunciado por las autoridades locales fue Julio Bernat Serrano⁶⁰, quien aparecía en el siguiente escrito de denuncia del Delegado Local de FET y de las JONS en enero de 1941:

Tengo el honor de mandarle informes del vecino de esta JULIO BERNAT SERRANO natural de esta domiciliado en la calle de la Trinidad.

Antes del G.M.N. pertenecía al partido Republicano de Izquierdas de esta localidad, en las elecciones del 16 de febrero de 1936 fue apoderado del Frente Popular.

Durante el dominio rojo siguió con los mismos ideales manifestándose públicamente que era partidario de que se asesinase a las personas de derechas, de lo cual se alegraba mucho cuando tal cosa ocurría; fue alcalde de ésta unos días.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.

Vall de Uxó, 25 de enero de 1941

El delegado de Información.

Tras esta denuncia el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas ordenó la incoación de su expediente en marzo de 1941. En mayo de ese año se recibieron los informes de las autoridades locales, que describieron confusamente su actuación política. Así, el Comandante de la Guardia Civil de la Vall d'Uixó, Amadeo Bartoll Aicart, tras vincularlo al Frente Popular, aseguró que su conducta y moralidad fueron buenas, aunque se había distinguido como militante de Izquierda Republicana. Todas las autoridades incidían en su situación de pobreza, ya que aseguraban que trabajaba por su cuenta como sastre, aunque poco *por su estado físico*, con lo que suponemos que estaba enfermo o impedido. De hecho, le calificaron como *completamente insolvente, por carencia de bienes de fortuna e inútil para el trabajo*. Su situación de miseria queda clara con estas palabras extraídas del informe de la Guardia Civil: *No gana ningún jornal, pues se halla cobijado en casa de su hermana [...], que le procura manutención*

⁵⁹ Seguramente los familiares no podrían hacer frente a esta sanción económica, por lo que ésta nunca llegaría a ser pagada. Sin embargo, no existe ninguna duda que la familia de Manuel Llobet Marín se vio inmersa en una intensa presión económica y social por parte de las autoridades franquistas. Como hemos visto, una de las razones de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas en febrero de 1942 fue el relativo fracaso a la hora de que los inculpaos pagaran la sanción económica correspondiente, ya que normalmente se hallaban en la pobreza.

⁶⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Julio Bernat Serrano, Caja 10258. AHPCS.

y le asiste. Estos eran, pues, algunos de los “enemigos de la patria” que la Ley de Responsabilidades Políticas trataba de depurar.

Ante este panorama el Juez Instructor Provincial Víctor Núñez Escalona dictó una providencia en la que se ordenaba la suspensión de los trámites contra Julio Bernat Serrano. La razón no era otra que las órdenes que ya en mayo de 1941 tenían los jueces instructores de centrarse únicamente en aquellos casos de los que pudiera sacarse réditos económicos. De esta forma, el caso quedó paralizado hasta su resolución definitiva en enero de 1943, en el que, aplicando la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942, este caso quedaba sobreseído, lo que no se hizo efectivo hasta septiembre de 1943. Por tanto, el procesamiento por responsabilidades políticas de esta persona pobre e impedida duró dos años y seis meses, de marzo de 1941 a septiembre de 1943.

Pero, ¿qué motivaría la materialización de estas denuncias en el contexto de la posguerra? ¿Por qué la Guardia Civil en los meses de marzo y agosto de 1940 se decidieron a elevar estas denuncias a las autoridades? ¿Por qué denunciar en ese momento a una persona desaparecida desde 1938? La respuesta es, sin duda, difícil, compleja e incierta. En un contexto de miedo, hambre, disciplina y sospecha constante, la respuesta puede ser muy variada: desde el desencadenamiento de antiguas rencillas personales a la circulación de algún rumor o noticia sobre los inculpados, pasando por la posibilidad de la extorsión o incluso la presión de las autoridades franquistas para realizar las denuncias, la búsqueda de méritos o recompensas “cazando” antiguos republicanos, la envidia, etc. La Ley de Responsabilidades Políticas, como hemos visto, sumió a la sociedad española en la sospecha, el miedo y la incertidumbre.

Estos cuatro primeros ejemplos analizados constituyen, dentro del conjunto de personas que fueron procesadas por responsabilidades políticas en la Vall d’Uixó, casos especiales, ya que, como hemos indicado, la mayoría de ellos, 58 de 62 casos, lo fueron como consecuencia de haber sufrido previamente un consejo de guerra. Hemos de recordar que esta práctica jurídica militar se generalizó por toda España a partir de mayo de 1939. Casi siempre colectivos, marcados por una gran rapidez y con la posibilidad de

un interrogatorio previo⁶¹, ofrecían escasísimas garantías procesales⁶². En un contexto de intensa militarización social, podían fácilmente incluir la tortura y castigaban hechos retroactivamente que en su tiempo no constituían delito, convirtiéndose en una parodia legal utilizada como pretexto para la depuración de los vencidos, como lo demuestra la profusa aplicación del concepto de rebelión militar. Invadida la justicia ordinaria por la militar, la utilización de los consejos de guerra se prolongó hasta finales de los años 1940, (aunque en los casos que conocemos de consejos de guerra a habitantes de la Vall d'Uixó el último de ellos es de junio de 1940), lo que demuestra su utilidad como instrumento de control social y represión. Sin duda, constituyeron uno de los principales elementos de violencia tanto física como psicológica utilizados por el régimen franquista.

Los consejos de guerra tenían una composición plenamente militar y aplicaban una legislación totalmente castrense. Su presidente era un jefe militar, acompañado por tres oficiales y un asesor titular y honorífico del Cuerpo Jurídico. El Ministerio Fiscal solía recaer en un oficial libremente designado por el general jefe del Ejército. El defensor era desempeñado por un militar, normalmente de baja graduación, que solía limitarse a pedir clemencia o la rebaja de la sentencia demandada por el Fiscal. En general, se trataba de personal adicto al régimen, muchas veces sin excesiva experiencia judicial.⁶³

⁶¹ En el resumen del consejo de guerra del expediente de responsabilidades políticas de Manuel Ferreres Villalba, después de la descripción del encausado y de los hechos cometidos se añade “cuyos hechos confiesan ambos procesados en el interrogatorio a que fueron sometidos en el acto de Consejo de Guerra”. Archivo Histórico Provincial de Castellón, caja 10146.

⁶² Aunque algunos de sus protagonistas los defienden precisamente porque implicaban cierta legalidad frente a los crímenes libres o a la represión desenfrenada. Ver el testimonio de Juan de Gorostidi en S. MORO, op. cit., pp. 272-275. Por el contrario, para M. ORTIZ, los consejos de guerra no buscaban eliminar la violencia arbitraria de los primeros momentos del régimen de Franco, al menos de forma prioritaria y generalizada, ya que ésta se continuó ejerciendo con el beneplácito de las autoridades, aunque reconoce que finalmente sí se consiguió por la fuerza lograr el orden social y la paz civil. M. ORTIZ, op. cit., pág. 367.

⁶³ El caso comentado anteriormente de Juan de Gorostidi puede servir de ejemplo. Licenciado en Derecho de 27 años al iniciarse la guerra civil, se unió a las tropas franquistas y después fue nombrado directamente teniente jurídico militar para ejercer de juez o, en sus propias palabras, *de lo que fuera necesario* en los consejos de guerra. Después lo nombraron defensor, un cargo del que asegura la gente huía y que asegura era complicado de ejercer. Según Gorostidi en los consejos de guerra se quería ser justo, entendiendo justicia a la aplicación de la ley de aquel tiempo. S. MORO, op. cit., pp. 274-275. Para el análisis de la composición de estos consejos de guerra M. ORTIZ, op. cit., pp. 376-378.

Como hemos visto, cualquiera podía ser acusado de colaboración con la República, iniciándose un procedimiento sumarísimo que comenzaba con los informes que sobre el acusado emitían la Alcaldía, el jefe local de FET de las JONS, la Guardia Civil y el cura párroco de la localidad. A continuación se redactaba el auto de procesamiento, que incluía el delito presuntamente cometido, el artículo del Código de Justicia Militar infringido y el procesamiento del acusado en prisión incondicional. A continuación el Auditor de guerra informaba a los correspondientes director de la prisión y autoridad militar, tras lo cual se elaboraba un autorresumen preparado para el consejo de guerra. Este proceso podía durar meses e incluso años. Una vez designados un Fiscal y un Defensor se decidía la fecha y lugar del consejo de guerra. Éste era público y, en la práctica, se convertía en un acto de arenga política en el que el Fiscal pedía la pena más alta sin probar nada, sólo exponiendo los motivos de la condena, tras lo cual el defensor hacía lo que podía. Las vistas incluían a un grupo más o menos numeroso de personas, procesadas a la vez por diferentes delitos. Finalmente se les preguntaba si tenían algo que alegar, admitiendo únicamente una afirmación o una negativa. Posteriormente se redactaba un acta del juicio y el presidente leía un autorresumen. Tras una breve deliberación se daba a conocer la sentencia y el Auditor de guerra redactaba una versión definitiva. Esta sentencia se daba a conocer a la Justicia Militar, a las autoridades penales y, a partir de febrero de 1939, a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, quienes debían determinar una sanción económica.⁶⁴

Como hemos indicado, de los 62 casos de procesamiento por responsabilidades políticas de ciudadanos de la Vall d'Uixó, 58 lo fueron como consecuencia de haber sufrido el paso por un consejo de guerra con anterioridad, después de acabada la guerra civil, y que disponemos de 71 casos más que lo hicieron aunque posteriormente su caso no se derivó a responsabilidades políticas, lo que hace un total de 133 ciudadanos de la Vall d'Uixó que pasaron por un consejo de guerra. Sin embargo, hemos de dejar claro que se trata de los casos que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Castellón, que a su vez proceden de los Juzgados Provinciales de Castellón, donde se encontraban amontonados en un estado de dejadez que nos hace prever la posibilidad

⁶⁴ Para la descripción y análisis del funcionamiento de los consejos de guerra nos hemos basado en M. ORTIZ, op. cit., pp. 379-381, y E. GONZÁLEZ, op. cit., pp. 130-137.

del deterioro de algunos expedientes o incluso la desaparición, interesada o no, de los mismos. En este sentido, trabajamos con las fuentes disponibles, con las que nos han llegado, pero consideramos la posibilidad que éstas no lo hayan hecho de forma completa.

Según los datos que disponemos, el 1,38%⁶⁵ de los ciudadanos de la Vall d'Uixó pasaron por un consejo de guerra, cifra similar a las registradas en las comarcas leridanas, que se sitúan entre el 0,83% y el 1,55%⁶⁶, aunque es relativamente baja respecto a las zonas que sufrieron la represión más duramente, como el caso de Albacete, con el 9,2%⁶⁷. Estos consejos de guerra que afectaron a los ciudadanos de la Vall d'Uixó que posteriormente fueron procesados por responsabilidades políticas se celebraron en Burriana (26 casos), Castellón (24) y Valencia (4)⁶⁸, poblaciones que, como hemos comentado, disponían de prisiones comarcales o provinciales. Atendiendo a la fecha de inicio del consejo de guerra el primero se celebró en febrero de 1939 y el último en agosto de 1941⁶⁹. Las correspondientes sentencias aparecieron en el periodo comprendido entre julio de 1939 y septiembre de 1941⁷⁰, ofreciendo la siguiente periodización:

⁶⁵ Nos basamos en la cifra de habitantes de la Vall d'Uixó de 1940, que era de 9.630, según R. VIRUELA (1980), "Dinámica poblacional...", op. cit., pág. 325.

⁶⁶ C. MIR, F. CARRETGÉ, J. FARRÉ, J. SAGUÉS, op. cit., pág. 130.

⁶⁷ M. ORTIZ, op. cit., pág. 369.

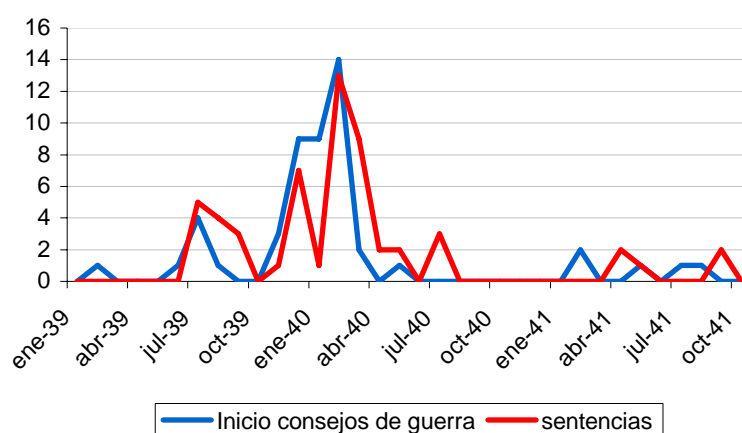
⁶⁸ En la documentación consultada no aparece el lugar de realización del consejo de guerra en 4 casos. El primer consejo de guerra celebrado en Burriana es del 6 de febrero de 1939 y el último es del 20 de junio de 1940; en Castellón el primero se celebró el 7 de junio de 1939 y el último el 28 de agosto de 1941; en Valencia, donde sólo se contabilizamos cuatro casos, el primero es del 8 de marzo de 1940 y el último del 25 de mayo de 1940.

⁶⁹ Desconocemos la fecha de del inicio del consejo de guerra en cinco casos.

⁷⁰ Desconocemos la fecha de la sentencia del consejo de guerra en tres casos.

Gráfica 11.4

Consejos de guerra: comparativa entre la fecha de inicio del consejo y la publicación de la correspondiente sentencia



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Como podemos observar los consejos de guerra se iniciaron cuando la guerra civil todavía no había finalizado, es decir, cuando la Vall d’Uixó todavía no había sido tomada por el ejército franquista. Sin embargo, hasta noviembre de 1939 sólo habían pasado siete ciudadanos de la Vall d’Uixó por los consejos de guerra. Es en el período comprendido entre noviembre de 1939 a abril de 1940 cuando se procede al procesamiento de la mayoría de los casos y, por tanto, se puede considerar el periodo de mayor intensificación de este tipo de represión⁷¹. Es destacable la intensificación de la celebración de consejos de guerra en el año 1941, tras un año 1940 en el que éstos habían limitado su celebración. En cuanto a las sentencias, se solían producir rápidamente, con un promedio de 34,9 días desde el inicio del consejo de guerra, existiendo una gran variedad de situaciones según el caso⁷². De hecho, el consejo de guerra más rápido se produjo en abril de 1940, cuando la sentencia se ratificó y aprobó

⁷¹ Aunque no hemos de olvidar que la mayoría de los procesados se encontraban en distintas cárceles repartidas por toda España y, por tanto, hacía tiempo que sufrían el rigor de la represión franquista.

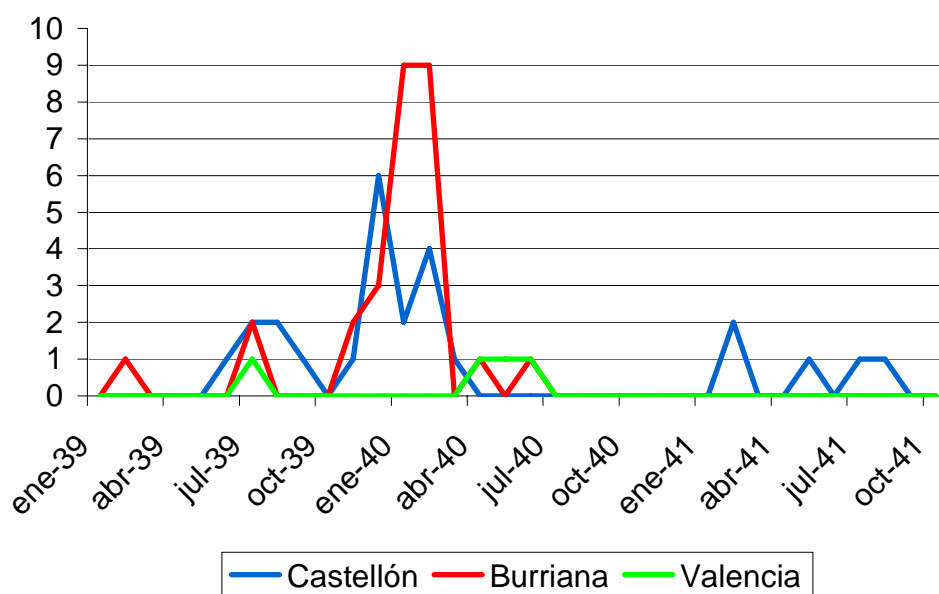
⁷² En general, se observa una mayor rapidez en los procesos de guerra celebrados en 1939, con un promedio de 27,8 días, que en los de 1940, con un promedio de 39,5 días, que se explicaría por la urgencia de depurar a los vencidos y la progresiva “normalización” de la situación a medida que el régimen franquista se asentaba.

Hemos de recordar que las fuentes consultadas no permiten calcular el tiempo transcurrido entre el inicio del consejo de guerra y la aprobación de la sentencia correspondiente en nueve casos por falta de datos.

el mismo día en que se celebró la vista⁷³, mientras que hubo otro caso en el que se tardó 141 días⁷⁴.

Gráfica 11.5

Celebración de los consejos de guerra a los ciudadanos de la Vall d'Uixó que posteriormente fueron procesados por responsabilidades políticas



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Un dato esencial para la identificación social de los implicados en estos consejos de guerra es su afiliación política. Como la pertenencia a partidos, sindicatos o asociaciones de izquierda era considerado en los consejos de guerra como delito, siguiendo a la legislación franquista de guerra, en los mismos se especifica la orientación política de los inculpados como un delito cometido más. En algunos casos se nombra la pertenencia de los inculpados a partido político y sindicato a la vez y, en algunos casos, se especifica la evolución política del inculpadado antes y durante la guerra

⁷³ Se trata del consejo de guerra celebrado contra Pedro Martínez Paredes el 20 de abril de 1940 en Valencia, con una sentencia de 30 años de reclusión mayor. AHPCS, caja 10144. Existe otro ejemplo en el que la sentencia tardó sólo seis días en ser firmada y ratificada.

⁷⁴ Es el caso del consejo de guerra contra José Palomo Orenga, iniciado el 15 de febrero de 1940 y con sentencia ratificada el 4 de julio del mismo año, con una sentencia de pena de muerte que se hizo efectiva el 11 de septiembre de 1940 en Castellón. AHPCS, caja 10144. V. GABARDA, op. cit., pág. 246.

civil. En otros casos no se identifica políticamente al inculcado, aunque se añade el dato general que tiene “ideología o antecedentes izquierdistas”. Tal y como ofrecemos en el siguiente cuadro, predominan claramente los socialistas y los afiliados a la UGT, labradores, alpargateros y trabajadores manuales en su mayoría, demostrando la implantación que tenían en la localidad desde antiguo. Destaca especialmente la presencia de 15 casos de miembros de las Juventudes Socialistas, todos ellos menores de 35 años, que evidencian la implicación en la guerra y en los conflictos que durante ella hubo en la localidad de los más jóvenes. También constatamos la presencia de elementos anarquistas, especialmente fortalecidos durante el conflicto civil, y los más moderados republicanos de izquierda, normalmente asociados a personas dedicadas a los pequeños negocios y al comercio. Residualmente aparecen otros partidos políticos y asociaciones, algunas de las cuales desconocemos su identidad.

Tabla 11.3

Partido Socialista	12	Juventudes Izquierda Republicana	1
Juventudes Socialistas	16	Esquerra Valenciana	1
UGT	14	Frente Popular	1
Izquierda Republicana	8	Partido Comunista	2
CNT-FAI	6	C.L.U.E.A. ⁷⁵	2
Unión Republicana	2	C.R.E. ⁷⁶	1

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

⁷⁵ Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola. Este organismo surgió en octubre de 1936 con el objetivo del control de la venta exterior de cítricos, especialmente de la campaña naranjera de 1936-1937, para obtener recursos para la República. Promovido por UGT y CNT, controlaba el proceso productivo desde la recolección de la naranja hasta su venta en el exterior. Dependientes del CLUEA, en cada localidad se crearon Comités Locales de Exportación de Frutos (CLUEF) para el control específico de la naranja. El desarrollo de la guerra, la falta de confianza, la inexperiencia y la improvisación acabaron por hacer fracasar este intento renovador del sector agrario y en septiembre de 1937 el Estado asumió sus funciones y lo sustituyó por la Central de Exportación de Agrios (CEA), un nuevo organismo que no tuvo un mayor éxito. A. GIRONA, *Guerra i Revolució al País Valencià (1936-1939)*. Valencia. Tres i Quatre, 1986, pp. 455-473; A. BOSCH, *La economía revolucionaria*, en *La guerra civil en la Comunidad Valenciana*. Valencia, 2006, pp. 86-95; M. VICENT BALAGUER, *Conflicto y revolución en las comarcas de Castelló, 1931-1938*. Castelló, 2006, pp. 168-176.

⁷⁶ Desconocemos el significado de estas siglas, pero podría tratarse de la anteriormente citada Central de Exportación de Agrios (CEA).

De esta forma, está claro que los consejos de guerra, y posteriormente la Ley de Responsabilidades Políticas, se aplicó intencionadamente sobre un sector de la sociedad muy determinado, el de los trabajadores comprometidos políticamente con organizaciones de izquierda, unos trabajadores que, haciendo caso de algunos de los delitos que se les imputan en los consejos de guerra, y que desarrollaremos más adelante, se significaron durante la guerra civil en acciones de carácter revolucionario de fuerte calado público y no siempre pacíficas.

Estas personas fueron acusadas de una serie de delitos que nos dan información sobre algunas acciones revolucionarias durante la guerra civil a la Vall d'Uixó, como el uso de armas por la calle, violaciones de la propiedad privada, denuncia, detención política y, en algunos casos, ejecución de personas de orientación conservadora, la quema de la Iglesia, ermitas y convento de la localidad, la profanación de imágenes y símbolos religiosos, la transformación del convento de la Divina Providencia en checa y prisión, el asesinato de personas, tanto de la Vall d'Uixó como de otras localidades cercanas, la formación de un Comité revolucionario local y de Juntas de incautación, el asalto al cuartel de la guardia civil, el control de la fábrica Segarra, etc., con lo que parece que en la Vall d'Uixó el intento revolucionario propiciado por la guerra fue de una alta intensidad. Evidentemente la posterior represión que estamos analizando debe mucho al afán de justicia vengativa.

Normalmente cada uno de los procesados en los consejos de guerra era acusado de la comisión de varios delitos, los más frecuentes los relativos a la filiación política, el uso de armas y la destrucción de templos. En la siguiente tabla resumimos estas acusaciones con el número de veces que se repite:

Tabla 11.4

ACUSACIONES CONTRA LOS PROCESADOS

Delito	Nº de acusaciones	Delito	Nº de acusaciones
Pertenencia a partidos políticos	37	Propaganda roja	4
Quema y saqueo de templos	25	Denuncia de personas	4
Miliciano armado	25	Desempeño de cargo municipal	4
Tolerar o mandar asesinato	22	Provocación pública	4
Pertenencia a sindicatos	20	Actos revolucionarios en octubre de 1934	4
Dirigente de partido o sindicato	19	Presenciar la quema de la Iglesia y ermitas	3
Pertenencia al Comité revolucionario	16	Mala conducta	3
Detención de personas	16	Pertenecer al ejército republicano	3
Realizar guardias o controles en carreteras	15	Delación de personas	3
Incautaciones y requisas	15	De malos antecedentes	3
Saqueos	14	Pertenecer a la Junta de Incautaciones Agrícolas	3
Usar armas	14	Desafecto a la causa franquista	2
Vigilancia de la prisión o checa	12	Asalto al cuartel de la Guardia Civil	2
Incorporación voluntaria al ejército republicano	12	Amenazas a personas	2
Realizar registros domiciliarios	12	Revolucionario	2
Participar en huelgas, manifestaciones o mítines	9	Pertenencia a asociación obrera	1
Profanación de imágenes religiosas	8	Dirigente del periódico anarquista “Fragua social”	1
Pertenecer a la Junta de control de la empresa Segarra	8	Pertenencia a la Sociedad Cooperativa “La luz del porvenir”	1
Tener ideas izquierdistas	7	Educación roja a los niños	1
Comisión directa de asesinatos	7	Desatención de súplicas de clemencia	1
Robos	7	Propagador de ideas revolucionarias	1

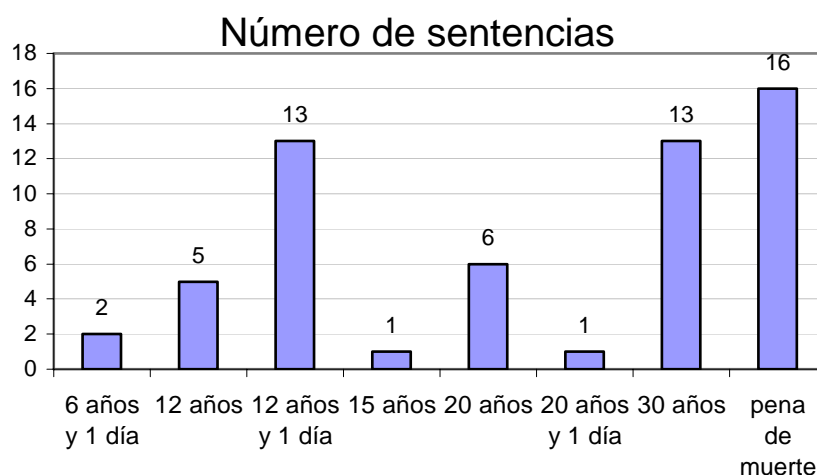
Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Sin embargo, estos trabajadores fueron acusados en los consejos de guerra de delito que no eran tales, ya que constituían acciones perfectamente legales cuando se cometieron. Estamos hablando de la pertenencia a partidos políticos, sindicatos y cooperativas, a la condición de dirigente de éstos, a la incorporación voluntaria al ejército republicano, al desempeño de cargos en la administración municipal, a la impartición de una educación laica en la escuela, a la dirección de un periódico, a la manifestación de ideas izquierdistas, a la participación en huelgas y manifestaciones o a la simple asistencia a mítines políticos. Finalmente, también se les imputó sus actuaciones en el año 1934, unas acciones por las que ya sufrieron el correspondiente castigo y que ahora vuelven a ser objeto de sanción. Por tanto, independientemente de las acciones que legalmente podían ser castigadas, el régimen franquista utilizó todos sus medios para castigar a estas personas que se habían significado por su total oposición al mismo.

La mayoría de estas personas fueron acusadas por todas estas imputaciones de delito de rebelión. En concreto 24 lo fueron por adhesión a la rebelión, lo que solía comportar las penas más graves, 10 por auxilio a la rebelión, 2 por excitación a la rebelión y 1 por rebelión. Los 20 restantes fueron simplemente condenados sin hacer mención a este delito que, como hemos explicado, sirvió para aplicar de forma abusiva la legislación militar más dura sobre población civil.

Gráfica 11.6



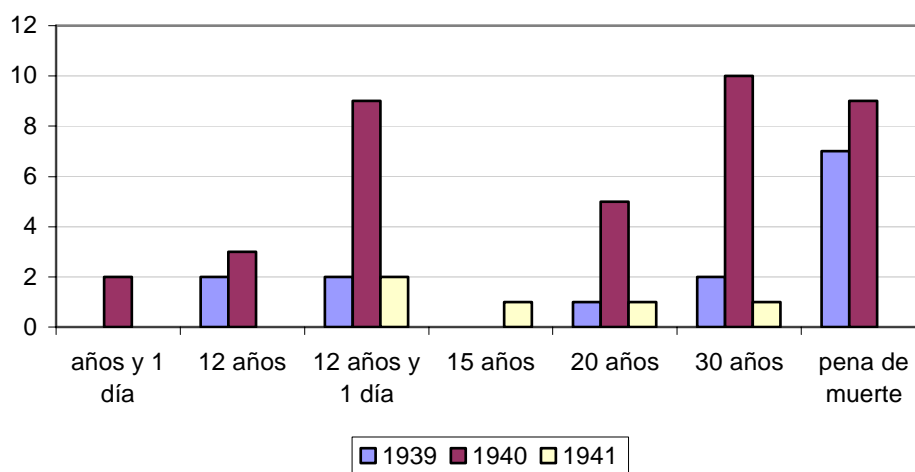
Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

En cuanto a las sentencias, ya hemos visto cómo se publicaban con una media de 34,9 días respecto al inicio del consejo de guerra, a pesar que hubo procesos muy rápidos y otros bastante largos, y cómo la primera se ratifica en julio de 1939 y la última en septiembre de 1941. 1940 es el año que concentra mayor número de sentencias. En general, éstas fueron muy duras, ya que destacan las condenas a muerte y las de 30 años de reclusión mayor⁷⁷, tal y como refleja la siguiente gráfica:

Gráfica 11.7

Años de condena según el año en que se publica la sentencia



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

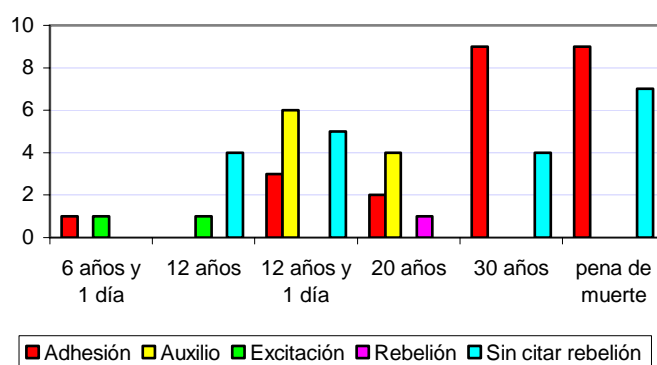
Elaboración propia

Como hemos indicado, normalmente las penas más graves estaban asociadas al delito de adhesión a la rebelión, seguida del de auxilio a la rebelión y de excitación a la rebelión.

⁷⁷ Excepto las dos condenas a 6 años y 1 día, que son de prisión mayor, el resto son penas de reclusión mayor o menor. En principio, la pena de prisión es inferior a la de reclusión.

Gráfica 11.8

Tipo de condena según el tipo de imputación de delito



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Las sentencias de los consejos de guerra incluían, además, penas accesorias que se añadían a la pena principal de prisión o reclusión. En todas las sentencias se incluía el pago de responsabilidad civil sin límite de cuantía, ya que ésta debía ser fijada con posterioridad por los Tribunales de Responsabilidades Políticas. De esta forma, a los inculcados les quedaba claro que la exigencia de responsabilidades no finalizaba con el consejo de guerra. Otras penas accesorias eran la indemnización a los directamente afectados por los hechos investigados, el abono de prisión preventiva⁷⁸, la inhabilitación absoluta y la interdicción civil durante el tiempo de condena.⁷⁹

Un caso especial era el de los condenados a muerte, para los que se establecían penas accesorias en el caso que se produjera un hipotético indulto. En este caso se establecía la inhabilitación absoluta y/o la interdicción civil durante el tiempo de la nueva condena y el abono de prisión preventiva. En uno de los casos se estableció, en caso de indulto, la inhabilitación perpetua. De todas formas, como veremos, excepto en uno, todos los casos de condena de muerte acabaron en ejecución, por lo que a los afectados no se les pudo aplicar estas penas accesorias.

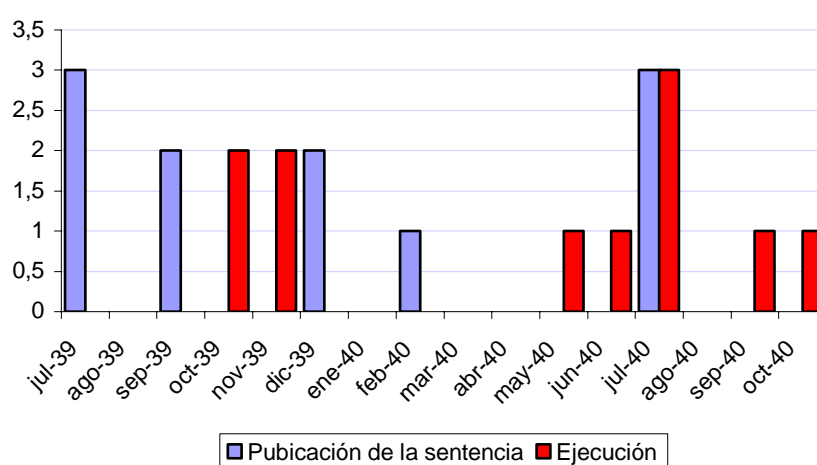
⁷⁸ El tiempo pasado en la cárcel por el inculcado contaba para el tiempo total de la condena.

⁷⁹ La interdicción civil suponía la privación de los derechos civiles marcados por la Ley. Se aplicó a 5 de los encausados. La inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena se aplicó a 15 encausados.

En total, en los consejos de guerra a ciudadanos de la Vall d'Uixó que después fueron sometidos a la jurisdicción de responsabilidades políticas se dictaron 16 condenas de muerte, lo que supone el 27,5%. Excepto el caso de José Salafranca Alminir⁸⁰, el resto de casos acabaron con la ejecución del inculcado, lo que demuestra la dureza y el alcance de la represión llevada a cabo.

Gráfica 11.9

Relación entre la publicación de sentencia de muerte y su ejecución



Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

La ejecución de la sentencia de muerte tardaba por término medio 113 días en llevarse a cabo, aunque esta cifra puede llevar a engaño porque, como vemos en el siguiente cuadro, existen casos en que tardó sólo 24-26 días y otros en que se supera ampliamente los 100 días. En general, se observa cómo es en las últimas sentencias de pena de muerte, ya en el año 1940, cuando los plazos se acortan. Excepto en cuatro casos, las ejecuciones se llevaron a cabo en Castellón⁸¹, entre octubre de 1939 y septiembre de 1940.⁸²

⁸⁰ En este caso no tenemos constancia que fuera ejecutado. Únicamente conocemos que el 7 de mayo de 1943 estaba preso en la cárcel de San Miguel de los Reyes en Valencia. Sin embargo, tampoco tenemos constancia que su pena de muerte fuera modificada. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Salafranca Alminir, Caja 10158. AHPCS.

⁸¹ En el caso de José Gil Moliner las fuentes especifican que el método elegido para la ejecución fue el fusilamiento. Suponemos que el resto de ejecuciones también se llevaron a cabo a través de este procedimiento. Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Gil Moliner, Caja 10206. AHPCS.

Tabla 11.5

Nombre	Publicación sentencia	Ejecución	Días transcurridos entre publicación de la sentencia y ejecución	Lugar de ejecución
Manuel Ferreres Villalba	4 de julio de 1939	11 de octubre de 1939	100	Castellón
Wenceslao Ferrer Tur	4 de julio de 1939	11 de octubre de 1939	100	Castellón
Vicente Montesinos Dupla ⁸³	8 de julio de 1939	4 de noviembre de 1939	120	Burriana
José Salafranca Alminir	8 de septiembre de 1939	Sin constancia de ejecución		
Vicente Nebot Prior	11 de septiembre de 1939	27 de noviembre de 1939	78	Castellón
Francisco Font Borrás	22 de diciembre de 1939	21 de mayo de 1940	152	Castellón
Heraclio Badal Rosell ⁸⁴	22 de diciembre de 1939	15 de junio de 1940	177	Castellón
Alejandro Valero Montesinos	25 de diciembre de 1939	Sin constancia de ejecución		
José Gil Moliner ⁸⁵	20 de febrero de 1940	26 de octubre de 1940	250	Castellón
Andrés Segarra Valls	26 de febrero de 1940	27 de julio de 1940	153	Castellón
José Font Roig	26 de febrero de 1940	Sin constancia de ejecución		
Joaquín Giménez Mangriñán	26 de febrero de 1940	Sin constancia de ejecucion		
José Marco Tur	15 de marzo de 1940	Ejecutado sin fecha		

⁸² M. EIROA, op. cit. En cuanto a la represión franquista referida a las ejecuciones de republicanos en general el año con más muertes fue 1939, seguido de un periodo que llegó hasta 1942 de una gran violencia. A la altura de este último año pocos líderes habían escapado a la represión o al exilio.

⁸³ V. GABARDA lo cita en su libro sobre las ejecuciones en Almenara, aunque parece que tenía relación con la Vall d'Uixó. V. GABARDA, op. cit., pág. 242.

⁸⁴ Citado como Heraclio Nadal Borrell en V. GABARDA, op. cit., pág. 246.

⁸⁵ Este caso no se cita en V. GABARDA, op.cit.

Alfredo Ibáñez Martínez	4 de julio de 1940	29 de julio de 1940	26	Castellón
Joaquín Valero Peiró	4 de julio de 1940	27 de julio de 1940	24	Castellón
José Palomo Orenga	4 de julio de 1940	11 de septiembre de 1940	70	Castellón

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

Como veremos más adelante, y como permitía la Ley de Responsabilidades Políticas, la desaparición de la persona inculpada no detenía el proceso de exigencias de responsabilidades de tipo político, trasladándose la exigencia en este caso a las familias de los desaparecidos.

Ya sabemos que uno de los objetivos de la Ley de Responsabilidades Políticas era la recaudación de dinero para llevar a cabo la reconstrucción del país después de la guerra civil. Se trasladaba la responsabilidad de las destrucciones a los republicanos y se trataba que, en la medida de lo posible, fueran éstos los que sufragaran los grandes gastos necesarios. No hay que olvidar que en el fondo esto no era más que un castigo a añadir a la situación de los republicanos en la posguerra. De los 53 casos de ciudadanos de la Vall d'Uixó que conocemos que fueron procesados por responsabilidades políticas, 13 fueron condenados al pago de una sanción económica. A continuación trataremos de desvelar su perfil y qué ocurrió con ellos.

De estos 13 procesados conocemos en 11 casos su profesión. Se trataba de un metalúrgico que trabajaba en la empresa Segarra, un albañil, dos labradores, dos alpargateros, dos zapateros, un dependiente, un comerciante y un industrial. En principio, algunos de ellos no eran susceptibles de sufrir sanción económica por el hecho de tener un oficio poco lucrativo. Sin embargo, la clave no estaba en la profesión sino en la declaración de bienes y su posterior valoración. La Ley de Responsabilidades Políticas establecía que los inculcados debían realizar una declaración jurada de bienes que servía posteriormente para valorar si se les podía o no imponer una sanción económica. Existía, pues, una voluntad manifiesta de penalizar a aquellos republicanos

con posibilidades económicas⁸⁶, considerados en el fondo los verdaderos responsables de los hechos juzgados. Salvo en uno de los casos analizados, todos los procesados realizan dicha declaración jurada de bienes⁸⁷, que se les valora con un mínimo de 400 pesetas y un máximo de 11.958 pesetas. En todos los casos los bienes que se declararon fueron casas (compartidas con otros familiares o no), tierras (con más o menos extensión) y en un caso dinero en una cuenta bancaria⁸⁸.

Sin embargo, no todos los condenados al pago de la multa acabaron pagando. De los 13 casos mencionados sólo seis pagaron, satisfaciendo dos sanciones de 100 pesetas, una de 250 pesetas, dos de 500 pesetas y una de 1.000 pesetas, es decir, una cantidad total de 2.450 pesetas. Tras la publicación de la sentencia se le daba al inculcado un plazo de tres días para que presentara un escrito de defensa, que normalmente no se presentaba. Posteriormente, una vez oficialmente notificada la sentencia definitiva al procesado se solía satisfacer con rapidez⁸⁹: cuatro de los casos que pagaron lo hicieron a los 7 días, a los 11 días, a los 18 días y a los 59 días. El pago de la sanción económica se realizaba en la “Cuenta Especial” de la Delegación de Hacienda correspondiente y significaba la recuperación de la libre disposición de los bienes personales, que durante el proceso estaban en situación de embargo, lo que se materializaba con el anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Provincia. Sin embargo, con el pago de las sanciones económicas sólo se satisfacía la parte económica de la

⁸⁶ De hecho, en los expedientes de aquellos ciudadanos que poseían algún tipo de bienes (casas, fincas, dinero en banco, etc.) se señalaba en lápiz rojo y con letras bien visibles la palabra “bienes”, como señalando que en ese expediente había posibilidades de sacar dinero.

⁸⁷ En la declaración jurada de bienes el procesado debía declarar sus datos personales, sus cargas familiares, sus bienes de todo tipo y sus deudas. Éstas no parece que influyeron excesivamente a la hora de dictar sentencia. Sólo cuatro de los procesados analizados admitieron tener deudas, en uno de los casos por un valor muy superior a la valoración de los bienes personales.

⁸⁸ Era frecuente intentar ocultar los bienes personales para evitar una fuerte sanción. Por ello la Ley de Responsabilidades Políticas exigía los informes de las autoridades locales (Alcaldía, FET de las JONS, cura párroco y Guardia Civil) para su contraste. Los mecanismos más habituales consistían en declarar que los bienes que se poseían, ya fueran casas o fincas, eran compartidas con hermanos o con el padre o la madre, y que no se disfrutaba enteramente de su propiedad. Sin embargo, esto no servía normalmente más que para afectar a los mismos en el proceso (futuro embargo de bienes, etc.) y no solía impedir la sanción económica. Un caso singular fue el de Pascual Plaza Albalat, que no declaró ninguna de sus fincas porque aseguró que se las cedió verbalmente a su hermana a cambio de dinero, sin que constara la operación en ningún documento oficial. Obviamente el Tribunal no hizo caso de esta maniobra. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Plaza Albalat, Caja 10145. AHPCS.

⁸⁹ Legalmente se concedía al condenado un plazo de 20 días para hacer efectiva la sanción. Transcurrido este plazo, si no se había procedido al pago se iniciaban los trámites para el embargo de bienes.

represión, ya que las penas establecidas por los consejos de guerra, normalmente cárcel, inhabilitación e interdicción civil, seguían vigentes con su propia dinámica.

Pero es en los casos concretos en los que podemos apreciar de una forma más completa la situación en la que quedaban los procesados. Así, Pascual Navarro Estrada fue condenado por un consejo de guerra a 30 años de reclusión mayor en diciembre de 1939. En diciembre de 1941 sabemos que se encontraba recluso en la cárcel de Talavera de la Reina, lo que no impidió que en febrero de 1942 el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia le exigiera la correspondiente declaración jurada de bienes, condenándole al pago de una sanción de 500 pesetas en marzo del mismo año, cantidad que fue satisfecha a finales de junio de 1943. Se supone que el inculcado continuó cumpliendo su condena en la cárcel ya que el pago de la sanción económica únicamente le permitía la libre disposición de sus bienes. Sin embargo, para entender la magnitud de la sanción económica hemos de indicar que el procesado era propietario de dos fincas, una rústica y otra urbana, valoradas en 11.000 pesetas, pero que él se encontraba en la cárcel, sin cobrar por tanto ningún jornal o salario, y que el único ingreso familiar a finales de 1941 era dos jornales diarios de 4 pesetas cada uno que ganaban su hijo e hija, ambos menores de edad. Por tanto, al estar las fincas bloqueadas económicamente por efecto de la Ley de Responsabilidades Políticas, la única fuente de ingresos de esta familia era el jornal comentado, con lo que la sanción suponía realmente 62 jornales íntegros. Aún teniendo en cuenta que la sanción se pagó en 11 días, se puede entender la situación en la que quedó esta familia.⁹⁰

Un caso similar es el de Pascual Plaza Albalat. Condenado por un consejo de guerra a 30 años de reclusión mayor, inhabilitación absoluta e interdicción civil en septiembre de 1939. En situación de prisión en diciembre de 1941, tanto él como su hija menor de edad firman sendas declaraciones juradas de bienes en enero de 1942 por las que manifiestan no tener ningún tipo de bienes y unas deudas de 4.600 pesetas. La hija se dedica a sus labores y sólo eventualmente cobra un jornal diario de 4 pesetas. Sin embargo, en los informes de las autoridades locales, fechados en diciembre de 1941, se

⁹⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pascual Navarro Estrada. Caja 10145. AHPCS. Albañil y perteneciente al PSOE, Pascual Navarro Estrada formó parte como concejal del Ayuntamiento provisional constituido el 15 de abril de 1931 y también del Ayuntamiento surgido de las elecciones de 1931 hasta 1934. V. SORRIBES y A. NÚÑEZ, op. cit., pp. 52 y 55.

declara que tiene dos fincas, una rural y otra urbana, compartida con su hermana, fruto de la herencia del padre. Estos informes parecen tener más peso que las declaraciones juradas de bienes porque en febrero de 1942 se condena al procesado al pago de 1.000 pesetas (250 jornales íntegros de la hija), cantidad que se satisface en julio de 1943. ¿De dónde procedió esta cantidad de dinero? ¿Cuántos sacrificios tuvo que hacer esta familia? ¿Cuántos familiares o amigos contribuyeron al pago de esta sanción? Desgraciadamente estas son cuestiones que no nos pueden esclarecer las fuentes disponibles, pero que marcan el verdadero alcance de la represión franquista de posguerra.

El resto de casos en los que el procesado acabó pagando comparten el perfil de una persona con una situación laboral más o menos estable, algunos trabajando en la empresa Segarra, con el apoyo económico de hijos y con unas sanciones no desorbitadas que permiten que el procesado pueda hacerlas efectivas. De hecho, respecto a la valoración de los bienes del procesado estas sanciones suponen un porcentaje entre el 1% y el 10%, por tanto, asumibles.

A pesar de todo, como hemos indicado, no todos los condenados al pago de sanción económica acabaron satisfaciendo la cantidad demandada. De los 13 casos existentes siete no lo hicieron, con lo que se dejaron de satisfacer una sanción de 50 pesetas, una de 100 pesetas, una de 200 pesetas, dos de 250 pesetas y dos de 2.500 pesetas, es decir, un total de 5.850 pesetas. Las razones del impago se centraban en la imposibilidad material de hacer frente a la cantidad, ya fuera por la miserable situación en la que había quedado el procesado, que solía estar preso o incluso podía haber fallecido, o por la precaria situación de su familia. En general, los porcentajes que alcanzan las sanciones económicas en estos casos sobre la valoración de los bienes personales son más elevados, ya que si bien en dos casos no superan el 3,3% en tres casos supera con creces el 60%. De hecho, en uno de los casos este porcentaje se eleva al 125%, es decir, es más alta la sanción económica que el valor de los bienes personales.

Este último caso es el de José Moliner Rodríguez. Condenado por un consejo de guerra a 12 años de reclusión menor e inhabilitación absoluta en agosto de 1939, en octubre del mismo año el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas procede a

iniciar su expediente. José Moliner se hallaba en la prisión de Totana en Murcia y, según las autoridades locales, tanto él como su esposa, junto con sus dos hijos, eran completamente insolvente por carecer de todo tipo de bienes (según FET de las JONS hasta hacía poco cobraba un salario de 9 pesetas diarias). Sin embargo, en la declaración jurada de bienes José Moliner admitió poseer la cuarta parte de una casa, dejada en herencia por sus padres para sus cuatro hijos, valorándola en 2.000 pesetas. La sentencia estableció en enero de 1940 que José Moliner debía pagar la cantidad de 2.500 pesetas. En sólo 20 días, desde la cárcel y, por tanto, sin trabajo, José Moliner y su familia debían hacer frente a una sanción que equivalía a 278 días de trabajo íntegros. La documentación no hace ninguna referencia al proceso siguiente, por lo que consideramos que simplemente el caso no mereció la atención preferente de las autoridades por ser una persona insolvente. Finalmente en diciembre de 1943 se ordenó el archivo del expediente y la liberación de los bienes del procesado, siguiendo las pautas de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942⁹¹. Por tanto, José Moliner y su familia vieron cómo de octubre de 1939 a diciembre de 1943 las autoridades tenían controlado su patrimonio, con el peso de una importante sanción económica que, a cualquier mejora económica familiar, debía hacerse efectiva. Y todo ello desde la cárcel. Evidentemente esta familia quedaba marcada por el régimen.⁹²

Este esquema se repite de forma aproximada para el resto de procesados que finalmente no pagaron su sanción económica. Un nuevo elemento se añadía cuando el procesado había sido ejecutado. Andrés Segarra Valls fue condenado a muerte por un consejo de guerra en febrero de 1940, permaneciendo en prisión hasta que en julio de 1940 fue ejecutado en Castellón. Como hemos indicado, la muerte del inculcado no detenía el proceso de exigencias de responsabilidades políticas y su expediente comenzó a tramitarse en mayo de 1941, diez meses después de su ejecución. Según los informes de las autoridades, poseía dos parcelas de tierra y su mujer no cobraba ningún jornal por ser muy vieja y estar enferma. A pesar de no tener hijos, la sentencia del Tribunal

⁹¹ Recordamos que por esta reforma se declararon sobreesidos todos los expedientes cuyo capital no excediera las 25.000 pesetas y que estuviesen todavía en trámite. En realidad, se trataba de una medida realista al verificarse la imposibilidad de que muchos de los inculcados, en la pobreza, pudieran hacer frente en la práctica a las sanciones económicas impuestas, al mismo tiempo que se solucionaba la situación de colapso administrativo de la justicia.

⁹² Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Moliner Rodríguez. Caja 10071. AHPCS. Su consejo de guerra se celebró conjuntamente con el de Eleuterio Rovira Nebot.

Regional de Responsabilidades Políticas condena a sus herederos al pago de 100 pesetas en octubre de 1941, lo que se comunicó directamente a la viuda. Pese a que la sanción no era muy elevada comparada con otras nunca se hizo efectiva y en octubre de 1944 el caso quedó sobreseído y archivado. El proceso duró más de cuatro años.⁹³

Esta estructura se repite con mayor o menor semejanza en el resto de casos. Francisco Nebot Canós fue condenado a 12 años de reclusión mayor por un consejo de guerra en marzo de 1940, pena que pagaba en la cárcel Modelo de Barcelona. Con tres hijos y una hija entre los 17 y los 9 años (sólo trabajaba ocasionalmente en el campo el mayor, con un jornal de 10 pesetas) y una mujer dedicada al hogar, se le calculó un valor de 8.000 pesetas (3.000 pesetas según la guardia civil) a una finca que poseía, por lo que le fue impuesta una sanción de 200 pesetas. Nunca fue pagada y el caso fue sobreseído y archivado en diciembre de 1943⁹⁴. Eleuterio Rovira Nebot fue condenado por un consejo de guerra a 12 años y un día de reclusión menor, que cumplió en la cárcel de Castellón. Declarados él, su mujer y sus tres hijos insolventes por las autoridades, aunque su mujer poseía un tercio de una casa valorada en 3.500 pesetas, finalmente se le impuso una sanción de 2.500 pesetas, las cuales nunca fueron pagadas. En marzo de 1945 se declaró sobreseído y archivado el caso⁹⁵. Francisco Gijón Orbay fue condenado por consejo de guerra a 20 años de reclusión menor, que cumplió en la Prisión Provincial de Castellón. Declaró poseer junto con su esposa tierras por un valor de 450 pesetas, aunque los informes de las autoridades aseguraban que era totalmente insolvente por carecer de bienes. Acabó siendo sancionado por la cantidad de 50 pesetas, pago del que no existe constancia en su archivo. En enero de 1944 se declaró su expediente archivado y sobreseído⁹⁶. Manuel Villalba Ten fue condenado por consejo de guerra a 12 años y un día de reclusión menor e inhabilitación absoluta⁹⁷, que cumplió

⁹³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Andrés Segarra Valls. Caja 10127. AHPCS.

⁹⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Nebot Canós. Caja 10127. AHPCS.

⁹⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Eleuterio Rovira Nebot. Caja 10127. AHPCS.

⁹⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas a Francisco Gijón Orbay. Archivo Histórico Provincial de Castellón, caja 10164. Este caso podría ponerse de ejemplo de ineficiencia de las autoridades franquistas, ya que en su expediente se especifica que no se le ha podido embargar ningún bien. Sin embargo, Francisco Gijón entró a trabajar en la empresa Segarra de la Vall d'Uixó desde junio de 1941, ganando un jornal inicial de 10,75 pesetas. Archivo Segarra de la Vall d'Uixó, sección Fichas de Personal.

⁹⁷ En marzo de 1944 esta pena le fue conmutada por la de ocho años de prisión mayor. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Villalba Ten. Caja 10164. AHPCS.

en la Prisión Provincial de Castellón y posteriormente en la Prisión de Fábrica número 2 de Elche. Con esposa y cuatro hijos, declaró la posesión de una finca valorada en 400 pesetas y las autoridades advirtieron que su mujer había comprado una casita y un campo de secano en Alcira, lo que le comportó una sanción de 250 pesetas, sin que exista constancia de su pago. En septiembre de 1943 el caso fue archivado y sobreseído.⁹⁸

Un caso diferente es el de Vicente Segarra Turch, quien fue condenado por consejo de guerra a 20 años de reclusión menor en febrero de 1940, condena que cumplía en la cárcel Modelo de Barcelona. Con cuatro hijos y una hija, su mujer trabajaba en una alpargatería y residían en Valencia. Uno de sus hijos era chofer pero se encontraba en filas y una de sus hijas era mayor de edad pero se dedicaba a *las labores de su sexo*. Disponían de una cuenta bancaria con 7.603,79 pesetas y una casa en la Vall d'Uixó que fue vendida en 1927, pero como en los registros todavía aparecía a su nombre esto permitió imponerle una sanción de 250 pesetas, siéndole el dinero retenido y a disposición del juez. No tenemos constancia del pago de esta sanción, pero sí que el caso fue sobreseído y archivado en abril de 1944.⁹⁹

Otra posibilidad que establecía la Ley de Responsabilidades Políticas era la del pago a plazos de la sanción económica impuesta (artículo 14), que en caso de interés debía ser solicitado por el sancionado. En nuestro campo de análisis se produjo un caso, el de Anselmo Ganau Mingarro, quien cuatro días después de la notificación de la sentencia por la que se le sancionaba al pago de 1.000 pesetas solicitó realizarla en cuatro plazos anuales con la garantía hipotecaria de sus bienes, pagándose el primer pago en los tres meses siguientes a la sentencia. Veinte días más tarde, a finales de abril de 1942, el Tribunal Regional de Valencia de Responsabilidades Políticas le concedió esta posibilidad, estableciendo la obligación de pagar 200 pesetas cada 1 de mayo hasta el año 1946. Sin embargo, en el siguiente plazo Anselmo Ganau Mingarro satisfizo toda la sanción (7 de mayo de 1943), ya que así sus bienes dejaban de estar controlados por

⁹⁸ Ibidem.

⁹⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Segarra Turch. Caja 10133. AHPCS. Dedicado al comercio y afiliado al partido republicano, formó parte del Ayuntamiento provisional de la Vall d'Uixó formado el 15 de abril de 1931 y del surgido de las elecciones de 1931 y hasta 1934. V. SORRIBES y A. NÚÑEZ, op. cit., pp. 52 y 55.

la administración y recuperaba la libre disposición de los mismos. Tras el pago de la sanción el 8 de mayo de 1943 su caso se declaraba cerrado.¹⁰⁰

En definitiva, según la información disponible de las 8.300 pesetas de sanción económica que se impuso a los ciudadanos de la Vall d'Uixó como pago de responsabilidades políticas sólo se hizo efectiva la cantidad de 3.450 pesetas, que corresponden a seis de los casos. De los siete casos restantes, con un importe de 5.850 pesetas, no existe constancia en los expedientes que fueran pagados. Esto nos demuestra la irrealidad de una Ley de Responsabilidades Políticas que intentaba sacar dinero de donde no había, de familias que, con su primogénito en la cárcel, quedaron en la pobreza cuando no en la miseria. Por otro lado, no hay que descartar que ante la gran cantidad de expedientes que había que resolver, las autoridades se centraran únicamente en aquellos casos en los que, por su patrimonio, sí era factible el embargo de bienes o el pago de los mismos. A pesar de todo, durante varios años el patrimonio de todas estas familias quedaba controlado por las autoridades, al acecho por si se producía algún beneficio del que satisfacer la sanción correspondiente. Esta vigilancia forma parte, sin duda, del sistema represivo franquista contra los vencidos.

La gran mayoría de los casos que estamos analizando acabaron siendo sobreseídos, normalmente por la precaria situación económica de los encausados y sus familias. Ya hemos visto cómo la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942 instaba a sobreseer los casos de personas con un patrimonio económico inferior a las 25.000 pesetas para centrarse en los casos de los que sí se podía esperar que la sanción económica se hiciera efectiva. De hecho, es lo que, según las fuentes analizadas, ya venían practicando los responsables de ejecutar la Ley, porque en los casos que analizamos observamos que sólo tienen sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia y, por tanto, finalizan los trámites establecidos por la Ley, los casos de personas que presuntamente disponían de algún bien patrimonial, concretamente 13 de los 62 casos. Incluso en 7 de los casos en los que

¹⁰⁰ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Anselmo Ganau Mingarro. Caja 10181. AHPCS. Anselmo Ganau se encontraba cumpliendo una pena de 30 años de reclusión mayor en la prisión de San Miguel de los Reyes en Valencia. La clave para entender la concesión de la gracia de poder realizar el pago de la sanción económica a plazos puede estar en que tanto su mujer como dos de sus cuatro hijos trabajaban (la mujer vendía verdura en la plaza pública y dos hijas cobraban 5 y 5,50 pesetas diarias por su trabajo en la fábrica Segarra). Por tanto, ante una familia con alguna posibilidad de hacer efectivo el pago de la sanción se articulaban mecanismos para facilitar el mismo.

hubo sentencia condenatoria al pago de una sanción económica ésta no se realizó y acabaron siendo sobreseídos. En definitiva, de los 62 casos analizados 56 acabaron siendo sobreseídos y sólo 6 finalizaron con el pago de la sanción económica establecida por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia.

Sin embargo, estaríamos equivocados si pensáramos que, ante estas cifras, la Ley de Responsabilidades Políticas fue un fracaso para las autoridades franquistas (sólo pagó la sanción económica el 9,6% de los encausados de la Vall d'Uixó, con un total pagado de 2.450 pesetas), ya que no hemos de olvidar que la Ley de Responsabilidades Políticas no sólo tenía como objetivo el cobro de sanciones económicas de los republicanos, sino también su control económico y social, su anulación y marginación, en definitiva, su castigo. En este sentido, el procesamiento por responsabilidades políticas implicaba la pérdida de la libre disposición de los bienes propios, la vigilancia de sus progresos y la constante atención de las autoridades ante cualquier cambio laboral o patrimonial. Así, los republicanos se convertían en personas vigiladas, teniendo que esconder o disimular cualquier progreso que se produjera en su situación económica. En definitiva, quedaban anulados y marcados por el régimen.

Por otro lado esta situación se prolongaba durante un tiempo suficientemente largo como para hacer que el patrimonio y la situación personal y familiar del afectado sufriera un deterioro casi definitivo. Hemos de tener en cuenta que esta degradación comienza con los consejos de guerra celebrados inmediatamente después de la guerra civil¹⁰¹, que acaban conduciendo al procesado, normalmente cabeza de familia, a la cárcel, continúa con la estancia en la misma y finaliza años después con el sobreseimiento o el pago de la sanción económica. En los casos de procesamiento a personas ya fallecidas (normalmente condenadas a muerte y ejecutadas) el desgaste es mucho más intenso y el castigo a las familias mucho más evidente. No es arriesgado pensar, pues, que al finalizar todo el procesamiento el patrimonio familiar se encontrara todavía más deteriorado, a lo que habría que añadir, entre otras cosas, la futura y continua sospecha de las autoridades, la falta de trabajo o, en caso de encontrarlo, las duras condiciones impuestas por unos empresarios sabedores de la situación. Es

¹⁰¹ Por tanto, a esta situación se debería añadir la desestructuración económica producida por los tres años previos de guerra civil.

precisamente esta precaria situación la esencia del castigo buscado por la Ley de Responsabilidades Políticas.

Es interesante para darnos cuenta de la magnitud de la tragedia la concreción del tiempo en que estas personas, y sus familias, sufrieron esta situación. Los ciudadanos de la Vall d'Uixó procesados por responsabilidades políticas permanecieron bajo estos condicionantes por un intervalo de tiempo que fue de 1 año a 1 año y 6 meses los más afortunados¹⁰² a de 6 años y 6 meses a 7 años los más perjudicados. Tal y como podemos apreciar en la siguiente tabla la mayoría de casos duraron en esta situación ni más ni menos que entre 5 años y 5 años y 6 meses:

Tabla 11.6
DURACIÓN DEL PROCESAMIENTO

	Número de casos
De 1 año a 1 año y 6 meses	3
De 1 año y 6 meses a 2 años	2
De 2 años a 2 años y 6 meses	2
De 2 años y 6 meses a 3 años	2
De 3 años a 3 años y 6 meses	1
De 3 años y 6 meses a 4 años	5
De 4 años a 4 años y 6 meses	5
De 4 años y 6 meses a 5 años	6
De 5 años a 5 años y 6 meses	26
De 5 años y 6 meses a 6 años	5
De 6 años a 6 años y 6 meses	2
De 6 años y 6 meses a 7 años	2
Se desconoce ¹⁰³	1

Fuente: AHPCS. Sección Expedientes Responsabilidades Políticas. Elaboración propia.

¹⁰² Los casos de 1 año a 2 años se corresponden a denuncias o a procedimientos iniciados a partir de 1940.

¹⁰³ En este caso, correspondiente a un condenado a muerte y ejecutado, disponemos de la fecha de inicio del proceso, pero no de la del sobreseimiento. De cualquier forma, en este caso en el momento de la publicación de la incoación del expediente de responsabilidades políticas en el Boletín Oficial de la Provincia tras la recepción de los pertinentes informes de las autoridades, ya había transcurrido 5 años.

Las condiciones de vida de los inculpados y sus familias.

La situación social y económica en la que quedaban estas familias se podría calificar de penosa y desesperada. No hemos de olvidar que la humillación, la marginación y la exclusión de los vencidos formaban parte de los objetivos iniciales del régimen franquista y que la Ley de Responsabilidades Políticas es prueba manifiesta de ello. Es necesario, pues, para conocer el alcance real de esta Ley y de la represión de estos años realizar un recorrido por las condiciones en las que estas familias quedaron, que en la mayoría de los casos fueron mucho más allá de las durísimas condiciones económicas vividas por los españoles en el período de posguerra.

El primer condicionante fue la permanencia en prisión de la mayoría de los procesados que, al tratarse normalmente de los cabeza de familia, agravaban sin remedio la situación familiar. De los 62 casos que analizamos hemos de excluir a los 16 penados a muerte que fueron ejecutados¹⁰⁴, aunque hemos de considerar que éstos también permanecieron en prisión hasta el día de su ejecución y que su caso es mucho más grave ya que hay que incluir la desaparición definitiva del procesado. También hemos de añadir los tres casos de denunciados por la Guardia Civil de la Vall d'Uixó, que no ingresaron en prisión. Por tanto, los 43 casos restantes pasaron por prisión como consecuencia de las sentencias previas de los consejos de guerra. Otra cuestión es cuánto tiempo tardaron en salir de ella, ya que algunos gozaron de libertad condicional relativamente pronto como consecuencia de la ya comentada política de gracia del gobierno franquista, destinada a descongestionar las colapsadas prisiones españolas, mientras otros permanecieron bastante tiempo en ellas.

Sólo tenemos constancia documental del paso por prisión de 41 de los 45 casos comentados. En cuatro casos, pues, las fuentes no hacen referencia a que el procesado estuviera en ninguna cárcel. Estos ciudadanos de la Vall d'Uixó estuvieron repartidos por casi toda la geografía española, aunque destacaron los grupos de Castellón, Valencia

¹⁰⁴ Recordamos que no tenemos constancia de la ejecución de uno de los casos, el del procesado José Salafranca Alminir, quien se hallaba en la Prisión de San Miguel de los Reyes de Valencia al realizar los trámites que impone la Ley de Responsabilidades Políticas. Expediente de responsabilidades políticas contra José Salafranca Alminir. Caja 10158. AHPCS.

y Barcelona¹⁰⁵. En algunos casos el procesado se encontraba en situación penal en el extranjero, con el conocimiento de las autoridades franquistas, otros estaban trabajando en un Batallón de trabajo obligatorio, algunos se encontraban en prisión atenuada, es decir, en libertad vigilada, y finalmente en algunos se conoce el traslado del procesado de una prisión a otra, con lo que la siguiente localización geográfica se ha de entender como el lugar donde los procesados se hallaban presos en el momento del trámite del expediente de responsabilidades políticas.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hemos de insistir que nuestro análisis se centra exclusivamente en aquellos ciudadanos de la Vall d'Uixó que sufrieron el procesamiento por responsabilidades políticas, pero hubo muchos más que sufrieron este tipo de prisión y represión por haber pasado previamente por un consejo de guerra después de la guerra civil.

En las cárceles los procesados debían hacer frente a las exigencias de la Ley de Responsabilidades Políticas. Por ejemplo allí se les informaba de los distintos plazos que tenían para presentar recurso a la sentencia, escritos de descargo, etc. Evidentemente la cárcel no era el lugar idóneo para pensar, redactar y presentar dichos mecanismos de defensa, con lo que la indefensión de los encarcelados era manifiesta. La precariedad de esta situación se manifiesta en el caso de José Salafranca Alminir, quien en su declaración jurada de bienes se excusa ante el juez por hacer una única declaración, y no por triplicado como marcaba la Ley, “por carecer de impresos en esta Central para el diligenciamiento que interesa”. Expediente de responsabilidades contra José Salafranca Alminir, Caja10158. AHPCS.

En otro caso sabemos cómo se procedía a informar a los encarcelados de su procesamiento por responsabilidades políticas, cuando el juez ordena “le notifique la sentencia cuya copia se acompaña a este exhorto mediante lectura íntegra y entrega de dicha copia dándose por enterado y notificado”. Expediente de responsabilidades políticas contra Manuel Villalba Ten, Caja 10164. AHPCS.

¹⁰⁶ Además de estos casos también tenemos documentada la estancia en prisión de una de las mujeres de los procesados, en la Prisión Provincial de Castellón. En estos casos en los que tanto el marido como la mujer se encontraban en prisión la familia quedaba completamente desestructurada. Ver, por ejemplo, los expedientes de responsabilidades políticas contra Rosa Fenollosa Segarra, caja10133; Bautista Sanz Melchor, caja 10133, y del matrimonio Isabel Segarra Canes y Benjamín Valls Rubert, cajas 10145 y 10144 respectivamente. AHPCS.

Tabla 11.7

LUGAR DE RECLUSIÓN DE LOS PROCESADOS

CENTRO DE RECLUSIÓN	NÚMERO DE PROCESADOS
Prisión Provincial de Castellón	8
Prisión de San Miguel de los Reyes en Valencia ¹⁰⁷	5
Cárcel Modelo de Barcelona	5
Cárcel de Totana en Murcia	3
Cárcel Provincial de Valencia	1
Cárcel de Talavera de la Reina	1
Prisión de la Fábrica número 2 de Elche	1
Cárcel de Camposantos de la Guardia en Pontevedra	1
Cárcel de la Isla de Formentera	1
Batallón disciplinario de trabajadores nº37 en el Escorial (Madrid)	1
Islote C.U. Barraca nº 22, Campo de Barcares en Francia	1
Prisionero por las Fuerzas Armadas alemanas en Francia	1
Cárcel sin determinar	10
Prisión atenuada	2

Fuente: AHPCS, Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas

Elaboración propia

Como hemos indicado, la permanencia del marido o padre en la cárcel suponía prácticamente la ruina familiar. Privados del sueldo más importante, no sólo debía atenderse en estos casos a la manutención familiar, sino también a la ayuda, en la medida de lo posible, del encarcelado, que vivía una situación precaria de abusos, hambre y falta de higiene, por no hablar del peso de la jurisdicción de responsabilidades políticas, con sanciones económicas, embargo de bienes y falta de libertad personal. En estos casos la familia dependía del trabajo de la mujer, que se multiplicaba en su sacrificio¹⁰⁸, o de los sueldos de los hijos, obligados sin remedio al trabajo temprano y mal pagado. Y eso en el caso en el que los hijos tuvieran edad de trabajo, en esta época normalmente los 14 años o, incluso, los 12 años, porque si los hijos eran menores de

¹⁰⁷ En esta prisión fue donde empezó a reorganizarse el movimiento socialista al concentrarse en ella un importante núcleo socialista. J.A. PIQUERAS (2005), op. cit., pp. 262-263. De hecho, de los cinco casos analizados 1 era socialista, 2 de UGT y 2 fueron calificados en los consejos de guerra como “de antecedentes izquierdistas”.

¹⁰⁸ Numerosos ejemplos de este sacrificio los podemos encontrar en F. ROMEU, op. cit.

esta edad los problemas se incrementaban para la mujer y se tenía que llegar incluso a la separación y a la cesión temporal de los mismos¹⁰⁹.

Es sintomático que 39 de los 62 casos de ciudadanos de la Vall d'Uixó procesados por responsabilidades políticas merecieron el calificativo de *totalmente insolvente por carecer de cualquier tipo de bienes o es pobre y no posee bienes de ninguna clase*, lo que nos demuestra la situación en la que quedaron los republicanos tras la guerra y también de quién se pretendía exigir responsabilidades políticas por parte del régimen franquista¹¹⁰.

De entre estos casos de insolventes también encontramos cierta variedad de situaciones. Los que padecían una situación más precaria y que estaban literalmente en la pobreza por no poseer ningún bien ni ningún tipo de trabajo o recurso eran la mayoría, concretamente 32 de los 39 casos comentados. Se trataba de mujeres, algunas viejas y enfermas, sin trabajo fuera del hogar con sus maridos en la cárcel o ejecutados y con hijos, normalmente menores y sin trabajo, familias con ambos cónyuges en la cárcel o personas que después de la guerra se encontraron en la indigencia. En ocasiones las autoridades locales en sus informes describían la situación con sinceridad, como en el caso de José Fenollosa Segarra, de quien la Guardia Civil dice que “está considerado como pobre”¹¹¹. Pero es en la declaración jurada de bienes que los procesados debían obligatoriamente cumplimentar donde se describe con más dureza esta situación. Así, Eduardo Rico Veral confiesa que “en la actualidad vivimos de expensas del bien que nos proporcionan nuestros queridos familiares, como dos hijos menores, cuñados, etc., teniendo otro hijo menor de edad”¹¹². En algunos casos tanto esta declaración del propio

¹⁰⁹ Expedientes de responsabilidades políticas contra Isabel Segarra Canes, caja 10145; Benjamín Valls Rubert, caja 10144; Rosa Giner Martínez, caja 10144; Vicente Bernat Rovira, caja 10127. AHPCS.

¹¹⁰ Para tener una referencia utilizaremos los cálculos que realizamos en otro estudio, en el que concluíamos que un jornal de 12 pesetas en 1941, que era el jornal máximo de un trabajador no cualificado en la empresa Segarra en dicho año, era del todo insuficiente para vivir dignamente, ya que no cubría las necesidades básicas del consumo básico de una familia. Y más si ésta no tenía el respaldo de una poderosa empresa que le facilitara servicios como economato, vivienda, libreta de ahorro, comedor, escuela, etc. Para estos cálculos utilizamos en su momento los datos procedentes de J. PICÓ, *El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme*. Valencia, 1977, pp. 67-70. Para consultar en detalle esta cuestión F. PEÑA (1998), op. cit., pp. 296-298.

¹¹¹ Expediente de responsabilidades políticas contra José Fenollosa Segarra, Caja 10098. AHPCS.

¹¹² Expediente de responsabilidades políticas contra Eduardo Rico Veral, Caja 19634. AHPCS.

procesado como los informes de las autoridades locales son desgarradores, como en el ejemplo de Joaquín Arnau Salvador, condenado a 30 años y con una hija nacida en 1939, de quien las autoridades afirmaban en marzo de 1941 que “su esposa es pobre de solemnidad ya que asiste diariamente para su manutención al Auxilio Social, no dedicándose a trabajo más que a coser algo de alpargatas cuando hay de ese trabajo” (Guardia Civil), “su mujer no gana bastante para comer ella y su hija” (FET de las JONS) o “su esposa está considerada pobre” (Alcaldía). Más de dos años después, en agosto de 1943, Joaquín Arnau Salvador desde la cárcel resumía en la declaración jurada de bienes su situación familiar con estas palabras “encontrándose mi familia desde hace cuatro años en la más deplorable miseria a causa de mi situación”¹¹³. A pesar de esta situación de pobreza, dos de estos casos fueron condenados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia al pago de sanción económica, una de 50 pesetas y otra de 10.000 pesetas, que, obviamente, nunca pudieron ser pagadas. Todos estos casos de pobreza acabaron siendo sobreseídos a partir de 1943.

Dentro de la situación de miseria encontramos ejemplos de familias que disponían de algún recurso económico para sobrevivir, aunque en muchas ocasiones son recursos totalmente insuficientes e incluso desesperados. Con la rémora de un pasado públicamente republicano, la disposición de trabajo se convertía en un lujo. En los casos de Vicente Castelló Antonino y José Moliner Rodríguez, sin ningún tipo de bienes, recién salidos de la cárcel a finales de 1939, la situación se aliviaba con un jornal de 9 pesetas y 11,50 pesetas respectivamente, lo que no les libró de la calificación de totalmente insolventes por parte de las autoridades locales¹¹⁴. Aún así éstos eran unos privilegiados ante la situación de otros casos en los que el trabajo era muy precario y ocasional. Antonio Cases Aparicio se encontraba en un Batallón de trabajo en El Escorial por el que cobraba la irrisoria cifra de 0,50 pesetas al día, lo que obligaba a su mujer a trabajar a destajo en la confección de alpargatas para mantener a su hijo menor de edad¹¹⁵. Con un hijo más que el anterior se encontraba en la cárcel José Sorribes

¹¹³ Expediente de responsabilidades políticas contra Joaquín Arnau Salvador, Caja 10158. AHPCS.

¹¹⁴ Expedientes de responsabilidades políticas contra José Moliner Rodríguez y Vicente Castelló Antonino, Cajas 10071 y 10133 respectivamente. AHPCS. La esposa de Vicente Castelló también trabajaba, cobrando un salario similar al de su marido.

¹¹⁵ Expediente de responsabilidades políticas contra Antonio Cases Aparicio, Caja 10133. AHPCS. Las autoridades locales remarcaron que lo que ganaba le daba únicamente para su manutención.

Abad, cuya mujer ganaba un jornal de 3,50 pesetas cosiendo alpargatas, pero con el agravante de la ocasionalidad, ya que en los informes oficiales se comenta “sin que ello constituya su trabajo permanente”¹¹⁶. No es ocioso detenernos un instante para insistir en la reflexión que esta mujer debía componérselas para sobrevivir ella y sus dos hijos menores con 3,50 pesetas al día, el día que trabajaba, y lo hacía ocasionalmente, sin excluir, en la medida de lo posible, alguna ayuda para su marido encarcelado. Exactamente en la misma situación se encontraba la mujer de Pedro Martínez Paredes, aunque las autoridades no pueden evitar comentar que ese irrisorio y ocasional jornal “son para su manutención y la de su hija”¹¹⁷. A pesar de todo, la situación podía ser todavía más penosa cuando la familia quedaba desestructurada. Condenado a seis años de prisión, Vicente Bernat Rovira tenía a sus dos hijas de 12 y 15 años “recogidas por parientes”, trabajando a cambio como “niñeras paseantes de niños”, siendo éste el único recurso familiar¹¹⁸.

Como vemos, en estas condiciones era frecuente que los procesados pasaran a depender de los hijos, incluso aunque estos fueran menores. Francisco Nebot Canós, con cuatro hijos, dependía del jornal ocasional de su hijo mayor y aún así el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le condenó al pago de 200 pesetas, que nunca pudo pagar¹¹⁹. Pascual Plaza Albalat y Pascual Navarro Estrada, ambos en la cárcel y condenados a 30 años de prisión, dependían del trabajo de sus únicas hijas, las dos menores, que cobraban cada una un jornal de 4 pesetas (eventualmente en el caso de la hija de Pascual Plaza Albalat). Ambos fueron condenados al pago de 1.000 pesetas y 500 pesetas respectivamente, que acabaron pagando.¹²⁰

¹¹⁶ Expediente de responsabilidades políticas contra José Sorribes Abad, Caja 10144. AHPCS.

¹¹⁷ Expediente de responsabilidades políticas contra Pedro Martínez Paredes, Caja 10144. AHPCS. Como veremos más adelante, Pedro Martínez Paredes pudo ingresar en la fábrica Segarra en abril de 1944 (ya trabajaba para la empresa Segarra en la confección de alpargatas desde abril de 1929). Archivo Segarra, sección Fichas de Personal.

¹¹⁸ Expediente de responsabilidades políticas contra Vicente Bernat Rovira, Caja 10127. AHPCS.

¹¹⁹ Expediente de responsabilidades políticas contra Francisco Nebot Canós, Caja 10127. AHPCS.

¹²⁰ En ambos casos existían bienes que respaldaban el patrimonio familiar, de ahí la sanción económica. Expedientes de responsabilidades políticas contra Pascual Navarro Estrada y Pascual Plaza Albalat, Caja 10145. AHPCS.

Mención aparte merece el matrimonio Benjamín Valls Rubert e Isabel Segarra Canes, ambos procesados por un consejo de guerra y después por responsabilidades políticas. Benjamín Valls fue condenado en febrero de 1939 a 12 años y un día de prisión, consiguiendo la situación de prisión atenuada en octubre de 1941, lo que le permitió recoger a dos de sus cuatro hijos, que se encontraban acogidos por familiares. Con un jornal de 15 pesetas, se hizo cargo de los dos varones, uno de 15 años aprendiz de ebanista que cobraba un jornal de 2,5 pesetas, y otro de 10 años que no trabajaba. Las dos hijas, de 12 y 8 años, estaban a cargo de dos hermanas en Barcelona. Isabel Segarra Canes mientras cumplía en la cárcel de Saturrarán Motrico en Guipúzcoa una condena de 12 años y un día. Los expedientes por responsabilidades políticas de ambos fueron archivados y sobreseídos en abril de 1945¹²¹.

Con todo, algunos de los procesados disponían de una base económica no cómoda pero si algo normalizada. José Forner Segarra cobraba en enero de 1942 un jornal de 7 pesetas, al que se sumaba los jornales de dos de sus tres hijos, de 7 pesetas y 3,5 pesetas, lo que sumaba un jornal familiar de 17,5 pesetas. Esto, junto con la disposición de algunos bienes, le reportó una sanción económica por responsabilidades políticas de 100 pesetas que acabó pagando¹²². Una situación parecida era la de Anselmo Ganau Mingarro, que permanecía en prisión, pero con dos hijas de sus cuatro hijos con jornales de 5,50 pesetas y 5 pesetas, a lo que había que añadir la venta de hortalizas que su mujer realizaba en la plaza pública de la Vall d'Uixó, lo que les valió una multa de 1.000 pesetas por parte del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que acabaron pagando¹²³.

En este sentido, encontramos algunos procesados que ellos mismos o algunos de sus familiares acabaron trabajando para la empresa Segarra, lo que en el fondo

¹²¹ Expedientes de responsabilidades políticas contra Benjamín Valls Rubert e Isabel Segarra Canes, Cajas 10144 y 10145 respectivamente. AHPCS.

¹²² Expediente de responsabilidades políticas contra José Forner Segarra, Caja 10145. AHPCS. El jornal de 3,5 pesetas nos indica claramente que este hijo era menor de edad.

¹²³ Expediente de responsabilidades políticas contra Anselmo Ganau Mingarro, Caja 10181. AHPCS. Cestero de profesión y perteneciente al PSOE, Anselmo Ganau Mingarro fue concejal del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó en el equipo municipal formado el 15 de abril de 1931. Formó parte de la Comisión Gestora designada para administrar la localidad por el gobernador civil el 4 de mayo del mismo año y también formó parte como concejal del equipo municipal surgido de las elecciones de 1931, que duró hasta 1934. V. SORRIBES y A. NÚÑEZ, op. cit., pp. 37 y 52-55.

representaba una especie de privilegio ante la precaria situación de posguerra. Bautista Arnau Vallés tenía dos de sus hijos trabajando en dicha empresa, con jornales de 8,5 pesetas y 4 pesetas¹²⁴. Con un jornal de 9,50 pesetas, Francisco Fenollosa Alcaide consiguió incorporarse a la misma, donde su mujer ya trabajaba con otro de 7,50 pesetas, lo que les valió una sanción económica por responsabilidades políticas de 500 pesetas que acabó pagando¹²⁵. Sin embargo, algunas veces la situación era más precaria. Manuel Giménez Roig trabajaba de alpargatero por cuenta propia con un jornal de 8 pesetas, mientras su mujer trabajaba ocasionalmente en la fábrica Segarra con un jornal de 6 pesetas¹²⁶. José Adrián Porcar se hallaba en la cárcel condenado a doce años y un día, mientras su mujer intentaba mantener a su hijo de tres años trabajando de barrendera en dicha fábrica con un jornal de 4 pesetas, según la Guardia Civil local “menos de lo que necesita para comer”¹²⁷.

Sin duda, los casos más dramáticos eran los de aquellas familias que perdieron a sus maridos o padres tras ser condenados a muerte en los consejos de guerra y posteriormente ejecutados, y para los que la jurisdicción de Responsabilidades Políticas no hacía distinción respecto a las personas físicas vivas, con lo que era la familia quien cargaba con las responsabilidades. Sin bienes de ninguna clase, la familia de Wenceslao Ferrer Tur sobrevivía con el trabajo de las dos hijas menores, ambas con un jornal de 4 pesetas, mientras la viuda se dedicaba a las tareas del hogar¹²⁸. La viuda de José Palomo Orenga sobrevivía con un jornal de 5,5 pesetas, que le daba según las autoridades locales únicamente “para su manutención”¹²⁹. Peor estaba la familia de Joaquín Valero Peiró: trasladados a Ibi (Alicante), la viuda se dedicaba al hogar mientras de los tres

¹²⁴ Expediente de responsabilidades políticas contra Bautista Arnau Vallés, Caja 10127. AHPCS.

¹²⁵ Expediente de responsabilidades políticas contra Francisco Fenollosa Alcaide, Caja 10145. AHPCS.

¹²⁶ Expediente de responsabilidades políticas contra Manuel Giménez Roig, Caja 10144. AHPCS. Hay que destacar que se trata de un caso especial, ya que Manuel Giménez Roig fue el único de los procesados por responsabilidades políticas que fue condenado previamente por un consejo de guerra únicamente por el hecho de haber pertenecido a partidos políticos y sindicatos de izquierda, sin que se le imputaran ningún tipo de delito o hecho delictivo. Por este hecho fue condenado en febrero de 1940 a 12 años y un día de reclusión menor. Posteriormente su caso por responsabilidades políticas quedó archivado y sobreesido en abril de 1945 por no llegar al nivel económico exigido por la Ley tras su reforma en febrero de 1942.

¹²⁷ Expediente de responsabilidades políticas contra José Adrián Porcar, Caja 10127. AHPCS.

¹²⁸ Expediente de responsabilidades políticas contra Wenceslao Ferrer Tur, Caja 10146. AHPCS..

¹²⁹ Expediente de responsabilidades políticas contra José Palomo Orenga, Caja 10144. AHPCS.

hijos del matrimonio uno cobraba un jornal de 8 pesetas y otro se hallaba “prisionero por las fuerzas alemanas en Francia”. Su situación era tan mala que el jefe de FET de las JONS afirma que “viven en una situación económica muy difícil”¹³⁰. Con dos hijos menores, la viuda de Heraclio Badal Rosell tuvo que irse a Barcelona a servir en casa de unos familiares donde trabajaba de doméstica en las labores de la casa, sin que las autoridades tuvieran noticia de que ganara ningún jornal¹³¹.

La situación podía ser aún más penosa. La viuda de Andrés Segarra Valls no ganaba ningún jornal por hallarse enferma y ser muy vieja¹³². La viuda de Francisco Font Borrás se hallaba en la cárcel con una hija menor de edad¹³³. La familia de Vicente Montesinos Duflo sobrevivía con el trabajo de su hija de 21 años que “no gana jornal más que a temporadas”¹³⁴. Finalmente, las familias de José Marco Tur (con tres hijos menores), José Sorribes Abad (con dos hijos menores) y Manuel Ferreres Villalba no disponían de ningún tipo de bienes ni de trabajo¹³⁵. Eran, literalmente, pobres. Aún así, sufrieron todo el peso de la Ley de Responsabilidades Políticas hasta abril de 1945, cuando sus casos fueron sobreseídos y archivados.

Los colaboradores del régimen.

Llegados a este punto es interesante detenernos también en algunos aspectos del funcionamiento y la composición de los tribunales que protagonizaban los consejos de guerra, que, en definitiva, son los que materializaban la represión. Ya hemos indicado que estaban compuestos por cinco miembros afines al franquismo pertenecientes al Ejército y, por los datos que disponemos, parece que actuaban estructurados en cuadros prácticamente fijos. Además, celebraban consejos de guerra en poblaciones distintas,

¹³⁰ Expediente de responsabilidades políticas contra Joaquín Valero Peiró, Caja 10133. AHPCS.

¹³¹ Expediente de responsabilidades políticas contra Heraclio Badal Rosell, Caja 10103. AHPCS.

¹³² Expediente de responsabilidades políticas contra Andrés Segarra Valls, Caja 10127. AHPCS.

¹³³ Expediente de responsabilidades políticas contra Francisco Font Borrás, Caja 10144. AHPCS.

¹³⁴ Expediente de responsabilidades políticas contra Vicente Montesinos Duflo, Caja 10127. AHPCS.

¹³⁵ Expedientes de responsabilidades políticas contra José Marco Tur, José Sorribes Abad y Manuel Ferreres Villalba, Cajas 10146, 10144 y 10146 respectivamente. AHPCS.

incluso en el mismo día, como veremos más adelante. Las fuentes que disponemos nos permiten identificar total o parcialmente a estos militares¹³⁶, normalmente de baja graduación, que rigieron los destinos de los vencidos.

Tabla 11.8

Miembros de Tribunales de consejo de guerra a ciudadanos de la Vall d'Uixó
y número de consejos en que participaron

NOMBRE	CASTELLÓN	BURRIANA	VALENCIA	TOTAL
José M ^a González Cienfuegos	12	19	-	31
Juan Calduch Guiral	11	18	-	29
Santos Fernández Uriel	7	19	-	27
Cristóbal Roda Navarro	7	18	-	25
Enrique Monferrer Esteban	6	15	-	21
Mateo Andrés	6	7	2	15
Manuel Batlle	3	8	1	12
Hilario Escrivá	4	5	-	9
Oses	4	4	-	8
Pérez Vila	5	3	-	8
Villalonga Bueso	6	2	-	8
Benjamín Canet	4	1	2	7
Vicente Ferrán	4	3	-	7
Francisco Gómez Marín	2	1	1	4
Vicente Chirivella Mejías	2	1	1	4
Molo Vilar	4	-	-	4
José Luis Escobar Buiza	2	1	-	3
Olleres Céspedes	2	-	1	3
Betoret Fonte	1	2	-	3
Rodríguez Arias	3	-	-	3
Manrique Arenós	2	1	-	3
Andrés Gallardo Sos	2	-	-	2
Calleja	2	-	-	2
Traver Marín	2	-	-	2

¹³⁶ En las copias de los resúmenes de los consejos de guerra que se adjuntan en los expedientes de responsabilidades políticas constan los nombres y/o apellidos de los miembros de los tribunales. Sin embargo, debido a la redacción del resumen, la calidad de la copia o a la defectuosa conservación del documento muchas veces no podemos más que identificar a los mismos por el apellido. En algunos de los casos estos datos han sido completamente ilegibles.

Gómez Cornejo	2	-	-	2
García León	2	-	-	2
Garrido Alonso	2	-	-	2
Pombo Somoza	2	-	-	2
Eduardo Oria	1	1	-	2
NOMBRE	CASTELLÓN	BURRIANA	VALENCIA	TOTAL
Guillem	-	-	2	2
Miralles	-	-	2	2
Cachavera Santodomingo	1	1	-	2
Contes	-	-	1	1
Bru	-	-	1	1
Sánchez	-	-	1	1
Escrig	-	1	-	1
Fausto Antolín Ruiz	-	1	-	1
Emilio Robles Gómez	-	1	-	1
Salaya	-	1	-	1
Álvaro Cortés	-	1	-	1
Prol Lorenzo	1	-	-	1
Francisco Macián	-	1	-	1
Celo Monfort	-	1	-	1
Februciados	1	-	-	1

Fuente: AHPCS. Sección Responsabilidades Políticas.

Elaboración propia

De entre estos 44 militares estamos en disposición de identificar a tres de ellos, existiendo un cuarto cuya identificación entra dentro de la probabilidad. Su perfil nos puede ayudar a entender el tipo de personas que formaban estos consejos de guerra. Así, Cristóbal Roda Navarro participó en 25 consejos de guerra a ciudadanos de la Vall d'Uixó, 7 de ellos en Castellón y 18 en Burriana. Se trataba de un Capitán de la Guardia Civil nacido el 10 de agosto de 1876, que se hallaba en situación de retiro cuando comenzó la guerra. Contaba, pues, en 1939 con 53 años y residía en 1941 en Castellón. Enrique Monferrer Esteban, que participó en 25 consejos de guerra, 7 en Castellón y 18 en Burriana, era Alférez de Infantería. Natural de Lucena (Castellón), se encontraba en Castellón al iniciarse la guerra ejerciendo el cargo de Agente de Vigilancia al servicio del Ministerio de Gobernación, situación en la que continuó durante toda la guerra.

Sufrió depuración por su cargo, pero su caso fue sobreseído en agosto de 1938, aunque reabierto por disconformidad del fiscal y finalmente absuelto en marzo de 1939.¹³⁷

Juan Calduch Guiral participó en 29 de los consejos de guerra analizados, 11 en Castellón y 18 en Burriana. Comandante de Infantería nacido el 3 de septiembre de 1888, contaba con 51 años en 1939. Al inicio de la guerra se encontraba en situación de retiro en Castellón, aunque cuando los franquistas tomaron la ciudad formalizó su reingreso en la escala complementaria, siendo destinado el 14 de diciembre de 1938 a la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación del Norte. Curiosamente Juan Calduch, ya Capitán de Infantería, fue designado por las autoridades militares como delegado al frente de la población de la Vall d'Uixó una vez fue ocupada el 29 de marzo de 1939 por las tropas franquistas, cargo que ocupó hasta el 31 de marzo del mismo año, cuando fue nombrado alcalde de la ciudad, parece que a propuesta suya, Vicente Rebollar Llorens¹³⁸. Fue, pues, la primera autoridad franquista en la Vall d'Uixó, a cuyos habitantes se encargaría de depurar por responsabilidades políticas. Es interesante analizar el recorrido de los consejos de guerra que analizamos en los que participó como juez, tanto en Castellón como en Burriana, para darnos cuenta de las condiciones en los que se celebraban. El primero de ellos se celebró en Castellón el 13 de noviembre de 1939, pasando a Burriana el 23 del mismo mes, donde celebró consejo de guerra a dos ciudadanos de la Vall d'Uixó que posteriormente fueron procesados por responsabilidades políticas. El 5 de diciembre lo encontramos juzgando a tres vallenses más otra vez en Castellón, para pasar a Burriana, donde le encontramos trabajando los días 7 y 14. Ya en 1940 repite en enero los días 16 (a dos ciudadanos) y 17 (a dos más). Precisamente el mismo día 17 de diciembre de 1939 celebra también consejo de guerra a estos ciudadanos de la Vall d'Uixó en Castellón, lo que nos indica la rapidez y falta de garantías con los que se celebraban. Dos días más tarde vuelve a Burriana juzgando a cuatro ciudadanos de la Vall d'Uixó. Un día más tarde vuelve a celebrar consejo de guerra en Castellón, repitiendo el 29 de febrero y el 14 de marzo. Finalmente, lo encontramos firmando sentencias en Burriana el 20 de junio de 1940. Al año siguiente se puede encontrar su firma en sentencias de vallenses el 2 y el 27 de febrero, el 11 de

¹³⁷ Estos datos, y los de Juan Calduch Guiral, los hemos obtenido de R. PARDO, "Oficiales en Castellón el 18 de julio de 1936", en www.aulamilitar.com/OFICIALESCASTELLON.hts.

¹³⁸ E. GAJA y M. FERRER, op. cit., pp. 13-17.

mayo, el 31 de julio y el 28 de agosto, todas ellas correspondientes a consejos de guerra celebrados en Castellón, excepto el del día 2 de febrero de 1941 que se celebró en Burriana. En resumen, para los ciudadanos de la Vall d'Uixó firmó 1 sentencia de 12 años, 6 de 12 años y un día, 1 de 15 años, 3 de 20 años, 1 de 20 años y 1 día, 10 de 30 años y 8 penas de muerte.

Un caso especial es el de Manuel Batlle. Nacido en Alcoy el 15 de octubre de 1905, hijo de militar, estudió en la Universidad de Valencia las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Pronto se orientó al Derecho Civil y se licenció con premio extraordinario, doctorándose en 1931. Dos años más tarde se trasladó a Madrid donde obtuvo diversos premios que le consagraron como experto en Derecho. En 1935 consiguió por oposición la Cátedra de La Laguna y después la Cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia¹³⁹.

De orientación conservadora, tuvo inicialmente algunos roces con los falangistas por su amistad con algunos masones¹⁴⁰. El 18 de julio de 1936 se encontraba en Madrid, donde fue testigo de la evolución de la zona republicana, que le empujó, según su testimonio, a posiciones cada vez más conservadoras. En 1937 recibió la ayuda de Cayetano Alcázar Molina, quintacolumnista en Murcia, jefe del sindicato de enseñanza de la CNT, que facilitó avales y carnets a miembros de la derecha murciana¹⁴¹. En septiembre de ese año fue incorporado, como otros expertos de otras materias, a la Universidad de Valencia, pero en abril de 1938 se suspendieron las clases y en julio del mismo año fue movilizado por su quinta (tenía 33 años). Es posible que se dedicara a realizar tareas de contra información a favor del franquismo y que sufriera el acoso del SIM o servicio de investigación militar. Poco antes de finalizar la guerra abandonó su

¹³⁹ BOE del 21 de mayo de 1935.

¹⁴⁰ Su relación con a Falange fue inicialmente problemática, ya que anteriormente al golpe de Estado franquista su orientación política era republicana y conservadora, con poca sintonía con el incipiente fascismo. De esta forma, se le relaciona con Melquíades Álvarez González y con diversos candidatos al Ateneo madrileño durante la República, al mismo tiempo que era conocida su amistad con el catedrático de Derecho Civil Demófilo de Buen, relacionado con la masonería. J. CLARET, *El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945*. Barcelona. Crítica, 2006, pág. 327.

¹⁴¹ J. CLARET, *La repressió franquista a la Universitat espanyola*. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2004, pp. 184-185.

unidad militar y se integró en la quintacolumna de Valencia, en expansión desde principios de 1938.

El 28 de marzo de 1939 la quintacolumna de Valencia negociaba la rendición de la ciudad y al día siguiente Manuel Batlle Vázquez, al frente de algunas escuadras, ocupó la Universidad de Valencia. Acto seguido se autonombró rector accidental de la misma y nombró al nuevo profesorado entre los profesores que habían sido perseguidos durante la República. Esta ocupación se hizo al margen de las autoridades y del ejército franquistas, que finalmente tuvieron que apartar a las personas que habían designado para gobernar la Universidad. El 24 de abril Manuel Batlle fue sustituido por José M^a Zumalacárregui Prats, quien inició un intenso proceso de depuración en la misma y que, como veremos más adelante, pasó a formar parte del primer Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia. A pesar de esta temprana sustitución Manuel Batlle puso en marcha las primeras medidas depurativas, con carácter preventivo, orientadas básicamente contra los miembros del anterior equipo directivo que todavía permanecían en Valencia.¹⁴²

En el mismo año 1939¹⁴³ Manuel Batlle se reintegró en la Universidad de Murcia, fue nombrado Decano de la Facultad de Derecho y se encargó de la lectura del discurso inaugural del curso 1940-1941, que coincidía con las bodas de plata de la Universidad, con una ensalzada loa al nuevo régimen totalitario. En su conferencia ante el ministro de educación José Ibáñez Martín, con el título de *El Derecho Civil y el Nuevo Estado*, reivindicó la “vuelta al espiritualismo” propia del fascismo: “El nazismo alemán, el fascismo italiano, y nuestro nacionalsindicalismo tienen mucho de misticismo y alta idealidad, hasta el punto que no ha faltado para ellos la calificación de poéticos”¹⁴⁴. Como premio a su fidelidad en marzo de 1944 fue nombrado rector de la Universidad de Murcia, cargo que ocupó hasta 1975¹⁴⁵. Durante su mandato fue

¹⁴² Concretamente estas primeras medidas depurativas se tomaron contra el rector en funciones Ramón Velasco Pajares y los catedráticos Fernando Ramón Ferrando, Francisco Sierra Jiménez y José Ramón de Orúe Arregui, siendo únicamente este último el único que se pudo reincorporar a la Universidad de Valencia en febrero de 1940. J. CLARET (2006), op. cit., pp. 337.

¹⁴³ Ibidem (2006), op. cit., pp. 330-331.

¹⁴⁴ J. CLARET (2004), op. cit., pág. 186.

¹⁴⁵ S. GARCÍA y V. SALAVERT, “L’Ocupació de la Universitat de València el 1939 pel quintacolumnista Manuel Batlle, Catedràtic de Múrcia”, en *Afers*, nº3. Barcelona, 1986, pp. 123-198; M.

procurador en Cortes en las diez legislaturas del franquismo, Consejero Nacional de Educación y Consejero del Reino. Parece que rechazó por dos veces el nombramiento de magistrado del Tribunal Supremo, presuntamente para no desatender la Universidad de Murcia y no residir en Madrid.¹⁴⁶

Antes de reincorporarse a la Universidad de Murcia Manuel Batlle colaboró con el régimen franquista en la celebración de consejos de guerra a los republicanos en tierras castellonenses y en Valencia. En los resúmenes de las sentencias de los consejos de guerra que hemos analizado y en los que aparece Manuel Batlle siempre es citado en primer lugar, por lo que nos inclinamos a pensar que se trataría del presidente de los consejos. Manuel Batlle participó en 12 consejos de guerra a ciudadanos de la Vall d'Uixó que después fueron procesados por responsabilidades políticas, 3 en Castellón, 8 en Burriana y 1 en Valencia. El primero de ellos se celebró en Burriana el 6 de febrero de 1940. Desde esta fecha y hasta el 17 de febrero de 1940 alternó diferentes consejos de guerra entre Castellón y Burriana, aunque finalmente lo encontramos en un consejo de guerra celebrado en Valencia el 20 de abril de 1940. Por tanto, también es un caso caracterizado por la movilidad. En total, firmó 2 penas de 6 años y un día, 3 de 12 años y un día, 1 de 20 años, 1 de 30 años y 2 penas de muerte.¹⁴⁷

Teniendo en cuenta, pues, que los casos que analizamos, los ciudadanos de la Vall d'Uixó que pasaron por un consejo de guerra y que después fueron procesados por responsabilidades políticas, suponen una pequeña parte de los casos que pasaron por consejo de guerra de dicha población y, además, que éstos últimos suponen una muy

PESET, *Historia de la Universidad de Valencia*, Volumen III “La Universidad liberal (siglos XIX y XX). Valencia, 2000, pp. 269-248; E. NICOLÁS, *Las instituciones murcianas bajo el franquismo*. Murcia, 1982 ; M. BALDÓ, *La Universitat de València*. Valencia, 1986, pp. 177-184; F. MANCEBO, *La Universidad de Valencia en guerra. La F.U.E. (1936-1939)*. València, 1988, pp. 175-178; B. SANZ, *Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975*, Valencia, 2002, pp. 2-4; B. SANZ y R. RODRÍGUEZ, *Memoria del antifranquismo. La Universidad de Valencia bajo el franquismo. 1939-1975*. Valencia, 1999, pp. 31-44.

¹⁴⁶ J. CLARET (2004), op. cit., pp. 185-187.

¹⁴⁷ También tenemos documentados otros doce consejos de guerra a ciudadanos de la Vall d'Uixó en los que participó Manuel Batlle, todos celebrados del 9 al 20 de febrero de 1940 en Burriana, salvo uno que se celebró el 14 de marzo de 1940 en Castellón. Las sentencias fueron dos de seis meses y un día de cárcel, una de 6 años y un día, seis de doce años y un día, una de 20 años, una de 30 años y una pena de muerte. Por tanto, en términos globales tenemos documentados 25 consejos de guerra en los que participó Manuel Batlle, con dos penas de 6 meses y un día, tres de 6 años y un día, nueve de 12 años y un día, 2 de 20 años, dos de 30 años y tres penas de muerte, siempre sólo a ciudadanos de la Vall d'Uixó.

pequeña parte del total provincial que pasó por dichos consejos de guerra, podemos concluir que éstos se celebraron en condiciones marcadas por la rapidez y la falta de garantías, como lo demuestra el hecho que un mismo miembro participe en distintos consejos de guerra en distintas poblaciones el mismo día, o que se juzguen varios casos al mismo tiempo. Además, parece que estos militares se organizaban en grupos más o menos fijos o estructurados que se desplazaban a las ciudades donde se celebraban los consejos de guerra, suponemos, según las necesidades¹⁴⁸. Se trataba, por tanto, de auténticos profesionales encargados de juzgar y depurar lo más rápido posible a los republicanos que abarrotaban las cárceles y los campos de concentración al finalizar la guerra.

Uno de los aspectos más interesantes que posibilita el estudio de los consejos de guerra es el análisis del lenguaje que estos militares utilizaron para procesar a los acusados. El lenguaje es, sin duda, un elemento que contiene y transmite una determinada ideología, una concepción de las cosas que se intenta imponer. En ningún caso es un agente neutro. En este caso, el lenguaje utilizado en los consejos de guerra forma parte de los mecanismos utilizados tanto para desacreditar y eliminar aquellos valores que se pretendían castigar como para implantar una nueva ideología. En definitiva, se trataba de construir una nueva memoria colectiva de los hechos y etapas pasados, construcción basada en el radicalismo y maniqueísmo manifestado en el rechazo de lo anterior y en la sublimación de lo presente, en este caso la República y el franquismo.¹⁴⁹

En este sentido el periodo republicano es descrito con desprecio y nunca es citado por su nombre de *República*. En general, se le identifica de forma muy general evitando su identificación concreta, con expresiones como “antes del Glorioso

¹⁴⁸ Para los casos que estudiamos el grupo formado por Santos Fernández, Cristóbal Roda, Juan Calduch, Enrique Monferrer y José M^a Cienfuegos los hallamos en 22 consejos de guerra. El grupo formado por Manuel Batlle, Mateo Andrés, Osés, Hilario Escrivá y Pérez Vila los encontramos en siete ocasiones (Manuel Batlle y Mateo Andrés siguen juntos en dos consejos de guerra en Valencia).

¹⁴⁹ Se puede consultar un análisis del lenguaje utilizado en los expedientes de responsabilidades políticas de la provincia de Lleida en C. MIR, F. CORRETGÉ, J. FARRÉ, J. SAGUÉS, op. cit., pp. 211-219. Para la importancia del lenguaje como estructurador de una nueva realidad en el franquismo se puede consultar C. GONZÁLEZ, “La Causa General de Murcia: técnicas de estudio”, en I. SÁNCHEZ, M. ORTIZ y D. RUIZ, op. cit., pp. 69-71.

Movimiento Nacional” o “antes del 18 de julio de 1936”¹⁵⁰. En otros casos se hace referencia al periodo republicano, sin establecer diferencias entre el periodo prebélico o bélico, con expresiones como “dominio rojo”, “dominación roja”, “periodo rojo” o “dominación marxista”. Por tanto, el régimen nunca es distinguido como tal, menos aún como régimen democrático, sino como un periodo ilegítimo de implantación forzosa que, como tal, estaba condenado a perecer.

En contraste con lo anterior el régimen franquista es descrito en los consejos de guerra con apelativos tendentes a la sublimación. La expresión más utilizada para identificarlo es “Glorioso Movimiento Nacional”, al que se añaden “Movimiento Nacional”, “Glorioso Alzamiento Nacional”, “Alzamiento Nacional” o “Movimiento”. Es curiosa la apropiación en exclusiva del término *nacional*, costumbre que consolidó el régimen franquista desde sus inicios para auto identificarse al mismo tiempo que desvinculaba a los republicanos de la defensa de la nación. Las personas afines al régimen que durante la guerra sufrieron algún tipo de represión son descritas como “gente de orden”, “presos fascistas”, “personas de derechas”, “personas derechistas”, “religiosos”, “personas que fueron asesinadas” o “elementos derechistas que les denominaban fascistas”

Los procesados en estos consejos de guerra eran republicanos que se habían distinguido, en mayor o menor intensidad, por su defensa de la República. Esta defensa es descrita en los textos que hemos analizado también con total desprecio. Así, los procesados fueron “miliciano armado”, “voluntario rojo”, “miliciano criminal y cobarde”, “elemento propagandista” o “destacado elemento revolucionario”. Todos estos apelativos se convertían en cargos que solían conllevar las penas más elevadas. En ningún momento se distingue entre partidos o tendencias políticas o sindicales, ni se admite la legitimidad de tomar parte por la defensa de la República e incluso se castiga la voluntariedad en esta defensa. Todo ello lleva a la calificación individual de muchos de los encausados en términos durísimos, como “es individuo bastante peligroso”, “es persona de antecedentes revolucionarios”, “es de malos antecedentes”, “de antecedentes izquierdistas”, “se le considera desafecto”, “destacado revoltoso”, “es elemento

¹⁵⁰ En este sentido, a diferencia del ejemplo de Lleida, sí se suele establecer indirectamente cierta diferenciación entre el periodo republicano y el periodo de guerra, aunque es cierto que en algunos casos la descripción es muy general y no distingue entre estas dos etapas.

peligrosísimo para la causa nacional”, “desafecto y peligroso para la causa nacional”, “es elemento peligroso para el nuevo Estado” o “es individuo desafecto y peligroso para el Nuevo Estado e indeseable para la actual sociedad”. Con estos calificativos el procesado no podía más que esperar una sentencia poco benévola.

Por tanto, los miembros de los tribunales que formaron los consejos de guerra contribuyeron con su lenguaje al proceso de deslegitimación del régimen republicano y de todos los que lucharon por defenderlo, a la vez que contribuyeron a legitimar la construcción de una nueva realidad social y política basada en unos nuevos valores que únicamente presentaban como válidos y correctos los de los sublevados contra la República el 18 de julio de 1936. En este sentido, los procesados en estos consejos de guerra fueron también víctimas del lenguaje y sus posibilidades de un juicio justo y de una defensa adecuada se limitaron enormemente.

El siguiente paso en este mecanismo represivo era el procesamiento por responsabilidades políticas. Conocemos la composición inicial del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, así como el del Juzgado Instructor de Castellón, es decir, de las personas que se encargaron de poner en funcionamiento la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón.¹⁵¹

¹⁵¹ BOE nº 156, de 5 de junio de 1939 y BOP nº 77, de 1 de julio de 1939.

Tabla 11.9
COMPOSICIÓN INICIAL DEL TRIBUNAL REGIONAL DE
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE VALENCIA

	Titular	Profesión	Suplente	Profesión
Presidente	Eugenio Serrano García	Teniente Coronel de Infantería	Francisco Serra Amoedo	Comandante de Infantería
Vocal	Francisco Bonilla Huguet	Magistrado	Luis Vallejo Quero	Magistrado
Vocal	José María Zumalacárregui Prats	Miembro de FET de las JONS, abogado y Catedrático	Salvador Montesinos Bonet	Miembro de FET de las JONS, abogado y Notario
Secretario	Mariano San José Sanz	Oficial Primero de Sala	Ignacio Bethem Guillén	Oficial Segundo de Sala
Juez Civil Especial	Ramón Díaz Fanjul	Juez de Primera Instancia		
Secretario	Rafael Benito Sáez	Secretario de Juzgado de Primera Instancia		

Fuente: AHPCS. Sección Responsabilidades Políticas.
Elaboración propia

Tabla 11.10
COMPOSICIÓN INICIAL DEL JUZGADO INSTRUCTOR DE CASTELLÓN

	Titular	Profesión
Juez	Gabriel Castro Marcos	Teniente Provisional de Infantería y abogado
Secretario	Rafael Bover Vaquer	Brigada de Infantería
Suplente del Secretario	Bernardino Martorell Jordá	Soldado de Infantería

Fuente: AHPCS. Sección Responsabilidades Políticas.
Elaboración propia

Esta composición sufrió cambios como consecuencia de la puesta en marcha de la maquinaria de la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas y por las propias necesidades del Estado franquista. En junio de 1939 se produce la primera modificación, siendo sustituido Luis Vallejo Quero en su cargo de vocal suplente del

Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia por el también magistrado Evaristo Piquer Arilla¹⁵². Éste, a su vez, fue sustituido en junio de 1940 por el magistrado Francisco de Paula Serra Martínez¹⁵³. Previamente el comandante de Infantería Francisco Serra Amoedo cesó en el cargo de presidente suplente en beneficio de Luis Torres Martínez, con el mismo rango militar¹⁵⁴. Aprovechando la remodelación de junio de 1940 se sustituyó también a Francisco Bonilla Huguet como vocal por el magistrado Gil López Ordás¹⁵⁵. Los cambios afectaron también al cargo de presidente, ya que Eugenio Serrano García fue sustituido en 1941 por el Teniente Coronel de Infantería Ángel Toledo García¹⁵⁶. El mismo año se nombra Secretario Suplente al oficial de Sala Rafael Flores Micheo.¹⁵⁷

En cuanto al Juzgado Instructor de Castellón, el Secretario Rafael Bover Vaquer fue sustituido en 1940 por el también sargento Ramón Martín Repollet, mientras el Suplente del Secretario lo es por el sargento Emilio Amigo Crespo¹⁵⁸. Los cambios en este Juzgado se completan con la sustitución de este último por el sargento provisional de Infantería Marcelino Vaquero Robledo en diciembre de 1941.¹⁵⁹

¹⁵² BOE nº 162, de 11 de junio de 1939.

¹⁵³ BOE nº 151, de 2 de junio de 1940.

¹⁵⁴ BOE nº 277, de 4 de octubre de 1939.

¹⁵⁵ BOE nº 151, de 2 de junio de 1940.

¹⁵⁶ BOE nº 263, de 1941.

¹⁵⁷ BOE nº 304, de 1941.

¹⁵⁸ BOE nº 49, de 1940.

¹⁵⁹ BOE nº 341, de 7 de diciembre de 1941.

Tabla 11.11
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL REGIONAL DE
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE VALENCIA EN 1942

	Titular	Profesión	Suplente	Profesión
Presidente	Ángel Toledo García	Teniente Coronel de Infantería	Luis Torres Martínez	Comandante de Infantería
Vocal	Gil López Ordás	Magistrado	Francisco de Paula Serra Martínez	Magistrado
Vocal	José María Zumalacárregui Prats	Miembro de FET de las JONS, abogado y Catedrático	Salvador Montesinos Bonet	Miembro de FET de las JONS, abogado y Notario
Secretario	Mariano San José Sanz	Oficial Primero de Sala	Ignacio Bethem Guillén	Oficial Segundo de Sala
Juez Civil Especial	Ramón Díaz Fanjul	Juez de Primera Instancia		
Secretario	Mariano San José Sanz	Secretario de Juzgado de Primera Instancia	Rafael Flores Micheo	Oficial de Sala

Fuente: AHPCS. Sección Responsabilidades Políticas.
Elaboración propia

Tabla 11.12
COMPOSICIÓN INICIAL DEL JUZGADO INSTRUCTOR DE CASTELLÓN EN 1942

	Titular	Profesión
Juez	Gabriel Castro Marcos	Teniente Provisional de Infantería y abogado
Secretario	Ramón Martín Repollet	Sargento
Suplente del Secretario	Marcelino Vaquero Robledo	Sargento provisional de Infantería

Fuente: AHPCS. Sección Responsabilidades Políticas.
Elaboración propia

Llegados a este punto, es interesante detenernos en la figura de algunos de estos responsables de hacer efectiva la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón. Francisco Bonilla Huguet fue vocal del Tribunal Regional de

Responsabilidades Políticas de Valencia de junio de 1939 a junio de 1940. Magistrado de profesión, en marzo de 1927 pasó de Juez de Primera Instancia del distrito de Triana en Las Palmas de Gran Canaria a magistrado de la Audiencia Provincial de Cuenca¹⁶⁰. En julio de 1931 fue promovido a la categoría de magistrado de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca¹⁶¹ y en febrero de 1933 a Presidente de Sala y de la Audiencia Provincial del mismo territorio¹⁶². En agosto de 1935 consiguió la categoría de magistrado de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca¹⁶³, pero un año más tarde se decretó su jubilación forzosa¹⁶⁴. Con la sublevación franquista se incorporó al servicio jurídico de los sublevados y en diciembre de 1936 fue el magistrado que se encargó de tramitar los sumarios incoados contra los militares que se habían opuesto al golpe de Estado¹⁶⁵, iniciando, así, una colaboración con el franquismo que continuó en la jurisdicción de Responsabilidades Políticas.

El vocal suplente de Francisco Bonilla Huguet era Luis Vallejo Quero, quien estuvo únicamente unos días en el cargo. Este magistrado pasó en diciembre de 1924 del Juzgado de Instrucción de Carlet al de Torrelaguna¹⁶⁶. Nombrado al año siguiente Suplente de la Junta Organizadora del Poder Judicial¹⁶⁷, fue trasladado en marzo de 1926 al Juzgado de Primera Instancia de Belmonte¹⁶⁸, nombrado Abogado Fiscal de la Audiencia de Jaén en mayo¹⁶⁹ y trasladado al Juzgado de Primera Instancia de Sigüenza en julio del mismo año¹⁷⁰. Su carrera fue imparable y en 1937 fue nombrado Presidente

¹⁶⁰ Gaceta de Madrid, nº 60, de 1 de marzo de 1927.

¹⁶¹ Gaceta de Madrid, nº 192, de 11 de julio de 1931.

¹⁶² Gaceta de Madrid, nº 48, de 17 de febrero de 1933. A partir de este momento disponía de un sueldo anual de 17.250 pesetas.

¹⁶³ Gaceta de Madrid, nº 222, de 10 de agosto de 1935.

¹⁶⁴ Gaceta de Madrid de 22 de agosto de 1936.

¹⁶⁵ Información recogida en www.flickr.com.

¹⁶⁶ Gaceta de Madrid, nº 18, de 18 de enero de 1924.

¹⁶⁷ Gaceta de Madrid, nº 338, de 4 de diciembre de 1925.

¹⁶⁸ Gaceta de Madrid, nº 85, de 26 de marzo de 1926.

¹⁶⁹ Gaceta de Madrid, nº 147, de 25 de mayo de 1926.

¹⁷⁰ Gaceta de Madrid, nº 185, de 4 de julio de 1926.

de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife¹⁷¹, pasando poco después y transitoriamente por la Audiencia de Valencia¹⁷². En febrero de 1945 fue nombrado Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de esa localidad¹⁷³. En febrero de 1962 se le jubiló por edad¹⁷⁴ y se le concedió la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.¹⁷⁵

Un caso especial fue el de José María Zumalacárregui Prats, quien permaneció como vocal del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia desde su creación en junio de 1939 hasta su disolución en 1942. Nacido en Lucena (Córdoba) en 1879, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca en 1896 y en Derecho en 1899, siendo doctor en Derecho en 1903, año en el que fue nombrado Catedrático de Economía Política y Hacienda de la Universidad de Santiago y poco después Catedrático numerario de Economía Política y Hacienda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia¹⁷⁶, así como doctor en Filosofía y Letras en 1904¹⁷⁷. Antiguo profesor de Política Económica en la Escuela de Ingenieros Industriales y desde 1903 Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública¹⁷⁸, colaborador del ministro de Fomento Francisco Cambó en el periodo 1917-1919¹⁷⁹ y vinculado a grupos católicos de extrema derecha, contribuyó a la creación de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia en 1919¹⁸⁰, a la reforma de la

¹⁷¹ BOE nº 403, de 27 de noviembre de 1937.

¹⁷² BOE nº , de 21 de mayo de 1939.

¹⁷³ BOE nº 46, de 15 de febrero de 1945.

¹⁷⁴ BOE nº 35, de 9 de febrero de 1962.

¹⁷⁵ BOE nº 52, de 1 de marzo de 1962.

¹⁷⁶ Gaceta de Madrid, nº 108, de 18 de abril de 1903; y nº 200, de 19 de julio de 1903.

¹⁷⁷ F. MANCEBO, *La Universidad de Valencia. De la monarquía a la República (1919-1939)*. Valencia, 1994, pág. 382.

¹⁷⁸ B. SANZ, op. cit., pág. 11. Formado en Salamanca, completó sus estudios en la Universidad de Lausana bajo la tutela del economista Vilfredo Pareto.

¹⁷⁹ En julio de 1918 se le nombró agregado en comisión de servicio al ministerio de Fomento. Gaceta de Madrid nº 184, de 3 de julio de 1918.

¹⁸⁰ E. LLUCH, “La primera facultat de ciències econòmiques de València (1937)”, en *Arguments*, nº 1, 1974, pp. 173-183; F. MANCEBO, “Dictadura, República y Guerra Civil, en M. PESET (coord.), op. cit., pág. 41.

Universidad¹⁸¹ y a la creación del colegio mayor de la Universidad¹⁸², entre otras iniciativas, siendo decano de la Facultad de Derecho en 1929¹⁸³ y nombrado rector de dicha universidad en abril de 1930, cargo que ejerció hasta mayo de 1931¹⁸⁴.

Sufrió directamente los rigores de la guerra al ver cómo la FAI le requisaba su casa y su hijo mayor, vinculado con la sublevación de julio de 1936, fue fusilado en octubre de 1936. En enero de 1937 fue jubilado forzosamente, más bien depurado¹⁸⁵, y se le obligó a dejar el cargo de consejero delegado de la Caja de Previsión Social del Reino de Valencia, aunque en abril de 1938 fue nombrado vocal de la Comisión General de Codificación¹⁸⁶. Su identificación con el bando franquista no podía ser más clara y a finales de ese año logró escapar a Francia, desde donde se reincorporó a la zona franquista, siendo adscrito de forma provisional a la Universidad de Valladolid y a la Comisión Nacional de Previsión, que después se convertiría en el Ministerio de Organización y Acción Sindical.¹⁸⁷

Tras la llegada de las tropas franquistas a Valencia en abril de 1939 su situación cambió considerablemente. Desde agosto de 1939 a julio de 1941 ejerció el cargo de Presidente de la Diputación de Valencia (de agosto de 1939 a julio de 1941)¹⁸⁸ y sustituyó a Manuel Batlle como rector de la Universidad de Valencia, cargo que ejerció hasta abril de 1941, contribuyendo a la represión de su profesorado¹⁸⁹. En esta labor de

¹⁸¹ F. MANCEBO (1994), op. cit., pp. 35-36 y 323. José María Zumalacárregui leyó el discurso inaugural del curso 1919-1920, primer curso de la autonomía universitaria, con el título de “Misión de la Universidad en la vida económica contemporánea”.

¹⁸² Ibidem, pp. 64-65.

¹⁸³ F. MANCEBO (1988), op. cit., pág. 37

¹⁸⁴ J. CLARET (2004), op. cit., pág. 177.

¹⁸⁵ F. MANCEBO, “Dictadura, República y Guerra Civil”, en M. PESET (Coord.), op. cit., pág. 68. En ese momento tenía 58 años.

¹⁸⁶ Se trata de un órgano consultivo del ministerio de Justicia. BOE nº 534, de 8 de abril de 1938.

¹⁸⁷ J. CLARET (2004), op. cit., pág. 185.

¹⁸⁸ También en la Diputación de Valencia impulsó un intenso proceso de depuración de su personal. B. SANZ, op. cit., pp. 11-12.

¹⁸⁹ Ibidem., pp. 192-193. José María Zumalacárregui se encargó de la reorganización de la Universidad de Valencia (propuso la sustitución de los catedráticos expedientados por los auxiliares y éstos por ayudantes), iniciando los expedientes de depuración de todos sus trabajadores. Para ello eligió como juez

depuración y represión se debe incluir su nombramiento en junio de 1939 como vocal del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, lo que le permitió controlar la depuración de destacados docentes y catedráticos en Valencia¹⁹⁰. Fue tal su vinculación con el régimen franquista que en el decreto que determina su cese en ese cargo consta expresamente el agradecimiento personal de Franco por los servicios prestados¹⁹¹. Además, en abril de 1939 ganó una cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid¹⁹², a donde se trasladó en marzo de 1941, ya que también se le había concedido la presidencia del Consejo Nacional de Economía¹⁹³ reconocimiento que le llevó años después a la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica¹⁹⁴. También perteneció al CSIC desde su creación en noviembre de 1939, fue consejero del Banco de España¹⁹⁵ y director del Instituto de Economía Sancho de Moncada del CSIC¹⁹⁶. José Zumalacárregui fue un franquista reconocido. Fue diputado por designación personal de Franco de marzo de 1943 hasta su fallecimiento en abril de 1956 y en marzo de 1946 ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y en la de Jurisprudencia y Legislación.

instructor a Francisco Beltrán Bigorra. El resultado fue la marginación y el silencio de profesores de excelente nivel, con la complicidad de sus colegas. Además, convocó en junio de 1939 exámenes de septiembre para aquellos alumnos que tuvieran pendiente alguna asignatura del curso 1935-1936 o que les faltara completar algún curso, aprobando a 1.137 de los 1.194 alumnos matriculados en medicina. V. SALAVERT, “La ocupación de la Universidad”, en M. PESET (coord.), op. cit., pág. 246; y F. MANCEBO, op. cit., pág. 195; y B. SANZ, op. cit., pág. 4. Sin embargo, para J. Claret su implicación en la represión universitaria se limitó a redactar los informes preceptivos y remitir un listado de catedráticos que no habían comparecido a las depuraciones por hallarse en el exilio a finales de junio de 1939. J. CLARET (2006), op. cit., pág. 337. Uno de estos catedráticos fue el ex rector Juan Peset Aleixandre, que acabó siendo ejecutado. AA.VV. (2001), op. cit.

¹⁹⁰ F. MANCEBO (1988), op. cit., pág. 178.

¹⁹¹ BOE nº 99, de 9 de abril de 1941.

¹⁹² BOE del 12 de enero de 1941.

¹⁹³ M. BALDÓ, “La Diputación en camisa azul (1939-1959), en M. CHUST (dir.), op. cit., pp. 357-401; J. CLARET (2004), op. cit., pág. 190. Durante este periodo oficiosamente el vicerrector Gascó Oliag y el vicepresidente Rafael Cort eran los que en la práctica ejercían el gobierno de la Universidad de Valencia y de la Diputación de Valencia.

¹⁹⁴ BOE nº 201, de 20 de julio de 1949.

¹⁹⁵ BOE nº 36, de 5 de febrero de 1947.

¹⁹⁶ J. CLARET (2004), op. cit., pp. 72-74 y 190-191.

El cargo de Juez Civil Especial del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia estuvo en manos de Ramón Díaz Fanjul. Juez de Primera Instancia e Instrucción, con destino en la Fiscalía Superior de Tasas, fue ascendido en 1943 a Fiscal Provincial de Tasas de Baleares¹⁹⁷, siendo nombrado en 1946 Fiscal Provincial de León y de Sevilla¹⁹⁸. A partir de 1947 solicitó excedencia y comenzó a recoger los frutos de su carrera en la política franquista. Así, en 1949 se le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y se jubiló como catedrático¹⁹⁹. Esto le permitió reorientar su carrera y en 1950 fue nombrado Jefe Nacional del Seguro de Enfermedad, cargo que ostentó hasta agosto de 1952²⁰⁰, ya que fue ascendido a Director de Asistencia Sanitaria e Instalaciones del Seguro Obligatorio de Enfermedad²⁰¹. Su posición en el régimen era cómoda y le permitió la concesión del reconocimiento del título carlista de Conde de Zumalacárregui, con Grandeza de España²⁰². Paralelamente su carrera como magistrado se consolidó. En 1955 fue nombrado Consejero de Estadística para el sexenio 1955-1960, en representación del Consejo de Economía Nacional²⁰³ y en 1958 se reincorporó a la función judicial activa, con el cargo de magistrado de la Audiencia Territorial de Barcelona²⁰⁴, pasando poco después a la Audiencia Territorial de Madrid²⁰⁵. El último dato del que disponemos es que en enero de 1961 solicitó la excedencia voluntaria.²⁰⁶

Del primer Secretario del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, Rafael Benito Sáez, únicamente conocemos que en marzo de 1937 era

¹⁹⁷ BOE nº 84, de 25 de marzo de 1943.

¹⁹⁸ BOE nº 33, de 2 de febrero de 1946 y BOE nº 48, de 17 de febrero de 1946. En esos momentos cobraba un sueldo anual de 23.000 pesetas.

¹⁹⁹ BOE nº 201, de 20 de julio de 1949; y nº 232, de 20 de agosto de 1949.

²⁰⁰ BOE nº 319, de 15 de noviembre de 1950 y BOE nº 220, de 7 de agosto de 1952.

²⁰¹ BOE de 10 de noviembre de 1952.

²⁰² Este título nobiliario tenía carácter hereditario. BOE nº 231, de 19 de agosto de 1954.

²⁰³ BOE nº 35, de 4 de febrero de 1955.

²⁰⁴ BOE nº 79, de 2 de abril de 1958.

²⁰⁵ BOE nº 28, de 2 de febrero de 1959.

²⁰⁶ BOE de 17 de enero de 1961.

Secretario del Juzgado de Instrucción de Alberique (Valencia), y que fue separado del cuerpo por el Presidente de la Audiencia de Valencia, por el abandono de su cargo antes incluso del 18 de julio de 1936²⁰⁷, con lo que seguramente sería una persona que desde el principio de la guerra pasó al bando franquista.

En junio de 1939 Evaristo Piquer Arilla sustituyó como vocal suplente a Luis Vallejo Quero, estando en el cargo un año. Se trataba de un magistrado que en enero de 1924 consiguió el traslado del Juzgado de Primera Instancia de Sagunto al del distrito de Serranos en Valencia²⁰⁸, desde donde consolidó las categorías de magistrado de Audiencia Provincial y de Audiencia Territorial²⁰⁹. Tras el paso por la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, en julio de 1932 fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial de Castellón²¹⁰, experiencia que le valió su nombramiento para la Audiencia Territorial de Valencia²¹¹. Sin embargo, en junio de 1938 se decretó su jubilación forzosa²¹². Con la llegada del régimen franquista consiguió la reincorporación al servicio judicial activo, con el cargo de magistrado de la Audiencia Territorial de Valencia²¹³, consolidando su plaza hasta su jubilación por edad en abril de 1942.²¹⁴

Su sustituto como vocal suplente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia en junio de 1940 fue Francisco de Paula Serra Martínez, vinculado también desde sus orígenes a las tierras valencianas. En 1926 pasó del Juzgado de Primera Instancia de Ayora al de Cervera y poco después al de Caravaca²¹⁵. Después de la guerra lo encontramos en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid, con

²⁰⁷ Gaceta de la República nº 86, de 27 de marzo de 1937.

²⁰⁸ Gaceta de Madrid, nº 12, de 12 de diciembre de 1924.

²⁰⁹ Gaceta de Madrid, nº 84, de 25 de marzo de 1927 y nº 280, de 7 de octubre de 1931.

²¹⁰ Gaceta de Madrid, nº 211, de 29 de julio de 1932.

²¹¹ Gaceta de Madrid, nº 216, de 4 de agosto de 1934.

²¹² Gaceta de la República, nº 179, de 28 de junio de 1938. Quedó con un sueldo de 17.250 pesetas.

²¹³ BOE nº 153, de 2 de junio de 1939.

²¹⁴ BOE nº 124, de 10 de abril de 1942.

²¹⁵ Gaceta de Madrid, nº 133, de 13 de mayo de 1926; nº 68, de 9 de marzo de 1927.

el nombramiento de magistrado del Tribunal Provincial Contencioso-administrativo de dicha localidad²¹⁶. Poco después fue presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid y ascendido a magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo²¹⁷. Sus meritos le valieron la concesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y, tras su jubilación por edad en octubre de 1963, la concesión de la Gran Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.²¹⁸

En junio de 1940 también se sustituyó al vocal del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia Francisco Bonilla Huguet por el magistrado Gil López Ordas, también vinculado a las tierras valencianas. Destinado en 1928 en el Juzgado de Primera Instancia de Motilla del Palancar, fue trasladado ese año al Juzgado de Primera Instancia de Chiva y después al de Manacor²¹⁹. En enero de 1933 fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Serranos en Valencia (al igual que Evaristo Piquer), con categoría de magistrado de Audiencia²²⁰. Tras su paso por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, conocemos que en marzo de 1948 fue nombrado Presidente de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Albacete²²¹ y que en 1957 se jubiló por edad, siéndole también otorgada la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.²²²

Finalmente, del Secretario Suplente del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Valencia desde 1941, Rafael Flores Micheo únicamente conocemos que en agosto de 1935 era Oficial Segundo de la Sala de la Audiencia Provincial de Córdoba y que en noviembre de 1941 le fue concedida la excedencia voluntaria.²²³

²¹⁶ BOE nº 312, de 8 de noviembre de 1947.

²¹⁷ BOE nº 178, de 27 de junio de 1955. En esos momentos cobraba un sueldo de 58.000 pesetas.

²¹⁸ BOE nº 252, de 21 de octubre de 1959; nº 248, de 16 de octubre de 1963; y nº 35, de 10 de febrero de 1964.

²¹⁹ Gaceta de Madrid, nº 110, de 19 de abril de 1928; nº 74, de 15 de marzo de 1929; y nº 365, de 30 de diciembre de 1932.

²²⁰ Gaceta de Madrid, nº 29, de 29 de enero de 1933.

²²¹ BOE nº 123, de 2 de mayo de 1948.

²²² BOE nº 38 de 7 de febrero de 1957; y nº 69, de 10 de marzo de 1957.

²²³ Gaceta de Madrid nº 87, de 28 de marzo de 1935; y BOE nº 316, de 12 de noviembre de 1941.

De los miembros del Juzgado Instructor de Castellón sólo hemos podido obtener información del Juez Gabriel Castro Marcos. Sabemos que en 1941 es Jefe de Servicios del Cuerpo de Prisiones, siendo trasladado de la Prisión Central de Orduña a la Provincial de Bilbao y a la Central de Burgos²²⁴ y posteriormente a la prisión Central de Santa Rita en Madrid y a la provincial de Zamora como administrador²²⁵. Su carrera parece vinculada al mundo de las prisiones, ya que en 1963 fue nombrado Jefe Superior de Administración Civil del Cuerpo Especial de Prisiones y poco después Inspector Regional de Prisiones de la Séptima zona (radicada en Oviedo) y Director de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid²²⁶. Finalmente, en 1965 fue nombrado Jefe de la Sección de Clasificación de la Dirección General de Prisiones.²²⁷

En conclusión, disponemos de información sobre parte de las carreras de los miembros del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Valencia y del Juzgado Instructor de Castellón que pertenecían a la Magistratura. En su evolución la mayoría de ellos gozaron de la protección de un régimen para el que prestaron valiosos servicios en sus primeros años. Destaca la vinculación de algunos de ellos con las tierras valencianas y la culminación de sus carreras con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, una de las altas condecoraciones con que el Estado premia a los magistrados por sus servicios y su carrera.

EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES LOCALES

Por otra parte, la Ley de Responsabilidades Políticas exigía en la tramitación de los expedientes la colaboración de las autoridades locales para obtener la información sobre la situación personal y familiar de los procesados. Estas autoridades eran la Alcaldía, el jefe local de FET de las JONS, el comandante del puesto local de la Guardia

²²⁴ BOE nº 289, de 16 de octubre de 1941.

²²⁵ BOE nº 187, de 6 de julio de 1943; y nº 333, de 29 de noviembre de 1943.

²²⁶ BOE nº 47, de 23 de febrero de 1963; y nº 73, de 26 de marzo de 1963.

²²⁷ BOE nº 77, de 31 de marzo de 1965.

Civil y el cura párroco de la parroquia correspondiente²²⁸. La situación no era novedosa porque ya en los consejos de guerra que se celebraron después de la guerra civil y los años posteriores estas autoridades debían realizar este tipo de informes. Su información debía centrarse en la catadura moral de la persona, su ideología e identidad política, y en su situación económica. Sin embargo, en los informes que hemos podido analizar las informaciones se centran especialmente en el patrimonio de los procesados y sólo secundariamente en su ideología y antecedentes políticos, lo que nos demuestra la intención de esta Ley de buscar el castigo económico para los republicanos. Estos informes posteriormente se contrastaban con la declaración jurada de bienes que debía hacer el procesado o su familia, dándole siempre prioridad a los informes oficiales.

El análisis de los informes que realizaron las autoridades locales de la Vall d'Uixó sobre los ciudadanos procesados por la jurisdicción de Responsabilidades Políticas nos ofrece información sobre la correlación de fuerzas y la situación social en esta localidad en los primeros años de posguerra. Este análisis ofrece resultados más o menos diferentes en otras localidades, atendiendo a las circunstancias de cada localidad. El franquismo se impuso en las diferentes ciudades españolas atendiendo a unas circunstancias previas propias y construyó una red de relaciones sociales características que, salvo los rasgos generales propios de la dictadura, pueden sufrir algunas variaciones. En este sentido, se puede afirmar que las autoridades de la Vall d'Uixó que llevaron la iniciativa en la denuncia de republicanos y de búsqueda de información para su procesamiento por responsabilidades políticas fueron la Guardia Civil y la Alcaldía.

Como hemos indicado anteriormente, de las cuatro denuncias públicas que se producen en la Vall d'Uixó de ciudadanos republicanos al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, dos son realizadas por la Guardia Civil (la tercera se

²²⁸ El juez correspondiente ordenaba los informes con carácter de urgencia y daba instrucciones para que éstos se centraran “en los bienes, circunstancias personales y domicilio del encausado”.

En otras ciudades y en ocasiones especiales se solicitaba informe al jefe de la Policía local y, si era necesario corroborar la identidad del procesado, se pedía una partida de nacimiento al correspondiente Registro Civil. Si el procesado poseía bienes en otro municipio se pedían también informes de la Alcaldía e, incluso, del resto de autoridades de aquella localidad. A veces también se pedían informes a los Juzgados de la localidad o, si era el caso, a los directores de las cárceles donde se encontraban los procesados, quienes ratificaban que efectivamente se encontraban en ella e informaba de la realización de la declaración jurada de bienes.

produce a instancias de dicho Tribunal) en marzo y agosto de 1940²²⁹, con lo que mantuvo un papel activo en este proceso²³⁰. Las dos denuncias y el resto de informes están todos firmados por el comandante del puesto de la Guardia Civil local Amadeo Bartoll Ricart, excepto dos informes firmados por el comandante Gaspar Colominas Esteban (diciembre de 1941 y abril de 1943) y otro firmado por el comandante Daniel Algarra Cerdán (octubre de 1944). En general se trata de una fuente de información independiente respecto a las demás²³¹ y bien informada, ya que recurre a instancias como los datos de contribución urbana e informa del paradero de algunos encausados que se encuentran en otras provincias o en el extranjero. En ocasiones sus informaciones son rectificadas o ampliadas con un segundo informe. El contenido de sus informes se orienta tanto a la localización actualizada del inculcado, como a su base económica (si posee bienes inmuebles, dinero en banco, si trabaja y su salario), su situación familiar o su actuación social y política en el pasado, algunas veces sacando conclusiones morales sobre el mismo o sobre su presunta peligrosidad.

Según los datos que disponemos la Alcaldía fue la autoridad local que más activamente colaboró en la confección de estos informes sobre los inculcados por responsabilidades políticas. Todos están firmados por los alcaldes Vicente Rebollar Llorens, Domingo Pérez Nebot y Juan Aragó Moliner²³², destacando con mucho la cantidad de informes firmados por el segundo de ellos. La importancia de estos informes se demuestra en el hecho que sirvieron como modelo, incluso literalmente,

²²⁹ Expedientes de Responsabilidades Políticas contra Daniel Segarra Paulo y Manuel Llobet Marín. Cajas 10130 y 10080 respectivamente. AHPCS. Ver las denuncias en el Apéndice Documental.

²³⁰ A diferencia del caso de Lleida, parece que la Guardia Civil sí tuvo protagonismo en la denuncia de ciudadanos en la Vall d'Uixó. C. MIR, F. CORRETGE, J. FARRÉ y J. SAGUÉS, op. cit., pp. 188-189.

²³¹ Sólo en tres casos hemos detectado que su informe es una copia del emitido por la Alcaldía. El resto de informes maneja información propia.

²³² Vicente Rebollar Llorens fue alcalde de la Vall d'Uixó del 31 de marzo de 1939 al 16 de septiembre de 1940. Firma 6 de los informes. Domingo Pérez Nebot, quien firma la gran mayoría de los informes, lo fue del 3 de mayo de 1941 al 17 de febrero de 1942. Juan Aragó Moliner lo fue del 17 de febrero de 1942 al 29 de abril de 1949. Firma dos de los informes. Uno de los informes analizados, fechado en septiembre de 1943, aparece firmado por Ramón Barrachina, Primer Teniente de Alcalde de febrero de 1942 hasta junio de 1946, siendo alcalde Juan Aragó Moliner. En cinco de los informes no aparece la firma del alcalde, pero dos de ellos aparece su fecha por lo que se podrían asignar a Vicente Rebollar Llorens (30 de octubre de 1939) y Juan Aragó Moliner (3 de noviembre de 1943).

Hay que tener en cuenta que del 16 de septiembre de 1939 al 3 de mayo de 1941 estuvo como alcalde Ismael Llopis Arnau, de quien no disponemos de ningún informe de responsabilidades políticas. E. GAJA y M. FERRER, op. cit., pp. 17-34.

para la confección del resto de informes en numerosas ocasiones. En tres ocasiones la guardia civil firma un informe idéntico al realizado previamente por la Alcaldía, ya fuera por influencia, por falta de datos o por comodidad. En seis ocasiones FET de las JONS realiza la misma operación. Pero es en los informes que firmaba el cura párroco donde más influencia se ejercía, ya que hemos localizado 42 informes donde éste se limita a firmar el informe de la Alcaldía (únicamente en seis informes el cura párroco realiza una redacción propia). Por tanto, pese a no originar ninguna de las denuncias, la Alcaldía ejercía una fuerte influencia sobre el resto de las autoridades locales

FET de las JONS suponía una autoridad también con relativa independencia a la hora de suministrar información, aunque algunas veces ésta se contradecía con la ofrecida por la Guardia Civil, a la que finalmente se daba cierta prevalencia. En general, ofrecía informes bastante documentados, aunque con frecuencia hacían referencia a datos poco actualizados. Todos los informes estaban firmados por el Delegado Local del Servicio de Información e Investigación de FET de las JONS. Aunque en 12 ocasiones los informes aparecen firmados sin la identificación del firmante, la mayoría de ellos están rubricados por Juan Aragó Moliner (de mayo a diciembre de 1941). Existen dos informes firmados en octubre de 1944 por la “Jefatura local” de FET de las JONS, ostentada por Gabriel Cortés²³³. En principio parece que sus informes tenían menos peso que el de la Alcaldía y el de la Guardia Civil. Sólo en dos ocasiones faltó el informe pertinente de FET de las JONS²³⁴. Aún así el Delegado Local de FET y de las JONS fue autor de la denuncia de un vecino de la Vall d’Uixó.²³⁵

La cuarta autoridad local que debía emitir un informe sobre los procesados por responsabilidades políticas era la Iglesia. El cura párroco correspondiente debía informar tanto sobre los aspectos morales como sobre los materiales del inculcado, lo que le convertían en una instancia de control que excedía los márgenes de lo estrictamente espiritual. De hecho, en los informes analizados el cura párroco nunca informa de los aspectos morales de la persona, sino únicamente de los económicos. En

²³³ Gabriel Cortés pasó a ser Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó en junio de 1946. Ibidem, pág. 28.

²³⁴ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente Bernat Rovira y Joaquín Arnau Salvador. Cajas 10127 y 10158 respectivamente. AHPCS.

²³⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Julio Bernat Serrano, Caja 10258. AHPCS.

general, da la impresión que estos informes fueron firmados por obligación, sin voluntad o iniciativa propia, ya que en la mayoría de los casos, 43 de 48, eran simplemente copias de los informes redactados desde la Alcaldía. En varias ocasiones el informe del cura párroco es una copia calcada del informe de la Alcaldía, al que se ha tachado en la firma “el Alcalde”, para sustituirlo a mano por “Cura Párroco”²³⁶. Incluso en una ocasión la copia del informe de la Alcaldía se realiza a mano²³⁷. Únicamente en tres casos la redacción del informe es independiente, ya que en dos de los casos analizados falta este informe. En uno de los informes, fechado en octubre de 1943, el cura párroco, José Pons, parece querer marcar distancias y dejar claro que realiza el informe por imperativo legal, limitándose a informar que *Cumpliendo lo que se me indica por este Juzgado en escrito del 24 de septiembre de 1943 informo que José Fenollosa, de 31 años, labrador, no tiene bienes de ninguna clase*²³⁸. Esta actitud de este párroco se puede observar en otros expedientes, en los que indica que *Sólo por referencias puedo informar que...*²³⁹. Sin embargo, fue el párroco Pedro Navarro, de la parroquia del Ángel, quien firma la gran mayoría de los informes, en el periodo que va del 31 de octubre de 1939 al 23 de diciembre de 1941. En cuatro de los informes no aparece identificado el cura párroco firmante, aunque, por el periodo de la firma, podría tratarse del mismo Pedro Navarro. Además, en ocho de los informes no aparece la fecha de la firma. En definitiva, se podríamos concluir que las autoridades eclesiásticas de la Vall d’Uixó participaron en el proceso represivo que representa la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, aunque desde una postura poco activa y entusiasta.

²³⁶ Ver los expedientes de Responsabilidades Políticas contra José Forner Segarra, José Salafranca Alminir y Rosa Giner Martínez. Cajas 10145, 10158 y 10144 respectivamente. AHPCS.

²³⁷ Ver expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Rebollar Aragón. Caja 10083. AHPCS.

²³⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra José Fenollosa Segarra. Caja 10098. AHPCS.

La misma situación se analiza en C. MIR, F. CORRETGÉ, J. FARRÉ y J. SAGUÉS, op. cit., pp. 189-192. En este estudio se destaca que los curas párrocos eran informantes obligados y que en la mayoría de los casos trataban de abstenerse de dar detalles incriminadores, a la vez que eran reacios a informar sobre la base económica de los inculpados. Sin embargo, en los casos que hemos analizado este último extremo no queda totalmente corroborado, ya que al realizar y firmar copias de los informes de la Alcaldía de lo que sí se informaba era de la base económica de los inculpados. De todas formas, está claro que las autoridades eclesiásticas actuaron en la Vall d’Uixó no con pasividad sino con cierta dejadez y, si bien colaboraron en la represión, no lo hicieron con iniciativa propia ni con entusiasmo. Al mismo tiempo, hay que recordar que en la Vall d’Uixó la Iglesia sufrió durante la guerra civil diversos altercados que podrían ser calificados como graves y que la Iglesia tuvo un papel importante como parte integrante del régimen franquista. Por otra parte, ejemplos de participación activa y decidida de la Iglesia en este proceso represivo los podemos encontrar en C. MIR (2000), op. cit., pp. 195-201, y M. ORTIZ, op. cit., pág. 398.

²³⁹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Julio Bernat Serrano, Caja 10258. AHPCS.

Llegados a este punto es interesante detenernos en una de las figuras que han aparecido citadas en este apartado. Nacido en abril de 1897, Juan Aragó Moliner participó en la depuración de responsabilidades políticas desde sus cargos primero de Delegado Local del Servicio de Información e Investigación de FET de las JONS y después, a partir de febrero de 1942, como alcalde de la Vall d'Uixó. Fue, por tanto, una de las figuras principales del poder local en los primeros años del franquismo, un poder controlado por la dominadora de la vida local en esos años, la empresa Segarra. Efectivamente Juan Aragó Moliner fue trabajador de dicha empresa desde el 28 de febrero de 1930 en la sección de aparato, dedicada a coser las distintas piezas del zapato que posteriormente se unen a la suela, convirtiéndose en encargado de dicha sección en mayo de 1939, cuando la empresa empezó de nuevo la producción tras la guerra, con lo que su jornal pasó de 5 pesetas a 10,50 pesetas. Su vinculación a la empresa se mantiene hasta el 30 de abril de 1949, cuando obtiene una baja temporal que parece que se convirtió en definitiva, ya que no existe constancia de su vuelta a la misma. Justamente fue el día después en el que dejó de ser alcalde de la Vall d'Uixó. Desde sus cargos en FET de las JONS y la alcaldía, no es aventurado observar que Juan Aragó Moliner constituiría una pieza importante en el control por parte de la familia Segarra de los ámbitos de decisión del poder local²⁴⁰.

Perdonar y no olvidar: la complicada reinserción laboral de los procesados.

Los primeros años tras la guerra civil fueron tiempos muy difíciles, especialmente para los trabajadores. A la escasez de trabajo fruto de la desarticulación social y económica que todo proceso bélico comporta se unió la falta de materias primas, la miseria de muchas familias y la desincentivación económica. En este contexto, el régimen franquista otorgó a los empresarios altas cotas de poder para

²⁴⁰ Como trabajador de la empresa Segarra, Juan Aragó Moliner se benefició de las medidas paternalistas de dicha empresa, cobrando diversas pagas extraordinarias, aguinaldos, pluses de carga familiar e, incluso, una semana de vacaciones pagadas en el período 1944-1948. Su jornal evolucionó de las 5 pesetas en 1930 a las 10,5 pesetas en 1939, a las 13,50 pesetas en 1942, a las 22,06 pesetas en 1945 y las 28,79 pesetas en 1948. Parece que en el año 1949 se limitó a cobrar un subsidio de empresa junto con otros complementos. Archivo Segarra de la Vall d'Uixó, sección Fichas de Personal. Para las características de los elementos de tipo paternalista practicados por esta empresa ver F. PEÑA (1998), op. cit., pp. 179-302.

depurar, reclutar y controlar a los trabajadores, que ya habían visto cómo sus organizaciones y partidos políticos habían sido declarados ilegales. A esta situación se añadía el intenso proceso de depuración de responsabilidades desatado por las autoridades franquistas que, como hemos visto, dejó en la pobreza a muchas familias. Campos de concentración y de trabajo, encarcelamientos, consejos de guerra, juicios sumarísimos, ejecuciones y exigencias de responsabilidades políticas supusieron los principales elementos de represión que sumieron a la mayor parte de la población en la sospecha, la incertidumbre y el miedo. Un estado emocional social buscado intencionadamente por las nuevas autoridades para imponer sus condiciones de vida.

En la Vall d'Uixó conocemos la ejecución de 25 personas después de la guerra civil²⁴¹ y el paso por un consejo de guerra sumarísimo de 124 republicanos, junto con personas desaparecidas o exiliadas. En este contexto se impuso la necesidad urgente de trabajar para poder sobrevivir, una necesidad que coincidió con la reconstrucción y reactivación de la empresa Segarra, que a partir de este momento capitalizará prácticamente toda la fuerza de trabajo de la Vall d'Uixó y de parte de las localidades circundantes. Desconocemos qué pasó con la mayor parte de los procesados por responsabilidades políticas y sus familias que hemos analizado durante los años 1940, aunque no sería arriesgado aventurar que la mayoría estuvieron condenados al trabajo más duro y a la miseria. Sin embargo, sí conocemos parte de lo que ocurrió con algunos de los que pudieron incorporarse a la empresa Segarra.

La empresa Segarra necesitó reintegrar a parte de sus antiguos trabajadores para reemprender con garantías la producción, pero no lo hizo a cualquier precio. Estos trabajadores fueron sometidos a un cuestionario, con supervisión de la familia Segarra y FET de las JONS, que intentaba esclarecer su pasado republicano, haciendo incidencia en la militancia política y sindical, así como en la facilitación de datos que permitieran acceder a los detalles del control obrero de la empresa durante la guerra²⁴². Se trataba de

²⁴¹ V. GABARDA, op. cit., pp. 245-246. A las víctimas reseñadas por V. Gabarda habría que añadir la de José Gil Moliner, ejecutado el 26 de octubre de 1940 y que no aparece en su lista. Expediente de Responsabilidades Políticas de José Gil Moliner. Archivo Histórico Provincial de Castellón, caja 10159.

²⁴² Ver el cuestionario en el Apéndice Documental. Una Orden del Ministerio de Organización y Acción Sindical de 5 de mayo de 1938 establecía un plazo de tres meses a partir de la “liberación” para que los empresarios realizaran la depuración de los trabajadores de sus empresas. Se pueden consultar las instrucciones dadas en este sentido en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón en el Apéndice Documental.

una auténtica investigación en la que la disposición de avales de personas consideradas de orden se convertía en fundamental y que permitió a la familia Segarra depurar ejemplarmente a todas aquellas personas que se consideraban desafectas tanto a ella misma como al nuevo Estado franquista²⁴³. Esta situación era el reflejo del poder que el régimen franquista otorgó a los grandes empresarios, a los que ofreció un marco productivo nuevo basado en unas condiciones laborales totalmente favorables.

La gestión de la mano de obra inmediatamente después de la guerra civil fue una de las piezas clave del proceso de reactivación de la empresa Segarra. Aprovechando la imperiosa necesidad de trabajar a cualquier precio para sobrevivir esta empresa pudo movilizar con gran rapidez a entre 250 y 700 trabajadores para reconstruir las fábricas y comenzar la producción, casi todos recién llegados a la localidad tras la guerra²⁴⁴. Prueba de la situación económica desesperada a nivel general, pero en particular para los trabajadores, es que inicialmente la empresa no les pagó con dinero, sino con alimentos²⁴⁵ y que se impuso desde el principio la militarización del sistema de trabajo. Desde este punto de vista, muchos trabajadores encontraron en la empresa Segarra, pese a todo, una fuente de estabilidad económica que les hacía huir de la generalizada penuria imperante, lo que les llevó a generar un sentimiento de cierto agradecimiento a la familia Segarra que se tradujo, en diversas formas y niveles, en la aceptación de su propuesta paternalista. A partir de este momento, con el pleno apoyo y en sintonía con las autoridades franquistas, la empresa Segarra comenzó a desarrollar su modelo de empresa paternalista.

En este contexto la familia Segarra se halló en condiciones de ofrecer trabajo a una gran cantidad de personas, desde antiguos trabajadores a gentes llegadas de otras partes de España, incluyendo incluso a personas que habían sido procesadas por la

²⁴³ P. YSÀS, “Los empresarios catalanes en el primer franquismo”, en G. SÁNCHEZ y J. TASCÓN (eds.), op. cit., pág. 226.

²⁴⁴ *Escuela de Aprendices*, nº 6, 1941. Archivo Histórico Municipal de Castellón. También Archivo Segarra, sección Documentos Antiguos, caja 7. La primera cifra hace referencia a abril de 1939 y la segunda a principios de 1940.

²⁴⁵ F. PEÑA (1998), op. cit., pp. 108-109. Algunos trabajadores preferían, con mucho, en este momento, alimentos a dinero. La empresa Segarra comenzó a repartir salarios en forma de dinero cuando empezó a disponer de liquidez.

justicia franquista o a sus familias. En otras palabras, la empresa Segarra aceptó a lo largo de los años 1940 a trabajadores con pasado republicano que habían sido castigados por la justicia. En principio éstos no constituían un peligro importante, ya que accedieron con un “perdón condicionado” a la empresa, en el sentido que, si bien fueron admitidos, también fueron vigilados especialmente. En la práctica esta situación se traducía en trabajadores especializados (algunos trabajaban en la empresa desde antes de la guerra), disciplinados y vulnerables. Como comprobaremos a continuación fueron ciertas estas palabras de la familia Segarra:

*La justicia, al terminar la guerra, encarceló a muchos de Vall de Uxó, cumpliéndose algunas sentencias graves, mas todos los que la justicia absolvió, o declaró su libertad condicionada (que en su mayoría solicitaron trabajo en nuestras Industrias en reconstrucción) todos encontraron el consuelo de nuestras puertas abiertas de par en par para darles trabajo, facilitándoles la normalización de su vida.*²⁴⁶

*Se abrieron a continuación las cárceles, y la justicia liberó a muchos, que casi todos desfilaron por nuestras fábricas en busca de trabajo, sin que éste se le negara a nadie, **aun sin olvidar lo que cada cual fue.** Muchísimos de los que colocamos resolvieron sus necesidades de momento y se marcharon. Otros se marcharon y volvieron. Otros (la mayoría) aquí se colocaron y aquí siguen.*²⁴⁷

De esta forma, la necesidad de trabajo fue lo que permitió encontrar un punto de confluencia de intereses entre los trabajadores de todo tipo y la empresa Segarra. La necesidad de un trabajo a cualquier precio y de todo tipo de servicios de tipo asistencial permitió a la familia Segarra consolidar su poder y crear un modelo empresarial basado en el paternalismo que le permitió enriquecerse en muy pocos años en el contexto del régimen franquista.

A continuación analizaremos la situación de algunos de los trabajadores procesados por responsabilidades políticas y sus familias que mantuvieron relación posterior con la empresa Segarra. Ya hemos visto cómo algunos de los implicados en estos procesos trabajaban en la empresa Segarra, igual que muchos de sus familiares, lo que, por lo menos, les permitió sobrevivir en un contexto de grandes penurias.

²⁴⁶ *Escuela de Aprendices* n° 46, 1945. Archivo Histórico Municipal de Castellón.

²⁴⁷ *Escuela de Aprendices*, n° 49, 1945. Archivo Histórico Municipal de Castellón. El subrayado es mío.

Mecánico de profesión, Adolfo Aragón Segarra fue condenado por un consejo de guerra a 12 años y un día de reclusión menor en febrero de 1940, por pertenecer a Izquierda Republicana y participar en los controles de carreteras y cárceles populares. Su procesamiento por responsabilidades políticas comenzó en septiembre de 1941, cuando ya trabajaba en la empresa Segarra, seguramente en régimen de libertad condicionada o especial, ya que en la declaración jurada de bienes se dice que estaba recluso. Como disponía de una pequeña finca de naranjos el Tribunal de Responsabilidades Políticas le sancionó en febrero de 1942 con el pago de 250 pesetas, que pagó a principios de abril de 1942, con lo que a finales de ese mes su caso quedó cerrado. Adolfo Aragón Segarra era un antiguo trabajador de la empresa, ya que ingresó en la misma a finales de diciembre de 1931, a la edad de 17 años. Su primer trabajo en ella fue en el departamento de calzados con un jornal de 5 pesetas. En octubre de 1936 fue trasladado al taller de la empresa, donde su salario evolucionó desde las 8,50 pesetas a las 12 pesetas en noviembre de 1942, cuando se le destinó al departamento de guantería, donde permaneció hasta enero de 1949 con un jornal que llegó a las 17,50 pesetas. En esta última fecha fue trasladado al departamento de artículos de piel, donde conocemos que permaneció hasta junio de 1949 con un jornal de 20,50 pesetas y la categoría Oficial de Primera. Durante estos años estuvo de baja en tres ocasiones, una de seis días por gripe y dos de 8 y 11 días por bronquitis, todas ellas retribuidas (incluso en una de ellas Ernesto Segarra le “concedió” el pago extraordinario de una semana entera de jornal). Por tanto, nos encontramos ante un claro ejemplo de persona con antecedentes republicanos públicos y notorios (se le acusó de miliciano armado y de maltrato a personas de orden) que encontró en la empresa Segarra trabajo estable durante los años de posguerra. Quizá el precio a pagar se resuma en explotación, disciplina y resignación, aunque, a pesar de todo, sería una situación privilegiada para la época. Lo que desconocemos es hasta qué punto la empresa Segarra pudo influir para que este trabajador pudiera acceder a la libertad condicionada de forma muy temprana²⁴⁸.

Francisco Ten Orenga, de profesión barbero, fue condenado por un consejo de guerra a 20 años de reclusión menor en agosto de 1939 por ser socialista, ingresar

²⁴⁸ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Adolfo Aragón Segarra. Caja 10144.AHPCS. Archivo Segarra de la Vall d'Uixó. Sección Fichas de Personal.

voluntario en el ejército republicano y por supuestos robos y saqueos, así como por su relación con la destrucción de la Iglesia. En enero de 1940 se hallaba en la Prisión provincial de Castellón, donde suponemos que permaneció hasta 1943, cuando seguramente conseguiría la libertad condicionada. En julio de ese año comenzó a trabajar para la empresa Segarra como peón en la construcción de las viviendas para obreros de la llamada “Colonia Segarra”²⁴⁹, con un jornal de 10 pesetas. En abril de 1946 continuaba realizando trabajos de obra para la empresa, cobrando un jornal de 15,60 pesetas, hasta agosto de 1947, cuando acabó su relación con la empresa por finalización de las obras. Por tanto, también la empresa Segarra fue la solución provisional para este socialista y sindicalista que en los informes de las autoridades locales de enero de 1940 fue calificado de “persona insolvente completamente por carencia de toda clase de bienes”. Finalmente su proceso por responsabilidades políticas se declaró cerrado y archivado en abril de 1945.²⁵⁰

Un caso similar es el de Vicente García Climent. Antiguo anarquista y miliciano socialista durante la guerra, se le relacionó indirectamente con la desaparición de algunas personas de derechas y con la quema de la Iglesia y las ermitas de la Vall d’Uixó, por lo que fue condenado a 30 años de reclusión mayor. Cuando se comenzó su expediente de responsabilidades políticas, en mayo de 1941, se hallaba cumpliendo condena en la Cárcel Modelo de Barcelona. A finales de noviembre de 1943 ingresó en la empresa Segarra como peón, y posteriormente en trabajos agrícolas, con un jornal de 10 pesetas, que fue aumentando hasta las 12 pesetas en abril de 1946 y las 12,50 pesetas en 1947. En junio de 1949, sin que consten los motivos, causó baja por despido. Su procesamiento por responsabilidades políticas acabó siendo sobreseído en abril de 1945.²⁵¹

²⁴⁹ F. PEÑA (1998), op. cit., pp. 264-272; Y. GIL, “Arquitectura industrial y control patronal en los inicios del franquismo: la empresa Segarra de la Vall d’Uixó”, en *III Encuentro de Investigadores del franquismo*. Sevilla. Muñoz Moya Editor, 1998, pp. 131-141.

²⁵⁰ Francisco Ten Orenga vio cómo la Comisión Central de Penas, según expediente 100842 le ratificaba su pena de 20 años de reclusión menor en febrero de 1943. Por otra parte, prueba de que se pudo beneficiar de la política paternalista llevada a cabo por la familia Segarra fue la concesión de un crédito de 500 pesetas, que había que amortizar en 10 plazos de 50 pesetas semanales, que fueron pagados de junio a agosto de 1947. Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Ten Orenga. Caja 10076. AHPCS. Archivo Segarra de la Vall d’Uixó. Sección de Fichas de Personal.

²⁵¹ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Vicente García Climent. Caja 10106. AHPCS. Archivo Segarra de la Vall d’Uixó. Sección de Fichas de Personal.

Teodoro Borrás Fas fue condenado por un consejo de guerra en marzo de 1940 a 12 años y un día de reclusión menor con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Su caso reviste interés porque, además de pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas, se le acusó de ser uno de los que llevaron el mando del control obrero de la empresa Segarra, extorsionando a los trabajadores y coaccionándolos para su afiliación sindical. Declarado insolvente completamente por carecer de toda clase de bienes, ganaba un jornal de 8 pesetas en julio de 1941, seguramente ejerciendo su oficio de alpargatero o cualquier trabajo que se le presentara. En principio, esta persona presenta el perfil de antiguo republicano que la familia Segarra nunca aceptaría en su empresa por sus acciones pasadas. Y de hecho, parece que así fue, por lo menos hasta junio de 1952, cuando ingresa en la misma en la sección de curtidos, donde trabajaba un primo suyo. Ya hemos visto cómo la familia Segarra declaró perdonar pero no olvidar y así lo hizo dándole la oportunidad de trabajar. Sin embargo, las relaciones parece que no serían del todo buenas, porque en enero de 1959, con 44 años, Teodoro Borrás Fas solicitó su baja voluntaria. Un colchón de 15 años pareció inicialmente suficiente para dejar de lado el pasado, pero éste parece que siguió pesando de forma decisiva. Es cierto que la familia Segarra dio a Teodoro Borrás Fas una segunda oportunidad, pero no sabemos a qué precio.²⁵²

Zapatero de profesión, Francisco Gijón Orbay fue acusado de pertenencia a la UGT, de hacer guardias y controles como miliciano armado y de proteger a los que incendiaron la Iglesia de la Vall d'Uixó. El consejo de guerra por el que fue condenado en agosto de 1939 a 20 años de reclusión menor e inhabilitación absoluta, le calificó de “individuo bastante peligroso”. Declarado en febrero de 1940 totalmente insolvente, pese a declarar poseer dos pequeñas fincas, se encontraba en esa fecha cumpliendo su condena en la Prisión Provincial de Castellón. En noviembre de ese mismo año el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas no perdió la ocasión de condenarlo al pago de una sanción económica de 50 pesetas, que nunca es pagada, acabando su caso en marzo de 1944 con el sobreseimiento del caso en virtud de la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1942. Poco después, en abril de 1945, se

²⁵² Expediente de Responsabilidades Políticas contra Teodoro Borrás Fas. Caja 10133. AHPCS. Archivo Segarra de la Vall d'Uixó. Sección Fichas de Personal. Su jornal pasó de 14 pesetas en junio de 1952 a 41,25 pesetas en julio de 1957.

incorpora a la empresa Segarra en su sección de talonaje. Con su trabajo de clavar tacones continuó hasta su jubilación, en abril de 1969, con un jornal que evolucionó de las 12 pesetas que cobraba en abril de 1945, a las 16,60 pesetas de abril de 1954 y las 206 de abril de 1969. Antiguo trabajador de la empresa, ya que existe constancia de su ingreso en la misma en noviembre de 1927, con 22 años, Francisco Gijón Orbay mantuvo un buen comportamiento a lo largo de todos estos años y se benefició de los servicios paternalistas que la empresa ponía a disposición de los trabajadores, especialmente de los pluses familiares y de antigüedad y los servicios sanitarios (tenemos constancia que permaneció 124 días de baja por diversas enfermedades a lo largo de estos años). Es este, pues, un ejemplo de la integración que permitió la empresa Segarra a algunos de los más destacados republicanos.²⁵³

Otro ejemplo de la aplicación de la política paternalista de la empresa Segarra a un antiguo trabajador con un pasado republicano público es el de Pedro Martínez Paredes. Trabajador de la empresa desde abril de 1929, en el departamento de calzados y en la sección de alpargatas, fue condenado por un consejo de guerra en abril de 1940 a la pena de 30 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta por tener “antecedentes izquierdistas”, realizar guardias y controles como miliciano e incorporarse como voluntario al ejército republicano (hecho este último que la empresa Segarra destaca en su ficha personal). Declarado también insolvente y sin bienes, con una mujer que trabajaba como alpargatera con un jornal de 3 pesetas, sabemos que en septiembre de 1941 se hallaba cumpliendo condena en la Prisión de San Miguel de los Reyes en Valencia. Su caso por responsabilidades políticas quedó sin resolver por su precaria situación hasta abril de 1945, cuando fue declarado sobreseído oficialmente. Sin embargo, antes de esta última fecha ya había ingresado en la empresa Segarra. Suponemos que en abril de 1944 salió de la prisión con libertad condicionada y esto le permitió solicitar, como antiguo trabajador, el ingreso en la misma. Se incorporó a la sección de suela como cortador, con un jornal que pasó de 12,50 pesetas en abril de 1944 a 16,50 pesetas en abril de 1946. Su trabajo en la empresa le reportó diversos accidentes, con algunos cortes de importancia en las manos, la amputación de dos dedos de la mano izquierda y lesiones oculares (en marzo de 1945 el médico de la empresa

²⁵³ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Francisco Gijón Orbay. Caja 10164. AHPCS. Archivo Segarra de la Vall d’Uixó, sección Fichas de Personal.

recomendó su traslado de sección, cosa que parece no ocurrió). En enero de 1947 de 1947, con casi 40 años, su salud parece que le obligó a causar baja temporal, que se acabó convirtiendo en definitiva. En 1948 no trabajó ningún día, pero la familia Segarra, con un gesto típicamente paternalista, le concedió “como gratificación especial” el pago del 8% de los beneficios de trabajo voluntario respecto al salario que percibía, es decir, 474 pesetas. Pedro Martínez Paredes escribió una carta de agradecimiento a la familia Segarra y, aprovechando la festividad de San Silvestre²⁵⁴, parece que esto le valió la apertura a finales de ese año de una libreta de ahorro de la empresa con 500 pesetas. Finalmente en mayo de 1951 Pedro Martínez Paredes falleció.²⁵⁵

Si bien parece que la empresa Segarra sirvió en algunos casos para la integración social, económica y laboral de algunos de los republicanos castigados por el régimen franquista en los primeros años de posguerra, lo mismo se podría argumentar en relación a sus familiares. Como hemos visto en algunos de los casos analizados, la mujer o los hijos de algunos de los republicanos que cumplían condena en prisión trabajaban en la empresa, lo que simplemente les permitía sobrevivir. El caso de la familia de Anselmo Ganau Mingarro nuevamente se puede poner como ejemplo.

Anselmo Ganau Mingarro sufrió una condena en diciembre de 1939 de 30 años de reclusión mayor por ser de UGT, ser directivo del comité revolucionario de la Vall

²⁵⁴ El fundador de la empresa Segarra y su hijo mayor se llamaban Silvestre. San Silvestre, el 31 de diciembre, era aprovechado por la familia Segarra, para conceder diversas gracias a sus trabajadores. Entre otras medidas Silvestre Segarra Bonig solía repartir un duro a todos los hijos de los trabajadores que se acercaban ese día a felicitarle. Ese día era vivido por los trabajadores con una doble dimensión de gratitud y de humillación.

²⁵⁵ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Pedro Martínez Paredes. Caja 10144. AHPCS. Archivo Segarra de la Vall d’Uixó, sección Fichas de Personal.

La carta manuscrita que envió Pedro Martínez Paredes a la familia Segarra evidencia las relaciones paternalistas establecidas y, también, el respeto y la gratitud de esta persona a la familia Segarra de este antiguo republiancano:

Vall de Uxó, 28-12-48

Sres. Silvestre Segarra e Hijos:

Muy señores míos; Después de saludarlos con el mayor respeto y subordinación, paso a comunicarles mi gratitud sin límites, por el generoso rasgo que han tenido Vds., tanto para mí como para mis hijos, al hacerme el donativo que me comunican.

Mi mayor satisfacción sería dejar dicha cantidad íntegra en la libreta de ahorros, pero la situación económica de mi hogar es tan precaria que no tendremos más remedio que es ir extrayendo todos los meses una cierta cantidad para remediarnos, porque si ahora lo sacáramos todo en poco tiempo se gastarían, por lo tanto si no hay ningún inconveniente de momento me lo ponen en la libreta.

Deseándoles un feliz día de San Silvestre y un próspero año nuevo, les saluda atentamente su at^{mo}. Y S.S. Pedro Martínez.

d'Uixó durante la guerra y realizar algunas incautaciones. En septiembre de 1941 se hallaba preso en la Prisión de San Miguel de los Reyes en Valencia. De sus cuatro hijos sólo trabajaban las dos hijas mayores, de 15 y 18 años, mientras su mujer vendía hortalizas en la plaza pública. Como disponían de una finca el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas les impuso una sanción de 1.000 pesetas en febrero de 1942 que acabaron pagando en varios plazos en mayo de 1943. Con este pago su procesamiento por responsabilidades políticas quedó cerrado.²⁵⁶

Las dos hijas eran Vicenta y Ángela Ganau Arnau. Vicenta era la mayor. A la edad de 17 años, ingresó en la fábrica en octubre de 1940 dedicándose al aparado de señora en el departamento de calzados, con un jornal de 3 pesetas. A finales de ese año se le puso a engomar y su jornal fue aumentando hasta las 5 pesetas en agosto de 1941, las 6 pesetas en enero de 1944, las 8 pesetas de septiembre de 1945 y las 10,70 pesetas en mayo de 1947. En noviembre de este último año dejó la empresa por contraer matrimonio²⁵⁷. Ángela ingresó en la empresa en septiembre de 1940, con 14 años. Inicialmente se dedicó a clavar tacones de goma en la sección de talonaje del departamento de calzados, con un jornal de 3 pesetas que fue evolucionando hacia las 5 pesetas de mayo de 1941, las 7 pesetas de diciembre de 1944, las 8,60 pesetas de 1946 y las 15 pesetas de noviembre de 1950. Igual que su hermana, Ángela Ganau Arnau dejó la fábrica por contraer matrimonio en abril de 1953.²⁵⁸

Tal y como hemos visto la empresa Segarra fue un importante recurso integrador de algunos de los republicanos que sufrieron las consecuencias del procesamiento por responsabilidades políticas. El paternalismo industrial puesto en práctica por la familia Segarra se basaba en una especie de pacto entre empresarios y trabajadores por el que los primeros se encargaban de facilitar, en consonancia con el Estado franquista, una

²⁵⁶ Expediente de Responsabilidades Políticas contra Anselmo Ganau Mingarro. Caja 10181. AHPCS.

²⁵⁷ Salvo casos de extrema necesidad, existía la costumbre, reforzada por la legislación franquista, de que la mujer dejara el trabajo al casarse porque su misión social pasaba a ser el marido y el hogar. Para la cuestión de la situación de la mujer en la empresa Segarra F. PEÑA (1998), op. cit., pp. 298-302 ; y R. VIRUELA, "Organización del trabajo y diferencias de género en la industrial del calzado durante la autarquía: el caso de la empresa Segarra de la Vall d'Uixó", *Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Vol. VI, nº 119 (82).

²⁵⁸ Archivo Segarra de la Vall d'Uixó, sección Fichas de Personal. Cuando las trabajadoras dejaban la empresa por casarse se les pagaba diversos conceptos como paga extra, vacaciones correspondientes y siete jornales por la boda.

serie de servicios sociales y asistenciales (hospital, viviendas, escuela, economato, seguros, pagas extraordinarias, vacaciones, deportes, actividades de ocio, etc.) que acababan convirtiéndolos en auténticos privilegiados en el contexto de los años 1940. Trabajar para la empresa Segarra en esta época suponía un lujo, en el sentido de disponer de un trabajo estable que permitía, a duras penas por los bajos salarios, sobrevivir. Sin embargo, para los trabajadores la contrapartida exigida era su sumisión total: a la disciplina laboral, a la aceptación del franquismo y a la exaltación de la familia Segarra. Es en este contexto en el que hemos de entender la integración, después del duro castigo sufrido, de los republicanos que fueron reprimidos por la justicia franquista. Estas personas se hallaban en una situación muy precaria, con sus familias desestructuradas y empobrecidas, con un régimen que les había marcado para siempre, en constante vigilancia y sospecha (la mayoría estaban en libertad condicionada) y con la necesidad imperiosa de trabajar para poder vivir. Esta necesidad les hizo acudir a la empresa Segarra, donde fueron aceptados con la advertencia de la aceptación incondicional de la propuesta franquista y de orientación paternalista montada por la familia Segarra²⁵⁹. En este punto, tan importante para nuestro análisis es la represión anterior sufrida por estos trabajadores como las condiciones de su reinserción social y laboral. Convertidos en trabajadores en permanente sospecha y vigilados (recordemos las palabras de los gerentes: “aún sin olvidar lo que cada cual fue”), se convirtieron en trabajadores resignados al trabajo, la disciplina y el silencio²⁶⁰. Uno de los grandes objetivos del franquismo se había conseguido: la docilidad de la mano de obra.

²⁵⁹ El paternalismo industrial desarrollado por la empresa Segarra se analiza en F. PEÑA (1998), op. cit. La utilización del concepto “paternalismo industrial” ha suscitado algunas controversias en la historiografía, por las diferencias existentes entre las funciones ejercidas por los Estados en los siglos XIX y XX. Para encontrar diversas posturas respecto a este tema en la historiografía española se pueden consultar J. SIERRA, *El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial (Asturias, 1860-1917)*. Madrid, 1990; J. BABIANO, Op. cit., y A. SOTO, “Rupturas y continuidades en las relaciones laborales del primer franquismo, 1938-1958”, en C. BARCIELA (ed.), *El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959*. Barcelona, 2003.

²⁶⁰ Esta situación de gran parte de los trabajadores durante los primeros años del franquismo se puede analizar para el caso de la provincia de Valencia en I. SAZ y A. GÓMEZ (eds.), op. cit.

12- Conclusión.

El régimen franquista utilizó la represión como elemento principal para su estructuración y consolidación. Lejos de ofrecer un proyecto social integrador, desde sus inicios estableció una diáfana división entre vencedores de la guerra y vencidos en la que a los últimos no se les permitió normalizar su situación en las mismas condiciones que a los primeros. El sistema represivo articulado por el régimen franquista tuvo múltiples facetas, tal y como ha demostrado la historiografía, llegando a afectar a todos los aspectos de la vida diaria de los ciudadanos. Una de estas facetas tuvo que ver con la utilización de la justicia como herramienta represiva. El nuevo gobierno franquista no dudó en utilizarla como instrumento para saldar cuentas con todos aquellos ciudadanos que no habían compartido sus planteamientos. De esta forma, se produjo la imposición de la justicia militar sobre la ordinaria, se eliminaron y recortaron garantías jurídicas básicas y se impulsó la proliferación de jurisdicciones especiales.

Una de estas jurisdicciones fue la creada por la Ley de Responsabilidades Políticas. Publicada en plena guerra civil, el 9 de febrero de 1939, a las puertas de la caída de Cataluña en manos franquistas, con las expectativas de una guerra prácticamente ganada y con la previsión de qué hacer con los republicanos, supuso la creación de una jurisdicción especial que tuvo importantes consecuencias para una gran parte de la población considerada derrotada, y que en muchos casos estaba sufriendo prisión tras su paso por un consejo de guerra sin garantías jurídicas, ya que no sólo les impidió la recuperación de su normalidad cotidiana, y con ella un lugar en la nueva sociedad, sino que en muchos casos significó su entrada en la pobreza y la desesperación. Al mismo tiempo, esta Ley permitió a los nuevos dirigentes ajustar cuentas con el pasado, articular una nueva realidad social privilegiada y recaudar cantidades de dinero cuyo destino jamás fue justificado. En la provincia de Castellón sólo en el periodo comprendido entre julio de 1942 y diciembre de 1945 se ingresaron en la llamada “Cuenta Especial” de la Delegación de Hacienda de Castellón la cantidad de 678.771,84 pesetas.

Si bien la Ley de Responsabilidades Políticas fue reformada en febrero de 1942 y finalmente derogada en 1945, su relativa escasa vigencia no debe disimular el hecho que su verdadero objetivo, el castigo y la neutralización del antiguo adversario, había sido ampliamente logrado, siendo sus efectos perdurables durante mucho tiempo o, en algunos casos, definitivos. De hecho, la derogación de la Ley no implicó más que la no incoación de nuevos expedientes, siguiendo su curso normal los ya iniciados. Por todo ello, esta Ley juega un papel fundamental a la hora de estudiar la configuración y estructuración de las bases sociales y económicas del franquismo y todo estudio histórico sobre la construcción de la sociedad franquista inevitablemente debe tenerla en cuenta.

En la provincia de Castellón hay constancia documental de la implicación de 6.240 personas en la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas en el periodo 1939-1945. Esta cifra supone aproximadamente el 2% de la población provincial total según el Censo de 1940, lo que representa que, en el frecuente caso que el afectado fuera el cabeza de familia, un mínimo de un 10% de la población provincial podría haberse visto afectada. Sin embargo, existen indicios que las cifras se podrían elevar a alrededor de 9.500 personas, lo que situaría en torno al 3% la cifra de la población provincial directamente afectada y al 12% de la misma indirectamente afectada.

El perfil de los afectados por la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas era claro: se trataba preferentemente de un varón perteneciente al sector primario y a las poblaciones con mayor peso demográfico y económico. Sin embargo, habría que matizar algunos aspectos. Entre la población directamente implicada el 93,7% fueron varones y el 6,3% mujeres, lo que se explica por la tradicional limitación de la mujer al espacio privado y su mínima presencia en el mundo laboral, situación que, por cierto, estaba siendo modificada por la democratización republicana. En este sentido, y excepto el caso de la población de Sarratella, en ninguna localidad de la provincia de Castellón se procesó a más del 2% de la población femenina. En cuanto a su orientación laboral, el 55,7% de los procesados pertenecieron al sector primario de la economía, el 22,9% al sector terciario y el 16,7% al secundario, lo que demuestra la importancia que tenía en la provincia la agricultura y la pesca, con una presencia relativamente escasa de la actividad industrial y un sector servicios en desarrollo. En cualquier caso, las cifras demuestran lo que se puede observar leyendo la mayoría de

expedientes de responsabilidades políticas de la provincia de Castellón: la población afectada era fundamentalmente sectores sociales humildes, de escasa base económica. Esto indica claramente dónde se localizaba, a ojos de las autoridades franquistas, su enemigo.

Un aspecto interesante es la localización geográfica de la exigencia de responsabilidades políticas. Las localidades con mayor número de afectados fueron aquéllas que tenían un mayor peso demográfico y económico, la mayoría de ellas próximas al litoral, como Castellón, Burriana, Villarreal, Onda, Almazora o Alcora, en las que, por cierto, se concentra la población afectada perteneciente al sector secundario. Sin embargo, fue en el ámbito rural donde la exigencia de responsabilidades políticas tuvo una mayor importancia relativa, siendo las poblaciones de Sarratella, Fanzara, Benafer, Vallat y Pobla de Benifassà las que acumularon porcentajes de población afectada más elevados. Destaca el caso de Sarratella, en la que se registra el porcentaje más alto de varones afectados (26,6%) y de mujeres afectadas (7,7%), con un global de un 16,58% de su población directamente afectada, también la más alta de la provincia, que podría implicar un 66,32% de su población indirectamente afectada.

En cuanto al ritmo de incoación de expedientes, se produjo un periodo inicial muy intenso comprendido entre agosto de 1939 y finales de 1941, que respondió a la voluntad inicial del régimen franquista de ajustar cuentas con la población republicana. El año en el que se incoaron más expedientes fue 1941, aunque la intensidad relativa del periodo agosto-diciembre de 1939 fue la más elevada. De hecho, en estos cinco meses se incoaron más expedientes que en todo el año 1942. Una segunda etapa es la que comprende los años 1942 y 1943, en los que se siguen incoando un elevado número de expedientes, pero con una clara tendencia a la baja, tendencia que se consolida en los años 1944 y 1945. Este último año, como se ha indicado, marcó el final de la incoación de expedientes, aunque no su tramitación. La tendencia a la baja iniciada especialmente en 1943 se debió a que los objetivos de la exigencia de responsabilidades políticas ya se habían cubierto suficientemente, a la evidencia que la mayor parte de los implicados no podían hacer frente a las sanciones económicas impuestas y al colapso administrativo. En cualquier caso, no hay duda que el periodo 1939-1945 fue de incertidumbre y de fomento de la denuncia entre los ciudadanos.

Estas fueron las características fundamentales de la población que sufrió las consecuencias de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón. No hay que olvidar que esta Ley implicaba sufrir una serie de irregularidades, abusos y violaciones del Derecho clásico. A parte de ser juzgados por hechos que cuando se cometieron no suponían delito alguno, los procesados por responsabilidades políticas sufrían, en muchos de los casos, un segundo juicio por los mismos hechos que ya habían sido juzgados previamente en un consejo de guerra, ya que el procesamiento por responsabilidades políticas tenía como objetivo establecer la *dimensión económica* de las penas a imponer a los considerados culpables, que ya se encontraban cumpliendo penas de privación de la libertad. Además, el procesado desconocía hasta bien avanzado el procesamiento que éste se había abierto, así como quién le acusaba y los cargos que contra él se seguían. Al mismo tiempo, la dinámica procesal sólo sirvió en casos muy determinados y aislados para que los jueces tuvieran en cuenta los escritos de descargo planteados por los procesados, con lo que la indefensión de los procesados era manifiesta.

Por otra parte, la Ley permitía no sólo el procesamiento de personas que fallecían durante el proceso, sino, como se ha podido comprobar, de personas que hacía tiempo que habían fallecido e, incluso, que habían fallecido fusiladas por orden de las autoridades franquistas. En estos casos eran los herederos, es decir, los familiares directos, los que debían padecer el procesamiento y asumir sus consecuencias, generando situaciones a todas luces abusivas y sumamente injustas. Son numerosos los casos de viudas e hijos que, sin haber realizado ningún hecho punible, debieron asumir sanciones económicas y retenciones de bienes que acabaron llevándoles a la pobreza.

Caer en todo este conjunto de abusos jurídicos era fácil. Los motivos de apertura de un expediente eran muy variados: desde la remisión de una copia de sentencia por parte de un consejo de guerra al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, a la denuncia de cualquier organismo oficial (en la provincia de Castellón destacó el Servicio de Recuperación Agrícola), de cualquier autoridad local (Guardia Civil, alcalde, delegado local de FET y de las JONS o el sacerdote) o de cualquier ciudadano o, simplemente, ser detenido por cualquier incidente de orden público. En este contexto, se produjo una clara incitación a la denuncia por parte de las autoridades franquistas, interesadas en un ajuste de cuentas lo más amplio posible y en la creación

de un clima social de miedo, útil para imponer su nuevo modelo social. Una simple denuncia, por ajuste de cuentas o por cualquier motivo, con mayor o menor base, podía hacer caer a una persona en una espiral de abusos jurídicos e indefensiones que podían provocar fácilmente su paso al grupo de los sospechosos y su desgracia personal y familiar.

El resultado fue el procesamiento de un gran número de personas, pero también el colapso de la jurisdicción, que se veía incapaz de hacer frente al ingente volumen de expedientes incoados y que empezó por abandonar y sobreseer los casos de inculpados en situación de pobreza. Sin embargo, el sobreseimiento del caso no suponía la liberación del procesado, ya que sus bienes o la posibilidad de tenerlos, quedaban vigilados por las autoridades, así como restringida su libertad de circulación, hasta que se producía el archivo definitivo del expediente, que podía producirse varios años más tarde.

El procesamiento por responsabilidades políticas suponía, en la inmensa mayoría de los casos, la desgracia personal y familiar en los duros y difíciles años de la posguerra más temprana. A la pérdida de libertad de circulación y de la libre disposición de los bienes propios durante el procesamiento, cuando no se había perdido todo y se había ingresado en prisión, se añadía la humillación por un procesamiento injusto y el pago de una sanción económica que casi nunca tenía en cuenta la situación económica del inculcado. Todo ello terminaba suponiendo un grave perjuicio social y económico que sumían a los procesados y sus familias en una situación sumamente difícil. Ahí radicaba el castigo buscado por las autoridades franquistas con la Ley de Responsabilidades Políticas.

Al contrario, los vencedores de la guerra pudieron gozar no sólo de una situación económica más estable sino de un gran poder sobre las personas. Así se puede comprobar con los informes de las llamadas “autoridades locales”, alcalde, sacerdote, delegado local de FET y de las JONS y Guardia Civil de cada localidad, quienes dispusieron de un tremendo poder a la hora de decidir sobre la entrada o no de las personas en el ámbito de la sospecha y de la culpabilidad. Una palabra suya bastaba para salvar o para condenar. Aunque en la provincia de Castellón se pueden observar distintos tipos de relaciones de influencia entre estas autoridades según la localidad, así

como distintos grados de complicidad con el régimen franquista, en general tenían un poder decisivo sobre las personas y su tendencia fue al abuso de autoridad.

En este sentido, y a pesar de la necesidad de hacer siempre un análisis de cada caso en concreto, se comprueba que en la mayoría de las localidades de la provincia de Castellón fueron los Comandantes de los Puestos de la Guardia Civil y los alcaldes los que tuvieron un mayor peso a la hora de realizar los informes y, por tanto, a la hora de impulsar la represión. No son infrecuentes los casos en los que los informes de las autoridades locales son una copia exacta, y en algunos ejemplos incluso calcada, de alguna de estas dos autoridades. Los delegados locales de FET y de las JONS en muchos casos vinculaban sus informes a los de los alcaldes. Los sacerdotes mantenían una posición más independiente, con mayor o menor implicación, aunque también vinculaban sus informes de los alcaldes. Todos ellos contaron con la colaboración de la población a la hora de recabar datos y denunciar hechos presuntamente cometidos por los inculpadados. Los informes exculpatorios fueron excepcionales.

Por otra parte, se ha comprobado que las personas que formaron parte tanto de los consejos de guerra como de los distintos tribunales propios de la jurisdicción de Responsabilidades Políticas, gozaron de los privilegios de los vencedores y tuvieron brillantes trayectorias amparadas y premiadas generosamente por el régimen con todo tipo de condecoraciones y altos cargos, sin que nunca nadie les reprochara haber sido protagonistas de un sistema masivamente represivo, abusivo e injusto. Protegidos por el régimen franquista, son paradigmáticos los ejemplos de Manuel Batlle, quien tras presidir numerosos consejos de guerra y de firmar un considerable número de penas de muerte, fue premiado con la rectoría de la Universidad de Murcia, y de José María Zumalacárregui, quien lideró la represión en Valencia, ocupando numerosos cargos políticos, universitarios y económicos de primer nivel.

El perfil idóneo de implicado en el proceso de exigencia de responsabilidades políticas era el de una persona con una trayectoria pública notoria en cuanto a la defensa de los valores democráticos y republicanos, que dispusiera de una base económica suficiente como para hacer frente a una suculenta sanción económica. Este era el caso del republicano Fernando Gasset Lacasaña. Este político castellanense ocupaba la presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales en el momento de la sublevación

militar que provocó la guerra civil. Acosado tanto por las fuerzas revolucionarias que actuaron en el campo republicano, acabó siendo represaliado por el régimen franquista, quien lo procesó por responsabilidades políticas, lo que le supuso una intensa humillación en sus últimos años de vida y el pago de una fuerte sanción económica, que al final tuvo que ser satisfecha por su familia.

Sin embargo, la exigencia de responsabilidades políticas también afectó a aquellas personas que se vieron atrapadas por la maquinaria represiva franquista y que tuvieron que pasar por un consejo de guerra a causa de un pasado más o menos republicano. Es el caso del poeta castellonense Bernat Artola Tomás, quien, a pesar de haber sido absuelto por un consejo de guerra, tuvo que sufrir un segundo procesamiento, esta vez por responsabilidades políticas. En su caso, se trataba de demostrar por segunda vez su inocencia. Si bien al final también resultó absuelto, su procesamiento le sumió durante meses en una situación de vigilancia y sospecha, que minó su vitalidad y su situación económica. Su caso demuestra lo absurda que en ocasiones podía llegar a ser la maquinaria represiva franquista y el clima de incertidumbre en el que se sumió a gran parte de la población.

En cualquier caso, el análisis de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón demuestra cómo esta Ley afectó no sólo a los progresistas de mayor relevancia pública de la sociedad castellonense, especialmente políticos como Fernando Gasset Lacasaña o Gaetà Huguet Segarra, sino mayoritariamente y de una forma especial a las personas pertenecientes a las clases medias y bajas que en el contexto republicano y de guerra civil habían protagonizado cualquier acto público de signo izquierdista o de alteración del orden establecido previamente y que, además, permanecieron en su lugar de origen o volvieron tras un tiempo de ausencia. Se trataba de alcaldes y concejales de pequeños pueblos, sindicalistas, maestros, demócratas, revolucionarios y exaltados de cualquier signo, a los que no se les permitió una reconstrucción tranquila y eficiente de sus vidas y se les reservó la cárcel, el miedo y el castigo. En este grupo de personas destacaron especialmente las mujeres procesadas, a quienes no sólo se castigó por su condición de contrarias al régimen franquista, sino por su violación del estatus social tradicional de mujer, tal y como demuestra, como hemos indicado, el ejemplo de la localidad de Sarratella.

Pero no fueron los únicos afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas. Tras ellos sus familiares sufrieron los rigores de una Ley que injustamente también les incluía como culpables. Estamos hablando de miles de mujeres, viudas, hijos, hijas, padres, madres, y demás familiares directos que tuvieron que asumir no sólo el coste de la manutención familiar en unos años extremadamente difíciles, sino también el peso de una Ley cuyo objetivo era el castigo fundamentalmente a través del control del patrimonio familiar y el establecimiento de sanciones económicas.

Tras este castigo, la única opción que les quedó a los procesados y sus familias fue acatar en silencio no sólo el establecimiento de una sociedad y una ideología establecidas por la fuerza sino aceptar las condiciones de vida y de trabajo que los nuevos dirigentes estuvieron en condiciones de imponer, como demuestran los casos analizados en la localidad de la Vall d'Uixó. En esta localidad la empresa Segarra, orientada a la producción de calzado y declarada “empresa modelo” por el régimen franquista, muchos trabajadores condenados por consejos de guerra y por responsabilidades políticas fueron aceptados y, por tanto, obtuvieron un trabajo que les permitió luchar por sobrevivir en el duro contexto de la posguerra. Sin embargo, para ello tuvieron que aceptar su integración en un modelo empresarial marcadamente paternalista que, siguiendo una estrecha identificación con el franquismo, establecía un poder omnímodo a los empresarios, la familia Segarra, que pasaban a controlar prácticamente todos los aspectos de la vida de sus trabajadores y les imponía unos salarios mínimos, llegando a establecerse relaciones de tipo casi familiar o personal que se traducían en un poder absoluto de los patronos sobre los trabajadores. Y no quedaba más remedio que aceptarlo si se quería sobrevivir. La humillación y la derrota fueron en muchos casos totales.

De esta forma, la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Castellón tuvo un amplio alcance, especialmente entre gran parte de los sectores más humildes de la sociedad, así como una gran trascendencia a la hora de estructurar la nueva sociedad franquista tras la finalización de la guerra civil. Su estudio es imprescindible para entender las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se establecieron en España, y concretamente en la provincia de Castellón,

a partir de 1939. Este es el objetivo que se ha marcado el presente trabajo de investigación, al que sin duda completarán futuros estudios históricos.

13. APÉNDICE DOCUMENTAL

LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

PREÁMBULO

Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por último, permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra civilización y aquellos otros que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una España grande y rindan a su servicio todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios.

Los propósitos de esta Ley y su desarrollo le dan un carácter que supera los conceptos estrictos de una disposición penal encajada dentro de moldes que ya han caducado. La magnitud internacional y las consecuencias materiales de los agravios inferidos a España son tales que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas, pues éstas repugnarían al hondo sentido de nuestra Revolución Nacional, que no quiere ni penar con crueldad ni llevar la miseria a los hogares. Y por ello, esta Ley, que no es vindicadora, sino constructiva, atenúa, por una parte, el rigor sancionador, y, por otra, busca, dentro de la equidad, fórmulas que permitan armonizar los intereses sagrados de la Patria con el deseo de no quebrar la vida económica de los particulares.

Las sanciones económicas se regulan con una humana moderación, de la que son ejemplo los preceptos encaminados a no coartar las actividades de quienes basan su subsistencia en negocios modestos. Y estas sanciones, en aquellos casos en que se deba prevenir el peligro dimanante de posibles actuaciones futuras de los inculpadados, podrán ir acompañadas de otras que, en rigor, tienen el carácter de medidas de seguridad, y que consistirán en la inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos y en el alejamiento de los lugares en que residía anteriormente, llegándose, en ciertos casos de gravedad suma, a declarar la pérdida de nacionalidad de los que no se merecen el honor de seguir siendo españoles.

Los actos y omisiones que dan lugar a la exigencia de responsabilidades políticas se enumeran con la amplitud necesaria para que resulten comprendidas todas las actuaciones que, a juicio del Gobierno, son merecedoras de castigo. Esta extensión obligada de la materia penal se compensa con la amplísima latitud que se concede para fijar la medida de las sanciones y que permitirá que éstas puedan resultar intrínsecamente justas y perfectamente adecuadas a los distintos grados de responsabilidad. El arbitrio judicial será tan grande como lo exige la complejidad de los actos y omisiones que han de juzgarse.

Los Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que darán a su actuación conjunta el tono que inspira el Movimiento Nacional. Y para conseguir que funcionen con perfecta armonía todos los Tribunales y organismos a quienes se encomienda la aplicación de la Ley, se crean un Tribunal Superior y un órgano administrativo, anejo al mismo, que, bajo una sola dirección, y de acuerdo con el Gobierno, imprimirán al conjunto la unidad necesaria para conseguir todos los resultados que en el orden jurídico y en el económico se pretenden.

Los procedimientos para la imposición de las sanciones, para su ejecución práctica y para la resolución de las reclamaciones de terceros se regulan con normas sencillas, en las que se aúna la conveniencia de obtener resoluciones rápidas con la necesidad de respetar los derechos de defensa y los intereses legítimos de personas no responsables.

Y, por último, la adaptación de las situaciones jurídicas creadas en virtud de los preceptos anteriores a la nueva ordenación legal, se determina por medio de disposiciones transitorias con que termina la Ley.

Los elevados propósitos en que ésta se inspira, la madura reflexión que ha puesto el Gobierno en redactarla y el patriótico y sereno espíritu de justicia de los Tribunales y organismos que la han de aplicar, conducirán, seguramente, a hacer de ella uno de los más firmes cimientos de la reconstrucción de España. Y, por ello,

Fuente: M. CAJAL, op. cit., pp. 9-11.

BANDO

DON ANTONIO ARANDA MATA, General Jefe del Cuerpo de Ejército de Galicia.

Hago saber:

Que constituidos en Castellón y su provincia los Consejos de Guerra y Juzgados Militares que han de proceder a la indagación y sanción de los crímenes y delitos cometidos por los revolucionarios y enemigos de la Patria, durante el período de su odiosa y tiránica dominación en esta provincia, así como los que en lo sucesivo se cometiesen, atribuidos a la Jurisdicción de Guerra por las Leyes vigentes en la España Nacional y por los Bandos por mi autoridad dictados,

Ordeno y mando:

Artículo primero. Todos los españoles amantes de la verdadera España y del orden y la justicia, están en el ineludible deber de dar cuenta a las Autoridades judiciales militares, de cuantos hechos criminales, atentados contra la Patria, contra el orden, contra las personas y contra la propiedad, cometidos durante el período de dominación revolucionaria, hubiesen tenido conocimiento y les constase su comisión, así como de los que se cometiesen con posterioridad a la fecha de la liberación por el glorioso Ejército Nacional.

Art. 2º. Este deber habrá de cumplirse mediante manifestación por escrito presentada ante el Juzgado militar de guardia, establecido en la Audiencia provincial (planta baja). La manifestación contendrá en términos breves y con la mayor claridad y exactitud posibles, los extremos siguientes: Hecho o hechos delictivos a que se contraiga; lugar y fecha exacta o aproximada en que aquéllos se cometieron; persona o personas que lo realizaron o que fueron inductores de los mismos, así como su paradero cierto o probable; firma y nombres del manifestante o manifestantes, profesión u oficio y domicilios.

Art. 3º. Interesa primordialmente al ejercicio de la Justicia Nacional y a la vindicación de la Patria y del orden, la denuncia de los hechos siguientes: Rebelión, adhesión a la rebelión, auxilio a la misma, espionaje, asesinatos y homicidios cometidos por móviles políticos, religiosos o sociales, destrucción, usurpación o incautación de templos, edificios públicos, fábricas, talleres o fincas de propiedad pública o privada, saqueos, robos y persecuciones por motivos religiosos, políticos o sociales o inspirados por la venganza o el interés propio.

Art. 4º. El incumplimiento de la obligación señalada en los artículos anteriores, se considerará como delito de rebelión militar en su forma de adhesión, auxilio o inducción, según la especial trascendencia de la infracción o la perversidad de los culpables.

Art. 5º. De igual forma se considerarán reos del delito aludido:

- A) Los que presenciaren la perpetración de cualquier delito y no lo pusieran inmediatamente en conocimiento del Juzgado militar de guardia.
- B) Los que sabedores de la comisión de algún delito en el lapso de tiempo que media entre el 18 de julio de 1936 y el de este Bando, no lo denunciaren en el plazo de diez días.
- C) La denuncia falsa, la calumnia y el falso testimonio producidos por móviles de venganza, interés propio o con cualquier otra finalidad ilícita.

Art. 6º. Igualmente incurrirán en responsabilidad, que les será exigida con arreglo a las Leyes vigentes en la España Nacional, los que poseyendo documentos que han pertenecido al enemigo (periódicos, impresos, folletos, escritos, ficheros, listas, libros de actas de sociedades o entidades que hubiesen colaborado directa o indirectamente con el Gobierno rojo, etc.), no los entreguen urgentemente a la Jefatura del servicio de Recuperación de documentos o los que se los apropien, destruyan o verifiquen sin autorización.

Art. 7º. Incurrirán en la responsabilidad y en las penas correspondientes a los delitos de adhesión o auxilio a la rebelión, según las circunstancias, los que ocultasen, albergasen o facilitasen la fuga de personas que aparezcan responsables, cierta o presuntamente, de cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 3º de este Bando.

A los fines de evitar toda sospecha, las personas y familias que alberguen o alojen en sus domicilios a otras no ligadas por vínculos familiares y que ordinariamente no viniesen habitando en su compañía, deberán pasar nota de dichas personas, de sus nombres y circunstancias personales y la fecha en que fueron admitidas en el domicilio del manifestante a la Autoridad gubernamental civil de la plaza, expresándose además las causas que motiven la habitabilidad en el domicilio del exponente.

Art. 8º. Quedan exceptuados de las obligaciones expresadas en los artículos anteriores, los padres con respecto a los hijos y viceversa y los hermanos y cónyuges entresí, los cuales quedan relevados de denunciar los hechos delictivos cometidos por éstos sus parientes en primer grado, no incurriendo, por tanto, con su silencio, en las penas señaladas por los infractores de las disposiciones expresadas en este Bando.

Castellón, 17 de junio de 1938.

Antonio Aranda Mata

Fuente: BOP, nº 71. Jueves, 23 de junio de 1938.

[Primer BOP franquista]

DOCUMENTO N° 3

Tras describir la composición de los distintos Tribunales Regionales se dictan las siguientes normas:

Segundo.- Los Presidentes de los Tribunales Regionales, tan pronto como se presenten en el lugar de su destino, interesarán de las correspondientes Autoridades militares o civiles que les proporcionen locales adecuados para instalar su Tribunal y los Juzgados civil y especial y provinciales de su respectiva demarcación, debiendo dichas autoridades facilitárselos con la máxima urgencia, por ser de interés nacional el rápido funcionamiento de los expresados Tribunales y Juzgados y

Tercero.- Todos los servicios desempeñados en los organismos de Responsabilidades Políticas se entenderán prestados en comisión y en servicio activo para toda clase de efectos legales.

Burgos, 2 de junio de 1939. Francisco G. Jordana.

Fuente: BOE, 5 de junio de 1939.

Fuente: BOP nº 77, de 1 de julio de 1939

DOCUMENTO N° 4

PLANTILLA DEFINITIVA Y SUELDOS DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL NACIONAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Presidencia	Pesetas
Presidente del Tribunal	27.000
Secretario general del Tribunal	4.000
Suplente del Secretario general del Tribunal	2.500
Vicesecretario para las relaciones del Tribunal Nacional con el de la Represión de la Masonería	4.000
Cuatro Asesores jurídicos, a 4.000 pesetas	16.000
Un Abogado del Estado	5.000
Un Interventor Delegado	5.000
Un Habilitado	3.500
Un encargado del Archivo y Registro	3.500
Seis mecanógrafas procedentes de otros Ministerios, a 2.500 pesetas	15.000
Cuatro mecanógrafas, con la gratificación o sueldo de 5.000 pesetas	20.000
Sala de alzadas	
Un Presidente de Sala	22.000
Un Vocal Magistrado ponente	6.000
Un Vocal Consejero nacional de FET y de las JONS	22.000
Un Secretario de Sala	4.000
Un Vicesecretario	3.000
Seis Mecanógrafas, a 5.000 pesetas	30.000
Sala de revisiones	
Un Presidente de Sala	22.000
Un Vocal Magistrado ponente	6.000
Un Vocal Consejero nacional de FET y de las JONS	22.000
Un Secretario de Sala	4.000
Un Vicesecretario	3.000
Cinco Mecanógrafas, a 5.000 pesetas	25.000
Fiscalía	
Un Fiscal, con gratificación de	6.000
Un Abogado Fiscal, con gratificación de	4.000
Un Abogado Fiscal, con gratificación de	3.000
Un Oficial de Fiscalía	2.500
Tres Mecanógrafas, a 5.000 pesetas	15.000
Gastos de representación	
Gastos de representación del Presidente	6.000
Personal de la Secretaría del Presidente	9.000
Gastos de representación del Presidente de la Sala de alzadas	3.000
Gastos de representación del Presidente de la Sala de revisiones	3.000
Gastos de la representación del Fiscal	5.000
TOTAL	331.000

Fuente: BOE, 30 de noviembre de 1942. Orden de 24 de noviembre

DOCUMENTO N° 5

EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL TRIBUNAL REGIONAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE VALENCIA HASTA SEPTIEMBRE DE 1941

Tramitados: 15.841.

Resueltos: 2.164 (42,04% de los tramitados).

En trámite: 13.102 (82,71% de los tramitados).

Pendientes de incoación: 10.115.

Total de expedientes incoados y pendientes: 25.956.¹

EXPEDIENTES INCOADOS POR LOS JUZGADOS DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN EL ÁMBITO DEL TRIBUNAL REGIONAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE VALENCIA HASTA OCTUBRE DE 1941

	Incoados	Terminados	En trámite
Valencia N° 1	7.160	2.190 (30,59%)	4.970 (69,41%)
Valencia N° 2	3.914	519 (13,26%)	3.395 (86,74%)
Alicante	1.373	896 (65,26%)	477 (34,74%)
Castellón	3.313	1.518 (45,82%)	1.795 (54,18%)
TOTAL	15.760	5.123 (32,51%)	10.637 (67,49%)

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS INCOADOS EN CADA PROVINCIA HASTA OCTUBRE DE 1941, EN RELACION CON LA POBLACIÓN PROVINCIAL Y CON EL TOTAL DE EXPEDIENTES INCOADOS EN ESPAÑA

	Población	Incoados	Población provincial ‰	Total expedientes de España ‰
Alicante	607.562	1.373	2,26	1,20
Castellón	312.475	3.313	10,60	2,90
Valencia	1.256.633	11.074	8,81	9,68

Fuente: M. ÁLVARO, *Por ministerio de la ley y voluntad del caudillo. La Jurisdicción de Responsabilidades Políticas (1939-1945)*. Madrid, 2007, pp. 266, 270 y 273.

¹ Esta cifra supone el 12,71% del total de expedientes en España y representan al 11,92% de la población total del ámbito regional valenciano. Esta cifra sólo es superada por el Tribunal Regional de Madrid, con 36.521 expedientes, y el de Granada, con 27.988 expedientes.

DOCUMENTO N° 6

PROFESIONES DE LOS PROCESADOS POR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

SECTOR PRIMARIO

Profesión	Nº
Labrador	811
Jornalero	190
Campesino	14
Marinero	8
Pescador	5
Podador	5
Pastor	4
Agricultor	3
Arboricultor	2
Esquilador	1
Algarrobero	1
Total	1.044

SECTOR SECUNDARIO

Profesión	Nº	Profesión	Nº
Albañil	93	Abardero	1
Industrial	40	Ajustador	1
Carpintero	37	Bastero	1
Alpargatero	26	Botero	1
Azulejero	18	Cafetero	1
Mecánico	18	Canastero	1
Zapatero	14	Corchero	1
Obrero	8	Curtidor	1
Metalúrgico	6	Hilador	1
Molinero	5	Palmero	1
Ebanista	5	Papelero	1
Herrero	4	Picapedrero	1
Hojalatero	4	Tejedor	1
Ladrillero	3	Textil	1
Aserrador	3	Tintorero	1
Cantero	2	Tonelero	1
Cestero	2	Tornero	1
Fundidor	2		
Ingeniero industrial	2		
Sillero	2		
		Total	313

SECTOR TERCIARIO

SEGURIDAD	Nº
Militar	30
Carabinero	9
Militar retirado	7
Guardia Asalto	5
Guardia Civil	4
Guardia seguridad	3
Guardia municipal	2
Sargento	2
Agente aduana	1
Agente policía	1
Total	64

SALUD	Nº
Médico	18
Farmacéutico	2
Practicante	1
Veterinario	1
Curandero	1
Total	23

ENSEÑANZA	Nº
Maestro	26
Estudiante	12
Inspector	1
Total	39

COMERCIO	Nº
Comerciante	52
Exportador	5
Dependiente	3
Comisionista	2
Tendero	1
Total	63

TRANSPORTES	Nº
Chofer	22
Ferrovionario	19
Carretero	9
Caminero	1
Portuario	1
Transportista	1
Total	53

ADMINISTRACIÓN	Nº
Funcionario	13
Escribiente	8
Abogado	4
Contable	4
Oficinista	3
Secretario	3
Mecanógrafa	2
Ex político	2
Empleado Banco	1
Ex fiscal	1
Total	41

OTROS	Nº
Empleado	30
Panadero	20
Barbero	17
Propietario	15
Pintor	7
Carnicero	6
Camarero	5
Cerrajero	5
Electricista	5
Sastre	5
Vendedor ambulante	4
Modista	3
Tipógrafo	3
Químico	3
Cartero	2
Peluquero	2
Torero	1
Vaciador	1
Afilador	1
Contratista	1
Corredor apuestas	1
Destilador	1
Droguero	1
Fogonero	1
Guarnicionero	1
Joyero	1
Ordenanza	1
Posadero	1
Recadero	1
Sirvienta	1
Total	146

TOTAL	429
-------	-----

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, 1939-1948. AHPCS. Elaboración propia.

DOCUMENTO N° 7

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS EN LA “CUENTA ESPECIAL”
DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE CASTELLÓN EN EL PERIODO 1942-
1945 POR SANCIONES DERIVADAS DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

1942	Mes del ingreso	Número de encartados que realizan el ingreso	Pesetas
	Julio	9	5.875
	Agosto	12	60.925
	Septiembre	5	16.930
	Octubre	20	23.884,40
	Noviembre	1	12.500
	Diciembre	9	32.350
	TOTAL	56	147.464,40

Sanción mínima: 24,70 ptas.

Sanción máxima: 37.500 ptas.

1943	Mes del ingreso	Número de encartados que realizan el ingreso	pesetas
	Enero	9	42.525
	Febrero	4	108.300
	Marzo	2	150
	Abril	5	1.350
	Mayo	2	8.993
	Junio	6	21.007
	Julio	18	5.155
	Agosto	11	33.500
	Septiembre	1	100
	Octubre	1	3.000
	Noviembre	3	1.050
	Diciembre	2	2550
	TOTAL	61	230.680

Sanción mínima: 7 ptas.

Sanción máxima: 100.000 ptas.

1944	Mes del ingreso	Número de encartados que realizan el ingreso	pesetas
	Enero	0	0
	Febrero	0	0
	Marzo	3	5.396,70
	Abril	2	5.100
	Mayo	1	
	Junio	0	0
	Julio	3	21.000
	Agosto	3	15.000
	Septiembre	2	50.401,59
	Octubre	3	166.723,75
	Noviembre	1	26.161,30
	Diciembre	3	10.824,07
	TOTAL	21	300.627,41

Sanción mínima: 50 ptas.

Sanción máxima: 149.223, 75 ptas.

1945	Mes del ingreso	Número de encartados Que realizan el ingreso	pesetas
	Enero	2	15.500
	Febrero	0	0
	Marzo	0	0
	Abril	0	0
	Mayo	0	0
	Junio	0	0
	Julio	2	10.500
	Agosto	0	0
	Septiembre	0	0
	Octubre	0	0
	Noviembre	0	0
	Diciembre	0	0
	TOTAL	4	26.000

Sanción mínima: 500.

Sanción máxima: 15.000.

Total de encartados que realizan ingresos en el periodo 1942-1945: 142.

Cantidad ingresada en el periodo 1942-1945: 704.771,81 ptas.

Fuente: AHPCS, Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas, Caja 19637.

Elaboración propia

DOCUMENTO N° 8

Delegación Provincial de Trabajo de Castellón

Servicio de Jurisdicción y Armonía del Trabajo

Fijando la Orden del Ministerio de Organización y Acción Sindical del 5 de mayo último, las normas a que deberá ajustarse la depuración del personal obrero que preste sus servicios en Empresas particulares, esta Delegación Provincial de Trabajo, para dar cumplimiento a la misma, señala las siguientes normas:

1ª Las Empresas procederán a separar de sus puestos a todos aquellos empleados u obreros a los que consideren incompatibles, opuestos o peligrosos para el Glorioso Movimiento Nacional y a aquellos que no sirvan con eficacia o lealtad al presente régimen.

2ª El plazo para ejercitar dicha acción es de tres meses contados a partir del momento de la absoluta liberación del lugar en que el establecimiento o la industria radique.

3ª Se iniciará por la Empresa el procedimiento con petición de despido dirigida al Delegado Provincial de Trabajo, en la que se hará constar los nombres y circunstancias de los interesados y el motivo de separación en que se les considere incursos, que habrá de ser de los determinados en la norma 1ª.

4ª Esta Delegación provincial, previas las comprobaciones que estime oportunas y la audiencia del trabajador, si se considerase pertinente y fuera posible, dictará resolución que tendrá el carácter de firme e inapelable.

5ª Todos los despidos cuya causa no sea alguna de las arriba señaladas, y aun en lo basado en ellas, una vez transcurrido el plazo de tres meses marcado, quedan sometidos a la legislación vigente sobre despidos.

Por Dios, por España y por su Revolución Nacional Sindicalista.

Castellón, 23 de junio de 1938- Segundo Año Triunfal.

El Delegado, J. Ruiz Rivas.

Fuente: BOE n° 72, sábado 25 de Junio de 1938.

DOCUMENTO N° 9

JEFATURA DEL ESTADO

LEY

De 8 de agosto de 1939 modificando el artículo 27 de la de 9 de febrero del corriente año

La absorción de gran número de Oficiales del Ejército que ostenta el título de Abogado, por la jurisdicción castrense, y el licenciamiento de clases y soldados, como consecuencia de la feliz conclusión de la campaña, han dificultado, de modo considerable, la designación del personal de los Juzgados Instructores Provinciales de Responsabilidades Políticas, que, por tales causas, no han podido constituirse y comenzar a funcionar hasta fecha reciente, lo que ha dado lugar a que la entrega de asuntos por los antiguos órganos de Incautaciones a los nuevos de Responsabilidades Políticas, se haya demorado en exceso, haciendo insuficiente el término de seis meses que para ello señaló a octava disposición transitoria de la Ley de nueve de febrero último. En evitación de estas dificultades y de que el plazo antedicho resulte angustioso, dispongo:

Artículo primero.- En caso de que por desmilitarización, licenciamiento, cambio de destino, defunción u otro motivo, quedase algún Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas sin Jueces o Secretarios, el Presidente del Tribunal Regional de que aquél dependa, interesará a la Autoridad Militar de la Región la designación urgente, en comisión, de un Jefe u Oficial de cualquier Arma o Cuerpo para el cargo de Juez, o de un Brigada, Sargento, Cabo o Soldado para el de Secretario, debiendo recaer los nombramientos en quienes tenga acreditada su aptitud mediante el desempeño anterior de funciones judiciales durante seis meses por lo menos.

Artículo segundo.- El plazo de seis meses a que alude la octava disposición transitoria de la Ley de nueve de febrero del corriente año se prorroga por tres meses más, que empezarán a contar desde el día siguiente al de la inserción de la presente Ley en el *Boletín Oficial del Estado*.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a ocho de agosto de 1939.

Francisco Franco.

Fuente: BOP n° 99, martes 22 de agosto de 1939

DOCUMENTO N° 10

Gobierno civil de la provincia de Castellón

CIRCULARES

El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior, me dice lo que sigue:

“Excmo. Sr.- Liberadas, en parte de su territorio, las provincias de Castellón de la Plana y Tarragona, de la oprobiosa dominación marxista, por el Glorioso Ejército Nacional, procede que en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto núm. 108, por las Autoridades del Estado, de las provincias y Municipios, se lleve a efecto con la máxima rapidez la depuración del personal adscrito a las mismas, para seleccionar los verdaderamente afectos a la Causa de España, de los que mostraron su simpatía y aun su apoyo decidido al malhadado “Frente Popular”.

A tal fin, se servirá V.E. disponer la inmediata inserción en el **Boletín Oficial** de las siguientes normas e instrucciones complementarias, del precitado Decreto y del núm. 93 de 3 de diciembre de 1936:

1° Por las Autoridades de que queda hecho mención, se llevará a cabo la instrucción de ligeros expedientes, conforme al Decreto núm. 108 de la Junta de Defensa Nacional (*Boletín Oficial del Estado*, núm. 22), de 13 de septiembre de 1936, a todos los empleados que se hayan distinguido por sus actividades políticas sociales, contra el Movimiento Nacional, desarrolladas antes y después del mismo. Practicadas las oportunas informaciones y pruebas, se oirá al interesado para su defensa, y resolviendo después las propias Corporaciones sobre la propuesta del Juez instructor de tales expedientes. Este acuerdo será ejecutivo y contra él sólo cabe recursote alzada ante este Ministerio, en plazo de treinta días, conforme a la Orden de 2 de enero de 1937, y su aclaratoria publicada en el *Boletín Oficial del Estado*, núm. 298, extremo que se hará constar en la notificación.

2° Asimismo, todos aquellos empleados que hayan abandonado su destino y no se hayan reintegrado a sus funciones, una vez liberadas las poblaciones en el plazo legal, concedido a estos efectos, serán inexorablemente declarados cesantes por las Corporaciones donde prestaban sus servicios, según lo dispuesto en el Decreto núm. 93 de 3 de diciembre de 1936 (*Boletín Oficial del Estado* núm. 51). En estos casos, las Diputaciones y los Ayuntamientos, enviarán a este Ministerio del Interior certificación del acta de la sesión en que se acordó la cesantía, con la relación adjunta de los interesados, para su ratificación, y a los efectos de la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 9 de marzo de 1937 (*Boletín Oficial del Estado*, núm.142).

3° Los funcionarios sancionados que interpongan recurso de alzada, acogién dose a la Orden de 2 de enero de 1937, lo efectuarán ante el Gobierno civil respectivo y V.E. al remitirlo a este Departamento ministerial, lo informará, acompañando a la vez el oportuno expediente de la sanción, para resolverlo como proceda en justicia.

4° Si alguno de los comprendidos en el Decreto núm. 108, que se hubiese distinguido por sus actividades marxistas, no fuese funcionario, se procederá a la incautación de sus

bienes, según se determina en el art. 2º del Decreto núm. 108, en relación con el Decreto-Ley de incautaciones de 10 de enero de 1937 (*Boletín Oficial del Estado*, núm. 83).

5º Por último, si hubiese funcionarios, empleados o particulares que hubieren incurrido en delitos de malversación de fondos, atentado contra la integridad de la Patria o de cualquiera de otra índole, deberán entender en el asunto los Tribunales correspondientes, civiles o militares, con independencia de lo ordenado en los incisos que anteceden.

Lo que comunico a V.E. para su conocimiento, el de las Diputaciones y de los Ayuntamientos de las provincias de su mando, para su más exacto cumplimiento y efectos correspondientes.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Burgos, 3 de mayo de 1938- II Año Triunfal.
El Subsecretario, José Llorente.

Sr. Gobernador civil de Tarragona y Castellón de la Plana.”

Lo que se hace público en este periódico oficial para general conocimiento y cumplimiento de lo que se ordena.

Castellón, 12 de julio de 1938.- II Año Triunfal.

El Gobernador, Carmelo Monzón Mosso.

Fuente: BOP nº 80, jueves, 14 de julio de 1938.

DOCUMENTO N° 11

Comisión Provincial de Incautación de Bienes.

Circular

Todos los Sres. Alcaldes de esta provincia darán cuenta a esta Comisión de Incautación de Bienes , en el improrrogable plazo de cinco días, de cuantas medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones y desaparición de bienes de personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios de daños y perjuicios de toda índole ocasionados directamente o como consecuencia de oposición al triunfo del Movimiento Nacional, dentro de sus respectivos términos municipales.

Encarezco el más exacto y urgente cumplimiento de este servicio.

Castellón, 10 de septiembre de 1938, III Año Triunfal.
El Gobernador Civil, Presidente, Carmelo Monzón Mosso.

Fuente: BOE n° 106, martes, 13 de septiembre de 1938

DOCUMENTO N° 12

Auditoría del Ejército de Ocupación

Edicto

El Ilmo. Sr. Auditor de Guerra del Ejército de Ocupación y en su nombre el Juez instructor de la Causa General en averiguación de los hechos delictivos de importancia cometidos en Castellón y su provincia durante la dominación roja,

Por el presente, cito y emplazo de comparecencia ante este Juzgado, sito en la Audiencia Provincial (segundo piso):

Primero.- A los parientes más próximos de las personas que tuvieron su última residencia habitual en el término municipal de Castellón y que fueron asesinados o desaparecidos desde el 18 de julio de 1936, hasta la liberación de esta plaza.

A los efectos de esta citación y emplazamiento, se entenderá como próximo pariente: A) El cónyuge sobreviviente; B) En defecto de éste el mayor de los hijos que residan en Castellón y tenga edad superior a los 17 años; C) A falta de los anteriores el padre o la madre del muerto o desaparecido, y D) En defecto de los antedichos los hermanos de la víctima.

Segundo.- A los perjudicados por otros delitos, cometidos en este término municipal durante la dominación roja, contra las personas, contra la propiedad o de cualquier otra clase, siempre que puedan considerarse como graves, bien por el mal causado o por las circunstancias empleadas en su ejecución.

Tercero.- A quienes por haber presenciado la perpetración de los hechos delictivos a que se refieren los dos párrafos anteriores, o por las noticias que sobre ellos posean, pueda facilitar datos sobre los mismos o sobre sus autores.

Todos los citados en el presente edicto, que todavía no hubiesen comparecido ante este Juzgado instructor de la Causa General, deberán presentarse ante él, aunque ya hubiesen prestado declaración sobre el mismo hecho ante cualquier otra Autoridad, en día laborable de diez a trece de la mañana y de cuatro a siete de la tarde y antes del 20 de octubre próximo; previniéndoseles que, si no comparecieran en este plazo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Castellón a 17 de septiembre de 1938 – III Año Triunfal

El Juez instructor.

Fuente: BOE, n° 109, martes, 20 de septiembre de 1938

DOCUMENTO N° 13

Juzgado Especial de Incautaciones de Plazas que se Liberen

El Capitán-Juez Especial de Incautaciones para Plazas que se liberen.

Hago saber: que en virtud de lo acordado en el expediente que tramito por delegación de la Comisión Central de Bienes Incautados por el Estado para la incautación de bienes que hubiesen pertenecido a partidos políticos, sindicales y colectividades integrantes del llamado Frente Popular o adheridas al mismo, toda persona o entidad jurídica que tenga alguna deuda o haya recibido géneros o mercancías de los aludidos partidos, tiene la ineludible obligación de hacerlo presente por escrito dentro del plazo de 15 días a contar de la publicación del presente, ante este Juzgado, sito en esta plaza, calle Gasset, n° 4, cuarto piso, haciéndose saber que quien de cualquier manera no cumpliese esta ineludible obligación, incurrirá en severísimas sanciones. No se consideran incluidos los débitos por contribuciones debidas y no pagadas, que en su caso serán reintegradas ante quien proceda.

Lo que se hace saber por el presente, que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y además en la prensa y radio local.

Castellón de la Plana a 24 de septiembre de 1938 – III Año Triunfal.

El Capitán-Juez Especial

Fuente: BOE n° 113, jueves, 29 de septiembre de 1938

DOCUMENTO N° 14

Gobierno Civil de Castellón

BANDO

D. Martín Sada Moneo, Gobernador Civil de la provincia de Castellón,
Ante el hecho doloroso de que las buenas costumbres ciudadanas momentáneamente han sufrido una alarmante relajación, coincidente con el paso obligado por esta provincia de elementos indeseables que regresan a sus pueblos como consecuencia de la terminación de la guerra por nuestro Invicto Caudillo. Estimando que es necesario cortar de raíz y con mano firme el más ligero apunte de actitudes en un todo contrarias al sentimiento de la España Nacional, ya desaparecidas de Castellón desde su liberación,

ORDENO Y MANDO

Primero.- Será detenido inmediatamente quien pronuncie frases irreverentes o blasfemias que puedan herir los sentimientos católicos y las buenas costumbres públicas del vecindario.

Segundo.- Igualmente se detendrá e impondrá la sanción oportuna a que se haga acreedora toda persona que en sus conversaciones vierta palabras groseras o procaces.

Tercero.- Queda terminantemente prohibido el establecimiento de puestos ambulantes en la vía pública que no tenga la oportuna autorización o no se ajusten en un todo a las legales formalidades de tránsito establecidas por nuestro Excmo. Ayuntamiento.

Cuarto.- No se tolerará que en la vía pública sea molestado de forma alguna el pacífico viandante, impidiéndose en lo sucesivo que los niños se dediquen a juegos peligrosos y molestos como lanzamiento de cohetes y petardos de juguete.

Quinto.- Es inadmisibile, y estoy resuelto a que no continúen, la formación de colas ante panaderías en esta capital, la que se encuentra más que suficientemente abastecida de dicho artículo para su comercio sin límite a todo el vecindario, y las que si se producen es únicamente por un mal resabio de la educación nefasta y descendente de la época marxista, que no estoy resuelto a tolerar.

En su virtud, hago público el presente BANDO, esperando de Autoridades, Agentes y vecindario en general, el más leal celo para el cumplimiento de los extremos contenidos en el mismo, ya que a Castellón le corresponde, -por sus muchos méritos-, estar a la cabeza de capitales modelo de organización y costumbres públicas; advirtiéndole que, en caso contrario, seré inflexible, y que estoy decidido a no cejar en la consecución de los fines apuntados, ya que ello es de verdadera necesidad ciudadana.

Castellón, 20 de abril de 1939.- Año de la Victoria,

Fuente: BOP n° 47, sábado 22 de abril de 1939.

DOCUMENTO N° 15

GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA Y PROVINCIA DE CASTELLÓN

CIRCULAR

Dispuesto por el Excmo. Sr. General Jefe del Ejército de Levante en telegrama circular de 22 del actual, que los individuos procedentes del Ejército rojo, que se presenten en los pueblos sin haber pasado por Campos de Concentración y hayan sido Oficiales, Comisarios, Autoridades o responsables de delitos sean detenidos dando cuenta a este Gobierno Militar, para ponerlo en conocimiento del Cuartel General de S. E., con el fin de que sean trasladados a la Prisión que se determine, los Sres. Alcaldes de los pueblos de esta provincia en donde no exista puesto de la Guardia Civil, darán el más exacto cumplimiento de lo que se dispone, llenando por duplicado las fichas que oportunamente se les remitirán, de cuantos se les presenten y no hayan pasado por Campos de Concentración, las que también se remitirán a este Gobierno, para su envío a S. E. entretanto se organiza la tercera Región Militar.

Castellón, 23 de abril de 1939.- Año de la Victoria.- El Gobernador Militar, Segundo Armesto.

Fuente: BOP n° 48, martes 25 de abril de 1939

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE CASTELLÓN

READMISIÓN DE TRABAJADORES

Victoriosas las armas de la España Nacional y rescatado totalmente el solar patrio, vuelven estos días a sus hogares, procedentes de la zona que fue roja, muchos trabajadores de Castellón y poblaciones anteriormente liberadas.

Ello da lugar a gran número de consultas acerca de su readmisión por parte de las Empresas en que estuvieron empleados. Para dar contestación a todas y, a la vez, fijar normas generales sobre asunto de tan vivo interés, planteado en el punto crucial de la paz y el sentido exacto del Movimiento, publica esta Delegación la presente Nota que espera será suficiente para que los principios queden bien sentados y las dudas desvanecidas.

Estima necesario encabezarla, llamando la atención de los empresarios respecto a la grave responsabilidad que contraen en estos momentos ante Dios y ante España. La Ley fija, de manera precisa y concreta, cual ha de ser la base de la indispensable depuración y la vía reglamentaria para ello, como se declara en las siguientes Normas; pero el cumplimiento del precepto legal, presupone en la empresa una lealtad absoluta y su mengua o falta podría redundar en confusionismo, malestar y aun perjuicio para los trabajadores, en momento en que todos tenemos el deber de entregarnos en la tarea que se note sensiblemente y se sienta en las fibras más íntimas del alma, el goce de la liberación y la seguridad de que en la España Nacional impera la Justicia y la Equidad. Por ello, encarezco a todos los empresarios despojen de su ánimo toda consideración subjetiva, y, sin prejuicios ni apasionamientos personales, obren con toda conciencia, siguiendo de manera recta e inflexible las Disposiciones Legales, sin apartarse de ellas por exceso o defecto.

Las Normas que deberán regir para cuanto se refiera a la readmisión de personal son:

1ª Han de considerarse en pleno vigor los contratos de trabajo anteriores al 18 de julio de 1936, y, subsistentes, por lo tanto, las plantillas de personal en tal fecha. En consecuencia, procede la readmisión de todo empleado que, al producirse el Glorioso Movimiento Nacional, trabajara en la empresa, *a reserva de la depuración prevenida en la Orden Ministerial de Organización y Acción Sindical de 5 de mayo de 1938*

2ª A los efectos de tal depuración, las empresas de carácter particular podrán despedir a los que trabajaban por cuenta de la misma en la indicada fecha del 18 de julio de 1936, cuando tengan motivos fundados para considerarles opuestos, incompatibles o peligrosos para el Nuevo Estado o incapaces de servirle con lealtad o eficacia. Desde luego, aparecen incursos en estas causas los que abandonaron las poblaciones *al ser éstas liberadas*, salvo cuando hubieren sido evacuados violenta y coactivamente.

3ª Para tal despido será *indispensable* dirigir un escrito duplicado a esta Delegación de Trabajo, haciendo constar los nombres, domicilios y demás circunstancias de la empresa

y el despedido, así como el motivo del cese, el empleado quedará suspenso de empleo y sueldo a partir de la fecha del recibo del escrito en la Delegación.

Esta, previas las comprobaciones que estime oportunas y la audiencia del trabajador, si la considera pertinente y fuese posible, dictará resolución que tendrá el carácter de firme e inapelable.

El plazo para solicitar este despido será de tres meses a partir de la fecha de la terminación oficial de la guerra.

4ª En los demás casos, quedan sometidas todas las empresas y personas particulares a las disposiciones generales vigentes en materia de procedimiento de despido, considerándose depurado el personal sin más excepciones que las comprendidas en la Norma segunda.

5ª Si la readmisión definitiva de alguno de los que trabajaban en la empresa el 18 de julio de 1936, motivara, a juicio de la misma, el cese de cualquiera de los empleados en ella el día 1º del corriente mes de abril, se pondrá el hecho en conocimiento de esta Delegación por medio de escrito en el que se hará constar: a) la naturaleza, vecindad, edad y estado de uno y otro; b) las fechas de ingreso de ambos en la empresa; c) su respectiva calificación en el trabajo; d) la índole del mismo, y e) los salarios que hayan tenido asignados, durante el empleo por la empresa.

El Delegado de Trabajo, reunidos los informes necesarios, resolverá sobre la justificación del cese, y, en todo caso, sobre el mejor derecho de los interesados.

6ª Se repondrán, inmediatamente y en los puestos que ocupaban el 18 de julio de 1936, los trabajadores que, por su adhesión a la Causa Nacional, han sufrido, hasta el fin de la guerra, prisión en las cárceles rojas; y, en términos generales, siempre que haya lugar a preferencia en a readmisión, se dará a los trabajadores que fueron víctimas de persecución y represalias por parte de los marxistas.

7ª No olviden los empresarios, el derecho que, por encima de cualquier otro, asiste al trabajador que ha luchado en las filas del Ejército o Milicias Nacionales de primera línea, extremando su celo en el cumplimiento de cuantas órdenes están en vigor y se dicten respecto a la reincorporación de los Combatientes al Trabajo.

Esta Delegación espera que todos los empresarios de la provincia, se atendrán de manera fiel a las precedentes Normas y lamentaría verse obligada a proceder –como lo hará enérgicamente- contra los que no ajusten a ellas su conducta.

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.

Castellón, 18 de abril de 1939. Año de la Victoria. El Delegado Provincial de Trabajo, Santiago Brandoly.

RELACIÓN DE CIUDADANOS DE LA VALL D'UIXÓ

A LOS QUE SE INCOA EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

ADRIÁN PORCAR, JOSÉ
AGUD ALERÓN, ELEUTERIO
ARAGÓN SEGARRA, ADOLFO
ARNAU VALLÉS, BAUTISTA
ARNAU SALVADOR, JOAQUÍN
ARZO MONZONÍS, VICENTE
BADAL ROSELL, HERACLIO
BERNAT ROVIRA, VICENTE
BORRÁS FAS, TEODORO
CASES APARICIO, ANTONIO
CASTELLÓ ANTONINO, VICENTE
ESBRÍ BERNÚS, MANUEL
FENOLLOSA ALCALDE, FRANCISCO
FENOLLOSA SEGARRA, JOSÉ
FENOLLOSA SEGARRA, ROSA
FERRER TUR, WENCESLAO
FERRERES VILLALBA, MANUEL
FONT BORRÁS, FRANCISCO
FORNER SEGARRA, JOSÉ
GANAU MINGARRO, ANSELMO
GARCÍA CLIMENT, VICENTE
GIJÓN ORBAY, FRANCISCO
GIL MOLINER, JOSÉ
GIMÉNEZ ROIG, MANUEL
GINER MARTÍNEZ, ROSA
IBÁÑEZ MARTÍNEZ, ALFREDO
LLOBET MARÍN, MANUEL

MARCO TUR, JOSÉ
MARÍN GARCÍA, MANUEL
MARTÍNEZ PAREDES, PEDRO
MOLINER RODRÍGUEZ, JOSÉ
MONTESINOS DUPLO, VICENTE
NAVARRO ESTRADA, PASCUAL
NEBOT CANÓS, FRANCISCO
NEBOT PRIOR, VICENTE
PALOMO ORENGA, JOSÉ
PASÍAS BERRERA, MIGUEL
PLAZA ALBALAT, PASCUAL
REBOLLAR ARAGÓ, MANUEL
RICO VERAL, EDUARDO
ROVIRA NEBOT, ELEUTERIO
SALAFRANCA ALMINIR, JOSÉ
SANZ MELCHOR, BAUTISTA
SEGARRA CANES, ISABEL
SEGARRA PAULO, DANIEL
SEGARRA TURCH, VICENTE
SEGARRA VALLS, ANDRÉS
SORRIBES ABAD, JOSÉ
TEN MOLLAR, EMILIO
TEN ORENGA, FRANCISCO
TIDO PORCAR, JOAQUÍN
VALERO PEIRÓ, JOAQUÍN
VALLS RUBERT, BENJAMÍN
VILLALBA TEN, MANUEL

Fuente: AHPCS, Sección Expedientes de Responsabilidades Políticas.
Elaboración propia

RESTRICCIONES A LOS ACUSADOS POR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Tengo el honor de dirigirme a Vd a fin de que por su conducto haga saber al individuo al margen, al cual instruyo expediente de Responsabilidades Políticas, las siguientes prevenciones:

1ª Que no podrá ausentarse del lugar en que resida al iniciarse el expediente, sin permiso del Juez; permiso que sólo podrá concederle bajo su responsabilidad, por causas muy justificadas.

2ª Que en el caso de infringir el inculpado la anterior prohibición, será detenido y procesado por el delito de desobediencia grave a la Autoridad.

3ª Que en el plazo de ocho días, deberá presentar ante este Juzgado, una relación jurada de todos sus bienes, de los de su cónyuge, si fuera casado, de los que tuviera en su poder, propiedad de terceros y todas sus deudas. Esta relación será valorada y al final de ella se expresará también el número de hijos legítimos, naturales reconocidos o adoptivos, menores de edad o incapacitados que tuvieran a su cargo.

4ª Que la falta de presentación de esta relación en plazo indicado, se castigará como delito de desobediencia grave a la Autoridad, y la ocultación de bienes, simulación de deudas y demás inexactitudes que pudieran descubrirse, serán penadas como constitutivas del delito de falsedad en documento público, si se estimase por los Tribunales que por su gravedad o intencionalidad revestían carácter punible; y

5ª Que desde la fecha de esta primera declaración, no podrá realizar acto de disposición de bienes, bajo apercibimiento de ser procesado por los delitos de alzamiento de bienes o desobediencia grave a la Autoridad.

En la citada declaración jurada de bienes deberá hacer constar su naturaleza, vecindad, profesión, si tiene instrucción y jornal que ganan tanto él como su esposa e hijos.

Al propio tiempo, deberá exigirle la firma y fecha de hallarse enterado, consignada en el duplicado del presente oficio que se adjunta y remitirlo a este Juzgado, con la relación jurada de bienes a que se refiere la primera prevención, si el inculpado la presentase dentro del término citado. En caso negativo, comunicará la referida omisión al día siguiente de concluirse el plazo, a los efectos oportunos.

Dios guarde a Vd. muchos años,

Fuente: Expedientes de Responsabilidades Políticas de los ciudadanos de la Vall d'Uixó analizados. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

DENUNCIAS DE LA GUARDIA CIVIL DE LA VALL D'UIXÓ

DENUNCIA DEL CIUDADANO MANUEL LLOBET MARÍN

Tengo el honor de denunciar a su Autoridad al vecino de esta ciudad Manuel Llobet Marín, apodado "Alboraya", de 37 años, casado, oficinista, directivo marxista antes y durante el GMN, el que se encuentra en ignorado paradero, iniciándose informe de su actuación, no haciéndolo de los bienes de fortuna por carecer de ellos. Considerándole por ello incurso en el artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939; rogando me acuse recibo para su constancia en la documentación.

Antes del GMN pertenecía a la Juventud Socialista ejerciendo cargos directivos, propagandista de acción por su intervención en cuantos actos de propaganda se realizaban, animando siempre a las masas en la defensa de sus ideales y a la revolución, ejerció el cargo de Secretario en la Agrupación Socialista, así como también en la Sociedad Cooperativa Alpargatera "La Luz del Porvenir", interviniendo de una manera activa en cuantas huelgas y manifestaciones se llevaron a cabo.

En el movimiento revolucionario de octubre de 1934 era uno de los comprometidos en llevarlo a efecto en esta ciudad, pero fue detenido y encarcelado, por lo que se le siguió proceso.

Al iniciarse el Alzamiento Nacional, se le vio desde el primer momento por la calle, constituyendo el primer comité sanguinario que se formó ocupando el cargo en el mismo de secretario.

Como hechos consumados que se llevaron a la práctica durante el mandato del mismo figuran la incautación de todos los bienes de Entidades derechistas, tanto políticas como sociales, la quema de las Iglesias y ermitas del término, con incautación de todo lo que tenía de valor en ellas, la detención de los elementos derechistas que les denominaban fascistas, que se fusilaron 12 en Castellón el 2 de octubre de 1936, 4 en Nules el 24 del mismo mes y año, 4 más en el Cementerio de Nules el 22 de febrero del año 1937 y 2 más en el cementerio de Almenara el 24 de marzo del mismo año, de cuyos hechos alcanza la mayoría de la culpa a este Comité, por ser el inductor a tales desmanes.

Es individuo desafecto y peligroso para el Nuevo Estado e indeseable para la actual sociedad.

Firmado por el comandante de la Guardia Civil Amadeo Bartoll Ricart a 9 de marzo de 1940.

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas a Manuel Llobet Marín. Archivo Histórico Provincial de Castellón, caja 10080.

ILUSTRÍSIMO SEÑOR

MANUEL MAÑES CHERTA, casado, mayor de edad, labrador, vecino de Alcalá de Chivert (Castellón) con domicilio en la calle de Justo Zaragoza, a la vista del expediente de responsabilidades políticas n° 4.109 que se le instruye, pasa a formular el oportuno escrito de defensa dentro del plazo legal, haciendo constar lo siguiente:

Como se desprende del expediente, no se deriva la instrucción del mismo de condena ni sanción de ninguna clase impuesta por Tribunal alguno, sino que se sigue en virtud de denuncia.

Cierto que el exponente otorgó su voto a los partidos de izquierdas, pero debe tenerse en cuenta que desde su más tierna infancia fue, por el medio ambiente en el que se desarrolló su vida, educado en esa idea que nunca defendió con pasión ni pudo hacerlo, pues no hay que olvidar que se trata de una persona inculta (analfabeta) y de ningún relieve político-social; que todos sus años se los ha pasado en el pueblo de Alcalá de Chivert, sin que haya desempeñado más función que la de su honrado trabajo para poder subvenir a las necesidades de su hogar, formado por su esposa y dos parientes a los que tiene recogidos en su casa por carecer de recursos propios; trabajo que, precisamente, en el tristemente periodo llamado rojo tuvo que acrecentar para poder sostener las múltiples necesidades que aquellas trágicas circunstancias impusieron a las personas de bien, que desde ningún puesto quisieron colaborar a sus crímenes. Con esto, queda, a juicio del dicente, contestado el primer cargo que se le hace en el escrito del Señor Juez Instructor, y a su entender, dicho sea en términos de defensa, completamente desvirtuado.

En lo que se refiere al segundo cargo de estar incurso en el apartado e) del artículo 4° de la Ley, queda también desvirtuado al contestar al anterior, pero hay más. En ningún momento el que habla se significó a favor del llamado Frente Popular, no ya con su actuación, que ninguna tuvo en ningún momento, si no siquiera con sus palabras que siempre fueron condenatorias de los crímenes y desmanes cometidos por los “rojos”, ya que a raíz del Glorioso Movimiento Nacional se operó en el que expone la reacción espiritual lógica en toda persona de buenos sentimientos y que no estuviera presa de los instintos sanguinarios y destructores de los que negaron a su Patria. En ningún momento prestó voluntaria y libremente ayuda económica de ninguna clase, habiendo prestado en cambio toda la que pudo a lo elementos perseguidos por ellos, de lo que más de un testimonio podría aportar si este fuera momento procesal oportuno para ello.

Pero es que el que tiene el honor de dirigirse a V.I. ya se había considerado engañado por la política seguida por el denominado Frente Popular a raíz de las elecciones del 16 de febrero, y su arrepentimiento fue por tanto anterior al 18 de julio; y en cuantas ocasiones se le presentaron lo hizo constar así.

Por todo lo expuesto y para no cansar más la atención del digno Tribunal que V.I. con tanto acierto preside, con la seguridad que no precisa ser muy prolijo ya que bien cimentada tiene su fama de justiciero, el exponente ruega que a la vista de lo anteriormente dicho; de su consideración social, cultural y política; juntamente con lo

prescrito en el artículo 5º en su párrafo 3º; al criterio reflejado en el preámbulo o exposición de motivos que preceden a la Ley de Responsabilidades Políticas al decir “que las sanciones económicas se regularán con una humana moderación”; al contenido del párrafo 2º del artículo 13, capítulo 3º, que dice “que las tales acciones se fijarán teniendo en cuenta las cargas familiares” y todo ello a su vez unido a la conducta moral observada por el que suscribe en todo momento ha de terminar SUPLICANDO a V.I., se le declare exento de toda responsabilidad política, y de no entenderlo así, fijar en grado mínimo la sanción pecuniaria que con arreglo a la Ley se estipula.

Lo que en justicia espera alcanzar del recto proceder de V.I. y del digno Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, cuya vida guarde Dios muchos años.

Valencia del Cid a 12 de febrero de 1941.

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Manuel Mañes Cherta, Caja 10078 . AHPCS.

DOCUMENTO N° 21

DENUNCIA DEL CIUDADANO DANIEL SEGARRA PAULO

Tengo el honor de denunciar a su Autoridad al vecino de esta Ciudad Daniel Segarra Paulo, de 50 años de edad, casado, alpargatero, con domicilio en la calle San José número 127, colaborador entusiasta en la organización de Izquierda Republicana antes y durante el Glorioso Movimiento Nacional y apoderado con poder notarial en las elecciones del 16 de febrero de 1936, representando las candidaturas del frente popular, siendo unido informe de su actuación y relación de bienes de fortuna, por considerarle incurso en el apartad F. del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939.

Firmado por el comandante Amadeo Bartoll Ricart el 12 de agosto de 1940.

Informe adjunto sobre Daniel Segarra Paulo, firmado por Amadeo Bartoll Ricart.

Antes del G.M.N. pertenecía al partido Izquierda Republicana, se le llegó a nombrar vocal de la Junta Directiva, pero no aceptó el cargo, siendo su conducta buena, pero muy destacado y activista dentro del partido.

En las elecciones a Diputados a Cortes del 16 de febrero de 1936, se le nombró apoderado de las Candidaturas del frente popular, cargo que ejerció en esta localidad, cuyo poder se le otorgó ante el Notario D. Miguel Roca Beltrán en Alcalá de Chivert (Castellón) el 12 de febrero de 1936; En el período rojo, no tiene antecedentes delictivos, solamente desplegó mucha actividad dentro de la organización a que pertenecía en auxilio de la Causa roja, por lo que, se le considera Desafecto.

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Daniel Segarra Paulo. Archivo Histórico Provincial de Castellón, caja 10130.

DOCUMENTO N° 22

CUESTIONARIO-INTERROGATORIO A LOS TREBAJADORES
DE LA EMPRESA SEGARRA EN 1939

FALANGE, Servicio de información. Delegación local.

EMPRESA
NEGOCIO
DOMICILIO

DECLARACIÓN JURADA

El abajo firmante..... de años de edad,
de estado..... natural de..... y vecino
de..... domiciliado en la calle de.....
n°..... piso..... declara bajo juramento que son
completamente exactas las confesiones formuladas al cuestionario inserto a
continuación.

- Partido político al que pertenecía antes del 18 de julio de
1936.....

- Partidos políticos a que ha pertenecido durante el periodo comprendido entre el 18 de
julio de 1936 y el 29 de marzo de 1939
.....
.....

- ¿Perteneció voluntariamente a estos partidos?

- En caso de ser coaccionado, ¿qué persona le invitó o coaccionó para que perteneciera a
ellos?

- ¿Ha pertenecido en alguna época a la masonería o a cualquier otra sociedad secreta del
mismo carácter?

- ¿Ha contribuido a alguna suscripción para el Frente Popular, cualquiera de sus
organismos o dependencias al Socorro Rojo Internacional?

- ¿Ha realizado algún acto en beneficio del Movimiento Nacional o ha manifestado su
adhesión al mismo y en qué forma?

- Durante el periodo marxista, ¿Ha sufrido alguna persecución por parte de las autoridades, de algún Sindicato u organismo o de algún compañero de trabajo o particular?

.....

- ¿A qué organización sindical ha pertenecido antes del 18 de julio de 1936?.....

- En qué fecha se le extendió el carnet y el número de orden del mismo.....

.....

- ¿Después del 18 de julio de 1936 a qué organizaciones sindicales ha pertenecido?.....

- ¿Ha formado parte de alguna Junta Directiva u otro organismo cualquiera de Dirección o gestión dentro de la Sindical? ¿Cuánto tiempo?

.....

.....

- ¿Qué cargo desempeñaba?

- ¿Ha firmado algún documento o realizado algún acto como manifestación de adhesión al Frente Popular o a los Gobiernos Marxistas?

.....

.....

- ¿Ha figurado como voluntario en las filas o milicias del ejército rojo?.....

.....

- ¿Desde qué fecha?.....

- ¿Qué graduación ostentaba?.....

- ¿Fue movilizado forzosamente?

- ¿En qué fecha y con qué categoría militar?

.....

- Durante el tiempo de permanencia en filas ¿Ha experimentado algún ascenso de categoría?

- ¿Qué tiempo ha permanecido en el frente?.....

- ¿Qué servicios ha desempeñado en la retaguardia?

.....

- ¿Ha formado parte de algún servicio de policía o de alguna organización de patrullas mixtas o de orden público? ¿Porqué?.....

.....

.....

- ¿Ha prestado servicios de fortificación, fabricación de material de guerra o cualquier otro auxilio directo o indirecto al ejército rojo? ¿Porqué?

.....
.....

- ¿En qué fecha ingresó en la casa?

- ¿Qué categoría tenía en la casa el 18 de julio de 1936?.....

.....

- ¿Qué sueldo percibía en 18 de julio de 1936 (indíquese también las gratificaciones que por cualquier concepto percibió)?

.....

- Después del 18 de julio de 1936 y hasta el 29 de marzo de 1939 ¿cuántos ascensos ha disfrutado en su categoría? (con especificación completa de los mismos)

.....

.....

.....

- ¿Qué aumentos de sueldo o gratificaciones extraordinarias ha percibido durante la misma época a que se refiere la pregunta anterior?

.....

.....

- ¿Ha sufrido alguna rebaja en su categoría o sueldo durante el mismo periodo al que se refieren las dos preguntas anteriores?.....

.....

.....

- ¿Después del 18 de julio, ha sido la casa incautada, colectivizada o controlada?.....

.....

- ¿El cambio de situación ha sido originado por la misma dependencia de la casa o por intervención de algún sindicato u organismo extraño a la misma?.....

.....

- ¿Qué persona presidió la primera reunión que se celebró a estos efectos?.....

.....

- ¿Quiénes formaron el primer comité de la casa con determinación de los cargos que ocupaba cada uno de ellos?.....

.....

.....

- ¿Qué modificaciones en personas o cargos se efectuaron durante el tiempo de funcionamiento del comité de control?.....

.....

.....

- ¿Qué persona o personas durante el tiempo de funcionamiento de control ostentaban la firma de la casa tanto en Bancos como de los proveedores particulares?.....

.....
.....
.....

- Aún sin pertenecer al comité de control durante el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 29 de marzo de 1939, ¿desempeñó algún cargo o función ajena a la actividad que correspondía?.....

.....
.....

- ¿Quién fue la primera persona u organismo que se incautó del negocio con eliminación de su legítimo dueño?.....

.....

- ¿Qué persona, Junta, Comité Directivo o reunión ha actuado en sustitución del dueño desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de marzo de 1939? (Expresese correctamente todas las modificaciones que se han venido sucediendo durante este tiempo).....

.....
.....
.....

- Durante el tiempo que ha durado la incautación. ¿Ha ejercido algún cargo o desempeñado alguna función ajenos al empleo que ocupaba el 18 de julio de 1936?.....

.....
.....

- ¿Qué personal de la casa se ha significado durante la incautación actuando de gestor, director u orientador en los actos realizados por la misma?.....

.....
.....
.....
.....

- ¿Quién ostentaba la firma de la casa para disponer de fondos, efectuar compras o realizar actos con terceros durante el tiempo de la incautación?

.....
.....
.....
.....

ALEGACIONES QUE DESEA FORMULAR EL DECLARANTE

.....
.....
.....
.....
.....

PERSONAS QUE PUEDEN GARANTIZAR MI IDEOLOGÍA Y MI CONDUCTA
ANTERIOR EN, Y POSTERIOR AL GLORIOSO MOVIMIENTO SALVADOR DE
ESPAÑA

.....
.....
.....
.....
.....

Al mismo tiempo acompaño, además los certificados y cartas que a continuación
se expresan

..... a..... de..... de 1939 (AÑO DE LA
VICTORIA)
(sic)

Fuente: Archivo Segarra. Sección Fichas de Personal.

DOCUMENTO DE DEFENSA PRESENTADO POR BERNAT ARTOLA TOMÁS

AL SR. JUEZ PROVINCIAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN CASTELLÓN DE LA PLANA

BERNARDO ARTOLA TOMÁS, de 34 años de edad, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, natural y vecino de Castellón, domiciliado en la casa n° 6 de la calle Núñez de Arce, a virtud del expediente que se le sigue, señalado con el n° 406, comparece ante V.S. y con el respeto que merece la Justicia y la Verdad, pero con la máxima entereza, cree de su deber manifestar:

Que dolorosamente se ha sorprendido ante el nuevo requerimiento de V.S. para que aclare diversas circunstancias de sus actividades durante el dominio rojo en esta ciudad, que pudieran ser consideradas como incursas en la Ley de Responsabilidades Políticas, ya que por haber sufrido, sin mengua alguna de la honrosa consideración social en que se le tiene, la meticulosa tramitación de distintos procedimientos para su depuración moral y política, se creía plenamente encuadrado, sin mácula alguna, en las filas de la Falange Española de Castellón, que le había recibido sin hostiles suspicacias, asignándole el número 67, entre sus afiliados.

Pero la sorpresa ha sido aún mayor al advertir los motivos concretos que requieren aclaración. En efecto, el declarante fue nombrado profesor Encargado de Curso de Lengua y Literatura Españolas y destinado al Instituto de 2ª Enseñanza de esta ciudad. Lo fue en 12 de octubre de 1937, siendo así que, por haber aprobado los cursillos que se celebraron en Madrid en junio del año 1936 y según disposición oficial de septiembre del mismo año, estaba plenamente capacitado por la Ley, para desempeñar cátedra desde dicha fecha. Es decir, se le asignó destino un año después que a sus compañeros de cursillo a pesar de estar todos en las mismas condiciones legales. [sic]

Esto, sin duda, no significa una muestra de preferencia ni de simpatía política por parte de los dirigentes rojos.

En el sumario que se le siguió por la Auditoría del Ejército de Ocupación, en su calidad de funcionario público, obran las pruebas irrefutables de estas afirmaciones; desde la disposición que publicó la “Gaceta” incluyéndole en la relación de los Encargados de Curso, en el mes de septiembre de 1936, hasta el oficio de nombramiento, fechado el 18 de octubre de 1937 con la diligencia de toma de posesión al día 4.

Pero, además, podrían quedar ciertas dudas respecto de su actuación en la cátedra; posibles celos acerca de sus preferencias políticas. Constan también en el sumario de referencia, declaraciones y documentos que muestran el constante decoro de sus comentarios circunstanciales y su decidida protección a los valores esenciales de España. Buena prueba de ello la constituye el hecho de que los muchachos del S.E.U. le requirieron para dar clases en los cursillos de repaso que celebraron recién liberado

Castellón, y el propio Claustro del Instituto Nacional, al tener que cesar como Encargado de Curso por disposición de carácter general del Ministerio de Educación, solicitó sus servicios, que prestó gozosamente, para la puesta en marcha de las clases.

Este aspecto de su quehacer académico y oficial, debe quedar suficientemente aclarado, ya que en modo alguno manifiesta favor, ni aún simpatía, por parte de los dirigentes marxistas hacia el declarante.

En segundo lugar, se le retrae como cosa peyorativa y recusable el haber pertenecido en calidad de auxiliar técnico a la “Junta Delegada de Defensa del Tesoro Artístico” en esta provincia. Es preciso hacer constar que tal cargo casi no llegó a ser ni formulario apenas. De todos es sabida la irresistible vocación que siente el que suscribe, por las obras de todo género en que se muestra con alientos de eternidad el espíritu y la inspiración de lo español. Por ello, en consideración a su labor de siempre y a su ferviente entusiasmo, la Junta Delegada le nombró auxiliar técnico [sic], para que la ayudase en sus tareas. Aparte de la naturaleza, totalmente apolítica de la citada Junta, los auxiliares técnicos [sic] no fueron convocados jamás a sus reuniones, y en el libro de actas, que por su insobornable sinceridad, publicó íntegramente el Servicio de Propaganda de la España Nacional, se expresan las razones en que se funda la propuesta y la fecha del nombramiento. Y si aún pudiera quedar algún resquicio para la censura, baste decir que el cargo no tenía remuneración alguna y que la patriótica labor realizada por la Junta fue reconocida oficialmente por el Gobierno Nacional, ya que a poco de ser liberado Castellón los miembros que la componían, y entre ellos el declarante, fueron nombrados agentes de enlace del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional [sic], por comunicación que firmaba Pedro Muguruza, actual Director General de Arquitectura.

Además, el hecho de haber pertenecido a la Junta bajo el dominio rojo, reconociendo sus valiosos servicios en defensa de la Religión y de la Patria, ha sido estimado laudable y meritorio, según puede advertir el menos avisado:

El Sr. Ángel Sánchez Gozalbo, vocal, es actualmente Presidente del Colegio de Médicos y Teniente-Alcalde del Excmo. Ayuntamiento. D. Juan Bta. Porcar, también vocal, es Jefe Provincial de los Servicios de Plástica de la Falange. D. Vicente Traver Tomás, que es Arquitecto Diocesano y actual Alcalde de la Ciudad de Castellón, fue auxiliar técnico de la Junta Delegada. D. Vicente Ramírez y D. Eduardo Codina Armengol, también auxiliares técnicos, son en la actualidad; el primero Secretario particular del Sr. Director General de Enseñanza Primaria y Director de un Grupo Escolar en Madrid, y el segundo, Jefe Provincial del Artesanado en la C.N.S. y Bibliotecario Municipal. El propio declarante, actúa como Delegado Provincial de la Comisión Reguladora de la Producción de Metales “Rama de la Chatarra” y tiene el orgullo de manifestar, que por su labor, ha recibido ya repetidas felicitaciones de la Delegación Nacional del Servicio.

Por estas consideraciones, estima que no es posible considerar punibles actuaciones que, por su índole misma, y por su patriótica transcendencia, han merecido, de todos, respeto reverente o aplauso cordial. Las imágenes santas que encarnan la devoción tradicional de nuestro pueblo, fueron devueltas, gloriosamente, a los altares, gracias al abnegado y peligrosísimo esfuerzo de la Junta Delegada del Tesoro Artístico, la cual, con toda solemnidad, en pública ceremonia celebrada sobre las piedras sagradas de nuestra

Arciprestal destruida, restituyó a la ciudad y a la Iglesia, las imágenes salvadas de la destrucción; entre ellas, la Santísima Virgen del Lidón, Patrona de Castellón y el venerado Cristo yacente de la antigua cofradía de la Sangre.

En cuanto a posibles censuras por haber pertenecido al “Institut d’Estudis Valencians”, debe manifestar, que fue nombrado para integrar la sección de Filología por su calidad de técnico en tal menester, acreditada en sus obras y publicaciones sobre temas de mecanismo lingüístico y de investigación literaria. El cargo era gratuito y nadie cuidó de alegar méritos políticos para lograr tal nombramiento. Aparte de esto, las circunstancias de la guerra, la dificultad de transporte y el peligro constante de bombardeos por la aviación nacional, invalidaron toda labor posible, ya que, si no se convocó alguna reunión, era tan difícil hallar un medio para trasladarse a Valencia, que el declarante afirma no haber asistido más que a la de constitución de la Sección a que pertenecía. Por permanecer casi constantemente en Castellón, ignora la procedencia y filiación política de los demás miembros del “Institut”; pero, desde luego, tiene indicios vehementes de la adhesión al Gobierno Nacional de alguno de ellos, como, por ejemplo, D. Felipe Mateu y Llopis, del Museo Arqueológico Nacional, hombre de probado rendimiento en el servicio de la causa de la Cultura Española.

No cree, por tanto, el sumariado que suscribe, que implique responsabilidad política el hecho de servir, máxime como en el presente caso, apenas con la intención, los intereses de la ciencia del Lenguaje, que aún hoy, por vocación irreprimible, constituye una de sus capitales inquietudes. De tal modo que un trabajo iniciado bajo el régimen rojo, de caótico desmán, acaso sea su memoria técnica del Doctorado en Letras a que aspira.

Finalmente, ha sabido el declarante por indignada confidencia de un amigo auténtico que no cejó en su hostilidad hacia el causante de tal arbitrariedad, hasta verle desposeído de su cargo de inmerecida confianza, que en un informe de la Delegación Provincial de Investigación e Información de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS se desliza la calumniosa acusación de ser de ideología marxista [sic], lo cual es preciso aclarar y desvirtuar. Parece que ya en el mismo informe se expresan afirmaciones contradictorias; pero no será ocioso un breve comentario. El individuo que firma tal informe, no cuidó de asesorarse debidamente y con la inconsciencia que le es privativa, lanzó la especie al viento de su antojo. Como su actuación en un Servicio de tanta trascendencia resultaba peligrosa, fue rápidamente sustituido; pero antes pudo extender su absurdo informe.

La vida diáfana y las obras del declarante, son suficientemente conocidas de todos para insistir ahora en su reivindicación. Jamás ha pertenecido a ningún partido político y nadie que no sea un obcecado cerril, de los que no pueden enjuiciar a los demás sino a través de un sambenito cualquiera, será capaz de afirmar su identificación con alguna de las doctrinas políticas que malearon nuestro País. En toda ocasión ha censurado los modos caciquiles del partido republicano de Castellón, lo cual le valió disgustos y el que le motejaran de izquierdista, cuando en realidad el mote que le cuadra es de inconformista frente a toda injusticia y todo desmán.

Su afán de siempre ha sido servir a su Patria rindiéndole, con emocionante fervor, el mejor homenaje de su espíritu; sus obras, en las cuales, ajenas a toda contingencia

deleznable, con llama estremecida de pasión, arde su amor a lo noble y puro, a lo libre de miserias bajas y mezquinas pasiones.

La Justicia sabrá estimar la sinceridad de cuanto en este escrito se contiene. Ella descubrirá la verdad y dará su definitivo veredicto.

El declarante ruega a V.S. que al tomar en consideración este manifiesto de descargo, amplíe su indagatoria con el concurso testifical de los señores siguientes:

Camarada José M^a Mira de Orduña- Jefe Provincial (accidental) del Moviendo.

D. Vicente Traver Tomás – Alcalde de la ciudad.

D. Ángel Sánchez Gozalbo – Presidente del Colegio Oficial de Médicos.

D. Eduardo Codina Armengot – Bibliotecario Municipal-

D. Casimiro Meliá Tena - Ingeniero Jefe de Industria.

¡Que la Justicia brille y la razón se restablezca!

¡ARRIBA ESPAÑA!

Castellón 21 de junio de 1940.

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

DOCUMENTO N° 24

SENTENCIA DEL TRIBUNAL REGIONAL DE RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS DE VALENCIA CONTRA BERNARDO ARTOLA TOMÁS

SENTENCIA N° 789

SEÑORES: D. Eugenio Serrano García, D. Gil López Ordás, D. Salvador Montesinos Bonet.

En la ciudad de Valencia a tres de noviembre de 1940.

Visto ante este Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas el presente expediente, seguido por el Juzgado Instructor de Castellón, contra BERNARDO ARTOLA TOMÁS, de 34 años, soltero, licenciado en Filosofía y Letras, natural y vecino de Castellón,

1ª RESULTANDO: que contra el inculcado en procedimiento 1083, por el Consejo de Guerra Permanente nº 1 en la Plaza de Castellón, se propuso el sobreseimiento, siendo aprobado éste; simpatizante de izquierdas antes del Glorioso Movimiento que se afilió a Izquierda Republicana y a la sindical UGT; fue nombrado por las tituladas autoridades rojas, Catedrático del Instituto, cargo que obtuvo en los cursillos al comienzo del Glorioso Movimiento, siendo su conducta social, moral y profesional, buena, diciendo públicamente que no se significaba en pro del Gobierno de la República; por sus estudios sobre “lengua valenciana”, sin retribución alguna y Auxiliar Técnico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico Nacional, siendo su actuación un tanto favorable para la Causa Nacional; presentó relación jurada; tiene bienes valorados en 15.000 ptas., adeuda 9.000 ptas., soltero, sin cargas familiares. Hechos probados.

CONSIDERANDO que de las pruebas practicadas se aprecia no estar incurso en ninguno de los apartados del artículo 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas por los que procede su absolución.

Vistos los artículos citados, el apartado r) del 96 y demás [ilegible]

FALLAMOS que debemos absolver y absolvemos libremente a BERNARDO ARTOLA TOMÁS, debiendo ser archivadas las precedentes actuaciones.

Así por esta nuestra sentencia de la que se expedirán los testimonios prevenidos y definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Bernardo Artola Tomás, Caja 10069. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

ESCRITO DE LA ALCALDÍA DE CASTELLÓN A PROPÓSITO DEL PROCESAMIENTO POR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE FERNANDO GASSET LACASAÑA

En contestación a su atento oficio n° 681, fecha 8 del corriente, adjunto tengo el honor de remitir a V. relación detallada de las personas que desempeñaron el cargo de Concejal o consejero durante el mando del Frente Popular anterior al 18 de julio de 1936 y las que lo ejercieron desde dicha fecha hasta la liberación. Así mismo se acompaña relación de los empleados nombrados en esta Corporación durante el tiempo rojo.

En cuanto a las recomendaciones que el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas hace referentes a que son solamente personas de clase humilde y modesta aquellas que hasta ahora van apareciendo como incursas en estas responsabilidades, me considero obligado a manifestarle sobre este particular, como antecedente que interesa conocer, las consideraciones siguientes.

Esta población ha estado dominada y mandada durante todos los años de este siglo por un partido republicano de carácter local y totalmente independiente en sus relaciones con el resto de los partidos republicanos de la Nación hasta ya proclamada la república en que se inscribió como perteneciente al partido radical. Esta organización o partido local bajo la jefatura absoluta y omnímoda de D. Fernando Gasset Lacasaña, ha reunido en su seno a la inmensa mayoría de las personas acaudaladas, comerciantes, industriales, profesiones liberales, etc., de la población y ha fomentado en tanto y cuanto creyó convenientes a sus intereses, votos, dominio de masas, y cuestiones obreras, todos los izquierdismos, irreligiosidad, falta de respeto a las autoridades, etc., todo ello dirigido, llevado y amparado por el Sr. Gasset y el Comité o Senado que tenía a su devoción para dar aspecto democrático a su actuación. Solamente pocas personas intentaron a veces levantar su voz frente a esta oligarquía que en absoluto dominaba la población y prontamente se convencían de la esterilidad y fracaso de sus nobles propósitos. Pero otros, con los mismos sentimientos y maneras de concebir la moralidad y deber político que el Sr. Gasset y su partido, disgustados por no sentirse correspondidos a sus méritos y no poder medrar como creían merecerlo o por disgusto personal, fueron disidentes en el partido y se dedicaron a crear pequeñas organizaciones con carácter regionalista izquierdista, socialista, CNT, etc., que fueron los elementos que integraron en esta Ciudad el Frente Popular, unidos estos descontentos fracasados al elemento trabajador más subversivo que como el Sr. Gasset además de haberse enriquecido acaparaba para él y familiares y amigos suyos recién llegados al partido, los cargos de representación (diputado, Concejales, etc.) y los de gran reconocimiento económico (Presidencia del Tribunal de Garantías y Secretaría de la misma).

Todo ello se trae solamente como antecedente a demostrar que el Frente Popular se constituyó en esta población con la gente humilde que integraba la CNT y los elementos fracasados socialmente en su mayoría y disidentes del partido radical, quedando aún en este partido aquellas personas que durante años y años fueron los elementos subversivos

de la ciudad y otros que procedentes del campo monárquico y derechistas de nombre, no tuvieron inconveniente alguno por conseguir votos y actas, en aliarse con el Sr. Gasset y sus secuaces demagogos. De modo que son contadas las personas de alguna solvencia social y económica que puedan encontrarse en los partidos extremistas de izquierda, ya que muchas que durante tantos años observaron y profesaron esta conducta dentro del partido radical al llegar los días del Frente Popular y del dominio rojo y ver que peligraban en extremo sus vidas y haciendas se pasaron el día oyendo la radio nacional en espera de que llegase nuestro Glorioso Ejército a salvarles esas vidas y haciendas que para ellos era su principal razón de ser, pero no traerles las ideas y sentimientos verdaderos y contrarios a los por ellos siempre procesados, que deben presidir en todo momento la manera de ser y de pensar de quien muy de corazón se siente adicto al Glorioso Movimiento. Ha habido, en muchos casos, de los cuales tengo sinceros testimonios, verdaderos arrepentimientos de errores pasados y son hoy personas del todo adictas a la verdadera España de nuestro Generalísimo y dignas de toda consideración y respeto.

Resultado de la actuación política en esta Ciudad ha sido que nada se haya movido ni nada se haya hecho, desde años antes de 1900, sin que la voluntad del Sr. Gasset haya en ello intervenido y decidido y suerte es de que este señor viva hoy y conserve, según referencias, con toda lucidez su memoria e inteligencia a pesar de sus muchos años, de tal modo que le permitieron estas facultades suyas, también conservadas, defenderse y disculparse ante el Tribunal que lo juzgó y, aún acaso, para seguir como enfermo en un hospital de esta plaza, ejerciendo aún su presencia en esta población el efecto letal de la sombra del manzanillo. Él es quien si el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas lo juzga oportuno, podrá facilitarle cuantos datos se estimen necesarios sobre todos los aspectos locales, actuación de personas y aún muy especialmente, casi con seguridad, sobre el de la masonería.

Acompaño una relación de personas que más han destacado durante el mando marxista. Alguna de ellas, de familia y situación acomodada, acaso se encuentre ahora en que todos los bienes con cuyo producto se permitían llevar una vida dedicada por entero a actividades rojas, son hoy legalmente de sus padres, de sus hermanos o de sus hijos, familiares que en más de los casos asistían complacidos a la actuación izquierdista de su familiar. También en algunos casos la propiedad afectada por la preparación y propaganda izquierdista alcanza moralmente a fincas que ex profeso sirvieron de albergue a dichas propagandas y para ellas se construyeron y dedicaron, siendo de notar principalmente los dos edificios destinados a centro republicano y situados en las calles de Calvo Sotelo y plaza Clavé (este segundo emplazado deliberadamente en el arrabal caracterizado como derechista) y aún el denominado Centro Obrero en la Ronda de Mijares, aunque éste sea propiedad del Excmo. Ayuntamiento y que como muestra de complacencia por los izquierdismos y lucha de clases cedieron los Ayuntamientos que se sucedieron durante el siglo a las sociedades obreras.

Con todo lo expuesto cree esta Alcaldía haber contribuido al cumplimiento del deber que la actuación judicial reclama y a determinar las responsabilidades de las personas que contribuyeron con su actuación o complacencia a la desgracia nacional.

Dios salve a España guarde a V. muchos años.

Castellón, 30 de septiembre de 1939 Año de la Victoria
El Alcalde

Traver

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña,
Caja 10074. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

INFORME RESERVADO DE LA JEFATURA DE FET Y DE LAS JONS A
PROPÓSITO DEL PROCESAMIENTO POR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
CONTRA FERNANDO GASSET LACASAÑA

Informe reservado

Estimo un deber inexcusable y urgente poner en conocimiento de V.S. el gran malestar que entre todas las personas decentes, de los más diversos sectores de esta Provincia, reina como consecuencia del poco castigo que ha recibido el hoy ya octogenario D. Fernando Gasset de Lacasaña.

Este señor ha sido durante toda su larga vida quien en esta provincia animó, dirigió y mantuvo la rabiosa política izquierdista, de profundo sectarismo y en la que tenía gran predicamento la masonería.

Exdiputado a cortes y presidente del Tribunal de Garantías (a los pocos días de iniciado el Movimiento como Presidente de dicho Tribunal se adhirió al gobierno rojo condenando la actitud de los sublevados el 18 de julio) su actuación en la política nacional es sobradamente conocida, tanto antes como después de ingresar su grupo autónomo en el partido radical, pero hay que señalar porque en Madrid no es tan fácil de percibir, que en lo que afecta a esta Provincia ha sido el mayor responsable del envenenamiento del país y sus gentes han participado durante el dominio rojo en toda clase de hechos delictivos si bien la mayor parte de los destacados por su posición social, no participaban en el Frente Popular, por no convenir a sus intereses los postulados marxistas en el orden económico.

Ante lo ocurrido en Castellón desde muchos años a esta parte tengo el deber de declarar – a fuer de leal al Movimiento y al Caudillo – que será impopular y por tanto contraproducente toda sanción que aplique el Tribunal de Responsabilidades Políticas, a cualquiera de los que en esta Provincia están incurso en dicha Ley, mientras no se imponga la máxima al Sr. Gasset.

Este señor que huído al extranjero y de regreso luego a España fue inexplicablemente avalado según declaró una hija suya por el Sr. Conde de Rodezno y el Conde de Romanotes juzgado en Consejo de Guerra, ante el asombro de la opinión pública solo fue condenado a seis años y un día. Poco después de ingresar en prisión y motivado en su avanzada edad, pasó al Hospital y algún tiempo después a su domicilio en prisión atenuada. Innecesario es decir el efecto que ahora ha causado el verlo beneficiado por la Ley de Prescripciones de Penas Menores de doce años y un día.

La única esperanza – si bien con un gran escepticismo que yo procuro deshacer – que tiene la opinión sana, es que ahora el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condene a la máxima sanción económica, así como a la de destierro, pues agravía y rebela que este señor pueda seguir viviendo en esta región a la que tanto daño ha causado con su actuación, doctrinas y dinero y en la que en la actualidad no a desaparecido su “tinglado” político.

Me consta los subterfugios y procedimientos dilatorios a que está recurriendo el interesado – que a pesar de su edad conserva plenamente sus facultades y conocimientos jurídicos – y las presiones que él y sus parientes y allegados – varios de ellos afiliados a Falange – están ejerciendo para conseguir la impunidad y creo conveniente señalar la falta de delicadeza con que proceden y me permito recomendar que se tengan presentes los testimonios y declaraciones prestadas ante el Consejo de Guerra que juzgó al Sr. Gasset.

Antes de terminar este informe, del mayor interés político, expongo a V.S. el perjuicio gravísimo que a la justicia y al Movimiento causa en esta Provincia el hecho de que por no hallarse comprendido entre los partidos desafectos (Frente Popular) el partido radical, no se pueda proceder debidamente contra los que integraron el partido político del Sr. Gasset que aquí – desde mucho antes de adherirse al citado partido radical en tiempos de la República – causó los enormes estragos arriba enunciados y del cual salieron los que luego por descontento personal o por ir más lejos en sus avances de tipo social, fueron a parar a partidos del Frente Popular, gentes estas, todas ellas de “menor cuantía” que han sido castigados mientras los otros harto más culpables, permanecen impunes, motivando esto el que esta Provincia se manifieste tan fría y escéptica respecto al Movimiento y a la justicia del Nuevo Estado.

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista

Castellón de la Plana a 15 de febrero de 1940

El Jefe Provincial

Lorenzo Villalonga

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña, Caja 10074. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

COPIA DEL TESTIMONIO DE CONDENA POR CONSEJO DE GUERRA DE
FERNANDO GASSET LACASAÑA

JOSÉ ANTONIO FUNES REAL, SECRETARIO HABILITADO DEL JUZGADO
MILITAR PERMANENTE NÚMERO 1 DE ESTA PLAZA

CERTIFICO: Que al folio 202 del procedimiento sumarísimo ordinario n° 1081 instruido en este Juzgado contra el vecino de Castellón D. Fernando Gasset de la Casaña, aparece sentencia recaída en dicho procedimiento por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales que vio y falló la causa que literalmente dice así:

“En la plaza de Castellón a quince de marzo de 1939. III Año Triunfal. Reunido el Consejo de Guerra para ver y fallar la presente causa n° 1081 de 1938.

RESULTANDO que el procesado deon Fernando Gasset Lacasaña, que desempeñaba el cargo de Presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, se hallaba el 19 de julio de 1936 en el Balneario de Benasal por motivos de salud coincidiendo con las vacaciones de verano, y al tener noticia de los hechos se puso al habla por teléfono con el Secretario del Tribunal Sr. Serrano Pacheco quien le hizo presente la necesidad de que se presentase en Madrid, lo que resolvió efectuar seguidamente dando antes instrucciones al Secretario, para convocar a los miembros de dicho Tribunal, y reunidos se acordó presentar la dimisión, por razones que no aparecen claras en los autos, siéndole admitida al procesado en acuerdo de 16 de septiembre siguiente; dicho Tribunal, no formuló protesta por las vejaciones a personas de derecha que lo componían, ni por otros asesinatos y crímenes que tenían el apoyo de aquel gobierno.

Con anterioridad a la fecha del Glorioso Movimiento el procesado en su larga carrera política de tendencias izquierdistas, difundió doctrinas avanzadas que evolvían conceptos de antirreligión, antipatria y antimilitarismo, a fines con los que preconizaba la violencia, incitando, a las masas a la rebeldía y a toda destrucción material y de orden existente.- HECHOS PROBADOS.

CONSIDERANDO: Que el Consejo estima que los referidos hechos constituyen el delito previsto y penado en el párrafo segundo del Artículo 240 del Código de Justicia Militar por cuanto, aparte de la salvedad de la prescripción aplicable a los hechos a los que pudiese alcanzar tal beneficio de la Ley por su fecha lejana, es indudable que la actuación política del procesado, sino puede calificarse plenamente de adhesión a la rebelión en el sentido de decidido apoyo a aquellas fuerzas del frente popular culpables de los actos y desmanes, de los que el mismo procesado discrepa y de los que no aparece cuando menos inmediata, y directamente como culpable, es lo cierto que su responsabilidad innegable aparece clara en cuanto se considera su actuación total y especialmente la de fecha próxima anterior al Glorioso Movimiento en que contribuyó a incitar a las masas de izquierda en forma que no podía tener otro resultado que el fatal que tuvo y hubo tal vez de sorprender y desde luego desagradar al propio interesado; hecho éste, que no puede estimarse en modo alguno como prueba o demostración de que sentía simpatía por la Causa Nacional, según el procesado pretende sostener.

CONSIDERANDO: Que tampoco estima el Consejo aplicable la calificación de Auxilio prestado a la rebelión, porque la prueba referente a la actuación del encausado después del 19 de julio de 1936 se limita a referencias de un periódico, como la que aparece en el folio 90, sin pruebas documentales de las actas y acuerdos de aquel Tribunal por una parte; y por otra el único hecho cierto respecto al apoyo o auxilio que pudo prestar a aquel su gobierno es el de la dimisión que no cabe interpretar, ni en el sentido favorable de una protesta ni el desfavorable al reo, de una forma obstaculizar en aquellos momentos la actuación del Gobierno rojo.

CONSIDERANDO: Que el procesado Don Fernando Gasset y Lacasaña aparece responsable en concepto de autor del delito que el Consejo estima perpetrado.

CONSIDERANDO: Que si por una parte concurre la circunstancia agravante de trascendencia de los hechos, también es de apreciar las atenuantes de edad avanzada del procesado y su decisión de no rehuir la acción de la Justicia Nacional como oros de su representación política han hecho.

VISTOS: Los artículos citados, los 237, 238, 171, 188, 591 y pertinentes del Código de Justicia Militar; los 1, 33, 62, y de general aplicación del Penal Ordinario, el Consejo

FALLA: Que debe condenar y condena al procesado Don Fernando Gasset de Lacasaña a la pena de seis años y un día de prisión mayor con las accesorias de suspensión de todo cargo, siéndole de abono el tiempo de prisión preventiva sufrida a resultas de esta causa y la condena al pago de las responsabilidades civiles correspondientes en cuantía indeterminada, que en su día concretará el organismo legal competente.

EL CONSEJO así lo pronuncia, falla y firma.

Y para que conste y su remisión al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, libro el presente con el Vº Bº del Sr. Juez en Castellón de la Plana a trece de noviembre de 1939. Año de la Victoria.

ESCRITO DE DEFENSA PRESENTADO POR FERNANDO GASSET LACASAÑA
EL 5 DE DICIEMBRE DE 1939

AL JUZGADO PROVINCIAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Fernando Gasset Lacasaña, abogado, viudo, vecino de Castellón, habitando accidentalmente en la calle de Ximenez, n° 16, bajos, al Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, respetuosamente digo: que reproduciendo en un todo el escrito presentado con fecha uno del actual mes que debe seguir de precedente al que ahora formulo, dispuesto siempre a complimentar los mandatos de la Autoridad, consigno a continuación la relación jurada y valorada de todos mis bienes , así como las deudas en plazo que se me señaló y conforme al artículo 49 de la Ley ordenadora de dichas responsabilidades.

Comienzo manifestando que aunque en el encabezamiento digo que soy abogado, y en efecto he ejercido mi profesión durante más de cuarenta años, hace algunos que dejé de hacerlo por múltiples razones, entre ellas la falta de vista, la incompatibilidad con otros cargos, tales como la Presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales hasta que renuncié y en la actualidad por la pena que sufro de seis años y un día de, sin que ejerza tampoco ninguna otra profesión lucrativa, ni esté en condiciones de hacerlo, por mi edad de setenta y ocho años, bien cumplidos.

Muebles no tengo por haberse apoderado de ellos los rojos, que asaltaron mi casa el 23 de septiembre de 1936, no dejándome signo algo inservible y sin valor hasta el punto que tengo que vivir con alguna de mis hijas, para que me faciliten todo lo necesario para la vida.

Valores mobiliarios no tengo más que seis acciones de “Unión Levantina”, Sociedad de Seguros, cuyo valor no está satisfecho aun más que en parte y una o dos acciones del Banco de Valencia en igual situación sin que pueda precisar el desembolso porque desaparecieron en mi despacho el día 23 de septiembre de 1936, en que fue asaltada mi casa, ignorando si fueron o no quemados los documentos justificativos. En la actualidad no dan producto, ni es fácil que lo den por ahora, como consecuencia del mal estado de todos los negocios. Algunas obligaciones de la deuda municipal de Castellón, las transmití para atender a mi manutención, falto como estaba de todo recurso y renta desde el verano de 1936, hasta la liberación de Castellón, durante cuyo tiempo viví, gracias a la caridad de mis hijas e hijos políticos.

Como la maledicencia de mis enemigos ha supuesto en diversas ocasiones, que yo tenía valores en el extranjero, o valores extranjeros en España, declaro ser ello completamente falso y que ni ahora ni antes los he tenido y los ofrezco gratuitamente a quien los descubra.

Pasando ahora, al examen de los inmuebles, comenzaré por las fincas urbanas, siguiendo después por el de las rústicas.

A) La primera es la casa en que nací y heredé de mi padre y hermana o permuté con mi hermano, con otras de igual procedencia, situada en la calle hoy de José Antonio, número seis, de ésta Ciudad, con puertas accesorias a la misma calle y a la del General Mola. No puedo señalar como valor más que el de la propia Hacienda Pública que fue el de seis mil pesetas, como riqueza imponible, pero ocupada como antes indiqué el día 23 de septiembre de 1936, por los rojos, fue destinada a diversas oficinas y almacenes, tales como abastos, transeúntes, fortificaciones y otros semejantes, que la perjudicaron en gran manera y últimamente en mayo de 1938, fue destruida en gran parte por una bomba explosiva de aviación y perjudicada por uno o varios obuses. Al ordenar la Ley de 9 de septiembre del actual año la reparación de las fincas dañadas acudí ante la Junta correspondiente solicitando un préstamo de sesenta y dos mil cuatrocientas veinte pesetas con treinta céntimos, para su reparación, calculándose necesaria la cantidad o tal vez exigua para la reparación y rebajando por consiguiente el valor de la casa. Antes había acudido a la Delegación de Hacienda, pidiendo la rebaja de la contribución. De modo particular y privado se dijo a mis parientes que se había informado favorablemente, pero no se me ha entregado ni hecho saber ninguna resolución. Últimamente y para poder realizar lo más cumplidamente posible el trabajo que ahora hago, envié a un pariente para que se informara en la oficina correspondiente y se le dijo que se había dado de baja en la contribución y ordenando que se diera de alta como solar. Es ello cierto ? Sin duda que el Juzgado podrá averiguarlo mejor que yo ya que dispone de autoridad y medios.

B) Casa nº dos de la calle de Calvo Sotelo de esta Capital. Fue ocupada en julio o agosto de 1936, en su mayor parte por el Ateneo Racionalista, sociedad anarquista, pasando después a la Junta Oficial de Incautaciones roja, lo mismo que la anterior y todas las demás pertenencias a mis hijas o a mi, fundándose en ser yo fascista. Al liberarse Castellón en junio de 1938, fue ocupada por Frentes y Hospitales y al evacuar éstos la Capital, les sucedió a fines de agosto de 1939 la O.J. de FET y de las JONS sin haber celebrado contrato ninguno de arrendamiento y sin satisfacer ninguna cantidad. Esta finca tiene asignada por la Hacienda Pública la contribución correspondiente con líquido imponible de tres mil seiscientas pesetas que acepto como valor ya que no cuento con medios, ni tiempo, para hacer una distinta por medios autorizados.

C) La dos fincas citadas son las únicas en las que concurren las dos circunstancias de ser mías y pagarse la contribución a mi nombre entre las urbanas. Señalaré ahora otras que son de mis hijas, por herencia de su fallecida madre D^a Amparo Bellver Martí, adjudicadas en la escritura particional a la que luego me referiré correspondiéndoles en plena o nula propiedad y siendo el usufructo de las mismas, en alguna parte mío, como cuota vidual, siguiendo pagando la contribución a mi nombre por no habernos tomado la molestia de hacer el cambio, en espera de que dada mi avanzada edad habrán de hacerse otros cambios.

Aun cuando según he dicho parte del usufructo es mío, no representa renta alguna, porque en poder de los rojos las fincas, sin prestarles atención ni cuidado, teniendo que pagar contribuciones y arbitrios, algunos de la dominación roja y reparar daños de la propia guerra, que si no han destruido los edificios, han roto cristales, levantado los techos, arrumbado los tabiques y otros supera el gasto al ingreso.

D) La calle de Buenavista nº 15 es también de mi hija María Gasset de Gil y ha sufrido durante la última época de la guerra daños importantes en cristales, tabiques y otros, en parte reparados y otros pendientes de reposición. Su valor ha sido apreciado por la

Hacienda pública como una riqueza imponible de trescientas sesenta y seis pesetas[subrayado por alguien sobre el original], teniendo también en ella usufructo correspondiente a la cuota vidual. Está situada en el caserío del Grao de este Término Municipal.

E) La casa de la calle de Canalejas nº 36 aparece con una riqueza imponible de trescientas cincuenta y cuatro pesetas [subrayado por alguien sobre el original] debiendo repetir en un todo lo dicho respecto a la anterior y añadiendo que las señaladas con las letras D y E pagan también su contribución a mi nombre.

F) Isabel Ferrer 57, de Castellón pertenece a mi nieta Blanca Rodríguez Gasset, que la heredó de su abuela D^a Amparo Bellver por haber premuerto su madre Blanca Gasset de Rodríguez. Tiene declarada una riqueza imponible de doscientas diez pesetas; se paga la contribución a mi nombre y tengosolo en ella usufructo de cuota vidual. Los rojos me hicieron gastar en ella antes de quedársela mucho más de la renta que puede producir en varios años.

G) Casa calle Pérez Galdós 16 esquina al Obelisco en Castellón, corresponde como la anterior y por el mismo motivo a mi nieta Blanca Rodríguez Gasset, pagándose a mi nombre la contribución y percibiendo el usufructo de la cuota vidual. La riqueza imponible asignada es de seiscientos setenta y cinco pesetas. Durante la guerra la aprovecharon primeramente los rojos como taller y al liberarse Castellón siguieron ocupándola los Nacionales, que la abandonaron porque alguna bomba o algún obús causaron daños importantes dejándolo casi sin cubierta, que no ha podido ser sustituida porque era de uralita y no se encuentra a la venta este artículo en la capital y tal vez en España. El que fue arrendatario Roberto Segarra deseoso de no perder su clientela la ocupó habitando un rincón cubierto, prometiendo hacer algún reparo a cambio de ello. Se necesitan algunos miles de pesetas para que quede el edificio en buen estado. Respecto a la contribución se encuentra en la misma situación que he dicho respecto a la finca A), esto es, que se pidió su baja; se dijo particularmente que había sido admitida; no se ha notificado ninguna resolución y particularmente se ha dicho a un emisario familiar que se dará de alta como solar.

H) Calle Mayor número 170 de Castellón. Pertenece a mi hija Elisa Gasset Bellver de Fabra y probablemente a mi una pequeña parte en usufructo, pero la contribución no se paga a mi nombre y debe figurar a nombre de algún ascendiente de mi esposa fallecida D^a Amparo Bellver, sin que haya podido averiguarlo por no haberse cobrado la contribución urbana desde hace mucho tiempo. Sin duda el Juzgado tendrá más facilidad para averiguarlo. Le pertenece por herencia de su señora madre.

I) La casa calle de Gobernador Bermúdez de Castro nº 101 está declarada por la Hacienda Pública con una riqueza imponible de quinientas cuarenta pesetas y su contribución se satisface a mi nombre.

De esta casa corresponde una sexta parte a mi hija Elisa Gasset de Fabra por herencia de su madre con la pequeña parte de usufructo por cuota vidual al firmante.

Las otras cinco partes restantes forman con otras de un legado especial hecho en su testamento por mi difunta esposa D^a Amparo Bellver del tercio de su heredad quien me dejó en usufructo autorizándome para repartir la propiedad a mi fallecimiento entre sus propios hijos o parte de ellos a mi discreción, encargo que he cumplido haciendo testamento en el que consigno el reparto. Como dicha disposición testamentaria tenía

como principal objeto investirme de más autoridad entre mis propios hijos no he podido hacer renuncia del usufructo sin hacer el reparto, pero de hecho les corresponde.

J) En la calle de Sidro Vilarroig nº 30 y 32 de esta capital tuve una casita de campo de las llamadas aquí “masets” que al urbanizarse quedó convertida en una habitable a la que se le señaló una riqueza imponible de ciento sesenta y ocho pesetas y entró a formar parte de ese legado especial al que se refiere la última parte de la letra anterior, pero una bomba de aviación dio término a su historia derribándola hasta los propios cimientos y no quedando nada en pie. Pedí la baja de contribución y es seguro que se admitirá puesto que no queda hoy más que un solar.

K) Participaciones en el casino Clavé situado en la plaza del mismo nombre de Castellón. Adquirido el solar y hecha la edificación por varios amigos adquirí algunas participaciones, quince de cien pesetas cada una, pero en la escritura se hicieron constar algunas más porque al otorgarse después de entregar el dinero algunos de los compradores no acudieron y los presentes quisieron que se pusieran a mi nombre para después transferirlas a sus legítimos dueños lo que no se ha hecho a pesar de los años transcurridos sin duda porque tal finca no producía ninguna renta. Esas quince participaciones entraron a formar parte del tercio especial a que se refieren las dos letras anteriores. La casa fue hipotecada al Monte de Piedad de Castellón por un préstamo de veinticinco mil pesetas y según mis noticias por estar adeudándose capital y algunos años de intereses se ha formulado demanda ejecutiva ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, embargándose la propia finca, siendo lo más extraño del caso que ha desaparecido la escritura de compra que era al mismo tiempo la constitución de la sociedad. Supongo que la contribución se paga a nombre de la propia sociedad pero es lo cierto, que hoy estas participaciones no tienen valor ni dan renta.

L) Entre las fincas urbanas que aparecen a mi nombre para el pago de la contribución figura una sita en la calle de María Breva nº 21 que no me pertenece. Recuerdo que hace muchos años, tal vez veinte, me entregaron en pago de un crédito a mi favor una casita que probablemente es la que cito que yo vendí poco tiempo después, no recuerdo a quien ni la fecha ni el notario autorizante. Seguramente el comprador por pereza o inconveniencia particular no se cuidó de dar las oportunas baja y alta y como los recibos son individuales no se me ha presentado ninguno al cobro sin duda porque el comprador cuidaría de recogerlos. Por ello no señalo valor ninguno. Si el Juzgado desea aclarar el punto ha de serle facilísimo con solo enviar a cualquier dependiente a la citada casa.

LL) En seis de abril de 1927 D. Félix B lacno y otros señores compraron a D. Eduardo Rodríguez Villanueva, su esposa D^a Amparo Martín Porcar ante el notario que fue de esta capital D. Raimundo Noguera varias fincas sitas en el término municipal de Benasal formando en la misma escritura una mancomunidad entre todos los interesados y respecto a todas las fincas, sin pagar precio comprometiéndose a satisfacer a los vendedores una pensión trimestral durante los años de su vida y estando las fincas hipotecadas por doscientas mil pesetas a D. León Lafuente de Valencia. Los compradores hicieron obras y adquirieron deudas que en la actualidad se elevan a trescientas diez mil pesetas con más, varios años de pensiones e intereses que no han podido satisfacerse a partir de mediados de 1936 por dificultades de muy distinta índole que están en la actualidad pendientes de liquidación a más de restos de algunas contratas, en igual situación.

En 30 de diciembre de 1935 compré a D^a Consuelo Montoliu Fenollosa dos trigésimas partes de aquellos bienes, según escritura que autorizó en el dicho día el notario de Castellón D. Lorenzo Martínez Arquero, comprometiéndome a pagar la parte correspondiente de las obligaciones contraídas por los compradores.

Posteriormente sobrevino la guerra civil, se apoderaron de aquello los rojos y durante cuatro años ni se ha obtenido ninguna ganancia ni ingreso, por lo que la situación de entidad compradora es difícilísima; y en cuanto a lo que a mi se refiere de buen grado renunciaría a lo que me pertenece si se me libra de esas obligaciones.

No ha sido solo la falta de ingresos, sino los daños causados a las fincas urbanas. En los primeros días de las revueltas derribaron elementos rojos la casa llamada “la Primitiva”, la más inmediata a Fuente-En-Segures. Después al llegar la liberación varios obuses causaron grandes desperfectos. La Primitiva debía haberse comprado por el Ayuntamiento, según convenio por treinta mil pesetas, y aún no ha dado la Corporación Municipal contestación definitiva sobre sus propósitos. Los daños han sido apreciados por perito competente al iniciarse el procedimiento para alcanzar el Estado un préstamo para remediar los daños en setenta y seis mil pesetas, aproximadamente. A estas cantidades hay que añadir otra importantísima del valor de los muebles en su más alta acepción (colchones, camas, ropas para las mismas, mesas de diversas clases, ropas de mesa y cocina, toallas, mesitas de comedor y cocina, waters y otras muchas cosas).

La contribución se paga a nombre de D^a Vicenta Campos y otros, por ser dicha sra. Viuda y heredera de D. Félix Blanco la que tiene más participación en el negocio. Por esto no conozco su cuantía en la actualidad, ya que no se pagó durante el tiempo rojo en el que éstos lo dedicaron a Hospital, Sanatorio y recogimiento de evacuados, y ahora no ha cobrado el Gobierno Nacional los trimestres correspondientes a partir de la liberación, pero podrá el Juzgado conocer su cuantía y bien puede averiguarse que en vez de ser un negocio positivo lo es en negativo.

M) Terminada la relación de las fincas urbanas entremos en la de las rústicas y antes consignaré con relación a todas ellas que si de las urbanas he pedido recoger algunos datos por pertenecer a la entidad, no he podido alcanzarlos en el escaso tiempo de que he dispuesto de las fincas rústicas, pero lo que falte podrá fácilmente conseguirlo el Juzgado y yo mismo si se me da tiempo para ello.

Es la principal de dichas fincas la masía situada en éste término municipal, Partida de Benadresa o Plá del Moro, conocida vulgarmente por mi propio apellido. Tiene una extensión aproximadamente de treinta y ocho jornales, medida del país, en su mayor parte con cultivo de secano (algarrobos, almendros y olivos) y el resto naranjal con algún pequeño trozo de alfalfa y de aquellos algunos sin producción por ser pequeños. Aun cuando señalo la finca como una, fue adquirida en varios trozos, en diferentes escrituras, siendo aquellos contiguos o vecinos. Como me quemaron los rojos los recibos de contribución no puedo señalar ni aun globalmente la que se satisface, y por consiguiente hacer un cálculo de su valor. Lo manifestaré al Juzgado tan pronto pueda hacerlo y provisionalmente le asigno el valor de ciento veinte mil pesetas.

Desgraciadamente para mi la finca es de escaso valor, pues la mayor parte del agua que se emplea es comprada y por consiguiente cara y ello disminuye la producción. Se apoderaron los rojos de la finca y lo primero que hicieron fue arrancar los almendros en número de unos trescientos plantados en unas treinta hanegadas, cuyo producto venía a ser el líquido que alcanzaba de la finca. Ahora, por no dejar dicha tierra inculta la dedico a trigo, cebada y patatas, pero como los abonos y el agua son caros, en vez de alcanzar ganancia, recae sobre mí una pérdida de algunos cientos de pesetas. Esta finca tiene dos casas-masías figurando una como del Plá del Moro, con una riqueza imponible

de doscientas once pesetas y tengo otra consignada como del Bovalar y como en ésta partida no tengo ningún edificio, supongo que es una equivocación e indico que su riqueza imponible es de setenta pesetas.

Por falta de metálico para cultivarla ha sido necesario hacerlo intensamente durante año y medio, la he cedido en aparcería a mis hijos según consta en documento privado que fue protocolazo en 14 de junio de 1939, en la notaría de Antonio Grande de esta capital.

N) Una tierra de las llamadas Puchol y conocida por este nombre de diez y nueve a veinte hanegadas que incluyo en ésta relación, por no faltar a la verdad pero que figura en la contribución a nombre de mi Sr. padre D. Ruperto Gasset, de quien la heredé, pero que me fue confiada como a título fideicomisario, sin que pueda por consiguiente disponer hasta mi muerte de ello, ni revelar por motivos de conciencia su objeto.

Su valor puede ser de diez mil pesetas, advirtiéndole que en la contribución figura con más cantidad de la que le corresponde por el motivo expresado y para evitar que por aplicación de la Ley agraria se expropiara, ya que está muy inmediata al caserío del Grao.

Dicha finca tiene una casita y noria en muy mal estado, figurando como riqueza urbana con un imponible de treinta y siete pesetas, como de la Partida de Patos.

Ñ) Según dijimos en el tercer párrafo de la letra I, mi difunta esposa en su testamento hizo un legado especial del tercio de sus bienes, para que lo usufructuara y lo repartiera a mi muerte libremente entre sus hijos. En aquella letra y algunas sucesivas señalé las fincas urbanas y ahora añadiré las rústicas:

Una alquería con sus tierras en término de Castellón, Partida de la Plana, de unas treinta hanegadas de extensión formada por tres trozos que tienen títulos distintos. Las cultivan mis propios hijos, que las han plantado de naranjos haciendo los desembolsos correspondientes dirigiendo a nombre de los mismos los trabajos mi hijo político D. Rafael Fabra Compte. La contribución va incluida en mi mismo título, y no sé por consiguiente a cuánto asciende sin que por tanto pueda señalar valor, lo cual por otra parte me es indiferente porque ni me pertenece ni la cultivo.

O) Un trozo de terreno algarroberal de la partida de la Marrada, en este término municipal, perteneciente a ese mismo tercio, de escasísimo valor, que apenas produce para su cultivo.

P) Dos hanegadas marjal en este término municipal, Partida de Patos, comprendido también al mismo tercio, y con un valor aproximado de mil pesetas.

Resumen

Deseoso de cumplir la orden del Juzgado he dado extensa relación de cuanto sé, pero en realidad mis fincas son tres: A) la casa nº 6 de la calle de José Antonio, que está en gran parte en ruinas. B) la nº 2 de Calvo Sotelo, que en su mayor parte ocupa un centro oficial sin pagar alquiler. M) la masía que fue escasamente productiva pero que hoy no lo es por los daños causados en el arbolado por los rojos.

Lo demás no es mío más que en pequeñísima parte sin que represente para mí ninguna riqueza ni renta.

Deudas

Desgraciadamente para mí son muchas las que tengo y enumeraré para mayor claridad:

1º) Con los bancos. Al ocurrir la persecución de que fui víctima a partir de los primeros días de agosto de 1936 sin duda por haber renunciado a la presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales y ausente yo exigieron los rojos a mi familia y apoderado D. Bautista Doménech Bellver, multitud de desembolsos de los cuales ahora sólo citaré dos, una entrega de 100.000 pesetas y un pedido de 250.000. Como no tenía metálico firmaron las citadas letras para su descuento en el Banco de Castellón por ciento dos mil pesetas y como los Bancos se negaron a facilitar las 250.000 se entregaron tres cantidades de 25.000 pesetas descontadas en el propio Banco y en las Sucursales del de España y Español de Crédito. Total, 177.000 pesetas. Como a sus vencimientos ni yo ni mi familia contábamos con dinero para el pago se renovaron las letras unas veces pagando intereses y gastos y otras añadiéndolas a las letras puestas en circulación. A mi hijo Fernando le avalaba un crédito personal de 70.000 pesetas y todo fue agotado por motivos iguales o semejantes. Posteriormente se han firmado otras letras para atender otros compromisos entre ellas una en el Banco de Valencia para poder salir de aquella capital dominada por los rojos y venir a Castellón liberado. También se firmaron otras letras para que algunos de mi familia se librasen de iguales persecuciones y alguna de escaso valor como favor a parientes o amigos. El total de responsabilidades contraídas debe exceder mucho de trescientas mil pesetas, sin que pueda precisar por no haber puesto yo mi firma a partir de julio de 1936 y aún antes, para comprobar este hecho el Juzgado deberá pedir relación de todas las letras firmadas por mi apoderado como aceptante, tirador, endosante o a la vista, dirigiéndose a los bancos que quedan citados y a los demás que tengan sucursal en esta ciudad y a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón.

2º) Contribuciones. Durante la dominación roja como nada me dejaron con nada debí contribuir. Después de la liberación el gobierno Nacional no las ha cobrado hasta el 17 del pasado mes de noviembre en que ha abierto el cobro de los trimestres tercero y cuarto de 1938. No las he pagado por falta de metálico pero me propongo hacerlo en breve si el juzgado no se opone a ello contando con la ayuda de parientes y amigos. El Juzgado puede pedir a la oficina recaudatoria certificación del importe en cada trimestre.

3º) Arbitrios municipales. Tengo un descubierto de más de un millar de pesetas según el Juzgado podrá saber si dirige comunicación a la alcaldía y me propongo pagarlos todos lo más rápidamente posible.

4º) Fertilizadora. Esta sociedad me ha proporcionado semillas y abonos y no contando en muchas ocasiones con dinero ha tenido la gentileza de fiármelos. Me interesa acreditar el descubierto que tengo, detallándolo o totalizándolo según lo crea más procedente el Juzgado a que me dirijo.

5º) Aguas. Igualmente estoy en descubierto con la Sociedad General de Riegos administradora del pantano y me interesa acreditar la cuantía del descubierto así como lo que he pagado durante el actual semestre. Así lo solicito del Juzgado.

6º) Aguas. También las ha suministrado el Diluvio, Sociedad de Riegos y por ello intereso al Juzgado los datos relativos a lo que he pagado en el actual semestre y lo que tengo al descubierto.

7º) Aguas potables. Debo a esta Sociedad la suministrada a varios edificios porque en la imposibilidad de pagarlos de una sola vez lo hago escalonadamente.

8º) Deudas familiares. La tengo con mis hijos políticos por haberme favorecido durante más de dos años de ausencia en que no disponía de medio ninguno para mi manutención y atendido al cultivo de la masía. Ellos podrán decir a cuánto asciende y alguno como D. Luis Rodríguez Bajuelo me ha proporcionado de reciente mil ochocientas pesetas para atender a mis gastos en cuanto rebasaban los ingresos.

9º) Y otras deudas como a médicos, farmacéuticos, sastre y otras, no quiero decir nada por no aumentar las molestias causadas al Juzgado.

Motivos

Quien no me conozca podrá creer después de esta relación de deudas que yo he vivido siempre de la trampa y de tal supuesto he de protestar enérgicamente. Desde los seis años a los diez y nueve trabajé como estudiante. Después y hasta mi renuncia del cargo de presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales no descansé sino en pequeño periodo de tiempo en que estuve enfermo. Trabajé y no tuve vicios, siempre con el deseo de dejar acrecentado a mis hijos lo que recibí de mis padres. Todas esas deudas se han producido desde el mes de agosto de 1936, por los motivos que quedan someramente indicados y que ampliaré si así lo estima el Juzgado.

Documentación

Quemados el Registro de la Propiedad de Castellón y los protocolos notariales de la ciudad, quedarían sin prueba la mayor parte de los hechos expuestos, si no hubiera tenido la suerte de conservar la escritura particional de bienes protocolada por el notario Don José Lamberto Espinosa de esta capital, el día 22 de octubre de 1930, practicada por la defunción de mi esposa D^a Amparo Bellver Martí, y la de adquisición de dos trigésimas de ciertos bienes de Benasal, de D^a Consuelo Montoliu Fenollosa, ante el notario de esta capital D. Lorenzo Martínez Arquero en 30 de diciembre de 1935, así como el acta de protocolización del contrato de aparcería con mis hijos, a que más arriba me refiero.

Los dos citados primeros documentos pueden dejar bien precisados la cabida, lindes, fechas, valores, inscripción en el Registro de la Propiedad, títulos y otros detalles que el juzgado puede considerar interesantes y que yo no he podido transcribir por falta material de tiempo. Para utilizarlos en la medida que el Juzgado estime necesaria caben tres medios, sin privarme de poder utilizar dichas escrituras, tan indispensables por la quema de Registros y protocolos. Es el primero la exhibición de los documentos para que el Juzgado tome todas las notas que estime convenientes; el segundo que presente copia simple de todos los extremos que el Juzgado señale y después se practique un cotejo y el tercero que inscriba los documentos en el Registro de la Propiedad y después se dé del mismo certificado según se estime conveniente.

Situación familiar

Cumpliendo el final de la prevención tercera manifiesto que soy viudo, que no tengo ningún hijo menor de edad, ni incapacitado y que no tengo bienes de terceros en mi poder; aunque sí muchos hijos y algunos necesitados de protección y ayuda. Por lo que dejo expuesto

SUPLICO al Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, tenga por presentado este escrito en el día de su fecha que es el octavo a partir desde el en que se me hizo la notificación de la obligación que tenía de presentarlo, que contiene relación jurada de bienes y deudas y la promesa de poner a disposición del Juzgado en distintas formas que se indican, los documentos complementarios del escrito, ordenando la práctica de las pruebas que se señalan como justificativas de los hechos aducidos.

OTROSÍ. Dada la premura para la presentación de este escrito no he podido rehacerlo después de recibir la comunicación entregada en la noche del día dos, pero doy por retirado cuanto se refiere a dicho escrito de primero de diciembre. SUPLICO al Juzgado tenga por hecha la anterior manifestación.

Castellón a cinco de diciembre de 1939

VIVA FRANCO

VIVA ESPAÑA !

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña, Caja 10074. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

ESCRITO DE DEFENSA PRESENTADO POR FERNANDO GASSET LACASAÑA
EL 7 DE DICIEMBRE DE 1939

AL JUZGADO PROVINCIAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Fernando Gasset Lacasaña, Abogado, viudo, vecino de Castellón, habitante accidentalmente en la calle de Ximénez nº 16 bajo, al Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, respetuosamente acudo exponiendo: Que el pasado día cinco después de haber sido presentado el escrito ordenado por el Juzgado a quien me dirijo, relacionando mis bienes y deudas, se me enseñó el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiente al día dos del actual mes, que inserta un edicto de su Señoría, haciendo saber que estaba instruyendo expediente de responsabilidades políticas contra mí, como consecuencia de sentencia dictada, y que deben prestar declaración sobre la conducta política y social del inculpado cuantos puedan hacerlo, sobre hechos anteriores y posteriores al Levantamiento Nacional, bien ante el propio Sr. Juez, o ante otros juzgados.

Tal orden podría producirme daños si algunos enemigos políticos, como ocurrió en el sumario, quisieron prevalerse de secreto para hacer en contra mía imputaciones falsas. Ello me mueve a acudir al Juzgado, cuyo amor a la Justicia es bien notorio, pidiendo que admita a aquellos testigos que puedan deponer sobre mi conducta llamándoles a declarar, lo que no es probable hagan sin este requerimiento, porque viviendo la mayoría de ellos en Madrid o Valencia, no hay probabilidades de que lleguen a saber lo que dice el Boletín de Castellón, máxime si se tiene en cuenta la posición de las personas que estimo deben citarse.

Estoy condenado, por una fatalidad y me considero no solo inocente, sino digno de estima por la España Nacional, y a pesar de ello no he exhalado una sola queja ni he proferido un juicio desfavorable contra nadie, lo cual no debe ser óbice para que yo aspire a reivindicar mi honor, esperando para hacerlo que se dicten disposiciones que regulen los recursos de revisión.

En tanto esto llega es más que un derecho un deber presentar todas aquellas pruebas que pueda aclarar mi actuación explicando los motivos que me impidieron hacerlo antes. El veintiuno de septiembre del pasado año 1938 fui detenido en Fuenterrabía, cuando me disponía a ir a Burgos para presentarme al Gobierno, después de haber hecho un largo recorrido desde Valencia a Alicante, donde tomé un avión que me condujo a Tolosa de Francia y de allí pasé a Biarritz, entrando en España después de haberme presentado a los representantes del Generalísimo que me autorizaron para ello, de lo que es prueba evidente el vale que se me entregó para cobrar las pesetas equivalentes a las que llevaba, debía cobrarlo en Burgos.

En diez y ocho de julio de de 1936, estaba de vacaciones en Benasal, atendiendo a mi salud y allí empecé a oír rumores de lo que ocurría en España y después de cerciorarme salí para Madrid el día ocho de agosto llegando el diez, conviniendo con los

compañeros presentar la renuncia de nuestros cargos y admitida que fue, cesé en el desempeño de mis funciones de Presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales. A partir de aquel momento se me infirieron por los rojos toda clase de desagrazos de todos órdenes. En Madrid se me detuvo por la cuadrilla que mandaba García Atadell y se me mantuvo en prisión atenuada más de cuatro meses, gracias a que unos Sres. médicos que informaron que por mi edad y mala salud no podía estar en un calabozo. En Castellón se me quitaron todos los bienes, incluso los de mis hijas; entraron en mi casa, en la que nací y viví siempre, despachando a toda mi familia (único caso ocurrido en Castellón), y se llevaron todos mis muebles, ropas, papeles, libros y documentos propios y extraños. Por si todo ello no fuera bastante, me prohibieron ejercer la abogacía, a pesar de que no la ejercía y me exigieron cien mil y doscientas cincuenta mil pesetas y como no las tenía tuvieron que firmar mi apoderado y mi familia letras por ciento setenta y siete mil pesetas y no las restantes porque los Bancos se negaron a admitirlas. Se arrancaron árboles de una finca rústica y se maltrató mi casa. Fundamento de todo ello era considerarme como enemigo de los mismos.

Seguí viviendo en Madrid gracias a los auxilios de mi familia, hasta mayo de 1937 que pude trasladarme a Valencia y en septiembre de 1938 pude lograr llegar por Francia a la España Liberada.

Detenido en Fuenterrabía llegué a Castellón al siguiente día y fui encarcelado comenzando el dignísimo Juez D. Antonio López Cancio mi proceso dejándome en prisión atenuada. Presenté pruebas documentales y en los primeros días de noviembre un escrito con otras de igual índole y larga lista de testigos, toda ella pertinente, ordenándose su práctica, haciéndose así de una parte de ella pero no de todas. No sé si por traslado de Sr. López Cancio o por otro motivo el día doce de marzo del actual año se me llamó a la Auditoría haciéndome saber que el quince se celebraría juicio y se quedó sin practicar una buena parte de la prueba, sin que yo sepa quiénes fueron los testigos no llamados a declarar. Y esta es la primera parte de la deficiencia que yo debo hacer observar para suplicar al Juzgado de Responsabilidades Políticas que recabe bien la unión en cuerda floja de aquel sumario, o que se me autorice para examinarlo y pedir aquella parte de pruebas que no se practicó. La segunda deficiencia a que he de referirme es que habiéndose celebrado el juicio el día quince de marzo del actual año estaba Madrid en Valencia en poder de los rojos y en ellas la mayor parte de los testigos que conmigo habían convivido y podían testimoniar mi conducta. ¿Podía yo citarlos como testigos? A más de que no hubieran podido venir, sólo indicar sus nombres podía ser una sentencia de muerte contra ellos, pues cualquier espía que se hubiera enterado podía haber motivado un proceso de horribles consecuencias. Quise ser y fui caballero, y de ello no estoy arrepentido aunque pudiera con la cita haber disminuido mi responsabilidad.

Fui a la calle el veintiocho de marzo. Por viejo y enfermo me trasladaron al Santo Hospital Provincial en donde pude mejorar la salud desde el veintitrés de junio por orden del Exmo. Sr. Ministro de Justicia y el último día veinticuatro o sea el de noviembre se me autorizó para estar en mi domicilio, que es el de una de mis hijas, pro el Exmo. Sr. Jefe del Estado que a la vez es el Jefe del Gobierno, Generalísimo Franco, hasta el cumplimiento de mi condena y quiero aprovechar el primer momento que se me presenta para manifestar que debo a ambos el resto de mi vida y con ella mi eterna gratitud.

Explicados los motivos puedo proponer al Juzgado la prueba que estimo pertinente en justificación de mi conducta política y social antes y después del Movimiento iniciado el 18 de julio de 1936. Y citando los nombres y a continuación los extremos que deben declarar aligeraremos el trabajo, no sin antes expresar que ninguno de ellos es pariente, amigo íntimo ni dependiente, a pesar de lo cual todos deberán deponer sobre las generales de la Ley.

D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER, Decano del Colegio de Abogados de Valencia y ex vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, en representación de los Colegios de Abogados. Vive en Valencia, calle de Colón número 56.
Preguntados.

- A) Diga el testigo si es cierto que fue vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales siendo Presidente Fernando Gasset Lacasaña, con el que guardó buenas relaciones por estimar que era correcta su conducta, sin que tuviera noticia que desde diciembre de 1934 en que fue elegido para dicho cargo el Gasset hiciera política.
- B) Que asistió el testigo en Roma a la boda de un hijo del ex rey de España Alfonso XIII y como le preguntara quién era su Presidente contestó dándole los apellidos del Sr. Gasset y el ex rey le encaró que lo saludara expresándole su estimación, añadiendo que aún cuando republicano toda su vida, se había conducido caballeramente sin obrar fuera de lo que era el cumplimiento de sus deberes; lo que refirió al Gasset y éste le dio las gracias rogándole transmitiera su agradecimiento a D. Alfonso XIII.

EXMO. SR. CONDE DE ROMANONES, Ex Presidente del Consejo de Ministros y de las Cortes. Habitante del Paseo de la Castellana en Madrid.

A) Si el testigo es uno de los más antiguos Diputados a Cortes de España como lo es D. Fernando Gasset Lacasaña, que lo fue en 1898 y por ello sabe que este Sr., militando en el campo republicano a diferencia del dicente, que era monárquico, siempre de carácter templado y conservador, sin tomar parte en alborotos ni pronunciar frases malsonantes, no haciéndose merecedor de castigos ni advertencias, así en las cortes como fuera de ellas, por lo que no tuvo ningún inconveniente en avalarlo para entrar en España.

EXMA. SRA. MARQUESA DE DOS AGUAS y sus hijas habitante en Valencia en su casa palacio, próxima a la calle de librerías.

A) Diga la testigo ser cierto que en los años mil novecientos treinta y siete y mil novecientos treinta y ocho vivió en Valencia en el tercer piso de la calle de Samaniego nº 7 en cuyo piso principal habitó Fernando Gasset Lacasaña, estando ambos en igual condición de perseguidos y escondidos, tenían frecuentes y casi diarias conversaciones respecto a la situación política y a la guerra sabiendo por ello que el Gasset oía diariamente Radio Nacional de España y otras de carácter nacional, que después refería a la dicente y a otros amigos y parientes dando a todos alientos en espera de una próxima y feliz terminación a favor de los Nacionales.

D. LUIS SOLER, militar retirado y su esposa D^a MARÍA LÓPEZ, habitante en la calle de Samaniego nº 7 tercer piso, Valencia.

A) Diga el testigo o la testiga que el D. Luis estuvo largo tiempo encarcelado saliendo después conducido para ser fusilado, llegando al campo destinado al efecto, procediendo los rojos a disparar, salvándose el D. Luis sin duda por un milagro, escapando a campo traviesa cuando se disponían a darle el tiro de gracia.

B) Que por la circunstancia de vivir en el piso principal de la misma casa, Fernando Gasset Lacasaña se veían a diario comentando las persecuciones de que eran víctimas oyendo ambo a diario Radio Salamanca y otras nacionales, comentándolas, facilitando noticias a cuantos las pedían y comunicando a todos sus impresiones, anhelos y esperanzas siendo entusiastas del triunfo del Generalísimo Franco.

ILMO. SR. D. LUIS GARCÍA, ingeniero jefe de minas jubilado y su hija FILOMENA GARCÍA, dueña de un gabinete fotográfico, ambos vecinos de Valencia y habitantes en la Plaza de las Moscas con fachada a la calle de San Esteban.

A) Si conocieron en Valencia a D. Fernando Gasset Lacasaña que habitaba en la calle de Samaniego nº 7 Pral., cuya vivienda visitaban con frecuencia por ser amigos del dueño D. Joaquín Vicente y con este motivo hablaban casi a diario comunicándose las noticias que adquirían respecto a la guerra por radio terceras personas, celebrándolas y comentándolas, pudiendo por ello convencerse de que el Gasset era un perfecto Nacional deseoso del triunfo del Caudillo Franco.

D. ENRIQUE LLOVET, ex banquero, vecino de Valencia y habitante en la calle que da de frente al río cuyo número desconozco, pero está situada a la derecha de la desembocadura de la calle de Vicente Dualde.

A) La misma pregunta que los anteriores.

D. JULIÁN BENEDITO VIDÓ, ayudante de Obras Públicas jubilado y su esposa D^a RAMONA FABREGAT, Maestra nacinal, vecinos de Valencia, habitantes en la calle de la Libertad nº 5 bajos.

A) Si han residido muchos años en Castellón, ejerciendo cargos públicos, entre ellos el de concejales por nombramiento del Gobierno del General Primo de Rivera y por tales motivos han tratado con frecuencia a Fernando Gasset Lacasaña, pudiendo testimoniar que en todo tiempo dicho Sr. ha sido republicano pero conservador en ideas y carácter, habiendo sido respetuoso para con todos, sin herir ningún sentimiento ni causar daño a personas ni cosas, estimándose como una garantía para la ciudad.

B) Que con posterioridad han seguido tratándole en Madrid y Valencia, antes y después del 18 de julio de 1936, sin haber cambiado su modo de ser, pero habiéndose apartado de toda actividad política cuando fue nombrado Presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, cuyo cargo renunció para evitar todo contacto con el Frente Popular, habiéndose seguido igual conducta durante su estancia en Valencia en 1937 y 1938 comentando diariamente toda clase de noticias a favor del Generalísimo Franco.

D. FÉLIX PEIRÓ, funcionario jubilado de Gobernación, su esposa D^a ANGELINA y su hija D^a VIRGILIA PEIRÓ, vecinos todos de Madrid y habitantes en la calle de Calderón de la Barca nº 8

A) Conoce desde hace muchos años a Fernando Gasset Lacasaña por haber sido el Sr. Peiró hace más de veinticinco secretario del Gobierno Civil de Castellón, de donde pasó

con igual cargo a Valencia y siendo destinado al Ministerio de la Gobernación, en el que desempeñó con todos los gobiernos que se sucedían la Jefatura de la sección de política, hasta que el Frente Popular le exigió la dimisión y no queriendo presentarla lo destinaron a un cargo subalterno de la secretaría del Gobierno Civil de Cáceres, por lo que hubo de jubilarse.

B) Durante todo el tiempo a que se refiere la anterior pregunta los dicentes han considerado al Gasset como un perfecto caballero, respetuoso con todas las ideas, personas y cosas, sin dañar a nadie ni dar motivo a las Autoridades para ningún castigo.

C) Que últimamente viviendo el Gasset largas temporadas en Madrid, por desempeñar desde 1934 cargos en el Tribunal de Garantías Constitucionales, hasta ser designado Presidente por las Cortes que acaudillaban los Sres. Gil Robles y Lerroux, se separó en un todo de la política, renunciando al cargo, al comenzar el Glorioso Movimiento Nacional, y a todos cuantos le trataron, manifestó su adhesión al Generalísimo Franco y al partido Nacional.

D. CARLOS OCHOA, dueño del Hotel Asturias y D. FERNANDO LLANO, conserje del mismo, vecinos de Madrid y habitantes de dicho Hotel, carrera de San Jerónimo y D. JOSÉ LATRE, funcionario de Hacienda, vecino de Zaragoza y habitante en la calle del Coso nº 79.

A) Que por haber vivido muchos años Fernando Gasset Lacasaña en el Hotel Asturias los que vivíamos en él como dueños dependientes o huéspedes conocíamos sus ideas y modo de ser, estando convencidos de que fue republicano de buena fe, incapaz de molestar ni perjudicar a nadie, respetando todas las ideas y sentimientos, así como las personas y las cosas, sin promover ningún disturbio ni tener ningún punto de contacto con el Frente Popular, viviendo alejado de la política desde que entró a formar parte del Tribunal de Garantías Constitucionales.

B) Que después de haber renunciado a su cargo de Presidente se lo llevó detenido García Atadell y algunos secuaces volviendo al Hotel en concepto de prisión atenuada, teniendo un agente que le custodiaba pagando la pensión del agente el propio Gasset.

C) Que a pesar de la vigilancia del agente el Gasset procuraba oír la Radio Nacional en otras habitaciones y cuando no podía conseguirlo preguntaba con gran interés a los que habían escuchado o saliendo de casa que le contaran lo que sabían, dando a conocer sus sentimientos a favor del Generalísimo Franco y del Partido nacional.

D. JOSÉ CLARA PIÑOL, médico, ex inspector de sanidad, vecino de Castellón habitante en la calle del medio frente al callejón de la cárcel; D. RAMÓN ROIG MORELLÓ, abogado de la misma vecindad habitante en la calle Mayor nº , D. SEVERINO RAMOS NEBOT y D. SALVADOR MASIP PELLICER, los dos últimos del comercio y habitantes respectivamente en las calles de En medio y Colón nº y , también vecinos de esta ciudad.

A) Si son conocedores de la conducta de Fernando Gasset Lacasaña por razón de su vecindad y lo han estimado siempre como persona de orden sin que haya motivado por su conducta procesos, multas, detenciones u otros castigos.

B) Que es notorio que mucho antes del 18 de julio de 1936 por haber entrado a formar parte del Tribunal de Garantías Constitucionales se separó en absoluto de la política.

MOSSEN JAIME SAGOLS SALES, sacerdote encargado del Santo Hospital Provincial de todo lo referente a Religión y Culto, como Capellán del Establecimiento en el que vive.

A) Que desde el 23 de junio de este año en que entró en el Establecimiento Fernando Gasset Lacasaña, conducido desde la cárcel hasta el 24 de noviembre último que salió para extinguir su condena en su propio domicilio, ha tratado con frecuencia al citado Sr. que se ha comportado correctamente en todos los aspectos religiosos, moral y social, sin haber merecido ninguna corrección ni haberse ocupado para nada de política, mereciendo por ello su aprobación y estimación por lo que ha hecho en el tiempo citado, y por lo que ha podido hacer antes, cree que ha estado al lado del Generalísimo Franco y no de los rojos.

EXMAS. SEÑORAS MARQUESA DE SAN MIGUEL Y CONDESA DE SIERRA CLARA, vecinas de Madrid, habitantes de la calle Marqués Riscal nº 10.

A) Que desde mucho antes del Glorioso Alzamiento comenzaron a tratar como amigo a Fernando Gasset Lacasaña, pudiendo apreciar que aunque republicano era por su condición personal y temperamento de carácter sosegado y conservador y que cuando entró a formar parte del Tribunal de Garantías Constitucionales se separó en absoluto de la política.

B) Que cuando se acercaban los días luctuosos de julio de 1936, la Sra. Marquesa decidió irse a Biarritz (Francia) en donde tiene una villa y aconsejó al Sr. Gasset que hiciera lo propio y éste contestó que no podía hacerlo sin renunciar al cargo de Presidente pues en otro caso podría creerse que huía por temor a castigos por no haber cumplido sus obligaciones y la Sra. Condesa no se fue por tener a sus hijos en colegios militares, habiendo uno perdido la vida y resultado el otro con heridas graves.

Y aquí acabo por no molestar más al Juzgado, pues si hubiera de decir cuanto pienso y siento no concluiría jamás.

SUPPLICANDO al Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, tenga por presentado este escrito y accediendo a lo que en él se pretende, por justicia y equidad tomé declaración a todos aquellos testigos que no fueron examinados en el sumario a pesar de haber sido propuestos y admitida la prueba y así mismo examine por medio de los correspondientes exhortos o mandamientos a los testigos antes señalados sobre los extremos que se acotan contribuyendo con ello a que resplandezca la verdad e ilumine en su día al Tribunal cuando deba dictar resolución de este expediente.

Castellón a siete de diciembre de 1939. Año de la Victoria.

VIVA ESPAÑA

VIVA FRANCO

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña, Caja 10074. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

ESCRITO DE DEFENSA DE FERNANDO GASSET LACASAÑA PRESENTADO
EL 18 DE ENERO DE 1940

AL TRIBUNAL REGIONAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

ANTONIO LLEDÓ SÁNCHEZ, Procurador de los Tribunales, en nombre de Don Fernando Gasset Lacasaña, cuya representación tengo acreditada, ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas comparezco en el expediente que contra el mismo se sigue y como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que habiéndome puesto de manifiesto en Secretaría el expediente que se sigue contra mi mandante, dentro del plazo que señala el artículo 55 de la vigente Ley de Responsabilidades Políticas formulo el escrito de DEFENSA que autoriza el propio artículo de la ley en su apartado d). Y al cumplir este trámite bien quisiera mi parte poderse reducir a un breve escrito de alegaciones de acuerdo con la rapidez, que parece que es la norma procesal de la nueva Ley de Responsabilidades Políticas. Pero necesariamente habremos de contrariar nuestro propósito de atenernos a la máxima corrección formal, para servir cumplidamente nuestra misión de defensa.

Encabeza este expediente el testimonio de una sentencia dictada por un Tribunal Militar, y aun teniendo muy presente el precepto contenido en el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades Políticas, resulta necesario a nuestra parte referirnos a los hechos prejuzgados para el que el digno Tribunal ante el que comparecemos, pueda formar un juicio completo y acertado, pues es evidente que la estrechez del Juicio sumarísimo no permitió razones ni pruebas sobre hechos que son la clave de la sentencia y que es necesario que el Tribunal conozca hoy para calibrar con justicia la responsabilidad de mi mandante.

De acuerdo con mi propósito, y aunque el artículo 1º de la Ley declara la responsabilidad política exigible a partir de 1º de octubre de 1934, interesa a mi parte que consten aquí todos los antecedentes políticos de mi representado, Don Fernando Gasset Lacasaña, aun aquellos que se refieren a épocas anteriores al tope que la Ley señala para la exigencia de responsabilidad. Lo haremos, no obstante, con la mayor concisión y dividiendo la materia en Hechos y Razones Legales, titulando cada apartado para mayor claridad:

HECHOS

Primero

Antecedentes antiguos

Don Fernando Gasset Lacasaña ha sido republicano toda su larga vida, como así lo ha reconocido en todo momento. No obstante, jamás ha pertenecido al Frente Popular, ni a

ninguno de los partidos que lo formaron. Por su ideología su conducta jamás fue extremista, ni tuvo contacto con comunistas ni anarquistas, ni promovió desorden, ni intervino directa ni indirectamente en los hechos vergonzosos que dieron motivo a los sucesos sangrientos anteriores al 18 de julio de 1936 ni a los posteriores. Figuró últimamente en el Partido Radical, y dentro de él a su derecha, sin que diera nunca motivo a correcciones o castigos. Durante su vida académica y después en Castellón su ciudad natal, fue siempre una garantía de orden, bien tratado por los claustros universitarios las Autoridades.

Fue concejal varias veces, Alcalde de la Capital y Diputado a Cortes siete veces. Al constituirse el Gobierno de Primo de Rivera en 1923 había sido nombrado hijo adoptivo de Castellón por iniciativa de los elementos más derechistas de la capital. Encontrándose enfermo y casi ciego de cataratas, se retiró casi en absoluto de la política, habiendo sido operado de dicha enfermedad en 1927. Fallecida su esposa D^a Amparo Bellver Martí, en 4 de junio de 1930, acentuó su retirada y fue operado de cataratas.

En esta situación estaba cuando se proclamó la República. Contra su deseo, los antiguos amigos le eligieron Diputado. Y poco después, mientras en toda España se quemaban Iglesias y conventos, en Castellón no tuvieron repercusión estos hechos gracias a la intervención de mi representado.

Segundo

TRIBUNAL DE GARANTÍAS

Cuando se anunciaba la disolución de las primeras Cortes de la República, se ofreció a mi patrocinado la representación de las provincias valencianas que debían elegir un vocal para el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo que aceptó, siendo elegido por unanimidad y sin contradictor, de cuyo cargo se posesionó el mismo día en que se disolvían las Cortes. El Tribunal le eligió Primer Vice-Presidente y ello motivo que mi representado disminuyera sus actividades políticas, sin tomar parte en actos públicos.

Promovidos los hechos revolucionarios de Asturias y Cataluña, presentó en Octubre de 1934 la renuncia de su cargo el Presidente Sr. Albornoz, fundándola en su incompatibilidad con el gobierno que en aquel entonces estaba al frente de los destinos de España. Inmediatamente salió de Castellón para Madrid el Sr. Gasset para encargarse interinamente de la Presidencia del Tribunal, demostrando con este hecho que no seguía la norma de conducta del Sr. Albornoz.

De cómo cambió la vida y dirección del Tribunal de Garantías pueden dar conocimiento los señores de la Derecha que lo formaban.

Para tomar posesión de la Presidencia interina, corrió mi representado toda clase de peligros porque estaba Madrid en la situación revolucionaria de todos bien conocida.

En 22 de diciembre de 1934 fue elegido en primera votación y por gran mayoría de votos mi representado, Presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, por las segundas Cortes Constitucionales, por las segundas Cortes de la República que acaudillaban los Sres. Lerroux y Gil Robles, juntamente con otros señores de la derecha

y del centro. Exigía la Ley constitutiva del Tribunal mayoría absoluta de votos emitidos y como los candidatos derrotados fueron cuatro pertenecientes a otros tantos partidos, mi representado tuvo que alcanzar para resultar elegido más votos que la suma de los cuatros candidatos derrotados que fueron muy cerca de doscientos.

De la conducta de mi representado en la Presidencia pueden informar todos los señores de derecha que lo formaron, seguro de que todos ellos se harán eco de la conducta ecuaníme del Sr. Gasset y de su completo apartamiento de la política, siguiendo la norma señalada por el propio Tribunal de guardar buenas relaciones con las Autoridades gubernativas, sin mezclarse nunca en la política. De mi representado podrá decirse que ni escribió ni habló de política y que guardando a aquellas Autoridades los respetos y conciliaciones debidas, jamás asistió a una fiesta o reunión que pudiera tener significación partidista.

En Mayo de 1935 se celebró bajo la Presidencia del Sr. Gasset el juicio oral y público de la causa instruida contra la Generalidad de Cataluña, celebrándose al final con tal motivo varias votaciones, en todas las que emitió voto condenatorio el Presidente, imponiéndose la misma penalidad pedida por el señor citado.

Con esto queda contestada la sospecha de que no fuera patriota el citado señor y añadido que a pesar de promesas alagadoras jamás quiso intervenir en el movimiento regionalista que vivía en Valencia con soplos de Cataluña.

Cuarto

RENUNCIA DEL CARGO

Las vacaciones veraniegas del tribunal empezaban el 10 de julio de cada año para concluir en igual día de septiembre. Por ello el 10 de julio de 1936 salió de Madrid para Castellón el Sr. Gasset y acompañó hasta Valencia a la familia Chafer Chaveli, muerta casi en su totalidad por Dios y por la Patria muy pocos días después.

Permaneció en Castellón tres días para recoger papeles y ver a la familia siguiendo hasta Benasal, cuyas aguas tenía recomendada mi representado para sus enfermedades del riñón y vejiga. Algunos días después empezaron a llegar noticias muy incompletas porque radio y prensa estaban intervenidas por el Gobierno y las particulares llegaban muy incompletas porque el citado pueblo está a 80 kilómetros de la Capital. Procuró mi representado oír Radio Sevilla, con dificultades y peligros, porque los representantes del Frente Popular lo perseguían sistemáticamente. Al enterarse de que los hechos revestían gravedad se trasladó a Madrid el día 8 de agosto llegando el 10 a pesar de que se estaba dentro del periodo de vacaciones, en el que no se reúne el Tribunal, sino en las pocas circunstancias imprevistas. Convocó a los compañeros que estaban en Madrid y que no llegaban a formar la mayoría y se planteó el problema de renunciar los cargos, conviniendo en ello todos y redactándose el escrito que Presidente y Secretario presentaron al Presidente del Consejo de Ministros. De la derecha sólo concurrió además del Sr. Gasset, Don Carlos Martín Álvarez ex gobernador de Madrid en tiempo de la Dictadura y el Sr. Alcón, Magistrado jubilado. El Sr. Gasset renunció a pesar de haber sido su elección por 10 años, durante cuyo plazo no podía separarle ni siquiera las Cortes. El Gobierno admitió creo, que el 26 de agosto, la renuncia a todos los de Derecha, a los renunciantes y a los ausentes, y a ninguno de izquierdas, propietarios o

suplentes, con la sola excepción del Presidente por no creerse facultado por la Ley y dio cuenta de la renuncia a la Diputación permanente de las Cortes, que la admitió dos días después, o sea, el 28.

De los hechos referidos ahora y antes habla la Gaceta y no acompaño por ello ningún documento, debiendo solo advertir que en la sentencia condenatoria del Sr. Gasset, se señala el 26 de septiembre, confundiendo la renuncia, con la notificación, y es de advertir que tan luego tuvo conocimiento el Sr. Gasset de la admisión, abandonó su desempeño nominal del cargo, dejando la casa y despidiéndose del personal, no habiéndolo hecho antes por que ello hubiera sido cometer un delito.

En la sentencia se pone en duda el motivo de la renuncia de mi representado, no diciendo si ello fue a favor o en contra del Gobierno de la República.

Permítaseme un ligero comentario, breve porque el tiempo apremia. Si sustituyó al Sr. Albornoz que se declaró incompatible con el Gobierno que actuó contra la sublevación de Asturias, fue por que no participaba de igual opinión. Si actuó en la Presidencia del Tribunal que juzgó la Generalidad de Cataluña, es porque estimó justo el proceso. Si renunció al cargo bien retribuido que ostentaba sin ninguna necesidad de hacerlo y con el peligro de ser después perseguido, bien claro está que fue por no hacerse solidario con el Gobierno de la República. Y si se le admitió la renuncia como a los de derecha, es indudable que como de derecha se le considera y por consiguiente no cabe la duda respecto a la significación de la renuncia. Y si la renuncia fue como la señal de las persecuciones que después sufrió, no cabe ni presumir que ella fuera motivo de agravio para los Nacionales y de éstas persecuciones nos ocuparemos en el siguiente hecho.

Quinto

PERSECUCIONES

Como presumía mi representado, la admisión de su renuncia fue la señal de ataque contra su persona, las de su familia y sus bienes.

Continuó en Madrid porque todos le aconsejaron que no fuera a Castellón, más que por los castellonenses porque siendo dicha provincia inmediata a Cataluña, se habían corrido a ella los extremistas de todas clases. En Madrid continuó hasta Mayo de 1937 que aprovechando la evacuación fue a Valencia, en cuya Ciudad continuó hasta septiembre de 1938 para marchar a Francia y seguidamente entrar en la España Nacional.

En Madrid fue detenido por la cuadrilla de García Atadell que lo llevó a la Dirección de Seguridad, en la que quisieron encerrarle en un calabozo. Alegó el Sr. Gasset que no había cometido ningún delito y que además su edad y las condiciones de su vista le hacían imposible la vida en un encierro, y quiso que le reconocieran los médicos, lo que logró al fin , y en consecuencia transcurridas 28 horas le enviaron al Hotel con la prevención de quedar en prisión atenuada y con un guardia que hacía la vida en el propio Hotel de Asturias, en habitación contigua a la que ocupaban los padres de Don José Calvo Sotelo. En estas condiciones estuvo cuatro meses hasta que el guardia tuvo que prestar otro servicio y sin levantarle la prisión pudo marchar a Valencia.

En tanto en Castellón eran motivo su familia y propiedades de toda clase de persecuciones. Comenzaron los del Frente Popular ocupando todas sus fincas y declarando la Junta de Incautaciones presidida por el Delegado de Hacienda que mi representado era fascista y acreedor por tanto a que se le dejara sin nada, haciendo extensiva la ocupación a las fincas de sus familiares y el Sr. Gasset no quiso reclamar por no deber a los del Frente ni siquiera como favor de justicia. En la masía semi-abandonada se arrancaron 333 almendros en plena producción y de buena calidad. Con amenazas de muerte se exigieron a la familia, además de pequeñas cantidades, otras 100.000 y 250.000 pesetas, y no teniendo dinero tuvieron que alcanzarse las primeras del Banco de Castellón, y las últimas, del mismo y de la Sucursal del Banco de España y Español de Crédito, pero estas últimas solo en proporción de 25.000 pesetas cada uno, dando un total de 175.000 pesetas que con intereses y gastos ascienden en la actualidad a una cantidad que oscila entre 300.000 y 400.000 pesetas. A un hijo político, José Morelló, solo por serlo se le exigieron 50.000 pesetas que hubo de pagar con dinero del Banco de Castellón en igual forma de letras y siguen debiéndose. Al Sr. Gasset, Morelló y otro hijo político, Alfonso Gil, se les prohibió el ejercicio de la abogacía, fundándose en que por ser enemigos del Régimen no podían aplicar las leyes. El 23 de septiembre del mismo año 1936 se cercó la casa en la que había nacido el Sr. Gasset en 1861 y en la que vivían todos los familiares del citado señor, y penetraron en ella armados individuos del P.O.U.M. dándoles a todos el plazo de 48 horas para que abandonaran la casa, lo que tuvieron que efectuar con grandes dificultades. A los de la familia se les permitió sacar lo suyo, estilográficas y algún objeto de valía, pero a mi representado se le ocuparon todos los muebles, ropas, papeles y libros, quemándose los papeles propios o ajenos y salvándose por la intervención de alguna persona amante de la cultura los libros; igual suerte corrieron los papeles y utensilios del despacho de Don José Morelló.

A esta triste condición que quedó reducido mi representado que tuvo que vivir durante todo el tiempo de su ausencia del amor de sus hijos y de su misericordia.

El Sr. Gasset no cambió por ello su línea de conducta, escuchando de continuo la radio, manteniendo a cuantas personas estaban cerca de él en su fe y esperanza, no recurriendo a ninguno de los medios de que otros se valieron para salvar sus personas o bienes. Ni un carnet de agrupaciones izquierdistas, ni un puño en alto, ni un padrino, ni la asistencia a una manifestación o espectáculo se le ha podido imputar. Se salvó gracias a su tranquilidad y a permanecer si no oculto cuando menos, escondido.

Sexto

VUELTA A CASTELLÓN

Al tomarse Castellón por los nacionales en Junio de 1938, concibió mi representado el propósito de reunirse con su familia, creyendo encontrar la paz y seguridad de que había carecido durante dos años. Al efecto, marchó de Valencia a Alicante por carretera y en esta Ciudad pudo tomar pasaje en un avión de Compañía francesa, llegando a Tolosa de Francia, de donde pasó a Biarritz, presentándose a los representantes del Generalísimo a los que dio cuenta de su deseo de entrar en España, que le fue otorgado después de consultar los antecedentes de que disponían. Por el puente Internacional llegó a Fuenterrabía, se presentó a la autoridad militar, y durante algunas horas se le concedieron toda clase de facilidades. Poco después estas se convirtieron en dificultades, pudiendo observar que las oponía algún enemigo escondido o ausente.

Pensaba trasladarse a Burgos para presentarse a las autoridades y al efecto había pedido para dicha Ciudad el documento justificativo de la pequeña cantidad que debía entregársele. Estimaba que su primer deber era presentarse al Generalísimo y a su Ministro de Gobernación, y al efecto, y por su mal estado de su vista, telegrafió a su familia para que acudieran para acompañarle.

En Francia permaneció cuatro días y otros tantos en Fuenterrabía viéndose sorprendido el día 21 por un señor Oficial del Ejército que le notificó su detención, para llevárselo a Castellón.

A dicha Ciudad llegó el 22, siendo metido en la Cárcel, incomunicado. Acudió el Juez Militar Sr. López Cancio, que examinó la documentación de los hechos referidos en los anteriores números, le tomó declaración, se convenció de su inocencia y el 28 ó 29 del propio mes de Septiembre lo dejó ir a casa de su familia en prisión atenuada.

Siguió el proceso y en los primeros días de Noviembre presentó al Juzgado gran número de documentos justificativos de su posición política y de sus persecuciones, pidiendo a la par declaraciones testificales e informe pericial. El Sr. Juez, en resolución del 5 de Noviembre de 1938 o día muy próximo, unió los documentos a los autos, declaró pertinentes las pruebas propuestas y ordenó su ejecución, tomándose declaración como a una mitad de los testigos.

Próxima la toma de Madrid, el Sr. López Cancio salió para dicha población, en donde debía desempeñar sin duda algún cargo, interrumpiéndose así la marcha ordenada del proceso, y el día 12 de Marzo de 1939 fue llamado a Auditoría mi representado en la que se le hicieron conocer algunos cargos que se le hacían, notificándole que el día 15 se celebraría el juicio oral y se le invitó a nombrar Abogado que le defendiera. Quiso hacerlo por sí mismo, o por mediación de un Letrado conocido y no se admitió, llegando así al juicio sin haberse practicado la mitad de las pruebas propuestas y admitidas. Por esto sin duda se dice en la sentencia que el sumario adolecía de vicios.

Además de la prueba propuesta y no practicada, el Sr. Gasset podía disponer de una prueba testifical numerosísima y formada por personas de gran distinción social que estaban en Valencia y Madrid y que habían convivido con dicho señor durante muchos meses; pero citar sus nombres cuando dichas poblaciones aún no habían sido liberadas era tan poco caballeresco como peligroso, porque cualquiera denuncia de lo que sabían y habían dicho era como una condena de muerte si la noticia la transmitía cualquier espía. Debía dicho señor callar y calló.

La sentencia fechada en 15 de Mayo impuso a mi representado la pena de seis años y un día de prisión mayor que comenzó a sufrir el 28 de dicho mes en la cárcel, en la que permaneció hasta el 23 de Junio en que se le trasladó al Santo Hospital Provincial por viejo (78 años) y enfermo, cumpliendo orden del Exmo. Sr. Ministro de Justicia.

Del Hospital salió el 24 de Noviembre de 1939, por orden expresa del Jefe del Estado y Generalísimo, Exmo. Sr. Don Francisco Franco, comunicada por el Juzgado Militar número uno. Bondadosísimo, el Jefe del Estado ordenaba que cumpliera el resto de la pena impuesta en su propio domicilio, como así lo está haciendo Don Fernando Gasset.

Séptimo

LA SENTENCIA

No tratamos de impugnarla ni comentarla siquiera. En su día ya lo haremos por el procedimiento legal oportuno. Pero como de ella ha de derivarse la responsabilidad y concretarse la sanción económica, es imprescindible que hagamos referencia aquí de las características, circunstancias y condiciones en que fue dictada la sentencia que encabeza este expediente, para que el Tribunal tenga en cuenta todo ello y conocedor de la sentencia y del clima que la produjo, pueda dictar un fallo justo.

La sentencia se dictó el 15 de marzo de 1939, es decir, en los primeros días de la liberación. En aquellos momentos extraordinariamente excitados aún en que la pasión estaba a flor de piel y en muchas ocasiones se traducía en un rigor que las últimas disposiciones del CAUDILLO tratan de enmendar. Mi representado ha hecho política durante casi medio siglo, actuando la mayor parte de este tiempo como Jefe Provincial, y por grande que haya sido su afán de hacer igual justicia a todos y premiar los servicios en la forma que puede hacerlo un partido de oposición, siempre hay disgustados y de ellos algunos malignos dispuestos a olvidar los preceptos cristianos de la caridad y el amor al prójimo. Prueba de que estos enemigos crearon un ambiente hostil alrededor del caso del Sr. Gasset, fueron las declaraciones sumariales y la denuncia que se formuló ante el Juez de Responsabilidades de que el Sr. Gasset trataba de malbaratar u ocultar sus bienes, lo cual originó el embargo practicado el día 22 de noviembre último por el Juez ordinario de Castellón, bastantes días antes de que el Juez Provincial de Responsabilidades Políticas lo comunicara.

La prueba que propuso en el sumario el procesado, mi mandante, fue admitida por resolución judicial de 5 de noviembre de 1938, aunque después no fue practicada, por lo que la propia sentencia habla de vicios de sumario.

Nosotros no hemos de insistir en ello porque hemos comenzado por decir que no tratamos de comentar la sentencia. Basta con que el Tribunal la lea detenidamente.

RAZONES LEGALES

Primera

RESPONSABILIDADES DEL PARTIDO RADICAL

La responsabilidad que puede incumbir a mi representado Don Fernando Gasset es por su actuación política. Como político ha sido toda su vida republicano y últimamente pertenecía al Partido Radical, aunque al grupo más moderado. De todas maneras es necesario hacer constar que el Partido Radical no está declarado fuera de la Ley. Es más, en 27 de junio de 1939 se publicó una disposición de carácter general, confirmatoria de otras anteriores en la que se hace clara distinción entre los republicanos radicales y los de los otros partidos. Así vemos que los hombres de los partidos republicanos centro-derecha (Radicales y Acción Popular) excepto sus jefes – Lerroux, Gil Robles, Lucía – no sólo no están perseguidos, sino que la mayoría desempeñan cargos destacados del Gobierno o de la Provincia. ¿Y por qué si los que fueron ministros del Gobierno Gil Robles-Lerroux gozan de plena libertad, el Sr. Gasset ha de

sufrir sanción de responsabilidades políticas por haber desempeñado el cargo de Presidente del Tribunal de Garantías siendo así que lo eligió la mayoría parlamentaria Gil Robles-Lerroux?

Segunda

RESPONSABILIDAD PERSONAL DE DON FERNANDO GASSET

No pudiendo caberle ninguna responsabilidad por haber pertenecido al Partido Radical, precisa estudiar su actuación personal, pues a la vista de ella y de lo que la sentencia se dice es como se podrá deducir la responsabilidad. Y al hacer un resumen de la actuación de Don Fernando Gasset en su larga vida, nos encontramos con estos hechos ciertos:

a) Conducta privada:

Que dicho señor siguió la carrera con gran aprovechamiento, obteniendo repetidos premios y el extraordinario de licenciatura, con la nota de sobresaliente en el Doctorado. Ejerció después la abogacía con aprovechamiento y consideración social durante cerca de medio siglo. Desempeñó importantísimos cargos, entre ellos y últimamente los del Tribunal de Garantías.

b) Conducta religiosa:

Que lejos de ser antirreligioso, como se le supone, Don Fernando Gasset cumplió siempre con todas las prácticas cristianas. Para acreditarlo se acompaña un certificado del Cura Arcipreste y Párroco de Castellón don Joaquín Balaguer Martinavarro, en el que se acredita que han sido católicos los dos matrimonios celebrados por mi poderdante, que han sido bautizados los nueve hijos habidos de estos matrimonios, que seis de ellos que casaron lo hicieron en matrimonio canónico, y que las dos esposas y sus tres hijos muertos en soltería fueron enterrados con Cruz Alzada y recibieron sepultura en cementerio católico (Documento nº 1).

Se acompaña también (documento nº 2) certificado librado por el Sr. Interventor de Fondos Municipales, en el que consta que el día 11 de junio de 1930 adquiría en propiedad mi mandante un nicho del cementerio católico de Castellón, para que sirviera de su sepultura junto a su esposa. Y esto lo hizo en vida, sin peligro inmediato de muerte, porque se estimaba como tal católico y sin preocuparle la opinión de sus partidarios.

Otro documento (nº 3) suscrito por Sor Tosa de Lima, Madre Superiora de las Siervas de Jesús, que consumen su vida en la cristiana ora de asistir a los enfermos, acredita que desde hace muchos años han concurrido al domicilio de mi representado, sin que hayan oído observar nada contrario a la moral ni a la religión.

Últimamente el Capellán del Santo Hospital Provincial de Castellón, Mossen Jaime sagols Sales, certifica (Documento nº 4) que durante la estancia de mi mandante en él ha observado una conducta moral y religiosa ejemplar, como cristiano y católico con gran edificación de los que le han tratado, por su conversación, asistencia a la Santa Misa, actos religiosos y frecuencia de

Sacramentos; no mezclándose en cuestiones políticas, pero mostrándose siempre partidario de la política que dirige el Generalísimo.

c) Conducta patriótica:

Como Jefe Provincial que fue mi mandante del Partido Republicano, atemperó su conducta siempre a un sentido auténtico de unidad Española y fervoroso patriotismo. Así, aunque desde hace muchos años se le venían haciendo proposiciones para regentar y fomentar la organización regionalista en la provincia, que fue por influencia de Cataluña prendió en Valencia y en Castellón, el Sr. Gasset se negó siempre a ello y su partido se consideró enemigo de este Movimiento separatista, encubierto de regionalismo, y defendido por destacados elementos, algunos llamados derechistas, que en la actualidad siguen campando con toda libertad y hasta ocupando altos cargos.

Durante su gestión en el Tribunal de Garantías Constitucionales, su conducta fue exacta, como pueden atestiguar todos los vocales de dicho Tribunal. Además, en la memoria de todos está el recuerdo de aquellas sesiones memorables en las que se vio el ruidoso proceso contra los Consejeros de la Generalidad de Cataluña por la sublevación de octubre, las cuales fueron presididas por Don Fernando Gasset, el cual votó el fallo condenatorio del Sr. Companys y los demás Consejeros de la Generalidad.

Por último, ahí está su actuación durante el Glorioso Movimiento Nacional: el día 10 de julio de 1936, en cuyo día comenzó la vacación veraniega del Tribunal, el Sr. Gasset se trasladó a Valencia acompañando a la familia Chafer y Chaveli, que murió después por Dios y por la Patria. Siguió hasta Castellón y tres días después subió a Benasal, cuyas aguas le son precisas para su salud; y algunos días después empezaron ya a llegar confusas noticias de Madrid desfiguradas por la censura y la radio. No obstante, burlando a los que querían prohibir que los ciudadanos se enteraran de la verdad, oía todos los días Radio Sevilla. Y al capacitarse de la gravedad de los hechos, sin detenerse ante los peligros, salió el día 8 de agosto para Madrid escapando antes de los malhechores de la “Desesperada” que fueron a buscarle. Llegó a Madrid reuniendo inmediatamente a los pocos Vocales del Tribunal que allí había y en dicha sesión se acordó la presentación de la dimisión colectiva, por sentirse incompatible con el Gobierno revolucionario, a pesar de que esta actitud era bien peligrosa. El Gobierno rojo aceptó la renuncia de los vocales derechistas, entre los que se encontraban Don Carlos Martín Álvarez y el Sr. Alcón, siendo mayoría los izquierdistas; se rechazó la renuncia de los vocales izquierdistas. Respecto de la presidencia, nada resolvió el Gobierno, pero sí la Diputación permanente de las Cortes, que la admitió el 28 de agosto, cesando inmediatamente sin esperar la comunicación el Tribunal, que fue un mes después. Téngase presente que el Sr. Gasset no necesitaba renunciar al cargo, pues estaba elegido por diez años y no podía ser separado de él ni aun por las Cortes, pero sintiéndose incompatible con el Gobierno rojo, afrontando todos los peligros que tal renuncia le creaban, sin dudarlo, renunció a un cargo bien retribuido y que le daba una seguridad personal plena por el fuero especial de

que gozaba y por la ayuda que hubiera supuesto para los rojos la permanencia en dicho cargo.

Por esto, en cuanto formuló su renuncia arreciaron las persecuciones contra mi representado . En Madrid, la cuadrilla de García Atadell le detuvo llevándole a la Dirección de Seguridad.

En tanto, en Castellón le ocupaban todas las fincas, despedían de la casa a sus familiares, robándole todos los muebles y ropas y la llamada Junta del Colegio de Abogados borraba de sus listas a dos hijos políticos de mi mandante. Las fincas rústicas le fueron igualmente asaltadas talándole de uno de los campos trescientos treinta y tres almendros en plena producción. Y a la vez los rojos de Castellón le exigían cien mil pesetas y después 250.000 pesetas con la amenaza de las pistolas. La primera cantidad tuvo que entregarla facilitándosela el Banco de Castellón; de las restantes solo pudo alcanzar 75.000 pesetas reunidas por tres Bancos, los cuales se negaron a darle mayor cantidad. Estas sumas con intereses y gastos hacen hoy ascender la deuda de mi poderdante a 300.000 pesetas. Al mismo tiempo, se perseguía con saña a toda la familia del Sr. Gasset exigiéndoles crecidísimas sumas mientras la prensa local le insultaba y la Junta presidida por el Delegado de Hacienda fundamentaba sus acuerdos expoliatorios en que Don Fernando Gasset “era fascista”.

En tal situación, permaneció mi poderdante en Madrid hasta mayo de 1937 detenido en el Hotel Asturias en donde ocupaba una habitación contigua a la de los padres del gran Calvo Sotelo.

Al liberar las tropas nacionales la ciudad de Castellón, don Fernando Gasset se apresuró a reunirse con su familia. Para ello, venciendo toda clase de dificultades marchó a Valencia y después a Alicante, y a pesar de su avanzada edad, en un avión se trasladó a Tolosa de Francia. Y seguidamente, sin dudarlo, ni entretenerse – como han hecho otros que ahora pasan como valerosos patriotas – corrió a incorporarse a la España Nacional, cuando la suerte de la guerra no estaba aún decidida, pero creyendo que así cumplía su deber de patriota. Antes, visitó a los representantes del Generalísimo que se mostraron conformes con su entrada en España. Era su propósito ir desde Fuenterrabía a Burgos para presentarse al Gobierno Nacional.

¿Dónde puede caber duda sobre el patriotismo de Don Fernando Gasset?

Tercera

PATRIMONIO ECONÓMICO DE DON FERNANDO GASSET

En el expediente constan a los folios 15,16,17,18 y 19 Oficios de la Alcaldía de Castellón, Guardia Civil, FET y de las JONS, Comisaría de Investigación y Banco de España, en los que se relacionan los distintos bienes que dicen son de la propiedad de Don Fernando Gasset. Todas estas relaciones están equivocadas y no digamos nada respecto a las valoraciones caprichosas que se hacen de los distintos bienes. Bastará decir que a una finca se la tas en un oficio en 4.000 pesetas y en otro en 400.000.

El propio Juez Provincial al informar dice: “Que según la Alcaldía Gasset es propietario de 4 fincas rústicas y 13 urbanas, según FET y Comisaría es propietario de una finca rústica con casa de campo valorada en 150.000 pesetas y cinco urbanas cuyo valor es de 680.000 pesetas. Ambas autoridades manifiestan que el inculcado posee así mismo un solar pero discrepan de su valoración, creyendo ser la más veraz la que la fija en 4.000 pesetas. Según la Guardia Civil es propietario de 4 fincas rústicas no valoradas y 4 urbanas, cuyo valor es de 1.050.000 pesetas. Manifiestan dichas autoridades que posee otras fincas de valor ignorado y cuentas corrientes en Banco de España, Exterior y Castellón”.

Está visto que los informes no nos aclaran nada.

Para saber la verdad bastaría con reproducir la relación que presentó mi mandante, pero como el Juez Provincial en su informe la tacha de “confusa y embrollada” tendremos que esforzarnos en aclararla.

Antes de ello, y como declaración de carácter general, hemos de decir que Don Fernando Gasset no es un hombre rico, ni mucho menos. La fantasía pueblerina de algunos hizo correr por Castellón y aún por fuera de la ciudad, que don Fernando Gasset poseía una gran fortuna, que la cifraban en tantos y cuantos millones. Pero por desgracia para él no es esto verdad. Después de toda una vida de constante trabajo y ahorro pudo recoger un modesto patrimonio que le ha sido mermado y casi deshecho por la horda roja. Tal vez la confusión está en que aparecen varias fincas cuya contribución figura a nombre de Don Fernando Gasset. No obstante, procuraremos aclararlo todo, ya que por fortuna, aunque el Registro de la Propiedad fue quemado, poseemos documentos bastantes para probar cuanto afirmamos.

Y para no extendernos excesivamente comentando e impugnando cada una de las relaciones partida por partida, nos limitaremos a relacionar los bienes rechazando todo lo que se oponga a nuestra relación.

- A) Bienes muebles: ninguno. Los rojos asaltaron la casa de mi representado la desbalijaron por completo, teniendo ahora que vivir en casa de una de sus hijas que le facilita todo lo necesario para la vida.
- B) Dinero: mi representado carece en absoluto de numerario. Al contrario adeuda importantes cantidades a distintos Bancos y particulares, que luego se mencionarán. No obstante, como se ha dicho que poseía cuentas corrientes en los Bancos de Castellón, acompañamos señalado con el nº 3, certificado expedido por el Banco Exterior de España, de Castellón, acreditativo de que no figura con cuenta abierta ni depósito alguno.
- C) Valores mobiliarios: seis acciones de “Unión Levantina” Sociedad de Seguros cuyo valor no está satisfecho más que en parte.
Una o dos acciones del Banco de Valencia, en igual situación sin que podamos precisar el desembolso por haberle sido robados los títulos.
Algunas obligaciones de la Deuda Municipal de Castellón, que poseía mi mandante las transmitió durante el periodo rojo para poder comer.
- D) Bienes inmuebles. Fincas urbanas: una casa señalada con el nº6 de la calle de José Antonio de Castellón, con puertas accesorias a la misma calle y a la del General Mola. No puede señalarse más valor que el que da la propia Hacienda Pública que fue el de 6.000 pesetas como riqueza imponible, pero ocupada el día

23 de septiembre de 1936 por los rojos fue destinada a diversas Oficinas y Almacenes que le perjudicaron en gran manera y últimamente en mayo de 1936 fue destruida en su mayor parte por haber sido alcanzada por una bomba de aviación. Al ordenar la Ley de 9 de septiembre último la reparación de las fincas dañadas acudió mi ponderante a la Junta correspondiente solicitando un préstamo de 62.420 pesetas 30 céntimos para su reparación y rebajando por consiguiente el valor de la casa, pero hasta la fecha no se ha contestado resolviendo nada sobre el particular.

Otra casa señalada con el nº 2 de la calle de Calvo Sotelo de Castellón. Fue ocupada en julio de 1936 por los rojos que establecieron en ella el Ateneo Racionalista y después la Junta Oficial de Incautaciones. Al liberarse Castellón por las tropas nacionales fue ocupada por Frente y Hospitales y al evacuar esta oficina, le sucedió O.J. de FET de las JONS, sin haber celebrado contrato alguno de arrendamiento y sin que satisfaga cantidad. Esta finca tiene asignada por la Hacienda la contribución correspondiente con líquido imponible de 3.600 pesetas, que aceptamos como valor ya que no contamos con medios ni tiempo para hacer una valoración por peritos. Esta finca sufrió un incendio al ocho del corriente mes de enero, cuyo siniestro le ha causado un daño tasado en 20.504 pesetas con 60 céntimos según el certificado del Arquitecto Don Francisco Maristany que se acompaña (Documento nº 6)

- E) Fincas rústicas: una masía situada en término municipal de Castellón partidoa de Benadresa o Pla de Moro, conocida vulgarmente por Masía de Gasset. Tiene una extensión aproximada de 38 jornales, en su mayor parte con cultivo de secano (algarrobos, almendros y olivos) y el resto naranjos con algún pequeño trozo de alfalfa y de aquellos algunos sin producción por ser pequeños. Aunque se señala la finca como una, fue adquirida en varios trozos, en diferentes escrituras. No podemos señalar ni aún globalmente la cantidad que se satisface por contribución por no poseer ningún recibo. Esta finca es de escaso valor, pues la mayor parte del agua que se emplea para el riego es comprada y por consiguiente encarece el cultivo. Los rojos se apoderaron inmediatamente de ella arrancando 333 almendros en plena producción plantados en unas 30 hanegadas. En la actualidad por no dejar inculta la finca se ha plantado trigo, cebada y patatas. Dentro de ella existen dos casas de labor figurando una como del Pla del Moro con una riqueza imponible de 211 pesetas y otra consignada como del Bovalar con una riqueza imponible de 70 pesetas. La finca en su totalidad tendrá un valor aproximado de 125.000 pesetas.
- F) Derechos: a mi representado Don Fernando Gasset le corresponden algunos derechos sobre ciertas fincas que son de sus hijas, todos los cuales se señalan en la escritura particular practicada a la muerte de su esposa Doña Amparo Bellver Martí, cuya escritura se acompaña (Documento nº 7). En dicho testimonio de la escritura particional se hacen constar algunos usufructos, pero debe consignarse aquí que ellos no representan renta alguna, por que en poder de los rojos las fincas, sin prestarles atención ni cuidado, teniendo que pagar ahora contribuciones y arbitrios y reparar todos los inmenso daños producidos por los marxistas directamente o por la guerra, el gasto que supone cualquier reparación supera al de los ingresos. De todas maneras tanto las fincas urbanas como las rústicas sometidas al usufructo vitalicio establecido por su esposa en su testamento desde el óbito de mencionada esposa, las poseen y cultivan sus propios hijos por haber hecho por su parte renuncia de hecho a favor de aquellos

del indicado usufructo, ya que por la avanzada edad de Don Fernando Gasset no podía ocuparse del cuidado y cultivo de las fincas.

En la relación presentada por mi ponderante, se incluye la propiedad de dos trigésimas partes de la agrupación o comunidad de bienes de Benasal, conocida por Hotel y Pabellones Fuente En Segures, que adquirió por compra a Doña Consuelo Montoliu Fenollosa con autorización de su esposo y por escritura pública autorizada por el Notario de Castellón, Don Lorenzo Martínez Arquero (Documento nº 8), añadiendo en dicha relación que estas partes carecían de valor positivo. La escritura que se presenta es la única justificación documental que existe, ya que el Registro de la Propiedad de Castellón fue incendiado por los rojos. En esta escritura el Notario calificó de cesión la adquisición de estas dos trigésimas partes.

Dicha cesión se hizo a Don Fernando Gasset sin pago de cantidad y por el contrario, se obligó la cesionaria a pagar la matriz de la escritura, la primera copia, los derechos reales y la inscripción en el registro de la Propiedad. Todo ello indica que cuanto esta señora cedía en tan pésimas condiciones económicas, es por que el negocio estaba quebrado y sobre él pesaban deudas de extraordinaria cuantía. Y Don Fernando Gasset admitió el contrato para evitar litigio a persona de su familia y amistad, que entraron en el negocio por su consejo y a los que no quería causarles daños.

No pueden precisarse las cargas que pesan sobre el negocio por la premura del tiempo con que este escrito tiene que formalizarse. Nótese sin embargo, que si en el penúltimo día del año 1935 el negocio estaba en las condiciones dichas la situación actual, después de la pasada guerra y de haberse apoderado los rojos de la finca destinándola a evacuados, cuartel y Hospital Militar, llevándose en su huída la mayor parte del mobiliario, la situación actual es de una finca totalmente perdida.

G) Deudas: en el Banco de Castellón según certificado que se acompaña (Documento nº 9), Don Fernando Gasset adeuda las siguientes cantidades: 900 pesetas en una letra; 199.075 pesetas, importe de seis letras; y 8,50 pesetas como saldo deudor de su cuenta corriente.

b) En el Banco Español de Crédito, Sucursal de Castellón, según certificado que se acompaña (Documento nº 10), mi mandante adeuda la cantidad de 25.000 pesetas.

c) Al Sindicato Agrícola “La Fertilizadora de Castellón” según acredita el certificado que acompaña (Documento nº 11), adeuda 3.471 pesetas correspondientes a las compras de simientes y materias fertilizantes, si bien según se desprende de dicho certificado, la referida suma la satisfizo el día 2 del corriente mes Don José Morelló del Pozo.

Los descubiertos que figuran en los Bancos obedecen a que en cuanto a mi mandante renunció a su cargo de Presidente del Tribunal de Garantías, exigieron los rojos a sus familiares multitud de desembolsos, entre los cuales con la máxima violencia les obligaron a entregar cien mil pesetas, exigiéndoles después doscientas cincuenta mil pesetas más, y como no tenía metálico para ello, tuvieron que firmar letras para su descuento en el Banco de Castellón por ciento dos mil pesetas y como los Bancos se negaron a facilitar la segunda suma de doscientas cincuenta mil pesetas, se entregaron tres cantidades de veinticinco mil pesetas cada una descontadas en el propio Banco y en las Sucursales del de España y Español de Crédito. Como a sus vencimientos se carecía de numerario, se tuvieron que renovar las letras unas veces pagando intereses y gastos y otras

añadiéndolas a las letras puestas en circulación. A Don Fernando Gasset, hijo de mi mandante le agotaron por el mismo motivo un crédito personal de 70.000 pesetas y posteriormente se han tenido que firmar otras letras para atender compromisos entre ellas una del Banco de Valencia para poder salir de esta Ciudad dominada por los rojos y llegar a Castellón liberado. También se firmaron otras letras para que algunos familiares de mi mandante se librasen de persecuciones de muerte. Así, el total de responsabilidades contraídas por estos conceptos excede de 300.000 pesetas.

- d) Contribuciones: mi representado adeuda las contribuciones de todas sus fincas que no ha podido satisfacer por falta de numerario. El montante de dicha deuda puede saberse solicitando certificado de la Oficina recaudatoria.
- e) Arbitrios municipales: también adeuda mi representado más de un millar de pesetas al Ayuntamiento de Castellón por este concepto, cuya cifra exacta puede igualmente saberse solicitando de la Alcaldía el certificado correspondiente.
- f) También adeuda a la Sociedad General de riegos administradora del pantano, una suma cuya cuantía ignora, por aguas suministradas para el riego de sus fincas.

Por el mismo concepto adeuda a la Sociedad de riegos “El Diluvio”, otra cantidad cuya cuantía ignora.

A la sociedad de Aguas Potables, adeuda también el suministro de los edificios de su propiedad.

H) Deudas familiares: por último, Don Fernando Gasset en la actualidad adeuda a todos sus hijos políticos cantidades de importancia que estos han tenido que aprontarle para su manutención, vestido, asistencia médica y demás necesidades de la vida, ya que en la actualidad carece de bienes.

- I) Documentos: se acompañan certificado de la administración de Propiedades y Contribución territorial de esta Provincia y del Sindicato de Policía Rural y de la Comunidad de Labradores de Castellón (Documentos números 12, 13 y 14), acreditativos de la valoración exacta que se asigna a distintas fincas y de la inscripción de una de ellas, todo ello para que sirva de prueba documental de las afirmaciones que se hacen en el cuerpo de este escrito.
- J) El artículo 1º y el 4º de la Ley de Responsabilidades Políticas declara la responsabilidad de las personas tanto jurídicas como físicas e individuales, es decir, que las sanciones inherentes a la responsabilidad no pueden de ninguna manera recaer más que en la persona y bienes del individuo a quien afecta la responsabilidad. Por lo tanto, es evidente que no puede extenderse la sanción a personas ni bienes que no sean el propio responsable.
En el caso presente, en el supuesto no probable, que el Tribunal decretara alguna sanción económica contra los bienes de Don Fernando Gasset, no podría afectar más que a los bienes de su exclusiva propiedad. No obstante, debe hacerse aquí la consideración de que dada la avanzada edad del inculpado cualquier sanción que se le impusiera más que al propio inculpado, afectaría a sus herederos, todos ellos de marcada significación derechista, con lo cual, la sanción lejos de ser eficaz perjudicaría intereses legítimos de personas a quienes no les incumbe ninguna responsabilidad.
- K) El artículo 5º de la propia Ley determina que están exentos de responsabilidades, entre otros, los que hubieran prestado servicios extraordinarios y los que hubieran hecho arrepentimiento público seguido de adhesión y colaboración al Movimiento

Nacional. Deja dicho artículo su estimación al prudente arbitrio del Tribunal y por ello creemos señalar el caso de Don Fernando Gasset que desempeñando el cargo de Presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, o sea, del más alto Tribunal de la Nación, en cuanto estalla el Movimiento interrumpe su vacación veraniega y a pesar de su avanzada edad se traslada desde Benasal a Madrid con toda clase de peligros y reuniendo al Tribunal de Garantías, plantea al Gobierno rojo la dimensión colectiva del Tribunal por estimarse incompatible con la actuación del nuevo Gobierno.

Entendemos que es un caso especialísimo que significa un servicio extraordinario prestado al Movimiento Nacional, puesto que en cuanto le es posible se traslada en avión a Francia e inmediatamente se presenta en la zona Nacional dispuesto a colaborar con el Gobierno de Burgos.

- L) El artículo 6º que al especificar las circunstancias atenuantes dice: “Sexta” y últimamente cualquiera otra circunstancia análoga a las anteriores”. Entre las anteriores está la segunda que dice: “Haber prestado servicios eficaces al Movimiento Nacional”.

Indudablemente si no fueran apreciadas por el Tribunal a favor de mi representado las circunstancias eximentes que se hagan en el apartado anterior, es indudable que habría de tenerse en cuenta, por lo menos, la circunstancia atenuante de haber prestado un servicio eficaz al Movimiento Nacional pues la Ley, con espíritu ampliamente humano, tiende a aminorar la responsabilidad en cuanto le sea posible, aun en aquellos que no están consignados de manera estricta pero previniendo su existencia, in extenso declara que se considerará como atenuante cualquiera otra circunstancia que sea análoga a las anteriores. Y esta relación de analogía la establecerá el Tribunal en su fallo.

- M) El párrafo segundo del artículo 13 de la propia Ley preceptúa que “las sanciones económicas se fijarán teniendo en cuenta no solo la gravedad de los hechos apreciados, sino principalmente la posición económica y social del responsable y las cargas familiares que legalmente esté obligado a sostener.

Este artículo no necesita de comentario, pues indudablemente el Tribunal tendrá en cuenta la precaria situación económica de Don Fernando Gasset y las múltiples cargas y obligaciones familiares que sobre él pesan a su avanzada edad.

- N) El artículo 14 de la misma Ley, que faculta a los Tribunales para autorizar que se haga efectiva la sanción económica mediante la concesión de plazos que no podrá exceder de cuatro años, siempre que el inculcado lo solicite en el plazo señalado.

- O) El artículo 52 de la misma Ley después de ordenar que “ El Juez Instructor con la mayor actividad practicará todas las pruebas encaminadas a comprobar los hechos que en la denuncia se atribuyan al inculcado, dice imperativamente: “Así como también practicará las de descargo propuestas por éste o por sus herederos, en su caso, salvo que rechace en resolución razonada, por considerar inútiles o improcedentes.

Pues bien, mi representado al presentar la relación de bienes ofreció primero y presentó después con un escrito al Juez Provincial la escritura de partición de bienes de su esposa para demostrar cumplidamente los bienes que quedaban como de su propiedad. Y este documento probatorio, único y que existe en este caso, por el que el Registro de la Propiedad de Castellón fue incendiado por los rojos, no se aceptó por el Juez y por ello se acompaña a este escrito de defensa.

Se ha de hacer constar, que en el expediente no se ha practicado ninguna prueba, pues solo se han unido al mismo los certificados librados por distintas autoridades

respecto a los bienes de Don Fernando Gasset, y que por cierto resultan bien contradictorios.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO

Al Tribunal de Responsabilidades Políticas, que teniendo por presentado este escrito con los documentos que al mismo se acompañan, se sirva admitir todo ello, y teniendo por hechas las manifestaciones que contiene en trámite de formalización del escrito de defensa, previo recibimiento a prueba en su día, dictar sentencia declarando no haber lugar a la deducción de responsabilidad política con sanción económica contra Don Fernando Gasset Lacasaña, a quien deberá absolverse libremente o en todo caso, que por virtud de la sentencia dictada contra el mismo por el Juzgado Militar lo impidiera, considerar leve esta responsabilidad, pues así procede en justicia.

OTROSÍ. Digo: que interesando a mi parte demostrar cuanto en el escrito se dice y no habiendo practicado el Juez Provincial prueba alguna en el expediente. Suplico al tribunal se sirva ordenar que en trámite de mejor proveer, se practiquen las pruebas que acompaño y propongo, así como cualquier otra que tienda a esclarecer debidamente los hechos.

Valencia a 18 de enero de 1940

Firmado por Martínez Sabater y otra ilegible

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña, Caja 10074. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

COPIA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS CONTRA FERNANDO GASSET LACASAÑA

DON MARIANO SAN JOSÉ MARTÍ SANZ, SECRETARIO DEL TRIBUNAL
REGIONAL DE RESPONSABILIDADES POLITICAS DE VALENCIA

CERTIFICO: que por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, según testimonio remitido a esta Tribunal Regional, se ha dictado la siguiente:

“Sentencia n° 164.- Señores: Excmo. Sr. Presidente Enrique Suñer.- Excmo. Sr. Vicepresidente Vocal, General Don Guillermo Kirkatrick.- Excmo. Sr. Vocal, Magistrado D. Juan de Hinojosa.- Excmo. Sr. Vocal, Consejero Nacional de FET D. José María Mazón.- En Madrid a veinte de junio de 1940.- Visto por este Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas el Recurso de Alzada interpuesto por Don Fernando Gasset Lacasaña, cuyas circunstancias constan en la resolución recurrida, contra sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia.- Dando por reproducido el Resultando de hechos probados que figura en dicha sentencia, testimoniada en este rollo, con la modificación de que el valor de los bienes que en usufructo corresponden al recurrente pueden ser mucho menor del citado en atención a la avanzada edad del mismo y que a las deudas consignadas hay que agregar una de SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS ONCE PESETAS, con el Banco de España de Castellón, aparte de lo que por resulta del desbloqueo pueda adeudarse a dicho Banco por el descuento de dos letras de cambio por VEINTISIETE MIL DOSCIENTAS PESETAS una de ellas y DOCE MIL PESETAS la otra.- Aceptando los Resultandos de la misma en cuanto se refiere a la tramitación, y, RESULTANDO que dictada sentencia por el Tribunal Regional contra la misma se interpuso por el encartado recurso de alzada, que fue admitido, y remitido el expediente a este Tribunal se ha visto el expresado recurso.- CONSIDERANDO que, son de aceptar en lo sustancial los fundamentos legales de la sentencia recurrida.- CONSIDERANDO que ello, no obstante, teniendo en cuenta de una parte la circunstancia de que el Tribunal de Garantías Constitucionales que presidía el inculpado presentó su dimisión colectiva al titulado gobierno del Frente Popular, lo que implica lógicamente un propósito de no colaboración con el mismo, y de otra el aumento en las deudas del expedientado que se admite a los solos efectos de fijar la sanción y también el menor valor del usufructo que le corresponde, se estima procedente reducir la sanción económica impuesta a CIEN MIL PESETAS.- Vistos los preceptos legales aplicables.- FALLAMOS: que estimando el recurso interpuesto, reducimos a CIEN MIL PESETAS la sanción económica impuesta a FERNANDO GASSET LACASAÑA, ordenando la devolución de los autos al Tribunal de origen con testimonio de esta sentencia para su cumplimiento y notificación.- Así definitivamente juzgando, lo pronunciamos, lo mandamos y firmamos.- Enrique Suñer.- Guillermo Kirkpatrick.- Juan de Hinojosa.- José María Mazón.- Rubricados.- PUBLICACIÓN: Dada y pronunciada fue la anterior sentencia or los señores en ella firmados, fue leída por el señor Magistrado Ponente, estándose celebrando audiencia pública en el día de su fecha, de que yo el Secretario certifico. José Anguita Sánchez.- Rubricado.- Y para que conste, en cumplimiento a lo mandado

y remitir al Tribunal Regional de Valencia, expido y firmo la presente con el Vº Bº del Excmo. Sr. Presidente en Madrid a 21 de junio de 1940.- José Anguita Sánchez.- VºBº el Presidente.- Guillermo Kirkpatrick.- Rubricados.

Fuente: Expediente de Responsabilidades Políticas contra Fernando Gasset Lacasaña, Caja 10074. Archivo Histórico Provincial de Castellón.

14- Fuentes

- Archivo Histórico Provincial de Castellón.
 - Expedientes de Responsabilidades Políticas a ciudadanos de la provincia de Castellón.
Cajas: 10064, 10065, 10068, 10069, 10070, 10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10089, 10091, 10093, 10094, 10095, 10096, 10097, 10098, 10099, 10102, 10103, 10104, 10107, 10110, 10127, 10128, 10129, 10130, 10131, 10133, 10143, 10144, 10145, 10146, 10158, 10159, 10161, 10164, 10181, 10206, 10258, 19634.
 - Memorias y documentación variada de Responsabilidades Políticas.
Cajas 19637 y 10208.
- Archivo Histórico Municipal de Castellón.
 - Revista *Escuela de Aprendices*, años 1939-1947.
 - Diario *Mediterráneo*, años 1940-1947.
- Archivo de la Diputación Provincial de Castellón.
 - Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Años 1938-1947.
 - Boletín Oficial del Estado. Años 1938-1947.
- Archivo Segarra de la Vall d'Uixó.
 - Sección Fichas de Personal.
 - Sección Documentos Antiguos.

Caja 7.
- Internet.
 - Gaceta de Madrid: 1924 - 1936.
 - Gaceta de la República: 1937 - 1938.
 - Boletín Oficial del Estado: 1939 – 1965.
 - www.ine.es
 - www.aulamilitar.com/OFICIALESCASTELLON.hts.
 - www.flickr.com
 - www.geocities.com
 - www.sbhac.net.

15. Bibliografia

- AA.VV., *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, vol. XXXV, abril-junio 1959.
- AA.VV., *Honori García. El personatge. L'època. EL centre*. Castellón, 1997.
- AA.VV., *Centenari dels estudis de Magisteri a Castelló de la Plana*. Castellón, 2004.
- AA.VV., *Castelló sota les bombes*. Benicarló, 2006.
- R. ABELLA, *La vida cotidiana bajo el régimen de Franco*. Madrid, 1996.
- A. AGUADO y M.D. RAMOS, *La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana*. Madrid, 2002.
- M. ÁLVARO, “Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas hasta la reforma de 1942”, en *Revista de Estudios Políticos*, nº 69, 1990.
- M. ÁLVARO, “El decoro de nuestro aire de familia. Perfil político e ideológico de los presidentes del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 105, 1999.
- “*Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo*”. *La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945)*. Madrid, 2007.
- F. ARCHILÉS, *Parlar en nom del poble. Cultura política, discurs i mobilització social al republicanisme castellonenc (1891-1909)*. Castellón, 2002.
- “La invenció del patriotisme local a Castelló de la Plana (1891-1922): republicanisme i nacionalisme espanyol”, en R. MONLLEÓ (ed.), *Castelló al segle XX*. Castelló, 2006.
- “La identitat local de la ciutat de les Normes. Patriotismes locals i valencianisme polític a Castelló (1900-1932)”, en J. PALOMERO, L. MESEGUER (eds.), *Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32*. València, 2007.
- A. ARNAU, *Nuestros días oscuros ¿ubi est, mors, victoria tua?*. Vinaroz, 2005.
- J. ARÓSTEGUI (coord.), *Historia y memoria de la guerra civil*. Vol. I. Salamanca, 1988.

- M. ARROYAS, “Apuntes para el estudio de los movimientos católicos en La Vall d’Uixó, 1880-1935”, AA.VV., *Honori García. El personatge. L’època. EL centre*. Castellón, 1997.
- J. BABIANO, *Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958)*. Madrid, 1998.
- I. BADENES-GASSET, *Fernando Gasset Lacasaña. Biografía política de un republicano (1861-1941)*. Tesis doctoral inédita. Universitat Jaume I. Castellón, 2003.
- “Fernando Gasset Lacasaña”, en J. PANIAGUA, J.A. PIQUERAS (ed.), *Diccionario biográfico de políticos valencianos. 1810-2006*. Valencia, 2006.
- “La experiencia política de Fernando Gasset durante la Segunda República (1931-1936), en R. MONLLEÓ (ed.), *Castelló al segle XX*. Castelló, 2006.
- M. BALDÓ, “La cultura durante la II República y el franquismo”, en P. RUIZ (dir.), *Historia del País Valenciano*. Tomo VI. Barcelona, 1981.
- *La Universitat de València*. Valencia, 1986.
- “La recerca d’una cultura moderna”, en P. RUIZ (coord.), *Història del País Valencià*. Barcelona, 1990.
- “La Diputación en Camisa Azul (1939-1959)”, en M. CHUST (dir.), *Historia de la Diputación de Valencia*. Valencia, 1995.
- M. BALDÓ y J. MILLÁN, “El País Valenciano bajo el franquismo”, en P. RUIZ (dir.), *Historia del País Valenciano*. Tomo VI. Barcelona, 1981.
- M. BALDÓ y M.F. MANCEBO, “Vida y muerte de Juan Peset”, en AA.VV. *Proceso a Juan Peset Aleixandre*. València, 2001.
- J. BARRULL y C. MIR (coord.), *Violència política i ruptura social a Espanya,, 1936-1945*. Lleida, 1994.
- S. BELLÉS, *Seres humanos de Castellón*. Castellón, 2004.
- I. BERDUGO, “Derecho represivo en España durante los períodos de guerra y posguerra (1936-1945). Madrid. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, nº 3, 1981.
- A. BOSCH, *Ugetistas y Libertarios. Guerra Civil y Revolución en el País Valenciano. 1936-1939*. Valencia, 1983.
- *La economía revolucionaria*, en *La guerra civil en la Comunidad Valenciana*. Valencia, 2006.

- F. CABANA, *Els anys de l'estraperlo. Cròniques d'un posible empresari Barcelona*. Barcelona, 2005.
- M. CAJAL, *La Ley de Responsabilidades Políticas. Comentada y seguida de un Apéndice de disposiciones legales y formularios más en uso*. Madrid, 1939.
- A. CALZADO y R.C. TORRES, *Un silenci extens. El franquisme a la Ribera Baixa (1939-1962)*. Valencia, 1995.
- *Valencians sota el franquisme*. Simat de la Valldigna, 2002.
- G. CÁMARA, *Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951)*. Madrid, 1984.
- R.C. CANCIO, *Guerra Civil y Tribunales: de los Jurados Populares a la Justicia franquista (1936-1939)*. Cáceres, 2007.
- J. CANO, *La política judicial del régimen de Franco*. Madrid, 1985.
- V. CÁRCEL, "Perfil biográfico de don Vicente Traver y Tomás", *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*. Tomo XLVIII, nº 3. Castellón, 1967.
- J. CASANOVA, *La Iglesia de Franco*. Madrid, 2001 (obra revisada y con citas de 2005).
- (comp.), *Guerras civiles en el siglo XX*. Madrid, 2001.
- (coord.), *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*. Barcelona, 2002.
- I. CASTELLS, *La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa*. Barcelona, 1989.
- J.A. CAVANILLES, *Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia (1785)*. Tomo I. Castellón, 1991.
- A. CAZORLA, *Las políticas de la victoria. La consolidación del Estado franquista*. Madrid, 2000.
- A. CENARRO, "Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del *Nuevo Estado*", en *Historia Social*, nº 30, 1988.
- *El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939)*. Teruel, 1996.
- *Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945*. Zaragoza, 1997.
- *La sonrisa de la Falange. Auxilio Social en la guerra civil*. Barcelona, 2005.
- J. CERCAS, *Soldados de Salamina*. Barcelona, 2001.

- J. CERVERA, *Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939*. Barcelona, 1998.
- J. CHAVES, “La represión contra los disidentes: consecuencias de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia de Cáceres”, en *II Encuentro de Investigadores del franquismo*. Alicante, 1995.
- R. CHIRBES, *La buena letra*. Madrid, 1991.
- M. CHUST (dir.), *Historia de Castellón*. Castellón, 1992.
- (dir.), *Historia de la Diputación de Valencia*. Valencia, 1995.
- J. CLARET, *La repressió franquista a la Universitat espanyola*. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2004.
- *El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945*. Barcelona, 2006.
- I. DOMÈNECH y F. VÁZQUEZ, *La repressió franquista a l'àmbit local*. Valencia. Afers, 2003.
- C. DOMINGO, *La Plana de Castellón. Formación de un paisaje agrario mediterráneo*. Castellón, 1983.
- C. DOMINGO, “La población de La Vall d’Uixó”, en AA.VV., *Honori García. El personatge. L’època. EL centre*. Diputación Provincial de Castellón. Castellón, 1997.
- M. EIROA, “Represión, restricción, manipulación: estrategias para la ordenación de la sociedad y del Estado”, en *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 6. 2006.
- M. A. FABRA, *El País Valencià (1939-1959): autarquia i industrialització*. Valencia, 2000.
- V. FALOMIR, “*Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*”. *Index general (1920-1991)*. Valencia, 1992.
- S. FITZPATRICK, R. GELLATELY (ed.), *Accusatory practices. Denunciation in Modern European History, 1789-1989*. Chicago-London, 1994.
- J. FONTANA, *España bajo el franquismo*. Barcelona, 1986.
- *La crisis del Estado Absolutista*. Barcelona, 1988.
- “Franco y el franquismo a través de los libros de memorias”, en *Actas de las IV Jornadas “Historia y fuentes orales”. Historia y memoria del franquismo, 1936-1978*. Ávila, 1997.

- *De en medio del tiempo. La segunda restauración española, 1823-1834.* Barcelona, 2006
- R. FRASER, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.* Barcelona, 1979.
- *Escondido. El calvario de Manuel Cortés.* Valencia, 1986.
- V. GABARDA, *Els afussellaments al País Valencià (1938-1956).* Valencia, 1993.
- V. GABARDA, “Les conseqüències de la guerra civil. Les morts violentes a la província de Castelló (1936-1950)”, en M. MARTÍ (coord.), *D’Història Contemporània: debats i estudis. Un homenatge casolà a E.P. Thompson (1924-1993).* Castellón, 1996.
- E. GAJA y M. FERRER, *25 años de paz en Vall de Uxó.* La Vall d’Uixó, 1964.
- C. GARCÍA, “Patografía cordial de un poeta”, *Sociedad Castellonense de Cultura*, nº XXXV, 1959.
- S. GARCÍA y V. SALAVERT, “L’Ocupació de la Universitat de València el 1939 pel quintacolumnista Manuel Batlle, Catedràtic de Múrcia”, en *Afers*, nº3. Barcelona, 1986.
- M. GARCÍA BLANCO, “En la muerte de Bernardo Artola”, *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, nº XXXV, Castellón, 1959.
- J.L. GARCÍA DELGADO, “La industrialización y el desarrollo económico de España durante el franquismo”, en J. NADAL, A. CARRERAS, C. SUDRIÀ (comp.), *La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica.* Barcelona, 1987.
- C. GARCÍA ESPRESATI, “Patografía cordial de un poeta”, *Sociedad Castellonense de Cultura*, nº XXXV, Castellón, 1959.
- M. GARCÍA GRAU, *La poesia castellonenca durant el franquismo: poètiques i cultures en una societat perifèrica (1939-1975).* Tesi doctoral inèdita. Universitat de València, 1993.
- S. GARRIDO, *Los trabajadores de las derechas.* Castellón, 1986.
- R. GELLATELY, *No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso.* Barcelona, 2001.
- *La Gestapo y la sociedad alemana. La Política nazi (1933-1945).* Barcelona, 2004.

- Y. GIL SAURA, “Arquitectura industrial y control patronal en los inicios del franquismo: la empresa Segarra de la Vall d’Uixó”, en *III Encuentro de Investigadores del franquismo*. Sevilla, 1998.
- C. GIL ANDRÉS, *Lejos del frente. La guerra civil en la Rioja Alta*. Barcelona, 2006.
- I. GIL BASTERRA, *Jurisdicción especial y represión franquista en Álava (1936-1942). Documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas para Álava*. Vitoria-Gasteiz, 2006.
- C. GIMÉNEZ, *Todo Paracuellos*. Barcelona, 2007.
- M. J. GIMENO (dir.), *La provincia de Castellón*. Castellón, 1999.
- A. GIRONA, *Guerra i Revolució al País Valencià (1936-1939)*. Valencia, 1986.
- J. GRACIA, M. A. RUIZ, *La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana*. Madrid, 2004.
- R. GODES, *Política y sociedad en Castellón durante la década de los años 40*. Castellón, 1990.
- “El franquismo”, en M. CHUST (dir.), *Historia de Castellón*. Castellón, 1992.
- G. GÓMEZ, “El desarrollo penitenciario en el primer franquismo (1939-1945), en *Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea*, nº 6, 2006.
- E. GONZÁLEZ, *El miedo en la posguerra*. Madrid, 2003.
- C. GONZÁLEZ, “La Causa General de Murcia: técnicas de estudio”, en I. SÁNCHEZ, M. ORTIZ y D. RUIZ, (coord.), *España franquista. Causa general y actitudes sociales ante la dictadura*. Albacete, 1993.
- V. GRAU, *Segona República i guerra civil a Castelló. Discurs republicà, mobilització política i sindicalisme revolucionari*. Tesis doctoral, inédita. Universitat Jaume I, junio 2007.
- H. HEINE, *La oposición política al franquismo. De 1939 a 1951*. Barcelona, 1983.
- J. HERRÁIZ, P. REDÓ, *Republicanisme i valencianisme (1868-1938): la família Huguet*. Castellón, 1995.
- G. HERRERO, A. HERNÁNDEZ, *La represión en Soria durante la guerra civil*. Soria, 1982.
- N. IBÁÑEZ, “Prácticas de depuración y expolio en la jurisdicción especial durante la guerra y la posguerra en Álava”, en I. GIL BASTERRA, *Jurisdicción*

- especial y represión franquista en Álava (1936-1942). Documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas para Álava.* Vitoria-Gasteiz, 2006.
- G. JACKSON, *La República española y la guerra civil.* Barcelona, 1990.
 - C. JIMÉNEZ VILLAREJO, “La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos)”, en *Hispania Nova*, nº 7 (2007).
 - S. JULIÁ (coord.), *Víctimas de la guerra civil.* Madrid, 1999.
 - “Un fascismo bajo palio, en uniforme militar”, *El País*, Babelia, 18 de julio de 1998.
 - J. KAFKA, *El proceso.* Madrid, 2007.
 - H. KAMEN, *La Inquisición española.* Barcelona, 2005.
 - I. LAFUENTE, *Tiempos de hambre. Viaje a la España de posguerra.* Madrid, 1999.
 - M. LANERO, *Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945).* Madrid, 1996.
 - V. LLORENS, *Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834).* Madrid, 1979.
 - E. LLUCH, “La primera facultat de ciències econòmiques de València (1937)”, en *Arguments*, nº 1. Valencia, 1974.
 - D. LÓPEZ, *La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista.* Barcelona.
 - J. LÓPEZ-DAVADILLO, *Atlas de Historia Contemporánea de España y Portugal.* Madrid, 2002.
 - A. LORENZO, *Movilización popular y burguesía republicana en Castellón de la Plana, 1931.* Castellón, 1988.
 - F. MANCEBO, *La Universidad de Valencia en guerra. La F.U.E. (1936-1939).* València, 1988.
 - *La Universidad de Valencia. De la monarquía a la República (1919-1939).* València, 1994.
 - F. MANCEBO, “Dictadura, República y Guerra Civil, en M. PESET (coord.), *Historia de la Universidad de Valencia*, Volumen III “La Universidad liberal (siglos XIX y XX). Valencia, 2000.
 - M. MARTÍ, *Cossieros i anticossieros. Burguesia i política local: Castelló de la Plana (1875-1891).* Castelló, 1985.

- “Grups socials agraris i política urbana: la ciutat de Castelló de la Plana (segles XIX i XX), en M. MARTÍ,(coord.), *D’Història Contemporània: debats i estudis. Un homenatge casolà a E.P. Thompson (1924-1993)*. Castellón, 1996.
- A. MÉNDEZ, *Los girasoles ciegos*. Barcelona, 2004.
- LL. MESEGUER, *Bernat Artola Tomás. Obres completes*. Castelló, 1983.
- *Cultura i literatura a Castelló de la Plana: Bernat Artola Tomás, 1904-1958*. Tesi doctoral inèdita, Universitat de València, 1989.
- *Castelló literari. Estudi d’història cultural de la ciutat*. Castelló, 2003.
- “La cultura de los años treinta”, en M. CHUST (dir), *Historia de Castellón*. Castellón, 1992.
- C. MIR, *Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra*. Lleida, 2000.
- “El estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar”, en *Ayer*, nº 43. Madrid, 2001.
- C. MIR, F. CORRETGÉ, J. FARRÉ, J. SAGUÉS, *Repressió econòmica i franquisme: l’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida*. Barcelona, 1997.
- C. MIR, C. AGUSTÍ, J. GELONCH (ed.), *Pobreza, marginación, delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo*. Lleida, 2005.
- C. MOLINERO, *La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista*. Madrid, 2005.
- C. MOLINERO y P. YSÀS, <<Patria, justicia y pan>>. *Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya, 1939-1959*. Barcelona, 1985.
- “La historia social de la época franquista. Una aproximación”, en *Historia Social*, nº 30, Valencia, 1988.
- *Els industrials catalans sota el franquisme*. Vic, 1991.
- *El règim franquista. Feixisme, modernització i consens*. Girona, 1992.
- *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*. Madrid, 1998.
- *La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977*. Barcelona, 2008.
- C. MOLINERO, M. SALA y J. SOBREQUÉS, *Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo*. Barcelona, 2003.

- R. MONLLEÓ (ed.), *Castelló al segle XX*. Castelló, 2006.
- R. MORENO, *La autarquía en Alicante (1939-1952)*. Alicante, 1995.
- “Las industrias de transformación: las empresas del calzado”, en G. SÁNCHEZ y J. TASCÓN, *Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-1957*. Barcelona, 2003.
- R. MORENO y F. SEVILLANO (eds.), *El franquismo. Visiones y balances*. Alicante, 1999.
- S. MORO, *Ellos y nosotros*. Barcelona, 2006.
- J.V. MOYA, *Alcalá de Xivert. Revolución, guerra y represión, 1936-1948*. Alcalà de Xivert, 2004.
- B. MUNDINA, *Historia, Geografía y Estadística de la provincia de Castellón (1873)*. Castellón, 1988.
- A. MUÑOZ MOLINA, *El jinete polaco*. Barcelona, 1991.
- *Sefarad*. Madrid, 2001.
- E. NICOLÁS, *Las instituciones murcianas bajo el franquismo*. Murcia, 1982.
- M. NÚÑEZ, *Los años del terror. La estrategia de dominio y represión del general Franco*. Madrid, 2004.
- “El dolor como terapia. La médula común de los campos de concentración nazis y franquistas”, en *Ayer*, nº 57. Madrid, 2005.
- F. OLUCHA, *El tesoro artístico castellonenc durant la guerra civil*. Castelló, 2004.
- M. ORS, *La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945)*. Alicante, 1995.
- V. ORTELLS (dir.), *Atles de Castelló de la Plana*. Castellón, 2004.
- M. ORTIZ, *Violencia política en la II República y el primer franquismo*. Barcelona, 1986.
- P. PAGÈS (dir.), *Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans (1939-1975)*. Valencia, 2004.
- J. PALOMERO, LL. MESEGUER, *Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32*. València, 2007.
- J. PANIAGUA, J.A. PIQUERAS (ed.), *Diccionario biográfico de políticos valencianos. 1810-2006*. Valencia, 2006.
- S.G. PAYNE, *El régimen de Franco*. Madrid, 1987.
- *Historia del fascismo*. Barcelona, 1995.

- P. PEGENAUTE, *Represión política en el reinado de Fernando VII. Las Comisiones Militares (1824-1825)*. Pamplona, 1974.
- F. PEÑA, *Història de l'empresa Segarra. Paternalisme industrial i franquisme a la Vall d'Uixó, 1939-1952*. Castellón, 1998.
- "Paternalismo y control social en la industria franquista. La empresa Segarra de la Vall d'Uixó", en *Sociología del Trabajo*, nº 34. Madrid, 1998.
- "República i guerra a La Vall d'Uixó: una aproximació a la conflictivitat laboral", *Aigualit*, nº 5. La Vall d'Uixó, 1999.
- "Treballadors i misèria: conflictivitat laboral i triomf paternalista als primers anys del franquisme", en *Saitabi*, nº 50. Valencia, 2000.
- "Evolución histórica de los socios del Sindicato Agrícola "San Isidro" de la Vall d'Uixó", en AA.VV., *San Isidro, un siglo de la Vall d'Uixó. Caja Rural la Vall y Cooperativa Agrícola (1904-2004)*. La Vall d'Uixó, 2004.
- A. PEÑÍN, "Arquitectura y urbanismo", en *Historia del Arte Valenciano*. Vol. 6: "El siglo XX hasta la guerra del 36". Valencia, 1988.
- E. PÉREZ ARRIBAS, *Polítics i cacics a Castelló (1876-1901)*. Valencia, 1988.
- J. PÉREZ LEDESMA, "Una dictadura <<por la gracia de Dios>>", en *Historia Social*, nº 4. Valencia, 1994.
- M. PESET (coord.), *Historia de la Universidad de Valencia*, Volumen III "La Universidad liberal (siglos XIX y XX)". Valencia, 2000.
- J. PICÓ, *El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme*. Valencia, 1977.
- J. PICÓ y R. REIG, "El franquismo: de la autarquía al Plan de Estabilización", en M. CERDÁ (dir.), *Historia del Pueblo Valenciano*. Vol. III. Valencia, 1988.
- *El franquisme*. Valencia, 1982.
- J.A. PIQUERAS, *Història del socialisme*. Valencia, 1981.
- *Persiguiendo el porvenir. La identidad histórica del socialismo valenciano (1870-1976)*. Alzira, 2005.
- P. PRESTON, *Franco "Caudillo de España"*. Barcelona. Grijalbo, 1993.
- *Las políticas de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX*. Barcelona, 1997.
- *Botxins i repressors. Els crims de Franco i dels franquistas*. Barcelona, 2006.
- P. PRESTON e I. SAZ (eds.), *De la revolución liberal a la democracia parlamentaria. Valencia (1808-1975)*. Valencia, 2001.

- J. QUEREDA, V. ORTELLS, *La Plana de Castelló. Estudio geográfico*, Castellón, 1983.
- G. REDONDO, *Política, cultura y sociedad en la España de Franco, 1939-1975*. Tomo I. “La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947)”. Pamplona, 1999.
- G. REGUILLO, *El Partido Republicano de Castellón (1868-1936)*. Castellón, 2001.
- A. REIG TAPIA, *Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil*. Madrid, 1984.
- *Franco “caudillo”: mito y realidad*. Madrid, 1995.
- M. RICHARDS, *Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco (1936-1945)*. Barcelona, 1999.
- M. RISQUES y F. VILANOVA (eds), *Les ruptures de l’any 1939*. Barcelona, 2000.
- J. RODRIGO, *Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947*. Barcelona, 2005.
- “La bibliografía sobre la represión franquista: hacia el salto cualitativo”, en *Spagna Contemporanea*, nº 19. Turín.
- *Los campos de concentración franquistas, entre la historia y la memoria*. Madrid, 2003.
- L.F. RODRÍGUEZ, *Recetas para después de una guerra*. Madrid, 2001.
- F. ROMEU, *El silencio roto. Mujeres contra el franquismo*. Oviedo, 1994.
- I. ROSA, *El vano ayer*. Barcelona, 2004.
- *¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!* Barcelona, 2007.
- C. RUIZ, *La sombra del viento*. Barcelona. Planeta, 2001.
- J. SÁEZ, *El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de Posguerra (1937-1960)*. Madrid, 1988.
- R. SALAS LARRAZÁBAL, *Los datos exactos de la guerra civil*. Madrid, 1980.
- V. SALAVERT, “La ocupación de la Universidad”, en M. PESET (coord.), *Historia de la Universidad de Valencia*, Volumen III “La Universidad liberal (siglos XIX y XX)”. Valencia, 2000.
- G. SÁNCHEZ, *Las responsabilidades políticas en la posguerra española. El Partido Judicial de Monóvar*. Alicante, 1984.

- G. SÁNCHEZ, “Justicia ordinaria y Justicia popular durante la guerra civil”, en AA.VV., *Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la guerra civil española*. Madrid, 1990.
- J. SÁNCHEZ, E. DÍAZ, F. OLUCHA y F. PASCUAL, *Personajes ilustres castellonenses. Diccionario biográfico de la provincia de Castellón*. Castellón, 1997.
- I. SÁNCHEZ, M. ORTIZ y D. RUIZ, (coord.), *España franquista. Causa general y actitudes sociales ante la dictadura*. Albacete, 1993.
- J. SANCHO, *Atlas de la provincia de Castellón de la Plana*. Castellón, 1982.
- F. SANLLORENTE, *La persecución económica de los derrotados. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Baleares (1939-1942)*. Palma de Mallorca, 2005.
- B. SANZ, *Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975*. CC.OO.PV., Valencia, 2002.
- B. SANZ y R. RODRÍGUEZ, *Memoria del antifranquismo. La Universidad de Valencia bajo el franquismo. 1939-1975*. Valencia, 1999.
- C. SARTHOU, *Geografía general del Reino de Valencia (1913). Provincia de Castellón*. Castellón, 1989.
- I. SAZ, “República, guerra i franquisme”, en P. RUIZ (coord.), *Història del País Valencià*. Barcelona, 1990.
- *Fascismo y franquismo*. Valencia, 2004.
- I. SAZ y A. RODA (eds.), *El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra*. Valencia, 1999.
- B. SANZ y R. RODRÍGUEZ, *Memoria del antifranquismo. La Universidad de Valencia bajo el franquismo. 1939-1975*. Valencia, 1999.
- B. SANZ, *Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975*. Valencia, 2002.
- J. SIERRA, *El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial (Asturias, 1860-1917)*. Madrid, 1990.
- A. SOPEÑA, *El florido pensil. Memoria de la escuela nacional-católica*. Barcelona, 1994.
- V.E. SORRIBES y A. NÚÑEZ, *La Vall d’Uixó durant la Segona República (1931-1936): expectatives, enfrontaments i frustracions en un període de crisi*. La Vall d’Uixó, 2001.

- A. SOTO, “Rupturas y continuidades en las relaciones laborales del primer franquismo, 1938-1958”, en C. BARCIELA (ed.), *El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959*. Barcelona, 2003.
- F.M. DE TORO, “Política, denuncia y control social: Alemania y Austria durante el Tercer Reich”, en *Historia Social*, nº 34. Valencia, 1999.
- R. TORRES, *Los esclavos de Franco*. Madrid, 2001.
- A. TRAPIELLO, *La noche de los cuatro caminos. Una historia del maquis, 1945*. Madrid, 2001.
- J. TUSELL, *La dictadura de Franco*. Madrid, 1988.
- E. TUSQUETS, *Habíamos ganado la guerra*. Barcelona, 2007.
- VALLS (coord.), *Rumbo al progreso. El puerto de Castelló a través de la Historia*. Castellón, 2003.
- S. VEGA, “La represión en la provincia de Segovia en los orígenes del régimen de Franco”, en *Hispania Nova*, nº 4 (2004).
- M. VICENT, *Contra paraíso*. Madrid, 1996.
- M. VICENT BALAGUER, *Conflicto y revolución en las comarcas de Castelló, 1931-1938*. Castelló, 2006.
- “Los expedientes de responsabilidades políticas: una documentación esencial para el estudio del primer franquismo en las comarcas de Castellón”, en R. MONLLEÓ (ed.), *Castelló al segle XX*. Castelló, 2006.
- P. VILAR, *La guerra civil española*. Barcelona, 1986.
- F. VILANOVA, *Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942)*. Barcelona, 1999.
- R. VIRUELA, “La Vall d’Uixó: estructura profesional de un núcleo industrial e inmigratorio (1940-1975)”, *Cuadernos de Geografía*, nº 26. Valencia, 1980.
- “La industria de alpargatas en La Vall d’Uixó”, *Cuadernos de Geografía*, nº 27. Valencia, 1980
- “Dinámica poblacional de La Vall d’Uixó durante el último siglo”, *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*. Tomo LIX. Cuaderno III. Castellón, 1983.
- *La industria del calzado en la provincia de Castellón*. Castellón, 1988.
- “La vida cotidiana en una localitat de la rera guarda republicana: La Vall d’Uixó durant la guerra civil”, *Aigualit*, nº 5. La Vall d’Uixó, 1999.

- “Organización del trabajo y diferencias de género en la industrial del calzado durante la autarquía: el caso de la empresa Segarra de la Vall d’Uixó”, *Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Vol. VI, nº 119 (82).